

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

**Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales**



TESIS DOCTORAL

**El papel de la inversión extranjera directa en la
construcción de soberanía regional en América Latina
y el Caribe: un análisis constructivista con base en la
conceptualización del desarrollo**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

Tomás Pérez Rosa

Director

José Ángel Sotillo Lorenzo

Madrid, 2015

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
(Departamento de Derecho Internacional Público

y
Relaciones Internacionales)



TESIS DOCTORAL

El papel de la Inversión Extranjera Directa en la construcción de soberanía regional en América Latina y el Caribe: un análisis constructivista con base en la conceptualización del desarrollo.

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

Tomás Pérez Rosa

Bajo la Dirección de

José Ángel Sotillo Lorenzo

“La vida debe ser diaria, movable, útil; y el primer deber de un hombre de estos días, es ser un hombre de su tiempo. No aplicar teorías ajenas, sino descubrir las propias. No estorbar a su país con abstracciones, sino inquirir la manera de hacer prácticas las útiles. Si de algo serví antes de ahora, ya no me acuerdo: lo que yo quiero es servir más”.

José Martí. Carta a Joaquín Macal. Idea de Nuestra América. (Martí, 2005, pág. 7).

Dedicado....

A mi madre, porque si ella cuestionó, yo cuestioné.

A Montse, por hacerme comprender que el conocimiento es un camino lleno de puertas, y que abrirlas y descubrir aquello que hay detrás reporta regalos de incalculable valor.

A Bote, por evidenciar que la amistad se eleva por encima de los límites que puedan estar constituidos en sociedad.

A Susana, por confiar en mí y en mis ganas de aprender durante este precioso viaje.

Agradecimientos.

Lejos de toda duda, el hecho de investigar en la vida es aquello que me ha conducido a investigar, ahora, en la academia. Después de vivir en diversos lugares, ambientes y condiciones, he de agradecer a todas esas experiencias la existencia de mi inquietud por cuestionar la realidad, en la que he habitado y habito, puesto que todas ellas han impulsado mi alegría para continuar cuestionando.

El pilar que me sostiene viene construyéndose desde mi infancia, en donde, viajando y hablando, principalmente, con mi “padre”, al que agradezco su trato directo y personal por exponer reiteradamente la diversidad y conflictos presentes en el mundo político, así como a mi madre y a sus ganas de progresar y aprender, se fraguó la persona que hoy coexiste en esta sociedad. De aquel ayer este hoy, que se significa en mi inquietud por aprender y cuestionar todo hecho, tratando de construir esquemas que permitan exponer, explicar y entender las diferentes acciones que se producen en la vida diaria.

Debo dar las gracias en general a la ciudad de Londres y a todas las personas que allí se dieron cita en mí paso por ella. Mágica, deslumbrante y recomendable experiencia en la que me conocí y amplíe hasta límites insospechados mi perspectiva sobre la diversidad cultural en las prácticas de los diversos agentes.

Tras ello empecé mi aventura académica a la que no se puede no estar más que agradecido. Ya en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Ciencias Políticas, fui acercándome al conocimiento, levemente, puesto que no fui un estudiante brillante. No, lejos de eso pase por allí aprendiendo poco a poco, pero colectando detalles indispensables en la estructura cognitiva que en esta tesis he visto consolidados. En ese trayecto, mención especial merecen el profesor Víctor Abreu, excepcional persona y brillante mente, que transmitía un mensaje que incitaba el que se despertase el interés por conocer las bases de las reglas sociales. Un grande. Asimismo, mención merece el profesor Carmelo Jiménez Segado, por exponer con tanta claridad y promover con gran audacia el que se aprendiese en profundidad para poder emitir un juicio “prudente”, y al menos saber la obligación de replantear constantemente lo aprendido. Del mismo modo el profesor Juan Carlos Monedero, pues si en un primer momento choca su gran cercanía y grandilocuencia exponencial, inquieta al estudiante y evidencia la necesidad de aprender para poder, al menos, mantener un dialogo comprensible entre dos que dialogan, y que se constituya lo que se entiende por comunicación.

Esos fueron los primeros dos años académicos. Tras ellos llegó la experiencia que ha incidido en mí perspectiva global, profundamente a nivel social pero en el mismo o mayor grado a nivel académico, mi año Erasmus en Oslo (Noruega).

A este periodo debo agradecer la posibilidad que brindó la experiencia para, a través de la observación, aprender el cómo las políticas determinan las prácticas de los ciudadanos, hasta límites que antes de esta experiencia no entendía. A partir de ella, agradecer igualmente el conocer en profundidad a sus gentes, sus ofertas y demandas; así como las diversas asignaturas que cursé- las que si bien durante mi periodo de estudiante no profundice, sí constituyen parte principal de esta tesis-, debo estar agradecido. De hecho, en esta tesis se han visto recuperadas algunas, como por ejemplo las clases que tuve la suerte de gozar con el rescatado profesor constructivista Jeffrey T. Checkel. Profesor al que debo una disculpa académica por razones que no vienen al caso, ya que influyó en mi conocimiento para comprender la importancia de las ideas en la construcción social, y como éstas determinan las reglas y normas que se constituyen, tanto políticas domésticas como internacionales. Tristemente no estudié en profundidad durante el año lectivo. Aprendí otras cosas a través de otra práctica, que en terminología académica se podría calificar como una observación-participante.

Asimismo, he de mencionar y reconocer especialmente en la sociedad nórdica, a mis amigos: a Unni Claussen, por hacerme comprender las políticas nórdicas, la importancia de los deberes ciudadanos y la labor del Estado en la justicia e integración social; y a Christina Bjork-Hansen, especialista en política y amiga del corazón, por sus tardes y días explicando la historia de los Estados escandinavos y el por qué se habían decidido a construir un sistema que tratase de asegurar unos mínimos sociales que permitiesen la re-inclusión constante de los desfavorecidos por la estructura. En general a todos: *Takk Norge*.

Al volver ya me apuré a estudiar en profundidad por mi necesidad de poder comparar más sociedades. Renunciando a grandes notas - decisión que quizás no fue positiva en todos sus efectos- el destino me incitó a finalizar la carrera acuñando ventidós asignaturas en un año. Periodo en el que debo destacar al profesor José Antonio Sanahuja, pues sus ponencias, más que clases, ya sí, despertaron en mí una gran inquietud por lograr exponer con esa capacidad que él hace, las inquietudes académicas que pudiese analizar. Es simplemente brillante. Gracias por hacer que sus clases sean tan fáciles de comprender, ya que ello conlleva un gran esfuerzo.

Tras finalizar la licenciatura y entusiasmado por aprender cómo era la práctica del desarrollo, Tailandia fue el destino. En este viaje que decir de Kwan Fha, aquel individuo que amplió, aún más, mi visión sobre la importancia de las ideas en la construcción social y cómo estas determinan todo comportamiento del individuo en sociedad. *Kob Khun Krap*.

Tras esta experiencia y a partir del observar que los proyectos de cooperación poseían diversas grietas que no lograba comprender en profundidad, entendí que mi persona requería el adquirir mayor conocimiento y, por ello, me aventuré a estudiar un Master en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional en España. En esta decisión, y en cierto modo una suerte, mención muy especial y cariñosa merece el director del Master Eugenio Sánchez Alcázar. Muchas gracias por todo. Su paciencia y su apuesta personal por mi persona, en base a mis ganas de aprender y a su percepción, causó que me enrolara en el Master y que, tras ello, realizase un periodo “determinante” para que haya realizado el trabajo que aquí presento. Mi estancia en México.

Infinitas gracias debo al Centro de Estudios de Desarrollo Económico y Social (CEDES) en Puebla (México), por mostrarme cómo se debate en torno a las diversas ideas que construyen el conocimiento. El observar durante días cómo personas piensan, de forma continuada, el modo en el que diferentes aspectos determinan las prácticas de los agentes, incitó el que se despertase en mí la consciencia de que había encontrado el modo en el que quería desarrollar mi existencia en este mundo. Y es que desde mis inicios conscientes del ser, siempre he estado debatiendo sobre el comportamiento y el porqué de las actitudes, prácticas de los agentes y de las estructuras en mi vida personal. Por ello, el que se mostrase ello con tanta claridad en un centro de estudios me influyó determinantemente, ejerciendo un impulso esencial para que escribiese esta tesis doctoral. Gracias de nuevo por ser tan buenos. En especial a Héctor Sotomayor Castilla, el codirector de mi tesina de Master; a la Doctora Liza Acebes López; y a un gran amigo y mejor académico, el pronto Doctor Oscar David López Valenzuela, por ser amigo, pero más por enseñarme otro lado de México y mostrarme como la política determina la situación en un Estado. Gracias amigo.

Ya dentro del proceso de elaboración agradecer especialmente a mi tutor, gran tutor, José Ángel Sotillo Lorenzo. Sin conocer mi trabajo académico, ni mi persona, me incluyó en su lista de doctorandos. Sutilmente, poco a poco, me fue indicando muchas de las claves que deben contener una tesis doctoral, la investigación y el modo en el que el trabajo debía ser realizado. Muchas gracias profesor. Un placer.

Asimismo, durante este viaje académico debo señalar a diversas personas que han cooperado en que este trabajo haya sido fructuoso. En el lado académico debo señalar a la mente más brillante que jamás he conocido: Ramiro Hernández Chico. El más audaz y la mente que más me ha deslumbrado. Su apoyo a construir el inicio de la tesis ha sido decisivo, y su amistad durante todos estos años más. Gracias. Asimismo a Imanol Ortega Expósito debo estar agradecido, compañero de viaje académico, amigo e impulsor de que me “arriesgase” a realizar este trabajo. Otras personas fueron determinantes como María Vera o el gran José Rodolfo Morales, compañeros de Master, amigos, y mentes brillantes que formarán parte del futuro. Gracias por vuestro apoyo genios.

Por último y sin poder olvidarse por su importancia suprema, es deber citar a un gran amigo que durante este arduo proceso ha actuado como “desestresante”, mi compañero de tardes de viernes Roberto Lorenzo Carneiro. Gracias por ayudarme a relajar la mente. Mucho me ha ayudado y han sido momentos tan necesarios como otros durante esta labor.

Y todo este proyecto ha sido realizada en un espacio: en la Biblioteca Nacional de España. Gracias a este centro por ser tan perfecto para pensar e incitar a trabajar. Sin la presencia de éste todo hubiese costado mucho más.

INDICE

LISTADO DE ACRÓNIMOS	9
LISTADO DE GRÁFICAS, ILUSTRACIONES, TABLAS Y CUADROS DE TEXTO.....	13
INTRODUCCIÓN	17
1. Selección de tema de estudio.....	17
2. Marco teórico.	27
2.1 El porqué de la elección de la perspectiva constructivista.	29
2.2 La meta-teoría frente a la “realidad objetiva” en las Relaciones Internacionales: Ideas, identidades e intereses.....	34
2.3 Pequeño Mapa conceptual constructivista: Nicholas Onuf.....	39
2.3.1 El constructivismo según Nicholas Onuf.	40
2.3.2 Herramientas: la constitución del régimen a través de reglas y discursos. .	50
2.3.3 Reglas en las sociedades internacionales: Estados e instituciones.	53
2.3.4 La sociedad internacional, soberanía, principios y reglas.....	57
3. Pregunta e hipótesis de investigación.	59
4. Objetivos de la investigación.....	61
5. Metodología.	62
6. Estructura de la tesis.	63
PARTE I.....	67
CAPITULO I. El desarrollo: el debate en torno a las ideas. La Inversión Extranjera Directa como eje principal de disputa.	67
1. Objetivos del capítulo.	67
1.1 Introducción.....	67
1.1.1 Motivación de análisis y lo positivo de cuestionar.....	70
2. Concepto e ideas subyacentes del desarrollo.	73
3. Primeros días del concepto en la Comunidad Internacional.	75
3.1 Teoría de la Modernización: yo sé; tú aprendes. Promoción institucional de una idea particular.....	79
3.1.1 La Teoría de la Modernización: hombre feliz, hombre que consume. Fases para construir una sociedad “feliz” según W.W. Rostow.....	82
3.1.2 La transformación social necesaria para ser “desarrollado”: metodología presente en la Teoría de la Modernización.....	87
3.1.3 Influencia modernizadora en América Latina y el Caribe.	92
3.1.4 Reflexiones acerca de los modernizadores.....	94
3.2 La Comisión Económica para América Latina y la Teoría de la Dependencia: Pensamiento latinoamericano con fijación en la asimetría existente en el origen de la relación y en las capacidades.	95

3.2.1	Crítica del campo económico y social. El desarrollo ofertado a cuestión: Teoría Cepalina y el papel de la Inversión Extranjera Directa.	98
3.2.2	Requisitos de transformación social en la propuesta cepalina.	104
3.2.3	Teoría de la Dependencia. La inversión extranjera como arma opresora con capacidad superior a la atribuida por la Comisión Económica para América Latina.	107
4.	Apuntes sobre la evolución conceptual del desarrollo desde los años 70 en el contexto internacional.	113
4.1	El medio ambiente: knock-out del crecimiento económico como modelo de desarrollo.	115
4.2	Desarrollo Humano: de una concepción de necesidades básicas a una de desarrollo humano multidimensional.	128
4.2.1	El Enfoque de Necesidades Básicas	130
4.2.2	El Enfoque de Capacidades	132
4.2.3	Enfoque de Derechos Humanos.	135
4.3	El crecimiento como práctica desarrollista incrustado en las agendas.	137
5.	América Latina y el caribe: las instituciones y el ¿desarrollo? desde los 80.	138
5.1	Transformación del poder. Reconfiguración del modelo de desarrollo tras el fracaso del regionalismo abierto.	145
6.	Configuraciones particulares/alternativas del desarrollo desde América Latina y el Caribe tras 500 años: el Buen Vivir o <i>sumak kawayas</i> y el Vivir Bien o <i>sumak qamaña</i>.	148
6.1	La Reconfiguración de las relaciones. Individuo- Semejantes. Conjunto – Naturaleza.	154
6.1.1	Soberanía y comunidad.	158
6.2	El Buen Vivir como contrapartida al concepto de bienestar, más que alternativa al desarrollo o al crecimiento económico.	160
6.2.1	Qué es el Buen Vivir y el peligro presente en la aplicación reciente.	164
7.	Conclusiones.	167
7.1	La relevancia de la cuestión ideológica.	171
PARTE II.		174
CAPITULO II. Soberanía, concepto a debate.		174
1.	Objetivos del capítulo.	174
1.1	Primer paso. La Real Academia de la Lengua.	177
1.2	Aproximación al concepto político.	179
2.	Inicios conceptuales. Acercamiento a la historia.	180
2.1	Los autores clásicos.	182
2.1.1	Debate en la cara interna de los Estados. Del origen divino al consentimiento popular: entre el absolutismo y la soberanía popular.	186
2.1.2	La Soberanía Nacional: el debate constitutivo del poder interno.	190

3. La construcción de un agente supraestatal: el caso de los Estados Unidos y la soberanía compartida.	193
4. Una fricción operativa: armonización entre la Soberanía y el Derecho Internacional.....	199
4.1 La escuela francesa.....	202
4.2 Hegel y la concepción del Estado absoluto.....	204
4.2.1 El derecho político externo (o Derecho Internacional) según Hegel.	209
4.3 La Paz perpetua de Kant y otros autores idealistas en pos de la constitución de un poder supraestatal.	211
5. La soberanía, Organizaciones Internacionales, transformaciones y límites en la doctrina.	214
5.1 El impacto de la Revolución Industrial y la aparición de nuevos actores en las Relaciones Internacionales en la doctrina de la soberanía en el siglo XIX.	215
5.1.1 Teoría de autolimitación de George Jellinek. Reflexión en torno a los nuevos agentes y la soberanía en la Sociedad Internacional.	218
5.2 El intento de regular las reticencias absolutistas: la aparición de la Sociedad de Naciones.....	219
5.2.1 Pequeño apunte en torno a la denuncia del tratado.	224
5.3 Carl Schmitt: la soberanía y la decisión.	225
5.3.1 Aportaciones teóricas relevantes de Schmitt acerca de la soberanía a tener en cuenta al observar los procesos unitarios/ integradores.	229
6. La soberanía tras la Segunda Guerra Mundial.	230
6.1 La aparición de las Naciones Unidas: La institucionalización de la categorización soberana en cuestiones de paz y seguridad.	231
6.2 La Guerra Fría. La extensión de la soberanía más allá de las fronteras. La capacidad de decisión limitada en bloques.	235
6.3 La significación de la descolonización en cuestiones de soberanía: la adquisición de soberanía impuesta como idea de organización social.	238
7. Cuestiones relevantes en la evolución doctrinal de la soberanía en el Derecho Internacional en el siglo XX.	244
8. Los procesos integradores. Modelos supranacional e intergubernamental como desafíos de la doctrina soberana.	248
9. Características actuales de la soberanía en un mundo multi-relacionado..	252
9.1 Desafíos en el nuevo mundo globalizado.....	256
9.2 Diversas motivaciones para asociarse en organización regional ante la globalización.	258
10. Conclusiones.	263
CAPITULO III. La Inversión Extranjera: concepto e institucionalización reguladora.....	272
1. Introducción.	272
2. Objetivos del capítulo.	275

3. Perspectiva analítica: se aborda el estudio de la Inversión Extranjera Directa desde el campo político.....	276
4. La Inversión Extranjera. Contextualización del análisis.	278
4.1 En qué consiste la Inversión Extranjera Directa: motivaciones de activación y uso como práctica internacional.	281
4.1.1 Pertinencia y motivación de la promoción de la Inversión Extranjera Directa.....	282
4.2 Principios generales presentes en los tratados y acuerdos de inversión.	288
5. La Inversión Extranjera Directa en el Derecho Internacional. La institucionalización de las normas a partir de su práctica.	293
5.1 Las doctrinas Calvo y Drago. La ambivalencia del Derecho Internacional: replica ante la práctica intervencionista bajo el paraguas de una interpretación del Derecho Internacional con origen asimétrico en su fundamento.	298
5.1.1 Carlos Calvo: Doctrina y Cláusulas.....	300
5.1.2 Luis María Drago y su Doctrina.	302
5.1.3 El impacto y herencia de las Doctrinas Drago y Calvo en el contexto Internacional.	305
5.2 Conflictos y resoluciones relevantes en términos de regulación de la Inversión Extranjera Directa ocurridos con anterioridad a los años 50.....	308
6. La estimulación de mecanismos y normas tras la Segunda Guerra Mundial: apartando la multilateralización de la normativa en cuestiones de Inversión Extranjera Directa.	311
6.1 De Uruguay a Bali: la multilateralización normativa de la Inversión Extranjera Directa no interesa.....	316
6.2 Los Tratados Bilaterales de Inversión: historia, impacto y actualidad de una herramienta condicionante en términos de soberanía.	322
6.3 Los Acuerdos de Integración Regional. Mecanismos paralelos de regulación de la Inversión Extranjera Directa.....	328
7. La implementación de mecanismos de arbitrio tras la posguerra.	334
7.1 Instituciones, mecanismos y reglamentos en torno al arbitrio: Centro Internacional de Diferencias Relativas e Inversiones; la Comisión de la Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional; y otros organismos de arbitrio.	338
7.2 El sistema operativo del arbitrio. Cuestiones a tener en cuenta.....	347
8. El impacto de la normativización en la soberanía.	352
8.1 Cuestiones de cláusulas: su ambigüedad e interpretación en el Derecho Internacional.....	357
8.1.1 La ambigüedad como señal de identidad en la interpretación del Derecho Internacional. La cláusula de “Trato justo y equitativo”.	359
8.1.2 La expropiación de la potestad en forma de cláusula de expropiación indirecta.....	365
8.2 “Cláusula de supervivencia”. Más allá de los gobiernos.	371
9. Conclusiones.....	373

PARTE III.....	379
CAPITULO IV. La acción externa como eje sobre el que se articula la unificación/integración en América Latina y el Caribe hasta mediados de siglo XX.	381
1. Objetivos del capítulo.	381
2. Primeras percepciones unitarias de región desde el exterior: el Nuevo Mundo, los Derechos de Conquista en Francisco de Vitoria, y la legitimación y reconocimiento externo de identidad.....	383
2.1 El impacto de Francisco de Vitoria. Reformulación teórica, misma praxis. .	385
2.1 Impacto en América Latina y el Caribe. Ciertas connotaciones que indicaban el reconocimiento del Nuevo Mundo como agente internacional.	390
3. La región tras la herencia imperial: factores que potenciaron la unidad y la separación.....	392
3.1 Leve apunte sobre el papel de los Imperios en el legado identitario.	394
3.2 Hacia el desmembramiento en la búsqueda de la identidad soberana.....	396
4. Diversos autores que promovieron la idea de unidad regional.....	398
4.1 Francisco de Miranda. Primer gran autor.	398
4.2 La idea unionista en épocas de independencia. Presencia en diversos territorios.....	400
4.2.1 El impacto de Simón Bolívar y el primer Congreso unionista.....	408
4.2.2 El desarrollo del Congreso de Panamá. Fracaso en la concertación de posturas.....	413
4.3 La pervivencia del ideal en el tiempo. Diversos proyectos unificadores tras el Congreso de Panamá.....	416
4.4 La denominación de latinoamericano. Identidad y nominación en la mitad de Siglo.....	419
4.5 Economía e ideas: factores relevantes en la concertación de fuerzas regionales a mitad de siglo XIX.....	424
5. La injerencia externa cambió de agentes. Ideas subyacentes en las prácticas y réplica de América Latina y el Caribe.	427
5.1 La doctrina Monroe. La soberanía a cuestión.	428
5.2 Las inversiones como práctica conflictiva. Reflexión de principios de siglo XX.....	436
5.3 El Panamericanismo. La soberanía y la protección del inversor como eje principal en la evolución de la Conferencias.....	440
5.3.1 La evolución de la disputa en torno a la Inversión Extranjera Directa en el desarrollo de las Conferencias Panamericanas.....	442
6. Reacción de pensadores de América Latina y el Caribe ante el papel ejercido por las grandes potencias, desde principios del siglo XX hasta mediados de siglo.....	456
6.1 Rodó e Ingenieros, escogidos autores exponentes de la unidad como manifestación de identidad y necesidad de unión.	458

6.2	Mención a José Martí. La identidad como mecanismo articulador de ideas y prácticas ante el agente externo.	460
6.3	La Inversión Extranjera Directa en el centro de la crítica de diversos procesos unionistas. Dos actores políticos como ejemplos de esta práctica: Haya de la Torre y Sandino.	464
6.4	Pequeño apunte: impacto del pensamiento socialista en la realidad latinoamericana.	472
6.5	Leve mención a procesos ocurridos tras los años 50. El pensamiento unionista en el Che, Allende y otros, en relación al papel de la Inversión Extranjera Directa..	475
7.	Conclusiones.	480
CAPITULO V. Análisis de la fase pragmática del proyecto unificador/integrador de América Latina y el Caribe en torno al papel de la Inversión Extranjera Directa.		484
1.	Objetivos de capítulo.	484
2.	Principios subyacentes en la fase pragmática: El papel de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Banco Interamericano de Desarrollo, y su disputa en torno al trato a la Inversión Extranjera Directa.	485
2.1	El Banco Interamericano de Desarrollo y la figura de Felipe Herrera. Unificación política necesaria.	488
3.	Integración a escala. Procesos integradores con orígenes anteriores a los años 90.	490
3.1	La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y la Asociación Latinoamericana de Integración: la reconfiguración constante de una entidad sin objetivos claros en torno al proceso económico.	492
3.1.1	Contextualización de La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio.	492
3.1.2	La Asociación Latinoamericana de Integración: Debilidad decisoria institucional, política y económica.	495
3.2	La Organización de Estados Centroamericanos, el Mercado Común Centro Americano y sus procesos de transformación.	503
3.2.1	Contextualización del Mercado Común Centro Americano.	503
3.2.2	Contexto actual.	509
3.3	El Pacto Andino. La inversión como causa de transformación.	514
3.3.1	Contextualización del Pacto Andino.	514
3.3.2	La institucionalización del Grupo Andino en el marco del regionalismo abierto..	519
3.3.3	Avances institucionales y pluralismo en la Comunidad Andina: fractura debido al trato con las inversiones.	522
3.4	El caso de los británicos latinoamericanos: un acercamiento tardío al proceso unitario de América Latina y el Caribe.	523
3.4.1	Notas contextuales a tener en cuenta.	523
3.4.2	Contexto del proceso integrador de las islas ex-británicas del Caribe.	524

3.4.3	Ideologías estatistas en las practicas integradoras. Comienzo de la <i>Caribbean Free Trade Association</i> (CARIFTA).....	526
3.4.4	La constitución de la Comunidad del Caribe. Un proceso de transformación progresiva en torno al papel de la Inversión Extranjera Directa en el área.	527
3.4.5	La teología del Mercado en la Comunidad del Caribe.	531
3.4.6	Proceso de acercamiento a Latinoamérica.	535
4.	Nuevo proceso de institucionalización normativa de la Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe. Posturas ambivalentes en los nuevos procesos de integración desde los años 90.....	537
4.1	Contexto regional. Ideas subyacentes al proceso evolutivo de la integración regional.	538
4.1.1	Impacto de la práctica en los procesos de integración.	543
4.2	El Mercado Común del Sur: del mercado a la política.	544
4.2.1	Contextualización del origen del Mercado Común del Sur: el MERCOSUR.	544
4.2.2	El Mercado Común del Sur y la Inversión Extranjera Directa: un propósito normativo en el trato a la práctica.....	549
4.3	Integraciones excluyentes en torno a la atribución de capacidades a la Inversión Extranjera Directa: la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América- Tratado de Comercio de los Pueblos y la Alianza Pacífico.	555
4.3.1	La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América- Tratado de Comercio de los Pueblos. Un modelo de integración desde los pueblos hacia la región... ..	558
4.3.2	La Alianza Pacífico: neo-liberalismo subregional, la vuelta al regionalismo abierto... ..	567
4.4	Instituciones de concertación política en América Latina y el Caribe: la Unión de Naciones Suramericanas y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.	572
4.4.1	La Unión de Naciones Suramericanas: De una apuesta económica a una integral. Un giro previsto.....	573
4.4.2	La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños: El organismo colector del anhelo unitario latinoamericano: origen y finalidad.....	579
5.	Pragmatismo: cuestiones relevantes sobre soberanía e integración en América Latina y el Caribe.	589
5.1	El ideario intergubernamental predomina en la región. Pistas encontradas en textos constitucionales.	591
5.1.1	Elementos supranacionales e intergubernamentales en textos constitutivos de los Estados de América Latina y el Caribe.	593
5.2	Transformación regional en términos de capacidades operativas en el contexto global... ..	597
5.2.1	¿Convergencia en términos de capacidades económicas?	599
5.2.2	La Inversión Extranjera Directa de América Latina y el Caribe: las multi-latinas han ido ganando peso en el contexto internacional.....	606

5.2.3 Algunos datos relevantes en términos de convergencia en aspectos sociales.....	609
5.2.4 Convergencia en términos de seguridad.....	619
6. Conclusiones.....	629
PARTE IV. Conclusiones.	634
1. Balance general de las principales aportaciones y resultados de la tesis....	634
1.1 Evidencias sobre el impacto de las ideas sobre desarrollo e Inversión Extranjera Directa en la construcción de un agente regional con capacidad de decisión soberana.	642
1.2 La cuestión de construir un agente soberano para regular la Inversión Extranjera Directa.....	644
1.3 Evidencias respecto a la relación entre la conceptualización del desarrollo, la soberanía y la Inversión Extranjera Directa.....	648
2. Verificación del cumplimiento de los objetivos y las hipótesis de partida.	652
3. Principales aportes del marco teórico en esta investigación.....	657
Summary of Phd Thesis	661
1. Summary of PhD thesis.	662
1.1 Abstract.....	662
2. Synthesis.	663
3. Hypothesis and objectives.....	664
3.1 Main hypothesis:.....	665
4. Thesis chapters.	666
5. The essential results obtained in the research: Evidence found about the link between Foreign Direct Investment, sovereignty and development in the Latin American and Caribbean region.	667
6. Conclusions.....	671
Bibliografía.....	673
1. Obras: libros y artículos citados y consultados.	673
2. Documentos relevantes consultados y citados.....	709

LISTADO DE ACRÓNIMOS

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros	GATT por su siglas en inglés
Acuerdo General sobre Comercio de Servicios	AGC
Acuerdo Multilateral de Inversiones	AMI
Acuerdo sobre Medidas en Materia de Inversiones Relacionadas con el Comercio	MIC
Acuerdos de Integración Regional	AIR
Acuerdos Internacionales de Inversión	AII
Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones	APPRI
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América	ALBA
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América- Tratado de Comercio de los Pueblos	ALBA-TCP
América Latina y el Caribe	ALC
ASEAN Free Trade Area	AFTA
Alianza Pacífico	AP
Asia-Pacific Economic Cooperation	APEC
Asociación de Derecho Internacional (<i>International Law Association</i>)	ILA
Asociación de Estados del Caribe	AEC
Asociación de Libre Comercio del Caribe (<i>the Caribbean Free Trade Association</i>)	CARIFTA
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático	ASEAN
Banco de Desarrollo del Caribe	CDB
Centro Internacional de Diferencias Relativas e Inversiones	CIADI
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (<i>*el Caribe añadido en el 25 de febrero de 1984</i>).	CEPAL

Comisión de la Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional	CNUDMI
Comunidad Andina de Fomento	CAF
Comunidad del Caribe (<i>Caribbean Community and Common Market</i>)	CARICOM
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños	CELAC
Comunidad Económica del Carbón y del Acero	CECA
Comunidad Internacional	CI
Comunidad Sudamericana de Naciones	CSN
Consejo de Defensa Suramericano	CDS
Consejo de Relaciones Exteriores y Comunitarias (<i>COFCOR por sus siglas en inglés</i>)	COFCOR
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas	ECOSOC
Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Costa Ecuatoriana	COICE
Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional	CIACCI
Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo	CALC
Declaración de Caracas	DC
Empresa Transnacional	ETN
Enfoque de las Necesidades Básicas	ENB
Estrategia de Seguridad Centroamericana	ESCA
Fondo de Población de las Naciones Unidas	FNUAP
Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR	FOCEM
Foro de Consulta y Concertación Política del MERCOSUR	FCCP
Industrialización por Sustitución de Importaciones	ISI
Iniciativa para la Cuenca del Caribe	ICC
Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana	IIRSA
Inversión Extranjera	IE

Inversión Extranjera Directa	IED
Inversión Extranjera Indirecta	IEI
Mecanismos de Resolución de Disputas en Cuestiones de Inversiones (<i>Investor-State Dispute Settlement en inglés</i>)	ISDS
Mercado Común Centroamericano	MCCA
Mercado Común del Sur	MERCOSUR
Naciones Unidas	NNUU
Organismo Internacional u Organización Internacional	OI
Organización de Estados Americanos	OEA
Organización de Estados Centroamericanos	ODECA
Organización del Tratado del Atlántico Norte	OTAN
Organización Internacional del Comercio	OIC
Organización Internacional del Trabajo	OIT
Organización Latinoamericana de Energía	OLADE
Países No Alineados	PNA
Plan De Acción Económico De Centroamérica	PAECA
Producto Interior Bruto	PIB
Programa de Integración y Cooperación Económica	PICE
Real Academia de la lengua Española	RAE
Recursos Naturales	RRNN
Relaciones Internacionales	RRII
Segunda Guerra Mundial	IIGM
Sistema de Integración Centroamericana	SICA
Sistema Económico Latinoamericano	SELA
Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos	SUCRE
Sociedad de Naciones	SN
Sociedad Internacional	SI

Teoría de la Dependencia	TD
Tratado de Libre Comercio de América del Norte	TLCAN
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca	TIAR
Tratado Bilateral de Inversión	TBI
Tribunal Permanente de Revisión	TPR
Unión Africana	UA
Unión Aduanera en Centroamérica	UAC
Unión de Naciones Suramericanas	UNASUR
Unión Latinoamericana y del Caribe	ULC

LISTADO DE GRÁFICAS, ILUSTRACIONES, TABLAS Y CUADROS DE TEXTO

GRÁFICAS

Gráfica 1: Evolución de la IED y de la Deuda en ALC (1990-2013).....	26
Gráfica 2: Ingresos per cápita en países del CAD (OCDE) y ALC (1960-2011).....	144
Gráfica 3: Tendencias de Tratados Bilaterales de Inversión y otro Acuerdos de Inversión Internacional.....	325
Gráfica 4: Evolución de los Acuerdos Internacionales de Inversión suscritos por ALC con el Resto del Mundo.....	541
Gráfica 5: América Latina y el Caribe: entradas de IED y entradas de IED como proporción del PIB (1990-2013) (<i>En millones de dólares corrientes y porcentajes del PIB</i>)...	542
Gráfica 6: Evolución de la IED receptada por MERCOSUR (1970-2013).....	550
Gráfica 7: Tratados Bilaterales de Inversión ratificados por los Estados pertenecientes al MERCOSUR (1990-2013).....	552
Gráfica 8: Evolución de la IED receptada por países de la AP y la ALBA-TCP (1970-2013). <i>*Sin datos de Cuba.</i>	558
Gráfica 9: Tratados Bilaterales de Inversión ratificados por los Estados miembros del ALBA-TCP (1990-2013).....	566
Gráfica 10: Tratados Bilaterales de Inversión ratificados por los Estados miembros de AP (1990-2013).	571
Gráfica 11: Encuesta de 2010 <i>Latinobarómetro</i> : ¿En favor o en contra de la integración política en AL?.....	596
Gráfica 12: Encuesta de 2010 <i>Latinobarómetro</i> : ¿En favor o en contra de la integración económica en AL?	596
Gráfica 13: Importaciones de Energía por grupo regional (1990-2011).....	600
Gráfica 14: Evolución de la estructura de exportaciones agrupadas por intensidad tecnológica en ALC (33) 1976-2013.....	602
Gráfica 15: Evolución de la estructura de exportaciones de alta intensidad tecnológica en ALC (33) 1976-2013.....	603
Gráfica 16: Evolución de la estructura de exportaciones de media intensidad tecnológica en ALC (33) 1976-2013.....	605

Gráfica 17: Evolución de la pobreza y de la indigencia en América Latina (1980-2013)..	610
Gráfica 18: Comparativa de la evolución del desempleo por grupos de Estados (1980-2013).	611
Gráfica 19: Evolución de la inscripción escolar en nivel terciario por grupos (1980-2013).	613
Gráfica 20: Democratización en la zona de ALC por periodos.....	615
Gráfica 21: Encuesta latinobarómetro. Aceptación de la democracia como sistema de gobierno en ALC.	617
Gráfica 22: Relación entre homicidios intencionados y desigualdad (1984-2013).	620
Gráfica 23: Evolución del gasto militar por grupos de países.....	622

ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Interpretación del proceso: metas inscritas en la Declaración de Caracas (2011).	22
Ilustración 2: Producción de reglas de origen en la interacción social.....	42
Ilustración 3: Mapa de una “Institución”.....	44
Ilustración 4: Foto estática de la Estructura.	45
Ilustración 5: Mapa operativo del impacto del desarrollo en las prácticas.	70
Ilustración 6: Emisiones de Dióxido de Carbono 1980.....	125
Ilustración 7: Comparativa entre los conceptos: Eco-desarrollo vs Desarrollo sostenible.	126
Ilustración 8: Los ejes de soberanía: Horizontal y Vertical.	189
Ilustración 9: Mapa sobre evolución de membresía en la liga de Naciones (1920-1946).	222
Ilustración 10: El producto interior bruto agregado de los países de renta alta, y de renta media y baja, 1980–2010, como porcentaje del PIB mundial.	287
Ilustración 11: Mapa mundial coloreado por índices de <i>Gini</i> 2013.....	612
Ilustración 12: Índice de Percepciones de Corrupción en instituciones públicas 2013....	618
Ilustración 13: Mapa mundial coloreado de acuerdo a la Tasa de homicidios por cada 100000 hab.....	619

TABLAS

Tabla 1: Características y espacios de la práctica de la soberanía.....	267
Tabla 2: <i>Gini</i> entre Estados. Tipo I.....	287
Tabla 3: Evolución del índice de <i>Gini</i> Tipo III en el mundo.....	288
Tabla 4: Inversiones de EEUU en América Latina (1912 y 1928).....	440
Tabla 5: Inversiones de capital Extranjero en América Latina (1928).....	440
Tabla 6: Tasa de variación del PIB en ALBA-TCP y AP (2010-2013). (<i>En millones de dólares, a precios constantes de 2005</i>).	557

CUADROS DE TEXTO

Cuadro de texto 1: Cuestiones relevante de la evolución: del GATT a la OMC.	317
Cuadro de texto 2: Disposiciones principales de los Tratados Bilaterales de Inversión.	326

INTRODUCCIÓN

1. Selección de tema de estudio.

En los años recientes en la región de América Latina y el Caribe (ALC) se está asistiendo a un proceso de integración o/y unificación¹, que más allá de contar con la presencia de divergencias notables en las posiciones comerciales, políticas, culturales, etc... particulares que posee cada Estado o grupo subregional, presenta ciertos elementos cohesionadores no vistos con anterioridad. En este proceso, el hecho que ofrece un mayor grado de relevancia es la constitución de una entidad que, por primera vez, institucionaliza las relaciones regionales latinoamericanas incluyendo a los 33 Estados de ALC sin presencia de actor externo alguno²: la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)³, ambicionando "...avanzar de manera decidida hacia una organización que agrupe a todos los Estados de América Latina y El Caribe" (CELAC, 2011).

La aparición de esta comunidad ha despertado el interés de diversos espacios dedicados al análisis, que indagan, entre otras cuestiones, sobre cuál va a ser la capacidad de acción con la que va a contar el nuevo organismo. Esto es debido, principalmente, a que el tratar instituirse como agente de cobertura regional y lograr articular su actividad y los mecanismos necesarios para ejercitar sus prácticas, con la presencia de las divergencias señaladas, aparece como el principal desafío a solventar por la CELAC.

En línea con este dilema hay autores que indican que la cuestión relevante a dilucidar entre los miembros de la CELAC es, sin duda, la cuestión soberana. A este respecto se ha señalado que la constitución de esta institución de cobertura regional en ALC, tensiona de modo manifiesto el concepto de soberanía desde dos ángulos: primero, por las dificultades que puede presentar la cuestión de qué capacidades pudiesen ser o no trasvasadas de la

¹ Este sentido categórico se rescata de la interpretación que realiza Claudio Katz (2008) al clasificar los procesos regionales bajo dos parámetros diferenciales: 1) identificando la integración con un pacto primordialmente económico; y 2) el proceso de unificación como un hecho político.

² Puerto Rico es el gran ausente debido a su condición de Estado Libre Asociado a los EEUU desde 1917, lo que determina que su soberanía se encuentra en el Congreso de los EEUU a partir de la firma de la *Ley Jones-Shafroth*. Hecho que aun permitiendo crear instituciones similares a las de un Estado a Puerto Rico, depositaba la capacidad de veto en el Congreso de los EEUU por la aplicación de la Cláusula Territorial que otorga a los EEUU la capacidad de disolver la constitución.

³ El punto 21. La DC dice así: "Que conforme al mandato originario de nuestros libertadores, **la CELAC avance en el proceso de integración política, económica, social y cultural haciendo un sabio equilibrio entre la unidad y la diversidad de nuestros pueblos**, para que el mecanismo regional de integración sea el espacio idóneo para la expresión de nuestra rica diversidad cultural y a su vez sea el espacio adecuado para reafirmar la identidad de América Latina y El Caribe, su historia común y sus continuas luchas por la justicia y la libertad"(CELAC, 2011)[**Negrita propia**].

figura del Estado a la comunidad (Serbin, 2010; Sanahuja J. A., 2008-2009); y segundo, por la significancia en el contexto regional e internacional que puede alcanzar una institución que pretende construir una *soberanía regional* (Rojas Aravena, 2012; Aharonian, 2011)⁴. Dos cuestiones que a la vez que complementarias, al ser un proceso que trata de converger y lidiar con los recelos históricos de los Estados en la cuestión de la soberanía nacional, indican la presencia de grandes posibilidades para la región en términos de convergencia y empoderamiento, si se lograra instituir de manera eficiente la articulación de mecanismos que incentivasen la operatividad de aquellas prácticas que contengan intereses comunes e instalar pilares estructurales que signifiquen una mayor unidad e integración. Tanto por la repercusión que tendría en el posicionamiento externo como entidad en el contexto internacional, como por el impulso que podría significar en términos de capacidades y complementariedad.

Es un hecho notorio que la cuestión soberana es de una importancia incuestionable desde que las relaciones sociales se instituyen en comunidad y las comunidades interaccionan entre ellas (Onuf, 1991; Philpott, 2001; Anghie, 2005). Valdría únicamente con indicar que la soberanía se caracteriza por: a) ejercer de elemento aglutinador voluntades en el sentido de soberanía popular indicado por Rousseau (1992[1762]); b) por actuar como poder representativo de la unidad en el interior y en el exterior como señala Hegel (1999[1821]); o c) por ser el atributo que representa la autonomía política en el sentido que lo hace Carl Schmitt (2013[1927]), para visualizar algunos de los motivos que evidencian la importancia de este concepto en términos de organización de poder. Por ello, aún en la época actual en pleno proceso globalizador, en el que ciertas fronteras se difuminan, su importancia es más que evidente tanto a nivel nacional, ya que el reclamo de autonomía ha sido la causa de un tercio de las guerras civiles desde 1945 (Sambanis & Milanovic, 2011, pág. 2)⁵; como en el contexto internacional, porque además de ser históricamente una facultad representativa de autoridad territorial constituye uno de los áreas de disputa actual y al que se hace referencia por los Estados desde las épocas de descolonización⁶. No obstante, también es un hecho

⁴ La utilización de un concepto tan discutible en términos de soberanía como la construcción de una *soberanía regional*, en un espacio territorial que no es el Estado, también se ha utilizado por diversos autores como Julián Kan (2009) al referirse a la constitución de la UNASUR y al proceso que vive la región de ALC en cuestiones de soberanía y autonomía; o Mario Unda (2008) al indicar la pertinencia de impulsar una cierta cohesión en prácticas políticas comunes por parte de la región, en este caso incitando a “construir espacios regionales” (Unda, 2008, pág. 37).

⁵ El reclamo de autonomía es tan relevante que ha sido la causa de un tercio de las guerras civiles desde 1945 (Sambanis & Milanovic, 2011, pág. 2).

⁶ En este sentido destacan los procesos de nacionalización vividos tras el fin de la Segunda Guerra Mundial (Mahutga & Bandelj, 2013, pág. 102); o las disputas recientes en torno a los sistemas de arbitrio referidos a las legislación operativa en cuestiones de Inversión Extranjera Directa (IED). Véase Capítulo III.

incuestionable que este concepto contiene grietas en su definición y clama la atención que, ante un examen superficial del mismo, se detecte una historia terminológica llena de vacíos e incertidumbres. Cuestión debida principalmente a las transformaciones constantes que han sufrido las Relaciones Internacionales (RRII) en los dos últimos siglos⁷.

Esta mirada introductoria revela que, existiendo una dificultad palpable para definir qué atributos determinan la soberanía en la actualidad, el observar cómo incide un concepto que requiere una reformulación conceptual en la articulación y la puesta en marcha de una comunidad que ambiciona instituirse como organización- como la CELAC-, posee una gran dificultad.

Lo indicado se evidencia ante un examen superficial del texto constitutivo de la institución: la Declaración de Caracas (DC) (2011). Concretamente al observar que en los puntos 21 y 22 se indica la pertinencia de proceder a e impulsar la integración, la unidad, la identidad común, etc... en ALC; y por otra parte el punto 23 se señale que la organización guarda un respeto absoluto por la soberanía interna de los Estados (CELAC, 2011). Indicaciones ambas que establecen una primera cuestión relevante en términos de soberanía, al indicar objetivos antagónicos en cierto sentido y, por lo tanto, que se entienda relevante el preguntarse: ¿cómo se produce una integración o unión sin ceder soberanía?⁸

⁷ Respecto a esta cuestión señalan Michel Hard y Antonio Negri (2000) que el vacío conceptual de la soberanía responde a varios motivos en la actualidad: a) la época en el que se originó; b) los cambios sufridos desde entonces por las sociedades; c) la implementación de las formas de poder; d) el incremento de vías de interacción entre los Estados y otros actores; e) y la multiplicidad de actores (Hardt & Negri, 2000). Por lo que indican que se presenta necesario un replanteamiento sobre el significado y alcance del término en el nuevo contexto internacional.

⁸ Esta problemática se refleja en diversos textos de tratados supranacionales. Por ejemplo, en el Tratado constitutivo de la Comunidad Andina (CAN), y según la interpretación efectuada por la misma organización en un documento informativo resuelto el lunes 07/05/2001, entiende que: “La cesión que se opera es la del ejercicio de competencias soberanas, no de la soberanía”; estableciendo que: “La cesión del ejercicio de competencias se efectúa mediante atribución y no a través de una transferencia de soberanía, por consiguiente, no se trata de un acto jurídico definitivo” (CAN, 2001). Asimismo, este debate se ha visto reproducido en la relación de la Unión Europea (UE) con diversos Estados. Concretamente, prestando atención al caso del Estado de España, se ha enunciado que al revisar el Art. 93 de la Constitución Española, en el que se cita que: “Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión” (B.O.E., 1978). En donde se indica la cesión de competencias a un órgano superior. Y de ello emana una problemática en su aplicación, debido a que en los artículos de la propia constitución: el Art. 9 y el Art. 95, se afirma que el poder jurídico inscrito en la Constitución se sitúa por encima de cualquier otro; y en el propio Tratado constitucional Europeo, su Art. I-8 dice así: “La Constitución y el Derecho adoptado por las instituciones de la Unión en el ejercicio de las competencia que se le atribuyan a ésta primarán sobre el Derecho de los Estados miembros”. Por lo que, aparte de que cada vez que se apruebe un tratado o acuerdo en la UE que no esté recogido en la Constitución habría que reformar la misma según el Art. 95, en la cuestión soberana se observa una clara cesión de capacidades

La cuestión señalada causa que un primer desafío que se presente si se quiere, cuando menos, entender un proceso que articule diferentes capacidades regionales- como lo es la construcción de una *soberanía regional*-, sería determinar cuáles han sido los procesos de transformación conceptual que ha sufrido el propio término; así como analizar los factores que han podido influir en su reformulación; y detectar qué atributos caracterizan al término en la actualidad. Cuestiones que una vez desveladas ayudarían, en cualquier caso, a analizar las particularidades de proyectos unionistas o integradores en la región y que sin lugar a duda forman parte de un debate tan apasionante como necesario a tenor de los procesos y transformaciones actuales, partiendo de la “nueva realidad” que se está fraguando en la región.

Asimismo, continuando con el estudio de la constitución de la comunidad, es suficiente con revisar el corto proceso vivido por la misma para detectar la presencia de, al menos, dos elementos que a primera vista son reflejo de la gran relevancia que este proceso tiene para la región en términos de soberanía. Debido esto a las ideas subyacentes que, en principio, se esconden tras la propia DC.

El primero de estos elementos se encuentra en la referencia constante a la ambición histórica, de algunos de los más celebres luchadores en los procesos de independencia de ALC, en el articulado de la DC. De hecho, ésta fue bautizada con el nombre de “En el bicentenario de la Lucha por la Independencia Hacia el Camino de Nuestros Libertadores”. De forma tal que quedó desvelada la simbología reivindicativa de una ambición lejana, que se significaba en la DC: el sentimiento de opresión común de todos los actores partícipes. Lo que sumado a un segundo elemento a destacar en términos de integración: el ser la primera institución de carácter regional que congrega a los 33 Estados de la región latinoamericana sin la presencia de actor externo, constituye y reafirma la presencia de anhelo cohesionador extendido por toda la región. El cual, en cierto modo, se hace realidad con la constitución de la CELAC.

decisorias y, en cierto modo, un vaciamiento de esta capacidad de la propia constitución. Conviniéndose que el dilema sobre la soberanía es inequívoco. De ello que el Tribunal Constitucional español sostuviese, en su Declaración del 13 de diciembre en 2004, **que la cesión del ejercicio de competencias a la UE supone límites para las facultades soberanas del Estado**, de acuerdo al ejercicio de voluntad del Estado de la unión, al ceder competencias estableciendo que aquello que prima es la voluntad del Estado en última estancia: “La primacía opera, por tanto, respecto de competencias cedidas a la Unión por voluntad soberana del Estado y también soberanamente recuperables a través del procedimiento de “retirada voluntaria” previsto en el artículo I-60 del Tratado” (Tribunal Constitucional Español, 2004).

Asimismo, al analizar la DC también se detectan dos cuestiones esenciales en la construcción del organismo y que actúan como elementos articuladores del proceso, que son: 1° *la finalidad institucional de la comunidad*: alcanzar y/o emular un nuevo proceso de independencia⁹ (hecho que se refleja en la referencia continuada al reclamo de adquirir capacidad de acción frente al actor externo); y 2° *el papel de la CELAC*: ejercer como mecanismo de emancipación¹⁰, capaz de articular un empoderamiento que permita adquirir capacidad de acción a la región para lidiar con una acción externa, que es sentida como opresora o, al menos, detectada como “guía” ante la decisión propia¹¹. Es decir, se manifiesta en la DC que la meta perseguida que ejerce de pilar impulsor de la institución es: el lograr dar cabida a un proceso emancipador que persiga la capacitación como región para lograr articular metas propias.

Ante la detección de este posible propósito en la DC se requiere, para entender el sentido de la misma, un ejercicio analítico que desvele cuáles son las metas propias por una parte, y por otra cuál es dicha acción externa que oprime a la misma.

En cuanto a las metas y el cómo alcanzarlas, se detecta en el articulado de la DC que el objetivo principal que se sitúa por encima de otros pareciere ser la promoción del desarrollo social, económico, integral, sustentable, etc... (Art. 2, 6, 16, 18, 25); y que para alcanzar dicho objetivo se requiere la articulación de diversos mecanismos capacitadores por fases, que conducirían a alcanzar la meta.

- Fase 1:** se alcanza un proceso unitario;
- Fase 2:** la región adquirirá mayor peso en el contexto de las RRII;
- Fase 3:** se logrará independencia de acción en la SI;
- Fase 4:** se potenciarán las capacidades propias;
- Fase 5:** se armonizan las capacidades;
- Fase 6:** existirá la posibilidad de regular el impacto de la acción externa en la región;

⁹ “Estamos ante la II independencia”. Fue éste el modo con el que se refirió al proceso el presidente de Uruguay José Mujica durante la reunión de Caracas en diciembre de 2011. Segunda Plenaria Presidencial de la Cumbre de la CELAC. Véase Parte I de la Conferencia en: <http://www.youtube.com/watch?v=th1TqCyWNqI>; Minuto (2.00.40- 2.20.00) (Consulta realizada el 23 de junio de 2013).

¹⁰ Emancipar: “1. tr. Libertar de la patria potestad, de la tutela o de la servidumbre; 2. prnl. Liberarse de cualquier clase de subordinación o dependencia” RAE <http://www.rae.es/> (Consulta realizada el 23 de enero de 2012).

¹¹ En este sentido, se encuentra como la DC está llena de referencias a libertad, a Simón Bolívar el independentista, al Bicentenario, etc... y todo ello encuentra su fuente de motivación en un segundo factor: el convencimiento manifiesto de que la “...unidad e integración política, económica, social y cultural de América Latina y el Caribe...” es necesaria, y permitirá alcanzar altas cuotas de la meta regional: el desarrollo.

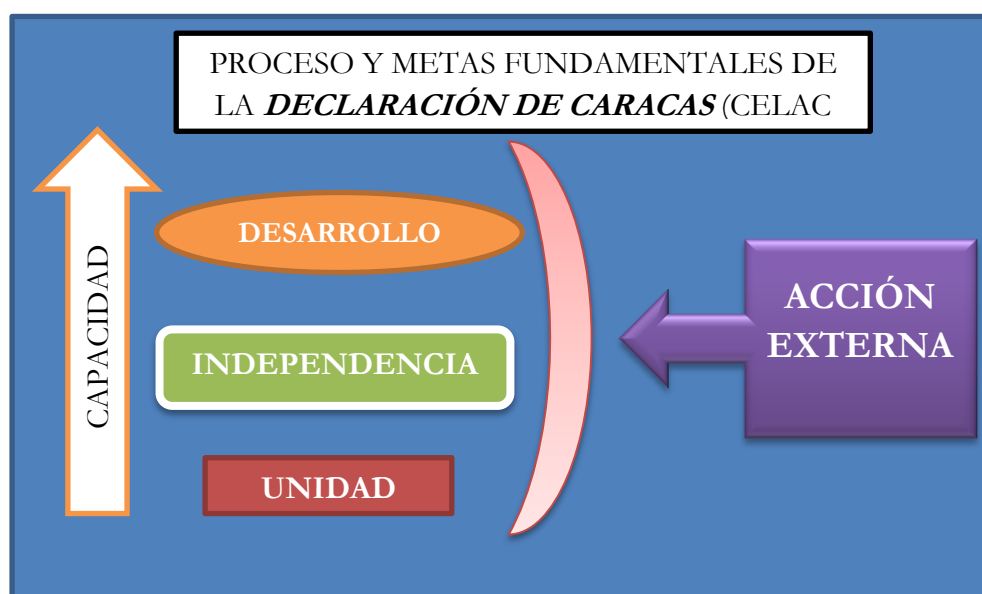
Fase 7: objetivo: la región estará capacitada para alcanzar el desarrollo “propio”.

**El esquema refleja una primera interpretación sobre el contenido presente en la Declaración de Caracas.*

En la interpretación del esquema de fases indicado se observa que éste opera sobre una hipótesis que se sustenta en las siguientes premisas: 1ª) la unidad mejora la capacidad de acción; 2ª) para unirse hay que ceder competencias; 3ª) el desarrollo es el objetivo primordial; y 4ª) la acción externa limita, en cierto modo, los objetivos de desarrollo.

En cuanto a la acción externa indicada, la ausencia de concreción en el significado de los términos que se maneja en la DC implica el que dicha acción pueda abarcar una infinidad de elementos y campos. Lo que plantea una primera cuestión relevante a la hora de entender el objetivo al que aspira la comunidad y sus miembros: ¿a qué acción se refieren los diferentes agentes en la DC cuando se hace referencia a “la acción externa”?

Ilustración 1: Interpretación del proceso: metas inscritas en la Declaración de Caracas (2011).



Fuente: De elaboración propia a partir de la Declaración de Caracas de 2011: (CELAC, 2011)

Ante la presencia de esta incógnita, el determinar los vínculos que unen los conceptos que aparecen en la DC como elementos guía de la comunidad: desarrollo, soberanía, unidad e integración- observándolos como hechos transversales de un proceso histórico particular en la región en sus relaciones *intra e inter*-, ha permitido vislumbrar algunos indicios de cuál podría ser la acción externa que podría incidir y preocupar mayoritariamente a los Estados de ALC en la actualidad; actuar como eje que articula una motivación con tanta

vehemencia¹² por parte de los miembros allí presentes en la DC; y ejercer como el factor que impide la consecución del objetivo principal: el desarrollo. Este leve ejercicio de deshilachamiento de los mecanismos intrínsecos en el objetivo de la CELAC, revela ciertas evidencias que podrían dar inicio a una investigación más profunda.

Deshilachando aquello entendido por desarrollo se detectan ciertas evidencias que revelan cuestiones relevantes:

- 1- **El término desarrollo:** en principio, los inicios conceptuales datan desde que en la declaración de investidura del presidente de los EEUU Harry S. Truman tras el final de la Segunda Guerra Mundial (IIGM), éste incluyese una categorización de los Estados a nivel global dividiendo entre Estados desarrollados y Estados en vías de desarrollo o subdesarrollados¹³.

Dijo así Truman:

“Debemos embarcarnos en un nuevo programa para hacer que los beneficios de nuestros avances científicos y el progreso técnico sirvan para la mejora y el crecimiento de las áreas subdesarrolladas. Creo que deberíamos poner a disposición de los amantes de la paz los beneficios de nuestro almacén de conocimientos técnicos, **para ayudarles a darse cuenta de sus aspiraciones para una mejor vida**, y en cooperación con otras naciones **deberíamos fomentar la inversión de capital en áreas necesitadas de desarrollo**” (Truman, 1961, pág. 20)[Negrita propia].

- 2- **El discurso desvela el significado “básico” del desarrollo.** Este fue descrito como el camino a cubrir por unos(los subdesarrollados), para alcanzar a otros (los desarrollados), con el objetivo de homogenizar la SI. Es decir, el desarrollo se significaría en el grado que se produjese una reducción de asimetrías, diferencias y desigualdades entre unos Estados y otros.
- 3- **La declaración indica qué mecanismos hay que ejecutar para lograr eliminar las asimetrías:** trasvasar conocimientos técnicos y científicos a través de un medio que deben practicar ambos subgrupos: los capitales de los Estados desarrollados

¹² Dicho esto en alusión a la pasión con la que se manifestó el hecho en la Conferencia de la CELAC celebrada en Caracas en 2011 por parte de los presidentes allí presentes.

¹³ Si bien hay que mencionar que en los “XIV Puntos de Wilson” (1918) ya, en su punto catorce, se hacía referencia al mismo hecho al indicar lo siguiente: “14. Deberá crearse una Sociedad general de las Naciones en virtud de acuerdos formales, que tenga por objeto ofrecer garantías recíprocas de independencia política y territorial tanto a los pequeños como a los grandes estados”. Esta referencia no obtuvo un gran impacto a nivel internacional, para que se produjese el asentamiento de una diferenciación aceptada por las partes.

deben ser invertidos, y los Estados subdesarrollados o en vías de desarrollo receptorlos. Ambos deben *fomentar la Inversión Extranjera de capitales o Inversión Extranjera Directa* (IED).

En la articulación del plan de mínimos expuesto por el Presidente de los EEUU, se observa la atribución a ciertos esquemas y ligaciones causa-efecto a tener en cuenta por todo Estado que se encontrase en la categoría de subdesarrollado para acceder a la categoría de desarrollado. Este fue el caso de los Estados de ALC¹⁴.

Desde una perspectiva regional, aquello que despierta un mayor interés ante la ambición que manifiesta el objetivo detectado en la DC es, en un principio, el conocer si hubo algún grado de participación en la elaboración del concepto. Puesto que éste determinaba la adopción de un ideario y las consecuentes prácticas ligadas en la política regional.

Resulta que la elaboración del concepto no fue producto de una participación democrática de los Estados, sino que fue elaborado en el exterior sin una consulta previa (Sachs, 1999). Hecho que evidencia claramente la no participación *de facto* en la elaboración del concepto y revela que al poseer el mismo término, junto con el mecanismo para su puesta en práctica, una construcción ideacional ajena a las particularidades del actor receptor de desarrollo, su puesta en práctica se encuentra con unas premisas sociales no propias a la zona de aplicación¹⁵. Es decir, el mecanismo resulta de un esquema que responde a premisas ajenas, en donde ejecutar acciones de desarrollo “propio” requiere de una acción externa: la IED.

En cierto sentido, el esquema se presentaba como un proceso de ejecución de un desarrollo externo con herramientas externas en una sociedad propia (dos elementos externos: la idea de desarrollo y el capital para la práctica de la IED; y uno interno: la sociedad receptora). Proyecto de difícil articulación a priori.

Ante los mecanismos y esquemas indicados, la pregunta que se sitúa como incógnita principal tras desvelar en qué consistía el mecanismo desarrollista en sus orígenes desde la perspectiva de la nueva comunidad, la CELAC, es: *¿es la IED una de las acciones externas que indica la DC como determinantes y que motiva el proceso en ALC de construcción unitaria- de lo que*

¹⁴ La clasificación atendió a términos puramente económicos. El Comité de Expertos de las NNUU definió subdesarrollo como: “Aquel (Estado) en el que la renta per cápita es baja comparada con la de Estados Unidos, Canadá, Australia y Europa Occidental” (Hoselitz, 1962, pág. 3).

¹⁵ Esto ha sido indicado por la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo (2005), y en las siguientes (Accra (2008) y Busan (2011)), evidenciando un reconocimiento implícito de la existencia de direccionalidad en las prácticas desarrollistas ejecutadas por los países miembros de la OCDE.

Francisco Rojas Aravena denomina soberanía regional-, o al menos de transformación de las relaciones internas y con el exterior de la región en cuestiones de soberanía?

Ante la aparición de este dilema, en un primer ejercicio de aproximación para detectar si ésta práctica posee una relevancia en la actualidad, se han hallado cinco datos esclarecedores sobre el papel ejercido por esta práctica: 1º) *primer dato*, la IED presenta el mayor porcentaje de crecimiento en los últimos 30 años de las actividades internacionales, ya que ha crecido un 11586% entre 1971 y 2010¹⁶; 2º) *segundo dato*, la IED se ha situado como una de las prácticas que mueve más capital en el mundo; 3º) *tercer dato*, en los datos específicos que presenta ALC, la IED refleja un gran aumento desde los años 90, siendo en 2010 la fecha en la que logró situarse al frente de las regiones en desarrollo en cuanto a la recepción de IED tras la crisis de 2008¹⁷; 4º) *cuarto dato*, en términos comparativos el crecimiento de la IED respecto a la deuda- que ha sido el factor con mayor relevancia durante décadas-, es claramente indicador de la importancia que va ganando la primera en la región (aunque en volumen todavía la deuda siga siendo claramente mayor, y se multiplicase por 165 entre 1970 y 2012 (Gottiniaux, Daniel Munevar, & Toussaint, 2015))¹⁸; 5º) *quinto dato*, la IED ha sido promovida como una práctica apolítica, mientras que la deuda o Inversión Extranjera Indirecta(IEI) contiene una carga de injerencia al ser un préstamo entre dos agentes que poseen su particular interés¹⁹.

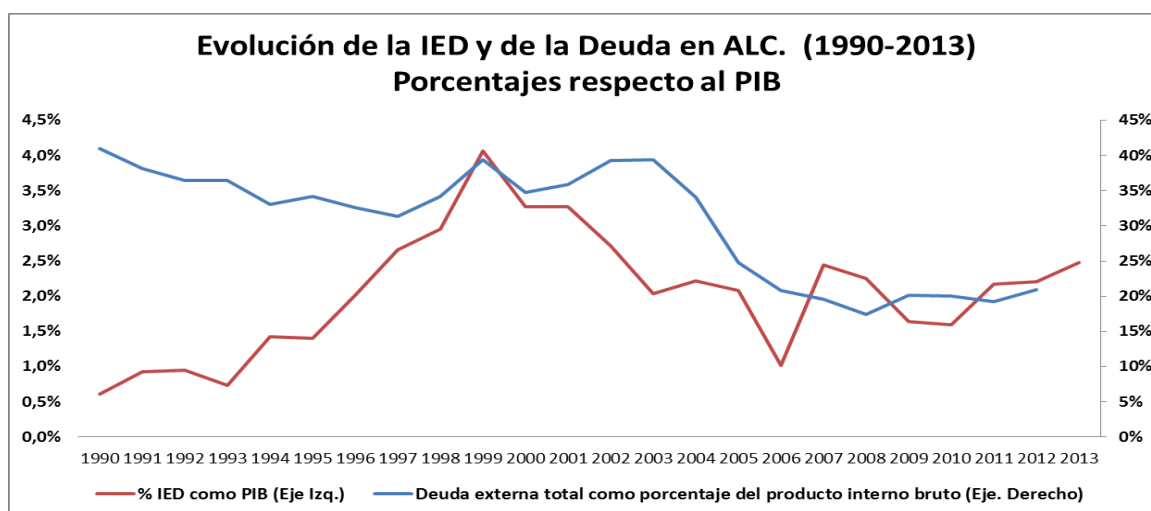
¹⁶ Los datos aquí reflejados han sido obtenidos de las bases disponibles en el Banco Mundial. www.databank.worldbank.org/data/home.aspx (Consulta realizada el 20 de abril de 2012).

¹⁷ La CEPAL afirma que ALC fue líder mundial en términos porcentuales con un aumento del 40% más en IED, en el año posterior al inicio de la crisis (CEPAL, 2011).

¹⁸ Información relevante sobre el impacto de la deuda se puede obtener en los informes que realiza anualmente el Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM). Informes en línea en: <http://cadtm.org/>

¹⁹ A este respecto basta con revisar algunos de los informes que realizan los principales organismos internacionales. Véanse entre otros: OMC (2001); OCDE (2002); NNUU (2010); OMC (2001); UNCTAD (2008).

Gráfica 1: Evolución de la IED y de la deuda en ALC (1990-2013).



Fuente: De elaboración propia a partir de datos CEPALSTAST. http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Portada.asp?idioma=e . (Consulta realizada el 22 de agosto de 2014).

En un principio, los datos revelan y constatan que el papel ejercido por la IED en el contexto internacional le sitúa como el elemento que podría, por capacidad, ser el instrumento externo al que se refiere la DC cuando alude a la acción externa que incide en las prácticas de la región de ALC. Pero cabe cuestionarse: ¿es o no es la IED la acción externa que motiva la constitución de la CELAC?; o si no es la única ¿en qué grado infliere la IED en la articulación de esta entidad?

Estas cuestiones despiertan un interés investigador supremo. Por una parte, se dibuja un esquema en el que a partir de un seguimiento del articulado presente en la DC se detecta aquello que podría ser el objetivo a responder en una **pregunta de investigación** que plantease: *¿qué papel ha ejercido la IED, como práctica, en la construcción de soberanía regional en ALC?*

Cuestión que resulta un desafío apasionante ya que, además de que la IED actúa como mecanismo promotor del desarrollo elaborado en el exterior de la región, es una incógnita desvelar la percepción regional y el papel que han ejercido los diferentes agentes en la elaboración de los objetivos que impulsan su práctica. Y más, teniendo en cuenta que tanto la IED como la constitución de la CELAC comparten objetivo: el desarrollo. Y sin embargo, al ser aquello que se reclama una cuestión de autonomía, de capacidad decisión, de soberanía, es primordial averiguar qué ideas subyacen y podrían estar ocultas, tanto en la

activación de la práctica de la IED cómo en el propio elemento impulsor de la misma: el desarrollo.

2. Marco teórico.

En el proceso de búsqueda de un marco teórico adecuado con el que abordar las cuestiones que despiertan el interés investigador de esta tesis doctoral, se han presentado preguntas de diversa índole en el consciente del autor. Entre ellas, una se encumbra por encima de todas: ¿qué enfoque escoger para lograr reflejar con la mayor claridad posible éste ejercicio de análisis en el que se aborda un concepto tan polémico como es el desarrollo, una cuestión política-económica como la práctica de la IED, y el impacto de ésta variable en la construcción de un concepto político en “transformación constante”²⁰ como es la soberanía?

La elección de un marco teórico que permitiese operar con las tres variables se mostraba como una labor elemental y un primer desafío de cara a elaborar un producto que colme, al menos, las expectativas que al inicio de un proyecto tan pretencioso, como evidencia el planteamiento inicial, se presentaban. Por ello y atendiendo a la pregunta de investigación que da pie a éste escrito, primeramente se divergía entre: 1) escoger un enfoque de análisis histórico que permitiese adentrarse y extraer hechos relevantes de aquellos sucesos que han contenido un mayor impacto en el tema de estudio; 2) dirigir la investigación hacia el uso de un enfoque analítico de carácter cuantitativo que facilitase abordar un tema económico como la IED; 3) o como tercera opción, elegir un enfoque cualitativo que incidiese en el uso de análisis de discurso de aquellos personajes y hechos relevantes y extraer evidencias del suceso analizado, etc... y así sucesivamente, las cuestiones y dudas metodológicas han sido constantes y diversas.

En este particular contexto y tras el consejo de mi Director de Tesis -“Tomás, un poco de razón a la ilusión que contiene esta labor investigadora revela, cuando menos, que la propia dirección que debe tomar la investigación nace de la visión particular que posee el investigador”-, y una vez comprendido que el abordar la labor de realizar una tesis doctoral conlleva, intrínsecamente, un proceso hermenéutico²¹, se optó por tratar de encontrar la

²⁰ Para profundizar sobre la transformación conceptual de la soberanía se recomienda la lectura de Anghie (2005) y Philpott (2001); así como, obviamente, la lectura del Capítulo II de este documento.

²¹ Hermenéutico: “2. f. Arte de interpretar textos y especialmente el de interpretar los textos sagrados; 3. f. Fil. En la filosofía de Hans-Georg Gadamer, teoría de la verdad y el método que expresa la universalización del

metodología para abordar el estudio en la visión particular de la cuestión. Es decir, la metodología iría surgiendo a medida que se revisase la propia pregunta de investigación inicial y título de esta tesis.

Pensando, soñando y mediante un proceso de reflexión continua se repetía la pregunta ¿qué factor es el que da inicio a este proceso investigador? La primera respuesta que se vislumbró fue que la pretensión del estudio es, ante todo, el análisis de un proceso. Por lo tanto, se asumió desde la visión particular – compuesta del conocimiento aprendido y la breve experiencia académica - que la soberanía es un concepto construido y es resultado de un proceso de pactos entre individuos que forman una comunidad. Es decir, que si el poder o capacidad de decisión -como atributos característicos de la soberanía (Schmitt, 2013[1927])- sufre transformación alguna y/o se desplaza vertical u horizontalmente, también está expuesto a sufrir alteraciones continuas la propia concepción de soberanía, ya sea en el modo de atribución del poder a un líder o grupo (vertical) o en los grados de capacidad que posea el grupo o líder en un contexto en el que trate con otros agentes (horizontal).

A partir de este planteamiento, se instauró una especie de premisa de estudio que asumía que la transformación es una constante histórica, en un contexto de RRII tan interconectado como el vivido desde los inicios conceptuales de soberanía, allá por el siglo XVI, hasta la época actual. Asimismo, se era consciente de que cuando se alude a la soberanía no se trata un concepto que ha operado como pilar teórico del debate político en todas las épocas; así como también era notorio que no siempre había existido la configuración política a la cual ha estado ligado el concepto desde la aparición de su definición original: el Estado²².

En consecuencia, por el cruce de caminos entre el conocimiento propio y el trabajo de acercamiento previo al tema de estudio, la mirada que dirigía la investigación determinaba, más y más, la elección de un marco teórico que permitiese abordar un fenómeno tan etéreo como el impacto de la IED en la construcción soberana en un área geográfica que no se corresponde con la figura clásica ligada a la soberanía: un Estado, y por el contrario aborda un territorio regional (ALC)²³, formado por diversos Estados soberanos. Aunque es

fenómeno interpretativo desde la concreta y personal historicidad” R.A.E. www.rae.es (Consulta realizada el 13 abril de 2012).

²² El estudio de este tema será abordado ampliamente a lo largo de esta investigación.

²³ La soberanía ha estado ligada a un espacio geográfico concreto desde su aparición como concepto: el Estado.

pertinente indicar que, contrariamente a las carencias conceptuales que puede presentar el tratar una región²⁴ como ALC, se fue consciente de que ésta sí posee ciertas particularidades comunes con el Estado como son cierta construcción identitaria y el territorio. Aspectos que permiten que el estudio aborde un proceso de asociativo comunitario evidenciado en un territorio no estatal.

En este sentido, al estar la zona de estudio constituida por Estados particulares, la investigación se enfoca a abordar el análisis de un proceso relacional entre Estados, en donde la variable dependiente atiende a un proceso que pertenece, en el sentido estatal, a un marco de análisis de las RRII. Por lo cual el marco teórico debía atender y comprender este factor igualmente, y más, atendiendo al reclamo de autonomía que manifiestan los actores firmantes de la DC.

Una vez establecido que el trabajo de investigación abordaría el análisis de un proceso en construcción dentro de un marco perteneciente a la escuela de RRII, se presentaba necesario encontrar una corriente teórica de esta escuela que permitiese analizar los factores intrínsecos de un proceso en construcción, en donde encajase o pudiese ser establecido un marco operativo con capacidad para medir el impacto de una variable independiente en ese proceso de construcción. E igualmente, la elección de un marco que debía permitir introducir en el mapa conceptual un tercer elemento fundamental que se presenta como articulador de las dos variables: el desarrollo.

Tras este ejercicio reflexivo y una breve revisión de la bibliografía existente sobre las teorías principales de las RRII, la perspectiva constructivista se presentó como el marco adecuado, ya que se ajustaba, en un principio, a los requerimientos del estudio, así como permitía analizar los conceptos que se requerían en primera instancia.

2.1 El porqué de la elección de la perspectiva constructivista.

La primera consulta que influyó en la decisión de escoger como marco teórico para analizar el impacto de la IED en la construcción de soberanía una perspectiva constructivista fue- además de la visión particular sobre la historia- la lectura de la obra de Daniel Philpott, *Revolutions in Sovereignty* (2001). Obra, en la que al analizar las transformaciones vividas en términos de soberanía a lo largo de la historia (límites y capacidades de los Estados),

²⁴ Según la RAE: (1. Aceptación): Porción de territorio determinada por caracteres étnicos o circunstancias especiales de clima, producción, topografía, administración, gobierno, etc.... www.rae.es (Consulta realizada el 22 abril de 2012).

Philpott llega a la conclusión de que: “Las revoluciones en soberanía han sido el resultado de ideas previas sobre justicia y autoridad política. Las revoluciones de ideas conllevan crisis de pluralismo²⁵” ²⁶ (Philpott, 2001, pág. 4). En donde además, mediante un trabajo exhaustivo iconoclástico²⁷, el autor afirma la existencia de una relación clara entre las variable señaladas, indicando que las ideas han influido determinantemente en el orden internacional que se ha ido estableciendo en diferentes épocas de la historia. Es decir, afirmando que las ideas determinan las transformaciones en aquello que se entiende por soberanía.

“Las ideas convierten a los oyentes: estos conversos lo acumulan en sus filas; luego ellos demandan un nuevo orden internacional; protestan y presionan y se rebelan para cuestionar ese orden; de esto emerge una disonancia entre la iconoclasia y el orden existente; un nuevo orden resulta”²⁸ (Philpott, 2001, pág. 4).

Situando en su discurso al factor ideas como el determinante impulsor de los cambios en la soberanía, Philpott afirma- a través de la realización de una primera reflexión que aborda un amplio periodo²⁹- que en Europa el concepto de soberanía ha sufrido alteraciones que, ya sean por las facultades otorgadas a las instancias centrales -política económica, ciudadana, etc... como parte del proceso de integración de la UE-, desafían el concepto clásico de soberanía en los atributos referidos al territorio, a la economía o/y la política (Philpott, 2001, págs. 46-72). Lo cual, según Philpott, se ha debido principalmente al efecto que han tenido las ideas, ya fuesen estas ideas reflejo de cuestiones de paz, de justicia o de progreso. Aunque asimismo indica que en las variaciones sufridas en términos de soberanía, tanto en la configuración de la estructura internacional como en la configuración de los Estados, el elemento que ha motivado grandes revoluciones ha sido la idea de justicia. Lo que se refleja, según Philpott, tan solo fijando la atención en dos procesos que repercutieron en el cambio de estructura mundial: 1) La firma de la Paz de Westfalia, donde

²⁵ **Pluralismo** según la RAE es: “Sistema por el cual se acepta o reconoce la pluralidad de doctrinas o posiciones”. www.rae.es (Consulta realizada el 13 de abril 2012).

²⁶ Traducción propia a partir de: “Revolutions in sovereignty result from prior in ideas about justice and political authority. What revolutions in ideas bring are crises of pluralism” (Philpott, 2001, pág. 4).

²⁷ **Iconoclasta** según la RAE: “Se dice de quien niega y rechaza la merecida autoridad de maestros, normas y modelos”. www.rae.es (Consulta realizada el 13 abril de 2012).

²⁸ Traducción propia a partir de “The ideas convert hearers; these converts amass their ranks; they then demand new international orders; they protest and lobby and rebel to bring about these orders; there emerges a social dissonance between the iconoclasm and the existing order; a new order results” (Philpott, 2001, pág. 4).

²⁹ En este sentido, el autor señala que las alteraciones en el concepto y en aquellos atributos propios del concepto han variado en un alto grado desde la firma de la Paz de Westfalia en 1648 hasta la constitución de la Unión Europea (UE).

las ideas protestantes influyeron en el cambio de configuración de territorios feudales con reinos a Estados; y 2) los procesos de descolonización, en donde las ideas sobre derechos de autodeterminación, tolerancia, sobre la configuración de los territorios en Estados, la autonomía política de las gentes, etc...determinaron que se pasase de un mundo configurado en Estados con colonias a otro en el que se convertían territorios sin Estado en Estados (Philpott, 2001). Hechos que evidencian que la transformación no se ha debido únicamente a cuestiones de poder armamentístico, económico o de algún factor de un territorio particular, más bien, el factor que sostiene Philpott, es que las ideas “morales” han influido determinantemente en las transformaciones del contexto internacional.

“Las ideas morales de protestantes, nacionalistas y demócratas liberales, acerca de venerar derechos, auto-determinación, igualdad racial y derechos humanos no son sólo una evaluación de lo que ahora nosotros llamamos “filosofía política”, sino son los efectos en la creación de nueva autoridad”³⁰ (Philpott, 2001, pág. 6).

El papel que ejercen las ideas en el desarrollo de la historia es una cuestión que ha promovido y promueve un gran debate dentro la escuela de las RRII: ¿Qué papel han jugado?; ¿han sido determinantes o por lo contrario simplemente han sido disfraces usados por actores por obtener beneficios particulares?; ¿van las ideas e intereses de la mano en el discurso político? etc... son cuestiones fundamentales del debate entre las escuelas que se sitúan o del lado utilitarista³¹ de la historia, en concordancia con los contractualistas hobbesianos o los idealistas representados por la ética de Kant³².

En este sentido, es evidente que pocos autores entran a cuestionar el papel determinante de las ideas cuando hacen referencia a las políticas domésticas de un Estado, y no dudan en afirmar que las ideas determinan aspectos como: la configuración interna del Estado, los derechos de los ciudadanos, la relación Estado-ciudadano, etc.... E incluso se encuentra algún ejemplo como el Estado de “EEUU” en donde las *ideas* son el factor determinante sobre el que se asientan diferentes cuestiones de legalidad interna, ya que varía “enormemente” su significado en espacios internos como resultado de diferencias en torno

³⁰ Traducción propia a partir de: “The moral ideas of Protestants, nationalists, and liberal democrats, about rights to worship, self-determination, racial equality, and human rights are not just assessments that we now call “political philosophy,” but are effectual in creating new authority” (Philpott, 2001, pág. 6).

³¹ Este sentido se encuentra en los postulados de Jhon Stuart Mill, el cual afirmaba que el placer o felicidad general se mide a partir del mayor bien para el mayor número (época en la que el racionalismo se asentaba en la sociedad). Consultar Mill (1970).

³² La ética de Kant distingue entre dos tipos: a) éticas materiales: aquellas éticas en las que la bondad tendrá relación con aquello que se considere bien común; b) las éticas formales: aquellas que deben estar vacías del componente material y no dice el qué hacer, sino el cómo (Kant, 2003).

a la idea de justicia³³. Es en este aspecto en el que se detecta que, ante la incógnita de por qué si las *ideas* son determinantes en cuestiones domésticas, si se desplaza esta visión de la comunidad estatal a una Comunidad Internacional (CI) surge la pregunta: ¿cómo no van a influir las ideas en la configuración de las RRII?, y más cuando se analiza la creación de una nueva comunidad.

Indagando al respecto, se observa que si se dirige la atención hacia la escuela de las RRII se detecta que las teorías que se han adueñado primordialmente del campo de las RRII (el realismo y el liberalismo), han asumido ciertas verdades como objetivas, sobre las que se ha apoyado el ejercicio de teorización posterior. Esta asunción se ha significado al divulgar el conocimiento, ya que en este ejercicio las premisas difundidas por estas escuelas no han contado con un análisis crítico sobre sus afirmaciones ontológicamente, instaurando en el contexto internacional su idea particular sobre cómo operan las RRII y difundiendo dichas premisas como verdades “objetivas” e incuestionables. Por lo que la afirmación de que las RRII eran determinadas, básicamente, por las condiciones materiales de los Estados, que actuaban acordes a una racionalidad conductista basada en medios y fines a la hora de establecer relaciones con otros Estados³⁴, se instauró como pilar teórico del que partían las teorizaciones epistemológicas posteriores (Checkel, 1998; Wendt, 2005; Kubáľková, Onuf, & Kowert, 1998; Ruggie, 1998).

Los constructivistas cuestionan la idea supuestamente “objetiva” de realistas y liberales- en sus posturas clásicas y neo³⁵-, en donde se afirma que las RRII se producen a partir de una “realidad” dentro de un contexto determinado por varios factores: a) una estructura internacional “fija”; b) en la que las alteraciones son puras excepciones; c) en donde la identidad y los intereses se mantienen constantes; d) y los Estados operan de acuerdo a una racionalidad en base a lo material que determina su rol internacional, sus alianzas y posibilidades. Ante la cual, la tesis principal de la escuela constructivista³⁶ señala que el

³³ Este hecho se revela de forma manifiesta, y quizás con este ejemplo burdo, al observar la aplicación de una medida penal como es la pena de muerte. Pena que es ejecutada en unos Estados y otros no de acuerdo a su formación y competencias atribuidas a cada Estado.

³⁴ Por conductista se entiende: Estímulo de elección (causa)-búsqueda de justificación (efecto). RAE <http://lema.rae.es> (Consulta realizada el 13/04/2013).

³⁵ Para explorar la diferentes teorías y postulados revisar la siguiente lista: Liberalismo en Kegley & Wittkopf (2004, págs. 29-58); Realismo en Carr E. H. (1989), Guzzini, (1998) y Morgentahu (1986); Neo-realismo en Waltz (1979, págs. 88-97); y Neo- liberales en Keohane & Nye (1988).

³⁶ Es preciso indicar la existencia de dos escuelas principales que abordan el estudio del constructivismo: la escuela americana y la escuela europea. Éstas, teniendo en común la idea principal de que lo social es lo que contiene mayor importancia en la composición de la política mundial, divergen en que: 1) mientras la escuela americana centra su estudio en la relación existente y el efecto retro-alimentador que ocurre entre los mecanismos y las relaciones entre agentes, normas, intereses e identidad(Alexander Wendt, Nicholas Onuf,

sistema internacional no está dado, sino que está construido socialmente y es un reflejo de los modos de interacción que realizan los seres humanos. Señalando que, en ese sentido, no es válido asumir la “realidad” dada por los teóricos de las escuelas clásicas, sino que el que el hecho de que un sistema haya operado del modo que reflejan los realistas y liberales no significa que siempre se opere de ese modo (Wendt, 2005; Ruggie, 1998; Pouliot, 2004).

En todo caso hay que señalar que el constructivismo no trata de rivalizar ni con liberales ni con realistas frontalmente, sino que se eleva sobre sus teorías rebatiendo la objetividad de aquellos pilares sobre los que estas teorías son constituidas. Es decir, el debate se centra en el carácter ontológico de las perspectivas (Wendt, 1999, p. 35; Checkel, 1998; Ruggie, 1998; Kubáľková, Onuf, & Kowert, 1998).

La fricción principal con las teorías clásicas se encuentra en las premisas e ideas asumidas como “verdad absoluta”. Es decir, cuestionan la concepción que afirma “cómo es” la realidad, más que un aspecto epistemológico de analizar la realidad (saber si se puede o no conocer). Principal cuestión por la cual “...los constructivistas **no niegan una explicación científica o causal** y la disputa con la corriente principal [*mainstream* racionalista] es ontológica, no epistemológica”³⁷ [**Negrita propia**]. Afirmando que “...la epistemología no ha sido el tema...” y que “...la ontología es la cuestión”³⁸. Por lo que el constructivismo no es una teoría en su sentido clásico. Más bien se debe señalar a ésta como una meta-teoría (Reus-Smit, 2012; Checkel, 1998).

En todo caso, a lo largo de la historia de las RRII, tanto las teorías realistas como las liberales y sus herederas, han construido sus postulados negando el desarrollo de la historia social como elemento articulador de los procesos. Ya que ante un suceso que transformase el orden internacional, éste no pasaba a ser analizado como un hecho de transformación histórico social continuo de carácter endógeno, sino que era entendido como una anomalía

Jhon Gerard Ruggie, Peter Katzenstein o Marta Finnemore); b) la escuela europea se centra en el rol desempeñado por el lenguaje, las construcciones lingüísticas y discursos sociales en la construcción de la realidad social (Friedrich Kratochwil, Ted Hopf; Reus-Schmitt; Fierke; François Debrix). Una vez dicho esto, señalar que otra de las particularidades que diferencian a las escuelas es la finalidad de sus trabajos. Mientras la europea podría ser tildada de post-positivista, ya que centra sus estudios en la explicación de los cambios en la identidad a partir de los tipos que han sido creados en la primera fase, es decir, mediante el uso de una metodología inductiva; la americana se caracteriza por alinearse generalmente dentro del positivismo, puesto que los autores están adscritos a la discusión mediante el uso del método hipotético-deductivo analizando mecanismos y relaciones causa-efecto entre los agentes, normas, intereses e identidad (Checkel, 2008, pág. 72).

³⁷ Traducción propia a partir de: “...constructivists do **not reject science or causal explanation**; their quarrel with mainstream **theories is ontological, not epistemological**” (Checkel, 1998, pág. 327)

³⁸ Traducción propia a partir de: “...epistemology (how do we know what we know?) Was not an issue” (Kubáľková, Onuf, & Kowert, 1998, pág. 13)

en la estructura (Agnew, 2005; Ruggie, 1998). Es decir, estas teorías han tratado los cambios estructurales como excepciones dentro de un sistema estable. Ante lo que los constructivistas se postulan contrariamente, afirmando que la sociedad si es el elemento articulador de las transformaciones estructurales a lo largo del tiempo³⁹ (Onuf, 1998; Pouliot, 2004; Searle, 1995).

2.2 La meta-teoría frente a la “realidad objetiva” en las Relaciones Internacionales: Ideas, identidades e intereses.

Como se ha ido señalando, los constructivistas cuestionan el elemento común existente en el debate entre las escuelas “neo-realista” y “neo-liberal”, afirmando que las dos teorías- y en general las anteriores y derivadas de las mismas - asumen una concepción del mundo mayoritariamente conductista, puesto que han basado sus postulados en la consideración de que en el ejercicio de interacción entre los Estados cambian los comportamientos pero no las identidades e intereses (Wendt, 2005; Checkel, 1998; Wendt, 1999). Postulado claramente racionalista⁴⁰ que es rebatido por la perspectiva constructivista, afirmando que las identidades e intereses no se pueden entender como elementos permanentes e inamovibles, y éstos pueden cambiar o no cambiar (Zehfuss, 2002; Wendt, 1999; Ruggie, 1998).

El hecho de indicar que las ideas con las que operan las escuelas racionalistas parten de preconcepciones dadas y asumidas como hechos incuestionables, permite visualizar que la elaboración de diversos postulados se constituye y tiene origen en ideas previas (premisas) que ejercen de pilares argumentales y actúan como limitadores del análisis, ya que determinan los parámetros de estudio. Y por lo tanto estas premisas acotan el rango sobre el que el ejercicio analítico obtendrá un resultado. Lo cual no hará que sea invalido el resultado que se obtenga, sino que éste estará predeterminado por aquella idea preconcebida sobre la “realidad” (Ruggie, 1998; Wendt, 2005).

A este respecto, indica uno de los “padres fundadores del constructivismo aplicado a las RRII” Alexander Went (1999,2005), que las teorías del llamado *mainstream* se construyen asumiendo como inmutables las siguientes premisas:

³⁹ En este sentido afirma Vincent Pouliot (2004) que aunque existan diferentes visiones constructivistas caracterizadas por ser más críticas o convencionales, más liberales o realistas, etc... todos los autores coinciden en que los hechos sociales son la esencia del constructivismo (Pouliot, 2004, pág. 320).

⁴⁰ “Los modelos conductistas y racionalistas del hombre y de las instituciones comparten la herencia intelectual del individualismo materialista de Hobbes, Locke y Bentham” (Cita número 3 en Wendt (2005, pág. 36).

- a) **el estado de anarquía determina la toma de decisiones de manera directa.** Hecho por el cual se asume la existencia de un sistema anárquico internacional en el que existe una ausencia de respaldo, o asistencia externa que regule la interacción (neo-realistas);
- b) **los agentes⁴¹ se encuentran en una situación de soledad.** A partir de esa percepción se ven forzados a actuar de manera “egoísta”⁴² adoptando decisiones que beneficien su posición⁴³;
- c) **un sistema que por “naturaleza” se muestra competitivo.** De modo, que los agentes/actores (Estados) se inclinan por adoptar una práctica política de autoayuda (*self-help*), en busca de asegurar su beneficio particular;
- d) **en un contexto en el que en las relaciones prima el interés de objetivos materiales.** Supeditando los pactos de cuestiones ideológicas a las posibilidades de obtener un beneficio material.

La asunción de estas premisas, que constituyen la base sobre la que los racionalistas construyen sus teorías, es criticada por los constructivistas, afirmando que el planteamiento ontológico expuesto por el *mainstream* describe implícitamente una reacción futura de los actores, generalizando su toma de decisiones en base a un postulado ideacional concreto que determina la acción futura. Por lo que la idea es replicada por los constructivistas afirmando que el efecto predicho puede que suceda o puede que no (Wendt, 1999; Searle, 1995).

Indica Wendt (1999,2005) que los constructivistas no pretenden cuestionar la existencia de un sistema anárquico de Estados soberanos en las RRII, estos dudan de las prácticas ejecutadas a partir de esa premisa. E incluso no negando la existencia del estado anárquico, indican que éste puede que promueva la constitución de una práctica política competitiva o puede que no, y afirman que la decisión que se adopte por los Estados, a este respecto, estará construida a partir de motivaciones de otro tipo más allá del material exclusivamente. A partir de esta deducción Went se plantea una pregunta que pretende desenmascarar la ontología asumida por el *mainstream*: ¿actúa un Estado de igual manera con Estados amigos que con enemigos en función de un interés material? Indicando que si la respuesta fuese

⁴¹ Cuando Wendt cita a agentes en su obra alude habitualmente a los Estados.

⁴² En este aspecto los liberales aceptan la constitución de procesos estructurales cooperativos, pero siempre bajo un pensamiento de autoayuda (Wendt, 2005).

⁴³ La toma de decisiones podrá ser operada de modo particular (realistas) o a través de instituciones (liberales institucionales).

negativa en algún caso, se evidenciaría una relación no sujeta a, solamente, el componente de interés material indicado.

Si bien es verdad que en el debate acerca de las RRII han primado las perspectivas realistas y liberales(o neo-)- operando con postulados racionalistas bajo un prisma de elección racional (*rational choice*) y construyendo teoría sobre la determinación ideológica que asumía que las condiciones materiales se imponen en la toma de decisiones a otros factores-, ya que los agentes actúan de un modo “racional” guiados por un sentido *homo economicus* persiguiendo sus intereses y objetivos de un modo utilitarista (Checkel, 1998; Ruggie, 1998), en donde el mundo social es visto como un “simple” reflejo de las prácticas (Pouliot, 2004, pág. 330)), los constructivistas centran su argumentación en rebatir la esencia de la teoría. Afirman que el planteamiento es de corte positivista- por entender el mundo como dado-, en el que la “realidad” no tiene por qué darse en los términos que la corriente del *rational choice* afirma. Y si bien los teóricos constructivistas no niegan que el factor material posea una gran relevancia en términos relacionales, indican que éste no es determinante al cien por cien, puesto que éste también contiene su significado representativo y este hecho actuará como parte del límite que se instituya socialmente (Zehfuss, 2002).

Es en este sentido en el que Wendt y otros constructivistas⁴⁴ afirman que el mundo social es una construcción a partir de un contexto social determinado, en el que las identidades y los intereses son endógenos y susceptibles de transformación. Por lo que el individuo se muestra más como un *homo sociologicus* que un *homo economicus* como afirma el *mainstream* (Wendt, 2005; Wendt, 1999; Ruggie, 1998; Checkel, 1998).

En todo caso, queda evidenciado que los constructivistas afirman que el ser social no elimina de su decisión la variable material y no niegan su importancia (Checkel, 1998; Wendt, 1999; Ruggie, 1998; Onuf, 1998). Nada más lejos de mantener esa postura, diversos autores afirman que sí existe una estructura material que constriñe a los agentes en la toma de decisiones, pero que estas decisiones están compuestas por construcciones ideacionales que encuentran su origen en la práctica social entre agentes y estructuras⁴⁵ (Ruggie, 1998; Wendt, 2005; Reus-Smit, 2012). En donde el impacto entre las estructuras sociales y/o los agentes es mutuo (Onuf, 1998).

⁴⁴ Véanse a este respecto Pouliot (2004); Checkel (1998); Onuf (1998); Ruggie (1998); o Reus-Smit (2012).

⁴⁵ Según Alexander Wendt: el estado de anarquía y la distribución de poder componen la estructura (Wendt, 2005).

En definitiva, el impacto de las estructuras se significa al contener por una parte la significación de la identidad social; y por otra al actuar como condicionante de las posibilidades de los agentes. Sin estas estructuras los agentes pierden los pilares en los que basan su identidad, puesto que los agentes no existen como tales fuera de su contexto social y no son reconocidos fuera de las estructuras de significación colectiva en el que han aprendido a ser. Espacios en donde el papel de los agentes es relevante e influye en las estructuras, ya que éstas están construidas a partir de la interacción entre agentes y como resultado de un proceso. Es en este sentido en el que la presencia de la intersubjetividad entre los aspectos cognitivos de los actores – los cuales crean identidad – es necesaria para que se pueda articular una reproducción de las interacciones. Por lo que el lugar en donde se produce la interacción entre agentes es aquel en el que emergen los espacios que posibilitan que se reproduzcan o se creen nuevas estructuras sociales (Ruggie, 1998, pág. 99; Onuf, 1998; Reus-Smit, 2012).

Por otra parte, el ejercicio de observar la estructura material y su capacidad de constreñir la acción contenida en las estructuras ideacionales- o como Wendt lo denomina los *límites externos de factibilidad*-, será aquel que indicará las capacidades de los Estados en el sentido que señala Christian Reus-Smith (2012). Al afirmar que serán los límites materiales los que medirán las capacidades adquiridas en cierto modo, puesto que serán aquellas que permitirán ejecutar o no acciones o prácticas. Pero, incidiendo en lo dicho, se debe señalar que serán ejecutadas aquellas prácticas que estén contenidas en las ideas, creencias y valores intersubjetivos (Reus-Smit, 2012; Zehfuss, 2002).

El constructivismo reconoce que las decisiones de los agentes estarán limitadas por las estructuras materiales por una parte, así como por las ideas creencias y valores intersubjetivos presentes en las estructuras, ya que serán ambas las que determinen la acción a partir de un contexto en el que los agentes podrán ejecutar sus ideas. Lo que evidencia que los teóricos constructivistas sí otorgan importancia a lo material, pero siempre entendiendo que éste posee una relación intrínseca con las ideas y que el cómo se desarrollen las posibilidades que otorgue lo material estará determinado ineludiblemente por las ideas.⁴⁶

⁴⁶ Según Reus-Smit (2012): “Esto se debe, por una parte, a que estos fenómenos constituyen las identidades sociales y los intereses de los agentes políticos y, por otra, a que es a través de ideas, creencias y valores que los actores dotan de sentido a las estructuras materiales” (Reus-Smit, 2012, pág. 74).

A raíz de lo indicado es evidente que la perspectiva constructivista no niega la capacidad de constreñir de las posibilidades materiales y, más bien, sostiene que los proyectos ideacionales sí poseen límites determinados por las estructuras materiales y las estructuras intersubjetivas. E indican que, aunque se hayan establecido estos límites como parte de la estructura, la existencia y aceptación de las estructuras no significa un sometimiento a ellas. Es decir, que en caso de aceptar una estructura y estar dentro de la misma, la labor de determinar el cómo o qué acción permita, potencie, adquiera o posea la capacidad para alterar las estructuras, se mostrará determinante en la labor de los agentes para lograr articular la decisión particular en un contexto en el que éstos no sean relevantes, si los actos sociales que constituyen la actividad entre agentes es el resultado de lo que los agentes “relevantes” hayan acordado que son (Ruggie, 1998, pág. 12).

Quizás, ante esta cuestión que se presenta, sea útil rescatar el postulado que sostiene la teoría crítica (reflectivista) de la RRII de Jürgen Habermas⁴⁷, y ayude al lector a comprender la importancia de articular las capacidades desde el interior de la estructura.

Habermas afirma que es necesario un proceso capacitador de cambio una vez asimilados los intereses cognitivos técnicos y prácticos de la estructura en la que se encuentra el agente, ya que estos intereses son proporcionados por las estructuras como parte del conocimiento intersubjetivo. Una vez realizado el proceso señalado, será cuando se creen las condiciones que permitan que dé la posibilidad de desarrollar los intereses cognitivos emancipatorios por parte de los agentes, y éstos estarán capacitados para articular un proceso de construcción de un nuevo orden social que permita la alteración de las estructuras intersubjetivas.

⁴⁷ Apunta Habermas que el conocimiento posee tres tipos diferentes de fundamentos: a) los intereses cognitivos técnicos, los cuales buscan la satisfacción de las necesidades materiales a partir del desarrollo de ciencias empírico-análíticas; b) los intereses cognitivos prácticos que “...mantienen una referencia latente del saber teórico a la acción más allá de la transformación de opiniones en proposiciones teóricas” (Habermas, 1990, pág. 324); y c) el interés cognoscitivo emancipatorio y la destrucción de los pseudoapriori. Ante lo cual afirma Habermas lo siguiente:

“Mientras que el interés cognoscitivo práctico y el interés cognoscitivo técnico tienen sus bases en estructuras de acción y experiencia profundas (¿invariables?) y están vinculados a los elementos constitutivos de los sistemas sociales, el interés cognoscitivo emancipatorio posee un estatuto derivado. Asegura la conexión del saber teórico con una práctica vivida, es decir, con un «dominio objetual» que no aparece sino bajo las condiciones de una comunicación sistemáticamente deformada y de una represión sólo legitimada en apariencia. Por ello es también derivado el tipo de experiencia y de acción que corresponde a este dominio objetual. La experiencia de la pseudonaturaleza tiene una reflexividad peculiar y se halla entrelazada con la actividad de eliminación de las coerciones pseudonaturales: de la violencia que nace de objetivaciones que no advierto, pero que he engendrado yo mismo, no hago apariencia, hasta el instante en que me doy cuenta cabal de ella analíticamente y elimino una pseudoobjetividad enraizada en motivos inconscientes o intereses reprimidos” (Habermas, 1990, págs. 324-325).

Es decir, estos procesos “emancipatorios” son aquellos que contienen la posibilidad de, una vez realizado el ejercicio cognitivo, crear espacios en donde se adquiriera la capacidad de impactar y reformar la estructura. Puesto que, en el sentido que la postura constructivista afirma que las estructuras sociales no son situaciones dadas y “naturales”, sino que considera a éstas como socialmente construidas, y que si bien se han construido como las conocemos podrían haber sufrido otro tipo de construcción estructural, la posibilidad de haberse desarrollado de otro modo en caso de que el conocimiento ideacional hubiese potenciado otro tipo de composición, ha existido y existe de cara al futuro (Ruggie, 1998). Es por ello que hay que valorar que la construcción ideacional ha sido producida y se produce por un determinado actor, como señala Philpott: “Las gentes determinan sus cánones de memoria de acuerdo con las fuerzas que piensan que son influyentes...”⁴⁸. Por lo que las teorías del *mainstream* podrían haber colonizado en cierto modo el pensamiento grupal (Ruggie, 1998), y hasta que se dé un suceso concreto con capacidad de desfazarlas en algún aspecto no habrá un cambio notable en el modelo ideacional que sustenta la estructura.

Asimismo y como último párrafo de este epígrafe, señalar que igual que los constructivistas no niegan que los intereses motiven y articulen las elecciones, afirman que las identidades son las bases constitutivas de los intereses. En donde éstas no son un aspecto determinado de los agentes en las RRII, ya que existe una variación evidente dependiendo del contexto social en el que se encuentren los agentes, ya sea un campo interno o externo al Estado. Por lo que parece evidente que dependiendo de la identidad social – que es un elemento vivo- surgirán unos u otros intereses.

2.3 Pequeño Mapa conceptual constructivista: Nicholas Onuf.

“Acting in the world means acting on the world” (Onuf, 1998, pág. 69).

En este apartado se pretende adecuar la visión constructivista de un modo que sea útil a este estudio y posibilite abordar el tema en cuestión que lo impulsa: analizar el impacto de una variable independiente: IED; en una variable dependiente: la soberanía; en base al argumento o idea justificador y objetivo de ambas: el desarrollo; en un contexto geográfico determinado (ALC). Con ese objetivo se ha rescatado este pequeño mapa conceptual de análisis que servirá como base de apoyo de las hipótesis y se espera agilice y permita la

⁴⁸ Traducción propia a partir de: “Publics determine their canons of memory according to what forces they think influential” (Philpott, 2001, pág. 5).

comprensión de la perspectiva constructivista mediante la revisión de los principales factores que la componen.

Se ha seleccionado para esta labor la visión del que es considerado como el primer autor que introdujo el término “constructivismo” en las teorías de la RRII: Nicholas Onuf. El cual ha escrito diversas obras y artículos en los que elabora una amplia exposición de la perspectiva constructivista: *World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and International* (1989); *Intervention for the Common Good* (1995); *A constructivist manifesto* (1997) o; *Constructivism: A User's Manual* (1998), entre otros.

A pesar de su extensa obra, lo relevante y factor que motiva la elección de este autor para elaborar este marco teórico es, que aparte de ser considerado uno de los padres del constructivismo en su vertiente internacional con la publicación de *World of Our Making: Rules and Rule in International Relations* (1989), su trabajo *Constructivism: A User's Manual* (1998), ofrece una esquematización explícita de cómo opera la SI que resulta útil como herramienta para abordar el objeto de estudio que pretende analizar esta investigación. Y aunque es preciso señalar que se harán referencias a otros escritos suyos durante la elaboración del marco teórico, éste es el escrito que se ha utilizado de andamiaje principal.

El abordaje y construcción del marco teórico seguirá el siguiente orden: 1º) se explicará el funcionamiento de la sociedad y su papel en la SI según Nicholas Onuf; 2º) se expondrán las herramientas a partir de las que se operativiza la SI de acuerdo a Onuf; y 3º) se indicará la pertinencia de este esquema en el comportamiento de los Estados y en las RRII.

2.3.1 El constructivismo según Nicholas Onuf.

“El constructivismo de Onuf es aplicable no sólo a nivel Estatal, sino a los seres humanos en cualquier dimensión de su actividad social, siendo las relaciones internacionales sólo una, aunque una muy importante entre otras muchas”⁴⁹ (Kubáľková, Onuf, & Kowert, 1998, pág. 52).

El constructivismo según Onuf parte de una premisa a partir de la cual se instituye toda la articulación teórica: el ser humano es social y no sería humano sin la existencia de relaciones sociales. Por lo que, en cualquier análisis que se inscriba dentro de un marco

⁴⁹ Traducción propia a partir de: “Onuf's constructivism is applicable not simply to the level of states, but to humans in any dimension of their social activity, international relations being merely one, albeit an extremely important one, among many” (Kubáľková, Onuf, & Kowert, 1998, pág. 52).

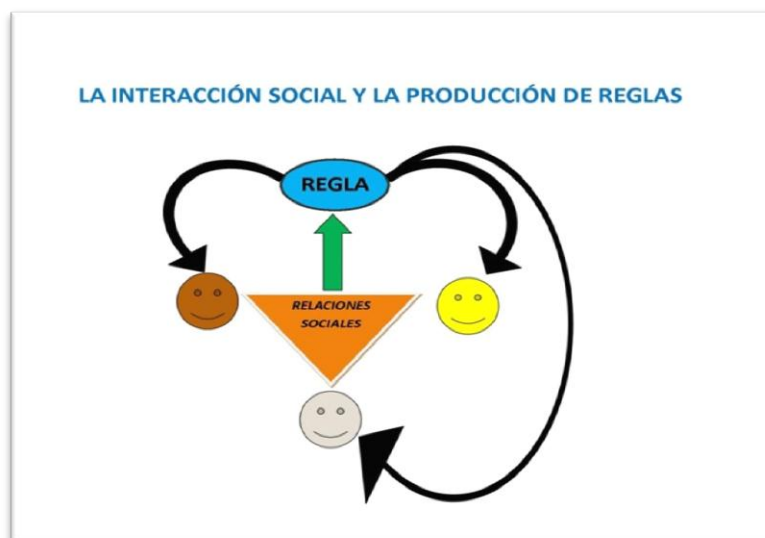
relacional entre humanos, se ha de tener presente que las relaciones sociales inciden de manera determinante en nuestros seres en sí. De forma tal, que la configuración de las relaciones será el efecto de un desarrollo de interacción continua entre la significación de las relaciones sociales y los seres humanos. Procesos ambos que se caracterizan por retroalimentarse continuamente en su configuración, ya que se trata de un proceso dual (Onuf, 1998; Onuf, 1989).

Este proceso es constituido desde el origen a través de acuerdos entre los diferentes individuos que adoptan un mecanismo para articular sus relaciones: la norma o regla⁵⁰. A partir de la instauración de una regla como mecanismo relacional, ésta se sitúa como el primer hecho constitutivo del enlace entre el ser social y la sociedad recíprocamente. Es decir, aunque en origen hubiese dos únicos actores (los individuos), la producción y aceptación de esta regla por los individuos le otorga un papel de fundamental a la misma y la sitúa como otro elemento en donde sólo había dos anteriormente, adquiriendo una capacidad la regla para actuar como determinante en el desempeño de los individuos a partir de su constitución.

⁵⁰ Señalar que, aunque en ciertos sentidos pueda confundirse regla y norma indistintamente, en este trabajo se denominará regla a hechos que en otros textos puedan ser comprendidos o enunciados como normas, pues así lo indica Nicholas Onuf. Puntualizando al respecto en una conferencia reciente sobre esta cuestión, Onuf indicó que la denominación de normas por otros colegas constructivistas en esta teoría viene a ser: "...normas, que son reglas con otro nombre". Traducción propia a partir de: "...norms, which are rules by another name" (Onuf, 2014, págs. 1-2).

Aun dicho esto, acudiendo a la RAE se encuentra que esta institución define regla como: 2. f. Aquello que ha de cumplirse por estar así convenido por una colectividad; y norma: 1. f. Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades. Siendo complicado delimitar los aspectos entre una y otra en la lengua castellana, se ha optado por acudir al diccionario de la lengua inglesa. Este idioma indica que *rule* (regla) es según el *Collins Concise English Dictionary*: 1. Una regulación autoritaria o dirección con respecto a método o procedimiento; 2. El ejercicio del poder público o de control; 3. Una forma o procedimiento habitual; el curso normal de la acción; y *norm* (norma): 1. El nivel medio de acuerdo a partir de un grupo o persona; 2. Un estándar de comportamiento que se requiere, desea o es designada de forma normal. Siendo difícil concretar exactamente, se ha abogado por usar regla, aunque algunos autores al traducir usen norma, puesto que Onuf se refiere al establecimiento de reglas en el trato entre ciudadanos y Estados, y en este contexto se observa implícita la creación de institucionalidad que ejerce un poder o control público como en la 3ª acepción en inglés de regla. Véase al respecto <http://www.collinsdictionary.com/> (Consulta realizada el 08 de febrero de 2014).

Ilustración 2: Producción de reglas de origen en la interacción social.



Fuente: De elaboración propia a partir de (Onuf, *Constructivism: A User's Manual*, 1998).

La regla surgida posee límites implícitos en la constitución de la misma - ya sea esta de carácter social o legal- que son perceptibles al revelar cierta información: a) indica qué comportamiento es el apropiado y aceptado socialmente; y b) señala el cómo se debe actuar como individuos en el contexto social al que se pertenece. En el instante en el que los individuos que han constituido la regla asimilen las cuestiones a y b, la regla habrá pasado a actuar como un modo de conducta o institución.

El hecho de aceptar una regla en una sociedad- sin ser relevante el número de agentes – significa que existe un modelo de conducta que informa sobre: 1) el comportamiento de los otros individuos; y 2) las consecuencias de los actos propios y ajenos. Las acciones dentro del modelo de conducta que sean adoptadas por los individuos constituirán lo que Onuf denomina: prácticas, sigan las reglas o no.

Tanto reglas como prácticas sufrirán el impacto mutuo al producirse su ejecución y, aunque este impacto no tiene porqué producirse en el mismo grado y relevancia, este hecho evidenciará la presencia de un modelo de comportamiento de los individuos o institución, más o menos estable, con intención de asentarse como fijo.

En esta institución se constituye un patrón de comportamiento, en donde reglas y prácticas encuentran el espacio que agiliza el paso de ser individuo a agente. En donde el agente ejerce de individuo y de representante de la idea contenida en sociedad. Hecho que se

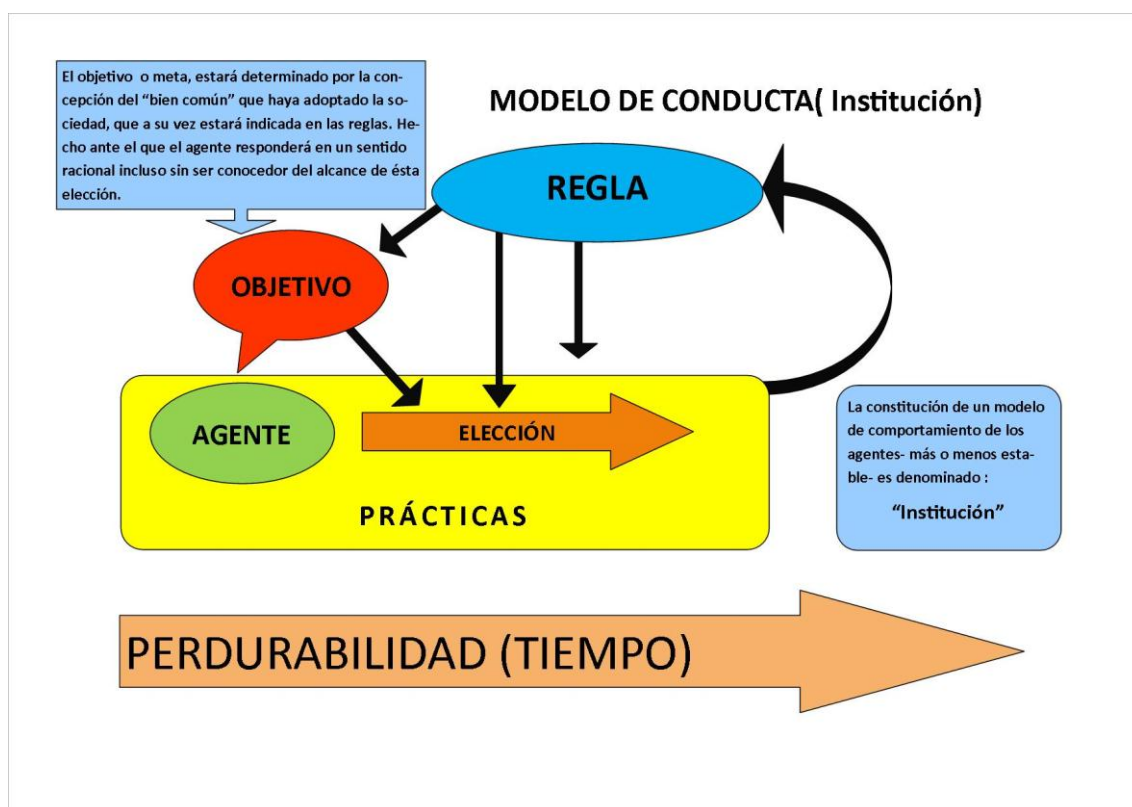
produce aunque la relación se dé únicamente entre dos individuos y sean ellos mismos los que adopten la posición de representantes de la sociedad constituida entre ambos para la toma de decisiones en pos de articular el mecanismo social. Es decir, concretamente en el caso de que los agentes actúen como encargados de decidir en los diversos temas que tengan que acordar, tanto al actuar como individuos como cuando lo hagan en representación de la sociedad en su conjunto. Asimismo, para agilizar el funcionamiento social estos individuos podrían optar por dividir los roles y capacitar a cada uno o únicamente a uno de los individuos que forman la sociedad para decidir sobre temas concretos. En donde por ejemplo: un individuo pesca y otro cocina. Esta división de tareas revelaría en primer término que los individuos nombrados tomarían decisiones particulares con consecuencias para la sociedad y sería en ese instante en el que pasarían a actuar como agentes del conjunto. Por lo que imaginando una sociedad más compleja, por ejemplo sociedades con sistemas de representatividad, se denominaría agentes a aquellos que actúen en nombre de otros (Onuf, 1998, pág. 59).

Al instituir un modelo en el que ciertos individuos actúan como agentes, se incentiva según Onuf, el que se instaure un entorno en el que se propicia una conducta por parte de éstos en un sentido racional, al adquirir responsabilidades en sus decisiones y afectar éstas a otros individuos. Es decir, estos agentes representativos actuarían en busca de objetivos concretos⁵¹. Por lo que los agentes actúan dentro de, así como sobre, las instituciones y en éstas poseen cierta capacidad para alterar el funcionamiento de las mismas⁵². Resultando que el propio contexto operativo entre agentes e instituciones se verá retroalimentado y tendrá un impacto en el comportamiento de ambos resultado de la práctica.

⁵¹ En este sentido, se señala que éstas constituyen un patrón de comportamiento en donde reglas y prácticas encuentran el espacio que agiliza el paso de individuo a agente y se construye un entorno en el que se propicia una conducta por parte de los agentes en un sentido racional. Es decir, en busca de objetivos (Onuf, 1998).

⁵² Recordar que según Onuf: "Acting in the world means acting on the world, often as an unintended consequence" (Onuf, 1998, pág. 69).

Ilustración 3: Mapa de una “Institución”.

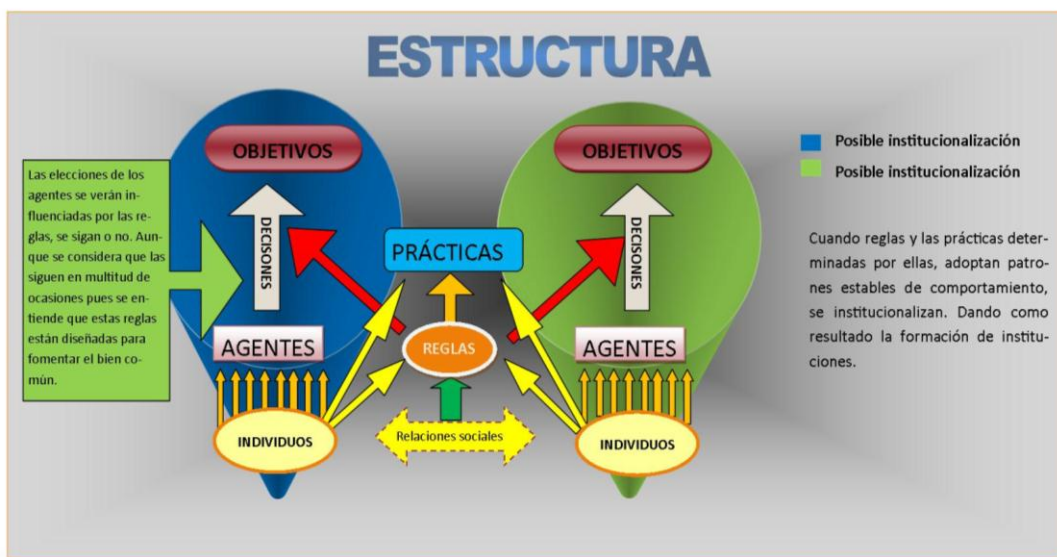


Fuente: de elaboración propia a partir de (Onuf, 1989; Onuf, 1998).

Del mismo modo, si se amplía el margen y se trasvasa la perspectiva indicada a una sociedad todavía más amplia, compleja y con un mayor número de instituciones, las elecciones por parte de los agentes tendrán consecuencias en las instituciones propias- de donde emerja la elección-, así como en otras por encontrarse entrelazadas en la elaboración de reglas, en las prácticas de otros agentes y en la emanación de nuevas reglas de cualquier otra institución en la que los agentes se vean afectados por las propias como resultado de las conexiones imbricadas mutuamente entre todas las instituciones (Kubáľková, Onuf, & Kowert, 1998). Lo que deriva automáticamente es que un modelo en el que existan reglas estables y en donde las prácticas hayan sido institucionalizadas, la existencia de instituciones y su funcionamiento permitirá observar lo que los constructivistas denominan: la estructura⁵³, compuesta entonces por individuos, agentes, reglas, instituciones y prácticas.

⁵³ Por si existe confusión entre estructura e institución, a este respecto Onuf señala que cuando se enuncia la estructura se está indicando como aquello que es observado y que componen todos los elementos, ya sean individuos, agentes o instituciones; mientras que institución es aquello que contiene los actos de los agentes (Onuf, 1998, pág. 63).

Ilustración 4: Foto estática de la Estructura.



Fuente: De elaboración propia a partir de (Onuf, 1998).

Al observar esta estructura como un momento estático, se vislumbra que la operatividad de acuerdo a las reglas constituidas y las prácticas constituye un modelo institucionalizado. Sin embargo, al ser la sociedad un mecanismo vivo en el tiempo, la propia complejidad social y la repetición de prácticas por parte de individuos y agentes, originaría efectos resultantes de las prácticas que demandarían otros acuerdos para solventar efectos no previstos. Ello daría origen a la constitución de nuevas reglas. Éstas a su vez producirían nuevos efectos, unos predichos y otros no predichos, y como las nuevas reglas son resultado de un pacto efectuado, esta vez, ya no entre dos individuos sino entre los agentes, el hecho de que ciertos individuos actúen en nombre de otros supondría que individuos determinados desempeñasen el papel de representar y actuar en nombre de las construcciones sociales acordadas. De este modo, se evidenciaría que el rol de agente y la toma de decisiones estará determinada por las primeras reglas constituidas en el nombre del “bien común”⁵⁴, por las prácticas resultantes de esas reglas y por el modelo de sociedad que haya sido adoptado por el conjunto a la hora de constituir y reclamar nuevas reglas (Onuf, 1998, pág. 61). Es decir, las nuevas reglas encuentran su origen en las prácticas de los agentes y en los efectos de las prácticas en base a reglas anteriores.

Es en el aspecto indicado en donde hay que señalar algo determinante en una sociedad compleja, y es que los agentes no necesariamente tienen que ser individuos para actuar en

⁵⁴ La importancia de lo considerado bien común en las decisiones sociales lo explica ampliamente Nicholas Onuf en (Onuf, 1995).

nombre de otros, ya que la agencia es una condición social no personal y, por lo tanto- por poner un ejemplo comprensible-, en un contexto de RRII se consideraría que el gobierno de un Estado es un agente que representa: a) por un lado al conjunto de gentes; b) y por otro al resultado de una construcción social, desempeñando su función de acuerdo a las reglas establecidas previamente como resultado de la interacción entre agentes.

Asimismo, si por otra parte se centra la mirada en la capacidad de elección de los individuos, se evidencia que toda regla constituye un elemento que plantea la necesidad de ejecutar una elección. Por lo que todo individuo o agente habrá de tomar una decisión ante la regla: seguirla o no. Del mismo modo, si se asume que a la hora de adoptar una decisión se requieren elementos que justifiquen el por qué se opta por una elección y no otra por parte del individuo- algo asumido como característico de un ser social-, ante el requerimiento de elegir bajo la premisa racionalista de que los agentes persiguen el logro de objetivos, ya que el ser social es consciente de que la decisión conllevará unos efectos, se optará por aquella que sea entendida como beneficiosa para el común, aunque no todos los individuos y/o agentes sean realmente conscientes del significado completo y los condicionantes para el alcance del objetivo en sí (Onuf, 1995)⁵⁵.

En definitiva, al ser la sociabilidad un proceso que se articula y opera con el paso del tiempo, se observa que en condiciones de perdurabilidad los agentes se verán abocados a afrontar situaciones en las que podrán y deberán realizar elecciones. Estas elecciones estarán determinadas por las reglas constituidas y/o acordadas- ya sea adoptando la opción de seguirla o no-, y a su vez serán elementos constitutivos de las opciones presentes en la medida que esas reglas son o han sido creadas con un sentido de alcanzar las metas u objetivos perseguidos por los agentes. Por lo que los agentes tenderán en un gran porcentaje a su seguimiento.

Una vez señalado que agentes, prácticas e instituciones sufren un impacto mutuo y continuo, hay que indicar que el cómo afecta la estructura a los agentes de los que nace la regulación, es perceptible únicamente, según Onuf, por parte de agentes que se encuentren fuera de la estructura. Puesto que en el caso de que los agentes miembros de la estructura detecten consecuencias o efectos que no hayan sido previstos como resultado de las

⁵⁵ En este sentido, es debido resaltar que el hecho de perseguir los objetivos en nombre del “bien común” forma parte de un modo de **acción racionalista**. Postulados como el de Nicholas Onuf también contienen postulados racionalistas así como conductistas: Estímulo de elección (causa)-búsqueda de justificación (efecto).

prácticas- es decir, un efecto no previsto en las reglas-, tratarán automáticamente de abordar el efecto no previsto y crearan una nueva regla. Lo cual dará paso a un nuevo proceso de alteración de la estructura sin percibir en exceso como opera la estructura en sí. Y es en ese sentido en el que hay que tener en cuenta que de nuevo esta nueva regla, con el objetivo de paliar el efecto no previsto, puede producir otros efectos no previstos mediante el proceso de imbricación. Lo que situaría la estructura en un proceso de remodelación constante en el tiempo (Onuf, 1998, pág. 63).

No se puede obviar en este planteamiento que las instituciones son el resultado de la habitualidad resultante de las prácticas efectuadas determinadas por las reglas. Por lo que hay que considerar que las instituciones pueden estar sujetas mediante su práctica a otra institución superior o paralela y así repetidamente. De modo que los agentes presentes sufrirían el retro-impacto continuo al ejecutar las elecciones decisorias como parte de la práctica.

“...realizando elecciones los agentes actúan sobre, y no sólo en, el interior del contexto que operan, colectivamente cambiando las características institucionales y a ellos mismos en el proceso”⁵⁶ (Onuf, 1998, pág. 62).

Pero al igual que la estructura posee impacto en los agentes éstos tienen impacto en la estructura en los casos en los que, ante un efecto de la propia práctica de la estructura, ésta pasa a ser reglada por los agentes, de modo que se institucionaliza la estructura insertando reglas en ella.

En todo caso, como ya se ha señalado, las reglas con origen en el establecimiento de una relación entre agentes se nutren en su formación tanto del proceso de institucionalización, donde los agentes las siguen a la hora de ejecutar las prácticas, como de la estructura en sí. No obstante, dentro del proceso de constitución de una regla hay que mantenerse prudente al afirmar el modo en el que actúan los agentes, ya que el origen de la regla parte de un proceso de interacción entre los agentes. En donde es deber recordar y señalar que esta regla no tiene por qué estar caracterizada por haber sido constituida en condiciones de simetría entre los agentes, y podría ser este hecho un elemento crucial en la finalidad de la propia regla constituida. Es decir, si una regla responde a un modelo de relación en el que no tiene por qué existir o primar un contexto de igualdad en los agentes en el proceso de

⁵⁶ Traducción propia a partir de “Exercising choices, agents act on, and not just in, the context within which they operate, collectively changing its institutional features, and themselves, in the process” (Onuf, 1998, pág. 62).

institucionalización de la misma, y este factor determina el que algún agente obtenga mayor beneficio que otro u otros en el devenir de la práctica, el desvelar si ha existido o existe asimetría en la constitución de la regla es un ejercicio determinante que permitirá observar cómo opera la estructura y visualizar ciertas diferencias en términos de capacidades de los agentes que determinen el propio funcionamiento de la estructura.

2.3.1.1 La relevancia del papel que ejerce el agente.

Se entiende relevante detenerse brevemente en la información expuesta y centrarse con mayor profundidad en el papel de los agentes. Esto se justifica en que si éstos, en busca del bien común usan los recursos que estén disponibles (recursos materiales, ideológicos, institucionales, etc....) para alcanzar los objetivos definidos en la estructura de la que es agente, las acciones realizadas por definición tendrán efectos considerables para la misma que determinaran las prácticas. Debido esto, principalmente, a que por medio de estos actos los agentes hacen de la estructura social en la que operan una realidad social entendida como ideal y, a priori, de acuerdo a las metas ambicionadas por la misma.

Pero claro es que en este proceso, si en el origen de la regla se evidencia que ésta fue constituida en un marco de capacidades asimétrico, puede que de la operativización de las prácticas no resulte un beneficio para todos los agentes en la misma medida e incluso podría darse un contexto en el que la regla origine la perdurabilidad o el aumento de la asimetría inicial. Por ello, una de las cuestiones que despierta inquietud en el funcionamiento del modelo es tener presente que los agentes, en última estancia, son personas agrupadas o no y poseen la dificultad de responder a las conexiones que se dirimen en la interrelación: ¿quién actúa como representante de quién? (agencia); ¿qué actos afectan a los objetivos? (objetivos); y ¿cuáles son las características del mundo que tienen relevancia? (circunstancias).

Ante este dilema y bajo una perspectiva optimista del ser humano, se entiende que los agentes estarán siempre tratando de lograr satisfacer las necesidades y deseos parte de su sociedad, para lo que requerirán el uso de los recursos que sean necesarios y que estén disponibles para el logro de los mismos. En donde el uso de estos recursos – de diverso carácter, ya que pueden ser materiales o no⁵⁷ - poseerá límites, ya que la agencia está siempre limitada, ya sean por los materiales, por escasez o algún factor externo que determine; o

⁵⁷ Señalar como **materiales**: Productos y recursos físicos, y **no materiales**: institución, ideas, etc...

por los institucionales, por la regulación de otros agentes, instituciones o la propia estructura, a partir de las reglas.

En el sentido en el que los agentes poseen límites, la libertad de acción vendrá condicionada por los límites de acción que otorguen las circunstancias materiales y sociales. Y en este contexto serán aquellos agentes que posean la habilidad, o la capacidad de medir las consecuencias de la decisión, los que constituirán su legitimidad de cara a mantenerse como agente. Pero del mismo modo, al estar imbricados los límites dentro de la estructura, éstos también vendrán de la propia actuación con otros agentes, por lo que el operar conjuntamente será limitado por la propia acción conjunta. Es decir, por la estructura material e ideacional.

Teniendo en cuenta que más allá de las diversas capacidades de los agentes, las reglas constituyen un campo de acción aceptado mayoritariamente- por encontrar su origen en un entramado social que en su momento abogó por la creación de la misma-, ante una situación en la que se plantee la opción de quebrantar la regla, el límite también vendría de la significación y dificultad que contiene lo que constituiría un acto contra-regla, considerado rebelión. Es decir, que incluso ante reglas no establecidas formalmente, pero institucionalizadas por la aceptación social, el límite se haría visible. Y si en este esquema se introduce el elemento de necesidad de acceder a la relación por parte de un agente que se encuentra obligado a acordar la creación de una regla, aun siendo consciente de la condición asimétrica de partida, puede que la institucionalización de la regla, así como su impacto en la estructura, produzcan efectos viciados.

A raíz de lo indicado, es relevante señalar que las reglas siempre proporcionan al agente el espacio para seguir un comportamiento tildado de elección racional, ya que éstas vendrían determinadas por las metas señaladas y, además, han sido producto de una construcción social. Lo que les otorga la reputación de ser las mejores opciones posibles. Planteamiento éste que da pie a un gran dilema y cuestión: ¿y si se logra introducir una idea del “bien común” interesada en los agentes de una estructura?; ¿se podría visualizar como una mayoría se posiciona en favor de la regla persiguiendo aquellas metas que entiende cómo adecuadas? y, del caso contrario, ¿su negativa sería considerada un acto revolucionario incluso si la regla es perjudicial para el conjunto que la defiende?

En definitiva, incluso detectando que una regla perjudica a uno de los agentes y sabiendo que ésta se ha constituido asimétricamente, si se ha logrado institucionalizar como regla que

promueve el “bien común”, los agentes que operen en la estructura y se hayan apropiado de ella como elemento promotor del bien común tendrán dificultades para recriminar el papel que ejerce esa regla, por no querer actuar contra estructura y ser denominado revolucionario.

2.3.2 Herramientas: la constitución del régimen a través de reglas y discursos.

Una regla legítima según Onuf -usando vocabulario de Max Weber- es un concepto sobredeterminado, un pleonismo⁵⁸ útil (Onuf, 2014, pág. 15). Afirma esto Onuf en el sentido de que si una regla no tiene un origen legítimo, o una fuente de validación, carecerá de fuerza que la haga ser de dominación social.

A partir de esta idea previa, una de las labores para constituir una legitimidad que pueda contener una validación moral y que sea aceptada por una mayoría social, requiere de una serie de herramientas que operen dentro de la comunicación que se emplea entre los diversos agentes en una estructura. Como la comunicación opera a través de la transferencia de ideas, es en este espacio en donde aquello que contenga el mensaje: el discurso, posee diversos mecanismos que operan en las relaciones sociales.

El acto del discurso es un mecanismo emisor de ideas, de postulados, que forma parte de la práctica habitual de comunicación entre los individuos y para que este sea efectivo en la comunicación varios factores entran en liza. En referencia a este hecho se ha creído pertinente, como excepción dentro de este marco, rescatar aquello que escribió Platón en *Timeo* (1872), indicando que existen diversas limitaciones en la comunicación: 1º) la limitación implícita en el objeto de exposición; 2º) la limitación implícita en el propio discurso; y 3º) la limitación implícita en los potenciales receptores. Esta perspectiva asume la existencia de limitaciones aunque no se sea consciente de ellas. A este respecto señalaba Sócrates una cuestión relevante en la propia práctica, indicando que entre sociedades con un manejo de la percepción y la emisión comprensiva- capacitada para la comunicación-, el trabajo del emisor para lograr que su mensaje sea recibido posee una carga extra y elemental, puesto que éste era el encargado de encriptar el discurso para que éste sea comprendido, dado que el emisor es el principal interesado la comprensión se dé (Platón, 1872). Labor encriptadora que le otorga una capacidad que es relevante señalar, ya que esta

⁵⁸ Según la R.A.E pleonismo es:” 1. m. Ret. Figura de construcción, que consiste en emplear en la oración uno o más vocablos innecesarios para que tenga sentido completo, pero con los cuales se añade expresividad a lo dicho”. www.rae.es (Consulta realizada el 23 de enero de 2014).

labor puede estar caracterizada por la bondad a la vez que por la perversidad, y este aspecto es un peligro contenido en el propio proceso de comunicación (Platón, 1872).

Una vez haber recurrido a uno de los clásicos, señalar que el discurso posee gran importancia en el instante que se asimila que, en una sociedad interrelacionada que se comunica constantemente, la influencia del mismo dentro de las limitaciones atribuidas al receptor y al emisor por Sócrates, así como la propias del discurso y su análisis, son elementos que revelan cómo la sociedad opera en la constitución de reglas dentro de un proceso limitado por otras instituciones, agentes e ideas. En donde un límite añadido atribuido al propio discurso es que, para que éste sea operativo, previamente se deben dar circunstancias en la relación emisor-receptor necesarias para que éste sea un acto válido. Es decir, cobra una importancia fundamental el factor relacional. El cual actúa como el vínculo con capacidad de otorgar solidez al resultado ofrecido por la acción que promueva el discurso, y a su vez será el elemento que concederá a la acción promotora contenida en el discurso el que los receptores aumenten su disposición, en la medida que el fruto prometido contenga un objetivo fácilmente asimilable y requerido socialmente, sin necesidad de que éste sea asegurado (Onuf, 1998; Onuf, 1989). Pero quizás sí o quizás no, éste sea alcanzado.

Por último, señalar que una vez el discurso empieza a ser divulgado, si éste se repite constantemente, puede que con tiempo se convierta en un hecho asimilado por la mayoría social como verdad (Onuf, 1995; Onuf, 1997b). A partir de ese instante el discurso estará en disposición de transformarse en costumbre común. Lo que devendría en un principio de regla y como ya ha sido indicado: las reglas determinan en un alto grado lo que hacen los agentes. Por lo que asimilando que una idea, o varias, es aquello que constituye la base de un discurso, si una idea se torna convencional y los agentes se apropian de ella como parte del “sentido común” -como algo que siempre hicieron-, entonces la costumbre se convierte en regla y los agentes acaban adoptando el comportamiento como un hecho natural. En donde sin cuestionar el origen de la regla cumplirán y continuarán aplicando esa regla simplemente porque el hecho de estar establecida⁵⁹.

⁵⁹ En el sentido de instituir las como las leyes consuetudinarias, entendiéndolas como aquellas que se originan en la costumbre.

2.3.2.1 De ideas en discurso a reglas: modos.

Existen diferentes mecanismos por los que las ideas operan en un discurso y acaban por asentarse como reglas en el contexto social. Nicholas Onuf expone en varios de sus textos el cómo operan los diversos mecanismos subyacentes en el discurso mediante una categorización de éste en tres tipos ideales (Onuf, 2014; Onuf, 1989; Onuf, 1998; Onuf, 1997b):

- **El discurso asertivo:** este tipo proporciona información acerca de cómo son las cosas en el mundo en términos generales, de su funcionamiento y acerca de las consecuencias en caso de no conocerlas. El discurso asertivo un vez asimilado y transformado en regla actúa como una *regla- instrucción* que informa del cómo obrar para obtener un resultado.
- **El discurso directriz:** este tipo adopta la función de ordenar- una orden-, con carácter imperativo. El emisor del discurso enuncia la acción que debe realizar el individuo, promoviendo la función de hacer creer al individuo que debe hacer algo concreto. Habitualmente estos discursos se caracterizan por la inclusión de información sobre el efecto en caso de negativa a ejecutarlo por parte del individuo, por lo que suelen estar asociados a la Ley. Constituyen una *regla-directriz*.
- **El discurso compromiso:** este discurso se compone de promesas que los individuos aceptan como válidas. Se hace efectivo cuando los individuos se creen partícipes de esas promesas y las aceptan como parte de su desempeño propio. Cuando estas promesas se hayan establecido y normativizado se inscriben en la estructura social como *reglas-compromiso*.

La categorización que realiza Onuf muestra tres caracterizaciones que pueden estar inscritas en un discurso, por separado o conjuntamente. Por ejemplo, existiría la posibilidad que ante un caso en el que, cuando un agente persiga la articulación de un discurso con un alto grado de impacto en el receptor, podría tratar de institucionalizar una regla que mediante su uso permitiese instruir, dirigir y comprometer a los receptores del discurso (ya sean éstos agentes, instituciones o individuos). De modo, que en el grado en el que una regla sea aceptada y practicada por un mayor número de agentes mayor fuerza adquirirá ésta en la estructura⁶⁰.

⁶⁰ El ejemplo que enuncian los autores que tratan las RRII desde la perspectiva constructivista es la regla de la soberanía. Ésta ha sido aceptada e institucionalizada internacionalmente (Checkel, 1998; Philpott, 2001; Onuf,

Señalar por último a este respecto una distinción relevante y que es notoria por el impacto en el comportamiento y en la toma de decisiones de los agentes: la distinción existente entre reglas legales y no legales. Mientras una regla legal ofrece al agente la información directa acerca de las consecuencias que se pueden esperar de seguirla o no, la no legal no ofrece ese tipo de *feed-back*. Por lo que en caso de que haya interés por parte de un agente por constituir una práctica se tenderá al fomento de su legalidad, ya que la regla legal agiliza el proceso por el cual los agentes elegirán la opción en la toma de decisiones, al encontrar respuesta en el efecto de la práctica. Y por lo tanto, su elección responderá a un pensamiento racional que a su vez constituirá, de un modo u otro, una aceptación de aquello establecido y determinado por otros agentes. Por lo que en principio, no supondrá un esfuerzo ni requerirá un proceso de reflexión amplio el seguir la regla legal⁶¹.

2.3.3 Reglas en las sociedades internacionales: Estados e instituciones.

"En términos generales, los académicos de hoy tienden a pensar que la estructura de las relaciones internacionales no está institucionalizada en grado alguno. Esto es así incluso para algunos académicos que piensan de sí mismos como constructivistas. Creen que los países están altamente institucionalizados como Estados, pero que los Estados, a través de sus agentes, manejan sus relaciones en un mundo anárquico. El término anarquía indica una regla en la que ningún Estado o grupo de Estados regla sobre el resto. También implica que no existe una institución por encima de los Estados que gobiernan ellos. Cuando decimos que los Estados son soberanos, estamos diciendo la misma cosa"⁶² (Onuf, 1998, pág. 62).

A primera vista, la SI se muestra como un escenario complejo con diversos agentes, reglas, y prácticas, en donde en la estructura, al estar en un estado de interacción continua, se

1998; Reus-Smit, 2012; Ruggie, 1998). Y a este respecto Onuf afirma que: "...the principle of sovereignty is a highly formal instruction-rule constituting the society of states. It is supported by commitment-rules empowering states, as agents, to bring new members into this society. These supporting rules, which we know as rules of recognition, are supported by instruction-rules that spell out a number of social and the material conditions that must be satisfied before statehood is possible" (Onuf, 1998, pág. 69).

⁶¹ Se considera relevante el mencionar que la transformación de las reglas en reglas legales, es algo que responde a una aceptación e inclusión institucional. Puesto que una vez que los agentes entienden esa regla como legal, se responderá a ella con mayor "racionalidad" entendiendo su aceptación y operatividad para actuar de cara a otros agentes.

⁶² Traducción propia a partir de: "Generally speaking, scholars today tend to think that the structure of international relations is not institutionalized to any great degree. This is so even for some scholars who think of themselves as constructivists. They believe that countries are highly institutionalized as states, but that states, through their agents, conduct their relations in an anarchic world. The term anarchy points to a condition of rule among states in which no one state or group of states rules over the rest. It also implies that there is no institution above states ruling them. When we say that states are sovereign, we are saying the very same thing" (Onuf, 1998, pág. 62).

provoca que las reglas entren en conexión constante con otras reglas y se produzca la constitución de un entramado multi-influyente. Es decir, la estructura se significa como una red de reglas imbricadas.

Este es un hecho que se refleja claramente cuando, por ejemplo, se revisa un único Estado y se dirige la mirada a instituciones como los ministerios. Se observa como éstos ejercen su función en asuntos determinados en los que regulan o proponen reglas, dentro de un proceso vivo que agrupa reglas propias y/o ajenas de otros ministerios. Es decir, las reglas surgidas impactan en la formación de otras reglas y se crea una especie de red normativa social o legal. Cuestión ésta que en un contexto internacional se refleja cuando se observan los regímenes internacionales. Los cuales son ampliamente perceptibles en el momento que se da la existencia de unas reglas comunales acordadas, que constituyen el modo operativo del grupo. Y dado un régimen internacional es “...un conjunto de principios implícitos o explícitos, normas, reglas y procedimientos de decisiones alrededor del cual las expectativas de los actores convergen en una determinada área de las relaciones internacionales” (Krasner S. , 1983, pág. 2), las reglas adoptadas por unas instituciones tendrán impacto en las prácticas de otras instituciones.

Dirigiendo el análisis al contexto de las RRII, en la SI se observa que existen instituciones constituidas a partir de reglas que son fácilmente detectables según indica Onuf (1994, 1998, 2014): a) el balance de poder; b) las esferas de influencia; y c) los tratados internacionales. Tres instituciones que contienen las reglas que operan en el nombre del “bien común” y que se caracterizan por la amplia presencia de reglas y prácticas:

- 1) El “**balance de poder**” representa una **regla instrucción**: Éste ejerce de institución que proporciona información sobre las expectativas posibles a la hora de constituir un tratado (se incluya en el tratado acuerdos del tipo que proceda). Estos tratados otorgarán ciertos derechos y deberes a los aliados y firmantes de los mismos, y son visibles cuando se otorga un estatus elevado (gran poder) a agentes concretos. Los cuales tendrán la capacidad de actuar con potestad por el poder concedido y de acuerdo a su idea de bien. Por lo que la información vendrá motivada en la razón de que esa institucionalidad de balance de poder no se altere.
- 2) La “**esfera de influencia**” como institución representa una **regla directriz (orden)**: Esta esfera determina las posibilidades de los Estados más débiles en un sentido propuesto por aquellos que hayan constituido la regla. Sin embargo, tanto Estados

débiles como poderosos actuarán manifestando la igualdad de condiciones que “aparentemente” existe en la toma de decisiones.

La institucionalidad de la “esfera de influencia” es observada fácilmente en una organización (internacional) o firma. A partir de reglas informales se constituyen organizaciones formales y, al estar éstas caracterizadas por una estructura jerárquica, obedecerán a los intereses de aquellos que lideren la misma, encontrando su inicio en las reglas informales determinadas por la esfera de influencia.

- 3) Un **tratado o acuerdo** refleja una **regla compromiso**: Establece unos compromisos con aquellos firmantes de los tratados, donde los agentes se vuelven socios y se constituyen derechos comunes, privilegios comunes, etc... La construcción de una comunidad es el ejemplo vivo de este hecho. Se incluyen efectos beneficiosos para las partes.

A partir de esta concepción de las diferentes instituciones internacionales y aquello que implican, es fácil entender la SI como una institución compleja en donde se da la existencia de múltiples instituciones y en la que los agentes operan de acuerdo a los límites que posea la sociedad parte de la estructura- aunque en muchos casos son de difícil detección-.

Asimismo, se percibe que en la SI los Estados son instituciones complejas dentro de la estructura que permiten a los agentes actuar en nombre de ellos en sus relaciones. Es en este sentido en el que Onuf entiende que en una institución compleja existen, por una parte, unas reglas-instrucción que informarán continuamente a los agentes de las metas u objetivos de la institución; y por otra, que las reglas-directriz determinarán el cómo son ejecutadas las acciones mediante las ordenes en imperativo pertinentes en nombre del “bien común”. Todo ello sin levantar ninguna sospecha de error o causa perversa en el proceso se harán visibles las reglas-compromiso. Las cuáles configurarán los roles que adoptarán los agentes, cerrando el círculo por el cual los agentes estarán bajo el efecto - tengan voluntad o no- de las reglas-instrucción o principio institucional.

El contexto indicado causa que sea relevante el detectar quiénes son los actores que ejercen de agentes en la SI. Lo cual será vislumbrado al observar el proceso de interacción. En el caso de la SI los límites, en parte, son claramente detectables; así como las instituciones que constituyen o abordan las relaciones entre los Estados, ya que el centro de gravedad lo constituyen los Estados mismos. Sin embargo, existen muchos más agentes que los propios Estados, con mayor o menor grado de institucionalización. Es decir, son asimismo agentes

los representantes de Organismos u Organizaciones Internacionales que, quizás con un papel secundario a priori, están capacitados para ejercer de semi-primarios en muchas ocasiones en contextos en donde influyen o determinan el comportamiento, o las reglas bajo las que opera un Estado (Corte Internacional de Justicia (CIJ), Fondo Monetario Internacional (FMI) o Banco Mundial (BM), son algunos ejemplos).

Todas las instituciones y sus interacciones son lo que en cierto modo constituye la SI, y son elementos parte que influyen dentro del estado constante de cambio. Y aunque no se debe obviar la presencia en el funcionamiento de ciertos patrones relacionales que puedan ser descritos como generales y puedan establecerse como reglas, se constituye mediante las prácticas una institución “reglada”- por una, dos o las tres tipologías mencionadas- y obviamente asimétrica en cuanto al poder. En donde se dan la existencia de reglas que impactan en el conjunto, las cuales son aceptadas por los agentes a partir de una institucionalización de las ideas con origen jerárquico. De modo que, una vez visualizado que las decisiones que adoptan los agentes tienen consecuencias dentro de la estructura, y concluyendo que poseen efectos sobre la distribución de los recursos materiales y sociales entre los diversos agentes, en el control de las instituciones, así como en la capacidad de los agentes para ejercer actividades decisorias sobre ellas- al dar por hecho que se trata de un sistema no simétrico-, es el lugar de donde resultará que unos agentes puedan obtener mayores beneficios que otros. Por lo que la institucionalización de las reglas dentro de este contexto repercutirá en que la institución sitúe a unos agentes en posiciones más ventajosas que a otros.

Dentro de este esquema, de acuerdo a un pensamiento racional, los agentes que resulten beneficiados por la influencia y resultado de una regla la seguirán, y aquellos que una vez constituida no se vean beneficiados tendrán la posibilidad de adoptar tres actitudes: a) la seguirán, ya sea por costumbre, por no entrar en conflicto o por entender que el incumplimiento de la misma les apartará y no obtendrán la parte de beneficio que han estado obteniendo, aunque la consideren no equitativa; b) no aceptarla, en el caso de considerarse perjudicado por la regla existente, lo que conllevaría efectos de aislamiento y pérdida de aquellos pequeños beneficios; o c) aceptarla, tratando de cambiarla en el tiempo, lo cual mediría su capacidad de acción y de injerencia dentro de su posicionamiento estructural (Onuf, 1989).

En todo caso, la alteración de la institución del poder presente significará un desplazamiento del mismo, con lo que algunos agentes verán disminuir el suyo y este acto impulsará, desde una perspectiva racional, el uso de las capacidades de los actores perjudicados para que no se altere (Onuf, 1997b, pág. 93).

En este sentido indicar que, si se imagina un contexto en el que un agente vea peligrar su beneficio ante un cambio de las reglas, si entre sus capacidades encuentra la herramienta que le permita alterar el significado de la propia regla, éste podría alterar la regla en un sentido en el que los otros agentes la sigan por entender el significado de la propia como beneficioso, aunque el cambio de significado requiera de la necesidad de un periodo de tiempo considerable para medir los efectos por parte de los agentes que se sintiesen desplazados o no beneficiados. Por lo que, el control sobre el contenido de las reglas y su significado conlleva, intrínsecamente, el requerimiento de crear herramientas que permitan moldear aquello que es entendido. Es decir, hay que comprender que- como ha sido mencionado - una regla es creada por un agente para que todos los agentes operen en la estructura, por lo cual habrá que atender a los posicionamientos asimétricos en la SI para entender su operativización.

2.3.4 La sociedad internacional, soberanía, principios y reglas.

Asumiendo que la SI se caracteriza por estar reglada heterónomamente (Onuf, 1997b; Onuf, 1989), es decir no autónoma, en la que el respeto por los diversos agentes, en este caso Estados, significan su independencia de acción bajo el auspicio del “principio de soberanía”. A su vez, la SI atiende a la presencia de diversas reglas-compromiso (Ej. Tratados) que garantizan los derechos y deberes entre los agentes, el contexto creado tiene un significado concreto (Onuf, 1998, pág. 70; Onuf, 1991). Éste es que si un agente (estatal o interestatal) incumple los límites existentes de esa regla, dos hechos se harán presentes: 1) sabrán que habrá consecuencias; y 2) estas consecuencias no están claramente definidas en todos los aspectos.

En el planteamiento señalado la soberanía vendría a representar una independencia absoluta ante otros agentes. Sin embargo, los constructivistas se muestran en favor de considerar a este fenómeno como una especie de ficción, ya que el atribuir una capacidad de ejercer la soberanía absoluta es inviable. Puesto que entienden la soberanía como una cuestión de grados, en una sociedad estructurada. Incluso aunque ésta se considerase

anárquica, ya que la anarquía no significa la existencia de un espacio sin unas reglas (Onuf, 1991; Onuf, 1998).

Asimismo, si en la SI los Estados no son los únicos afectados como agentes por la regla soberana, al existir más instituciones que forman parte de la estructura internacional en diferentes modos, hay que señalar que no “sólo” hay agentes que pertenecen a los Estados, ya que son agentes también aquellos que trabajan en estas instituciones (funcionarios de OOH, por ejemplo). Los cuales en cierta manera, dada la complejidad intrínseca de la estructura, están sometidos a reglas referidas a agentes estatales en una institución extra-estatal, al estar ligados sus principios a los intereses de los agentes- incluido el propio interés de la institución en estar reglada-. Contexto en el que se institucionalizarán reglas que no obedecen a demandas de los Estados con origen en la soberanía.

La percepción de una SI reglada se hace evidente si se da la existencia de varias características. A este respecto Onuf (1991) afirma que si en una sociedad las reglas que determinan y definen la estructura son las *reglas-instrucción*, las ideas y las creencias serán aquellas que determinen la institución constituyéndose en hegemónicas⁶³, en donde unos agentes convencerán⁶⁴ a otros agentes sobre las ideas y creencias adecuadas; si son las *reglas-directriz* las primordiales en la sociedad, se estaría ante una estructura institucional de carácter jerárquico, donde la *regla-directriz* se transformará en ley y la SI se caracterizaría por operar de acuerdo a una jerarquía legal y un orden legal. Si operasen la dos reglas resultaría una SI en la que las ideas hegemónicas constituirían y reforzarían un orden legal en la sociedad y sustentarían lo que se denomina autoridad (legítima).

Por lo tanto, se podría dibujar un esquema en el que las ideas estableciesen e influyesen determinantemente en la actuación de los Estados y agentes de carácter internacional, determinando la construcción de legitimidad internacional e incluyendo en ella, posiblemente, beneficios para aquel agente que haya logrado imponer sus reglas-instrucción al otro⁶⁵. Sin embargo, también se dan las situaciones en las que se produce una jerarquía

⁶³ En este caso se alude a hegemonía en coincidencia con el significado de hegemonía que indica Agnew, cuando la define como: “...la inscripción de otros en el ejercicio propio del poder a través de la convicción, la seducción y la coerción, de tal forma que deseen lo que tú deseas” (Agnew, 2005, págs. 1-2); así como recordando y teniendo en consideración que éste era el término que se usaba en la Grecia clásica para señalar “liderazgo” (Onuf, 1997b, pág. 91).

⁶⁴ Lo indicado hace referencia al convencimiento teórico de esta indicación.

⁶⁵ Estas reglas estarían en relación directa con la definición de hegemonía de Antonio Gramsci, en el sentido pedagógico del mismo: “La hegemonía (...) se basa (...) en un consenso por el cual los subordinados consienten ser gobernados en tanto que la predominancia de los gobernantes se enmascara través de mecanismos de cooptación, desarticulación y la internalización de un sentido común que naturaliza la

informal que alcanza grados de operatividad similares a la formal⁶⁶. En donde las ideas reglan, pero no las ideas de cualquier agente, ya que la asimetría se hace presente en la constitución de las mismas (Onuf, 1997b, pág. 92). De modo que se hará presente un estado de heteronomía en donde las reglas adoptadas implican un posicionamiento de unos (agentes relevantes) por encima de otros (agentes no relevantes) en nombre del “bien común”.

En esta estructura descrita, el papel de las reglas-compromiso encuentra un espacio más determinado de actuación, en donde los agentes contarán con espacios bien definidos donde actuar y los derechos que se posean estarán bien definidos a los agentes. Los cuales una vez institucionalizados podrían devenir en un espacio constitucional en el que la creación de una constitución normalizaría el compromiso y limitaría los deberes y derechos de los agentes. No obstante, como ya ha sido apuntado, en este espacio será difícil la operatividad de los Estados si no cuentan con la capacidad de promover acciones emancipadoras.

3. Pregunta e hipótesis de investigación.

“Las sensibilidades constructivistas nos animan a mirar como los actores están socialmente contruidos, pero no nos dicen qué actores debemos analizar o donde están contruidos. Antes de poder ser un constructivista, tenemos que elegir 'unidades' y 'niveles' de análisis, o 'agentes' y las 'estructuras' en las que están enmarcados” (Wendt, 1999, p. 7).

Una vez determinado el marco teórico que permitirá abordar el análisis de las cuestiones que planteaba la introducción que conduce esta tesis: *¿qué papel ha ejercido la IED en la construcción de soberanía regional en ALC?*, se hace presente la necesidad de abordar una cuestión principal que debe ser tenida en cuenta a la hora de enunciar la hipótesis de investigación. Esta es: si el desarrollo es la meta que ofertan tanto el discurso emitido por la

organización actual de las relaciones sociales” ((Motta, 2008) citado en Errejón (2012, pág. 124)). Reproducción que consiste en que un agente enseña a otro y todo alumno es agente que enseña a su vez. De modo, que mediante la práctica política se reproducen aquellas ideas primarias, por las que el alumno, incluso considerándolas negativas, sufrirá un proceso de asimilación y transformación del conocimiento costoso que le permita acumular capacidad, con el objetivo de mostrar y asumir la existencia de sus propios intereses. Ello para, seguidamente, reclamar para sí como agente la reconstitución de una política de alianzas que considere “beneficiosa”.

⁶⁶ Un ejemplo de esto es señalado por Onuf (1998) cuando se refiere a la “Pax Americana” como una regla en la que los EEUU en el nombre del progreso y prosperidad, se legitiman para el desarrollo de intervenciones, militares mayoritariamente, aunque en ocasiones mediante otro tipo de métodos, donde elegían las modalidades relacionales, a partir de institucionalizarse y atribuirse un rol como líder mundial del “mundo libre” (Onuf, 1998, pág. 72). En este sentido, lo mismo se podría decir del papel del otro actor relevante en periodo de Guerra Fría, la URSS y su deseo de universalidad sistémica.

CELAC en el reclamo de soberanía regional presente en la DC, como el presente en la articulación de la práctica de la IED en los inicios conceptuales del desarrollo, surgen dos cuestiones que pudieran determinar en primera instancia el hecho de que la IED fuese percibida como una acción externa no positiva por la parte de ALC. A este respecto, se entiende relevante y pertinente analizar si los conceptos de desarrollo manejados son coincidentes en su significado terminológico. Si resulta que son coincidentes se debería analizar si es la no armonización de las prácticas el proceso que tiene efectos contrarios al objetivo. Lo que en caso de no ser así podría crear una percepción negativa en el lugar receptor y ser el hecho por el que se reclame soberanía para ejecutar su práctica bajo otras metodologías; en caso de que no exista coincidencia conceptual debiera analizarse, asimismo, si es la no coincidencia terminológica del desarrollo aquello que determina el reclamo contenido en la DC.

A partir de la reflexión enunciada, y una vez establecido el marco teórico, se presenta la **hipótesis principal** que guiará esta investigación:

Hipótesis principal:

La articulación político-económica de la IED como práctica de desarrollo en la región de ALC, ha determinado el que los Estados miembros hayan optado por promover un reclamo de soberanía regional frente a agentes relevantes (significado en la constitución de la CELAC), al percibir que la articulación ha devenido en una regulación en la que la práctica extrae la capacidad de decidir autónomamente, así como establece y reproduce condiciones asimétricas en el funcionamiento de las relaciones de la región con el exterior.

Sub-hipótesis:

- 1) Sub-hipótesis:** *Las ideas subyacentes en la conceptualización del desarrollo han determinado el papel que ejerce la IED en los procesos de unificación e/o integración en ALC.*
- 2) Sub-hipótesis:** *La regulación internacional que atiende a disputas de IED ha sido institucionalizada bajo construcciones ideacionales externas a la región de ALC. En donde los agentes relevantes han utilizado sus capacidades para ejercer la transformación de las reglas que determinan la práctica en su favor, aun siendo conscientes de la asimetría implícita. Cuestión que ha determinado una quiebra en la condición de soberano de los Estados miembros, reaccionando éstos mediante la adopción de prácticas que promuevan la articulación de mecanismos que les permitan alterar esta normativa.*

- 3) Sub-hipótesis:** *Constituir una entidad con capacidad soberana en el territorio regional de ALC, es una ambición histórica construida a partir de la percepción de que la puesta en práctica de su voluntad ha sido reprimida/ dirigida desde la colonización hasta la actualidad.*
- 4) Sub-hipótesis:** *El reclamo de autonomía política-económica regional responde a que la región de ALC ha sufrido una alteración en sus capacidades (materiales, ideacionales, institucionales, etc...) que le permite alterar su rol en la SI.*

4. Objetivos de la investigación.

El **objetivo general** de la investigación es analizar *qué papel han ejercido los agentes relevantes en la articulación de la IED como practica de desarrollo, para que la región de ALC haya percibido que su capacidad soberana ha estado sesgada, provocando e incitando la puesta en marcha de mecanismos de integración y/o unificación regional.*

- 1) Primer objetivo específico:** *Analizar el origen e impacto del concepto del desarrollo como práctica política en la reglamentación de las RRII, atendiendo a la relación con la justificación y promoción de la IED como práctica; y desvelar su proceso de institucionalización en las unidades de análisis seleccionadas: ALC y SI.*
- 2) Segundo objetivo específico:** *Analizar el origen ideacional del proceso de institucionalización de la IED en la SI, de la reglamentación de esta práctica, así como el impacto en la toma de decisiones políticas- en términos de integración- de los Estados y agentes receptores de ALC.*
- 3) Tercer objetivo específico:** *Analizar las alteraciones de significado de la soberanía desde su aparición en la SI hasta la actualidad, detectando los atributos fundamentales y las transformaciones sufridas.*
- 4) Cuarto objetivo específico:** *Analizar en qué grado las ideas subyacentes en la justificación de la práctica de la IED han afectado al proceso de unificación e/o integración de ALC.*
- 5) Quinto objetivo específico:** *Analizar y exponer aquellas fases que ha experimentado la región de ALC que hayan significado la existencia de una idea regional de unidad latinoamericana, que permite manifestar que se inicia una II Independencia regional conjunta⁶⁷.*

⁶⁷ Así lo indicó el Presidente de Uruguay durante la I Cumbre de la CELAC celebrada en Caracas (Dic-2011).

6) **Sexto objetivo específico:** *Analizar el impacto de los mecanismos reguladores de la IED en el desarrollo de las relaciones de la región con el exterior, que signifiquen un sesgo en la soberanía de los Estados.*

7) **Séptimo objetivos específico:** *identificar y determinar qué capacidades son aquellas que pueden haber permitido que la región a ambicionar la alteración de su rol como agente en la SI.*

5. Metodología.

“...el constructivismo puede ser ambas cosas: crítico (critical) y orientado a la solución de problemas (problem-solving): Es crítico en el sentido que se mantiene al margen del orden dominante del mundo y pregunta cómo ese orden se estableció, pero también es orientado a la solución de problemas en el sentido que, una vez que las instituciones y prácticas están establecidas, toma el mundo como lo encuentra, como el marco dado para la acción” (Shünemann, 2010, pág. 45)⁶⁸.

El modo de abordar el tema de estudio, las fuentes, los datos, técnicas y todo aquello que determine el mecanismo por el cual el investigador tratará de refutar las hipótesis planteadas, constituirá, sin lugar a dudas, un acercamiento que poseerá cierto grado de subjetividad al analizar el tema de estudio. En donde la interpretación será aquello que constituya el pilar metodológico del que se hará uso.

La elaboración de esta investigación es de carácter hermenéutico en el sentido filosófico ontológico, en el que se es consciente de que la visión particular está limitada por aquello que ha visto anteriormente, y ello hace concebir el mundo de un modo determinado (Heidegger, 1996).

El análisis basará su elaboración en una interpretación de los hechos, en donde las técnicas utilizadas comprenderán algo más que una sola interpretación. De hecho, el abordar una problemática desde la escuela constructivista de las RRII, determina que se adopte un enfoque metodológico socio-histórico. Entendiendo que para analizar un proceso, éste debe ser diseccionado en orden social, identificando los agentes y las estructuras presentes; así como tratando de vislumbrar los vínculos y el cómo se condicionan en el tiempo. Tanto

⁶⁸ En la Tesis Doctoral elaborada por Julia Schunemann (2010), la autora realiza este comentario a partir de las conclusiones obtenidas en el artículo de Robert Cox: “Social Forces, States and World Order: Beyond International Relations Theory”. En Robert W. Cox y Timothy J. Sinclair (eds.), *Approaches to world order*, 85-123. (1996).

al abordar el análisis de las categorías enunciadas (desarrollo, soberanía e IED), como en el estudio de la interconexión de las unidades y sub-unidades de análisis, a través de un ejercicio de revisión documental extenso que se apoye en cierta elaboración estadística y en la recolección de documentación en profundidad.

Asimismo, debido a las particularidades de los conceptos con los que se trabaja- pertenecientes a diferentes campos académicos como la sociología, la ciencia política, la economía, el derecho, la antropología y la filosofía mayoritariamente-, se ha optado por abordar el análisis con más de un método científico. De hecho, la investigación se podría considerar como multidisciplinar por combinar diversos métodos:

- **Método analítico:** El uso de esta técnica permitirá conocer el objeto de estudio mediante el análisis de los conceptos y los procesos, las ideas que se tratan, su comportamiento y las posibles interacciones entre ellas. Así como la técnica otorga la posibilidad de establecer nuevas teorías (Ortiz & García, 2005, pág. 64).
- **Método inductivo:** Ya que se trabaja con ideas, hechos y afirmaciones, que van desde los hechos particulares a los generales en un número de casos extenso, esta técnica permitirá realizar una explicación y predicción a través de leyes y teorías.
- **Método deductivo:** A la inversa que el anterior, éste método permitirá trabajar y transpolar cuestiones de carácter general a hechos particulares en el proceso de búsqueda de realidades concretas.
- **Método inductivo-deductivo:** la utilización de este método permitirá observar el cómo se asocian fenómenos concretos; desvelar denominadores comunes asociativos; la elaboración de hipótesis no enunciadas; y deducir sus consecuencias llegando a conclusiones si estas son refutadas por los hechos.

Junto con estos métodos, y de manera transversal, serán utilizadas técnicas descriptivas (narrativa, histórica y estadística), comparativa y prospectiva (esta última por atender a la composición de realidades posibles a lo largo de los diversos procesos).

6. Estructura de la tesis.

A raíz del planteamiento inicial se ha optado por dividir la tesis en tres partes principales y una última en forma de conclusión.

La Parte I expondrá un examen crítico de la evolución conceptual e ideas subyacentes presentes en el término desarrollo, tanto por parte de los agentes relevantes e impulsores de la articulación político-económica de la práctica en la SI, así como del impacto, y debate ocurrido, en la región de ALC. Este análisis centrará sus objetivos en señalar la disputa ideológica ocurrida entre los diferentes agentes con capacidad de impacto institucional en la región, analizando las metas y los medios que hayan sido dispuestas por los diversos postulados. Atendiendo cuidadosamente a la relevancia que hayan protagonizado en el proceso las categorías: IED y soberanía.

En la Parte II, se abordará el estudio en profundidad de las dos categorías de análisis: la soberanía y la IED. Se profundizará en el origen conceptual de ambas en la SI, así como en su práctica e institucionalización en la SI. Adentrándose el análisis en las disputas y transformaciones sufridas por las dos categorías en la evolución de las RRII.

En la Parte III, se realizará un análisis de la evolución histórica regional en torno a los procesos que hayan significado un reclamo soberano regional, a partir de la percepción del papel ejercido por la IED. Atendiendo al impacto que hayan tenido las ideas subyacentes en las categorías indicadas en los diversos procesos que hayan perseguido la unificación e/o integración regional.

En la parte IV se realizarán las conclusiones.

Parte I.

Capítulo I.

Este capítulo tratará de desenmarañar el concepto de desarrollo y sus vínculos con la soberanía e IED. Para lo que se ha optado por analizar su evolución histórica desde una perspectiva institucionalizadora del concepto y de sus prácticas en la SI y en la región de ALC. Se ha procurado detectar las posibles fricciones ocurridas entre ambas unidades, sus metas, los medios propuestos y una contrastación entre ofertas y resultados, escenificados en el proceso.

Parte II

Capítulo II.

En este capítulo se profundizará en la evolución histórica del concepto soberanía; enunciando los atributos principales, su origen y los diferentes procesos de transformación sufridos por el término en la SI; así como los cambios sufridos debido a la creciente interdependencia en un mundo globalizado, en el que la SI ha visto reconfigurar el ordenamiento territorial en entes con mayor cobertura territorial y ha sufrido transformaciones limítrofes continuamente. Se atenderá a diversos procesos de distinto carácter (la descolonización, identidad, poder, etc...).

Capítulo III.

Este capítulo expondrá y analizará el proceso de institucionalización internacional de la IED como herramienta del desarrollo; su reglamentación; así como los vínculos existentes entre los diferentes agentes parte en ambos procesos. Este análisis estará centrado en desmembrar el rol que han ejecutado los diferentes agentes. Lo que permitirá vislumbrar si ha existido una asimetría a la hora de institucionalizar esta práctica en la SI.

Parte III

Capítulo IV.

En este capítulo se analizarán los diferentes procesos que hayan significado la construcción de un ideal regional que ambicione la construcción de una unidad regional, desde los procesos de descolonización hasta mediados del 1950, que tengan origen en la justificación de necesidad de unificar y/o integrar la región como medio para adquirir capacidad debido al impacto de la práctica de la IED.

Capítulo V.

El capítulo V estará compuesto por un análisis exhaustivo de la implicación que haya tenido, tanto la idea de promover la IED como la práctica de desarrollo, en los diferentes procesos de unificación e/o integración ocurridos en ALC desde los años 50. Esto debido a que se considera que a partir de esa fecha comenzó una fase de institucionalización de las relaciones regionales. En la que se analizarán, en concreción, las prácticas desarrolladas en torno a la idea indicada: la reglamentación, la firma de tratados, los acuerdos y las políticas adoptadas en la región.

Parte IV

Conclusiones.

Esta parte consta de las conclusiones y recomendaciones que ofrece el estudio realizado, la refutación de hipótesis y consideraciones puntuales sobre el marco teórico escogido.

PARTE I

CAPÍTULO I. El desarrollo: el debate en torno a las ideas. La Inversión Extranjera Directa como eje principal de disputa.

1. Objetivos del capítulo.

Con el objetivo de analizar y exponer el significado, el impacto, el origen y las transformaciones conceptuales e ideológicas del término “desarrollo”, en este apartado se han seleccionado las principales definiciones, escuelas y corrientes teóricas que han tenido impacto institucional. A partir de ese ejercicio, se ha procurado realizar un análisis profundo en búsqueda de las ideas subyacentes presentes en los procesos de institucionalización del desarrollo en la SI.

El tensionar el concepto de desarrollo pretende, primeramente, esclarecer los orígenes conceptuales del término en el contexto internacional; analizar el aparato metodológico que subyace bajo el concepto y que permite operativizar la práctica; desvelar las posturas opuestas y analizar los pilares sobre los que se sustenta su crítica; realizar un acercamiento a las propuestas alternativas o contrarias al desarrollo, en pos de identificar las diferencias en sus postulados; y extraer información sobre el impacto transversal que pudiese subyacer en la relación de la práctica con la soberanía y la IED. Todo ello con el objetivo de desvelar las posibles posiciones asimétricas presentes en los agentes parte del proceso, promotores y receptores. Prestando atención especial a la zona de estudio de esta investigación: ALC.

Con la pretensión de ofrecer una información precisa y de alcanzar un grado elevado de perspectiva, el capítulo se irá desplazando en torno a dos unidades de análisis que reflejan la disputa: a) la evolución *global* del término; y b) los debates ocurridos en la *zona de estudio* (ALC) en torno al concepto. Así como, transversalmente, el análisis atenderá a los diferentes procesos de significación ideológica que hayan tenido impacto en la región, en pos de vislumbrar el posible impacto de ideas originadas en el exterior en lo que es entendido por desarrollo y en el fomento de las prácticas que conducen a su logro.

1.1 Introducción.

El concepto desarrollo está en la cima de los tópicos mencionados dentro de toda convención, encuentro, artículo, *paper*, etc... que aborde las relaciones entre Estados, o de

aquellas políticas particulares de los Estados, que persigan la mejora de los estándares de vida. Contextos en los que se suele realizar una mención más efusiva si el evento trata sobre determinados grupos sociales como los pobres, excluidos, desamparados, o en términos de política internacional los países del Sur o subdesarrollados.

Es verdad que abordar un tema tan imbricado política, económica y socialmente, con el propósito de realizar un estudio de un concepto tan enmarañado, que camina a la deriva en una reformulación constante de significancia, constituye, cuando menos, un gran desafío académico y personal. Motivado por este hecho, el analizar un concepto que se sitúa en el ojo de huracán, debido a la amplitud de miras e impacto en el mundo global, ya sea esto debido a su falta de concreción, por el proceso de constante reinención que sufre por parte de la mayoría de los campos de las ciencias, por la falta de efectividad, por el proceso de aproximación a la realidad o por otras causas relacionadas, requiere de un abordaje prudente y preciso, dada la amplia diversidad de postulados y definiciones existentes⁶⁹.

“...el principal defecto de la mayor parte de las seudo-definiciones de ‘desarrollo’ es que se basan en la manera en que una persona (o grupo de personas) describe las condiciones ideales de la existencia social... Pero si la palabra ‘desarrollo’ solo es útil para referirse al conjunto de las mejores aspiraciones humanas, podemos concluir de inmediato que ¡no existe en parte alguna y probablemente nunca existirá!” (Rist, 2002).

Con atención a esta problemática, el autor considerado post-desarrollista⁷⁰ Gilbert Rist señala, en su obra *El desarrollo: historia de una creencia occidental* (2002), la nula posibilidad de aglutinar como ideal social las aspiraciones que implica el término desarrollo, si éste incluye en su alcance como posible aquello que es ofertado por los distintos actores internacionales: crecimiento infinito; consumo creciente; producción infinita; dominio de la naturaleza sin límites, modernización, etc.... Puesto que el logro de estas metas implica que el desarrollo es un concepto que posee ciertos rasgos dignos de la fe religiosa (Rist, 2002). Dado que la articulación de procesos impulsores de desarrollo se esconden bajo una motivación que se apoya en una idea que implica alcanzar un cierto estado ideal de sociedad, con parámetros particulares de un sistema de vida occidental de imposible

⁶⁹ Abordando el desarrollo y su conceptualización existen muchos procesos de acercamiento en el que las miras provienen de diferentes campos de estudio como el económico, el social, el político, el jurídico, etc....

⁷⁰ Gilbert Rist es un autor considerado post-desarrollista. Corriente teórica que aboga por eliminar el concepto del desarrollo, indicando que hablar o corregir este término sería una forma de continuar mirando las relaciones del mundo con un prisma que define el desarrollo de forma errónea: dominio de la naturaleza; producción como base del sistema y modernización. En esta corriente teórica se encuentran autores como W. Sachs; A. Escobar o S. Latouche.

alcance. Tanto por lo que significa el proceso en términos de capacidades globales- por las metas ofertadas incluidas en el modelo-, como por las acciones que se ejecutan por los diversos agentes para alcanzar dicho desarrollo.

Es decir, en principio el desarrollo es descrito por Rist como un proyecto que requiere de la participación del conjunto de los agentes de la SI, pero que es de imposible alcance por la propia estructura que posee el mecanismo desarrollista. Lo que en palabras de David Sogge (2002) conlleva que el desarrollo se asemeje al cuento del palo y la zanahoria. Uno la persigue pero nunca la alcanza.

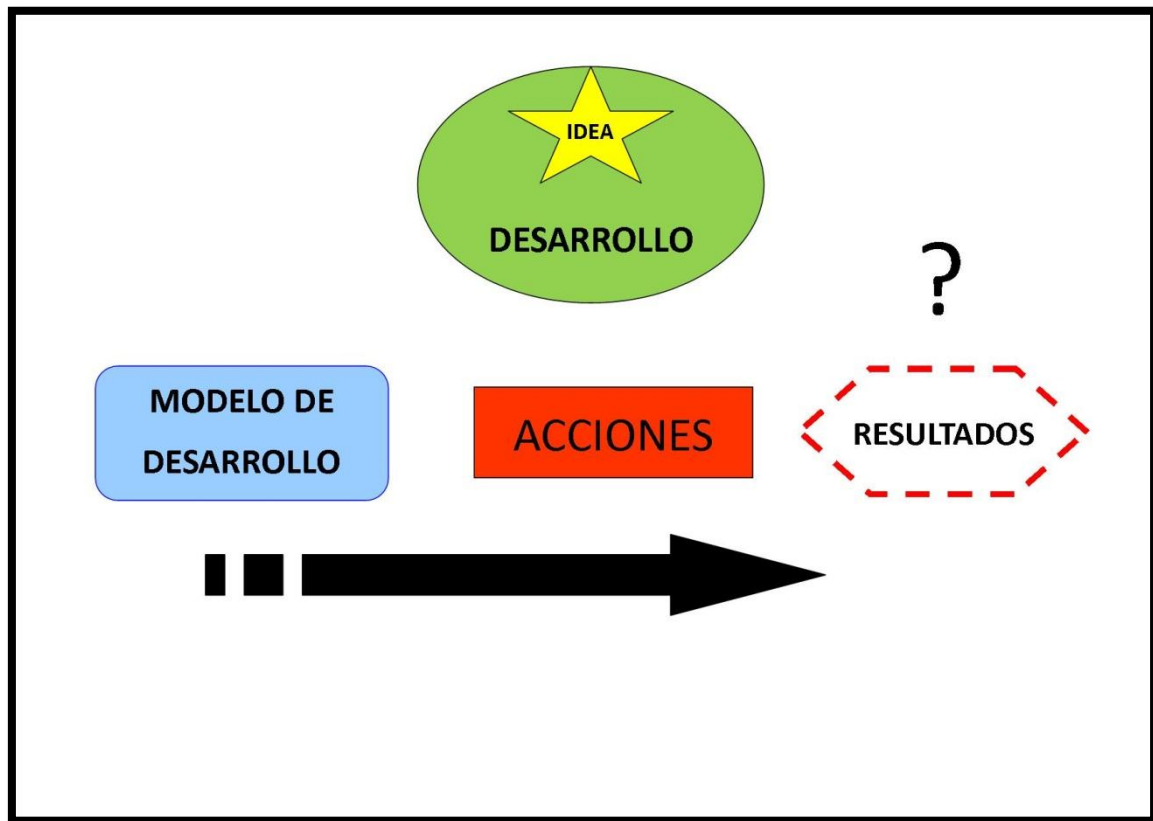
No se puede afirmar que tanto Gilbert Rist como la escuela en la que se le sitúa, los post-desarrollistas, estén del todo equivocados en su análisis (Unceta Satrústegui, 2009, págs. 18-19). Es una evidencia clara la existencia de diferentes escuelas, visiones, campos de análisis e interpretaciones, que postulan y abordan la crítica de lo que se debe entender por desarrollo, incluyendo a aquellos que manifiestan que el concepto desarrollo debe ser eliminado de la agenda, como hace el propio Rist.

Sin embargo, lo llamativo de la crítica que realiza Rist (2002) al respecto, es que éste indica que el mecanismo teórico-práctico que articula el desarrollo en la SI opera bajo un modelo: *promesas-acciones-resultados*. Indicando que el desarrollo posee un planteamiento que consiste en articular un proceso del siguiente modo: a) una formulación de una idea que enuncia qué es desarrollo (*discurso-assertivo*); b) un proceso de difusión de la “oferta” desarrollista; c) un manual de acciones o prácticas a seguir (*discurso-directriz*); y d) esas acciones proporcionan un resultado: ser desarrollado (*discurso-compromiso*).

El esquema que dibuja es bastante simple, en principio, ya que a partir de un *discurso-assertivo*, con instrucciones incluidas, se observa un sistema en el que adoptando ciertas prácticas, los resultados ambicionados serán alcanzados, significándose las *reglas-compromiso*. Pero en línea con lo enunciado en el marco teórico, puede que se alcancen las metas o puede que no, ante lo que es pertinente cuestionar y plantear por parte del agente interesado un dilema relevante: ¿y si nunca se alcanza el resultado?; ¿ha fallado el esquema?; ¿ha fallado su aplicación?; ¿quién es el que ha ideado el sistema?; ¿es apropiado el esquema globalmente? Y adoptando una perspectiva cargada con un mayor grado de suspicacia, también cabría preguntarse ¿ha fallado el plan, o ese era el plan?; y ¿quién responde como agente responsable en caso de no alcanzar el desarrollo siguiendo las instrucciones proporcionadas?

Tratar de dar respuestas a las cuestiones planteadas será algo que constituye el andamiaje de este capítulo.

Ilustración 5: Mapa operativo del impacto del desarrollo en las prácticas.



Fuente: de elaboración propia.

1.1.1 Motivación de análisis y lo positivo de cuestionar.

Antes de comenzar a tratar de vislumbrar los procesos subyacentes que aclaren las incógnitas planteadas, se considera relevante por parte del escritor atender a aquellos críticos que puedan manifestar al leer el texto que los procesos poseen alteraciones debido a su ejecución y que sus prácticas presentan elementos incontrolables. Es por ello que se ha de indicar que se considera un ejercicio enriquecedor para la vida en comunidad el cuestionar, el reclamar y el exigir cierta coherencia a las acciones. Es decir, al analizar aquello que se ofertó por parte de agentes promotores y que requirió de cooperación del receptor o receptores de la oferta, se entiende que este último posee “el derecho y el deber” de realizar una rendición de cuentas, ya que ambos agentes parte son afectados directos de dicho proyecto. Por lo que la crítica, la evaluación, el ejercicio de tensionar lo ocurrido,

puede que ofrezca información necesaria para instaurar, reparar o eliminar, aquellos mecanismos que no proporcionaron el resultado ofertado.

En este sentido se entiende además que la crítica en positivo es la fórmula idónea para la construcción de responsabilidad y compromiso social, o por lo menos útil para conocer y aprender del mecanismo operativo que determina las prácticas y, por tanto, para posibilitar la construcción de pensamiento crítico.

Partiendo de esa perspectiva, es pertinente rescatar un comentario que realizó el escritor Eduardo Galeano en una charla televisiva⁷¹ en la cual hablaba de las metas imposibles, de aquella meta en la lejanía, del sitio de llegada que por verse tan lejano se vislumbra como imposible y se sitúa cerca de la utopía. A este respecto indicó Galeano que la meta, aunque sea de difícil o casi imposible alcance, es aquella que nos determina el camino a recorrer y que todo lo cerca que nos encontremos de la misma será el logro de la vida.

Es con esta particular visión con la que se da pie a este ejercicio de reflexión del concepto desarrollo y con la que se aborda la crítica sobre las ideas de mejora que están presentes en los diversos pueblos, comunidades, Estados o Regiones. Que, como parte de un ejercicio habitual de toda comunidad que persigue armonizar los sistemas de convivencia entre los individuos, se presenta en las diversas culturas y civilizaciones que persiguen un objetivo claro: adecuar el mundo a una existencia que se caracterice por ser, al menos, agradable. Por lo cual, el camino en el que las gentes luchan por conseguir vivir con dignidad; por vivir “bien”; por adecuar la sociedad y sus sistemas relacionales (política, económica, social, etc...), en un lugar en el que, aunque en ocasiones pueda parecer que se trata de una meta imposible, el camino se marca y se dibuja en la mente de los individuos con un ideal de mundo. Es decir, se debe recorrer un camino en el que andando o corriendo hay que caminar, ya sea a través de un concepto como el desarrollo o mediante su crítica, en el que si puede encontrarse un espacio que permita aunar ideas particulares que permitan la convivencia en armonía, el proceso debe ser categorizado como positivo. Pero, y es un gran pero, se debe ser exigente en aras de lograr alcanzar esta meta, ya que si es ofertado algún método como mecanismo de mejora y éste es apoyado por las gentes, requiere de una rendición de cuentas para que la cooperación conjunta observe si se alcanzó lo ofertado.

⁷¹ Ver video <http://www.youtube.com/watch?v=INxafgc9Z48> (Consulta realizada el día 12 de febrero de 2014).

Por todo ello, el hecho de que un concepto sea cuestionado una y otra vez por diferentes campos, tanto políticos como académicos, indica su relevancia, su importancia y la preocupación general de ciudadanos, de diversas corrientes y clases, por las condiciones de vida del conjunto. Siendo indiferente su nacionalidad, religión o cultura.

Hay que enunciar a este respecto, que la evolución, la transformación y la construcción de las ideas, así como la articulación de los mecanismos para que éstas pasen a ser realidades, son parte de un proceso social. En el que los propios conceptos e ideas sufren alteraciones mediante su práctica, debido, principalmente, al impacto social que provocan y del que resultan ejercicios de evaluación por parte del conjunto; así como por la lógica activación de mecanismos de aceptación, implementación o repulsa. Por lo que el ejercicio de cuestionar una idea, además de no ser novedoso, no hace más que reafirmar un proceso tan “natural” como histórico, y es por ello que ha de ser visto con cierto optimismo. Dado que el que se cuestione la validez de una idea nunca puede considerarse negativo, a no ser, claro, *que la idea se esté usando para otros fines*. Si no es así, el debate sobre una idea debe ser interpretado por los actores conjuntamente y desde todos los campos como un debate positivo y útil para la convivencia social.

Sin embargo, aún con lo positivo del ejercicio, también existen peligros y hay que tener en cuenta la existencia de ello, como se señala en el marco teórico. En donde se cuestiona el origen de las ideas y se advierte que: si una idea es construida a partir de una relación no simétrica, en el caso de que su uso favorezca a una de las partes, podría darse el caso en el que la parte favorecida se negase a una transformación que la otra parte considere “justa”. Y al sostener que la transformación es negativa para sus intereses, éste se niegue al ejercicio de debate y sean utilizadas todas las herramientas y capacidades disponibles para deslegitimar el inicio del proceso de cambio. Por ello y siendo prudentes, es deber señalar que este planteamiento que indica “peligro” posee un grado de falacia, al otorgar un posicionamiento determinado a la parte beneficiaria, ya que puede que simplemente se haya aceptado por las partes como una situación “justa” y beneficiosa el hecho de que un agente posea una posición dominante, o que se trate del efecto “natural” de armonización social, la cual asegure un estado de equilibrio; y/o en otro sentido sea parte de un proceso de transformación que asegure el derecho a ejercer y conducir una alteración en su posición respecto a los otros actores en busca del “bien común”. Se debe observar con prudencia el proceso.

Por lo indicado en el párrafo anterior, y ante las infinitas preposiciones causales que puede presentar una relación, es debido prestar atención a la estructura en la que se opera y observar cómo se ha constituido la institucionalidad relacional. Ya que este ejercicio permitirá visualizar quién o qué agentes poseen una influencia mayor sobre los conceptos; así como proporcionará información sobre la idea subyacente de justicia que se posea conjuntamente en el momento que se decida ejecutar un reclamo por los agentes o una rendición de cuentas. Todo ello teniendo en cuenta que lo considerado “justo” puede sufrir alteraciones y variar en el tiempo y en las partes (Philpott, 2001); y siendo conscientes de que la concepción de lo “justo” es fundamental para analizar el desarrollo y los resultados implícitos en una práctica. En este caso la resultante del concepto de desarrollo.

En definitiva, si la idea y concepto de desarrollo es presentado como aquel que, debidamente articulado y mediante la aplicación de mecanismos apropiados, mejora la vida de los individuos, sociedad, y comunidades conjuntamente, es pertinente que la idea o concepto se encuentre en tensión una y otra vez, y sea un deber el tensionar por parte de diferentes escuelas, campos, políticos y ciudadanos a lo largo del tiempo.

2. Concepto e ideas subyacentes del desarrollo.

El primer acercamiento al significado del concepto institucionalizado del desarrollo se rescata dirigiendo el análisis a la definición presente en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE). En donde se indica que el desarrollo se dice de la: 1.a “Acción y efecto de desarrollar o desarrollarse”⁷²; en el que la primera acepción señala que desarrollo es “extender lo que está arrollado, deshacer un rollo”; y en la octava acepción - relevante para el estudio- se indica que desarrollo hace referencia a: “una comunidad humana: Progresar, crecer económica, social, cultural o políticamente”⁷³.

El desarrollo es descrito por la RAE como el acontecimiento por el cual se despliega lo poseído, se extiende aquello que se tiene e implícitamente la concepción determina un pensamiento lineal en el que todos los individuos poseen algo, para al menos, extender.

Asimismo, es llamativo como en la definición de la R.A.E se hace referencia a diversos campos de la vida en sociedad, la política, la economía y la social: progreso; crecimiento económico; social; cultural o político, que despiertan el interés investigador, dado que no se

⁷² <http://www.rae.es/rae.html>. (Consulta realizada el 24 de mayo de 2012).

⁷³ <http://www.rae.es/rae.html>. (Consulta realizada el 24 de mayo de 2012).

inscribe en el significado el que se deba dar un proceso integral en el que se conjunten los diversos eventos. Esto debido a que la definición contiene el nexos “o” y no “y”, lo cual informa que según la RAE se podría hablar de desarrollo únicamente evidenciándose uno de los aspectos señalados (en la octava acepción).

Por otra parte, centrando por un instante la atención en la definición del concepto que ha guardado una relación directa como es el progreso (Sunkel, 1973), se observa que éste es definido como la: “acción de ir hacia adelante”, en su primera acepción; y como: “avance, adelanto, perfeccionamiento”⁷⁴ en la segunda. Por lo que el logro o alcance de metas son elementos que subyacen como idea intrínseca en la definición, el avance hacia una meta, un estado, una fase superior, etc.... En donde el ejercicio de avanzar, de crecer, de evolucionar causa que se dirija la atención a otro concepto que ha poseído una importancia muy relevante en la historia reciente: la evolución, o en su práctica: el evolucionar. (Sunkel, 1973; Arndt, 1987).

La evolución es considerada como condición de ser vivo y es definida como: “Dicho de un organismo o de otra cosa: Desenvolverse, desarrollarse, pasando de un estado a otro”; y su segunda acepción: “Mudar de conducta, de propósito o de actitud”⁷⁵. Es cierto que este término ha sido empleado principalmente por las ciencias naturales con Darwin como máximo exponente, pero si al aplicarlo al tema de estudio de este trabajo, que son las ciencias sociales, se observa que se asemeja en un grado elevado a aquello indicado por los otros conceptos, representando un proceso de mutación o transformación de aquello que esté sufriendo el proceso, diferenciándose de éstos en que el impacto es de transformación **y el suceso no implica un crecimiento o avance obligatoriamente, sino una mejor adaptación al medio en el que se desarrolla la vida.**

Sin embargo, si se centra la mirada en aquello que une a los tres términos se observa que son, relativamente, comunes e implican todos mutación, modificación, transformación, etc.... Hallazgo ante el cual, subyace la incógnita de adivinar qué es aquello que impulsa el proceso común.

En términos fisiológicos y según Darwin (2009), las mutaciones en los seres vivos son el factor que proporciona la capacidad de sobrevivir a aquellos que se adaptan mejor a los cambios del entorno. Si se trasvasa el mismo proceso de búsqueda de elemento impulsor

⁷⁴ <http://www.rae.es/rae.html>. (Consulta realizada el 24 de mayo de 2012).

⁷⁵ <http://www.rae.es/rae.html>. (Consulta realizada el 24 de mayo de 2012).

de adaptación al campo social, cuando se habla de progreso, de perfeccionamiento, de evolución, aquello que promueve la transformación es, principalmente, la idea de alcanzar un estado de convivencia más propicia para la comunidad. Es en este sentido en el que la idea y la significación que posea la meta que se persigue, así como el modo de alcanzar ese estado de convivencia en comunidad, es el espacio en el que el concepto de desarrollo se ha venido ofertando como idea promotora de transformación social “positiva”. Ofertado como la meta a perseguir en pos de alcanzar el “bien común”.

3. Primeros días del concepto en la Comunidad Internacional.

Si bien es sabido que desde la antigua Grecia la idea de progreso ha sido parte y seña de todo debate teórico-práctico acerca del devenir de la sociedad⁷⁶, el momento en el que la economía y la política fueron incluidos como espacios donde articular el proceso, y se dieron la mano para no soltarse hasta nuestros días, se produjo entre el siglo XVII y el XIX bajo el signo del liberalismo.

Fue durante este periodo cuando se dio cita la publicación de dos obras relevantes para el término, puesto que en ellas se establecía que aquello que determinaba la diferencia entre la prosperidad o la decadencia de una nación era medible a través de su riqueza. Las obras a las que se alude fueron: *La riqueza de las naciones* (1776) de Adam Smith; y casi un siglo más tarde, *Principios de economía política: con algunas de sus aplicaciones a la filosofía social* (1848) de John Stuart Mill.

Ya en el siglo XX, una vez que la riqueza había sido designada y asumida como el elemento que permitía clasificar a los Estados, en la obra del economista alemán Joseph Schumpeter *Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung* (1911) se enunció aquello que constituye la base del pensamiento desarrollista actual. Dado que se señaló el elemento que actuaba de impulsor del enriquecimiento y, por lo tanto, el factor que permitía el avanzar de categoría a los Estados: la tecnología. Afirmó Schumpeter que era necesario incrementar el grado de innovación de un país, puesto que este factor sería aquel que impulsaría el crecimiento económico y ello produciría aumento de riqueza.

⁷⁶ El concepto de desarrollo es heredero de la noción occidental de progreso que había surgido en la Grecia clásica y que fue consolidada en la Europa de la Ilustración auspiciada por el supuesto racionalista. En ese contexto, se pretendieron extraer leyes generales que organizarasen y regulasen el orden social a partir de la razón (Sánchez, 2005).

Fue muy significativo el aporte de Schumpeter, ya que a partir de ese instante fue cuando ambos elementos, tecnología y desarrollo, quedaron ligados y serían aquellos que centrarían los esfuerzos de las naciones que perseguían incrementar su categoría en la SI.

En 1939, la publicación del informe *World Economy in Transition* para el Consejo de Relaciones Exteriores de los EEUU elaborado por Eugene Stanley, atendiendo al elemento tecnológico y estudiando las posibles causas por las que este factor no lograba difundirse entre las naciones, indicó que aquello que provocaba un conflicto para el poco avance de los Estados en su progreso y en cuestiones tecnológicas eran las barreras políticas. Lo que provocaba que no se fomentase el incremento del bienestar. Es decir, se ligaron las decisiones de control de los Estados ante la entrada de capitales extranjeros y el poco avance tecnológico que sufrían los Estados que pretendían ascender en la escala mundial.

Pocos años más tarde, apoyando su postulado en premisas similares, el funcionario de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) Wilfred Benson elaboró un informe en donde se hizo uso por primera vez el término “áreas subdesarrolladas”. Concretamente su obra *The economic advancement of underdeveloped areas* (1942), fue aquella que sirvió para indicar que aquellos países con un Producto Interior Bruto (PIB) bajo respecto a los Estados Occidentales eran subdesarrollados. Manteniendo el autor el postulado de que el desarrollo estaba directamente relacionado con la riqueza de un Estado.

Sin embargo, y a pesar de haberse evidenciado alusiones al término desarrollo, como ya fue indicado en la introducción, el instante que se considera como aquel en el que el concepto dio un salto en reconocimiento y se situó como referente categórico en el contexto internacional, fue tras la finalización de la IIGM, a partir de la declaración del presidente de los Estados Unidos por aquel entonces Harry S. Truman. Cuando éste, en su discurso fijó, formalmente, una línea divisoria que categorizaba a dos grupos de países en el mundo: a) los países desarrollados; y b) los países subdesarrollados. Utilizando para ello la medida indicada por Benson: el PIB.

A raíz de estos acontecimientos se vio impulsado un proceso aparente de cooperación entre los Estados, en el cual se trataría de articular diversos mecanismos que tuviesen como objetivo principal: el fomento del bienestar presente en los Estados considerados desarrollados en los Estados sub-desarrollados, mediante la aplicación de diversas medidas (Unceta, 2012).

La revisión de los sucesos señalados indica la presencia de una idea subyacente en los diversos postulados. Esta era que: la promoción e instauración de las medidas estuvieron apoyadas en la premisa de que los Estados desarrollados habían logrado ese estado de “bienestar” debido, principalmente, a los conocimientos técnicos que se poseían. Los cuales habían impulsado el crecimiento económico, y éste a su vez propiciado el estado de bienestar⁷⁷ (Ornelas, 2009; Ornelas, 2012).

Este esquema ideacional ejerció de mecanismo de apertura a un espacio coyuntural que permitía a los Estados desarrollados el operativizar prácticas, para que fuesen trasladados esos conocimientos causantes del bienestar a Estados en vías de desarrollo. Siendo en este espacio en el que se presentó, como una práctica idónea que actuaría de trampolín al desarrollo, la inversión de capital.

La teorización de este mecanismo, a priori, con finalidad convergente, indicaba que esta práctica debía ser impulsada por los Estados desarrollados. Los cuales, a través de la implementación de su práctica en los Estados en desarrollo, fomentaría el que estos últimos lograsen un crecimiento económico que, indudablemente, provocaría el acceso a niveles de vida equiparables a los de los Estados desarrollados. Es decir, se marcaba el camino a la convergencia ambicionada y a partir de ese instante se establecía un marco ideológico en la SI, con unas premisas operativas a partir de la divulgación de una información concreta. Indicando que las acciones que adoptasen los países “en desarrollo” les conduciría a alcanzar el estado de “bienestar” y, con ello, lograr situarse a la par con las potencias occidentales⁷⁸.

En este contexto, el concepto bienestar parecía indicar algo más allá que un simple elemento económico. No obstante, al tratar de indagar sobre en qué variables se sustentaba aquello que indicaba las diferencias entre los Estados sub-desarrollados y los desarrollados y permitía clasificar tan claramente en categorías a los países, resultaba que al único índice al que se hacía referencia era al de la renta, manteniendo en todo momento lo indicado por Smith o Mills como indicador diferencial entre las categorías: la riqueza. Cuestión que se detecta al rescatar aquello que definía el Comité de Expertos de las NNUU como la condición para ser considerado Estado sub-desarrollado y ver que únicamente se hacía

⁷⁷ Para ampliar información sobre la evolución de la justificación y sentido del bienestar como finalidad del desarrollo véase Arndt (1987); así como el Capítulo II de este documento.

⁷⁸ En esta época se vivía en un período de positivismo e ilusión en el cual según palabras de Harry Singer: “Se abrigaban grandes esperanzas de construir en la posguerra un mundo nuevo y feliz” (Citado en Valcárcel (2006, pág. 5)).

referencia al componente económico, indicando que un Estado subdesarrollado era: “Aquel (Estado) en el que la renta per cápita es baja comparada con la de Estados Unidos, Canadá, Australia y Europa Occidental” (Hoselitz, 1962, pág. 3).

Las cuestiones sobre ¿cómo alcanzar éste estado?; ¿por qué alcanzar éste Estado?; ¿cómo se daría este proceso para que todos los Estados alcanzasen este ofertado desarrollo?; ¿una vez aceptada la inversión el proceso sería automático?; y ¿qué teorías o prácticas sustentaban el que se afirmase que la sucesión encadenada de acontecimientos conllevaría al estado de desarrollo?, llenarían las agendas de las diversas escuelas de investigación. Era necesario desvelar estas cuestiones, porque en el contexto dado había que entender y señalar cómo se producía la cadena de supuestos que se presentaban, en aras de fomentar una implicación en el proceso por parte de los actores receptores de las prácticas y que de este modo se sumasen al modelo de conducta que permitía ascender de categoría.

La respuesta a este dilema ofrecía un dibujo de sucesos encadenados causa-efecto: a) se produce la inversión; b) ésta provoca un trasvase de tecnología; c) hecho que impulsa el crecimiento económico; d) lo que impulsa un crecimiento de la renta per cápita; e) se implementan los otros factores necesarios para alcanzar un bienestar (desarrollo social, cultural, etc...); f) se alcanza un estado de “bienestar”; y g) automáticamente una reducción de asimetrías. Resultado: el desarrollo ha sido alcanzado.

El desarrollismo se dibujaba, en principio, como un mecanismo simple. Sin embargo, para analizar éste en profundidad una de las claves que se debe atender es qué papel ha sido ejercido por los diversos agentes en la promoción, en la ejecución y obligadamente en el beneficio resultante de la propia práctica del desarrollo.

Ante esta cuestión, una primera observación revela que algunos de los agentes más relevantes, en términos de promoción del desarrollo, pertenecían o estaban influenciados (BM o FMI)- por no decir dominados-, principalmente, por los Estados occidentales. Se evidencia además que éstos fueron aquellos que poseían capacidad y manejo de los elementos posibilitadores de la articulación del desarrollo, determinantes en la ejecución de la práctica. Así como se detecta que estos agentes relevantes, en términos de capacidades en la SI, eran aquellos que emitían la promesa que subyace en el discurso que consiste en indicar que: el resultado del proceso establecerá el que todos los agentes (Estados) que se adhieran a las prácticas desarrollistas alcanzaran la categoría indicada.

Es decir, **los agentes relevantes** promocionaban la propulsión de un mecanismo en el que éstos **poseían dos de los tres factores determinantes en liza**: a) **poseían el capital** necesario (volumen); b) **el discurso**, ya que el mecanismo desarrollista era de elaboración occidental, así como las ideas inscritas y subyacentes que determinaba la direccionalidad de la práctica y del significado de las acciones; y c) **no poseían el territorio** receptor, lógicamente.

Por un parte los aspectos señalados evidencian la existencia, *de facto*, de unas condiciones asimétricas en términos de capacidad, al dominar unos las ideas en gran medida y la capacidad de aprovechamiento del material, debido al capital económico y tecnológico poseído; así como reflejan ante todo un peligro estructural, en términos de subjetividad, ya que existe la posibilidad evidente de verse determinada la significación de la acción desarrollista por la capacidad de los agentes relevantes para influir en las reglas bajo las cuales se produzca la práctica.

Por lo que en definitiva, aun vislumbrando la asimetría existente en términos de capacidades, la incógnita a revelar se situaba en torno a la justificación y sentido del por qué se debía alcanzar un desarrollo que poseía una perspectiva particular de los agentes promotores del proceso.

3.1 Teoría de la Modernización: yo sé; tú aprendes. Promoción institucional de una idea particular.

“[El desarrollo es]... como una ráfaga de viento que arranca a los pueblos de sus pies, lejos de sus espacios familiares, para situarlos sobre una elevada plataforma artificial, con una nueva estructura de vida. Para sobrevivir en este expuesto y arriesgado lugar, la gente se ve obligada a alcanzar nuevos niveles mínimos de consumo, por ejemplo, en educación formal, sanidad hospitalaria, transporte rodado, alquiler de vivienda”..⁷⁹

Ivan Illich en Naredo & Gómez-Baggethun (2012, pág. 358).

Al indagar mínimamente sobre el origen de las ideas que configuraron y que mayor influencia tuvieron en la promoción del concepto de desarrollo en la CI, la corriente teórica que aparece en primer término, por su influencia en los postulados de los países occidentales, fue la llamada Teoría de la Modernización.

⁷⁹ Véase I. Illich, 1992, *Needs*, en W. Sachs (ed.), *The Development Dictionary. A Guide to Knowledge as Power*, New Jersey, Zed Books Ltd, Londres, 1992, p.96. (traducción al castellano: *Diccionario del desarrollo*. Cochabamba, Bolivia, Centro de Aprendizaje Intercultural CAI, 1997) citado en Naredo & Gómez-Baggethun (2012, pág. 358).

Con origen en las escuelas estadounidenses de pensamiento, las cuales poseían una clara tendencia a situar la variable económica como aquel factor que determinaba el desarrollo, la Teoría de la Modernización adquirió protagonismo al difundir un modelo descriptivo del cómo una sociedad podía reformular su comportamiento social para alcanzar la categoría de desarrollado, señalando las causas concretas que eran características de sociedades en fase de sub-desarrollo (Ornelas, 2012; Ornelas, 2009).

Indicaba la teoría que para superar la fase de subdesarrollo los Estados debían llevar a cabo un rediseño estructural, motivado y fijado por la consideración de que el factor por el cual en el mundo unos Estados habían sufrido un proceso de diferenciación y habían alcanzado el desarrollo mientras otros no, poseía una explicación clara: el crecimiento económico (Sánchez, 2005; Ornelas, 2009). El no crecer fue considerado como el limitador que, claramente, dificultaba la instauración de un modelo de economía que fue designado como ideal: la economía de mercado. Se afirmaba que el crecimiento actuaba como motor impulsor del mecanismo desarrollista y era el elemento que había que atender, ya que proporcionaría con su impulso el resultado aspirado que motivaba el ejecutar las prácticas: el bienestar.

La misión occidental dedicó esfuerzos al promover la rápida expansión del modelo de economía de mercado, a través de la promoción de prácticas que significasen dar impulso al crecimiento del PIB de los Estados subdesarrollados. Se recomendaba que las reformas a adoptar por los Estados en desarrollo para alcanzar el bienestar debían centrarse en aquellas que diesen impulso a ciertos sectores del comercio, lo que provocaría que aumentase la producción y los servicios en los territorios subdesarrollados y como consecuencia de ello, automáticamente, se aumentaría el valor agregado de los productos producidos hasta la fecha, con lo que aumentaría la ventaja comparativa en el mercado internacional.

De este modo se incentivaba la activación de un mecanismo, en el que el primer acto que se debía realizar era abordar una transformación tecnológica de los medios de producción, para lo cual se requería capital. Al no disponer de éste los Estados en desarrollo, debían acudir a los mercados externos. El único requisito a cumplir por parte de los Estados en desarrollo para adquirirlo era el de eliminar aquellas barreras políticas, que ya había indicado Stanley (1939), e implantar políticas favorables a la entrada de capitales por medio de la IED. Una vez realizado este requisito, la aplicación del modelo lograría el impulso

industrial del Estado o región y automáticamente se implementarían los mecanismos y progresivamente se verían los resultados hasta alcanzar la categoría de Estado desarrollado.

El postulado modernizador construía su argumentación a partir de la premisa de que la mecanización y tecnificación agraria, y el consecuente incremento de la productividad de las actividades económicas, provocarían un crecimiento económico; los beneficios obtenidos de dicho proceso serían distribuidos entre la sociedad a través de la propia economía de mercado y, siguiendo el esquema indicado, se mejorarían los niveles de vida del Estado o región receptora.

A este respecto, el aspecto que se debe señalar, y que contiene mayor relevancia por subyacer en este esquema, es el hecho de que se situaba al mercado como el mecanismo regulador en la distribución y la mejora de las condiciones de los Estados, ya que se afirmaba que a través de su propio funcionamiento se produciría una distribución de los beneficios en el contexto internacional y nacional.

En cierto modo, el concepto de desarrollo se ligaba, indivisiblemente, con el crecimiento económico. Autores como Joseph A. Schumpeter en su artículo *Problemas teóricos del desarrollo económico* (1958), trataron de evidenciar la presencia de esta conexión. Y como señala el profesor Jaime Ornelas a este respecto: “...la identidad entre crecimiento económico y el desarrollo, o “progreso económico” como lo llamaba Schumpeter, ni si quiera merecía discutirse” (Ornelas, 2012, pág. 46).⁸⁰ De hecho, en la Teoría de la modernización es difícil distinguir el uso diferenciado entre el concepto de desarrollo y el crecimiento económico e incluso en muchas ocasiones hubiese sido posible que los términos fuesen utilizados de manera sinónima.

La discusión sobre cómo se produciría la distribución de beneficios, que impulsaría la reducción de la desigualdad, fue dejada de lado en las teorías desarrollistas. Y aunque en los discursos sí se hacía referencia constante al bienestar, se enunciaba abiertamente que el objetivo principal no era una reducción de asimetrías de carácter interno. Más bien, el desarrollo podría haber sido definido como un proceso que disociaba entre los aspectos internos y externos de los Estados que se adhiriesen a las prácticas, ya que la reducción de

⁸⁰ A este respecto señala J. Ornelas (2012) que Schumpeter sólo encontraba como determinante el crecimiento económico cuando afirmaba que “...sólo cuando ese comportamiento es positivo se puede hablar de desarrollo” (Citado en Ornelas (2012, pág. 46)).

asimetrías internas no se presentaba como un problema a corto plazo. Por el contrario, se afirmaba que la propia economía reajustaría este factor automáticamente a largo plazo.

En esta línea se encontraban autores como Ragan Nurske (1953), Paul Baran (1957) o Arthur Lewis (1971), los cuales sostuvieron que el eje central del desarrollo era la acumulación de capitales, no la distribución de éstos.

“En primer lugar, deberá notarse que **nuestro tema es el crecimiento y no la distribución. Es posible que crezca la producción y, sin embargo, que la masa del pueblo se empobrezca.** Tendremos que considerar la relación entre el crecimiento y la distribución de la producción, pero nuestro interés primordial estriba en analizar el crecimiento y no la distribución” (Lewis, 1971, pág. Introducción). [**Negrita propia**].

Las publicaciones que elaboraron los autores citados, en donde se justificaba la aplicación del modelo modernizador, presentan evidencias claras de que la reducción de las asimetrías internas no era el objetivo del modelo de desarrollo al que ellos se adherían. Entendían que el asunto era el crecimiento económico, no la promoción de la igualdad.

La atribución al factor crecimiento no tuvo origen en que no se pensase en las posibles variables con capacidad para influir en el desarrollo. Sino que se creyó que dentro de aquellas que componían “la gama de opciones humanas”, e incluso reconociendo la relación y rol causal que suponían diferentes aspectos de la vida en el desarrollo, el concentrar la energía en el crecimiento de PIB era la tarea debida, porque estaban convencidos que éste era el factor que, en palabras de Lewis: “...da al hombre un mejor control sobre su entorno, y por ende incrementa su libertad”⁸¹ (Citado en Anand & Sen (1994, pág. 12)).

3.1.1 La Teoría de la Modernización: hombre feliz, hombre que consume. Fases para construir una sociedad “feliz” según W.W. Rostow.

Si bien han sido enumerados algunos de los autores que realizaron trabajo sobre la pertinencia de promover el crecimiento económico como meta social, el autor que describió el modo y obtuvo mayor difusión enumerando las fases que debían realizar las sociedades subdesarrolladas para alcanzar el desarrollo fue Walter Whitman Rostow. Autor

⁸¹ Traducción propia a partir de: “...gives man greater control over his environment, and thereby increases his freedom” (Lewis (1955) Citado en Anand & Sen (1994, pág. 12)).

del libro *The stages of the Economic growth: A non-communist manifest* en 1960, fue el máximo exponente de la Teoría de la Modernización, al elaborar un análisis integral del proceso económico que debían afrontar los Estados subdesarrollados. En el cual indicaba aquellos factores que, según su criterio, eran causa de la ausencia de crecimiento económico: los aspectos sociológicos, políticos, institucionales, culturales e históricos. Es decir, la sociedad en su conjunto.

El desarrollo en el modelo de Rostow es presentado como un proceso de transformación necesario para alcanzar el estado de los países desarrollados, tanto en cuotas producción como en valores sociales. Lo peculiar, y asunto que ha despertado mayores críticas en su planeamiento, fue el que Rostow afirmase que las sociedades son constituidas linealmente. Es decir, basaba sus recomendaciones en la convicción de que todos los seres humanos en comunidad construían sus sistemas siguiendo un modelo de conducta (Ornelas, 2012; Ornelas, 2009). Por lo que, aquellos lugares que no entraban en la categoría de desarrollados debían adoptar los modelos de conducta (prácticas, reglas, valores, etc...) presentes en las estructuras de las sociedades desarrolladas, con el objetivo de agilizar su proceso de mutación y lograr que su comunidad accediese a los niveles de vida adecuados presentes en las sociedades occidentales.

Rostow ideó su postulado sosteniendo como premisa que aquellos Estados que se encontrasen en fases preliminares al desarrollo occidental, debían esmerarse en aprender e interiorizar que: **el ser humano basa su percepción de felicidad y sentido de existencia, a partir de la asimilación de que aquello que da sentido a la vida es el deseo de acumulación.** Una vez que esto sea apropiado, el modelo que resulta de esa estructura ideacional incentivará el ahorro y el consumo. Factores que serán requisitos elementales para lograr el crecimiento.

Con la premisa ideológica señalada, actuando como pilar articulador de la construcción de una sociedad desarrollada, Rostow indicó que el estado ideal se había ido construyendo al pasar por diversas fases escalonadas, hasta alcanzar la etapa en la que se encontraban los Estados desarrollados. En donde, analizar su ascenso permitiría extraer información del cómo se había dado este ascenso, lo cual indicaría a los demás Estados y regiones qué camino debían seguir.

Rostow elaboró un auténtico “*manifiesto*”⁸² que serviría a toda sociedad para identificar la fase en la que se encontraba. Por lo que si una sociedad había sido categorizada como subdesarrollada y quería avanzar hacia el desarrollo, ésta podría detectar donde se encontraba mediante un análisis que incluyese las variables indicadas. De modo que el “*manifiesto*” permitiría abordar la tarea de elaborar un mecanismo determinado y acometer las reformas estructurales oportunas en aras de ascender los escalones del desarrollo. La primera: las ideas de cómo ser.

Las cinco diferentes fases que se deben superar para alcanzar el desarrollo que Rostow estableció:

- **La primera etapa es “*la sociedad tradicional*”:** La estructura económica “...se desarrolla dentro de los límites de las funciones de producción, basados en la ciencia y en la tecnología pre-newtonianas y en actitudes pre-newtonianas respecto del mundo físico”⁸³ (Rostow, 1960, pág. 4). La economía se muestra como una actividad de subsistencia dentro de esta etapa, en la cual la producción se destina al consumo de los productores y no tanto para el mercado, en donde predomina el trueque como medio de negociación. Son sociedades arcaicas en lo económico, lo social y lo cultural, con limitada productividad cuando no escasa; la estructura económica se basa en la producción agraria y en la posesión de latifundios, empleando la mayoría de los recursos en la agricultura; los valores y creencias que predominan son arcaicos, siendo las perspectivas de generaciones futuras iguales a las precedentes.

Rostow asocia con la “*sociedad tradicional*” un tope en el nivel de producción per cápita, por lo que como el objetivo del individuo es la acumulación y el consumo, esta sociedad debe abordar transformaciones profundas en busca de un mayor grado de felicidad.

- **Segunda etapa las “*Condiciones previas al take off*”:** Se impulsa la creación de un Estado que se presente como módulo de unión en la comunidad, que regule las instancias administrativas y organizacionales y a su vez sea brazo ejecutor de todas ellas. Asimismo, el Estado debe ser el agente que provea el impulso inicial al proceso de crecimiento económico, y será en ese contexto en el que surjan los denominados “*Capitanes intrépidos*”, hombres empresa que asumirán

⁸² Este libro se presentó como una alternativa a la interpretación marxista-materialista de la historia que se titulaba “El manifiesto comunista” (Ornelas, 2009).

⁸³ Traducción propia a partir de: “...is developed within limited production functions, based on pre-Newtonian science and technology, and on pre-Newtonian attitudes towards the physical world” (Rostow, 1960, pág. 4).

riesgos e impulsarán la expansión del comercio. Ese proceso implica que se incrementa la especialización del trabajo y se generan excedentes de los productos primarios básicos. Lo que causa que se incrementen las rentas que son canalizadas hacia el ahorro, que a su vez financia los préstamos para el gobierno y el sector moderno.

- **La tercera etapa el “Despegue o *“Take Off”*”**: En esta fase es donde Rostow asume que las sociedades pierden los miedos y obstáculos morales contrarios a un crecimiento permanente; la industrialización se acelera, migraciones, empresas; las ciudades comienzan a crecer debido a que la clase empresarial se expande a todos los sectores de la economía posibles; y el sector privado aumenta longitudinal y verticalmente. Pero lo más trascendente se produce en lo institucional, ya que aparecen instituciones políticas y sociales acordes al proceso industrial. Por último, en el aspecto económico el crecimiento se muestra auto-sostenible y aumenta el ahorro para inversiones futuras.
- **La cuarta etapa denominada “*drive to technological maturity*”** (Algo así como “camino hacia la madurez tecnológica”): Caracteriza a esta etapa Rostow por el aumento de la presencia tecnológica en la sociedad, lo cual provoca y estimula la diversificación de la actividad económica y amplía las oportunidades para la inversión. La economía tenderá a producir un mayor número de bienes y servicios y será menos dependiente de las importaciones.
- **La quinta etapa se conoce como “Alto consumo en masa” o “*high mass-consumption*”**: Se avanza de una sociedad basada en las manufacturas a otra de servicios. El Estado alcanza un estado de Bienestar “*Welfare*”. De modo que, a causa del crecimiento se producirían efectos de reajustamiento social en el que la desigualdad, la pobreza y la marginación serían mínimas en esas sociedades.

Fuente: Elaboración propia a partir de (Rostow, 1960, págs. 4-80).

Una vez presentado el modelo de Rostow surgieron voces contrarias y se constituyó cierta corriente crítica. Fue amplia. E incluso por parte de aquellos que daban por válido y como un suceso “natural” la linealidad expuesta en su modelo, se cuestionó el que se diese una composición estructural en la que se señalaba el fin del desarrollo claramente. Los críticos se preguntaron: ¿qué sucede con el desarrollo de las sociedades desarrolladas?; ¿han llegado al tope del desarrollo, o seguirán avanzando?⁸⁴ Cuestiones que el autor no desvelaba en su “*manifesto*”, ya que no predijo ninguna fase que no hubiese sido alcanzada por una sociedad

⁸⁴ Estas cuestiones fueron planteadas desde diferentes círculos. Véase por ejemplo Baran & Hobsbawm (1978).

anteriormente. Lo que indicaba que, en su opinión, las sociedades occidentales habían logrado evolucionar hasta alcanzar la cumbre del desarrollo⁸⁵.

Al observar las fases que presentó Rostow, primeramente, se aprecia que el subdesarrollo es descrito como una etapa de tránsito por la que todas las sociedades han de pasar (Ornelas, 2009; Santos, 1974; Sunkel, 1973). Esto se evidenciaba al presentar el subdesarrollo como, esencialmente, la carencia absoluta de recursos y de tecnología, e indicando que este hecho había sido el resultado de las bajas tasas de ahorro e inversión. Factores ambos que componían el principal elemento que actuaba de freno y dificultaba que los Estados entrasen en la fase de “*despegue*” (*take – off*). En donde, la solución prescrita era abordar la transformación de las actividades primarias en las regiones, que eran las que poseían mayor peso. Al considerar que estas actividades contribuían de forma escasa a la generación de PIB, a las exportaciones y al empleo (Ornelas, 2009, pág. 15). Aunque sin hacer en ningún momento referencia a las diferencias de valor de los productos, asumiendo Rostow que los precios son “justamente” determinados por el mercado.

Mediante la aplicación de las medidas presentes en el modelo se lograría que los países subdesarrollados, debido a la transferencia de recursos y tecnología, dilapidasen la divergencia existente entre las naciones desarrolladas y aquellas en vías de desarrollo. No obstante, en cuanto al asunto de la distribución de capitales, tanto entre los Estados (desarrollados y subdesarrollados) como en su interior, consecuencia de la posible acumulación de capital cuando comenzasen a crecer, Rostow indicaba que se solventaría automáticamente, ya que se produciría un efecto de distribución entre los países a medida que uno acumulase capital, mediante la lógica de “cuando la marea sube, todos los botes suben con ella” (Valcárcel, 2006, pág. 7). Efecto que aseguraría que se alcanzase el “estado de bienestar” (Rostow, 1960).

Otra de las cuestiones criticadas del modelo se refería al determinismo presente en el postulado de Rostow. Ya que el modelo no aclaraba las determinantes concretas a las alternativas asequibles que poseía cada sociedad en cada momento histórico, que es lo que define el profesor Jaime Ornellas (2009) como: “...aquello que explica la índole de las metas que ésta se fija en distintos periodos del desarrollo histórico” (Ornelas, 2012, pág. 50). Esto en referencia clara a los deseos que los hombres ambicionan en cada sociedad,

⁸⁵ La postura de Rostow no indica que pueda producirse otro proceso a partir de la etapa final ya que elaboró un análisis de corte descriptivo, y no se atisba un tono de corte político como podría encontrarse en los escritos de Marx (Howe, 2005).

época y momento (Baran & Hobsbawm, 1978). Es decir, se aludió a que los anhelos que se crean en los individuos no tienen por qué estar creados de una única manera y modo, y no todas las sociedades y fases aspiran a construir una sociedad basada en proyectos en los que el ideal de felicidad sea la acumulación (Ornelas, 2009). Sin embargo, Rostow y su idea sobre el mundo se construyen a partir de la premisa de que los individuos son similares y poseen ambiciones semejantes.

En todo caso, hay que señalar que el ideal desarrollista *Rostowniano* tuvo gran impacto en las instituciones internacionales y se divulgó a través de los OOI como el BM, el FMI o las NNUU y sus diferentes organismos. Estos agentes detentaron cierta potestad para adecuar su actuación a este objetivo, mediante el fomento discursivo y la aplicación de este modelo a los países en desarrollo. La capacidad para influir y determinar las prácticas del modelo se hizo palpable a través de los instrumentos utilizados para el fomento del desarrollo en la época, como fueron: los Planes Marshall (1947-1951)⁸⁶, Plan MacArthur (1951)⁸⁷, o la denominada Alianza para el Progreso (1961), propuesta por parte del gobierno estadounidense para América Latina (entre los más relevantes) (Calderón Vazquez, 2008, pág. 18).

3.1.2 La transformación social necesaria para ser “desarrollado”: metodología presente en la Teoría de la Modernización.

El aporte sociológico a la Teoría de la modernización provino de la escuela Estructural Funcionalista, en la que se destacó en esta época, y como heredero de las teorías elaboradas tanto por Émile Durkheim como Herbert Spencer, un autor por encima del resto por su aportación⁸⁸: Talcott Parsons.

A parte de presentar diversas publicaciones⁸⁹, el documento que abordó el análisis del desarrollo fue *Estructura y proceso en las sociedades modernas* (1966). En el que, a través de un ejercicio analítico, el autor mostraba “herramientas” analíticas que permitían evaluar sociedades e indicar qué reformas debían ser abordadas para impulsar el nivel industrial mínimo, comenzar a desarrollarse económicamente e iniciar el camino al desarrollo.

⁸⁶ Un buen trabajo sobre el Plan Marshall Hogan (1987).

⁸⁷ Para conocer en profundidad el alcance del “Plan McArthur” véase O’Ballance (1965).

⁸⁸ Entre los autores que elaboraron postulados similares se encuentran Robert Merton (*El análisis estructural en la Sociología* (1975)) o Hostelitz (1962).

⁸⁹ Autor de ensayos como: *Development like action* (1937); *La estructura de la acción social* (1937); *El sistema social* (1951) o *Estructura y proceso en las sociedades modernas* (1966).

Mediante un análisis histórico de los cambios que habían sufrido los Estados “desarrollados”, Parsons señaló cuales eran los diversos roles que debían desempeñar los agentes sociales, enumerando los componentes a reformar estructuralmente e indicando la importancia de cada uno de los diversos aspectos durante el proceso de transformación. En donde, mediante la observación, trató el autor de detallar cómo se había producido el proceso de mutación que había permitido a algunos Estados haber alcanzado la etapa del desarrollo.

Partiendo de la premisa modernizadora que situaba el desarrollo económico como el objetivo de todas las sociedades, Parsons afirmó que todos los agentes implicados en la operativización del desarrollo debían comprender y asimilar que la libertad del sistema de mercado era esencial en el camino al desarrollo económico. Conclusión a la que llegó asumiendo como premisa el que las primeras fases el desarrollo no podrían haber surgido sin que la empresa estuviese libre de ciertos tipos de control político, ya que según Parsons, si bien el Estado debe ser el agente impulsor del proceso en primera instancia, una vez estructurado el intercambio debe de auto-limitarse cediendo competencias a las empresas⁹⁰. Es decir, la meta de toda sociedad debía ser adoptar reformas para instaurar el libre mercado en su fase superior.

Si por una parte Parsons indicaba la pertinencia de que el Estado subdesarrollado redujese su papel en aras de la empresa⁹¹, por otra indicaba que éstos no debían producir ideas propias. Lo adecuado era optar por apropiarse de las presentes en las sociedades desarrolladas y aprovechar las mejoras que los otros habían desarrollado. Bueno, más bien y en términos de Parsons, no de los Estados sino el del Estado líder, el cual debe ser reconocido por todos y debe promover que se le imite.

”Existe ya **un sistema industrial pujante**. Esto significa dos cosas: en primer lugar, que la presencia de una economía industrial en ciertas partes del mundo **señala las condiciones bajo las cuales cualquier nación debe en nuestros días existir** y desarrollarse, y en segundo lugar, presenta un modelo que otros pueden seguir” (Parsons, 1966, págs. 124-125) [Negrita propia].

⁹⁰ Señalar que en sus textos Parsons divaga entre una idea y otra, como reflejan algunas afirmaciones sobre las diversas fases donde se afirma: “...la autoridad política es generalmente un organismo necesario y que, bajo ciertas condiciones, lejos de obstaculizar, es lo más probable que facilite el proceso” (Parsons, 1966, págs. 124-125). Aunque se debe indicar que éste se postula mayoritariamente por la no intervención del Estado como comportamiento ideal para impulsar el desarrollo.

⁹¹ En este sentido señalar que el postulado coincidía con el conocido como “Darwinismo Social”, el cual había analizado y mentado por Herbert Spencer. Véase un análisis de esta indicación en Elliott (2003).

Una idea relevante que subyace en los textos de Parsons es que los Estados desarrollados son aquellos que poseen dominio; superioridad; son guía; ejercen de salvador del resto y, además, era deber asumir este hecho. Del mismo modo, los Estados en desarrollo debían asumirlo y establecer buenas relaciones con ellos.

La cuestión es muy relevante, ya que el autor atribuye unos deseos concretos a las sociedades sub-desarrolladas. Es decir, Parsons concluye que todas las sociedades ambicionaban vivir como los Estados desarrollados. Por lo que deben cooperar y mostrarse dispuestos a ser dirigidos y, en cierto sentido, deben asumir su inferioridad ideológica.

“El dominio del sistema de dos clases, con el **grupo superior disfrutando prerrogativas de poder político**, y generalmente también de prestigio religioso, y el **inferior, compuesto principalmente por campesinos y algunos artesanos y pequeños comerciantes**. En tal situación, con importantes excepciones, **la producción económica está controlada**, pero no activamente ‘dirigida’ **por los grupos superiores**” (Parsons, 1966, pág. 126) **[Negrita propia]**.

En cuanto al cómo abordar la transformación, el método que promovía Parsons incidía en la importancia de educar a las élites de los diversos Estados con conocimientos cargados de ideas modernizadoras. Indicaba que una vez sucedido esto, las ideas modernizadoras se divulgarían por parte de estas élites mediante su acción y los valores, los status y los roles, articularían la gobernación de la acción social mediante su difusión. Por lo que un Estado en desarrollo que quisiese transformarse y alcanzar el desarrollo, debía promover el que un pequeño grupo social poseyese la capacidad de influir en la reformulación de las ideas de estas élites mediante la educación y el apoyo a la alfabetización, utilizando el Estado como agente impulsor del proceso. Ya que una vez instruido el grupo de elite estaría capacitado para actuar, ya fuere individualmente o colectivamente, con la perspectiva modernizadora interiorizada. De modo que las prácticas que ejecutasen éstos divulgarían un cambio de mentalidad, que permitiría la transformación de las ideas y los deseos sociales, situando a la sociedad en el camino al desarrollo.

Parsons indicaba que había que tener en cuenta el cómo operaban las sociedades al introducir los elementos modernizadores, haciendo conscientes a los percusores de los cuatro ejes fundamentales en toda sociedad:

- a) **Universalismo:** es la capacidad de adaptación que corresponde a la necesidad de toda sociedad de ajustarse a sus condiciones objetivas de existencia. Eje relacionado con la racionalidad (en sentido weberiano⁹²) y con la eficiencia técnica. Es decir, sería la capacidad de uso de medios adecuados para alcanzar determinados fines, a costos “adecuados”.
- b) **Definición de objetivos:** afirmaba Parsons que toda sociedad se propone alcanzar ciertas metas colectivas, tratando de que esas metas prevalezcan sobre los intereses individuales o sectoriales. La definición de esos objetivos será lo que determine la configuración de la finalidad social y eventualmente, la satisfacción del objetivo logrado. Por lo tanto, las reglas de ejecución que se den como sociedad determinarán las prácticas y el funcionamiento.
- c) **Integración:** La solidaridad social es un valor primordial. Las acciones sociales serán evaluadas en la medida en que favorezcan o impidan la integración de los individuos en la sociedad y su mutua solidaridad.
- d) **Mantenimiento del modelo:** Cada sociedad tiene un modelo cultural propio, con sus propias estructuras y reglas, y tienden a conservarlo. En este aspecto, el valor supremo es el tradicionalismo.

Fuente: Elaboración a partir de (E.J & Arnoletto, 2007).

En cierto sentido la categorización de Parsons aportó cuestiones relevantes, ya que por una parte su esquema sitúa las metas colectivas por encima de deseos particulares, y por otra indica que una sociedad debe ajustarse a su posición objetiva respecto a los otros agentes. A partir de ello, debe tratar de asimilar la capacidad que su posición le otorga para lograr alcanzar el espacio en donde poder operar en el contexto internacional y alterar su rol manifestando sus deseos. Es decir, de acuerdo con sus objetivos debe jugar sus cartas (capacidades) para alterar las reglas dentro de la estructura en la que se encuentra. Por lo que la teorización del desarrollo debe atender a estas demandas y crear espacio para que los Estados articulen estos mecanismos.

Pero existe un riesgo claro en el esquema que no indica Parsons, el hecho de que sea construida una estructura en donde el sacrificio de los agentes no relevantes en la sociedad se reproduzca sistémicamente, asimilando todos los agentes que el propio proceso conducirá a la obtención de las metas colectivas. Y en caso de que el esquema nunca

⁹² Sentido en donde la acción social es orientada racionalmente por cada agente bajo su concepción de la realidad social. Lo que configura sus propios fines, intereses y metas.

desvele ni el modo ni el tiempo del sacrificio, se limite aquello que se puede exigir a una parte del conjunto por el bien común. Conclusión ante la que cabría preguntarse, tanto en términos estatales como internacionales, ¿qué mínimos colectivos deben ser preservados en cualquier esquema?

Por otra parte, en Parsons se observa que aquello en lo que debían trabajar los promotores de la modernización era en reconfigurar las metas individuales de los componentes de la sociedad, mediante la promoción de objetivos que sean percibidos como necesarios, pertinentes y posibles, para abordar una transformación dentro de un proceso que encaje en las condiciones objetivas de existencia de la sociedad receptora. Es decir, indicando donde debía centrar su análisis social la estructura desarrollista para difundir sus prácticas. Parsons aportó técnica.

Antes de finalizar este breve epígrafe se ha querido enunciar a otro autor de corte social perteneciente a la escuela modernizadora: Berthold Frank Hoselitz. Éste también ligaba el desarrollo con el crecimiento económico, así como entendía el desarrollo como un proceso por etapas.

Al igual que los otros autores de la escuela, Hoselitz promovía el que los Estados en vías de desarrollo implementasen medidas que supusiesen una supresión de aquellos obstáculos que les diferenciaban de los desarrollados, al sostener que mediante esta acción se impulsaría y despejaría el camino hacia el desarrollo. Hoselitz indicó que, concretamente, dos cuestiones eran las que incidían claramente en que los Estados se encontrasen en la fase de subdesarrollado: una era la carencia de formación adecuada, lo que provocaba escasez de capitales humanos; y otra, la ausencia de un mercado externo amplio, lo cual limitaba la operatividad de este grupo de Estados.

En cierto modo Hoselitz se alineaba con el postulado indicado por Rostow, ya que también afirmaba que no debía ser olvidado que las naciones avanzadas también habían pasado por sus respectivas fases⁹³, así como con la corriente sociológica modernizadora, al situar el elemento de los valores en primera línea del debate, indicando que existía una ausencia de los occidentales en otros Estados. Razón por la cual éstos necesitaban atravesar por un proceso de aprendizaje.

⁹³ Hoselitz fue otro autor que realizó recomendaciones del cómo debían de actuar ciertas áreas en desarrollo, y entre ellas recomendaba a América Central la Unión en confederación para fortalecer su mercado interno.

“Lo que **se necesita**... no es simplemente una teoría del desarrollo en términos puramente económicos, sino **una doctrina que relacione dicho desarrollo con la evolución cultural**...” (Hoselitz, 1962, págs. 4-5).

Pero el motivo de su citación no es la coincidencia con los otros postulados, es que en su análisis de la realidad global, indicaba la pertinencia de analizar la existencia de diferentes particularidades económicas, culturales y sociales, que suponían un claro obstáculo para el desarrollo. Ante lo cual, Hoselitz propuso que los modelos de desarrollo se personalizaran y atendiesen a las diferentes realidades que presentaban los Estados subdesarrollados, por entender que la diversidad era característica de las sociedades heterogéneas. Fue este motivo el que centró su crítica a las teorías que en la época trataban de generar un modelo similar para todas las sociedades, mostrándose a favor de que, en aras de ser eficaces, se elaborasen ciertos cambios en el modelo tomando en cuenta las particularidades de cada sociedad. Es decir, promulgaba que se adoptase un modelo particularizado para cada Estado que fuese capaz de transformar las ideas de sus gentes, en el que se señalase la vinculación de las variables económicas con las sociales. Afirmando que para que el desarrollo llegase a los países en vías de desarrollo éstos debían instaurar el modelo occidental (Hoselitz, 1962).⁹⁴

3.1.3 Influencia modernizadora en América Latina y el Caribe.

En América Latina, el autor que destacó por su defensa de las teorías modernizadoras fue Gino Germani. Éste expuso sus reflexiones y recomendaciones en un análisis de la Teoría de la Modernización en su obra *Política y sociedad en una época de transición. De la sociedad tradicional a la sociedad de masas* (1965).

Coincidiendo con Rostow, Germani afirmaba que el desarrollo era una cuestión de fases. Se debía aceptar el hecho de que el desarrollo era un proceso primeramente económico, en donde la aplicación de la técnica era fundamental para lograr desarrollarse económica y socialmente. Desde su perspectiva no podía abordarse un desarrollo eficaz si éste no era de carácter integral, puesto que si el desarrollo consistía en una réplica de los modelos estructurales instaurados en las sociedades “desarrolladas”, el proceso no podía carecer de aspectos particulares de un todo. Por lo tanto, la transformación no había de venir sólo acompañada de un aspecto económico, sino que requería adoptar el modelo íntegro, que

⁹⁴ Autores como Staley (1954) o Spengler (1954) apuntaron a la misma causa indicada por Hoselitz (1962), e incluso manifestaron que se debía copiar el modelo Estadounidense.

contuviese el tipo de sociedad allí construido, con valores, conductas, reglas, etc.... (Germani, 1965).

“La complejidad del proceso y la variedad de formas que adoptó en diferentes condiciones históricas, culturales, sociales y económicas exigen que el análisis discrimine entre los diversos procesos que en su conjunto componen la transición social. En este sentido distinguiremos aquí los tres procesos componentes más importantes: desarrollo económico, modernización social y modernización política” (Germani, 1969, pág. 17).

Germani indicaba que el desarrollo económico era el factor con mayor relevancia dentro de la transformación estructural que debían sufrir los mecanismos funcionales en una sociedad para lograr un “crecimiento sostenible”. Es decir, se requería un proceso de transformación integral y estructural de la sociedad, que construyese un nuevo lugar en donde la economía desarrollada se caracterizase por:

- “Empleo de fuentes de energía de alto potencial y de tecnología de alta eficiencia.
- Mecanismos apropiados.
- Adecuada diversificación de la producción.
- Predominio de la producción industrial sobre la primaria.
- Apropiada mezcla de industrias de capital y de bienes de consumo.
- Alta productividad per cápita.
- Predominio de actividades intensivas en capital sobre las intensivas en trabajo.
- Mayor independencia del comercio exterior.
- Distribución más igualitaria del Producto Bruto Nacional”.

Fuente: (Valcárcel, 2006, pág. 10)

Si bien Germani indicaba cómo debía abordarse el proceso de transformación en el marco industrializador, indicando varios elementos que debían cumplirse, parte de esta transformación camino al desarrollo hacía referencia concreta a la distribución del capital entre los ciudadanos. Pero si bien esto se indica en su discurso, no se encuentra ningún método aplicable o promotor para que esto suceda en su obra y parece, al igual que los otros autores modernizadores, dejar este proceso al papel que juegue el mercado. Sabio mercado.

3.1.4 Reflexiones acerca de los modernizadores.

Un análisis mínimo de la corriente modernizadora ofrece evidencias del determinismo evolutivo subyacente en las ideas ofertadas, ya que la teoría preconice una condición homogénea en los deseos de los humanos. Por lo que indica lo apropiado de converger globalmente mediante la instauración de un modelo de conducta desarrollado: el occidental.

Es decir, en la teoría el desarrollo se presenta como la disposición global de las características particulares de los Estados desarrollados⁹⁵, mostrado como un mecanismo que acelerara una fase que será alcanzada a largo plazo inevitablemente, ya que es presentada la disposición de vida occidental como el objetivo de la evolución humana y, además, deseable por todo ser humano. Siendo el modelo de sociedad occidental aquel en el que sistema asegura mejores vidas a sus ciudadanos.

A este respecto cabe rescatar lo indicado Jean-Philippe Peemans (1992), dado que el enfoque modernizador presentó el desarrollo como un proceso “natural” de alcance global que estuvo caracterizado por:

- **Universalismo.** El esquema evolucionista que propone tiene validez universal. El supuesto: existe un modelo único de desarrollo. Lo que ha pasado en los países capitalistas da las pautas, la perspectiva a seguir a los países subdesarrollados que desean abandonar su condición de tales.
- **Etnocentrismo.** El desarrollo de occidente es el más elevado y sus instituciones las más necesarias. Las sociedades del Tercer Mundo no son vistas como posibilidades diversas e incomparables de modos de vida, sino colocadas en una única vía "progresista".
- **Dicotomismo.** Existen dos sectores en la sociedad: 1) uno moderno que cumple un rol activo en la transformación: 2) y uno pasivo, el tradicional, que impide el desarrollo. El desarrollo es igualado a crecimiento y lo moderno a lo industrial y occidental. Lo tradicional constituye simplemente lo no moderno, deviniendo así en una categoría residual.
- **Evolucionismo.** La modernización implica una larga marcha que pasa por diversas etapas, las que hay que atravesar inexorablemente para llegar al ansiado desarrollo.

⁹⁵ El enfoque de la modernización era entendido como el proceso de cambio que debían emprender América Latina, África, Asia y Oceanía, para reproducir las condiciones características de las naciones desarrolladas: Industrialización, alta tasa de urbanización y educación, tecnificación de la agricultura y adopción de valores: orden, racionalidad y actitud individual. (Valcárcel, 2006).

*(Peemans, 1992)

De acuerdo con lo afirmado por Peemans, el modelo modernizador eliminaba la existencia de otros deseos que no fuesen aquellos que están presentes en las sociedades desarrolladas. Por lo que el proceso, aun en épocas de descolonización, es, en cierto sentido, continuista con los rasgos que caracterizaron las prácticas imperialistas del colonialismo.

A este respecto, podría concluirse que se continúa con las teorías “civilizatorias” que sostuvieron que lo idóneo para los que se consideraron “barbaros”, era civilizarse y hacerse cristianos en épocas de conquista⁹⁶. Es decir, una de las características promovidas por la teoría desarrollista modernizadora es la promoción de una participación social pasiva en la que los ciudadanos deben ser educados en la ideología de consumo que señalaba Rostow, y aprender que su evolución les conducirá a priorizar la acumulación e interiorizar que es éste hecho el que le proporciona felicidad. Presentándose éste elemento como el aprendizaje principal que debe abordar una sociedad subdesarrollada.

3.2 La Comisión Económica para América Latina y la Teoría de la Dependencia: Pensamiento latinoamericano con fijación en la asimetría existente en el origen de la relación y en las capacidades.

Ante el auge del desarrollismo a nivel internacional, en América Latina surgieron diferentes corrientes teóricas que trataron de detectar cuáles eran las causas regionales que no permitían salir del estado de subdesarrollo. Es relevante indicar que el origen de éstas no fue la carga ideológica etnocentrista en el postulado modernizador, que podría ser factor impulsor en una región con una etnicidad y diversidad cultural tan amplia, sino a la ausencia de resultados en la reducción de asimetrías de las prácticas político-económicas que promovían la apertura y la mejora de condiciones para la IED.

El análisis de las causas del subdesarrollo comenzó a ser eje polinizador del pensamiento latinoamericano. No es que no se hubiese producido anteriormente este fenómeno, ya que desde los primeros procesos emancipadores en la región la crítica a la acción externa había estado presente⁹⁷. Pero sin duda, fue ante la institucionalización internacional de esta práctica política-económica (IED), que auguraba una reducción de la desigualdad y la promoción del bienestar internacional, en un contexto global en el que la soberanía era

⁹⁶ Fase analizada en profundidad en el Capítulo IV de ese documento.

⁹⁷ Véase Capítulo II.

presentada como elemento capacitador de toma de decisiones sin presiones externas por parte de las naciones que históricamente habían estado sometidas, en donde se hicieron notar las corrientes críticas, ante la ausencia de los resultados que prometían las teorías del desarrollo. Este hecho, junto con la creciente promoción de instituciones de carácter regional⁹⁸, fueron los dos elementos que determinaron que la crítica política adquiriese mayor capacidad operativa que los movimientos que se habían producido anteriormente a nivel regional.

En este contexto, la mayoría de los líderes de los Estados de Latinoamérica abogaban por abordar el proceso de transformación estructural que requería el desarrollo, como se vio reflejado en la promoción de su práctica en la constitución de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1948. Sin embargo, no creían que este proceso requiriese, únicamente, de la intervención de la variable económica – con las respectivas políticas de acogida- , sino que se decantaban por adoptar mecanismos contrarios a los requerimientos de los inversores, como promocionar el papel de los Estados en desarrollo en la recepción de la IED. De hecho, indicaban que el desarrollo era una cuestión integral y, por lo tanto, que requería de mecanismos que regulasen el impacto de todo proceso.

Artículo 34. Carta constitutiva de la OEA.

Los Estados miembros convienen en que la igualdad de oportunidades, la **eliminación de la pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, así como la plena participación de sus pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo, son, entre otros, objetivos básicos del desarrollo integral**. Para lograrlos, convienen asimismo en dedicar sus máximos esfuerzos a la consecución de las siguientes metas básicas:

- a) Incremento sustancial y auto-sostenido del producto nacional per cápita;
- b) **Distribución equitativa** del ingreso nacional;
- c) **Sistemas impositivos adecuados y equitativos;**
- d) **Modernización** de la vida rural y reformas que conduzcan a regímenes equitativos y eficaces de tenencia de la tierra, mayor productividad agrícola, expansión del uso de la tierra, diversificación de la producción y mejores sistemas para la industrialización y comercialización de productos agrícolas, y fortalecimiento y ampliación de los medios para alcanzar estos fines;

⁹⁸ Señalar que en 1946 se pusieron en marcha las Comisiones Económicas para Europa, Asia y el Lejano Oriente (Estay, 2003, pág. 68).

- e) Industrialización acelerada y diversificada, especialmente de bienes de capital e intermedios;
- f) Estabilidad del nivel de precios internos en armonía con el desarrollo económico sostenido y **el logro de la justicia social**;
- g) Salarios justos, oportunidades de empleo y condiciones de trabajo aceptables para todos;
- h) **Erradicación rápida del analfabetismo** y ampliación, para todos, de las oportunidades en el campo de la educación;
- i) Defensa del potencial humano mediante la extensión y aplicación de los modernos conocimientos de la ciencia médica;
- j) Nutrición adecuada, particularmente por medio de la aceleración de los esfuerzos nacionales para incrementar la producción y disponibilidad de alimentos;
- k) **Vivienda adecuada para todos los sectores de la población**;
- l) Condiciones urbanas que hagan posible una vida sana, productiva y digna;
- m) **Promoción de la iniciativa y la inversión privadas** en armonía con la acción del sector público, y
- n) Expansión y diversificación de las exportaciones.

(OEA, 1948a) [**Negrita propia**].

Con el devenir de los acontecimientos, la práctica de la IED fue apoderándose del centro del debate que ocurría entre las ideas externas de desarrollo y los postulados regionales en ALC, debido, principalmente, a “...los mayores niveles de desarrollo del capitalismo que se daban en América Latina respecto a otras regiones atrasadas, en particular con el hecho de que en una buena parte de nuestros países [ALC] ya había un avance significativo de los procesos de industrialización” (Estay, 2003, pág. 69). Cuestión que incentivaba profundamente la tensión regional con los postulados teóricos modernizadores y, asimismo, abría paso a una fase en la que se teorizaría sobre si la metodología divulgada por los Estados occidentales era eficaz para los Estados receptores o no.

En definitiva, el desarrollo, dados los grandes niveles de desigualdad y pobreza en ALC, se situó como el objetivo primordial de toda práctica política regional, en donde la cuestión siempre la ocupó el modo de lograr dicho desarrollo, nunca o en casos puntuales, la ideología desarrollista (Ornelas, 2009).

3.2.1 Crítica del campo económico y social. El desarrollo ofertado a cuestión: Teoría Cepalina y el papel de la Inversión Extranjera Directa.

En términos temporales, las principales corrientes teóricas cepalinas se asentaron institucionalmente en torno a los años 60 y 70, contando como máximos exponentes a autores como el argentino Raúl Prebisch, a los brasileños Celso Furtado y Helio Jaguaribe, el mexicano Juan F. Loyola, o los chilenos Aníbal Pinto, Jorge Ahumada y Osvaldo Sunkel.

Rápidamente la corriente teórica cepalina adquirió gran relevancia, al instalarse como centro de pensamiento en la cumbre de una institución naciente de ámbito regional. Nació la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)⁹⁹.

Constituida al auspicio de las NNUU, la CEPAL comenzó su andadura en junio de 1948. La institución adquirió una relevancia máxima en términos regionales, al convertirse en la primera organización económica en ALC (únicamente con cobertura sobre AL en esa época), que centraba su esfuerzo en interpretar la situación económica y social de la región. Teniendo como meta el tratar de encauzar el desarrollo de ésta, a través del fomento y aplicación de estrategias y políticas públicas¹⁰⁰.

La producción académica de postulados de la CEPAL significó, en cierto sentido, un revés para las NNUU y aquellos que veían a la institución como un organismo promotor de las teorías modernizadoras del “desarrollo”. Debido principalmente a la contra-teoría que se elaboró desde el interior, que negaba una premisa indicada en las teorías modernizadoras: que el subdesarrollo fuese una fase hacia otra posterior (Ornelas, 2012; Ornelas, 2009).

En este sentido, los autores cepalinos concentraron su teoría en la negación parcial de la Teoría de la modernización, afirmando que el subdesarrollo era una condición propia y particular de la región de ALC (Furtado, 1971; Prebisch, 1963; Sunkel, 1973). Los análisis

⁹⁹ La Comisión se desarrolló como una escuela de pensamiento especializada en el examen de las tendencias económicas y sociales de mediano y largo plazo de los países latinoamericanos y caribeños. La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue establecida por la Resolución 106 (VI) del Consejo Económico y Social, el 25 de febrero de 1948, y comenzó a funcionar ese mismo año. En su Resolución 1984/67, del 27 de julio de 1984, el Consejo decidió que la Comisión pasara a llamarse Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Obtenido de <http://www.eclac.org> (Página Oficial de la CEPAL). (Consulta realizada el 02 de mayo de 2013).

¹⁰⁰ América Latina carecía de una teoría propia institucionalizada sobre el desarrollo y, aunque se disponía de mucha bibliografía sobre el tema, la inmensa mayoría era de producción europea o estadounidense. Esta condición provocó que, en plena situación global de reconocimiento de los Estados y de las regiones, se incitase a los centros de estudios propios de la región a la puesta en marcha de un proceso de investigación empírica sobre la propia realidad latinoamericana (Ornelas, 2009).

fijaron su crítica en la estructura de la SI, manifestando que la principal causa del subdesarrollo era la posición que había ocupado y ocupaba la región en el mercado global. Indicaron que el modelo económico mundial había ido produciendo el desequilibrio existente en términos de internacionales y, a su vez, era a la causa principal de que se perpetuase la asimetría entre los grupos de países categorizados como subdesarrollados y desarrollados recientemente, ya que la estructura internacional había sido constituida, desde el origen, instituyendo las reglas y las prácticas asimétricamente, y ello era la causa primordial de que se diese un contexto de desigualdad. Señalaron que ésta no era corregible si no se abordaba una alteración en la estructura internacional, significándose una nueva construcción estructural, que transformase la relación entre los polos: centro y periferia.

El estructuralismo cepalino indicaba que, en términos de desarrollo, la corrección que había que abordar con prioridad eran los determinantes relacionales entre las partes. Señalando que eran apreciables las reglas relacionales a modificar, simplemente, al observar el proceso de intercambio comercial entre el exterior y la región. En donde el resultado producido por el funcionamiento sistémico de la estructura resultaba en un dibujo en el que unos resultaban beneficiados: el centro, y otros perjudicados: los Estados periféricos (Prebisch, 1963; Sunkel, 1973).

Ante la presencia de las deducciones alcanzadas, la CEPAL trató de elaborar e impulsar un modelo teórico que rebatiese la ideología céntrica y que sustituyese el control ideacional del pensamiento regional, por uno caracterizado en base a la situación regional en el contexto global. Pretensión que se manifestó mediante el impulso a la elaboración de un postulado que divulgase ideas particulares de la región.

Se trató de construir una respuesta al análisis histórico modernizador, sosteniendo que el concepto de desarrollo había sido formulado bajo premisas externas que, desde épocas de conquista, significaba "...que los latinoamericanos abordáramos nuestros problemas con nuestro propio criterio, **sin sujeción doctrinaria alguna**" (Prebisch, 1963, pág. X) **[Negrita propia]**. El impacto teórico del pensamiento cepalino determinó los acontecimientos en los siguientes años en la región.

3.2.1.1 Raúl Prebisch y las recomendaciones de la CEPAL: Industrialización por Sustitución de Importaciones

En la relevancia de la CEPAL como agente influyente y productor de pensamiento divergente influyó de manera determinante la figura del que fuera segundo presidente de la CEPAL: Raúl Prebisch. Principalmente, por el hecho de otorgar un grado institucional a las ideas de pensamiento particular de la región, contraponiéndose a la doctrina occidental. El hecho de que Prebisch hubiese sido formado como economista en escuelas de pensamiento neoliberales, en cierto modo, le concedió, en primera instancia, el acceso a la presidencia de la CEPAL y cierto prestigio regional en sus postulaciones y por ello, su figura se convirtió en un elemento legitimador de los postulados cepalinos (Dosman, 2006).

No obstante, la construcción del pensamiento crítico de Prebisch estuvo determinado por el hecho de haber sido testigo de la *Gran Depresión Mundial* (1929) (Rodríguez O. , 2001). Como el mismo manifestó en la introducción de su libro *Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano* (1963):

“Creía en el libre cambio y en el funcionamiento automático del patrón oro. **Creía que todos los problemas del desarrollo se resolvían por el libre juego de las fuerzas de la economía internacional o de la economía interna.** Pero cuando vino la gran depresión mundial, aquellos años de zozobra me llevaron a ir desarticulando paso a paso todo lo que se me había enseñado...” (Prebisch, 1963, pág. XII) **[Negrita propia]**.

El abandono de las ideas neoclásicas y el acercamiento a la escuela clásica, incentivó el que su postulado mostrase una identificación con la idea funcional de que el desarrollo era determinado por el progreso técnico; éste incentivaría la producción a partir de un incremento constante de los niveles de productividad de la fuerza de trabajo- como mencionó Schumpeter (1958)-, y finalmente el proceso permitiría mejorar la distribución del capital entre la ciudadanía, mediante la subida de los salarios de los trabajadores.

Prebisch encontró en esta argumentación teórica el pilar sobre el que articular una estrategia, en aras de solventar el principal problema de la sociedad latinoamericana: la desigualdad. Continuando, en cierto sentido, la construcción de su postulado con las premisas teóricas que en sus primeros años constituyó el pensamiento de la CEPAL.

“La propagación universal del progreso técnico desde los países originarios al resto del mundo ha sido relativamente lenta e irregular, si se toma como punto de mira el de cada

generación. En el largo periodo que transcurre desde la revolución industrial hasta la primera guerra, las nuevas formas de producir en que la técnica ha venido manifestándose incesantemente sólo han abarcado una proporción reducida de la población mundial.

El movimiento se inicia en la Gran Bretaña, sigue con distintos grados de intensidad en el continente europeo, adquiere un impulso extraordinario en los Estados Unidos y abarca finalmente a Japón, cuando éste país se empeña en asimilar rápidamente los modos occidentales de producir. Fueron formándose así los grandes centros industriales del mundo, en torno a los cuales, la periferia del nuevo sistema, vasta y heterogénea, tomaba escasa parte en el mejoramiento de la productividad. Dentro de esa periferia, el progreso técnico sólo prende en exiguos sectores de su ingente población, pues generalmente no penetra sino allí en donde se hace necesario para producir alimentos y materias primas a bajo costo, con destino a aquellos centros industriales” (NNUU;CEPAL, 1949, pág. 3).

Y es que en sus inicios la CEPAL señaló a la estructura internacional de división del trabajo como causa de asimetría, indicando que ésta imposibilitaba una mejora de la situación económica y social que se perseguía. Por lo que, claramente, indicaban que las reglas de intercambio que habían sido institucionalizadas, estaban instauradas de tal modo que, producían un desequilibrio estructural. Sólo era necesario observar los salarios que se ofrecían en el centro y en la periferia para ratificar el hecho¹⁰¹.

Según los cepalinos, la estructura comercial internacional poseía un funcionamiento claro: a) las economías que resultaban perjudicadas en el proceso de intercambio perdían parte de los beneficios que producía su propio avance técnico; y b) la parte o margen de beneficio resultante era transferido al otro agente que estaba inmiscuido en el proceso de intercambio: los Estados desarrollados, mediante la disminución de los precios de los productos exportados por los países periféricos (las materias primas)¹⁰².

¹⁰¹ Cruzando datos era fácil observar que el ingreso medio aumentaba menos en los países en desarrollo que la productividad del trabajo (Ornelas, 2009).

¹⁰² Indica Ornellas (2009) al respecto que:

“Prebisch concluía que se daba una falta de equilibrio que supuestamente sería idónea para justificar la teoría de modernización y el efecto del comercio exterior y que es la base de la teoría del comercio internacional de David Ricardo. La teoría clásica del comercio internacional, se sustenta en las llamadas ventajas competitivas, principio incorporado a la ciencia económica por David Ricardo (1959:96), quien lo expuso de la siguiente manera: “En un sistema de cambio perfectamente libre, cada país dedicará lógicamente su capital y su trabajo a aquellas producciones que son las más beneficiosas para él [...] Es este el principio que determina que el vino se elabore en Francia y Portugal, el trigo se cultive en América y Polonia, y la quincalla y otras mercancías se fabriquen en Inglaterra”. De esta manera, cada país producirá y comerciará internacionalmente los productos en los que tenga ventajas para producirlo sobre otros países y estos harán lo mismo, con lo que todos saldrán ganando”.

Ante el funcionamiento de la estructura indicado, la CEPAL afirmaba que si ALC era una región exportadora de productos primarios e importadora de manufacturas, dada una estructura comercial en la que los países exportadores de materias primas contaban con menor margen de beneficio en la venta que aquellos que comerciaban con manufacturas, las diferencias de precios entre unos productos y otros provocaba que el mayor margen de beneficio fuese para los países centrales. Y si además, junto con este proceso las importaciones se aceleraban exponencialmente y las exportaciones se iban estancando progresivamente, la tendencia al desequilibrio comercial acabaría llevando a la zona geográfica a una situación de dependencia del exterior en constante aumento (Prebisch, 1963).

Una vez concluido que la región no podía avanzar, si aquellas políticas y reglas constituidas internacionalmente bloqueaban el propio desarrollo promovido por los Estados centrales, el cómo abordar una modificación de la estructura geo-comercial en términos de intercambio era la cuestión a dilucidar. Ante lo que los cepalinos indicaban que lo adecuado para la región, sería establecer medidas que actuasen de forma, más o menos similar, a las restricciones al comercio que poseían los Estados centrales. Es decir, aplicando medidas que alterasen el modelo económico y fomentasen el incremento en cuotas de desarrollo económico, mediante un apoyo a la producción de la empresa regional. Medidas que pretendían implementar un proceso de industrialización interna que procurase el crecimiento económico y, de este modo, lograr avanzar en la dirección de los Estados desarrollados. Por lo que se decidió aplicar el método conocido como Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI)¹⁰³.

Asimismo, los cepalinos veían que con la aplicación de esta medida se presentaba una oportunidad para, poco a poco, adquirir capacidad en términos económicos. Lo que permitiría alterar las relaciones con el exterior y lograr una cierta “emancipación”, al no operar la región bajo las reglas que habían sido impuestas desde el exterior. Medidas que lograrían frenar el que los inversores extranjeros obtuviesen los mayores beneficios de la relación en el intercambio comercial (Prebisch, 1964).

¹⁰³ Esta práctica consistió principalmente en: a) unas políticas industriales activas; b) barreras al libre comercio (aranceles); y c) un tipo de cambio elevado. De este modo se pensó desde la CEPAL que se mejorarían los términos de intercambio que señalaban como causantes de los problemas regionales (Furtado, 1971; Prebisch, 1963; Pinto & Kñakal, 1973; Prebisch, 1976).

A este respecto, algunos de los escritos realizados por Prebisch reflejan claramente la justificación del porqué de las prácticas ISI, así como la metodología aplicar. Es decir, el autor señaló qué tipo de trato “especial” había que otorgar a aquel factor que entendían como estratégico en la relación centro-periferia: la IED.

Medida 1) Se promovió el no aprobar la libre entrada de capitales, por verse éstas como “un brazo” más de los Estados occidentales, desde donde el centro manejaba a la periferia perpetuando su posición dominante. No se valoraba como positiva su participación en la transvase de tecnología de Norte a Sur, ya que concluyeron que la práctica no tenía intencionalidad alguna de realizar un transvase tecnológico que propiciase la mejora de las condiciones de los países del Sur. En palabras de Raúl Prebisch, los países desarrollados “...no propagan la técnica hacia adentro ni tenían porque hacerlo, pues la explotación extensiva del suelo por la gente del país sólo exigía por lo general una técnica rudimentaria” (Prebisch, 1963, págs. 64-65);

Medida 2) Sólo se dejaría entrar aquella IED que fomentase la industrialización regional. Ésta tendría derecho de entrada si trasladaba tecnología no disponible en el país receptor y, a su vez, no competía con las industrias internas de la región. Con esta medida se pretendía que las IIEE fuesen “...un núcleo de irradiación tecnológica...” (Prebisch, 1963, pág. 65), y se utilizase para la promoción de incentivos fiscales, apoyo técnico y financiero (Prebisch, 1963, pág. 119).¹⁰⁴

La teorización de la CEPAL significaba, en palabras de Raúl Prebisch: “Analizar nuestros propios fenómenos y encontrar nuestra propia imagen en el empeño de transformar el orden existente de las cosas” (Prebisch, 1963, pág. 20). Así como significaba la no aceptación de la tesis pretérita direccional que indicaba el centro desarrollado, cuando afirmaba que “...hay que cumplir primero la etapa de desarrollo económico y después vendrán las reformas sociales. Hablar de ellas ahora desalentara la Inversión privada”. Ante lo que la CEPAL indicaba que “...no habrá aceleración del desarrollo económico sin transformación de la estructura social” (Prebisch, 1963, pág. 21).

¹⁰⁴ Los cepalinos se situaron del lado de la escuela estructural-funcionalista. Basaban su actuación en la consideración de que existía una situación de estrangulamiento interno; problema que era causado por una ausencia de estructuras en las economías nacionales; el cual encontraba su origen en la falta dominio sobre los medios de producción. Como solución abogaban por acometer un proceso de industrialización de la región.

Este planteamiento incidía en la falacia contenida en la premisa modernizadora que indicaba que había homogeneidad en la SI, afirmando, al contrario, que la SI era un ente heterogéneo, compuesto por diferentes culturas, civilizaciones y modos de entender la vida, y por ello el modelo de crecimiento económico “único”, que promovían los OOII, era poco o nada efectivo en la búsqueda de desarrollo.

No obstante, debe quedar reflejado que la CEPAL centró su crítica en el modelo promovido por los Estados centrales, no en el objetivo del crecimiento y la promoción de una sociedad de consumo, en donde el ciudadano respondiese a un ideal de vida basado en la acumulación. No, esa cuestión no estuvo contenida en su crítica.

En definitiva, la cuestión fundamental por la que la CEPAL se oponía a la *Teoría modernizadora* era que entendían que la hipótesis que enunciaban éstos poseía un error en su planeamiento ontológico, al comparar los grandes centros desarrollados, económica y tecnológicamente, con países productores de artículos primarios. Contraviniendo esto, la CEPAL indicó que cada espacio tenía sus particularidades y aunque los postulados cepalinos si pretendían adecuar y promover el mismo modelo de desarrollo social que ofertaban los diferentes OOII- sociedad de consumo-, reclamaban que tanto Estados desarrollados como OOII, promocionasen de aplicación de criterios similares a los presentes en los Estados desarrollados, en cuestiones determinantes para el comercio, como por ejemplo la protección aduanera, en los Estados subdesarrollados. Puesto que la configuración en diversos aspectos descritos como elementales para el fomento del crecimiento y, por lo tanto, del desarrollo según los postulados occidentales, difería de manera abismal entre los países centrales y los periféricos. Contexto en el que las transformaciones que se recomendaban aplicar no impulsaban la convergencia y poseían un claro agente beneficiario en su práctica: el centro (Prebisch, 1963; Prebisch, 1964; Prebisch, 1976).

3.2.2 Requisitos de transformación social en la propuesta cepalina.

Los análisis sociológicos la escuela cepalina trataron de mostrar que no era suficiente analizar el desarrollo únicamente en términos de “obstáculos externos”, noción en la que permanecía la idea de que el problema derivaba de una situación externa, sino que se daba de la existencia de “obstáculos internos” que debían ser abordados (Echeverría, 1976).

Los debates se centraron en analizar el proceso histórico particular vivido por la sociedad de la región, concluyendo que ALC poseía un carácter fragmentado de construcción social, debido, principalmente, al proceso de “colonización” al que fue sometida y a las diversas disputas internas por tratar de definir la identidad regional (Ornelas, 2012).

La sociología de la CEPAL trató de determinar qué tipo de intervención era necesaria para lograr activar los mecanismos establecidos por la teoría cepalina (proceso de industrialización y comercialización), de acuerdo a la situación social particular de la región. Con ese objetivo se ejecutaron análisis de los diferentes grupos sociales existentes, indicando qué mecanismos se requerían para abordar un proceso de transformación y adaptación a un modelo de sociedad competitiva, diseñando el modo de lograr aquellas condiciones sociales y políticas que allanasen el camino a las medidas que condujesen al desarrollo. Es decir, se desarrolló todo un ejercicio analítico con el propósito de detectar las ausencias o huecos estructurales que pudiesen frenar la articulación de las reformas que pretendía realizar la CEPAL.¹⁰⁵

Atendiendo a lo indicado por la corriente sociológica, la CEPAL introdujo en su agenda política desarrollista los denominados “aspectos sociales para desarrollo” (Echeverría, 1976, pág. 29). En éstos se observaban aquellos problemas de la población que frenaban el desarrollo cepalino: a) las condiciones de vida; b) la salud; c) la vivienda; y d) la educación. En principio, se logró situarlos en un espacio dentro de una teoría de marcado carácter económico (Echeverría, 1976, pág. 29).

En aras de indicar cómo abordar la transformación ideológica de los ciudadanos, la academia analizó qué roles de comportamiento caracterizaban a cada uno de los diferentes grupos sociales presentes: a) la burguesía; b) la clase media; c) clase popular, así como profundizó sobre los problemas de marginalidad y exclusión existentes en conjunto regional y en particular, en el papel social de los indígenas y los negros. Llegando a conclusiones que advertían que existía la necesidad de entender la dicotomía existente entre la esfera colectiva e individual, en cuanto a la posible adopción de una ideología en términos de ambición. Señalando que los deseos de un mejor nivel de vida pueden no estar acompañados únicamente del impulso colectivo o institucional; en donde la aspiración

¹⁰⁵ El carácter funcional de la sociología cepalina se evidenciaba al tratar de proponer medidas en los campos sociales que promoviesen el arranque de un proceso de transformación, el cual dirigiese a toda la comunidad hacia las líneas ambicionadas por la cúpula cepalina y, que por medio de ese proceso, se transformasen las estructuras sociales. Toda acción con el objetivo de impulsar un proceso de apropiación que pudiese ayudar al logro de las metas que se habían señalado.

individual al goce puede no estar contenida por el sentido de una responsabilidad colectiva. Por ello, se advirtió de que la propia reforma estructural podría crear situaciones de conflicto, debido al desajuste político-social y con ello dar origen a desniveles entre sectores y regiones, a causa de la instauración o participación en diferentes actividades económicas.

Asimismo, se indicó que era necesario considerar que el modelo de desarrollo que se estaba impulsando contenía aspiraciones no propias a los diversos grupos regionales, ya que el modelo se basaba en una idea constituida externamente. En donde la sociedad de consumo emerge de un determinismo ideacional, que construye su postulado a partir de la premisa de que existe una ambición presente en los grupos e individuos como meta de vida. Por lo que activar un mecanismo que impulse este cambio en el deseo particular de grupos e individuos regionales poseía una dificultad intrínseca, al requerir la transformación de los deseos en forma de un objetivo concreto: despertar un deseo mayor de más cosas¹⁰⁶. A raíz de esta deducción advirtieron que el proceso poseía el peligro de causar la polarización social en términos de retribución y podría contribuir, determinadamente, a un conflicto económico-social. Por lo que recomendaron que el Estado, al contrario de lo expuesto por Parsons, debiera ejecutar un papel regulador social y no ceñirse únicamente a su papel en el sector económico, como auguraba Prebisch.

Pero no sólo indicaban que el Estado debía transformar su rol de agente, sino que advertían que los grupos sociales también debían modificar sus conductas. Como por ejemplo en el campo económico, en donde si anteriormente el empresario sólo preveía una programación de negocio asegurando su participación en el reparto de beneficios, ante la nueva situación debía amoldarse y generar un carácter de gestor y ser agente de innovación tecnológica.

Lo relevante de la considerada sociología cepalina es que evidenció que existía la necesidad, para el buen funcionamiento de los ajustes estructurales de la CEPAL, de crear un entorno de responsabilidad social en todas las capas sociales, en la que todos los agentes se transformasen y se apropiasen del proceso de cambio social. El lugar en el cual la “...planeación social [fuese] de la mano con la planeación económica” (Echeverría, 1976, pág. 30).

¹⁰⁶ Se propusieron reformas en lo social, como abordar una reforma educativa que propulsase la movilidad social y permitiera “internalizar valores y modos de conducta nuevos”; en la estructura económica, mediante una reforma agraria que cambiase las leyes acerca de la pertenencia del suelo y que alterase las relaciones sociales en términos de igualdad; y una reforma del Estado y del sistema político que se adecuara al proceso entrante de desarrollo (Echeverría, 1976).

3.2.3 Teoría de la Dependencia. La inversión extranjera como arma opresora con capacidad superior a la atribuida por la Comisión Económica para América Latina.

“Las políticas de desarrollo económico impulsadas en Latinoamérica durante las últimas décadas no han dado los resultados esperados. El estrangulamiento externo, los desequilibrios inflacionarios, el atraso agrícola, la existencia de vastos grupos sociales desempleados y marginados y la tendencia al estancamiento siguen presentes en la mayoría de nuestro países”.

“Estos fenómenos y tendencias se atribuyen a menudo a políticas de desarrollo poco vigorosas y carentes de una cooperación internacional adecuada. ... [Se] considera más bien que dichas características constituyen consecuencias inherentes al proceso socioeconómico propio de un sistema subdesarrollado y dependiente”.

(Sunkel, 1973, pág. Contraportada).

Al igual que la teoría cepalina, la *Teoría de la Dependencia* (TD) surgió como respuesta a la ausencia de resultados por parte de las prácticas ejecutadas, esta vez por la CEPAL y sus políticas ISI¹⁰⁷. Existe un amplio marco de referencia a tener en cuenta para conjeturar en donde se sujetan las bases argumentales de la TD, pero parece obvio que ésta se construye en la interpretación hecha del proceso de desarrollo, de una parte por los partidos comunistas y por otra por la mencionada CEPAL (Bambirra, 1978).

El hecho de que las teorías cepalinas se hubiesen centrado en dos aspectos fundamentalmente: 1) en el análisis del estrangulamiento interno; y 2) en el examen de los problemas de naturaleza interna, no significaba en la perspectiva dependentista que la situación de dependencia encontrase su origen en una condición interna de la región. Más bien, los teóricos de la dependencia afirmaban que la construcción teórica cepalina partía de un análisis que únicamente había estudiado las manifestaciones internas del problema. Hecho que se señaló como meridianamente distinto que concebirla como una situación condicionante, la cual se redefine en función de las posibilidades estructurales de las economías nacionales. Son dos concepciones esencialmente distintas.

¹⁰⁷ Aunque hay que señalar que ya existían posturas concretas anteriores en la CEPAL que encajan dentro de la Teoría de la Dependencia, su auge se produjo a partir del hecho indicado.

No se trataba según la TD de considerar que el estrangulamiento externo era producido por la presencia de obstáculos estructurales internos al desarrollo- como afirmaban tanto modernistas como cepalinos- y que una vez liquidados esos obstáculos, provenientes del atraso incrustado en las “sociedades tradicionales”, se pudiese lograr un desarrollo “occidental”, sólo por medir el uso de una movilización racional de recursos – como el estímulo a la capacidad de ahorro e inversión- y cosas por el estilo (Bambirra, 1978). No era esa cuestión el problema a solventar según la TD. Ésta trató de demostrar que los cambios que se producen en el seno de los países y en su sistema productivo, con el objetivo de adaptarlos a las necesidades de la expansión capitalista del Centro- por tener que alcanzar lo que los modernistas llamaban otra fase-, no eran más que una herramienta más para establecer una relación, tanto ideacional como económica, del centro con la denominada periferia.

El argumento que sostenía que el sistema de producción dependiente tendía a diversificarse en función de la división internacional del trabajo, en donde surgía y se desarrollaba la industria y tras un periodo tendía automáticamente a re-articular el sistema productivo, creando condiciones para la superación de esta división internacional del trabajo entre países productores de materias primas y productos agrícolas y los países fabricantes de manufacturas, era falaz según la TD (Dos Santos, 1970; Cardoso & Faletto, 1969).

Con el Centro de Estudios Socio Económicos (CESO) de Chile como base de argumentación teórica operativa, los dependentistas elaboraron discursos en donde afirmaron que no era posible realizar un proceso de reproducción capitalista independiente desvinculándose del sistema capitalista mundial - criticando el intento de la CEPAL-, debido a que la reproducción dependiente del sistema está ligado al exterior de manera inequívoca. Es decir, indicaron que al estar compuesta la estructura económica por dos sectores, el I compuesto por los bienes de producción y el II por los bienes de consumo manufacturados que están en el exterior, aplicando el proceso de industrialización ISI que propuso la CEPAL, el sector II se desarrollaría en el seno de varias de las economías latinoamericanas pero el sector I no. Por lo que para que el sistema se reproduzca a imagen y semejanza de los centros debiera importarse el sector I: la maquinaria y la tecnología.

A raíz del esquema indicado, la TD indicó que el modelo de prácticas políticas ISI que difundió la CEPAL, a principio de los años cincuenta en ALC, continuaba dependiendo

para su funcionamiento de maquinaria extranjera¹⁰⁸; esta maquinaria no llegaba en forma de capital-maquinaria, sino en forma de IED. Por lo que, los dependentistas construyeron su teoría contra este modelo, ya que veían que, si se seguía reproduciendo el modelo de desarrollo con la misma estructura que el sistema capitalista, era imposible que no se dependiese de los países metropolitanos, puesto que la acumulación de capitales pasaba por el exterior a través de la importación de maquinaria y, en tal caso, si se optaba por reproducir el modelo se estaría supeditado al control de grupos extranjeros e incluso aunque se empezase a suplir las necesidades de máquinas del sector II, se continuaría dependiendo de la maquinaria del sector I (Bambirra, 1978).

“...aun cuando el Empresario instale su industria, no por ello dejará de seguir importando bienes de capital e insumos pues falta un complejo industrial preexistente que los suministre. Y aun en el caso de que el proceso de industrialización vaya creando dicho complejo, esa situación se mantiene, e incluso se refuerza, en virtud de la creciente propiedad extranjera de la industria manufacturera, la permanente incorporación a estas empresas y a las nacionales de las nuevas formas tecnológicas que se desarrollan en los países centrales, y la ausencia de una capacidad de creación y adaptación tecnológica local que permita modernizar permanentemente la producción nacional de insumos y bienes de capital así como el aprovechamiento creciente de los recursos naturales” (Sunkel, 1973, pág. 358).

En el momento en el que las economías dependientes comenzasen a observar cómo actúan sobre ellas los mecanismos acumulativos de la dependencia- como son la descapitalización, los déficits de la balanza de pagos, la necesidad de préstamos por parte del capital extranjero-, y conjuntamente provocasen: a) un aumento creciente del servicio de la deuda; y b) un déficit progresivo, la región se encontraría en un círculo vicioso en el que se requerirá mayor capital extranjero¹⁰⁹. Más Inversión Extranjera (IE), ya fuere directa o no.

Todo el argumentario de la TD iba, ciertamente, en contra de las postulaciones de los cepalistas. Los cuales querían, por medio el proceso de industrialización, lograr una especie de desarrollo autónomo de la región- al igual que los TD- pero divergían en la metodología a aplicar.

¹⁰⁸ A ALC le correspondía el papel dentro del marco de la división internacional del trabajo situarse como proveedor específico de alimentos y materias primas a los grandes centros industriales (Pinto & Kñakal, 1973, pág. 22).

¹⁰⁹ Hecho que se observaba en las grandes deudas de aquellos que eran más desarrollados en aquella época: Brasil, México y Argentina. Véase (Dos Santos, 1974).

Los teóricos de la dependencia afirmaban que el verdadero error del dualismo estructural de los cepalinos era el hecho de no comprender que el mantenimiento del atraso de los países de ALC, es condición y consecuencia del “modelo de desarrollo” capitalista instaurado el ideario global como un hecho natural; que éste era propio del centro metropolitano y además, les otorgaba la perpetuidad de la asimetría. Es decir, las ideas de en qué consistía el desarrollo habían calado de tal manera, que aun alterando los tiempos, la acción en sí determinaba la asimetría.

Coincidiendo en parte con la CEPAL, los dependentistas criticaban con un grado mayor de amplitud el que se tratase de copiar exactamente el mismo modelo de desarrollo en ALC que el existente en el centro. Motivadas éstas bajo la justificación de que ALC tenía sus propias particularidades y no se habían desarrollado del mismo modo.

“Se trata de explicar por qué nosotros no nos hemos desarrollado de la misma manera que los países hoy desarrollados. **Nuestro desarrollo está condicionado por ciertas relaciones internacionales que son definibles como relaciones de dependencia.** Esta situación somete nuestro desarrollo a ciertas leyes específicas que lo califican como un desarrollo dependiente” (Dos Santos, 1974, p. 31) [**Negrita propia**].

Se centraron en señalar que el hecho de que los países en desarrollo tratasen de participar en el mercado capitalista, era similar a un intento de incorporación a una partida empezada en un juego creado por los que están jugando. En donde la partida tiene sus reglas particulares- la economía de mercado-, otros comenzaron a jugar antes, elaboraron y aprendieron las reglas (DI), poseen más fichas(capital), en donde unos se encuentren en las casillas de delante (desarrollados) y los otros que empiezan a jugar (Sub-desarrollados) más atrás, el “desarrollo” es el tablero, crearon y poseen el conocimiento funcional (la tecnología), y poseen la “legitimidad” ideacional para institucionalizar las reglas mediante prácticas(transformación y creación de nuevas reglas). Por ello, cabría indicar que: 1) o se juega a otro juego; 2) o será ardua, sino imposible, la tarea de alcanzar a los que juegan en su tablero con sus reglas; o 3) se producen cambios que permitan que los jugadores atrasados obtengan capacidad que les permita alterar las reglas de la partida.

Si se optaba por capacitar a los nuevos jugadores la cuestión era la tecnología. Indicaron que si no se realizaba un transvase tecnológico a ALC, que contribuyese a que la acumulación en la economía industrial pasase de depender más del aumento de la capacidad productiva del trabajo que de simplemente la explotación del trabajador, la

región se encontraría en el estado del subdesarrollo durante siglos (Marini, 1973, pág. 23). Puesto que este factor actuaba como el elemento que permitía a los países centrales obtener grandes márgenes de beneficio al comerciar, debido al tiempo empleado en la producción. Ya que mientras que en los países latinoamericanos el aumento de la producción se basaba en una explotación mayor del trabajador, en los desarrollados la tecnología era el factor que alteraba la maximización de la producción. Por ello, reclamaban que la promoción del modelo de desarrollo debía acometer ese cambio, y alterar el factor que determinaba las relaciones de producción del conjunto e influía directamente en la percepción por parte de aquellos agentes que habían sido impulsores del concepto de un desarrollo basado en el transvase tecnológico.

“...la explotación del trabajador... Los mecanismos de intensificación del trabajo, la prolongación de la jornada y la expropiación de parte del trabajo necesario al obrero para reponer su fuerza de trabajo, parecen configurar un modo de producción fundado exclusivamente en la mayor explotación del trabajador, y no en el desarrollo de su capacidad productiva” (Marini, 1973, pág. 40).

Centrados en las diferencias de acumulación económica presente entre los Estados desarrollados y los subdesarrollados, los teóricos de la dependencia fijaron su atención en los precios internacionales de los productos latinoamericanos, indicando que la depreciación de los productos mayoritariamente exportados por ALC no se podía corresponder directamente con la depreciación real de los productos y, casualmente, guardar una relación con el aumento de la producción en los países industriales. Por lo que señalaron que la causa de la depreciación nunca podría ser un aumento de la productividad, puesto que ésta aumenta muy lentamente en ALC (Marini, 1973; Cardoso & Faletto, 1969; Dos Santos, 1970).

La escuela de la TD señaló que las situaciones concretas y los efectos del desarrollo estaban constituidos y determinados, no únicamente por los condicionantes generales de la dependencia, sino por las características específicas de la situación condicionada, que redefinieron y particularizaron como la situación condicionante general. Y es que la situación de dependencia podría haberse modificado y, de hecho, se hubiese alterado si se hubiesen abordado transformaciones profundas en las estructuras hegemónicas que determinaban la condición de dependencia.

Por ello, ante la estructura atisbada y los efectos perjudiciales de las prácticas económicas para la región, los dependentistas indicaron que la región tenía dos posibilidades de abordar las transformaciones: 1ª) sin romper las relaciones de dependencia, simplemente reorientándolas; o 2ª) rompiéndolas y tratando de consolidar una economía independiente con un desarrollo ligado a las particularidades de la región (Bambirra, 1978; Marini, 1973).

Ante la situación de indefensión que definían como insostenible e injusta para ALC, los teóricos de la dependencia no abogaban por la primera opción, la de intentar acumular capacidad dentro de la estructura hasta poder alterar las reglas, sino que se inclinaban por la no participación en el sistema, a no ser que se alterasen las condiciones impuestas por el Centro de *facto*, ya que era el agente que obtenía beneficios de la relación.

“No es porque se cometieron abusos en contra de las naciones industriales que éstas se han vuelto económicamente débiles, es porque eran débiles. No es tampoco porque produjeron más de lo debido que su posición comercial se deterioró, sino que fue el deterioro comercial lo que las forzó a producir en mayor escala. Negarse a ver las cosas de esta manera es mixtificar la economía capitalista, es hacer creer que la economía podría ser diferente a lo que realmente es. En última estancia, ello no conduce a revindicar relaciones comerciales equitativas entre las naciones, cuando de lo que se trata es de suprimir las relaciones económicas internacionales que se basan en el valor de cambio” (Marini, 1973, pág. 31).

En definitiva, la dependencia fue entendida como la determinante que condicionaba ciertos aspectos de la estructura interna, ya que la redefine e influye en su constitución. Afirmando que únicamente podrá ser alterada su propia realidad en función de las posibilidades estructurales de las diferentes economías nacionales y, por lo tanto, de la región.

Sin negar que realmente hubiera “cierto” desarrollo en ALC- un desarrollo entendido como un crecimiento económico durante esa época-, los dependentistas indicaron que ese tipo de desarrollo estaba destinado convivir con el retraso regional, en donde la esperanza de un futuro mejor alimentaba las prácticas políticas, económicas y sociales. Contexto que invitó a predecir que si no se rompían relaciones drásticamente, el desarrollo no significaría una gran reducción de asimetrías, ni internas ni externas. Por lo que más que predecir una dilapidación del término subdesarrollo en busca de la convergencia, la continuidad de la práctica perpetuaría la realidad durante años.

Por concluir este epígrafe indicar que, si se utilizase el símil del juego aludido, la opción de crear una conceptualización particular de lo que era ser desarrollado, sus mecanismos y prácticas, debía indicar o crear un tablero alternativo en el que la región conviviese y alcanzase su propio desarrollo, determinando, con sus particularidades, el qué, el cómo y el cuándo realizar ciertas prácticas relacionales. Es en ese sentido en el que se cuestionó la conquista ideológica del centro desarrollado de la significación de qué es el desarrollo.

4. Apuntes sobre la evolución conceptual del desarrollo desde los años 70 en el contexto internacional.

Es un hecho notorio que en la SI el concepto del desarrollo ha sido tensionado continuamente. Prueba de ello es que desde su instauración ha vivido en una especie de transformación constante, en la que es deber resaltar los dos elementos, el crecimiento económico y el atribuir un deseo al ciudadano de que su felicidad aumenta cuanto más consume, han actuado como ejes, determinando, en cierto sentido, el devenir del debate de todo modelo de desarrollo presentado por las diversas disciplinas que lo han abordado.

Las diferentes agendas de Estados, de OOII, así como los planes de otros agentes participantes en las RRII, han contribuido al enriquecimiento del debate, tanto en los ejercicios realizados en el seno de los propios agentes parte del proceso, como en otros centros de estudios, universidades, etc... al situarse en ocasiones en línea con el considerado *mainstream*, en otras con el pensamiento crítico, o entre ambas.

Tras la internacionalización del concepto una vez finalizada la IIGM, no fue hasta los años 70 cuando diversas escuelas de pensamiento globales comenzaron a ejecutar análisis críticos, incrementándose sus cuotas de espacio en las agendas de todos los OOII en los 80, 90, 2000, hasta ocupar un espacio central en la actualidad. En este proceso de re-emergencia continua del debate en torno al concepto en el contexto internacional, ha contribuido de manera notable el hecho de que participasen diversas escuelas de análisis, al ser ejercicios críticos ricos en su contenido, ampliando el sentido y el significado del concepto. Asimismo, este hecho ha contribuido a un enriquecimiento analítico conceptual del desarrollo, así como a que el término adquiriese un carácter multidisciplinar y dejase de estar únicamente ligado al desarrollo económico, como en sus inicios. Lo que ha permitido que, en cierto sentido, se haya producido un efecto dilatador en términos analíticos. Ya que la diversidad en el análisis del término ha incrementado y ampliado las perspectivas y los

ángulos desde los que observar y analizar, tanto en referencia a las causas, como de una forma clara, los efectos que implican las prácticas desarrollistas.

En los años 70, el debate giró en torno a dos campos que se han instaurado como pilares teóricos de todos los ejercicios y procesos que se sitúan en torno al análisis del desarrollo: la pobreza y el medio ambiente; en los 80, sin dejar de lado las preocupaciones indicadas y habiendo asimilado la necesidad de abordar el tema del medio ambiente como factor elemental el debate, se trató de comprometer a diversos sectores de la sociedad en esa labor, mediante la adopción de una estrategia que permitiese converger las diversas prácticas sistémicas con el cuidado en la degradación del mundo: se incorporaba la sostenibilidad al concepto de desarrollo; en los 90, el desarrollo se convirtió en un concepto que ya no sólo se centraba en la cuestión de la supervivencia humana, sino que ampliaba sus miras hacia el desarrollo de las capacidades de las personas, indicando que no sólo el hecho de comer, tener ropa y casa, significaban que una persona era desarrollada; a partir del año 2000, el análisis desarrollista trató de focalizar esfuerzos en recordar y crear consciencia de que el desarrollo era un Derecho Humano y que, por lo tanto, todos los agentes participantes en el entramado de la vida global son responsables, al no poseer el Derecho Humano el atributo de ser enajenable.

Por último señalar que, si bien es verdad que en la actualidad las agendas de los OOH continúan la línea que liga el desarrollo con crecimiento, incluyendo diferentes ejes a esa centralidad, han surgido postulados divergentes ante la centralidad del crecimiento en el modelo de desarrollo. Postulados como el concepto del *Buen Vivir*, promovido en algunos países de ALC, o el *Índice de la Felicidad Bruta* en Buthan, que cuestiona el clásico índice que mide el progreso de un lugar a partir únicamente del crecimiento económico: el PIB, son algunos ejemplos de la nueva ola de teorías críticas con un modelo desarrollista que ha logrado divulgar el que no se cuestione ciertas premisas, como el crecimiento o que la felicidad del ciudadano guarda relación directa con su capacidad de consumo. Y aunque no en la actualidad estos no copan los espacios centrales de las agendas de las principales OOH, si están siendo analizados por las academias y, en cierto modo, colaborando a abrir un debate en donde discutir la esencia de ciertas cuestiones ontológicas sobre la finalidad social que poseen las comunidades.

4.1 El medio ambiente: knock-out del crecimiento económico como modelo de desarrollo.

El factor ambiental se hizo presente y encontró acomodo en varios documentos emitidos a principios de los 70 y desde entonces no ha dejado de estar en vilo en la SI, con mayor o menor repercusión efectiva. De hecho, en este periodo se evidenció una crítica al modelo de desarrollo global, que si bien se podría alinear con los trabajos de Thomas Malthus, David Ricardo o John Stuart Mill¹¹⁰- los cuales habían cuestionado el modelo de crecimiento económico constante como modelo de desarrollo viable para el planeta-, supuso un giro a los postulados conocidos hasta la fecha, al publicarse investigaciones que ligaban la acción del hombre con el agotamiento del planeta en términos de habitabilidad (Bardi, 2014, págs. 25-46). Lo que sirvió para instaurar en el debate dudas profundas en torno a la pertinencia global, presente y a largo plazo, del modelo de desarrollo promovido por los países considerados “desarrollados”.

En el año 1971, la publicación del primer *Informe Meadows* (Los límites del crecimiento) del Club Roma¹¹¹, expuso una crítica frontal al crecimiento económico como modelo de desarrollo en el planeta, al indicar que el modelo aplicado y promovido hasta la fecha era cuestionable por ser insostenible a largo plazo. La conclusión expuesta en el informe - fruto de la labor investigadora del *Massachusetts Institute of Technology* (MIT)¹¹²- advertía de la imposibilidad de continuar con el proceso de industrialización masiva que se había llevado a cabo desde la Revolución Industrial, debido principalmente a los hábitos ideológicos y prácticas de vida característicos de las sociedades desarrolladas. Éstas estaban caracterizadas por: a) altos niveles de consumo; b) abusos de unos Recursos Naturales (RRNN) “finitos”; y c) los problemas del crecimiento demográfico, principalmente.

El informe *Meadows* centró su crítica en señalar la gran problemática acuciante para la supervivencia humana. Advertía de que si el mundo continuaba practicando el modelo de vida difundido hasta la fecha, basado en un desarrollo económico llevado a cabo en los

¹¹⁰ Thomas Malthus hizo referencia al problema demográfico alimentario que se presentaría en la sociedad en caso de no aplicar control de natalidad en su obra *Definitions in Political Economy*, Simpkin and Marshall, Londres, (1853); David Ricardo cuando se refirió a la Ley de los rendimientos decrecientes en la obra *On the Principles of Political Economy and Taxation*, Batoche Books, Ontario, ([1817]2001); y John Stuart Mill, refiriéndose a la inevitabilidad de que el crecimiento alcanzase un estado estacionario en *Principles of Political Economy: With Some of Their Applications to Social Philosophy*, Longmans, Green and Co., Londres, ([1848]1909).

¹¹¹ Éste es una Organización No Gubernamental formada por científicos y políticos preocupados por el devenir del mundo a largo plazo.

¹¹² El Instituto de Massachusetts fue el centro encargado de elaborar el informe.

Estados desarrollados y promoviendo éste mismo modelo en los Estados en desarrollo, las consecuencias futuras serían desastrosas. La vida sería insostenible.

Concretamente el informe señaló que en caso de continuar basando la felicidad y la subsistencia de los seres humanos en un mecanismo comercial que requería de altos índices de industrialización para sustentarlo, el sistema industrial acabaría colapsando y eliminando las condiciones ambientales (ríos, bosques, polución, etc...) que hacían del mundo un lugar habitable (digno).

Para los analistas los peligros que representaba el aumento de la industrialización y el desarrollo demográfico- creciente exponencialmente en los países en desarrollo-, eran factores representativos de las grietas estructurales dañinas de un proceso que ambicionaba una subsistencia futura. Por ello se requería abordar dos temas fundamentales a nivel global. Por una parte, se debían instaurar un mayor número de leyes y mecanismos que protegiesen los efectos de la industrialización y asegurasen el fomento de la aplicación de medidas en la prevención de embarazos no deseados; y por otra, era necesario actuar con responsabilidad y adquirir consciencia de que no bastaba con que el papel de los Estados desarrollados se comprometiese con, simplemente, “paliar” los efectos del subdesarrollo una vez dados, sino que se requería incidir de manera rotunda en aquellos factores que lo causaban (Meadows, Meadows, Randers, & Behrens, 1972). Fue esta última indicación relevante, al aludir a la necesaria participación y compromiso que se requería de los Estados desarrollados para reformular las prácticas, ya que eran causantes en mayor medida de los efectos negativos.

Los asuntos de carácter ambiental pasaron a ocupar un posición central durante la época, como se reflejó en los siguientes trabajos en torno al desarrollo. En el mismo 1972, las NNUU presentaron el informe conocido como *Declaration on the Human Environment* (Estocolmo 1972), en el cual se situó al ser humano como centro de acción en la naturaleza, fijando a éste como el actor primordial en el medioambiente¹¹³- en la declaración se habló de medioambiente humano, no de desarrollo humano-. El documento centró su crítica, no tanto en las condiciones que debían ser adquiridas por los seres

¹¹³ La primera proclamación de la declaración dijo así: “El hombre es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea, el cual le da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente. En la larga y tortuosa evolución de la raza humana en este planeta se ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la tecnología, el hombre ha adquirido el poder de transformar, de innumerables maneras y en una escala sin precedentes, cuanto lo rodea. Los dos aspectos del medio humano, el natural y el artificial, son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida misma” (NNUU, 1972, pág. 1).

humanos, sino en la promoción de una conciencia global, al señalar que el medioambiente debía ser un elemento constitutivo de derechos y obligaciones de los Estados y ciudadanos.

El informe adquirió prestigio y se alineó en su posición con el *Informe Meadows*, siendo una fuente de información más, que aludía a los límites que el planeta poseía. Señalando en este caso que éstos serían alcanzados en caso de continuar con el modelo de vida basado en una producción económica “desorbitada”.

La medida más importante que se enunció en el texto fue la puntualización sobre la necesidad, y en cierto modo obligación, que se poseía como comunidad mundial de utilizar los recursos naturales con un alto grado de responsabilidad futura (Sohn, 1973).

Declaration on the Human Environment

Principio 2. Los recursos naturales de la tierra incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras, mediante una cuidadosa planificación u ordenación, según convenga (NNUU, 1972, pág. 2).

La Declaración impulsada por las NNUU ambicionaba que el documento sirviese para un objetivo claro: “...inspirar y guiar a la gente del mundo en la preservación y mejora del medioambiente humano”¹¹⁴. Es por ello que fue elaborado un Plan de Acción que pretendía servir como guía operativa a los Estados y articular la energía de los agentes para estimular la mejora y la conciencia sobre la situación medioambiental. Se incluyeron medidas concretas que servirían a éste propósito en la SI como: 1) establecer compromisos concretos; 2) manejo, apoyo y elaboración a futuros programas divulgativos de conocimiento a través de herramientas promocionadas por los agentes (como la educación); 3) proporcionar información pública; y 4) preparar y formar a expertos.

El objetivo fijado en el informe pretendía fomentar una acción que requería de la participación e implicación de todos los actores de la SI. Se entendía que no era un mecanismo válido- para temas como el medioambiente- si las medidas eran impulsadas por agentes particulares (Estados o regiones) y no convergían globalmente. Conscientes del contexto y de la dificultad de instaurar medidas de tan amplia cobertura, el propio comité constitutivo expuso preocupaciones en torno a su aplicación y aceptación, indicando la

¹¹⁴ Traducción propia a partir de “...common principles to inspire and guide the peoples of the world in the preservation and enhancement of the human environment” (Sohn, 1973, pág. 423).

problemática que significaba la potestad soberana de los Estados. De hecho, en el informe se aludió a la dualidad legislativa presente en la SI, ya que al ser un requisito reformar las prácticas políticas domésticas y globales, se debía prestar “...atención en la necesidad de los Estados de legislar internamente para proteger y preservar el medioambiente, tan bien como en la necesidad de la cooperación internacional para el mismo objetivo”¹¹⁵. Cuestión que incitó a recomendar la apertura de un proceso de transformación en la relación que se había venido produciendo entre un modelo de desarrollo de corte económico, el medioambiente y los derechos de los pueblos en desarrollo, puesto que se consideró una “...cuestión de crucial importancia y sería útil hacer una referencia particular en la Declaración a los intereses de los países en desarrollo”¹¹⁶.

La promoción de “un poco” de conciencia global fue el mayor logro. Una de las cuestiones prioritarias de este evento fue la pretensión de implicación de los actores en las acciones, ante la necesidad de cambiar ciertas prácticas que, inscritas en el ideario de la acción global de los agentes relevantes, poseían un alto impacto negativo en el mundo. Asuntos como el desarrollo de la industria y las guerras (armas nucleares y destrucción en masa (Principio 26)) fueron referentes de la Declaración. Se enunciaron efectos devastadores que se estaban produciendo, advirtiendo que se debía promocionar el que los agentes tratasen de establecer el medioambiente como un elemento principal a considerar a partir de ese instante (Sohn, 1973). De hecho, en esta conferencia nació el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)¹¹⁷.

Ante el peso que iba adquiriendo la problemática ambiental en la SI, evidenciada en los dos documentos señalados, las NNUU fue el agente que encargó la elaboración de un nuevo informe a un grupo de expertos para desarrollar un documento que abordara con mayor profundidad el tema. El resultado de este análisis dio a conocer un nuevo término que

¹¹⁵ Traducción propia a partir de: “...need for States to legislate internally to protect and preserve the environment, as well as on the need for international co-operation for the same purpose” (U.N. Doc A/CONF. 4/PC/WG.I/CRP.4, and Add.I and II (1971) citado en pie de cita de página N°: 15 en Sohn (1973, pág. 427)).

¹¹⁶ Traducción propia a partir de: “... issue of crucial importance and it would be useful to make a particular reference in the Declaration to the protection of the interest of developing countries” (U.N. Doc A/CONF. 4/PC/WG.I/CRP.4, and Add.I and II (1971) citado en pie de cita de página Núm.: 16 en Sohn (1973, pág. 427)).

¹¹⁷ El PNUMA, establecido en 1972, es la voz para el medio ambiente dentro del sistema de Naciones Unidas. El PNUMA es defensor, educador, catalizador y facilitador de la promoción del uso inteligente de los activos naturales del planeta para el desarrollo sostenible. Los principales objetivos del PNUMA son: a) servir como defensor autorizado del medio ambiente mundial; b) desarrollar instrumentos para el medio ambiente nacionales e internacionales; c) fortalecer las instituciones para la gestión eficaz del medio ambiente. Para más información consultar página del PNUMA: <http://www.unep.org/About/> (Consulta realizada el 24 de marzo de 2014).

alteraba y significaba la concienciación de lo inapropiado de continuar con un modelo de desarrollo basado en el consumo y el crecimiento económico desorbitado: el *Eco-desarrollo*, en 1973 a través del PNUMA.

El grupo de trabajo que desarrolló la investigación fue liderado por Ignacy Sachs. El cual afirmó que si el medioambiente era el eje articulador del informe, el centro de la crítica lo ocupaban las prácticas de los Estados desarrollados. Se advertía en los resultados de los análisis que éstos debían transformar el modo de consumo rápidamente, ya que ésta práctica dilapidaba los RRNN exponencialmente; así como era el causante de la producción de una cantidad de residuos para los que el planeta no tenía cabida. Asimismo, la SI debía anteponer la calidad de la vida a los objetivos de crecimiento económico, situándose el informe en contra de toda corriente de desarrollo promovida hasta la fecha por las IFI y OOH, la cuales habían promovido conceptualmente y en la práctica un desarrollo basado en el consumo.

Relevante fue la aportación del informe en términos de RRH entre los diversos agentes, ya que alentaba a que los Estados en vías de desarrollo o países de Sur elaborasen un modelo de desarrollo propio, capaz de adaptarse a las particularidades ecológicas y culturales de cada región.

La actividad en torno al medioambiente ya estaba disparada en el contexto internacional. El movimiento que fue impulsado, en cierto modo, por la iniciativa del PNUMA, provocó que diferentes informes fueran surgiendo ante la receptividad de las NNUU. Es en este contexto en el que en 1974 fue elaborado otro de los informes referencia de corte crítico, que se sumaba a las líneas promovidas por los anteriores, constituyendo una tendencia crítica al modelo de desarrollo por parte de diferentes organismos. Se presentó el informe *Dag Hammarskjöld*¹¹⁸.

En este caso, el análisis realizado se centró en el papel ejercido por la teorización del desarrollo. Concretamente en el papel desempeñado por la herramienta que había sido articulada por los países occidentales para la corrección de las asimetrías, que proporcionaba “ayuda” a los Estados en desarrollo en su andadura hacia una convergencia con el grupo de países desarrollados. Se criticó a la Cooperación Internacional.

¹¹⁸ Este informe es conocido en castellano como ¿Qué hacer? Éste fue elaborado con ocasión del séptimo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las NNUU. Y a modo particular, indicar que éste no constituyó la opinión general de dicho organismo. Informe disponible en la página: www.dhf.uu.se/pdf/filer/75_que_hacer.pdf (Consulta realizada el 02 de marzo de 2013).

El análisis se centró en aquellas teorías que divulgaban la idea de que existía una homogeneidad de las sociedades globalmente. Concluyendo que admitir o promulgar esa teoría era un acto falaz. Se afirmaba que no existía fórmula universal para el desarrollo de la vida en comunidad y que el modo de construir un sistema que permitiese alcanzar las metas, o modos de vida adecuados para una sociedad, debía ser constituido y decidido por la sociedad que fuese a adoptarlo, no desde el exterior. Es decir, se señaló la pertinencia de impulsar un desarrollo de carácter endógeno por cada comunidad o región.

Bajo ese criterio analítico, la visión de que la constitución de las metas sociales debe partir de los imaginarios particulares de cada sociedad, fue donde el informe apuntó al papel y al ejercicio de injerencia que había sido practicado por los Estados del Norte (o desarrollados) en los del Sur. Se indicaron ciertas medidas y prácticas que debían ser adoptadas por la SI para corregir las condiciones operativas de la estructura internacional, en la que la asimetría era perceptible como característica incrustada en las prácticas relacionales y que, claramente, se alineaban en favor de un grupo: el Norte desarrollado.

A los Estados del Norte se les recomendaba que reajustasen sus estilos de vida y los orientasen de modo que contribuyesen a una mayor justicia en las relaciones comerciales internacionales¹¹⁹, al haber detectado una relación directa y perjudicial entre el estilo de vida practicado en el Norte y el funcionamiento viciado del sistema internacional. Concretamente se aludió a la necesidad de replantearse las metas de vida como SI, al observar que de ningún modo se podía continuar defendiendo únicamente la primacía del factor económico por encima de otros. Puesto que de continuar con este modelo de desarrollo la sostenibilidad no era viable y los mayores perjudicados eran, claramente, los Estados del Sur.

Necesidad ecológica. La primacía de lo económico está terminada; consecuencias ecológicas a largo plazo están fijando los límites dentro de los cuales el responsable de la toma de decisiones puede operar con diferentes alternativas (Fundación Dag Hammarskjöld y PNUMA, 1980, págs. 49-50).

Una vez detectado el fallo estructural del sistema instituido en la SI, el informe indicaba qué agentes poseían la capacidad de corregirlo: los Estados desarrollados. Los Estados en desarrollo tenían limitada la capacidad de acción y no podían incidir en la reducción de

¹¹⁹ Entre las medidas se encontraban asuntos como: a) limitar el consumo de carne; b) el consumo de petróleo; c) utilizar de forma más rentable las edificaciones; d) incrementar la vida de los bienes de consumo; e) suprimir el uso de vehículos individuales; y otros... (Fundación Dag Hammarskjöld y PNUMA, 1980).

asimetrías, mientras la IED actuase como lo estaba haciendo hasta la fecha. Por lo que se instaba, reiteradamente, a los gobiernos del Norte a incidir en este hecho, indicando que la medida a aplicar era el establecer un control a los capitales.

“[Existe]...**la preocupación por el control extranjero de sectores claves de las economías nacionales**, tanto en los países industrializados como en los del Tercer Mundo. La reacción de los primeros ante las inversiones de los productores de petróleo en algunas de sus empresas contribuye, irónicamente, a traer al primer plano de la atención las implicancias del control extranjero. Es así posible que hayan mejorado las condiciones para la aplicación de los derechos que tienen los países, pero que muy a menudo **-si son pequeños o débiles- no pueden ejercer sin confrontaciones económicamente nocivas**, que tal vez no puedan ni quieran arriesgar. **Los países del Tercer Mundo deben poseer, dirigir, administrar y comercializar sus propios recursos**. Sólo en la medida en que sean dueños de su propia casa, cabe esperar que participen plenamente en esfuerzos colectivos a nivel internacional” (Fundación Dag Hammarskjöld y PNUMA, 1980, pág. 93)[**Negrita propia**].

El informe señaló que, si la meta era que el tercer mundo se desarrollase, se debían adoptar medidas por parte de la SI. Concretamente aquellas que aboliesen las relaciones económicas que se basasen en una desigual capacidad de decisión. Porque estas prácticas estaban sustentadas y sujetas, en gran parte, a la estructura económica mundial, y los efectos eran asimétricos. Planteamiento que suponía la necesidad de realizar un ejercicio que cuestionase la soberanía nacional en cierto sentido, así como debían abordarse con carácter preferente “...las condiciones de inversión, las transferencias de conocimientos tecnología, así como los préstamos” (Fundación Dag Hammarskjöld y PNUMA, 1980, págs. 65-66).

Una vez cuestionado el modelo de desarrollo en el que el crecimiento era la religión a seguir por toda comunidad, en el que se subrayaban los beneficios de dinero y utilidad de una parte, pero en el que no se había hecho referencia alguna a las externalidades que provocaba este mecanismo- que aparecían en el *Informe Meadows* -, se produjo un movimiento de contrapartida por parte del *mainstream* contra las líneas rojas que señalaban estos informes. Incluso el mismísimo Robert Solow- uno de los autores principales de la teoría de crecimiento económico (criticada por no tener en cuenta el factor tierra)-, replicó, sosegando las aguas, mediante un argumento mercantilista liberal. Manifestando que el problema del agotamiento de los recursos, al que hacían referencia los informes, incentivaría a los consumidores a dirigir sus elecciones hacia otros productos sustitutivos.

Solow sostuvo que “El mundo puede continuar, de hecho, en ausencia de recursos naturales, por lo que el agotamiento constituye un acontecimiento y no una catástrofe”¹²⁰ (Solow, 1974, pág. 11).

Sin embargo, la incidencia del proceso industrializador en el medio ambiente continuó siendo punto central de informes y eventos¹²¹. Pero hasta 1987 no sé produjo un acto que tuviese tanto impacto como el que supuso la publicación del Informe Brundtland (*Our Common Future*). Éste, si bien atendía a cuestiones ambientales principalmente, estimulaba ciertas medidas conciliadores con la industria y afirmaba que la humanidad poseía la capacidad de lograr un “desarrollo sostenible”. Definido éste como aquel desarrollo que garantiza las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer las propias. Fijando su objetivo en la satisfacción de las necesidades humanas (Comision Brundtland NNUU, 1987)

Continuando con la atención del informe centrada en temas de demografía creciente, de recursos existentes, de población- especialmente si el incremento se comparaba con los recursos disponibles en materia de vivienda, alimentación, energía y salud-, se insistía en la necesidad de aplicar medidas que lograsen articular mecanismos con el objetivo de reducir la pobreza. Se reclamó en *Brundtland* la participación activa a todos los agentes en el ejercicio de difusión, tanto a nivel doméstico como internacional, y la no escatimación de esfuerzos en la promoción de herramientas que lograsen mejorar el nivel de educación y consciencia sobre el impacto de las acciones en el planeta común¹²².

¹²⁰ Traducción propia a partir de: “The world can, in effect, get along without natural resources, so exhaustion is just an event, not a catastrophe” (Solow, 1974, pág. 11).

¹²¹ Cita que se produjo en la Primera Conferencia de NNUU sobre lo Asentamientos Humanos conocida como Habitat I.

¹²² El informe contenía análisis sobre temas de: 1) **Alimentación**: el mundo ha logrado volúmenes increíbles de producción de alimento y sin embargo esos alimentos no siempre se encuentran en los lugares en los que más se necesitan; 2) **Especies y ecosistemas**: son recursos para el desarrollo y hay que señalar que muchas especies del planeta se encuentran en peligro, están desapareciendo. Este problema debe pasar a convertirse en preocupación política prioritaria; 3) **Energía**: se sabe que la demanda de energía se encuentra en rápido aumento, si la satisfacción de la misma se basara en el consumo de recursos no renovables el ecosistema no sería capaz de resistirlo. Los problemas de calentamiento y acidificación serían intolerables. Por eso son urgentes las medidas que permitan hacer un mejor uso de la energía. La estructura energética del siglo veintiuno debe basarse en fuentes renovables; 4) **Industria**: el mundo producía ya en 1987 siete veces más productos de los que fabricaba en 1950. Los países industrializados han podido comprobar que su tecnología anti-polución ha sido efectiva desde el punto de vista de costos en términos de salud, propiedad y prevención de daño ambiental y que sus mismas industrias se han vuelto más rentables al realizar un mejor manejo de sus recursos; 5) **El reto urbano**: al comienzo del nuevo siglo prácticamente la mitad de la humanidad habitará en centros urbanos. Sin embargo pocos gobiernos de ciudades tercer mundistas cuentan con los recursos, el poder y el personal para suministrarle a sus poblaciones en crecimiento la tierra, los servicios y la infraestructura necesarios para una adecuada forma de vida: agua limpia, sanidad, colegios y transporte. El

Este informe también abordó la divergencia existente en términos de capacidades, reflejándose esto en la atención que fijó sobre la relación entre soberanía e IED. Y si bien el informe no cuestionó frontalmente el modelo de desarrollo económico basado en un crecimiento económico – como habían hecho los informes anteriores -lo cual causó, que el informe estuviese cargado de “vaguedad en sus posiciones” (Rist, 2002, pág. 212)-, sí señaló la dificultad existente para los Estados del Sur de definir estos conceptos, al enunciar sospechas de que no era simétrica la capacidad de maniobra que poseía cada uno. Indicando a este respecto que la relación entre soberanía e IED estaba cargada de continuas situaciones que evidenciaban la asimetría en términos de capacidades. Hecho por el cual, habitualmente, los países en desarrollo tenían que someterse a los países desarrollados, debido a la carencia de elementos que otorgaban capacidad como la: información, preparación técnica, capacidad política o debilidad institucional (Comision Brundtland NNUU, 1987, pág. 64).

Continuando con la misma línea argumental sobre el desarrollo, cinco años más tarde en la *Cumbre de Río de Janeiro* (1992)- conocida como Cumbre de la Tierra-, la ligación entre sostenibilidad y desarrollo se vio reforzada. El evento significó, en cierto modo, la instalación en la primera escena internacional de desarrollo sostenible, puesto que el acto encumbró el sentido integrador entre la empresa y el medioambiente. A partir de esa fecha dejó de ser un término únicamente característico de círculos ambientalistas, para adentrarse en el discurso político. De modo que el concepto comenzó a formar parte, incluso, del discurso en el aparato empresarial, alcanzando la Conferencia el objetivo que tenía de promover la inclusión en el proceso ambientalista de todos los agentes sociales y, especialmente, de las empresas.

El aspecto relevante de estos últimos eventos y documentos mencionados - Informe Brundtland y Cumbre de Río-, fue que a través del discurso inscrito en los mismos se desplazó la crítica que venía elaborándose en torno al crecimiento económico como modelo, a la reproducción del ciudadano consumista y demás cuestiones que pudiesen cuestionar “frontalmente” al proceso industrializador, al aludirse constantemente a lo propicio de promover una integración parcial entre la sostenibilidad y el crecimiento económico. De ese modo se logró impulsar un corriente ideológica que, en términos

adecuado manejo administrativo de las ciudades exige la descentralización, de fondos, de poder político y de personal, hacia las autoridades locales (Comision Brundtland NNUU, 1987).

globales, actuase como promotora de una práctica que podría ser definida como: un crecimiento sostenible ambientalmente (Naredo & Gómez-Baggethun, 2012).

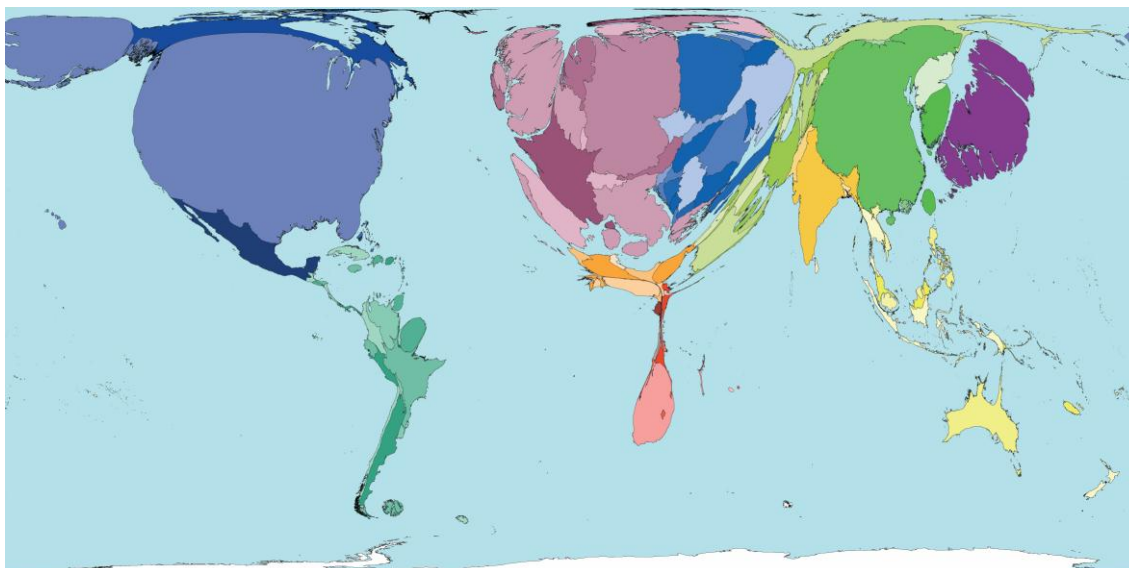
Todo este proceso de construcción teórica argumental alteraba radicalmente el ideario que había centrado la lucha que se despertó en los 70: la necesidad de cambiar drásticamente el crecimiento económico y su modelo de consumo como ideal de vida en sociedad. Fue en este sentido en el que las ideas y propuestas que se habían recogido en el término Eco-desarrollo- que había despertado cierta susceptibilidad en los países más industrializados y causa de que el lobby empresarial comenzase a actuar, como de hecho el propio Ignacy Sachs manifestó afirmando que se había recibido en la Comisión un comunicado por parte del secretario de Estado de EEUU, Henri Kissinger por esos tiempos, informando de que el término Eco-desarrollo quedaría vetado en foros internacionales -, quedaron relegadas y excluidas como mecanismo de transformación. Es por ello, que obedeciendo al mandato estructural de los países desarrollados fue indicada la pertinencia a las NNUU de elaborar un nuevo término que, esta vez, combinase y diese cabida al crecimiento económico dentro del modelo, y cómo señalan Naredo y Gómez-Baggethun (2012), se optase por “...buscar un nuevo término que se adaptara con mayor comodidad al modelo económico de los países industriales” (Naredo & Gómez-Baggethun, 2012, pág. 354).

Las ideas y argumentos que habían sido sostenidos desde los años 70 se vieron desplazadas claramente. Aquello que estaba implícito en los informes elaborados en aquella década- la necesidad inminente de repensar la pertinencia del crecimiento como modelo de vida global-, pasó a ser visto como una idea ambigua característica de grupos ecologistas. El origen del problema ambiental ya no indicaba como causa al tipo de desarrollo basado en la reproducción industrial, sino que argumentaba que la pobreza era causa del subdesarrollo, al no disponer los Estados en desarrollo de medidas tecnológicas para implementar su industrialización con prácticas menos perjudiciales para el medioambiente. Este hecho evidenciaba un cambio teórico argumental trascendental. Se pasó de un esquema en el que la responsabilidad de abordar cambios estructurales estaba situada en los países industrializados y su entramado empresarial, a señalar a los países pobres como causantes del problema ambiental por la ausencia de capacidad técnica. Y además se les informaba de que la solución a sus males: la tecnología, la encontrarían acudiendo a los mercados de aquellos que anteriormente habían sido señalados como responsables directos del impacto ambiental negativo: los Estados desarrollados. Es decir, esta construcción teórica significó un nuevo impulso en favor de la incrementación de las relaciones económicas y de

dependencia tecnológica respecto a los Estados desarrollados. Se requería más y mejor IED.

“...the world need[s] to differentiate between the survival emissions of the poor and luxury emissions of [the] rich” (Sunita Narain, 2002).

Ilustración 6: Emisiones de Dióxido de Carbono 1980.



Fuente: http://www.worldmapper.org/posters/worldmapper_map296_ver5.pdf . Consulta realizada el 12/3/2013.

Asimismo, señalar que en el proceso subyace una construcción teórica basada, principalmente, en el argumento que sostenía que era la falta de riqueza aquello que imposibilitaba el desarrollar un proceso de conciencia ecologista entre los países en desarrollo. Indicando que sin un crecimiento económico éstos no obtendrían los excedentes necesarios para realizar las inversiones en educación y en tecnologías apropiadas, las cuales posibilitasen la no contaminación en su proceso de industrialización.

Resulta llamativo como el esquema teórico construido, a partir de la indicación de que los postulados en favor del crecimiento económico y el modelo consumista no eran sustentables, veía como de nuevo se situaba como modelo de desarrollo apropiado aquel que entendía como óptimo el individuo consumista. De hecho, así quedó señalado en el Principio 12 de la Conferencia de Río, cuando se comenzó un proceso promotor de la idea de que era necesario apoyar: “...un sistema internacional favorable y abierto que lleve al crecimiento económico y el desarrollo sostenible de todos los países” (NNUU, 1992).

Ilustración 7: Comparativa entre los conceptos: Eco-desarrollo vs Desarrollo sostenible.



Fuente: De elaboración propia.

En este sentido, un evento que evidencia claramente el giro que sufrió la postura institucional, respecto al considerar apropiado el entender el crecimiento económico como modelo en el que se debía incrustar la ecología transversalmente, fue el II Informe Meadows presentado en el año 1991 (*Beyond the Limits*). Éste, incluso con la presencia de amplia información sobre el deterioro que estaba sufriendo el planeta y afirmando que las perspectivas eran peores que las detectadas por el primer informe Meadows, encargó el prólogo a Jan Tinbergen, un economista que obtuvo el premio Nobel por un trabajo relacionado con el desarrollo económico. Es decir, se hacía evidente el posicionamiento en favor de instaurar un desarrollo sostenible que asociase la sostenibilidad a la industrialización.

En la misma línea que este documento, la mayoría de los informes elaborados desde ese momento hasta la actualidad han situado sus objetivos en implementar y desarrollar una arquitectura internacional que articule mecanismos que potencien un crecimiento sostenible

como modelo de desarrollo. Es decir, un desarrollo sostenible que no reformule el modo de vida y aspiraciones del individuo (Río, Estambul, Johannesburgo y Río + 20)¹²³.

Sin embargo, aun siendo evidente este proceso, es obligación señalar que han aparecido continuas referencias a la imposibilidad de mantener el modelo. Documentos como *Los límites del crecimiento: 30 años después* (2004), en donde se indica que “...no puede haber un crecimiento poblacional, económico e industrial ilimitado en un planeta de recursos limitados”; o en su versión de 2012, donde se señalan cuestiones similares; así como el informe *2052: Un pronóstico global para los próximos cuarenta años*, en el que se indica que con este modelo estamos en los bordes de la desidia estructural, han incidido en que este sistema no es positivo, ni socialmente ni ambientalmente. Aunque asimismo, es deber apuntar que, a pesar de señalar la problemática intrínseca del modelo, las medidas que se proponen en los documentos van en el camino de acoplar crecimiento y la sostenibilidad.¹²⁴

En definitiva, la conjunción de dos ideas que se presentaron como antagónicas en principio, como lo eran la sostenibilidad basada en la convicción de vivir en un planeta finito y el crecimiento económico- con un modelo de desarrollo que basa su funcionamiento en el consumo masivo-, confluyeron en un solo concepto: el desarrollo sostenible. A partir de este encuentro la conjunción se ha presentado como un mecanismo ideal de desarrollo, promovido por las principales instituciones internacionales a través de diversas herramientas (conferencias, documentos, informes, etc...). Éstas, como no puede ser de otra forma en un mundo interdependiente y debido al alto impacto divulgativo de la información de los agentes globales, han incidido en la apropiación por parte de las instituciones, tanto nacionales como internacionales, de la práctica y el concepto¹²⁵. De

¹²³ Siendo un tema amplio e interesante, se recomienda la lectura de Naredo & Gómez-Baggethun (2012) para adquirir una comprensión más amplia sobre la transformación sufrida por el imaginario conceptual del desarrollo en términos ambientales.

¹²⁴ Los aspectos señalados en el informe inciden sobre cambios de tendencia, pero menos sobre el modelo al promover: 1) reducir aumento en escala demográfica, especialmente en los países desarrollados; 2) reducir el impacto de las acciones en la huella ecológica, en las naciones desarrolladas especialmente; 3) promocionar y construir sistemas de energía solar y eólica; y 4) fortalecer la capacidad de acción global para actuar con rapidez (Randers, 2012). Asimismo, se pueden observar las previsiones de Jorge Randers para el 2052 en las que se hace referencia al encuentro conceptual continuo entre sostenibilidad y crecimiento económico en: http://www.clubderoma.org.ar/documentos/Palabras_de_Jorgen_Randers.pdf. (Consulta realizada el 12 de marzo de 2014).

¹²⁵ En este sentido véase la Agenda 21. La cual consiste en un Plan de Acción de las Naciones Unidas, suscrito por la práctica totalidad de los países del mundo, en el que se establecen de forma detallada las acciones a emprender por los gobiernos para integrar medio ambiente y desarrollo económico y social en el horizonte del siglo XXI. Disponible en línea: <http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Medio-Ambiente/Agenda-21?vgnextfmt=default&vgnextoid=b9885193f471d010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnnextchannel=4b>

hecho, desde la Conferencia de Río de Janeiro celebrada en 1992, las NNUU están colaborando, hombro con hombro, con el Acuerdo General de Tarifas y Aduanas (GATT o OMC desde 1995) con un objetivo concreto: armonizar el desarrollo sostenible con la práctica del libre comercio (Naredo & Gómez-Baggethun, 2012, pág. 358).

4.2 Desarrollo Humano: de una concepción de necesidades básicas a una de desarrollo humano multidimensional.

Al igual que la visión crítica que sostuvo el postulado económico-ambientalista con la industrialización, el paradigma humanista se mostró disconforme con el modelo de desarrollo industrializador que se estaba llevando a cabo, y de su difusión como práctica política-económica global.

Fue el Informe Pearson¹²⁶, en 1969, el documento que dio la voz de alarma acerca de la inoperancia efectiva del modelo, tanto en aquellos lugares en donde se habían seguido las pautas que fueron indicadas por la Teoría de la modernización, como en otros en los que se había producido una readaptación teórica del modelo- como ocurrió en los Estados subdesarrollados de ALC con aplicación del modelo ISI-, a la vista de los datos que presentaba el análisis realizado sobre la evolución global entre los años 1949-1969.

El problema humano era claramente contrastable. Y si bien entre los años 1945 y 1965 los índices de crecimiento se habían incrementado excepcionalmente, los datos reflejaban un pronunciamiento del dualismo en la distribución de beneficios, tanto entre Estados como en el interior de los mismos. Sin embargo, el señalar este hecho no causó el que se cuestionase el modelo de desarrollo basado en el crecimiento económico.

El Informe Pearson señaló que la problemática se encontraba en el que las operaciones comerciales no contuviesen una mayor carga ética. Ante lo que recomendaba que se debieran articular mecanismos que fomentasen una operativización comercial con mayor justicia en el reparto de beneficios, que lograse paliar el constante incremento sufrido por las sociedades en términos de pobreza y desigualdad.

[3a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idCapitulo=5532666](http://unesdoc.unesco.org/images/0005/000567/056743so.pdf) .(Consulta realizada el día 26 de febrero de 2014.)

¹²⁶ Documento disponible en: <http://unesdoc.unesco.org/images/0005/000567/056743so.pdf> . (Consulta realizada el día 26 de febrero de 2014).

Se pretendió estimular al compromiso en la SI. Se advertía del peligro que tendría el mirar hacia otro lado y el que las acciones causantes de la desigualdad pasasen a ocupar espacios mínimos, debido a la falta de compromiso y voluntad de cambio por parte de los Estados con capacidad, los del Norte, para reducir esta situación de asimetría.

“...la creciente dedicación general al empeño de coadyuvar a la histórica tarea del desarrollo mundial. ¿Será posible que la abandonemos ahora?

La posibilidad existe; **hay indicios crecientes de que en algunos de los países industrializados**, entre ellos los más ricos, **se está debilitando la voluntad política** de seguir en ese empeño” (Pearson, y otros, 1970, pág. 8) [**Negrita propia**].

El aspecto humano comenzó a ocupar espacios de debate. En el mismo año del informe (1969), el economista Dudley Seers señaló - en una reunión de la Sociedad para el Desarrollo Internacional - que el concepto de desarrollo no debía medirse a partir del índice de crecimiento económico. Por contra, debía considerarse como desarrollo factores que reflejasen con mayor exactitud el cómo vivían las personas. Es decir, se debía medir el incremento en cuestiones que conllevasen una mejora en las variables de: a) pobreza; b) empleo; y c) desigualdad¹²⁷. Por lo que, si éstos habían sufrido una alteración positiva se podría hablar de desarrollo, en caso contrario, aunque hubiese crecido el PIB, no.

Lo esencial que revela la argumentación de Dudley Seers se encuentra en el hecho de no considerar el crecimiento económico como señal de desarrollo, así como a su indicador hasta la fecha: el PIB, desplazándolo a una posición secundaria en la medición del desarrollo. En el sentido de que, si bien éste constituía un elemento indicativo de la situación del Estado, no guardaba una relación directa con la finalidad del desarrollo- entendida por Seers como mejora de la calidad de la vida de todos los ciudadanos- (Seers, 1983; Seers, 1969). Planteamiento que indicaba que el PIB y el PIB per cápita no eran indicadores fiables de desarrollo por si solos. Por lo que el crecimiento económico como desarrollo poseía, en la perspectiva de Seers, un difícil encaje como señales de desarrollo, si la finalidad del desarrollo era el bienestar de las personas.

¹²⁷ Se preguntaba Dudley Seers: “What has been happening to poverty? What has been happening to unemployment? What has been happening to inequality? If all three of these have become less severe, then beyond doubt this has been a period of development for the country concerned. If one or two of these central problems have been growing worse, especially if all three have, it would be strange to call the result "development," even if per capita income has soared” (Seers, 1969, págs. 3-4).

Aun en el modo señalado, el hecho de que los beneficios del crecimiento no se hubiesen expandido entre las diferentes capas de la población no era atribuible, según Seers, al modelo de crecimiento económico. Y aunque indicó que éste no podía ser objeto de desarrollo - por la confusión teórica en la utilización de los conceptos históricamente-, sí señaló que no se le debía excluir del desarrollo. Señalando que se trataba más de un medio para lograr el desarrollo que del objetivo en sí. Es decir, en su perspectiva el crecimiento económico era más bien un indicador de la economía y no una finalidad social como parecía haberse convertido en teoría.

4.2.1 El Enfoque de Necesidades Básicas

En el mismo sentido que Seers, se pronunció Paul Streeten a mediados de los 70. Cuando, abordando el tema, indicó que el desarrollo era una cuestión con un objetivo claro: cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos. Se abrió un hueco en la SI el postulado desarrollista denominado Enfoque de las Necesidades Básicas (ENB):

“...el concepto de necesidades básicas es un recordatorio de que el objetivo de los esfuerzos a favor del desarrollo es proporcionar a todos los seres humanos la *oportunidad* de vivir una vida plena. Como quiera que se interprete una vida “plena”...

El tener una idea acerca de un fin no significa que hay que descuidar los medios: por el contrario, quiere decir que los esfuerzos se dirigen hacia la elección de los medios adecuados para los fines esenciales que se desean.

...lo planificadores se han alejado de una mira del desarrollo, que es satisfacer las necesidades básicas, desviándose hacia algún conglomerado de productos y servicios valorados a precios de mercado, independientemente... de si benefician al rico o al pobre” (Streeten, 1986, págs. 31-32).

A partir de ese instante, el debate sobre el concepto de desarrollo centrado en las personas, por medio del ENB, fijó sus esfuerzos en analizar la solvencia e impulso de mecanismos que tuviesen el objetivo de resolver las cuestiones problemas de educación y salud.

En cuanto al impacto institucional, la promoción de la conciencia en la sociedad en favor de cubrir esas necesidades, tuvo gran calado y fue entendido como hecho positivo. Sin embargo, hay que resaltar que la finalidad y justificación en torno a la que se argumentó este enfoque fue la importancia de cubrir estas “necesidades” para aumentar la

productividad laboral. Y es en ese sentido en el que se observa que la promoción de justicia social estaba constituida a partir de un enfoque economicista, en el que la finalidad del individuo desarrollado era el ser un elemento capaz de enrolarse en la cadena productiva.

Aun de este modo, es relevante la cuestión que menciona Paul Streeten en su obra, cuando mediante una comparativa entre cual debía ser el objetivo social que debía promover las prácticas como sociedad, situó en disputa al crecimiento económico y al ENB, resolviendo que:

“El crecimiento por sí mismo – incluso el crecimiento igualitario o la redistribución derivada del crecimiento- no garantiza la satisfacción de las necesidades básicas. Una característica distintiva del enfoque de la satisfacción de las necesidades básicas es que las políticas deben ponerse en práctica para asegurar un suministro cada vez mayor y debidamente distribuido de bienes, tanto públicos como privados, si se quieren satisfacer las necesidades básicas” (Streeten, 1986, pág. 105).

Manifestación de Streeten que se oponía a la ya clásica postura que manifestó Rostow de que “...cuando sube la marea, todos los botes suben con ella” (Citado en Valcárcel (2006, pág. 7)). Abogando ante esto, por lo apropiado de fijar unos mínimos en sociedad a partir de los que había que empezar a negociar las condiciones de intercambio. Indicando que esos mínimos que cubriesen las necesidades básicas no debían entrar en el juego económico, puesto que eran elementos necesarios para asegurar la vida y la no exclusión de las personas.

Tanta fue la relevancia del término, que en 1976 fue incluida en la agenda de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)- estableciendo un periodo para su logro: el año 2000-, e igualmente en las agendas del BM e institutos de estadísticas¹²⁸. Hechos que contribuyeron a que se diese comienzo a una época en la que se centrasen esfuerzos en la eliminación de la carencia de las necesidades básicas: Nutrición, vivienda, vestimenta, salud, educación, agua y saneamiento.

¹²⁸ Estos autores conjuntamente fueron los que elaboraron el libro referente del Enfoque: *Lo primero es lo primero. Satisfacer las necesidades humanas básicas en los países en desarrollo* (1986). Tecnos. Madrid. Libro publicado para el BM.

4.2.2 El Enfoque de Capacidades

Casi a la par que se divulgaba el ENB se produjo la aparición de enfoques teóricos divergentes, los cuales cuestionaban las propias limitaciones del concepto. Algunos afirmando que el ENB entendía a la persona como un elemento productivo y que el desarrollo consistía en algo más que una mera cobertura que atendiese únicamente a las necesidades básicas.

Fue en un simposio celebrado en México en 1974 sobre Patrones de Usos de Recursos, Medios Ambiente y Estrategias de Desarrollo, en el que se elaboró la Declaración de Cocoyoc (México), en la cual se complementaba el postulado del ENB¹²⁹, argumentando que: como SI el deber iba mucho más allá de promover una mera subsistencia.

“Nuestra primera preocupación es redefinir todo el propósito del desarrollo. Este no debería ser desarrollar cosas sino desarrollar al hombre”.

“Los seres humanos tienen necesidades básicas: alimentación, vivienda, vestimenta, salud, educación. **Cualquier proceso de crecimiento que no lleve a la satisfacción o, peor aún, la interrumpa es una parodia de la idea de desarrollo**” (Citado en Alkire & Santos (2010, pág. 8)) [Negrita propia].

Al mismo tiempo que se hacía referencia a no limitar el concepto de desarrollo a aspectos de vida básicos- como indicaría más tarde Amartya Sen -, se afirmó en la Declaración que el desarrollo debía incluir más aspectos que los propios y necesarios para subsistir como un mero animal:

“El desarrollo no debería limitarse a la satisfacción de las necesidades básicas. Hay otras necesidades, otros objetivos y otros valores (...) libertad de expresión e impresión, el derecho a dar y recibir ideas y estímulos (...) participar en la modelación de las bases de la propia existencia, y en hacer alguna contribución en la configuración del futuro del mundo (...) el derecho a trabajar, por lo cual no significamos solo tener un empleo sino encontrar auto-satisfacción en el trabajo, el derecho a no ser alienado por medio de los procesos de producción que usan a los seres humanos como simples herramientas” (Citado en Alkire & Santos (2010, pág. 10)).

¹²⁹ En América Latina el enfoque se abordó desde la CEPAL: Consultar documento *La dimensión de la pobreza en América Latina* (1979). Disponible en [http://dds.cepal.org/infancia/guide-to-estimating-child-poverty/bibliografia/capitulo-I/Altimir%20Oscar%20\(1979\)%20La%20dimension%20de%20la%20pobreza%20en%20America%20Latina.pdf](http://dds.cepal.org/infancia/guide-to-estimating-child-poverty/bibliografia/capitulo-I/Altimir%20Oscar%20(1979)%20La%20dimension%20de%20la%20pobreza%20en%20America%20Latina.pdf) (Consultado del día 03 de octubre de 2013).

Los esfuerzos internacionales se centraban en fijar como objetivo la eliminación de la pobreza, ya que fue éste el pilar a paliar y sobre el que giró el ENB. Pero dentro de este proceso, aunque no se dudase de que el crecimiento económico fuera una meta del Estado y la sociedad, si se incidió en que si se continuaba afirmando que se debía dirigir la mirada internacional en temas de desarrollo únicamente hacia ese indicador, el desarrollo se estancaría o incrementaría, pero no afectaría siempre a las cuestiones vitales para la mayoría social, puesto que como había afirmado Dudley Seers:

“Aquellos que poseen el poder raramente tienen interés en esos asuntos, [Pobreza y necesidades básicas] menos en dirigir la atención hacia esos asuntos. Es preferible escudarse debajo de “índices de crecimiento” que son alabados en los informes de las agencias internacionales”¹³⁰ (Seers, 1983, pág. 6).

Atendiendo a estas cuestiones, la perspectiva humanista encontró en el investigador Amartya Sen y su Enfoque de las Capacidades, el siguiente escalón en el que fijar la perspectiva. Así como el postulado en el que se verían reflejados los enfoques humanistas anteriores.

Sen situó en su enfoque una perspectiva integradora para entender las dimensiones del desarrollo, al aglutinar, en cierto sentido, los postulados anteriores e incluir factores relativos al desarrollo personal del individuo. La definición del concepto que desarrolló Sen, rescataba aquello que se afirmó en la Declaración de Cocoyoc, y lo amplió afirmando que el desarrollo no era únicamente la disponibilidad de recursos materiales por parte de los individuos, y no podía ser de ninguna forma entendido únicamente como crecimiento económico, sino que debía centrarse en la vida de las personas, no en la herramienta:

“...desarrollo como la ampliación de la capacidad de la población para realizar actividades elegidas (libremente) y valoradas, **sería del todo inapropiado ensalzar a los seres humanos como ‘instrumentos’ del desarrollo económico**” (Sen: 1998 pág. 601) **[Negrita propia]**.

El postulado de Sen tuvo gran impacto en la SI desde los años 90, como refleja el hecho de que sea pilar de los documentos del PNUD a partir de esa fecha. Pero lo relevante, fue el ejercicio de desunión entre el concepto desarrollo y el modelo consumista que desarrolló,

¹³⁰ Traducción propia a partir de: “Those who hold power rarely have much interest in such matters, still less in attention being drawn to them. It is preferable to shelter behind the ‘growth rates’ that are commended in the reports of international agencies” (Seers, 1983, pág. 6).

puesto que ejecutó un ejercicio de disociación entre el “tener” -característico de una economía de consumo-, centrando el ser desarrollado en el factor de capacidad para “hacer y ser”.

Dando un giro Sen a lo indicado en el postulado de Streteen, en el que se presentaba al desarrollo como finalidad el acceso a un puesto laboral y consistía en lograr ser un “instrumento” del desarrollo económico, afirmaba que el individuo no puede ser considerado únicamente como un instrumento del proceso. El desarrollo de los individuos era un derecho que debe ser poseído por el individuo, no siendo una meta en sí el empleo. Sino indicando que el desarrollo debe estar centrado en proporcionar a los individuos la capacidad de elegir como vivir. Esa debe ser la meta del desarrollo y aunque si puede ser que este derecho esté limitado o impulsado por aquello a lo que se puede acceder, tanto materialmente como espiritualmente, no es el determinante único.

Las aportaciones de Sen actuaron como elemento impulso del enfoque extendido actualmente: el Enfoque de Derechos. Éste tuvo su “boom” a través de la promoción del desarrollo humano labor ejercida por las agencias de las NNUU (UNICEF; Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP); etc...) a lo largo de los 90. Pero más allá de suponer un cambio en la visión del desarrollo clásico, contra el que se venía combatiendo, hay que señalar que el desarrollo humano se instaure bajo los mismos mecanismos que el modelo del desarrollo económico y se sostiene sobre las mismas bases argumentales. Esto debido a que éste reclama un reajuste en la estructura que impulse el que la cobertura de servicios se produzca a partir de una regulación, en la que se indica que los agentes responsables de que se cubran los requerimientos necesarios para que los individuos desarrollen sus capacidades serán: los mercados. Contexto en el cual el crecimiento económico se sitúa como mecanismo impulsor de este desarrollo. De hecho, se encuentra este argumento en la mayoría de los informes elaborados por el PNUD. Y teniendo en cuenta que el PNUD es la institución que se ha apropiado, así como legitimado, internacionalmente del término desarrollo humano- e incluso son responsables de elaborar los diversos índices de desarrollo humano como el conocido IDH¹³¹-, el ejercicio de promoción de este concepto está ligado a una práctica de crecimiento con un modelo de desarrollo sustentado en las relaciones asimétricas. Por una parte dependientes de una

¹³¹ Posibilidad de consultar el documento en <https://data.undp.org/dataset/Table-1-Human-Development-Index-and-its-components/wxub-qc5k> (Consulta realizada el 24 de julio de 2013).

tecnología que fomenta el papel de la IED; y por otra de la industrialización, que son situados como los elementos articuladores del desarrollo.

En definitiva, la perspectiva inscrita en el desarrollo humano, junto con la dispuesta por Sen a partir del año 1990, situaron la responsabilidad de promover mecanismos para que se alcance el desarrollo en tres agentes: 1) el Estado, mediante la aplicación de impuestos e invirtiendo en los campos necesarios; 2) el mercado, como agente promotor de competencia eficaz; y 3) los individuos, los cuales poseen tanto la necesidad como el deber de capacitarse y calificarse para potenciar su capital humano, acto que les permitirá alcanzar los logros que se planteen en sus ideas.

4.2.3 Enfoque de Derechos Humanos

“Hay algo muy atractivo en la idea de que cada persona en cualquier lugar del mundo, independientemente de su ciudadanía, residencia, raza, clase, casta o comunidad, tiene algunos derechos básicos que otros deberían respetar. El gran atractivo moral de los derechos humanos se ha usado para una variedad de propósitos, desde resistir la tortura, el encarcelamiento arbitrario y la discriminación racial hasta demandar un fin al hambre y la falta de asistencia médica en el mundo” (Sen, 2009, pág. 355).

El Enfoque de Derechos que, no por moderno, ha adquirido mayor notoriedad en la actualidad- promovido por el propio Amartya Sen-, se inscribe como eje articulador del intento de resaltar el que las variables que forman parte del desarrollo están escritas en los propios DDHH, aprobados hace ya más de medio siglo. De hecho, indica Sen (1983) que afirmar que el desarrollo es un DH es muy relevante en términos de responsabilidad, ya que se responsabiliza del progreso y el logro del desarrollo a más agentes de la SI, y no únicamente a los Estados, puesto que “La Declaración universal de los derechos humanos tiene sus implicaciones para la comunidad internacional, no sólo para los Estados”¹³² (Seers, 1983, pág. 6).

En este sentido, centrar el debate en torno al DH al desarrollo implica una alusión directa a diversos espacios con responsabilidad no enajenable: a) un derecho humano individual de la persona (de todas y cada una); b) de un derecho colectivo de los pueblos “situados” en

¹³² Traducción propia a partir de: “The Universal Declaration of human rights has implications...for the international community as a whole, not just for the individual states” (Brian Barry, 2005, p. 28. citado en (Sen, 2009, págs. 381-382)).

sus respectivos territorios y, si los hay, en sus Estados; y c) e igualmente de toda la SI en una época de interdependencia como la actual.

Aunque resulte novedoso en algunos contextos, la conexión entre los DDHH y el desarrollo no es una ligación novedosa. De hecho, ya en 1986 la Asamblea General de las NNUU indicaba que el DH al desarrollo consiste en el:

“...reconocimiento, respeto, promoción y defensa del derecho- se realiza **si la persona... goza de todas las posibilidades y recursos necesarios para el despliegue máximo de su potencialidad**; lo que exige que los pueblos a los que pertenezcan hayan conseguido todos los niveles de abundancia de recursos y oportunidades – económicas, sociales, culturales, políticas y de sus derivados y colaterales- para que todos y cada uno de los miembros pueda alcanzar sus potencialidades” ((según la Asamblea General de las NNUU) (1986)Citado en Sanchez (2005, pág. 9)) **[Negrita propia]**.

En este documento se evidencia de manera notable que el concepto promovido por Sen ya se había tratado por las OOII, aunque no se hubiese incluido entre los propósitos de los documentos de las agencias como el PNUD, explícitamente.

El ejercicio de resaltar y poner en el primer plano político de las agencias, aquello que ha sido desarrollado con anterioridad con vehemencia e indicar activamente que son todos los agentes responsables de la situación global, era una acción relevante en términos de responsabilidad. Pues si se atiende a las garantías contenidas en las diversas declaraciones de las propias NNUU, se evidencia que:

“La responsabilidad de garantizar el reconocimiento, respeto, defensa, promoción y cumplimiento del derecho humano al desarrollo es de:

- En primer lugar, el Estado y gobierno del país correspondiente;
- si él no lo cumple, la obligación de garantizar su cumplimiento, es de la comunidad Internacional, NNUU y todas sus agencias, y todos los organismos internacionales “sin exclusión de los financieros” BM y FMI , y comerciales OMC, y de todos y cada uno de los actores del derecho Internacional;
- a su vez los estados pertenecientes a la OCDE, que ejecutan la AOD. Estos tienen el deber enajenable (no se puede ajenizar...)
- a estos hay que unirles todas las instituciones y organizaciones sociales, culturales, políticas, económicas, jurídicas, deportivas, religiosas...de cualquier asunto y

naturaleza. Nadie puede eludir la responsabilidad de reconocer, cumplir y hacer cumplir tal derecho humano de todas y cada una de las personas y pueblos del mundo. Y nadie puede bajo delito de lesa humanidad (sea o no juzgable) eludir tal deber;

- y en ese nadie estamos todos y cada uno de los seres humanos que habitamos este mundo”.

(Sánchez, 2005, pág. 9).

Por otra parte, al analizar las prácticas de los agentes, a los que se supone poseen el deber no enajenable de hacer cumplir el derecho al Desarrollo, queda evidenciado qué aspectos han primado en su agenda, ya que se vislumbra una clara promoción de unos derechos: civiles y políticos, y no de otros: económicos, sociales y culturales, en la SI¹³³.

Es en ese sentido en el que es deber señalar que el desarrollo como DH, abarca a los cinco derechos mencionados y no únicamente los civiles y políticos, como se muestra en habitualmente en la escena internacional, dando una cierta marginación de los aspectos humanos, sociales y culturales, frente a la preponderancia de lo económico, comercial y lo financiero (Sánchez, 2005).

4.3 El crecimiento como práctica desarrollista incrustado en las agendas.

Se ha de indicar que, si bien el desarrollo no ha sido inscrito únicamente como un crecimiento económico, si se vislumbra claramente una conexión entre las variables citadas en la mayoría de las declaraciones emitidas por las instituciones internacionales. De hecho, se encuentra recogido en las declaraciones y definiciones emitidas desde los años 90, señalándolo, no como único objetivo, pues ya se desligó como elemento causal directo, pero si como componente fundamental en el aspecto económico. Con lo que un individuo o sociedad puede poseer otros elementos para considerarle desarrollado, pero si no crece económicamente su valoración será discutida abiertamente.

- Boutros-Ghali(Secretario General de las NNUU en el momento del discurso emitido el 14 de junio de 1993 en Viena en referencia a los Estados: “...una vez obtenidos los primeros resultados económicos, no introducen reformas

¹³³ Esta causa es debida, primordialmente, a los dos polos que quedaron constituidos en la SI tras la IIGM. En donde uno defendía la defensa de los derechos civiles y políticos como el medio de constituir una sociedad de progreso; y el otro bloque defendía que la base de toda sociedad era el disponer de los derechos económicos, sociales y culturales, ya que entendía que eran aquellos que potenciaban la capacidad de los ciudadanos para implementar las sociedades en armonía.

democráticas, sólo lograrán un crecimiento sin enjundia, fuente de desigualdad crecientes y de futuros desórdenes sociales” (Citado en Sánchez (2005, pág. 74));

- El Programa de Desarrollo, adoptado por la Asamblea General de NNUU en 1997 indicaba que: “...para seguir un enfoque integrado en materia de desarrollo centrado en el ser humano y alcanzar un desarrollo sostenible, el crecimiento económico no basta de por sí”(Párrafo 44)¹³⁴;
- PNUD, Informes sobre el Desarrollo humano:
 - o 2000: “...el crecimiento económico es un medio para el bienestar humano y para la ampliación de las libertades fundamentales. No es un fin en sí mismo, con valor intrínseco” (PNUD, 2000, pág. 80).
 - o 2011: “...el crecimiento económico es importante, pero sólo es un medio” (PNUD, 2010/2011, pág. 4).

Se pueden encontrar decenas, centenas o miles de documentos en los que se relacione el crecimiento económico con el desarrollo, como lo hicieron los teóricos modernizadores o como se hace en la actualidad, indicando que un desarrollo económico y social están interconectados. Es en este sentido en el que el epígrafe aquí escrito evidencia la constancia de como el crecimiento económico que fue cuestionado como modelo en los 70, se ha institucionalizado como idea primaria que, aun en colaboración con el desarrollo social, se presupone fundamental para el desarrollo. Por lo que el modelo de consumo y la industrialización desorbitada se presentan como ideas institucionalizadas, que si bien tiene atribuidas capacidades coercitivas en lo material, parecen poseer mayor peligro por su capacidad en lo ideacional. Y como indica Gilbert Rist (2002): “El “desarrollo humano” participa de esta contradicción fundamental que permite denunciar lo que se recomienda, y practicar lo que se considera inaceptable” (Rist, 2002, pág. 294).

5. América Latina y el caribe: las instituciones y el ¿desarrollo? desde los 80.

Mientras tanto, como consecuencia del contexto de endeudamiento masivo en Latinoamérica que se dio cita durante los setenta y comienzos de los ochenta, así como por las diversas dictaduras instaladas la región, los debates en torno al concepto de desarrollo

¹³⁴ Publicación del Departamento de Información Pública de las NNUU en el que se recoge la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993. Documento citado en Sánchez (2005, pág. 74).

quedaron postergados en ALC¹³⁵ (Estay, 2003). Por lo que con la pretensión de solventar la profunda crisis de deuda, la región se vio “forzada” a adoptar programas de ajuste que promocionaban las IFI (FMI y BM). Lo que provocó que se fuese cuajando una reformulación de la teoría cepalina del desarrollo a finales de los 80.

El despertar del debate cepalino se produjo en parte como respuesta al agotamiento de las políticas ISI, que junto con el periodo de “pasividad tecnológica” en la época de los 70, fueron los factores principales que promovieron la crítica interna de algunos autores de la CEPAL, que actuaron como impulsores de que se abordase un replanteamiento de la política de desarrollo que había sido promovida por la institución desde su creación.

La falta de resultados que se habían producido como consecuencia de la aplicación de las políticas ISI, la cuales no resistían la comparativa con el éxito de las experiencias de desarrollo “económico” en el sudeste asiático¹³⁶, incentivó el que la CEPAL redirigiese su argumentación teórica. En dado contexto se abrió paso un postulado inclusivo de argumentos propios del pensamiento del *mainstream* desarrollista. La escuela neo-estructuralista se instauró en la CEPAL.

Recuperando parte del pensamiento ortodoxo- en donde se afirmaba que era necesaria la promoción del incremento tecnológico en la industria para incrementar la riqueza¹³⁷ y este hecho sería impulsor del crecimiento necesario para abordar la reducción de la pobreza¹³⁸-, la teorización cepalina abogó por reformular los postulados que operaban desde los clásicos estructuralistas, en base a la convicción de que el bastión erróneo de estos últimos había sido el retraso no resuelto en la tecnología productiva. Detectada esta premisa, se

¹³⁵ En especial en Chile, donde la CEPAL se había instituido como fuente de pensamiento económico y social latinoamericano. A este respecto señala Ricardo Bielschowsky lo siguiente: “Entre 1973 y 1989, la sede de la cepal en Chile perdía aquello que había sido hasta entonces uno de sus principales activos, el poder de convocatoria de la intelectualidad latinoamericana. Economistas, sociólogos, tecnócratas y políticos de tradición democrática y progresista simplemente dejaron de poder o querer circular en Chile. Además del problema chileno, la cepal encaraba la antipatía ostensible de otras dictaduras, en particular la de Argentina, ideológicamente opuesta a la cepal, incluso en los fundamentos del modelo de apertura económica à outrance que aplicaba, tal como lo hacían Chile y Uruguay” (Bielschowsky, 1998, pág. 7).

¹³⁶ La experiencia asiática había basado su incremento en las tasas de crecimiento en el valor añadido, que suponía la exportación de productos intensivos en nuevas tecnologías. Sin embargo, su praxis se contraponía en algunos puntos a las recomendaciones emitidas por los neoliberales (contenidas en el Consenso de Washington) por tres razones: a) los asiáticos abogaron por la regulación estatal; b) inserción en el mercado internacional a partir de una inserción dinámica en nuevas tecnologías, no por productos intensivos en trabajo; y c) no fijaron su actividad en los mercados externos, sino que abogaron por el equilibrio entre lo externo y lo interno (Guillén Romo, 2007, pág. 307).

¹³⁷ Véase a este respecto Schumpeter (1958).

¹³⁸ Este proceso se produciría en teoría mediante un esquema que promovía el incremento del crecimiento y la competitividad, debido al aprendizaje industrial-tecnológico que había impulsado experiencias “exitosas” (Fajnzylber, 1992).

constituyó el armazón teórico y se formularon recomendaciones que señalaban que se debía afrontar una transformación que permitiese aumentar la capacidad operativa de la región, para impulsar un incremento de la carga tecnológica en su industria. Había que adoptar medidas que fomentasen la corrección de este inconveniente rápidamente, ya que incidía en el estancamiento que había azotado a la región. Labor para la cual, la corriente neo-estructuralista optó por aproximarse a los postulados neo-liberales, reclamando que se adoptasen en las prácticas políticas una cierta apertura de los mercados y se acercasen a la liberalización¹³⁹.

Uno de los grandes cambios fue el que los neo-estructuralistas reformularon la clásica concepción del “desarrollo hacia dentro”, que había sustentado el ideario operativo en los orígenes de la CEPAL, apostando por ejercer políticas que impulsasen un “desarrollo hacia afuera”. Es decir, en pos de favorecer la adquisición de tecnología, la escuela afirmó que se debía abordar una transformación en el papel que debía jugar el agente que había sido fuente de reglaje del progreso tecnológico: el Estado, recomendando que éste diese un paso atrás y optase por dar cabida a una metodología en la que la apertura económica a los mercados, las reformas y un proceso de desreglamentación gradual, diesen acceso al incremento en tecnología¹⁴⁰. No se trataba de una apertura total como recomendaban los neoliberales, sino una especie de posición intermedia, que se denominó *Market-friendly* (Bielschowsky, 1998).

El giro en el pensamiento de la CEPAL quedó reflejado en varias de las producciones documentales que fueron elaboradas desde los años 90. Esta transformación del ideario neo-estructuralista se encuentra recogida en textos elaborados a partir de los 90 por la institución: en 1990 el texto Transformación Productiva con Equidad (TPE); dos años más tarde, Transformación Productiva: un enfoque integrado (1992); y el 1994, el que constituyó la entrada en vigor del denominado “regionalismo abierto” a través del informe El regionalismo abierto en América Latina y el Caribe: la integración económica al servicio de la Transformación Productiva con Equidad (1994).

Estos documentos configuraron el nuevo postulado ideológico. Fue a partir de la percepción del mundo- en el que influyó la caída del muro de Berlín y la preocupación de

¹³⁹ La postura adoptada se vio reflejada claramente en dos textos elaborados por la CEPAL: “La Transformación Productiva con Equidad” (1990); y en “La visión integrada” (1992).

¹⁴⁰ La acción del Estado debía operar en cuestiones limitadamente. No sustituir el papel del Estado, sino regularlo en términos de intervención y que únicamente se dedicase a realizar labores de gestión mínima.

que fuese cierto la llegada del “Fin de la Historia” de Fukuyama¹⁴¹ - cuando se temió por un aislamiento tecnológico regional dentro de un proceso de globalización y revolución en cuestiones de tecnología.

El contexto motivó el que se actuase con la pretensión en mente de que ALC se adaptase a los nuevos tiempos e impulsase su inclusión en el comercio internacional, visualizando la apertura como el impulso que incrementaría el avance tecnológico y que, operando bajo la premisa de que una vez que la región se situase en los niveles de los Estados desarrollados, incrementaría las exportaciones y se produciría, concretamente: un desarrollo hacia afuera (Salidjian, 2006, pág. 19). Pero en este caso y según los neo-estructuralistas, el proceso se daría con un mayor grado de equidad, pues este factor era una diferencia elemental que distanciaba los neo-estructuralistas de los postulados neo-liberales.

El enfoque neo-estructuralista desplazaba el papel del Estado como agente regulador en contra de los postulados estructuralistas y clásicos de la CEPAL. La idea que sostuvo esta transformación se basaba en el pensamiento de que, para adentrarse en una nueva fase caracterizada por ser democrática, se debían introducir los ajustes necesarios con el objetivo de fomentar el desarrollo en los Estados y en la región, a razón de sus recursos y capacidades.

“(…) [Se debía] **descentralizar y despolitizar la gestión pública, puesto que cuanto más problemas sean resueltos por el sistema político (contra el mercado) o en el nivel central (contra los gobiernos sociales de las provincias o locales), más grande será la carga de las demandas sociales que se concentran en el nivel político central y a las cuales no puede responder.** De esta forma, la descentralización y la despolitización de los conflictos resulta una manera indirecta pero real de reducir la sobrecarga que pesa sobre el Estado central y, al mismo tiempo, mejora su eficiencia” (Sunkel y Zuleta (1990, pág. 47-48) Citado en Salidjian (2006, pág. 20)) **[Negrita propia]**.

Las estrategias de apertura junto con las reformas debían estar concertadas entre los diversos agentes: el Estado, los mercados y la sociedad civil, para adquirir conjuntamente la capacidad de responder y argüir una estrategia a largo plazo, en la que los proyectos inscritos en la estrategia TPE diesen el fruto esgrimido. Sin embargo, se debe señalar que la gran cobertura y la velocidad que alcanzaron las reformas y la liberalización dejaron de lado muchos de los aspectos planificados y comprometieron, en gran medida, el plan impulsado

¹⁴¹ Se recomienda leer para entender contexto Fukuyama (1994).

por los neo-estructuralistas por medio de la TPE, y con mayor impacto en cuestiones de equidad.

Recordar e incidir que no se puede afirmar que los neo-estructuralistas fuesen neo-liberales, y más teniendo en cuenta que, al haber observado el despertar en los países asiáticos, se consideraron cuestiones no presentes en el marco conceptual neoliberal como: la dimensión social y la importancia de la demanda interna. Pero así como se diferenciaron éstos, es debido reseñar también que en éste sentido es en el que se podría argumentar que el neo-estructuralismo de la CEPAL se constituyó más como una crítica a partir de la percepción de los efectos sociales negativos de las teorías neo-liberales, que como una crítica frontal.

“...parece que la escuela cepalina perdió una gran parte de su identidad haciendo suyas teorías (capital humano, crecimiento endógeno) cuyos fundamentos son opuestos a los del estructuralismo”¹⁴² (Eric Mulot en Guillén Romo (2007, pág. 312)).

Este acercamiento a los postulados neoliberales, fue la causa de que en ocasiones se haya enunciado que sería más apropiado que se denominase a la teoría neo-estructuralista como pensamiento de una nueva CEPAL que como neo-estructuralistas. Puesto que incluso en el año 1999 se llegó a recomendar la dolarización de ALC, con lo que ello supondría para la independencia latinoamericana (Guillén Romo, 2007, pág. 313).

En cierto sentido, al observar el papel ejercido por las instituciones internacionales en los 80, se evidencia el poco debate en torno al concepto en los diferentes informes y prácticas que por esa época componían la agenda y los programas promovidos. Contexto en el que las preocupaciones por la conceptualización del término desaparecieron de las agendas y sólo se mantuvo como elemento esencial en la UNCTAD y como era debido en el PNUD, como ya ha sido indicado con anterioridad¹⁴³.

Por contra, el ejercicio de revisión de los informes emitidos por las grandes instituciones multilaterales que poseían capacidad operativa, como el FMI, BM o la OMC, refleja una evidente promoción de “recomendaciones” que consistían en la implementación de

¹⁴² Traducción propia a partir de: “Le neosturalism et la question en Amérique latine et Caraïbes: construction d’une pensée ou convergence idéologique?” (Mondes en développement, vol.29, núms.113 y 114, 2001. Citado en Guillén Romo (2007, pág. 312)).

¹⁴³ En referencia a este hecho Jan Kregel realizó una ponencia con el nombre: “Cómo desapareció el tema del desarrollo de la agenda de la Naciones Unidas” (Kregel, 2000). En donde apuntó a la desaparición de políticas de desarrollo de la agenda internacional.

prácticas que suprimiesen el papel del Estado o más bien, en las que el Estado ejerciese el papel de auto-limitador de competencias y realizase a su vez, acciones de privatización, desregulación, apertura económica, etc.... Prácticas que estuvieron respaldadas por estudios científicos o “grupos de expertos”, como los trabajos realizados por Xavier Sala-i-Martin y Robert Barro (1991) y Dan Ben David (2000)¹⁴⁴, los cuales sustentaban la argumentación “científica” que vinculaba a las prácticas señaladas con la reducción de asimetrías internacionales y nacionales (Estay, 2003).

Los argumentos emitidos dibujaban una estructura en la que, visualizando el objetivo raíz de todo proceso de desarrollo: la reducción de asimetrías, y ante la constatación de que las políticas ISI estaban en colapso y el endeudamiento fracturaba la capacidad de decisión a los Estados de ALC, permitía exponer un discurso por parte de las IFI ante los Estados en desarrollo y los propios ciudadanos de los Estados desarrollados, que aludía a un “plan” que contenía medidas “positivas” y “necesarias” para lograr el bienestar deseado. Es decir, se divulgó a través de formulaciones teóricas, la pertinencia de apropiar programas con las directrices contenidas en el denominado Consenso de Washington, que consistía, primordialmente, en la imposición de una especie de “libertad económica” en los países en vías de desarrollo y no en los Estados desarrollados. Medidas que “automáticamente” supondrían un crecimiento económico que traería de la mano el tan ansiado: bienestar social.

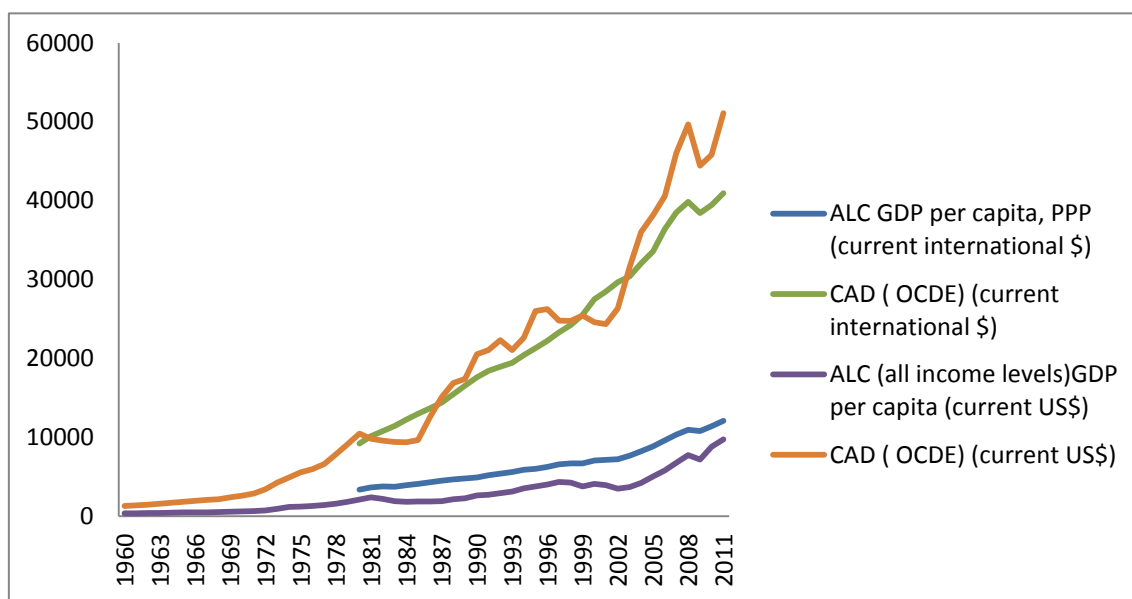
En consecuencia, las teorías estructuralistas que habían relacionado la intervención del Estado en la economía con la mejora de los índices sociales, no tenían razón de ser según el BM y el FMI. Y aunque en los Estados desarrollados se practicasen políticas proteccionistas frente a los comercios externos¹⁴⁵, las medidas que se recomendaban adoptar los Estados en desarrollo eran diferentes. Con la aplicación de éstas lograrían reducir la divergencia existente, se debían adoptar políticas aperturistas¹⁴⁶.

¹⁴⁴ Los trabajos presentados por estos autores vincularon las teorías de crecimiento endógeno con postulados teóricos neoclásicos estableciendo, a través de modelos econométricos, las implicaciones de dos procesos que se entendía producían convergencia: 1º) de disminución de los grados de dispersión existentes en el interior de la economías atrasadas respecto a las variables indicativas de los niveles de bienestar; y 2º) de rápido crecimiento económico de esas economías, a un ritmo mayor al de los países desarrollados. Lo que significaría una aproximación de los primeros, los Sub-desarrollados, a los desarrollados (Barro & Sala-i-Martin, 1991). En cuanto a la justificación de la apertura y la convergencia, Ben David y Ayal Kinhi (2000), afirman que el incremento de exportaciones de los países pobres posee una relación directa con la convergencia internacional. (Citado en nota de página 6 en Estay (2003, pág. 72)).

¹⁴⁵ En este contexto se podrían indicar las prácticas proteccionistas ante el comercio externo en agricultura presentes en EEUU (*Farm Bill*) y en Europa (la Política Agraria Común).

¹⁴⁶ Para comprender las implicaciones de estas prácticas en el comercio mundial véase Bianchi y Szpak (2013).

Gráfica 2: Ingresos per cápita en países del CAD (OCDE) y ALC (1960-2011).



Fuente: Tabla de creación propia a partir de daros obtenidos de <http://databank.worldbank.org>. (Consulta realizada el 11 de septiembre de 2012).

Ante la evidente ausencia de resultados en la reducción de asimetrías del PIB (gráfica superior), el incremento de las desigualdades en ALC, junto con un proceso de polarización¹⁴⁷ económico-social, se evidenció que las teorías que promulgaban que mediante la adopción de éstas medidas los Estados receptores obtendrían ciertos resultados, fueron perdiendo legitimidad dentro de amplios círculos académicos y propios a las instituciones. No es que no hubiese habido posturas contrarias a estos postulados en la SI. De hecho, sí se realizaron diversos trabajos que contradecían lo mencionado por los teóricos ligados a las IFI, en los que se advertía de que con la adopción de las prácticas contenidas en las agendas de las IFI la polarización sería aún mayor en el mundo. Incluso en esta línea se manifestaban los informes del PNUD o la UNCATD, cuando afirmaban continuamente la necesidad de realizar otro tipo de gestión sobre la economía y sobre el proceso globalizador, advirtiendo que de no acometerse cambios profundos en las prácticas se vería incrementada la exclusión y la marginalización de aquellos que carecían de recursos y se engendraría una brecha económica, aun mayor, entre pobres y ricos.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Al respecto indica Ezquiel Molina (2008) que: “Una sociedad se encuentra polarizada cuando está dividida en grupos que son desiguales en alguna dimensión clave del orden social, pero a su vez son homogéneos en su interior: muy cercanos entre sí, pero distintos respecto de otros” (Molina, 2008).

¹⁴⁸ En la misma línea lo indicaba la UNCTAD al señalar como inapropiado ejecutar estas políticas, situándose en contra de los postulados convergentes augurados anteriormente. Al respecto se recomienda leer informes contrarios a la teoría de la convergencia condicional en Baisoch & Kozul-Wright (1996); Rowthorn & Kozul-

Una vez constatado que algunos informes indicaban que aquellos modelos adoptados, en los que el desarrollo estaba basado en una apertura económica como vía para salir de los Estados de pobreza, no eran en sí una solución integral, el debate ya no se situó únicamente entre escuelas pertenecientes a países del subdesarrollo contra modernizadores- como había ocurrido en los primeros años de la CEPAL-, sino que desde las propias IFI y OOI, las cuales habían promovido y “recomendado” la puesta en marcha de programas contenidos en el Consenso de Washington, se despertaban voces contrarias afirmando que las medidas no resultaban eficaces, ni para la reducción de la pobreza interna ni para la reducción de desigualdades¹⁴⁹.

5.1 Transformación del poder. Reconfiguración del modelo de desarrollo tras el fracaso del regionalismo abierto.

Una vez que la CEPAL había armado ideológicamente a los opositores de la doctrina defensora de la intervención del Estado, clásica de los postulados estructuralistas, la industrialización no es que fuese una opción, sino que era presentada como la única opción para alcanzar el desarrollo. A medida que la región de ALC se especializaba en actividades ventajosas para la explotación de sus recursos, se incrementaban las importaciones de bienes de consumo producidos en los Estados desarrollados (Furtado, 1987, págs. 9-10). Es decir, unas ventajas de un lado, contraponían las del otro.

Wright (1998); o informes sobre Comercio y desarrollo que elaboró la UNCTAD en 1997, en donde se afirmaba que los Estados en desarrollo han sufrido diferentes procesos, y ante la heterogeneidad que presentan los mismos es imposible asegurar y realizar “...generalizaciones acerca de cómo la distribución del ingreso cambia con el desarrollo económico” (UNCTAD, 1997, pág. 123).

¹⁴⁹ En este aspecto, incluso desde el FMI se advertía de que estas prácticas no tendrían los efectos positivos si no se adoptaban otro tipo de estrategias. Indicaron que: “Sin unas estrategias con mayor complementariedad, los beneficios de la globalización serán mucho menores y el riesgo de marginalización del progreso económico de la corriente principal mayor”. Traducción propia a partir de: “Without more comprehensive strategies, the benefits of globalization are likely to be much smaller and the risk of marginalization from the mainstream of global economic progress greater” (FMI, 1997, pág. 17). A este respecto, incluso figuras relevantes como el profesor Joseph Stiglitz (2002) -(Premio Nobel en Economía (2001)), que habiendo formado parte de las altas esferas del BM- donde ejerció de Economista Jefe y Primer Vicepresidente entre 1997 y 2000-, se ha mostrado contrario a la conceptualización de desarrollo en torno a la fijación de un objetivo que contuviese únicamente una sola variable: el crecimiento económico, sin una intervención que controlase la distribución de los recursos.

“Necesitamos tener objetivos claramente definidos. No se trata sencillamente de alcanzar un aumento en los ingresos, sino de crear un crecimiento económico equitativo, estable y democrático. Es importante que aumente el bienestar material, pero ello es sólo parte del objetivo. Necesitamos preocuparnos por la solidaridad social, la justicia, la calidad de vida y la educación [...] pues la educación no puede verse como un medio para aumentar los ingresos, sino también como un elemento que enriquece la calidad de vida”.

El concepto de desarrollo pierde evidentemente su carácter estrictamente cuantitativo para transformarse en un concepto más cualitativo y, por consiguiente, más complejo, multidimensional e intangible. La integridad buscada aparece como una necesidad de hacer compatibles lo económico, lo social y lo ambiental, sin comprometer las posibilidades del desarrollo de las nuevas generaciones y de la vida futura del planeta” (Stiglitz, 2002) **[Negrita propia]**.

Según Celso Furtado (1987), el tratar de aceptar que el desarrollo era un concepto global por parte de la CEPAL implicaba la:

“...transformación de la sociedad a nivel de los medios pero también de los fines; proceso de acumulación y de ampliación de la capacidad productiva, pero también de apropiación del producto social y de configuración de ese producto; división social del trabajo y cooperación, pero también estratificación social y dominación; introducción de nuevos productos y diversificación del consumo, pero también destrucción de valores y supresión de capacidad creadora” (Furtado, 1987, pág. 9) [Negrita propia].

Lo cual, en cierto modo, significaba una injerencia en el proceso de construcción de un desarrollo endógeno en el que se expresase la identidad latinoamericana, como habían recomendado los eco-desarrollistas a mediados de los 70. Ya que por medio de esta implantación del mercado, este propósito quedaba desplazado de las metas regionales y, de nuevo, el apropiarse de ideas externas suprimía las capacidades de articular prácticas desde construcciones ideacionales particulares.

Entre esto y las crisis ocurridas a finales de los 90, que a pesar de presentar datos positivos en cuanto al crecimiento económico la región vio incrementar su el porcentaje de número de hogares pobres sin reducir la desigualdad, el pensamiento crítico acerca de las políticas que se habían promovido por las reformas neoliberales de mercado, resultó en un giro político que reclamaba un empoderamiento del Estado a finales de los 90, al auparse al poder en varios Estados, gobiernos que se definieron como de izquierda o progresistas¹⁵⁰.

A este respecto, aunque la diversidad de los gobiernos es un hecho que no permite hablar de unidad de pensamiento regional¹⁵¹, sí se significó, en cierto modo, un detención de la ola de reformas neoliberales a partir de la promoción de prácticas reguladoras y el establecimiento de controles de la actividad económica, incluyendo un regreso a la actividad de las empresas Estatales.

De hecho, el cambio de políticas ha sido considerado por algunos autores como el fin del regionalismo abierto, significándose la llegada de un periodo denominado de diversas

¹⁵⁰ Néstor Kirchner y Cristina Fernández Kirchner en Argentina; Lula da Silva y Dilma Rouseff en Brasil; Hugo Chávez en Venezuela; Tabare Vázquez y José Mujica en Uruguay; Rafael Correa en Ecuador; Ollanta Humala en Perú; Michelle Bachelet en Chile; Fernando Lugo en Paraguay.

¹⁵¹ Éstas van desde las posturas más ortodoxas, como las ejecutadas por el gobierno de Bachelet en Chile, pasando por Brasil y Uruguay como ejes intermedios, hasta otras que indican lo apropiado de regular el cambio de moneda y la comercialización de bienes, como en Venezuela.

formas: post-consenso de Washington; post-liberal; post- hegemónico o post-comercial (Sanahuja J. A., 2012; Serbin, Martinez, & Ramanzini Júnior, 2012). Proceso que se ha caracterizado por la presencia de ciertas alteraciones en la praxis política como: a) una mayor participación de los Estados en la economía; b) mayor presencia de la agenda del desarrollo; c) una participación mayor de la sociedad civil; d) una mayor presencia en foros internacionales. Todo ello acompañado de un impulso regional del proceso de integración o/y unificación latinoamericana, que en cierto sentido, ha significado cierto grado de empoderamiento regional, al abracar un proceso reflexivo que profundiza en replantear una cuestión: ¿cuáles son las metas propias del desarrollo cómo región?

En este planteamiento ha tenido mucha influencia la narrativa de los sectores de izquierda, los cuales han apuntado directamente al regionalismo abierto - impulsado por los neo-estructuralistas- como causa del debilitamiento del Estado y de la capacidad de éste para ejecutar políticas sociales que promoviesen una sociedad desigual. Indicando que es necesario en la actualidad articular un reclamo que logré promover prácticas políticas que reduzcan las asimetrías sociales y el desarrollo. Pero ¿a qué tipo de desarrollo se referían ésta vez?

En palabras del brasileño Theotonio Dos Santos (2004):

“...el debate sobre el desarrollo vuelve a ocupar una posición central en las ciencias sociales y en la política latinoamericana, ubicándose hoy día en el marco de la oposición entre las políticas de desarrollo y el dominio del capital financiero asentado en una “ortodoxia” monetarista bastante discutible por los efectos negativos que ha producido en la región” (Dos Santos, 2004).

Este replanteamiento se ha instaurado con mayor presencia en unos países que en otros. Por ejemplo, en algunos Estados como Argentina, el desarrollo se ha inscrito dentro de las prácticas de un nacional-popular progreso basado en exportaciones y crecimiento económico, con un fuerte papel del Estado al servicio de los sectores populares; en Brasil, con programas como *Novo-desenvolvimento*, con un mayor papel del Estado pero de acuerdo con el papel asumido por el mercado, pero no cercano a los postulados de izquierda y practicando políticas liberales (Gudynas, 2012). Por otra parte, en una postura continuista con el regionalismo abierto, se encuentran aquellos Estados que apuestan por una gran apertura de la economía y siguen manteniendo los modelos de desarrollo liberales, con cierta intervención del Estado, pero inscritos en proyectos muy cercanos a EEUU y como

muestra de ello su participación en la Alianza Pacífico Norte. Se podría incluir en este rol a Chile, Colombia, Perú y México. En el otro extremo, se situaron los Estados que han promovido el cambio conceptual desarrollista, con claros rasgos de un cierto aspecto de post-desarrollismo¹⁵². Pero más llamativo que ese cambio, es la presencia de las reivindicaciones de los pueblos originales en la región, los cuales han logrado abrirse paso e instaurarse en el centro del debate sobre el desarrollo, e incluso inscribirse en las constituciones de algunos Estados, como los casos de Ecuador y Bolivia, dando luz a un concepto ancestral el “Buen Vivir” o “Vivir Bien”.

En definitiva, la región presenta una realidad en términos de desarrollo que está lejos de ser homogénea. Lo que evidencia la presencia de posturas diversas, que en cierto modo, vienen determinadas por las prácticas configuradas en torno al logro de metas determinadas por la concepción de aquello que se entienda por desarrollo.

6. Configuraciones particulares/alternativas del desarrollo desde América Latina y el Caribe tras 500 años: el Buen Vivir o *sumak kawasay* y el Vivir Bien o *sumak qamaña*.

“El buen vivir es un fenómeno cuyo interés es la señal que hemos ingresado en periodo histórico radicalmente nuevo; es signo no sólo de una resistencia sino que tiene un carácter propio: **constituye una propuesta como proceso de una genuina alternativa histórica en un crucial periodo histórico del mundo**”. Comentó sobre la emergencia del concepto el investigador Aníbal Quijano, de Perú, durante la celebración del IV Foro Social Américas en 2010. (Fedaeaps, 2010) **[Negrita propia]**.

Ante la ineficacia de los programas aplicados en la región latinoamericana- que cabe recordar, posee los mayores índices de desigualdad del planeta junto con el África subsahariana (CEPAL, 2010)-, se han venido reproduciendo reclamos por parte de la sociedad civil; de los desfavorecidos; de los excluidos, etc... con continuidad¹⁵³, planteando

¹⁵² En el sentido que lo afirma Escobar, en línea con el pensamiento que señala que los cuestionamientos al desarrollo o al progreso deben poner en cuestión la propia lógica del ser moderno. Puesto que si se plantea una alternativa al desarrollo, ésta debe ser alternativa al modo de vida que implica la modernidad en sí (Escobar, 2005). Dado que según afirma Gudynas (2012) la Modernidad expresa una ontología concreta, es decir, un modo de vida del deber ser y entender el mundo.

¹⁵³ En este sentido indica Arturo Escobar (2010) que los movimientos han consistido en diversos reclamos a lo largo de la región, en los que desde casos en los que las formas de reclamo son consecuencia del enraizamiento entre protestas indígenas (casos de las comunidades zapatistas de Chiapas o las comunidades indígenas de Oaxaca), u otros como las comunidades aymaras urbanas de El Alto en Bolivia, en donde se produce una “creativa re-constitución de la lógica comunitaria sobre la base de nuevas formas de

la necesaria activación de políticas que reconfigurasen la ontología implícita en la teorización del desarrollo (Quijano, 2012).

Pero ha sido en la época reciente en donde los movimientos sociales han hallado espacio para articular su presencia como agente- gracias en parte al incremento de la democratización en ALC-, con la aspiración y meta de lograr eliminar la posibilidad de reversión a una situación en la que se había negado el derecho de ser. Es decir, la exigencia de cambio se construye a partir del adquirir consciencia de que se habita y se es parte de una sociedad dividida entre dos polos. Un grupo con acceso a una serie de recursos y otro que trata de articularse socialmente para reclamar el derecho a su no exclusión de lo común; del derecho a la tierra; a la no expropiación de su condición de ciudadanos; a la no discriminación étnica, etc..., con el objetivo de superar, mediante un cuestionamiento de las ontologías relacionales¹⁵⁴, la pobreza extrema de amplios sectores sociales en la región, y en especial aquel que ha afectado a los grupos indígenas¹⁵⁵. Esto debido a que, ciertamente, han sido y son el grupo en el que más ha incidido históricamente los efectos más negativos del sistema. Eso sí, siempre en el nombre de la civilización, del progreso, de la modernidad, del desarrollo, etc....

En este contexto, hay que señalar que la protesta indígena reclamando unas condiciones dignas de vida está presente desde las épocas de conquista¹⁵⁶. Pero es desde finales de los 90 cuando su voz logra emitir un sonido que hace eco. El momento en el que la región ha logrado escuchar y replicar su voz, y se ha adentrado en un nuevo proceso que cuestiona el desarrollo desde otra perspectiva no unida a la modernidad y al consumo (Escobar A. , 2012).

Las principales causas del hecho señalado, no son únicamente las victorias electorales de partidos que incluyeron en sus programas el concepto del Buen Vivir, en Estados como Ecuador y Bolivia, sino más bien este hecho es el resultado de la insistencia de los movimientos sociales. Los cuales lograron articular con mayor intensidad su protesta, promoviendo el que se situaran sus ideas en la arena política.

territorialidad”(Escobar A. , 2012, pág. 49). Reinando en ambos y en otros la composición de una queja ante la organización del poder en los términos liberales.

¹⁵⁴ Arturo Escobar (2010) indica que: “Ontologías relacionales son aquellas que evitan la división entre naturaleza y cultura, entre individuo y comunidad, y entre nosotros y ellos que son fundamentales para la ontología moderna” (Escobar A. , 2012, pág. 48).

¹⁵⁵ Para una análisis profundo se recomienda ver informe de Christian AID (2012).

¹⁵⁶ Para profundizar sobre las rebeliones indígenas ocurridas en ALC se recomienda ver: Ángel Barral, *Las rebeliones indígenas en la América española* (1992) Ed. Mapfre; Carlos Valcárcel *Rebeliones coloniales sudamericanas*, (1982) Ed.F.C.E.; y Josefina Oliva De Coll, *La resistencia indígena ante la conquista* (1988) Ed.Siglo XXI.

Si bien es verdad que como región el impacto por el momento es parcial, e incluso en los propios Estados que han incluido el concepto en sus constituciones se observan vacíos en su aplicación e impacto, el hecho de cuestionar el modelo de desarrollo representa la disconformidad con la articulación y efectos de su práctica (Acosta A. , 2009; Acosta A. , 2011).

El giro político impulsor del Buen Vivir encuentra su origen, en gran medida, en la acción colectiva practicada por los movimientos indígenas desde los años 90¹⁵⁷. Principalmente, en los Congresos Tierra, territorio e instrumento político, celebrados en 1995 y 1997 en Bolivia; y en la creación de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Costa Ecuatoriana (COICE) en 1990 en Ecuador. Aunque estos procesos han poseído diferentes grados de intensidad, ritmo e impacto, dependiendo del Estado, en los dos hay que destacar la importancia que ha tenido la participación de los ciudadanos a través del incremento democrático en las sociedades, al posibilitar espacios en donde articular los reclamos de la sociedad civil. Pues resulta difícil entender el proceso de transformación política sin la reducción de la represión por parte de los Estados (Rodríguez, 2012, pág. 42).

La libertad democrática y la reducción de la represión estatal ante los movimientos de protesta - mediante la reforma constitucional de 1994 que reconoció valiosos derechos colectivos a los indígenas en Bolivia y una reforma similar en 1998 en Ecuador - abrieron un espacio para el incremento de los movimientos sociales institucionalizados (McAdam, 1999, pág. 58). Hechos que fueron impulsores de la inclusión del término Buen Vivir o Vivir Bien en los dos procesos constitucionales. Inclusión que posee una carga simbólica muy relevante en el contexto regional e internacional, ya que debido a sus raíces originarias de Latinoamérica aquello que representan “...no es solamente uno más entre otros “desarrollos alternativos”, sino que pone en discusión toda la base conceptual del desarrollo occidental” (Gudynas, 2010). Por lo que según Escobar (2010) sería un error considerar el Buen Vivir como un proyecto únicamente Andino, o en su expansión,

¹⁵⁷ Los levantamientos más relevantes que se dieron lugar y que marcaron un antes y un después en el levantamiento indígena y los movimientos sociales fueron decisivos en la destitución de tres presidentes en Ecuador: Abdalá Bucaram en febrero de 1997; Jamil Mahuad en enero de 2000; y Lucio Gutiérrez en abril de 2005. El levantamiento de enero 2001 en Ecuador; y en Bolivia la “Guerra del Agua” abril 2000 fueron decisivos en el giro político que dieron estos Estados y en sus resultados electorales.

Los movimientos sociales siguen activos, como demuestra lo acontecido el 12 de Febrero de 2012 en Bolivia, con la revuelta que se inició sobre un impuesto del 12,5% que gravaba sobre aquellos trabajadores que tuviesen dos empleos y sobre la guerra del Gas por el impuesto aplicado al mismo. Reseñar la divergencia en la metodología de las protestas entre los dos Estados, mientras que los hechos en Bolivia fueron violentos y dejaron decenas de muertos y cientos de heridos; los procesos Ecuatorianos destacaron por la poca violencia practicada (McAdam, 1999).

latinoamericano, puesto que “...está influenciado por las corrientes críticas del pensamiento occidental, y su objetivo es influir en los debates globales” (Escobar A. , 2012, pág. 46).

Es por ello reseñable que con anterioridad a la emisión de un concepto propio, los pueblos indígenas realizaron un esfuerzo comprensivo del pensamiento occidental y trataron de establecer similitudes entre su cosmovisión y la que arraigaba el concepto clásico de desarrollo occidental. Buscando entre su léxico un símil que se asemejase al desarrollo, y ante la dificultad que conllevaba encontrar una aproximación conceptual a lo entendido por occidente, concluyeron que el desarrollo tenía una significación clara: se trataba de “un ideal de vida”. Entendiendo éste como el concepto que abarca y enmarca aquello que determina el modo y da sentido a la vida, se promovieron tres términos por parte de diversas etnias que se asemejaban en sus cosmovisiones: a) el *suma qamaña* en aymara; b) *sumak kawasay* en quechua; y c) *ñandereco* en guaraní (Alcoreza, 2012, pág. 228).

Si bien estos conceptos habían sido tratados por círculos académicos expertos en el área, con el triunfo electoral del *cocalero* Evo Morales en Bolivia y el de Rafael Correa en Ecuador (2005 y 2006 respectivamente), el término se instauró en las constituciones de estos Estados, reflejando y evidenciando diferencias sustanciales en el modo de entender la vida con el ideal desarrollista. En este aspecto, si bien es manifiesto que las comunidades y los diversos áreas poseen particularidades propias de cada zona o pueblo indígena en su concepción del Buen Vivir¹⁵⁸, lo llamativo es que el hecho representa un proceso de ruptura con el modelo clásico de desarrollo, que hasta ese momento reinaba en los Estados de ALC (en sus órganos operativos e instituciones públicas)¹⁵⁹.

¹⁵⁸ José María Tortosa (2009) categoriza las diferentes concepciones indicando que: “Sumak kawasay es quichua ecuatoriano y expresa la idea de una vida no mejor, ni mejor que la de otros, ni en continuo desvivir por mejorarla, sino simplemente buena”; el Suma qamaña boliviano es el que introduce el elemento de comunidad, que se podría traducir como “Buen convivir” (Tortosa, 2009); y Ñande Reko, que significa: “Modo de ser, modo de estar, sistema, ley, cultura, norma, comportamiento, hábito, condición, costumbre”. (Antonio Ruiz Montoya en su obra: *Tesoro de la lengua guaraní* (1876)). Aunque genérica descripción, los guaraníes, que no consideraban a la tierra como madre, sí vinculaban el término con una Tierra sin Mal, indicando el respeto por la naturaleza como sustento de vida, ya que para ellos la tierra debe ser conservada como: “...la tierra-sin-mal como tierra nueva y tierra fiesta, espacio de reciprocidad y de amor mutuo, produce también personas perfectas, que no sabrían morir. Tras esta meta, nada utópica, ya que tiene lugar bajo nuestros pies, han ido generaciones de guaraní” (FAM- Bolivia PADEP/Componente Qamaña, 2008, pág. 104).

¹⁵⁹ Como ya se ha visto a lo largo de este capítulo, la discusión había girado más en torno a que actor era el ejecutor y gestor del desarrollo que sobre la idea subyacente de qué era desarrollo.

“...aunque tienen varias concepciones del Buen Vivir lo que realmente une a los pueblos indígenas es la visión de **romper con el modelo de desarrollo occidental** capitalista, asimilador, elitista y mono-cultural” (Gudynas, 2011)[**Negrita propia**].

“El desarrollo como Buen Vivir busca articular la economía, el medio ambiente, la sociedad y la cultura en nuevas formas, llamando a las economías sociales y solidarias mixtas; introduce temas de justicia social e intergeneracional en los espacios de los principios del desarrollo; reconoce las diferencias culturales y de género, posicionando la interculturalidad como principio rector; y permite los nuevos énfasis político-económicos, tales como la soberanía alimentaria, el control de los recursos naturales y un derecho humano al agua” (Escobar A. , 2012, pág. 46).

Ante las divergencias que presentan los matices conceptuales en las diferentes comunidades, en este análisis se recogen aquellos aspectos comunes y que representan en la región una respuesta de aquellos grupos que se vieron desposeídos del poder desde la época de conquista, ya que como indica Aníbal Quijano (2010) “El poder hizo inaudible esa emergente propuesta, que ahora resurge con la actual crisis del sistema capitalista” (Citado en Fedaeaps (2010)).

En este contexto, los reclamos de los pueblos originarios se han visto representados en los textos constitutivos actuales de los Estados de Bolivia y Ecuador. Por fin.

- Plan Nacional de Desarrollo (PND) boliviano del 2006:

“La nueva propuesta de desarrollo se basa en la concepción del Vivir Bien, propia de las culturas originarias e indígenas de Bolivia. A partir de los elementos comunitarios enraizados en pueblos indígenas, comunidades agrarias, nómadas y urbanas de las tierras bajas y altas, el Vivir Bien postula una visión cosmocéntrica que supera los contenidos etnocéntricos tradicionales del desarrollo”.

“El Vivir Bien expresa el encuentro entre pueblos y comunidades, respeta la diversidad e identidad cultural. Significa “Vivir Bien entre nosotros”, es una convivencia comunitaria con interculturalidad y sin asimetrías de poder, “no se puede Vivir Bien si los demás viven mal”. Se trata de vivir como parte de la comunidad, con protección de ella, en armonía con la naturaleza, “vivir en equilibrio con lo que nos rodea”. También significa “Vivir Bien contigo y conmigo”, que es diferente del “vivir mejor” occidental, que es individual, separado de los demás e inclusive a expensas de los demás y separado de la naturaleza” (PND, 2006, pág. 11).

- **La Constitución de Ecuador respecto al desarrollo en su Art. 275:**

“El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del *sumak-kawsay*”.

“El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza” (Constitucion de Ecuador, 2008, pág. 135).¹⁶⁰

Este ideal de vida- según la definición de las comunidades- que se presenta en estas regiones de ALC, como indica Ana María Larrea (2010), se trata de un concepto en construcción que conjunta visiones y muestra una clara contraposición a las lógicas de vida de acumulación presentes en el concepto clásico del desarrollo, ligado al crecimiento y al modo de vida occidental. Por lo que, en cierto modo, el ideal de vida que se indica en el Buen Vivir se constituye como movimiento emancipador, en términos ideológicos, al cuestionar premisas ontológicas, en el que se observan ciertos indicadores que albergan una construcción social con variables diferentes a las clásicas del desarrollo, que además aboga por otro tipo de desarrollo, en el que se constituye una nueva perspectiva basada en pilares alternativos sobre los que construir el modelo de sociedad.

El Buen Vivir presenta esquemas de convivencia que se contraponen, en cierto modo, a aquellos que actúan como premisas en el *mainstream* desarrollista, dando prioridad a aspectos como: a) lo comunitario; b) la relación hombre semejantes y la naturaleza; c) la universalidad conceptual (el Buen vivir dibuja un modelo integral y plural, no universal); d) lo cualitativo ante lo cuantitativo- esquema en el que la acumulación e industrialización no son umbrales de deseo¹⁶¹, sino medios de equilibrio (al más claro estilo que se indicaban en los orígenes de la economía, cuando ésta era vista como necesaria para la redistribución de recursos y no para la acumulación desorbitada y destrozó del medioambiente¹⁶²); y d) el

¹⁶⁰ Entre los artículos 275 y 278 de la Constitución Ecuatoriana del 2008, se presentan una serie de cambios que promueven aquellos principios que parecen coincidir con todas las teorías de desarrollo propuestas en la mayoría de convenciones y conceptos sobre el desarrollo como son: 1) las personas como bien principal; 2) el buen vivir que incluye a la naturaleza y su respeto; 3) la soberanía alimentaria; 4) así como la meta principal que será una distribución equitativa del ingreso per cápita (Constitucion de Ecuador, 2008, págs. 135-140).

¹⁶¹ Se recomienda la lectura de De Vries (2007) para comprender la implicación del deseo en términos de desarrollo.

¹⁶² Véanse desde la obra del ya mítico Adam Smith *La riqueza de las naciones* (1776); pasando por Marx y su famosa obra. *El capital* (1999); o el mismísimo John Stuart Mills en *Principios de economía política: con algunas de sus*

individuo deja de ser la centralidad del discurso para dar cabida a la convivencia, la interacción y el dialogo (Alcoreza, 2012, pág. 235).

En principio es relevante señalar, ante el esquema de sociedad que presenta el Buen Vivir, que éste rebate las premisas ontológicas que se le atribuyen al ser humano en su acción social por parte de las teorías de desarrollo pertenecientes al *mainstream*¹⁶³, y a partir de las que se construyen los diferentes postulados- como se ha visto en este capítulo-, que sirven como pilares a los mecanismos propuestos para articular la vida en sociedad, basados principalmente en un esquema en el que reina la individualidad, el consumo, la producción y el crecimiento. Ante esto, el Buen Vivir rebate la cosmovisión occidental y las condiciones atribuidas a los seres, a sus relaciones y por lo tanto a las sociedades. Planteando, ante todo, una alternativa a esta tipología de convivencia social, en la que cuestiones como las relaciones entre individuos, las sociedades y de estos con la naturaleza poseen diferencias ontológicas notables.

6.1 La Reconfiguración de las relaciones. Individuo- Semejantes. Conjunto – Naturaleza.

“No somos dueños ni señores de la tierra: los Jichis de las lagunas, los señores de los bosques en las tierras bajas requieren que se pida permiso para tomar sus elementos; la Pachamama andina, requiere que se la alimente, que se le ofrezca para que ella sea recíproca” (Luz María Calvo (Citada en Cita 14, Pág. 17, en el Plan Plurinacional para el Vivir Bien, 2010)) **[Negrita propia]**.

Profundizando parcialmente en el análisis de esta contra-teoría al desarrollo de los agentes relevantes, se rescata que el Buen Vivir indica que la vida en sociedad es el proceso de articulación de un conjunto que forman seres interdependientes, en el que el ideal de convivencia tiene que sustentarse bajo el eje de la solidaridad y no puede ser quebrantable bajo las justificaciones de otro tipo de fenómeno, articulación, operativización, o de cualesquiera de las formas en las que aparezca un mecanismo de convivencia. Por ello, que

aplicaciones a la filosofía social (1848). Todos ellos refiriéndose a la economía como el medio para promover la distribución de la riqueza.

¹⁶³ Se debe apuntar que el Buen Vivir, incluso marca diferencias con el desarrollo de corte humanista promovido por las NNUU, ya que no pretende cubrir determinadas satisfacciones humanas. El Buen Vivir posee una perspectiva en la que el centro no es el individuo, al abogar por un cambio de modelo de convivencia en sociedad presente en los otros postulados. Es decir, el Buen Vivir aspira a la construcción de una comunidad “...capaz de garantizar aquellas condiciones básicas de reproducción de la vida a su población y que tal reproducción no atente ni ponga en riesgo la regeneración de la biodiversidad natural” (Simbaña, 2012, pág. 232).

se indique que “Vivir Bien entre nosotros” es una convivencia comunitaria con interculturalidad y sin asimetrías de poder; no utilitarista, ya que “...no se puede Vivir Bien si los demás viven mal” (PND, 2006, pág. 11); en donde la Naturaleza es sagrada y posee derechos, tiene vida propia, goza de voluntad y se presenta como un bien necesario para el sustento únicamente, no para cuestiones de enriquecimiento (Svampa, 2012), son principios que determinan la construcción de las prácticas.

La relación sociedad-naturaleza en el Buen Vivir no está ligada al desarrollo económico entendido como un crecimiento económico neoliberal, y tampoco al “extractivismo” acuciante presente en ALC; no significa Buen Vivir una distribución de los beneficios del desarrollo; como tampoco se concibe el separar el hombre de la naturaleza - pensamiento que subyace en el pensamiento desarrollista en el que se ha concebido, y se concibe, que a mayor lejanía del mundo natural un ser es más civilizado y contra más cerca de la naturaleza más próximo a lo animal, a la barbarie- en palabras del clásico autor Francisco de Vitoria¹⁶⁴. Por el contrario, el Buen Vivir entiende que cuanto más cerca se esté de la naturaleza más civilizado se es como ser, y no lo opuesto.

En este sentido, el Buen Vivir aboga por establecer una relación con la naturaleza que no vea a esta última como un medio de enriquecimiento, al que se somete a un ejercicio de dominio absoluto, no; tampoco viéndola únicamente como una fuente de recursos, no; sino como una fuente de tierra de abundante vida. La naturaleza es más que eso, para los Aymaras es una madre de todo, es la Pachamama; para los Guraníes no es una madre, sino se representa como:

“la tierra-sin-mal como tierra nueva y tierra fiesta, espacio de reciprocidad y de amor mutuo, produce también personas perfectas¹⁶⁵, que no sabrían morir. Tras esta meta, nada utópica, ya que tiene lugar bajo nuestros pies, han ido generaciones de guaraníes. (FAM-Bolivia PADEP/Componente Qamaña, 2008, pág. 104)

Por otra parte, otro de los puntos relevantes y cuestión origen de fricción con las premisas inscritas en los postulados “clásicos”, es la importancia que representa la concepción de

¹⁶⁴ Véase la referencia a los bárbaros en Vitoria (1960). Asimismo, se recomienda la escucha de una canción simbólica y significativa de este hecho: Trópico de Cáncer. Café Tacuba, *Re* (1994)).

¹⁶⁵ Las personas perfectas son cuando los seres siguen el ideal de persona: “Las grandes virtudes del guraní son el “buen ser”: tekô porâ; la justicia: tekô jojá; las “buenas palabras”: Ñeé porâ: las palabras justas: ñeé jojá; e amor reciproco: joayhú; la diligencia y la disponibilidad: kyrey; la paz: entrañable: py’á guapy; la serenidad: tekô ñemboroy; un interior limpio y sin dobleces: py’á potí. (FAM- Bolivia PADEP/Componente Qamaña, 2008, pág. 103).

comunidad, lo común. En el Buen Vivir se dibuja un ideal de sociedad en el que lo común prima sobre lo privado. En donde el Buen Vivir se distancia y se opone frontalmente a aquellos ideales sociales que promueve el desarrollo occidental- liberal por antonomasia-, los cuales tienden a situar lo privado por encima de lo común. Estableciéndolo como un argumento funcional del esquema de convivencia social: privatización; competitividad; crecimiento; desarrollo.

Y es que en las dos vertientes teóricas principales del Buen vivir (Aymaras y guraníes), el hecho de que los bienes comunes se sitúen en disputa, está implícitamente ligado al hecho de discernir quién es el agente con potestad para la ejecutar decisiones sobre los bienes comunes. Es decir, adquiere una relevancia suprema el vislumbrar en donde se ubica la soberanía y cuál es el grado de capacidad que poseen las comunidades para asociarse directamente con el espacio. Se cuestiona la relación comunidad-territorio. Es por ello que no se debe situar este debate en torno a la disputa clásica por definir quién es el agente que explota los RRNN, si no que éste atiende a una cuestión de tipo ideacional sobre la organización en comunidad: lo común o lo privado. Entendiendo la disputa en torno al dilema: **somos soberanos de lo común o somos privados de lo común por el uso de un particular en el “beneficio de todos”**. Tan es así, que en el Buen Vivir la propiedad colectiva se sitúa por encima de la privada en la sociedad, ya que ésta opera bajo elementos de reciprocidad, convivencia, responsabilidad social y consenso, y deben ser éstos los elementos ideológicos alrededor de los que gira la sociedad, ya que son los pilares sobre los que se organiza el comunitarismo indígena (Simbaña, 2012, pág. 225).

Concepto de comunitarismo recogido en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) (1994, revisado en 2007).

Las Nacionalidades y los Pueblos indígenas históricamente hemos construido y practicado milenariamente el modo de vida comunitario. **El comunitarismo es el principio de vida de todas las Nacionalidades y los Pueblos indígenas, basados en la reciprocidad, solidaridad, igualdad, equidad y autogestión.** Por lo tanto para nosotros el comunitarismo es un régimen de propiedad y sistemas de organización económica y socio-política de carácter colectivo, que promueve la participación activa y el bienestar de todos sus miembros. **Nuestros sistemas comunitarios se han ido adaptando históricamente a los procesos económicos y políticos externos; se han modificado, pero no han desaparecido, viven y se los practica en las Nacionalidades y Pueblos indígenas cotidianamente, dentro de la familia y comunidad.** El modelo sociopolítico que

propugnamos, es una Sociedad Comunitaria e intercultural. **En el nuevo Estado Plurinacional se reconocerá y fortalecerá la propiedad familiar, comunitaria, pública y su economía se organizará mediante formas comunitarias, colectivas y familiares.**

[Negrita Propia]

La referencia continua a la comunidad, al conjunto y a la naturaleza, ha causado que las nociones de justicia social y ecologismo sean continuas en el Buen Vivir¹⁶⁶. Esto supone en primer término que el ser humano sea situado como elemento parte y miembro de un todo. No sólo como centro de lo social sino como parte de lo común. Y es en este sentido en el que el contenido ambiental del Buen Vivir se asemeja con el concepto deslegitimado por parte de las IFI en los 70-80: el eco-desarrollo. En cierto sentido, ambos conceptos constituyen una crítica a la relación del modelo acumulativo de capital con la tierra y emiten un discurso en torno al medioambiente, en el que se reclaman prácticas que equilibren la descompensación relacional entre los ciudadanos y de éstos con la naturaleza. Cuestión ésta, que más allá de ser coincidente entre ambos, es un hecho que sitúa de nuevo el debate del desarrollo en torno a la justicia ambiental, entendiendo ésta como fundamental para un Buen Vivir e...

“...implica el derecho a un ambiente seguro, sano y productivo para todos, donde el medio ambiente es considerado en su totalidad, incluyendo sus dimensiones ecológicas, físicas, construidas, sociales, políticas, estéticas y económicas. Se refiere así a las condiciones en que tal derecho puede ser libremente ejercido, preservando, respetando y realizando plenamente las identidades individuales y de grupo, la dignidad y la autonomía de las comunidades” ((Acselard, 2004, pág 16) Citado en Svampa (2012, pág. 194)).

A este respecto y en términos históricos, hay que señalar que el discurso ecologista por parte de los movimientos indígenas dio el salto a la esfera internacional en la Cumbre de la Tierra de 1992. En ese encuentro fue en donde las organizaciones indígenas abandonaron parcialmente el discurso campesinita y acercaron su postulado al ecológico. Fue el espacio en el que las organizaciones ecologistas, que no habían renunciado al concepto “eco-desarrollo” promovido en los 70 - apartado de las agendas de las OOI-, encontraron un elemento de ligación de postulados, que dieron pie a que se comenzase el dialogo con grupos indígenas, con el objetivo de encontrar líneas de acción conjunta ante el *mainstream* desarrollista. Este primer encuentro no culminó profundamente y fue ya hacia finales del

¹⁶⁶ Véanse Acosta A. (2009); Escobar A. (2012); Gudynas (2011); Eduardo (2009); o Puente (2011).

año 2000, cuando dio comienzo un proceso de concertación en el que se pretendió avanzar conjuntamente hacia la constitución y promulgación de un nuevo modelo de sociedad. Con lo que la pretensión de articular un sistema operativo que fomentase el cambio de tendencia respecto al uso de la tierra, no sólo provino de los indígenas originarios sino que abarcó un mayor colectivo. De hecho, el giro hacia las construcciones de marcos de acción colectiva fue el elemento impulsor para que más agentes se involucrasen y adoptasen estrategias que fomentasen el uso de un nuevo lenguaje, y además se inscribiese dentro del debate social el cómo abordar el tema del desarrollo mediante la difusión de los impactos del modelo instaurado hasta la fecha¹⁶⁷.

6.1.1 Soberanía y comunidad.

Al analizar la pertinencia presente en los marcos comunes de promoción de acciones alternativas- tanto desde los pueblos indígenas a través del concepto del Buen vivir, como por el manejo de e inclusión en las agendas de terminología como: bienes comunes; justicia ambiental, derechos de la Naturaleza, etc...-, se evidencia que estos reclamos con pretensiones de transformación poseen un elemento común. Han girado continuamente en torno a un eje: la soberanía de los pueblos.

La soberanía de los pueblos es un asunto de vital importancia en la historia reciente y de profundo calado en los pueblos indígenas. Éstos han sentido continuamente, desde las épocas coloniales, que se les ha desposeído del derecho de decidir, de al menos, como vivir. Su desarrollo como individuos y como comunidad ha estado marcado por continuos desplazamientos forzados y por acciones que, promovidas por colonizadores, gobiernos, y mayoritariamente por parte de multinacionales- todos ellos en el nombre del civismo, progreso, evolución o desarrollo-, han instaurado industrias en territorios en los que vivían colectivos indígenas, situando la acción de desposesión en primer plano de la relación.

El que los actos ejecutados hayan sido una consecuencia directa de que la idea de desarrollo occidental se haya sostenido, impuesto y en muchos casos apropiada por los Estados de ALC, ha impulsado el que se haya basado en la apropiación-expropiación de lo común, un sistema en el que prima la acumulación como meta de vida del individuo.

¹⁶⁷ Entre los actos realizados destaca la celebración del Foro Social Mundial (FSM), que aborda la cuestión de promover una globalización diferente a la que se está llevando a cabo. Hecho que causa que su discurso debata el origen del desarrollo llevado a cabo.

Es por ello que en respuesta a estos hechos los ejercicios de reclamo de soberanía se han enmarcado como las conquistas de derechos de autodeterminación de los pueblos. Procesos que obtuvieron reflejo público e internacional recientemente, en 1989 en el Convenio 169 de la OIT; y en 2007 en la Declaración de las NNUU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Evidenciándose y reconociéndose los actos de resistencia de éstos ante la expropiación de los territorios.

A este respecto, se observa que el debate que se refleja con la aparición del concepto del Buen Vivir en la esfera internacional es, principalmente, de corte político y cultural; contrario y/o alternativo al esquema clásico del *mainstream*. Y es que si el desarrollismo clásico fija su atención analítica en quién es el agente que explota los RRNN- y de ese modo estructurar las relaciones dentro de un esquema de competitividad, eficiencia y apropiación-, el Buen Vivir trata de llenar la cuestión previa del planteamiento, no llegando a establecer la cuestión sobre un debate particular de quién es el explotador, sino que presenta un esquema en el que lo relevante es el modo en el que la explotación afecta a la vida de los ciudadanos y de la naturaleza. Cuestión que revela que no se aborda el dilema bajo una perspectiva de progreso o desarrollo de crecimiento desorbitado, sino viendo el ideal de vida como aquel mecanismo que sea capaz de asegurar un vivir bien en armonía con la naturaleza y entre ciudadanos.

Ante la presencia de esta estructura, al cuestionar qué agente posee la soberanía interna en un territorio en el Buen Vivir, la respuesta que se obtiene es la comunidad. En un esquema clásico de organización territorial como es el Estado, la comunidad se presenta como el agente decisorio, en una especie de dualidad Estado-comunidad, en la que la capacidad decisoria se obtendrá y será legada mediante mecanismos de democracia comunitaria, en los que la soberanía institucional descendería a las comunidades y en donde éstas son los agentes que poseen el derecho de decisión operativo junto con el gobierno mediante “consenso” (Puente, 2011). Es decir, éstas tienen capacidad de veto.

El esquema de organización de la soberanía que presenta el Buen Vivir se caracteriza por traspasar diversas esferas gubernamentales del Estado, permitiendo una mayor participación social de los ciudadanos mediante la formación de un Estado plurinacional- casos de Bolivia y Ecuador-, en el que se pretende transformar aquello que ha sido reclamado e insistido por diferentes OOII en/o diversas declaraciones que han criticado la

direccionalidad de diversos programas de desarrollo¹⁶⁸, mediante la reproducción de prácticas de Estado colonial, en el que la toma de decisiones posee una estructura arriba-abajo¹⁶⁹. Contrariamente a esto, el Buen Vivir fomenta una toma de decisiones que altere esta concepción clásica y reclama el que contenga un mayor ejercicio de participación democrática, en donde se ejecuten las decisiones con una direccionalidad abajo-arriba. Es decir, gozar de autonomía¹⁷⁰. Hecho que permitiría dar cabida a una soberanía de los pueblos sobre el territorio que habitan¹⁷¹.

Aun constituyendo la visión del Buen Vivir una democracia con mayor grado de participación colectiva que otros modelos de democracia representativa, éste no es el eje en el que se sostiene la meta de los pueblos, sino que como apuntó el canciller boliviano aimara David Choquehuanca en el IV Foro Social América, celebrado en Asunción en 2010:

“La lucha de los pueblos indígenas va más allá de la propia democracia. En la palabra democracia existe la palabra sometimiento. Las mayorías someten a las minorías o las minorías se someten a las mayorías. Someterse no es vivir bien” (Fedaeaps, 2010).

Es decir, el Buen Vivir no pretende de promover un sistema contrario a la democracia, sino impulsar mecanismos que profundicen la democracia y no deleguen la toma de decisiones a un líder o partido, el cual decide unilateralmente sobre todos los temas concernientes. Por ello, impulsan el consenso como práctica necesaria de decisión, y no sólo desde la perspectiva de que ser sometido no es vivir bien, sino entendiendo que someter al otro es vivir mal (Puente, 2011).

6.2 El Buen Vivir como contrapartida al concepto de bienestar, más que alternativa al desarrollo o al crecimiento económico.

Para analizar, o más bien contrastar el modelo de sociedad que expone el Buen Vivir, se entiende de utilidad el hacer uso del trabajo que realiza Koldo Unceta (2012), en donde éste opta por comparar metas más que medios en el análisis conceptual que realiza, en términos

¹⁶⁸ En este sentido, se ha detectado que se critica este hecho oficialmente en diversos textos respecto a la Cooperación Internacional, a partir de la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo (2005), y las siguientes (Accra (2008) y Busan (2011)). Evidenciándose un reconocimiento implícito de la direccionalidad presente en las medidas adoptadas hasta la fecha.

¹⁶⁹ Véanse a este respecto los trabajos de Aníbal Quijano (2012; 1991; 2007).

¹⁷⁰ Según Escobar (2010): “La autonomía puede ser descrita en términos de democracia radical, autodeterminación cultural y autogobierno” (Escobar A., 2012, pág. 50).

¹⁷¹ Señala Eduardo Gudynas que el modo de desarrollo llevado hasta ahora, ha constituido “...una invasión o usurpación, no sólo de recursos naturales, sino de los estilos de vida” (Gudynas, 2011).

de logro, entre desarrollo y Buen Vivir. Puesto que, a ojos de Unceta, el Buen Vivir no es un medio para alcanzar un fin sino un fin en sí mismo, y en este sentido afirma que su semejanza o comparativa no es tanto con el concepto del desarrollo como con la meta de éste: el concepto del bienestar. Por lo que en su opinión no cabría enmarcar el debate en torno al crecimiento como podría ser visto, sino con el ideal de sociedad al que se aspira.

Es interesante este debate en términos de análisis del concepto del desarrollo, ya que en la justificación de la necesidad de impulsar el crecimiento económico se presentan elementos que han sido pilares argumentales de su constitución teórica y que influyen en el hecho de que se haya instaurado como efecto económico deseable por parte de las sociedades a este fenómeno.

Por una parte y como señala Koldo Unceta (2012), en origen, el crecimiento responde a unas necesidades concretas por parte de la sociedad, en donde el crecimiento actúa como respuesta estructural a un crecimiento demográfico; se sitúa como el factor que proporciona un mayor número de bienes de consumo; mediante el aumento de la producción logra cubrir las necesidades de los individuos; proceso que requiere de un aumento de las rentas para lograr un mayor bienestar y conduce a la necesidad de promover un mayor número de empleos; lo que el crecimiento posibilitará a través del incremento de producto o ingreso per cápita.

A partir de la estructura dibujada un suceso es relevante, el que las sociedades subdesarrolladas adoptasen este método contaba con el factor de su fácil apropiación conceptual, ya que por un lado: resulta sencillo medir el impacto del crecimiento y relacionarlo con el bienestar al utilizar el indicador PIB/hab.; además, el discurso posee gran agilidad para incrustarse en la percepción ciudadana; y el factor compromiso y la participación ciudadana implican constante colaboración, ya que el uso teórico de crecimiento tiende a desplazar en el discurso la distribución de los bienes al futuro. Lo que somete y liga la obtención de estabilidad o incremento de bienestar a la colaboración ciudadana, ya que se trata de un reparto futuro y no presente, efecto que crea compromiso activo y responsabilidad en el receptor del discurso: la ciudadanía.¹⁷²

¹⁷² Asimismo y sin que sea factor irrelevante, hay que tener en cuenta que este sistema operativo estructural está ligado a la concepción de modernidad bajo la que se esconde el avance tecnológico de producción con intereses particulares. En este sentido Naredo y Gómez-Baggethun (2012) indican que: “La aceptación igualmente acrítica del desarrollo económico industrialista como instrumento de modernidad y de progreso, constituye otro paso ideológico en falso por parte de los críticos, al que siguen aferrados por inercia los

Implícito en la estructura operativa que presenta el sistema que se utiliza para el reparto de los bienes entre los ciudadanos presente en el crecimiento económico, se observan unas metas sociales que caracterizan aquello que es considerado bienestar: a) Expansión productiva para satisfacción de necesidades; b) distribución y equidad; y c) Progreso y cambio social. Pequeño esquema que revela que las metas del bienestar divergen de aquellas metas sociales que refleja el enfoque del Buen Vivir. Éste último posee otro armazón teórico en el que se argumenta la construcción de la sociedad con otras metas en el horizonte, que si bien coinciden en que las relaciones sociales son fundamentales como mecanismo de articulación de la convivencia, se diferencia en el resto: a) Armonía interior que permita a las personas vivir en paz consigo mismas; b) Armonía social entre individuos y grupos sociales ; y c) Armonía con la naturaleza como requisito fundamental de Buen Vivir (Unceta, 2012).

Además, se evidencia que el postulado del bienestar aboga por impulsar un mecanismo con el objetivo de cubrir las necesidades individuales mediante una práctica: la producción, en una estructura en la que esta práctica será el agente encargado de una redistribución que impulsará la equidad entre sus miembros y estos procesos, ambos, constituirán elementos de progreso y transformación social. En este sentido, una cuestión a tener en cuenta es que difícilmente esto será posible al visibilizar un mundo de recursos limitados, ya que este postulado no establece ningún tipo de límite a la expansión productiva. Además, hasta la fecha la estructura que persigue el bienestar y su mecanismo operativo, ha estado caracterizada por luchas de poder, que más que constituir y significar equidad parecen haber creado desigualdad y polarización (Quijano, 2012). Asimismo, el que la convivencia en sociedad sea expuesta más como un ejercicio de individualidad, en el que si todos los individuos logran satisfacer sus necesidades “materiales” serán felices en conjunto, se muestra como un elemento de conflicto intrínseco al modelo irresoluble, ante la evidencia de que existe la imposibilidad de un aumento infinito de los recursos globales. Es decir, se presenta una meta imposible: la satisfacción infinita de las necesidades individuales en cuestiones materiales, ya que es inviable a largo plazo. Condición que, automáticamente, creará un conflicto entre seres atomizados por la obtención de bienes equitativamente, por una acumulación constante para obtener reservas en caso de escasez futura. Y del mismo modo, entraría en conflicto con la armonía con la naturaleza la expansión infinita de la producción en el sentido occidental, puesto que posee una teorización conflictiva de las

representantes del antiguo «Tercer Mundo» (y, por manifiesto interés, los del «Primer Mundo»)” (Naredo & Gómez-Baggethun, 2012, pág. 359).

necesidades, de acuerdo a la vida presente en las sociedades desarrolladas en las que el consumo de energía individual es insostenible globalmente¹⁷³.

Por otro lado, si bien es verdad que la armonía social es presentada como un elemento conjunto y necesario por ambas teorías, no significa que se dibuje un elemento común. Mientras el Buen Vivir presenta la armonía como un estado en el que sí “uno está mal el conjunto está mal”, el Bienestar lo presenta como una relación directa con lo material, en el que los actores individuales compiten por obtener su parte en el crecimiento del beneficio común. Contexto en el que si todos lo obtienen todos estarán bien. Lo que sitúa a los agentes como elementos atomizados en competición constante en el Bienestar, y posee un efecto claro: gran dificultad en el objetivo de promoción de armonía, tanto conjunta como interna.

Asimismo, el Buen Vivir se opone a aquellas posturas en las que de acuerdo con Rostow (1960), el bienestar se basa en el logro particular o colectivo de acumulación y competitividad como logro de felicidad, ya que contrariamente indica como metas individuales el alcanzar la armonía interna y que la pretensión de alcanzar ésta no sea acumular y competir para lograr la felicidad, sino que como se ha mencionado, sea un respeto por la naturaleza con sus “límites”, en armonía con la comunidad, a la que se deben adaptar los medios de vida estos elementos.

Requiere ser recalcado que, de acuerdo con Koldo Unceta (2012), el debate no debe situarse en un espectro que trate de situar el Buen Vivir como teoría contraria al crecimiento económico, no. El debate se sitúa en torno a las metas de la comunidad y no en torno al modo de alcanzar las metas. Metas que sustentaran los modos de operativizar mecanismos de logro. Puesto que si las necesidades de bienestar, como se ha señalado, se ensanchan, se requerirá una producción mayor y este hecho chocará frontalmente con los límites globales, así como repercutirá en el sistema. Por el contrario, si las metas son armonía con la naturaleza, con los individuos y entre ellos, los mecanismos adoptados se caracterizarán por el establecimiento de mínimos y límites al propio sistema de reparto de bienes, ya sea mediante el desarrollo industrial o la acumulación individual.

Asimismo y por último, no se debe obviar que en el sentido señalado es en el que han chocado las teorías ecologistas con el *mainstream*, puesto que la promoción de límites que

¹⁷³ Véase información relevante en línea: <http://www.myfootprint.org/es/> (Consulta realizada el 24 de enero de 2013).

promoviesen el respeto para articular la vida en armonía con la naturaleza, ha provocado que las medidas requeridas para articular estas demandas se situasen en contra de postulados que abogaban por el crecimiento económico. Es decir, el Buen Vivir vendría a significar lo que señala Alcoreza, se trataría de un proceso que pretende:

“...dar la vuelta a la autonomización de la economía y subordinarla bajo criterios políticos y sociales; solo así se podrá crear bases materiales que satisfagan necesidades y se reproduzcan las condiciones de vida de los miembros de la sociedad y de la Naturaleza. **No “economía de mercado” sino “economía en el mercado”** (Alcoreza, 2012, pág. 232).

6.2.1 Qué es el Buen Vivir y el peligro presente en la aplicación reciente.

“La Revolución del Conocimiento, que propone la innovación, la ciencia y la tecnología, como fundamentos para el cambio de la matriz productiva, concebida como una forma distinta de producir y consumir. Esta transición llevará al país de una fase de dependencia de los recursos limitados (finitos) a una de recursos ilimitados (infinitos), como son la ciencia, la tecnología y el conocimiento” (SENPLADES, 2013, pág. 19)

Como señala Eduardo Gudynas (2010), el Buen Vivir o Vivir Bien no es el regresar a sociedades de cazadores recolectores viviendo en la selva, sino que se trata de un cambio de paradigma en el que se sitúa como centro gravitatorio de la sociedad: la calidad de la vida, y no su capacidad de consumo. Teoría ésta, que lejos de estar anticuada, encuentra paralelismos en su formulación con las teorías económicas que incluyen cuestiones de economía post-material, ambiental y ecológica; así como porque en sus postulados se aboga por no indicar como metas la vida en comunidad e inter-relacional, sino por establecer como bases de sistema la armonía social y la participación social, al más puro estilo de democracia directa en muchos aspectos (Gudynas, 2010).

El Buen Vivir establece que la economía o el funcionamiento del Estado o comunidad debe abogar por respetar derechos, más que por la promoción de acciones caritativas como sustento de sus gentes. Este se presenta como un factor primordial que articula la comunidad para construirse sobre la base de un proceso inclusivo y soberano en diferentes sectores: alimentario, tecnológico, energético, económico y financiero.

También se debe indicar que promueve el obrar en comunidad y no “únicamente” individualmente, y se remarca que todo el beneficio que permita al individuo ser soberano

no debe provenir como ciudadano de una relación directa y particular con el sistema, sino que su relación debe estar enmarcada dentro de una comunidad, en la que se debe actuar de modo responsable con la comunidad, así como la comunidad es responsable del individuo. Ambos responsables mutuos de partida y base del pacto social en construcción, que no debe ser presentado como una meta de llegada o meta de la sociedad, sino como un proceso continuo.

Dirigiendo la mirada al modelo económico presente en el Buen Vivir, se vislumbra que éste se inspira en la instauración de una matriz productiva que opere en armonía con la naturaleza. En donde los RRNN deben ser explotados en los límites que permita la reproducción natural; los excedentes deben ser invertidos en la mejor de las economías comunitarias (la conservación de los bosques y la mejora de la calidad ambiental); y en el que la economía que se practique por la comunidad actúe como reproductora del modelo ecológico en base a las decisiones tomadas de forma participativa (Alcoreza, 2012, pág. 248). Es decir, el Buen vivir no elimina el crecimiento diametralmente, más bien, aboga por él cuando éste sea necesario, pero no promulgando que la sociedad base su sentido de vida en el crecimiento.

El modelo de sociedad que presenta el Buen Vivir ha sido promovido y constituido en torno a las bases descritas y como se ha señalado, se ha institucionalizado en dos procesos constituyentes en los Estados de Bolivia y Ecuador. Por ello, aunque este no sea el espacio para hablar de los hechos en profundidad, se cree relevante tener en cuenta los peligros y abordar los hechos con precaución:

- 1) **El incumplimiento de promesas:** al tratar operativizar este modelo en los países en los que el concepto posee legitimidad institucional, se observa como por ejemplo, el proyecto novedoso del *Parque Nacional de Yasuní* (el bosque con más diversidad de todo el planeta, en donde “En una sola hectárea del bosque hay tantas especies de árboles como en todo EE.UU. y Canadá juntos” ((Acción Ecológica,2011) Citado en Svampa (2012, pág. 197)), que pretendía promover un desarrollo social basado en la conservación de la naturaleza y que albergaba una cuestión de referencia mundial al incluir los *Derechos de la Naturaleza* como eje sobre el que actuar; así como se apuntaba a realizar un ejercicio de profundización en torno al modelo de desarrollo y guión estipulado por modelo de desarrollo clásico y se proponía un alternativa al extractivismo, se ha caído parcialmente al concluir la

aprobación de la explotación del 1% del Parque. Esto sucedido ante la necesidad de fondos y la falta de colaboración internacional, según ha manifestado el gobierno ecuatoriano.

- 2) **El “No” respeto al Derecho de consulta de los pueblos indígenas:** es muy importante respetar su práctica por el impacto y la repercusión social, dado que éste ejercicio ha centrado grandes espacios de debate y es fruto del conflicto en los procesos de desposesión que ejercen y han ejercido los gobiernos. Por ejemplo, en Bolivia se están produciendo colisiones sobre cuestiones de legitimidad autonómica- acción legítima tal como se señala en el texto constitucional- y tensiones en torno al respeto por los derechos de los colectivos inscritos, como efecto de la ejecución de proyectos que pueden afectar a territorios de pueblos originarios, como estipula la Convención 169 de la OIT, e igualmente, el derecho de usufructo de las ganancias económicas que resulten de la explotación de los recursos no renovables (Svampa, 2012, pág. 202). Asimismo, en el Ecuador, el mismo convenio fue ratificado por la Constitución en 1998- que en su práctica no se cumple- está siendo desplazado y cabe la posibilidad de que se opte por otra vía operativa o canal de consulta, que supondría el no reconocimiento de lo acordado sobre la consulta¹⁷⁴.

Por último, indicar que el Buen Vivir, aún con las dificultades lógicas al rebatir una construcción ideacional que data de siglos, constituye un paso adelante en un proceso de lucha que trata de articular y fomentar la construcción de otro modelo de sociedad, en el que los individuos logren apropiarse de una condición de ciudadanos con derechos y deberes comunitarios. Y aunque pese a todas las dificultades presentes en la actualidad, en los Estados que han incluido los mismos en sus constituciones, este postulado presenta evidencias que pretenden cuestionar ontológicamente los objetivos que se habían instituido como hechos naturales, al cuestionar frontalmente: la eficiencia; la utilidad; la máxima

¹⁷⁴ Este conflicto en torno a la consulta va más allá de los Estados constitucionalmente plurinacionales, ya que existen casos como el de Perú, en el que en 2005 bajo el mandato de Alan García se abrió la agenda a la consulta de las comunidades amazónicas. En 2010 fue la fecha en la que se votó la Ley de Consulta Para Organizaciones Indígenas en el Congreso, vetada por el Presidente por la cuestión referida a la vinculación de la consulta. El modelo continuó operando bajo el sistema de concesión de terrenos indígenas para la industrialización y propulsión de actividades extractivas como la explotación de yacimiento petrolíferos; minería; actividades forestales y actividades de infraestructura. Asimismo, en Argentina, donde los movimientos sociales llevan reivindicando la des-mercantilizar de los “bienes comunes” y, en concreto, situándose contra las explotaciones a cielo abierto, como parte de un proceso de reclamo ecologista que se alinea con los movimientos indígenas. Obteniendo como fruto que ocho provincias entre el periodo 2003 y 2011 aprobaran leyes de prohibición de proyectos de megaminería a cielo abierto, o la Ley de Protección de Glaciares y Ambiente Periglacial aprobada en 2010 que prohíbe actividades extractivas en los áreas de glaciares y periglaciares (aunque ésta fue judicializada y se esperan resultados) (Svampa, 2012).

ganancia, e inspirar un proceso de reclamo que otorga un sentido de vida que se inscribe bajo el Buen Vivir. En donde se prioriza la supervivencia digna de los seres humanos en comunidad y en contacto con la naturaleza.

7. Conclusiones

Primero señalar que, si bien en este capítulo se ha indicado el continuo debate ocurrido en torno la pertinencia de ligar el desarrollo con el crecimiento económico, se ha puesto de manifiesto que la existencia de asimetrías entre los diferentes agentes ha sido el elemento motivador de la articulación del mecanismo desarrollista. Señalado esto, el hecho de que las asimetrías no se hayan reducido “ostensiblemente” entre los agentes no relevantes, mayoritariamente receptores de la maquinaria desarrollista, y los agentes relevantes y promotores del desarrollo en la SI, ofrece un espacio amplio para recapacitar sobre la pertinencia e intereses que podrían ocultarse tras tal empresa. Y más, cuando el leve grado en el que se ha reducido las asimetrías entre Estados, ha sido cubierto por el incremento de la desigualdad global entre pobres y ricos. Cuestión que revela que, si bien podría con el paso de siglos alcanzarse una igualdad entre Estados, los mecanismos del desarrollo aplicado no han mejorado el mundo en términos de igualdad; y en un largo periodo parece que tenderían a incrementar la desigualdad entre las personas. Es decir, las prácticas implícitas en el desarrollismo, entre ellas ocupando un papel primordial la IED, no han fomentado la reducción de desigualdad entre personas.

Una vez analizados los diversos procesos que se han dado en torno al concepto, es relevante destacar algunos factores que podrían ser señalados como las principales fricciones teórico-prácticas que han sido identificadas durante este análisis. Por un parte, el que los promotores conceptuales del desarrollo hayan poseído intereses concretos en los Estados receptores de las prácticas políticas, podría haber motivado su operativización debido a dos posicionamientos iniciales antagónicos: 1) el promover el desarrollo para asegurar la existencia propia y la realización ajena con el objetivo de establecer relaciones en igualdad de condiciones y una SI armoniosa (reducción de asimetrías); o 2) promover el desarrollo como herramienta de dominio ideológico y material, que permita situar la sociedad propia como líder global y ejecutar prácticas a medida de los intereses particulares.

En relación con el planteamiento indicado, una primera observación de la práctica revela que, si bien la reducción de asimetrías ha sido leve entre los Estados implicados, el debate

en torno al poder y la defensa de intereses ha sido constante. A este respecto, lo cierto es que se ha recogido en este capítulo que la formulación teórica ha poseído una direccionalidad evidente. Se ha evidenciado como en su elaboración conceptual no se tuvieron en cuenta las diversas formas de vida, ni los deseos, ni las opiniones de aquellos que serían receptores de su práctica, lo que denota un claro rasgo etnocentrista. Es decir, desde las escuelas modernistas hasta la actualidad, en líneas generales, se ha promovido un modelo de desarrollo conciso con características ideológicas concretas- planteamiento ontológico-, que ha divulgado un aprendizaje del modo de vida propio de sociedades occidentales (agentes relevantes) en las demás sociedades. Modelo en el que se requería de una transformación profunda de los deseos de los individuos y de sus ambiciones, practicas, ideas, etc..., debiendo éstos, atribuyéndoles la ambición, adoptar a “imagen y semejanza” el modo de vida de los formuladores del propio concepto del desarrollo.

Del mismo modo, en el capítulo se ha evidenciado que aquellos que formularon el término eran poseedores de los diversos elementos necesarios para el desarrollo de la práctica. Lo que les concedía mayor capacidad para maniobrar en torno a los diversos contextos que pudiesen originarse, en caso de querer alterar aspectos determinantes. Éstos agentes relevantes:

- a) dominaban la práctica y la tecnología, pues fueron creadores e impulsores;
- b) eran poseedores de las herramientas requeridas y activadoras de la práctica: capacidad económica, material e institucional (por su dominio de las OOI e IFI);
- c) y determinaban la ideología, al dar un sentido a la finalidad de la existencia humana. Hecho que constituyó el mayor elemento constructor de sociedades subdesarrolladas.

En este sentido, si bien las capacidades materiales eran determinantes, igual o más lo han sido las conquistas de las ideas. Pues se ha evidenciado como éstas han sido un factor que ha supuesto una mayor injerencia en la transformación de las decisiones tomadas por las sociedades subdesarrolladas para ser desarrolladas, ya que la creación de anhelos de ser un ciudadano tipo no tiene por qué contener los mismos elementos y categorías en todos los ciudadanos y sociedades, como se hace evidente en los diversos conceptos de desarrollo presentados. Sin embargo, se constituyó en el mecanismo desarrollista un pensamiento único sobre el qué ser y cómo ser.

En términos institucionales, si bien es verdad que los agentes relevantes han presentado diversos modelos que han cuestionado fines, metas o medios, el elemento que ha reinado en sus contenidos ha sido el hecho de situar al crecimiento económico como el fenómeno necesario para que cualquier tipo de sociedad alcanzase el estado de desarrollo. Siendo apartados de las agendas aquellos esquemas que no han sugerido el mismo fenómeno, como fue el caso del eco-desarrollo.

En el esquema principal de la tarea de promoción del cómo ser y actuar que ha implicado el desarrollo, se ha sugerido continuamente la pertinencia de promover la industria; cuestión para lo que se requería de tecnología; encontrándose ésta en manos de aquellos que estaban categorizados de desarrollados; en donde la IED era el medio de adquirir ésta en aras de implementar la producción; lo que activaría el esquema del desarrollo.

Esquema A) Inversión-tecnología-crecimiento-desarrollo (reducción de asimetrías)= **bienestar**.

Al revisar la evolución institucional en la región objeto de estudio: ALC, se ha evidenciado que los procesos e intentos de transformación de la conceptualización del desarrollo, no han sido, ni por parte de la CEPAL, ni por parte de los Estados de ALC en su mayoría (a excepción de Cuba, y en la última época Ecuador y Bolivia institucionalmente), una transformación profunda del concepto. Puesto que si los agentes relevantes plantearon un esquema de desarrollo A, la CEPAL y los Estados regionales han oscilado entre adoptar el mismo A, o una alteración del mismo adoptando un esquema B basado en A:

Esquema B) (Intervención en la Inversión)-tecnología-crecimiento-desarrollo (reducción de asimetrías)= **bienestar**.

En este sentido, el modelo socio-económico que se constituyó y se promovió como respuesta, por parte de los diversos actores que han operativizado en la región, el esquema B, ha promovido y promueve una participación activa de los receptores del desarrollo para regular el impacto del primer elemento indicado en los esquemas: la IED. Sin embargo, el esquema ideacional de cómo ser como sociedad responde al mismo modelo presente en el desarrollo clásico. Es decir, al modelo presentado por los agentes centrales de finalidad social: el bienestar.

Es por ello, que la lucha conceptual entre la adopción de los esquemas A o B se ha centrado, principalmente, en cuestiones de capacidad operativa y de decisión; de disputa por determinar cuáles son los límites y competencias que permiten operativizar las diversas capacidades entre los Estados y los agentes externos por el manejo de la obtención del reparto del beneficio “justo”; y por determinar quién es el agente que maneja los recursos que alimenten la construcción de una sociedad de consumo y atienda a sus demandas. Elementos que componen un debate en el que la soberanía- como mecanismo que conecta demandas internas con regulación interna-externa de las prácticas-, aparece como un elemento crucial en la disputa por articular la regulación de capacidades operativas de agentes externos en el interior de los Estados en desarrollo.

Por ello, no es cuestión baladí detectar, en aras a poder determinar el papel de los agentes, cómo opera la disputa por la capacidad de decisión. De hecho, como se expuso en el marco teórico, esta capacidad se entiende como aquella que permite operar lo contenido en las ideas. Pero bien es verdad, que si las ideas que han sido apropiadas por parte de la región se corresponden a un modelo de sociedad externo, como entre otros advirtió la sociología cepalina, posee el peligro de que, al instaurar unos deseos de vida constituidos externamente y, por lo tanto, no ser atribuibles las ideas al impacto de un requerimiento colectivo o institucional, éstas podrían provocar que grupos que no posean el modelo (mercantilizado) como ideal de vida se sientan y sean desplazados del esquema. Lo que podría haber provocado que al institucionalizar este modelo, la exclusión de la participación en el mismo haya creado altos índices de desigualdad y exclusión de grupos que no contemplen entre sus metas el deseo de acumulación. En el caso de ALC es muy relevante este dato al ser la región más desigual del planeta junto con el África subsahariana, y además haber contado históricamente y contar en la actualidad con el grupo social indígena como aquel que presenta con mayores índices de pobreza y exclusión.

En definitiva, con la ideología desarrollista inscrita en muchos de los gobiernos e instituciones, y en los esquemas funcionales externos e internos en la región, se han venido señalando por parte de diversas instituciones e informes (CEPAL, Teóricos de la dependencia, NNUU (UNCTAD, PNUD), e informes como *Hammarsskjöld*, *Bruntland*, etc...), algunos de los elementos que podrían no haber permitido el que se alcanzase el desarrollo y la reducción de asimetrías entre los Estados. En concreto, todos han señalado, de una u otra forma, en sus declaraciones o escritos un fenómeno: las reglas institucionalizadas globalmente no han favorecido a la región y la capacidad de transformar

las mismas estaba situada en los países desarrollados o agentes relevantes en términos de desarrollo. Con lo que la tarea de indagar sobre si la capacidad operativa de la región para alterar las condiciones, el mecanismo y el modelo de desarrollo en caso de desearlo, se sitúa como el eje fundamental en la articulación de un nuevo modelo de desarrollo en ALC.

7.1 La relevancia de la cuestión ideológica.

A raíz de lo indicado, es relevante destacar que en este capítulo se ha evidenciado la presencia de propuestas alternativas o/y contrarias al modelo ideológico de desarrollo, postuladas por diversas corrientes externas e internas a la región. Entre ellas destacan los postulados que han afirmado que un desarrollo basado en el crecimiento económico constante e infinito no es viable ni sostenible, sí la pretensión social es mantener un planeta con ciertos grados de habitabilidad como los hasta ahora conocidos. Claro es, si no es ésta la pretensión, también ha sido indicado, como señaló Robert Solow (1974), que: “El mundo puede continuar, de hecho, en ausencia de recursos naturales, por lo que el agotamiento constituye un acontecimiento y no una catástrofe”¹⁷⁵ (Solow, 1974, pág. 11).

Lo relevante al entender de este autor, es que estas críticas se han centrado en cuestionar premisas ideológicas, al criticar la visión subyacente en el cómo la articulación de mecanismos desarrollistas había reproducido el ideal de vida de los agentes relevantes. Indicando que los otros agentes estaban en el deber de abordar una transformación del modelo productivo y de la práctica consumista de los individuos como ideal de vida. Contexto en el que, lejos de ser tomados en cuenta los argumentos contrarios por los agentes relevantes, la crítica ha sido habitualmente tildada de contraria a la evolución humana, indicando a sus creadores y a las instituciones internacionales que “fabricasen” un concepto que acoplase el modo de vida consumista a la propia evolución del planeta y sus límites.

Ante este proceso ideológico conceptual evolutivo, que no ha dado con la tecla apropiada que articulase una mejora ostensible del propio modelo que proponía el desarrollo en sus inicios, si bien se ha indicado la evolución de la crítica institucional en la que únicamente aquellos postulados que incluían al crecimiento económico como variable necesaria eran atendidas- puesto que postulados como el *eco-desarrollo* fueron apartados rápidamente-, se ha rescatado como en la región de ALC se ha producido un proceso novedoso. En el que se

¹⁷⁵ Traducción propia a partir de: “The world can, in effect, get along without natural resources, so exhaustion is just an event, not a catastrophe” (Solow, 1974, pág. 11).

ha dado voz a un nuevo paradigma del ideal de vida o desarrollo, que contiene postulados ancestrales con un sentido de la vida que diverge en sus ideales del clásico desarrollista y se compone con algunos rasgos que podrían ser vistos como el inicio de un proceso emancipador, al constituir la puesta en escena de una nueva teoría del cómo vivir.

Los factores que han hecho posible este hecho podrían ser varios, pero como se ha señalado en el punto 6, el que la voz de los pueblos ancestrales haya logrado inscribirse en textos constitucionales y se esté considerando y revisando su pertinencia en diversos encuentros académicos y políticos, es en gran medida, gracias a la capacidad de participación de los ciudadanos en determinados territorios. Cuestión que indica algo relevante y que se debe señalar: la adquisición de capacidad participativa ha sido determinante en que éstos reclamos hayan sido aupados a la primera línea política y social.

Asimismo se considera relevante indicar, que estos postulados proponen un modo de entender la comunidad, el Estado y el individuo, que diverge con el ideal promovido por los agentes relevantes; así como se alinea y posee fortalezas que la sitúan en un contexto cercano a las tendencias más modernas que abogan por alterar el ideal de vida de las sociedades en aras de alcanzar calidad. Esta cuestión es indicativa al mostrar la región una corriente de origen ancestral, que no se ha visto influenciada (en un alto grado) por los factores externos y que, “casualmente”, coincide con postulados “modernos” que atribuyen al modelo de vida inscrito en el desarrollo la causa del malestar global.

En esta cuestión, si bien el origen justificador del crecimiento económico como parte del desarrollo y el bienestar, tenía atribuida la función de ejercer un papel de agente distribuidor de recursos entre la ciudadanía, el concepto “Buen Vivir o Vivir Bien” también en cierto sentido, pero eliminando el fenómeno como una meta de la estructura social, y situándolo más como una herramienta al servicio de la estructura. Es decir, crecimiento si, en caso de necesidad. Pero no es la meta de la sociedad.

Esquema C) Armonía social- armonía individual- armonía y respeto con la naturaleza= **Buen Vivir.**

Este planteamiento – coincidente en ciertos aspectos con los postulados enunciados por Dudley Seers, Ignacy Sachs y otros-, no indica el crecimiento infinito como requerimiento de vida, sino que aboga por el fomento de este fenómeno cuando sea necesario para asegurar la armonía, ya que la comunidad es el eje sobre el que gira toda articulación política, económica y social. Por lo que el sistema señalado indica que se debe poseer un

esquema en el que la economía sea parte del mercado, y no un esquema de economía de mercado.

Asimismo, si bien se han señalado en estas conclusiones la pertinencia y reclamo de la capacidad de decisión en torno a la que se ha situado el debate, es debido rescatar aquello mencionado acerca del espacio que ha encontrado el concepto del Buen Vivir o Vivir Bien para darse a la luz, recalcando que este proceso se ha debido al aumento de la participación de la población en las decisiones políticas. Lo que refleja el impacto del incremento de los índices de democracia, que responde en términos de soberanía a la implementación de la soberanía popular y cierta emancipación del eurocentrismo en ALC¹⁷⁶.

Por lo que, ya sea por la disputa y necesidad de obtener capacidad de decisión y maniobra en el contexto internacional, para instaurar el modelo clásico de desarrollo y lidiar con las practicas inscritas en él o para articular un espacio que permitiese emitir un nuevo ideal de vida a través de la participación popular, la soberanía aparece como el concepto que ha permitido la articulación de la capacidad de decisión. Es decir, los hechos sitúan la relación de la soberanía con el desarrollo como un elemento con un doble sentido: 1º) como opresor de la capacidad autónoma de los Estados receptores en términos de RRII; y 2º) como factor articulador de capacidad y potenciador de la aparición de nuevas capacidades de acuerdo a la voluntad del pueblo. Por ello, se presenta relevante de acuerdo con los objetivos de esta tesis, pasar a revelar las implicaciones del término, tanto a nivel interno como en las RRII.

¹⁷⁶ A este respecto véase Quijano (2007).

PARTE II

CAPITULO II. Soberanía, concepto a debate.

“De todos los derechos que pueden pertenecer a una nación, la soberanía es sin duda el más precioso y es por eso que los demás Estados deben respetarse escrupulosamente si no quieren hacerse injuria”.

“Las naciones extranjeras no tienen ningún derecho de entrometerse en el Gobierno de un Estado independiente. **Gobernarse a sí mismo conforme a sus deseos es un atributo de la independencia.** Un Estado soberano no puede ser molestado por otro, a no ser que él mismo, por medio de tratados, le haya dado facultad de inmiscuirse en sus asuntos” (Vattel, 1863, pág. 22) [**Negrita propia**].

1. Objetivos del capítulo.

El objetivo principal de este capítulo es determinar los diferentes atributos que posee un término tan complejo como el de soberanía, que a la vez que es muy común es muy poco cultivado en la SI – en palabras de Leibniz citadas en Onuf (1991, pág. 425)-.

Este concepto despierta gran interés y posee gran relevancia al caracterizarse por ser un elemento constitutivo de fricciones entre Estados, así como en su interior, principalmente. Por lo que urgir en las raíces y orígenes de la historia permitirá, de acuerdo con los objetivos de esta tesis, exponer cuales son aquellos postulados fundamentales que han dado y dan sentido a la soberanía; así como detectar las claves que indiquen el cómo ha sido el proceso de acople conceptual a la SI actual con el paso del tiempo.

En este sentido, llama la atención una afirmación constante entre diversos autores señalando que este concepto ofrece vacíos de significancia (Hinsley F. , 1986; Anghie, 2005; Hardt & Negri, 2000; Onuf, 1991). Cuestión que, siendo un término elemental en la configuración del Estado en su interior, así como en la de sus capacidades en las relaciones con el exterior, el que no esté claramente definido y limitado el papel que ejerce la soberanía en la actualidad, supone la aparición de incertidumbres a la hora de analizar el rol que juegan los diversos agentes en la SI, tanto por el significado que pueda ser atribuido al término, como por el uso que pueda ser ejercido del mismo en el contexto nacional e internacional.

El tratarse de un término lleno de vacíos conceptuales en la actualidad, puede encontrar sus causas en una infinidad de circunstancias. Es por ello, que a la hora de analizar este término se entiende pertinente el realizar una retrospectiva de aquellos acontecimientos fundamentales en el establecimiento del término en la SI, buscando entre ellos pistas que revelen cuáles son las claves en el proceso de institucionalización del término desde sus inicios. Ejercicio que permitirá esclarecer y concretar cuáles son los alcances, los límites, los conflictos y demás líneas inconcretas que puedan tener cierto impacto en la actualidad.

El ejercicio de indagación que desbroce la maraña existente en torno a la evolución conceptual que parece haber sufrido el término, permitirá observar el cómo, el cuándo y el qué ha motivado y motiva las alteraciones sufridas por el concepto en la evolución de la SI¹⁷⁷; así como el origen de su constitución y su proceso de transformación a lo largo del tiempo, dentro de los diversos niveles que presentan los pactos de asociación que materializan la conjunción de intereses o al menos su justificación, desde que el mismísimo Aristóteles hiciese referencia a que existían niveles de pacto comunitarios que iban desde la familia, a la ciudad y a el Estado (Aristóteles, 1932). Pactos que en la actualidad se asemejarían a los acuerdos o tratados de asociación que se producen entre individuos, comunidades, Estados, e instituciones de superior categoría por su tamaño y amplitud como son las organizaciones supra-estatales.

En este sentido, una cuestión muy relevante en el actual contexto internacional es la aparición de las organizaciones supra-estatales. Puesto que desvelar cuál es la cobertura del ejercicio soberano al lidiar con estos agentes los Estados, tanto en su ejercicio como en la construcción de las entidades, debido principalmente a que las capacidades de decisión, ciertamente, se diluyen entre la figura del Estado y los agentes internacionales a través de la firma de pactos o tratados, supone la aparición de un debate profundo en torno a la cuestión de ¿qué decisión prima en la nueva configuración espacial de la SI?; y ¿cómo se articulan los mecanismos decisorios en una organización compuesta por entes soberanos?. Cuestiones éstas que elevan una pregunta muy relevante en términos de competencias ¿se puede hablar de soberanía en los términos que el concepto emergió allá por el siglo XVI? Si es así, ¿por qué?, y si no ¿por qué?; así como cabría preguntarse si debido a la firma de pactos en los que se cedan competencias se puede estar construyendo un agente supra-soberano en el contexto actual.

¹⁷⁷ Para información acerca de las alteraciones sufridas por el concepto véase, por ejemplo: Anghie, (2005); Philpott (2001); Hinsley F. (1986); Jenks (1971); o Krasner (2001).

Una vez indicadas esas preguntas que requieren de un análisis profundo del origen de la soberanía, es innegable indicar que la evolución del concepto ha ido ligada a la transformación de aquello que ha sido entendido por SI, produciéndose una alteración cognitiva del significado de soberanía a la par que las RRII se diversificaban y, por ende, se daba un proceso en el que la SI se iba reformulando como estructura. Contexto en el que el concepto de soberanía iba sufriendo alteraciones, situándose como marco de disputas constantes en torno a qué significa y qué alcance tienen los atributos del concepto en la sociedad actual.

Bien es verdad además, que la soberanía en su evolución conceptual siempre ha ido ligada a la figura del Estado, siendo éste por un parte el agente representante de la soberanía, en tanto que es el ente que conecta al individuo con la sociedad a través del acto de ejecutar la protección de los derechos(Onuf, 1991); y por otra, al ser el Estado el agente que en su práctica clásica ha aglutinado las reglas colectivas, y ser este hecho el que constituye un elemento representativo de la independencia y autonomía, ya que la presencia de estas reglas colectivas en los agentes -Estados en éste caso-, suponen una independencia particular, configurando territorialmente una entidad de autoridad suprema en torno al que se constituye la comunidad como agente aglutinador de voluntades de individuos. Sin embargo, ante la presencia de estos atributos como elementos representativos de soberanía, es debido indicar que dentro de la evolución de la SI, en donde se han constituido órganos que protegen los derechos a mayor escala que los propios Estados, los atributos señalados han sufrido cierto desplazamiento de nivel, y es por ello que la soberanía se encuentra en una incertidumbre al no deberse esa relación únicamente a un Estado, sino que su amplitud puede ser mayor alcanzando niveles superiores en la práctica diaria.

Es por lo señalado en los párrafos anteriores que, teniendo en cuenta que cada tipo de asociación, desde comunidades, Estados, regiones, OORR u OOII, poseen diferentes espacios y niveles de actuación, en los que cada entidad ocupa una posición, existe un debate en torno a qué tipo de organización es el más apropiado para conjuntar demandas en un rango inferior y actuar pertinentemente en el rango superior.

Un análisis sobre la constitución de una comunidad regional debe exponer y evidenciar un cuestionamiento tan relevante como la transformación de la conceptualización de la soberanía, cuando el proceso de constitución de la comunidad presenta las demandas y reclamos - por ejemplo, aquellos indicados en la introducción-, que abarcan un nivel superior a la figura clásica para las significadas demandas: el Estado. Es decir, se ejecutan

reclamos de potestad e independencia en un nivel superior al concebido y presentado como el ente responsable en un concepto como la soberanía.

Por ello, ante las cuestiones que se evidencian en este planteamiento inicial, se encuentra pertinente realizar un análisis histórico conceptual del término, que aborde la transformación terminológica de la soberanía y que desvele cómo ha sido, causas, motivos, agentes, prácticas, etc..., del proceso evolutivo de la soberanía en la SI, de cara a alcanzar una visión que permita abordar los objetivos e incógnitas que dan inicio a este estudio. Ya que como objetivo inicial se persigue vislumbrar un proceso de construcción de pactos que pueden significarse soberanía en una región como ALC; así como el observar cómo la constitución de una comunidad de Estados tensiona el propio concepto; e intentar a su vez, comprender y señalar los diversos alcances del término y de este modo, adecuar la conceptualización al objetivo de analizar el papel que pueda haber ejercido una práctica en términos de desarrollo, tan relevante, como es la IED.

1.1 Primer paso. La Real Academia de la Lengua.

Como primer paso del ejercicio analítico se cree pertinente acudir a la definición presente en la RAE, la cual ofrece varias acepciones del término soberanía:

1. f. **Cualidad de soberano;**
2. f. **Autoridad suprema del poder público;**
3. f. Alteza o excelencia no superada en cualquier orden inmaterial;
4. f. ant. Orgullo, soberbia o altivez;

~ nacional.

1. f. **La que reside en el pueblo y se ejerce por medio de sus órganos constitucionales representativos;**

Fuente: <http://www.rae.es/rae.html> [Negrita propia: definiciones de interés para el estudio] (Consulta realizada el 03 de febrero de 2013).

Las acepciones seleccionadas del término que ofrece la RAE, en primera instancia, despiertan tres primeras cuestiones que requieren ser indagadas. Por considerarse éstas relevantes de cara al trabajo de investigación que se aborda:

- 1) Primeramente porque, si la soberanía es cumplir la cualidad de soberano y es además el lugar en donde reside la capacidad de ejercer o poseer la autoridad suprema e independiente, la cuestión que se despierta es ¿cómo se dirime esta función de independencia en un contexto de RRII (económicas, sociales, culturales, etc...), caracterizadas por la interdependencia en la actualidad? Puesto que la supremacía en un mundo interrelacionado posee un complicado encaje con la independencia presente en la actual SI, por el hecho de actuar con total independencia en un mundo con altos grados de interdependencia¹⁷⁸, al ser ciertamente complicado el ejecutar labores de soberano con independencia absoluta;
- 2) Como segunda cuestión señalar que la acepción número 1.f plantea otro dilema relevante. A este respecto, si se afirma que la soberanía reside en el pueblo y que es ejercida por medio de sus órganos representativos, el conocer cuáles son los límites de acción representativa que poseen los órganos para con el pueblo, permitirá observar el tipo de relación que existe entre gobernados y gobernantes, y plantear la cuestión de ¿cómo y por qué se delega la capacidad por parte del pueblo?; así como responder a la cuestión de ¿qué tipo de responsabilidad caracteriza a la relación como cesión de soberanía del pueblo a los órganos representantes?;
- 3) Por último, la acepción 2. f. indica que la soberanía es la autoridad suprema del poder público, que si es entendido en el sentido Weberiano como la capacidad del Estado para obligar a realizar un acto determinado dentro de un territorio, plantea la cuestión: ¿qué sucede con aquellas prácticas que se dan dentro de las fronteras o fuera, que afectan a lo público (internamente), pero que difícilmente el Estado es capaz de ejercer la autoridad suprema?

Estas cuestiones “básicas” aparecen tras cruzar levemente el avance de la SI con un concepto que nació en época de inicios de la modernidad, en donde la razón se contraponía al renacimiento y la configuración de los elementos comunitarios se situaba como una meta de orden. De ello que se diese el proceso de institucionalización del poder que dio origen al concepto de soberanía (Onuf, 1991). Siendo este hecho elemental en la actualidad, al observar que la incidencia de otros agentes en la ordenación de las comunidades, así como en las relaciones entre agentes, ha variado.

¹⁷⁸ Véase a este respecto Keohane & Nye (1988).

Es por este planteamiento inicial que la soberanía y su comprensión exige comenzar con un repaso de los autores clásicos y, poco a poco, ir desvelando el cómo desde esa época modernista han cambiado las ideas y las RRII, en tal grado, que la soberanía quizás debe ser comprendida y analizada bajo otra perspectiva.

1.2 Aproximación al concepto político.

En el campo socio-político actual, en el que las relaciones de fuerzas entre ciudadano, Estado y OOI son cambiantes, el concepto de soberanía se encuentra en entredicho. Debido esto, principalmente, a que el proceso de globalización ha creado diversos espacios, en los cuales la capacidad potestativa que es ejercida por los diferentes actores posee, cuando menos, limitaciones concretas, sin saber en diferentes momentos quién es el sujeto poseedor de la misma (Hardt & Negri, 2000). Además que, es habitual que exista una cierta dificultad en ocasiones para alcanzar a divisar quién es o cómo se legitima la propia soberanía, dados los diferentes niveles que representan los agentes.

La existencia de grietas institucionales de diversa profundidad en diferentes niveles, espacios y campos- ya sea comunal, local, estatal, regional o global-, así como la no existencia de un DI explícito que regule *de facto* las relaciones entre los diversos agentes- ya sean políticos, sociales y especialmente aquellas de carácter económico-, adhieren a lo ya mencionado una carga de sombra conceptual al término soberanía, en cuanto a su significado y su cobertura actual.

Si en cuestiones políticas y sociales los Estados poseen un cierto grado de potestad -no libre de ciertas grietas-, en el sector económico se presenta esta potestad enraizada en las dos anteriores pero a su vez, se acontece y defiende cierto goce de libertad de acción para la economía bajo diversas teorías económicas en el mundo actual. Este hecho se debe en gran medida a que la instauración de ideas en las instituciones de corte liberal capitalista han sido fuente de discursos, prácticas y origen de reglas (Onuf, 2014). Cuestión que ha incidido en que en la SI haya primado la falta de regulación concreta para controlar el movimiento de capitales. Lo que ha causado que la economía oscile entre la norma y la regulación en un DI, que no ha logrado establecer unos límites claros al clásico lema económico del “libre mercado”. El cual, no se olvide, encuentra su justificación argumental en que este sistema

es el mejor modo de articular un mundo justo en libertad, el cual será promotor de un beneficio común a las partes, según sus panegiristas¹⁷⁹.

Si a lo señalado en cuestiones de soberanía se añade la importancia del concepto en el campo político, debido principalmente a su uso continuado por parte de los líderes políticos- utilizando términos como soberanía popular, soberanía nacional o soberanía regional repetidamente-, se observa como el concepto se caracteriza por estar expuesto a su análisis diario, ya que es un elemento aglutinador de tensión en el que se cuestionan sus límites y capacidades, constantemente, por los diversos agentes que componen la SI.

2. Inicios conceptuales. Acercamiento a la historia.

El término soberanía proviene, revisando la raíz etimológica de la palabra, de soberano, del latín *superanus*. Palabra que se compone de: súper (encima, más) y el sufijo *-anus* (pertenencia, procedencia, relación). Se podría entender que la cualidad de soberano procede de un acto resultante de un proceso vinculante del que se es parte y que sitúa por encima del resto a un agente, en un nivel superior. Por ejemplo, si se realiza el análisis de una palabra que procede del mismo *superanus*: soprano, se observa que ésta significa: la voz más alta, y si se utiliza ésta definición en el campo política, aplicando un sentido paralelo del significado indicado, se significaría aquella voz más elevada en la política.

Si a primera vista la soberanía podría ser indicada como una característica de una relación en la que un sujeto que es situado por encima del resto, que guarda una relación directa y que además forma parte del todo, el dibujo que se obtendría de dicha exposición básica proporcionaría una información sobre dos hechos: 1) por una parte, la existencia de supremacía; y 2) por la otra, la existencia de una relación. Los dos hechos que simbolizarían este mecanismo de relación, han sido los que han llenado largos textos y debates políticos, jurídicos y sociales durante siglos, en los que se ha tratado el modo en el que la supremacía y la relación debían ser gestionadas dentro de una comunidad.

Y es que el fenómeno señalado se ha venido produciendo durante siglos y ya entraba dentro de los debates en los más antiguos pueblos que han habitado el planeta. Ciertamente, es un concepto que guarda relación con los modos de organización social que, a partir de la realización de un proceso que permitiese establecer una cierta estructura,

¹⁷⁹ Véase una buena exposición de la relación entre libertad y economía en la obra *The Free and prosperous Commonwealth: an exposition of ideas of classical liberalism* (1962) de Ludwig Von Mises. Princeton.

categorizaba y definía roles de los miembros parte, ya que se ha tratado de un mecanismo político-social, caracterizado por ser el eje que ha determinado las funciones a desempeñar por la comunidad y el modo de participación de sus miembros en la organización.

Del debate surgido con esta finalidad han aparecido gran variedad de modelos, postulados e ideas. Desde aquellos en los que se establecía el orden a través de una justificación de origen divino, como el caso del Egipto faraónico o las monarquías, hasta las que se organizaban por sorteo o voto, como la Florencia del siglo XVI, pasando por los clásicos griegos, romanos, o las recientes democracias con diversas metodologías y sufragios¹⁸⁰.

Sin embargo, el origen del proceso sufrido que dio comienzo a la doctrina de la soberanía, hay que situarlo en el tiempo concreto en el que la sociedad sufrió una transformación profunda, al diferenciar entre el poder político del poder moral o religioso: el paso del renacimiento al modernismo (Onuf, 1991; Philpott, 2001; Martín, 1980). En ese instante se reflejó un gran cambio político-social en el siglo XVI, al sufrir una transformación la sociedad europea al pasar de un sistema feudalista a uno caracterizado por un capitalismo¹⁸¹, en donde el concepto surgió como reivindicación del poder supremo feudal ante los nuevos poderes económicos que habían aparecido¹⁸².

La transformación estructural de las relaciones que se vivió en el paso del feudalismo al capitalismo, se ve representada con la gran separación que se produjo entre los sectores económico y político. Éstos, que habían sido elementos que anteriormente se concentraban bajo un solo poder: el monarca o señor feudal, sufrieron un distanciamiento resultado de la aparición en el poder de la clase burguesa, que discernía en las ideas acerca de cómo organizar el reparto de beneficios de la actividad económica¹⁸³. Lo que provocó una nueva estructura que separaba el Estado y la sociedad civil.

Estos acontecimientos provocaron que se abriese paso un concepto de soberanía en el campo político en los siglos XVI y XVII, cuando la sociedad, en una búsqueda por definir

¹⁸⁰ Véanse los trabajos de Hinsley F. (1986); Anghie (2005); o Rivas (2010), que desde diferentes perspectivas abordan el pasado y la evolución de la soberanía en diversas épocas.

¹⁸¹ Este punto se refiere al cambio que se produjo en las relaciones de poder y de trabajo. De poder, el cambio de la supremacía de origen divino ante la de origen económico; en el trabajo, a la relación contractual basada en la costumbre u obligación en el feudalismo, por la relación salario-tiempo trabajado que se establece en el capitalismo.

¹⁸² El concepto de soberanía surgió como mecanismo de acumulación de poder, del que se apoderaron los monarcas para lograr mantener el poder y reprimir las dudas al respecto. Este hecho que se refleja en las obras de Bodino (1985[1576]), Hobbes (1993[1651]) o Maquiavelo (2004[1513]), como grandes representantes de la época.

¹⁸³ Véase Philpott (2001).

los límites entre los Estados nacionales- creados o por crear-, trató de establecer fundamentos de origen laico que ejerciesen de argumento, a favor o en contra, en el debate existente alrededor del origen del poder y del agente que debía ostentarlo. Es en ese preciso momento cuando surgieron los que son considerados los principales autores de la soberanía.

2.1 Los autores clásicos.

El primero autor que se debe señalar ineludiblemente al hablar de soberanía es Jean Bodin, ya que éste es reconocido como el primer autor que definió claramente el concepto en 1576, en su obra *Los seis libros de la República*. En la cual Bodin (o Bodino en castellano) realizó una gran presentación analítica sobre el significado de soberanía y sus atributos, estableciendo que:

“Soberanía es el poder absoluto y perpetuo de la República... La soberanía no es limitada, ni en poder, ni en responsabilidad, ni en tiempo... **es necesario que quienes son soberanos no estén de ningún modo sometidos al imperio de otro...**” (Bodin, 1985[1576], Libro Primero; Capítulo VIII)[**Negrita propia**].

Según Bodin, la soberanía posee las cualidades de: **perpetuidad**, entendiendo que es poseída por el agente receptor de la misma, por siempre una vez otorgada; de **poder ilimitado**, cualidad que concede el hecho de la no posibilidad de sustracción por parte de ningún agente, ni siquiera de aquellos surgidos de la práctica misma y es situada como poder máximo que abarca a todo los demás; y además, la soberanía es el recipiente de la **responsabilidad última**, ya que será su decisión la que impere. Bodin hace hincapié en este último aspecto, puesto que le otorga relevancia al no sometimiento a otro poder por parte del soberano e indica que no puede ser soberano o poseer soberanía, aquel sujeto que se encuentre bajo el mandato de otro, ya que allí donde recaiga - el agente - la potestad soberana, debe obrar con **independencia absoluta**.

Al producirse las reflexiones sobre el poder en un contexto de cambio de época- el que se vivió del renacimiento a la modernidad-, los textos de Bodin otorgaron la cualidad de soberano a la figura del príncipe. Justificando este hecho por medio de una dotación a éste de carga divina, puesto que le consideraba como la figura representativa de Dios en la tierra. Y esto, según Bodin, informaba claramente de que aquel “agente” que realmente es sustentador de la soberanía es Dios, y en tal caso el príncipe era figura representante en la

tierra por la “gracia de Dios”. Afirmación esta que acercaba al autor a las postulaciones de la escuela escolástica¹⁸⁴, ya que esta trataba de unir la razón con lo divino en la época moderna. Contexto en el cual, en el que dentro de la tensión que se despertaba entre el razonamiento y lo divino respecto al origen de las cosas, la soberanía de Bodin optaba por basarse en una justificación razonada de lo divino.

Anterior a Bodin se encuentra como referente en torno a la soberanía la obra de otro de los grandes clásicos, Nicolás Maquiavelo. Autor que se rescata en este escrito por los comentarios al respecto del soberano recogidos en su obra escrita el 1513 *El príncipe*. Aunque el centro de sus escritos era la mecánica de gobierno y no realizó una definición exacta del concepto soberanía, sí se señalan en su obra cuestiones relevantes y dignas de mención. Una de ellas es el cuestionamiento sobre la incidencia de la divinidad en la soberanía, poniendo en cuestión este origen al afirmar que “...nadie se eleva a esta soberanía sin el favor del pueblo...” (Maquiavelo, 2004[1513], Capítulo IX). Indicación que más allá de entrar directamente a cuestionar la relación del monarca con Dios, sí introdujo otro elemento que consideró fundamental en la potestad soberana: el pueblo. De modo tal, que Maquiavelo otorgó un grado de participación en la soberanía al pueblo, entendiendo que esta “...no solo surge de Dios...” (Maquiavelo, 2004[1513], Capítulo IX).

Posterior a Bodino se encuentra la figura de Thomas Hobbes, que en pleno proceso de justificación del absolutismo elaboró en su libro *El leviatán* (1651) una argumentación teórica de la soberanía a partir de la razón, justificando su existencia como mecanismo de defensa para una comunidad y afirmando además, que la soberanía era un elemento que afianzaba la unidad y la protección conjunta. La presencia de soberanía fue expuesta por Hobbes como el único modelo viable para asegurar la estabilidad, avisando el autor que en ausencia de un poder concentrado, como era característico de la soberanía, surgiría el caos. Por ello, indicaba que era necesaria la existencia de un ente que liderara e impusiera orden. Si no el caos se haría presente.

Hobbes era defensor de la unificación de la soberanía en un agente, amparándose en la necesaria existencia de éste para el logro de una armonía. Puesto que en su postulado partía

¹⁸⁴ Escolástica se entiende por el movimiento teológico y filosófico que trató de comprender el cristianismo a partir de la filosofía grecolatina. Entre sus autores más destacados se encuentran en la Alta escolástica: Anselmo de Canterbury; Pedro Abelardo; Bernard de Chartres; Alberto Magno; Tomás de Aquino o Guillermo de Ockham entre otros; en la escolástica jesuita: Francisco Suárez; Hugo Grocio; y en la Neoescolástica Jacques Maritain o Étienne Gilson. Para profundizar en la Escolástica véase la obra: *El pensamiento social y económico de la escolástica* (1972). Consejo superior de Investigaciones. Instituto de sociología de Balmes.

de la premisa de excluir la posibilidad de cualquier tipo de existencia pacífica, si ésta no estaba basada en un modelo de centralidad de poder. Ya que argumentaba que sin la existencia de un poder concentrado, las disputas y las guerras conllevarían al desorden y a la desestructuración como conjunto (Hobbes, 1993[1651]).

Entre sus argumentos, Hobbes partía de la premisa de no entender ni dotar a la comunidad de la potestad soberana, sino que afirmaba que ésta se encontraba en manos de cada uno de los individuos que componían la comunidad. Situación en la que éstos debían particularmente, y con el objetivo de asegurar la paz, delegar su derecho soberano en una asamblea o individuo. Y con ello, otorgar al agente un poder centralizado con fuerza suficiente como para aplicar mecanismos necesarios para alcanzar y mantener el objetivo de toda comunidad: la paz.

Otra de las cuestiones relevantes en este sentido es que Hobbes argumentaba, que dada la existencia de un compromiso ciudadano con el soberano, con un cierto sentido de comunidad y sujeto a una lealtad firme, se consideraría como una traición al pacto ejercido por los ciudadanos con el monarca cualquier acto que no respetase la libertad de acción del segundo. Es decir, bajo ese compromiso se otorgaría consentimiento, sin discusión, a cualquier decisión del monarca y, en el caso de que alguien se mostrase en contra de la decisión del monarca, la acción sería considerada como un acto delictivo contrario al pacto. Por lo tanto se trataría de una acción contra uno mismo por incumplir aquella potestad delegada en los representantes (Hobbes, 1993[1651]).

Estos postulados hobessianos dieron cabida a uno de los debates fundamentales en la construcción de la doctrina de la soberanía, pues se urgió en torno a éstos la cuestión de cuál era el derecho de participación de los ciudadanos ante una decisión que fuese considerada injusta. De hecho, había que razonar sobre cuáles eran los límites de acción del monarca y qué tipo de compromiso poseía éste con su pueblo. Asunto que motivó que diversos autores comenzasen a rebatir estos límites y se comenzase a cuestionar el absolutismo con mayor grado analítico, introduciendo nuevas cuestiones en la doctrina de la soberanía como los derechos naturales.

Los análisis de Hobbes significaron que el debate conceptual sobre el proceso de transformación sufriese un giro y centrarse sus miras en la relevancia de la participación ciudadana, en donde se pretendió articular motivaciones en torno a las cuestiones de ¿quién era el soberano?; ¿por qué era soberano?; ¿dónde estaba el origen de la soberanía?; así

como vislumbrar ¿quién es el poseedor último de la soberanía? Incertidumbres que impulsaron que se diese comienzo a un trabajo teórico pretendiendo justificar el por qué un agente se establece en el espacio superior (supremo) y cuál es la relación entre los dos espacios: gobernante-gobernado.

Si por una lado Hobbes había abogado por la realización de un pacto ciudadano-Estado que otorgase al soberano el poder de crear un derecho al que los ciudadanos debieran someterse, la figura John Locke, surgió como representante del derecho natural en su periodo clásico y rebatió el argumento dado por Hobbes, manifestando que los derechos naturales¹⁸⁵ eran anteriores al pacto indicado en la obra de Hobbes o a cualquier institución u organización que surgiese del mismo. Esta cuestión es de una importancia suprema, puesto que Locke dotaba en su postulado al pueblo del derecho a revolución en caso de que éste encontrase que las leyes surgidas vulneraban sus derechos naturales. Contexto en el que el pueblo y/o sus ciudadanos tendrían el deber y el derecho a revocar el pacto con el soberano (Locke, 1821).

Contrario a Locke había escrito Richard Zouche, en su obra *Juris et judicii feccialis sive juris inter gentes... explicatio* (1650), indicando que existía una diferenciación entre el derecho natural y el derecho basado en el consentimiento y que, aunque el primero fuese superior al segundo, el factor de la voluntariedad de los hechos era fundamental y eliminaba toda posibilidad de existencia de una ley superior. Zouche consideraba que si un ciudadano había depositado su confianza y sus derechos por medio de un “acto voluntario”, no habría derecho superior que retuviera la cesión de ese derecho. A lo que Locke replicaba que esa voluntariedad debía poseer “siempre” la capacidad de ser revocada usando un argumento similar. Puesto que entendía que el derecho natural podría ser asumido en el momento en el que el ciudadano decidiese revocar lo acordado voluntariamente, de acuerdo a un cambio legítimo en su voluntad. Pues no se debe ni puede suprimir la voluntad del individuo, ni su capacidad para alterarla.

A raíz de estos debates, la doctrina de la soberanía fue sufriendo un desplazamiento en sus pilares teóricos, viendo como el planteamiento inicial de Bodin sobre el origen divino del absolutismo y la soberanía se iba sustituyendo por uno nuevo, en el que se dirimían tres

¹⁸⁵ Los Derechos Naturales que indicaba Locke eran: a) Derecho a la Salud; b) Derecho a la Propiedad; c) Derecho a la Vida; y d) Derecho a la Libertad. Se explica en profundidad la relevancia de estos derechos en este periodo en Bodenheimer (1994, pág. 175).

cuestiones principales: a) la relación entre el soberano y los derechos naturales de los súbditos; b) la legitimidad del soberano; y c) el modo en el que se constituía la relación.

2.1.1 Debate en la cara interna de los Estados. Del origen divino al consentimiento popular: entre el absolutismo y la soberanía popular.

Dado el contexto señalado, sólo se superaría el absolutismo y su particular modo de entender la soberanía en el momento en el que las teorías doctrinales de soberanía pasasen de estar centradas en el gobernante y fijar su atención en los modos de participación de la comunidad. En este aspecto, si bien se debe señalar que el origen divino de la soberanía fue el centro del debate y la revolución burguesa alteró el mismo, aunque no se ejerciese una reformulación total, la doctrina de soberanía abordó su proceso de transformación alterando su objeto de estudio mediante el cambio de sujeto. Es decir, se sustituyó a aquel que era poseedor de la soberanía por otro, del monarca al pueblo, manteniendo el mismo modelo. Lo que significó que se asentase la soberanía como parte de la estructura del nuevo modelo de Estado.

Se podría decir que en cierta manera *El príncipe* de Maquiavelo se mantuvo tras la crisis de las monarquías y la llegada del Estado liberal. Puesto que según había sido formulado el concepto de soberanía a partir de una construcción de poder teológica, la aparición de la soberanía popular podría sugerir que se abordase un cambio en cuanto a los principios básicos formulados sobre el concepto. Pero esto no sucedió. Simplemente se produjo un cambio de *príncipe*. El soberano pasó de ser agente de legitimación divina a popular, manteniendo la misma estructura y las mismas jerarquías potestativas en su forma de Estado que el modelo anterior. Por lo que el *príncipe* pasó de ser el monarca al pueblo, como sujeto, tras la revolución francesa.

Del surgimiento del Estado liberal en Inglaterra- representado en la figura de John Locke- se extraen dos ideas fundamentales y relevantes para el debate. Una, el posicionamiento contrario al origen divino de la soberanía; y otra, la defensa de los derechos naturales. Por una parte, en su primer *Tratado sobre Gobierno Civil* (1689), John Locke refutaba el origen de la divinidad de los monarcas, afirmando que este argumento era de una época reciente y no clásica. Por lo que según Locke, la creencia de un poder otorgado a los monarcas por “la gracia de Dios” en la tierra había sido constituida por ellos mismos, y por ello argüía este postulado para deslegitimar su figura y la construcción teórica en torno a una

conceptualización de la soberanía que no superaba la época renacentista. Locke afirmó que el poder soberano no debía situarse en la figura monárquica de ningún modo, sino que este pertenecía al pueblo y no a Dios o a cualquier fuerza divina. Señalando que el pueblo soberano era el que delegaba en el Estado la soberanía mediante un pacto y que éste último era el encargado de defender los derechos naturales: derechos de vida, propiedad y libertad-la salud también podría considerarse-. En caso de que el Estado no ejecutase su labor de defender esos derechos, Locke argumentaba que el pueblo tenía el deber y derecho de rebelión (Locke, 1821).¹⁸⁶

En referencia a la relación del poder en una comunidad, considerando la presencia de una injusticia dentro de la relación Estado-ciudadano, contrariamente a la postura que se había argumentado anteriormente, en donde se situaba la supremacía del líder y la sumisión a sus decisiones por parte del pueblo en nombre del “bien común”, Locke postuló que la comunidad poseía el derecho de exigir su cambio, puesto que existían límites en la libertad de acción de aquellos que ostentaban la soberanía del pueblo (Locke, 1821).

La postura que adoptó Locke contrastaba con aquellos autores como Bodino que habían afirmado que el soberano era poseedor de poder absoluto e ir en contra de la decisión era ir contra uno mismo, ya que Locke desplazaba el poder en su cara interna, mediante la exposición de los derechos naturales de los individuos, en donde situaba al pueblo como el origen y fin de la soberanía. Y aunque existiese y se reconociese una figura suprema en la sociedad su poder no sería “nunca” irrevocable.

A partir del postulado de derecho emitido por John Locke, Charles Louis de Secondat, o más conocido como Barón de Montesquieu, dio un paso más en el análisis del poder y escribió sobre la separación poderes interna en el Estado en su obra *El espíritu de las Leyes* en 1750. En principio, si bien esta obra fue entendida como un ataque contra la unidad del poder interno - puesto que si bien John Locke escribió desde el poder sobre el poder Montesquieu escribió basando su discurso en el concepto de libertad, allí en donde la soberanía había basado toda su conceptualización: la unidad suprema-, Montesquieu formuló una teoría que abogaba por una división que otorgaba el mismo poder a tres órganos dentro de un Estado: ejecutivo, legislativo y judicial (Montesquieu, 1906[1747]). Es decir, dividía las capacidades del soberano.

¹⁸⁶ Señalar que en los derechos que John Locke promovía se consideraba pueblo a aquellos que poseían tierra. No a los desposeídos.

El debate que surgió de los escritos de Montesquieu provocó que se incentivase una reformulación del concepto mismo de soberanía. Hecho que vendría a suponer un paso adelante del término en los espacios interno/externo:

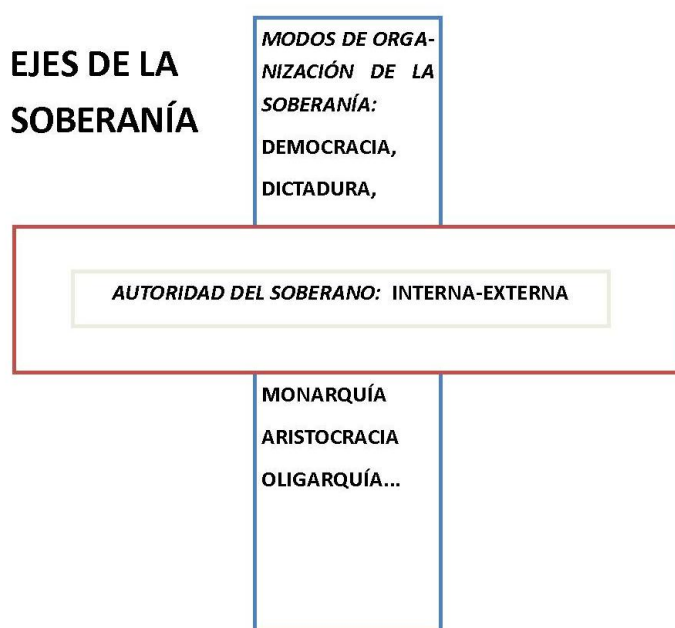
- **Interno:** puesto que la organización del poder se asentaba sobre la indivisibilidad de la soberanía, a partir de una fundamentación de la concepción jurídica del Estado. Es decir, en el momento que se entendiese el Estado como la unidad colectiva con figura de sujeto de derecho, se haría posible presentar jurídicamente la unidad del Estado, la de su organización y su voluntad;
- **y externo:** ya que el debate en torno a la organización del poder causó una reafirmación de la unidad soberana, que se vería reflejada en un contexto internacional en el que los Estados, si poseían correspondencia y encontraban reconocimiento recíproco de soberanía, contarían con plena capacidad decisoria independiente en asuntos internacionales.

En el debate en torno a cómo se organizaba el poder, emergió la figura de Jean Jacques Rousseau. Considerado el gran padre del concepto soberanía popular, éste argumentó que la soberanía emerge de lo que él denominaba: voluntad general. Afirmaba Rousseau que esta voluntad no puede ser sustentada por otro sujeto que no sea ella misma, e indicaba que la voluntad general emana del pueblo. Decía: “...no hay ni puede haber especie alguna de ley fundamental obligatoria para el pueblo...” (Rousseau, 1992[1762], pág. 58); porque es el pueblo aquel que sustenta la soberanía absoluta. Asimismo, señalaba que la soberanía es inalienable e indivisible puesto que trata la voluntad general, que es la suma de todas las voluntades. De tal modo, que ésta no se puede tildar de parcial o individual. Debido a que la soberanía es el “...convenio...del cuerpo con cada uno de sus miembros...” (Rousseau, 1992[1762], pág. 77).

Rousseau ubicó la soberanía en una categoría superior a todos los sujetos de la comunidad, situando al individuo por debajo de ésta y manifestando que era “...contrario a la naturaleza del cuerpo político que el soberano se imponga una ley que él no pueda quebrantar” (Rousseau, 1992[1762], pág. 58). Por lo que siempre existirá una ley quebrantable y la capacidad de ejercer su quiebra se encontrará situada en un espacio del que solamente el pueblo soberano será dueño. El pueblo podrá quebrantar cualquier ley, pues él y solo él es el soberano último.

De Rousseau se extraen unas convicciones claras, cuando indicó que el pueblo es origen y poseedor de toda soberanía; que ésta se sitúa por encima de todos sus componentes y representantes; que será establecida la soberanía a partir de un proceso de asociación de sus miembros; que la soberanía no podrá ser cedida ni se enajena, y en todo caso se trata de una facultad delegada a representantes, ya sean físicos o jurídicos; y que el pueblo es soberano y no está sujeto a ningún organismo, cuerpo, representante, etc... que surja del mismo. Puesto que el único propietario de la soberanía es él mismo¹⁸⁷.

Ilustración 8: Los ejes de soberanía: Horizontal y Vertical.



Fuente: De elaboración propia.

En cierto sentido, los aportes de esta época permiten observar la constitución de lo que podría denominarse los ejes de la soberanía. Por una parte horizontal, en cuanto al papel ejercido en las relaciones de autoridad del soberano externa e internamente; y vertical, en el modo en el que se constituye la soberanía.

De este debate hay que rescatar el hecho de que el cambio de *príncipe* se produjese tras la revolución, sustituyendo la figura del monarca por la del pueblo como sujeto soberano, situó el debate acerca del concepto de soberanía en un estado de justificación del mismo a través de un proceso de oposición a la monarquía. Es por ello, como señala Henri Saint

¹⁸⁷ Las teorías de Jean Jacques Rousseau tuvieron un gran calado en los procesos de levantamiento popular en contra de los monarcas, sobre todo en la Francia revolucionaria.

Simón, que la “...soberanía por voluntad del pueblo...” no estuvo basada en un acción positiva de realización, sino en un sentido negativo para oponerse a la expresión “...soberanía por gracia de Dios” (Saint-Simón citado (Martín, 1980, pág. 31)).

2.1.2 La Soberanía Nacional: el debate constitutivo del poder interno.

Si como se ha señalado, el Estado pasó a ser la figura representativa de los diferentes territorios tras la firma de la Paz de Westfalia en 1648 - Tratado que estableció la preponderancia del Estado como protagonista del contexto internacional-, la soberanía se mantuvo como un concepto que determinaba la estructura espacial. Este hecho y la reformulación conceptual sufrida con el paso del monarca al Estado como agente ostentador de la soberanía y el territorio, impulsaron el origen de la soberanía nacional como el elemento institucionalizador de la justificación y existencia del poder en manos del pueblo.

El hecho de no abandonar un concepto nacido para la justificación de la monarquía, traspasarlo como término al nuevo contexto y usarlo como pilar teórico para articular la composición del Estado moderno, fue una adaptación impulsada y motivada por dos mecanismos principalmente. El primero, a través de una articulación ideológica por medio del establecimiento de una comunidad con entidad universal que representaba a los ciudadanos, en donde se establecía el orden en nombre del bien general (Philpott, 2001); y el segundo, expresado en la continuación de la supremacía de un ente, hecho que se vería plasmado con la instauración de una figura representativa de la unión comunal: la nación, la cual poseería atribuciones de carácter político y represivos del orden (autoridad interna/soberanía interna) (Martín, 1980).

Los dos hechos señalados evidenciaron un cambio en las características del modelo de Estado, que incidieron en transformaciones constitutivas de identidad. Por una parte, se vivió una transformación de los ejércitos, los cuales pasaban de mercenarios medievales a ejércitos nacionales permanentes; y por otra, la unidad territorial se vio fijada a partir del establecimiento de “claros” límites de principio y de fin del territorio gobernado -hasta el punto de que las fronteras se han convertido en algo fundamental e intocable en la actualidad-. Estos dos cambios en la institución y en la estructura, surgidos a partir de la transformación conceptual reflejados en un Estado en el que se instauró el sentimiento de nación, son claramente reveladores. A partir de ese instante, en la construcción de todo

proceso de identidad de Estado el concepto de territorio y su defensa en nombre de la nación estimulaban el sentimiento de pertenencia y la soberanía se apilaba en torno a ellos (Hinsley F. H., 1972).

La identidad pasó a ser un factor más en la composición de cualquier tipo de análisis acerca de la soberanía a partir de ese instante, puesto que el fenómeno identitario se consideró crucial en la construcción de la nueva doctrina de soberanía que surgió a partir del asentamiento de la nación como figura representativa de la unidad territorial. Además de esto, todo proceso de reafirmación territorial que aspirase a crear una institución evocaría a partir de ese momento a los sentimientos de nación, Estado y territorio en los ejercicios de reclamo de potestad soberana (Rivas, 2010).

El mensaje caló profundamente en la población y los argumentos promovidos por Jean Jacques Rousseau sustentaron, en cierto modo, la base teórica discursiva utilizada por las revoluciones de la época, que sirvieron para impulsar los sentimientos de nación en la masa ciudadana. Hecho que sin embargo, no aseguró la participación política del pueblo como pretendía el autor, sino que desembocó en una construcción teórica alrededor de la no participación del pueblo en su conjunto en la política. Dado que tras las luchas revolucionarias solo aquellos poseedores de cierto capital participarían en los procesos electorales. Lo que dio como resultado: Estados basados en las postulaciones de las teorías liberales de John Locke y Montesquieu, pero no de la voluntad general en un sentido universal.

Fue por ello que, un proceso que comenzó con atención en el reclamo de participación por parte del pueblo, concluyó con la propiedad privada en primera escena del derecho al mismo tiempo, en la tan renombrada en un futuro y de gran calado para la creación de constituciones: La Declaración de los derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.

De ésta es deber rescatar los tres primeros artículos dada la importancia del documento en la época y por su impacto en la evolución histórica de la articulación de los Estados en su interior y en la SI:

- I. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en cuanto a sus derechos.
Las distinciones civiles sólo podrán fundarse en la utilidad pública.**

II. La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.

III. La fuente de toda soberanía reside esencialmente en la Nación; ningún individuo ni ninguna corporación pueden ser revestidos de autoridad alguna que no emane directamente de ella.

Los artículos aquí recogidos destacan por presentar un cambio notable de un pacto Monarca-Estado a un pacto Nación-Estado y con ello significándose el fin del modelo de antiguo régimen, mediante la alteración de la constitución de la sociedad y de sus mecanismos de representatividad.

Sin embargo, al divisar el alcance de la declaración se significa en el artículo I un dilema relevante en torno a la igualdad de los ciudadanos, pues se destaca en éste la presencia de una cláusula que subyace e indica la existencia de la posibilidad de quebrantar la igualdad enunciada, si se considerase esta condición como un “mal público” en un momento determinado. De hecho, esta cláusula fue puesta en práctica en el instante en el que se consideró como “mal público” el que aquellos que no poseyesen tierras participasen en la composición del agente soberano¹⁸⁸. Es decir, que no ejerciesen su participación en el voto los ciudadanos no propietarios, argumentando que su falta de responsabilidad y conocimiento les incapacitaban para la toma de decisiones, ya que no eran considerados ciudadanos ejemplares. De este modo se justificaba el que la relación gobernante-gobernados se produjese por medio de un sistema de “sufragio censitario” en nombre del “bien común”¹⁸⁹.

Al excluir de la participación electoral a aquellos individuos que no poseyesen tierras, se creó un cuerpo burgués con una participación privilegiada en la composición de la nación, a partir de un proceso de lucha revolucionaria ciudadana. La cual había reclamado el derecho de participación en la designación del agente soberano. No obstante, se observa cómo el proceso concluyó con el resultado de una diferenciación de clases, que otorgaba a la burguesía el poder de elección del soberano. Es decir, por medio del proceso que

¹⁸⁸ En este sentido indica Raquel Rico Linage (1989): “...que en todos los siglos y países se ha considerado á la propiedad, bajo una ú otra forma, como la mejor prenda de buen orden y de sosiego; así como, por el extremo opuesto, cuantos han intentado promover revueltas y partidos, soltando el freno á las pasiones populares, han empleado como instrumento á las turbas de proletarios” (Linage, 1999, pág. 76).

¹⁸⁹ Un estudio que expone la problemática existente en el ejercicio de la soberanía en torno al uso del bien común se encuentra en Jouvenel (1957). * Especialmente el Capítulo 7 “*The problem of Common Good*” (pág. 105-122).

eliminaba la figura del monarca se establecía la supremacía de la nación por encima del individuo como agente de soberanía y se institucionalizaba una práctica en la que eran electos los diputados, en donde la soberanía acorde a la voluntad general estaba bajo un paraguas de una clase social apoderada y no del hecho de ser ciudadano de la nación.

En cuanto al artículo II, éste estableció dos derechos a todo ciudadano: la propiedad y la resistencia a la opresión como fin de la asociación política. Artículos que interpretando su impacto en la relación gobernante-gobernado, aseguraban un derecho que ha presentado debate en torno a los límites que podría tener la propiedad privada, si ésta constituyese un mal público. Y con mayor relevancia si el hecho de la defensa de la propiedad privada significase en algún instante un elemento de opresión, que habilitaba, según este mismo artículo, a un individuo presionado a resistir y en cierto modo a vulnerar el primero¹⁹⁰.

Apunte sobre el Impacto Internacional del Estado-Nación

Es debido señalar que en el contexto internacional el Estado-Nación tuvo un impacto doble. Por una parte, los límites territoriales establecieron unas fronteras en las que se determinaron espacios y competencias de autoridad; y por otra, la identidad nacional promovió un sentimiento de pertenencia, con gran auge y uso en las guerras futuras. Los dos aspectos han sido y son esenciales en la constitución del Estado soberano, en el que los preceptos monárquicos establecidos anteriormente por la supremacía y la independencia absoluta, veían como la doctrina de la soberanía jugaba un papel confuso que condujo a un choque entre el concepto de soberanía y las RRII.

Más allá del impacto del cambio en el interior de los Estados, la doctrina se adentró en un debate interno sobre la pertinencia de hacer uso del atributo de poder ilimitado. Ya que éste había sido atributo del sujeto soberano en la figura del monarca con anterioridad, pero que con el cambio doctrinal y la instauración de fronteras determinadas, quedaba en un espacio conceptual inconcreto.

3. La construcción de un agente supraestatal: el caso de los Estados Unidos y la soberanía compartida.

“Los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos por esta a los Estados, están reservados a los Estados respectivamente, o al pueblo”.

¹⁹⁰ Para profundizar en el impacto de la propiedad privada en nuestro tiempo véase Bravo (1990).

Enmienda X de la Constitución de los EEUU.

Antes de continuar abordando los sucesos que condujeron a la doctrina de la soberanía a un amplio debate, debido a la fricción del concepto con el aumento constante de las RRII y por ende del discurso acerca de la SI, se cree apropiado prestar atención a la aparición en escena de un modelo de Estado en el que la soberanía no situaba su peso sobre una sola unidad, sino que ésta sufría una división en dos espacios internos y uno externo.

Esta construcción de nueva realidad soberana se dio con la constitución en “Estado” de los Estado Unidos de América (EEUU). Siendo relevante este hecho por otorgar una nueva dimensión al concepto de soberanía, ya que se incluían nuevos espacios que, anteriormente, no habían sido reflejados en otro territorio. Tres espacios se presentaban en la soberanía de los EEUU que articulaban una nueva dimensión conceptual:

- a) Un espacio soberano de cada Estado particular;
- b) El espacio soberano que poseía la unión(a partir del acuerdo entre las partes hacía con los Estados);
- c) y un espacio de soberanía única hacía el exterior del conjunto.

El proceso de independencia de los EEUU fue lo que articuló las condiciones para que se diese este fenómeno. El ejercicio asociativo que significó una unión de colonias inglesas, consideradas Estados en la Constitución de EEUU (1787), desembocó en el nacimiento de un nuevo Estado: los EEUU.

Se constituyó un espacio caracterizado por la distribución de competencias en niveles diferenciados, ya que el proceso de independencia que se dio lugar en América del Norte añadió una nueva dimensión al concepto de soberanía, al establecer la división de la misma dentro de un territorio, cuestionando de ese modo la propia teoría que había basado su argumentación en la indivisibilidad.

Este proceso se dio cita a partir de que las colonias británicas, basándose en las teorías políticas de Jhon Locke y habiéndose apoyado para su insurgencia en las bases de la revolución inglesa de 1668, promulgasen el que se añadiesen nuevos parámetros al concepto. Puesto que ya en los comienzos de su movimiento liberalizador- concretamente en el Segundo Congreso Continental que dio origen de la Declaración de Independencia-, se reflejó este hecho cuando el 2 de julio de 1776 se elaboraron los Principios de los Artículos de la Confederación y la Unión perpetua (15-nov-1777), documento previo a la

Constitución Estadounidense. Los cuales agregaban una nueva dimensión a la soberanía hasta la fecha conocida: se compartían poderes internamente y se aunaban externamente.¹⁹¹

Los primeros cuatro artículos de la Declaración que quedaron incluidos en los Artículos de la Confederación y la Unión perpetua, establecieron las bases de un modelo de Estado supra-estatal y de unión novedoso, al poseer éste dos aspectos relevantes de la función soberana que alteraba la conceptualización de la soberanía: 1º) la retención de cierta capacidad soberana por parte de las partes de la nueva unión; y 2º) la cesión de la soberanía en otros asuntos que promoviesen la cohesión, estabilidad comunal y seguridad al ente central:

- **Artículo I.** El nombre de esta Confederación será “Los Estados Unidos de América”.
- **Artículo II.** Cada Estado retiene su soberanía, libertad e independencia, así como toda potestad, jurisdicción y derecho **que esta Confederación no delegue expresamente en los Estados Unidos** reunidos en Congreso.
- **Artículo III.** Por la presente dichos Estados constituyen entre sí una estable liga de **amistad para su defensa común, garantía de sus libertades y para su bienestar mutuo y general**, obligándose a **ayudarse unos a otros contra** toda violencia que se intente o **ataques** que se hagan contra todos ellos o contra cualquiera de ellos por motivos religiosos, **de soberanía, comerciales** o por cualquier otro pretexto que fuere.
- **Artículo IV.** Para mejor asegurar y perpetuar la amistad mutua y las relaciones entre los pueblos de los diversos Estados de esta Unión, **los habitantes libres de cada uno de estos Estados, a excepción de los pobres, vagabundos y fugitivos de la justicia, tendrán derecho a todos los privilegios e inmunidades de los ciudadanos libres de todos los Estados; y las gentes de cada Estado podrán entrar y salir libremente de cualquier otro Estado y disfrutarán en ellos de todos los privilegios industriales y comerciales**, [y estarán] sometidos a las mismas obligaciones, impuestos y limitaciones que los habitantes del Estado respectivo, con tal que tales limitaciones no lleguen a impedir el envío de la propiedad importada de algún Estado a cualquier otro Estado

¹⁹¹ Aunque estos artículos fueron ratificados 4 años más tarde en 1981, las bases de la soberanía compartida ya fueron formuladas durante el Congreso aquí mencionado. Véase Grau (2011).

del que su propietario sea habitante; [y] con tal que ningún Estado fijen ninguna imposición, impuestos o limitación sobre la propiedad de los Estados Unidos o sobre la de cualquiera de los Estados” (Citado en Grau (2011, pág. 102))[Negrita propia].

La ruptura con la corona británica no sólo estuvo caracterizada por ser un proceso que eliminaba la institución monárquica de la administración de lo público y establecía un principio de igualdad entre los ciudadanos “no pobres”, sino que vino acompañada de una nueva dimensión en el concepto de soberanía. Se asentaban ciertos elementos que presentaban aspectos novedosos:

1) La soberanía residía y emanaba del pueblo. Como indicó Alexis de Tocqueville:

“Si hay algún país en el mundo en el que se pueda apreciar en su justo valor el dogma de la soberanía del pueblo, estudiarlo en su aplicación a los negocios públicos y juzgar sus ventajas y sus peligros, ese país es, indudablemente, [Norte] América” (Tocqueville, 2007, pág. 90).

Con una solidez inusual para la época, la construcción del supra-Estado americano no basaba la justificación de su existencia y operatividad en un poder Monárquico, sino que se apoyaba en los principios de igualdad y libertad, y se configuró como una unión de Estados Republicanos¹⁹²;

2) se produjo un proceso unificador de colonias adoptando un modelo de supra-Estado para asegurar la paz y el bienestar. La soberanía que se atribuyó al órgano en el que se reflejaba la unión: la Confederación de los Estados¹⁹³, se presentó como un agente regulador externo a las partes, con capacidad para regular internamente temas concretos. Sin embargo, parece que de acuerdo con lo observado por Tocqueville, se trató de un proceso que alteraba la concepción de soberanía al conjugar los poderes soberanos internos con una unión de acción externa:

“La soberanía de la unión es un ente abstracto que únicamente se relaciona con un pequeño número de objetivos exteriores. La soberanía de los estados se siente en todo, se la comprende fácilmente, se la ve actuar a cada instante. **La una es nueva, la otra nació con el pueblo mismo”** (Tocqueville, 2007, pág. 211) [Negrita propia].

¹⁹² Este hecho se observa claramente en la Constitución de EEUU, Artículo III. “Sección 4. Los Estados Unidos garantizarán a todo Estado de esta Unión una forma republicana de gobierno...” (Grau, 2011).

¹⁹³ En un inicio fue la Confederación el órgano representativo de las colonias-Estado; en la Constitución de los EEUU de América el órgano representativo fue el Congreso de los Estados Unidos, compuesto por un senado y una cámara de representantes. (Grau, 2011, pág. 103).

- 3) **quedó sellado un pacto de libertad de circulación ciudadana entre los Estados miembros:** igualmente ésta fue una cláusula novedosa en la época, ya que aportó una nueva dimensión al proceso de unión, al impulsar una identidad común y caracterizarse como pacto. Ello debido a actuar como mecanismo que despertaría un sentimiento de pertenencia a una comunidad más grande que el propio Estado, a la unión de Estados: los EEUU;
- 4) **se incluyó la imposibilidad de ejecutar la secesión:** los artículos presentes también contemplaron la no posibilidad de salir de la Confederación Estatal y por ello, el “perpetua” presente en el título de la declaración. Lo que la dotaba de una intencionalidad clara de perdurabilidad al pacto.

La constitución del primer Estado federal moderno era observada con preocupaciones prácticas y teóricas por la novedad del sistema. El temor se encontraba en el que se produjese una colisión entre los Estados parte, al no haberse establecido una unidad de poder absoluto en el aspecto interno del territorio, como era lo habitual en la época. Pero en cierto modo, el sistema federal se mostraba como el un mecanismo capaz de conjugar tres aspectos elementales para asegurar su estabilidad: 1) la independencia soberana de aquellas colonias que habían adquirido particularidades específicas; 2) el conjugar ese aspecto con un poder superior capaz de establecer medidas reguladoras en nombre de la unión a nivel federal interno; y 3) el establecer una única voz y capacidad de acción en asuntos externos.

Bien es verdad que no siempre se pudo asegurar la convivencia pacífica entre los Estados que constituían en sí diferentes “Estados”. Sin embargo, se dieron cita particularidades que facilitaron la relación entre ellos, pues como bien expresó Tocqueville “...los diferentes estados tienen no solamente poco más o menos los **mismos intereses, el mismo origen y la misma lengua, sino también el mismo grado de civilización entre ellos...**” (Tocqueville, 2007, pág. 212)[**Negrita propia**]. Factores que proporcionaron una cierta base para que el proceso identitario contase con cierta ventaja respecto a otros Estados; así como que los mecanismos presentes, la regulación comercial, la libre circulación ciudadana y como hecho de mayor relevancia, la seguridad conjunta hacia el exterior, forjasen las bases para que la Unión de los EEUU permaneciese conviviendo armoniosamente con dos espacios soberanos internos y uno externo. La soberanía denominada soberanía compartida dio su fruto.

El surgimiento de los EEUU en el aspecto teórico aportó una nueva dimensión a la doctrina de la soberanía. El que se diese un proceso en el que una conjunción de Estados “soberanos”, a partir de un interés de defensa común, primeramente, y comercial más tarde, pusiese de manifiesto que los Estados o comunidades estaban dispuestos a ceder competencias soberanas si se sentían identificados con él proceso, alteraba ciertas características atribuidas a la soberanía.

La relevancia de este proceso se observa en que marcó un antes y un después en la configuración de los poderes soberanos, ya que la unificación vivida en los EEUU ha sido base de la mayoría de los acuerdos integradores creados a partir de ese momento¹⁹⁴. Asimismo, la constitución de EEUU reafirmaba la filosofía de pueblo presente en los postulados debatidos en la Europa ilustrada en relación a la soberanía popular y a las libertades ciudadanas, y también reflejaba en su Declaración de Independencia la proclamación de que todos los hombres nacían iguales y poseían ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; así como aludía a que los gobiernos pueden gobernar “sólo” con el consentimiento de los gobernados y que cualquier gobierno puede ser disuelto cuando deja de proteger los derechos del pueblo.¹⁹⁵

De repente, la doctrina de la soberanía se encontró ante el desafío de armonizar sus bases conceptuales. Éstas se habían basado en una articulación del concepto de soberanía caracterizado por poseer los atributos de unidad e indivisión y ante la nueva condición surgida a partir de la aparición de un Estado Federal, en donde se había dividido su indivisibilidad en el carácter interno del poder manteniendo su unidad en la práctica externa, evidenciaba un proceso que tensionaba los postulados clásicos. Por ello, se abogó por abordar una leve transformación y se establecieron las bases teóricas que serían el recurso para la realización de grandes uniones de Estados.

El hecho de que se pudiese dividir la soberanía en cierto grado, plantó una semilla y abrió un espacio a la posibilidad de establecer grandes organizaciones supranacionales en un futuro. Esto siempre que se produjese una reformulación de los conceptos clásicos respecto a la división del poder en los espacios: interno-externo.

¹⁹⁴ El proceso de creación de los EEUU ha sido fundamental en la creación de otras organizaciones supranacionales como la UE o la UA. En ALC tuvo gran influencia en los ideólogos que apostaban por la unión latinoamericana desde sus procesos de independencia. Véase Capítulo IV.

¹⁹⁵ Argumentos aplicados a partir de la teoría política presente en el filósofo inglés John Locke (1821).

4. Una fricción operativa: armonización entre la Soberanía y el Derecho Internacional.

Un concepto nacido con la finalidad última de definir la proveniencia y el detentador del poder absoluto como agente de supremacía, liga difícilmente con la existencia de otro poder absoluto, ya que se anularían mutuamente el calificativo de “absoluto”. Es por ello relevante señalar que, el cómo se articula el ejercicio de establecer los límites de acción ante las fricciones que pudiesen originar el conceder a otro agente, no una superioridad en sí, sino una condición de “igualdad”, en la que los dos sujetos soberanos fuesen poseedores de un status de soberanía similar, fue, y sigue siendo, una de las cuestiones que trata de resolver el DI.

Por lo indicado, es necesario realizar un acercamiento a las transformaciones sufridas por las relaciones entre los Estados e indagar mediante un repaso comprehensivo, acerca de los orígenes y las bases del derecho que regulan esta cuestión, para comprender el impacto en la transformación conceptual en la doctrina de la soberanía.

Los orígenes de las relaciones que se establecen entre los pueblos, en los que el concepto de soberanía ha sido puesto en tensión, ya aparecían en los escritos que formularon los autores clásicos cuando se referían a situaciones de conflicto recogidos en los llamados “Derechos de Guerra”. Desde Cicerón, pasando por San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Francisco de Vitoria o Francisco Suárez¹⁹⁶- como algunos de los ejemplos más notables- hasta nuestros días, se han argumentado los posibles conflictos de intereses a los que se enfrentan las comunidades, cuales quiera que fuese su configuración: Imperio, Estado, pueblo o tribu, en el momento que se produce una disputa o conflicto. En todos ellos se aprecia una postura común. Y es que a la hora de aplicar cualquier medida o resolución de conflictos, los Estados debían lidiar con una situación “hipotética” de igualdad. Esto era debido a que se reconocía a los otros agentes por parte del resto y se presentaba este hecho como un factor necesario para la relación, pues concedía status y ello determinaba la existencia de interés individual de las comunidades para conservar éste; así como significaba la condición de agente independiente. Se establecía de este modo un trato de “igual a igual” entre los contendientes, hecho que se ha categorizado como un principio de soberanía. El reconocimiento de agentes soberanos.

¹⁹⁶ Para adentrarse en la historia y evolución de los Derechos de Guerra véase M.Reichberg, Syse, & Bedgy (2006).

Ya en Francisco Suárez (1965[1613]) - perteneciente a la escuela iusnaturalista racionalista- se encuentran referencias acerca del concepto en un contexto internacional, en donde alude a la igualdad:

“...una potestad se llama **soberana cuando no reconoce otra superior a ella**, porque la expresión suprema significa precisamente la negación de otra más alta, a la cual está obligado a obedecer aquél de quién se dice que tiene la potestad suprema” (Suárez, 1965[1613], pág. 65) [**Negrita propia**].

Indicando Suárez que el ser soberano significa poseer una potestad que se considera suprema. Es decir, con plena competencia. Revelando que todo litigio que pudiese ocurrir tendrá fin en él y **no se podrá apelar decisión alguna en un tribunal superior** (Suárez, 1965[1613]). En caso contrario no se es soberano.

Este es un hecho que no sucede en el mundo actual observando la soberanía desde argumentos jurídicos, ya que competencias como el derecho estatal en ocasiones cede competencias a tribunales superiores, a los que se puede recurrir en caso de encontrar la pena injusta como ciudadano siendo irrecurribles sus sentencias- como por ejemplo sucede cuando se ceden competencias al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la UE-. Lo cual refleja que la soberanía jurídica en algunos campos no acaba allí donde acaba el Estado, existiendo la posibilidad de recurrir a otro órgano internacional. Y este fenómeno de acuerdo con Suárez indica que:

“Siempre que sea posible recurrir a otro tribunal tendremos la prueba de que el principado es imperfecto, pues la apelación es un acto que demuestra la superioridad de un hombre sobre otro” (Francisco Suárez citado en Truyol y Serra (1958-1959, pág. 54)).

De hecho, si en el interior de los Estados el debate se había particularizado por tratar la dualidad presente en el origen de la soberanía: divino versus pueblo, resuelto en principio a favor del pueblo tras la Revolución Francesa -aunque se reinstaurasen monarquías tras la derrota napoleónica-, en el campo internacional los Estados se movieron más en un espacio regulado por el interés basado en la razón, es decir, en las ideas, según las interpretaciones de autores de corte realista como Cornelius Van Bynkershoek, que afirmaba que:

“...solamente aquello que conviene a una mayoría de naciones constituye DI, ese derecho resulta de las convenciones tácitas y supuestas introducidas por la razón y el uso...”
(Citado en Rivas (2010, pág. 48)).

Justificación por la cual los Estados convenían acuerdos en busca de proteger su espacio y potestad, que a su vez no representasen peligros para su Estado–Nación.

La doctrina de la soberanía se vio en la encrucijada de reformular sus límites en el aspecto externo, con el objetivo de aunar intereses de los agentes y evitar un estado de conflicto continuado, ya fuesen los límites aceptados a partir del temor en el caso de los Estados débiles o por la ambición de otros Estados en los más poderosos. Es por ello, que los Estados comenzaron a regular la potestad soberana, adoptar y aceptar, en cierto modo, el que la soberanía poseyese una división clara en dos espacios: el interno y el externo. En donde cada espacio poseía su propio debate: a) el interno, regulado por los procesos constituyentes de cada Estado-nación; b) y el externo, ante un dilema esencial en torno a cómo aunar un concepto basado en la supremacía con espacios en los que no se poseía tal capacidad.

La doctrina de la soberanía se fue readaptando en su argumentación y surgieron nuevas posturas al respecto. El desafío era transformar un concepto que, en principio, se basaba en la unidad de poder, a uno que debía contener una dualidad. Dos espacios bien diferenciados:

- a) **uno interno**, en el que la potestad se situaba por encima de todos los cuerpos y órganos del Estado - que a diferencia de la época feudal y tras la Revolución Francesa no basaba su mandato solo en la voluntad individual del soberano, sino que al haberse dado un proceso constituyente las decisiones internas atravesaban un poder decisorio por un cuerpo político (Hegel, 1999, págs. 421-422)-;
- b) **y otro externo**, que poseía el deber de desarrollar la función de respeto y representación del Estado.

De un proceso que aunaba la soberanía interna con la soberanía externa surgieron los tratados y acuerdos que fueron, en principio, las bases del DI.

Visualizando algunos de los sucesos relevantes que se dieron cita como parte del proceso histórico, se evidencia que si la Revolución Francesa había impactado en la conceptualización mediante el ejercicio de situar como agente soberano al pueblo, el ansia

de promocionar y la creencia de haber encontrado el sistema ideal, causó el no respeto a los acuerdos anteriores - como por ejemplo: La Paz de Westfalia-.

La todavía presencia de monarquías y el hecho de que los Estados que habían sufrido la revolución, no les considerasen legítimos, de acuerdo a las teorías que habían impulsado la Revolución Francesa, convirtió a las regiones monárquicas en lugares caracterizados por la “no libertad del pueblo” y, por lo tanto, se trataba de Estados en los que la nueva doctrina de la soberanía no cumplía los requisitos establecidos en la Francia revolucionaria. Esta situación provocó un sinnúmero de batallas a lo largo de unos 20 años y solo tras la caída de Napoleón se volvería a realizar un acuerdo entre los monarcas en otras condiciones.

Se reafirmó tras estas disputas el papel de la soberanía en los nuevos tratados, en los que se confirmó la representación del Estado en el campo internacional. Es decir, se asentó la concepción de soberanía externa.¹⁹⁷

Al final de los 20 años de guerra con la celebración del Congreso de Viena (1819), el concepto de soberanía nacional quedó dañado por el reparto de territorio pactado¹⁹⁸. No se atendió los sentimientos de “nación” que se habían despertado con las revoluciones ideológicas que habían atravesado Europa- muchas de ellas, con base en argumentos entremezclados entre postulaciones de Rousseau y la identidad nacional-, y se llevó a cabo una división en dos, ya que se situó al pueblo por una parte y por la otra se produjo una división territorial con fronteras limítrofes claras. Estos sucesos sembraron un sentimiento de pertenencia que contribuyeron a reforzar un concepto de soberanía más sólido e independiente respecto al anterior en su aspecto externo.

En ese contexto, el debate entre postulaciones de soberanía estatal y soberanía nacional se plasmó en dos corrientes teóricas esenciales en el proceso de adaptación del término a las nuevas realidades de la SI: el Estado-Nación Francés y el Estado Absoluto Alemán.

4.1 La escuela francesa

La doctrina de la soberanía tuvo que reajustarse para abordar el impacto en su definición de las variables y debates aparecidos. Y es que si por una parte el concepto de nacionalismo se

¹⁹⁷ Principalmente esto sucedió con la firma de Los Tratados de París (1814 & 1815); Tratado de Chaumont (1814) y el Congreso de Viena (1819). Siendo aquellos que alcanzaron una relevancia significativa en la época.

¹⁹⁸ Rusia se hizo con el control de gran parte de Polonia y de Finlandia; Austria se apoderó de las italianas Lombardía y el Véneto; Prusia de las tierras de Renania, Sarre y Sajonia; Francia, fue rodeada de *Estados-tapón* con el objeto de evitar el posible renacimiento de su expansionismo: Países Bajos y Bélgica.

ajustaba perfectamente a la definición que incluía en sí las características de supremacía y unidad, el auge de las RRII dibujaba un mundo en el que se evidenciaba la presencia de espacios concretos, en los que era necesario abordar una reformulación del atributo absolutista de la supremacía soberana. Puesto que si bien es verdad que la doctrina de la soberanía siempre había tratado con este dilema¹⁹⁹, el proceso de internacionalización de la práctica política requería establecer criterios aceptados por los diversos agentes, para afianzar el objetivo que había motivado el realizar este ejercicio: evitar guerras. Ya que fue aquello que impulsó el que se redefiniese la doctrina y que en el siglo XIX surgiesen tratadistas que señalasen este conflicto.

En el debate y análisis que se despertó en torno a la problemática de la dualidad soberana en Francia, Adhémar Esmein (1848-1916) afirmó que:

“...la soberanía tiene dos facetas: La soberanía interior o el derecho a mandar a todos los ciudadanos... y la soberanía exterior o el derecho a representar a la nación y de obligarla en sus relaciones con la demás naciones” (Citado en Malberg (1948, pág. 90)).

Bajo esta perspectiva, el concepto de soberanía externa no excluía el concepto de absolutismo, puesto que se trataba de una potestad absoluta en el territorio propio, de la cual el resto de los Estados son conocedores. No existiendo en el exterior sometimiento a la voluntad de representación de ningún otro poder. Por lo que se actuaría con independencia absoluta.

La afirmación de Esmein pone de manifiesto la dificultad de usar el calificativo “soberanía” cuando se tratan las RRII. Podría ser más apropiado el uso del concepto independencia, por interpretarse la soberanía en el absolutismo como un acto de no sometimiento a poder externo. Sin embargo, también evidencia que entiende la soberanía como la potestad interna, por ser la independencia de acción en el exterior la facultad que, una vez ejecutada, es la representación máxima del Estado en las RRII, actuando como agente único de representación en el exterior.

Otro aporte de la escuela francesa relevante en la constitución del DI se encuentra en Felix Moreau (1909). Este autor afirmaba que la soberanía es la afirmación de la existencia del Estado; que se muestra como una expresión de individualidad del mismo, por tratarse de un agente en un colectivo. De ello que Moreau realizase un paralelismo entre el Derecho

¹⁹⁹ A este respecto véase Malberg (1948, págs. 82-100).

del Estado (interno) y el DI (externo), dando por válida la existencia de una CI, en la que se vislumbraba un DI constituido por los pactos presentes en los tratados en la época (Moreau, 1909).

Asimismo, León Duguit (1926) - escuela positivista francesa- señaló que:

“[La] ...soberanía es una voluntad que jamás se determina sino por sí misma, toda vez que ella no puede imponerle a otra voluntad cierta acción, **tiene la soberanía** por esto mismo **poder de determinar por sí misma la extensión y el objeto de su acción**” (Duguit, 1926, pág. 81) **[Negrita propia]**.

Indicando Duguit que la voluntad es la capacidad de determinar en el sujeto propio su acción y, si se procede y se ejecuta ésta de manera voluntaria, será considerada como soberana.

Éstas y otras reflexiones de la escuela francesa, principalmente, legaron e impulsaron una percepción conceptual con gran calado en el DI, ya que fueron base argumental para que se constituyese el Principio de autodeterminación de acción, al indicar que el acto voluntario era un elemento primordial para la soberanía territorial (Guerrero & Blas, 1988, págs. 122-123).²⁰⁰

4.2 Hegel y la concepción del Estado absoluto.

Tanto la doctrina de la soberanía francesa como la alemana se basaron en la aplicación de lógicas racionalistas. Sin embargo, existieron diferencias notables. Mientras la primera basó la construcción de su armazón teórico en la representación de la nación, la segunda realizó un cuestionamiento alterno y construyó su defensa de la soberanía a partir de la revisión de la unificación de poder en el Estado. En donde se encuentra como máximo exponente teórico a la figura del filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Autor que, a través de la aplicación de la lógica dialéctica y su uso del método al analizar la historia, trató de fundamentar el porqué del Estado.

Hegel realizó sus postulaciones a partir de la premisa de que “...la determinación última del Estado político es la unidad sustancial como idealidad...”, ya que consideró al Estado como un órgano en el que todas las partes son fundamentales y necesarias para el

²⁰⁰ Este ejercicio reflexivo que constituía un argumento de legítima potestad sobre el territorio, sirvió durante el siglo XIX a las defensas de los procesos de descolonización, especialmente en ALC.

funcionamiento del todo. Indicando que “...los asuntos y actividades particulares del Estado le pertenecen...a los individuos...por sus cualidades objetivas...” (Hegel, 1999, pág. 418). Por lo que no serán compradas ni heredadas las posiciones relevantes en el Estado (menos la de príncipe monarca), y tampoco serán propiedad privada de un particular²⁰¹. Premisas que dotan de unidad al Estado y forman la identidad simple, en donde el conjunto de éstos es el elemento que constituye la soberanía del Estado.

En su ejercicio de crítica conceptual, Hegel también reflexionó acerca de la diferencia entre la soberanía interna y la externa. En referencia a la primera, realizó un análisis en el que establecía las diferencias entre las estructuras en la época Feudal y el Estado moderno- del cual él era partidario-, señalando dos diferencias fundamentales al indicar que, mientras que en la primera “...los asuntos y poderes particulares del Estado y de la sociedad civil estaban a cargo de corporaciones y comunidades independientes, con lo que el todo era más un agregado que un organismo... [y]eran propiedad privada de individuos, de cuya opinión y capricho dependía entonces lo que se debía hacer respecto al todo...” (Hegel, 1999, pág. 421); en el segundo, por medio de la elaboración de una Constitución se daba la existencia de un cuerpo político, que a través de sus órganos, “... legislativo... poder gubernativo... [y la] subjetividad como voluntad última de la voluntad: el poder del príncipe” (Hegel, 1999, pág. 413), se significaban las decisiones como la representación de la unidad y no a capricho de un individuo particular.

La cuestión conceptual acerca de la unidad que se planteó, en el que el todo se presenta como una idealidad, da origen a la legitimación particular de toda soberanía. Situación en la que Hegel se apoyó para argumentar la existencia de una diferenciación entre el despotismo y la soberanía, al indicar que mientras el primero no está sujeto a ninguna ley o norma, el segundo sí, en este caso a la Constitución.

Asimismo, tratando de evidenciar en qué instantes y cuándo se hacía presente la soberanía, aquello que hacía detectable donde residía la misma, decía Hegel que eran las acciones.

²⁰¹ Sin entrar a valorar en este estudio la justificación monárquica, la aportación de análisis crítica que realiza Hegel hacía el uso del capital con el objetivo de perpetuar en el poder a los dueños del mismo, es fundamental para entender los extremos por los que podía ser cuestionada la soberanía. Asimismo, mediante el concurso de méritos trató de establecer un sistema de igualdad de oportunidades y una administración en la que se vean involucrados los mejores. No aquellos herederos de fortunas sino los más capaces. A Hegel se le acusó de romántico por estas reflexiones. Sin embargo, son postulados fundamentales para entender la construcción de los concursos (por oposiciones u otro método) en los organismos públicos en los futuros sistemas Estatales.

Concretamente siendo evidente y contrastable la presencia de la soberanía al visualizar dos situaciones en las que la acción constata su existencia:

- a) **en situaciones de paz**, a través del poder gubernativo que regula las prestaciones de los fines particulares al servicio de la finalidad del todo;
- b) **en situaciones de emergencia**, - ya sean éstas internas o externas-, es la soberanía la que capacita al organismo conjunto para actuar como unidad, manteniendo el todo a través de sus particularidades y siendo el Estado el órgano al que se le confía la salvación del mismo.

Indicando Hegel que es en la situación b, en donde el Estado alcanza la situación de idealismo. De modo que, tanto en momentos en los que se viva una paz, como en aquellos que sean de caracterizados por la emergencia o el peligro, la soberanía será el garante de unidad e identidad del Estado en su formación ideal.

Por otra parte, el postulado hegeliano defendía la presencia del monarca y atribuía todo el poder último de la soberanía en su figura exponiendo que:

“La soberanía...existe únicamente como la subjetividad que tiene certeza de sí misma, y como la autodeterminación abstracta de la voluntad... en la que reside la voluntad última. Es lo individual del Estado como tal, que sólo entonces es uno. Pero la subjetividad está en su verdad sólo como sujeto, la personalidad como persona, y en la constitución que ha alcanzado la racionalidad real, cada uno de los tres momentos del concepto tiene una configuración separada, efectivamente real por sí. Este momento del todo que tiene la absoluta decisión, no es por lo tanto la individualidad en general, sino un individuo, el monarca” (Hegel, 1999, pág. 423).

Importante rescatar el espacio que abrió Hegel en el debate sobre la soberanía, al situar a la soberanía como concepto de principio y final del todo- como unidad-, entendiendo la soberanía como la representación de la unión interior y exterior. El hecho de que la manifestación de la voluntad última se produzca en la figura del monarca no resta importancia al aporte, puesto que en el caso de operativizar el concepto y proceder a la sustitución de esa figura por otra, el sistema mantendría su andamiaje. Pues él mismo reconocía la dificultad que conllevaba para un proceso de raciocinio la justificación de la existencia del monarca. Y es por ello que basó su posicionamiento en el origen divino, acercando su postura en ciertos momentos a la escolástica.

En Hegel se encuentra un debate esencial que, aunque quizás no fue su intención, presentó posicionamientos útiles para argumentar en defensa, no ya del Estado monárquico - modelo ideal en su pensamiento-, sino de la soberanía como concepto interno. El cual no requería estar unido directamente con la figura del monarca. Esto se aprecia claramente al examinar su trabajo crítico sobre las personas, sociedades o comunidades, que aun atribuyéndoles personalidad en momentos concretos, no consideró a éstos como entes esenciales en la sociedad. Pues en su examen resta la capacidad de sentir una idealidad de unión a las partes, dentro de lo que es representado por el Estado. Al que considera como el organismo vinculante de toda verdad individual. Es por ello, que cuando critica el concepto de soberanía del pueblo enfrentándolo con la soberanía del monarca, lo hace indicando la falta de vinculación de sus partes con la unidad:

“En un pueblo que no se represente como un clan patriarcal, ni se encuentre en la situación no desarrollada en la que son posibles **las formas de la democracia o de la aristocracia**,... ni en ninguna otra situación arbitraria e inorgánica, sino que **se piensa como una verdadera totalidad orgánica**, desarrollada en sí misma, **la soberanía existe como personalidad del todo**, y ésta, en la realidad corresponde a su concepto, como la persona del monarca” (Hegel, 1999, pág. 426) [**Negrita propia**].

Una de las conclusiones que se extrae del repaso a los textos de Hegel, es que en el caso de que una nación sin la figura del monarca construyese un pensamiento de unidad de Estado, en el que todas sus partes estuviesen a favor de una idealidad común, entendiendo por ello aquel instante en el que se realizase una abstracción del concepto de monarca soberano substituyéndolo por un cuerpo político soberano, sería posible la constitución de una voluntad general asociada que ocupase el lugar de la voluntad del monarca. De modo que podría ser considerada la acción del conjunto como un principio de soberanía. Este hecho podría conducir al cuerpo político común a la formulación e institucionalización de cuestiones con carácter absoluto, dando origen a mecanismos funcionales de un Estado, al sentirse representadas las ideas en forma de soberanía popular. Por lo que, aquellos que no estuviesen del lado del cuerpo político representado, quedarían excluidos de la idea de Estado mediante un proceso de abstracción del concepto y podría darse el caso de que este grupo careciese de existencialidad en el Estado.

En cuanto a la relación de Estado con el exterior, para Hegel éste poseía ciertas características a partir de las cuales se podría observar el soberano:

- a) La *individualidad*: en cuanto excluyente *ser-por-sí*, se caracteriza por definir la relación con otros Estados. Cada uno de los cuales es autónomo frente a los demás. En donde las partes del Estado que expresan el deseo de que una colectividad, si decide abandonar este núcleo y su autonomía para formar una nueva totalidad un nuevo Estado, saben poco de la naturaleza de una colectividad y del orgullo que tiene un pueblo por su independencia;
- b) la *existencia*: aparece de este modo como una relación negativa, en la que el Estado aparece como una relación de otro con otro, siendo lo negativo lo exterior. Por ello, se debe considerar el Estado propio como el más elevado momento, su infinitud real y ser entendido como idealidad de todo lo finito contenido en él;
- c) la *determinación*: es allí donde el interés y el derecho del individuo desaparecen. Lo que es al mismo tiempo lo positivo, y en donde aparece el deber sustancial del individuo por mantener, a pesar del peligro y el sacrificio que requiera, su propiedad, su vida, su opinión y todo aquello que esté comprendido en el ámbito de la vida: la individualidad sustancial, la independencia y soberanía del Estado, ante cualquier hecho perturbador externo o interno.

*A partir de (Hegel, 1999, págs. 475-476)

En este postulado se señala que la posición estructural en la que se posiciona el Estado frente a otros actores toma cuerpo de individuo, debido a su situación de aislamiento y reclamo para sí de *autonomía en su decisión*, a partir de una construcción con base en el derecho negativo. En donde, el establecimiento de una relación negativa con los otros agentes de la SI no es verdadera, sino más bien con el Estado propio, al existir la posibilidad de ser desposeído de su estado ideal y abogar por la unidad ante el otro. Indicación ésta que revela la importancia de la pertenencia al todo; así como la participación de todos los átomos particulares en defensa del todo, como en un caso de hipotética guerra.

Y es que Hegel señaló, mediante un discurso enfático, la contingencia que se desarrolla en la guerra. En donde establecía como premisa de su postulado, el que la guerra es el acto en el que la unidad -en lo ideal- es una acción en defensa del todo. Hecho determinante en él, para que los diversos poderes internos se agrupen en uno, y se asegure que este fenómeno, en caso de que las guerras sean favorables, impida disturbios internos en el futuro y consolida la construcción del Estado.

A este respecto indicaba que:

- a) El sacrificio por la individualidad del Estado es la condición sustancial de todos y por lo tanto un *deber general*;
- b) las desavenencias entre los Estados pueden tener como objeto algún aspecto particular, si en cambio está en peligro el Estado en cuanto tal, su independencia, el deber convoca a su defensa a todos los ciudadanos;
- c) el valor es por sí una virtud formal porque consiste en la suprema abstracción que hace la libertad de la vida y de todo fin, posesión y gozo particular;
- d) el contenido del valor reside en el verdadero y absoluto fin último, en la *soberanía* del Estado;
- e) el Estado tiene una dirección hacia el exterior por el hecho de que es un sujeto individual. Su relación con los otros Estados recae, por lo tanto, en el *poder del príncipe*. (Hegel, 1999, págs. 481-482).

Compromiso, unidad, deber, en la defensa o en la afirmación de la soberanía es lo que se rescata en Hegel en este último punto. Apuntes que parecen aunar aquellas consignas que tras el periodo de guerras, se aplicarían en la mayoría de las naciones-Estado que sintieran que se debe luchar por obtener la soberanía.

4.2.1 El derecho político externo (o Derecho Internacional) según Hegel.

Si la unidad interna era fuente de soberanía, Hegel indicó, al referirse al campo de RRII, el papel externo que debe ejercer el Estado y los otros Estados hacia él. En donde parte del reconocimiento mutuo como un hecho característico de la soberanía.

- a) “**El derecho político externo** surge a partir de las relaciones entre Estados autónomos. Por consiguiente, lo que es *en y por sí* recibe en él la forma del *deber ser*, porque **depende de diferentes voluntades soberanas** que sea efectivamente real.
- b) El pueblo es, en cuanto al Estado, el espíritu en su racionalidad sustancial y en su realidad inmediata, y por lo tanto el poder absoluto sobre la tierra... **Ser en cuanto tal para los otros, es decir, ser reconocido...**
- c) La realidad inmediata en que se encuentran entre sí los Estados, se particulariza en una multiplicidad de relaciones cuya determinación emana del arbitrio independiente de ambas partes y tiene por lo tanto la naturaleza formal de los *contratos*;

- d) El principio de Derecho Internacional...consiste en que estos [los] *tratados* deben ser respetados, pues en ellos se basan las obligaciones reciprocas de los Estados... No hay ningún pretor entre los Estados, a lo sumo mediadores o árbitros...La representación *kantiana* de paz perpetua por medio de una federación de Estados que arbitraria en toda disputa y arreglaría toda desavenencia como un poder reconocido por todos los Estados individuales...supone el acuerdo entre los Estados...siempre en definitiva en la voluntad soberana...
- e) ... en la medida en que las voluntades particulares no llegan a un acuerdo, las disputas entre Estados sólo pueden decidirse por la *guerra*.
- f) ...el Estado...no puede contentarse con considerar meramente la *realidad* de la lesión, sino que como causa de desavenencias se agrega la *representación* de un *peligro* que amenaza desde otro Estado...las suposiciones acerca de los fines que persiguen...
- g) ...**la voluntad particular del todo es por su contenido el bienestar del todo**, éste constituye la ley más elevada en la relación con otros;
- h) ... el fin en la relación con otros Estados... [es] el bienestar efectivamente afectado o amenazado en su *particularidad determinada*.
- i) El reciproco **reconocimiento como tales Estados...constituye un vínculo** por el que cada uno de ellos vale para el otro como existente en por sí...”.

* (Hegel, 1999, págs. 483-489) [**Negrita propia**].

Hegel presentó una postura próxima al positivismo en su concepto de política internacional, debido, principalmente, a que otorgó todo cumplimiento de los compromisos internacionales, ya sea en forma de tratado o acuerdo, a la voluntad individual particular de cada Estado. En donde la culminación de un grupo organizado por un interés común es la forma de Estado. Por ello, cualquier CI carece de fundamento *ideal* por carecer de unidad en la base.

De modo que en términos de RRII, Hegel se muestra dudoso ante la aceptación de cualquier Estado de un mandato superior. Indicando que en el instante que el Estado sienta o prevea un posible perjuicio por la aplicación de una medida que dañe al Estado o a sus particulares, éste se verá en la obligación de defenderlo, llegando a un acto bélico si fuese necesario. Por ello, una autoridad que obligue al Estado siempre estará sometida a la voluntad e interés particular para ser aprobada. Por lo que, de acuerdo con éste autor, allí donde reside la soberanía es el lugar donde se ejerce la voluntad última.

4.3 La Paz perpetua de Kant y otros autores idealistas en pos de la constitución de un poder supraestatal.

En un contexto en donde los Estados-Nación y los Estados absolutistas se daban cita, principalmente representados por las escuelas de Alemania y Francia, pasaron a ser protagonistas teóricos políticos y filosóficos, que fundamentaban la implantación de mecanismos que condujesen a la eliminación de los enfrentamientos entre los diferentes Estados, los considerados idealistas. En la que el autor que destacó por encima del resto fue Immanuel Kant, el cual abordó la cuestión en su obra *La Paz perpetua* (1795).

Kant abogaba por promover en la SI la instauración de una serie de reglas que constituyesen unos límites a las capacidades de los Estados. Indicando que, si los Estados optaban por su aplicación y seguimiento, el mundo conocería un estado de Paz permanente. Conclusión por la cual Kant se mostraba optimista, pues veía que el mundo estaba necesitado de un cambio de aptitudes por parte de los Estados si pretendían asegurar la eliminación de las confrontaciones bélicas.

Entre sus principales aportes a la instauración de una normativa, se encuentra la de proponer que se negase la posibilidad de recurrir a la guerra en caso de existir divergencias, al afirmar que la acción beligerante no resolvía el asunto concreto en la mayoría de los casos y, por el contrario, los Estados sufrían un gran castigo al combatir:

- 1.º No debe considerarse como válido un tratado de paz que se haya ajustado con la reserva mental de ciertos motivos capaces de provocar en el porvenir otra guerra.
- 2.º Ningún Estado independiente -pequeño o grande, lo mismo da- podrá ser adquirido por otro Estado mediante herencia, cambio, compra o donación...;
- 3.º Los ejércitos permanentes -miles perpetuus- deben desaparecer por completo con el tiempo.
- 4.º **“No debe el Estado contraer deudas que tengan por objeto sostener su política exterior.** La emisión de deuda, como ayuda que el Estado busca, dentro o fuera de sus límites, para fomentar la economía del país -reparación de carreteras, colonización, creación de depósitos para los años malos, etc...- no tiene nada de sospechoso. Pero **si se considera como instrumento de acción y reacción entre las potencias, entonces se convierte en un sistema de crédito compuesto de deudas que van aumentando sin cesar**, aunque siempre garantizadas de momento -puesto que no todos los acreedores van a reclamar a la vez el pago de sus créditos-, **ingeniosa invención de un pueblo comerciante en nuestro siglo; fúndase de esta suerte una potencia financiera muy peligrosa, un**

tesoro de guerra que supera al de todos los demás Estados juntos y que no puede agotarse nunca, como no sea por una baja rápida de los valores”(Kant, La paz perpetua, 1946[1795])
[Negrita propia].

El quinto y el sexto punto señalan fundamentos en clara alusión al concepto de soberanía, en términos de igualdad soberana, de lo que se rescata la importancia que le otorgó Kant al acto de injerencia en la política interna de otro Estado:

- 5.º “Ningún Estado debe inmiscuirse por la fuerza en la constitución y el gobierno de otro Estado”.
- 6.º Ningún Estado que esté en guerra con otro debe permitirse el uso de hostilidades que imposibiliten la recíproca confianza en la paz futura; tales son, por ejemplo, el empleo en el Estado enemigo de asesinos (percusores), envenenadores (venefici), el quebrantamiento de capitulaciones, la excitación a la traición, etc...” (Kant, La paz perpetua, 1946[1795]).

El postulado kantiano era acorde a la corriente que se inclinaba en favor de señalar que, aquellos agentes que viesan a los Estados como entes de representación, abogarían por el establecimiento de mecanismos que asegurasen el no conflicto, con el objetivo final de establecer el bienestar propio. Partiendo el acuerdo de una voluntad favorable a otorgar un carácter primordial a los acuerdos que persiguiesen el fin primero: la no guerra.

Otro de los aportes relevantes dentro de la teoría utilitarista lo representó Jeremy Bentham en su *A plan for a Universal and Perpetual Peace* (1789). Que al igual modo que el proyecto de Kant, Bentham indicó una serie de acciones que los Estados debían seguir para que los conflictos se redujesen hasta su exterminación²⁰² (Truyol y Serra, 1998).

La estrategia indicada por Bentham consistía en que los Estados fuesen paulatinamente adoptando mecanismos de unión, a través de la construcción de un DI mediante un proceso de codificación consistente en: a) un paulatino desarme; b) una prohibición expresa de que se estableciesen alianzas con fines ofensivos; c) la creación de un tribunal de arbitraje; d) el abandono colonial; e) y libertad de comercio. A lo que se sumaría un aumento intensivo de las RRII por medio de una eliminación estricta de la diplomacia secreta – práctica muy usada en la época anterior y posterior-, así como la libertad total de los medios de comunicación y prensa (Truyol y Serra, 1998).

²⁰² La recomendación no tuvo gran transcendencia a pesar de tener cierta difusión en EEUU, Europa y América latina (Truyol y Serra, 1998).

En principio, tanto el proyecto de Kant como el de Bentham fueron de gran calado social. Sin embargo, a la hora de ejecutar las prácticas necesarias para obtener la ansiada estabilidad, los Estados actuaban de manera independiente persiguiendo objetivos particulares. De modo que la falta de compromiso se vio acontecida por el no seguimiento de las recomendaciones.

Mención especial merece en este epígrafe la obra *La sociedad universal* (1867) del iusnaturalista Luigi Taparelli d'Azeglio. Este autor expuso un proyecto de gran calado internacional, por contener un ejercicio reflexivo y brillante acerca del cómo una sociedad, partiendo de postulaciones naturales de sociabilidad, tendería a establecer una especie de sociedad universal o Comunidad de Estados en el futuro de forma natural.

Taparelli entendía que la justificación para constituir un ente con capacidad superior, que regulase la acción de todos los Estados, se encontraba en las acciones llevadas a cabo por el hombre, a partir de su comprensión y premisa ideológica que le indicaba que la “sociedad es unidad de muchos hombres; la unidad es tanto más perfecta cuanto más une la multitud, cuanto más multiplica” (Taparelli, 1867, pág. 344).

En cierto modo Taparelli afirmó que la obligación de las naciones es amarse mutuamente, puesto que al querer el beneficio de otra, es debido a que otra nación, bajo el derecho divino, es semejante en su fundamento a la propia. De ahí que considerase apropiado la adopción de una especie de comunidad de comunidades, en la que se adoptasen unas mínimas pautas para la vivencia en armonía (Taparelli, 1867, pág. 396); por medio de lo que Taparelli denominó “cooperación real...”, en la cual refiriéndose a los monarcas -debido a que eran la representación de la nación o Estado- dijo: “...la amistad personal no debe superar ni violar jamás la internacional” (Taparelli, 1867, pág. 397). De tal modo que, cualquier tipo de relación que pueda ser perjudicial para con una autoridad internacional será devenida en favor de la segunda, puesto que según Taparelli “...todas las naciones son iguales en derecho” (Taparelli, 1867, pág. 397).

La escuela alemana también se postuló acerca de la idea de apoyar la creación de una CI a través de la figura de Hermann Heller (1995[1927]). En otro contexto histórico, este autor estableció una categorización de la soberanía estatal respecto al DI, a partir de la formulación de una idea de CI, revisando concretamente el papel que realizaría el Estado dentro esa comunidad. Heller partía de la premisa de que los Estados son los agentes poseedores de una voluntad común para alcanzar acuerdos y establecer un derecho común

que posea el nombre de DI, en donde los Estados positivarían sus principios en preceptos jurídicos, los cuales formarían preceptos jurídicos de DI. De este modo, se integrarían dentro del DI todos los tratados y acuerdos que se habían formulado con anterioridad. (Heller, 1995).

Nota: La voluntad como elemento fundamental

Desde Hegel, pasando por Kant, Bentham, Taparelli, Duguit, hasta Heller, la acción voluntaria de los Estados aparece como condición indispensable para el alcance de un DI que, ya fuese este regulado por medio de un OI u otro cuerpo jurídico, regulase con “cierta potestad” los posibles conflictos en las RRII.

En principio los Estados y algunos teóricos se mostraron a favor, teóricamente, de encontrar un mecanismo que regulase los diversos intereses en la SI. Cuestión que requería el ceder competencias atribuidas al término soberanía, en este caso, a un OI que actuase como regulador de forma activa en la regularización de las RRII, mediante un DI que impusiera límites de acción a los Estados.

Sin embargo, a pesar de que se mostrase una actitud positiva ante la pertinencia de las ideas presentadas, los acontecimientos demostraron que en el momento que los conflictos se hacían presentes los Estados se mostraban reticentes y parecía imponerse, por encima de todas las teorías y pensamientos de paz, los postulados más reacios a la cooperación armoniosa.

Los Estados adoptaron una postura inamovible, fijando sus objetivos y buscando maximizar sus intereses dentro de las prácticas de las RRII. Los conflictos no se apaciguaron, lo que provocó una época cargada de luchas (Truyol y Serra, 1998).

5. La soberanía, Organizaciones Internacionales, transformaciones y límites en la doctrina.

Desde el proyecto que realizó el abate Saint Pierre en 1713, llamado *Project pour rendre la paix perpetuelle en Europe* (1713), la idea de establecer organizaciones supranacionales encargadas de regular las relaciones con el objetivo de asegurar la paz en el mundo, ha estado presente de una u otra forma, como se ha visto en el punto anterior. En este sentido, es relevante indicar que la idea principal y meta que propuso en su proyecto el abate Saint Pierre fue:

considerar el hecho de que diversos núcleos de territorios- representados en los monarcas en la época-, limitasen su poder; se asociasen por medio de acuerdos de renuncia a la guerra; y aceptasen someterse a una institución de arbitraje que gozara de una fuerza internacional. Como medidas para asegurar un estado de paz (Saint-Pierre, 1713).

Es a partir de una construcción imaginaria, como la presente en Saint Pierre, cuando se evidencia la pertinencia, en términos interestatales, de, en nombre del bien común, instaurar un órgano con capacidad reguladora supraestatal.

Ya en la época de la Europa post-Westfalia se aconteció una primera muestra de aplicación posible de mecanismos de regulación supraestatal, a través la unificación de las colonias norte-americanas – que formaron EEUU-, en donde se logró instaurar una comunidad de Estados, mediante la adopción de un pacto en su novedosa formación: un Estado de Estados. En este proceso de unificación de Estados se establecieron requisitos que se entendieron necesarios para que fuese operativo. Destacando en términos de soberanía, la renuncia a la guerra interna y la no posibilidad de secesión. Acciones que significaban una cesión clara de competencias soberanas.

En cierto modo, se podría indicar que las instituciones surgidas con ambiciones de regulación supraestatal tienen base en los postulados señalados.

5.1 El impacto de la Revolución Industrial y la aparición de nuevos actores en las Relaciones Internacionales en la doctrina de la soberanía en el siglo XIX.

Si ya existía un gran debate acerca del cómo regular las relaciones entre los Estados, el hecho de que se sumasen más agentes al contexto de las RRII incrementó su dificultad. Fue tras la Revolución Industrial cuando, debido al aumento en el proceso de producción de forma abrupta, se aumentaron las relaciones comerciales entre los Estados y, paralelamente, se incrementaron las luchas por los espacios que poseían RRNN. Particular fenómeno que impulsó el hecho de que nuevos actores pasasen a tener relevancia en el contexto internacional: las empresas multinacionales, que sin ser elementos novedosos en la

interrelación interestatal, si veían incrementada la relevancia de sus acciones en este periodo de la historia.²⁰³

Las acciones de las multinacionales contribuyeron de manera decisiva a que las cuestiones de poder internacional se transformasen, por el cómo impactaban éstas en una doctrina que no atendía a poderes externos en el interior de su territorio como la soberanía. El aumento descomunal de las relaciones comerciales- se multiplicaron exponencialmente las actividades económicas internacionales- causó que se viese incrementada la interdependencia entre las naciones y las RRII se situasen en un estado en el que los Estados ya no dependían exclusivamente de relaciones puntuales, sino que las interacciones eran continuas. Por lo que era obligado transformar el modo de abordar las prácticas interrelacionales (Diez de Velasco, 1994).

El contexto señalado incitó a que se llevasen a cabo pactos, tratados y/o acuerdos, que dieron origen a las primeras organizaciones reguladoras de relaciones entre Estados. Aparecieron las primeras OOII (Diez de Velasco, 1994).

El impulso a éste nuevo modo de organización internacional se produjo en dos fases:

- **Primera fase:** Las primeras organizaciones que aparecieron en la SI tuvieron la finalidad de regular los ríos que conectaban Estados, debido a la importancia de éstos para el transporte en la época. Las llamadas Comisiones Fluviales surgieron a primeros de siglo XIX: las Comisiones: del Rhin (1815); del Elba (1821); del Escalda (1839); del Po (1849) del Danubio (1856), fueron las que tuvieron mayor relevancia. Éstas poseían funciones aduaneras, de control general y policial.
- **Segunda Fase** (segunda mitad de siglo XIX): En éste periodo se crearon OOII administrativas con el fin de agilizar las relaciones en el contexto de creciente interdependencia: la Unión telegráfica Internacional (1865); la Unión Postal Universal (1874); y el Instituto Internacional de Pesas y Medidas (1875).

²⁰³ Las empresas multinacionales no fueron consideradas “actores de importancia” en esa época, debido a que se encontraban situadas detrás del paraguas de los Estados, los cuales cumplían el papel de representación de las mismas. Sin embargo, en un mundo de creciente importancia de las relaciones comerciales, el hecho de que las empresas nacionales obtuviesen grandes beneficios era considerado como beneficioso para el Estado donde se situaba su empresa matriz. Por esa causa el apoyo estatal se ha mostrado fundamental en todo proceso de actuación en el exterior. (Krugman & Obstfeld, 1999).

Nota: Hay que subrayar que la constitución de las primeras OOI encuentra su origen en el auge y objetivo de regular las relaciones comerciales. Por lo tanto, el ejercicio de intercambio fijó y determinó la aparición en la escena internacional de estos agentes.

Los acuerdos y tratados sellados durante ese periodo pusieron de manifiesto la creciente transformación que estaban sufriendo las RRII y, por ende, la doctrina de la soberanía. Las cuestiones de seguridad y el aumento de la interdependencia comercial fueron los factores que determinaron el hecho de que se considerase necesaria la instauración de acuerdos de carácter supra-estatal con capacidad para regular las RRII entre Estados. El incremento en el número de acuerdos y/o tratados no era suficiente para regular toda la actividad presente y, a causa de ello, las fricciones se sucedían constantemente (Rivas, 2010).

Aun con la implementación de acuerdos de carácter supra-estatal, la doctrina de la soberanía se presentaba ante una situación en la que se acontecían un número creciente de cuestiones a tratar, entre las que destacó la durabilidad de los Tratados. Preocupó de manera incidente el que, teniendo en cuenta la creciente de interdependencia, las decisiones que se adoptasen en las RRII por parte de los Estados tendrían consecuencias en las políticas internas. Lo cual afectaba directamente a la soberanía interna y, en sí, a la conceptualización clásica de la soberanía (Rivas, 2010).

El hecho de que los Estados abordasen la decisión, por una u otra razón, de fomentar la creación de instituciones que regulasen las RRII mediante mecanismos externos a la propia voluntad interna del Estado, situó a la cuestión soberana, inexorablemente, en un espacio en el que el Estado ya no era poseedor absoluto sobre sus decisiones en política exterior. De modo que la soberanía pasaba a estar caracterizada por limitaciones “voluntarias” y se situaba a merced y en directa dependencia de decisiones que tomasen otros Estados. Más si cabe, en los casos en los que la fricción se hacía presente y los sistemas de resolución de conflictos no dependían únicamente de una decisión o acción individual. Por lo que ya no era la propia voluntad del Estado aquella que primaba, sino de la de algún mecanismo u órgano en el que las decisiones de más Estados influían en la adopción de medidas oportunas.

5.1.1 Teoría de autolimitación de George Jellinek. Reflexión en torno a los nuevos agentes y la soberanía en la Sociedad Internacional.

Con el foco de análisis en las fricciones teórico-prácticas que se vislumbraban en las RRII de la época, George Jellinek fue uno de los autores que abordó el debate en torno a los límites de soberanía que planteaba la aparición de nuevos agentes en la SI.

Jellinek (2000[1910]) argumentó que en el momento en el cual los Estados contraían acuerdos con otros Estados, aquellos hechos que podrían ser interpretados como acciones que limitaban los poderes absolutos; las acciones resultantes de los mismos no podrían ser tildadas de actos no soberanos, sino que se debían tratar como acciones soberanas, por haber sido el propio Estado el que había decidido formar parte de ese acuerdo, ya adoptase éste la forma de tratado, congreso, OOII, etc.... Consideraba además este hecho como una auto-obligación del propio Estado consigo mismo. De modo que según Jellinek, el límite a las capacidades de acción soberana no partía de una voluntad particular del órgano constituido o de otros Estados, sino de la propia voluntad del Estado. Por lo que el acuerdo de limitar su capacidad operativa o poder por parte de un Estado, debía ser entendido como un acto cargado de soberanía y no podría ser visto como una imposición externa²⁰⁴. Por consiguiente, el someterse a un tratado internacional debía considerarse como un acto soberano cargado de voluntad y, por ello, las OOII debían ser vistas como acuerdos motivados por una acción soberana de los Estados: la decisión de auto-limitarse comúnmente (Jellinek, 2000[1910]).

La teoría de la autolimitación de Georges Jellinek partía de la idea de que la constitución de una comunidad u organismo, encontraba su origen en la existencia de un estado de derecho en el que las partes asumían unas normas jurídicas. Por lo que un miembro no se encontraba en condiciones de desobedecer el derecho creado legítimamente, al haber sido aprobado éste por todos los agentes parte.

²⁰⁴ En este sentido se manifestó el Tribunal Constitucional español en su Declaración del 13 de diciembre en 2004 respecto al cesión de competencias al seno de la UE, afirmando que cesión del ejercicio de competencias a la UE suponen límites para las facultades soberanas del Estado de acuerdo al ejercicio de voluntad del Estado de la unión que cede competencias, pero que: **“La primacía opera...respecto de competencias cedidas a la Unión por voluntad soberana del Estado y también soberanamente recuperables a través del procedimiento de "retirada voluntaria" previsto en el artículo I-60 del Tratado”** (Tribunal Constitucional Español, 2004)[**Negrita propia**].

Esta argumentación encontraba su origen en el derecho interno de los Estados y al realizar el ejercicio de trasponerlo al contexto internacional, la subordinación de los miembros de la comunidad, de acuerdo al derecho establecido, debía darse mediante la aprobación de un orden jurídico en el que los Estados se coordinasen en **igualdad**, y ésta sería el factor que otorgaría validez la constitución de un DI. Por lo que si éstas condiciones se habían dado en la constitución del DI, la acción y decisión de los OOII debía ser entendida como una acción soberana de los Estados.

5.2 El intento de regular las reticencias absolutistas: la aparición de la Sociedad de Naciones.

Con el avance de los tiempos, en el conocido como Viejo Mundo no se lograba establecer un mecanismo que asegurase la no agresión. Se seguían despertando conflictos y no se hallaba la manera de establecer un mecanismo regulador que lograra evitar la colisión entre potencias²⁰⁵. Tras varios intentos fallidos de armonizar las RRII por medio de tratados, congresos y conferencias, que concluyeron en la llamada Paz Armada entre 1871-1914, las agresiones entre potencias se reactivaron concluyendo con el inicio de la Gran Guerra o I Guerra Mundial, en donde se evidenció la necesidad para los Estados de idear un mecanismo que armonizase la nueva situación de interdependencia creciente. Este hecho impulsó el que se impregnasen los Estados con la idea de establecer un organismo con una potestad suficiente para actuar de órgano regulador en las RRII y, más concretamente, ante las posibles situaciones conflictivas que surgiesen en los momentos *ad bellum*, *in bellum* y *post bellum*.

Como consecuencia de este reclamo en la oficialización de la paz- por medio de la firma del Tratado de Versalles (1919)-, se aprobó la creación de una organización con perspectivas de alcance mundial que regularía las RRII. Se creó la Sociedad de Naciones (SN).

En su fase emergente la organización estableció tres pilares fundamentales en los que se basaría su funcionamiento:

- a) la cooperación internacional (en cuestiones técnicas principalmente);

²⁰⁵ Sin ser motivo de este estudio los diferentes tratados, conferencias y congresos que se dieron en esta época, es pertinente dejar constancia de la situación e impacto de sucesos significativos en el concepto como los procesos de unificación alemán (proceso limitado en dos: el imperio Austro-húngaro y el nuevo imperio alemán con Baviera) e italiano; el conflicto prusiano con Austria resuelto en 1866 con la firma de la Paz de Praga; los sistemas Bismarck-marckianos y la presente diplomacia secreta; etc... Factores determinantes para el comienzo de la GM I, y tras la misma en la composición del Tratado de Versalles.

- b) el arbitraje;
- c) y la seguridad colectiva.

Ya desde su constitución la SN se vio sesgada en su capacidad operativa, al no ratificarse como miembro los EEUU. Hecho que no ayudó a la legitimación de la nueva organización, dado que su presidente Thomas Woodrow Wilson había sido uno de sus impulsores y la constitución de la SN se había apoyado en los *Catorce Puntos de Wilson*²⁰⁶ que él había elaborado.

La cuestión soberana subyacía en la constitución de la misma SN. Al pretender regular el pensamiento absolutista, que habían heredado los Estados de la época feudal, se evidenció la preocupación por lidiar con la cuestión. Como quedó reflejado en los artículos que se incluyeron en el Tratado de Versalles (1918), en donde se sugirió la creación de la SN (1920). De hecho, en el articulado del mismo destacan seis cuestiones que aludieron directamente al concepto de soberanía:

- **el territorio**, Art 10 y 16: declarado como inviolable y causa de acción conjunta por parte de la organización;
- **la independencia política**, Art 10: los asuntos de índole interno no son competencia de la SN;
- **el derecho de autodeterminación**, Art 22: para los pueblos colonizados principalmente, aunque esta cuestión tendrá consecuencias en Europa igualmente;
- **la acción conjunta**, contra el ataque en el seno o no de la SN el Art 16 indicaba que en términos de soberanía en las RRII, la SN se sitúa como órgano que limita la acción de los Estados. Esta vez sí, mediante el uso de las herramientas necesarias e incluso *si es necesario el empleo de la fuerza*.
- **la igualdad**, mediante el proceso de participación: un país un voto;

²⁰⁶ Los Catorce puntos de Wilson venían a constatar el agotamiento, por causa de la guerra, de las grandes potencias. Éstas ya se planteaban seriamente el hecho de construir organizaciones reguladoras que arbitrarán las guerras. Entre los puntos más relevantes destacan el primero por coincidir con la propuesta de Jeremy Bentham: Convenios abiertos y no diplomacia secreta; el quinto, en el que se hace constatar el derecho a auto-determinación de los pueblos; y el punto catorce, en el que se manifiesta la creación de una asociación general de naciones que ejecute labores de árbitro entre las potencias.

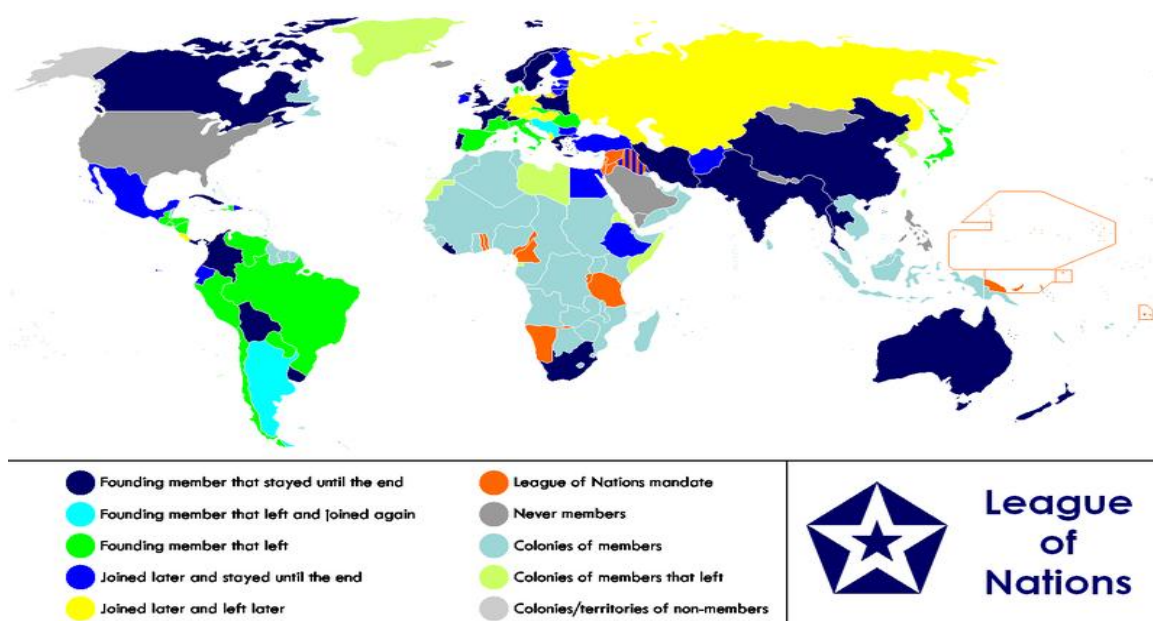
- y **la independencia**, Art 16, reflejada en la decisión soberana de salir o entrar en la organización.²⁰⁷
- A partir del texto oficial Sociedad de Naciones (1919).

De este modo, se daba un paso significativo en la institucionalización de los atributos característicos de la soberanía en la SI y asimismo se evidenciaba la necesidad de abordar un proceso que articulase el cómo regular la cesión de soberanía en su sentido absolutista en el espacio externo al Estado.

En el contexto dado, con el objetivo de que la institución ganase legitimidad y no fuese vista como un agente que injería en la capacidad de decisión de los Estados, fue establecido como mecanismo necesario para proceder a la aprobación de las resoluciones la unanimidad. Siendo éste el mecanismo que preponderaba dentro de la institución en las cuestiones relevantes. Y si bien es verdad que la SN poseía diversas decisiones que se aprobaban mediante el uso de otros procedimientos- como la mayoría simple o mayoría cualificada por dos tercios-, éstos se aplicaban en cuestiones de índole interno institucional o de procedimiento. Por lo que la aprobación de una resolución de aplicación relevante en términos de capacidades soberanas, debía contar con el visto bueno de todos los agentes parte.

²⁰⁷ El Art. 16 del Tratado de Versalles lo indicó de este modo: “Should any Member of the League resort to war in disregard of its covenants under Articles 12, 13, or 15, it shall ipso facto be deemed to have committed an act of war against all other Members of the League, which hereby undertake immediately to subject it to the severance of all trade or financial relations, the prohibition of all intercourse between their nations and the nationals of the covenant-breaking State, and the prevention of all financial, commercial, or personal intercourse between the nationals of the covenant-breaking State and the nationals of any other State, whether a Member of the League or not. It shall be the duty of the Council in such case to recommend to the several Governments concerned what effective military, naval, or air force the Members of the League shall severally contribute to the armed forces to be used to protect the covenants of the League” (Sociedad de Naciones, 1919).

Ilustración 9: Mapa sobre evolución de membresía en la liga de Naciones (1920-1946).



Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_Naciones . (Consulta realizada el 06 de marzo de 2013).

Nota: El mapa muestra con claridad la dificultad de tuvo la SN para instaurarse con solvencia como organización de liderazgo mundial. Los países entraron y salieron continuamente, debido a intereses puntuales o dudas acerca de la legitimidad de la institución y fricciones por la soberanía nacional. Asuntos que, en cierto modo, ya venían instaurados desde la creación de la SN, como quedó reflejado en el apartado 3, del Art. 1: “Todo miembro de la sociedad puede retirarse de la sociedad previo aviso de dos años, a condición de que hasta ese momento haya cumplido todas sus obligaciones internacionales, inclusive las del presente pacto” (Sociedad de Naciones, 1919).

Una de las mayores dificultades que se encontró la SN fue el limar posturas y reclamar actitudes de no invasión o injerencia ante las pretensiones de algunos Estados, ya que éstas acciones estaban cargadas con fines hegemónicos. Es decir, la SN tenía el deber de fomentar la estabilidad y el respeto de la soberanía, y ese ejercicio chocaba directamente con el objetivo de universalidad de algunos Estados.

En esta tarea, cuestiones como la independencia absoluta en la acción externa ligaban difícilmente con las pretensiones de la SN, ya que ésta organización situaba el respeto de la soberanía interna frente a los límites de las acciones de los Estados. Lo que resultaba en un enfrentamiento entre las capacidades de los Estados y los límites internacionales. Provocando este hecho que la dualidad soberanía interna-externa se encontrase ante situaciones de tensión extrema. Conflicto que fue origen de las dificultades operativas de la

SN e influyó, determinantemente, en el continuo movimiento de entrada y salida de Estados en la organización y, en cierto modo, fue el factor que dio origen a la II GM.²⁰⁸

Aun con todas las dificultades que encontró esta organización, es pertinente señalar que la SN legó una iniciativa de relevancia reguladora en las RRII: la de regulación o arbitrio de controversias (Truyol y Serra, 1998). Con el Art. 14 del Pacto de la SN se aprobó la constitución del Tribunal Permanente de Justicia Internacional²⁰⁹ (TPJI), órgano del que más tarde surgiría la Corte Internacional de Justicia (CIJ) (1945).

En términos de operatividad el TPJI se regía por su propio Estatuto y su Reglamento. Éste destacaba por su carácter consultivo, ya que sólo poseía facultad para emitir opiniones consultivas sobre controversias planteadas²¹⁰. Sin embargo, la adopción del Estatuto de la CIJ, conllevaba que los Estados cediesen competencias “voluntariamente” para juzgar, a un órgano superior a aquellos constituidos en el propio Estado. Acción que conllevaba la cesión de una atribución soberana, en el sentido que afirmaba Suárez cuando indicó que existía cesión si se podía juzgar una controversia ocurrida en suelo nacional en un tribunal ajeno. Se observa a este respecto que, aunque sea por voluntad, en este órgano recaería la competencia soberana en ese campo. De hecho, el Art. 60 del Estatuto hace referencia a este hecho afirmando que: “La sentencia es definitiva y sin recurso” (Sociedad de Naciones, 1920, pág. 20).

Una de las cuestiones que llamó la atención fue el hecho de que participasen en esta organización los Estados no europeos- es decir, Estados considerados “no civilizados”-. Esto significaba el que éstos asumiesen ese estado de “no civilizado”, así como el que las decisiones judiciales de sus propios tribunales pudiesen estar en entredicho al reconocer la facultad a un tribunal externo, ya que en caso de no encontrar jurisprudencia apropiada o cláusulas concretas en los acuerdos o tratados, se acudiría al derecho presente en los países civilizados y quedaría, de éste modo, desestimada la posibilidad de crear jurisprudencia propia de acuerdo a las raíces culturales particulares de cada territorio²¹¹. Ya que la SI se

²⁰⁸ Como ejemplos destacados de esta fricción, se eleva por una parte la práctica política comunista del Estado Ruso; y por otra los planes hegemónicos del Estado alemán (Rivas, 2010).

²⁰⁹ Si bien es verdad que ya existía el Tribunal Permanente de Arbitraje, creado en 1889 en el Convenio de la Haya, éste no era considerado ni tribunal ni permanente y, aunque poseía una pequeña secretaría, su actividad era mínima.

²¹⁰ La Corte desarrolló un papel de representante de la CI y de los principales sistemas judiciales globales más que ningún otro tribunal lo ha hecho hasta la fecha (NNUU, 2013).

²¹¹ Véase Capítulo II del Estatuto de la Corte de Justicia Internacional en donde se indica el mecanismo y las cuestiones que determinan el laudo emitido por el Tribunal. (Sociedad de Naciones, 1920, págs. 17-17).

encontraba en una época que podría ser caracterizada por una confianza sagrada en la civilización (Anghie, 2005).

5.2.1 Pequeño apunte en torno a la denuncia del tratado.

La libertad en cuanto a la decisión de entrar o salir de la SN venía garantizada y sujeta a la cláusula de denuncia. Esta operaba por medio de previo aviso y permitía una vez transcurridos dos años la ejecución. Esta cláusula fue reflejo de que la voluntad de pertenecer o no pertenecer a la SN será siempre al Estado miembro y en ningún instante se firma la imposibilidad de denuncia de la pertenencia. Es por ello, que aunque se evidencie cesión de competencias a un organismo externo al Estado, éste es de carácter voluntario y temporal y queda evidenciado que la voluntad última recae en el Estado.

En cuanto a la aplicación de las medidas en caso de que se incumpliesen los compromisos y las reglas acordadas, la SN poseía limitaciones operativas claras debido a la aportación de medios. Ya que aunque sí se concretaron medidas en el Art. 16 del pacto: la ruptura de relación; la aportación de contribución con las fuerzas disponibles y permiso de tránsito de las mismas por territorio de los Estados pertenecientes; y la supresión de la relación comercial o financiera en nombre de la seguridad colectiva y mantenimiento de la paz, la aplicación de las mismas sólo fue ejecutada de parcialmente y no fueron suficientes. Dado que dejaban todo el peso de las posibles sanciones en la voluntad de los Estados miembros, al no darse la existencia de ninguna cláusula de obligatoriedad para aplicar las sanciones al Estado que hubiese quebrantado el pacto.

Dado este contexto, las cuestiones de poder impactaron en la doctrina de la soberanía en sus dos espacios, incidiendo y determinando claramente el asentamiento de la dicotomía interna-externa tras la I GM. En el aspecto interno, la doctrina no sufrió cambios fundamentales gracias al asentamiento de los procesos democráticos emergentes, que en cierto modo consolidaban la imagen de poder unitario y representativo del conjunto estatal. Sin embargo, en el aspecto externo, la capacidad de decisión pasó a un plano conceptual relevante, al tener un impacto determinante el auge de las RRII. Ya que éstas quedaron sujetas a dos factores que se situaron como prioritarios en todo tipo de relación extra-estatal: la fuerza armamentística y la voluntad de los otros Estados²¹². Estos dos hechos determinaban que se abriese un proceso en el que **la decisión externa de un Estado**

²¹² Cuestión motivada, principalmente, por el voto basado en un sistema de unanimidad.

pasaba a ser un resultado de la suma de voluntades y no de la propia voluntad del Estado (Diez de Velasco, 1994).

Esta situación elevó a primera línea de debate conceptual dos cuestiones fundamentales. Por una parte, aquellos autores que habían atribuido al concepto de soberanía la igualdad como principio esencial, vieron como ésta se resquebraba y quedaba sujeta a otros aspectos relacionales; y por otra, la capacidad de decisión pasó a ser elemento en donde se evidenciaría el hecho soberano, ya que todo Estado u organismo internacional, tras el establecimiento de un DI que se iba asentando poco a poco, comprobaría de manera inequívoca su grado de soberanía en la medida que fuese capaz de ejercer el poder de cumplir su decisión en las RRII, acorde a su voluntad y sin someterse a decisiones que no fueren de interés o partiesen del propio Estado.

La preocupación de los Estados aumentó al visualizar a los nuevos organismos como agentes que limitaban su capacidad operativa y basando su percepción en concepciones pasadas, en las que el concepto absoluto de soberanía reinaba, los Estados se concienciaron del impacto de algunas disposiciones que se habían reflejado en el pacto de la SN. Incidiendo en que éstas podrían afectar a la esencia de la soberanía si no se establecía como punto de partida un concepto político en vez de uno jurídico. Ya que dada la existencia de un DI se temía de que quedasen limitados algunos aspectos de la acción de Estado (Truyol y Serra, 1958-1959). Aunque en principio no la principal y expresión de soberanía: la voluntad de pertenencia o no a los nuevos OOII, de acuerdo con Jellinek.

5.3 Carl Schmitt: la soberanía y la decisión.

Vislumbrar cuáles eran las claves del hecho soberano, en qué grado dotaban éstas a un Estado de soberanía y lograr detectar cuál de los diferentes atributos, que contemplaban la cualidad del soberano, era aquella en la que se refleja, por encima de otras, la soberanía o el acto soberano en el campo de las RRII, fueron las incógnitas que despertaron el interés del trabajo que realizó Carl Schmitt.

En un contexto internacional en el que el Estado como organización política estaba más y más asentado internacionalmente; en el que las RRII y la interdependencia creciente determinaban cómo se debía definir el concepto; y en el que el constitucionalismo y el derecho se instituían como reglaje de la arquitectura estatal, la aportación de Carl Schmitt debe ser remarcada por su gran calado en la doctrina de la soberanía.

Para entender la teoría schmittiana sobre el concepto de soberanía, hay que indicar primeramente cuales son las categorías fundamentales de su pensamiento. Por un parte, Schmitt delimitaba el debate sobre la doctrina indicando qué aspectos contenían la significación del acto soberano, definiendo las situaciones en las que, de manera inequívoca, se haría necesaria la presencia de un liderazgo único. Dada esta indicación, el autor construía su postulado a partir del establecimiento de un esquema binario, afirmando que existían dos situaciones únicas donde la soberanía se haría presente: 1) La situación de normalidad o *normale Zustand*; y 2) la situación de excepcionalidad o *Ausnahmezustand* (Schmitt, 2009).

La situación de normalidad es definida por Schmitt como aquella en la cual existe un orden sociopolítico que no hace necesaria la intervención por parte del Estado para su funcionamiento, más allá de actuar en situaciones concretas de regulación y orden y, por lo tanto, el Estado funciona en cierto modo como una institución burocrática. En cambio, la situación de excepción o excepcionalidad, es aquella que pone en cuestión el orden sociopolítico existente. De modo que la excepcionalidad se evidencia cuando el estado de normalidad se quebranta y se sitúa al Estado en la necesidad de una acción concreta y éste hecho pondría en peligro la continuación del Estado en sí, al menos, en la forma establecida durante el periodo de normalidad (Schmitt, 2009).

De acuerdo a las situaciones posibles que se pudiesen producir dentro de una sociedad, Schmitt apuntó que aquel que es capaz *de facto* -exitosamente-, de decidir lo que devendrá en la situación de excepcionalidad será el auténtico soberano. Por lo que el autor sitúa el acto de decidir como aquel momento en el que la figura del soberano se hace presente y en donde se vislumbra que sólo aquel que es soberano puede realizar la constatación cuando se presenta un estado de excepción. Por lo que es el agente soberano aquel capaz de decidir en última instancia en caso de que se produzca una situación de excepcionalidad, contexto en el que actuará y resolverá el cómo se operará en las consecuencias, tanto sustantivas como político-simbólicas, surgidas tras la situación de excepcionalidad, ya sean éstas consecuencias en un sentido de continuidad con la preservación de la situación social-política anterior (mantención del orden político-constitucional), o de uno nuevo con la creación de un nuevo orden socio-político (institución de un nuevo orden jurídico-constitucional) (Schmitt, 2009).

Es en el sentido señalado en el que se debe tener en cuenta que la situación de conflicto en todo el pensamiento schmittiano es determinante para entender donde se presenta el verdadero soberano. El cómo se resuelva y quién resuelva la situación anómala determinará quién es el agente que actúa como soberano. Puesto que según Schmitt, la posibilidad real de conflicto en forma de guerra es permanente. Aunque también es debido indicar que éste realizaba una señalización en donde establecía una diferenciación entre el aspecto político (instituciones, ideas, acciones políticas) y la guerra (actos bélicos)- sin negar el origen político de éste último-.

“El combate militar en sí mismo no es la "continuación de la política por otros medios" como reza la famosa frase, generalmente mal citada, de Clausewitz. El combate militar, en tanto guerra, tiene sus propios puntos de vista y sus propias reglas estratégicas, tácticas y demás, pero todas ellas dan por establecido y presuponen que la decisión política de definir quién es el enemigo ya ha sido tomada” (Schmitt, 2013[1936], pág. 19).

Es la existencia del conflicto en la sociedad, según Schmitt, aquello que determina constantemente todo tipo de política en los momentos de normalidad. Puesto que la posibilidad de la guerra, revolución o alteración del orden constitucional, siempre está presente como posibilidad real.²¹³

En cuanto a la unidad como característica de la soberanía, Schmitt afirmaba que si la unidad político-social que se había establecido como referencia era la figura jurídico-política del Estado, éste se situaba como aquel órgano que poseía una mayor capacitación para integrar a los diferentes grupos que habitaban un territorio y, por lo tanto, el Estado resultaba de la agrupación e integración. De este modo, Schmitt indicaba que en caso de constituir una comunidad con cierta magnitud política con condiciones de evitar la guerra, se podría hablar de unidad política²¹⁴. En este sentido, aunque si bien reconocía la existencia de unidades políticas en forma de Estado, Schmitt también hacía mención a otro tipo de asociación, al considerar como agrupaciones aquellas que poseyesen un *grado de intensidad* que conjuntara a un número de personas por diversas motivaciones, ya fuesen de índole religioso, nacional o económico (Schmitt, 2013[1936], pág. 22). Pero realizando una

²¹³ Con mención a esta situación de conflicto, Schmitt se postulaba ante la irrealidad de considerar una sociedad en la que no existiese el conflicto: “Si sobre la faz de la tierra existiese tan sólo la neutralidad, no sólo sería el fin de la guerra; sería también el fin de la neutralidad misma — de la misma forma en que cualquier política, incluso una política de evitar el combate, termina cuando desaparece en forma absoluta toda posibilidad real de que se produzcan combates” (Schmitt, 2013[1936]).

²¹⁴ Con referencia al hecho de evitar la guerra, Schmitt lo definía como la capacidad para “...negarle efectivamente la calidad de enemigo a un oponente” (Schmitt, 2013[1936]).

precisión al indicar la diferencia existente entre agrupación y unidad política. Considerando únicamente unidad política a aquella que, por su esencia, era determinante en cuanto a su forma básica: poseía el poder de decisión sobre quién era amigo o enemigo.²¹⁵

En definitiva se podría deducir que Schmitt consideraba que la unidad política es simplemente aquella unidad que es determinante en la situación extrema. Es decir, es la unidad suprema de poder. Puesto que si en último caso no fuese determinante su decisión y tuviese que someterse a la decisión de otro, la soberanía quedaría destituida y pasaría a manos de aquel que decidiese.

De modo que la cuestión de ¿qué aspecto indicaba el acto soberano tras la creación de una organización como la SN?, la respondía Schmitt indicando que el soberano se vislumbraba al observar el ejercicio de cesión de soberanía por parte de los Estados a la organización. Hecho que se haría visible al medir la posibilidad de la organización para aunar legitimidad en caso de que dicha institución se enfrentase a una situación que requiriese coaccionar las acciones bélicas que pretendiesen realizar los Estados. Según Schmitt, este hecho establecía un espacio propicio para exponer, mediante un paralelismo, los procesos que habían conllevado al propio Estado a su composición. Por ello, se apoyó en la definición de la unidad política como baluarte para rebatir la composición de una SN, recalcando, el hecho de que la finalidad de la SN no era la de eliminar la guerra como recurso, sino más bien reformular el tipo de guerra que se iba a practicar, ya fuese en coalición o individual. Cosa diferente era la postura en la que se situaba la SN en el acto de legitimar o sancionar acciones bélicas (Schmitt, 2013[1936]).

Por lo tanto, al no considerar la SN como unidad política, por la falta de capacidad de eliminar la guerra como recurso de las partes componentes de la organización, Schmitt

²¹⁵ Diferenciación entre amigo y enemigo según Schmitt: “La diferenciación entre amigos y enemigos tiene el sentido de expresar el máximo grado de intensidad de un vínculo o de una separación, una asociación o una disociación. Puede existir de modo teórico o de modo práctico, sin que por ello y simultáneamente todas las demás diferenciaciones morales, estéticas, económicas, o de otra índole, deban ser de aplicación. El enemigo político no tiene por qué ser moralmente malo; no tiene por qué ser estéticamente feo; no tiene por qué actuar como un competidor económico y hasta podría quizás parecer ventajoso hacer negocios con él. Es simplemente el otro, el extraño, y le basta a su esencia el constituir algo distinto y diferente en un sentido existencial especialmente intenso de modo tal que, en un caso extremo, los conflictos con él se tornan posibles, siendo que estos conflictos no pueden ser resueltos por una normativa general establecida de antemano, ni por el arbitraje de un tercero “no-involucrado” y por lo tanto “imparcial” (Schmitt, 2013[1936], pág. 15); “Enemigo” es sólo un conjunto de personas que, por lo menos de un modo eventual — esto es: de acuerdo con las posibilidades reales — puede combatir a un conjunto idéntico que se le opone. Enemigo es solamente el enemigo público, porque lo que se relaciona con un conjunto semejante de personas — y en especial con todo un pueblo — se vuelve público por la misma relación. El enemigo es el hostis, no el inimicus en un sentido amplio; el polemios, no el echthros” (Schmitt, 2013[1936], pág. 17).

consideró que la SN conformaba más bien una Federación de Pueblos no universal y que solo podría tener importancia relevante si llegase a constituir una alianza real, una coalición que pretendiese poseer el *ius bellis* como unidad legítima. Tema que de ningún modo era la finalidad de la SN. Ésta no pretendía eliminar la guerra.

5.3.1 Aportaciones teóricas relevantes de Schmitt acerca de la soberanía a tener en cuenta al observar los procesos unitarios/ integradores.

La pretensión de constituir un OI que operase como unidad de poder, que liderase el devenir del conjunto de Estados y que a su vez asegurase la estabilidad en la SI, despertaba muchas incógnitas que no tenían fácil respuesta para Schmitt. Según éste, la constitución de una entidad de carácter superior situaba a la propia doctrina de la soberanía en una encrucijada, al pasar la decisión última a manos de un agente que no es el Estado mismo. En este aspecto argumentaba Schmitt que aunque se lograsen establecer ciertos criterios de unión, como una moneda común o una unidad técnica-comunicacional, esto no conllevaría la existencia de una unión social.

”Si realmente se consiguiese la unificación de todo el planeta sobre la base de tan sólo una unidad económica o tecno-comunicacional, el resultado no sería por de pronto ya una "unidad social", del mismo modo en que no constituyen una "unidad" social los habitantes de un edificio de viviendas en alquiler...” (Schmitt, 2013[1936], pág. 35)

La cuestión que planteó Schmitt es determinante de cara a la justificación básica que ha motivado a los OOII a la hora de establecer su creación y que ha incidido en la composición de las mismísimas NNUU, o más si cabe, en el proceso de globalización económica que se viene produciendo en la SI.²¹⁶

En este sentido, Schmitt planteó que en la medida en que un Estado no sea capaz de gestionar sus asuntos económicos con autonomía, habrá cedido la capacidad de decisión soberana.

²¹⁶ Donde mejor se refleja en la actualidad este hecho es en las integraciones regionales que, en ocasiones, a partir de una cohesión económica pretenden lograr la unificación social. Como ha sido el caso de la UE (Quintillán, 1997), componiendo éste es uno de los mayores retos de la UE. Véanse los diferentes números de la *Revista Panorama* de la UE disponibles en http://ec.europa.eu/regional_policy/information/panorama/index_es.cfm (Consulta realizada el 29 de enero de 2014). Especialmente el Núm. 35: “Hacia una mayor integración social” disponible en http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag35/mag35_es.pdf (Consulta realizada el 24 de enero de 2014).

“Un Estado que, en una época económica, renuncia a entender y a conducir correctamente y por sí mismo las condiciones económicas, forzosamente debe declararse neutral frente a las cuestiones y decisiones políticas, con lo que renuncia a su pretensión de gobernar” (Schmitt, 2013[1936], pág. 56) [Negrita propia].

En atención a ésta cuestión, a partir de un ejercicio crítico sobre la realidad internacional de su época, Schmitt también previó, con una agudeza extraordinaria, como la lucha en forma de guerra no sería ejecutada en un futuro solamente por medio de las armas, sino que ésta se daría en otro campo: el económico. Según el autor, se produciría un cambio fundamental -de acuerdo a la teoría liberal- en la cual: “...el concepto político de lucha se convierte en competencia por el lado económico y en discusión por el lado “espiritual” (Schmitt, 2013, pág. 44).

En definitiva, el autor enuncia algo relevante en términos de soberanía y RRII, al indicar que si las luchas se dan en el campo económico, la economía será aquel sector en el que el hecho de guerra se hará presente. En donde, si existe un ideario único de ser como sociedad y hay Estados que no deciden sobre su economía, éstos deben declararse neutrales. Es decir, no soberanos (Schmitt, 2013[1936]).

6. La soberanía tras la Segunda Guerra Mundial.

Al finalizar la IIGM, la SI sufrió cambios profundos que afectaron al modo en el que se venían desarrollando las RRII. Cuestiones como la aparición de nuevos OOII, los procesos de independencia, el inicio de la Guerra Fría, así como el incremento de las relaciones multilaterales comerciales, incidieron de manera notable en que la soberanía se viese alterada su esencia en diversos aspectos.

Si la cuestión de seguridad pasó a ser considerada de vital importancia, por el miedo a un nuevo conflicto de tan grandes magnitudes, las divergencias ideológicas en cuanto a los modelos políticos determinaron las decisiones de los Estados en política exterior. Puesto que si bien la Guerra fría determinó la disputa por conseguir aliados entre los dos bloques principales, liderados por los EEUU y la URSS, también influyó ésta en que se crease un tercer bloque compuesto por los Países No Alineados (PNA), en su mayoría nuevos Estados independientes, que abogaban por mantenerse neutrales.

Y es que los procesos de independencia que se habían venido produciendo paulatinamente tras las primeras descolonizaciones, a principios del siglo XIX en ALC y más tarde en la

primera mitad del siglo XX, se incrementaron de manera exponencial tras la IIGM, significándose como derecho de autodeterminación en la Resolución 1515(XV) que adoptaron las NNUU el 14 de diciembre de 1960 denominada *Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales*²¹⁷. Hecho que significaba la divulgación del concepto de Estado en toda configuración territorial que quisiese ser independiente, por lo que debían adoptar éstos territorios un modo organizativo que venía determinado por la conceptualización de la soberanía. Con lo que la doctrina de la soberanía se encontraba, de nuevo, ante desafíos en el nuevo contexto internacional en el que debía reformularse o/y adaptarse debido a los cambios que sufría la SI.

6.1 La aparición de las Naciones Unidas: La institucionalización de la categorización soberana en cuestiones de paz y seguridad.

Tras el fracaso de la SN como institución, al no ser capaz de frenar el comienzo de la IIGM, fue al finalizar ésta cuando se produjo un nuevo intento por crear un OI de carácter multilateral con la pretensión de lograr adquirir cobertura global.

Las conversaciones que se produjeron durante la celebración de las Conferencias *de Yalta* (11-2-1945) y *Postdam* (2-8-1945) configuraron las condiciones institucionales que finalmente se fraguaron en la Conferencia de San Francisco, de la que surgió la Carta de las Naciones Unidas (15-10-1945). De este modo se formalizaba el intento por parte de los Estados de constituir una OI que aglutinase una mayor legitimidad que la que había dispuesto la SN, para que en caso de que se detectase riesgo inminente de conflicto, ésta contase con suficiente cobertura y capacidad para disiparlo. Con la participación de 51 Estados nacieron las Naciones Unidas (NNUU).

Una vez constituida como organización, las NNUU comenzaron su andadura con las principales pretensiones de aglutinar reconocimiento universal y lograr establecerse como la institución en la que todos los Estados se viesen representados y, de este modo, afianzarse como el órgano regulador por excelencia de las RRII, al ser el espacio en el que se diese lugar el debate interestatal y en donde se limasen las posible aparición de conflictos (Hardt & Negri, 2000, págs. 10-22).

²¹⁷ Consultar Declaración completa en: <http://www.un.org/es/decolonization/declaration.shtml> . (Consulta realizada el 13 de septiembre de 2013).

Los objetivos de la misma determinaron el que se impulsase, por parte de la organización, un proceso de creciente institucionalización a través de la instauración de mecanismos con cobertura supra-estatal (consejos, cortes, programas, fondos, centros, institutos, órganos, etc...), a los que se les trataría de dotar con herramientas, con agilidad suficiente, para solventar y atender a los problemas, fallas, divergencias y todas aquellas problemáticas con carácter multilateral que pudiesen surgir en la SI²¹⁸.

La adhesión creciente de los Estados - se han ampliado progresivamente alcanzando su membresía en la actualidad 193 de los 194 Estados reconocidos- ha convertido a las NNUU en la organización con representatividad a nivel global²¹⁹. En este proceso ha tenido gran significancia el rol de agente multilateral que han desarrollado sus diversos mecanismos a través de sus prácticas. Lo que ha supuesto que la organización sea reconocida como un agente que ejerce un papel muy relevante en la SI, debido, en gran medida, a que el mensaje subyacente en sus discursos, así como en la finalidad inscrita en sus diversas tareas, se caracterizó por tener como objetivo el solventar problemáticas por el bien común mundial. Es decir, las NNUU se constituyeron con pretensiones de impacto universal y, por ello, ha operado como agente que habla y actúa en nombre de la humanidad, al menos en teoría.²²⁰

Ante los peligros de reproducir una organización que no respetase la igualdad de los Estados y- en consonancia con lo comentado por Schmitt, que señaló que "La Humanidad" es un instrumento ideológico especialmente útil para expansiones imperialistas y, en su forma ético-humanitaria, un vehículo específico del imperialismo económico" (Schmitt, 2013[1936], pág. 33)-, es pertinente indicar que, aunque las pretensiones humanitarias se instauraban en los discursos y en los textos divulgados por la organización, esta debía promover una igualdad soberana en la acción de los Estados en el funcionamiento de las NNUU para poder afirmarlo. Ya que si la universalidad era y es un

²¹⁸ Después de la aparición de la NNUU se crearon diversos programas y agencias como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), la Organización Mundial de Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), así como el Consejo Económico y Social, el Consejo de administración Fiduciaria, y se integró el TIJP que pasó a ser denominado la Corte Internacional de Justicia, entre las más relevantes. Existiendo más agentes con capacidad de acción global en la institución. Para ver la Estructura y organización de las agencias de las NNUU consultar <http://www.un.org/es/aboutun/structure/>. (Consulta realizada el día 23 de mayo de 2014).

²¹⁹ Únicamente el Vaticano está reconocido como Estado y posee calidad de miembro observador, ya que en 2004 recibió los derechos de membresía plena exceptuando su derecho a voto. (A/RES/59/314 1º de julio de 2004 92ª sesión plenaria de las NNUU).

²²⁰ Como ejemplo de que el discurso que opera es de cobertura global, postulándose como agente que habla en nombre de la humanidad, que mejor que destacar que la Organización elaboró la ya sí mítica: "Declaración Universal de los Derechos Humanos" (1948).

principio de la organización, los mecanismos que se estableciesen para regular las relaciones debían estar caracterizados por no ser asimétricos en su composición y en su práctica y, por lo tanto, gozar los Estados miembros de igualdad soberana. Como se cita en el Capítulo I, Art. 2, Núm. 1 de la Carta: “La Organización está basada en el principio de la igualdad soberana de sus miembros” (NNUU, 1945).

Sin embargo, las diferencias existentes entre los Estados en las NNUU se revelan al realizar una leve revisión de los mecanismos de participación diferenciados en los tres órganos principales de la organización: la Asamblea, el Consejo de Seguridad y la Secretaría General.

El primer órgano indicado, la Asamblea, desempeña funciones de foro deliberativo como establece la Carta de las NNUU, aunque también regula cuestiones de orden menor para la soberanía, como la codificación del DI; el Consejo de Seguridad posee la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacional, siendo **las resoluciones del Consejo de obligado cumplimiento** (Capítulo V. Art. 25). Lo forman cinco miembros permanentes y diez temporales que elige la Asamblea General cada dos años; y el tercer órgano, la Secretaría General, realiza, principalmente, labores de administración (Naciones Unidas, 2013).

En cuestiones de soberanía la condición de “no igualdad” que poseen los Estados dentro de la organización, se evidencia de forma clara en algunos artículos de la Carta. Concretamente, aquellos que hacen referencia al funcionamiento del Consejo de Seguridad (Armengol, 1994). En el Art 27 se constituye una alteración del principio de igualdad soberana entre los Estados presente en el Art. 2, debido al sistema de veto que posee el Consejo de Seguridad, al presentar un sistema de participación que otorga la distinción de miembros permanentes a unos Estados, que más que tratarse de un inconveniente en sí para la soberanía, constituye una expresión en su concepción política. Ya que un grupo de Estados, debido a su participación en la IIGM y al hecho de haber sido los vencedores, posee una distinción relevante en términos de soberanía en cuestiones de seguridad. Estos son: EEUU, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña.²²¹

²²¹ De agosto a octubre de 1944 representantes de Francia, la República de China, el Reino Unido, los Estados Unidos y la Unión Soviética celebraron la Conferencia de *Dumbarton Oaks* para esbozar los propósitos de la organización, sus miembros, los organismos, y las disposiciones para mantener la paz, seguridad y cooperación internacional. La actual organización refleja parcialmente a esta conferencia, ya que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (que tienen poder de veto en cualquier resolución de ese Consejo) son dichos Estados, o sus sucesores (República Popular China que reemplazó a la República de China-Taiwán y Rusia que sucedió a la Unión Soviética).

La composición del Consejo de Seguridad y la división interna entre Estados permanentes y no permanentes, junto con el sistema de aprobación de resoluciones (unanimidad) en la toma de decisiones por parte del Consejo de Seguridad, son cuestiones que indican la categoría a la que pertenece cada país; así como proporciona información acerca de los diferentes niveles de capacidad e influencia de cada Estado, para imponer su decisión en la SI en cuestiones que atañan al Consejo. Es decir, este factor indica la diferente capacidad en la soberanía exterior de los Estados y revela que la composición del Consejo de Seguridad- cuando se argumenta que los miembros no permanentes serán elegidos por “...la contribución de los Miembros de las Naciones Unidas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y a los demás propósitos de la Organización, como también a una distribución geográfica equitativa”(Art. 23. 1.)-, atribuye una capacidad diferencial a los Estados permanentes como Estados que aseguran la paz y contribuyen a la seguridad. Por lo que se les otorgó su membresía “especial” y la capacidad de veto como medida de control, dada su elevada categoría y compromiso con la paz en nombre del “bien común”. Hecho que claramente establece un diferente nivel de soberanía a los Estados.

En la misma línea, prestando atención al mecanismo de toma de decisiones, se observa que el voto que poseen los miembros permanentes y la posibilidad de veto por parte de éstos les otorga una distinción cualitativa, que revela una diferenciación tipológica que representa una “calidad” en su voto (Armengol, 1994). Cuestión que se evidencia en el hecho de que los miembros no permanentes roten cada dos años. Puesto que en el caso de no aprobación de alguna resolución en la que los Estados no permanentes mostrasen discordancia, los permanentes siempre tendrían la posibilidad de posponer sus propósitos por un periodo de dos años, hasta la entrada nuevos Estados no permanentes, y proponer de nuevo la aprobación. Por lo tanto, el requisito que deben tener en cuenta los Estados permanentes sería únicamente el de contar en “cualquier caso” con el beneplácito de los Estados permanentes y su voto de “calidad”. Puesto que deben estar de acuerdo o al menos no ejercer derecho de veto para que sea aprobada una resolución por parte del Consejo de Seguridad (Starke, 1963. 5th Edition).

De este modo, el mecanismo de participación en el Consejo de Seguridad confirma lo indicado, la existencia de dos categorías de pertenencia muy diferenciadas y que la “calidad” de voto de los Estados establece grados diferenciados en capacidad para imponer su decisión en la SI. Es decir, se varía el grado de soberanía externa en cuestiones de seguridad.

Por otra parte, en la Carta de las NNUU desaparece prácticamente la regla de unanimidad que era dominante en la SN. Y aunque si se tiene en cuenta que las resoluciones que se producen en su seno, en la Asamblea, no poseen ninguna vinculación jurídica y sólo actúan como recomendaciones -con las excepciones que existen en cuestiones de alcance organizativo en la Asamblea y de mantenimiento de la Paz y la Seguridad en el Consejo de Seguridad-. Así como el sometimiento a las mismas no resta capacidad soberana a los Estados, pues no se comprometen por su membresía al cumplimiento de las mismas²²².

Otro de los aspectos relevantes, en términos de soberanía, se detecta al analizar las finalidades de la institución. Al contrario de lo que sucedía en la SN, la Carta de la NNUU eliminó la guerra como forma de conducta lícita, con la excepcionalidad de aplicarse en su variante defensiva según el Art. 51 del Capítulo VII de la Carta. Con lo que se institucionalizaba multilateralmente el rechazo a la guerra como acto de relación y, por lo tanto, los Estados miembros estarían sujetos a sanciones o incluso ataques bélicos por parte de las mismas NNUU si decidiesen arbitrariamente el uso de la fuerza armada. Esta finalidad en la organización significaba que las NNUU se erigiesen como el agente que, en caso de considerarse oportuno, poseyese la capacidad de actuar bélicamente. Cuestión que otorga aún más importancia al hecho de ser Estado permanente del Consejo de Seguridad, ya que se erigen como Estados de primera los países permanentes, quedando, de cierta forma, los otros Estados sujetos a las decisiones de ellos por la capacidad de veto²²³.

6.2 La Guerra Fría. La extensión de la soberanía más allá de las fronteras. La capacidad de decisión limitada en bloques.

El contexto de Guerra Fría determinó el que los Estados se encontrasen en una encrucijada a la hora de negociar su participación en la SI. Pues su decisión alteraba su propia capacidad y condición de soberanos en diversos aspectos, como el sentido organizativo, económico, político, etc.... Pero sin dudas, en uno de los que más incidió la decisión fue en el de seguridad, ya que dada la existencia de bloques enfrentados con doctrinas de seguridad e ideológicas diferenciadas, las alianzas que fuesen acordadas influían en la

²²² Para profundizar en el análisis sobre las transformaciones sufridas por las OOI desde sus inicios véase Tunkin & Butler (1974, págs. 303-380, Capítulo V).

²²³ Como ejemplo de esta categorización solo hace falta revisar los periodos en que la Guerra Fría determinó el funcionamiento del Consejo de Seguridad, con bloqueos continuos por parte de las dos partes en disputa: los EEUU y la U.R.R.S (Swift, 2003).

configuración de la seguridad propia²²⁴ (Nieto & García, 2009; Buchruker, Aróstegui, Saborido, & Ferraris, 2001).

En este contexto, fueron los EEUU los que rescataron el uso político de la seguridad para hacer uso de lo que denominó “Estado de Seguridad Nacional” y, de este modo, designar la defensa militar y la seguridad interna ante cualquier acción que pudiese significar una amenaza. Entre las medidas adoptadas incluyeron el que en los Estados aliados se adoptasen postulados comunistas, cuestión que “validaba” en cierto modo su intervención. De hecho, a partir de esta conceptualización de amigo-enemigo la seguridad se convirtió en categoría política, siendo base de las RRII durante la Guerra Fría. Guerra que se significó en la CI a través de las confrontaciones armadas en los países denominados Tercer mundo, nunca de forma frontal entre los EEUU y la URSS (Buitrago, 2003).

El contexto indicado determinó el que los Estados estableciesen las alianzas atendiendo a cuatro cuestiones relevantes que influían en su capacidad operativa: a) la temporalidad; b) el poder de revocación; c) los derechos soberanos; y d) la subordinación del delegante respecto al delegado (Rivas, 2010, pág. 235). Por lo que los Estados entendieron que una alianza significaba una clara cesión en su capacidad de actuar independientemente. Como se evidenció en las intervenciones estadounidenses en ALC, o por la inclusión de considerar elemento justificador de intervención el que un Estado adoptase políticas comunistas, como por ejemplo se reflejó en la X Conferencia de la OEA en 1954, en época de Guerra Fría²²⁵. Es decir, se constituía, a partir de la firma de alianzas y acuerdos de éste carácter, una cesión de competencias en cuestiones de seguridad, que significaba que si un Estado optaba por cambiar su modelo político, sería considerado enemigo.

La lucha entre dos sistemas antagónicos en ideología no estaba enmarcada dentro de los límites geográficos existentes que caracterizaban a los Estados, ya que los dos postulados poseían, en cierto modo, pretensiones universalistas. Es decir, si los EEUU se caracterizaron por la promoción de un desarrollo capitalista en los Estados aliados y de la

²²⁴ Uno de los ejemplos más notables del impacto de este hecho fue el de Japón, que tras la IIGM delegó su defensa nacional en manos de EEUU. Hecho que venía a cubrir el vacío de defensa soberana que constataba el art. 9 de la Constitución Japonesa de 1947, que legaba su defensa en los aliados y más tarde en EEUU mediante el acuerdo el 8 de septiembre de 1951 “Tratado de seguridad entre los EEUU y Japón”.

²²⁵ Ya antes de la reunión en Caracas el subsecretario de EEUU John Moors Cabot había declarado: “Nuestro objetivo en la Conferencia de Caracas es lograr que se apruebe una resolución que impida toda actividad comunista en el Hemisferio Occidental. No se trata de algo que concierne a un solo país, sino al conjunto de las Repúblicas americanas” (Citado en Fabela (1958, págs. 181-182)).

sociedad mundial, a partir del establecimiento de su modelo particular de vida²²⁶; la URSS realizaba declaraciones llamando a la unidad comunista, por encima de las clásicas separaciones fronterizas, señalando la existencia de unidad de toda la comunidad socialista.

“La Unión Soviética estima necesario declarar desde esta tribuna que los Estados socialistas no pueden tolerar y no tolerarán una situación tal en la que resulten lesionados intereses vitales del socialismo y en la que se atente a la inviolabilidad de las fronteras de la comunidad socialista y de esta suerte a los fundamentos de la paz internacional”²²⁷ (Citado en Rivas (2010, págs. 167-168))

Este tipo de declaraciones destacaron por su carácter desafiante del orden estatal establecido, en cierto modo, al plantear una cuestión asentada en el DI como la injerencia en la soberanía interna de los Estados. Esto se debió a que se consideraba en la declaración a toda la comunidad socialista como un ente conjunto superior al límite estatal. En donde si un Estado del ala socialista se viese tentado a cambiar al lado capitalista, correría el riesgo de conflicto con la denominada comunidad socialista. Al igual que habían hecho los EEUU.

La tensión respecto a la cuestión soberana era evidente, al significar la declaración el injerir en la decisión particular que adoptase un Estado en su interior, en caso de que sus ideas sobre el modelo a desarrollar en su territorio cambiase.

De modo, que las posturas de los EEUU y la URSS indicaban en qué momento estaban siendo dañados esos intereses fuera de sus fronteras como Estado, pero dentro del espacio aliado, al señalar unas fronteras ideológicas que encumbraban la cuestión de organización económica a una separación territorial. Alcanzando estos Estados un status de soberanía exterior²²⁸. Hecho contrario a lo que ya, el 21 de diciembre 1965, la Asamblea General de la NNUU había manifestado mediante la adopción de la Resolución 2131, con título: Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención en los asuntos domésticos de los

²²⁶ Véase Capítulo I.

²²⁷ Declaración en la Asamblea de las NNUU (1968) por parte del ministro de exteriores de la URSS. En ella, éste puso énfasis en el carácter de comunidad socialista que dotaba a esta de una soberanía común a toda ella.

²²⁸ La situación de lucha entre los dos polos venía marcada por dos conceptos diferentes de entender la convivencia ciudadana. Mientras que el ala capitalista desarrollaba una política basada en el fomento de los derechos civiles y políticos, y a través de ellos se obtendrían los económicos, culturales y sociales, el ala comunista lo postulaba a la inversa. Para observar como los sistemas fomentaban su imagen al exterior, se recomienda la película: *Ciudadano X* (1994) en donde se evidencia lo importante de la imagen de las ideologías de cara al exterior.

Estado y la protección de su independencia y soberanía, en la que en su parte operativa, párrafos 1 y 5, decía:

1. **Ningún Estado tiene derecho a intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos y externos de cualquier Estado.** Por lo tanto, no solamente la intervención armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de amenaza atentatoria de la personalidad del Estado, o de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen están condenadas.

5. Todo Estado tiene el derecho inalienable a elegir su sistema político, económico, social y cultural, sin injerencia en ninguna forma por parte de ningún otro Estado.

((NNUU, Year-book 1965-1966) Citado en Díaz (1990, pág. 58)) **[Negrita propia]**.

A pesar de ello, es relevante enunciar como la acción sumergida continuó. Y aunque el conflicto frontal no llegó a producirse, el ejercicio de disputas ideológicas por competencias en cuestiones de seguridad, desveló que la soberanía externa poseía diferentes grados de capacidad dependiendo de qué agente fuese el que actuaba.

6.3 La significación de la descolonización en cuestiones de soberanía: la adquisición de soberanía impuesta como idea de organización social.

Si bien es verdad que los procesos de descolonización tuvieron gran impacto en la SI tras la finalización de la IIGM, estas prácticas ya venían produciéndose desde finales del siglo XVIII. Es por ello, precisamente, por lo cual no se puede explicar la relevancia del acontecimiento sin señalar el papel que ha jugado la relación de los Estados europeos con las colonias, si el objetivo es examinar, pertinentemente, el impacto que la soberanía ha tenido en los procesos de independencia. Dadas las diferencias existentes entre el cómo se instituyó el concepto en un espacio y otro.

El debate en los Estados europeos sobre la soberanía ha girado- como se ha indicado en este Capítulo-, de uno u otro modo, en torno a la preocupación de discernir la cuestión de si los Estados debían o no supeditarse al DI, atendiendo al cómo ese hecho influía en su capacidad de soberano (Anghie, 2005, pág. 101). Sin embargo, para los Estados no europeos el dilema ha sido diferente, ya que el problema no sólo es el cómo afecta la institucionalización de una normativa en las RRII, sino que recae en el que para acceder a la categoría de soberano ésta primeramente debía ser adquirida. Acción debida a que

históricamente no había existido esta condición en los territorios ahora descolonizados, ya que la soberanía ha sido característica de los Estados europeos y los otros territorios no europeos eran sujetos políticos no reconocidos como soberanos.

El mecanismo que se promulgó para adquirir la categoría de Estado soberano fue el del reconocimiento externo, en principio, de los Estados europeos. Cuestión que al igual que con otros conceptos relevantes en la evolución de las RRII- como son el ser considerado civilizado o no, o desarrollado o no-, indica la existencia de una linealidad evolutiva a la que los Estados europeos llegaron antes: el ser soberanos.

Y es que la soberanía es un concepto surgido de las ideas europeas de cómo una sociedad debe operar, de cómo se debe organizar políticamente, de cómo se debe desarrollar y de cómo deben comportarse sus individuos. Por lo que para los nuevos Estados el adquirir soberanía ha significado, en cierto modo, el adquirir un grado de civilización europea (Anghie, 2005, pág. 104).

El observar cómo se ha manifestado la soberanía en los Estados no europeos significa atender a un proceso muy diferente al de los europeos. Por ejemplo, en principio hasta que la soberanía fuese reconocida por los Estados europeos, las restricciones a las acciones y el cumplimiento del DI en los territorios que luego conformaron Estados, eran cuestiones que se lidiaban entre los Europeos. Situación en la que **las gentes de los territorios no europeos no disponían de derechos, ya que no había restricciones legales**, no eran sujetos de ciudadanía, y es de todos conocido las masacres y la acción violenta que han injerido los Estados europeos más allá de sus fronteras en épocas coloniales.

El proceso de descolonización entre los Estados Europeos y los no europeos, no fue dejar en libertad a los territorios para que éstos y sus gentes estableciesen sus modos de vida, sino que se dejó configurar a éstos- con “escuadra y cartabón” como se visualiza en las regiones de África descolonizadas -, reproduciendo la misma configuración política que en los Estados europeos: el Estado. Este hecho implicaba que la decisión sobre la naturaleza de los Estados descolonizados no se haya basado en la existencia de una potestad superior delegada por las partes que ha dictaminado el hecho en sí, sino que evidencia una ausencia de potestad primaria de los territorios que pasarían a ser Estados, al no haber existido ningún consenso anterior al hecho de conceder a una comunidad, territorio o cualesquiera formación que pudiese consistir en lo que se refleja en un Estado, la categoría de soberano. Por lo que la concesión siempre se ha dado en circunstancias asimétricas, a partir de un

reconocimiento direccionado. En donde se concede a otro sujeto una categoría para poder participar y ser sujeto de DI por parte de los Estados europeos²²⁹.

Es en este sentido en el que se observa como la promoción de soberanía por parte de los Estados europeos, ha significado un acto de preservación de su cultura a nivel internacional, y el mismo hecho ha supuesto un mecanismo de negación para la cultura de los Estados no europeos, de autoridad y de autenticidad (Anghie, 2005). Cultura que reflejada en la concepción de Estado soberano, conlleva que la propia personalidad particular de cada Estado no europeo haya comenzado a significarse a partir de la aceptación de la configuración de Estado nación soberano. Significando esto una gran alteración de sus prácticas y organización política. Puesto que la instauración de la soberanía en los territorios no europeos no ha tenido demasiado que ver con la identidad de los territorios y sólo basta con ver el mapa de la región de África, la situación de los indígenas originarios en los Estados latinoamericanos, u otros procesos ocurridos, para percibir lo señalado.

En este sentido, el término soberanía ha sido un elemento clave por el impacto producido en las culturas particulares de los territorios reconocidos. Dado que el acto de reconocer un Estado soberano significó que las ideas europeas sobre configuración territorial y organización social habían sido instauradas, y de hecho la visión de la sociedad particular de los Estados europeos se convirtió en permanente en la configuración de las reglas bajo las cuales se desarrollan las RRII; así como en los territorios que se han visto “obligados” a aceptar el modo de organización política. Aunque se poseyesen diversas culturas que no se significasen en una organización política de este corte²³⁰.

En este contexto, los procesos de independencia ocurridos tras la IIGM dibujaban un nuevo esquema en el que los nuevos Estados debían asimilar una herencia en forma de modo organizativo implícita en la soberanía y lidiar con un nuevo mundo caracterizado por vivir proceso de creciente globalización. En el que se encontraban en desventaja en las condiciones de negociación, en el conocimiento de los modos, en capital, etc... y sobre

²²⁹ Este sentido categórico se asimila a los señalados por Jaime Ornelas (2012), cuando observa respecto al desarrollo y se refiere a él como categoría colonial.

²³⁰ Como ejemplo de esto, la CIJ reconoció en 1975 que los territorios del Sahara Occidental no podían ser considerados *terra nullis* (tierra de nadie), ya que tenían de algún modo una organización política. Caso del Sahara Occidental. Opinión Consultiva, Informe de la CIJ, 1975 pág. 12. Texto disponible en <http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=323&p1=3&p2=4&case=61&p3=5> (Consulta realizada el día 31 de mayo de 2014).

todo, determinados por comenzar a operar con unas reglas construidas a partir de postulados exógenos a la propia realidad particular del territorio.

Otra de los sucesos relevantes en los procesos de descolonización fue el reconocimiento del derecho de autodeterminación de los pueblos. Y no sólo porque los territorios pudiesen decidir si querían ser un Estado libre soberano, adoptar otra forma jurídica como protectorado, o continuar perteneciendo al Estado colonizador, sino porque, en cierto modo, este hecho significó la descolonización por parte de los europeos del DI, a partir del reconocimiento de igualdad soberana entre los Estados. Proceso que fue visto por algunos autores como un acto que significaba la universalización del DI, a través de la promoción de foros, debates, reuniones, instituciones en el Tercer Mundo en igualdad de condiciones. Lo que podría significar el asentamiento de un DI realmente universal²³¹. De hecho, algo significativo fue el vislumbrar como se eliminó, prácticamente, del vocabulario usado en el DI los conceptos de civilizados y no civilizados (Anghie, 2005, pág. 110).

Los cambios acontecidos en la SI y el que los Estados no europeos fuesen alcanzando la categoría de soberano no se vieron reflejados a nivel material, ya que la desigualdad económica que fue creada durante el tiempo en el que el colonialismo operó no fue eliminada, ni en las descolonizaciones que se produjeron en el siglo XIX ni en el siglo XX. Lo que determinó una desigualdad abrupta en términos de capacidades. Es decir, se heredó un modo de organización política y social, pero no se realizó ninguna acción compensatoria que igualase a los Estados no colonizados con los colonizadores a parte del reconocimiento de soberanos.

Aun con lo indicado, el realizar el reconocimiento de soberanía a los territorios que antes habían sido colonias, fue aquello que impulsó el que la propia condición de soberano empezase a ser vista como una oportunidad para los territorios del considerado del Tercer Mundo comenzasen su andadura independiente, por el hecho de poder decidir y ser reconocidos como sujetos de DI.

“La soberanía es la posesión más preciada por los nuevos Estados independientes. Por una parte, les sitúa como dueños de su propio hogar y, por otra parte, les proporciona una protección legal contra las incursiones extranjeras o intentos por parte de los Estados más poderosos”²³² (Sinha, 1965, pág. 127).

²³¹ A este respecto véanse las indicaciones y posturas presentes en Gathii (1998).

²³² Traducción propia a partir de: “Sovereignty is the most treasured possession of the newly independent States. On the one hand, it makes them the master of their own house, and on the other hand, it provides

Además, una vez otorgada la categoría de soberano, las incursiones extranjeras por la fuerza eran prohibidas, al ser reconocidos los Estados como sujetos soberanos. Contexto en el que éstos vieron que la categoría podría ser una herramienta para empoderarse en la SI. Lo que desplazó la disputa a otro espacio.

Se comenzó a instaurar una relación de colaboración entre naciones “iguales” y soberanas en cuestiones políticas, económicas, sociales, etc... y, a partir de este propósito, se produjeron actos de reconocimiento en cuestiones de soberanía económica- como el reconocimiento de la soberanía sobre los RRNN (Resolución 1803 de las NNUU (1962) o la Carta sobre Derechos Económicos y Deberes de los Estados (1974)-. Significándose que iban, poco a poco, admitiéndose en la SI las capacidades decisorias de los nuevos Estados para regular sus bienes y sus potestades, ante la problemática que se presentó para los nuevos Estados y no tan nuevos. Teniendo en cuenta que los Estados que fueron descolonizados en el siglo XIX se encontraban en una situación similar debido a la dificultad de ejercer como Estado soberano en un territorio en el que los ciudadanos de las grandes potencias poseían propiedades e intereses y que su regulación podría conllevar conflictos con los Estados de los nacionales²³³. A este respecto, si la Resolución 1803²³⁴ capacitaba al Estado a nacionalizar recursos, en caso de que lo encontrase determinante para el bienestar de su población mediante una compensación económica, y en caso de que un Estado soberanamente optase por la expropiación o nacionalización debía ser pagada de acuerdo a lo establecido en el DI, la Carta sobre Derechos Económicos y Deberes de los Estados reconocía que se debían respetar los dictámenes realizados por los tribunales del Estado receptor en disputas con agentes externos²³⁵. Decisiones éstas que en cierto modo, significaban cierto asentamiento de la condición de soberano en los Estados independizados.

En todo caso, las controversias y competencias adquiridas por los nuevos Estados evidenciaron que su nueva categoría debía lidiar con intereses económicos externos, espacio en el que se encontraban en clara desventaja. Eran países mucho más pobres.

Los nuevos Estados comenzaron a operar en el nuevo espacio global con una categoría concedida, que curiosamente en el propio proceso se cuasi-eliminaba la propia categoría, al

them with a legal shield against foreign incursions or attempts thereat by stronger States” (Sinha, 1965, pág. 127)

²³³ Véase Capítulo III.

²³⁴ Para más información sobre las discusiones previas y durante las negociaciones véase Schwebel (1994).

²³⁵ Este asunto es abordado en profundidad en el Capítulo III.

promoverse el hecho de gozar de la misma todos los territorios del planeta- a excepción de casos excepcionales como el Sahara o el territorio de Palestina-, en busca de afianzarse y constituir Estados a semejanza de aquellos que habían sido sus invasores. Con la propia configuración de Estado, con su reconocimiento como sujeto de DI, con la nueva independencia, con la eliminación cuasi-total de la categorización en el DI de Estados civilizados y no-civilizados y con el tratamiento de Estados soberanos, con todo ello, la cuestión que primaba era la desigualdad en capital y en capacidades, y era aquello que determinaba en un alto grado la relación entre Estados.

En este contexto y con la desigualdad entre Estados soberanos, el mecanismo que pasó articular las relaciones entre los antiguos Estados colonizadores(junto con EEUU) y los Estados del Tercer Mundo- en los que las relaciones se produjesen “aparentemente” de igual a igual entre Estado soberanos, y todos se vieses beneficiados, en teoría, y se conjuntasen los diversos intereses-, fue en donde se instauró la práctica desarrollista, que como se vio en el Capítulo I, ha servido como herramienta relacional que según el discurso fomenta la mejoría de la situación de los nuevos Estados. Para lo que sólo era necesario que los Estados soberanos admitiesen la entrada de capitales en forma de IED y que asegurasen su protección.

De este modo, el proceso descolonizador y el reconocimiento de los Estados se transformaba en una situación de “igual a igual” eliminando la categoría de Estado no civilizado y, por lo tanto, no soberano. Pero en su lugar introducía otra categoría para denominar a los nuevos Estados a los que se les había concedido la soberanía: no desarrollado (Ornelas, 2012).

El nuevo marco relacional entre los Estados desarrollados y no desarrollados cambiaba respecto al de soberano y no soberanos, ya que en el nuevo marco- gracias al DI- se indicaba que, en la participación en asuntos internos de otros Estados, no era legítimo el uso de la fuerza militar. Las guerras se traspasaban a lado económico. Pero con una connotación mayor de este factor, al no haberse procedido a una compensación por el “saqueo” que se había venido produciendo en los tiempos de colonización²³⁶. Y en este sentido parece que, en consonancia con lo que manifestó Carl Schmitt sobre las guerras, si

²³⁶ El proceso de “conciencia” había sido desarrollado, de hecho como se indica en el Capítulo I ese era el propósito. Pero una compensación real, una auditoría no fue llevada a cabo. Lo más próximo a una asunción de corresponsabilidad por la situación de los nuevos Estados descolonizados se produjo cuando en el Informe Pearson (1969) se recomendó la donación del 0,7 del P.I.B para los países subdesarrollados, precisamente como medida de responsabilidad.

las luchas se dan en el campo económico, la economía será aquel sector en el que el hecho de guerra se hará presente (Schmitt, 2013[1936]).

7. Cuestiones relevantes en la evolución doctrinal de la soberanía en el Derecho Internacional en el siglo XX.

Es un hecho notorio que el DI ha vivido en un proceso de reformulación continua debido a la, cada vez más, creciente interdependencia a nivel global. Los diversos campos-académicos, políticos o sociales- cualquiera que fuese su ideología, no han parado de examinar el cómo poder establecer mecanismos que lograsen adaptar un concepto nacido en época feudal a una sociedad global en la que se daban cita dos prácticas, en principio antagónicas, como soberanía e interdependencia. Si por una parte las fronteras territoriales se habían instaurado a nivel global- al haberse consagrado el sistema europeo del DI-, a través de la difusión e implantación de la soberanía como sistema de organización social (Anghie, 2005); por otra, la posibilidad de que este tipo de configuración social, en forma de Estado, fuese práctico para vivir en aislamiento era una cuestión de difícil logro. Con lo que el poseer una capacidad de decisión con rasgos de soberanía absoluta, como la definió Bodin ([1576]1985), era visto como un hecho no realizable.

A este proceso había que sumar otro factor determinante, como era el creciente aumento de OOII. Las cuales ejecutaban prácticas con cierta capacidad para incidir en las políticas de los Estados. Por ello, en torno a la cuestión de definir la soberanía contuvo un álgido debate.

En este ejercicio es en el que desde la escuela alemana de teoría del Estado, un coetáneo de Carl Schmitt, Herman Heller ya había señalado que la soberanía era en su fundamento:

“...la cualidad de una unidad territorial de decisión y acción, en virtud de la cual y en defensa del mismo orden jurídico, se afirma de manera absoluta en los casos de necesidad aún en contra del derecho” (Heller, 1995, pág. Capítulo X).

Afirmación de Heller que indicaba que la cuestión de interdependencia entre los Estados no debe ser entendida como una supresión del atributo de independencia, siempre que el Estado se reserve la capacidad para, en casos de excepcionalidad aún en contra del derecho, manifestar su soberanía en las situaciones en las que su perpetuidad esté en juego. De este modo, la soberanía se vería reflejada en el acto que se ejecuta cuando se percibe que la

existencia como Estado pelagra y si **éste puede romper todo pacto con otros es soberano** (Heller, 1995, págs. 225-226)²³⁷. El autor coincidía en su postulado con Jellinek, al resaltar que si la voluntad última recae en el Estado y éste posee la capacidad de suprimir el acuerdo o pertenencia, la soberanía sigue perteneciendo al Estado aunque ceda voluntariamente competencias.

Hay que tener en cuenta en este sentido, que tras 1945 obtuvieron un papel relevante dos líneas principales de pensamiento del concepto de soberanía. Por una parte, los autores que se situaban a favor de la no cesión de soberanía de los Estados a un ente que suprimiese su capacidad de decisión (ius-naturalistas); y por otra, aquellos teóricos que abogaban por la conveniencia de ceder capacidad a la CI (ius-internacionalistas).

Los ius-internacionalistas²³⁸ construyeron su argumentación sobre la idea de que el Estado es sujeto de DI y fundamento del sistema completo de ese derecho. Porque afirmaban que la construcción del DI se basaba en la existencia de los Estados soberanos, en donde éstos son creadores y emisores de poder en su constitución, y ello hace que el DI sea derecho propio. Concluyendo que los Estados son aquellas figuras de las que parte y, a su vez, los que disfrutan el derecho. Por lo que su sumisión al mismo, es sumisión a su propia voluntad (Vedross, 1976).

En este sentido, Paul Reuter (1959) afirma que el DI no impone, no coacciona, ya que el DI existe gracias a un acto voluntario de los Estados-nación:

“...el Estado es soberano en el sentido de que no existe por encima del Estado autoridad a la que de manera general este supeditado éste en el ejercicio de sus competencias. Lo cual no indica que el Estado no esté sometido al Derecho Internacional sino que, en líneas generales, pertenece a cada Estado apreciar razonablemente y de buena fe las situaciones y las normas que o vinculan. Como tampoco quiere decir la última palabra en beneficio de instituciones judiciales u organizaciones internacionales, sino que estas renuncias, hoy todavía, se fundan en un acto voluntario” (Paul Reuter (1959) Citado en Rivas (2010, pág. 182)) [**Negrita propia**].

²³⁷ En este caso coincidiendo con la teoría de excepcionalidad presentada por Carl Schmitt (del que era colega) y otorgando, por encima de otras, relevancia a la situación de excepción, al considerar a ésta como el espacio en el cual el poseedor de soberanía se mostraría a través de un análisis sobre la decisión última.

²³⁸ Véanse Alfred Verdross (1976) o Charles Chaumont en *La sécurité des Etats et la sécurité du monde* (1948). Entre otras labores destacar que Chaumont destacó por participar en la elaboración de la Carta de las NNUU.

Se observa que teóricamente al combinar el acto voluntario de otorgar un grado de potestad soberana a las OOI y, por ende, a la existencia de un DI que hay que respetar, surge de nuevo la concepción de una soberanía limitada o más bien, como la define Alfred Verdross (1976), una soberanía relativa. La cual estaría caracterizada por ser independiente sobre las competencias internas, pero que en el exterior debe lidiar con las situaciones creadas por una comunidad a la que se pertenece y que a su vez es origen de DI:

“El concepto de la soberanía relativa es plenamente compatible con la existencia del Derecho Internacional. Más aún: es propio del Derecho Internacional el vincular principalmente a Estados independientes, constituyendo con ellos una comunidad jurídica...hay que tener en cuenta, además, que según la práctica internacional un Estado se considera soberano mientras no se haya disuelto en el seno de otro Estado o convertido en miembro de un Estado Federal. Esta es la razón por la que la exigencia de que se elimine el concepto de soberanía no es un postulado del conocimiento jurídico, sino de la política del derecho, pues tiende a eliminar una realidad sociológica dada. También la exigencia de no limitar la autonomía estatal sería un postulado político por tender, como la anterior, a influir sobre la evolución de la realidad social. De ahí la necesidad de establecer una distinción clara y tajante entre la soberanía efectivamente dada, de fundamento jurídico-positivo, y el postulado de mantenerla o eliminarla” (Verdross, 1976 , págs. 10-11).

Por otra parte, los autores críticos con los postulados ius-naturalistas fueron desarrollando teorías basadas en la creencia de que la construcción de una CI era algo ineludible, y que esta debía contar con cierta capacidad para producir legislación por encima de los Estados. Ya que consideraban que era necesario limitar en cierto grado las competencias soberanas de los Estados, para que la convivencia en un marco de RRII alcanzase altos grados de cooperación y, de paso, asegurase una SI pacífica. Ello, al partir de la premisa de que la paz era la finalidad del conjunto y, dado ese contexto, la obligatoriedad de los Estados de respetar las normas acordadas y ceder ciertas competencias debía ser el camino, si se quería mantener un cierto Estado de convivencia²³⁹.

“...el cuerpo legal que está compuesto en su mayor parte por los principios y normas de conducta que los Estados se sienten obligados a observar en sus relaciones recíprocas, y que también incluyen: a) Las normas legales relacionadas con el funcionamiento de instituciones u organizaciones internacionales, las relaciones entre unos y otros y sus relaciones con estados e individuos, y b) Ciertas normas legales relacionadas con individuos

²³⁹ Véanse a este respecto los autores de corte idealista Dueck (2004) y Mearsheimer (2005).

y entidades no estatales, en tanto los derechos o deberes de éstos constituyan la preocupación de la comunidad internacional” (Starke, 1963. 5th Edition, págs. 1-2).

A raíz de esta conceptualización de Joseph Gabriel Starke (1963), el problema que se evidencia es el cómo se articula la cesión de competencias por parte de los Estados al adherirse a una comunidad, ya que el acto puede responder a dos factores principales, considerando que el origen del DI tiene su base ideacional en una parte de la SI y no es de constitución global- como evidencia el hecho de que ante la ausencia de cláusulas pactadas en los Tratados o acuerdos entre Estados, en caso de disputa los tribunales facultados para legislar conflictos de carácter internacional acudan al derecho presente en los Estados civilizados-. Contexto en donde aquellos Estados que no hayan sido parte emisores o relevantes en la construcción del DI- puesto que sus criterios puede que no hayan sido tenidos en cuenta, o si la aplicación de este DI es percibida como perjudicial para sus intereses-, se podría percibir la situación de que los Estados se encuentran sometidos a una reglamentación no propia. Y si además éstos deben lidiar con entidades no estatales para la ejecución de la legalidad, el hecho de pertenecer a una comunidad o de adherirse una vez constituida, por una parte sesgaría de manera determinante la soberanía del Estado y, por otra parte, existiría el peligro de que el Estado ceda competencias o se someta a decisiones que sean causa de un perjuicio para su Estado²⁴⁰. Dándose un contexto en el que además, si decide negociar las condiciones y los Estados antiguamente no-civilizados exigen que se altere la normativa, este hecho puede contar con la negativa de los Estados que fueron promotores (“civilizados”), ya que podrían ver alterar el DI que ellos impulsaron basándolo en su construcción político social de convivencia. Por lo que las dos posturas revelan el por qué, en general, el Estado...

“...permanece renuente a investir a los órganos internacionales de los poderes de decisión, regulación y administración necesarios para la efectiva protección de los intereses de la comunidad mundial en conjunto, en áreas tan vitales como el control de armamentos, la energía nuclear y el espacio” (Jenks, 1971, págs. 29-30).

Igualmente, la concepción de comunidad, implícita en este concepto del DI, indica que la libertad soberana del Estado es un atributo que no estaría ya basado directamente en la capacidad de decidir independientemente, sino que podría estar determinada por la capacidad de relación que posea el Estado con otros Estados. Con lo que dentro de la

²⁴⁰ Para profundizar en este hecho véase Tomás (1996, págs. 64-68).

sujeción que pueda tener la capacidad de Estado soberano al DI, la soberanía se manifestaría a través de un “hecho político” a partir de un derecho natural.

Es en este sentido en el que afirmaba Wilfred Jenks (1971) que, en su origen y en su esencia, la expresión conceptual de un hecho político dominante y base de efectividad del Estado es la soberanía entendida como un hecho dual (externa-interna). Sin embargo, no puede haber un hecho político dominante en el campo internacional para todos los Estados, ya que aunque en el interior sí se mostraría como el poder político supremo, en el exterior no se poseería ningún otro poder comparable (Jenks, 1971). Pero este poder y capacidad en RRII no es simétrico y sí varía según el Estado, sus ideas y sus capacidades.

Esta reflexión expresa que si el compromiso de adoptar un DI no es realizado de un modo que beneficie al conjunto, poseerá una dificultad extrema: la regulación de aquellas cuestiones de índole global. Puesto que aquellos Estados que se encuentren en posiciones de temor al cambio, debido a la diversidad presente en los postulados ideológicos, adoptarán la postura indicada por Jenks y estarían renuentes al pacto y la cesión. Y en este caso, las OOII poseerían poca agilidad a la hora de avanzar en la consolidación de procesos que sean de dudoso beneficio global, a no ser, que se impongan los deseos de unos sobre otros.

El lastre que conlleva la soberanía de cara a la instauración de un DI sólido, es lo que señalaba Herbert Whittaker Briggs a principios de siglo – en 1926-, afirmando que la soberanía ha sustentado la producción jurídica dentro del Estado, pero que sin embargo, en el aspecto internacional ha actuado como freno al fomento de un DI. Puesto que el hecho de no existir una dimensión jurídica establecida, dificulta la institucionalización del derecho por medio de las OOII; así como el que no se desarrolle un proceso en el que las OOII cuenten con una soberanía plena, dificulta con gran intensidad el desarrollo y asentamiento de un DI respetado (Whittaker Briggs, 2013).

8. Los procesos integradores. Modelos supranacional e intergubernamental como desafíos de la doctrina soberana.

Desde el final de la IIGM se han incrementado la formación de comunidades supraestatales, significándose la asociación de Estados pertenecientes a una región determinada principalmente. En estos procesos destaca por encima de otros el de la constitución de UE, por su significación relevante e impacto en la des-configuración de la

concepción clásica de soberanía -en el aspecto económico principalmente-, puesto que la creación de un ente de integración política-económica como la Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA) (1952), significó la constitución de un entidad supranacional²⁴¹ que, con base en acuerdos económicos, ha ido congregando diversas competencias de los Estados en la entidad de carácter regional. Y aunque es deber destacar que se tilda a éste de ser un proceso de construcción continuada, al tratarse de un proyecto inacabado de integración, la continuación en el tiempo y la cesión de competencias progresiva, hace del proceso un referente en la SI cuando se habla de integración, supranacionalidad o intergubernamentalismo.

El proceso integrador-unificador sucedido en la UE no ha sido el único proceso integracionista que se ha dado cita en la SI y otro tipo de organizaciones regionales de carácter político-económico han ido constituyéndose en otros territorios del globo como: la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR); el Mercado Común Centroamericano (MCCA), el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); o la Unión Africana (UA), han significado la expansión global de una proceso integracionista.

Estas integraciones han constituido un proceso de reconfiguración de la SI y de las competencias soberanas en cuestiones económicas, principalmente, aunque también en políticas. Ya que el aumento constante de organizaciones en bloques de Estados ha afectado profundamente a las relaciones clásicas de soberanía y se puede afirmar que ésta ya no aparece más en la SI como algo indivisible e independiente y definir sus límites es cada vez más complejo (Krasner, 2001).

Sin embargo, este proceso no debe conducir a equívocos y de acuerdo con la duda que representa esta cuestión, es deber diferenciar entre dos modelos de integración y la significación en cuanto a qué ha supuesto la cesión de competencias de un Estado a una comunidad. Ya que existe una terminología aceptada que establece diferencias entre un proceso de integración supranacional y uno de cooperación intergubernamental, de acuerdo a la estructura operativa que posea la comunidad (Mariño, 1999).

²⁴¹ Es asumido que el concepto supranacional nació con la creación de la CECA, cuando en el Tratado de París se estipuló en su Art. 9 que: "...los miembros de la Alta Autoridad ejercerán sus funciones con plena independencia, en interés general de la Comunidad". Véanse los tratados advenidos en la UE en: http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/index_es.htm (Consulta realizada el 17 de julio de 2013).

La supranacionalidad solo se daría cuando se dé la existencia en la asociación o comunidad integrada de órganos independientes superiores a los Estados; con capacidad para dictaminar normas de obligado cumplimiento; que además esté formada por individuos que actúen en nombre de la misma y no de los Estados miembros; y además cuente con la debida capacidad decisoria para que el resultante de su juicio sea de aplicabilidad inmediata, sin necesidad de que el Estado parte del órgano supranacional deba realizar un acto de recepción de la norma dictada (Mariño, 1999).

Esta definición de supranacionalidad diverge de la presente en intergubernamentalidad, ya que esta segunda, aunque similar en la mayoría de las funciones que realiza, requiere de un mecanismo de aceptación de los Estados para la adopción de decisiones. Con lo que aunque la comunidad posea órganos que dictaminen normativa, deberán pasar por el filtro de los Estados para su aplicabilidad. Asimismo, otra diferencia es que aunque el modelo intergubernamental posee un organismo capaz de emitir normas, la instancia máxima es formada representantes de los Estados que actúan en nombre de los Estado y no del conjunto como en la supranacionalidad²⁴².

En este sentido, el modelo intergubernamental podría ser entendido como una solución intermedia entre el concepto clásico de soberanía y la supranacionalidad (Shünemann, 2010, pág. 218), ya que posee órganos con capacidad decisoria- como en el caso de MERCOSUR²⁴³- pero los Estados conservan su decisión última y su soberanía “íntegra”. Sin embargo, en este modelo existe la posibilidad de que el mecanismo que adopte el órgano para la toma de decisiones, unanimidad en la toma de decisiones o mayoría, determine el grado de soberanía. Es decir, por ejemplo, en caso de operar por mayoría, puede darse una situación en la que los dictámenes surgidos del mismo podrían significarse en la adopción de decisiones por un Estado miembro sin su consentimiento de facto. Esto es debido a que se ha detectado en otro mecanismo de control soberano en el modelo intergubernamental, que si la situación indicada se produjese, la decisión surgida de una comunidad, aunque en principio debe contar con la participación de los Estados en la integración de las normativas, puede que mediante un acto que signifique la preponderancia de estos dictámenes sobre su legislación interna- texto constitucional-, aunque en un

²⁴² En este sentido se ha indicado que los procesos integracionistas surgidos tras la UE, se vieron afectados por las grietas y erosiones en la soberanía del Estado-Nación que se produjeron en los años 60 y 70 en la UE (Kaplan, 1969; Kaplan, 1976; Kaplan, 1989).

²⁴³ El Art. 2 del Tratado de Ouro Preto dice así: “...son órganos con capacidad decisoria, de naturaleza intergubernamental: el Consejo del Mercado Común, el Grupo Mercado Común y la Comisión de Comercio del Mercosur”.

aspecto purista la soberanía recayese en la voluntad del Estado de pertenecer o no, si dentro de la constitución se establece que la preponderancia de una fuente exógena de normativa²⁴⁴, la capacidad de decisión de facto en situación de normalidad habrá sido cedida.

Por otra parte, si la finalidad de un proceso de integración es constituir una comunidad con capacidad supranacional, el órgano que adopte la toma de decisiones dentro de la comunidad debe poseer dos condiciones: 1) estar integrado de manera que los miembros no representan a ningún estado miembro; y 2) tener la potestad de dictar normas de obligado cumplimiento, cuya aplicación sea inmediata que prevalezca sobre el derecho interno de los Estados miembros (en donde no se requiera proceso de internación de la norma) (Shünemann, 2010, págs. 217-225). Es decir, que en aquel momento en el que los Estados procedan a la cesión de competencias en una comunidad independiente a la que se han adherido, que cuente con autonomía propia, con competencia para regular la acción, tanto interna, intracomunitaria y extracomunitaria sin ningún tipo de interferencias, se podría hablar de un órgano supranacional (Mariño, 1999).

Aparte de lo señalado por Mariño (1999), cabe rescatar un elemento que dio consistencia a la primera composición de un Estado Federal, los EEUU, en el sentido que los hace Henry Schermers (1980). Al enunciar éste la posibilidad de introducir entre las características ideales de una institución supranacional, la imposibilidad de retiro unilateral de los Estados miembros. Esta cuestión acercaría el modelo al presente en un estado federal, en este aspecto, puesto que es en el que se observa como en caso de que una organización decida adoptar esta medida, junto con las otras tres características indicadas sobre la supranacionalidad, se estaría caminando hacia la construcción de una soberanía, al estilo indicado por los autores clásicos.

En este aspecto es reseñable que al hablar de procesos integradores en los que los Estados han decidido actuar en conjunto, aquello que determinará la cesión de soberanía y la formación de un ente superior se dará cuando *de facto* se opere en circunstancias de normalidad, de acuerdo a las decisiones normativas en las competencias cedidas al unísono

²⁴⁴ En este ejemplo podría situarse a dos miembros del MERCOSUR como son Paraguay, que en el Art. 145 de su Constitución (1992) indica: "...la República del Paraguay, en condiciones de igualdad con otros Estados, **admite un orden jurídico supranacional** que garantice la vigencia de los derechos humanos, de la paz, de la justicia, de la cooperación y del desarrollo, en lo político, lo económico y social" [**Negrita propia**]; a al observar la Constitución de Argentina se refiere igual a este hecho indicando en el punto 24 del Art. 75: "...aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción u organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes".

sin que los Estados parte intervengan en la acción. Ya que la situación de normalidad es aquella en la que se opera habitualmente, y aun sin discernir de la visión que poseía Schmitt, en situaciones de normalidad una cesión de competencias constituye una legación de la actividad soberana en la práctica, y merece ser examinada.

Por último, es deber señalar que en los tratados y acuerdos regionales que se han producido, se observa como se ha optado por adoptar modelos supranacionales, intergubernamentales, o mixtos. En este sentido destacan organizaciones como la UE, que aunque es considerada como un organismo supranacional²⁴⁵, en realidad combina un modelo mixto entre supranacionalidad y cooperación intergubernamental; u otras como la ASEAN²⁴⁶ o el MERCOSUR, que son consideradas instituciones intergubernamentales.

9. Características actuales de la soberanía en un mundo multi-relacionado.

Innegablemente, las RRII han sufrido cambios fundamentales desde aquellos años en los que se originó la creación de las NNUU, y si bien es verdad que este órgano no los ha sufrido profundamente, hay hechos significativos que reflejan el impacto del aumento de la interacción entre los diversos agentes que componen la SI.

La interdependencia estructural que provenía desde los inicios de las RRII en la economía, ha visto multiplicados sus lazos debido a los avances continuos en medios logísticos (transporte, comunicación, etc...) y la creciente instauración de tratados. Factores que han incidido en el intercambio de mercancías entre los diversos países a nivel global, acompañado de un proceso de internacionalización y asentamiento en las RRII de la empresa como agente²⁴⁷.

Asimismo, en el campo político la SI ha sufrido cambios profundos, principalmente, en cuanto a competencias, si se observa la relación desde una perspectiva de agrupación de Estados en entes supranacionales- que no significa con competencias supranacionales -.

²⁴⁵ Véase la Sesión 1441 de las NNUU. Celebrada el miércoles 15 de junio de 1977 titulada: “Cuestión de los tratados celebrados entre los Estado y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales” (A/CN.4/285, A/CN.4/290. Texto disponible en http://legal.un.org/ilc/documentation/spanish/a_cn4_sr1441.pdf (Consulta realizada el 13 de abril de 2014). En donde se indica la supranacionalidad de la CECA.

²⁴⁶ La propia ASEAN indica que no es una institución supranacional. Véase <http://www.asean.org/resources/item/appreciating-understanding-the-asean-concept-by-s-pushpanathan-for-the-jakarta-post> (Consulta realizada el 23 de mayo de 2014).

²⁴⁷ En referencia al reconocimiento de agente de la empresa en los conflictos internacionales entre Estados y Empresas véase Capítulo III.

Éstas, con base en una asociación económica y/o política, como muestra el incremento de las Organizaciones Regionales (OORR) y subregionales²⁴⁸, responden en buena medida a la transformación sufrida por las RRII. Debido a que los Estados han percibido este tipo de asociación como un mecanismo para adquirir un aumento en su capacidad de maniobra en la SI, tanto en relaciones internas como externas (Diez de Velasco, 1994).

El incremento de entidades de carácter regional ha sido señalada como una medida que adoptan ciertos Estados en busca de una mayor solidez, tanto política y social como económica, con el objetivo de constituir estructuras que potencien las relaciones internas y a su vez refuercen su papel en las relaciones externas, por medio de una cohesión en la nueva entidad. Esta práctica podría ser una evidencia y consecuencia directa de una realidad internacional, caracterizada por sufrir una transformación constante desde el final de la IIGM. En donde muchos Estados han percibido que la composición estructural de los sistemas relacionales no han sido positivos para ellos y, por ello, han visto en esta composición una posibilidad de alterar las reglas dispuestas en la estructura (Krasner, 2001).

En cuestiones de soberanía, el impacto de las OOH que se crearon tras la IIGM, que en principio buscaban potenciar una mejora de oportunidades para los Estados facilitándoles el acceso al capital, para su desarrollo a través de la institucionalización internacional de herramientas, como fueron los llamados Gemelos de Bretton Woods: el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (Banco Mundial actualmente) y el FMI, ha estado caracterizado por la no consecución de los resultados pretendidos en sus proyectos. Provocando esto en ocasiones consecuencias no previstas²⁴⁹.

Asimismo, lo relevante en cuestiones de soberanía es el papel ejercido por estos agentes. Por ejemplo, el FMI, que se ha caracterizado por ser el organismo que filtra los préstamos a los Estados, bajo unas condiciones que exigen la aplicación de una serie de reformas para la

²⁴⁸ Como por ejemplo, cuando del proceso indicado se observa la constitución de la siguientes organizaciones: la UE (1993); la Unión de Estados Africanos (UEA (1958)) más tarde denominada UA (1999)); la ASEAN (1967); el MERCOSUR (1991); la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP (2004)); la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR (2008)) y recientemente la CELAC (2010).

²⁴⁹ En este sentido existen infinidad de informes, que al ser tantos es imposible señalar uno concreto. Sin embargo, consultando los indicadores que presentan agencias de las NNUU como el PNUD (Disponibles en <http://www.undp.org/content/undp/es/home.html>), o un repaso sobre por lo diferentes informes de propio BM (<http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/0,,menuPK:476823~pagePK:64165236~piPK:64165141~theSitePK:469372,00.html>), se detectan evidencias de la ausencia de resultados en muchos de sus proyectos (Consulta realizada el 16 de mayo de 2014).

obtención del crédito (Díaz, 1990), por lo general se ha inmiscuido mediante sus prácticas en la relaciones soberanas gobernante-gobernado y ha atentado, por lo tanto, contra la soberanía interna de los Estados receptores (Krasner, 2001).

Y es que en el origen de su constitución, tanto el BM como el FMI, sus dirigentes - principalmente los norteamericanos - deseaban que las IFI fuesen organismos tan influyentes, que pudiesen establecer una visión determinada del cómo se debían organizar política y económicamente los Estados receptores de ayudas para alcanzar el desarrollo (Rist, 2002). De modo que, a través de una argumentación teórica, se promovieron medidas que significasen una mejora en la situación de los Estados del Tercer Mundo, a través de donativos y préstamos, concedidos si se ejecutaban reformas institucionales indicadas por estos organismos²⁵⁰.

Dados estos hechos y la poca capacidad económica de los Estados en desarrollo, conjuntamente provocaron el que los receptores se viesen, en cierto modo, en una encrucijada. Ya que aceptaban o se encontrarían sin recursos y fuera del juego por su no acceso al capital y en cierto estado de aislamiento. Por lo que éstos se veían “obligados” a aceptar la aplicación de medidas con su respectiva cláusula de condicionalidad (Díaz, 1990; Krasner S. D., 2001; Rist, 2002). Práctica que ha significado que las IFI hayan sido una herramienta de injerencia en la soberanía interna de los Estados, sin lugar a dudas (Krasner, 2001, pág. 122).

Por lo que a partir del análisis de las prácticas de las IFI, parecen éstas haber perseguido más el cambio en las políticas internas de los Estados receptores de préstamos, que una recuperación del crédito otorgado. Puesto que son pocos los casos en los que se recupera el importe íntegro por parte de un Estado deudor. Lo que evidencia un proceso de institucionalización de prácticas internacionales que reproducen condonaciones, al no poder pagarse la deuda, a cambio de aplicación de políticas o recomendaciones por parte de las IFI (Azcona, 2002, pág. 191; Krasner S. D., 2001). Es decir, aparecen éstas como un medio para transformar las prácticas internas de un Estado.

Por otra parte y más allá del papel que han ejercido las IFI, se observa como el resultante de la transformación internacional sufrida tras la caída del muro de Berlín, ha resultado en

²⁵⁰ Hay que tener en cuenta la promoción de la práctica por parte del sistema desarrollista inscrito en la Ayuda Oficial al Desarrollo, en la que se incluyen préstamos concesionales y donaciones. Véase Osés, López, Aperador, & Parra (2006).

una nueva configuración de la estructura internacional, en la que se visualiza una clasificación en cuatro tipologías de agentes competitivos a nivel global. Por un lado, aparece un grupo de Estados que son competitivos actuando de manera independiente, como serían los casos de EEUU, China, India, etc...; por otro, la presencia de entidades que resultan de integraciones regionales como la UE, MERCOSUR, etc...; como tercer grupo, se observa la presencia de otros Estados con un papel secundario pero con liderazgo regional; y un cuarto grupo de Estados que se han encontrado lidiando con otros entes potentes en situación de desventaja en cuanto a capacidad operativa (Rivas, 2010).

Esta nueva realidad es relevante, al incidir en que la soberanía sufra alteraciones en la configuración de los Estados. Este proceso afecta, de diverso modo, a los agentes presentes en la SI. Especialmente, los Estados más pequeños son aquellos que, debido su capacidad económica y política, se encuentran con que su capacidad de decisión está en entredicho y su destino podría estar determinado por agentes relevantes, al encontrarse continuamente en un proceso de búsqueda de aliados que implementen su capacidad operativa. En este sentido, los Estados que se han unido a OORR están sujetos a acuerdos y a merced, en ocasiones, del grupo de Estados del que forman parte y, por lo tanto, sus decisiones estarán condicionadas en mayor grado y no serán decisiones independientes de *facto*.

Por otra parte, dentro de la creciente interdependencia global y a partir del proceso de incremento de los Acuerdos Internacionales de Inversión (AII), especialmente Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI)- dentro de éstos los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y los Acuerdos de Integración Regional (AIR) de carácter económico-, se percibe la importancia que representan las relaciones comerciales interestatales. En las que el aumento que ha sufrido la IED destaca por encima de otras prácticas. Cuestión que ha despertado la preocupación por el control de los capitales a través de las fronteras, ya que se percibe como un factor determinante para que un Estado pueda ser considerado autónomo y soberano en cuanto a su capacidad operativa (Biocca, 2006)²⁵¹.

En referencia a este fenómeno, ya afirmaba Richard Cooper (1934) que en un mundo que poseyese grandes mercados abiertos de capital, los Estados más pequeños tendrían serias dificultades para controlar su propia política monetaria, debido principalmente a que serían incapaces de controlar el flujo de capital a través de sus fronteras (Citado en Krasner (2001,

²⁵¹ Véase Capítulo III al completo para comprender la importancia e impacto de la IED en el contexto Internacional, en relación con la capacidad de decisión de los Estados.

pág. 26)). Evidenciándose, una vez más, que si un Estado no es capaz de regular el tráfico a través de sus fronteras, difícilmente será capaz de controlar lo que sucede internamente²⁵².

9.1 Desafíos en el nuevo mundo globalizado.

La SI vive un proceso caracterizado por la reformulación constante de los diferentes conceptos que inciden en las practicas relacionales, debido principalmente a la interdependencia creciente en la que todos los agentes poseen relaciones que contienen e impactan en diversos y variados ámbitos. Este proceso se ha denominado habitualmente: globalización²⁵³.

La globalización es definida por el FMI en la edición de mayo de 1997 del *World Economic Outlook* como:

“...el proceso de acelerada integración mundial de las economías, a través de la producción, del comercio, de los flujos financieros, de la difusión tecnológica, de las redes de información y de las corrientes culturales” (Citado en Hoyo (2001, pág. 9)).

Este proceso de interconexión, de y en diferentes áreas, tiene repercusiones profundas en la cuestión soberana, ya que el aumentar el grado de conexión entre agentes, debido a la propia práctica de las relaciones, provoca la existencia de diferentes fricciones que promueven la aparición de situaciones que, intrínsecamente, articulan la incidencia del proceso globalizador en la soberanía de los Estados (Weiss, 1998).

Esta cuestión obliga a una continua reconfiguración conceptual de la soberanía y sus alcances, en la que se ha de ser prudente a la hora de afirmar en donde reside la soberanía y qué cobertura alberga, ya que el impacto de la globalización en las decisiones que adopta un Estado es manifiesto en diferentes aspectos. Por ejemplo:

²⁵² El aplicar el control a capitales, a fronteras y aduanas, ha sido un hecho que se ha repetido en la historia de los Estados. Se han dado casos de impago por parte de Estados a deudores se ha procedido a controlar las aduanas por medio de la fuerza del país deudor, obligando a éstos a pagar a partir del control de flujo de capitales en sus fronteras. Como ejemplos relevantes aparecen las políticas de cañoneras aplicadas por Reino Unido en algunos países de ALC, o las intervenciones estadounidenses a principios de siglo en áreas del Caribe (Bethell, 2000; Fabela, 1958).

²⁵³ El término Globalización tiene su origen 1970 cuando fue usado por diversos autores para referirse a las conquistas europeas de la regiones no europeas en el Siglo XIX y concretamente al intento de integrar a éstas en el comercio global (Modelski, 1972). Es global este proceso por estar determinado como destino potencial de relación todo el espacio terrenal.

- a) **en el aspecto económico:** la cuestión de la movilidad de los inversores contrasta con la localización de los trabajadores. Una movilización de capitales en busca de una maximización de beneficios posee la capacidad de incidir en las políticas internas de los Estados, ya que éstos en busca de capitales pueden verse “obligados” a reformar sus políticas para satisfacer al inversor y lograr aumentar el empleo en su Estado;
- b) **el aspecto social:** las desigualdades, las promesas de mejora y el papel que ocupa el Estado como responsable de la función social y sujeto referencial de proporcionar satisfacción al pueblo, pueden ser causa de una política de competencia por atraer la inversión, en la que las disputas políticas puedan ser origen de una inseguridad ciudadana. Esto debido a que la entrada de capitales pueda reclamar que se regulen salarios y protección de los trabajadores en un Estado receptor. De modo que el papel desarrollado por agentes externos afectaría directamente a los ciudadanos estatales y esto origina dudas en cuanto a la lealtad-protección que el Estado posee como atributo soberano sobre el ciudadano (Onuf, 1991);
- c) **en el poder del Estado y su autonomía:** esta es puesta en duda por una doble causa: por una parte, por la mediación entre la presión fiscal y su aprovechamiento para fines de bienestar; y por otra, porque los Estados traten de evitar el conflicto con los mercados internacionales (en estos casos pueden causar cambios de políticas por parte de partidos);
- d) **el retraso tecnológico:** si bien éste se nombra como uno de los principales escollos en el desarrollo de los países, su promoción cambia de manera radical el funcionamiento de los Estados y sus economías. Debido esto, principalmente, a los recursos que posea el Estado, así como por la plusvalía con la que cuentan los productos comercializados;
- e) **las redes de información:** el aumento e implementación de éstas posee un delicado abordaje, ya que poseen la capacidad de transgredir las ideologías propias e incidir en comportamientos internos de un Estado²⁵⁴;
- f) **y el eje cultural:** afectan a través de la promoción de modos de vida ajenos, en los que la transformación de los imaginarios de necesidades ciudadanas pueden promover, tanto cambios en las actitudes sociales, como políticas y ser causa de reclamos de prácticas al Estado que no constituyen el deseo propio.

²⁵⁴ Véase al respecto Nye (1990; 2004).

*A partir de (Mann, 1997; Weiss, 1998; Nye, 2004).

Los aspectos indicados revelan los posibles efectos del proceso globalizador; así como las fracturas que presenta el proceso en su relación con la capacidad del Estado para ejercer sus decisiones autónomamente. Asimismo, se evidencia una tensión entre la figura del Estado-nación clásico y otros agentes, debido a que la práctica política en la que el Estado ejerce su labor de gobierno fricciona con las limitaciones e influencias que el proceso globalizador presenta, al haberse ido constituyendo una estructura multi-influyente que determina líneas de actuación de los diversos agentes.

Por último, señalar que en el proceso globalizador también hay que considerar otras cuestiones, ya que esta creciente interacción responde, en gran medida, a la promoción de una conciencia colectiva, en la que los Estados han asimilado que en el contexto actual poseen responsabilidades en cuestiones que no sólo afectan a sus competencias soberanas, pero que sin embargo si pueden incidir en ellas. Así como entienden que para solventarlas se requiere de una acción conjunta. Por ejemplo, cuestiones como: el tema medio ambiental, sus desafíos y retos; la delincuencia organizada internacional; las plagas; el suministro hídrico y alimentario, etc..., que no son sólo cuestiones de un Estado o región, sino que injieren en los colindantes de éstos y en algunos casos a la globalidad. Por ello, la acción conjunta es requerida para solventarlos.

9.2 Diversas motivaciones para asociarse en organización regional ante la globalización.

Si se establece que la constitución de Organismos Regionales (OORR) nace con el objetivo de regular el impacto de los efectos derivados de interacciones de carácter extra-estatal, a través de un proceso de refuerzo de los lazos regionales, la adopción de esta nueva configuración regional pudiese ser entendida como una reacción acorde a los efectos e incremento de la interdependencia en el contexto global. En donde los impactos que origina el proceso globalizador crean la necesidad constante en los agentes de adaptación a las nuevas situaciones que se originen. Por lo que éstos actúan buscando mecanismos que puedan solventar los diversos efectos multilaterales. Es por ello, que el propio estado de interdependencia puede haber provocado un ejercicio de reformulación de las prácticas y las reglas, en la que los Estados, actuando bajo la pretensión de impulsar una reforma en la estructura global, hayan optado por integrarse en nuevas configuraciones supraestatales, con base en la idea de que la unión hace la fuerza.

Pero es deber preguntarse y tratar de dar respuesta a este fenómeno, ya que, reconociendo que el regionalismo está teniendo gran incidencia en la nueva configuración de la SI, sería preciso señalar qué cuestiones podrían ser aquellas que caracterizan el impulso de los procesos asociativos, ya sean en modo de regionalismo, sub-regionalismo u otro tipo. Pues estos procesos subyacen bajo la pretensión de regular las relaciones en la CI, desde la perspectiva Estatal.

En aras de dar una respuesta a las cuestiones enunciadas, se han vislumbrando algunas de las posibles motivaciones que pudiesen poseer los Estados en cuestiones de soberanía, para adherirse a una organización supraestatal:

- a) **el sentimiento de *actor solitario*:** éste se daría cuando el proceso de asociación se efectuase como respuesta a la percepción de *no protección por parte de las OOI*. En este grupo podrían estar aquellos Estados que perciban que sus intereses no están siendo protegidos por las grandes instituciones de carácter global;
- b) **la *no participación en la toma de decisiones*:** En este caso la búsqueda de socios respondería al reclamo de igualdad en la participación en la toma de decisiones en aquellas organizaciones de ámbito global, como las OOI o IIFI (Consejo de Seguridad en NNUU; Presidentes FMI o BM, etc...). Con el objetivo de adquirir mayor capacidad a la hora de incidir en las reglas que determinan las interacciones. (Como por ejemplo la constitución de los llamados BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica));
- c) **la ambición por impulsar un modelo divergente de *ejecutar la práctica política*:** la asociación estaría impulsada por aquellos países que poseen ideas particulares de desarrollo, evolución o progreso, política, economía, etc...y que entienden que las líneas de actuación de las OOI van una dirección no acorde a sus voluntades. Por ello, aunar sus ideas en una institución más amplia puede otorgarles capacidad para actuar o fomentar la alteración de las prácticas. (Como ejemplo, la constitución del *Banco del Sur* (2009), que podría responder a esta causa al constituirse como alternativa al FMI, BM o BID)).

- **Nota:** *Existe la posibilidad de que la creación asociaciones responda a las tres causas o a otras no enumeradas aquí.*

Hay que señalar que la asociación no sólo tiene porque responder a una cuestión de intereses en asegurar o implementar el poder en un contexto determinado, ya que en

muchos casos la constitución de éstas OORR contienen un mayor número de factores, también relevantes, que a veces se dan la mano, como son los lazos culturales, cuestiones geográficas, lingüísticas, religiosas, étnicas, etc.... Elementos importantes a la hora de constituir pactos, puesto que tanto la cercanía como la identidad son elementos que agilizan la práctica política, así como facilitan la toma de decisiones²⁵⁵.

Además de existir una motivación para adherirse a una institución regional por haberse visto alterada la soberanía en su aspecto relacional con el exterior, la existencia de grietas en la relación del pueblo con sus representantes- lo que Krasner (1997) define como relación soberana gobernante-gobernado- también incide en el impulso de la constitución del agente regional. Fenómeno que responde a la incidencia de las prácticas de agentes externos en el interior de los Estados, ya que mediante las prácticas y decisiones de agentes externos se incide en la configuración de las políticas de los Estados y éstas afectan a los ciudadanos, sin haber tomado parte en el proceso de toma de decisiones. Lo que constituye una quiebra de legitimidad evidente.

Cuestiones como la privación de soberanía y la legitimidad ciudadana se hacen presentes, dado que la plasmación de acuerdos de carácter interestatal manifiesta una incidencia clara en las políticas internas. Situación que revela la existencia de una grieta entre la decisión del ciudadano y aquello que se decide. Dado que muchas no son decididas por los ciudadanos en última instancia, sino por grupos de expertos en nombre del bien común (Krasner, 2001).

Es decir, ante la no existencia de un organismo de carácter global que regule las fricciones entre los agentes externos y los requerimientos particulares de los Estados en las RRII, los Estados en ocasiones abogan por agruparse en entidades de carácter regional como respuesta al proceso. Organizaciones que, por lo general, serán recipientes que atiendan más directamente a estos reclamos, y un lugar en donde se verán mejor representadas las competencias soberanas de los ciudadanos. Por ello, la nueva organización resultante podría ser entendida como un acto que, evidentemente, active un mecanismo que reclama competencias en su interior, tratando de establecer, a partir de una nueva posición de fuerza conjunta, nuevas reglas con el exterior.

²⁵⁵ La identidad como elemento de toma decisiones a partir de (Taylor, 1996); el territorio en (Flores, 2008).

Este proceso de búsqueda de soluciones alternativas, ante la percepción de grietas en la relación soberana gobernante-gobernado, posee ciertas motivaciones que son las que en última instancia podrían haber impulsado el que se adopten este tipo de decisiones en el contexto internacional. Entre ellas, Jürgen Habermas indica las siguientes en su artículo: El Valle de lágrimas de la globalización (2001):

- a) **La pérdida de la capacidad de control estatal y de la autonomía:** Si el Estado aislado no es capaz de proteger a los ciudadanos contra los efectos de las acciones externas, así como frenar la influencia de decisiones de otros actores fuera de las fronteras, se daría una transposición de fronteras como resultado.
- b) **Déficit de legitimación en el proceso de toma de decisiones:** cuando dentro del proceso de gobernanza las decisiones finales resultantes de sistemas democráticos no coinciden con las voluntades y opiniones de los gobernados, las decisiones se transponen de instituciones nacionales a instituciones supranacionales en las que participan los gobiernos.
- c) **Incapacidad del gobierno de evidenciar su legitimidad y mando en la organización:** el Estado ve restringida su capacidad de intervención para decidir sobre las políticas sociales, así como para establecer políticas interventoras capaces de fomentar el crecimiento o la recaudación de impuestos para la redistribución o/y uso del Estado.

Estas problemáticas planteadas por Habermas ofrecen una esquema en el que, debido a la institucionalización de la RRII, los Estados se encuentran insertados en una estructura que frena la capacidad de decisión y autonomía en la toma de decisiones. Se produce una quiebra entre las voluntades de los ciudadanos y la de sus líderes, y a medida que se implementa la institucionalización la delegación de poder es cada vez mayor. Con lo que la capacidad de acción de un nuevo líder en un Estado en una situación de normalidad- en el sentido schmittiano- es mínima para transformar aquellos acuerdos que se adoptaron en nombre del “bien común”, dada la existencia de vínculos asociativos constringentes con otros agentes que determinan la vida diaria de los individuos en cuestiones de economía, derechos, cultura, etc... (Checkel, 2008). Por lo que la capacidad de optar por otro modo operativo se vislumbra como un acto que sería considerado rebelde, en primera instancia, y que podría suponer un aislamiento internacional.

Y es que hoy en día en el quehacer cotidiano de las relaciones entre Estados y entre éstos y las OOI, se entrevén prácticas habituales que propician cambios en las políticas internas de otros Estados, que en ningún caso involucran fuerza física. Pero que sin embargo, limitan la *suprema potestas* de los Estados, en términos de capacidad, para decidir los elementos y sistemas políticos y económicos claves para su organización interna. Estas prácticas no sólo determinan obligaciones y derechos que regulen la RRII, sino que influyen y determinan las estructuras políticas y económicas internas. Modalidad de intervención transnacional que se contrapone a la regla de no intervención y vulnera, en cierto sentido, el concepto de soberanía nacional o interna, puesto que se legitima a partir de la realización de convenios internacionales (Ej. Convenios de DDHH, Acuerdos comerciales y financieros, etc...) que, aunque no sean vinculantes en sí mismos, constituyen una costumbre jurídica internacional por su repetida práctica.

En este sentido, el proceso institucionalizador que ha sufrido la estructura internacional determina el que un Estado pueda ver sesgada su soberanía. Y aunque la cesión de capacidades haya sido un acto voluntario, de *facto* no será el Estado el que determine las prácticas con autonomía, al no haber estado caracterizada la constitución de las mismas con simetría.

Es en este contexto en el que es deber señalar que los Estados, que se vean afectados y que se sientan en desventaja, poseen la posibilidad de acudir a la búsqueda de alternativas con las que modificar el “orden o desorden” institucionalizado. Donde serán determinantes las capacidades fácticas que posean en un sistema globalizado como el actual. Ante lo cual pueden optar por adoptar diversas posiciones:

A) Integración a la globalización: un proceso de subordinación siguiendo las líneas neoliberales a pies de los mercados. (Ej. Consenso de Washington)

B) Ir contra globalización y la des-territorialización: buscar una “tercera vía” bajo dos variantes:

- 1) *Defensiva:* ante un capitalismo sin barreras mundiales, esta vía apuesta por la aceptación parcial a la subordinación al mercado. En donde el Estado tratará de adoptar una política en la que se potencie la construcción de una sociedad mundial integrada por medio del mercado, en la que se apueste por la implantación de un mecanismo que promueva una sociedad de “inversores responsables”; donde se asuman responsabilidades en las esferas de gobierno,

de las empresas y del mercado laboral; que finalice con pleno empleo; y se reconozca a cada individuo como un empresario. Ya que un factor elemental de ésta vía es la igualdad de oportunidades. Es decir, se adopta un modelo social que se base en la ideología competitiva siendo la labor del Estado la de proveer de herramientas.

- 2) *Ofensiva*: insistir en la supeditación de los mercados a la política en todos los campos, supranacionales incluidas. El modo de hacerlo en muchos casos encuentra su espacio en la búsqueda de unidades políticas mayores que los clásicos Estado-nación, en aras de no “romper la cadena de legitimación democrática” y conseguir dar respuestas a las reglas del libre mercado.

A partir de (Habermas, 2001, págs. 5-8).

Tanto la soberanía en su cara externa, en la que se configura la capacidad del Estado para ejecutar su decisión, como en la capacidad de los ciudadanos para ver reflejada su decisión en el comportamiento del Estado en la relación gobernante-gobernado, encuentra sus límites en la estructura internacional y la institucionalización de ciertas prácticas que no obedecen a sistemas de legitimidad ni de soberanía interna, ni externa, ni democrática. Por ello, las asociaciones que se realicen podrían indicar que la adopción de diferentes mecanismos responde a las pretensiones de los Estados particulares en el contexto internacional. Cuestión que parece ser una característica elemental de las relaciones, ya no internacionales, sino de las relaciones.

Es en este contexto señalado en el que la soberanía representa y constituye los diversos aspectos de una lucha de ideas y capacidades por establecer el tipo de reglas se practican, tanto en el interior de un territorio como en el exterior y entre otros, es decir, en la SI.

10. Conclusiones.

El análisis de las diferentes teorías que han abordado las cuestiones relevantes de la doctrina de la soberanía, en el que han primado la atención a los postulados en torno a la articulación del poder del agente soberano y en su órgano representativo el Estado, de éste en las RRII y del papel ejercido por los diversos atributos de la soberanía en relación con la constitución del DI, proporciona cierta información que permite determinar la existencia de una serie de características y atributos esenciales para comprender y establecer cuáles son las ideas subyacentes en la constitución teórica-práctica del término soberanía.

Ha quedado evidenciado en éste capítulo una serie de características que indican cuando se entiende que existe soberanía en cualquier época: 1ª) la soberanía ha estado y está asociada conceptualmente a un espacio delimitado: **un territorio**; 2ª) en éste se da la presencia de un **órgano cohesionador y representativo**, que es la figura o agente **que posee la capacidad de ser soberano**; 3ª) que este espacio se constituye o ha sido constituido mediante **un proceso de asociación o anexión**- ya sea ésta forzada o pactada-; en el que, habitualmente, 4ª) se concentra una **identidad común**, que es el factor que origina o justifica que se legue el poder en un agente.

En cuanto a la última cuestión, la identitaria, ésta se muestra como un atributo fundamental para la soberanía. Ya que el centro de poder instaurado en la cima de la representación de la comunidad, suele ser el pilar que aúna a un grupo de agentes con intereses afines y, a su vez, actúa como representante de este combinado. Pero hay que indicar en éste punto, que si bien la teoría se ha inclinado por afirmar que la identidad es un atributo originario de la soberanía, en la práctica ésta cuestión diverge dependiendo de en qué territorio se fije la mirada. Puesto que en algunos casos se observa cómo se han dado procesos en los que la soberanía en un territorio no ha encontrado su origen en una cuestión identitaria- como es el caso de los procesos de descolonización-, en donde la identidad con el territorio ha sido consecuencia de la creación del Estado en algunos casos²⁵⁶. Por ello, a la hora de analizar ha de tenerse en cuenta que este atributo de la soberanía puede presentarse de dos modos:

- 1) la identidad consolidada en el territorio partiría de un ejercicio de afirmación que refleja unos intereses comunes; una cultura común; lengua común etc... Es decir, se encuentra la existencia de una identidad histórica común en el que el poder lo acuña el soberano;
- 2) o de otro modo, tras el establecimiento de una delimitación territorial y aplicación de prácticas comunes, se da un proceso de construcción de identidad común²⁵⁷.

En cuanto al órgano cohesionador, si bien es verdad que el Estado ha sido el órgano institucional representativo de una “identidad” y territorio que aglutina la soberanía, los cambios recientes en el contexto internacional, con la aparición de OOII, OORR,

²⁵⁶ El ejemplo más claro es la creación de los países africanos tras su descolonización, donde los límites geográficos no respondían a la identificación de los individuos con el proceso.

²⁵⁷ A este respecto Jorge Larraín indica a: “... la identidad cultural como algo que está permanentemente siendo construido y reconstruido dentro de nuevos contextos y situaciones históricas y que no puede nunca decirse que está finalmente resuelta o constituida definitivamente como un conjunto fijo de cualidades, valores y experiencias comunes” (Larraín, 1994, pág. 62).

Organismos Sub-regionales (OOSRR), etc..., han situado al propio concepto en una tensión dicotómica: Estado-otros actores internacionales, que refleja una alteración en la conceptualización clásica de soberanía, al delegarse capacidades decisorias en organismos superiores²⁵⁸. En donde se evidencia un contexto en el que estos órganos asumen decisiones y responsabilidades que han correspondido a la figura del Estado soberano tradicionalmente.

A este respecto y ante este dilema, algunos autores²⁵⁹ han enunciado que son acciones soberanas la decisión del Estado de acceder de manera voluntaria a una cesión de competencias, siempre que exista la capacidad de denuncia del pacto o tratado por parte del Estado. Por lo que en éste contexto el Estado no habrá cedido su soberanía si posee esa capacidad²⁶⁰.

A pesar de esto, la propia práctica política y las RRII presentan huecos en donde es difícil vislumbrar exactamente donde reside la soberanía. En este sentido y aprovechando la dicotomía entre normalidad y excepcionalidad indicada por Schmitt (2013[1927]), o paz y guerra por Hegel (1999), podría concluirse que existen dos situaciones en las que la soberanía se hace presente. Por una parte, es en situaciones de normalidad en donde mediante la firma y adhesión de Estados a diversos agentes supranacionales, se va constituyendo un entramado en el que se van legando capacidades que limitan la acción diaria de los Estados al haber cedido competencias²⁶¹. Acción que constituye que acontezcan diversas circunstancias en las que las prácticas de los Estados se decidan, no atendiendo a los reclamos de sus gobernados, si no a pactos que, en algunos casos

²⁵⁸ Por ejemplo, el Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos (TEDH) como agente con capacidad de decisión última en cuestiones de derechos en un estado de normalidad, en sentido Schmittiano, o la capacidad del uso de la fuerza armada en la guerra al Consejo de Seguridad de las NNUU.

²⁵⁹ En este sentido, es debido rescatar que durante el Capítulo autores como Carl Duguit (1926), que afirmaba que la voluntad sólo se determina por sí misma y, por lo tanto, emana la decisión de ella; coincidente con Hegel, el cual elevaba a un nivel superior la autonomía a la hora de decidir cómo soberano afirmando que si no se refleja la autonomía en la decisión carecerá de significación la existencia de un ente que afirme ostentarla, ya que no será un cuerpo soberano; así como Jellinek (2000), que afirmaba que soberanía es la voluntad soberana para decidir qué decisión es adecuada para la asociación; el propio Heller (1995) cuando afirmaba que en tiempos de interdependencia la decisión marca la independencia y, por lo tanto, el hecho soberano; o el mismísimo Schmitt, manifestando que en la decisión última es donde se encuentra el ostentador de soberanía. Todos ellos como ejemplos de algunas de las manifestaciones que indican la importancia de la voluntad y la decisión última como acto soberano.

²⁶⁰ Esta diferenciación es relevante, ya que por el ejemplo, seleccionando y analizando a los EEUU, se observa como éstos si cedieron la capacidad de excluirse del pacto al firma la cláusula de no secesión.

²⁶¹ Como ejemplos de esta cesión: en caso de la guerra a las NNUU; en los DDHH al Tribunal de Estrasburgo de DDHH, en la política económica parcialmente los Estados Europeos a la UE, etc...

conlleven una pertenencia contractual de cierta temporalidad²⁶² y en otros casos supondría un aislamiento de la SI.

Cabría preguntarse ante esta adhesión a órganos supraestatales, qué sucede si un Estado decide que le gobierne otro agente en situación de normalidad: ¿es soberano?, ¿en qué grado? Ya que a este respecto también indicó Schmitt: que si un gobierno no es capaz de articular las decisiones en la economía en contextos económicos, éste debe renunciar al atributo de agente soberano.

En todo caso, es manifiesto el acuerdo existente de los analistas en situar a la voluntad y su representación como actos donde reside la soberanía, al considerar a la decisión última como la capacidad que se eleva por encima de cualquier otra. Por lo que su detección permitiría enunciar quién ejerce y realiza el acto soberano, e indicaría el acto soberano y, por lo tanto, quién es el soberano.

Es por lo indicado y sin que se haya encontrado ninguna teoría opositora a éste fenómeno, que se debe entender como acto representativo, inequívocamente, de soberanía, aquella voluntad que prime por encima de otras y aquella decisión que imponga su voluntad en cualquier ámbito relacional.

Aun así, siempre cabría indicar que, aun con un esquema relacional en el que la capacidad de gobernarse es cedida por los ciudadanos a una comunidad, esta comunidad a un Estado y un Estado a una organización supranacional, el gobierno del gobernado estará de *facto* dividido en varios niveles. Pero asimismo señalar que, si voluntariamente se ha cedido a este acuerdo y si existe la capacidad del Estado para su secesión, el Estado dispondrá de la capacidad de hacerlo en situación de excepcionalidad o normalidad si así lo decide, y ello indicará que es el agente soberano.

Sin embargo, ante la conclusión indicada, es debido señalar que, en estado de excepcionalidad, se ha evidenciado a lo largo de los diferentes periodos que la soberanía recae en el pueblo. Puesto que a este respecto ha sido reiterado desde los autores clásicos, que un pueblo y sus gentes que estén en desacuerdo con la figura del Estado poseen la capacidad de ser soberanos y alterar, incluso, el orden de la territorialidad. Ya que los Estados no son inamovibles de por sí en sus atributos y su configuración puede cambiar,

²⁶² A este respecto véanse las cláusulas implícitas en los TTBBII como la cláusula de supervivencia(*survival clause* en inglés), que en algunos casos alcanzan los 20 años de permanencia.

como se ha demostrado en periodos recientes de la historia. Por esto mismo, la construcción inversa también puede darse. Y la cesión de competencias a la unidad y la constitución de un órgano representativo con un territorio y con una identidad común, contando con el favor del pueblo, acabe constituyendo una soberanía de mayor grado. Proceso en el que los diferentes pasos que hayan sido adoptados significarán la construcción de soberanía.

En este sentido, el análisis al concepto soberanía ha ofrecido hechos relevantes sobre qué características han significado la actividad soberana en las RRII, de las que destacan las siguientes: a) soberanía interna; b) soberanía externa; c) soberanía interdependiente; y d) soberanía legal internacional.

Tabla 1: Características y espacios de la práctica de la soberanía.

SOBERANÍA					
PRIMER NIVEL	DECISIÓN / VOLUNTAD				
SEGUNDO NIVEL	SOBERANÍA INTERNA		SOBERANÍA EXTERNA	SOBERANÍA INTERDEPENDIENTE	SOBERANÍA LEGAL INTERNACIONAL
	Interna: se refiere a la organización de la autoridad pública en el Estado y al nivel de control ejercido por quienes detentan la autoridad.	Westfaliana: Aborda el tema de la exclusión de actores externos de las formas de autoridad interna.	Mide la capacidad de cada Estado de actuar sin presiones en el espacio internacional.	Esta categoría mide la capacidad de las autoridades públicas para controlar los movimientos transfronterizos.	Cuestiona las causas y méritos por los cuales se da el reconocimiento mutuo entre Estado u otras entidades.
PRINCIPALES FRICCIONES	GRIETAS ESTRUCTURALES				
	Gobernante-Gobernado; Legitimidad; Representación de Unidad.	Independencia; Integración vs sumisión; Derecho de Revolución; Resolución 1803 NNUU; Autodeterminación.	Autoridad o supeditación; cesión vs imposición.	Regulaciones: internas y externas; Dependencia dual; Agrupación VS Unidad; Competencia y Rivalidad.	Independencia; Reconocimiento; Reciprocidad; Derecho Internacional.

Fuente: De elaboración propia. ** Dentro de la soberanía interna se ha situado la soberanía Westfaliana, ya que desde la firma de la *Paz de Westfalia* es aquella categoría que ha abordado la no intromisión de actores externos en actos de autoridad sobre el territorio propio.

La exposición de estas categorías responde a que, si ha sido indicado que la capacidad de decisión posee diversos espacios de actuación, al hablar de un proceso de construcción de soberanía habría que detectar en qué grado se han ido cediendo las competencias o cuál es la intención oculta tras la capacitación a los diferentes órganos en las sub-categorías señaladas. Elección de sub-categorías que encuentra su fundamentación en los siguientes motivos:

- a) **Soberanía interna:** Esta sub-categoría indica la composición y el modo de organización de la autoridad pública. Es decir, el modelo de organización política y el alcance del control por parte de aquellos que se presumen soberanos.

La revisión de esta subcategoría indicará todo ente que infiera en la regulación de las prácticas del agente analizado, y permitirá vislumbrar y detectar cómo está organizada su autoridad y ver cuál es el alcance en la estructura. Lo que se detectará al revisar las prácticas ejecutadas en el territorio.

En cuanto a las fricciones presentes en la autoridad pública, desde la primera definición hasta la actualidad, la relación entre gobernantes y gobernados ha sido el eje-debate en el que se sitúa la legitimidad. Asimismo, desde Maquiavelo, pasando por Rousseau y hasta Locke y su derecho de gentes -el cual otorgaba derecho a la revolución en caso de que el líder no cumpliera con los derechos naturales que poseía los individuos-, la unidad ha representado aquel factor en el que la legitimación de la relación sería lo que aseguraría la armonía, como afirmaba Hobbes.

Al analizar esta categoría hay que prestar atención a los pactos y acuerdos realizados que fomenten la potestad regional. Pues en éstos se dibujan las líneas en las que opera este tipo de soberanía, ya que se evidencia el límite y capacidad de acción que existe en donde actúa la autoridad del gobernante y la supeditación a un actor externo²⁶³.

- b) **Soberanía externa:** Se observará en qué grado la capacidad que posee un agente soberano para que su criterio se vea reflejado en el exterior. Más concretamente, se refleja en la emisión de Tratados, acuerdos y normas internacionales, que tengan impacto en el papel que desempeña el soberano en el contexto internacional.

Se prestará atención al origen de las normas y reglas que componen el DI; si existió asimetría en el origen de dichas normas; y por otra parte, se examinará la capacidad de los actores en los diversos órganos con capacidad operativa en el contexto internacional (en este caso la IED como mecanismo de desarrollo, o incluso la propia constitución social de la soberanía).

- c) **Soberanía interdependiente:** ésta es determinante debido al aumento de las RRII comerciales, y más concretamente en debido al impacto de la globalización. Hay que señalar que el control de los movimientos a través de las fronteras se ha

²⁶³ En este hecho destacan dos tipos de actuaciones: **La coerción y la imposición. Coerción:** cuando los gobernantes de un Estado o institución amenazan con imponer sanciones a otro u otros, a menos que estos comprometan su soberanía interna. **Imposición:** cuando los gobernantes no tienen ninguna posibilidad de elegir; tan débiles que deben aceptar las estructuras internas (Krasner S. D., 2001).

transformado notablemente. En donde la capacidad que se posea por parte del soberano adquiere relevancia, en fin de asegurar la autonomía decisoria. En este sentido jugarán un papel determinante las cuestiones inter-relacionales que influyan en el aspecto económico, en el eje cultural, en la tecnología y en el aspecto social, ya que podrán articular la construcción de demandas ajenas a la construcción ideacional interna.

- d) **Soberanía legal internacional:** Es la categoría que informa del reconocimiento por parte de otros agentes soberanos. El reconocimiento por parte de otros agentes, es – como afirma Moreau- la expresión de individualidad del Estado como parte de una colectivo, en este caso de la CI.

El reconocimiento constituye el vínculo esencial y básico, que muestra el respeto y aceptación de la soberanía de otro territorio. Y aunque en la actualidad se trata de una soberanía en desuso por la institucionalización de la práctica los Estados, que en su mayoría se encuentran reconocidos, el hecho de ser reconocido es fundamental para ser objeto de DI en toda su amplitud, y en caso de constituirse una nueva entidad o institución que ejerza algún grado de soberanía, debe contar con el reconocimiento de los otros agentes²⁶⁴.

Asimismo, indicar que se ha evidenciado en este capítulo que la soberanía, y por extensión el Estado, se encuentra ante una situación en la que, mediante la constitución de organismos regionales, se van legando capacidades a diversos agentes que corrompen el clásico concepto de soberanía en sus atributos de indivisibilidad, independencia absoluta, responsabilidad última. Adoptándose paulatinamente un modelo de soberanía que podría ser tildada de “soberanía compartida”, o como propuso Vedross de “soberanía relativa”.

Por otra parte, reiterando lo indicado por Carl Schmitt respecto a los estados de normalidad y excepcionalidad, se encuentra acertado el señalar que las situaciones en donde habitualmente se hace presente el soberano serían en las de excepcionalidad. Pero sin embargo, es debido indicar que, una vez que la normalidad adopta mecanismos que dificultan que se produzcan situaciones consideradas de excepcionalidad, a partir de la institucionalización de la relaciones intrarregionales, en donde los agentes aceptan “voluntariamente” tomar parte en un organismo y en donde los mecanismos para que incluso en caso de excepcionalidad las coordinadas las dicte el órgano regional, aunque los

²⁶⁴ El caso que representa la disyuntiva del concepto en la actualidad es el de Palestina. Territorio que aspira a obtener un reconocimiento como Estado por parte de las NNUU. De hecho, existen Estados que lo han reconocido, Estados que no, y Estados que le conceden un Estatus diplomático especial.

Estados poseen las capacidades últimas de excluirse de las OOI, en el estado de normalidad se han delegado funciones. Y aunque la capacidad para realizar una autoexclusión del ente existe, se aprecia como muy remota y no se puede excluir la posibilidad que, en éste caso, la soberanía resida, en cierto modo y más en cuestiones de seguridad, en instituciones que no responden en muchos casos a las decisiones de los ciudadanos comprendidos en los territorios. Por lo que en cierto sentido las OOI se muestran como agentes con capacidad de aglutinar soberanía. Es decir, se estaría dando un proceso de construcción de soberanía en situación de normalidad que requiere ser tenido en cuenta.

Asimismo, entre otras cuestiones se pueden detectar elementos que pueden constituir una construcción de soberanía entendida como el legado de competencias. Esto lo evidencian cuestiones como la adopción de aranceles comunes; la justicia penal común; la moneda común; e incluso en la presencia de un proceso característico de las soberanías estatales como las elecciones regionales- como se produce en el caso europeo-, donde se producen cesiones de competencias. Hechos que podrían ser considerados como parte de un proceso de construcción de soberanía, pues se constituye desde una firma constitutiva, la ambición de construir una entidad de carácter supranacional. Es decir, por un parte el hecho de aglutinar, con el paso del tiempo, funciones y capacidades, ya sean de orden externo o de orden interno; y por otra, institucionalizar las prácticas que se realizan en el interior de una región. Acciones que pueden ser elementos que estén constituyendo una pertenencia a un territorio e una identidad común, atributos que caracterizan a la soberanía.

En definitiva, la doctrina de la soberanía está readaptándose a la creación de nuevos agentes que aúnan competencias que antes sólo estaban presentes en los Estados. Y si bien la referencia a una unión de Estados siempre encuentra su pilar teórico en la construcción de la unión política presente en la constitución de los EEUU, primeramente, y en la actualidad a las capacidades cedidas a la UE en Europa, para analizar los procesos constitutivos que potencian la integración, unión parcial o regional; así como que procesos posibilitan la construcción de una entidad superior a la estatal, que adquiera capacidades soberanas y se convierta en agente supranacional, es relevante detectar en qué modo se está dando un proceso de construcción de soberanía.

Asimismo y por último, indicar que llama la atención que con el proceso de globalización en pleno auge, en un sistema en el que la economía de mercado fomenta el libre mercado,

si a la soberanía se le concede la capacidad de regular, el fomentar un proceso desregulador en un campo tan fundamental como el económico, legaría la soberanía a la no norma, es decir, no habría más soberano que el capital, y si las decisiones de regular la economía en tiempos económicos se delegan a otros agentes, el soberano no será soberano decía Schmitt.

CAPITULO III. La Inversión Extranjera: concepto e institucionalización reguladora.

1. Introducción.

En los Estados en desarrollo la promoción de la práctica de IED opera bajo la justificación de que su entrada en un Estado es positiva para promover el desarrollo²⁶⁵ (Lewis, 1971; UNCTAD, 2008; OCDE, 2002). Esta causalidad se apoya en el convencimiento ideológico de que la IED actúa como un elemento “catalizador” de un cierto tipo de “desarrollo”²⁶⁶, que significará a los Estados el logro de un bienestar, asumiendo este estado como una meta común que se le presupone a toda comunidad que persigue implementar mecanismos, para lograr establecer una convivencia operativa y beneficiosa para el conjunto. Es en este espacio en donde la presencia de la IED se articula, entendiendo ésta como un factor promotor de la armonización de la convivencia - como se indica en el Capítulo I-. Y partiendo de este esquema se recomienda a los Estados que adecuen su regulación interna para que la IED opere en condiciones apropiadas y pueda lograr que el impacto alcance la meta prevista (OCDE, 2002). Medidas a adoptar que implican que los Estados aborden transformaciones políticas que faciliten, agilicen, favorezcan y en consecuencia, creen un clima determinado para que la IED opere y tenga un impacto positivo (OCDE, 2002, pág. 21).

La promoción de su práctica como mecanismo económico internacional, indicando a los Estados que adopten las transformaciones por su propio “beneficio”, se inscribe dentro de un proceso que agiliza el que se adecuen las prácticas políticas internas de un Estado al contexto económico internacional.²⁶⁷

²⁶⁵ Así lo indica el informe elaborado por la OCDE titulado “Inversiones extranjeras directas en desarrollo: un máximo de beneficios por un costo mínimo” (2002) al señalar: “Las inversiones extranjeras directas...forman parte de sistemas económicos internacionales abiertos y eficaces, siendo un catalizador importante del desarrollo. Sin embargo, los beneficios de las IED no se acumulan automática y homogéneamente en los distintos países, sectores y comunidades locales. Las políticas nacionales y la estructura de las inversiones internacionales son determinantes para que las IED lleguen a un número cada vez mayor de países en vías de desarrollo y para que se transformen efectivamente en desarrollo. Los países receptores por su parte tienen que establecer políticas transparentes, amplias y eficaces que propicien un clima adecuado para la inversión, con la consiguiente formación de recursos humanos y el establecimiento de un clima institucional apropiado” (OCDE, 2002).

²⁶⁶ Véase Capítulo I para profundizar en los diferentes tipos de desarrollo.

²⁶⁷ Este proceso responde y se asocia en cierto sentido con las teorías del liberalismo económico. La relación con la IE no ha sido descrita claramente en el liberalismo clásico. Sin embargo, sí hay una relación entre la economía y la política y todo hace indicar que, a partir de una complementación económica entre los individuos en donde, como mecanismo para la maximización del interés individual se tenderá a la producción

La literatura económica que aborda la cuestión de la IED se constituye, en gran medida, sobre la premisa de que un Estado con un capital acumulado-con exceso de capital-, obtendrá mayor rendimiento del excedente si decide invertir en un Estado receptor en el que el recurso sea escaso. Asumiendo que el rendimiento será mayor en el país receptor que en el de origen y es por ello, que bajo una actitud que persigue la búsqueda de maximización del beneficio, el capital se desplazará a un territorio en donde obtenga mayores rendimientos. Inversión en la que la otra parte, el Estado receptor, verá como el capital que, teóricamente, produce efectos positivos para el crecimiento y el desarrollo, acudirá en su beneficio por las ventajas competitivas que éste ofrece (Krugman & Obstfeld, 1999).

En este sentido, el liberalismo económico promueve el que los Estados adopten una visión- a partir del concepto de liberalismo clásico²⁶⁸-, en la cual la seguridad física y la protección de la propiedad privada deben estar aseguradas, en una CI que excede los límites territoriales del Estado.

La idea liberal económica posee el desafío de articular la operatividad económica, conjuntando un proceso que logre la libertad del mercado y la no injerencia del Estado en la actividad económica. Ofertando que bajo éstas premisas el proceso conduce al sistema a un equilibrio de fuerzas, resultando de su práctica mejores logros a nivel individual y global. De hecho, bajo este postulado la globalización económica se presenta como la meta de todos los Estados nacionales (Schneiderman, 2008, pág. 111).

De acuerdo con los requerimientos de las instituciones internacionales, la ideología liberal expone que la intervención del Estado en la regulación de la IED está injustificada, puesto que entiende que los equilibrios de mercado tenderán a regular automáticamente el impacto. Y conductas como la expropiación u otras que contravengan las expectativas de

de sinergias integradoras en donde, en una sociedad en la que las comunicaciones e interacciones son constantes, el control al capital se muestra como aspecto que frena el que se regule la distribución del capital. Asimismo, en el aspecto de la IED, y siendo conocedores de los actores que la ejecutan, señalar que ésta actuará como factor individual buscando una maximización de consumo para los individuos, de beneficio los empresarios, y de reelección los políticos (Kegley & Wittkopf, 2004, págs. 29-58). Desde un Enfoque de la Teoría liberal de las RRII, se entiende que la regulación de las RRII está construida a partir de las bases sociales. La ley emana de la costumbre, y al pasar al campo internacional se adoptan aquellas reglas y normas que surgieron desde abajo trasladando el funcionamiento al ámbito internacional. En donde la relación con la IED, representada por actores individuales, requiere de una seguridad para invertir su capital fuera de sus fronteras. Por ello, dado que los Estados ejercen de autoridad pública y son aquellos de los que emanan las reglas y encargados de asegurar su cumplimiento, son los encargados de regular las acciones de las empresas y los actores privados internacionales, y se les exige a ellos colaboración en la acción de protección (Slaughter & Alvarez, 2000, pág. 240).

²⁶⁸ Para profundizar sobre el liberalismo clásico véanse Kegley & Wittkopf (2004) o Rawls (2004).

los inversores, serán contraproducentes para el próspero devenir de la economía y, consecuentemente, para el desarrollo y el bienestar.

El liberalismo aboga por un Estado que no intervenga en la economía para evitar distorsiones. Indicando que sus intervenciones irían en contra del libre flujo de capitales. Sin embargo, para establecer este criterio operativo se requiere de cierta intervención del Estado y de la adopción de ciertas medidas que agilicen el buen desarrollo de su práctica. Entre las medidas requeridas al Estado se indican como necesarias: a) eliminar barreras al comercio internacional; b) permitir el acceso a los factores de producción no existentes en el Estado receptor; y c) una disminución de los costes de transacción que faciliten a adquisición de factores de producción en el extranjero (Krugman & Obstfeld, 1999).

El esquema que se dibuja en la información expuesta ofrece elementos que requieren de una revisión en sus conexiones. Por una parte, la cuestión del papel del Estado en favor de la promoción de prácticas inversoras para alcanzar el “desarrollo”, requiere de un ejercicio que analice el rol que ejerce este mecanismo en la función de soberano que tiene atribuido el Estado; así como por otra parte, requiere de análisis el impacto de la IED en un contexto global, ya que en principio se plantea un esquema en el que si todos los Estados reformulan su práctica política interna, suponiendo que esta acción actuase como catalizador de la IED, esta afirmación encuentra puntos discordantes con el propio sentido de la inversión, ya que en principio ésta busca recursos que explotar y ante la igualdad de condiciones en todos los espacios, podría significarse que la adopción de regulaciones no fuese relevante. Asimismo, no se indica en el planteamiento inicial qué sucede en caso de que un Estado no obtenga los frutos aventurados acometiendo la regulación indicada, y tampoco si habría algún agente con responsabilidad, en caso de no alcanzar las metas indicadas aparte del Estado, una vez adoptada la regulación específica en este área de su competencia.

Por otra parte, respecto al impacto en el desarrollo, la cuestión que es igualmente significativa será conocer en qué grado la práctica de la IED ha logrado reducir las asimetrías que se enuncian en su promoción, ya fuere en la cara interna del territorio receptor o en términos internacionales dentro de la CI. Puesto que como se ha señalado, este fin es un elemento principal en su promoción.

A partir de estas cuestiones, se debe señalar que más incógnitas irán apareciendo durante su análisis. Las cuales actuarán como mecanismo deshilachador y presentarán nuevas

cuestiones transversales que, de una u otra forma, ayudarán a componer el conocimiento y completar el esquema presentado sobre la IED.

2. Objetivos del capítulo.

Para dar respuestas a las cuestiones acontecidas en la leve introducción del capítulo y en línea con el estudio en general, éste tratará de esclarecer cómo se ha ido articulando el mecanismo internacional que determina el funcionamiento de la IED en la SI. Ejercicio que se realizará tratando de exponer y definir como han actuado los diversos agentes en la institucionalización internacional de la IED en la CI.

Es por lo indicado que se requiere analizar y exponer cómo se han ido constituyendo las diferentes reglas que forman parte del mecanismo regulador, en el que opera la IED desde una perspectiva de soberanía; así como indagar acerca de cuáles han sido los diferentes niveles de capacidad operativa, que hayan sido dispuestos por parte de los diferentes agentes en la promoción de dicho mecanismo. Asimismo, de acuerdo con los diferentes factores (capacidades; ideas; intereses; objetivos, etc...), se perseguirá observar si la promoción de la reglamentación se ha caracterizado por una disposición simétrica de los actores parte en su configuración y si el ejercicio posee algún tipo de incidencia en la permanencia o eliminación de la desigualdad en la CI y en el interior de los Estados.

Ante el alcance de estos objetivos, será necesario detectar en qué grado han podido manifestar e incidir en la composición de la normativa internacional los Estados que poseían una posición ventajosa “desarrollada” (agentes relevantes) - ya fuere militar, económica u otra-, y aquellos que comenzaban el proceso de relación y negociación en una posición más débil (agentes no relevantes)-descolonizados o nuevos soberanos-; así como observar si los Estados en desarrollo han dispuesto de capacidad participativa en la composición de normativa internacional; y el papel y relevancia de las acciones de los diversos agentes que han ido surgiendo alrededor del mecanismo regulador en la configuración de la normativa internacional, en atención a cuestiones de IED (OOII, instituciones internacionales, tribunales internacionales, etc...).

Es por lo indicado, que para acceder a la comprensión de los objetivos principales, en el capítulo también se abordará el análisis y exposición de las cuestiones básicas, requeridas para que se comprenda el alcance de dicha práctica, como: en qué consiste la IE; los motivos de su promoción; su impacto directo e indirecto en los diferentes campos, como el

poder, la economía, lo social, etc...; el factor que es base de su justificación en términos de desarrollo: la desigualdad o reducción de asimetrías. Abordando en dicha tarea el análisis de los diferentes mecanismos creados en torno a la regulación de la IED, así como su papel y las críticas principales que ha recibido la práctica.

3. Perspectiva analítica: se aborda el estudio de la Inversión Extranjera Directa desde el campo político.

El análisis de la IED será abordado desde la perspectiva política primordialmente²⁶⁹, aunque la economía y el derecho irán de la mano por motivos visibles, dado que estas materias se incluyen dentro del acto soberano y, por lo tanto, de la política. Es decir, si bien se trata de una cuestión que se enmarca habitualmente dentro del campo de la economía, el enfoque que ha sido inscrito por el planteamiento inicial, se apoya en que la soberanía es el elemento sobre el que incide la práctica, situando *la capacidad de decisión* como el eje en torno al que se articula el poder en una comunidad organizada. Por lo que la IED se debe analizar bajo una perspectiva de poder, en la que se produce la dicotomía: decisión interna vs decisión externa.

Para realizar este cometido, ha sido útil el rescate de un artículo de John Kenneth Galbraith, en el que aborda la importancia de detectar en donde se encuentra el poder en un contexto económico (*El poder y el economista útil* (1974)). Éste indica que existe una fricción entre el mundo económico y la toma de decisiones, señalando que ciertas teorías (Neoclásica, Neo-keynesiana y sus antiguas) suelen eliminar el estudio del poder a la hora de elaborar teorías económicas y, por lo tanto, tienden a fulminar el contenido político cuando los Estados se someten a lo que dispone el mercado.

En su argumentación Galbraith indica que si un Estado dependiente de los ciudadanos se somete al mercado, el Estado legaría su poder y capacidad de decisión a la ciencia económica. Acción que desplazaría automáticamente la capacidad de decisión del ciudadano a ciertos cuerpos decisorios externos, ya fueren éstos académicos: de “expertos”;

²⁶⁹ Esto indicado en el sentido que lo hacía de Platón, al analizar el arte de gobernar y saber que éste se divide en dos: el rey y el tirano. Es decir, aunque ejecutando las acciones mediante la fuerza y aceptándolas libremente, no es fácil detectar cuando es la segunda o la primera en diversas acciones. La política será capaz de vislumbrarla. Es decir: “...llamemos, pues al arte de gobernar mediante la violencia, tiranía; y al arte de gobernar voluntariamente a animales bípedos, que se prestan con a ello con gusto, política; y proclamemos que el que posee este arte, es el verdadero político” (Platón, 1872, pág. 59); mezclando esta perspectiva con aquella que enuncia Carl Schmitt en *Lo político* al indicar que: el concepto de unidad es aquel que supone lo político (Schmitt, 2013[1936]).

o políticos: de líderes. Asimismo, sostiene que si los expertos han desarrollado su proceso de aprendizaje, es decir, la adquisición de conocimiento bajo unas premisas y unas convicciones operativas en las que priman una serie de mecanismos que, aunque válidos para un determinado fin, no tienen en cuenta las cuestiones de poder, los Estados pasan, al igual que los ciudadanos, a estar supeditados a una hegemonía ideacional; supeditados a un agente difusor que actúa de manantial de doctrina. De modo, que en un contexto de RRII la soberanía se vería quebrantada automáticamente en dos ejes: en cuanto a la autoridad del soberano con otros territorios- eje horizontal-, y en cuanto a la voluntad de los ciudadanos con las prácticas aplicadas en el Estado- eje vertical-.

Construyendo un argumento a partir de la premisa señalada y siendo aceptado que la IED es en sí: una inversión, que se define como el acto mediante el cual se invierten ciertos bienes con el ánimo de obtener unos ingresos o rentas a lo largo del tiempo (Shapiro, 1975); siendo una práctica que persigue la obtención de un beneficio bajo el control de un agente -ya sea empresa o institución-; y que la búsqueda de beneficio responde a un pensamiento económico de maximización de beneficios, en dependencia directa con los mercados, en el caso de que el Estado se subordine a los mandatos de un agente externo y sitúe su meta de “bien común” en dependencia de esa variable, su capacidad para abordar cuestiones de índole interno y externo, ciertamente, se verá condicionada por esta práctica. Por lo que la única acción que representaría una retroversión a esta práctica, sería una respuesta por parte del Estado en la que reclame, imponga y sitúe su autoridad, como el factor determinante en la regulación de esa práctica económica. Por ello, la articulación de mecanismos con capacidad emancipadora que existan en el propio Estado, determinan en cierta medida cuan soberano se es.

“Dado que el poder interviene en forma tan total en una gran parte de la economía, ya no pueden los economistas distinguir entre la ciencia económica y la política, excepto por razones de conveniencia o de una evasión intelectual más deliberada. **Cuando la corporación moderna adquiere poder sobre los mercados, poder en la comunidad, poder sobre el Estado, poder sobre las creencias, se convierte en un instrumento político, diferente del Estado mismo en su forma y su grado, pero no en esencia**” (Galbraith, 1974, pág. 239) [Negrita propia].

En la actualidad no se puede concebir al proceso de inversión como un acto particular que ejerce un individuo bajo su apetencia personal, sino que el acto es una consecuencia de la estructura que configuran los procesos sociales, junto con la meta que como sociedad éste

inscrita en el ideario ideológico. Es decir, el acto de inversión responde a la estructura dispuesta en el conjunto de la sociedad y no a un acto particular de un individuo, una compañía transnacional o un Estado. Esto es debido a que este hecho particular se desarrolla en unos límites determinados, de acuerdo con las demandas y ofertas, bajo el ordenamiento y las reglas que hayan sido constituidas por la comunidad en la que se produzca el hecho. En donde las reglas serán producto de un proceso asociativo influido y constituido bajo las creencias de aquello que sea considerado “bien común” en la sociedad. Por ello, conocer el cómo se determinan las reglas en las que operan los diversos agentes, es esencial para detectar si se da la existencia inicial, la reproducción y el desenlace, de asimetrías en el funcionamiento del mecanismo en el tiempo.

Con este esquema ideológico operativo de cómo se articulan los mecanismos relacionales en la CI, es sobre el que se debe situar y entender el análisis sobre papel que desempeña la práctica de la IED. Ésta, que actúa en apariencia como un elemento sustancial al desarrollo y se define como la práctica impulsora de beneficios múltiples para el Estado receptor, se fomenta y opera bajo diversas normativas que, han sido, son y serán relevantes en cuestiones soberanas.

Asimismo, el detectar los alcances en cuestiones de poder, que pueden indicar y permitir el desvelar las incertidumbres que implica la práctica de la IED en las RRII, facilitará la acción de señalar qué vínculos contiene la práctica en el ejercicio del poder. Lo que permitirá vislumbrar la relación de los agentes y sus capacidades para actuar e imponer su visión en un contexto determinado. Es decir, debe observarse en qué grado el poseer o conquistar ciertas capacidades, una vez poseídos o adquiridos los intereses cognoscitivos prácticos (el ejercicio de la IED como solución al desarrollo) y el interés cognoscitivo técnico (la metodología que promueve ésta teoría desarrollistas), podría posibilitar que se alcance una capacidad transformadora, que actúe como acción representativa de emancipación mediante nuevas construcciones sociales operativas- esto según (Habermas, 1990)-. Hecho que permitirá visualizar la capacidad para realizar decisiones propias, en la dicotomía de poder que desafían los postulados inversionistas: interno-externo.

4. La Inversión Extranjera. Contextualización del análisis.

Discurso de Angostura, en 1819. Simón Bolívar.

“Por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza; y por el vicio se nos ha degradado más bien que por la superstición. ... hombres ajenos de todo conocimiento político, económico o civil; adoptan como realidades las que son puras ilusiones...” (Bolívar, 1819).

Es un hecho contrastado que las relaciones comerciales entre las diferentes comunidades datan desde los inicios de la historia. Lo son desde que comenzó la interacción entre las mismas. No cabe obviar en este sentido, que la finalidad de la ciencia económica²⁷⁰ es la distribución “adecuada” de recursos entre los diferentes ciudadanos y grupos existentes en una comunidad, y ejercer como mecanismo de articulación relacional que satisfaga las necesidades particulares. Es por ello, que en todas las civilizaciones la importancia del comercio y de la inversión - promovidos éstos por la existencia de recursos naturales, infraestructura básica, cierto grado de organización e impulsado el proceso por la innovación (Krugman & Obstfeld, 1999)-, han formado parte de las prácticas habituales. Prácticas entre las que, con el paso del tiempo y el aumento de las interacciones sociales, la inversión se ha ido acrecentando como práctica cotidiana dentro de las relaciones entre individuos, comunidades, Estados, y más tardíamente, entre estos agentes con empresas multinacionales o inversores internacionales.

A este respecto, la primera distinción que debe ser enunciada para alcanzar una comprensión de las dimensiones conceptuales de la inversión, es señalar que en un contexto de RRII hay que diferenciar entre los dos tipos de Inversión Extranjera (IE) existentes:

- a) **La Inversión Extranjera Directa (IED):** se compone de inversiones que implican la transferencia de recursos de un país a otro con fines productivos. Significando esta práctica que se produzca: a) la adquisición, ya sea completamente o en parte, de corporaciones existentes; b) constitución de nuevas corporaciones; o c) participación total o parcial en actividades económicas.
- b) **La Inversión Extranjera Indirecta (IEI):** son los empréstitos concertados entre gobiernos; o de éstos con OOI o IIFI. Es decir, todo aquello que constituye deuda pública externa (ésta representa una financiación externa en caso de incapacidad financiera por parte del Estado).

En este estudio actúa como eje central de análisis la IED, pues es aquella que, además de haber sufrido un incremento exponencial en los últimos años, en principio, se le supone

²⁷⁰ Economía en la RAE: 1.f Administración eficaz y razonable de los bienes; 2.f Conjunto de bienes y actividades que integran la riqueza de una colectividad o un individuo. <http://lema.rae.es/drae/?val=econom%C3%ADa> (Consulta realizada el día 02 de diciembre de 2013).

una imparcialidad política en su práctica²⁷¹. Ya que en teoría opera de acuerdo a la doctrina económica y no está intrínseca una carga de injerencia política a “priori”; además de que, es habitualmente resaltado, su práctica obedece a mecanismos propios de la doctrina en busca del “bien común global”²⁷².

Contrariamente a la IED, la IEI si posee una carga política en su práctica. Dado que ésta obedece a préstamos personados en Estados soberanos o agrupaciones interestatales que pueden poseer, como agentes representantes de comunidades, intereses diversos a la propia y simple “técnica” o “ciencia”, a la que se supone responden las inversiones que promueven fines productivos y fomentan desarrollo como es la IED.

La IEI, que se constituye como deuda entre los agentes, ha formado y forma parte de uno de los procesos más relevantes en cuestiones referidas a la injerencia en la soberanía por el carácter deudor del ejercicio, en el cual es percibido como “legítimo” el exigir por parte de los Estados prestadores que los deudores alteren prácticas internas- aunque esto pueda constituir en esencia una injerencia en la soberanía interna²⁷³. Asimismo, la práctica de la IEI evidencia un síntoma que, cuando menos, indica una asimetría en poder y responsabilidad. Puesto que en el supuesto caso de que un Estado solicite “ayuda” a otro, y adopte ciertos compromisos de transformación a partir de recomendaciones²⁷⁴ externas en pos de cubrir su deuda, no supone ninguna responsabilidad para el actor externo en caso de que esas transformaciones exigidas produzcan efectos perjudiciales para el Estado deudor. Por lo que en ésta práctica se produce una injerencia en la soberanía interna con una ausencia de responsabilidad que se supone atributo esencial de la decisión política. Pero lo relevante para éste estudio de este hecho, es que observando que esto sucede en la práctica de la IEI, será necesario y pertinente averiguar qué tipo de responsabilidades subyacen bajo la práctica de la IED.

²⁷¹ Aunque hay voces que manifiestan lo contrario por el origen propio de la educación de los expertos: “...raros son los economistas que...son verdaderamente conscientes de los límites que el origen occidental impone a su ciencia” (Rist, 2002, pág. 127).

²⁷² Así lo indican las principales instituciones internacionales: NNUU; FMI; BM; OMC, etc... Así como las agendas de los diversos Estados y discursos políticos. Véanse entre otros “muchos” existentes los informes: OMC (2001); OCDE (2002); NNUU (2010); OMC (2001); UNCTAD (2008).

²⁷³ En este sentido véase EURODAD (2006); y diversos documentos e información que realiza la Red Europea sobre Deuda y Desarrollo disponibles en <http://www.eurodad.org> . (Consulta realizada el día 02 de diciembre de 2013).

²⁷⁴ Recomendaciones que adquieren la condicionalidad en su ejercicio práctico. En este sentido se señalan las prácticas ocurridas durante los años 80 y los préstamos ejercidos por el BM y el FMI, en donde en ocasiones se producía un “condicionalidad cruzada” (EURODAD, 2006; Dávalos, 2003).

Por último indicar, que si bien es cierto que ha sido en los últimos tiempos cuando se ha incrementado exponencialmente el volumen de IED, se ha de señalar que no es una práctica de menor importancia en la historia. Ya a finales del siglo XIX se producían movimientos inversionistas muy elevados, como se evidencia al revisar los datos que presentaba una de las potencias mundiales de la época como Gran Bretaña, la cual tenía el 40% de sus ahorros invertidos en otros Estados (Krugman P. R., 1994, pág. 264).

4.1 En qué consiste la Inversión Extranjera Directa: motivaciones de activación y uso como práctica internacional.

La IED tiene “...lugar cuando el nacional de un país adquiere el control de una actividad empresarial o de un activo real en otro país”, en donde “...el nacional puede ser un persona física, pero generalmente es una organización mercantil” (Graham, 1992, pág. 13). Por lo tanto, la IED puede ser descrita como el medio principal a través del cual las empresas extienden sus operaciones hacia localizaciones fuera de su frontera nacional (Remolains & Coria, 2000).

Esta práctica en la actualidad y según la OCDE- según el *Benchmark Definition of Foreign Direct Investment* en su 4º edición ²⁷⁵- posee las siguientes características:

- La IED refleja el interés de largo plazo por parte de un inversionista en una empresa residente en otra economía diferente a la del inversionista.
- El interés de largo plazo implica la existencia de un grado significativo de influencia en el manejo de la empresa que recibe la inversión directa.
- Se considera IED cuando el inversionista adquiere el 10% o más las acciones con poder de voto de la empresa residente en otra economía diferente a la del inversionista.

Se debe señalar una puntualización referente a un conflicto entre la IED y su denominación. Se observa una designación inadecuada en las prácticas atribuidas a la definición, ya que existe la posibilidad de que se considere un acto de IED, una acción en la que no se produzca una inversión real de capital del exterior. Esto sucede cuando, por ejemplo, se contabiliza como IED la acción de una empresa que adquiere algún título que conlleve el control en una empresa de un tercer Estado. En este caso señalado la acción se contabiliza como IED, pero no se produce ninguna inversión de capital; e igualmente si,

²⁷⁵ Disponible en la Página: <http://www.oecd.org/fr/daf/inv/statistiquesetanalysesdelinvestissement/fdibenchmarkdefinition.htm>. (Consulta realizada el día 21 de febrero de 2013).

por ejemplo, la aportación de capital se produce a través de la obtención de financiación por medio de la solicitud de un préstamo en el Estado receptor de la IED, tampoco se ejecuta ninguna transferencia de recursos financieros o reales entre Estados²⁷⁶. Por ello, se debe puntualizar y ser prudente a la hora de confundir el sentido semántico de la práctica con la realización en sí de la misma, conociendo que no siempre se trata de una localización de capital externo en un Estado.

4.1.1 Pertinencia y motivación de la promoción de la Inversión Extranjera Directa.

Entre los clásicos argumentos en cuestiones de IED se encuentran los postulados de la escuela de la Teoría del Comercio Internacional, que tiene en la figura de David Ricardo a su máximo exponente. Éste, argumentando que los patrones de intercambio se explican por las diferentes dotaciones de recursos que existen en los países que intercambian bienes, arguyó que aquello que es relevante en el establecimiento de las relaciones comerciales entre los Estados es la ventaja comparativa que se posea. Pero, ¿cómo se detecta este factor? Krugman despeja la duda afirmando que: “...un país tiene ventaja comparativa en la producción de un bien si el costo de oportunidad en la producción de este bien en términos de otros bienes es inferior en este país de lo que es en otros” (Krugman & Obstfeld, 1999, pág. 12).

El esquema presentado por Ricardo y Krugman es clarificador para un Estado que pretenda aprovechar las potencialidades presentes en el comercio internacional. En donde éste debe indagar y hallar aquellos sectores en los que posea la ventaja comparativa e impulsar los medios necesarios para promocionar el uso de esta ventaja en el contexto internacional. Es por ello, que en caso de no contar con la capacidad- ya sea de capital o tecnológica- para explotar la ventaja comparativa, deberá tratar de buscar mecanismos y/o medios para alcanzarlo. En ese espacio es donde la IED aparece como recurso para los Estados y desarrollar su función, al posibilitar la articulación de justificaciones en torno a su práctica en la CI. De hecho, la IED se presenta en forma de capital- salvo excepciones- y además, se señala que ésta promoverá un flujo de mercancías, la producción y las exportaciones de éstas, a la vez que atraerá tecnología sin costes añadidos a los Estados

²⁷⁶ En este sentido, si se acude a aquello que se considera IED en Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TCLAN), Capítulo XI, Art. 1139 en el enunciado d) dice así: “...un préstamos a una empresas, i. cuando la empresa es una filial del inversionista”. Es este caso al que se presta atención y no se produce un transvase de capitales.

receptores (Ray, 1998; OCDE, 2002). Del mismo modo, bajo el auspicio de esta teoría se ha construido el pilar teórico que da impulsó a las políticas “Globalistas”, en las cuales se afirma que el hecho de abrir las fronteras a la IED, causa que el país se adentré en un mercado integrado y además, la IED actuará como el factor determinante para alcanzar la convergencia de renta entre los diferentes actores (Sanahuja J. A., 2007).

Ante la promoción de la práctica como impulsor de desarrollo, cuestionando el origen ideacional y el efecto de dicha práctica, sustentado por la Teoría del comercio internacional, en los años 60-70- como ya se vio en el Capítulo dedicado al análisis del desarrollo- apareció en escena la conocida como TD. Los impulsores ideacionales de este postulado afirmaban, contrariamente, que la IED era una herramienta de control por parte de aquellos países que, mediante la explotación de los territorios menos posibilitados armamentísticamente, habían logrado acumular una gran cantidad de capital y avance tecnológico y, una vez establecido un sistema de naciones, en los que se “reconocía” la soberanía de los Estados²⁷⁷. Afirmando que los Estados “desarrollados” continuaban el proceso colonizador mediante un sistema de relación en el que primaba la asimetría y en donde la IED encajaba como herramienta a su disposición. Dibujándose de ello, un esquema en la CI en el que los Estados en desarrollo se encontraban en una clara desventaja competitiva, dadas las grandes diferencias de capital entre unos y otros (Marini, 1973; Sunkel, 1973; Santos, 1974).

“El uso de la fuerza para someter a la masa trabajadora al imperio del capital disminuye a medida que entran a jugar mecanismos económicos que consagran esa subordinación” (Marini, 1973, pág. 31)

Más recientemente, diversos sucesos- como el que los préstamos bancarios por parte de las IFI resultasen ser mecanismos que no aseguraban la reducción de asimetrías, ni entre los Estados, ni en el interior de los Estados²⁷⁸; la caída del muro de Berlín; y que la teoría de aquellos que veían una intencionalidad de dominio en un mecanismo económico “técnico” fuese desplazada del entorno de la decisión política²⁷⁹-, impulsaron que la IED se fuese convirtiendo en el mecanismo de financiación que primaba en los Estados en desarrollo, ya

²⁷⁷ Véase el trabajo de Anghie (2004). En donde se expone de manera brillante la evolución de la institucionalización como categoría de la soberanía en el DI.

²⁷⁸ Hasta 1980 se produjo una gran escalada de la desigualdad, tanto entre Estados como en el interior de los mismos. Desde 1980, entre los Estados se ha visto reducida. Sin embargo, entre los ciudadanos se ha incrementado (Sutcliffe, 2011; Bourguignon & Morrisson, 2002).

²⁷⁹ Por ejemplo, mediante la pretensión de despolitizar las disputas entre Estados mediante la constitución de los sistemas de arbitrio que se presentaron como “imparciales” (Broches, 1995).

que se presentaba con diversas atribuciones positivas como: incrementos en la productividad (Romer, 1993); transferencia tecnología (Borezestein, De Gregorio, & Lee, 1998; Findlay, 1978); incremento de la competencia (Moran, Graham, & Blomström, 2005); eficiencia; capacidad exportadora; etc... (OCDE, 2002). Contexto en el que todos estos factores eran considerados como impulsores del crecimiento económico, el cual actuaría como catalizador del tan ansiado desarrollo - señalar que en estos estudios el desarrollo es de carácter económico-.

Esta afirmación ha provocado diversas disputas teóricas, en las que se debe destacar la existencia de posturas encontradas respecto al impacto de la IED en un Estado receptor. Manifiestan diversos autores que es inconcreta y/o parcial la afirmación de que la IED produce desarrollo. Pues distintos análisis muestran que existen evidencias claras que indican que no es del todo absoluto que la IED produzca desarrollo económico en todos los casos.

A este respecto, por un parte hay autores que han obtenido resultados que coinciden con las posiciones institucionales e indican que sí existe una relación causal positiva a partir del impacto de la IED en el impulso del crecimiento económico (Lensik & Morrissey, 2001); y contrariamente, otros estudios no encuentran relación alguna como exponen Maria Carcovic y Roos Levine en *Does Foreign Direct Investment Accelerate Economic Growth?* (2005). En donde, revisando diversas investigaciones, afirman que la existencia de diferentes posiciones con diferentes criterios de análisis, indican que se deba ser escéptico a la hora de afirmar la relación directa e independiente entre IED y crecimiento económico- entendiendo éste como catalizador de desarrollo- (Carcovic & Levine, 2005, pág. 219).

En todo caso, adoptando un prisma con lentes que permitan visualizar, a partir de las teorías en las que se entiende como desarrollo el crecimiento económico, las postulaciones a favor y en contra de que el mecanismo sobre el que ha girado el desarrollo: la IED, sea el motor de crecimiento económico o promueva una transferencia de tecnología y efectos “*spillover*” (cascada) son muy diversas.

Afirma Paul Romer en su artículo *Idea Gaps and Objects Gaps in Economic Development* (1993), que existen estudios que afirman que la IED posee la “capacidad” para transferir el *Know-how* a los países en desarrollo. Pero indican que también se han encontrado teorías contrarias que afirman que la IED no posee por si sola la “capacidad”. Indica Romer igualmente, que podrían ser más relevantes otro tipo de cuestiones para la promoción del

desarrollo, como las condiciones previas en términos de comercio, precios, infraestructuras, y otros factores para que los efectos sean positivos. En el mismo sentido, diversos estudios han tratado de indagar sobre las relaciones y factores que causan e impulsan el crecimiento económico, valorando entre ellos: los niveles de industrialización (Lipsey & Sjöholm, 2005), educación (Borezestein, De Gregorio, & Lee, 1998), políticas públicas (Blomström, Lipsey, & Zejan, 1992), etc..., u otros estudios concluyendo que los efectos positivos en el crecimiento de la IED guardan una relación directa con el capital humano disponible en el país receptor y la solidez del sector financiero (Agosin & Mayer, 1999; Serbin, 2009); o por el contrario se encuentran otros estudios que afirman que no (Blomström, Lipsey, & Zejan, 1992).

Los resultados de las investigaciones se postulan en diversas direcciones y parece que se debe estar de acuerdo con lo que afirman Theodore H. Moran, Edward M. Graham y Magnus Blomström, en las conclusiones de su libro *Does Foreign Direct Investment Promote Development?* (2005):

“...una búsqueda de un “resultado universal” sobre la IED en la economía de los países en desarrollo es simplemente un error. La IED puede obtener impactos dramáticamente opuestos- ambos positivos y negativos”²⁸⁰ (Moran, Graham, & Blomström, 2005, pág. 375).

En todo caso, parece evidente que la IED por sí misma no produce aquello que se ha considerado como desarrollo en las posturas occidentales- y globales en la mayoría de los casos-: el crecimiento económico. Por lo que en caso de que este crecimiento sea el elemento impulsor del proceso de un desarrollo más integral, la IED por sí misma no actúa.

Por otra parte, si se fija la mirada en el efecto que el proceso desarrollista ha ofertado desde que lo elevase Truman en la SI: que la IED ha sido y es capaz de reducir la desigualdad - pilar sobre el que la idea del desarrollo ha promovido su práctica-, el resultado es desalentador. Tras más de 60 años de desarrollismo en el planeta, las desigualdades se han acrecentado en cuanto a las personas más pobres y ricas, ya que el conjunto del planeta ha visto incrementado los datos respecto a la desigualdad. Así lo manifiestan los diferentes

²⁸⁰ Traducción propia a partir de: “...a search for a “universal result” of FDI on a developing-country economy is simply misguided. FDI can have dramatically differing impacts- *both* positive and negative” (Moran, Graham, & Blomström, 2005, pág. 375).

OOII (BM, OCDE; NNUU; o FMI), que reconocen que la brecha entre ricos y pobres se está aumentando constantemente (Milanovic, 2010).

Respecto al efecto en los países en desarrollo, se han encontrado estudios que ha abordado la relación causal de la IED en la desigualdad -expresada en términos de ingreso y usando habitualmente el índice GINI-, que afirman que existe una relación positiva (Basu & Guariglia, 2007; Choi, 2006; Herzer, Hühne, & Nunnenkamp, 2012; Willen, Velde, & Page, 2003; Suanes, 2012) . Es decir, **a mayor IED mayor desigualdad** en el interior de los Estados. Contexto en el que la marea no sube a todos con ella- en referencia a la afirmación de Rostow²⁸¹-.

Sin embargo, hay que señalar que la desigualdad se presenta de diversos modos y se mide de diversa formas. En este caso, se ha escogido una clasificación realizada por Branko Milanovic²⁸² (2005), en donde a partir de determinar qué agentes y qué espacios sean los observados mide la desigualdad internacional categorizándola en tres tipos:

- Tipo 1) La desigualdad entre Estados:** mide las diferencias de renta per cápita entre los Estados;
- Tipo 2) la desigualdad entre la población de un Estado con otro Estado:** mide la desigualdad entre Estados ponderados por la población;
- Tipo 3) la desigualdad entre personas, hogares y familias:** mide la desigualdad mundial de toda la población sin atender a su lugar de pertenencia.

*A partir de (Milanovic, 2005, pág. Capítulo 1).

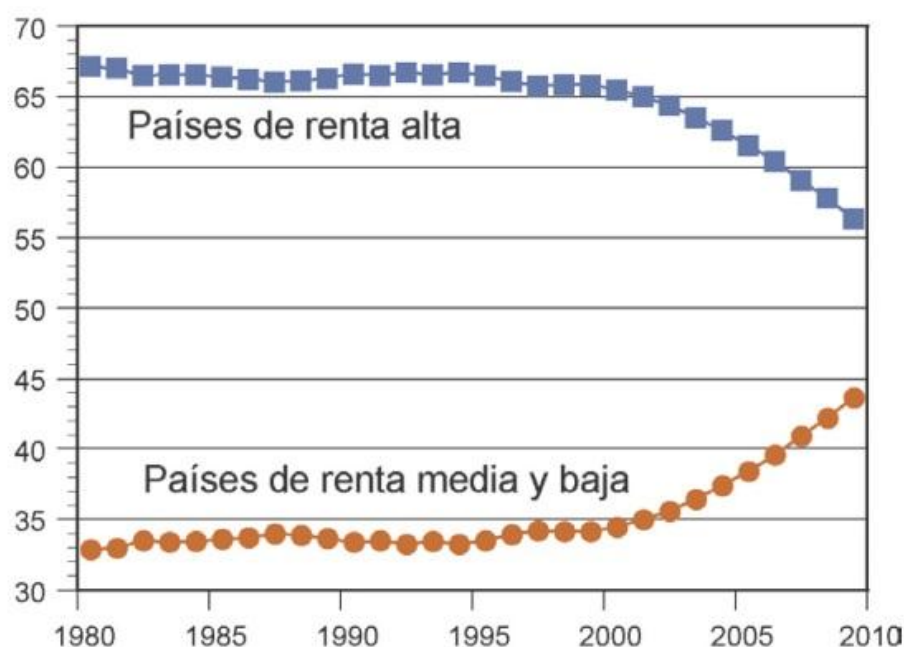
Milanovic indica que la brecha entre Estados, divididos por grupos de desarrollados y subdesarrollados, se ha visto reducida en términos absolutos de PIB. Lo que significa que ha habido una convergencia a nivel mundial comparando las economías agrupadas en ésta categoría. En este sentido, aunque durante los dos últimos siglos la distribución de la renta ha sido desigual entre países, en el interior de los países y entre los ciudadanos, y que alrededor de 1980 se alcanzó el grado más elevado (Bourguignon & Morrisson, 2002), a partir de ese instante se produjo un cambio hacia la homogeneidad entre éstos. Hecho que

²⁸¹ Véase Capítulo I.

²⁸² Véanse los trabajos publicados por Branko Milanovic atendiendo principalmente a la desigualdad y los factores que inciden en ella, para el BM en: <http://econ.worldbank.org/external/default/main?authorMDK=91636&theSitePK=469372&piPK=64214942&pagePK=64214821&menuPK=64214916> (Consulta realizada el día 02 de agosto de 2014); así como Ortiz I. (2012); o Piketty (2014).

acoge diferentes versiones y postulados acerca del cómo y de qué tipo de desigualdad se ha visto afectada por esta mejora (Sutcliffe, 2011).

Ilustración 10: El producto interior bruto agregado de los países de renta alta, y de renta media y baja, 1980–2010, como porcentaje del PIB mundial.



Nota: 1 expresado en dólares de EEUU, a precios de 2009. Renta baja = PIB per cápita inferior a 996 \$; renta alta = PIB per cápita superior a 12.000 \$; y renta media = PIB entre esos dos límites

Fuente: (Sutcliffe, 2011).

Si se atienden a los datos que indican a la desigualdad entre Estados (tipo I), éstos claramente muestran una tendencia a la convergencia. De hecho, los datos que presenta dicho tipo I, analizando el *Índice Gini* entre Estados, muestra resultados clarificadores.

Tabla 2: *Gini* entre Estados. Tipo I.

Año	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2009
GINI tipo I	68,75	66,51	64,12	60,29	58,49	54,67	49,8

Fuente: De elaboración propia a partir de (Sutcliffe, 2011; Milanovic, *Global Inequality and the Global Inequality Extraction Ratio*, 2009).

La desigualdad entre Estados ponderados por la población (tipo II), también se ha visto reducida desde que se alcanzase su nivel más alto en los años 80, ya que ha mejorado hasta la actualidad. Respecto a este cambio, todo parece indicar que una de las causas es que los países que eran más pobres han crecido a niveles más elevados que los ricos y la crisis ha

afectado con mayor impacto a las economías de los Estado ricos (Milanovic, 2010; Milanovic, 2009).

Sin embargo, Milanovic (2010; 2009) señala que el tipo III, es decir, la desigualdad entre la población mundial, creció exponencialmente. Tanto que, según el autor, el incremento de la desigualdad de tipo III ha sufrido tal aumento, que es más que suficiente como para cubrir la mejora que habían sufrido los tipos I y II. Este dato sitúa a la desigualdad que se produce en el interior de los Estados- que es aquella que tiene más repercusión en términos de desigualdad- como el tipo acaparador de la desigualdad mundial. Puesto que si con anterioridad se indicaba a la desigualdad entre Estados como el reto a solventar, en la actualidad la clase social global se impone al tratar de observar el impacto de la desigualdad (Sutcliffe, 2011).

Tabla 3: Evolución del índice de *Gini* Tipo III en el mundo.

Año	GINI tipo III
1820	43.0
1850	53.2
1870	56.0
1913	61.0
1929	61.6
1950	64.0
1960	63.5
1980	65.7
2002	70.7
2008	70.5

Fuente: De elaboración propia a partir de datos en (Milanovic & Lakner, 2013; Milanovic, 2009).

Ante este hecho, lo relevante para este estudio es que, como indican algunos autores, ya que existe una relación directa entre la IED y la desigualdad interna (Basu & Guariglia, 2007; Choi, 2006; Herzer, Hühne, & Nunnenkamp, 2012; Willen, Velde, & Page, 2003; Suanes, 2012), el impacto de la IED sobre el desarrollo- visto como reducción de asimetrías- puede haber afectado a la distribución de la desigualdad entre los países, más que a su reducción a nivel interno.

4.2 Principios generales presentes en los tratados y acuerdos de inversión.

Existen una serie de principios que rigen en la práctica de la IED que son muy relevantes de cara a los objetivos de este análisis. La presencia de los mismos se constata en la actualidad al revisar los acuerdos y tratados que se formulan y se firman entre Estados, en

aras de asegurar el “buen funcionamiento” de las relaciones inversor-Estado receptor y por lo tanto, presentándose como el mecanismo para que las disputas no alteren el orden internacional.

Los acuerdos en los que se encuentran acogidos estos principios presentan diversas modalidades en la CI. Denominados Acuerdos Internacionales de Inversión (AII) habitualmente, se presentan, dentro de los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), en dos modalidades: Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y Acuerdos de Integración Regional (AIR)²⁸³. Asimismo y en harás de permitir entender el impacto de la práctica, también se debe mencionar qué principios sobre IED se encuentran presentes en los citados tratados y los diversos Foros Internacionales sobre comercio que se han realizado con atención a este hecho.

Por norma general, los principios y políticas suelen estar divididas en dos grupos:²⁸⁴

Bloque I) De trato a la inversión (*No discriminación*):

- a) ***Trato nacional:*** Los inversores extranjeros no recibirán un trato inferior que el proporcionado a los nacionales del Estado propio; una vez la mercancía ha pagado los impuestos de aduana, dicho producto recibe el mismo trato que el nacional, no pudiéndosele aplicar ningún impuesto o carga añadida.
 - **Implicaciones:** El Estado no está capacitado para direccionar los recursos económicos hacia la potenciación de la economía interna.
- b) ***Trato de Nación Más Favorecida (TNMF):*** El Estado tratará al inversor siempre de acuerdo a las condiciones del mejor trato que se dispense en un presente y en un futuro a otro inversor de otro Estado.
 - **Implicaciones:** El Estado verá sesgada su capacidad de negociación en futuros acuerdos. Puesto que de ofrecer unas condiciones más favorables a otros inversores,

²⁸³ A este respecto cabe señalar la peculiaridad que presenta otra modalidad poco analizada y practicada como los son los Tratados de Comercio para los Pueblos que presenta el ALBA-TCP. Acuerdos que, en principio, también incluyen la regulación de la IED. Analizados en el Capítulo V.

²⁸⁴ Aunque durante el desarrollo del estudio se hará referencia a aquellas cláusulas que han contenido mayor disputa en el proceso de inclusión o no en los acuerdos, en este epígrafe se realiza un acercamiento a su significación en el momento que forman parte del tratado.

vería como éstas serían aplicadas a los acuerdos que contuviesen esta cláusula. Con lo que ante un mercado en cambio constante, la capacidad de acción del Estado contaría con un sesgo operativo.

c) **Trato justo y equitativo:** El Estado se compromete a no adoptar medidas sin una justificación, que discrimine o que pueda lesionar aquellos derechos considerados “justos”, y que puedan dañar los intereses de nacionales de otros Estados y sus inversiones, posesiones, capitales, etc... que existan dentro del Estado receptor.

- **Implicaciones:** Los conceptos de “justicia y equidad” ofrecen una ambigüedad que se disponen a diferentes interpretaciones particulares. Por lo que en circunstancias de excepción, la interpretación de esta cláusula puede divergir entre las partes.

Asimismo, esta concepción posee la otorgación por parte del Estado receptor de un “mínimo trato hacia la inversión de acuerdo a los contenido en los principios de DI”. Hecho que establece una diferenciación con el trato a los nacionales en caso de situación de excepción, otorgando un trato especial al inversor extranjero²⁸⁵.

Bloque II) De protección a la inversión:

a) **Expropiación o nacionalización:** La cláusula prohíbe la aplicación de medidas de nacionalización o expropiación de las inversiones, o la aplicación de medidas con un impacto semejante (caso de la expropiación indirecta). Esta cláusula suele contener una excepción que otorga capacidad al Estado para expropiar siempre que esta sea acusada de utilidad pública, sobre bases no discriminatorias, con estricto apego al principio

²⁸⁵ Existe un apartado específico que aborda la problemática histórica de esta cláusula. Ver en este capítulo apartado 8.1.1 (Pág. 362-375).

de legalidad y mediante el pago de indemnización, que deberá ser “pronta, adecuada y rápida” de acuerdo al DI²⁸⁶.

- **Implicaciones:** Por un parte, ésta entra en conflicto con la Carta de Derechos y Obligaciones Económicas de los Estados (1974), ya que afirma que los Estados deben tener la capacidad de “reglamentar y ejercer autoridad sobre las inversiones extranjeras dentro de la jurisdicción nacional” (Asamblea General NNUU, 1974, pág. 56); y por otra, plantea el dilema de cómo determinar qué se considera utilidad pública, abriendo un espacio a la interpretación que puede variar dependiendo del conflicto y la parte.
- b) **Indemnización por pérdida:** Cláusula que implica que sea otorgado un Trato Nacional y un TNMF, en caso de que se produzcan indemnizaciones tras un suceso que produzca pérdidas al inversor (conflictos armados, estado de emergencia, disturbios, etc...).
- **Implicaciones:** Conjuntamente las señaladas en el Bloque I. a) y b).
- c) **Transferencia:** La inclusión de esta cláusula implica que el Estado receptor permite que se ejecuten la libre transferencia de recursos al exterior: i) Pagos por concepto de expropiación o derivados de laudos; ii) los derivados de utilidades, dividendos o ganancias de capital; iii) los intereses, derechos de propiedad intelectual (regalías o royalties), y pagos por asistencia; iv) los pagos en especie.
- Como parte de ésta se suelen incluir cláusulas para impedir la ejecución de transferencias en casos como: quiebra, insolvencia, evidencia criminal, y desequilibrio en balanza de pagos.

²⁸⁶ Características que encuentran su origen en la conocida como “Hull fórmula”. Ésta fue resultado de la declaración del Secretario de Estado de los EEUU en 1938 en la disputa sobre la expropiación que ejecutó México (Newcombe & Paradell, 2009). La presencia de esta cláusula en los Tratados de índole internacional es representativo de quienes fueron/son aquellos Estados que han logrado imponer su criterio en la normativa internacional en asuntos de inversiones. Este estándar de compensación es debatido y replicado por los Estados del Sur. Véase Schneiderman (2008, págs. 135-157).

- **Implicaciones:** Se contempla la fuga de capitales en el Estado receptor y la no reinversión en el Estado receptor de las ganancias obtenidas con la práctica del inversor.

d) **Requisitos por desempeño:** La cláusula estipula que las partes no podrán imponer el cumplimiento de ciertos requisitos, compromisos o iniciativas, en cuestiones de establecimiento, adquisición, expansión, conducción y operación de la inversión o parte de la inversión de un inversionista en su territorio²⁸⁷.

- **Implicaciones:** Implica una cesión amplia de capacidad de decisión en política económica, en términos de dirección del desempeño de los diferentes sectores en el Estado, en situaciones que puedan ser una necesidad.

Es pertinente señalar respecto a los AII, que además de los principios señalados, éstos contienen “excepciones” en su aplicación que varían dependiendo del acuerdo. Algunas de éstas referidas a cuestiones de interés general; seguridad pública y orden; salud pública y moral (Schneiderman, 2008; Biocca, 2006).

En los AII los Estados suelen introducir cláusulas que atienden a cuestiones particulares y, es por ello, que aunque la mayoría se asemejan en su forma, gozan de particularidades propias de cada acuerdo en donde se enumeran las excepciones de aplicación. Las excepciones y reservas suelen aparecer en los tratados mediante la introducción de una lista negativa, en la que el Estado receptor excluye ciertos sectores en donde el tratado no

²⁸⁷ Ejemplo de los requisitos contenidos en el TLCAN:(Capítulo XI: Art. 1106, párrafo 1, contenido en el TLCAN):

- a) exportar un determinado nivel o porcentaje de bienes o servicios; b) alcanzar un determinado grado o porcentaje de contenido nacional; c) adquirir o utilizar u otorgar preferencias a bienes producidos o a servicios prestados en su territorio, o adquirir bienes de productores o servicios de prestadores de servicios en su territorio; d) relacionar en cualquier forma el volumen o valor de las importaciones con el volumen o valor de la exportaciones, o con el monto de las entradas de divisas asociadas con dicha inversión; e) restringir las ventas en su territorio de los bienes o servicios que tal inversión produce o presta, relacionando de cualquier manera dichas ventas al volumen o valor de sus exportaciones o ganancias que generen en divisas; f) transferir a una persona en su territorio tecnología, un proceso productivo u otro conocimiento reservado, salvo cuando el requisito se imponga o el compromiso o iniciativa se hagan cumplir por un tribunal judicial o administrativo o autoridad competente para reparar una supuesta coalición a leyes en materias de competencia para actuar de una manera que no sea incompatible con otras disposiciones de este Tratado; g) actuar como el proveedor exclusivo de los bienes que produce o servicios que presta un mercado específico, regional o mundial.

Disponible en <https://www.nafta-sec-alena.org/Default.aspx?tabid=184&language=es-MX> .
(Consultado el día 21 de abril de 2014).

tendría aplicación; o por contra la elaboración de una lista positiva que significará los sectores donde será aplicable el tratado.

Indicar asimismo, que salvo la presencia de estas excepciones y reservas en el articulado de los tratados, las partes no podrán desviarse de los cometidos y/o ejecutar cambios- ya sea proteccionistas o liberalizadores- en el tratado. Significando este hecho que en el momento en el que el inversor se ha establecido en el territorio del Estado receptor bajo unos términos concretos, se anula la capacidad del Estado para alterar dichas condiciones (Schneiderman, 2008, págs. 35-36).

5. La Inversión Extranjera Directa en el Derecho Internacional. La institucionalización de las normas a partir de su práctica.

"Hay fuerzas poderosas promoviendo la globalización económica, pero probablemente ninguna haya tenido más éxito en el mundo actual que la institucionalización de reglas y estructuras para proteger y promover la inversión extranjera. Una serie de acuerdos bilaterales, regionales y multilaterales fomentando y protegiendo la inversión extranjera directa (IED) que generan una red entrelazada de reglas y estructuras normativas que establece límites significativos a la acción del Estado"²⁸⁸ (Schneiderman, 2008, pág. 25).

El DI constituido para atender a cuestiones de IED, encuentra su origen en el ejercicio de protección sobre los capitales que requerían los inversores cuando ejercían la actividad económica en los Estados no propios. Las disputas entre agentes que han obedecido a este hecho datan de finales del siglo XVIII.

En época de post-colonialismo, tras el agotamiento de aquellas medidas que habían primado en las disputas Estado-Estado hasta esa fecha, en donde las potencias europeas habían protegido sus inversiones a través del control- ya fuere mediante mecanismos imperialistas o a través de sistemas de capitulación de inversiones-, se fue articulando un proceso que tenía la pretensión de instaurar un mecanismo útil para establecer unas reglas claras bajo las que operasen las inversiones (Newcombe & Paradell, 2009).

²⁸⁸ Traducción propia a partir de: "There are powerful forces promoting economic globalization and they probably have had no greater success in the contemporary world than in institutionalizing rules and structures to protect and promote foreign investment. A series of bilateral, regional, and multilateral agreements promoting and protecting foreign direct investment (FDI) generates together an interlocking web of rules and rule-enforcing structures that can place significant limits on state action" (Schneiderman, 2008, pág. 25).

Primeramente, a partir de las primeras descolonizaciones, allá por principios del siglo XIX, las disputas entre Estados e inversores pasaron a ser parte correspondiente del derecho diplomático. Dado que este mecanismo había sido el recurso utilizado por parte de los ciudadanos nacionales de un Estado en caso de ver dañados sus intereses en el exterior²⁸⁹.

El acudir al derecho diplomático como mecanismo de resolución de disputas, activaba un medio compuesto por diversas y ordenadas acciones, que iban desde la resolución del conflicto amigablemente, a la intervención armada de un Estado contra otro en caso de que no se encontrase una solución aceptada por las partes. Estas medidas son, en orden de acción habitual: a) la acción consular; b) la negociación; c) la mediación; d) los procesos judiciales o de arbitrio; e) las represalias; f) el endurecimiento de las relaciones diplomáticas - llegando a suspenderse como señal de protesta y disconformidad-; g) medidas de corte económico; y en caso extremo h), el uso de la fuerza (Newcombe & Paradell, 2009).

La ejecución de medidas diplomáticas es una práctica contenida en el DI, que ha sido utilizada ante la detección de un acto que perjudicase los intereses del Estado propio y que, en este sentido, obedece a la defensa de aquellos bienes que pudiesen afectar al capital y comprometer el futuro como Estado. Ya que se indica en el DI, que un Estado posee el derecho de actuar si por los medios ordinarios no se ha conseguido una resolución satisfactoria (Dugard, 2000). Esquema en donde se encuentra la base argumental que legitima la acción de un Estado en otro Estado con el objetivo y la justificación de ejercer la protección de sus nacionales.

El marco legitimador indicado es el espacio en donde se han producido las disputas entre los agentes – en este caso Estados e inversores-; y a su vez es el marco que ha actuado como eje sobre el que ha girado el debate entre las escuelas que han abordado y cuestionado la legitimidad de la acción en un contexto internacional de respeto por la soberanía interna.

En el ejercicio del debate se ha tensionado la legitimidad de una acción que implica una práctica injerencia por parte de un Estado en el territorio de otro Estado. Acción que plantea una cuestión de difícil ligamiento, atendiendo a la soberanía interna del Estado receptor del inversor. De ello, que en contraste con aquello contenido en las disposiciones de las grandes potencias sobre su derecho a iniciar actos bélicos, diversas escuelas

²⁸⁹ Leer Newcombe & Paradell (2009). Concretamente Capítulo I, para adquirir una información más amplia sobre el uso y evolución del derecho Diplomático en cuestiones de IED.

presentasen alegaciones contrarias, postulándose en contra de que la acción diplomática pudiese poseer esa capacidad “legal” para actuar en defensa de los intereses de sus nacionales en otro territorio.

“Los gobiernos a menudo ejecutan la acción en nombre de sus ciudadanos en el extranjero, hecho que no se basa en ninguna obligación internacional y que no entra dentro de la categoría de protección en un sentido técnico”²⁹⁰ (Dugard J. , 2000, pág. 217).

“... Las acciones diplomáticas o consulares para obtener concesiones u otros contratos del gobierno para los nacionales del Estado receptor, o la disposición de la defensa legal de nacional con justicia encarcelados, no es protección diplomática en nuestro sentido; no se dirigen habitualmente contra el otro Estado, ni consisten en una real o supuesta violación del derecho internacional”²⁹¹ (W. K. Geck citado en Nota 69 en Dugard J. (2000, pág. 217)).

Esta capacidad dispuesta por los Estados inversores, ha sido la que ha impulsado la evolución del debate en torno a cómo armonizar las disputas inversor-Estado en las RRII; así como dilucidar el cómo tratar de vislumbrar en qué espacio del DI tenía cabida la protección de la IED. Hay que señalar en este sentido, que en el contexto de las RRII las disputas habían estado caracterizadas por darse entre dos Estados, y no por otros actores que aparecían en esta disputa: inversor-Estado.

El dilema surgió en un contexto de conflictos sobre el trato a los inversores y sus bienes, en el que las grandes potencias indicaron a los Estados receptores de inversión que, ante todo, se debía respetar el DI. En un principio esta indicación aparecía como un requerimiento mínimo y razonable, pero el repaso a la evolución de los hechos durante el siglo XIX y principios del siglo XX, muestra como la concepción del DI era acorde a la particular visión de la “justicia” contenida en los Estados civilizados. Es decir, éstos trasladaron su propia concepción de la protección presente en sus percepciones jurídicas nacionales al ámbito internacional. Con lo que, con la finalidad de ejercer la protección de sus ciudadanos y sus capitales, aludían a unos mínimos estándares de trato en nombre del DI,

²⁹⁰ Traducción propia a partir de: “Governments often take action in behalf of their citizens abroad which is not based on any assertion of international obligation and does not fall within the category of protection in a technical sense” (Dugard J. , 2000, pág. 217).

²⁹¹ Traducción propia a partir de: “[D]iplomatic or consular actions to obtain concessions or other government contracts for nationals from the receiving State, or the arrangement of legal defense for a justly imprisoned national are not diplomatic protection in our sense; they are usually neither directed against the other State nor based on a real or alleged violation of international law”(W. K. Geck, “*Diplomatic Protection*” in *Encyclopedia of Public International Law* (1992) pp. 1046. (Citado en Nota 69 en (Dugard J. , 2000, pág. 217))).

que realmente respondían a una concepción propia y particular del trato que se debía otorgar a los inversores. No era un acuerdo internacional, sino un mecanismo impuesto con origen en las concepciones de los Estados occidentales, dado que los principios del DI eran similares a aquellos que estaban contenidos en los ordenamientos de los Estados civilizados. Que en definitiva, eran los que realizaban exportaciones de capital y poseían la capacidad de invertir (Newcombe & Paradell, 2009, pág. 12). Es decir, el DI protegía sus intereses e nombre del “bien común” internacional²⁹².

La poca regulación a la protección de la inversión en la época era refrendada mediante la firma de Tratados de Amistad, Comercio y Navegación entre los Estados²⁹³. En los que se incluían las cláusulas que estipulaban la relación; así como actuaban como contratos ante los que debían responder los Estados, en caso de que se produjese una intervención en los bienes de nacionales de otro Estado²⁹⁴. Sin embargo, no se vislumbraba con exactitud, cuan

²⁹² Una de las muestras evidentes de la direccionalidad indicada se observa en el discurso que enunció Elihu Root en 1910 (Secretario de Estado entre 1905 y 1909), en donde se refleja la direccionalidad en la aplicación de DI descrita.

Discurso de Elihu Root en 1910 a la Comunidad Americana del Derecho Internacional (*American Society of International Law*):

“Cada país está obligado a dar a los nacionales de otro país en su territorio el beneficio de las mismas leyes, la misma administración, la misma protección y el mismo la castigo que da a sus propios ciudadanos, y ni más ni menos: proporcionando la protección que el país otorga a sus propios ciudadanos de acuerdo al estándar establecido [mínimo] de civilización.

Hay un estándar de justicia, muy simple, muy fundamental, y de la aceptación general por parte de todos los países civilizados que son parte del derecho internacional del mundo. Un país tiene derecho a medir el estándar de justicia a un extranjero por la justicia que le otorgue a sus propios nacionales cuando se trata de su sistema de derecho y la administración se ajusta a éste estándar. Si el sistema de derecho y la administración de cualquier país no se ajustan al estándar de justicia, aunque la gente del país pueda ser contenida u obligada a vivir bajo él, ningún otro país puede ser obligado a aceptarlo como el suministro de una medida satisfactoria para el tratamiento a sus ciudadanos” (Elihu Root’s. Citado en (Newcombe & Paradell, 2009, pág. 12).

Traducción propia a partir de: “Each country is bound to give to nationals of another country in its territory the benefit of the same laws, the same administration, the same protection, and the same redress for injury which it gives to its own citizen’s, and neither more nor less: provided the protection which the country gives to its own citizens conforms to the established standard of civilization.

There is a standard of justice, very simple, very fundamental, and of such general acceptance by all civilized countries as to form part of the international law of the world. A country is entitled to measure the standard of justice due an alien by the justice it accords its own citizens only when its system of law and administration conforms to this general standard. If any country’s system of law and administration does not conform to that standard of justice, although the people of the country may be content or compelled to live under it, no other country can be compelled to accept it as furnishing a satisfactory measure of treatment to its citizens” (Elihu Root’s. Citado en (Newcombe & Paradell, 2009, pág. 12)).

²⁹³ Los Tratados de comercio que se han constituido parte de las relaciones comerciales desde los fenicios, cartaginense, romanos, etc... pero que sufrieron gran auge e impulso tras la colonización de América, y la Paz de Westfalia. Los de navegación eran firmados por los Estados con acceso a la costa. Sin embargo, la nominación de los Tratados ha sido conjunta, aunque ha primado entre ellos la referencia al comercio.

²⁹⁴ Como ejemplo de este evento, se indica aquí una referencia en el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre los Estados Unidos Mexicanos y EEUU, en 1831, en donde se refleja el trato a los inversores extranjeros:

Artículo 8º.- Los ciudadanos de las partes contratantes no estarán sujetos a embargo, ni sus buques, cargamentos, mercancías o efectos serán detenidos para ninguna expedición militar, ni para ningún otro objeto público o privado, cualquiera que sea, sin una compensación correspondiente.

era la pertinencia exacta para articular una capacidad a los Estados en fin de proteger los capitales de sus nacionales en el exterior. La ausencia de tipificación en los tratados, motivo el que se fuese instalando como la práctica el recurrir al auxilio del Estado del inversor, invocando la protección diplomática. Acción que, por ende, podría causar una intervención militar si no se atendían los reclamos.

Si la defensa de la IED había estado sujeta a la pertinencia y al hecho de respetar el DI, en los casos en los que los inversores habían sufrido daños dentro del Estado receptor, aquella justificación que era empleada habitualmente por los diversos postulados que se situaban en favor del trato justo y equitativo, habían basado su argumentación en afirmar que: la defensa del inversor debía responder al trato mínimo estándar de acuerdo a las leyes de los Estados civilizados (Newcombe & Paradell, 2009).

En este contexto los Estados occidentales, desde bien entrado en siglo XX, ligaron la articulación de sus argumentos a la idea vehicular de que los extranjeros y sus propiedades poseían y tenían derecho a requerir, bajo el auspicio del DI, un trato estándar mínimo que respondía al estándar de trato justo practicado en los Estados “civilizados”. Esta acción contaba con una ventaja clara para los inversores, y es que el DI estaba “...compuesto [en su criterio] del cuerpo de prácticas de los Estados civilizados del mundo occidental quienes han sido vida y han sido origen del Derecho Internacional” ²⁹⁵ (Borchard, 1940, pág. 448). Es decir, el trato estándar que debía ser considerado “justo y equitativo”, era aquel que estaba contenido en la legislación de los Estados occidentales. Y un trato equitativo respondía a un acto de responsabilidad internacional, que encontraba su origen en la Ley municipal de cada nación (Borchard, 1940). Es por ello, que de acuerdo con ésta indicación, la exigencia de un trato acorde a la legislación particular de una zona territorial que se auto-consideraba civilizada, respondía a una aplicación del derecho propio, direccionado y con origen asimétrico en el DI²⁹⁶.

Ante este proceso articulador de la capacidad y el derecho, que poseían los Estados inversores para actuar en nombre del DI bajo su concepción particular del mismo, se dio lugar en los Estados de Latinoamérica un proceso de cuestionamiento de la legitimidad de

²⁹⁵ Traducción propia a partir de: “...composed of the uniform practices of the civilized states of the western world who gave birth and nourishment to international law” (Borchard, 1940, pág. 448).

²⁹⁶ Como un ejemplo que refleja el apoyo teórico del DI en las bases del derecho presente en los Estados “civilizados”, véase el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que en su Art. 38 párrafo 1, dice así: “la corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: Los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas” (Anexo a la Carta de la Organización de la Naciones Unidas. Adopción: 26 de junio de 1945. Documento recogido en: <http://www.ordenjuridico.gob.mx/JurInt/CIJ.pdf> (Consultado el día 18 de marzo de 2014)).

los Estados “civilizados”, para intervenir en un espacio territorial externo al propio desde finales del Siglo XIX. Dado que este acto se observaba como una articulación de los Estados de occidente, que más que perseguir una aplicación del DI, utilizaban el mismo en defensa de los intereses económicos de sus inversores. Fue en este contexto en el que se presentaron en la CI las Doctrinas Calvo y Drago, que se significaron como una réplica a las prácticas de los Estados post-colonizadores en nombre del DI.

5.1 Las doctrinas Calvo y Drago. La ambivalencia del Derecho Internacional: replica ante la práctica intervencionista bajo el paraguas de una interpretación del Derecho Internacional con origen asimétrico en su fundamento.

Alfred Zimmermann²⁹⁷ (1939) afirmaba que, bajo su perspectiva, el DI se había constituido alrededor de una interpretación particular de aquellos Estados que concedían los créditos ante los impagos de los deudores en cuestiones de IE, y que se tenía la percepción en la CI que los abogados de DI respondían a los cometidos de sus clientes en las disputas, en donde perseguían más justificar el derecho de los Estados a recurrir al uso del derecho diplomático que solventar las disputas acaecidas.

Cuestionando el uso que hacían los Estados inversores del derecho diplomático, surgieron desde Latinoamérica las Doctrinas Calvo y Drago. Éstas significaron, en cierto modo, una respuesta a la ambivalencia en la aplicación del derecho diplomático en la SI, cuestionando principalmente el marco de protección legitimadora que se había constituido alrededor de la intervención. Significando las doctrinas la aparición de un nuevo marco legitimador de la acción de los Estados ante los inversores. Pero en esta ocasión, aludiendo a la pertinencia y derecho que poseían los Estados receptores para decidir sobre los asuntos que se acontecían en su territorio.

Drago y Calvo cuestionaron, en base al DI, la argumentación expuesta por los Estados inversores en cuestiones referidas al trato que debían dar los Estados a la IED y a la IEL. Afirmaron que el recurso al derecho diplomático se había convertido en práctica “habitual” por parte de Estados europeos o EEUU, para asegurar el reparo de aquellos actos que considerasen subjetivamente dañinos a su nación en territorios extra-nacionales - ya fuere éste la compensación ejecutada en forma de pago de las deudas o de las inversiones por

²⁹⁷ Alfred Zimmermann fue uno de los arquitectos de la *Liga de Naciones*. Por ello, gran conocedor de las divergencias presentes en el contexto internacional para aunar diversos criterios y establecer un DI “justo”.

parte de sus ciudadanos-. Acción esta que, según estos autores, excedía los propios límites estipulados en el DI (Calvo, 1868; Fabela, 1957).

Hay que señalar que la aparición de estas doctrinas se dio en un contexto de controversias entre Estados, a cuenta de las deudas públicas y privadas entre Estados, que finalizaban con asiduidad en prácticas agresoras militares por parte de Estados “civilizados”. En donde la acción de injerencia encontraba argumentación en una concepción particular del ejercicio soberano, afirmando los Estados inversores que la defensa de los intereses de sus nacionales era la defensa de los intereses del Estado. Por lo que, construyendo los Estados interventores la argumentación teórica, en base a que entendían que el acto de intervención tenía el fin de proteger a los nacionales en una situación de indefensión y bajo la justificación de cobro de sus inversiones, las potencias actuaban con medidas coercitivas e incluso militares, aludiendo a que el derecho diplomático comprendía que la defensa de los intereses de los nacionales de un Estado era competencia del Estado al que pertenecían, y que el Estado receptor del inversor debía responder a los intereses del mismo. Por lo que era obligación de todo Estado receptor otorgar un trato especial a los inversores extranjeros.

En este contexto político-jurídico, tras reiteradas intervenciones por parte de los Estados “civilizados” en los territorios latinoamericanos durante el siglo XIX- ante los impagos de IED e IEI y no respetando la cláusula contenida en DI *rebus sic stantibus*²⁹⁸ (Vázquez, 1965, pág. 577)-, diversos escritores latinoamericanos centraron sus estudios en el análisis sobre la cuestión de: ¿qué derecho poseen los Estados para en nombre de la defensa de sus nacionales injerir en el interior de otro Estado?

Es relevante indicar que el impacto de estas doctrinas actuó como repulsa ante dicha práctica, que habitualmente finalizaba con una intervención militar en Estados de ALC. Fue por ello por lo que éstas adquirieron relevancia y, además de por su aportación al DI, determinaron la relación de la región de ALC con el exterior en las épocas venideras.

Las dos doctrinas se entrelazaron en el tiempo. La doctrina elaborada por Luis María Drago se nutre de principios inscritos en el libro de *Derecho Internacional Teórico y Práctico de*

²⁹⁸ La cláusula *rebus sic stantibus*, posee el significado en el DI de que los contratos entre Estados se cumplirán en el caso de que no se produzcan situaciones de excepcionalidad para uno de los Estados. Es decir, en caso de una alteración fortuita y/o extraordinaria de la circunstancias en las que se firmó el acuerdo, las condiciones se primeras firmadas se alteran. Todo ello, entendiendo que las partes se actúan de buena fe y no consta ningún acto pernicioso en la aplicación de la cláusula.

Europa y América (1868), que había elaborado con anterioridad el jurista Carlos Calvo, y éste último fue el jefe de la misión de Argentina que tradujo la nota de Drago y la hizo circular en los ámbitos del DI más eminentes de Europa, en un ejercicio de requerimiento de opinión sobre la cuestión acontecida²⁹⁹.

5.1.1 Carlos Calvo: Doctrina y Cláusulas.

Respondiendo a este dilema la figura del jurista Carlos Calvo, en su obra *Derecho Internacional Teórico y Práctico de Europa y América* (1863), presentó un trabajo de DI que se centró en analizar el dilema acontecido en el conflicto, que surgía en torno al trato que debe otorgar un Estado a los ciudadanos de un Estado extranjero. Concretamente mediante un análisis jurídico en el tratamiento que debe recibir el inversor extranjero, de acuerdo a la legislación del Estado receptor de inversión en el ejercicio de su soberanía. En donde Calvo señaló, que el principal dilema en esta cuestión se encontraba en los pactos bilaterales entre Estados, que solían actuar bajo el principio de reciprocidad. Argüía a este respecto, que si consta un acuerdo, éste encuentra su razón de ser en contener reciproca igualdad en el trato entre las partes. Entendiéndose este trato, similar al que los nacionales recibirán en el Estado extranjero. Por lo que, sólo se otorgará como elemento discrecional bajo la disposición particular, de acuerdo a la relación e intereses que puedan tener las naciones para mantener las RRH mutuas. Sin que esto ocurra, tanto nacionales como extranjeros se encontraran bajo la soberanía de cada Estado y, por lo tanto, Calvo afirmaba- de acuerdo con Huberus- que: “Las leyes de cada Estado rigen a las personas y las cosas situadas en los límites de su territorio” (Calvo, 1868, págs. Tomo I,275). Recalcando que esta competencia se daría aunque la estancia fuese únicamente temporal.

El acto de reafirmar la independencia como principio fundamental para ser considerado un Estado soberano- principio señalado por los clásicos reiteradamente³⁰⁰-, actuaba como respuesta a las injerencias que habían sufrido las naciones latinoamericanas en su territorio tras ser consideradas independientes, en base a la justificación del impago o a acciones interventoras estatales en capitales extranjeros. Contexto en el que según Calvo las acciones de injerencia distorsionaban las intervenciones de la diplomacia y, ante ello, argüía que: “En Derecho Internacional estricto, el cobro de créditos y la demanda de reclamaciones privadas, no justifican de plano la intervención armada de los gobiernos”. (Carlos Calvo

²⁹⁹ Véase nota escrita por Carlos Clavo en Drago (1903, págs. 16-18).

³⁰⁰ Véase Capítulo II.

Citado en Miguel (2005, pág. 2)). Manifestación que constituyó una argumentación contraria a la práctica habitual.

El impacto de las reflexiones de Calvo en la región se evidenció, primeramente, al actuar esta doctrina como elemento promotor del acuerdo sobre derechos civiles en la Primera Conferencia Panamericana (1889-1890). Pero progresivamente, a medida que alcanzaba una mayor difusión, los principios de Calvo fueron calando en las agendas de los Estados de ALC, y de ello que ocupasen un espacio como tema principal de debate en la Segunda Conferencia Panamericana en México D.F. (1901-02). En donde la misma fue aprobada por 15 Estados. En este encuentro la doctrina desatacó al incluirse en las conclusiones una referencia concreta a Calvo. Dado que se concluyó que los ciudadanos extranjeros gozaban de todos los derechos civiles que gozaban los nacionales y que debían hacer uso de ellos, sin excepciones, en los mismos términos que dichos nacionales (Fabela, 1957).

El impacto de la Doctrina Calvo se extendió por la región de ALC, mediante la inclusión en los tratados y acuerdos, ya que algunos Estados optaron por incluir entre sus cláusulas la denominada Cláusula Calvo. En este sentido, es relevante indicar que no se deben confundir doctrina y cláusula. La Cláusula Calvo se diferencia de la Doctrina Calvo en algo fundamental de acuerdo a derecho. Mientras la primera nace de un pacto que suscriben dos partes en un tratado o acuerdo sobre las normas que operaran en la práctica, en donde ciudadano extranjero y Estado receptor acuerdan “voluntariamente” y “libremente” someterse a la cláusula; la segunda es un acto unilateral por parte de un Estado que decide incluir la Cláusula Clavo en el mecanismo regulador de las relaciones Estado-inversor-habitualmente en sus constituciones o directrices sobre el trato a la IED-.

Señalar que los principios de Calvo han hecho presencia en diferentes constituciones de diferentes modos, y presentan diversas tipologías, según indica el mexicano César Sepúlveda en su obra *Derecho Internacional Público* (1960):

- a) **Cláusula Calvo legislativa (*Doctrina*):** El Estado no reconoce hacia los extranjeros más deberes que los recogidos en la Constitución y legislación ordinaria a sus nacionales; así como en se excluye a los extranjeros de derechos por pérdidas, en caso de que están se deban a disturbios internos. En algunos casos se incluye el que sólo se podrá acudir a la vía diplomática cuando se deniegue la justicia en el interior del Estado receptor.

- b) **Cláusula Calvo de agotamiento de los recursos locales:** el ciudadano extranjero se compromete a agotar todas las vías establecidas en la normativa interna del país receptor de su inversión, antes de acudir a la vía diplomática (esta cláusula requiere de contrato entre Estado e inversor).
- c) **Cláusula Calvo como renuncia a intentar la protección diplomática:** Esta es la Cláusula aplicada generalmente, y consiste en la renuncia a la protección de su país en caso de pérdidas por parte del inversor. Debe acudir a tribunales internos.
- Un cuarto tipo es mencionado por Francesco Tamburini (2002) (*Doctrina*) y se refiere a la presencia de un apartado en la constitución que, sin hacer referencia explícita a la Cláusula Calvo, contiene referencia a “...que los foráneos tienen los mismos derechos y deberes que los nacionales” (D. E. Graham, Citado en Tamburini (2002, pág. 91).

5.1.2 Luis María Drago y su Doctrina.

El periodista Luís María Drago, durante su desempeño como Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Argentina del Presidente Julio A. Roca, elaboró su postulado en referencia a la cuestión de la soberanía y las inversiones. Influido éste, en gran medida, por los sucesos acontecidos en el conflicto que se produjo en Venezuela en 1902³⁰¹.

Drago entendió que las guerras civiles que se dieron cita en el interior de Venezuela limitaron la capacidad del gobierno del Estado para cubrir las deudas contraídas. Debido a lo cual Venezuela se vio obligada a declarar el no pago de la deuda pública externa e incumplió algunos contratos oficiales con ciudadanos extranjeros. Suceso ante el cual, los ciudadanos extranjeros presentaron quejas a sus Estados de origen, por entender que eran dañados sus intereses. Aquellos países con una mayor inversión en el país- Alemania, Inglaterra e Italia- presentaron reclamaciones por medio de sus diplomáticos al Estado. Venezuela respondió que los mecanismos de derecho interno eran iguales para los nacionales que para los extranjeros y que se debía recurrir a ellos. No conformes con esta resolución, los Estados que se consideraron perjudicados decidieron bombardear los puertos de Guayara, Puerto Cabello y Maracaibo, y bloquear la extensión de las costas venezolanas hasta asegurar el cobro de lo adeudado (Drago, 1903).

³⁰¹ Así lo indica el mismo Drago en su obra (Drago, 1903).

La acción ofensiva militar produjo la determinación de Drago para abordar el asunto acorde al DI y procedió al envío de una carta al representante diplomático argentino en Washington, buscando apoyo estadounidense y, en cierta forma, tratando de sustentar su criterio en la aplicación de la Doctrina Monroe.

En su argumentación Drago partía de la percepción de que los actos ejecutados por los Estados “civilizados” no guardaban el mínimo respeto por la soberanía interna de las naciones hispanoamericanas, ya que éstas estaban configuradas como Estados soberanos y, por lo tanto, eran sujetos de soberanía. La cual debía ser respetada por los demás agentes de la CI.

La Carta enviada por Drago contenía la siguiente información seleccionada:

“Desde luego se advierte, a este proceso, que el capitalista suministra su dinero a un Estado extranjero, y tiene siempre en cuenta cuáles son los recursos del país en que va a actuar y la mayor o menor probabilidad de que los compromisos contraídos se cumplan sin tropiezo”.

“Todos los gobiernos gozan por ello de diferente crédito, según su grado de civilización y cultura y su conducta en los negocios, y estas circunstancias se miden y se pesan antes de contraer ningún empréstito, haciendo más o menos onerosas sus condiciones, con arreglo a datos precisos que en ese sentido tienen perfectamente registrados los banqueros”.

“Luego el acreedor sabe que contrata con una entidad soberana, y es condición inherente de toda soberanía que no pueden iniciarse ni cumplirse procedimientos ejecutivos contra ella, ya que de ese modo de cobro comprometería su existencia misma, haciendo desaparecer la independencia y la acción del respectivo gobierno”.

“Los contratos entre una nación y los individuos particulares son obligatorios según la conciencia del soberano, y no pueden ser objeto de fuerza compulsiva- decía el ilustre Hamilton-. No confieren derecho alguno de acción fuera de la voluntad soberana”.

“Y no se negará que el camino más sencillo para las apropiaciones y la fácil suplantación de las autoridades locales por los Gobiernos europeos, es precisamente el de las intervenciones financieras...”

(Drago, 1903, págs. 1-10) [Negrita propia].

En la nota enviada por Drago se reflejan cuatro cuestiones fundamentales, que hacen referencia a las posibles causas que originaban fricciones y que, a su vez, daban paso a las reclamaciones pecuniarias que en su día fueron origen de acciones bélicas:

- 1) **Delitos o cuasi delitos y contratos o cuasi contratos celebrados entre particulares:** Concluye Drago que los ciudadanos extranjeros están sujetos a las mismas leyes que los nacionales. Puesto que el hecho de ejercer un trato de privilegio entre unos y otros, sería asignar un status superior a los no nacionales y, ello, sería a todas luces “injusto”. Los extranjeros no deben poseer posición privilegiada ante los nacionales;
- 2) **Contratos entre particulares y gobiernos:** En este caso, los gobiernos actúan como particulares. Existen los tribunales competentes en el interior de los países con leyes internas para reclamar dicho incumplimiento de contrato. Sólo en el caso de que dichos tribunales negasen el juicio o el ejercicio de la justicia; o si bien, se juzgase estableciendo diferencia entre los nacionales y extranjeros, se produciría una manifiesta “negación de justicia”. Sólo en ese caso, se vería justificado el reclamo por parte de los particulares extranjeros al auxilio de su Estado de origen.
- 3) **Daños y perjuicios causados a los nacionales por guerras civiles:** La responsabilidad del Estado está en consonancia con la participación de las autoridades en el hecho. El Estado puede encargarse de proveer de derecho a los habitantes del territorio, pero no es responsable de los actos particulares.
- 4) **Deudas públicas:** Las deudas de Estado a Estado son un acto de soberanía interna. Si un Estado no ejecuta el pago de su deuda exterior, no puede dar ocasión a que se presione por medio de actos de apremio. Puesto que dicha acción constituiría un acto de injerencia en la independencia del Estado que impaga.

Reflexiones obtenidas a partir de Fabela (1957, págs. 205-225).

La preocupación por el no respeto a la soberanía interna de los Estados latinoamericanos por cuestiones referidas al impago de IE, constituyó el elemento articulador de la protesta de Drago. Indicó que el recurrir a los Estados de origen para obtener protección, ante las pérdidas que conlleven el propio desarrollo de las circunstancias en la nación donde se realiza la inversión, establecía una protección extraordinaria hacia el capital externo en

diferencia con el nacional. Acción que excluiría de riesgo al inversor, ya que hay que tener en cuenta que el comprador de títulos o inversor extranjero entra en un negocio en el que puede ganar o perder. Por lo que invirtiendo por voluntad propia y siendo consciente de las realidades existentes en otros lugares, no puede exigirse un trato privilegiado en caso de pérdida. Ya que al haber considerado esas cuestiones, un inversor debe instar a los tribunales internos del Estado receptor, ya que es el organismo legítimo en el que se solventan los conflictos que se producen en el interior del territorio del Estado receptor y, por lo tanto, de su competencia.

La nota de Drago fue entregada a Carlos Calvo, el que como eminente internacionalista, y viendo la coincidencia de formulación con algunas de sus postulaciones, se aventuró a constatar que, si como era su impresión, la nota estaba basada en principios del Derecho (Drago, 1903, págs. 16-18). Para ello, consultó a sus colegas especialistas en Derecho europeos y la respuesta fue, mayoritariamente, a favor. Concluyendo éstos que las operaciones comerciales poseen riesgos y es un gran mal, pero los Estados pueden faltar a sus pagos tanto a nacionales como a extranjeros y la acción representa un acto soberano³⁰².

5.1.3 El impacto y herencia de las Doctrinas Drago y Calvo en el contexto Internacional.

Más allá del impacto que tuvieron en la región de ALC, las doctrinas han repercutido en la constitución del DI. La primera evidencia de esto aparece cuando, en 1907, fue incorporada la Doctrina Drago en la II Convención de la Haya para la Resolución Pacífica de Controversias Internacionales³⁰³, más conocida como Convención Drago-Porter - el segundo nombre en honor al general Porter que era miembro de la delegación de EEUU en la Conferencia-.

En el resultante de la Convención Drago-Porter, en principio, se rechazaba el uso de la fuerza por parte de un Estado para el cobro de deudas contractuales a otro Estado en su Art. 1. Sin embargo, se autorizaba el uso de esa misma fuerza en caso de que el Estado deudor rechazase someterse a un arbitraje sobre la cuestión en discusión o, cuando aceptado el compromiso, se rechazase aplicar el laudo arbitral bajo el DI (Párrafo 2

³⁰² Entre los consultados por Carlos Calvo se encontraban juristas reconocidos como: E.Moyner; Feraud Giraud; Frantz Despagne; Edward Laboulaye; Weiss; J.T.Olland; K.Dölibrecona y Pascual Fiore. (Drago, 1903).

³⁰³ Texto disponible en inglés en: http://avalon.law.yale.edu/20th_century/hague072.asp (Consultado el día 02 de marzo de 2014).

Art.1)³⁰⁴. No fue hasta 1928 con la firma del Tratado de Renuncia a la Guerra (Pacto Brian-Kellog), cuando el DI prohibió el uso de la guerra como recurso disponible en aras de solventar un conflicto.

Otra de las citas de la Doctrina Drago sucedió en una reunión extraordinaria de la Sociedad de Naciones ocurrida en el año de 1932. Que con motivo de la invasión japonesa a Manchuria para cobrarle a China obligaciones morosas, fue en donde los países centroamericanos junto con Perú enunciaron la Doctrina Drago en el debate, recordando al efecto los principios jurídicos contenidos en el Tratado Drago-Porter.

Con el paso del tiempo se ha continuado rebatiendo acerca de la pertinencia de la doctrinas por diversos autores e instituciones³⁰⁵. Sin embargo, su legado es evidente cuando en la actualidad se observa como la tesis de Drago se encuentra inscrita en las Cartas Constitutivas de las NNUU y de la OEA. Es decir, el hecho de que ningún Estado puede proceder al cobro de su deuda pública o privada por medio de la fuerza, que era el principio impulsor de la Doctrina.

- **Carta de las NNUU:**

- **Art. 2:** “Para la realización de los Propósitos consignados en el Artículo 1, la Organización y sus Miembros procederán de acuerdo con los siguientes Principios: (*Inciso 4*). Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas” (NNUU, 1945);

- **Carta de la OEA:**

- **Artículo 20:** “Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad

³⁰⁴ Art 1: The Contracting Powers agree not to have recourse to armed force for the recovery of contract debts claimed from the Government of one country by the Government of another country as being due to its nationals.

This undertaking is, however, not applicable when the debtor State refuses or neglects to reply to an offer of arbitration, or, after accepting the offer, prevents any compromis from being agreed on, or, after the arbitration, fails to submit to the award.

Limitation of Employment of Force for Recovery of Contract Debts (Hague, II); October 18, 1907. Texto disponible en inglés en http://avalon.law.yale.edu/20th_century/hague072.asp (Consultado el día 02 de marzo de 2014).

³⁰⁵ Para más información revisar el documento de Carlos Arellano García: “Evolución de la cláusula Calvo y la zona prohibida en el Derecho constitucional mexicano y en el Derecho Internacional” disponible en <http://www.derecho.unam.mx/investigacion/publicaciones/librosfac/pdf/pub05/02DrARELLANO.pdf> . (Consultado el día 06 de mayo de 2014).

soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza”;

- **Artículo 21:** El territorio de un Estado es inviolable; no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera que fuere el motivo, aun de manera temporal. No se reconocerán las adquisiciones territoriales o las ventajas especiales que se obtengan por la fuerza o por cualquier otro medio de coacción” (OEA, 1948a).

Si bien el legado de la Doctrina Drago ha sido evidente en el entramado que ha constituido la elaboración del DI, en cuestiones referidas a intereses económicos entre Estados y sus ciudadanos, el legado en cuanto a su presencia en textos constitutivos de Estados con denominación lo ha representado la Cláusula Calvo.

Más allá de establecerse como una norma genérica- como ya se ha podido observar en su capitulación-, la Cláusula Calvo es una interpretación de los principios desarrollados en su doctrina, que ha constituido su presencia en diversos textos constitucionales. Es decir, que su legado se considera presente si en el texto constitutivo de un Estado se contempla la obligación de un ciudadano extranjero a recurrir a los tribunales internos del Estado receptor; y sólo se contemplaría el acudir al derecho diplomático si se denegara la justicia interna.

La incidencia de esta doctrina fue amplia en las regiones latinoamericanas. Durante las primeras ocho décadas del siglo XX con una presencia constante; teniendo una incidencia menos relevante tras la crisis de la deuda y la llegada de las políticas neoliberales y el libre mercado como práctica política regional; y resurgiendo, en cierto modo, en la actualidad, pero sólo parcialmente. Pues desde los años 90 tomaron forma y fondo los TTBBII que contienen, habitualmente, cláusulas especificando que en el caso de disputa entre Estado-inversor, éstos se someterían a los mecanismos de mediación para solventar la disputa presentes en los tratados (Centro Internacional de Diferencias Relativas e Inversiones (CIADI), la Comisión de la Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) u otros). Por lo que la Doctrina de Calvo quedaría apartada, ya que las disputas entre inversores y Estados, una vez firmado el acuerdo con la cláusula que hace referencia a la resolución de disputas mediante los mecanismos de arbitrio, quedarían en manos de instituciones externas al Estado la resolución del conflicto.

En este sentido, es debido señalar que algunos Estados están recuperando su uso en ALC. Por ejemplo, Bolivia ha incluido en su nueva Constitución en su Capítulo III, el Art. 366 que refleja la presencia de la Doctrina Calvo en sectores que se consideran de importancia suprema para el devenir del Estado:

Art. 366. “Todas las empresas extranjeras que realicen actividades en la cadena productiva hidrocarburífera en nombre y representación del Estado estarán sometidas a la soberanía del Estado, a la dependencia de las leyes y de las autoridades del Estado. No se reconocerá en ningún caso tribunal ni jurisdicción extranjera y no podrán invocar situación excepcional alguna de arbitraje internacional, ni recurrir a reclamaciones diplomáticas” (Estado plurinacional de Bolivia, 2009, pág. 139).

En este mismo sentido se están produciendo reacciones por parte de Estados latinoamericanos como Argentina, Ecuador o Venezuela, que han manifestado abiertamente su contrariedad respecto al papel que ejercen los órganos de arbitrio, su idea de no prolongar las cláusulas presentes en los TTBBII y su disposición a no admitir en un futuro la posibilidad de que se juzguen asuntos de índole nacional por órganos externos a la región. Reacciones acordes con otras que se realizan otros lugares del planeta como: Australia, India, Pakistán o Sudáfrica, Estados que han considerado que el arbitrio externo al Estado concede un poder excesivo a las empresas multinacionales que operan en la CI (UNCTAD, 2013).

5.2 Conflictos y resoluciones relevantes en términos de regulación de la Inversión Extranjera Directa ocurridos con anterioridad a los años 50.

Las reacciones ante las Doctrinas Calvo y Drago se hicieron presentes a principios de siglo XX. El primer evento reseñable de ello se produjo a partir de la disputa que se advino entre los EEUU y México en 1920, cuando mediante el establecimiento de una Comisión para establecer el cómo arbitrar conflictos entre los ciudadanos mexicanos en EEUU y ciudadanos de EEUU en México, se declinó la aplicación de la Doctrina Calvo, por considerar que no se aseguraba con su inclusión el principio de estándar mínimo de trato. Haciendo en dicha consideración una referencia expresa a la cuestión del respeto por los estándares mínimos “civilizados” (Newcombe & Paradell, 2009).

De nuevo se consideraba “civilizado” aquella reglamentación que era determinada por occidente, al atribuir una ausencia de civilización en el trato que realizaban a los asuntos de

índole interno otro Estado, cuando mediante la ejecución de su potestad soberana se perjudicaba intereses económicos particulares de ciudadanos de Estados occidentales.

Como uno de los ejemplos más relevantes de este hecho, se suele acudir en la academia a la declaración del tribunal escogido para resolver el caso de Harry Roberts en 1927, el cual señaló que:

“Roberts recibió el mismo trato que el otorgado a cualquier otra persona.... Hechos que en base al igual trato de los extranjeros y los nacionales puede ser importante en la determinación de los méritos de una denuncia de maltrato de un extranjero. Pero esta **igualdad** no es la última prueba de la regularidad de los actos de las autoridades, a la luz del derecho internacional. Esa prueba es, en términos generales, **si los extranjeros son tratados de acuerdo a los estándares ordinarios de la civilización**”³⁰⁶ (Newcombe & Paradell, 2009, pág. 14).
[Negrita propia].

Avanzando en la década de los 30, la institución que se había creado al auspicio de la Liga de Naciones: el Comité de Expertos para la Progresiva Codificación del Derecho Internacional, en 1924, recomendó, en su Primera Conferencia para la Codificación del DI en 1930, que era el instante para establecer mecanismos jurídicos respecto a la “Responsabilidad de los Estados por el daño realizado sobre ciudadanos extranjeros y sus propiedades en su territorio”³⁰⁷ (Citado en Newcombe & Paradell (2009, pág. 15). En este acto se hizo palpable la división existente respecto a la Doctrina Calvo, pues setenta y siete Estados (principalmente receptores de inversión) se postularon en favor de aquello que proponía la doctrina, mostrando su acuerdo a que el trato al ciudadano foráneo fuese el similar al trato ejercido a los nacionales; y por el contrario, veintiún Estados (mayoría exportadores de capital) se postularon a favor del trato mínimo estándar “civilizado”. Esta divergencia de opinión fue el factor fundamental por el cuál no progreso de la Conferencia.

³⁰⁶ Traducción propia a partir de: “Roberts was given the same treatment as that given to all other persons...Facts with respect to equality of treatment of aliens and nationals may be important in determining the merits of a complaint of mistreatment of an alien. But such equality is not the ultimate test of the propriety of the acts of authorities in the light of international law. That test is, broadly speaking, whether aliens are treated according to ordinary standards of civilization”. En la sentencia se hizo referencia a cinco casos para evidenciar la existencia de “estándares mínimos” que toda sociedad “civilizada” de cumplir con respecto al trato de los ciudadanos extranjeros en su territorio: Neer (1926) IV RIAA 60, Faulkner (1927) 21 AJIL 349, Harry Roberts (1927) 21 AJIL 357, Hopkins (1927) 21 AJIL 160 and Way (1929) 23 AJIL 46 (Citado en Nota 74 en (Newcombe & Paradell, 2009, pág. 14)).

³⁰⁷ Traducción propia a partir de: “Responsibility of States for Damage done in their Territory to the Person or Property of Foreigners” ((LNOJ Spec Supp 53 at 9).Citado en (Newcombe & Paradell, 2009, pág. 15)).

Casi paralelamente se acontecía otro hito en cuestiones de normativa sobre temas IED: la Conferencia sobre el Trato a los Extranjeros en 1929³⁰⁸- bajo el auspicio de la Liga de Naciones igualmente-, en donde cuarenta y siete Estados participaron en París, en un debate que tenía como eje central de discusión el trato en cuestiones de comercio a los ciudadanos foráneos (Newcombe & Paradell, 2009; Cutler, 1933). Se concluyó que, tras observarse la similitud en las disputas ocurridas entre Estados inversores y receptores de capital, los ciudadanos extranjeros debían recibir el mismo trato de los nacionales del Estado receptor.

El informe del Presidente de la Conferencia, M. Devèze, evidenció la negativa de los Estados occidentales a este dictamen. Aunque más que al DI como norma, las réplicas obedecieron a intereses particulares de este grupo de Estados, acorde con sus pretensiones por establecer una legislación internacional en la que el inversor gozase de un trato diferenciado, como evidenció su manifestación:

“...tras tres semanas de debate, el borrador del convenio ha sido tan profundamente modificado y sus disposiciones esenciales tan atenuadas que las delegaciones con tendencias liberales manifestaron su intención de no firmar un convenio que, en su opinión, habría constituido, no el progreso que deseaban de lograr, pero, por el contrario, un paso atrás en comparación con la situación actual”³⁰⁹ (M. Devèze citado en Newcombe & Paradell (2009, pág. 17)).

De nuevo entre México y EEUU en 1938, se produjo un conflicto en torno al ejercicio expropiatorio que practicó el Estado de México sobre la compañía *American-bel oil* (Kunz, 1940). Caso en donde el Estado de México operó en clave de soberana, argumentando que una redistribución territorial basada en una reforma de la constitución propia del Estado, requería únicamente el pago compensatorio recogido en la ley nacional. México afirmaba que bajo el DI existía una diferencia entre una expropiación debido a la modificación de la organización jurídica interna y otros eventos en los que la expropiación no respondiese a asuntos de transformación organizacional del Estado. Por ello, indicó en su argumento que

³⁰⁸ Para profundizar sobre el origen y evolución de la Conferencia se recomienda leer (NNUU, 1947, págs. 60-61).

³⁰⁹ Traducción propia a partir de: “... after three weeks’ discussion, the draft Convention has been so profoundly modified and its essential provisions so attenuated that the delegations with liberal tendencies stated their intention of not signing a convention which, in their view, would have constituted, not the progress they wished to achieve, but, on the contrary, a retrograde step as compared with the present situation” (*Work of the International Conference on the Treatment of Foreigners: Report by M. Devèze, President of the Conference, Geneva, 14 Jan. 1930, L.N. Doc. C.10.1930.II* [Report by M. Devèze] Citado en Newcombe & Paradell (2009, pág. 17)).

las reformas sociales de carácter interno afectaban de igual modo a los nacionales que a los ciudadanos foráneos (Kunz, 1940). Postura ante la que los EEUU, aconsejados por el Secretario de Estado en la época Cordell Hull, exigieron que se ejecutase una compensación de forma “pronta, adecuada y rápida” bajo la aplicación del DI - lo conocido como fórmula Hull en 1938- (Schneiderman, 2008, pág. 34).

Los hechos recogidos de nuevo evidenciaban la diferencia en las posturas e interpretaciones particulares del DI. De ello que sea pertinente rescatar una de las declaraciones más relevantes al respecto ocurridas anteriormente en 1926, a cargo del presidente de EEUU Jhon Calvin Coolidge entre 1923 y 1929, que podrían explicar que algunos estados no estaban dispuestos a respetar la soberanía de Estados receptores en asuntos relacionados con la IED:

“... nuestro gobierno posee ciertos derechos y algunas obligaciones hacia nuestros propios ciudadanos y sus propiedades, donde quiera que se encuentren localizados. **La persona y propiedades de un ciudadano son parte del dominio general de la Nación, aún en el extranjero**” (Connel-Smith, 1971, pág. 87) [Negrita propia].

La disputa en torno al trato que se debía aplicar a los inversores y el estándar compensatorio, se establecieron como el eje del debate en la CI. Instaurándose como cuestiones principales a analizar en el DI, siendo mencionado y ocupando espacios preeminentes en los diversos eventos de carácter internacional (con una parálisis en la IIGM) (Newcombe & Paradell, 2009).

Tras la II GM el debate continuó ocupando una de las líneas con más auge en el DI y se vislumbró una pretensión de abordar la institucionalización de un mecanismo multilateral, en donde, de nuevo, se evidenciaron las diversas posturas dependiendo, habitualmente, del grupo de Estados a que se perteneciese.

6. La estimulación de mecanismos y normas tras la Segunda Guerra Mundial: apartando la multilateralización de la normativa en cuestiones de Inversión Extranjera Directa.

“[Los]...acuerdos de libre comercio... violan de manera radical los principios del libre comercio y en esencia no tienen nada que

ver con el comercio, sino más bien con los derechos del inversionista” (Chomsky, 2014).

Fue el fin de la IIGM el contexto que supuso que la CI se decidiese a abordar de un modo más directo la regulación de los mecanismos de protección de las inversiones. Sucesos como el proceso masivo de descolonización y la consecuente aparición de nuevos Estados, impulsaron que la SI articulase un mecanismo de reclamo en caso de disputa, en pos de implementar una normativa con el objetivo de armonizar las RRII, ya que se habían incrementado los procesos de nacionalización de los sectores clave por parte de aquellos Estados constituidos como nuevos, y este hecho abría un nuevo espacio en el contexto internacional para que aquellos que no eran “tan nuevos” - en referencia a los Estados independizados anteriormente- se adhiriesen a la práctica. Este ejercicio se expandió rápidamente como práctica reivindicativa de soberanía por una gran parte de los Estados en desarrollo³¹⁰. Cuestión que inquietó a los Estados ya considerados “desarrollados”, que se propusieron abordar el tema de la regulación con mayor celeridad que la practicada hasta la fecha³¹¹.

El desarrollo de los acontecimientos fue incentivando la necesidad de adoptar medidas de carácter multilateral en temas de comercio e inversiones. Se trató de impulsar una iniciativa que aspirase a establecer una institución reguladora de estas cuestiones- a través de La Carta de la Habana en 1947-, la conocida como Organización Internacional del Comercio (OIC), que desarrollase el papel de institución paralela a los llamados Gemelos de Bretton Woods (el BM y el FMI), y ejercería de tercer pilar en la nueva configuración del orden mundial.

En este sentido, aunque en la iniciativa el tema de inversiones era una cuestión relevante y requerida por el contexto dado, en la propuesta inicial para la adopción de una normativa no se acordó un consenso en materia de inversiones, ya que no se alcanzaron acuerdos sobre los “estándares” que debían integrar la normativa (Schill, 2009). Entre los motivos principales para la no aprobación de los estándares comunes se ha señalado que existía una preferencia del gobierno de los EEUU por la aplicación de acuerdos de carácter bilateral,

³¹⁰ En este periodo se produjeron nacionalizaciones en los Estados europeos del Este; en China; en los latinoamericanos (Cuba, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Guatemala); en los Estados de Indonesia sobre las propiedades Holandesas; también se produjo la nacionalización de Canal de Suez por parte de Egipto; y las nacionalizaciones de la industria del petróleo en el Medio Este y el norte de África (Argelia, Irán, Iraq, Libia, Kuwait y Arabia Saudí) (F.N Burton & H. Inoue “*Expropriation of Foreign-Owned Firms in Developing Countries: A Cross National Analysis* (1948) Pág 396-397 (Citado en Newcombe & Paradell (2009, pág. 19)).

³¹¹ A este hecho hay que añadir el contexto global en el que los derechos se instauraron como factor constitutivo de la nueva agenda internacional. Su promoción entró en aguas de un río con corriente vertiginosa, y la aparición de instituciones se produjo como acto reflejo de este fomento.

más que por establecer un acuerdo multilateral (Newcombe & Paradell, 2009, pág. 19). Postura que ya se había reflejado en la primera propuesta sobre los contenidos a incluir en la OIC elaborada por EEUU, la cual no reflejaba referencias a la IED (Wilcox, 1949, pág. 146).

La no adopción de un acuerdo multilateral establecía un marco relacional que permitía el que los Estados inversionistas dispusiesen de la capacidad para negociar las diferentes cláusulas con los Estados particularmente, las cuales podrían ser alteradas dependiendo del Estado y de las condiciones de mercado en el momento de su rúbrica. Por lo que el contexto dado abría un espacio, en el que podrían establecerse las condiciones de los tratados en base a un juego de oferta y demanda. En el que los diversos Estados en desarrollo con poca capacidad operativa se verían forzados a ceder en sus condiciones en busca de inversiones³¹², ya que en el ejercicio de negociación de los acuerdos se podrían exigir reformulaciones en cuestiones como los derechos de trato, que fuesen similares a los Estados “civilizados” y/o ya “desarrollados”, y de este modo incrementar el ejercicio competitivo entre los Estados receptores y necesitados de capital para “desarrollarse” (Oman, 2000)³¹³. Es decir, los inversores se posicionaron dentro de una relación, en la que podían exigir cierto trato a los Estados receptores y, además, no se contemplaban entre sus responsabilidades u obligaciones el operativizar ningún, o algún, leve impulso para promover los derechos internos en los Estados receptores en áreas laborales, sociales, económicas, etc..., similares a los de sus Estados de origen o países desarrollados³¹⁴. Más

³¹² En este sentido se manifestó primero el Informe Pearson en 1969. Cuando se lee en su interior, en referencia al trato a los inversores, se afirma que: “Los países en vías de desarrollo no deberían concederles, en cambio, ni una protección ni una serie de concesiones excesivas” (Pearson, y otros, 1970, pág. 4); o más tarde el Informe Hammar skjöld, en 1974, cuando se afirmaba que: “La preocupación por el control extranjero de sectores claves de las economías nacionales, tanto en los países industrializados como en los del Tercer Mundo. La reacción de los primeros ante las inversiones de los productores de petróleo en algunas de sus empresas contribuye, irónicamente, a traer al primer plano de la atención las implicancias del control extranjero. Es así posible que hayan mejorado las condiciones para la aplicación de los derechos que tienen los países, pero que muy a menudo -si son pequeños o débiles- no pueden ejercer sin confrontaciones económicamente nocivas, que tal vez no puedan ni quieran arriesgar. Los países del Tercer Mundo deben poseer, dirigir, administrar y comercializar sus propios recursos. Sólo en la medida en que sean dueños de su propia casa, cabe esperar que participen plenamente en esfuerzos colectivos a nivel internacional” (Fundación Dag Hammar skjöld y PNUMA, 1980, pág. 96).

³¹³ En referencia a este hecho, Stephan Schill (2009) argumenta que los acuerdos de inversión extranjera actúan de modo similar al que lo haría un acuerdo multilateral. Pues entiende que estos mecanismos disponen de una reglamentación que actúa como un sistema armonizado y ha reproducido ciertos principios que determinan el funcionamiento.

³¹⁴ En la actualidad existe sobre la mesa de las NNUU una propuesta por parte de Ecuador y Sudáfrica apoyada por 85 Estados, para que las EETTNN adquieran compromisos y obligaciones en la promoción de DDHH, y que puedan ser objeto de demanda penal. Asimismo cabe señalar que el 26 de junio de 2014 “El Consejo de Derechos Humanos (...) decide establecer un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta con el mandato de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en materia de derechos humanos” con los votos en contra de EEUU y la UE. (A/HRC/26/L.22/Rev.1. disponible en

bien lo contrario, ante la IED se ha recomendado habitualmente rebajar derechos sociales y otros derechos bajo la argumentación de promocionar la “competitividad” (Schneiderman, 2008; Poulsen, 2010).

Continuando con el análisis de la Conferencia de negociaciones en la OIC, indicar que en la misma se introdujeron artículos que contenían cláusulas en favor de la protección de inversiones, como los de: trato nacional; TNMF; trato justo y equitativo; y compensación por expropiación. Pero como resultado de las discusiones allí contenidas, en el llamado Capítulo de la Habana para la OIC (*Habana Charter* en inglés) se incluyó únicamente una cláusula referida a la cuestión de la inversión, la cual hacía referencia al hecho de no ejercer “acciones irracionales e injustificables” por parte de los Estados receptores a los capitales inversores. Y aunque el Capítulo de la Habana no fue ratificado, principalmente, porque el senado de los EEUU no lo ratificó³¹⁵ (Newcombe & Paradell, 2009, pág. 20), si evidenciaba su contenido la falta de capacidad de los Estados en desarrollo para incluir sus peticiones.

Una vez que la OIC no llegó a ser instaurada como entidad, se firmó el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros (GATT por sus siglas en inglés). El cual pasó a situarse como el mecanismo internacional encargado de promover y regular el comercio entre sus miembros. Y aunque en un inicio el GATT fue un acto paralelo a la elaboración de la Carta de la Habana, en donde se indicaban algunos de los contenidos que podrían estar inscritos en cuestiones de negociación arancelaria en la misma Carta, en el desenlace, debido a la no concreción de la OIC, se instauró como instrumento *ad hoc* considerado provisional, pero operando como una verdadera organización internacional al reunir los elementos fundamentales para ser considerada como tal: a) un tratado; b) órganos permanentes; c) y un presupuesto (Salvador, 2008).

Al analizar los principios contemplados en el GATT relevantes en cuestiones de IED, destacan por encima de todos aquellos incluidos en el principio de “no discriminación”. Principio en el que se incluyen las cláusulas de: TNMF y Trato nacional, que constituyen, en cierto modo, una normativización de las relaciones comerciales entre los Estados (Schill, 2009). Sin embargo, en la práctica la inclusión de excepciones en el principio indicado es un hecho muy relevante, dado la proliferación y aplicación de éstas en el contexto

<http://static.squarespace.com/static/524f388ee4b0b1071ff250bd/t/53ab501be4b0e7d61404f35b/1403736091261/EC%20SA%2024.06.14.pdf>)(Consulta realizada el día 29 de junio de 2014).

³¹⁵ El que sólo ratificasen la misma los Estados de Australia y Liberia, fue un hecho que refleja la falta de consenso en los contenidos presentes en la Carta de la Habana. Los demás Estados estuvieron a la espera de que los EEUU ejecutara su ratificación. Esta no llegó, y se constató el fracaso.

internacional. En este sentido relevancia máxima ha obtenido el Art. XXIV- tanto del GATT de 1947 como en su revisión en 1994-, puesto que por una parte esta excepción es aplicable en los pactos bilaterales o multilaterales que sean negociados entre dos o más países, que persigan la creación de un área de libre comercio o un proceso de integración semejante; y por otra, las condiciones contempladas en el mismo solamente serán de acceso a los países firmantes. Por lo que en este caso la cláusula de TNMF quedaría excluida³¹⁶. Esto es significativo debido el aumento exponencial de los TTBBII y los AAIIRR desde los años 60³¹⁷, y esto relegaba el principio de “no discriminación” a situaciones cuasi-excepcionales al aplicar esta cláusula.

El GATT fue evolucionando en el tiempo sin concluir medidas concretas multilaterales en cuanto al trato que debía otorgarse a la IED. Y el desarrollo de la legislación en torno al comercio y la inversión fue avanzando por separado. Desde 1948 hasta 1994 el ejercicio en pos de regular la IED en el marco internacional, ha tenido un carácter provisional e incluso actualmente no se ha concretado un acuerdo multilateral efectivo y se mantiene como uno de los “propósitos” actuales de la CI³¹⁸.

Desde La Habana en 1948, pasando por: Annency (Francia), Torquay (Reino Unido), Tokio (Japón), hasta la reunión celebrada en Punta del Este en Uruguay, no sé concluyó un solo acuerdo permanente, ya que todos los acuerdos poseían un carácter temporal³¹⁹. Dentro del marco GATT no se abordaron seriamente cuestiones referentes a la inversión, hasta la Ronda de Uruguay a mediados de los 80. Y aunque se debe resaltar que sí ha habido intentos de constituir y acordar un régimen mundial sobre las inversiones- como se refleja en la propuesta del Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) en el marco de la OCDE en las postrimerías de los años 90 (Sauvé, 2006, pág. 31)³²⁰-, no se han alcanzado

³¹⁶ A este respecto se recomienda la lectura de la información disponible en la página web de la OMC: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/region_s/region_art24_s.htm (Consulta realizada el 23 de mayo de 2014).

³¹⁷ Véanse datos sobre el incremento de estos acuerdos en informe de UNCTAD (2013).

³¹⁸ Así lo indica el resumen del *World Investment Report 2013: Global Value Chains: Investment and Trade for Development* de 2013 que elabora la UNCTAD llamado *Towards a New generation of International investment policies: UNCTAD's fresh approach to multilateral investment policy-making*, afirmando que: “At the international level, policy-making faces multiple challenges. The most pertinent of these are how to strengthen the sustainability dimension of international investment agreements (IIAs); how to preserve appropriate regulatory space for host countries; how to deal with the complexity of a fragmented treaty regime characterized by overlaps and incoherence; and how to address serious deficiencies in investor-State dispute settlement (ISDS)”. Disponible en línea: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2013d6_en.pdf (Consulta realizada el día 13 de mayo de 2014).

³¹⁹ Véase página oficial de la OMC en: http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact4_s.htm (Consulta realizada el día 12 de diciembre de 2013).

³²⁰ Señalar que los intentos por regular la inversión aspiraban más a una reglamentación multilateral que a una universal.

acuerdos en estos términos, como revela la reunión de la Ronda de Doha en Bali en 2013³²¹.

6.1 De Uruguay a Bali: la multilateralización normativa de la Inversión Extranjera Directa no interesa.

La Ronda de Uruguay³²², desarrollada entre en 1986-1994, fue el evento en el cual se establecieron las normas multilaterales jurídicamente vinculantes que han perdurado durante un mayor periodo en el tiempo³²³. Sin embargo, aquello que destaca de la conclusión de la Ronda es el abordaje que se realizó a ciertos temas influyentes en las prácticas relacionales, que significaron un cambio en la percepción de los diversos agentes respecto al trato y la importancia que se había otorgado a la IED en el marco de las RRII y el desarrollo. Entre ellas es pertinente indicar las siguientes según el investigador Pierre Sauvé (2006)³²⁴:

- i) “...un reconocimiento creciente de la relación cada vez más complementaria entre el comercio y la inversión en una economía mundial que se globaliza;
- ii) **una mayor conciencia, sobre todo en los países en desarrollo, de los beneficios que se pueden obtener de las políticas cuando se traducen en compromisos creíbles** en las esferas del comercio, la inversión y la protección de la propiedad intelectual;
- iii) una mayor apreciación del **aporte clave de la inversión** como medio principal para acceder a los mercados y acrecentar la competencia en ellos, y;
- iv) un significativo impulso en el ámbito mundial a **la liberalización del régimen de inversiones, a menudo sobre una base unilateral y estrechamente ligada a**

³²¹ Stephan Schill señala que la razón principal del no acuerdo ha sido la división en temas de regulación en torno al comercio y la inversión de los años 70, y la negación por parte de los Estados hegemónicos a alterar el surgimiento de un Nuevo Orden Internacional (Schill, 2009).

³²² Para profundizar sobre la Ronda de Uruguay consúltase en línea: http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact5_s.htm (Consulta realizada el 23 de marzo de 2014).

³²³ Entre las más relevantes se encuentran: el Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio (Acuerdos sobre las **MIC**); el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (Acuerdo **SMC**); el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (**AGCS**); el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (**ADPIC**); y el Entendimiento sobre Solución de Diferencias (**EDS**).

³²⁴ Pierre Sauvé es Profesor e investigador principal en el *World Trade Institute*, Berna. Investigador asociado, *International Trade Policy Unit, London School of Economics and Political Science*, Londres. Ha publicado trabajos abordando la IE y su normativa: *Liberalizing Trade in Services* (World bank Discussion Paper) Bernard Hoekmn y Pierre Sauvé (1994 Junio); *Investment Rules for the Global Economy: Enhancing Access to Markets* (Policy Study, 28) Pierre Sauvé y Daniel Schwanen (Mar 1996); *Domestic Regulation and service Trade Liberalization* (Trade and Development) Pierre Sauvé and Aaditya Mattoo (Agosto, 2003), y otros.

esfuerzos por reformar la reglamentación de sectores clave (como la energía, las telecomunicaciones y los servicios financieros y de transporte)”.
(Sauvé, 2006, pág. 31). **[Negrita propia]**

Cuadro de texto 1: Cuestiones relevante de la evolución: del GATT a la OMC.

El hecho transformador fundamental que produjo la Ronda de Uruguay- que finalizó con la reunión ministerial (Marrakesh el 15 de Abril de 1994 tras más de 8 años de negociaciones)- fue el que se acordó la creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC)- se constituyó oficialmente en Enero de 1995 en Ginebra- como organización sustituta del GATT. La nueva organización, aunque ha operado básicamente bajo los mismos principios contenidos en las GATT, presenta diferencias relevantes. Estas son señaladas por la propia OMC en su informe Con el Comercio hacia el Futuro (versión revisada 2001):

- “El GATT tuvo un carácter *ad hoc* y provisional. El Acuerdo General nunca fue ratificado por los Parlamentarios de los miembros, y no contenía ninguna disposición sobre la creación de una organización.
La OMC y sus Acuerdos tienen un carácter permanente. Como organización internacional, la OMC tiene una sólida base jurídica porque sus miembros han ratificado los Acuerdos de la OMC, y éstos estipulan el modo de funcionamiento de la OMC.
- La OMC tiene “miembros”. El GATT tenía “partes contratantes”, lo que subraya el hecho de que oficialmente el GATT era un texto jurídico.
- El GATT se ocupaba del comercio de mercancías. La OMC abarca también los servicios y la propiedad intelectual.
- El sistema de solución de diferencias de la OMC es más rápido y más automático que el antiguo sistema del GATT. Sus decisiones no pueden ser objeto de trabas”.

Fuente: (OMC, 2001a, pág. 14)

Sin embargo y a pesar de lo apreciado en la Ronda de Uruguay respecto a la pertinencia de impulsar un marco de la regulación de la IED, no significó esta apreciación el que impulsase una regulación multilateral. De hecho, el marco en el que se ha operado no es exactamente de desconfianza absoluta, pero se caracteriza más por ese atributo que por el de confianza en la protección al inversor en el aspecto multilateral. Esto a pesar de la aprobación de dos acuerdos relevantes referidos a la IED en la Ronda de Uruguay como fueron: a) el Acuerdo sobre Medidas en Materia de Inversiones Relacionadas con el Comercio (MIC)³²⁵; y b) el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGC)³²⁶.

³²⁵ La OMC indica que el MIC que: “El Acuerdo sobre las Medidas en Materia de Inversiones Relacionadas con el Comercio (MIC) reconoce que hay inversiones que pueden restringir o distorsionar el comercio.

Y es que la multilateralización normativa en cuestiones de IED brilla por su escasez. Contrariamente, la reglamentación que se ha constituido en la SI se presenta, desde los años 60, en las cláusulas contenidas en los AII. Es decir, cláusulas establecidas entre agentes particulares, en donde la presencia de una normativa recae sobre la relación que se establezca entre dos o más Estados. Por lo que la interacción atiende a características particulares inscritas en los tratados, y la situación de asimetría, en términos de capacidades para la negociación, es un rasgo característico de la normativa, ya fuere para incluir o excluir cláusulas.

Continuando en el tiempo y tratando de solventar cuestiones que habían quedado pendientes por abordar en la Ronda de Uruguay, la siguiente ronda de negociaciones- que aún continúa operativa- en la que se trató de incluir cuestiones referidas a la IED fue la Ronda de Doha (2001-¿?).

El Programa de Doha en temas de IED es percibido como el gran intento de fallido de establecer una norma multilateral que estableciese una regulación (Schneiderman, 2008). Esta Ronda, en principio, se marcó como objetivos iniciales abordar la mejora y alcanzar un consenso en los conocidos como *Temas de Singapur*³²⁷: inversión, comercio y políticas de competencia, la facilitación del comercio y la transparencia de la adquisición pública de bienes y servicios. Señalar al respecto, que aunque estos requerimientos por parte de la CI cuentan con una larga historia analítica³²⁸, la regulación de la IED aparece como la cuestión, que en muchos casos, ha provocado que se dificultasen los acuerdos. Y se señala, además,

Establece que los Miembros de la OMC no pueden aplicar medidas que discriminen los productos de otros países o introduzcan restricciones cuantitativas, dos efectos que constituyen una violación de los principios de la OMC. En el Acuerdo se enumeran algunas MIC prohibidas, por ejemplo el requisito de contenido nacional. El Comité de MIC supervisa el funcionamiento y la aplicación del Acuerdo y sirve de foro para consultas de los Miembros sobre cuestiones pertinentes”. Texto completo en línea: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/invest_s/invest_info_s.htm (Consulta realizada el día 09 de mayo de 2014).

³²⁶ Este acuerdo contiene entre sus elementos más llamativos respecto a la IED las disposiciones en su parte III sobre el acceso a los mercados y trato nacional, ya que indica que “...en el caso del acceso a los mercados, cada parte otorgará a los servicios y a los proveedores de servicios de las demás Partes un trato no menos favorable que el previsto de conformidad con los términos, limitaciones y condiciones convenidos y especificados en su lista, cuestiones que pretende como la propia OMC afirma, suprimir...” y “...Eliminar progresivamente las restricciones a los tipos de persona jurídica o de empresa conjunta por medio de los cuales se suministre un servicio, así como cualquier limitación relacionada con los niveles máximos de participación extranjera en el capital”. Véase documento completo en: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/invest_s/invest_info_s.htm (Consulta realizada el 13 de abril de 2014).

³²⁷ En 1996, una vez finalizada la Ronda de Uruguay, la Conferencia Ministerial de Singapur inició el proceso que ambicionaba una regulación progresiva de reglas multilaterales que se habían iniciado en la Ronda.

³²⁸ Entre ellos los estructuralistas latinoamericanos; los teóricos de la dependencia; el grupo de los PNA; y desde 1996, la OMC viene impulsando la Rondas que tratan de establecer mecanismos que operativicen de un modo regular los diferentes modos de interacción comercial. Especialmente a través de la creación del Grupo de Trabajo sobre las Relaciones entre comercio e inversión (WGTI por sus siglas en inglés).

como una de las causas principales del fracaso de la Quinta Conferencia Ministerial de Cancún de la OMC en 2003 (Sauvé, 2006, pág. 35). La siguiente tras darse inicio a la Ronda de Doha.

A este respecto, ya anteriormente en 1996, en la Conferencia Ministerial de Singapur se había incidido en la conveniencia de instaurar medidas que regulasen la IED multilateralmente, ya que se consideraba que la ausencia de esta regulación dificultaba el objetivo de fomentar el comercio. Pero de nuevo, las posturas no poseían una visión común, como se evidencia al revisar los informes que fueron elaborados por el Grupo de Trabajo Para las Relaciones entre Comercio e Inversión (WGTI por sus siglas en inglés), en 2000 y 2001, en donde se indicaba que no existía el consenso suficiente para establecer compromisos (OCDE, 2002; OMC, 2001a).

En la misma línea, a comienzos de la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC que dio inicio oficial a la Ronda de Doha en 2001, se había reconocido que era recomendable para la economía y el desarrollo la existencia de un marco multilateral en cuestiones de IED, para incrementar el desarrollo económico³²⁹. Sin embargo, de nuevo en las reuniones de Doha y Cancún se dieron cita posturas diversas, que se evidenciaron en las declaraciones y los actos que produjeron el no avance en la promoción de una normativa multilateral en cuestiones de IED.³³⁰

Ya en la indicada Conferencia Ministerial celebrada en Cancún (2003), fue difundida una declaración que señalaba la problemática y la pertinencia de excluir de las negociaciones la regulación de la IED: el conocido como *Texto Deber*³³¹ - denominado así en nombre del Ministro Exterior de México: Luis Ernesto Derbez (Presidente de la mesa). El texto reflejó la disparidad posicional respecto a las cuestiones que componían los *Temas de Singapur* e instaba a que, en pos de que la Ronda avanzase, se debían centrar los agentes en abordar y concretar el cómo articular un pacto que contuviese, únicamente, dos temas: la facilitación del comercio y la transparencia de la adquisición pública de bienes y servicios. Indicando que más adelante en el tiempo se abordarían las otras cuestiones. Entre ellas la regulación de la IED.

³²⁹ Revisar párrafos 20-22 disponibles en Declaración Ministerial adoptada el 14 de Noviembre de 2001(WT/MIN (01)/DEC/1). En línea: http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_s.htm (Consultado el día 02 de abril de 2014).

³³⁰ Posiciones encontradas en cuestiones de: no discriminación; modalidades de compromisos; derechos de entrada mediante listas positivas (o negativas) respecto a la IED; capacidad técnica de los Estados en desarrollo; los mecanismos de arbitrio en el seno de la OMC; etc... evidenciaron la dificultad de negociación.

³³¹ El texto era un borrador sobre los temas que serían abordados antes de la Conferencia.

Lo ocurrido en Cancún es percibido como un fracaso. Esta reunión significó el acto en el que se constató la exclusión de la regulación multilateral de la IED de la Agenda de desarrollo de Doha y, además, evidenció el encuentro entre dos posturas que habitualmente eran contrarias en cuestiones de regularización global: los EEUU y los países en desarrollo. Aunque es pertinente rescatar de aquel evento que las motivaciones eran diametralmente opuestas.

Los EEUU realizaron acciones previas a Cancún y, en cierto modo, actuaron como promotores de la paralización de una regulación multilateral de la IED. De hecho, el representante de comercio de los EEUU Robert Zoellick, envió una carta a los ministros de los países miembros de la OMC, en donde sugería cómo debía operar la *Ronda de Doha*. En ella recomendaba que se separasen los *Temas de Singapur* y se abordasen inicialmente las cuestiones de: la facilitación del comercio y la transparencia de la adquisición pública de bienes y servicios. Zoellick escribió: “...nosotros podríamos o sacarlos de la agenda- como yo preferiría para concentrar nuestro trabajo- o desarrollar un plan de estudio”.³³² Resaltando éste en el texto que si no lo hacían, se retrasarían aún más todos los acuerdos en otros temas.

En todo caso, los EEUU justificaron la ausencia de regulación de IED, en base a que consideraban que los temas indicados poseían un mayor peso en el impulso del desarrollo y de no separarlos se estancaría las negociaciones, dadas las diferencias existentes por parte de los diversos Estados. Sin embargo, la idea que subyace en la argumentación es que, sin la presencia de una normativa multilateral y operando bajo TBI o AIR, es mayor el grado de liberalización que se produce bajo la perspectiva estadounidense. Contexto en el que los EEUU tendrían mayor capacidad operativa de influir en las condiciones de cada tratado (Sanna-Randaccio, 2004, pág. 7).

Por la otra parte, las motivaciones de los Estados en desarrollo eran otras. Éstas se concentraban en la idea de que una normativa multilateral poseía dos inconvenientes principales para sus intereses: 1) limitaría la práctica política para el desarrollo- capacidad de acción interna de los Estados- ; y 2) requeriría de elevados costes para agilizar las

³³² Traducción propia a partir de: “...we could either drop them – as I would prefer, so as to concentrate our work- or develop a plan of study” (Declaración por parte Robert Zoellich, representante de comercio de los EEUU en 2004. (Citado en Sanna-Randaccio (2004, pág. 6)).

**Mencionar que la carta original ha desaparecido de los archivos del *International Centre for Trade and Sustainable*: <http://www.ictsd.org/ministerial/cancun/docs/Zoellick-letter.pdf>. Antigua dirección. (Consultado el día 02 de abril de 2014).

negociaciones e implementar las obligaciones³³³. En el mismo sentido, prudentes, los Estados en desarrollo advenían que en caso de establecer una regulación multilateral permanente su capacidad para alterar la misma, una vez instaurada y en funcionamiento, se vería reducida³³⁴.

En los tiempos recientes, el último evento perteneciente en el marco de la Ronda de Doha, ha sido la Novena Reunión Ministerial de la OMC celebrada entre el 3 y el 7 de diciembre de 2013 en Bali. En ella, como mayor logró se obtuvieron acuerdos sobre la facilitación del comercio³³⁵. Pero se postergaron para el futuro la negociación de temas como: la inversión, las cadenas globales de valor, el cambio climático, los créditos a la exportación, etc... Por lo que la regularización multilateral de la IED sigue siendo un tema a regular entre agentes particulares mediante los TTBBII o AAIIRR.

Lo acontecido en Bali 2013, además de significar una evidencia clara de que no hay voluntad política real de acometer la regulación, expresa la negación, o puesta en lejanía, de aquella voluntad primaria a comienzo de la *Ronda de Doha*, en donde se había afirmado que una meta necesaria en términos de desarrollo era acometer una regulación multilateral para **“...asegurar condiciones transparentes, estables y previsibles para las inversiones transfronterizas a largo plazo, en particular las inversiones extranjeras directas”** (OMC, 2001b, pág. Punto 20).

A favor y en contra de establecer un acuerdo multilateral se han esgrimido diferentes postulados. A favor de su creación, se expone que los acuerdos existentes componen una imbricada red de acuerdos superpuestos (Sauvé, 2006), y se indica que, aunque una norma multilateral es temida por los Estados en desarrollo, debido a que la observan como una disminución de su capacidad para competir por atraer IED, en ningún caso contendría la extensión de cláusulas que contienen los TTBBII o los AAIIRR. Por lo que en este sentido, sería algo beneficioso para los Estados en desarrollo la multilateralización, pues no se estipularían condiciones abusivas, debido a que los Estados desarrollados operarían con ellas paralelamente (Sanna-Randaccio, 2004).

³³³ Véase el documento: “*Singapur Issues: The way forward*” Disponible en http://commerce.nic.in/trade/international_trade_papers_nextDetail.asp?id=55 (Consulta realizada el día 03 de mayo de 2014).

³³⁴ El reflejo de este posicionamiento se constata al observar que los TTBBII entre los países en desarrollo o considerados del Sur, que han sido aquellos que se han producido en mayor número en la época reciente. Véanse datos en UNCTAD (2013).

³³⁵ Decisión Ministerial WT/MIN(13)/W/8. Para mayor información sobre los acuerdos allí acontecidos véase en línea: <https://mc9.wto.org/es/proyecto-de-declaraci%C3%B3n-ministerial-de-bali> (Consultado el día 10 de mayo de 2014).

En contra, se afirma que no es necesario dicha normativa, ya que actualmente existe un conjunto de normas que regulan la inversión y componen una estructura en múltiples niveles en los diferentes tipos de tratados (TTBBII, AAIIRR); y a nivel multilateral existen los MIC y AGS en la OMC (Schill, 2009).

En todo caso, las normas con las que se opera actualmente están lejos de ser perfectas y aunque no se ha propuesto ningún tipo de reglamentación que responda a las demandas de los diversos agentes, su promoción parece algo necesario ante el incremento exponencial de denuncias de los TTBBII en las últimas fechas (UNCTAD, 2013, pág. 111).

6.2 Los Tratados Bilaterales de Inversión: historia, impacto y actualidad de una herramienta condicionante en términos de soberanía.

Una vez acabada la IIGM, en un contexto en el que era evidente la ausencia de mecanismos de carácter multilateral que regulasen la IED entre los Estados y que a su vez tuviesen capacidad para articular una normativa que fuese percibida como “justa” por parte del inversor y del Estado receptor³³⁶, en la CI se procedió a la adopción de mecanismos que promoviesen cierta estabilidad en las relaciones entre Estados, tras el auge de los procesos de descolonización. Se fomentó la aplicación de Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI).

En este contexto, dentro de los APPRI, los TTBBII fueron el mecanismo que se promovió para articular las diferentes demandas de los agentes afectados por las disputas: los inversores, el Estado receptor y el Estado de procedencia del inversor. El TBI pasó a ocupar el hueco dejado por el DI en cuestiones de inversión, desplazando del conflicto al Estado del nacional y otorgando la calidad de agente al inversor. Con lo que se aspiraba a promover una reducción de conflictos entre los Estados.

Desde los años 60 el TBI se ha convertido en el instrumento predilecto en cuestiones relacionadas con el trato a la inversión extranjera. En él, se establecen una serie de principios con el objetivo de asegurar la protección de los inversores, al incluirse en su articulado cláusulas que regulan la relación Estado-inversor. En caso de que se incumpla el

³³⁶ Por parte de los Estados “civilizados” se tenía la sensación de cierta desprotección del inversor ante las diferentes decisiones de los Estados receptores, las cuales podrían causar un perjuicio en el ciudadano nacional que decidía invertir; por el contrario, el Estado receptor sentía que no se respetaba su soberanía interna en estas disputas. Contexto por el cual el arbitrio de las disputas entre Estado e inversor ha sido objeto representativo de la diferente percepción por parte de los ciudadanos pertenecientes a occidente, y los Estados en desarrollo. Pues mientras los segundos veían el mecanismo con cierto escepticismo, los inversores lo veían como un mecanismo fiable y neutral (Newcombe & Paradell, 2009).

acuerdo, se contravienen una serie de disposiciones que otorgaran una seguridad jurídica al inversor³³⁷.

Ciertamente, se puede indicar que este tipo de tratado se implementó en un momento en el que la estructura no parecía demandar un recurso como éste. En este sentido, hay que señalar y tener en cuenta, que aparte de las expropiaciones del petróleo ocurridas en México y Bolivia con anterioridad a la proliferación de los TTBBII, el ejercicio expropiatorio ejecutado por los gobiernos estuvo acompañado por compensaciones a los inversores foráneos de acuerdo al principio de “Trato justo” (Courdet & Lans, 1946, págs. 734-744). Pero aun indicando este hecho, se evidencia en la promoción de los TTBBII la voluntad implícita de eliminar, o al menos reducir, la posibilidad de que se recurriese a la expropiación incluso cuando hubiere compensación, ya que entre 1960 y 1974 se proliferó su práctica como acto de respuesta a 875 casos de expropiación por parte de 62 Estados (Mahutga & Bandelj, 2013, pág. 102)³³⁸.

En este aspecto, aquello que cambia de forma determinante las reglas relacionales que impliquen la práctica de la IED, es que en un TBI por norma general se incluye una cláusula que otorga la capacidad al inversor de actuar como agente. Cuestión que representa dos elementos nuevos en la disputa. Por una parte, el establecerse en el articulado la posibilidad de que sea el inversor el que acuda a la justicia internacional, elude a su Estado de procedencia de la necesidad de involucrarse en un conflicto con el Estado receptor; y por otra, exime al inversor a estar sujeto, “únicamente”, a la legislación interna de los Estados cuando considere que ha sufrido daño. Este mecanismo que otorgaba una categoría al inversor se significó principalmente en la inclusión de una cláusula en los TTBBII, que permitía al inversor dirimir las disputas por medio de un mecanismo resolutivo externo al Estado: la capacidad de recurrir al arbitraje.³³⁹

³³⁷ El primer TBI se firmó el 1959 entre Alemania y Pakistán conteniendo las cláusulas de: no discriminación; protección total y seguridad; compensación por expropiación; transferencia libre de capitales; así como que la disputa en caso de disconformidad sería resuelta por la Corte Internacional de Justicia si hay acuerdo en su designio, o si no, por un tribunal arbitral a petición de una de las partes (*World Investment Report 2011: Non-Equity Modes of International Production and Development*) (Citado en (Singh & Sharma, 2013, pág. 91)).

³³⁸ Estos acontecimientos se debieron, en gran parte, a la aparición de la Resolución 1803 (XVII) de 1962 de la Asamblea General de las NNUU, en la que se reconocía la soberanía de los Estados sobre sus recursos naturales. (NNUU, 1962).

³³⁹ A fecha de 2012 hay que señalar que de las 514 disputas acontecidas hasta la fecha 314 han sido propuestas ante el CIADI; 131 han operado mediante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional CNUDMI (UNCITRAL por sus siglas en inglés); y el resto por otros organismos menos utilizados como La Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio, la Cámara de Comercio de Estocolmo, y el Centro Internacional de Arbitraje Comercial del Cairo (UNCTAD, 2013, págs. 110-111).

La difusión del TBI se aceleró considerablemente. En gran medida esto fue debido a que, como la IED fue potenciada como herramienta de acceso al desarrollo para los Estados en vías de desarrollo, se le atribuyó a la firma de un TBI la condición de potenciar la inversión. Lo cual bajo el esquema operativo desarrollista no era únicamente la mejor solución para un Estado en vías, sino la única. Se afirmaba que la firma de un TBI suponía un doble beneficio puesto que era: 1) reflejo de seguridad para el inversor; y 2) constituía en esencia un reclamo a la inversión. Se indicaba que los Estados que accediesen a su firma serían vistos como receptores fiables de IED (Neumayer & Spess, 2005; Poulsen, 2010). Contexto en el que aquellos Estados que se encontraban necesitados de “desarrollo”, comenzaron a firmar los TTBBII en cadena.

En términos generales se podría decir que la firma de los TTBBII se ha producido en oleadas. Proceso que han clasificado Jandhyala, Heinsz y Mansfield (2011) en tres fases:

Fase 1: Acontecida entre 1950 y 1980, los acuerdos crecieron a velocidad constante pero lenta y la mayoría se produjeron entre Estados del Norte (desarrollados) y Estados del Sur (Sub-desarrollados). La época en la que se fomentó este tipo de acuerdos se caracterizó por la búsqueda de seguridad jurídica por parte de los Estados desarrollados, tras los señalados procesos de nacionalización y expropiación;

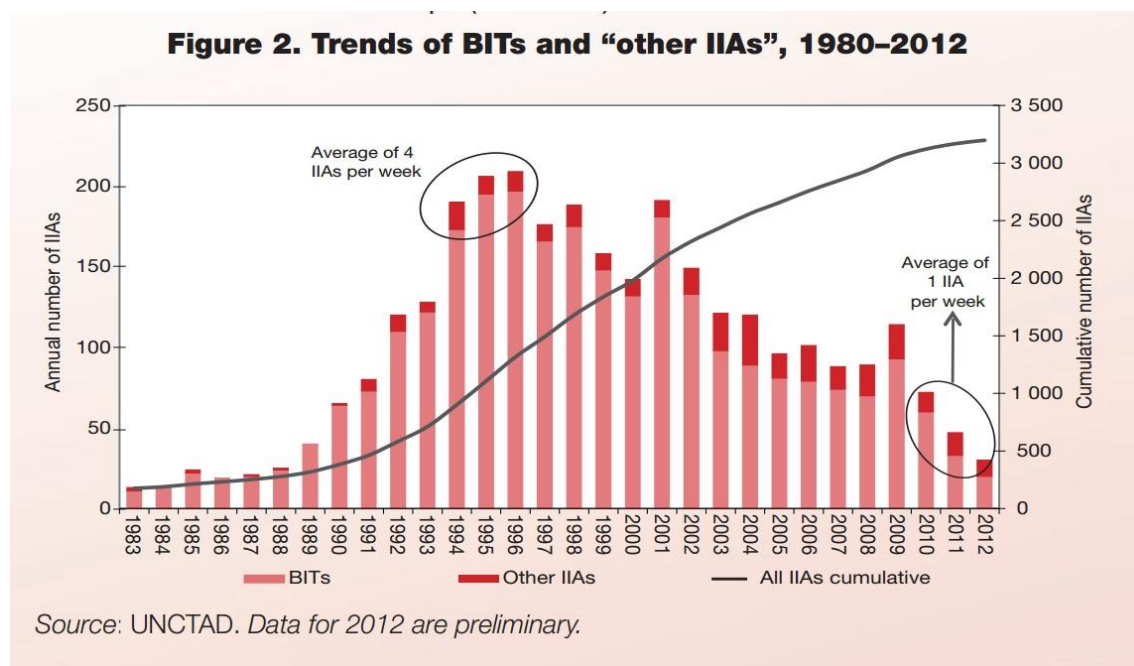
Fase 2: Durante la década de los 90 se incrementó el número de TTBBII, debido a un incremento de acuerdos entre países en desarrollo. Esta época estuvo caracterizada por lo que se define como una “cascada de adopción de normas” (*norm cascades*). Se produjo una difusión internacional de este tipo de acuerdos, aunque “no existiese una demanda” de este hecho en la sociedad internacional (Finnemore & Sikkink, 1998). Los TTBBII pasaron a ocupar un espacio predominante en las relaciones comerciales entre Estados, debido al impulso que produjo la corriente teórica liberalizadora que tuvo cita durante los años 90;

Fase 3: Tras las crisis acontecidas en el Sud-este Asiático en 1998 y la crisis Argentina en 1999, se detecta el comienzo del decrecimiento de la firma del TBI por parte de los Estados.

Observando las fases, quizás, como apuntó Philip Nel en su ponencia *The Rise and Fall of BITs* (2013), sea prematuro generalizar al hablar de una pérdida total de confianza en los TTBBII. Pero es evidente que se da la existencia de una clara repulsa, por parte de algunos

agentes involucrados en su práctica, al papel que está ejecutando el arbitraje internacional como mecanismo de autoridad parcial (Eberhardt & Olivet, 2012; Nel, 2013; Poulsen, 2010). Puesto que desde los años 90 se observa una tendencia *increciente* a recurrir a la vía judicial para solventar estos conflictos (Sauvé, 2006; UNCTAD, 2013).

Gráfica 3: Tendencias de Tratados Bilaterales de Inversión y otro Acuerdos de Inversión Internacional.



Fuente: (UNCTAD, 2013).

Respecto a las fases señaladas, hay que indicar que éstas han estado caracterizadas por la adopción de diferentes postulados por parte de los agentes involucrados. Sin embargo, en términos generales sí es posible visualizar como el proceso tiende a instaurar cierta regulación, partiendo de la aparente legitimidad y real asimetría existente entre los agentes firmantes, a la hora de realizar las negociaciones que dan pie a este tipo de acuerdos. Es decir, este proceso ha significado, en cierto modo, la institucionalización de una práctica política cuasi-mundial, que ha fomentado su práctica sin que en muchos casos los Estados en desarrollo hubiesen valorado exactamente las consecuencias de asumir las implicaciones de lo firmado; fijando éstos su mirada en la corriente teórica que auguraba un próspero futuro al país que recibiese la IED (Poulsen, 2014). Es a causa de este hecho cuando, en la tercera y reciente fase, algunos Estados han reaccionado quejándose sobre las implicaciones inscritas en los TTBBII, indicando que estos acuerdos representan un proceso de institucionalización de una legalidad internacional, a partir de la delegación de la

decisión sobre asuntos correspondientes a la protección de inversores a instituciones externas a los Estados. Acto que constituye, además de una transferencia de soberanía por parte de los Estados,³⁴⁰ la institucionalización de reglas en una estructura sin que tengan éstas un origen “democrático” (Schneiderman, 2008).

Lo indicado en el párrafo anterior es causa de que en muchos casos la firma de TTBBII o AAIIRR sea vista por Estados receptores como un medio utilizado para defender los capitales. Puesto que, debido a la rúbrica en los AII, los capitales poseen la capacidad legal de recurrir a arbitrios que evocan a la competencia y al DI, para decidir cómo se juzgan los asuntos que se produzcan en el interior de los territorios receptores (Nel, 2013, pág. 7; UNCTAD, 2013, págs. 101-111).

Cuadro de Texto 2: Disposiciones principales de los Tratados Bilaterales de Inversión.

<p>Las disposiciones principales de un TBI son:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Alcance y definición de la IE;b) la admisión de inversores;c) el trato nacional y de nación más favorecida;d) el trato justo y equitativo;e) las garantías y compensaciones relativas a las expropiaciones;f) las garantías para la libre transferencia de fondos y la repatriación del capital y las utilidades;g) y disposiciones relativas a la solución de controversias entre Estados, y entre inversor y Estado.
--

Fuente: A partir de (Sauvé, 2006).

El impacto en la estructura internacional de los TTBBII es mayúsculo. Por una parte, estos tratados poseen especial repercusión en la política internacional, ya que pueden actuar como el elemento que mide la presión política ejercida, a favor y en contra, del proceso por diversos agentes; y por otra, actúan como elemento articulador en un área en el que se institucionalizan y legalizan las prácticas internacionales como parte de las políticas globales (Nel, 2013; Schneiderman, 2008; Schill, 2009).

³⁴⁰En las negociaciones respecto a la pertinencia de firmar los TTBBII, los Estados en desarrollo, dado que eran los más afectados por la normativa, acordaron ceder capacidad soberana cuando firmaban estos tratados disponiéndose a aceptar las resoluciones del CIADI u otro órgano en asuntos sucedidos en el interior de su territorio.

Además de lo señalado, lejos de ser instrumentos que se caracterizan por operar como elementos neutrales, los TTBII ejercen de instrumento de protección de los inversores. Este hecho se evidencia en su práctica, si se ejerce una revisión de sus disposiciones. Ya que se detecta que no se incluye entre ellas ninguna que contemple la responsabilidad por parte del inversor en cuanto a la finalidad y justificación primaria expuesta en la entrada a la IED.

“...una característica destacada de los tratados bilaterales sobre inversión es la multiplicidad de disposiciones que contienen que están diseñadas específicamente para proteger las inversiones extranjeras, y la ausencia de disposiciones diseñadas específicamente para asegurar el crecimiento económico y el desarrollo” (Zampetti & Fredriksson, 2003) Citado en Sauvé (2006, págs. 32-33) **[Negrita propia]**.

En el proceso de negociación entre los diversos agentes, el TBI, como mecanismo apropiado para regular las relaciones de inversión, ha defendido su pertinencia indicando los siguientes argumentos: 1) la inclusión del arbitraje neutro suponía seguridad para el inversor; 2) la IED proporcionaría desarrollo; y 3) se le atribuía el efecto llamada, ya que si se accedía a la firma de éste se indicó que acudiría mayor volumen de IED.

El punto dos ya fue expuesto en el punto 4.1.1, indicando que la afirmación era cuando menos de dudosa veracidad.

Los puntos uno y tres poseen cierta relación. Del arbitraje se ha afirmado que si se excluía la capacidad de recurrir a este mecanismo para la resolución de disputas en los TTBII, los efectos en la negociación serían terribles y los Estados en desarrollo no tendrían nada que ofrecer para atraer inversión y, consecuentemente, esta no se produciría. Por lo tanto, se indicó que la adopción de los TTBII promocionaría la inversión (Eberhardt & Olivet, 2012). Sin embargo, este hecho no es del todo cierto según se ha señalado por diversas fuentes, como por ejemplo Mary Halward-Driemeier (2003) -Economista Senior del departamento de investigación del Banco Mundial- cuando sostiene que: “...el análisis de veinte años de flujos bilaterales de IED de la OCDE a países en desarrollo muestra escasos indicios de que los TTBII hayan estimulado inversiones adicionales”. (Citado en Eberhardt & Olivet (2012, pág. 46); o Lauge Poulsen N. Skovgaard- Investigador de la London School of Economics- en su documento *The importance of BITs for foreign Direct*

Investment and Political Risk Insurance: Revisting the evidence (2010), donde concluye que la causalidad entre el TBI y la acudida de IED no guarda una relación directa³⁴¹.

Existen otros estudios que analizan otros factores que promueven la inversión. Entre ellos algunos afirman que la IED acude más por la capacidad de producción y ventajas competitivas que pueda obtener en el lugar de recepción, que por la seguridad o firma de un TBI (Borezestein, De Gregorio, & Lee, 1998; Eberhardt & Olivet, 2012). Señalan además, que existen casos como el Estado de Brasil, que sin haber firmado nunca un TBI es el país que encabeza la recepción de IED en Latinoamérica.

De hecho, parece evidente que si todos los Estados del planeta firmasen los TTBBII, el factor diferencial no sería constitutivo de preferencia alguna y serían otros elementos los que primarían. Pero sin embargo, es algo evidente que la firma significaría un proceso de institucionalización de una norma de protección al inversor, sin beneficio alguno para el receptor, ante la ausencia de compromiso por parte del inversor. Es decir, uno de los agentes no asumiría ninguna responsabilidad en los efectos de la práctica.

6.3 Los Acuerdos de Integración Regional. Mecanismos paralelos de regulación de la Inversión Extranjera Directa.

Esta modalidad de acuerdo vivió su primera época de auge en la posguerra. Fue éste el periodo en el que se inició un proceso asociativo, significándose una primera fase de integración más allá del Estado nación³⁴². Entre sus procesos más representativos se encuentran la constitución de la CEE (1957) y los AIR que se sucedieron en la región de ALC, o la ASEAN – procesos con diferentes particularidades, contenidos políticos y alcances³⁴³.

³⁴¹ Hay más autores que señalan este hecho. Véanse por ejemplo: Poulsen (2010); Eberhardt & Olivet (2012); Egger & Pfaffermayr (2004); Sauvé (2006); o Kerner & Lawrence (2012).

³⁴² En este sentido se señala que han existido tres procesos masivos de integración: **Regionalización I**: la constitución de los Estados nación, tras la firma de la paz de Westfalia, como entes aglutinadores de territorios; **Regionalización II**: con la firma de la CEE (desde 1950 hasta 1992); y **Regionalización III**, en donde se firman exponencialmente Acuerdos Bilaterales, AIR: comerciales y de cooperación (Clifton, 2010, pág. 11).

³⁴³ Los AIR presentan diferentes modalidades al: contener diferentes propósitos, presentar diversidad en su composición (miembros heterogéneos o no), variar en el contenido político, en el número de acuerdos, en su motivación, en su alcance y en sus objetivos. Además de que éstos pueden estar compuestos por dos miembros (bilateral), o más de dos (plurilateral).

Asimismo señalar que estos procesos tomaron vías diferentes. Por ejemplo, la CEE sufrió transformaciones hasta la actual Unión Monetaria; y por contra, el proceso fue debilitándose en ALC en los 70, y ha sufrido un nuevo impulso con el comienzo de siglo.

Una segunda fase se inició a mediados de los años 80, en lo que se denominó “Nuevo Regionalismo”. Periodo que se caracterizó por el aparente éxito que había tenido el Tratado de Roma en la CEE y la andadura hacia el Mercado Común Único; el proceso integracionista de los EEUU y Canadá, constituyendo en el TLCAN (1988 entrando de vigor en 1989), presentando un modelo bilateral en sus inicios e incorporándose años más tarde México (entrando de vigor en 1994)-; el surgimiento del MERCOSUR (vigencia 1991); y la constitución de otras organizaciones como la ASEAN *Free Trade Area* (AFTA), *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), etc....

Recientemente, desde el año 2002 viene produciéndose una nueva ola de AAIIRR, en la que se han firmado cerca del 50% del total (189 AIR- a 1 de enero de 2014-, entre bilaterales y plurilaterales (actualmente hay 377 AAIIRR en vigor, de las 583 notificaciones que ha recibido la OMC en total)).³⁴⁴

Hay que señalar que los AAIIRR se han constituido en diferentes formas y presentando diversas características, que definen su grado de integración. En este sentido, habitualmente se ha tendido a indicar que el proceso ha poseído una linealidad en su conformación, en donde la integración debía seguir unos pasos ordenados, que van desde el acuerdo económico hasta la integración política- siguiendo el modelo que realizó la UE-. Sin embargo, actualmente no se considera que deba ser así. Y ejemplos como el proceso que vive ALC, que otorgan un grado anterior a la confluencia política, rebaten la direccionalidad integradora.

AAIIRR ordenados por grados de integración (teoría de escalera):

- a) **Tratado o Acuerdo de Preferencias Comerciales (ACP o TCP):**
Eliminación unilateral de barreras al país asociado. (Ej. India-Nepal (2010); MERCOSUR- India (2010)).
- b) **Área de Libre Comercio o TLC:** Los Estados parte eliminan aranceles entre ellos, pero disponen de aranceles propios en sus relaciones con el resto (Ej.: TLCAN(1990; 1994), CEFTA, Australia – Nueva Zelanda (ANZCERTA)(1995);

³⁴⁴ Datos obtenidos en la página referida a AIR en la OMC: <http://rtais.wto.org/UI/PublicPreDefRepByEIF.aspx> (Consulta realizada el día 12 de mayo de 2014).

- c) **Unión Aduanera:** Los miembros suprimen aranceles entre ellos y adoptan uno común del grupo frente al resto de Estados o grupos de Estados (Ej.: CARICOM; Eu-Turquía (1995); ASEAN (1999)).
- d) **Mercado Común:** Los miembros eliminan aranceles, adoptan uno externo común y suprimen restricciones al movimiento de factores de producción en el interior del grupo de Estados (Ej.: MERCOSUR (1991)³⁴⁵; el Mercado Común Centroamericano (MCCA) (1960)).
- e) **Mercado Común Único:** Mercado común con armonización técnica, títulos y licencias.
- f) **Unión Económica y Política:** un Mercado común con armonización política monetaria y fiscal.
- g) **Unión Monetaria:** Los Estados comparten moneda única común y política monetaria. (Ej.: UE (1998)).

En cuanto a la regulación en temas de IED, en general, al contrario que los TTBBII, los AAIIRR no están diseñados en torno a la pretensión de proteger a la IED. Éstos, en mayor medida aquellos de carácter interregional, suelen centrarse en asuntos referentes a la liberalización de los regímenes de inversión, y aunque en ocasiones tienen presencia en sus textos constitutivos asuntos relativos a la protección de las inversiones, esto varía dependiendo del acuerdo (Ej.: son de carácter excepcional en la UE³⁴⁶; contienen cláusulas similares a los TTBBII en otros acuerdos; o se ven implementadas a partir de éstas como sucede en el caso del TCLAN).

En principio, la finalidad de estos acuerdos, más allá de proteger al inversión, es la de crear un “clima de confianza” que atraiga a los inversores y que produzca un aumento de la inversión en el interior de las regiones o de éstas con el exterior. Estas ambiciones iniciales presentan diversas lecturas en la actualidad. Si en origen este tipo de acuerdos se inscribían dentro de las relaciones regionales entre territorios pertenecientes a un espacio geográfico determinado en búsqueda de lograr cierta solidez interna, al constituirse en la actualidad, desde los años 90 y en mayor auge en el primer decenio del nuevo siglo, la constitución de

³⁴⁵ MERCOSUR no ha alcanzado las metas que requiere esta categoría. De hecho, aunque está entre sus objetivos fundacionales se ha de señalar que: el comercio interno opera al 95% y el objetivo de instaurar un Mercado Común no se logra y posee excepciones no fijadas. Ver excepciones en <http://www.aladi.org/nsfaladi/guiasimportacion.nsf/09267198f1324b64032574960062343c/a0ebbe84d9f047bd0325750f0054dbd9?OpenDocument> (Consulta realizada el día 12 de mayo de 2014).

³⁴⁶ En este sentido destaca el acuerdo de la UE, ya que en él los Estados pactan un TBI particular con la UE como agente, por lo que el acuerdo regional no instituye una capacitación conjunta en cuestiones de protección a la inversión (Sauvé, 2006, pág. 5).

un AIR entre Estados que pertenecen a diversas regiones y con diferentes niveles de desarrollo abarca un mayor número de interrelaciones particulares. Por lo que se debe ser precavido a la hora de establecer una causalidad en la relación de beneficios compartidos y el asegurar que no se potencien o perpetúen las asimetrías entre áreas tan diversas (UNCTAD, 2013).

Al analizar las disposiciones que vienen reflejadas en los AAIIRR en cuestiones que atienden a la protección de la IED, se observa que éstas son equivalentes a las contenidas en los TTBBII en su mayoría, y en general aluden a asuntos referidos a indemnizaciones por expropiación y a garantías del libre derecho a efectuar transferencias. Aunque es reseñable que se evidencia en los AAIIRR una mayor apertura y flexibilización con la liberalización de las inversiones, al participar en éstos un mayor número de Estados con circunstancias particulares y, además, teóricamente estos acuerdos han tratado de corregir algunos “defectos” detectados, en cuanto a las disposiciones en materia de arbitraje inversor-Estado cuando se produce una expropiación indirecta³⁴⁷ (Sauvé, 2006).

Una de las potencialidades que se deben señalar de los AAIIRR, es que al estar constituidos, habitualmente, por Estados limítrofes o pertenecientes a territorios con un “cierto” sentido de identidad, suelen contener disposiciones que tienen en cuenta cuestiones particulares de los Estados (como su nivel de desarrollo, capacidades estructurales, población, etc...). Debido a lo cual, éstos parecen ofrecer una mejor cobertura que los TTBBII para la promoción de la IED externa. Aunque a este respecto existen dudas razonables, debido a que entre unos y otros se producen una proliferación de acuerdos que se imbrican y pasa a ser “...conocido el régimen de acuerdos de inversiones internacionales por su complejidad, grietas y solapamientos”³⁴⁸ (UNCTAD, 2013, pág. 105).

Respecto al argumento en el que se aseguraba que los AAIIRR incentivaban la atracción de IED, también existen dudas razonables de que se cumpla este hecho. Si en 1997 los investigadores Blomström y Kokko (1997) del BM, indicaron que integrar un AIR

³⁴⁷ Para la definición de expropiación indirecta se recoge lo contenido en el TLCAN; Anexo 10-D en referencia al artículo 10.9 (1): “es la expropiación indirecta, en donde un acto o una serie de actos de una Parte tienen un efecto equivalente al de una expropiación directa sin la transferencia formal del título o del derecho de dominio (TLCAN, 1994). Así como se rescata aquello que señala el profesor de Derecho Alejandro Faya Rodríguez, cuando indica que un acto de expropiación indirecta posee las siguientes características: “1) es un acto atribuible a un Estado; 2) Implica una interferencia sobre derechos de propiedad, de tal magnitud que deja dichos derechos inútiles, evitando su uso, goce o disposición.; 3) a pesar de que el dueño permanezca con la propiedad legal o posesión del bien (Rodríguez, 2013, pág. 221).

³⁴⁸ Traducción a partir de “...IIA regime is known for its complexity and incoherence, gaps and overlaps” en (UNCTAD, 2013, pág. 105). En este sentido cabe rescatar el “*spaghetti bowl*” en los acuerdos globales que señala Baldwin (2006).

promovería la actividad comercial, la IED, mayor eficiencia y más externalidades positivas- las cuales conjuntamente articularían un proceso de desarrollo económico de los países miembros en un periodo de tiempo-, han aparecido estudios que les contradicen y muestran posturas divergentes. Si en 2003 la OCDE afirmó que el AIR en la UE había producido un efecto positivo en la atracción de IED para aquellos Estados que se integraron en 2004 (OCDE, 2003); contrariamente, otros estudios afirmaron que no se habían encontrado evidencias de que en la UE se hubiesen desviado inversiones de los Estados centrales a la parte Este (Brenton, Mauro, & Luecke, 1999); analizando el MERCOSUR, algunos autores han señalado que tras su creación la inversiones sufrieron un incremento (Özden & Parodi, 2004; Yeyati, Stein, & Daude, 2003); y en el caso de Asia-Pacífico Thangavelu y Findlay (2010) encuentran diversos resultados para países en el interior del ASEAN, y señalan que en ese área los TTBBII poseen mayor capacidad para atraer IED que los AAIIRR. En este último apunte coincide Thomas Worth (1998), al apuntar que los efectos de la integración regional no son uniformes en los Estados miembros. Asimismo, también indican Vende y Bezemer (2006) que, además de en el interior de los AIR, el resultado también varía entre los diversos AAIIRR, pues unos son mucho más operativos que otros a la hora de atraer IED.

Comparando los TTBBII con los AAIIRR, se debe indicar que la capacidad operativa de los Estados se presenta de diferente modo. Mientras los TTBBII ofrecen la posibilidad al Estado de canalizar y seleccionar la IED en base a su legislación interna- aunque es debido señalar que en condiciones de asimetría las cláusulas y condiciones son negociables, cuestión que sitúa en una posición de debilidad al receptor-, los AAIIRR ofrecen una mayor protección a las inversiones, pues suelen incluir entre sus disposiciones la liberalización de las restricciones a la entrada y establecimiento de la IED, a lo que añaden un proceso de reducción de restricciones una vez insertada.

Por otra parte, los AAIIRR destacan porque han implementado la regularización a través de diferentes cláusulas que, por lo común, han protegido los derechos de propiedad intelectual, prohibido las prácticas comerciales anticompetitivas, liberalizado procedimientos de admisión, y han abierto el comercio y la inversión en los servicios (Sauvé, 2006).

Aun con el surgimiento de los AAIIRR en el contexto internacional, los TTBBII siguen primando en la relación de los Estados, por contener condiciones específicas de cada Estado. Además de que se presumen estos últimos, de ser acuerdos con un mayor grado de

solidez y con una mayor capacidad de fuerza a la hora de interponer preferencias normativas de cumplimiento entre Estados (UNCTAD, 2013, pág. 106), muchos de los AAIIRR respetan las normas contenidas en los TTBBII y actúan de forma paralela a éstos, no se superponen³⁴⁹.

Como nota última de este epígrafe señalar que, si bien es verdad que muchos gobiernos siguen abogando por la participación en un TBI o un AIR con el apoyo de empresas y sectores privados, muchos otros agentes en el contexto internacional se muestran contrarios, por encontrar que estos acuerdos implican efectos paralelos negativos para el conjunto (Ej.: contienen cláusulas abusivas, no promocionan un derecho laboral, crean desigualdad, otorgan la misma calidad jurídica a una empresa que aun Estado en un litigio, etc...). Así lo indica el informe que elabora la UNCTAD en 2013 *World Investment Report 2013: Global Value Chains: Investment and Trade for Development*, enumerando una serie de manifestaciones que advierten sobre los peligros que contienen las cláusulas inscritas en los TTBBII y AAIIRR:

“Los ejemplos incluyen abogados con sede en Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos instando a los negociadores del TPP(Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica) a abandonar sus planes de incluir ISDS (Mecanismos de Resolución de Disputas en Cuestiones de Inversiones (*Investor-State Dispute Settlement en inglés*)); el *Citizens Trade Campaign*, que representa a 400 grupos de trabajadores, consumidores y ambientalistas, realizó una petición al Congreso de los Estados Unidos sobre varios aspectos que infringían derechos del TPP y otros tratados del siglo XXI; 13 grupos tailandeses que representan los intereses del medio ambiente y de los consumidores, instando a repensar a Tailandia su postura en su adhesión a las negociaciones del TPP; más de 80 organizaciones de la sociedad civil de nueve países emitieron una declaración oponiéndose a los "derechos corporativos excesivos" en el CETA(Acuerdo Económico y Comercial Global entre UE y Canadá)³⁵⁰; una coalición de indios y organizaciones europeas no gubernamentales y parlamentarios Europeos se oponen al capítulo de inversión del TLC UE-India; la “Hupacasath” Nación originaria que demandó en los tribunales canadienses el TBI entre Canadá y China que se ha firmado recientemente, alegando que el gobierno no había cumplido con su obligación constitucional de consultar a las Naciones originarias en este

³⁴⁹ Como ejemplos de AIR que actúan de forma paralela con los TTBBII se citan los siguientes AIR: ASEAN Art. 44; COMESA Art. 32; CEFTA Art. 11; ASEAN-China Art. 23 (UNCTAD, 2013, pág. 106).

³⁵⁰ Véase en línea: <http://stopceta.ca/> (Consulta realizada el día 12 de abril de 2014).

acuerdo y alegando que afectaría negativamente a los derechos de las Primeras Naciones”³⁵¹ (UNCTAD, 2013, pág. 105).

7. La implementación de mecanismos de arbitrio tras la posguerra.

“El arbitraje de tratados de inversión es una importante pieza jurídica e institucional del rompecabezas neoliberal porque impone unas restricciones legales y económicas excepcionalmente poderosas sobre los Gobiernos y, por extensión, sobre las opciones democráticas, con el fin de proteger de toda regulación los bienes de compañías multinacionales” ((Van Harten, 2012) Citado en Eberhardt & Olivet (2012, pág. 16)).

Hay ciertas cuestiones relevantes que se deben tener en cuenta a la hora de analizar el proceso de institucionalización de una norma, y más si ésta incide en la regulación de una relación interestatal. En este espacio se sitúan las normas referentes a regulación de la IED, al implicar esta práctica la interacción entre diferentes gentes, sociedades, culturas y, por lo tanto, entre los diferentes modos de obrar en sociedad.

En este sentido, el detectar qué agentes participan y cuál es la capacidad de incidencia en las fases de constitución de la norma que poseen y analizar los efectos vinculados en su aplicación práctica, permitirá evidenciar el cómo se articula la relación entre partes en un contexto en el que acuerdos como los TTBBII o los AAIIIR, ejercen de instrumentos que determinan el funcionamiento de las relaciones entre Estados con diferentes niveles de desarrollo en cuestiones de IED. Cuestión que además implica, el que se puedan presentar desequilibrios en la capacidad de negociación y, por tanto, en el propio mecanismo y finalidad de la práctica, como resultado de una asimetría inicial en capacidades (capital, tecnología, ejército, etc...).

Además de lo indicado, aunque en principio se supone que todas las cláusulas contenidas en los tratados han sido aceptadas “voluntariamente” por todos los Estados y que los

³⁵¹ Traducción propia a partir de: “Examples include lawyers based in Australia, New Zealand and the United States urging TPP negotiators to abandon plans to include ISDS; the Citizens Trade Campaign, representing 400 labour, consumer and environmental groups, petitioning the United States Congress about multiple perceived rights-infringing aspects of the TPP and other 21st century agreements;⁴² 13 Thai groups, representing environmental and consumer interests, urging to rethink Thailand’s position on joining the TPP negotiations;⁴³ more than 80 civil society organizations from nine countries issuing a statement opposing “excessive corporate rights” in the CETA;⁴⁴ a coalition of Indian and European non-government organizations⁴⁵ and European parliamentarians⁴⁶ opposing the investment chapter of the EU–India FTA; the Hupacasath First Nation challenging in Canadian courts the recently signed Canada–China BIT, alleging that the government had failed to fulfil its constitutional obligation to consult First Nations on this agreement and claiming that it would adversely impact First Nations’ rights” (UNCTAD, 2013, pág. 105).

acuerdos, tratados y pactos, son en sí instrumentos considerados neutros, la constitución de un pacto o acuerdo sin que la asimetría determine el origen normativo, parece más una ilusión que una realidad, dadas las diferencias señaladas en cuestiones de desarrollo entre los diferentes agentes y el leve avance que ha sufrido el proceso en términos de reducción de asimetría³⁵². Es en este sentido en el que vislumbrar los mecanismos instaurados para resolver las disputas acontecidas entre los inversores y los Estados receptores, es un ejercicio pertinente y necesario.

El primer mecanismo reglado que institucionalizó las prácticas de un Mecanismo de Resolución de Disputas en Cuestiones de Inversiones (ISDS *por sus siglas en inglés*) en la CI, fue la firma de tratados entre Estados. Éstos representaban el espacio en donde se comenzaba a articular el marco regulatorio de las disputas en cuestiones de IED.

En origen, estos mecanismos de resolución de disputas respondían a una acción por parte del grupo de Estados inversores, que pretendía proteger a sus compañías cuando éstas invertían en el exterior. Objetivo que impulsó la instauración de un sistema a nivel internacional que fuese capaz de regular y dar garantías a los inversores para, en caso de producirse controversias, poder recurrir a un sistema “justo e independiente”. Dado que éstos consideraban que los tribunales del propio Estado receptor eran demasiado parciales, demasiado lentos y, en ocasiones, demasiado corruptos como para desempeñar un papel imparcial (Borchard, 1940; Newcombe & Paradell, 2009). La idea subyacente era que se dudaba de su capacidad para juzgar con “justicia” (Borchard, 1940; Schreuer, 2003). Situación que provocó un escenario propicio para impulsar la creación de un organismo ‘neutral’ de expertos jurídicos y árbitros, que debían actuar como mediadores “independientes”. Esto sí, bajo la óptica occidental.

Tras la finalización de la IIGM, la promoción de un sistema de arbitrio se articuló en base a dos sucesos que se entendían relevantes en términos de interés y estabilidad desde la perspectiva del inversor: 1) el proceso de independencia de las antiguas colonias con reconocimiento de la soberanía de los nuevos Estados; y 2) la Resolución 1803 (XVII) (1962) de la Asamblea General de las NNUU, la cual otorgaba la capacidad a los Estados

³⁵² A este respecto se recomienda revisar los datos que presentan los diferentes informes sobre el Desarrollo que dispone el PNUD en: <http://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/mdg/the-millennium-development-goals-report-2013/> (Consulta realizada el día 08 de mayo de 2014) ; así como los datos referidos a la desigualdad mundial que presenta Branko Milanovic (2010); o el ultimamente citado Thomas Piketty con Alvarado, Atkinson, & Saez (2013), o su última obra *Capital in the 21st century* (2014), entre otros. Véase el listado de sus obras en <http://www.parisschoolofeconomics.eu/docs/piketty-thomas/cv-piketty-thomas.pdf> (Consulta realizada el día 23 de octubre de 2014).

para nacionalizar “riquezas y recursos”, bajo justificación de ser necesarios para la utilidad pública.

En este contexto, los inversores extranjeros entendieron que se estaba produciendo una transformación de las reglas en el trato Estado-inversor, que implicaba un alto riesgo para sus intereses. Ya que los Estados podrían realizar acciones expropiatorias si argumentaban su ejecución bajo la justificación de utilidad pública y, esta vez, los Estados a los que pertenecían los inversores no podrían intervenir de acuerdo a DI y deberían respetar la acción de acuerdo con lo estipulado en las NNUU.

Dadas las condiciones de desarrollo de muchos Estados receptores de inversión, no se percibió como una acción de difícil encaje el que los Estados en desarrollo abogasen por iniciar acciones expropiatorias, ya que la Resolución 1803 de la Asamblea General indicaba que el bienestar del pueblo y los mecanismos necesarios para asegurar éste eran de una importancia superior a los intereses particulares o privados que representaban los inversores.³⁵³

Art. 1: “El derecho de los pueblos y de las naciones a **la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales debe ejercerse en interés del desarrollo nacional** y del bienestar del pueblo del respectivo Estado”.

Art. 4: “**La nacionalización, la expropiación** o la requisición **deberán fundarse en razones o motivos de utilidad pública**, de seguridad o de interés nacional, los cuales se reconocen como superiores al mero interés particular o privado, tanto nacional como extranjero”.

(NNUU, 1962) [**Negrita propia**].³⁵⁴

Como era de esperar, las disputas en torno a la inversión se sucedieron ante las acciones de los Estados en desarrollo, al adoptar éstos políticas de expropiación al abrigo de la Resolución. Inquietados por el contexto, los inversores promovieron la implementación de los IISDDSS, armando un discurso que indicaba que la adopción de éstos permitiría crear un clima de armonía y, a su vez, instituir un órgano con potestad suficiente para aplicar el DI en las disputas.

³⁵³ Tras este hecho se produjeron una ola de políticas socialistas que aumentaron el riesgo de intervenciones sobre los capitales, por lo que los inversores se decidieron por promover mecanismos contractuales que incluyesen la protección ante posibles riesgos. Una de ellas fue el de promocionar el arbitrio internacional.

³⁵⁴ Para más información sobre las discusiones previas y durante las negociaciones véase Schwebel (1994).

Además de la voluntad de los inversores, el instituir IISDDSS encontró un contexto propicio en los procesos post-IIGM, al constituirse un ambiente de institucionalización multilateral de nuevas herramientas de cobertura internacional, con el objetivo de articular las RRII y adquirir capacidad para prevenir posibles conflictos en el futuro³⁵⁵. Ola constitutiva de organismos en la CI a la que se sumaron los IISDDSS, puesto que el encaje era perfecto. De hecho, la evolución institucional de los IISDDSS ofrece similitudes con los otros surgidos en el contexto del DI, principalmente, por tres aspectos:

- a) asemeja el arbitrio inversor-Estado con otras instituciones semejantes en el DI, al desplazar el conflicto del territorio interno de un Estado a un área internacional;
- b) revisa e interpreta diversas áreas del DI en las que se abordan cuáles son los límites para recurrir o no a su uso en vez de acudir a las instituciones internas de los Estados, significándose una implementación de sistemas de regulación caso de conflicto, y;
- c) se examinan los diferentes modos en los que los ISDS interconectan con la regulación doméstica, la aplicación y la resolución institucional de disputas en torno a cómo los ISDS diseñan elementos que pueden afectar a la misma.

(OCDE, 2012, pág. 7).

Aun con las similitudes señaladas, el ISDS tiene una diferencia fundamental que le aleja de otros órganos, ya que no posee un carácter multilateral, como representa el hecho de que la normativa no se asemeja a la de las otras instituciones que cubren cuestiones de carácter internacional. Principalmente, por tres cuestiones:

- 1) **las bases legales se caracterizan por su variedad.** Mientras los otros mecanismos poseen marcos operativos con una normativa “clara” los ISDS poseen una variedad contenida en los más de 3000 Tratados. Lo que implica una amplia variedad de elementos y, además, complica la creación de jurisprudencia al existir varias instituciones con capacidad de arbitrio, no una única;

³⁵⁵ Hay que señalar que la voluntad fue concisa, tanto que en la actualidad en la CI se detectan 125 cuerpos internacionales que realizan labores de ayuda a la resolución de conflictos internacionales y procuran solventar necesidades de aquellos individuos o agentes que puedan ser considerados víctimas de daño causado por violaciones sobre sus derechos en diversas áreas. Se dan la existencia de una gran diversidad de instituciones que engloban asuntos como DDHH, medio-ambiente; derechos de Mar, etc... Señalar asimismo, que estos organismos presentan diversas metodologías operativas que van desde Órganos Internacionales Judiciales Permanentes hasta Tribunales cuasi-judiciales a Órganos de Arbitrio inter-gubernamentales para casos específicos (OCDE, 2012).

- 2) **permite a los agentes privados el interponer reclamaciones contra Estados que generan resoluciones con un importe muy elevado económicamente.** Pocos o quizás ningún otro mecanismo permite que se interponga y se participe en la resolución de la disputa a agentes que persigan sentencias de una magnitud económica tan elevada;
- 3) **la estructura internacional del ISDS se basa abiertamente en el arbitraje comercial.** Este hecho causa que se busquen resoluciones tempranas y ágiles, más que justas.

*A partir de (OCDE, 2012, pág. 8)

En definitiva, se podría señalar que estas tres cuestiones, junto con las asimetrías en términos de capacidades, son aquellas que concentran gran parte de la crítica, ya que aquello entendido como “justicia” puede verse pervertido en atención a principios, medios y fines que componen la articulación de un mecanismo que pretende regular la interacción entre agentes de diversos Estados.

Aun así, los IISDDSS han incrementado su ejercicio en la SI y, de hecho, ocupan un espacio relevante en una estructura en la que el flujo de capitales se ha incrementado sucesivamente. En donde la práctica de la IED se ha constituido como uno de los elementos principales de la política-económica.

7.1 Instituciones, mecanismos y reglamentos en torno al arbitrio: Centro Internacional de Diferencias Relativas e Inversiones; la Comisión de la Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional; y otros organismos de arbitrio.

En cuanto a los IISDDSS que se han ido instaurando en la SI, uno de los mecanismos que primero se articuló para responder a las disputas en cuestiones de inversiones, dentro del proceso de institucionalización de órganos que asumieran el rol de juez en el contexto internacional, fue la Corte Internacional de Justicia (CIJ) creada en 1945. Sin embargo, esta institución sólo ha actuado en seis casos referidos a disputas inversor-Estado (Newcombe & Paradell, 2009, pág. 35), debido que no ha contado con capacidad suficiente para litigar por diversas causas: en tres casos por ausencia de jurisdicción; en un cuarto por la no pertinencia de la causa; y en otros dos se dictaminaron sentencias: uno en la disputa entre Uruguay y Argentina (caso sobre las plantas de Celulosa en aguas binacionales)- que se

resolvió en 2010 sin conclusiones favorables a ningún Estado³⁵⁶; y en un sexto caso resuelto recientemente (2012) el *Caso Ahmadou Sadio Diallo* (República de Guinea c. República Democrática del Congo (RDC)), en donde se sentenció una indemnización muy lejos de las presentadas por otros organismos³⁵⁷.

Al analizar el porqué de la no práctica de esta institución como ISDS, diversas cuestiones parecen indicar el por qué este órgano no ha tenido una continuidad relevante como ISDS en comparación con otros, que permiten vislumbrar el porqué de su falta de eficiencia:

- 1) la consciencia de no jurisprudencia por parte del órgano;
- 2) **el respeto a la soberanía interna de los Estados** (casos *Elettronica Siluca S.p.A* (1982) y caso *Barcelona Traction, Light and Power Company* (1970);
- 3) la ausencia de cláusulas específicas en aquellos tratados que se presentaron en los litigios;
- 4) la controversia existente en torno a la responsabilidad y la aplicación de la responsabilidad de los Estados en cuestiones de IED como el “trato estándar y justo”;
- 5) y que los casos han evidenciado la falta de criterio internacional y necesidad de desarrollo de una normativa multilateral.

Fuente: A partir de (Newcombe & Paradell, 2009; OCDE, 2012).

Las cuestiones no cubiertas por este mecanismo, en cierto modo, indicaban los espacios en los que se debía incidir si se pretendía establecer un mecanismo ágil para acometer las disputas inversor-Estado. Esto debido a que por una parte los inversores requerían agilidad y rapidez en la resolución y por otra, la cuestión de la soberanía en las RRII requería de una transformación interpretativa, en aras de articular un mecanismo que solventase la cuestión inter-relacional en las disputas en el campo de la inversión. Atendiendo a este hecho, organizaciones como el BM o las NNUU fueron elaborando informes y proponiendo otros mecanismos para atender a estos conflictos.

³⁵⁶ Resolución de la CIJ disponible en: <http://www.icj-cij.org/docket/files/135/15895.pdf> (Consulta realizada el día 23 de mayo de 2013).

³⁵⁷ Sentencia que ante un reclamo de un inversor nacional de Guinea, que denunció el daño en sus bienes por la actuación de la RDC reclamaba la cantidad de 6.430.148 dólares americanos, la CIJ resolvió a favor del Estado de Guinea pero con una indemnización total de 95.000 dólares americanos (85.000 por daños morales y 10000 por daño material). Recibiendo esta indemnización una queja por parte del Magistrado *ad hoc* Mampuya por su elevado importe. Sentencia disponible en http://legal.un.org/ICJSummaries/documents/spanish/193_s.pdf (Consulta realizada el día 23 de mayo de 2013).

Hubo un evento que significó un cambio contextual en el cómo abordar las disputas. Fue la Convención Nueva York de las NNUU en 1958 (*New York Convention on the Recognition of Foreign Arbitral Awards en inglés*), el lugar en donde se articuló un discurso en torno a la construcción y justificación teórica de lo apropiado de establecer un sistema de arbitraje³⁵⁸. Se elaboró un texto en el que se encontraban aquellas directrices que exponían una opinión sobre en qué situaciones podría ser considerado favorable o contrario a derecho, el acudir a tribunales internacionales para solventar disputas en cuestiones de inversión; y asimismo se señalaba aquellos conflictos en los que los tribunales locales no podrían ser competentes (Newcombe & Paradell, 2009, pág. 25).

Contrariamente a las expectativas despertadas en torno a una declaración semejante, una de las cuestiones que no se abordó y que despertó dudas sobre la operatividad de la Convención, fue el que no se incluyese conclusión alguna en cuestiones de soberanía e inmunidad. Este hecho dejaba un vacío relevante al no abordar la Convención el respeto a la soberanía, la cual había sido- como ha sido presentado en éste capítulo- una de las cuestiones determinantes en la disputa inversor-Estado. De modo que la Convención, más que solventar el conflicto, significó un apoyo a la instauración de un cuerpo de arbitraje para casos de IED e incitó a que se respetasen las sentencias extranjeras, o no nacionales, como menciona Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) en su página web en referencia a la Convención de Nueva York de 1958:

“La finalidad principal de la Convención es evitar que las sentencias arbitrales, tanto extranjeras como no nacionales, sean objeto de discriminación, por lo que obliga a los Estados parte a velar por que dichas sentencias sean reconocidas en su jurisdicción y puedan ejecutarse en ella, en general, de la misma manera que las sentencias o laudos arbitrales nacionales. Un objetivo secundario de la Convención es exigir que los tribunales de los Estados parte den pleno efecto a los acuerdos de arbitraje negándose a admitir demandas en las que el demandante esté actuando en violación de un acuerdo de remitir la cuestión a un tribunal arbitral” (CNUDMI, 1958).

³⁵⁸ Esto se justificó en aras de solventar el incremento en las disputas. Las disputas acontecidas fueron las siguientes: *Petroleum Development Ltd. v. The Sheikh of Abu Dhabi* (1951); *Ruler of Qatar v. International Marine Oil Co.* (1953); *Saudi Arabia v. Arabian American Oil Co.* (1963); *Sapphire International Petroleum Ltd. v. National Iranian Oil Co.* (1963); *BP Exploration Company Ltd. v. Libya* (1979); *Texaco Overseas Petroleum Co. and Californian Asiatic Oil Co. v. Libya* (1977); *Libyan American Oil Co. v. Libya* (1981) 20 ILM 1; *Kuwait v. American Independent Oil Company* (AMINOIL) (1982) 21 ILM 976; *Elf Aquitaine Iran v. NIOC* (1982). Casos extraídos de nota n° 143 en Newcombe & Paradell (2009, pág. 24).

Ante el vacío dejado por las NNUU en cuestiones de soberanía, el BM, en su ejercicio de promoción de un mecanismo el 18 de Marzo de 1965, impulsó la creación de la organización que ha primado por encima de otras en los litigios referidos a la IED: el CIADI. Los países miembros del BM firmaron un Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, elaborado por los Directores del BM (en ese momento Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento), hecho que conllevó el que el 14 de Octubre de 1966, al ser ratificado por 20 Estados, se constituyera el CIADI.³⁵⁹

“Considerando la necesidad de la cooperación internacional para el *desarrollo económico y la función que en ese campo desempeñan las inversiones internacionales de carácter privado;*

Teniendo en cuenta la posibilidad de que a veces surjan diferencias entre Estados Contratantes y nacionales de otros Estados Contratantes en relación con tales inversiones;

Reconociendo que aun cuando tales diferencias se someten corrientemente a sistemas procesales nacionales, en ciertos casos el empleo de *métodos internacionales de arreglo puede ser apropiado para su solución*”.

(CIADI, 2006, pág. 11) [*Cursiva propia*].

Los argumentos expuestos en las primeras líneas de la Convenio determinan e indican que, ante el objetivo global que señala el BM: el desarrollo económico, y el medio que incentiva su logro: la IED, se impulsan mecanismos que puedan ser aplicados para la protección de prácticas desarrollistas en caso de disputas, que a su vez sean capaces de armonizar las interacciones. La percepción sobre la estructura existente requería de una reglamentación que obtiene respuesta en la propuesta que presentó el Informe adjunto de los Directores Ejecutivos acerca del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (CIADI, 2006, págs. 38-48).

El cómo, el qué se aplicaría y el origen de las normas se encuentra expuesto en su Art. 40, en donde se indica que el Tribunal de Arbitraje aplicará las leyes acordadas ante las partes y en caso de que no hayan sido acordadas o a falta de acuerdo, el Tribunal aplicará las leyes

³⁵⁹ A día de 26 de mayo de 2014, 159 Estados han firmado la Convención y 150 han ratificado la Convención y el uso de sus instrumentos. Para ampliar y constatar información véase: https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=ShowHome&pageName=MemberStates_Home (Consulta realizada el día 26 de mayo de 2013).

del Estado receptor combinadas con la normativa del DI que resulte aplicable. DI que responderá a lo contenido en el Art.38 del Estatuto de la CIJ, que dice así:

El Artículo 38.

“1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar:

- a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes;
- b. la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho;
- c. **los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas;**
- d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 59³⁶⁰“.

(CIADI, 2006, pág. 48) **[Negrita propia]**

En el informe se resuelve que en caso de disputa entre un Estado receptor de inversión y un inversor, cuando se acuda al Tribunal de Arbitraje parte del CIADI, se aplicará el DI “civilizado” que encuentra origen en las naciones “civilizadas”, en caso de situaciones que no estén estipuladas, como se menciona en el Art. 42 del Convenio:

“(1) El Tribunal decidirá la diferencia de acuerdo con las normas de derecho acordadas por las partes. A falta de acuerdo, el Tribunal aplicará la legislación del Estado que sea parte en la diferencia, incluyendo sus normas de derecho internacional privado, y aquellas normas de derecho internacional que pudieren ser aplicables” (CIADI, 2006, pág. 24).

Ante esta señalización, que indica a que leyes se acudirá en caso de no alcanzarse acuerdo, es relevante rescatar el cómo se produjeron los hechos. Por una parte, hay que señalar que se observa que todo el mecanismo se activa en un contexto en el que han primado las inversiones en una dirección, efectuadas por Estados “civilizados” en Estados “no

³⁶⁰ El Art. 59 dice así: “La decisión de la Corte no es obligatoria sino para las partes en litigio y respecto del caso que ha sido decidido”(CIADI, 2006).

civilizados”, o en otros términos de Estados desarrollados en Estados en subdesarrollo³⁶¹; y por otra, que las cláusulas que han sido parte de los tratados contienen en muchas ocasiones un alto grado interpretativo: Trato justo y equitativo, expropiación indirecta o TNMF, entre ellas. Por lo que estas indicaciones revelan la presencia de asimetrías en la práctica, así como un alto grado de interpretación en la normativa.

Teniendo estas premisas presentes y pudiendo ser causa de parcialidad en la aplicación del mecanismo, se instituyó el CIADI con la aspiración de ser una institución “...destinada a facilitar el arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados e inversionistas extranjeros [que] puede constituir un paso importante para promover un ambiente de confianza mutua...” (CIADI, 2006, pág. 40).

El CIADI se presentaba como una institución que tenía la pretensión de instaurarse como organismo articulador de la despolitización de las disputas inversor-Estado³⁶², ante las quejas que habían constituido posturas como las contenidas en las Doctrinas Drago y Calvo, la Teoría de la Dependencia, la argumentación de la CEPAL, las posturas de los PNA, u otros que indicaban la existencia de cierta politización en las prácticas inversor-Estado.

En cuestiones operativas hay que matizar que el CIADI no es un Tribunal permanente de arbitrio, se trata más bien como una organización que opera bajo la membresía de los Estados, en donde, por primera vez, se otorga una calificación de figura legal a los inversores de otros Estados en suelo nacional. Hecho que permite que se juzguen asuntos ocurridos en territorio nacional por un Tribunal externo al Estado, cuando las partes hayan acordado someterse al CIADI. Por lo que en caso de que un Estado decida incluir y aceptar el arbitrio por parte del CIADI en caso de disputa, hay que señalar que este órgano contiene unas cláusulas que limitan la capacidad de litigar la sentencia por parte de las partes. Cuestión que por una parte significa que con la adhesión se evita el recurrir a los Tribunales internos en caso de disconformidad; y por otra, la institucionalización de este órgano como “autoridad última” de la disputa. Por lo que la resolución será irreversible.

El arbitraje en el CIADI está sujeto a cuatro condiciones:

- 1) Las partes deben acordar someter la disputa al CIADI;

³⁶¹ Datos a partir del *World Bank-Data* disponible en línea: <http://databank.worldbank.org/data/databases.aspx> (Consulta realizada el día 23 de mayo de 2013).

³⁶² Así lo afirmaba el que fuera Vice-presidente y Consejero General del BM, Ibrahim Shinata (1985).

- 2) La disputa debe ocurrir entre un Estado parte del CIADI y un nacional perteneciente a otro Estado parte del CIADI;
 - 3) La disputa debe ser de carácter legal;
 - 4) La disputa debe tener origen en la inversión realizada en un Estado parte receptor.³⁶³
- (CIADI, 2006).

En este sentido, se observa la posible quiebra en la capacidad soberana de un Estado al incorporarse a la Convención del CIADI la figura de “nacional de otro Estado parte”. Este elemento otorga una categoría de agente, por la cual los inversores extranjeros pueden acordar recibir un Trato no nacional, aunque sus empresas estén constituidas como entidades nacionales. Y además en el caso de que el capital provenga de un país extranjero, en caso de disputa puede acogerse al arbitrio del CIADI y podría darse el arbitrio incluso si la compañía no fuese técnicamente extranjera (Newcombe & Paradell, 2009, pág. 59). Es decir, una empresa nacional con capital extranjero puede recurrir al arbitrio del CIADI evitando los tribunales nacionales.

A parte de la aparición del CIADI, otros mecanismos han sido impulsados en la SI. Y aunque bien es verdad y se debe indicar que el CIADI ha sido la institución que ha ostentado el mayor número de disputas, el mecanismo que promocionaron las NNUU ha sido aquel al que se ha recurrido en segunda instancia: la Comisión de la Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI (*UNCITRAL por sus siglas en inglés*)).

³⁶³ A partir del Artículo 25, Capítulo II; Jurisdicción del Centro:

“(1) La jurisdicción del Centro se extenderá a las diferencias de naturaleza jurídica que surjan directamente de una inversión entre un Estado Contratante (o cualquiera subdivisión política u organismo público de un Estado Contratante acreditados ante el Centro por dicho Estado) y el nacional de otro Estado Contratante y que las partes hayan consentido por escrito en someter al Centro. El consentimiento dado por las partes no podrá ser unilateralmente retirado. (2) Se entenderá como “nacional de otro Estado Contratante”: (a) toda persona natural que tenga, en la fecha en que las partes consintieron someter la diferencia a conciliación o arbitraje y en la fecha en que fue registrada la solicitud prevista en el apartado (3) del Artículo 28 o en el apartado (3) del Artículo 36, la nacionalidad de un Estado Contratante distinto del Estado parte en la diferencia; pero en ningún caso comprenderá las personas que, en cualquiera de ambas fechas, también tenían la nacionalidad del Estado parte en la diferencia; y (b) toda persona jurídica que, en la fecha en que las partes prestaron su consentimiento a la jurisdicción del Centro para la diferencia en cuestión, tenga la nacionalidad de un Estado Contratante distinto del Estado parte en la diferencia, y las personas jurídicas que, teniendo en la referida fecha la nacionalidad del Estado parte en la diferencia, las partes Convenio hubieren acordado atribuirle tal carácter, a los efectos de este Convenio, por estar sometidas a control extranjero. (3) El consentimiento de una subdivisión política u organismo público de un Estado Contratante requerirá la aprobación de dicho Estado, salvo que éste notifique al Centro que tal aprobación no es necesaria. (4) Los Estados Contratantes podrán, al ratificar, aceptar o aprobar este Convenio o en cualquier momento ulterior, notificar al Centro la clase o clases de diferencias que aceptarían someter, o no, a su jurisdicción. El Secretario General transmitirá inmediatamente dicha notificación a todos los Estados Contratantes” (CIADI, 2006, págs. 18-19).

El CNUMID se constituyó en origen, más o menos, paralelamente al CIADI en 1966 a partir de la Resolución 2205(XXI) (17 de Diciembre de 1966) en la Asamblea General de las NNUU. Este reglamento respondía a un ejercicio reflexivo que reconocía la existencia de disputas, y debido al ejercicio de observar que las leyes nacionales que regían el comercio internacional eran fuente de obstáculos en el área comercial. La Asamblea procedió a instituir una Comisión que facilitase el comercio y actuase como mecanismo para la eliminación de estos obstáculos. Objetivo para el cual desarrollo un reglamento.³⁶⁴

A diferencia del CIADI, el ejercicio del arbitraje bajo la reglamentación del CNUDMI es *ad-hoc*. Lo que significa que éste no es administrado por ninguna institución, como lo es el aplicado en los casos del CIADI, donde la Secretaría se hace cargo de los trámites entre los Estados y con el Tribunal. En el caso de un arbitraje *ad-hoc* no existe una Secretaría y la administración del proceso recae sobre las partes y el tribunal designado; como tampoco en el CNUDMI existe un mecanismo institucional de anulación de la sentencia.

Por otra parte, es relevante indicar que, al contrario que el CIADI, el Reglamento del CNUDMI no recoge en su articulado el que los árbitros deban operar de acuerdo al derecho recogido en los Estados civilizados, e indica que se debe operar según las normas acordadas entre las partes o si no, a interpretación particular del tribunal.

Artículo 35

1. El tribunal arbitral aplicará las normas de derecho que las partes hayan indicado como aplicables al fondo del litigio. Si las partes no indican las normas de derecho aplicables, el tribunal arbitral aplicará la ley que estime apropiada.
2. El tribunal arbitral decidirá como amigable componedor (*ex-aequo et bono*) solo si las partes le han autorizado expresamente a hacerlo.
3. En todos los casos, el tribunal arbitral decidirá con arreglo a las estipulaciones del contrato, de haberlo, y tendrá en cuenta cualquier uso mercantil aplicable al caso.

(NNUU, 2011, pág. 35)

Siendo las dos instituciones expuestas las principales, en términos de volumen de casos, indicar que existen otras organizaciones que abordan las disputas de inversión, aunque con

³⁶⁴ Este reglamento ha sido utilizado por diversos tribunales incluyendo la Corte Permanente de Arbitraje (o Tribunal Permanente de Arbitraje) (CPA), en los casos que ha abordado en cuestiones de IED (ha procedido en un caso, y dado apoyo en otros siete al CNUMID) .Datos a partir de UNCTAD data base disponible en línea: <http://iiadbcases.unctad.org/cases.aspx?displayoptions=no> (Consulta realizada el día 24 de mayo de 2013).

número menor de casos. Han sido cubiertos una veintena de casos bajo la Cámara de Comercio de Estocolmo entre 1996 y 2010³⁶⁵; otro caso por el Centro Internacional de Arbitraje Comercial del Cairo; y siete casos por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CIACCI).³⁶⁶

Entre estas tres organizaciones mencionadas destaca el papel que ha ejercido la CIACCI en la proliferación del ISDS, puesto que esta institución ha jugado un rol más relevante como agente difusor de la práctica, que como institución de arbitrio- en el que ha intervenido en siete ocasiones entre 1995 y 2012-. El organismo destaca por su contribución a la reglamentación teórica del arbitrio.

Desde su creación en 1919, la CIACCI ha venido siendo un eje significativo en la producción de informes, en los que se ha analizado el trato que debían recibir los inversores en otros Estados: en 1927 en la Conferencia sobre Economía Mundial celebrada en Ginebra, en donde impulsó al Consejo de la Liga de Naciones (LN) a elaborar una convención sobre el trato a la IED; en 1949, cuando promovió la aplicación del Código Internacional de Trato justo a la Inversión Extranjera (en inglés *International Code of Fair Treatment for Foreign Investment* (ICC Code)), en donde se reflejaba el modo en el que se debía proteger al inversor (no fue aceptado por los Estados por incluir excesos hacia el inversor); más tarde fue el organismo que impulsó la Asociación de Derecho Internacional (*International Law Association* (ILA), organización que nació con la intención y un estatuto que perseguían la creación de un Tribunal y una Corte para resolver las disputas en torno a la IED, en vez de establecer estándares de trato entre las partes (*Draft Statutes of the Arbitral Tribunal for Foreign Investment and the Foreign Investment Court*),- los Estados nunca adoptaron el estatuto-; en 1959 con el Borrador Abs-Shawcross; y en 1961 con el Borrador Harvard.³⁶⁷

Aunque nunca se llegó a aprobar ninguno de los textos presentados por parte de los Estados, hay que tener en cuenta el impacto de estos actos en la institucionalización jurídica de estas disputas. A este respecto indicar que por ejemplo, el Borrador Harvard ha sido

³⁶⁵ Además de haber ejercido de órgano administrador en el caso: *Trinh Vinh Binh and Binh Chau Joint stock Company v. Socialist Republic of Viet Nam* (2004), bajo el Reglamento del CNUMID.

³⁶⁶ Hay que tener en cuenta que se desconoce la cantidad total de casos, pues en algunas instancias arbitrales existen normas de confidencialidad. Los datos aquí presentados responden a los informes realizados por el CNUMID. Datos disponibles en: <http://iidbcases.unctad.org/cases.aspx?displayoptions=no> (Consulta realizada el día 24/05/2014).

³⁶⁷ Para más información véase la página web de la Cámara de Comercio Internacional: <http://www.iccwbo.org/> (Consulta realizada el día 23 de mayo de 2013).

citado por diferentes Tribunales como autoridad de derecho³⁶⁸; así como el uso del lenguaje en sus informes ha tenido impacto en la CI, ya que tras la aparición de la IIA se comenzó a promover la defensa de la IED, no como un derecho de otro nacional, sino situando a la inversión como un elemento sin el cual el desarrollo no puede ocurrir. Es decir, adoptando el discurso desarrollista en la regulación de la inversión. Lo que ha tenido impacto en los futuros informes sobre protección de inversión, así como desarrollo (Newcombe & Paradell, 2009, pág. 21).

En cierta medida, la instauración de los IISDDSS ha impulsado un sistema en el que los Estados en desarrollo tienen la posibilidad de acceder a la IED con unos condicionamientos contenidos en unas reglas claras y, por lo tanto, se presentaban como positivos. Dado que se suponía que dejarían de presenciarse episodios en los que el derecho diplomático fuese la herramienta a la que acudir para abordar las negociaciones y, en última instancia, acudir al uso de la fuerza (Shinata, 1992).

Sin embargo, factores como: el origen del DI; la práctica de los árbitros bajo unos ideales provenientes de escuelas que promueven un tipo de interpretación y aplicación de la normativa; el negocio alrededor del propio ejercicio del arbitrio; la pertenencia a instituciones con grados democráticos cuestionables (BM o NNUU (Consejo de seguridad)); y la falta de democracia dentro de la institución, sitúan a la organización en tela de juicio³⁶⁹. De hecho, es cuestionado el arbitrio hasta el punto en el que se indica que la regulación de los asuntos de inversión puede estar sufriendo un proceso de constitucionalización internacional de una reglamentación basada en la protección del inversor, a través de instituciones como el CIADI (Schneiderman, 2008; Gill, 1998).

7.2 El sistema operativo del arbitrio. Cuestiones a tener en cuenta.

Desde que se comenzasen a dar cita las disputas entre los Estados e inversores, el ejercicio de arbitrio internacional en las disputas referidas a la IED ha contenido posturas que defendían su pertinencia e imparcialidad por una parte y por otra, teorías que se situaban

³⁶⁸ El Borrador Harvard ha sido citado en: *Saluka Investments BV v. Czech Republic* (Partial Award, 17 Mar. 2006); *Pope & Talbot Inc v. Canada* ; (Interim Award, 26 Jun. 2000); *Wena Hotels Limited v. Egypt* (Award, 8 Dec. 2000), *United Parcel Service America Inc v. Canada* (Award on Jurisdiction, 22 Nov. 2002) ; *Mondev International Ltd. v. United States* (Award, 11 Oct. 2002) ; *The Loewen Group, Inc. and Raymond L. v. United States* (Award, 26 Jun. 2003); y en el caso *Tokios Tokel 'es Group, Inc. and Raymond L. v. Ukraine* (Award, 29 Apr. 2004). En nota de pie 126 en (Newcombe & Paradell, 2009, pág. 22).

³⁶⁹ Una crítica sobre el negocio intrínseco en la práctica arbitral en Eberhardt & Olivet (2012).

contrarias y que han tildado a estos organismos de parciales. Ambos postulados situando a la aplicación del DI entre la parcialidad y la imparcialidad³⁷⁰.

Un hecho notable a rescatar es que se viene produciendo un cierto rechazo a la inclusión de los IISDDSS en las cláusulas de los tratados por parte de algunos Estados. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio e Inversión entre Australia y EEUU (*Australia- United States Free trade Agreement* (2004)) excluía de su articulado la posibilidad de demandar al Estado receptor, e incluía en su articulado que el inversor solo tendrá capacidad de realizar las quejas ante los tribunales nacionales de los Estados parte³⁷¹. Más recientemente, en 2011 el gobierno australiano anunció que dejaría de incluir las disposiciones que capacitasen el arbitrio externo en cuestiones de IED; en la misma línea, Bolivia, Ecuador y Venezuela no han renovado diversos TTBBII y han denunciado su participación en el CIADI; Argentina, se muestra contrario a pagar los laudos arbitrales; Sudáfrica anunció que no renovaría los tratados vigentes; e India mostró su firme voluntad de no incluir disposiciones sobre el arbitrio en diferencias inversor-Estado (UNCTAD, 2013). Es decir, hay gestos evidentes de negación, repulsa y cierto cuestionamiento sobre el arbitrio en la CI, que no se producía anteriormente.

En concordancia con esta repulsa, durante los últimos años se han producido diversas manifestaciones por parte de la sociedad civil, que se ha mostrado contraria a las negociaciones en torno a las cláusulas de arbitrio que han sido incluidas en los tratados de inversión³⁷². Puesto que aunque, por ejemplo, formar parte del Convenio CIADI no implica que el Estado haya aceptado el arbitraje, al incluirse en los tratados expresamente una cláusula de consentimiento se evita la necesidad de cualquier tipo de aceptación *ad hoc*, y no es necesaria ningún tipo de aceptación puntual³⁷³.

³⁷⁰ Defendiendo la imparcialidad del tribunal véase: Brower & Schill (2005); y Paulsson (2005); y observando parcialidad en su práctica: Echaide (2012); Chung (2007); Odumosu (2007); Fontoura Costa (2011); Van Harten (2012); o Eberhardt & Olivet (2012).

³⁷¹ Esta cláusula está presente en el Capítulo 11 del Tratado. Art. 11.16: “*Consultations on Investor-State Dispute Settlement*”. Texto disponible en: http://www.dfat.gov.au/fta/ausfta/final-text/chapter_11.html (Consulta realizada el día 2 de junio de 2014).

³⁷² En este contexto indica la UNCTAD algunos ejemplos: abogados de Australia, Nueva Zelanda, EEUU; organizaciones de la sociedad civil recriminando los derechos excesivos de las TNM; o movimientos indígenas de diversos lugares (UNCTAD, 2013, pág. 105)

³⁷³ El art. 25 del Convenio CIADI lo dice así:

(1) “La jurisdicción del Centro se extenderá a las diferencias de naturaleza jurídica que surjan directamente de una inversión entre un Estado Contratante (o cualquiera subdivisión política u organismo público de un Estado Contratante acreditados ante el Centro por dicho Estado) y el nacional de otro Estado Contratante y que las partes hayan consentido por escrito en someter al Centro. El consentimiento dado por las partes no podrá ser unilateralmente retirado”. Texto

Las quejas se han sucedido a lo largo de la última década principalmente y, en cierto modo, este hecho puede responder a varios factores. Como por ejemplo: el cómo operan las instituciones; cómo son ejecutadas sus resoluciones; en qué principios del DI basan sus resoluciones; posibles intereses económicos de los agentes involucrados en el proceso; e incluso el propio origen del DI.

En este sentido, es debido señalar que el mecanismo de arbitrio, más allá de diferencias en cuestiones de procedimiento, opera siguiendo unas fases que son similares para las diversas instituciones que litigan en las disputas Estado-inversor:

- Fase 1:** Un inversor notifica la llamada a arbitraje a un Estado. Las dos partes recurren a la asistencia de consejeros abogados para abordar el proceso.
- Fase 2:** El inversor y el Estado eligen el tribunal: este se forma por tres árbitros en el que cada parte elige uno, y el tercero conjuntamente.
- Fase 3:** El procedimiento con la presentación de pruebas y análisis de los hechos se prolonga durante varios años, a puerta cerrada y con una difusión de la información escasa. (En este sentido actúan las cláusulas de confidencialidad).
- Fase 4:** La resolución del tribunal determina si debe haber o no compensación y el montante de esta. En éste se incluyen los costos del litigio. Las posibilidades de recurrir son mínimas.
- Fase 5:** Los Estados cumplen con los laudos. Y en caso de negación se ejecutan presiones o incluso confiscaciones de propiedades en otros Estados.

*A partir de (Eberhardt & Olivet, 2012, pág. 34)

Es relevante observar cómo opera el mecanismo de arbitrio, puesto que entre las cuestiones que se han señalado como posibles factores que deslegitiman el ejercicio del arbitrio, una en la que se ha incidido es que existe un cuerpo de árbitros que han creado una especie de grupo de notorios³⁷⁴. A este respecto, señala el investigador Fontoura Costa (2011) que resulta llamativo que dentro de un método en el que se permite a las partes elegir los árbitros, **se detecta la presencia de únicamente doce árbitros en la mayoría de los casos**, en donde dentro de uno de los organismos como es el CIADI, en 158

completo disponible en
<https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=ICSIDDocRH&actionVal=RulesMain>
(Consulta realizada el día 13 de diciembre de 2013).

³⁷⁴ Respecto a este tema se recomienda la lectura de Eberhardt & Olivet (2012) y Fontoura Costa (2011).

ocasiones de los 263 casos se ha contado con ese grupo o algún miembro del mismo. Es por ello, que algunos estudios ponen en duda su fiabilidad y honestidad, indicando que se ha constituido un gran negocio alrededor del ISDS. Algunos investigadores incluso han afirmado que se da la existencia de una mafia interna (“*inner mafia*”) (Barker, 2012; Eberhardt & Olivet, 2012).

El origen del árbitro es otra de las cuestiones que han sido señaladas. Se afirma que aunque los árbitros suelen ser personajes reconocidos de diversos campos: abogados, profesores y antiguos jueces (OCDE, 2012, pág. 43), este hecho no elimina su ideología, su cultura y su formación, cuestiones determinantes a la hora de ejecutar decisiones. De hecho, como sujetos de información poseen una visión política particular. En donde la tarea de aplicar un derecho que asuma la visión de los Estados en desarrollo y sus particularidades en el DI, se dificulta cuando aproximadamente el 75% de los árbitros asignados en el CIADI son originalmente de los países de la OCDE y más, cuando los datos señalan que entre 1972 y 2011, el 85% de los casos se produjeron entre inversores de países desarrollados contra Estados en desarrollo (Eberhardt & Olivet, 2012). Es decir, jueces con origen de los países que denuncian, atendiendo a demandas de agentes privados nacionales de Estados desarrollados, juzgando litigios ocurridos en Estados en desarrollo.

En este sentido, existen estudios empíricos que investigan si guarda una relación el desenlace en la disputa con el origen del árbitro, llegando a conclusiones diversas. Se encuentran posturas que indican que no, como el estudio de Susan. D. Frank *Development and Outcomes of Investment Treaty Arbitration* (2009), que señala que no existe relación alguna entre el pertenecer a un país desarrollado o no en las resoluciones del cuerpo arbitral (Frank, 2009); y otros trabajos que sin embargo, señalan que existe relación pertenencia-resolución, como el de Michael Waibel y Yanhui Wu (*Are Arbitrators Political?* (2010)), donde encuentran evidencias de la existencia de una relación entre la sociabilización de los árbitros y las sentencias que emiten- de 180 casos tratados, detectan indicios de la existencia de relación e influencia de las visiones políticas en sus resoluciones (Waibel & Wu, pág. 2012)-; o el estudio de Gus Van Harten (*Pro-Investor or Pro-State Bias in Investment-Treaty Arbitration? Forthcoming Study Gives Cause for Concern* (2012)), en donde el autor señala que, en cláusulas que requieren una interpretación de aquellos aspectos que se caracterizan por su ambigüedad y, por lo tanto, se exponen a una interpretación del tribunal, sobre una muestra de 140 casos, la media de los casos en los que el tribunal optó por realizar una interpretación extensiva del DI en favor del denunciante (inversor) resultó del

76.09%(acumulativo). Además, el estudio de Van Harten (2012) indica que si el demandante pertenecía a uno de los Estados que mayor volumen de IED realiza (Alemania, Gran Bretaña, France o EEUU), la interpretación extensiva se acentuaba.

En el mismo sentido, otros estudios que han analizado la orientación de los árbitros a la hora de dictaminar resoluciones. Los investigadores Yves Dezalay y Bryant Garth señalaron en su estudio *Dealing in Virtue* (1996) que “...esta generación del arbitraje es más cercana a las corporaciones y, por lo tanto, es más probable que integre el sentido común de los negocios en las normas legales aplicadas a cada caso”.³⁷⁵. Afirmaciones que plantean más cuestiones de fondo como: ¿qué visión es la que subyace bajo la perspectiva de aquellos que interpretan el DI, y que valores son aquellos que prevalecen y subyacen bajo la interpretación de las leyes?, ¿prima en éstas la defensa del interés público o el interés económico que maximiza beneficios? Cuestiones que deberán ser abordadas en futuras investigaciones. En todo caso algo evidente sí se ha señalado y es que los árbitros poseen un gran conocimiento en diversas áreas como DI, economía, política, etc..., pero que no son especialistas en la defensa de los DDHH (Eberhardt & Olivet, 2012, pág. 37).

Además de lo ya señalado, por último se debe indicar al respecto que no se pueden pasar por alto diversas cuestiones que han sido criticadas de estos mecanismos como: a) las puertas giratorias, en la que los abogados o asesores en AAIIRR o TTBBII, son luego contratados por corporaciones que se dedican a denunciar esos mismos tratados e interponer demandas contra los Estados³⁷⁶; b) el costo económico: de promedio de 8 millones de dólares (existen casos que han supuesto más de 30 millones de dólares) (Eberhardt & Olivet, 2012, pág. 8); c) la direccionalidad: un inversor puede demandar a un Estado, un Estado no puede demandar a las compañías en este espacio; d) la defensa de la propiedad privada por encima de otras cuestiones, pues se entiende la defensa de la propiedad como un derecho que se eleva por encima de otras cuestiones de interés general como la salud, los derechos laborales, derechos sociales, etc...³⁷⁷.

³⁷⁵ Traducción propia a partir de: “...this generation of arbitration is closer to business and therefore more likely to work bussines common sense into the legal norms applied to each case” (Dezalay & Garth, 1996, pág. 195).

³⁷⁶ Como ejemplo de este suceso se señalan las personalidades s que ocuparon puestos en la redacción del TCLAN como Daniel Price; Jan Paulsson y Guillermo Aguilar Álvarez, que luego pasaron a animar a varias compañías internacionales a demandar a los tres Estados y el tratado creado (Eberhardt & Olivet, 2012, pág. 29). Véase relación de árbitros y casos en www.tni.org/profitng-annex-b (Consulta realizada el 24 de agosto de 2014).

³⁷⁷ Entre las reacciones contrarias a las instituciones de árbitros destacan las siguientes:1) La creación de la Conferencia Ministerial de Estados Latinoamericanos Afectados por los intereses de las transnacionales, en

8. El impacto de la normativización en la soberanía.

Es un hecho notorio que la delegación para interpretar una regla a terceras partes constituye un ejercicio claro de cesión de competencias soberanas³⁷⁸; y mediante el proceso de legalización de ciertas acciones en las disputas inversores-Estados- como la aprobación e inclusión de cláusulas y arbitrios en los tratados- se significa una institucionalización caracterizada por contraer ciertos compromisos entre los agentes. Así como que esta acción tiene implicaciones fundamentales para determinar cómo se organiza la institucionalización del poder a nivel estatal y global; así como permite determinar qué agentes poseen capacidad para incrustar sus visiones particulares en el funcionamiento de la estructura.

Es en este sentido, en el que la promoción de TTBBII, AAIIRR o cualquiera de los instrumentos multilaterales, generan, automáticamente, una red inter-conectada de reglas que se concluyen en una estructura, que viene a significar lo que David Schneiderman (2008) denomina “régimen regulador de inversión”. Proceso que se significa en la construcción de límites claros a la capacidad de los Estados para dictaminar en cuestiones que tengan relación alguna con los mercados³⁷⁹ (Schneiderman, 2008, pág. 2).

A este respecto, es importante tener en cuenta que si los regímenes se constituyen para dar respuesta a problemas políticos específicos³⁸⁰ (en este caso las disputa inversor-Estado), si no se encuentran en las bases de su origen cuestiones de orden público como puedan ser: el desarrollo, los DDHH, los servicios sociales, el medio ambiente, etc... se entiende que dentro del entramado normativo, la resolución de las disputas estén caracterizadas por la no atención a los efectos de las cuestiones señaladas. Y ya que en este caso las cuestiones señaladas no son ni están inscritas en el origen del régimen regulador de inversión, no serán

respuesta a una situación en la que la región de ALC se ve como aquella con mayores litigios en contra formada por los países de: Ecuador, Bolivia, Cuba, Nicaragua, República Dominicana, St. Vincent y Granada y Venezuela, en 2013; 2) la salida de Venezuela, Bolivia y Ecuador del Convenio CIADI en 2012; 3) la no ratificación de Brasil de ningún TBI; 4) la no renovación del TBI con la Belga-luxemburguesa Unión Económica de Sur-África, así como la no participación en nuevos TTBBII con países europeos; 5) la negación de India de renovar los TTBBII firmados y la no signatura de nuevos; 6) Pakistán está trabajando en la elaboración de modelos propios de TBI; y 6) la decisión de Australia en 2001 de excluir la cláusula de ICSD de cualquier tratado (Nel, 2013).

³⁷⁸ Véase Capítulo II.

³⁷⁹ Se entiende régimen en el sentido que lo hace Stephen Krasner (1983): “...un conjunto de principios, normas, reglas y decisiones de procedimientos en la toma decisiones en donde convergen las expectativas de los Estados” (Krasner, 1983, pág. 2).

³⁸⁰ En este sentido se indica que los regímenes son: “... órdenes internacionales parciales, creados *ex profeso* y de alcance regional o mundial, cuyo propósito es sustraer ciertas áreas de la política internacional del ámbito de las prácticas unilaterales. Al crear expectativas comunes sobre conductas que resultan apropiadas y elevar el grado de transparencia en un ámbito determinado de la política, los regímenes internacionales propician que los Estados (y otros actores) cooperen con el fin de obtener ganancias comunes...” (Hasenclever, Mayer, & Rittberger, 1999, págs. 499-500).

atendidas por éste. Por lo que, en caso de conflicto entre las cuestiones que dieron origen al régimen o a los resultados de las prácticas, se desatenderán los posibles efectos en las cuestiones señaladas y tendrán prioridad aquellas que motivaron la operativización del régimen³⁸¹.

Algunos de los hechos revisados evidencian la no atención a otras cuestiones que no sean objetivo de este régimen. Por ejemplo, cuando se analizan las resoluciones por parte de los IISDDSS, se observa que se han dado casos en los que las multinacionales han demandado a Estados por los “efectos futuros” - considerados actos de expropiación indirecta-, cuando los Estados han acometido cambios en la legislación interna en defensa del Medio Ambiente -en el caso de Alemania, demanda *Vattenfal vs Alemania* por la decisión de eliminar la energía Nuclear³⁸²-; por regular la salud pública -en el caso de demanda contra Australia y Uruguay por parte de la compañía Philip Morris³⁸³-; y más demandas que han sido interpuestas por la aplicación de medidas tributarias o políticas fiscales, regulaciones ambientales, etc...³⁸⁴. Acciones que constatan de manera evidente, la injerencia en las prácticas políticas internas de los Estados por medio del régimen regulador de inversiones, que, en palabras de David Schneiderman (2008), son hechos que reflejan un proceso de “Constitucionalización de la Globalización Económica” y que implica límites a las capacidades de los Estados.

Aun señalando Schneiderman (2008) la reglamentación en torno a la IED como un proceso constitucionalizador, se debe indicar que este proceso posee diferencias notables con la creación de una constitución. Debido principalmente a que el régimen regulador de la inversión no se asemeja a una constitución avanzada en dos factores fundamentales: 1) no es democrática; y 2) no obedece al bienestar social o interés público. Pero se asemeja en que al igual que las constituciones persigue: 1) **establecer límites legales a la autoridad**

³⁸¹ Señalar a este respecto que sí existen regímenes que atienden a cuestiones de DDHH (Moravcsik, 1995); regímenes de seguridad (Smith, 1987); regímenes de ambientales (Parson, 1993), pero que en el caso señalado no es origen y meta del régimen en torno a la inversión que señala Schneiderman (2008).

³⁸² Caso *Vattenfall AB, Vattenfall Europe AG, Vattenfall Europe Generation AG v. Federal Republic of Germany* (ICSID Case No. ARB/09/6). Estado: pendiente.

³⁸³ Véanse casos: *Philip Morris v Australia* (UNCITRAL) 2011; y *FTR Holding S.A. (Switzerland), Philip Morris Products S.A. (Switzerland) and Abal Hermanos S.A. (Uruguay) v. Oriental Republic of Uruguay* (ICSID Case No. ARB/10/7) 2010.

³⁸⁴ Véase Eberhardt & Olivet (2012, pág. 13) para casos emblemáticos; y para asuntos de expropiación indirecta se recomienda Been & Beauvais (2003); Páez (2006); Rodríguez A. F. (2013); o Heiskanen (2003).

del poder público; 2) aislar la economía del poder político; y 3) asigna a la inversión la máxima protección posible³⁸⁵.

Ahondando en los paralelismos, es deber señalar que la agrupación de un conjunto de normas e instituciones implica la constitución de un pacto que liga a la sociedad actual con las generaciones futuras, mediante la instrumentalización de estados que derivan en formas institucionales y normas sustantivas a través de las cuales se practica la política, al igual que las constituciones; e igualmente se asemeja en el sentido en el que se incluyen en el régimen mecanismos vinculantes; existe la revisión judicial de sentencias; y se produce una semejanza en el instrumento que sirve para emitir sentencias: el DI. Destacando que éste proviene de las naciones “civilizadas” en su gran mayoría, al igual que las constituciones. Es decir, sin ser exactos los paralelismos si poseen elementos comunes muy relevantes.

Es por ello que en muchos sentidos los propios defensores de las regulaciones para la protección de la inversión enuncian que las propias instituciones, las cuales amparan el cumplimiento de las normas, desarrollan funciones constitucionales. Es decir, protegen y promocionan: la libertad, la no-discriminación, el imperio de la Ley y la protección judicial de los derechos individuales a través de las fronteras nacionales (Schneiderman, 2008, pág. 4).

Contrariamente a lo indicado, una de las afirmaciones más repetidas por los OOII ha sido que los mecanismos reguladores de inversión despolitizan los conflictos³⁸⁶. Por ejemplo, en 1972 en la Convención celebrada por el CIADI, se indicó que el mecanismo de arbitrio para las disputas inversor-Estado es un gran avance en la consolidación del desarrollo internacional. Manifestación a cargo del que fue durante 20 años Consejero general del BM Aron Broches:

“Este desarrollo del derecho internacional actual tendrá el gran mérito de ayudar a eliminar las controversias sobre inversiones de la esfera política intergubernamental”.³⁸⁷ (Broches, 1995, pág. 163).

La visión que expresaba Broches sobre el mecanismo aludía a lo positivo de la despolitización del conflicto inversor-Estado, entendiendo que estas disputas se

³⁸⁵Cuestiones que ya indicó Polanyi (1957) como características del constitucionalismo, visto éste como el dispositivo que aseguraba la homogeneidad y uniformidad en las prácticas del Estado.

³⁸⁶ A este respecto por ejemplo véanse los documentos: NNUU (2010a, págs. 12-14); Shinata (1992); o Paparinskis (2010).

³⁸⁷ Traducción propia a partir de: “This development of existing international law would have the great merit of helping to remove investment disputes from the intergovernmental political sphere” (Broches, 1995, pág. 163).

distanciaban del conflicto político. Presuponiendo que las resoluciones de conflictos en cuestiones de defensa de la propiedad extranjera en territorio nacional, mediante los organismos de arbitrio, eran imparciales. Por lo tanto, éstas eliminaban las visiones particulares y eran decisiones apolíticas.

El mecanismo era presentado como una herramienta al servicio del bien común internacional y se divulgaba que la instauración de ésta era necesaria para establecer una cooperación y bienestar para el futuro conjunto entre naciones, así como para la estructura global.

Se observa este discurso de forma tan evidente, que como señala Martins Paparinskis en su artículo *The Limits of Depoliticisation in Contemporary Investor-State Arbitration* (2012), en el caso *Corn Products International, Inc Vs México (ICSID AF Case no ARB/ (AF)/04/1)* el Arbitro Lowenfeld señaló que:

“...[l]a esencia de cada una de estas disposiciones [del Convenio del CIADI, los Tratados Bilaterales de Inversión (ITBBI) y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)] es que **las controversias entre los inversionistas extranjeros y los países de acogida están aislados de las relaciones políticas y diplomáticas entre los Estados**”³⁸⁸ (Citado en Paparinskis (2010, pág. 3)) **[Negrita propia]**.

Sin embargo, estas percepciones sobre la despolitización de litigios que inciden en las prácticas políticas internas, parece ser que cuando menos contienen un grado de “*naïveté*”. Ya que hay que señalar que la pretensión de equiparar este tipo de organismo internacional con otros que promueven la aplicación de leyes con carácter global, como la CIJ u otros, encuentra definitivamente el problema político. Pues mientras aplicaciones de otro tipo de jurisprudencia no obedecen al interés de compañías privadas, este tipo de litigio responde directamente a la protección de intereses particulares, situándose éste por encima de interés público.

A este respecto, si se entiende como elemento despolitizador el otorgar al inversor la capacidad de litigar su queja directamente con el Estado receptor, pues de ese modo los Estados no entran en disputas políticas y un conflicto podrá resolverse mediante un juicio en el que sólo actuaran el inversor y el Estado receptor, en donde no entrarán los órganos

³⁸⁸ Traducción propia a partir de: “...[t]he essence of each of these arrangements [the ICSID Convention, Bilateral Investment Treaties (BITs) and the North American Free Trade Agreement (NAFTA)] is that controversies between foreign investors and host states are insulated from political and diplomatic relations between states” (Citado en Paparinskis (2010, pág. 3)).

políticos de dos Estados a la disputa, la indicación es correcta³⁸⁹. Pero sin embargo y bajo otra perspectiva, si un Estado realiza el ejercicio de ponderar la importancia de sectores a la hora de lograr ciertas metas inscritas en su ideario de “bien común” como conjunto y, por ende, siendo ésta aquello que articula la operativización de la estructura nacional y representación de la soberanía popular, el incrustar un factor como la protección a cualquier práctica que conlleve la IED como elemento necesario para alcanzar cualquier otro tipo de logro en sociedad, hace que si los actores asimilan que en su camino al “bien común” la primera necesidad es la de proteger al inversor extranjero, el anteponer otro tipo de meta ante está requerirá de un proceso de renuncia a su propia concepción de “bien común”, y es entonces si aparece la cuestión política. Por lo que afirmar que este mecanismo es des-politizador carece de fundamento válido bajo esta perspectiva, y sólo será admitido como tal una vez que los Estados y sus ciudadanos asimilen en sus ideas que la IED y cualquier efecto que pudiese provocar se sitúa por encima de cualquier práctica o decisión política interna. Y en este contexto la sociedad deberá atender y adaptar sus mecanismos de gobierno a esta protección. La cual actuará como premisa anterior a toda idea, práctica y acción del Estado, incluso requiriendo que se supedite a esta práctica la propia protección de los DDHH.

Hay que tener en cuenta que con un número tan elevado de AII en la SI y el modo en el que las cláusulas de arbitrio están acordadas, éstas se están convirtiendo en un elemento de presión que determina la adopción de políticas internas en los Estados. Por lo que en cierto modo la autonomía está siendo desafiada por los IISDDSS. Ante esta cuestión, se debe señalar y tener en cuenta que los Estados que no cuenten con una capacidad suficiente para anteponer sus decisiones, y no acceder a la firma de ciertas cláusulas, se encuentran en una situación en la que, si dependen de los recursos económicos del exterior, la inclusión de ICSID y cláusulas en los tratados no es una elección, sino un requisito para acceder al capital necesario (Abbot & Peinhardt, 2010, pág. 23). Además, ante la posibilidad de litigio los Estados soberanos se sienten presionados y una vez firmados los AII, se ha admitido, incluso las NNUU, como pueden llegar a contener acuerdos que limitan la capacidad de los Estados para abordar reformas en ciertos sectores y como la adhesión puede sesgar gravemente la capacidad de articular mecanismos que prevengan las crisis económicas y financieras (UNCTAD, 2011, pág. 8).

³⁸⁹ Así lo indica Daniel Price que es citado en Paparinskis (2010, pág. 9). En este sentido es relevante indicar que los tratados suelen contener una cláusula que elimina la posibilidad de acudir al derecho diplomático mientras el litigio está en arbitrio.

Pero aun con todo lo señalado, sería del todo comprensible que un Estado siguiese los mecanismos instaurados en el contexto internacional, pues éstos han sido constituidos- las normas, reglas, la ISDS y otras instituciones internacionales- bajo la premisa de instaurar y operar por el “bien común” global, y señaladas como instituciones imparciales. Es decir, sin carga política.

8.1 Cuestiones de cláusulas: su ambigüedad e interpretación en el Derecho Internacional.

Como viene evidenciándose a lo largo del texto, una de las cuestiones que ha contenido mayor componente crítico, por operar en espacios no definidos entre la soberanía y el inversor, ha sido la aplicación del DI como herramienta que permita solventar conflictos en disputas ocurridas en torno a la IED.

Es cierto que la interpretación de los tribunales en aquellas cuestiones que implican y requieren de su labor analítica, por contener la jurisprudencia elementos con un alto grado de ambigüedad, ha sido, es y será, un ejercicio característico y necesario en pos de solventar disputas. En este sentido, como indica el Estatuto de la CIJ en su Art. 38(1) (d), la una de las fuentes del DI son “...las decisiones judiciales...”, que deben servir como “...medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho...”³⁹⁰. Por lo que las decisiones judiciales, a la vez de dictaminar en casos concretos, son origen y constituyen jurisprudencia de aplicación futura. Por lo que ante el acontecimiento de existir ambigüedad conceptual, se constituirá como jurisprudencia aquello interpretado por un tribunal en una sentencia determinada.

A raíz de esta indicación, es pertinente señalar que la labor de jueces o tribunales es de crucial importancia en RRII, debido a la carga de dificultad que contiene el ejercicio de dictaminar un laudo en el que no, obligadamente, las partes posean una idea común de aquello que es “justo”. A este respecto, señalar que es un hecho notable que el concepto de “justicia” ofrece un amplio margen para la interpretación en disputas de carácter nacional, pero más si cabe en el contexto internacional- ya sea este ejercicio interpretativo realizado por organismos internos de los Estados, por tribunales *ad-hoc* o por instituciones creadas para lidiar con las disputas-.

³⁹⁰ Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Texto disponible en línea: <http://www.icj-cij.org/homepage/sp/icjstatute.php> (Consulta realizada el día 29 de febrero de 2014).

Es por lo indicado, que aunque sí ha habido espacios en los que se han logrado ciertos consensos con pocas excepciones- como por ejemplo los DDHH³⁹¹-, este no se ha producido en el campo jurídico destinado a dictaminar derechos del inversor extranjero. Esto debido a que este espacio político-jurídico se ha caracterizado por vivir, históricamente y en la actualidad, en una disputa argumentativa en tensión continua.

Dado este contexto, parece un pensamiento lógico el señalar que si existe una dificultad explícita para que las partes en litigio conozcan a qué atenerse en caso de disputa, esta se amplíe cuando las condiciones mediante las que se articulan las relaciones entre las partes contengan un alto grado de interpretación. Esto sucede, por ejemplo, cuando la indefinición es característica de los mecanismos regulatorios, como se observa en algunas cláusulas presentes en los tratados que regulan las relaciones inversor-Estado. Cuestión que además de dificultar la percepción de los agentes y el ejercicio de resolución, ofrece un espacio en su indeterminación para que actúen otras fuerzas a la hora de dictaminar qué es aquello “justo” o “no justo” en la resolución de una disputa. Es por ello, que se debe hacer notar, que en un marco de RRII la cuestión soberana sufre impactos en la negociación de condiciones, debido a la tensión continua que posee el ejercicio de regular una relación que se basa en cláusulas cargadas de ambigüedad. Y además, la grieta existente en la interpretación ofrece espacio en donde otras fuerzas pueden articular sus capacidades, con el fin de promover una interpretación de acuerdo a su interés, e influir en el ejercicio de dictaminar regulaciones en aquellos lugares soberanos en donde se ejecuten inversiones.

Atendiendo a esta circunstancia, mediante un ejercicio previo de análisis de laudos y dictámenes que hayan abordado las cláusulas contenidas en los articulados de los Tratados, se han seleccionado para analizar y exponer lo indicado, dos cláusulas que presentan los dos elementos críticos a los que se ha hecho referencia, ya que ambas: 1) han requerido interpretación del tribunal habitualmente; y 2) dificultan la capacidad del Estado para ejercer como soberano. Estas cláusulas son: “el trato justo y equitativo” y “la expropiación indirecta”.

³⁹¹ Aunque sí existen debates en torno al alcance real de los mismos ya que, dado que como indica Sánchez (2005), existen divergencias teóricas respecto a la inclusión de los derechos sociales, económicos y culturales, ya que la declaración enuncia en mayor grado los derechos civiles y políticos.

8.1.1 La ambigüedad como seña de identidad en la interpretación del Derecho Internacional. La cláusula de “Trato justo y equitativo”.

Si bien es cierto que el trato que debe otorgarse a una IED en el Estado receptor, ha sido uno de los objetos de mayor disputa entre los agentes participantes en la relación Estado-inversor, el eje alrededor del que se ha producido el debate ha contado con la particular interpretación de cada una de las partes sobre el significado de qué se considera “justo o no justo”. Es decir, en torno al concepto de justicia.

Ya en 1946 se afirmaba, en palabras de los investigadores Alexis Coudert y Asher Lans (1946), que el concepto de “trato justo” ha llenado de letras vacías diversas disputas históricamente. Indicando asimismo estos autores que ya antes de los años 50, el DI se caracterizaba en cuestiones de IED por ser “...una melancólica omnipresencia en el cielo” (Courdet & Lans, 1946, pág. 741)³⁹².

Ante la reflexión de Courdet y Lans, cabe preguntarse si se ha instituido una conceptualización de “trato justo”, que responda a un común denominador entre las diferentes percepciones que pudieran ser origen de una interpretación particular de justicia en las RRII. Esto debido, a que ante un leve ejercicio de acercamiento a la revisión de las cláusulas presentes en los tratados que se han ido estableciendo en materia de IED, ya fuere en el pasado o en la actualidad con los TTBBII o los AAIIRR, es notoria la habitual presencia de una cláusula que alude al concepto de justicia: “el trato justo y equitativo”.

A la vista de las diferentes resoluciones e interpretaciones sobre el “trato justo y equitativo” que han ido produciendo los juristas internacionales, es relevante rescatar aquello que señalan los investigadores Carlos Pablo Márquez Escobar y Lorenzo Villegas Carrasquilla en su artículo *La regulación e inversión extranjera: Los tratados de promoción recíproca de inversiones y el estándar de trato justo y equitativo* (2009), cuando hacen referencia a las conclusiones de los árbitros en algunos casos sobre la cláusula del “trato justo y equitativo”, e indican que, por ejemplo, en el caso *Mondev International Ltd vs Estados Unidos de América* (11 de Octubre de 2002), el Tribunal arbitral que fue designado para la resolución del conflicto manifestó que “...juicio de lo que es justo y equitativo no puede ser alcanzado en abstracto; depende de los hechos en un caso concreto” (Escobar & Carrasquilla, 2009, pág. 163). O en el mismo

³⁹² Traducción propia a partir de: “...a “brooding omnipresence in the sky” (Courdet & Lans, 1946, pág. 741).

sentido, en el caso *Waste Management* (30 de Abril de 2009) cuando el Tribunal señaló que “...el criterio es, hasta cierto punto, flexible y debe adaptarse a las circunstancias de cada caso” (Escobar & Carrasquilla, 2009, pág. 163). Afirmaciones que sin recurrir a la historia, pues se dan en época reciente, evidencian que no se ha instituido una interpretación común en la CI de aquello que constituye un “trato justo y equitativo”.

Abordando esta misma cuestión se pronunció la OECD en septiembre del 2004, cuando mediante la elaboración de un informe denominado *Fair and Equitable Treatment Standard in International Investment Law* (2004), a partir de un ejercicio de citación de diferentes casos en los que se habían dictaminado resoluciones divergentes por parte de los tribunales, se concluía que “...el significado del estándar “trato justo y equitativo” no tiene porqué significar necesariamente lo mismo en todos los tratados en los que aparece”³⁹³ (Yannaca-Small, 2004, pág. 2).

Tratando de indagar en un tiempo más lejano, con el objetivo de encontrar vínculos que determinen a qué criterios se debe atender cuando la cláusula sea origen de disputa, se detecta que se han producido varios intentos por aclarar y especificar el significado y efectos de dicha cláusula en caso de disputa. Entre ellos varios acometidos por la propia OCDE. Destacan entre otros, el que se dio cita en 1967 mediante la elaboración del documento *Draft Convention on the Protection of Foreign Property and Resolution of the Council of the OECD on the Draft Convention*; y otro en 1985, *Intergovernmental Agreements Relating to Investment in Developing Countries*, documentos ambos que lejos de evidenciar la ambigüedad presente en la cláusula, ofrecen sólo alguna pista de aquello que se entiende por “justo y equitativo”. En su interior se indica que aquello que será considerado “justo y equitativo” atiende a los principios generales del DI, aunque sin aclarar exactamente ningún tipo de límite, rasgo, o cuestión de fondo relevante (Yannaca-Small, 2004).

En pos de solventar la inconcreción presente en la cláusula, se trató de identificar a ésta como uno de los elementos parte del “trato estándar mínimo” (Gann, 1985; Tru, 1988; Paterson, 1991). Al incluir la cláusula como parte del trato estándar mínimo, se ha trasladado la mirada investigadora hacia resoluciones de sentencias de principios del siglo XX. Concretamente, el “trato estándar mínimo” retrotrae la pista a las conclusiones de los laudos de los casos *Philip Neer* (1926) y *Harry Roberts* (1927). En los que, ante la cuestión de dilucidar en qué consistía el trato mínimo estándar, el tribunal resolvió que existían

³⁹³ Traducción propia a partir de: “The meaning of the “fair and equitable treatment” standard may not necessarily be the same in all the treaties in which it appears” (Yannaca-Small, 2004, pág. 2).

evidencias de “estándares mínimos” que toda sociedad “civilizada” debe cumplir (Newcombe & Paradell, 2009, pág. 14). Esta afirmación, más allá de evidenciar y presentar otras cuestiones profundas que despejen la duda a todas las partes en disputa, centra el resultado de la interpretación en el estudio del origen del DI, e indica que un árbitro debe atender en su dictamen a los derechos mínimos contenidos en los Estados “civilizados” y que la aplicación e interpretación de la cláusula basará su resolución en el DI, de acuerdo al concepto de justicia presente en los Estados considerados “civilizados”.

El hecho de constituir una cláusula que conduce al debate a una cuestión qué plantea el dilucidar qué agentes son civilizados y quiénes no, ofrece cuando menos un elemento relevante en la disputa. Dado que en un contexto de división entre “civilizados” y “no civilizados”, de darse la presencia de jueces que provengan de otras culturas consideradas históricamente “no civilizadas” o “no desarrolladas”³⁹⁴, cabe la posibilidad de que su interpretación particular diverja de acuerdo a principios “no civilizados”. Esto teniendo en cuenta que la existencia de diferentes culturas, valores, moral, etc..., en la SI, determina aquello que se entiende por “justicia y equidad” por cada agente-parte y contiene una alta posibilidad de ser interpretado de un modo particular.

Ante estos hechos, cabe preguntarse cuál es el origen de la cláusula. Es decir, ¿qué actores la promovieron? y ¿qué papel jugaron los otros Estados, culturas, etc...?. Estas cuestiones son relevantes debido a que la ambigüedad presente ocupa un espacio en un acuerdo que dictamina un modo operativo de juicio, el cual determina el trato que se otorgue a un inversor en suelo nacional. Y en caso de ser un Estado “no civilizado”, puede que no se atienda a su soberanía para ejercer su decisión como sociedad, ya que los valores de las partes “civilizadas” deben ser a los que se atiende de acuerdo con el origen de esta cláusula.

Por ello, en cuanto a su origen se debe indicar que la inclusión de “trato justo” en los articulados de Tratados, acuerdos o convenios, encuentra su primera referencia en la propuesta a nivel multilateral incluida en la redacción del articulado que se presentó en el borrador de la Organización Internacional de Comercio (OIC) en 1946³⁹⁵. El documento allí propuesto: la Carta de la Habana (1946), señala que en las relaciones multilaterales y

³⁹⁴ En este sentido, se recomienda revisar la cuestión de transformación conceptual sufrida tras la aparición del concepto del desarrollo expuesta en el Capítulo I, en donde se expone como la composición de la estructura internacional pasa de observar a los Estados civilizados como desarrollados y, concluyentemente, no civilizados o subdesarrollados. Asimismo, se recomienda al respecto la lectura de Rist (2002).

³⁹⁵ Esta institución no llegó a ser ratificada. El conflicto entre el libre comercio y la libertad de las empresas para actuar en Estados receptores chocó con la concepción de injerencia en la política interna, ante lo que algunos Estados se negaron.

bilaterales se debe asegurar “...el trato justo y equitativo para la empresa, habilidades, capital, arte y tecnología traído por un país miembro a otro”.³⁹⁶. Y si bien este acuerdo no entró en vigor³⁹⁷, la interpretación de la misma se sumó al conflicto argumental.

Poco más tarde, en una de las regiones con mayores disputas sobre el impacto de la IED: ALC, también fue incluida la cláusula citada en el Convenio Económico de Bogotá (1948)- dentro de la novena Conferencia Panamericana-, con claras referencias a la IED y a las garantías que debían otorgarse a los inversionistas. En este caso, promovida su inclusión por el actor inversionista: los EEUU.

Art 22: “Los capitales extranjeros recibirán tratamiento equitativo. Los Estados, por lo tanto, acuerdan no tomar medidas sin justificación o sin razón válida o discriminatorias que lesionen los derechos legalmente adquiridos o los intereses de nacionales de otros países en las empresas, capitales, especialidades, artes o tecnologías que éstos hubieren suministrado (...).

...Los Estados acuerdan que no impondrán en sus respectivos territorios trabas irrazonables o injustificables que priven a otros Estados de obtener, en condiciones equitativas, el capital, las habilidades y las técnicas necesarias para su desarrollo económico” (OEA, 1948b). [Negrita propia].

Indicar que al no ser ratificada la medida no fue aprobada, pero constan quejas en base a la ambigüedad de diversos términos como: razonable, justificable y equitativo (Fabela, 1958).

El ejercicio de difusión de la cláusula como elemento habitual de un tratado, continuó su andadura en la CI sin atender a la indicada ambigüedad. Su promoción se incentivó y la primera muestra de ello fue la propuesta Borrador Abs- Shawcross elaborado en 1959.

Este documento surgió a partir de una colaboración conjunta de los empresarios inversores. Por una parte, la Sociedad Alemana para Avanzar en la Protección de Inversiones Extranjeras formada por abogados, economistas y banqueros, expresó su preocupación por la protección de las IED en territorios considerados en desarrollo. Ante lo cual decidieron actuar elaborando una propuesta denominada: Borrador Abs- en honor al líder de la Sociedad que era a su vez presidente del Deutsche Bank, Hermann Abs-. Por otra, casi paralelamente, en 1958, al auspicio e interés de Sir Hartley Shawcross (director de

³⁹⁶ Véase el documento de UNCTAD: *International Investment Instruments: A Compendium*, 1 UNCTAD, Ginebra, 4 (1996) Citado en Escobar & Carrasquilla (2009, pág. 165).

³⁹⁷ La Carta de la Habana sólo fue ratificada por Liberia y Australia.

la petrolera SHELL), fue elaborado otro borrador que contenía disposiciones con similar intención a las presentadas en el Borrador-Abs (Sinclair, 2004). Ante esta pretensión común por parte de los distintos inversores, en 1959 se abogó por elaborar un borrador conjunto denominado Convención Abs-Shawcross sobre Inversiones en el Exterior, en el que en su Art. 1 se leía:

“Cada parte en todo momento asegurará el trato justo y equitativo a la propiedad de los nacionales de las otras Partes. Se le acordará a dicha propiedad la más constante protección y seguridad en los territorios de las otras partes y su gestión, uso y disfrute no serán en ninguna manera impedidas por medidas irrazonables o discriminatorias” (Citado en Escobar & Carrasquilla (2009, pág. 166)).

En esta cuestión se volvería a incidir en la Convención sobre Protección a la Propiedad Extranjera celebrada por la OCDE en 1967³⁹⁸. De hecho, es en el documento resultado de la misma en donde llama la atención la similar formulación en su contenido. Hecho que de algún modo evidenciaba el papel que había jugado la Convención Abs-Shawcross (los empresarios), en la difusión de la cláusula contenida en una institución formada, ya no por empresarios sino por Estados:

“Cada parte en todo momento asegurará el trato justo y equitativo a la propiedad de los nacionales de las otras Partes. Se le acordará en sus territorios a dicha propiedad la más constante protección y seguridad y en ninguna manera impedirá su gestión, mantenimiento, uso, disfrute o disposición por medidas irrazonables o discriminatorias” (Citado en Escobar & Carrasquilla (2009, pág. 167)).

El impacto de esta cláusula en la CI se vio reflejado por la inclusión de la misma en la mayoría los TTBBII negociados entre Estados en desarrollo y Estados desarrollados, que salvo excepciones³⁹⁹, ha estado presente. Ha alcanzado tanta aceptación que incluso aquellos Estados que generalmente se habían mostrado reticentes a firmar cláusulas que sesgaran su capacidad nacional sobre la IED, comenzaron a incluirlas (China, Emiratos Árabes y la más notoria, algunos Estados latinoamericanos).

³⁹⁸ Señalar que en esta Convención tampoco se vio fructificada el intento de establecer un mecanismo multilateral. Debido, principalmente, a diferencias ideológicas entre los Estados exportadores y los importadores de capital (Schill, 2009).

³⁹⁹ Entre estos algunos tratados firmados en Estados asiáticos: Pakistán, Arabia Saudí y Singapur (UNCTAD, 1998, pág. 54).

A nivel multilateral, la presencia de la cláusula también es notoria. La cláusula conseguía hacerse un espacio y se asentaba como elemento indispensable en un tratado, a partir de la elaboración del Borrador sobre Conducta sobre Corporaciones Transnacionales presentado por las NNUU en 1983. En donde se establecía un trato genérico a la IED en el contexto de las NNUU:

“Las corporaciones transnacionales deben recibir trato [justo y] equitativo [y no discriminatorio] [bajo] [de acuerdo con] las leyes, regulaciones y prácticas administrativas de los países en los cuales operarán [lo mismo que las obligaciones intergubernamentales a las cuales los Gobiernos han suscrito libremente] [consistente con sus obligaciones internacionales] [consistente con el derecho internacional]” (Citado en Escobar & Carrasquilla (2009, pág. 168)).

Aunque muchos de los contenidos allí presentes no han logrado una difusión en la firma de acuerdos o tratados, este no ha sido el caso. El “trato justo y equitativo” contó con el acuerdo de los Estados para que fuese incluida en la versión definitiva del Código de Conducta. A partir de ese instante, la cláusula ha estado presente en la mayoría de las convenciones, tratados, recomendaciones, informes o documentos que se han constituido a nivel internacional que hacían referencia al trato que se debía otorgar a la IED⁴⁰⁰.

Las circunstancias señaladas en torno a la cláusula del “trato justo y equitativo”, como que la ambigüedad ofrece un espacio para interpretar y este ejercicio “...es en cierta manera subjetivo, por tanto no es preciso y su noción dependerá de los diferentes sistemas culturales, jurídicos y morales” (Escobar & Carrasquilla, 2009, pág. 164); que la interpretación de los árbitros obedecerá al derecho presente en los Estados “civilizados”; que la definición e impacto en los textos internacionales fue promovida por grupos de inversores; que cuando el inversor ha demandado por expropiación directa esta no ha sido concedida en la gran mayoría de los casos y sin embargo, cuando el inversor ha alegado

⁴⁰⁰ Ha sido incluido en diferentes convenios y tratados (por orden cronológico): La Convención del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones(MIGA) en 1985 Art. 12; en el Acuerdo ASEAN para la promoción y protección de la inversiones(1987) Art. IV; en la Cuarta Convención de África, Caribe y el Grupo de los Estados del Pacífico y la Comunidad Económica Europea (1987)(Lomé IV); en las Recomendaciones sobre el tratamiento de la inversión extranjera directa, Art. III(2) del BM en 1992; Protocolo de Colonia para Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones(MERCOSUR) (1994), Art. 3.1;; Protocolo de Buenos Aires sobre Promoción y Protección de las Inversiones Provenientes de Estados no Partes del MERCOSUR (1994) Art. 3, C, 1 ; El Mercado Común de África Oriental y Austral (COMESA), Art. 159; Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TCLAN) Art. 1105(1); El Borrador del Acuerdo multilateral de inversiones (MAI)(1998) en su preámbulo; Acuerdo entre Singapur y la EFTA(Asociación de comercio justo europeo)(2002); VII Cumbre Alianza del Pacífico(2012) Capítulo 10 Sección A, Art. 10.6.. El ALBA-TCP se negó a firmar AII por considerar que los tribunales consignados tendían a favorecer los derechos de las EETTNN.

“trato justo y equitativo” la sentencia le ha sido favorable en más del 50% de los casos (Walck & Ahee, 2009), evidencian que existen elementos que causan que las percepciones de los agentes respecto a lo que se considera un “trato justo o no justo”, devenga en un multitud de conflictos. Ya fueren éstos causados por el origen ideológico, factor que ejerce su papel y determina su aplicación y la resolución final de las controversia; porque la interpretación última obedece al derecho de los Estados “civilizados”, que como se señaló en el Capítulo I encuentra sus herederos en los Estados “desarrollados”, lo cual establece una direccionalidad interpretativa de un grupo de países sobre otro; porque la inclusión de esta cláusula obedece al interés empresarial incluida en las cuestiones de Estados, lo cual presenta cuestiones determinantes en cuanto a si su inclusión es un reclamo social para relacionarse o un interés particular; o porque los árbitros son sujetos de información y, por lo tanto, subjetivos, teniendo en cuenta que éstos han sido educados y pertenecen a Estados “desarrollados” en un alto porcentaje (Eberhardt & Olivet, 2012), la inconclusión en la definición de la cláusula está expuesta a la críticas continuas en términos de interés, ante la sospecha de que esta ambigüedad favorezca los intereses de los actores relevantes. Cuestión que significaría, de algún modo, que los dictámenes podrían contener grietas de significancia, que en la práctica supondrían una injerencia en la potestad de los Estados “no civilizados” o “subdesarrollados”, al negarse la capacidad de ejercer prácticas jurídicas autónomas y soberanas sobre sucesos acontecidos en sus territorios.

8.1.2 La expropiación de la potestad en forma de cláusula de expropiación indirecta.

Lo primero que se debe indicar respecto a esta cláusula, es que la expropiación indirecta no es un objeto de disputa novedoso en contexto de las RRII. Aunque es notorio que en la actualidad ésta ha ganado relevancia por su inclusión en tratados como el TLCAN.

Las primeras controversias en temas de expropiación indirecta datan de la segunda década del siglo XX⁴⁰¹. Sin embargo, el interés por esta cuestión se ha reavivado en los últimos 30 años, a raíz de las disputas que se produjeron entre los Estados de Irán y EEUU, debido a

⁴⁰¹ Los primeros casos que aludieron a la expropiación indirecta fueron: *Norwegian Shipowners Claims* (Nor vs EEUU) I. R. Int'l Arb. 1922. Laudo 307. Texto disponible en línea: http://legal.un.org/riaa/cases/vol_I/307-346.pdf; y el caso *Chorzow Factory* (Alemania- Polonia) 1927 P.C.I.J, Ser A, No.7. Texto disponible en línea: http://www.icj-cij.org/pcij/serie_A/A_09/28_Usine_de_Chorzow_Competence_Arret.pdf (Consultas realizadas el día 12 de abril de 2014).

la reforma política económica aplicada por Irán en 1979⁴⁰². En donde, de los más de sesenta laudos resueltos, la mayor parte obedecieron a expropiación indirecta (Heiskanen, 2003, pág. 178).

La fricción acontecida en torno a la expropiación indirecta nace a partir de una atribución concreta a la misma que señala que: esta cláusula faculta a los inversores de los países miembros a demandar a los Estados receptores - mediante los mecanismos de arbitraje inscritos en el los TTBII, AAIIR o APRI-, cuando éstos han aplicado medidas de orden interno que signifiquen un impacto en los intereses del inversor extranjero. No en la pérdida de su propiedad.

La cuestión señalada es muy relevante en términos de soberanía, puesto que la protección al inversor en estos casos ha sido acusada por incidir directamente en la capacidad del Estado para ejecutar su práctica de gobierno. Es decir, se indica que su aplicación incide en la soberanía interna, y más teniendo en cuenta que tratados como TLCAN incluyen una definición que amplía de que hechos pueden constituir un acto considerado expropiación indirecta (Been & Beauvais, 2003; Páez, 2006; Rodriguez, 2013).

Por ejemplo y por contextualizar, indicar que en el TLCAN puede ser origen de demanda por un acto de expropiación indirecta (Art. 1110 del TLCAN), una medida adoptada por un Estado soberano receptor de IED que suponga una alteración de “...cualquier ley, reglamento, procedimiento, requisito o práctica” (Art. 201), que incida en la en la propiedad o intereses de un inversor extranjero de un país miembro.

La amplitud de la competencia de demanda que presenta la cláusula en el tratado, implica que la capacidad decisoria futura de los Estados se vea desafiada por su adhesión al mismo, ya que en el momento que exista una IED que se pueda ver afectada por el ejercicio de gobierno en un sector concreto (ya sea medioambiente, salud, energía, etc...), ésta habilita a los inversores a ejercitar una denuncia como agente ante el Estado y éste último puede verse envuelto en una ola de demandas por regular su política interna (Brunetti, 2003). Y aunque la capacidad soberana este recogida en el derecho consuetudinario y, en principio, los Estados no deben ver disminuida su capacidad para definir y administrar sus economías, y el acto de expropiación es recogido como un “...componente esencial de su soberanía” (Rodriguez, 2013, pág. 33), la adhesión a un tratado que incluya esta cláusula así definida, así lo indica.

⁴⁰² Un análisis en profundidad en Heiskanen (2003).

El establecer los límites a la capacidad del Estado a partir de los intereses del inversor es una cuestión relevante de cara a entender qué reglas subyacen en la cláusula, y es por ello que se debe definir claramente que hechos constituyen una expropiación indirecta. Para ello resulta útil rescatar la definición dada por profesor Alejandro Faya Rodríguez (2013), en donde indica que se entiende por acto de expropiación indirecta:

“Un acto atribuible al Estado, de naturaleza extraordinaria o irregular, que interfiere sobre derechos de propiedad a una magnitud tal que deja dichos derechos inservibles, independientemente de que el dueño permanezca con la propiedad legal o posesión del bien” (Rodríguez, 2013, pág. 243).

La definición dada plantea un debate en torno a qué acciones puede o no puede ejecutar un Estado, en el ejercicio de regular sus políticas internas sin atender a un posible demanda, aunque su decisión afecte a las inversiones extranjeras. En atención a esta cuestión han sido enunciadas dos doctrinas que, en cierto modo, tratan de dar respuesta al debate contenido en el DI sobre injerencia de la práctica en la cuestión soberana.

Por una parte, la doctrina “*sole-effect*”, que se postula en favor de la protección del interés del inversor ante cualquier circunstancia— definida por Rudolf Dolzer y Felix Bloch (2003); y por otra, la doctrina “*policy-power*” — denominada así por Veijó Heiskanen (2003)-, que se alinea en favor del derecho del Estado a regular en su territorio, sin atender a cuestiones de orden privado externo y en línea con la clásica capacidad de policía atribuida al Estado para regular (Brownie, 1998).

Ante el debate indicado sobre la regulación de la IED, la doctrina de “*sole-effect*” señala como elemento crucial el efecto de la acción y no la intención estatal. Es decir, si a la expropiación indirecta es el resultado de una medida adoptada por el Estado, no será relevante para determinar su responsabilidad la intencionalidad en dirigir la acción a la IED concretamente (Dolzer & Bloch, 2003). Por el contrario, la doctrina de “*policy-power*” considera que si la intención del Estado es regular su propia normativa interna y no posee intención de dañar los intereses del inversor, el Estado está ejerciendo su labor de gobernar y ello no puede suponer, nunca, el reclamo de responsabilidad del inversor, ya que es un acto legítimo y soberano sobre su territorio (Heiskanen, 2003).

El dilema entre las dos teorías no ha logrado significarse con claridad en las sentencias emitidas, existiendo tribunales que se han postulado en ambos sentidos. En ocasiones han mostrado su favor a la doctrina del “*sole-effect*” (Ej.: casos *Stratton v TAMS-AFFA Consulting*

*Engineers of Iran*⁴⁰³; *Metalclad Corp vs Estados Unidos de México*⁴⁰⁴); y en otras contrariamente se han postulado en favor del “policy-powers” (Ej: casos *Methanex vs EEUU*⁴⁰⁵ o; el caso *Saluka vs República Checa*⁴⁰⁶); así como existen casos en donde el tribunal se muestra prudente, y no emite una nota general e indica que se debe atender a la particularidad de cada caso⁴⁰⁷.

El dilema que se refleja en el DI en cuestiones de expropiación indirecta, evidencia la tensión existente entre dos áreas claves en términos de soberanía: 1) el interés en proteger los derechos de los inversores y sus intereses; y 2) el interés de los Estados de asegurar el ejercicio de la soberanía para regular asuntos de índole interno (Weiner, 2003). A este respecto, por una parte hay autores que señalan que en la práctica de las RRII, el proteger las inversiones es un acto de madurez y solidez institucional y no deben los Estados actuar contrariamente a los tratados pactados (Vicuña, 2003); y por otra, otras posturas indican que se debe dudar de esta acción, ya que las asimetrías existentes en el origen y en la actualidad en las RRII entre los diversos agentes, permiten que unos se antepongan a otros, y las reglas establecidas en nombre del “bien común” y el propio devenir de su práctica opriman cada vez más y más la capacidad de los Estados. De hecho, en la propia práctica se van construyendo límites a las capacidades y en el espacio de inconclusión teórica y práctica, es en donde la inclusión de esta cláusula es observada como una señal inequívoca del incremento en la protección del inversionista, con el objetivo de promover en mayor

⁴⁰³ Así se recoge en las citaciones habituales de las demandas impuestas: “La intención de gobierno es menos importante que los efectos de las medidas en el propietario, y el modo de las medidas de control o interferencia es menos importante que el impacto real”- Traducción propia a partir de: “The intent of the government is less important than the effects of the measures on the owner, and the form of the measures of control or interference is less important than the reality of their impact” (Tippetts, Abbott, McCarthy, Stratton v TAMS-AFFA Consulting Engineers of Iran, Award No 141-7-2 (29 Jun.1984), reprinted in 6 Iran- U.S. C.T.R. 219, Pág 225-226, citado en Brunetti (2003, pág. 151)).

⁴⁰⁴ El tribunal dictaminó que será considerado expropiación indirecta: “...la interferencia incidental del uso de la propiedad que tiene el efecto de privar al propietario, en todo o en parte significativa, de la utilización o beneficio económico que razonablemente se espera de la propiedad, incluso si no es beneficioso para el Estado receptor”. Traducción propia a partir de: “... incidental interference with the use of property which has the effect of depriving the owner, in whole or in significant part, of the use or reasonably-to-be-expected economic benefit of property even if not necessarily to the obvious benefit of the host State” . (Metalclad Corp. v. United Mexican States, Award (ICSID (Additional Facility) Case No. ARB (AF)/97/1), 30 Aug. 2000), para. 107, reprinted in 16 ICSID REV.- FOREIGN INV.L.J. 168, 196 (2001 (Citado en (Brunetti, 2003, pág. 152)).

⁴⁰⁵ El tribunal dictaminó: “...como una cuestión de derecho internacional, una regulación no discriminatoria tomada por un propósito público, que es emitida bajo debido proceso y afecta, entre otros, a un inversionista extranjero o inversión no se considera expropiatoria y compensable...” (Sentencia citada en Rodríguez (2013, pág. 235)).

⁴⁰⁶ El tribunal manifestó: “Está ahora establecido en derecho internacional que los Estados no tienen la responsabilidad de pagar compensación a un inversionista extranjero cuando, en el ejercicio normal de sus poderes regulatorios, adoptan de forma no discriminatoria y en buena fe regulaciones que están dirigidas a atender el bienestar general” (Citado en Rodríguez (2013, pág. 235)).

⁴⁰⁷ En el caso *Sempra Energy International vs República Argentina*. ICSID Case No. ARB/02/16. Award of September 28, 2007, párrafo 285, el Tribunal dictaminó que: “...la opinión de este tribunal es que debe haber un equilibrio en el análisis, es decir, ha de tratarse de un análisis que alcance tanto a las causas como a los efectos de una medidas, a los fines de calificarla como expropiatoria” (Citado en Rodríguez (2013, pág. 232)).

cantidad el volumen de IED en condiciones aún más favorables que las que se contenían con anterioridad (Schneiderman, 2008). Ante lo cual, el Estado debe asegurar su ejercicio de gobierno y no permitir que diversas prácticas vayan en contra de la autonomía de su pueblo, si entiende que una regulación es positiva. Por el contrario, no se puede realizar la práctica de gobierno en base al interés del actor externo, aunque en el ejercicio de construcción política la ponderación pueda resultar como idónea, porque también puede resquebrajar en profundidad la idea de comunidad que refleja un gobierno de ciudadanos.

8.1.2.1 Evolución histórica de la expropiación Indirecta

En cuanto a la inclusión histórica de la cláusula en la CI, fue tras la IIGM, cuando en clave de respuesta a las medidas socialistas que promulgaban prácticas en favor de la apropiación del Estado de empresas, las expropiaciones indirectas ocuparon espacio en las agendas de los Estados (Weiner, 2003). Anteriormente, se había instituido internacionalmente el que un Estado no posee la obligación, de acuerdo al DI, de compensar por un acto expropiatorio, cuando ejercita su labor de *“police-power”*. Como de hecho lo indicaba la Carta de Derechos y Obligaciones Económicas de los Estados (1974) en su Art 2, donde dice que:

2. todo Estado tienen derechos de:

“Reglamentar y ejercer autoridad sobre las inversiones extranjeras dentro de la jurisdicción nacional con arreglo a sus leyes y reglamentos y de conformidad con sus objetivos y prioridades nacionales. Ningún Estado deberá ser obligado a otorgar un tratamiento preferencial a la inversión extranjera” (Asamblea General NNUU, 1974, pág. 56).

Con el paso del tiempo y debido a la presión ejercida por los inversores, la legislación internacional fue sufriendo una inclusión progresiva de la cláusula en los diversos textos que iban publicando diversas instituciones. Con anterioridad a 1974 se habían difundido postulados favorables a la inclusión de dicha cláusula. En 1961, los empresarios habían expresado su opinión en la *Harvard Draft Convention on the International Responsibility of States for Injuries to Aliens* elaborada por la CIACCI, en donde sí se incluyó en su articulado la prohibición de ejecutar expropiación indirecta⁴⁰⁸; más tarde ésta se incluyó en el *Draft*

⁴⁰⁸ La IL en su Art. 103 dice así: “La apropiación de la propiedad no sólo incluye una apropiación directa de la propiedad, sino también cualquier tipo de interferencias en su uso, goce o disposición de los bienes de modo que para justificar una inferencia del propietario en caso de que pueda este usar, gozar, o disponer de la propiedad dentro de un período razonable de tiempo después de la creación de tal interferencia”. Traducción propia a partir de: “...taking of property includes not only an outright taking of property but also any such unreasonable interference with the use, enjoyment, or disposal of property as to justify an inference that the

Convention on Protection of Foreign Property en 1967 de la OCDE, en donde se aludió a la expropiación indirecta en su Art 3: “...ninguna de las partes debe realizar ninguna medida privando, directa o indirectamente, de su propiedad a un nacional de otra parte...”⁴⁰⁹ (OCDE, 1967); ya en 1992 el Comité de Desarrollo del BM la incluyó en su informe *Guidelines on the Treatment of Direct Investment* (documento guía para los Estados en materia de IE en sus territorios) en su Art. 4, donde se dice que: “...un Estado no puede expropiar, o adquirir en su totalidad o en parte una inversión extranjera en su territorio o adoptar medidas que tengan efectos similares”⁴¹⁰; y en el decenio de los 90 destaca el Art. 13 del *Energy Charter Treaty* (1994) donde se establece que:

“Las inversiones de los inversores de una Parte Contratante en el territorio de otra Parte Contratante no serán objeto de nacionalización, expropiación o medida o medidas de efecto equivalente a la nacionalización o a la expropiación” (El Tratado sobre la Carta de Energía, 1994, pág. 33).

Se observa como la evolución sufrida, desde el punto en el que la Asamblea General de las NNUU defendía la capacidad de un Estado para reglamentar y ejercer su soberanía en su territorio, hasta la aparición de las cláusulas con la concreción establecida en el TLCAN y en otros tratados, indica un proceso discursivo en favor de la inclusión de la cláusula en los tratados.

En cierto modo, la evolución normativa recogida en este epígrafe se podría resumir en los siguientes puntos:

- 1) La cláusula limita claramente la capacidad de los Estados para ejercer la soberanía *de facto* en cuestiones que puedan dañar intereses de los inversores, bajo el argumentario de conllevar una demanda, no receptar inversión futura, quejas de otros Estados, etc...;
- 2) además, el proceso de institucionalización internacional de la regla, tiene origen en el reclamo de una de las partes involucradas: los inversores, y acaba formando parte de las recomendaciones de los OOI;

owner thereof will not be able to use, enjoy, or dispose of the property within a reasonable period of time after the inception of such interference” (*Harvard Draft* citado en Newcombe & Paradell (2009, pág. 329)).

⁴⁰⁹ Traducción propia a partir de: “No Party shall take any measures depriving, directly or indirectly, of his property a national of another Party...” (OCDE, 1967).

⁴¹⁰ Art. IV en *Expropriation and Unilateral alterations or Termination of Contracts*. Traducción propia a partir de: “A State may not expropriate or otherwise take in whole or in part a foreign private investment in its territory, or take measures which have similar effects” (BM, 1992).

- 3) ésta sitúa los intereses de los inversores por encima del interés general. Hecho que implica asumir como interés prioritario de un Estado la protección de la inversión;
- 4) y por último, su aplicación choca frontalmente con el hecho de que la autoridad de los Estados debe ser protegida, ya que la atribución al Estado es la de agente encargado de ejecutar la tarea de proteger el interés público.

En la actualidad, en la gran mayoría de los articulados de los tratados – ya sea éste un TBI o AIR- se incluye la excepción y la capacidad de ejecutar la acción expropiatoria si es de interés público. Por lo que uno de los debates actuales gira en torno a concretar, qué tipo de decisiones son aquellas en las que es aceptado el acto soberano del Estado que cause “daño” al inversor extranjero (Weiner, 2003). Y además, señalar que ante la inconclusión de la definición sobre cuándo se puede considerar que un hecho sea expropiación indirecta o regulación⁴¹¹, es ante lo que cabe preguntarse qué acciones constituyen o no un acto de expropiación indirecta. Dado que se asume que las acciones del Estado son de carácter soberano y se les supone que persiguen el interés público.

Sin embargo y a pesar de lo indicado en el último párrafo, se observa que mediante esta cláusula, las limitaciones mediante el acuerdo “voluntario” significan en el contexto internacional la instauración de un régimen de inversiones internacional, en el que el interés del inversor es expuesto como el interés conjunto (Schneiderman, 2008, págs. 64-65).

8.2 “Cláusula de supervivencia”. Más allá de los gobiernos.

Al igual que la cesión de competencias a un cuerpo de arbitraje externo se entiende como un acto voluntario del Estado, el hecho de rescindir voluntariamente éste y la consecuente cesión de competencia sería el acto que representaría igualmente la condición de agente soberano. Asimismo, se entiende que cuando un Estado opta por la rescisión de un tratado se debe conceder un plazo “apropiado” para que se ejecute la denuncia y las partes adecuen y regulen los posibles efectos que pudiesen conllevar el nuevo contexto. Para este cometido, la gran mayoría de los AII firmados entre Estados, que incluyen consentimiento al CIADI u otro ISDS, han dispuesto de una cláusula al efecto denominada “cláusula de supervivencia” (*survival clause* en inglés).

La cuestión que se acontece ante la presencia de esta cláusula es determinar ¿cuál es el periodo razonable para que en caso de que un Estado “soberano” denuncie un AII tenga

⁴¹¹ Para profundizar en este debate se recomienda la lectura de Dolzer & Bloch (2003).

que someterse a los acuerdos inscritos en el tratado y, por ende, a ser juzgado por un órgano al que ha decidido no ceder esa competencia en un futuro? Pues bien, en el régimen de regulación de IED bajo los AII sujetos, por ejemplo al CIADI, el periodo considerado “razonable” puede llegar hasta los 20 años. (UNCTAD, 2010). Aunque la media oscila entre los 10 y los 15 años⁴¹².

La presencia de la “cláusula de supervivencia” en un AII, implica que deba ser respetado el acuerdo en su total cobertura, hasta que haya pasado el periodo indicado en la cláusula. Este hecho, en principio se ajusta aquello firmado por las partes, pero sin embargo presenta un pequeño dilema que es relevante destacar. La situación compleja para el ejercicio de la soberanía por parte del Estado. Es decir, el denunciar de un AII por parte de un Estado posee una significancia mínima, atendiendo a efecto que posee la capacidad atribuida al Estado para ejercer su práctica de gobierno. Esto debido a que el resultado de su decisión, es decir, de su gobierno, puede que no se constate en un periodo “razonable”, y el Estado deba continuar operando bajo los términos contenidos en el acuerdo o tratado durante el tiempo que haya sido indicado en la “cláusula de supervivencia”. Se daría una situación en la que puede llegar a tener que gobernar respetando lo acordado en el AII durante 20 años una vez denunciado el acuerdo (UNCTAD, 2010). Significando este hecho, el que un Estado soberano en el que su sistema electoral disponga de elecciones de gobierno cada cuatro años, puede estar sometido a juicio externo sobre asuntos de competencia interna durante cinco legislaturas, una vez denunciado y expresado en no consentimiento a acogerse a un arbitraje externo- por ejemplo al CIADI-⁴¹³.

En este sentido, hay que señalar que existe un debate vigente en torno a en qué momento es en el cual el inversor no podría acudir a las cláusulas contenidas en el AII, en muchos casos referenciándose a los casos en los que haya disputa y arbitrio. En concreto, el análisis dispone de varios postulados que indican que: 1) a partir de la fecha de denuncia; 2) tras los seis meses de margen de acuerdo al Art.71 del Convenio de Washington; o 3) de acuerdo al Art. 72, en donde algunos autores interpretan que sólo se seguirán bajo el CIADI aquellas denuncias que estén en trámites (Fouret, 2008; Schnabl & Bedard, 2007); o 4) otros que consideran que la posibilidad de denuncia existe mientras el TBI esté vigente (Gaillard, 2007; Tietje, Nowrot, & Wachernagel, 2008).

⁴¹² Se observa este hecho en el informe que elabora la UNCTAD. Casos Ecuador y Bolivia (UNCTAD, 2010).

⁴¹³ Existen incluso algunos tratados que contienen cláusulas que indican que el tratado estará operativo hasta que las partes no lleguen a un acuerdo (Nota de pie num.12 en (UNCTAD, 2010)).

Este hecho posee una significancia elevada, ya que implica que la cesión de competencias soberanas en asuntos relacionados con la inversión excede de la relación contenida en la soberanía popular en los Estados, al menos, en cuanto a la periodicidad electoral que disponga un Estado por un parte; y por otra, en cuanto a que la voluntad del gobierno no es ejecutada por ese mismo gobierno. Con lo que por una parte, la capacidad de decisión en cuestiones de soberanía externa para establecer nuevos ejercicios en sus RRII se ve limitada; y en su soberanía interna, la capacidad para regular y enjuiciar hechos que impliquen en su territorio acciones ejecutadas a consecuencia de IED, se ven quebrantadas bajo la inclusión de esta cláusula en un AII⁴¹⁴.

Es muy relevante y pertinente indicar que, en términos de soberanía, esta cláusula, si bien se supone que se accede a la misma voluntariamente, se signifique su denuncia con un periodo que excede, por mucho, el cambio de gobierno en un Estado soberano.

En definitiva, resulta evidente que la capacidad de decisión sobre cómo se juzgan asuntos internos no debe superar un mandato electoral, puesto que si no la práctica de gobierno estará determinada por decisiones no soberanas. Y esta cláusula supera los periodos que se entienden “razonables”: los de gobierno.

9. Conclusiones

El análisis en torno a la evolución de la práctica y regulación de la IED en la SI, atendiendo a los diversos debates, justificaciones y posturas que han contenido su institucionalización como práctica política-económica internacional, revela, primeramente, la existencia de tres agentes implicados en la práctica: el Estado receptor, el Estado inversor y el inversor extranjero.

Asimismo, en la operativización de esta práctica se ha evidenciado como estos agentes son parte de un contexto, en el que su funcionamiento opera y se justifica en base a dos cuestiones elementales en términos de beneficios para las partes involucradas: por una parte, se ha indicado que esta práctica permitiría una mejora de las condiciones de vida de los Estados receptores; y por otra, proveería de un beneficio para la parte inversora

⁴¹⁴ En este sentido ha habido un caso como el de Ecuador que incluso ha declarado inconstitucional las provisiones arbitrales contenidas en más de seis TTBBII (China, Finlandia, Alemania, Gran Bretaña, Venezuela y EEUU), por no respetar la constitución del Estado aprobada en 2008 (Nota de pie 3 en (UNCTAD, 2010)).

(Estados e inversor), con lo que se mediante su ejercicio se produciría una situación de *win-win*, beneficiosa para todos los agentes.

A este respecto, la revisión documental de este capítulo, ha revelado que diversos estudios concluyen que no se puede afirmar con rotundidad que la IED produzca mejores condiciones de vida en el Estado receptor por su sola práctica. Los estudios recogidos indican que, si se entiende por mejora la reducción de las diferencias existentes en términos de PIB con los otros Estados, tomando los Estados como un conjunto, esto es cierto en un mínimo grado, y no se produce homogéneamente. Pero sin embargo, si se entiende que la práctica reduce las desigualdades entre los ciudadanos, hay que indicar que se afirma que este efecto no se ha producido, ni a nivel global, ni a nivel interno de los Estados. De hecho, este tipo de desigualdad se ha visto incrementado desde que la IED ha elevado su volumen y actividad desde los años 80. Además de esto, es relevante indicar que algunos de los estudios han revelado otra cuestión importante, al indicar que existe una relación entre la IED y la desigualdad: a mayor IED receptada, mayor desigualdad en el interior de los Estados.

En este contexto, el análisis de las motivaciones ideológicas que subyacen en la práctica de la IED, ha evidenciado como el concepto de desarrollo se ha ido incrustando en la justificación de la pertinencia de la práctica; así como de lo apropiado de ejecutar su protección en la SI desde mediados de siglo. De hecho, es pertinente señalar como la recapitulación de acontecimientos realizada en este capítulo, ha constatado que el discurso que operó en defensa de la IED en la primera parte del siglo XX, se alteró a partir de la aparición del término desarrollo en la SI. Si en la primera mitad de siglo, el centro del debate lo ocupó el derecho de protección que poseían los Estados sobre los intereses de sus ciudadanos en el extranjero, ya que se señalaban como intereses del Estado del nacional; en la segunda, el desarrollo irrumpió en este espacio apoderándose del debate teórico. Relevante en este aspecto es señalar como a partir de este desplazamiento en la justificación de la pertinencia de ejecutar la protección, el interés por la protección de la inversión se desplazó del agente emisor al agente receptor. Es decir, de estar el interés por defender las inversiones y su protección situado, primordialmente, en los agentes que invertían, a ser interés primordial para desarrollar sus políticas de aquellos que receptaban. Lo curioso de este cambio, es que el análisis realizado muestra como la primera mención a este interés protector para el fomento del desarrollo, no fue cosecha de los Estados receptores en el contexto internacional, sino que fue promovido por la parte de aquellos

que poseían el interés primario en la protección: los inversores. Concretamente destaca el papel desempeñado por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CIACCI), como evidencia el impacto de sus informes en el uso del lenguaje sobre temas de protección de inversión, en donde se ha señalado el destacado papel desarrollado por la Asociación de Derecho Internacional (*International Law Association* (ILA)).

Y es que el interés por la protección de los capitales de los inversores pertenecientes a los Estados civilizados o desarrollados, que eran los que realizaban e impulsaban la práctica en busca de maximizar su beneficio a partir del excedente disponible, se desplazó al campo de interés de los Estados en desarrollo, a través del fomento de una regularización de una normativa que protegiese las inversiones, para adquirir la categoría de desarrollado. En este sentido, el proceso de articulación de un mecanismo de protección de la IED, a partir de unos inversores que requerían que se promoviese la protección y seguridad de las inversiones en cualquier circunstancia, se significaba otro en el que los Estados receptores debían otorgar a la inversión una categoría superior a la de cualquier derecho de un ciudadano, agente estatal o decisión política que se adoptase como entidad soberana⁴¹⁵.

A este respecto, en el capítulo se recoge como el requerimiento de protección a la IED ha ido sufriendo una alteración profunda en los IISDDSS, desde que se comenzará a abordar la protección de su práctica en la SI. Si en las primeras disputas en torno a la defensa de las inversiones, el mecanismo que ejecutaba el reclamo se promovía a través del derecho diplomático y sus herramientas de negociación, recurriendo en última instancia al uso de la fuerza, el avance de los tiempos y la promoción e instauración en el contexto internacional del respeto por la soberanía interna de los Estados, ha significado que, impulsado por la institucionalización del desarrollo como idea y meta social de comunidad, así como por la producción de conocimiento aparecido en las diferentes publicaciones que han sido emitidas por Estados y organizaciones, se haya ido alterando el medio para solventar los conflictos entre Estados e inversores, y en la actualidad, además de la no necesidad de recurrir a la fuerza militar para solventar disputas, se hayan situado como IISDDSS en la SI diferentes agentes externos a los Estados. Hecho que constata y evidencia como, en términos de soberanía, un Estado puede verse involucrado ante un juicio en suelo no nacional en caso de alterar una ley interna sobre sucesos ocurridos en suelo nacional, ejerciendo la práctica de gobierno. Es decir, una acción que responda a su encomendado de

⁴¹⁵ Indicar que este debate es en la actualidad muy relevante en la SI. Sólo hace falta observar la situación de ALC o la UE y el reclamo de algunos Estados por alterar sus condiciones en el trato a la IED, pare percibir este hecho.

gobierno, en obediencia a su propia ciudadanía, puede verse recurrida si ésta interfiere en los beneficios de capital externo al Estado. Por lo que su capacidad de ejercer de soberano *de facto* se ve cuestionada en la práctica de gobierno diaria, y más teniendo en cuenta la presencia de cláusulas como la “*survival clause*”, que en su propio contenido puede incluir el que se rebasen las competencias soberanas, llegando incluso a cinco legislaturas en un Estado.

La institucionalización de este mecanismo ofrece dos lecturas. La positiva es que se institucionaliza la regulación de una práctica en la SI y se elimina la posibilidad de acudir a la guerra o eternizar conflictos. Suceso que, en circunstancias en las que reinase la participación en igualdad de condiciones, respondería a las demandas de los diversos agentes parte y se aceptaría éste como un medio de regulación beneficioso para las partes. Pero si la asimetría en términos de capacidades pudiese beneficiar a uno de los agentes involucrados, se evidenciaría una parcialización de la práctica mediante su la institucionalización de la regulación y, por lo tanto, la extracción de capacidad decisoria del Estado sería perjudicial para la práctica de gobierno.

El medio por el cual se ha institucionalizado esta práctica ha sido a través de la adopción de los AII y la inclusión en los mismos de mecanismos de arbitrio. Esta cuestión, una vez analizada, además de revelar la extracción de la competencia del Estado de juzgar de acuerdo a las leyes internas cuestiones que suceden en su territorio, ha significado la concesión de agente de DI a un inversor, situándole a la altura de un Estado en los IISDDSS, cuando anteriormente las disputas eran acontecidas entre Estados.

A raíz de esto el capítulo señala que los mecanismos de arbitrio ofrecen dudas acerca de su imparcialidad. El análisis ha mostrado que diferentes investigaciones indican que las resoluciones de estos cuerpos de arbitrio, por una parte, son más cercanas a las corporaciones, por diversas razones (puertas giratorias; costes de juicio; ideología; defensa de la propiedad privada por encima de otras cuestiones como DDHH, salud, derechos laborales, etc...); y por otra, han evidenciado cómo la ideología actúa como determinante en las resoluciones de las disputas en un gran porcentaje, y dada la existencia de cláusulas con un alto grado de ambigüedad en los AII, ésta determina que la resoluciones sean favorables a las costumbres de los Estados “civilizados” o “desarrollados” (occidentales). Debido a que en caso de no existir acuerdo, se acude a este derecho que tiene orígenes parciales.

Otra de las conclusiones es que la responsabilidad de la práctica no es compartida y los beneficios sí. Es decir, al haberse evidenciado que el desarrollo es la idea que ha poseído gran influencia en la justificación y condicionamiento para ejecutar la regularización de la práctica en términos ventajosos para el inversor, el que solo se haya instituido a una de las partes como agente responsable del objetivo de la práctica: el Estado, quedando el inversor en total despreocupación y no obligación, al no existir ninguna disposición o cláusula en los AII que responsabilice a los inversores en el cumplimiento de objetivos de desarrollo, implica que en caso de un buen funcionamiento los dos agentes resulten beneficiados, pero en caso de que se alcance el objetivo del desarrollo, solo haya un agente que se enfrente a las consecuencias.

Es por ello relevante indicar, que en el instante en el que la idea de desarrollo se ha establecido como meta social de los Estados independizados, éstos, en aras de alcanzar el objetivo, adopten los mecanismos que sean necesarios para su alcance, aunque la meta no sea obtenida a corto ni a largo plazo. Sin embargo, en el camino a esta meta se ha situado a la protección de inversor como aquel elemento de vital importancia para el “bien común”, y ello podría producir una situación de heteronomía de la voluntad, dado que las reglas adoptadas podrían implicar una situación en la que unos agentes estuviesen por encima de otros en nombre del “bien común”.

A este respecto y como se ha señalado, la falta de interés por la promoción de una reglamentación multilateral que ofrezca igualdad de condiciones a los agentes a la hora de realizar negociaciones en la SI, evidencia que se sigue operando en condiciones asimétricas, ya que la interacción tiende a favorecer al agente que posea la capacidad de incidir en la meta contenida en las ideas. Y de hecho, si esta idea es el desarrollo, aquel agente que posea la capacidad de promover el elemento necesario para este tipo de desarrollo: la IED, tendrá la capacidad de determinar la aplicación de la reglas. Lo que en este caso ha quedado evidenciado, ya que partiendo de un concepto de soberanía en el que los Estados son aquellos regulan la autoridad interna de su territorio, se ha pasado a un contexto en el que, desde postulados surgidos en instituciones compuestas por los inversores, se ha logrado determinar las condiciones internas en los Estados receptores que firman algún AII.

En estas conclusiones también hay que señalar la existencia de posturas contrarias a este proceso de regulación, tanto desde la sociedad civil como por parte de Estados. En este sentido, es relevante indicar que algunos Estados, incluso desarrollados como Australia,

están mostrándose contrarios a que se juzguen disputas acontecidas en sus territorios por tribunales externos, procediendo y promocionando la no firma de cláusulas que permitan este hecho en sus AII, al entenderlo como una substracción de la capacidad de gobernarse.

En definitiva, la última cuestión que se debe indicar es que al observar el recorrido por el cual ha ido institucionalizándose la regulación, se constata que atiende a la protección de los inversores e indica que la promoción de esta práctica encuentra en el origen ideológico más relevancia que en el interés, aunque también, puesto que la aplicación de la justicia en base a una superioridad “ética y moral” en aquello que se considera “civilizado” “desarrollado” etc... se inscribe dentro de los diferentes textos que han sido revisados. Por ello, aunque el que el resultado de las prácticas no atienda o sea elevado por encima de otras cuestiones, la finalidad de bien público o interés social ante la defensa de la propiedad o los beneficios de los inversores, conlleva a conjeturar en base a un DI sesgado, en el que poseen una mayor carga las ideas que el interés que pueda ser detectado en la práctica judicial.

PARTE III.

La tercera parte de esta investigación aborda el análisis de las ideas, de la articulación de discursos unitarios y de las justificaciones en torno a la pertinencia de constituir un ente regional en ALC, como mecanismo para hacer frente a la acción externa en términos de IED (aunque se citarán cuestiones referentes a la IEI por ser práctica relevante en los procesos).

En este espacio se analizará el origen y la constitución de ideas unitarias en la región de ALC. Esto debido a que, de acuerdo con el marco constructivista, las ideas son los elementos que determinan las acciones. Por ello se entiende pertinente analizar el origen y la evolución de las ideas impulsoras de la construcción de un ente regional, como medio necesario para actuar e incidir en el papel de la acción externa en suelo regional en términos de IED.

Este ejercicio será realizado utilizando las conclusiones expuestas en las PARTES I y II de esta tesis, en las que se han enunciado qué atributos requieren ser considerados en un proceso que pretenda promover la construcción de una comunidad con capacidad soberana en torno al papel de la IED.

Asimismo, indicar que el análisis de los procesos históricos tendrá como eje la exposición de aquellos elementos relevantes en la conceptualización de la soberanía, como son la identidad y la constitución de un órgano cohesionador, así como el territorio. A partir de ello, se indagará sobre aquellas prácticas que signifiquen la constitución o el impulso de alguna de esas tres subcategorías, en las que como expresión tenga significancia el papel ejercido por la IED.

Con el mismo marco analítico en esta parte se analizará la evolución de la disposición en el interior de la región para abordar un proceso de construcción de una entidad regional soberana, ya sea de un modo intergubernamental o supranacional, así como las capacidades regionales en términos de estructura global, con el objetivo de evidenciar las posibilidades de llevar a cabo el objetivo ideacional, y desvelar si se puede enunciar un proceso de constitución de soberanía regional en la actualidad.

En esta parte de la tesis también se analizará si las acciones y decisiones adoptadas, en torno al trato que se debe dar a la IED, han determinado el proceso de integración

regional, atendiendo concretamente al papel que ha ejercido la conceptualización del desarrollo en dicho proceso.

Para realizar el análisis se han elaborado dos capítulos. El Capítulo IV se centrará en los acontecimientos sucedidos desde los procesos de independencia, indicando y rescatando actores y actos relevantes que hayan significado o indicado la pertinencia de promover la constitución de identidad, la fijación de un territorio y la pretensión de crear un órgano cohesionador, en donde la IED haya sido un elemento articulador o relevante del proceso, en el espacio temporal que va desde los primeros procesos de independencia hasta la mitad del siglo XX, aproximadamente⁴¹⁶.

La segunda parte, el Capítulo V, atenderá a la investigación de cómo ha influido el trato a la IED en la construcción de mecanismos de unificación/integración regional. Centrando el estudio en analizar los diversos tratados y acuerdos institucionales que se han producido desde los años 50 hasta la actualidad, tratando de indagar y detectar en qué modo el trato a la IED ha determinado la evolución de los diferentes procesos, así como cuáles han sido, en el pasado, y son, en la actualidad, las variables a tener en cuenta.

⁴¹⁶ La decisión de acotar el periodo hasta mediados de siglo XX ha estado motivada, por el hecho de que la constitución de entidades supraestatales tras la IIGM significó la articulación del proceso integrador-unionista regional. Y en ese sentido las ideas de integración pasaron a lo que podría considerarse fase de pragmatismo regional. Es por ello que se entiende relevante analizar en qué grado esos procesos han atendido al papel de la IED en su configuración, así como el papel de ésta en los mismos.

CAPITULO IV. La acción externa como eje sobre el que se articula la unificación/integración en América Latina y el Caribe hasta mediados de siglo XX.

“Ponen la espada a los cuatro vientos, declaran la tierra del rey y entran a saco en los templos de oro. Cortés atrae a Moctezuma al palacio que debe a su generosidad o a su prudencia, y en su propio palacio lo pone preso. La simple Anacaona convida a su fiesta a Ovando, a que viera el jardín de su país, y sus danzas alegres, y sus doncellas; y los soldados de Ovando se sacan de debajo del disfraz las espadas, y se quedan con la tierra de Anacaona. Por entre las divisiones y celos de la gente india adelanta en América el conquistador; por entre aztecas y tlaxcaltecas llega Cortés a la canoa de Cuauhtémoc; por entre quichés y zutujiles vence Alvarado en Guatemala; por entre tunjas y bogotáes adelanta Quesada en Colombia; por entre los de Atahualpa y los de Huáscar pasa Pizarro en el Perú: en el pecho del último indio valeroso clavan, a la luz de los templos incendiados, el estandarte rojo del Santo Oficio” (Martí, 2005, pág. 26).

1. Objetivos del capítulo.

Hablar de un proyecto que aúne a los diferentes territorios de ALC en una unidad política-económica, no es una idea que se haya fraguado en lo que se podría reconocer como una época reciente. El tener conciencia de este hecho, recomienda que el análisis comience rescatando algunos de los sucesos acontecidos durante los procesos de conquista que pudieron influir y determinar el cómo se produjo la configuración territorial que sufrió la región, así como el desarrollo de las ambiciones en términos de unificación o vertebración, la evolución ideacional. Hechos que conjuntamente pudieron haber influido en los diversos procesos que han supuesto o sugerido una implementación de prácticas de empoderamiento regional, a través de un ejercicio de reclamo de soberanía.

Este primer contacto permitirá discernir en qué grado estos procesos han podido ser partícipes o motivadores de la construcción de identidad regional, del sentimiento de pertenencia, así como motivado que en la actualidad se haga alusión a un proceso de unificación/integración de ALC, o se enuncie Latinoamérica, como un proyecto anhelado en la región en disputa continua por aunar capacidades, cargado por diversos factores que determinan el desarrollo del proceso (anhelos nacionalistas, influencias externas, divergentes modelos económicos, pluralidad étnica, etc...).

Por lo indicado, uno de los primeros objetivos en este capítulo será el analizar el origen y la evolución del reclamo unionista. Lo que permitirá profundizar en el análisis de las diversas variables y coleccionar información necesaria para entender los pilares sobre los que opera el propio proceso identitario, así como permitirá identificar el impacto del propio proceso en la configuración territorial de la región y en su ambición de constituir una organización común que actúe como órgano soberano. Ya que, como se evidenció en el Capítulo II, para los territorios “no europeos” la soberanía no ha sido la consecuencia de un proceso de configuración del poder en el interior de los mismos, sino que ha debido ser adquirida. Y el reconocimiento de ello y la constitución de identidad en torno a este elemento no ha sido tarea fácil.

Una vez identificado y señalado el comienzo y aquello que ejercerá como base de análisis, este capítulo analizará aquellos hechos, declaraciones y demás eventos, que desde la perspectiva de la soberanía indiquen las corrientes de pensamiento que hayan constituido teoría argumental y reivindicativa, del sentido y conveniencia de la construcción de un ente representativo de la unidad regional en torno a una variable concreta: el papel de la IED en la región.

El periodo a analizar ha sido acotado por diversos motivos. Se ha seleccionado un espacio de tiempo que oscila desde los procesos de independencia hasta 1950, al considerar que tras este periodo aquellos procesos que han tomado mayor protagonismo, atendiendo al objeto de estudio (el papel de la IED), han sido los diferentes proyectos de institucionalización de prácticas regionales a través de diversos organismos de cobertura regional. Significándose las ideas en organismos con ambiciones y mecanismos integradores que serán analizados en el siguiente capítulo.

Por último, indicar que, teniendo presente el trabajo la presencia de diversos proyectos contrarios a la unificación, ya fuese por intereses nacionalistas y otros de diverso calado, en este espacio no se presentarán los mismos, ya que no son el objeto de estudio y haría falta al menos otra tesis doctoral para cubrirlos en profundidad.

2. Primeras percepciones unitarias de región desde el exterior: el Nuevo Mundo, los Derechos de Conquista en Francisco de Vitoria, y la legitimación y reconocimiento externo de identidad.

Es pertinente comenzar indicando, cuando el objetivo se centra en el análisis de los factores que incidieron en la ordenación territorial de ALC, que desde los inicios de la conquista de lo que se consideró el Nuevo Mundo por parte de los Imperios, **todo proceso de configuración del territorio estuvo basado en una apropiación material de tipo privado**- avalada esta por el Papa en nombre del cristianismo- (Bergalli, 1996).

Fue en este contexto, en el que el aval teórico se significó como uno de los grandes debates en la agenda de los Imperios, ya que, aun con la superioridad militar que en un principio presentaban, el ejercicio de invasión requería y demandaba cierta legitimación teórica.

Es relevante señalar ante lo indicado, que en los inicios del proceso, el mecanismo de conquista y el uso de las prácticas que fuesen consideradas apropiadas, por mucho sufrimiento que conllevara en sus receptores, encontró su justificación en el argumento de que era un deber cristiano el convertir “por su bien” a los “barbaros y salvajes”, los cuales estaban “privados de la razón” y realizaban actos “manchados por muchos vicios” (Sepúlveda, 1941, pág. 120), al cristianismo y de este modo, en una actitud bondadosa, se les ayudaría alejándolos de la vida de pecado⁴¹⁷.

“Son llamados, pues, simplemente bárbaros los que están faltos de razón [...] Tales gentes, por Derecho Natural, **deben obedecer a las personas más humanas, más prudentes y más excelentes para ser gobernadas con mejores costumbre e instituciones**; si, previa la admonición, rechazan tal autoridad, **pueden ser obligadas a aceptarla por las armas**; una tal guerra será justa por Derecho Natural, según enseña Aristóteles y Santo Tomás” (Sepúlveda citado en Nota 4 en Ferrajoli (2004, págs. 157-158) [**Negrita propia**].

De este modo, desde el primer contacto entre los países colonizadores y el territorio de ALC, se evidenció el cómo los pobladores que habitaban en el considerado Nuevo Mundo eran desprovistos de su condición de ciudadano - o cualesquiera que fuera la figura jurídica equivalente en su organización social -, por medio de los llamados títulos de legitimación⁴¹⁸. Los cuales actuaron como argumentos morales que legitimaban las acciones de los

⁴¹⁷ Palabras de Juan Ginés de Sepúlveda (1941).

⁴¹⁸ Estos títulos habían sido heredados por el Imperio español (sin ningún cambio conceptual destacable) de las épocas medievales (Bergalli, 1996).

colonizadores y, a su vez, deslegitimaban a los habitantes de este territorio de sus derechos sobre ellos y sobre sus propios destinos.

Los primeros títulos que “legitimaron” la invasión utilizaron como argumentos justificadores dos concepciones de la realidad, que entendían les hacía valedores de la acción. Por una parte, el Imperio español se atribuyó la potestad de proceder a la ocupación de tierras descubiertas, en base a la concesión contractual de los indios al Rey de España- recordar a este respecto que les obligaban a firmar un documento que ni entendían-; y por otra, puesto que el Imperio español actuaba en nombre de la soberanía universal del Imperio y la Iglesia, ya que las bulas de Alejandro VI del 3 de mayo de 1493 habían donado y concedido a los Reyes Católicos de España el pleno derecho de todas las tierras descubiertas y por descubrir hacia occidente⁴¹⁹ (Bella, 1993).

En la configuración geográfica de la región, la disposición de las bulas tuvo gran influencia en América Latina, ya que las mismas determinaban el papel de los actores en el ejercicio de conquista, explotación y apropiación, indicando los territorios en los que actuarían los Imperios de Portugal y España en el Nuevo Mundo. Cuestión que fructificó mediante la implementación de relaciones diplomáticas y la firma del Tratado de Tordesillas (1494), en donde se concretó la delimitación territorial exacta que en el Nuevo Mundo cada Imperio podía explotar.

Con el proceso de conquista en marcha, las prácticas colonizadoras despertaron cierta crítica en diversos círculos y se requirió un análisis en profundidad sobre la legitimidad de los títulos. La tarea principal consistió en analizar si la conquista era una acción “justa” o “injusta” de acuerdo a derecho.

En este debate jurídico y teológico destacaron como sedes de fructificación intelectual las escuelas de Salamanca, Valladolid y Madrid⁴²⁰. El ejercicio analítico fue muy relevante y originó que se elevaran las dudas sobre la legitimidad de la práctica conquistadora,

⁴¹⁹ Las bulas Alejandrinas han tenido una importancia suprema en toda evolución del derecho en la región, y como indica Zorráquin Becú (1907): “Podemos sostener que el derecho elaborado progresivamente para las Indias deriva en sus instituciones fundamentales de las bulas alejandrinas, como la semilla bien plantada da vida al árbol frondoso y corpulento” (Citado en Bella (1993, pág. 371)).

⁴²⁰ En estas disputas adquirió una relevancia suprema la figura de Bartolomé de las Casas, que a través de sus encuentros con los encomenderos en 1542 en el Consejo de Indias, en presencia de Carlos V, fue manifestando su posición contraria a los derechos de conquista y a las prácticas llevadas a cabo por el Imperio. Lo que derivó en 1547 en proposiciones formales contrarias del fundamento jurídico, ya que según él violaban sistemáticamente todo precepto cristiano. Esta acción originó uno de los debates de mayor notoriedad con Juan Ginés de Sepúlveda en 1550 (Ferrajoli, 2004, pág. 159).

evidenciándose la dudosa solidez teórica y cierta falta de consistencia jurídica que poseían los mencionados títulos. Lo que, en cierto modo, provocó que el Imperio se viese “obligado” a elaborar una nueva teoría y a formular preceptos jurídicos que se apoyasen en una base doctrinal novedosa, en la que se justificase de un modo jurídico-político-teológico la legitimidad de la acción.

2.1 El impacto de Francisco de Vitoria. Reformulación teórica, misma praxis.

En el ejercicio crítico analítico destacó la figura académica de Francisco de Vitoria, como el agente que, con mayor grado de pertinencia, desarrolló una teorización sobre bases jurídicas modernas y logró un mayor impacto, tanto por la transformación legitimadora de la acción, como por sus aportes que, en cierta medida, otorgaban un reconocimiento de agente al Nuevo Mundo.

El autor, considerado uno de los padres del DI, mediante un análisis de los argumentos legitimadores que habían sido utilizados de acuerdo a derecho⁴²¹, observó ciertas irregularidades y en aras de solventarlas formuló nuevas bases de legitimación contraviniendo las aplicadas anteriormente. En sus *Relectiones de Indis recenter inventis* (1539) elaboradas en la Universidad de Salamanca, formuló la que es considerada primera doctrina orgánica de los derechos naturales, ya que articuló su propuesta mediante la proclamación de derecho universales (Ferrajoli, 2004).

Francisco de Vitoria deslegitimó:

- a) El *ius inventionis* o descubrimiento, manifestando que eran los indios los que debían sentirse “descubiertos” *non plus quam si illi invensissent nos*;
- b) la idea de un dominio universal por parte del Emperador y el hecho de que este se podía apoderar de cualquier tierra;
- c) la universalidad del poder del Papa;
- d) la consideración de “infieles” a los indios, puesto que éstos no podían ser infieles a algo desconocido (añadiendo que la propiedad no tenía cabida en la ecuación);

⁴²¹ Véanse argumentos a favor de la conquista en Sepúlveda (1941). Autor que fue uno de los máximos exponentes de la defensa de los títulos.

- e) el hecho de concebir como pecado el rechazo de los “indios” a recibir la ley de cristo;
- f) el juicio de los supuestos pecados cometidos por los aborígenes por parte de los cristianos;
- g) la sumisión voluntaria de los indios;
- h) y la supuesta concesión hecha por Dios a los españoles.

(Vitoria, 1960, págs. 686-697).

En su obra, Vitoria rebatió todas las bases en las que se apoyaban los argumentos utilizados durante la conquista, considerando los primeros títulos de épocas medievales, e ilegítimos en ese proceso. Las críticas aquí recogidas por Vitoria, constituyeron el paso previo a, y actuaron como base de, la elaboración de los que él entendía como únicos títulos legítimos de conquista. Y mediante un ejercicio crítico, Vitoria elaboró un nuevo articulado legitimador de la conquista en el que ya aludía a los derechos universales como elemento justificador de la acción.

Vitoria legitimó:

- a) La “*communitas orbis*”, **una concepción del orden mundial como sociedad natural de Estados soberanos, libres e iguales**;
- b) los derechos naturales o derecho de gentes, son aplicables a todos los pueblos y Estados, ya que Vitoria entendía a la humanidad entera como un sujeto de derecho moral. Indicaba asimismo, que la humanidad era en su conjunto una persona moral, un todo y, por lo tanto, sujeto de derecho en todo el mundo- lo él indicó como un *totus orbis* (todo el mundo)-.
 - a. Los derechos aplicables a todo el mundo eran según Vitoria:
 - *Ius comminationis*;
 - *Ius peregrinandi y degendi*;
 - *Ius commercii et ius migrandi*.
 - *Ius praedicandi et annuntiandi Evangelium* (Este último solo aplicable para ciudadanos cristianos);

- c) La formulación y defensa de estos derechos sirvieron para legitimar la práctica de Guerra en todo el mundo, lo que conllevó a Vitoria a reformular la doctrina de la “Guerra justa”⁴²².

*A partir de (Ferrajoli, 2004, pág. 128).

El ejercicio crítico que realizó Vitoria derivó en una teorización y promulgación de la existencia de otros títulos “legítimos”, con los que el Imperio podría, en esta ocasión, justificar con un poco más de rigor, y de acuerdo a derecho moderno, su acción e injerencia en el considerado “Nuevo Mundo”. Esto se debió a que, en este caso, la teorización no se apoyó únicamente en la gracia providencia de Dios, la expansión del cristianismo o únicamente en la superioridad moral de los invasores, que eran aquellos argumentos en los que se apoyaba la legitimidad. Sino que la legitimidad tras Vitoria se sustentó a partir de una construcción de orden natural, utilizando postulados antropológicos del derecho positivo, aplicado con universalidad. De hecho, de esta reflexión surgió una aportación relevante a la SI, al hacer referencia al conjunto de la humanidad como un sujeto de derecho, indicando que, de alguna manera, el mundo es a su vez un Estado. En donde, si los Estados poseen su derecho constitucional y su derecho interno, el mundo al ser universal también está sujeto a derechos naturales, al ser en cierto modo una persona moral. Cuestión que definía Vitoria en latín como: *totus orbis* (todo el mundo). Concepción que se vio reafirmada al ser evidente que Vitoria incluyó principios del DI, articulados con gran brillantez, en su postulado⁴²³. Lo que le sirvió como base teórica para constituir su armazón teórico.

Utilizando como base del postulado vitoriano la existencia de un derecho natural universal, el modo por el cual Vitoria legitimó el derecho de conquista, aun reconociendo la existencia de un mundo lleno de Estados, se basó en una legitimación de la acción apoyada en la superioridad moral. Ya que éste presuponía que en las tierras Europeas sí se había logrado institucionalizar el derecho natural “correcto”. Esta conclusión servía como justificación, de algún modo, de las acciones contra aquellos que no acatasen los principios de “DI europeo” y, por lo tanto, se situaba como un deber de los agentes defensores del derecho “universal” el obligar a las sociedades no respetuosas con el mismo, considerando que su injerencia se sustentaba en una causa legítima. Era deber invadirles y hacerles entrar en “razón” a través del uso el medio que fuese requerido.

⁴²² Para profundizar en la evolución teórica de la Guerra Justa se recomienda leer M.Reichberg, Syse, & Bedgy (2006).

⁴²³ Véanse Vitoria (1960[1539]), Viejo-Ximénez (2004) o Schmitt (1949).

Es decir, la articulación de los argumentos expuestos por Vitoria invitan a una comprensión del comportamiento de los agentes, dado que en aquel contexto, en defensa del derecho universal, los agentes- como señala Ferrujoli (2004), “... en ausencia de un tribunal superior, sus razones sólo pueden ser defendidas por medio de la guerra...” (Ferrajoli, 2004, pág. 130), si los receptores del derecho natural en el Nuevo Mundo no lo entienden como tal.

Por otra parte, el hecho de que Vitoria estableciese la sociabilidad del hombre terrenal como fenómeno natural, para la elaboración de sus postulados y justificar la conquista (*Ius comminationis*, *Ius peregrinandi y degendi*, *Ius commercii et ius migrandi*), situaba a los pueblos en la obligación moral, por ser un hecho natural, de comunicarse afirmando que “La amistad entre los hombres... parece ser de derecho natural, y es contrario a la naturaleza el **rechazar la compañía de hombres que no hacen ningún mal**” (Vitoria, 1960, pág. 708) **[Negrita propia]**. Vitoria alegó como razón de conquista el que un agente del mundo no accediese a la comunicación, por lo que cualquier acto bélico a este respecto también estaría basado en la praxis del derecho natural⁴²⁴.

Es evidente, que aunque su argumentación gozaba de una mayor elaboración teórica, Vitoria no se desligó claramente de los postulados que hasta la fecha habían compuesto la legitimación. Dado que, aunque eso pretendiese, al igual que lo habían hecho los títulos considerados ilegítimos por él, justificó el derecho de intervención de los Imperios en caso de que se considerase el uso de formas de vida pertenecientes a la categoría determinada por los Estados europeos: *los barbaros*.

“...otro título puede ser la tiranía de los mismos bárbaros o las leyes tiránicas contra los inocentes, como las que ordenan el sacrificio de hombres inocentes o la muerte de hombres sin culpa para comerlos” (Vitoria, 1960, pág. 721) **[Negrita propia]**.

Pero aún con el ejercicio de teorización que realizó Vitoria, la superioridad moral que atribuyó a Europa es perceptible claramente, por ejemplo, al observar lo indicado en el párrafo anterior, ya que entre los derechos de conquista Vitoria incluyó cuestiones como el *derecho de voluntaria elección de soberanía por parte de España* y el derecho de predicar el evangelio, como derechos de los Estados “civilizados” que debían contar con la colaboración

⁴²⁴ En cierto modo, este tipo de argumentación podría asemejarse a lo que hoy se denominaría una “injerencia humanitaria”, cuando se actúa militarmente al cobijo del Capítulo VII de la Carta de las NNUU. Véase NNUU (1945).

recíproca de los colonizados, en aras de promover su conocimiento y apropiación de los derechos universales. Es decir, la categorización incluía un otorgamiento de capacidades para hacer o ser. Unos sabían cómo hacer y ser, los civilizados; otros no sabían, los barbaros.

Asimismo, y dado que la apropiación y el comercio eran una de las cuestiones que mayor relevancia tenían en la conquista, Vitoria también incluyó los *Títulos justos de navegación y comercio* entre los títulos de legitimación. En éstos incidía en que los Estados “civilizados” debían gozar de libertad para comerciar y negociar con el Nuevo Mundo, indicando que estos últimos no debían negarse por derecho natural a la práctica. En caso contrario a la praxis enunciada, la fuerza estaría justificada.

En cierto modo, los títulos obedecían a una idea concreta que poseía Vitoria sobre cuál era el objetivo de una sociedad: el perfeccionamiento del orden y el gozar de autosuficiencia – podría asimilarse a un desarrollo en la actualidad-. Por lo que la doctrina de Vitoria fue muy relevante de cara a entender el derecho de conquista, ya que más allá del reconocimiento a un estado de derecho en los propios Estados, estableció en sus escritos las bases de aplicación mundial de los derechos universales, cuando hizo referencia a que la humanidad entera era una persona moral representativa de todo el género y, por lo tanto, sujeto de aplicación de derecho. De hecho, es apreciado en Vitoria que a partir de esa percepción entendiese como natural la igualdad entre los hombres, puesto que todos eran sujetos de derecho. Claro, hombres civilizados.

“[Dios]. Sólo al hombre, concediéndole la razón y la virtud, dejó frágil, débil, pobre, enfermo, destituido de todos los auxilios, indigente, desnudo e implume, como arrojado de un naufragio (...) Para subvenir, pues, a estas necesidades, fue necesario que los hombres no anduviesen vagos, errantes, y asustados, a manera de fieras en las selvas, sino que viviesen en sociedad y se ayudasen mutuamente” (Vitoria, 1960, págs. 154-155).

En todo caso, la construcción jurídica-política que realizó Vitoria, en la que se reunían todos los requisitos que parecían presentar lo que podría ser visto como una comunidad universal de naciones, significaron claras aportaciones a las bases fundamentales para la construcción del DI. Puesto que, aunque el autor no llevase a cabo una reflexión específica sobre la composición y funcionamiento de dicho derecho, sí existen en sus postulaciones todos los elementos que justificaban su existencia. Pero sin contar, claro está, con el apoyo y consentimiento de las partes, sólo de una parte.

2.1 Impacto en América Latina y el Caribe. Ciertas connotaciones que indicaban el reconocimiento del Nuevo Mundo como agente internacional.

La construcción teórica que elaboró Francisco de Vitoria se encuentra relevante para los fines de este estudio por varias cuestiones. La primera cuestión sería que, a partir de la teorización sobre el DI “europeo”, Vitoria instituyese todos los demás títulos y dibujase un contexto en el que, aun con una doctrina que señalaba la igualdad entre los hombres como derecho natural, se establecía una premisa ontológica anterior a la igualdad: la moralidad. Es decir, una relación en la que una de las partes determinaba la idea de aquello que está bien o mal y, por ende, una categorización del comportamiento en un contexto en que se permitía suprimir el respeto por todo tipo de teorización posterior a la premisa, al estar en todo momento la acción sujeta a la primera indicada: la moral.

Una segunda cuestión relevante es que, al reconocer Vitoria la existencia de un mundo lleno de Estados, aun otorgando el derecho de quebrantar su capacidad de gobernarse si alguno no cumplía con el “DI europeo”, esto significaría, en primera instancia, un reconocimiento de *facto* de territorio e identidad al Nuevo Mundo, al que alude como un único ente en su obra. Asimismo, se deduce de lo indicado que, en el momento que este Nuevo Mundo adquiriera, ya sea por obligación o por elección los valores del “DI europeo”, el territorio considerado Nuevo Mundo estaría libre de opresión, puesto que la Guerra no estaría justificada. Es decir, pasarían a ser seres civilizados y, por lo tanto, sujetos de derecho.

Como tercero hecho señalar que, una vez que la guerra no estaría justificada y ya que según Vitoria la propia existencia determina la necesidad de asociación, como de hecho se refleja en todo tipo de organización humana, ya sea en nivel micro o macro (pueblo, ciudad, Estado o CI), la tendencia y necesidad de agruparse incentivará la asociación de sus miembros en busca de adquirir el control de sus decisiones como agente. Por lo que, de acuerdo a Vitoria, en este espacio se crearán reglas de convivencia que originen el cómo y el modo en el que se produce la interacción entre los individuos en una comunidad y, por lo tanto, la constitución de las bases de la comunidad política.

Cuarto, como una Comunidad es construida a partir de la tendencia natural a la comunicación y como primer objetivo, según Vitoria, tiene el articular mecanismos de

protección o defensa, la articulación y cohesión comunal conducirá a una normativa protectora de sus intereses.

“...la sociedad es como si dijéramos una naturalísima comunicación y muy conveniente a la naturaleza. Aunque los miembros de la familia se ayuden mutuamente, una familia no puede bastarse a sí, sobre todo tratándose de repeler la fuerza y la injuria” (Vitoria, 1960, págs. 156-157).

En este sentido, según indica Ferrujoli (2004), la aportación de Vitoria significó que “...la afirmación de aquellos derechos ofreció a Occidente la legitimación jurídica de la ocupación del Nuevo Mundo y después, durante cinco siglos, de la colonización y la explotación de todo el planeta” (Ferrajoli, 2004, pág. 32), ya que la idea de superioridad moral y religiosa eliminaba cualquier otro precepto.

Si bien su nueva legitimación mejoró en ciertos aspectos los derechos del conquistado, el justificar la injerencia se apoyó en la creencia de ser superior moralmente, sustentando la ideología particular al promocionar y justificar la intervención en base a la cuestión moral del perfeccionamiento y el orden. Articulación que, en cierto sentido, es una cuestión que se ha repetido en ALC durante y desde que la intervención externa se abrió camino en la región. Es decir, todas las teorías que han justificado la acción exterior son expuestas como apropiadas, beneficiosas y necesarias para la adopción de una vida civilizada/evolucionada/desarrollada en la región (Sunkel, 1973).

En definitiva, se podría deducir que el debate que ha operado en la construcción de la región ha tenido como pilares los cuatro preceptos indicados por Vitoria. Es decir, en el camino a la autosuficiencia que ambiciona toda comunidad, la región se ha topado desde las épocas de colonización con: a) el orden establecido por el exterior en su proceso de construcción de agente regional; b) un proceso de apropiación de la moralidad externa; c) el desafío de organizar la asociación de los diversos agentes; y d) conjuntamente con la necesidad de adquirir capacidades para operar en la construcción de elementos que permitan la defensa de sus intereses y la manifestación de su identidad. Por lo tanto, ALC ha vivido en un proceso de búsqueda de autosuficiencia regional que ha requerido, en cierto modo, el establecer un orden propio.

3. La región tras la herencia imperial: factores que potenciaron la unidad y la separación.

Si bien el proceso colonizador en la región produjo una división territorial, debido a la partición que firmaron los Imperios portugués y español en Tordesillas, las diferentes configuraciones actuales que presentan la región parecen encontrar respuesta en una clara diferencia de la *praxis* ejercida por uno y otro Imperio. A este respecto, señala Roberto Bergalli (1996) que la relación colonia-metrópoli estuvo altamente determinada por las relaciones comerciales y que éstas han sido factor relevante en la configuración de los límites territoriales, que devinieron en los Estados que, con mayor o menor exactitud, se conocen actualmente tras los procesos de independencia.

Por una parte, al analizar el proceso sufrido por los territorios de dominio hispánico se evidencia que, aunque la corona española en la época perseguía aumentar y reafirmar su grandeza y el reconocimiento internacional, las operaciones comerciales fueron las que determinaron el comportamiento de la corona. Esto fue debido a que en este periodo los reinados europeos, con los que rivalizaba España, basaban la medición de sus logros en torno a qué impacto tenían sus hazañas en su competitividad comercial. Esta carrera, en términos de rivalidad imperial, incidió en que la competitividad se situase como el factor relevante y en torno al que giraron las decisiones de la corona Española en lo referente a la política exterior. Hecho que se evidencia al analizar la política económica que fue practicada, y ver que el Imperio optó por la adopción de una práctica político-mercantilista, caracterizada y promovida por los intereses conjuntos de burguesía y gobierno, como era habitual en los Estados europeos (Smith, 1996, pág. 78). Sin embargo, el caso español presentaba particularidades y la asociación entre los diversos agentes no era similar a la corriente general del siglo. Ésta se había fraguado entre un poder monárquico y una nobleza nacional militar y clerical, que poseía intereses económicos en otras partes de Europa (Bergalli, 1996, pág. 191). Es decir, España como Imperio poseía un carácter más nobiliario y absolutista que los Estados europeos. Lo que incidió en que la prolongación de la corona en tierras latinoamericanas se produjese de un modo diferente a la ejecutada por Portugal.

La corona española estableció mecanismos de mercantilización, en donde las actividades económicas estaban supeditadas a la decisión y supervisión de los funcionarios públicos. Práctica burocrática que determinó el que se estableciese un sistema operativo de tipo

vertical entre la corona y las diferentes colonias, en la que a los agentes representativos, los virreyes, se les atribuyó una capacidad de maniobra muy limitada, ya que para la mayoría de la toma de decisiones se precisaba una autorización de la corona⁴²⁵.

Pero al igual que la estructura otorgaba poca capacidad de decisión a los territorios, el verticalismo administrativo que caracterizó la práctica político-económica de la corona española, también fue causa de que las regiones (virreinos) tuviesen un muy bajo índice de interrelación. Lo que provocó y facilitó el que éstas adquiriesen ciertas capacidades para las prácticas diarias de gobierno, las cuales posibilitaban el fraccionamiento del Nuevo Mundo. Es decir, el subdividir en diferentes puntos la capacidad de ejecución de las decisiones del Imperio, dio como resultado que en el momento que se suprimiese la sumisión a las órdenes de la corona, una vez comenzado la fracturación relacional, los órganos administrativos, que no poseían una red común unificada en toda la región colonizada, contasen con capacidad para desarrollar prácticas como agentes independientes (Wiarda, 1997).

Por el contrario, evidenciándose la diferencia en la *praxis*, el Imperio portugués había aplicado una metodología de relaciones comerciales Imperio-colonia basada en la horizontalidad. Hecho que, lejos de mostrar despreocupación por las prácticas políticas del territorio conquistado, significó que el área territorial funcionase como un solo ente (Brasil). Ya que debido a la horizontalidad en sus relaciones, éste contaba con un centro encargado de coordinar y mantener relaciones con el Imperio, y ese hecho permitió el establecer relaciones entre todos los puntos de la región colonizada, sin que fuese necesario el permiso del Imperio para realizar esas operaciones. Por lo que el sistema aplicado legaba una estructura unitaria de funcionamiento y hacía complicado que en caso de independencia se agrietase el territorio en agentes particulares (Wiarda, 1997; Bergalli, 1996).

El análisis de la práctica burocrática evidencia como el diferente modo en el que los Imperios ejercieron su gobierno, en donde el proceso de colonización portugués partía de una concepción más empresarial que los virreyes españoles, ha determinado la presencia de una herencia burocrática en la región que se ha plasmado de forma diversa con el paso del tiempo. Significando que mientras el legado, en número total de Estados, del Imperio

⁴²⁵ La prohibición se levantó con las reformas borbónicas del siglo XVIII (Bergalli, 1996).

español asciende a casi veinte Estados, el Imperio portugués ha dado como resultado un único Estado.

De hecho, el disocio de las partes pertenecientes al Imperio español se produjo, en gran medida, a partir de la existencia de polos económicamente capaces de articular sus propias prácticas de autosuficiencia durante los procesos de independencia, al dejar de lado en la fijación de la construcción de Estados particulares, únicamente, la unión existente en la parte del Imperio español. Configuración que, sin embargo, aunque gestionada desde España, sí había legado en la unidad su estructura y su gestión.

Además de lo indicado, otra cuestión que incentivó la división territorial fue la metodología aplicada por parte del Imperio español. Ésta, que no había sido rígida durante los virreinos, respondía a las particularidades de las diversas zonas. El Imperio entendía que no se trataba de aplicar un solo modo de gobernar a diferentes regiones con particularidades propias, por lo que las capitanías se amoldaban a las características particulares de la región y de cada área en su práctica política.

En definitiva, la praxis política incentivó la articulación de los movimientos independentistas particulares en las diferentes áreas, con mayor facilidad que otros procesos independizadores. Aspectos que, lejos de parecer apropiados para el asentamiento de una unidad en el tiempo, llevaban inmiscuida una simbología de aquello que predominaba en el comportamiento de los colonizadores españoles y portugueses, ya que los Imperios en ALC operaron basándose más en una motivación de universalidad espiritual y religiosa que comercial utilitaria. Dado que esta última estaba caracterizada por poseer sistemas rígidos, con una imposición estricta de mecanismos que fijaban sus metas en la producción, sin atender a otro tipo de cuestiones, y que era la práctica habitual ejercida por otros Estados, como Holanda, Bélgica e Inglaterra (Vicuña, 1966, pág. 266).

3.1 Leve apunte sobre el papel de los Imperios en el legado identitario.

Es evidente que las cuestiones señaladas han sido hechos constitutivos de identidad regional. Pues si bien se han revisado los factores que posibilitaron la división del territorio, en cuanto a la herencia unitaria que se legó en AL hay que tener en cuenta que la administración española de las colonias poseía similitudes en sus prácticas, aunque cada virreinato aplicase normas particulares para los diferentes territorios a través de sus

gobernadores. Puesto que a pesar de esta operativización de los mecanismos relacionales, la unidad y la similitud entre los pueblos latinoamericanos de todo el territorio se constituyó a partir de ciertas prácticas comunes, que han sido base constitutiva de una identidad común.

Aspectos como la metodología técnica o la operatividad social que se heredó de los Imperios, se observa en cómo se han desarrollado los aspectos políticos, económicos, sociales o culturales, que abarcan a toda la sociedad latinoamericana- aunque en Estados separados actualmente-, incluyendo a Brasil, ya que el tipo de colonización portuguesa no se distanció en estos aspectos (Vicuña, 1966).

Otra herencia Imperial constitutiva de identidad y pertenencia elemental fue el idioma. Éste se presenta como base y pilar que impulsa el desarrollo de algo tan fundamental como la comunicación sin barreras. Además hay que señalar que a través de él se procesan muchos aspectos culturales que potencian el proceso identitario, como la literatura, la música, el teatro, etc... que son elementos de una identidad. Y aunque bien es verdad que en Brasil se habló portugués, sí ha existido una comunicación profunda y fuertes lazos de conexión vía autores y academias.

Asimismo, dentro del proceso de construcción identitaria regional no se puede olvidar citar el factor racial, ya que su evolución estuvo determinada por el tipo de colonización practicada. Ésta, lejos de ser excluyente con el indígena en la región, se caracterizó por un mestizaje, ocurrido a partir de la fusión entre el español o portugués y el indígena, que muestra muy a las claras que el espíritu del colonizador ibérico perseguía un asentamiento y establecer una vida en el lugar de destino y no simplemente ser un explotador del lugar. Lo cual impregnó y constituyó un elemento que impulsaba la construcción de una identidad común en todo el territorio.⁴²⁶

Del mismo modo, las estructuras políticas, jurídicas, sociales y económicas que se fueron constituyendo posteriormente, guardaron similitud durante un largo periodo y aunque con cambios puntuales- que se dieron lugar durante los procesos dictatoriales- la estructura de pensamiento es bastante similar. Teniendo en cuenta que todo el proceso ha atendido, ya desde los virreinos, a las particularidades de cada zona, puesto que el prestarles atención

⁴²⁶ La identidad es un factor de creación y moldeamiento continuo, como indica Jorge Larraín cuando ve a: "... la identidad cultural como algo que está permanentemente siendo construido y reconstruido dentro de nuevos contextos y situaciones históricas y que no puede nunca decirse que está finalmente resuelta o constituida definitivamente como un conjunto fijo de cualidades, valores y experiencias comunes" (Larraín, 1994, pág. 62).

ha sido un factor esencial de la sociedad latinoamericana desde la organización que se produjo en las épocas de conquista.

3.2 Hacia el desmembramiento en la búsqueda de la identidad soberana.

La caída del Imperio español- con el destronamiento del rey de España por Napoleón como punto álgido y relevante -, su colapso y el desmembramiento posterior, fue claramente un suceso social y político determinante para la constitución de Estados nacionales en Latinoamérica⁴²⁷.

Asimismo se debe señalar que en los procesos de independencia influyó el modo en el que se había producido la propia conquista, ya que el propio hecho había instaurado el germen de la libertad en los ciudadanos. Debido esto a dos cuestiones principales: una, la lejanía con la Corona; y dos, el hecho de que los conquistadores hubiesen actuado con cierta libertad en la acción. Elementos ambos que incentivaron el que, en cuanto la Corona mostrase cierta debilidad, los habitantes del Imperio en América actuaran en pos de instaurar su propio gobierno (Mitre, 1887).

“Los aventureros españoles del siglo XVI pudieron ejecutar la hazaña portentosa de conquistar la América, porque nadie puso trabas á su espontaneidad, ni sometió á reglas su inspiración personal. Esta fué la ley general de la conquista de América, y lo que produjo un resultado tan maravilloso y rápido fué el haberse dejado su libre desenvolvimiento á la inspiración personal. Cada conquistador fué una fuerza que dio de sí, sin limitación, todo lo que podía dar” (Amunátegui citado en Mitre (1887, pág. 58) [Copia exacta del texto].

Además, es relevante rescatar que los procesos colonizadores habían tejido un sistema, por el cual el paso de las colonias a nuevos Estados no poseía gran dificultad y los nuevos agentes podrían desempeñar el rol económico que hasta la fecha habían ejecutado las colonias, heredando una disposición estructural de los virreinos. En su mayoría, contando con capacidad para comenzar a formar parte del entramado económico de la SI como productores de materias primas, sin necesidad de asociación. De ese modo, se daba continuidad a la relación comercial con los países europeos industrializados, ya que éstos eran la fuente de ingreso principal. Lo que permitía que se agilizase el trasvase de poder.

⁴²⁷ Anterior a este hecho en ALC ya se habían producido actos de rebeldía contra los Imperios: La Rebelión de los Comuneros en Colombia y Venezuela (1781); el levantamiento de Túpac Amaru (1780); la Revolución Haitiana; la Conspiración minera en Brasil (1789); y las diversas insurrecciones de esclavos había sido precedentes de la lucha, eran señales que indicaban como se iba fraguando la repulsa a la corona (Mitre, 1887).

Este hecho se produjo mayoritariamente en todo el territorio. Desde los primeros pasos de las revoluciones de independencia se vislumbró que éstos poseían cierta sincronía en los diferentes espacios, al presentar "...idénticas formas, iguales propósitos inmediatos y análogos objetivos, acusando desde muy temprano una predisposición innata y una solidaridad orgánica de masa viva" (Mitre, 1887, pág. 51). De hecho, se significa la notoriedad cuando se observa que ya en 1810 todas las colonias hispanoamericanas realizaron procesos de insurrección y proclamaciones que ambicionaban el establecer un gobierno propio- germen de la independencia-.

La deconstrucción de la ligación de las tierras latinoamericanas con la Corona, se podría caracterizar en tres ideas fundamentales: 1) la meta de la independencia; 2) un proceso de unión en una "Patria grande"; y 3) el ejercicio de denominación de la Patria Grande. Como el proceso que determinaba los otros dos era el de independencia, este fenómeno se postuló como el ejercicio en el que concentrar toda la energía de los agentes (Ardao, 1993). Por ello, siendo la independencia la necesidad primaria para adquirir la capacidad suficiente para proceder a la activación de los otros dos procesos - los que diesen lugar a la constitución de un órgano independiente unido - se produjo, lo que Arturo Ardao (1993) denomina, un primer periodo: el llamado de los "percusores", en éste se sucedieron los primeros actos de rebeldía contra el Imperio; en el segundo, entre los años 1810-1821, se produjeron constantes declaraciones unilaterales promoviendo el pensamiento de unión; y ya en el tercero, entre 1821 y 1828, se dieron cita las relaciones diplomáticas entre los territorios independizados (Ardao, 1993).

1º Periodo : En este se produjeron las acciones aludiendo, en líneas generales, a la liberación del considerado opresor;

2º Periodo : Este estuvo compuesto por dos fases diferenciadas. La primera, entre 1810-1815, caracterizado por declaraciones unionistas que no formalizaban la unión entre Norte y Sur; y una segunda, en la que el proceso de lucha promovió la consolidación de las patrias chicas, al mismo tiempo que se hacía fuerte la idea de unión como reflejó *La Carta de Jamaica* de 1815 de Simón Bolívar. Este periodo significó la relevante aparición y el reconocimiento, por parte de diferentes líderes independentistas como fueron las figuras de Simón Bolívar(783-1830) y José San Martín(1778-1850), de la idea de unionismo;

3º Periodo : Durante éste destacan las misiones promovidas por Bolívar entre 1821-1823, y la diplomacia multilateral que fructificó en el Congreso de Panamá en

1826. Aunque finalmente se frustraron las pretensiones unionistas de estructuración de unidad en ese periodo en Tacubaya 1828 (México).

La defensa de la unión regional ya venía, en parte, justificada por la historia común que compartían los territorios la región. Caracterizada ésta por: la opresión y dependencia de los colonizadores; la instauración de similares estructuras sociales; tradiciones; e idioma. Peculiaridades en las que se apoyaron los unionistas y que condujeron a la población a enfrentar la independencia creyendo en una identidad que, aunque con algunos rasgos diversos, unificaba. Y es que la lucha que se produjo durante los procesos liberadores de los territorios, estuvo determinada por un rasgo común: se luchaba contra uno y se era víctima de él: el colonizador (Ardao, 1993; Vitale, 1984; Bergalli, 1996; Larraín, 1994; Vicuña, 1966).

4. Diversos autores que promovieron la idea de unidad regional.

SONETO AMERICANO

Pueblo americano,
Ya ha llegado el día
que el Partido muera
de la tiranía:
Unámonos todos
contra su poder
y nuestro derechos
hagamos valer.
Viva nuestro Pueblo.
Viva la Igualdad.
La ley de la Justicia
y la libertad.

(Manuel Cortés Campomanes citado en Lopez (1955, pág. 375)).

4.1 Francisco de Miranda. Primer gran autor.

El primer líder político con un claro discurso unionista se encuentra en la figura de Francisco de Miranda (1750-1816). Su proyecto regional se caracterizó por la inclusión de dos aspectos fundamentales en términos de identidad regional: uno, al indicar la existencia de un ciudadano regional, apoyando su discurso la promoción de derechos de los ciudadanos latinoamericanos y especialmente los de los indígenas; y dos, en su ideal de unión de la región, al señalar como la unidad había sido colonizada por los Imperios, incluyendo a Brasil y a las Islas de la región en su proyecto unificador, y de ello que debiese

ser una única entidad. Correspondiéndose su modelo geográficamente con lo que hoy se denomina ALC (L.Bohórquez, 2006). Miranda la denominaba la Gran Colombia Continental.

En cuanto al modelo de cohesión que debía ser articulado, Miranda indicó que la articulación de los diversos mecanismos que tendría la unidad, se produciría a través de un proyecto político unitario para la Gran Colombia Continental. En éste, el autor abogaba por la construcción de un Estado federal basándose en el formato adoptado por los EEUU, introduciendo únicamente algunos cambios.

En principio, el sistema que presentó Miranda pretendía unificar los diversos territorios de ALC en una sola nación. Es decir, un modelo de nación de naciones. Éste se ejecutaría a través de la constitución de una federación con origen legitimador en un sistema de soberanía popular. Mecanismo que contaría con elementos singulares, ya que se activaría a través del voto censitario, con la particularidad de que Miranda, en aras de promover la identidad y el sentimiento de pertenencia, haría poseedor de tierra a todos aquellos nacidos en tierra Americana incluidos los nativos. Por lo que todos los individuos de ALC serían propietarios, ya que en el proyecto constitucional de Miranda se incluía el reparto de tierras a indios, libertos y pardos sin fortuna, con el objetivo final de garantizar sus derechos políticos (L.Bohórquez, 2006). De ese modo, el mecanismo censitario con reparto de tierras sería un medio para otorgar voto a todos los ciudadanos, ciertamente enrevesado, pero adviniendo que éste actuaría como eje impulsor de la distribución de riqueza entre los nacidos en ALC y, por lo tanto, sería un acto que impulsaría el sentimiento de pertenencia a una región.

El impacto de la herencia colonial, así como del proyecto estadounidense en el que se instauró la soberanía compartida, fueron elementos que incitaron el que Miranda elaborase un proyecto unitario, en el que se preservase cierta capacidad soberana y autonomía por parte de las diferentes regiones dentro de la nación, manteniendo lo heredado de las épocas coloniales y sustentando la unidad política en una estructura jurídica común que fuese establecida a partir de un consenso. En cuya práctica fuese obligada la participación de los estamentos locales y provinciales, a fin de mantener el respeto a la particularidad desde la unión. Asimismo, al ser consciente de que la cuestión de mantener la autonomía por parte de las provincias era el tema que conllevaba mayor dificultad, Miranda abogaba por resolver la encrucijada mediante la construcción de una estructura política piramidal, que

iniciase toda decisión y elección en la base ciudadana⁴²⁸. De modo, que la estructura regional tendría un dibujo piramidal y operaría con decisiones desde la base al órgano superior (Cabildos, Asambleas Provinciales y el Congreso continental en la cúspide). Esto suponía que la construcción de una estancia superior siempre vendría avalada por la base inferior, y en el primero recaería el ejercicio de representación de los ciudadanos que habrían manifestado su preferencia por medio del voto soberano (L.Bohórquez, 2006).

Miranda pretendía instaurar en la región un sistema republicano, en el que todos los habitantes se sintiesen parte y contasen con la garantía de obtener beneficios por su trabajo y poseer ciertos grados de participación política. Además, argüía que estos dos factores les estimularían para, como ciudadanos de pleno derecho, cooperar en el crecimiento y asentamiento internacional de la región. Puesto que era necesario alterar el papel de la región en las RRH en su proyecto, al manifestar que si ALC había sido fuente de recursos de los Imperios, en el plano internacional había que cambiar los ejes de participación regional y promover el que ALC se estableciese como un actor respetado a la altura de las grandes potencias. Debido a que al contar con la capacidad económica que le otorgaban sus RRNN, si éstos se acompañaban de una estructura política y económica unitaria- para las que propuso acuerdos como alianzas de los bancos de México y Lima con el de Londres acuerdos de explotación y comercialización con multinacionales-, la región no tendría nada que envidiar en el tiempo a las grandes naciones.⁴²⁹

A este respecto y para fomentar la consolidación de este proceso, indicó que era necesario la creación de una identidad, o más bien no la creación sino el asentamiento de la identidad, ya que desde su punto de vista ésta ya existía y se había ido fraguando desde que comenzó la invasión Europea en la época de conquista.

4.2 La idea unionista en épocas de independencia. Presencia en diversos territorios.

Este primer proyecto unionista fue acompañado por una corriente amplia de autores. Otras figuras políticas se postularon en favor de la unidad. Las figuras de Manuel Gual o José María España, que cooperaron en lo que se denominó *La conspiración de Gual y España*, a la que se unió Juan Batista Picornell (Lopez, 1955), inspirados en las bases de la revolución

⁴²⁸ Para conocer en profundidad el mecanismo de articulación política en la región propuesto por Miranda véase L.Bohórquez (2006).

⁴²⁹ Estas ideas viene recogidas en El acta de París (1797); la Proclama a los Habitantes del Continente Colombiano (1801) y en sus proyecto constitucionales de 1801 y 1808.

francesa lideraron un movimiento unitario que promovía una igualdad social, promoviendo la defensa de los derechos de los pueblos originarios e incluyendo a los ciudadanos de raza negra. En este caso se trataba de un plan unificador que convertiría ALC en un Estado caracterizado por la integración de diferentes razas y culturas.

En el proyecto de estos autores se observa la influencia de la escuela europea, del término soberanía y de la forma de gobierno y, sobre todo, de una manifestación de la articulación social ocurrido en Europa, como la Revolución Francesa que reflejan sus escritos. Por una parte, Gual y España elaboraron *El discurso preliminar dirigido a los americanos* (1797), en el que aludían a la necesidad de promover la justicia, la igualdad entre las regiones y ciudadanos, encontrando necesario para ello el unificar políticamente la región. Es decir, veían a la unidad como mecanismo necesario para adquirir capacidad para establecer justicia en la región.

Art 32: “Se declara la igualdad natural entre todos los habitantes de las Provincias y distritos y se encarga que entre blancos, indios, pardos y morenos reine la mayor armonía, mirándose todos como hermanos en Jesucristo iguales por Dios” (Citado en Grases (1989, pág. 35)).

En *El discurso preliminar*, Gual y España aludieron al hastío presente en la región debido a las prácticas económicas que eran decididas externamente, a través de la intervención de la corona o sus representantes. Los cuales, en búsqueda de maximizar beneficios, habían regulado la producción en las plantaciones. Evidenciando e indicando que, aunque hubiese necesidad en la población, la Corona impedía la siembra de algunos bienes necesarios y útiles para acabar con la desigualdad:

“¡Cuánto no se pudiera decir sobre la prohibición de sembrar trigo, plantar viñas y otros muchos efectos de primera necesidad en donde el terreno convida a su cultivo! Cuánto sobre el estanco del *tabaco* en un país que lo produce naturalmente...pero la pequeñez de la obra no permite hacer un detalle de los graves perjuicios que han producido en la América unas providencias tan tiránicas” (Gual y España citados en Grases (1989, pág. 34)).

En referencia a los principios del Estado, Picornell promovía el reconocimiento a los derechos de igualdad de todos los ciudadanos. Esto debido a que éste se vio influenciado profundamente por la Revolución Francesa y por autores como Locke y Rousseau (Grases,

1989, pág. 31). Como de hecho refleja el que indicase en el Art. 44 de las *Ordenanzas Constitucionales*⁴³⁰ (1797) lo siguiente:

“En señal de buena unión, concordia e igualdad que ha de reinar constantemente entre todos los habitantes de la tierra firme, será la divisa una escarapela cuatricolor, a saber: Blanca, Azul, Amarilla, y Encarna. Significación de los cuatro colores: Los cuatro fundamentos del hombre son la igualdad, libertad, propiedad y seguridad” (Citado en Grases (1989, págs. 35-36)).

Se vivía en una especie de creencia de que la unidad hace la fuerza. De ello, que de acuerdo con el concepto de soberanía europeo, se entendiese que el sustento, en términos de derechos, operaría a través de un proceso que incentivase un proyecto de unificación. Viendo éste como un medio emancipador, capaz de articular la comunicación entre los diferentes puntos de la región y apropiarse de los beneficios de una tierra tan rica en RRNN, para alimentar y estructurar las nuevas naciones independientes. Y en conjunto, formar un agente capaz de dar respuesta a las diversas demandas. De hecho, en cierto modo esa era la idea de unidad regional que se vio reflejada en los primeros actos que reclamaban la revolución de independencia. Como evidenciaba el que ya en 1810, en las primeras juntas gubernativas revolucionarias, en la lucha contra el Imperio, se entonase la liberalización en nombre de la unidad hispanoamericana y regional.

En los territorios de Bogotá, Buenos Aires, Caracas, Chile, Paraguay y Quito, se invocó el proceso unitario de la región. Señal de esta corriente fue el que en los articulados constitucionales, como por ejemplo, la primera Constitución de la República de Venezuela (1811), el proyecto unionista aparecía reflejado en una cláusula que preveía la inclusión de otra provincia al Continente Colombiano⁴³¹ (Viadel, 2006, pág. 128).

En la misma línea se encontraban las declaraciones desde México que realizó en la época Miguel Hidalgo y Costilla (1810), en las que se autoproclamaba “Generalísimo de América”, aludiendo a la unión contra el otro, contra el opresor, cuando decía:

⁴³⁰ La Ordenanzas Constitucionales significaron un ideario que sirvió para articular el sistema republicano de Venezuela tras su independencia. Asimismo, una aportación de corte continental y relevante por su pretensión geográfica fue la traducción de los Derechos del hombre y del ciudadano que, junto con Campomanes realizó Picornell, en folleto y con la Canción americana y Carmañola americana, en verso, aludían a la similar condición de la región (González, Rumazo, & Becco, 2005, pág. 45).

⁴³¹ Así se cita en el Capítulo quinto. Sección primera, Art. 73: “...serán también admitidas e incorporadas cualesquiera otras del continente Colombiano (antes América Española) que quieran unirse bajo las condiciones y garantías necesarias para fortificar la unión con en el aumento y enlace de sus partes integrantes” (Constitución Federal de Venezuela, 1811).

“Unámonos, pues, todos los que hemos nacido en este dichoso suelo: veamos desde hoy como extranjeros y enemigos de nuestras prerrogativas, a todos los que no son americanos” (Costilla, 1810).

O cuando en la Proclama a la nación americana (Noviembre de 1810) escribió:

“Abrid los ojos, considerad que los europeos pretenden: ponernos a pelear criollos contra criollos, retirándose ellos a observar desde lejos, y en caso de serles favorables, apropiarse toda la gloria del vencimiento, haciendo después mofa y desprecio de todo el criollismo y de los mismos que los hubiesen defendido” (Costilla: 1810).

Manifestaciones que claramente incentivaban el sentimiento de lucha y la pertinencia de la unidad ante los agentes externos⁴³².

Aludiendo a la común identidad de los distintos pobladores de la región y a la necesidad de concertar prácticas que armonizasen el poder, en 1811, también se encuentran declaraciones de Juan Engaña desde Chile:

“Estamos unidos por los vínculos de sangre, idioma, relaciones, leyes, costumbres y religión [...] Sólo nos parece que falta el que la voz autorizada por el consentimiento general, de algún pueblo de América, llame a los demás de un modo solemne y caracterizado. ¿Y quién impedirá este Congreso?” (Citado en Ardao (1993, pág. 7).

Las voces de apoyo al proceso unionista se iban reproduciendo en las diferentes fases del proceso independentista por todo el continente, desde todas las esquinas de la región. En Buenos Aires se manifestó el apoyo de Bernardo Monteagudo, miembro del ala que seguía a Mariano Moreno y colaborador con San Martín y Bolívar, a través de la publicación de su *Ensayo sobre la necesidad de una Federación General de los Estados hispanoamericanos y plan de su organización* (1824)⁴³³; desde Uruguay destacó la voz de José Ortigas, con su enaltecimiento de la *Patria Continental*, apoyó a la lucha armada contra los opresores, promoviendo la pertinencia de crear una Liga Federal como paso previo a la unidad de América libre e independiente; así como en Brasil se reproducían las alusiones a la unidad, que aun habiendo pertenecido al Imperio portugués, los líderes patriotas de Pernambuco en 1817,

⁴³² Arturo Ardao (1993) indica la posibilidad de que cuando Hidalgo y Costilla hacía referencia a América se refiriese a México.

⁴³³ Disponible en línea: <http://www.biblioteca.org.ar/libros/8794.pdf> (Consulta realizada el 18 de junio de 2013).

se manifestaron contra el emperador y esperaban el apoyo de Bolívar para derrocar al Imperio y proclamar la República.

“Ningún designio ha sido más antiguo entre los que han dirigido los negocios públicos, durante la revolución, que **formar una liga general contra el común enemigo y llenar con la unión de todos el vacío que encontraba cada uno en sus propios recursos.** Pero la inmensa distancia que separa las secciones que hoy son independientes y las dificultades de todo género que se presentaban para entablar comunicaciones y combinar planes importantes entre nuestros gobiernos provisorios, alejaban cada día más la esperanza de realizar el proyecto de la federación general. **Hasta los últimos años se ignoraba en las secciones que se hallan al sur del Ecuador lo que pasaba en las del norte, mientras no se recibían noticias indirectas por la vía de Inglaterra o de los Estados Unidos.** Cada desgracia que sufrían nuestros ejércitos hacía sentir infructuosamente la necesidad de estar todos ligados. Pero los obstáculos eran por entonces superiores a esa misma necesidad” (Monteagudo, 2003, pág. 2). **[Negrita propia]**

Monteagudo abogaba por la creación de una federación como paso previo a una unión, indicando que ante la incapacidad regional para articular mecanismos operativos- indicando varios motivos, como la falta de infraestructura-, se dificultaba la tarea de establecer una unidad similar a un Estado europeo. Esto debido a que la región poseía unas características geográficas extensas y problemáticas en términos de relieve. Realidad ante la cual su propuesta de federación respondía, aunando los criterios que en ese contexto Monteagudo entendía como apropiados. Es decir, promoviendo la creación de una nación de naciones articulada por medio de una federación.

En un discurso audaz, Monteagudo fue más allá del simple y mero hecho de reivindicar la capacidad de gobernar en los territorios únicamente. Como gran conocedor de la historia, advertía de un peligro mucho mayor que la guerra o la adquisición del poder en términos físicos. **Monteagudo decía que cualquier reivindicación de legitimidad en nombre del derecho estaba cargada de postulados de construcción externa, ya que la herencia de la región no se había producido únicamente en términos idiomáticos, sino que el derecho impulsor de los nuevos Estados se había basado en ideas constituidas por aquellos que habían sido los conquistadores, por lo que advertía que:**

“La independencia es el primer interés del nuevo mundo. Sacudir el yugo de la España, borrar hasta los vestigios de su dominación y no admitir otra alguna, son empresas que

exigen y exigirán, por mucho tiempo, la acumulación de todos nuestros recursos y la uniformidad en el impulso que se les dé...”

“...los españoles... conservan pretensiones a que dan nombre de derechos, para implorar en su favor los auxilios de la Santa Alianza dispuesto a prodigarlos a cualquiera que aspire a usurpar los derechos de los pueblos que son exclusivamente legítimos” (Monteagudo, 2003, págs. 3-4).

Los peligros de basar toda construcción de legitimidad o autoridad en los postulados europeos, fue la mayor advertencia que realizó Monteagudo. Él percibió que las legitimaciones, que se habían construido y asentado como derecho, partían de una visión particular y subjetiva de “justicia”. Lo que daba como resultado un derecho que otorgaba beneficios hacia aquellos que lo habían creado y se ajustaba a sus ideas sobre la operativización de las prácticas sociales. Por lo tanto, el deber del Nuevo Mundo, una vez independizado, era el de construir su propio derecho de acuerdo a una realidad propia, analizando cuidadosamente la proveniencia del razonamiento que daría resultado a derecho.

Asimismo, este autor hizo referencia al hecho de incluir a Brasil en la unidad regional deseada, por considerar la existencia de aspectos similares en su historia, augurando y reclamando un proceso de independencia similar al que había acontecido en la región.

“Al examinar los peligros del porvenir que nos ocupa, no debemos ver, con la quietud de la confianza, el nuevo imperio del Brasil. Es verdad que el trono de Pedro I, se ha levantado sobre las mismas ruinas en que la libertad ha elevado el suyo en el resto de América. Era necesario hacer la misma transición que hemos hecho nosotros del estado colonial al rango de naciones independientes” (Monteagudo, 2003, pág. 6).

Asimismo, entre otras figuras unionistas, se encontraba uno de los grandes ideólogos referentes en los movimientos promotores de la unión latinoamericana en esa época, Bernardo O’Higgins Riquelme. El cual, siendo director supremo de Chile, entabló conversaciones habituales con Bolívar, al que denominó “El Anfitrión de la América”, en las que se manifestaba su creencia en un proceso que unión regional:

“El concurso simultáneo de nuestras fuerzas y el ascendiente de la opinión pública en el Alto Perú decidirán si es posible formar en el continente americano una gran confederación

capaz de sostener irrevocablemente su libertad política y civil, cualquiera que sea la forma de gobierno que establezcan los países confederados” (Citado en Ardao (1998, pág. 8)).

E indicaba la existencia de una lucha común, de una identidad común, y que, más allá de las particularidades, existían lazos gruesos entre los diferentes territorios (en carta a Bolívar):

“La causa que defiende Chile es la misma en que se hallan comprometidos Buenos Aires, la Nueva Granada, México y Venezuela, o, mejor diríamos, es la de todo el continente de Colombia. **Separados estos países unos de otros, harían más difícil o retardarían el fin de una contienda de que pende la felicidad o la humillación de veinte millones de habitantes**” (Citado en Ardao (1998, pág. 7)) **[Negrita propia]**.

Del mismo modo, José Cecilio del Valle, de origen hondureño, sumó su granito de arena a la idea de unión latinoamericana en forma de confederación, mediante el texto “Soñaba el abad de San Pedro; y yo también sé soñar” (1822). En donde incidía en la pertinencia de unir América en una unidad regional, una América grande, fuerte y poderosa a nivel internacional. De ello que su propuesta sugiriese que:

“Se crearía un poder, que uniendo las fuerzas de 14 o 15 millones de individuos, haría a la América superior a toda agresión, daría a los Estados débiles la potencia de los fuertes; y prevendría las divisiones intestinas de los pueblos sabiendo estos que existía una federación calculada para sofocarla” (Valle, 2006).

Más concreto se mostró el centroamericano Juan Nepomuceno Troncoso cuando en un artículo dentro del periódico “El indicador” (1825, Guatemala), señaló que se requerían de instituir organismos para establecer una confederación continental, que fuese capaz de reforzar aspectos estructurales carentes. Propuso “...la fundación de un banco nacional, un montepío [fondo social] de labradores y; la apertura del canal de Panamá” (Citado en Soler (1987, pág. 53). Destacando en sus escritos la relevancia que tenía, en términos de empoderamiento, la constitución de instituciones propias que permitiesen adquirir capacidad para abordar las diversas problemáticas que surgían de la propia práctica diaria en el desenvolvimiento social, resultado de la propia interacción entre territorios tan alejados. Por ello indicaba, que en aras de asegurar la operatividad debían capacitarse de tal modo que no dependiesen de instituciones con intereses ajenos a los regionales (Soler, 1987).

En el breve repaso a los ideólogos que aludían a la pertinencia de una unidad latinoamericana, se han dejado para estos últimos párrafos algunos de los más relevantes – junto con Francisco de Miranda- como fueron, por su impacto regional, los nombres propios de José San Martín y Simón Bolívar.

San Martín destacó por ser un actor con gran relevancia debido a su capacidad militar. De hecho, actuando al unísono con la acción que llevaría a Bolívar a liberar Haití para emprender camino a Venezuela, se había adentrado con su ejército en los Andes y debido a una estrategia, que tildan de lúcida, atravesó y consiguió encarar la lucha liberadora de Chile en 1818, más tarde del Perú, y finalmente acudir a Guayaquil, donde se reuniría con Bolívar en 1821.

José San Martín, como líder de la liberación del Reino de La Plata, pretendía extender su triunfo por la región de ALC. Hecho que se ve reflejado en el texto “Instrucciones reservadas para la reconquista de Chile”, que elaboró Juan Florencio Terrado y que luego modificó Juan Martín de Pueyrredón en 1816, en donde se observan una serie de indicativos que desvelan la perspectiva del proceso político de independencia, que era la meta de todo acto, ya fuere político o bélico, en su obra.

“1. La consolidación de la independencia de la América de los reyes de España, sus sucesores y metrópoli, la gloria á que aspiran en esta grande empresa las provincias unidas del sud, son los únicos móviles á que debe atribuirse el impulso de la campaña”. “...a fin de que se constituya una forma de gobierno general, que dé toda la América unida en identidad de causas, intereses y objeto, constituya una sola nación” (Terrado, 1816) [Copia exacta de texto original].

San Martín también presentó un modelo político, con cobertura para la región hispanoparlante, caracterizado por presentar un único gobierno central, una monarquía parlamentaria (aunque luego renegó tras conversar con Bolívar). Fue en su *Plan Continental* donde se reflejó su habilidad como militar. El cual comprendía el anexar mediante luchas las regiones de La Plata y Perú al proyecto regional.

San Martín no pudo dar gran cobertura en el tiempo a su Plan, ya que tuvo que irse a Inglaterra cuando los federales y unitarios⁴³⁴ debatían sobre sus controvertidos apoyos a

⁴³⁴ Se trataba de una guerra dentro del Reino de la Plata entre dos fuerzas que apostaba por diferentes modos de organización. Los unitarios creyendo en un poder centralista; y los Federales, un sistema en el que mantuviesen las autonomías provinciales (Vitale, 2002).

caudillos del interior del Reino de La Plata, legando en carta a O'Higgins desde Inglaterra un mensaje sobre el devenir y su confianza en el proyecto unionista:

“...nada temo del poder de este continente, siempre que estemos unidos; de lo contrario, nuestra cara patria sufrirá males incalculables” (Citado en Vitale (2002, págs. 22-23)).

Esta potencialidad que atribuía al proceso, ya se había evidenciado en el encuentro ocurrido entre San Martín y Bolívar, en donde ambos señalaron la potencialidad de la integración. Como de hecho quedó reflejado en la Conferencia de Guayaquil (1822), que aunque con algunas diferencias en principio, éstas se vieron limadas apropiando ambos el postulado de republicanismo Bolivariano, en vez del modelo de monarquía constitucional que proponía San Martín (Mitre, 1887).

4.2.1 El impacto de Simón Bolívar y el primer Congreso unionista.

“Cuando muy grave, casi moribundo, rodeado de cerca por las tropas realistas, Don Joaquín Mosquera le preguntó:
-En esta crítica situación, ¿qué piensa hacer usted, general?
El libertador le responde en seguida:
-¡Triunfar!”

(Pea & Migallón, 2000, pág. 374)

Simón Bolívar ha sido el líder libertador más citado, con el permiso “publicitario” del Che Guevara, de todos aquellos que ha dado la región de ALC. El hecho de hacerse un hueco, tanto en el discurso interno regional como de cara al exterior- citado por las potencias mundiales de la época-, vino marcado, principalmente, por los logros que su ideal de alejar a la región de todo tipo de dominio exterior obtuvo durante su liderazgo y lucha por la independencia en la región. Construcción de reconocimiento internacional que se debió, principalmente, a sus grandes batallas; así como a las ideas que con gran habilidad plasmaba en sus escritos; y por su capacidad para promover la participación de los diferentes revolucionarios de la época (Ezcurra, 1989; Vitale, 1984).

Hay que tener en cuenta que Bolívar participó activamente en batallas libertarias con triunfo en Apure en 1813; en San Mateo en 1814; en Angostura en 1817; en Carabobo en 1818 y el 21; en Boyacá en 1819; en Bombona en 1822; en Ibarra en 1823; en Junín y

Pichinga en 1824 entre otras, siendo éstas causa por las que se le denominó como el Gran libertador de América de los opresores europeos. En ese tiempo logró vencer al Imperio español y, por lo tanto, alcanzar la libertad e independencia para los países que hoy conocemos como Venezuela, Colombia, Ecuador, el Perú y la Bolivia actual (Ezcurra, 1989; Vitale, 1984; Ardao, 1998).

Aunque en un principio Bolívar fue el principal fundador del proyecto que él denominó Gran Colombia, en el que daba cabida a los Estados actuales de Venezuela, Colombia y Ecuador, éste no limitaba la cobertura del mismo a ese espacio territorial, ya que tenía entre sus planes una América grande, fuerte, culta, digna y unida. Sería posible construir éste por medio de un proceso articulador de capacidades en forma de confederación, la cual respondiese a principios de hermandad y solidaridad, como evidencia el análisis a las instrucciones que dio a sus diplomáticos en 1821, con anterioridad a las visitas a regiones liberadas:

“Esta confederación no debe formarse sobre los principios de una alianza ordinaria para ofensa y defensa: debe ser mucho más estrecha que la que se ha formado últimamente en Europa, contra las libertades de los pueblos. **Es necesario que la nuestra sea una sociedad de naciones hermanas, separadas por ahora y con el ejercicio de su soberanía** por el curso de los acontecimientos humanos, pero **unidas**, fuertes y poderosas para sostenerse **contra las agresiones del poder extranjero**” ⁴³⁵ (Citado en Fabela (1957, pág. 32)) [**Negrita propia**].

Bolívar se hizo eco de la problemática que presentaba el construir un cuerpo soberano en torno a los procesos libertadores particulares que se habían dado cita, en diversos tiempos y espacios en la región. Indicando, que además de la cuestión estructural heredada de los virreinos españoles, la concentración e identificación en procesos de lucha habían despertado cierto celo soberanista y un sentimiento separatista. En los que cada grupo quería ser el actor autónomo con capacidad decisoria sobre todos los asuntos que le concerniesen en su rol de agente liberado. Por ese hecho, se percibe que Bolívar señalaba, a pesar de su pensamiento centralista de gobierno, de lo apropiado de respetar la autonomía de las regiones mediante la constitución de una asociación -que denominaba

⁴³⁵ Instrucción de Simón Bolívar en 1821 a los enviados diplomáticos a las regiones de México; Perú, Chile y las Provincias de la Plata (Bolívar, 1994).

Confederación- entre naciones. Esto lo expuso nítidamente en el Congreso de Panamá (1826).⁴³⁶

El Plan de Confederación de Estados, expuesto por Bolívar, abogaba por iniciar un mecanismo de articulación de las competencias regionales, a través de un proceso en el que los diferentes territorios cediesen competencias soberanas en asuntos concretos. Un modelo organizativo en el que, en temas concretos, se operase armoniosamente mediante la articulación de un modelo con rasgos de una soberanía compartida, en el que la Confederación contase con capacidad de dictaminar en las relaciones externas, e interviniese en cuestiones internas, que tuviesen como objeto el armonizar la práctica de asuntos integradores como el comercio, las fronteras y demás cuestiones burocráticas (Bolívar, 1994).

En términos comparativos, el postulado de Bolívar poseía diferencias relevantes en cuanto a la constitución de la unidad regional con el proyecto de Francisco de Miranda. Si bien Bolívar coincidía con la necesidad de proceder a la unión de la región, por encontrar éste como un proceso natural debido a la común identidad de la región, veía trabas insalvables para su constitución en la época, abogaba por alinearse primeramente ante el actor externo y cuando el proceso estuviese asentado iniciar la construcción de un organismo de cobertura regional. A este respecto indicó:

“Es una idea grandiosa pretender **formar** de todo el mundo nuevo [ALC] **una sola nación** con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. **Ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería por consiguiente tener un solo gobierno que confederase los diferentes Estados** que hayan de formarse (la utopía); mas no es posible (la realidad), porque climas remotos, situaciones diversas, intereses opuestos, caracteres desemejantes dividen a la América. ¡Qué bello sería que el Istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de Corinto para los griegos!” (Carta de Jamaica. (Bolívar, 1815)) **[Negrita propia]**.

Como marca la Carta de Jamaica (1815), Bolívar encontraba dificultad en abordar la construcción de una nación con cobertura regional y lo calificaba de “utópico”. No creía que se diesen las condiciones necesarias para que el proyecto tuviese éxito. Señaló con claridad los factores en la región que, según su criterio, impedían la eficaz puesta en marcha

⁴³⁶ Texto completo en Bolívar (1994).

del proyecto, ante aquellos que abogaban por una unión de facto. Lo cual, para algunos podría ser tildado de “realista”, de acuerdo con los resultados que obtuvo.

“Yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria. Aunque aspiro a la perfección del gobierno de mi patria, **no puedo persuadirme que el Nuevo Mundo sea por el momento regido por una gran república; como es imposible, no me atrevo a desearlo...**”

“Esta especie de corporación podrá tener lugar en alguna época dichosa de nuestra regeneración (de nuevo la utopía); otra esperanza es infundada (la realidad), semejante a la del abate St. Pierre, que concibió el laudable delirio de reunir un congreso europeo para decidir de la suerte y de los intereses de aquellas naciones”(Carta de Jamaica. (Bolívar, 1815)) **[Negrita propia]**.

Bolívar se mostró reacio ante la posible la instauración de un sistema federal a imagen y semejanza del que se había instaurado en los EEUU. De hecho, ni siquiera lo veía adecuado para un territorio más pequeño, como manifestó en el Congreso Constituyente de Angostura (1819), decantándose por lo apropiado de adoptar una “... reunión de todos los Estados de Venezuela en una República sola e indivisible”.; heredando la separación de poderes; pero otorgando el ejecutivo a un sólo individuo en forma de presidente de todas las provincias. Este propósito centralista, únicamente lo veía posible de aplicación en ciertas áreas y de ahí que fuese madurando en él un proyecto de confederación regional, que de nuevo abogase por la necesidad de aunar regionalmente la capacidad de decisión con el exterior. Es decir, articular un órgano que actuase en la soberanía externa (Bolívar, 1994).

Respecto a las cuestiones de derechos de los ciudadanos, uno de los factores determinantes que se evidencian en las propuestas de los Congresos constituyentes, es que el pueblo, en el ideario de Bolívar, juega un papel secundario como agente del proceso constituyente de la unión. Ya que si bien Bolívar había proclamado la abolición de los esclavos, promulgaba los derechos de negros e indígenas y estaba en contra del sufragio censitario. Su confianza en las clases bajas no existía en asuntos políticos. Como evidencia el que, en su afán de establecer un gobierno de los mejores, exigiese la tenencia de capacidades para ejercer el voto, y ello significase el ser conocedor de la lectura y la escritura para ser elector, además de una profesión. Requisitos que en aquella época podían cumplir un porcentaje muy bajo

de la población (Vitale, 1984, pág. 25). Por lo que, el proceso de construcción de la integración regional estaría sujeto a decisiones de los líderes y no desde las bases populares, a diferencia de lo que había propuesto Miranda. Este hecho debido a que dudaba de la capacidad de construir ideas propias de la gente sin capital humano y, por ello, entendía que eran muy manipulables.

“Las elecciones populares hechas por los rústicos del campo y por los intrigantes moradores de las ciudades, añaden un obstáculo más a la práctica de la federación entre nosotros, porque los unos son tan ignorantes que hacen sus votaciones maquinalmente y los otros tan ambiciosos que todo lo convierten en facción” (Bolívar, 1994, pág. 11).

Con el proyecto de Bolívar avanzando en su pretensión de construcción de una (sub)unidad regional- no estaba Brasil en su proyecto inicial- de resistencia al Imperio, firmó en Lima la convocatoria al Congreso de Panamá el 7 de Diciembre de 1928. Curiosamente ocurrido dos días antes de la victoria de Ayacucho (la cual dejaba liberado e “independiente” todo Latinoamérica excepto Cuba y Puerto Rico).

Antes de que se produjese el Congreso, Bolívar fue tomando la palabra y exponiendo su plan de una región unida asentada en pilares de independencia, atendiendo a las diferentes realidades y dando pasos en la búsqueda de una reafirmación de la identidad común. Con esa idea entre ceja y ceja, Bolívar alegaba a sus diplomáticos durante la gestación del Congreso mediante afirmaciones efusivas. Indicaba lo siguiente:

“Es indispensable que Ud. encarezca incesantemente la necesidad que hay de poner desde ahora los cimientos de un cuerpo anfictiónico o asamblea de plenipotenciarios que dé impulso a los intereses comunes de los Estados americanos, que dirima las discordias que puedan suscitarse en lo venidero entre pueblos que tienen las mismas costumbres y unas mismas hábitos y que por falta de una institución tan santa pueden quizá encender las guerras funestas que han desolado otras regiones menos afortunadas...” (Citado en Fabela (1957, pág. 33)) **[Negrita propia]**.

En definitiva, la llamada a aquellos que habían declarado su independencia en busca de establecer un ente fuerte y sólido, que evitase guerras innecesarias internas y que, a su vez, sirviere para negociar las diferencias, refleja una idea subliminar en la convocatoria del Congreso. Pareciere que podría ser éste el órgano de regulación de relaciones internas y externas, con capacidad de dictaminar, pero que al formar parte representantes de las

partes, no de la unión, se asemejaría a un modelo de integración intergubernamental, como evidencian las diversas Cartas:

“...una asamblea de plenipotenciarios de cada estado que nos sirviese de consejo en los grandes conflictos, de punto de contacto en los peligros comunes, de fiel intérprete en los tratados públicos cuando ocurran dificultades, y de conciliador, en fin, de nuestras diferencias” (Bolívar, 1994, págs. 151-152).

4.2.2 El desarrollo del Congreso de Panamá. Fracaso en la concertación de posturas.

Al Congreso que se celebró el 22 de junio de 1826 no acudieron todos los invitados, unos por complicaciones y otros por divergencias. En principio, el proyecto tenía la pretensión de unir a todos “los gobiernos de América antes española” y a Brasil⁴³⁷, que fue invitado, aunque no veía su adhesión en un futuro cercano Bolívar.

Con anterioridad al desarrollo del Congreso, y aunque se advenía difícil el hecho de constituir una sola nación latinoamericana, ya se veía posible el fomentar la cooperación en ciertos temas comunes, como la defensa y las relaciones exteriores. Se entendía que mediante estos pactos de mínimos las competencias que fuesen cedidas por los Estados serían pocas y acordes a un interés común, puesto que todos se verían más protegidos por la capacidad que otorgaría la acción unidad, en comparación con el uso de la fuerza individual. Intenciones que vienen recogidas en la manifestación que realizó el propio Bolívar en la carta particular que envió al general de Perú Antonio Gutiérrez de la Fuente en 1826, que decía así:

“...el gobierno de los estados particulares quedará al presidente y vicepresidente con sus cámaras, con todo lo relativo a religión, justicia, administración civil, económica y, en fin, todo lo que no sea relaciones, guerra y hacienda nacional” (Bolívar, 1994, pág. 191).

“...no es una sujeción lo que se intenta, sino la formación de un gran todo, compuesto por partes completamente iguales” (Bolívar citado en Vitale (2009, págs. 43-43).

Coincidiendo con la línea que había sido señalada años anteriores en la Carta a Carlos Alberto Pueyrredón (Buenos Aires) el 4 de febrero de 1821, resaltando que estarían:

⁴³⁷ La no inclusión de Brasil es fundamental en la denominación del proyecto de Bolívar al compararlo con el de Miranda, ya que el primero se conoce como la Gran Colombia y el de Miranda como la Gran Colombia Continental.

“Ligadas mutuamente entre sí todas las repúblicas que combaten contra España por el pacto implícito y virtual de la identidad de causa, principios e intereses, parece que nuestra conducta debe ser uniforme y una misma” (Citado en Pividal (2006, pág. 126)).

Sin embargo, aun señalando la pertinencia de establecer un órgano que contase con competencias soberanas en la política externa, en la hacienda y en el derecho de ejecutar la guerra, sólo se presentó formalmente en el Congreso este último punto, pues se entendió que era muy relevante. Se consideró necesario asegurar que ninguno de los diversos territorios fuese invadido, ni supeditado a los agentes externos a la región. Aunque en este sentido, hay que señalar que Bolívar siempre indicó que no debía ser la defensa el único pilar que debía sostener la unión y, por lo tanto, se debía trabajar en converger en más espacios de interés regional (Bolívar, 1994).

Tras la celebración del Congreso se instaló en forma de unión una liga y confederación de América de forma parcial. Las guerras internas de Buenos Aires y las consecuentes ausencias de los delegados argentinos, bolivianos y chilenos fueron, conjuntamente con la de la representación brasileña (que fue invitada), relevantes para restar solidez al pacto regional. De modo, que el acuerdo sólo quedó constituido por la Gran Colombia más México, Perú, Chile y Bolivia (que acordó formar parte). No obstante, finalmente, el proyecto acabó por fracasar tiempo más tarde, en 1828 en Tacubaya (México). A comienzos de 1830 la Confederación parcial que había logrado hacerse realidad se disgregó (Vitale, 2009; Ardao, 1998)⁴³⁸.

En todo caso, hay que conceder un mérito incuestionable a Bolívar: el de ser el único que logró reunir a líderes e impulsar un proyecto tan ambicioso, y aunque no se sostuviese en el tiempo, logró que se asentase en la mente de toda la región la anhelada idea de pertenencia permanentemente, a partir de la resistencia a las fuerzas extranjeras.

4.2.2.1 Pequeña herencia del Congreso de Panamá en términos de integración y soberanía.

En el Congreso de Panamá se reflejaron las metas que debían operar como impulsos a la cooperación en sus Art. 1, 2 y 3, en donde se indicaba qué tipo de ambición se pretendía al alcanzar la unidad regional (perpetua); como operaría la Confederación con los diferentes

⁴³⁸ Paraguay no fue invitado en ese periodo por encontrarse bajo régimen dictatorial.

territorios (defensa y respeto por la soberanía interna); y el comportamiento común en RRH (acción conjunta externa).

Art. 1. ° Las Repúblicas de Colombia, Centro América, Perú y Estados Unidos Mexicanos, se ligan y Confederan mutuamente, en paz y guerra, y contraen, para ello, **un pacto perpetuo de amistad firme e inviolable y de unión íntima y estrecha con todas y cada una de dichas partes.**

Art. 2. ° El objeto de este pacto perpetuo, será sostener en común, defensiva y ofensivamente si fuera necesario, la soberanía e independencia de todas y cada una de las potencias confederadas de América contra toda dominación extranjera, y asegurarse, desde ahora, para siempre, los goces de una paz inalterable, y promover, al efecto, la mejor armonía y buena inteligencia, así entre los pueblos, ciudadanos y súbditos, respectivamente, como con las demás potencias con quienes debe mantener o entrar en relaciones amistosas.

Art. 3. ° Las partes contratantes se obligan y comprometen a defenderse mutuamente de todo ataque que ponga en peligro su existencia política, y a emplear, contra los enemigos de la independencia de todas o alguna de ellas, todo su influjo, recursos y fuerzas marítimas y terrestres, según los contingentes con que cada una está obligada, por la Convención separada, de esta misma fecha, a concurrir al sostenimiento de la causa común.

(Asamblea Americana del Congreso de Panamá, 1828)[**Negrita Propia**]

En el articulado del Congreso también se observa la intención de instaurar órganos con capacidad regional. Para lo cual, los Estados miembros debían ceder competencias y supeditarse a los dictámenes del mismo. Además, es pertinente indicar que al ser un pacto perpetuo, la construcción de la nación de naciones tendría capacidades que serían eliminadas a los Estados miembros, como la secesión, la seguridad, etc....

Asimismo, en los Art. 14 y 15, se fijaba un claro compromiso con los Estados miembros que limitaba la capacidad en sus relaciones comerciales. Se determinaba la capacidad de los Estados para negociar con el exterior, puesto que tendrían que dar prioridad en sus relaciones comerciales a otros miembros de ALC. Significando este hecho, que el mercado estaría en un segundo nivel, posterior al interés regional.

Art. 14. ° Ninguna de las Partes contratantes podrá celebrar Tratados de alianza o liga perpetuas o temporales, con ninguna potencia extraña a la presente

Confederación, sin consultar previamente a los demás aliados que la componen o compusieren en adelante, y obtener para ello su consentimiento expícito o la negativa para el caso de que habla el artículo siguiente.

Art. 15. ° Cuando algunas de las Partes contratantes juzgase conveniente formar alianzas perpetuas o temporales para especiales objetos y por causas especiales, la República necesitada de hacer estas alianzas, las procurará, primero por sus hermanas aliadas; mas si estas, por cualquier causa negaren sus auxilios o no pudieran prestarle los que necesita, quedará aquélla en libertad de buscarlos donde le sea posible encontrarlos.

(Asamblea Americana del Congreso de Panamá, 1828) [**Negrita propia**].

El repaso al articulado elaborado en el Congreso refleja la ambición por desarrollar un proceso de integración que, claramente, se asemeja en ciertos aspectos al proceso de unificación que se había producido en los EEUU. Concretamente, en cuestiones como la perpetuidad y la seguridad común. Y en cuanto a los temas comerciales, a un regionalismo hacia adentro, al priorizar a los Estados miembros ante los Estados externos.

En definitiva, la no fructificación del Congreso en sus propósitos, y el que los Estados mantuvieran sus capacidades de decisión, evidenciaba entre otras cuestiones, que la soberanía se convertía en una capacidad adquirida difícil de ceder.

4.3 La pervivencia del ideal en el tiempo. Diversos proyectos unificadores tras el Congreso de Panamá.

Si bien la idea de unidad había formado parte de la agenda de muchos líderes revolucionarios durante los procesos de independencia, la configuración territorial que se fue fraguando en los diferentes espacios de la región replicaba en sus características operativas al modelo europeo.

Este hecho no hizo que la idea unionista sucumbiese en el olvido y no dejaron de aparecer autores que continuaban proponiendo y argumentando la evidencia, a su entender, de que una unificación de la región era una acción tan necesaria como apropiada para que mejorase la situación de todos los Estados. Señalando que actuando de forma

independiente no se conseguían solventar problemas estructurales y la permeabilidad a las decisiones que provenían del exterior era muy elevada.⁴³⁹

Eventos relevantes como las dos Conferencias Americanas ocurridas en Lima (1847-48 y 1864-65); los proyectos unionistas entre Chile, Ecuador y Perú, el llamado Unión de Estados Americanos; el proyecto potenciado por Washington entre México, Guatemala, el Salvador Costa Rica, Nueva Granada, Venezuela y Perú (ambos pretendían la anexión de Brasil), conocido como Confederación de los Estados Hispano- Americanos (1856); y el último intento del siglo XIX ocurrido en el Segundo Congreso Americano en Lima (1864), en el que se fraguaron los Tratados de Conservación de la Paz y el de Unión y Alianza, además de promover la unidad regional, estaban causadas y respondían, en cierto modo, a las prácticas políticas ejercidas por los países europeos y los EEUU, los cuales se disputaban la supremacía relacional con la región.⁴⁴⁰

En este aspecto se encuentra como, en 1848 Francisco de Paula Vigil, a la par que se realizaba el Congreso de Lima se presentaba la obra *Paz Perpetua en américa o Confederación americana* (1848) – denominación en referencia a la obra de Kant (1946)-, que instaba a la adopción de medidas que debiese aplicar la América española para erradicar la mala situación económica. Decía así:

“Conviene a las república hispano-americanas no permanecer más tiempo como se hallan todavía desde su principio separadas unas de otras sin otros vínculos que los universales de fraternidad, i espuestas al peligro de la guerra con sus funestos resultados, porque no se han prevenido para evitarlos. **Conserven su independencia i el ejército de su soberanía en todos los asuntos domésticos, relativos a la administración interior de cada una; pero júntense en los comunes i jenerales** i sean todas representadas por autoridades que cuiden de ellas i de las relaciones exteriores, i aparezcan a la faz de la Europa i del universo como una gran Nación, dejando para entre sí mismas sus subdivisiones” (Lastarria, Covarrubias, María, & Machenna, 1862, pág. 301) [**Negrita propia**].

** Copia exacta de texto con ortografía incluida.*

⁴³⁹ Esta postura fue manifestada por algunos líderes políticos tras el fracaso de del Congreso de Tacubaya (1828), como Lucas Alamán (México), Juan de Dios Cañedo (México), Matías León (Perú) o Felipe Reboledo (Perú) (Ardao, 1998).

⁴⁴⁰ Desde la aparición de la Doctrina Monroe como práctica política de EEUU, hasta el proceso de embargo y las consecuentes prácticas políticas (de cañoneras) que intervinieron las aduanas por parte de Inglaterra, pasando por el debilitamiento del imperio hispánico, fueron hechos que influyeron de manera sustancial en las visiones unionistas en la región latinoamericana (Fabela, 1958).

En el texto Vigil incidía en señalar la pertinencia de unir competencias en las relaciones con el exterior, de modo que las autoridades de cada Estado creasen un cuerpo capaz de articular y potenciar la armonización de prácticas internas, y actuar como unidad frente a agentes externos. En este sentido, al ser el autor consciente de la fragilidad de todo pacto en la época, cuestión que caracterizaba a las nuevas naciones al estar “...espuestas a sufrir usurpaciones u ofensas en su independencia, su dignidad i sus intereses, o a ver turbadas sus reciprocas relaciones de paz i amistad” (Lastarria, Covarrubias, María, & Machenna, 1862, pág. 326), invocaba a los agentes a promover la unidad de acción externa, respetando competencias del territorio formado. Pero concertando posturas para actuar defensivamente ante la acción exterior.

En conclusión, en líneas generales, el repaso a los principios del siglo XIX evidencia que la necesidad de unir fuerzas contra el papel ejercido por los Estados externos fue una idea que no se desplazó del pensamiento de los diversos agentes regionales en el tiempo; así como el que este mecanismo de cooperación debía guardar respeto por la defensa de los derechos y la soberanía interna de los Estados. Elementos ambos que fueron una constante en los diversos proyectos y de ello que se empezase a fraguar, en cierto modo, la idea de que si se alcanzaba un mecanismo de defensa regional, éste operaría de un modo intergubernamental, priorizando el concertar en prácticas de defensa regional ante la acción extranjera.

Un buen ejemplo de este postulado es el proyecto que presentaron Apolinar Mariano Olarte y Bernardo Soffia en el Congreso peruano celebrado en 1839, que con el propósito de promover la unificación, indicaron que se debía acordar una alianza común que instaurase algo más que una alianza entre Estados: un derecho público común a toda la región. Es decir, crear una normativa de carácter propio a la región conocida y acordada por las partes:

1. **Invítese por el Ejecutivo a las Repúblicas** de Venezuela, Nueva Granada, Ecuador, Chile, Bolivia, México, Buenos Aires y Centroamérica, para que en el mes de enero próximo envíen sus respectivos plenipotenciarios a la capital de Lima, **con el fin** de estipular tratados de paz y **de alianza defensiva para prestarse socorros recíprocos en el caso de una invasión extranjera.**

(Citado en Guerra & Maldonado (2000, pág. 62)) [**Negrita propia**].

En el Congreso se mencionó la necesidad de establecer una normativa que acogiese las quejas de los gobiernos de los diferentes Estados miembros de la región y significase el que, aun respetando la independencia de acción que tuviese cada Estado, las normas resultantes tendrían origen en las demandas particulares, así como se evidenciaría su presencia como un elemento cohesionador de cobertura regional.

Desde Perú se continuó insistiendo en materializar una Asamblea hispanoamericana. En 1842 contó con respuesta afirmativa de Brasil, Buenos Aires, Bolivia, México, Ecuador y Chile (Guerra & Maldonado, 2000). Sin embargo, la idea de Congreso no lograba fructificar, hasta que en 1846 se volvió a insistir en la pertinencia de proceder a la celebración y del 11 de diciembre de 1847 al 1 de marzo de 1848, representantes de los Estados de Perú, Chile, Bolivia Ecuador y Nueva Granada, escenificaron la acción conjunta, en el primer Congreso Hispano americano concretado tras el de Panamá, aprobando un Tratado de Confederación que indicaba en su preámbulo:

“Ligadas por los vínculos del origen, del idioma, la religión y las costumbres, por su posición geográfica, por la causa común que han defendido, por la analogía de sus instituciones y, sobre todo, por sus comunes necesidades y recíprocos intereses, no pueden considerarse sino parte de una misma nación, que debe mancomunar sus fuerzas y sus recursos para remover todos los obstáculos que se oponen al destino que les ofrecen la naturaleza y la civilización” (Citado en Guerra & Maldonado (2000, pág. 64)).

Los proyectos se replicaban. Las alusiones a la necesidad de construir alianzas en aras de interés común tenían, habitualmente, el fin de adquirir capacidad de maniobra ante la acción extranjera, prioritariamente la acción económica, así como de ideales. Puesto que los auto-considerados civilizados, incluso siendo consciente de la herencia adquirida en los sistemas de gobierno, la estructura social, el idioma etc...continuaban construyendo teoría de valores y considerando a la región como un espacio incapaz de articular sus propios mecanismos para gobernarse. Es decir, indicaban que éstos requerían de una intervención externa que les guiara.

4.4 La denominación de latinoamericano. Identidad y nominación en la mitad de Siglo.

Con la idea unitaria asentada en diversos círculos de distintos espacios regionales, se dio lugar un debate que iba más allá de la propia pertinencia de la unión. Se abordó la cuestión

de la denominación de la resultante unidad territorial, ya que la región había sido renombrada en diversas ocasiones. Esto promovido porque desde el impuesto inicialmente Nuevo Mundo; pasando por “La Gran Colombia Continental” de Miranda o “la Gran Colombia” por Bolívar y Justo Arosemena- este último refiriéndose al territorio desde Panamá a Cabo de Hornos incluyendo a los territorios de México -; o cuando José María Samper en su obra denominó al proyecto “La Confederación Colombiana” (1859) como Colombia - con la anexión de toda la región desde México a Cabo de Hornos (Brasil inclusive)-, las denominaciones, así como la cobertura geográfica del proyecto, habían variado constantemente en el tiempo.

A este proceso denominador sumaron su granito de arena, de manera significativa, las figuras de Francisco de Bilbao⁴⁴¹ y José María Torres Caicedo, que fueron los autores que dieron auge a un concepto que pervive hoy en día en la región y en el mundo: la identidad latinoamericana.

En el ejercicio denominador éstos situaron como parte y causa de la construcción de un ente regional los factores comunes a los diversos territorios y gentes que habitaban el antiguo Nuevo Mundo, indicando que la homogeneidad que presentaba la región se correspondía con el término latino. Asignando el uso de éste para nombrar a aquellos que poblaban las tierras de América, desde México a Cabo de Hornos. Es decir, toda la región de ALC.

Sin embargo, aunque promotores del término, no fueron los primeros en mentarlo, ya que el uso del término “Latinoamérica” se supone de origen en escritos que se remontan a 1836, en Francia, de la mano de Michel Chevalier. El cual, en una recopilación de sus crónicas periodísticas acerca del viaje que realizó por Estados Unidos, desde fines de 1833 hasta fines de 1835, mentaba:

“América del Sur es, como la Europa meridional, católica y latina. La América del Norte pertenece a una población protestante y anglosajona” (Citado en Arturo Ardao (1986, págs. 160-161)).

De la relación que estableció Chevalier, diferenciando entre anglosajones y latinos, es de donde se cree que fue rescatado el término por los pensadores Caicedo y Bilbao.

⁴⁴¹ El chileno Francisco de Bilbao usó el término en varios de sus textos, pero cesó en su uso como protesta a la invasión francesa en México, y renegó con ello del origen latino (Guerra & Maldonado, 2000, pág. 42).

En todo caso, aplicando un proceso constructor similar al que había sido utilizado por las potencias europeas para elaborar el sentimiento de nación- a través de una justificación de la historia cultural, intelectual y política-, se puede afirmar que Caicedo fue el autor que armó el sentido del término y asentó internacionalmente un concepto de gran relevancia en el futuro: Latinoamérica.

“La raza de la América Latina,
al frente tiene la sajona raza,
enemiga mortal que ya amenaza”.

(Torres Caicedo, 1857, pág. IX)

Torres Caicedo, ilustrado con formación en diversas áreas del conocimiento, escribió textos reivindicativos abogando por una unidad regional. Lo cual consideraba necesario por el bien del conjunto y las partes. A esta tarea dedicó su tiempo cuando en 1861, durante su periodo en Francia, redactó *Las bases de la unión latinoamericana* (1961). Escrito donde plasmó su reconocimiento e identificación con aquellos postulados que indicaban la idoneidad de establecer una sola nacionalidad y una sola patria, en donde se constatará la agrupación de todas las tierras americanas de habla hispana, por medio de una confederación.

Torres Caicedo evidenció su postulado en el discurso que pronunció en el acto fundacional de la Sociedad de la Unión Latinoamericana (1879):

“La América del Norte es fuerte, porque está unida: la América Latina es débil porque se halla dividida. ¿Cómo remediar este último y enojoso estado de cosas? Hacer resueltamente una realidad del hermoso ideal de Bolívar: la Unión Latino-americana. ¿La unión política? No; la cuestión política pertenece al porvenir: la hora le llegará. Lo que hoy importa, con la escasez de población, con las inmensas comarcas aún incultas, las grandes distancias que es fuerza recorrer, y las defectuosas o incompletas vías de comunicación, es hacer que desaparezca la inferioridad que el aislamiento engendra en cada uno de los Estados latinoamericanos en punto a diplomacia, tratados de comercio y relaciones internacionales, por medio de la creación de una Confederación, Unión o Liga que reúna en un haz único y robusto todas las fuerzas dispersas de la América central y meridional, para formar de todas ellas una gran entidad, cuyos Estados conserven, cada uno en particular, su autonomía propia, aunque unidos por ciertos grandes principios debatidos en común” (Citado en Ardao (1993, pág. 143)) [Negrita propia].

Asimismo, Caicedo indicó como debía ser articulada la organización, así como las competencias que debían recaer en lo común. Abogando por un modelo confederado de Repúblicas Latino-americanas, en el que se estableciesen una serie de áreas concretas en las que se debería actuar al unísono en favor del “bien común”. Estas fueron recogidas en el proyecto que presentó en 1861 con el nombre: Bases para la formación de una Liga Latino-americana:

- a) *Ciudadanía común*: “El de **nacionalidad** de los hijos de todos esos Estados, que deberían considerarse como ciudadanos **de una patria común**, y gozar en todas esas Repúblicas de los mismos derechos civiles y políticos”;
- b) *Justicia*: “El del establecimiento de **un tribunal supremo**, que decidiera amigablemente acerca de cuestiones que se suscitaran entre dos o más Repúblicas Confederadas; y que , llegado el caso, **hiciera ejecutar sus sentencias por la fuerza**”;
- c) *Acuerdo Comercial Común*: “El de un sistema liberal en materias comerciales, sin excluir el comercio de cabotaje”;
- d) *Unificación del Sistema educativo*: “El de un sistema uniforme de enseñanza...”;
- e) *Ejército Común*: “ El de fijación de un continente de tropas y recursos para la común defensa”

(Citado en Ardao (1993, págs. 132-133))[**Negrita propia**].

Caicedo proponía un modelo organizativo similar a la idea que sustentan hoy en día los organismos supranacionales, cediendo los Estados competencias judiciales, legislativas, comerciales, sociales. Es decir, compuesta por órganos con capacidad de dictaminar sin la aprobación de los territorios particulares, en donde la identidad común actuaría de pilar y sustento del proyecto. Aunque al adoptar una modalidad confederada, se debían respetar ciertas competencias soberanas de los Estados, armonizando prácticas a través del órgano común supranacional.

La identidad unionista continuó siendo un pilar cohesionador y cabe destacar, en este sentido, las indicaciones del coautor de la difusión y asentamiento del concepto latinoamericano, Francisco de Bilbao. Éste, en su argumentación descriptiva de ALC, ensalzaba las características particulares que tenían los pobladores de la región en comparación con aquellos que no habían sufrido un proceso de mestizaje. Decía de los EEUU:

“No abolieron la esclavitud de sus estados, no conservaron las razas heroicas de sus indios ni se han constituido en campeones de la causa universal, sino del interés americano, del

individualismo sajón. Se precipitaron sobre el sur, y esa nación que debería haber sido nuestra estrella, nuestro modelo, nuestra fuerza, se convierte cada día en una amenaza de la autonomía de la América del Sur”(Citado en Casas (2007, pág. 118)).

La redacción de Bilbao indicaba que los latinoamericanos poseían otro modelo de construcción histórica en comparación con los americanos del norte y, como indicaba, poseían diferentes metas como comunidad. Es decir, las ideas sociales habían de ser diferentes, dado que el proceso de mestizaje y el acoplamiento entre culturas producido en ALC otorgaba una categoría diversa a la de los vecinos del Norte, y ésta no estaba compuesta únicamente por la herencia colonial.

Para afirmar tal cuestión, Bilbao se basó en un análisis de aquellos personajes célebres que se dieron cita en los procesos de independencia, visualizando una línea clara que diferenciaba entre los ciudadanos de la América del Norte y los de Latinoamérica. Indicó que la construcción social que se había producido, a causa de ser hijos de una sociedad mestizada con características pluri-étnica y multi-cultural, era totalmente diversa de la de EEUU. Por ello, Bilbao se refirió al ciudadano latinoamericano como aquel habitante, poblador de las tierras desde México hasta Cabo de Hornos, que no pretendía eliminar al otro, sino que se caracterizaba por su capacidad inclusiva de los otros. El latinoamericano era un ciudadano integrador.⁴⁴²

Y es que según Bilbao, el papel que desempeñaban los pueblos, los ciudadanos y los obreros, usando las revueltas como herramienta política de los de abajo, era fundamental para que se diesen los procesos de independencia. Puesto que la labor de escribir y profetizar que ejercían las élites, no lo consideraba hecho, ni por asomo, suficiente para alcanzar los procesos deseados. Bilbao creía en que las masas eran la auténtica fuerza y clave de una revuelta cuando la situación se volvía contraria a sus intereses. Entendía que la decisión última estaba situada, ineludiblemente, en los dictámenes resultantes de la soberanía popular.

“Ved esos bárbaros: los hombres del campo, los huasos, los gauchos, los llaneros, los jornaleros, los peones, en unas palabras, las masas, el pueblo. ¿Y queréis instituciones? ¡No! Es necesario la fuerza, el poder fuerte, la dictadura” (...). Los “partidos civilizados” piden pues, la “dictadura de las clases privilegiadas” (Citado en Casas (2007, pág. 119)).

⁴⁴² En algunas obras excluía a los brasileños por continuar bajo la forma imperial con Rey, y Paraguay por encontrarse en una dictadura.

4.5 Economía e ideas: factores relevantes en la concertación de fuerzas regionales a mitad de siglo XIX.

Las réplicas del proyecto unionista eran constantes y, aunque sin alcanzar cotas de éxito llamativo, no paraban en su empeño. En este caso se empezó a señalar al cambio de agentes de la SI con intereses y capacidades de influencia en la región. Se percibía que ya no eran los Imperios ibéricos el peligro, EEUU se iba situando como el agente relevante.

Así se recoge de las palabras del escritor José María Irisarri (1856), el cual ya percibía a EEUU y su intervención económica como una amenaza constante:

"Persuadido de que la falta de unidad y de acuerdo entre los diversos Estados Hispanoamericanos ha causado no pocas veces que los más de ellos hayan tenido que ceder por su respectiva debilidad a exigencias injustas de naciones poderosas **-y convencido de que este mal no tiene más remedio que el de la unión de los débiles para hacerse fuertes, formando entre ellos una confederación o una liga contra sus comunes enemigos-**, he pensado muchos años hace que el interés bien entendido de la América española exigía que se estableciese esta confederación y esta alianza entre todos los Estados soberanos que se hallan esparcidos desde los confines boreales de México hasta los australes de Buenos Aires y Chile" (Citado en Guerra & Maldonado (2000, pág. 68))
[Negrita propia].

El reseñar continuamente las diferencias existentes entre los intereses externos y aquellos de origen regional, en donde el agente externo trataba de apoderarse de capacidad de decisión e influir en cuestiones soberanas, era constante en la percepción analítica regional. Aquellos autores que, observando el devenir de los Estados creados y de sus capacidades como agentes soberanos, así como la situación económica y política de los actores externos, se mostraban críticos por una parte y, paralelamente, elaboraban propuestas a partir de un sentimiento de opresión. Eran acciones que reflejaban una percepción clara y común respecto a la existencia de injerencia externa en la práctica interna.

En este sentido, ya había advertido Juan Bautista Alberdi (1838) anteriormente, partiendo del estudio sobre las causas de la crítica situación económica de los Estados latinoamericanos, que una de las manifestaciones de esa perturbada relación era la IEI- la deuda-, ya que la caracterizaba como un mal endémico de dominación e injerencia en la soberanía, tanto en su cara interna como en el aspecto interdependiente, al sesgar la capacidad de negociación:

“...la América del Sur, emancipada de España, vive bajo el yugo de su deuda pública. San Martín y Bolívar le dieron su independencia, los imitadores modernos de esos modelos la han puesto bajo el yugo de Londres” (Citado en Vitale (2002, pág. 31)).

Con esta idea como eje argumental del análisis había escrito su obra *Memoria sobre la conveniencia y objetivos de un congreso general americano* (1844), en donde incidía en la necesidad y conveniencia de fomentar la concertación de intereses en la región mediante la unificación de prácticas, fundamentalmente, de carácter económico, en pos de adquirir capacidad para que la emancipación fuese real (Guerra & Maldonado, 2000).

"El nuevo congreso, pues, no será político, sino accesoriamente: su carácter distintivo será el de un congreso comercial y marítimo..." (Citado en Guerra & Maldonado (2000, pág. 65)).

Además de la deuda como mal endémico de los nuevos Estados, Alberdi, siendo gran jurista y económicamente liberal, afirmaba que existía un perjuicio económico que resultaba del librecambismo existente entre la región y el exterior, viendo que de los resultados de las negociaciones y de las empresas constituidas en la región, se producían efectos perjudiciales para la soberanía de los Estados particulares y de la región en conjunto. Situación ante la que Alberdi se mostraba partidario de cortar relaciones, suprimir la entrada de productos extranjeros y dar apoyo a la industria nacional que supliría al externo⁴⁴³.

En este sentido, percibiendo que las RRH tenían un efecto que desposeía de capacidad de decisión en varios sectores a la región, y quizás aventurando que en un futuro la desposesión podría agravarse por la entrada de capital extranjero, Alberdi elaboró escritos en los que, con fijación en la libertad como principio fundamental- este era admirador ferviente de John Locke-, se centró en determinar cuáles eran las claves de los procesos que desposeían de capacidad decisoria a la región.

Alberdi no estaba equivocado en su percepción según Luís Vítale (2002):

“El proceso de acumulación de capital, que hasta la década de 1880 era de carácter nacional, experimentó un cambio significativo **con la penetración del capital financiero** en el inicio de la era imperialista mundial. **Las riquezas nacionales comenzaron a pasar a manos de los empresarios extranjeros, iniciándose el proceso de semi-**

⁴⁴³ En este sentido se asemejaban parcialmente a las medidas propuestas por la CEPAL y las practicas ISI. Véase Capítulo I.

colonización de América Latina y la progresiva descolonización de sus riquezas”
(Vitale, 2002, pág. 32) **[Negrita propia]**.

Situar el peligro que conllevaba la práctica económica y el proceso de industrialización como justificador de la creación de una unión americana ante los agentes externos, daba cuenta de hasta qué punto el imaginario europeo había sido instalado en la sociedad de América del Sur. Señalando Alberdi que, si se seguían los principios la libertad europeos, la región estaría supeditada al capital financiero extranjero en su desarrollo; y en caso de que la plusvalía continuase siendo negativa del lado latinoamericano, la economía quedaría eternamente supeditada a agentes externos y, por lo tanto, la soberanía quedaría entredicho si la capacidad de decisión estaba sujeta a dictámenes externos en el campo económico.

En referencia a este hecho, Alberdi indicó que **la reproducción de las ideas sostenidas por los Estados europeos habían impregnado la constitución de los Estados** e incluso el concepto de libertad económica, expresado en las constituciones, era copia una cuasi-exacta de aquellos modelos de pensamiento que habían promovido los procesos de conquista. Que debido a ello, se debía abordar como tarea a realizar a medio plazo: el repensar y cuestionar la influencia europea, en aras de impulsar la construcción de un pensamiento propio y particular, en donde la lucha de ideas determinaba las prácticas en cuestiones económicas, ya que formaban parte de lo mismo. Por ello, Alberdi (1838) declaraba que la guerra de la independencia no había llegado a su fin.

“Podemos pues continuar despreciando las costumbres, es decir, las ideas, las creencias, las hábitos. ¿Qué tienen que ver ellas con la constitución de los pueblos?” (Alberdi, 1838) **[Negrita propia]**.

¿Eran importantes las ideas? ¿Significaba la advertencia de Alberdi que si se replicaban las ideas externas acabarían las sociedades copiando modelos de vida iguales a los Estados que habían construido su sociedad a partir de conquistas y esclavizando a sociedades? La cuestión es de difícil respuesta. Sin embargo, si es plausible que la desigualdad que existía entre Estados se ha desplazado al interior de los mismos y quizás, ante la imposibilidad de someter a otras regiones, haya que someter a los que habitan el interior de las mismas. Habría que analizar esta cuestión.

Otros autores destacados de la época también se postularon en favor de la corriente unionista, entre los que destaca el aportado desde Chile – Estado que se caracterizó por una gran producción de pensamiento en favor de la unión-. Se enunciaba otro proyecto muy completo al respecto. En este caso, el emitido desde la escuela chilena formada por Joaquín Lazo; Manuel A. Matta; Manuel Recabarren; Isidoro Errázuriz y Benjamín Vicuña Mackenna, llamado *Bases Para la Unión Americana* (1862).

La Unión que propusieron tenía como ejes la promoción de una identidad común y un derecho común. Elementos a articular por medio de un ente confederado, en el que se debían concertar que: a) los ciudadanos poseyesen los mismos “...derechos civiles y políticos...”; b) que los Estados viesan suprimidas sus aduanas con el exterior de los componentes de la unión y pasaran a ser cuerpo de autoridad regional la Unión Americana; c) la creación de un congreso de la unión, elegido por las repúblicas, que tuviese *atribuidas competencias* para impulsar la unión (*moneda única, pesos y medidas, leyes conjuntas, etc...*) y la tarea de “... establecer y mantener las relaciones diplomáticas con los demás países” ; y d) constituir *ejércitos comunes*, a partir de las tropas particulares y las cuáles respetarán la soberanía interna de los Estados “...para el arreglo de negocios internas, en todo lo que no se oponga a las atribuciones que expresamente se confieren al Congreso de Plenipotenciarios...” (Lastarria, Covarrubias, María, & Machenna, 1862, págs. 393-397). Es decir, este proyecto indicaba como apropiado el establecer un órgano supranacional con capacidad de dictaminar, en donde los Estados cediesen ciertas competencias en los aspectos de armonización de políticas internas, y la totalidad en asuntos externos a la región.

En definitiva, cabe señalar que la construcción o asentamiento de identidad, las prácticas económicas y el impacto de las ideas externas, se instituyeron como las áreas más relevantes en todo proceso de construcción de unidad regional.

5. La injerencia externa cambió de agentes. Ideas subyacentes en las prácticas y réplica de América Latina y el Caribe.

Si bien hay que señalar que en los primeros años tras los procesos de independencia, los Imperios español y portugués habían continuado siendo los grandes actores de referencia en la región latinoamericana, con la decadencia de éstos y el ascenso de EEUU como actor

de envergadura en las RRII, se significó un cambio de roles en los agentes externos que incidían las prácticas políticas y económicas de la región.

A medida que los EEUU e Inglaterra se situaban como agentes relevantes en la SI, implementaron su presencia en la región. Aunque hay que señalar que este proceso no fue repentino y ya se había ido fraguando su presencia con anterioridad, incluso a la aparición de la Doctrina Monroe. Aunque tras ésta se potenció con contundencia.

El cambio en las potencias con capacidad de impacto en las diversas prácticas de la región, ofrece dos perspectivas de análisis que merecen ser rescatadas. Por una parte, es interesante repensar el impacto regional que sufrió la institucionalización de las prácticas en torno a la regulación de la acción externa que evidenciaron la presencia de la Doctrina Monroe y el Panamericanismo; y por otra, analizar la reacción que provocaron estas prácticas en el pensamiento unionista en los diversos agentes regionales.

5.1 La doctrina Monroe. La soberanía a cuestión.

Ahondando en los orígenes de la doctrina Monroe, se observa que ésta surgió gracias al impulso que produjo una recomendación que emitió el Canciller inglés Canning a los EEUU, que, con el objetivo de prevenir y avisar de una posible oleada de acciones con aspiraciones de conquista por parte de las potencias europeas pretendiendo aprovechar la decadencia española, emitió un comunicado en el que manifestaba la conveniencia de armar algún tipo de estrategia que frenase las posibles acciones y, con ello, promover el asentamiento de sus posiciones en la región independizada⁴⁴⁴.

Los mecanismos de política interna estadounidense, viendo la posibilidad de adquirir liderazgo, y al mismo tiempo proteger el continente ante la posibilidad de que fuertes potencias se estableciesen en su área de influencia, dieron cabida a una práctica política que pretendía albergar los dos temores: la doctrina Monroe (1823).

La declaración de ésta tuvo un gran impacto en las RRII y situaron a los EEUU como el Estado con mayor influencia política y económica- junto con Reino Unido- en la región de ALC.

La doctrina Monroe recogía el siguiente contenido:

⁴⁴⁴ Resumen de Carta emitida por Canning en Fabela (1957, pág. 49).

- a) “...**los continentes americanos**, por la libre e independiente condición que han sumido y que mantienen, **no deberán ser considerados ya como susceptibles de futura colonización** por cualesquiera de las potencias europeas”.
- b) “No hemos intervenido ni intervendremos en las colonias o dependencias de cualquier potencia europea”.
- c) “Debemos declarar sinceramente en atención a las amistosas relaciones que existen entre los Estados Unidos y aquellas potencias, que cualquiera tentativa de su parte para extender su sistema a otro lugar de este hemisferio, lo consideraremos como peligroso para nuestra paz y tranquilidad. Pero **cuando se trate de gobiernos que hayan declarado y mantenido su independencia, y de acuerdo con justos principios, hayan sido reconocidos como independientes por el gobierno de los Estados Unidos; cualquiera intervención de una potencia europea, con el objeto de oprimirlos, o de dirigir de alguna manera sus destinos, no podrá ser vista por nosotros sino como la manifestación de una disposición hostil hacia los Estado Unidos;**
- d) “Nuestra política con relación a Europa, adoptada al comenzar las guerras que desde hace tiempo han agitado aquella parte del globo, es, sin embargo, la misma, a saber: no intervenir en los asuntos interiores de ninguna de aquellas potencias”.

(Citado en Fabela (1957, págs. 7-8)) **[Negrita propia]**.

La declaración emitida exponía las líneas de actuación de los EEUU respecto al territorio continental: 1ª) no intervendrán en colonias europeas; 2ª) no intervendrán en asuntos internos de las potencias europeas; 3ª) no permitirán nuevas colonizaciones; 4ª) se opondrán a las intervenciones europeas en las nuevas repúblicas de Latinoamérica (Fabela, 1957, pág. 9).

Cuando la declaración llegó a conocimiento de los líderes latinoamericanos, incluso Bolívar mostró gratitud a la misma, al percibir que, en cierto modo, se apoyaba y se impedía la reconquista de España por parte de los EEUU. Esta percepción fue el hecho que motivó que una delegación de los EEUU fuese invitada al citado Congreso de Panamá.

Por otra parte, la posición de los europeos ante la Doctrina Monroe se podría resumir, con gran agudeza, en el enunciado que emitió el periódico *L'Etoile* (1823) tras su emisión:

“¿Con qué títulos, las dos américas desde Hudson hasta Cabo de Hornos deben quedar ahora bajo el inmediato control de Estados Unidos?” (Citado en Fabela (1957, pág. 55)).

El devenir de los acontecimientos incidió en que la cuestión del respeto a la soberanía, como categoría adquirida por los nuevos territorios, se situase como el eje principal sobre

el que giraría el debate en las RRII. Si por una parte, el reconocimiento de la soberanía legal internacional a “algunos” territorios de ALC les otorgaba a los Estados la categoría de soberanos, al haber ejecutado un reconocimiento formal los EEUU a los Estados de nueva creación y, por lo tanto, promoviendo su admisión en la SI como agentes soberanos; este acto también afectaba a la soberanía externa de los Estados europeos, ya que veían en la declaración una amenaza a su capacidad de acción en el exterior, significándose claramente en este territorio.

En este contexto, aun teniendo la Doctrina un significado ambiguo, incluso para los propios dirigentes estadounidenses, éstos no dudaron en aludir a la misma cuando lo consideraban oportuno. De modo, que con el paso del tiempo se fue asentando la misma como un “criterio” de las RRII.

En sus inicios, ante las dudas sobre el alcance de la misma, los diferentes Estados latinoamericanos enviaron pesquisas al Gobierno estadounidense, en busca de aclaraciones sobre el alcance de dicha Doctrina. Encontrando una respuesta ambigua⁴⁴⁵. Pero, aun dejando ciertas cuestiones abiertas, es cierto que las declaraciones de los EEUU no ofrecían ningún tipo de duda en un sentido concreto: no existía compromiso oficial ante cualquier solicitud de intervención en auxilio de los recientemente independizados; y la intervención y ayuda que ejercerían los EEUU sería siempre una decisión independiente y particular⁴⁴⁶.

EEUU no solo no cumplió con aquel supuesto ideal con el que se fraguó en la Doctrina a ojos latinoamericanos, sino que operó ambiguamente. Lo que se observa, claramente, al analizar algunas de las acciones que llevó a cabo tras la declaración: 1ª) evitó la intervención europea para intervenir en Cuba, Haití, Santo Domingo, Colombia, Nicaragua, México, Honduras, Guatemala...; 2ª) las intervenciones en Cuba, Santo Domingo, Haití y Nicaragua, no fueron acuerdos, sino que se trató de intervenciones que injerían la

⁴⁴⁵ Muestra de la ambigüedad en el uso y en la interpretación de la Doctrina lo reflejó claramente James Knox Polk (1795-1849), undécimo presidente de los EEUU, ya que cuando aún ejercía de diputado de la cámara había manifestado que en el caso de México: “...nosotros debemos siempre mantener el principio de que los pueblos de este Continente, son los únicos que deben decidir sus destinos” (Citado en Fabela (1957, pág. 66)). Y sin embargo, cuando pasó a ejercer de presidente de los EEUU, dada la ambigüedad existía espacio para que su interpretación de la Doctrina cambiase radicalmente, y se refería a que la misma aludía al no:

”...establecimiento de un poder cualquiera (en ALC), quedando prohibido Europa; pero **nosotros tenemos carta blanca para colonizar, conquistar e intervenir cuando haya lugar**. Sin duda nosotros **hemos retirado derechos a los europeos, pero se los hemos quitado para apropiárnoslos** y aprovecharlos solos, a gusto nuestro, **sin respetar a los otros Estados de Nuevo Mundo**” (Citado en Fabela (1957, pág. 67)) [**Negrita Propia**].

⁴⁴⁶ Brasil, Colombia y Argentina emitieron notas al gobierno Estadounidense requiriendo cuál y en qué grado los EEUU se comprometían con los procesos de independencia y cómo actuarían de acuerdo con la emisión de la Doctrina. (Fabela, 1958).

independencia por medio de acciones militares, diplomáticas, políticas y económicas; 3ª) intervinieron en la colonias europeas (contrario a la Doctrina): Cuba, Puerto Rico y Filipinas, para adquirirlas y disponer de sus recursos; 4ª) no se protegió a las colonias de las intervenciones europeas: España en Tampico(1829), Callao (1863), Valparaíso(1865); Francia en México(1838 y 1865), Francia e Inglaterra en Buenos Aires y Montevideo (1840 y 1845); Alemania, Italia e Inglaterra en Venezuela (1902), etc...

La alusión a la doctrina se caracterizó en su práctica por la no adopción de una posición formal. Las diferentes interpretaciones que tenían cabida en la doctrina, y por lo tanto a las que pudiesen acogerse los presidentes o ministros por parte de los EEUU en el tiempo, no comprometían en nada el papel de la nación con el exterior, debido a que según la Constitución estadounidense debe ser el Congreso el que establezca un modo de acción permanente. Sin esa aprobación la doctrina se encuentra constantemente en un vacío de compromiso, en el que todo dependerá de la interpretación arbitraria de cada gobierno.

De modo, que como indica Isidro Fabela (1957):

“... la doctrina Monroe ha llegado a ser en la historia internacional de los Estados Unidos... el expediente cómodo que aparece y desaparece cuando conviene a la Casa Blanca; que se aplica de muy diversas maneras, no según el espíritu de Monroe, sino de acuerdo a las necesidades políticas y financieras de los Gobiernos de la Unión; y lo mismo ha servido para permitir las intervenciones europeas que la Doctrina quiso evitar, que para realizar despojos, como los de México, Colombia, Puerto Rico, que para emprender una conducta hegemónica y conquistadora...” (Fabela, 1957, pág. 63).

En este sentido cabe señalar que, además de que el siglo XIX evidenció el cambio de potencias con capacidad de influencia e intervención exógena en la región, este hecho influyó determinantemente en la modalidad de las intervenciones que se produjeron en ALC (militares, políticas, diplomáticas y económicas). Entre las que resalta la importancia que adquirió el adentramiento en la región de los sectores industriales de aquellos actores que habían adquirido relevancia en el contexto internacional. De hecho, atendiendo a los datos, por ejemplo, analizando la IED se evidencia como los EEUU e Inglaterra se situaron a la cabeza de aquellos que más capital habían destinado a ALC a finales de siglo (*Survey of Current Bussines, del Departmente of Commerece* (1965) citado en Haya de la Torre, (2010, pág. 103)).

El debate en torno a qué tipo de acción adquiriría relevancia y era determinante en las prácticas internacionales, una vez reconocida la soberanía legal internacional, se había hecho evidente. Y ya en 1881, al analizar los discursos se vislumbraba que el comercio era señalado como el mecanismo que adquiriría el papel primordial en términos de relación y, por lo tanto, situándose como el eje en torno al que giraba el interés de las naciones por manifestar su capacidad de decisión, es decir, su soberanía en el sentido schmittiano.

En este sentido y atendiendo a la relación de los EEUU con América, es relevante y representativo el cambio el mensaje emitido por los diferentes agentes. Como evidenció el secretario de Estado de los EEUU John Baine en la I Conferencia Panamericana, cuando manifestó que “...las cosas habían madurado y que **se acercaba el momento en que Estados Unidos podría desplazar a Europa en el comercio con América**” (Citado en Béjar (2002, pág. 178) **[Negrita propia]**).

El devenir de los hechos evidenció como los dirigentes de los EEUU fueron paulatinamente incrementando su atención a su capacidad de intervención, mediante la reiterada manifestación de autopercepción de autoridad suprema que se atribuían sobre el papel que ejercían los EEUU en el Continente.

Ya cerrando el siglo XIX, en 1898, durante el conflicto acontecido entre Gran Bretaña y Venezuela, significativas fueron las manifestaciones del Secretario de Estado de EEUU en una nota que envió a Reino Unido, manifestando:

“**Hoy los Estados Unidos son, de hecho, los soberanos del Continente Americano** y su voluntad tiene fuerza de Ley en las materias en que ellos juzgan conveniente intervenir”
(Citado en Fabela (1957, pág. 176)) **[Negrita propia]**.

En el comienzo de siglo XX continuaron produciéndose acontecimientos que evidenciaban la atribución de capacidad de decisión y supremacía estadounidense. El articulado del Tratado *Hay-Pauncefote* (1901), que otorgaba de manera tácita un reconocimiento de la hegemonía sobre el espacio de Centro-América y Caribe de los británicos- respetando las inversiones de éstos en la región y sus intereses en Sudamérica-, situaba a los EEUU como el principal actor en la región latinoamericana. Evento que dio comienzo lo que se denominó la política del *Big Stick Diplomacy* y la *Dollar Diplomacy*, a partir de la declaración del presidente de los EEUU Teodoro Roosevelt en su mensaje al Congreso el 6 de Diciembre de 1904:

“Lo único que este país desea es ver a las naciones vecinas estables, ordenadas y prósperas. Cualquier país cuyo pueblo se conduce bien, puede contar con nuestra cordial amistad. Si una nación demuestra que sabe conducirse con una medida razonable de eficiencia, así como de decencia, en asuntos sociales y políticos; si mantiene el orden y paga sus deudas, no tiene por qué temer interferencias por parte de los Estados Unidos. Una mala conducta crónica o una impotencia que tiene por resultado el general aflojamiento de los lazos de una sociedad civilizada, en América como en otro sitio, puede finalmente requerir la intervención de alguna nación civilizada; y en el hemisferio occidental, la adhesión de los Estados Unidos a la doctrina Monroe puede ser autoobligable, no importa con cuánta renuencia por su parte cuando se trata de flagrantes casos de semejante mala conducta o impotencia, a actuar como una potencia policiaca internacional” (Fabela, 1958)[Negrita propia].

La declaración en sí, junto con las acciones anteriores y posteriores de los EEUU, evidenciaba la puesta en marcha de un proceso de auto-atribución de capacidad para dictar cuándo y cómo se intervendría en cualquier Estado latinoamericano, bajo un criterio arbitrario que juzgaría si los Estados de Latinoamérica estaban obrando de acuerdo a una conducta propia de un país “civilizado” o no. En caso negativo era en el momento en el que se autoproclamaban defensores de la libertad y, claramente, se auto-legitimaban para intervenir.

Mediante estas prácticas EEUU se atribuía competencias no otorgadas mediante un acto soberano y, arbitrariamente, se auto-concedía la capacidad de juzgar en el interior de otros Estados. Por lo que en caso de detectar que una sociedad decidía soberanamente instaurar un tipo de sistema no acorde a las ideas de comportamiento contenidas en los postulados estadounidenses, en nombre de la “civilización”, los EEUU podrían intervenir sin respetar la soberanía de los Estados, violándola en sus aspectos, internos, interdependientes y externos⁴⁴⁷. Los casos de Haití, Santo Domingo y Nicaragua, dieron cuenta de esta práctica. En éstos se intervino mediante el uso de la fuerza militar e instaurando autoridades estadounidenses en las instituciones, justificando la acción principalmente en torno a tres ejes: a) la no aceptación de las prácticas políticas o formas de Estado de los Estados (principalmente si las medidas adoptadas incidían en las prácticas económicas); b) por el impago o modo de pago de las deudas contraídas con los otros Estados; c) para evitar la injerencia de los Estados europeos. Cualquiera de los contextos señalados era asumido por

⁴⁴⁷ Las prácticas se asemejaban a aquellas señaladas por los primeros conquistadores, como se señaló en los Derechos de Conquista enunciado en este capítulo. Pareciere que los EEUU si habían instituido unas prácticas heredadas de los Estados Europeos.

los EEUU como actos que les legitimaban para adoptar la decisión de, en nombre de la “rehabilitación” de los países, intervenir y así lograr recomponer los Estados y dirigirlos hacia la estabilidad “civilizada”.

La continua alusión a la doctrina el incitó que se abordase el debate en torno a su cabida dentro de los principios del derecho. Hay que señalar que la doctrina Monroe no responde al derecho y no constituye DI, más bien se trata de una declaración “particular” del 5º presidente de los EEUU, que no compone un sistema con estructura que pueda ser comprendido por los otros agentes. Es más bien un acto de fuerza que declara y aplica un diferente trato dependiendo de un criterio particular, diferenciando claramente entre Europa y América. Lo cual es contrario al derecho de gentes y no constituye norma jurídica (Fabela, 1957).

A este respecto, indicó el jurista Alemán Fran Vons Litz que la doctrina Monroe...

“...no es una norma jurídica de Derecho Internacional, sino un principio de la política mundial norteamericana, que se acomoda a las circunstancias, con lo cual queda totalmente eliminada la esfera del Derecho Internacional” (Citado en Fabela (1957, pág. 84)).

La vigencia de la doctrina Monroe y la pretensión de no renunciar a ella por parte de los EEUU, se hizo evidente cuando se produjo una petición formal para que se respetase la misma internacionalmente, mediante su inclusión en el texto constitutivo de la SN por parte del presidente Wilson. La capacidad e influencia de los EEUU se puso de manifiesto cuando esta doctrina, ajena al DI, fue incluida en el articulado de la SN - aunque señalar que el Senado de los EEUU, finalmente, rechazó el formar parte de tal institución-.

El Art. XXI:

“Los compromisos internacionales, tales como los tratados de arbitraje, y las inteligencias regionales, (ententes regionales), como la doctrina de Monroe, que aseguran el mantenimiento de la paz, no se consideran incompatibles con ninguna de las disposiciones del presente pacto” (Sociedad de Naciones, 1919).

Ya en 1905, los EEUU, tras los primeros conflictos que habían tenido con México en los años 1835 y 1861, adoptaron un *modus operandi* similar al que había sido practicado por los Estados Europeos con anterioridad. Ya que si bien la doctrina era ambigua, había un asunto en el que no: todo quedará bajo la interpretación de los EEUU. Como de hecho

evidenciaba el que se interviniera en República Dominicana tras la amenaza de no pagar la deuda; EEUU invadió y el 20 de Enero de ese mismo año se “acordó”, bajo coacción militar, el control de las rentas aduaneras. Este acto fue muy relevante en términos de soberanía, ya que dio como resultado un acuerdo forzado para la República Dominicana, en el que el 45% de las rentas sería asignado al gobierno dominicano, y el 55% se destinaria a cubrir la deuda. La República Dominicana fue presionada y se “comprometió” a no cambiar las prácticas en emisiones de bonos o tarifas, sin contar con la aprobación de EEUU. En 1911 ante otra amenaza de no pago, la armada se presentó de nuevo. Es decir, la decisión propia debía coincidir con la externa. De caso contrario, invasión. Al mismo tiempo, en 1909 se produjo la invasión de Nicaragua por parte de EEUU⁴⁴⁸.

Estas acciones revelaban que existía una estructura internacional, en la que los Estados independientes latinoamericanos tenían que lidiar con: el que la decisión sobre el cómo se ejecutaban sus prácticas se viesan amenazadas por unas relaciones con las potencias, caracterizadas por la constante amenaza interventora; así como por la asimetría económica y militar, además de la ideológica, de la que presumían los Estados “civilizados”. Contexto en el que las grandes potencias se autoproclamaban capacitadas, en base a sus ideas, para inmiscuirse en los diferentes aspectos de la soberanía (interna, westfaliana e interdependiente), en caso de entender que las acciones o modos organizativos de los Estados de ALC no adoptaban prácticas que obedeciesen a los que los Estados “civilizados” consideraban “bien común”.

En este contexto, la alusión a la doctrina Monroe siguió formando parte de la diplomacia estadounidense hacia ALC. Se reflejó, de nuevo, en un discurso, el que realizó el Secretario de Estado de EEUU Hughes en 1923 ante la Asociación del Foro Norteamericano, titulado: Algunas observaciones acerca de la doctrina Monroe⁴⁴⁹. El cual adquirió cierta

⁴⁴⁸ Un análisis sobre las acciones extranjeras en la primera mitad del siglo XX es expuesto en (Selser, 2001).

⁴⁴⁹ El discurso decía así:

“La doctrina de Monroe no es una declaración legislativa, aunque haya sido varias veces aprobada por el Congreso norteamericano; ni es parte del Derecho internacional sancionada por el consentimiento de las potencias civilizadas; ni ha sido definida en ningún convenio internacional; no es tampoco un precepto constitucional... Es una política declarada por el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos y repetida, ya en una forma, ya en otra, por los presidentes y secretarios de Estado en el curso de nuestras relaciones exteriores. Su importancia se funda en el hecho de que, en sus elementos esenciales, tal como la declaró el presidente Monroe y fue reiterada y firmemente sostenida por nuestros más reputados hombres de Estado, ha sido, durante un siglo, y continúa siendo, parte integrante de nuestro pensamiento y tendencias nacionales, y la expresión de una convicción profunda, que ni el trastorno ocasionado por la Gran Guerra y nuestra participación en ella en territorio europeo, han logrado desarraigar ni modificar en sus fundamentos. [...] 1) La política de Monroe no es una política de agresión: es una política de defensa propia. 2) Como la política incorporada en la doctrina de Monroe es puramente de los Estados Unidos, el Gobierno de

relevancia puesto que, como parte del mismo, se expresaron cinco aspectos fundamentales atribuidos a la doctrina desde la perspectiva estadounidense: 1) se trataba de una política de defensa propia; 2) no ataca la independencia ni la soberanía de otras naciones; 3) impone “derechos” o/y “deberes” a los EEUU con los países débiles limítrofes; 4) no se opone ni al panamericanismo ni a la cooperación con Europa; 5) los EEUU se reservan el derecho de interpretarla al tratarse de una política nacional, y no están ligados a deseos de otras naciones (Fabela, 1957).

Evidentemente, la declaración evidencia que el paso del tiempo no influía determinantemente en la ambigüedad que contenía dicha doctrina, y la interpretación del Secretario, casi 100 años más tarde de la aparición, reflejaba la permanente auto-atribución de capacidad de decidir en términos continentales: el cuándo y el cómo se ejecutaba una intervención. Como de hecho habían evidenciado los diversos acontecimientos.

Sin embargo, un elemento determinante en la evolución de la doctrina Monroe es que en ningún momento se declaró EEUU soberano, en términos de legalidad internacional, de los territorios- con la excepción del caso particular de Puerto Rico-. Dejando un espacio a que, de acuerdo con la soberanía legal internacional, en el instante que la región o un Estado se hiciese con capacidad de reprimir esta acción, al ser reconocido como ente soberano, podría, en términos de soberanía, operar y regular su propia administración. Por lo que la capacidad para articular un mecanismo de empoderamiento, para que ese reconocimiento se hiciese efectivo, era el asunto que poseía mayor relevancia en ese contexto.

5.2 Las inversiones como práctica conflictiva. Reflexión de principios de siglo XX.

La práctica inversionista estadounidense fue incrementándose en la región desde mediados de siglo mediante la acción de diversas empresas- entre las que destaca el rol que jugó la *United Fruit* alrededor del 1900 en términos de volumen de capital-. Éstas emprendían negocios en producción de materias primas, combustible o infraestructuras- como por

éstos se reserva su definición, interpretación y aplicación. 3) La política de Monroe no viola la independencia y la soberanía de las otras naciones americanas. 4) Hay ciertamente condiciones modernas y acontecimientos recientes que no pueden pasar desapercibidos para nosotros; nos hemos hecho ricos y poderosos; pero no hemos salvado la necesidad, en justicia para nosotros y en justicia para los demás, de proteger nuestra futura paz y seguridad. 5) La doctrina de Monroe, como se ve, no es un obstáculo a la cooperación panamericana; al contrario, ofrece las bases necesarias para esa cooperación en la independencia y seguridad de los Estados Unidos” (Citado en Selser (2001, pág. 424)).

ejemplo revelan las inversiones ocurridas en Haití con la construcción del ferrocarril en 1910- (Dallanegra Pedraza, 1994; Vitale, 2009; Selser, 2001).

Y es que ALC, y en especial la región central, veían como las inversiones estadounidenses y británicas penetraban en su interior, haciéndose con grandes latifundios y apoderándose de estructuras de explotación de productos estratégicos. Lo que limitaba la capacidad de articular sus políticas particulares a los Estados “soberanos” de ALC; así como les restaba capacidad para empoderarse y ejercer como agentes categorizados de soberanos.

Ante la constante injerencia, de nuevo, diversos Estados empezaron a manifestarse en contra. En Cuba, por ejemplo, se produjeron relevantes manifestaciones por parte de personajes críticos con las prácticas como Salvador Massip (ex-embajador de Cuba en México), Sandalio Junco (líder obrero) y Alfredo. E Nogueira (ex-delegado de Cuba), que conjuntamente pusieron de manifiesto su preocupación durante la celebración de la Séptima Conferencia Panamericana (1933), que reflejaba en cierto sentido la percepción de regional, indicando que:

“Ningún pueblo de América sufre con tanta intensidad la explotación y opresión de las fuerzas imperialistas como nuestra patria.

“El proceso de penetración realizado por los Estados Unidos de Norteamérica en la zona del Caribe ha sido determinado, en el caso de Cuba, por las siguientes exigencias estratégicas:

- a) Dominio estratégico del Golfo de México y del Mar Caribe mediante el control de todos los accesos a ellos y la posición de bases navales y aéreas. (Guantánamo, Nuevitás, etc...) que hacen a México, Centro América, Colombia, Venezuela y a las Antillas, prisioneros virtuales de los Estados Unidos de Norte América en caso de guerra
- b) **Acaparamiento y control de fuentes de materias primas.** (concesiones mineras, latifundios, etc...)
- c) **Obtención de mercados consumidores de la producción excedente norteamericana (Tratados comerciales, etc...).**
- d) **Campos de inversión de capitales norteamericanos.**

“Estos cuatro puntos señalados son **la directriz de la política norteamericana** en Cuba, que obtuvo **el control de la economía cubana** por medio de la Enmienda Platt y del

Tratado Permanente, sustituidos, en 1934, por el Tratado de Reciprocidad firmado entre Cuba y los Estados Unidos de Norte América”

“Durante el curso de los últimos veinte años, el capital norte-americano en Cuba ha alcanzado la **cifra de 1.400 millones de dólares, invertidos**, principalmente, en las dos industrias fundamentales del país, azúcar y tabaco, y en empresas de servicios públicos. **El ochenta por ciento de la tierra productiva del país se encuentra en poder de compañías y particulares norteamericanos.** Los poseedores de pequeñas parcelas de tierra dedicadas al cultivo del azúcar y del tabaco, sujetos casi totalmente al mercado norteamericano para la venta de esos productos, nunca alcanzan liquidación de sus deudas por las oscilaciones constantes de los precios, controlados por el comprador.

“Los Grandes latifundios de propiedad norteamericana, no están municipalizados; ejercen el monopolio del comercio (tiendas de raya); controlan las fuerzas armadas dentro de sus límites; y disfrutan de sub-puestos con aduanas privadas que los complementan como pequeños estados dentro del Estado Cubano”

“**Para poseer el control absoluto de la economía cubana, los Estados Unidos de Norte América se han visto forzados a ejercer, asimismo, una influencia directa en la política interna del país.** Cuando la fundación de la Republica en 1902 impusieron la incorporación de la Enmienda Platt ^[450] en la Constitución de la República y a don Tomás Estrada Palma como Presidente de la misma”

“**Desde Entonces, todos los gobiernos cubanos sucesivos, impuestos o sostenidos por ellos a espaldas de la opinión pública cubana han seguido la nefasta labor de entreguismo de nuestras fuentes de riqueza,** comprendiendo desde las actividades agrícolas hasta la casi totalidad de los servicios públicos” (Citado en nota 17 Fabela (1958, págs. 141-142)) **[Negrita propia]**.

En el texto se indicaban, de manera evidente, la relación directa que atribuían los autores al papel de la IED en la articulación de las prácticas de un actor externo en el interior de los

⁴⁵⁰ En la Enmienda Platt se evidencia, de forma clara, el acto de injerencia en sus Art. I y III:

Artículo I: ...el Gobierno de Cuba nunca celebrará con ningún Poder o Poderes extranjeros ningún Tratado u otro convenio que pueda menoscabar o tienda a menoscabar la independencia de Cuba ni en manera alguna autorice o permite a ningún Poder o Poderes extranjeros, obtener por colonización o para propósitos militares o navales, o de otra manera, asiento en o control sobre ninguna porción de dicha Isla.

Artículo III: ...el Gobierno de Cuba consiente que los Estados Unidos pueden ejercitar el derecho de intervenir para la conservación de la independencia cubana, el mantenimiento de un Gobierno adecuado para la protección de vidas, propiedad y libertad individual y para cumplir las obligaciones que, con respecto a Cuba, han sido impuestas a los EE.UU. por el Tratado de París y que deben ahora ser asumidas y cumplidas por el Gobierno de Cuba” (Gobierno de EEUU y de Cuba, 1901).

Estados; así como la situaban como la práctica que impedía el empoderamiento del área para ejercer sus prácticas políticas soberanas. Indicando que, basada en un proceso de legitimación a partir de la construcción teórica, se justificaba la realización de las prácticas en nombre del “bien de Cuba” y bajo el argumento de que los gobiernos nacionales no desarrollaban políticas “adecuadas” según el criterio externo. Hecho que significaba la categorización de los propios ciudadanos de Cuba de “no civilizados”, “ignorantes” y “sin capacidad para gobernarse”. Decirles, por tanto, que: “No sabéis lo que es bueno para vosotros, nosotros sí”.

Pero bien es verdad que con anterioridad a esto, ya desde que los EEUU reconocieran al primer diplomático latinoamericano oficialmente el 1822, el Ministro de Colombia Manuel Torres dio a conocer la importancia comercial de la región para los EEUU⁴⁵¹. Por ello, no era sorpresa que el interés que había suscitado en un principio la región a los Estados europeos, pasase seguidamente a ser de aquel Estado – EEUU- que, además de vecino, había adquirido una estructura organizativa, económica y militar, suficiente como para tratar de establecer un dominio sobre la región de América Latina.

El interés por el área se vio prontamente reflejado y constatado en los primeros años del siglo XX, como reflejó *The New York Times*, el 27 de junio de 1926, al publicar las siguientes cifras de inversiones norteamericanas en el mundo- sin incluir las enormes deudas de guerra-, y mostrando como los EEUU estaban centrados en explotar las relaciones comerciales en el territorio continental, concretamente en Centro América, pero seguido de grandes importes en tierras latinoamericanas como Chile, Argentina y Brasil.

⁴⁵¹ Véanse prácticas y el papel que ejerció este distinguido político en los EEUU en: *En honor del procer Don Manuel Torres* (1926).

Tabla 4: Inversiones de EEUU en América Latina (1912 y 1928).

Tabla 5: Inversiones de capital Extranjero en América Latina (1928).

Inversiones de EEUU en América Latina(en Millones de dólares)			Inversiones de capital Extranjero en América Latina(Millones de dólares)	
PAÍS/AÑO	1912	1928	PAÍS/AÑO	1928
Cuba	200	1400	EEUU	5200
México	800	1288	Inglaterra	5200
Chile	15	451	Otras naciones	2200
Argentina	40	450	Fuente: Según Survey of Current Bussines, del Departmente of Commerce(1965) . Citadas en El Antiimperialismo y el APRA. Víctor Raúl de la Haya. Pág. 103	
Brasil	50	388		
Perú	35	169		
Venezuela	3	162		
Colombia	2	125		
Bolivia	10	86		
Uruguay	5	77		
Costa Rica	7	46		
Honduras	3	40		
Guatemala	20	37		
El Salvador	3	35		
Panamá	5	31		
Ecuador	10	30		
Haití	4	28		
Santo Domingo	4	28		
Nicaragua	3	20		
Paraguay	4	18		
Guayanas	5	8		

Tabla 3: Fuente: New York Times 1928. Cifras calculadas por Evan Clark. (Citadas en Haya de la Torre (2010)).

Tabla 4: Fuente: Según *Survey of Current Bussines, del Departmente of Commerce* (1965). (Citado en Haya de la Torre (2010, pág. 103)).

En definitiva, como se observa en las tablas superiores, EEUU pasó a ser el actor principal junto con Inglaterra para la región de ALC en temas de IED, y los planes que auguró Canning a principios de siglo XIX parecían haberse constatado en los hechos por medio del establecimiento de inversiones en la región, como si de un plan “tejido con hilo” se tratase, para instaurar las compañías de sus Estados en la región desplazando a otros agentes.

5.3 El Panamericanismo. La soberanía y la protección del inversor como eje principal en la evolución de la Conferencias.

Con la pretensión de asentar un “continentalismo cercano”, que promoviese la prosperidad de los países pertenecientes a América, el Congreso de los EEUU aprobó el 24 de Mayo de 1888 una autorización para que los Estados de América Latina acudiesen a Washington y

así realizar una conferencia internacional, que sirviese para asentar ciertas bases sobre las que operar en las relaciones continentales⁴⁵².

Las Conferencias Panamericanas supusieron la construcción de un espacio que, si por una parte contuvo la ilusión de armonizar prácticas que agilizaran las relaciones intercontinentales; por otra, se significó en un espacio de disputa ideológica en el que los Estados de ALC poseían menor capacidad para imponer su criterio ante los EEUU.

En las conferencias se dieron cita los líderes de los diferentes Estados latinoamericanos con los EEUU durante 50 años. Periodo durante el cual, uno de los temas que contuvo mayor disputa en la agenda de la organización fue el trato a la IED y la fricción existente de la práctica con el respeto de la soberanía interna de los Estados de ALC.

En términos generales, las Conferencias se caracterizaron por su pretensión de albergar una solución a los conflictos entre los EEUU y ALC. Resaltando en el proceso negociador que mientras los EEUU actuaban como un único agente, ALC no, ya que éstos actuaron de forma independiente. Aunque bien es verdad que sus reclamos fuesen en la mayoría de las cuestiones comunes (Dallanegra Pedraza, 1994).

“...tampoco se puede hablar de **América Latina** como actor, ya que **careció del poder suficiente como para tener una presencia internacional que le permitiera contribuir a la conformación de las reglas del juego**, o por lo menos modificarlas en beneficio propio” (Dallanegra Pedraza, 1994, pág. 20) **[Negrita propia]**.

La preocupación de los Estados latinoamericanos por las continuas injerencias en su territorio, junto con la negativa de los EEUU a no actuar en otros Estados cuando lo considerase necesario para proteger sus intereses⁴⁵³, fue el tema que ocupó el espacio central del debate y aquello que unía a los Estados de ALC, ya que entendían que se quebrantaba uno de los principios básicos del DI en cuestiones de soberanía con la actitud que mostraban los EEUU: el respeto por la soberanía interna y su territorio, en donde

⁴⁵² Respecto al comienzo del Panamericanismo indica Arturo Ardao que: “[...] la creación de la entonces llamada “Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas”, para la “pronta compilación y distribución de datos sobre el comercio”, único fruto concreto de aquella reunión, fue aprobada el 14 de abril de 1890, razón por la que esta fecha ha marcado el inicio del panamericanismo, y con tal carácter se le ha consagrado como el “Día de las Américas””(Arturo Ardao, 1986, pág. 158).

⁴⁵³ La negativa estadounidense a la recomendación de la Conferencia se evidencia en la postrera declaración del delegado cuando se lee: “No puedo estar de acuerdo en ninguna opinión que disminuya el derecho o reduzca el poder de un país por reclamaciones diplomáticas, que es la manifestación misma de su fuerza moral y de su vitalidad, para proteger los derechos e intereses de sus ciudadanos” (Connel-Smith, 1971, págs. 64-65).

ciudadanos extranjeros o nacionales debían gozar de un trato similar en asuntos de índole legislativa (Calvo, 1868).

5.3.1 La evolución de la disputa en torno a la Inversión Extranjera Directa en el desarrollo de las Conferencias Panamericanas.

A este respecto, en la Primera Conferencia Panamericana⁴⁵⁴ los Estados de ALC propusieron la inclusión de unas cláusulas que estableciesen el respeto a la soberanía interna de los Estados en asuntos de protección de las inversiones de los nacionales de otro Estado⁴⁵⁵. A lo que los EEUU se negaron, no aceptando la supresión de lo que entendían su derecho a proteger sus intereses. Sin embargo, en esta cita se dio un hecho que ha tenido gran impacto en el desarrollo posterior a la IIGM⁴⁵⁶, ya que los EEUU, tratando de mostrar cierto acercamiento a las reivindicaciones por parte de los Estados latinoamericanos, promovieron la adopción de una especie de *Plan de arbitraje* que, en principio, sería el medio para solventar de manera “obligatoria” las situaciones de conflicto que pudiesen darse entre Estados.

El Plan contenía un artículo en su interior que despertó suspicacias, ya que hacía referencia a un contexto concreto (Art. 4), en el que en:

”... aquellos casos en que a juicio exclusivo de cualesquiera de las naciones envueltas en una controversia pudiera ponerse en peligro su propia independencia, en cuyo caso el arbitraje sería voluntario para dicha nación y obligatorio para la otra” (Citado en Fabela (1958, págs. 112-113)).

La inclusión de este artículo dejaba abiertas las puertas a que la sola denuncia de una nación, en que aludiera a su independencia de acción en torno a un tratado e interpretase que la divergencia de criterio atentaba contra su capacidad de decisión e independencia, daba por nula la obligatoriedad de someterse al arbitraje. Lo que situaría al propio tratado

⁴⁵⁴ De parte de ALC la Republica Dominicana se negó a asistir por encontrar que los EEUU no pretendían otra cosa que implantar su rol hegemónico en las RRII con Latinoamérica (Dallanegra Pedraza, 1994).

⁴⁵⁵ Las cláusulas contenidas indicaban los siguiente: “1. Los extranjeros gozan de todos los derechos civiles de que gozan los nacionales y pueden hacer uso de ellos, en el fondo, la forma o procedimiento, y en los recursos a que den lugar, absolutamente en los mismos términos que dichos naturales”; “2. La nación no tiene ni reconoce a favor de los extranjeros ningunas otras obligaciones o responsabilidades que las que se hayan establecido a favor de los nativos en los mismos casos, por la Constitución y las leyes” (Fabela, 1958, pág. 112).

⁴⁵⁶ La relevancia de este hecho fue tratar de promover la firma de un tratado en el que los Estados que actuaban como receptores de IED, no emisores, firmasen un acuerdo en los que se excluía su capacidad de juzgar sucesos en suelo nacional en el exterior. Esta práctica es conocida como los AII. Véase Capítulo III.

en un ambiguo espacio de creencia más que de compromiso; de interés propio más que de respeto al derecho. Por ello, debido a que los Estados latinoamericanos no vieron sentido real en la adopción de este Plan, ya que significaba la cesión de competencias jurídicas sin ninguna seguridad para sus Estados, y que ellos no practicaban gran volumen de IED, no fue ratificado por la mayoría de los países latinoamericanos (Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Uruguay y Venezuela) (Dallanegra Pedraza, 1994).

Si por la parte Norte Americana se discernía la preocupación por establecer tratados que protegiesen sus intereses en cuestiones comerciales y aduaneras, por la parte Centro y Sur americana la preocupación la suscitaba el cómo combinar el ejercicio de su soberanía en el derecho de los ciudadanos extranjeros en suelo nacional, especialmente los inversores que eran el tema debate, con la necesidad de financiación y la presión de los Estados inversores, ya que esta cuestión había provocado las principales intervenciones en la época.

Abordando de nuevo la cuestión, en la Segunda Conferencia Panamericana (México D.F. 1901) los Estados de ALC propusieron conjuntamente la firma de un arbitraje que estuviese ligado al Acuerdo de la Haya firmado en 1889⁴⁵⁷, por el que se aceptase el arbitraje voluntario. En este caso EEUU no firmó.

Tras la negación comenzó un periodo de intervenciones en Latinoamérica, especialmente en Centroamérica y Caribe, finalizando cuando surgió la conocida como política de Buena Vecindad (Connel-Smith, 1971, pág. 72).

Fue en este periodo cuando, ante la negativa de EEUU de aceptar el respeto por la soberanía interna de los Estados de ALC, en 1902 surgió la Doctrina Drago y comenzó su andadura en el DI, en reclamo por el respeto a la soberanía tras la intervención en Venezuela⁴⁵⁸.

En un contexto cargado de tensión se celebró la Tercera Conferencia Panamericana (Río de Janeiro 1906). La cual fue tildada de fracaso. Los temas de las reclamaciones pecuniarias se quedaron como habían sido formulados en México y, además, se decidió traspasar el asunto de la doctrina Drago al Tribunal de la Haya, entendiendo a éste como el órgano competente para el estudio del DI. El asunto fue tratado en la Segunda Conferencia de Paz

⁴⁵⁷ En 1899 se había celebrado la Primera Conferencia de Paz de La Haya, en donde se adoptó el Acuerdo de Arreglo Pacífico de Disputas Internacionales y se creó la Corte de Arbitraje Permanente de La Haya.

⁴⁵⁸ Véase Capítulo III. Punto 5.1 Pág. 303.

de La Haya (1907), en donde EEUU actuó hábilmente y logró la aprobación de la Cláusula Porter (Dallanegra Pedraza, 1994, pág. 26).

Cláusula que adquirió relevancia, puesto que hacía referencia a la renuncia al empleo de la fuerza para el cobro de deudas públicas bajo ciertas condiciones. Sería aplicable a no ser que el Estado deudor se negase al arbitraje; o en caso de aceptar, si no habían escogido un árbitro oportunamente; o en el caso de que el arbitraje no realizase laudo. A lo que los Estados latinoamericanos accedieron, firmando con reservas al observar una manipulación de su propuesta. Al final no fue ratificada⁴⁵⁹.

Ya en 1910 se celebró la Cuarta Conferencia Panamericana (Buenos Aires, 1910). En esta ocasión no se consiguió avance en temas referidos a la no intervención por cuestiones de IED. Tendría que llegarse a la Quinta Conferencia (Santiago de Chile 1923), para que los derechos de los extranjeros en suelo nacional continuasen siendo abordados. En esta reunión, ante la continua disputa entre el trato especial que requerían los EEUU para sus empresas y la injerencia en la soberanía que significaba esta concesión para los Estados de Latinoamérica, no hubo acuerdos.

No obstante, muchos Estados comenzaron a promover la inclusión de las denominadas Clausulas Calvo⁴⁶⁰, las cuales establecían su mecanismo constitucional para negociar con las empresas⁴⁶¹. Lo cual constituía, nunca mejor dicho, una exclusión de la cuestión del debate entre partes.

⁴⁵⁹ Como sugerencia del tema que se debía tratar en las Conferencias Panamericanas, Carlos Tobar dijo así:

“Las Repúblicas americanas, por el buen nombre y crédito de todas ellas, si no por otras consideraciones humanitarias y altruistas, deben intervenir, siquiera mediata e indirectamente, en las disensiones internas de las Repúblicas del Continente. Esta intervención pudiera ser, al menos, negándose el reconocimiento de los gobiernos de hecho, surgidos de revoluciones contra el orden constitucional” sólo en ese caso.

La conocida como Doctrina Tobar tuvo su efecto tempranamente en 1907, con el acuerdo firmado entre Costa Rica, Guatemala, Honduras, Uruguay y El Salvador, en el que su primer artículo decía así:

“Los Gobiernos de las altas partes contratantes no reconocerán ningún gobierno que se establezca en cualquiera de las cinco Repúblicas firmantes como consecuencia de un golpe de Estado o de una revolución con el Gobierno reconocido, en tanto que la representación del pueblo, libremente manifestada no haya organizado el país en forma constitucional”.

El segundo hecho que constato la vigencia de la Doctrina Tobar, se dio el 18 de julio de 1911, entre Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, que obligó a tales potencias a:

” Tomar medidas para que en ningún momento en el territorio sometido a jurisdicción, las revoluciones, las operaciones de reclutamiento y las expediciones(militares) puedan fomentarse o realizarse de manera efectiva contra ninguna de las naciones contratantes”

(Citado en Fabela (1958, pág. 108)

⁴⁶⁰ Véase Capítulo III. Punto 5.1 Pág. 303.

⁴⁶¹ Indicar que en la Quinta Conferencia Panamericana también se hizo referencia a la doctrina Monroe a petición del Presidente de Uruguay, con la pretensión de panamericanizar la doctrina. La respuesta fue clara

Entre la Quinta y la Sexta Conferencia se produjeron hechos que elevaron la tensión entre los EEUU y ALC. Las intervenciones en Nicaragua en 1926 y la consiguiente justificación por parte del presidente de la época Calvin Coolidge, fueron tildadas de actos que evidenciaban la falta de voluntad de aceptar la “no intervención” como práctica política por los latinoamericanos.

“... nuestro gobierno posee ciertos derechos y algunas obligaciones hacia nuestros propios ciudadanos y sus propiedades, dondequiera que se encuentren localizados. La persona y propiedades de un ciudadano son parte del dominio general de la Nación, aún en el extranjero” (Connel-Smith, 1971, pág. 87).

La Sexta Conferencia (La Habana, 1928) venía marcada por la celebración de Comisión de Jurisconsultos que había tenido lugar en Río de Janeiro en Mayo de 1927, habiendo sido el tema principal la regulación de la intervención extranjera. En ella, los delegados habían acordado, como evidenció Luis Anderson de Costa Rica, que “...ningún Estado podrá intervenir en los negocios internos de otro” (Citado en Fabela (1958, pág. 122), y que se procedería a la condena conjunta e incondicional a la intervención en los asuntos internos de otro (pág. 97 de la Sexta Conferencia citado en Fabela (1958, pág. 122)).

Durante la celebración de la Conferencia y como resultado del debate y propuestas de la mayoría de los Estados, el doctor Gustavo Guerrero presentó la siguiente moción, aludiendo al respeto por la soberanía interna de los Estados:

“La sexta Conferencia de las Repúblicas Americanas, teniendo en consideración que en estos momentos ha sido expresada la firme decisión de cada una de las Delegaciones, de que sea consignado, de manera categórica y rotunda, el principio de la no-intervención y la absoluta igualdad jurídica de los Estados, resuelve: **ningún Estado tiene derecho a intervenir en los asuntos internos de otro**” (Citado en Trellez (1931, pág. 736) [**Negrita propia**].

Ésta fue retirada y no fue finalmente aprobada. Curiosamente, los representantes de Cuba y Perú, Ferrara y Víctor Maurtua respectivamente, se mostraron en contra. Ferrara alegó que

por parte de los EEUU. El secretario de Estado de los EEUU Charles Hughes declaraba que los EEUU se reservaban “exclusivamente” la “...definición, interpretación y aplicación...” de la doctrina Monroe (Connel-Smith, 1971, pág. 85).

la intervención sí debía ser un recurso contra gobiernos ilegítimos⁴⁶². Cuba fue intervenida por EEUU en 1933. Perú, y concretamente Mauritúa, había cambiado su postura en un año.

Otra declaración relevante fue la que, durante la celebración de la Conferencia y haciendo alusión directa a la cuestión soberana, el presidente de la delegación Argentina, Honorio Pueyrredón enunció:

"La soberanía de los Estados consiste en el derecho absoluto, en la entera autonomía interior y en la completa independencia externa, este derecho está garantizado en las naciones fuertes. Si ese derecho no se consagra y no se práctica en forma absoluta, la armonía jurídica internacional no existe. La intervención diplomática o armada, permanente o temporal, atenta contra la independencia de los Estados, sin que la justifique el deber de proteger el derecho de los nacionales, ya que tal derecho no podrían, a su vez, ejercerlo las naciones débiles cuando sus súbditos sufrieran daños por convulsiones en las naciones fuertes. (...) La República Argentina considera que ese respeto **es imprescindible para que las jóvenes naciones americanas pasen por las transformaciones de la experiencia del gobierno propio, evolucionando naturalmente en los ensayos de las instituciones políticas, hasta llegar, sin intervenciones extrañas, a la perfecta madurez de la democracia,** que ha de regir sus destinos en la paz interior, a la concordia internacional"

(Citado en Dallanegra Pedraza (1994, pág. 32)) [Negrita propia].

Pueyrredón, aparte de insistir en la continua injerencia en la soberanía interna, indicaba que las naciones de nueva creación deben sufrir sus procesos de transformación. Procesos en los que, en las prácticas de construcción propia, no deban ser otros agentes los que continuamente intervengan en el propio devenir de la construcción de reglas sociales. Es

⁴⁶² Estos Estados se mostraron en favor de las declaraciones que EEUU realizó por medio de Connel-Smith: "...enfrentémonos a los hechos. la dificultad de existir, en cualesquiera de las repúblicas americanas, no es de agresión externa. Se trata de una dificultad interna. De vez en cuando surge una situación sumamente deplorable y lamentable, en que no opera la soberanía cuando por algún tiempo, en ciertas regiones, no existe gobierno alguno (...) ¿Qué hemos de hacer cuando un gobierno se desmorona y los ciudadanos americanos ven peligrar su vida? ¿Hemos de permanecer inactivos y ver que los maten porque un gobierno, por circunstancias fuera de su control y por las que no puede ser hecho responsable sea ya incapaz de proporcionarles una protección razonable? (...) Es un principio de ley internacional que en casos tales un gobierno tiene plena justificación en tomar medidas -yo lo llamaría interposición temporal- con el fin de proteger las vidas y la propiedad de sus ciudadanos. Yo podría firmar que no se trata de intervención. En los libros de texto puede verse que esto no es intervención (...) Indudablemente Estados Unidos no puede renunciar a su derecho de proteger a sus ciudadanos. Las leyes internacionales no pueden cambiarse a través de las resoluciones de esta Conferencia (...) Los derechos de las naciones son permanentes, pero las naciones tienen obligaciones, al mismo tiempo que disfrutan de los derechos" (Citado de Dallanegra Pedraza (1994, pág. 36)).

decir, había que asumir que las ideas propias eran aquellas que debían determinar las prácticas, no las ajenas, y menos aquellas impuestas a la fuerza.

La propuesta fracasó, al no incluir en la resolución la condena a la intervención. A este respecto resulta pertinente rescatar el comentario que realizó Camilo Barcia Trelles, en el cual señalaba el perjuicio que sufría la región latinoamericana a la hora de abordar su papel ante cualquier agente externo en la SI debido a la desunión regional. Lo que, en su opinión, restaba capacidad de acción:

“... [el] mal que amenaza la disolución: [es la] ausencia de solidaridad en la América de origen Hispánico. Los Estados Unidos se dedican a cosechar; otros son los que siembran sus propios infortunios, y, si algo sorprende a los que contemplamos este espectáculo lamentable, es la relativa ponderación con que actúan aquellos a quienes todo se les ofrece; el “mal de América” es la sistemática genuflexión ante el poderoso: éste cimenta su fuerza en el acatamiento de los que pueden ser sus víctimas” (Trellez, 1931, págs. 737-738) **[Negrita propia]**.

Ya en la Séptima Conferencia Panamericana (Montevideo, 1933) se avanzó en el respeto a la soberanía interna de los Estados cuando se incluyó, finalmente, en el Art. 8º lo siguiente: “Ningún Estado tiene derecho de intervenir en los asuntos internos ni en los externos de otro” (OEA, 1933). EEUU, aunque con reservas, aceptó el principio de no intervención y se incluyó en el Art. 9 una alusión a la doctrina Calvo.

Art. 9: “La jurisdicción de los Estados en los límites del territorio nacional se aplica a todos los habitantes. Los nacionales y **los extranjeros se hallan bajo la misma protección de la legislación y de las autoridades nacionales y los extranjeros no podrán pretender derechos diferentes, ni más extensos que los de los nacionales**” (OEA, 1933, pág. 4). **[Negrita propia]**.

La práctica política denominada de buena vecindad promovida por parte del presidente Roosevelt, en donde se procuró el no intervenir en los Estados Latinoamericanos sin consentimiento de ellos (Dallanegra Pedraza, 1994, pág. 42), provocó durante este periodo, el que por parte de los Estados latinoamericanos se esperaba una aprobación de la “no intervención” sin reservas. Este hecho quedó reflejado en la Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz (Buenos Aires, 1936), cuando el Ministro de Relaciones de la República de Argentina, el doctor Saavedra Lamas, indicó al respecto que:

“Para eliminar las causas que en el pasado dieron origen a numerosas insistencias acompañadas a veces de medios coercitivos, **los Estados contratantes se comprometen sin reservas alguna a no emplear la fuerza armada ni recurrir a las intervenciones diplomáticas para el cobro de deudas públicas o contractuales o para apoyar reclamaciones de origen exclusivamente pecuniario**”(Citado en Fabela (1958, pág. 137))[Negrita propia].

Pero sin embargo, la aceptación fue parcial o en todo caso recaía en un acto interpretativo por parte de los EEUU, como de hecho evidenciaban las reservas manifestadas por Cordell Hull respecto a la interpretación de la doctrina Monroe⁴⁶³; a las que acompañaban dudas sobre la indefinición del término intervención en la Conferencia. Apunte al que contestó el Secretario de Relaciones de México Puig, recalcando, en el informe de la Séptima Conferencia, que sí se había definido el derecho a la no intervención.

“Constituye intervención, y en consecuencia violación del Derecho Internacional, toda acción ejercida por un Estado, ya sea por medio de representaciones diplomáticas conminatorias, ya sea por la fuerza armada, ya por cualquier otro medio que implique coacción efectiva, para hacer prevalecer su voluntad sobre la voluntad de otro Estado, y , de manera general, toda ingerencia, interferencia o interposición de cualquier clase que fuera ejercida empleando tales medios, directa o indirectamente en asuntos de la incumbencia de otro Estado, cualquiera que fuere motivo” (Citado en Fabela (1958, págs. 141-142)).

Asimismo, Puig en atención a las reclamaciones pecuniarias manifestó:

“Si los Estados Unidos aceptaran aquel artículo sin condiciones ni reservas, creemos que también podrán ya aceptar los principios contenidos en el Tema 6(“Formulación de Principios con referencia a la eliminación de la fuerza y de la intervención diplomática en casos de reclamaciones pecuniarias y otras acciones particulares”) Pero como tenemos nuestras dudas respecto a tal aprobación, a pesar de las tendencias liberales y justicieras del Presidente Roosevelt, creemos que este Tema VI será uno de los que queden sin aprobación por parte de los Delegados de Norte-América” (Citado en Fabela (1958, págs. 144-145)).

En este caso, los Estados latinoamericanos - como ya sucedió durante el siglo XIX con la doctrina Monroe- buscaban una confirmación de aquello indicado en teoría en la práctica. Dado que habitualmente la práctica difería, y si bien es verdad que Roosevelt había

⁴⁶³ Dijo así Hull: “...reservas alguna a no emplear la fuerza armada ni recurrir a las intervenciones diplomáticas” (Citado en Dallanegra Pedraza (1994, pág. 43)).

cambiado el discurso teórico sobre la no-intervención y abogaba por el respeto de la soberanía, esta era violada sistemáticamente en la práctica.

En la Octava Conferencia Panamericana (Lima, 1938), en un contexto mundial previo al inicio de la IIGM, se reafirmó el principio, entre comillas, de Monroe, que indicaba la solidaridad continental. Se reconoció el principio de igualdad jurídica como Estados soberanos y se dictó que fuesen analizadas en profundidad estas reclamaciones en asuntos de inversiones, por un Comité de Expertos que dictaminase su conclusión en la Novena Conferencia.

Paralelamente a las Conferencias se produjeron eventos relevantes en términos de soberanía e inversión, entre los que destaca el que se dio cita en 1947: la Conferencia Interamericana para el mantenimiento de la Paz y la Seguridad del Continente, en el que se aprobó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

Y es que el TIAR posee relevancia máxima en la contextualización histórica de estos hechos, por significarse en él una alianza continental, que se caracterizó por instituir términos relevantes para la autonomía de América Latina: a) se estableció la defensa colectiva contra un ataque directo, armado o no armado (Art 6. considerándolo agresión), con origen regional o extra-regional (en referencia al Art. 51 de la Carta de NNUU); b) sería aprobada la acción armada con un voto de dos tercios (eliminando veto en el Art.17); c)al ser un sistema de propia defensa dominado por la influencia estadounidense, si se aplicase bajo un prisma similar del de la doctrina Monroe, EEUU podría actuar en nombre de su propia defensa al paraguas del TIAR⁴⁶⁴ (Dallanegra Pedraza, 1994). El pacto continental se incrementaba y, en cierto modo, iba adquiriendo legitimidad.

Al llegar la Novena Conferencia Panamericana (Bogotá, 1948), se produjo un hecho que adquirió una relevancia máxima: la firma de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA). Es decir, se significaba un pacto constitutivo de las Repúblicas del nuevo continente de carácter político, jurídico y económico que, en cierto modo, parecía otorgar legitimidad al proyecto del panamericanismo y, a su vez, consolidar su presencia como mecanismo de concertación continental.

⁴⁶⁴ El ejemplo de esta aplicación se ve reflejado en la invasión en 1965 de la República Dominicana por parte de los marines estadounidenses.

En un principio, atendiendo a las características principales de la OEA, que incumben a este estudio, resaltar que la institución se conforma con principios y propósitos de la Carta de la ONU, por lo que el aspecto de la no injerencia se reflejó en varios artículos:

Art. 19 “...excluye no solamente a la fuerza armada, sino también a cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen”.

Art. 20 “...**ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político** para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza”(OEA, 1948a)[**Negrita propia**].

Asimismo, en la Conferencia se adoptaron otros acuerdos significativos como El Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá); La Carta Internacional Americana de Garantías Sociales; y el Convenio Económico de Bogotá. La rúbrica de estos tres acuerdos y la Carta, pareciera mostrar que se llegó a la cúspide del Panamericanismo y la política de buena vecindad.

Sin embargo, había cierta corriente crítica que señalaba que existían ciertos peligros dada la diferencia de capital y poder entre, esta vez sí en estas cuestiones se podían agrupar en dos, los EEUU y Latinoamérica. Lo que significaba que al no existir cohesión interna en el bloque latinoamericano, los poderes de EEUU podrían accionar mecanismos que evidenciarían esta quiebra en caso de interés, dado que particularmente no se poseían muchas capacidades los Estados para resistir ciertas ofertas o amenazas.

Es por ello, que en términos de seguridad colectiva, se adoptó como norma el principio de solidaridad continental en los siguientes casos. Indicados en los artículos 28 y 29 de la Carta de la OEA:

Art. 28: “Toda agresión de un Estado contra la integridad o la inviolabilidad del territorio o contra la soberanía o la independencia política de un Estado americano, será considerada como un acto de agresión contra los demás Estados americanos”.

Art. 29. “Si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier Estado americano fueren afectadas por un **ataque armado o por una agresión que no sea ataque armado, o por un conflicto extra-continental o por un conflicto entre dos o más Estados americanos o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de**

América, los Estados americanos en desarrollo de los principios de la solidaridad continental o de la legítima defensa colectiva, aplicarán las medidas y procedimientos establecidos en los tratados especiales, existentes en la materia” (OEA, 1948a) [Negrita propia].

Al realizar un pequeño análisis, se evidencia que el art. 29 no definía claramente una causa y dejaba toda decisión de intervención a una observación particular de un hecho concreto. Este artículo establecía peligros de alto alcance para los Estados latinoamericanos, puesto que con la interpretación del mismo **un Estado podría ser considerado agresor sin violar en ningún aspecto la soberanía de otro y sin atentar contra el DI, debido a su tendencia en la práctica política. Es decir, debido a sus ideas de organización social, si en un acto manifiesto de soberanía intentase reformular su condición o sistema político interno podría ser considerado agresor.**

En este contexto se dio cita un análisis de la evolución histórica de las relaciones de la región con el exterior y la delegación cubana trató de incluir en el texto que fuese considerada la agresión económica como agresión. EEUU se opuso.

Y es que en esta época, las ideas que luego se reflejaron en la CEPAL y la Teoría de la dependencia ganaban peso en el contexto latinoamericano. De hecho, en el Art. 3 del Convenio Económico de Bogotá se trató de incluir la regulación de la plusvalía para los productos en los que se basaba la economía latinoamericana: las materias primas.

Art 3: "...la resolución de que, como política general, se tome en cuenta la **necesidad de compensar la disparidad** que se aprecia frecuentemente entre los precios de los productos primarios y los de las manufacturas, **estableciendo la necesaria equidad** entre los mismos” (OEA, 1948c) [Negrita propia].

Los EEUU, en su papel de protector de sus inversiones y de su capacidad de injerencia, realizaron reservas al artículo y tratando el mismo punto incluyeron en el tratado el Art. 25, que decía así: (en éste caso apelaron los Estados latinoamericanos).

Art 25: " **Los Estados no tomarán acción discriminatoria contra las inversiones por virtud de la cual la privación de los derechos de propiedad legalmente adquiridos por empresas o capitales extranjeros** que lleve a cabo por causas o en condiciones diferentes a aquellas que la Constitución o las leyes de cada país establezcan para la expropiación de propiedades nacionales. Toda expropiación

estará acompañada del pago del justo precio en forma oportuna (prompt), adecuada y efectiva” (OEA, 1948c) **[Negrita propia]**.

Diferentes actores influyentes de Latinoamérica avisaban del peligro que conllevaba la adopción del Convenio económico de Bogotá, debido a la asimetría histórica en términos de capacidades en las regiones. Decía Gilberto Loyo:

“Si ese convenio fructificara en relaciones de consideración, América se convertiría en una gran cooperativa, en la que cada país cooperador compartiría en la medida y característica de sus recursos... La cooperación económica que cada país deberá dar, estará “condicionada por los términos de sus propias leyes y por los convenios internacionales que celebre...porque **ninguno de nuestros países estaría dispuesto a recibir cooperación económica de otras naciones con menoscabo de su soberanía**” (Citado en Fabela (1958, pág. 166)) **[Negrita propia]**.

La impresión y temor que se dibujaba, en el que se reflejaba la posible agresión e injerencia en la soberanía a partir de una cooperación económica, evidenciaba el cambio de lógicas a aplicar por parte de aquellos Estados que antes decidían intervenir armadamente⁴⁶⁵. El hecho de establecer pactos económicos, en los que se suponga la “igualdad” entre actores que poseen una desigualdad de inicio, hacía que el peligro de agresión por medio de esta negociación se evidenciase con la práctica. En ese sentido, las apreciaciones a este respecto de Isidro Fabela en su obra *Intervención* (1958) son dignas de ser rescatadas:

“La mayor parte de los Estados latinoamericanos, por no decir todos, requieren con más o menos apremio, ayuda económica de los Estados Unidos, porque esta potencia, por sus numerosas riquezas, es la única que está en condiciones de auxiliar con sus recursos de dinero a las naciones subdesarrolladas de nuestra América. Ahora bien, si esto es exacto, y si por otra parte los Estados Unidos están dispuestos a colaborar con nuestros pueblos y gobiernos haciéndonos préstamos o invirtiendo sus capitales para el fomento de nuestras industrias y en general de nuestra economía, también **es cierto que si esos préstamos o**

⁴⁶⁵ En este sentido, se recoge la advertencia hecha por Isidro Fabela:

“Las intervenciones armadas de los Estados Unidos en América Latina, aunque no seguramente, pasaron a la historia, pero en cambio han tomado vigencia en nuestro países, con auge alarmante, **el tipo de intervención más peligroso de todos: el Económico Más peligroso por su forma y por su alcance. Por su forma porque se presenta muchas veces como la intención aparental de quién va a proteger y ayudar a quien menester de ayuda y protección; cuando en el fondo no tiene otro propósito que el egoísta de obtener los más pingües beneficios en provecho propio y no en el ajeno del país intervenido.** Y en cuanto al fondo, porque una vez que los capitalistas estadounidenses han penetrado en la economía de nuestros Estados, sea por medio de empréstitos o de inversiones gubernamentales o privadas, van extendiendo su influencia, primero económica y después política, paso a paso, hasta llegar a ser un poder extranjero dentro del nacional” (Fabela, 1958, pág. 178)**[Negrita propia]**.

inversiones se formalizaran sin estudio previo de nuestra situación política y sin respeto integral a nuestra Constitución y demás leyes relativas, entonces las inversiones extranjeras, que aparentemente significaran un alivio monetario a nuestra precaria situación económica, a la larga resultarían en detrimento de nuestra autonomía interna y de nuestra independencia exterior, lo que es absolutamente indispensable evitar a todo trance” (Fabela, 1958, pág. 168)

En consonancia con este hecho se encontraba el Art. 24 del Convenio de Bogotá, el cual trataba de establecer aquellas pretensiones latinoamericanas indicadas dentro de las doctrinas Drago y Calvo.

“Los capitales extranjeros quedarán sujetos a las leyes nacionales...” que contenían la aprobación en su punto a) de: Medidas para evitar que las **inversiones extranjeras sean utilizadas directa o indirectamente como instrumento para intervenir en la política nacional** o para perjudicar la seguridad o los intereses fundamentales de los países que las reciben” (OEA, 1948c)[**Negrita Propia**].

En la Décima Conferencia y última Conferencia Panamericana (Caracas, 1954), tristemente, se terminó como se empezó con posicionamientos encontrados. Por una parte, los EEUU con fines hegemónicos; y por otra los latinoamericanos aludiendo de nuevo a sus pretensiones de respeto por su soberanía.

Si los EEUU habían situado el punto de mira en los “peligros” del comunismo⁴⁶⁶, los latinoamericanos seguían prestando atención primordial a los asuntos que potenciaban su papel económico; y la no intervención extranjera en las competencias internas, ya que la entendían como elemento articulador de ese proceso.

Pues bien, en esta Conferencia se aprobó la legitimación de la intervención por parte de la OEA contra los Estados que adoptasen una organización social cercana al comunismo en todo el continente- como parte de la práctica política dentro del contexto de Guerra Fría-. Cuestión que conllevaba un gran peligro para los Estados latinoamericanos, ya que de acuerdo con las medidas que se habían aprobado en el acuerdo TIAR, su artículo 6 decía así:

⁴⁶⁶ Ya antes de la reunión en Caracas, el subsecretario de los EEUU John Moors Cabot había declarado: “Nuestro objetivo en la Conferencia de Caracas es lograr que se apruebe una resolución que impida **toda actividad comunista** en el Hemisferio Occidental. No se trata de algo que concierne a un solo país, sino al conjunto de las Repúblicas americanas” (Citado en Fabela (1958, págs. 181-182)).

“...las medidas que el órgano de consulta acuerde comprenderán una o más de las siguientes: el retiro de los jefes de misión; la ruptura de relaciones diplomáticas; la ruptura de las relaciones consulares; interrupción parcial o total de las relaciones económicas, o de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, telefónicas, radiotelefónicas o radiotelegráficas, y el empleo de la fuerza armada...” (OEA, 1947).

Artículo que sirvió para fraguar la posibilidad de acusar a Guatemala de ser un peligro para los Estados Americanos, por ser una posible vía de entrada al comunismo. Debido, primordialmente, al Plan de liberación nacional que el canciller Toriello había impulsado en Guatemala y que, consecuencia de su aplicación, había afectado a la compañía de los EEUU *United Fruit*. Ya que en la visión del líder Guatemalteco, ésta poseía privilegios de trato que perjudicaban al Estado y a sus capacidades de gobernar y atender a las demandas de sus ciudadanos.

“... se están liquidando los latifundios, incluso los de la United Fruit... este modesto esfuerzo de transformaciones progresistas se le califica de comunismo; los propósitos de la revolución guatemalteca **no pueden calificarse dentro de la ideología o la política comunista ya que lograr, bajo un plan político y económico, el asentamiento de miles de propietarios individuales y de campesinos jamás puede concebirse como un plan comunista**” (Citado en Fabela (1958, pág. 191)) **[Negrita Propia]**.

Nota: En Guatemala se dio un Golpe de Estado en 1954. Se considera que a la CIA considero que las reformas aplicadas por el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, eran de origen comunista (Dallanegra Pedraza, 1994).

Tras la celebración de la última Conferencia Panamericana pareciere que no se había avanzado en exceso en las pretensiones de alcanzar un acuerdo de no intervención después de 50 años de negociaciones. Pareciere además, que el avance principal giraba en torno a un cambio en la justificación que se presentaba para acudir a una intervención, ya que si con anterioridad se acudía al carácter pecuniario únicamente, tras este periodo se evidenció que la ideología, es decir, las ideas, era el factor que determinaba la acción. Quizás antes también.

Asimismo, se evidenció que el hecho de que fuese un Estado o grupo de Estados los que interviniesen en los asuntos internos de otros Estados, no poseía una garantía de bondad y

justicia en la acción y más, cuando las decisiones no requerían unanimidad de los actores, sino una aprobación parcial de dos tercios de acuerdo al TIAR.

Después de esto, llegó el caso Cubano.

Es necesario precisar antes de finalizar este epígrafe, que el “panamericanismo” como concepto y como política hace referencia a las relaciones asimétricas que se establecieron entre los países latinoamericanos y Estados Unidos. Lo que está estrechamente ligado al surgimiento de Estados Unidos como potencia mundial (Bobbio, Matteucci, & Pasquino, 2011). Además, como concepto el panamericanismo dejó un significado final que se precisa según sea la posición de los actores o de la situación en que aparece utilizado. Ahora bien, como ideología notoria de la política internacional de Estados Unidos con la América Latina, el término panamericanismo ya fue definido en 1933 por el Secretario de Estado Cordell Hull en los siguientes términos:

“Las cualidades esenciales de **un verdadero panamericanismo** han de ser las mismas que distinguen a un buen vecino, es decir, el mutuo entendimiento, y mediante tal entendimiento, **una verdadera apreciación del punto de vista de la otra parte**. Sólo así podremos esperar crear un sistema cuyas piedras angulares sean la confianza, la amistad y la buena voluntad” (Citado en Connel-Smith (1971, pág. 187)) [**Negrita propia**].

Pero el devenir de los hechos requiere y aporta otra definición que ya no sería tan bondadosa con este ejercicio, ya que las prácticas parecen dibujar otra estructura funcional como fruto de los acuerdos y tratados sucedidos. Si por una parte, con la constitución de la OEA, en la que en sus artículos 19, 20 y 23⁴⁶⁷ dejaban constancia de aquello que habían perseguido los estados latinoamericanos desde los tiempos de conquista; por otra, los distintos acuerdos siguientes (TIAR y la Décima Conferencia) dejaban abierta de nuevo la posibilidad a una intervención extranjera en caso de que se considerasen postulados ideológicos adversos a las ideas de constitución social que tenía EEUU.

⁴⁶⁷ **Art. 19.** Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen.

Art. 20. Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza.

Art. 23. Las medidas que, de acuerdo con los tratados vigentes, se adopten para el mantenimiento de la paz y la seguridad, no constituyen violación de los principios enunciados en los artículos 19 y 21. (OEA, 1948a).

En este sentido, el Panamericanismo ha sido calificado más como un elemento de la política mundial y continental de los EEUU, que un tratado que persiguiese la mejora de la situación económica, política y social del continente. Y por ende, si el establecimiento de un acuerdo de tales magnitudes fomenta la persecución de fines ajenos y no propios de Latinoamérica, la independencia y autonomía regional estaba sesgada.

En definitiva, pensando acerca de la raíz ideológica del Panamericanismo cabe rescatar lo que Camilo Barcia Tréllez escribiría años más tarde al respecto, y que dista mucho del postulado que ofrecía Cordell Hull:

“El panamericanismo nace en Washington, es fomentado desde Washington y en un principio acogido con frialdad no exenta de desconfianza por parte de la América Ibérica. **Su fin** no es anexionista; persigue otra realización: **asegurar el predominio industrial de Estados Unidos en el Nuevo Mundo**” (Citado en Béjar (2002, pág. 178)) [Negrita propia].

6. Reacción de pensadores de América Latina y el Caribe ante el papel ejercido por las grandes potencias, desde principios del siglo XX hasta mediados de siglo.

El papel que iban adquiriendo las potencias extranjeras, una vez que los Estados de ALC se habían independizado, causó que la tendencia al análisis crítico de algunos autores se enfocara en el estudio del impacto de la relación entre la región y los agentes externos. En las conclusiones que fueron emitiendo señalaban que las relaciones establecidas minaban, en gran medida, el porvenir de los nuevos Estados independientes. Afirmando que los compromisos internacionales que eran adquiridos, actuaban como elementos de presión que supeditaban a la región al deseo e intereses de agentes externos, determinando el proceso de toma de decisiones.

En este sentido, las características de la evolución relacional con el exterior de la región, así como las diferentes actuaciones de las potencias y los cuestionamientos sobre la legalidad de las acciones que eran ejercidas en las relaciones, eran señal evidente del interés que despertaba la región en las potencias mundiales y a su vez denotaba la existencia de ciertos sectores que se preguntaban el por qué siendo Estados soberanos e independientes, se daban situaciones en las que pareciere que la toma de decisiones no se correspondía con aquello se presentaba como idóneo.

En cierta medida la región buscaba empoderarse como agente internacional, pero se sucedían sucesos que reflejaban el no avance en esa tarea. Se buscaba obtener recursos e implementar capacidades Estatales, y se reproducían incrementos de deuda y conflictos debido a esa ligación. Se buscaba que la industria nacional se implementase, y se “implementaba” pero el dueño era extranjero y las ganancias volaban a otros lugares, etc... (Sunkel, 1973; Bethell, 2000; Prebisch, 1963; Furtado, 1971).

Como producto del interés por esta cuestión, en el análisis de los determinantes de la relación con el exterior, se vislumbró que una de las claves era que no se acordaba como dirimir una relación región – exterior, la cual se había viciado al no encontrar posturas comunes en torno al trato que se debía otorgar, principalmente, a los préstamos (IEI), a las inversiones (IED); así á como debían operar las plusvalías en las relaciones comerciales.

Dado este contexto, la aparición de diversos postulados en el interior de la región supuso la aparición de un debate ideológico, en el que se divergía sobre la metodología a aplicar. En algunos casos se cuestionaba la finalidad de las prácticas y en otros del modo en el que se regulaban esas prácticas. Pero en todo caso, en la reaparición con auge de diversos postulados, de nuevo, se presentaba un elemento común: se abogaba por dar un paso en la construcción de la unidad regional, viendo en esta acción un recurso necesario para, mediante la unión de fuerzas, abordar y poner freno a la injerencia externa, maximizar beneficios de la interacción y realizar prácticas de acuerdo a las ideas particulares.

Pero ¿cuáles eran sus ideas?; ¿quiénes eran los latinoamericanos?; ¿herederos de lo ibérico?; ¿nuevos agentes?; ¿cuál era la identidad de la región?, todas ellas eran algunas de las cuestiones a dilucidar, en aras de sostener un discurso que operase en torno al ejercicio de la soberanía en el territorio independizado, ya desde hacía casi un siglo.

En cierto sentido, el tratar de dar respuesta a estas incógnitas fue la labor que desarrollaron diversos autores y personajes públicos en el cambio de siglo, entre el XIX y el XX. Rescatar ciertos elementos comunes, así como dibujar el contexto ante el que se presentaba una región con tantas particularidades como era ALC.

6.1 Rodó e Ingenieros, escogidos autores exponentes de la unidad como manifestación de identidad y necesidad de unión.

En términos de identidad, el Uruguayo José Enrique Rodó divulgó a principios de siglo una crítica fuerte y dura contra los EEUU, manifestando que, aunque consciente de la opresión que había ejercido España en la región anteriormente, existían algunos rasgos positivos legados por el Imperio. Los latinoamericanos eran en parte españoles. Por lo que si bien era verdad la necesidad de librarse de ellos, no era mejor que los EEUU adquiriesen ese vacío dejado sobre la región e instaurasen sus ideas como líneas de construcción identitaria, ya que estos últimos se habían postulado para ello claramente (Ardao, 1977).

Analizando la región, Rodó afirmaba que la identidad latinoamericana era una verdad inmutable y con una actitud desafiante, retando a los críticos nacionalistas o aquellos que creían en adoptar similitudes de otros escribiendo lo siguiente:

“...-Acaso oiréis decir que no hay un sello propio y definido, por cuya permanencia, por cuya integridad deba pugnarse, en la organización actual de nuestros pueblos. Falta tal vez, en nuestro carácter colectivo, el contorno seguro de la «personalidad». Pero en ausencia de esa índole perfectamente diferenciada y autonómica, **tenemos — los americanos latinos — una herencia de raza, una gran tradición étnica que mantener, un vínculo sagrado que nos une a inmortales páginas de la historia**, confiando a nuestro honor su continuación en lo futuro. **El cosmopolitismo, que hemos de acatar como una irresistible necesidad de nuestra formación, no excluye**, ni ese sentimiento de fidelidad a lo pasado, ni la fuerza directriz y plasmanente con que debe el genio de la raza imponerse en la refundición de los elementos que constituirán **al americano definitivo del futuro**” (Rodó, 2008, pág. 92) [Negrita propia].

En la obra que escribió Rodó en el año 1900, *Ariel* (2008), se refleja un ensalzamiento del ciudadano latinoamericano, del americano del sur, del poblador regional, elevando y manifestando los nexos de unión a través de un ejercicio analítico centrado en las características particulares y comunes que poseían los latinoamericanos, e indicando que estos presentaban más elementos integradores que al contrario.

Rodó se postuló en favor de una unión de toda la región, que pudiese establecer a la misma como una potencia mundial y que estuviese a la altura de las otras potencias, aunando capacidad, especialmente, para lidiar con la ofensiva por parte de los EEUU a comienzos de siglo.

“**La América Latina será grande, fuerte y gloriosa si**, a pesar del cosmopolitismo que es condición necesaria de su crecimiento, logra mantener la continuidad de su historia y la originalidad fundamental de la raza, y si, **por encima de las fronteras nacionales que la dividen en naciones, levanta su unidad superior de excelsa y máxima patria**, cuyo espíritu haya de fructificar un día en la realidad del sueño del Libertador; la magna confederación” (Citado en Ardao (1977, pág. 122)) **[Negrita propia]**.

Y es que el temor a verse dominados por los EEUU se había situado en el umbral de los asuntos que sostenían la idea de unidad regional esta vez. Desde la aparición de la doctrina Monroe, hasta la realidad que se vivía en los inicios del siglo XX, se observaba el incremento en la participación e injerencia de los EEUU en la región. Cuestión que se manifestaba mediante continuas intervenciones, ya fuese para reclamar deudas, para proteger a sus conciudadanos o para “civilizar” y adoctrinar sobre los modos de comportamiento adecuados en la SI. En donde continuamente las ideas externas a la región construían una justificación para actuar e intervenir en los Estados de ALC, sin respetar de algún modo su condición de Estados soberanos.

El incremento del rol de los EEUU era evidente, y fruto de ello que las voces analíticas del proceso se multiplicasen en el tiempo. En esta línea crítica también se encontraba el fundador del partido socialista de Argentina José Ingenieros, el cual veía claramente el peligro que suponían los EEUU para la región, plasmándolo mediante su advertencia de que los propósitos de los americanos del Norte no favorecían la adquisición de capacidades para Latinoamérica. Ya que, a su entender, los intereses de unos y otros no eran convergentes y, por lo tanto, aquel agente que poseía mayor capacidad, en este caso militar y económica, contaba con los medios para tratar de imponer su criterio en las prácticas. En este caso los EEUU. Por ello, avisaba del peligro que contenía la aparición del Panamericanismo.

“... La famosa doctrina de Monroe, que pudo parecernos durante un siglo la garantía de nuestra independencia política contra el peligro de conquistas europeas, se ha revelado gradualmente como una reserva del **derecho norteamericano a protegernos e intervenirnos**” (Citado en Vítale (2002, pág. 74)) **[Negrita propia]**.

Ingenieros advertía que una de las herramientas más peligrosas, si no era controlada por parte del agente receptor, en este caso la región, era la IED. Había observado que la

práctica vivía en un estado de crecimiento continuo y estaba caracterizada por presentar una asimetría inicial y procesal. Como menciona Luis Vitale:

“Ingenieros advirtió claramente el nuevo carácter que había adquirido el sistema capitalista mundial al promover la inversión de capitales en la áreas llamadas periféricas:

“El capitalismo norteamericano quiere captar las fuentes de nuestras riquezas nacionales y asegurarse su control, con derecho de intervención para proteger los capitales que radica y garantizar los intereses de los prestamistas. Es ilusorio que entre tanto nos dejen una independencia política, cada vez más nominal” (Citado en Vitale (2002, pág. 75)) **[Negrita propia]**.

Por ello, el autor indicaba que era una necesidad inmediata el proceder a la unión latinoamericana para poder hacer frente a las capacidades del agente externo. De ello la famosa afirmación de Ingenieros: “Latinoamérica para los latinoamericanos” (Citado en Vitale (2002, pág. 74)).

6.2 Mención a José Martí. La identidad como mecanismo articulador de ideas y prácticas ante el agente externo.

“El primer criollo que le nace al español, el hijo de la Malinche, fue un rebelde. La hija de Juan de Mena, que lleva el luto de su padre, se viste de fiesta con todas sus joyas, porque es día de honor para la humanidad, el día en que Arteaga muere! ¿Qué sucede de pronto, que el mundo se para a oír, a maravillarse, a venerar? ¡De debajo de la capucha de Torquemada sale, ensangrentado y acero en mano, el continente redimido! Libres se declaran los pueblos todos de América a la vez. Surge Bolívar, con su cohorte de astros” (Martí, 2005, pág. 27).

José Martí, literato con gran habilidad redactora, viendo a EEUU como el agente que pretendía instaurar su dominio sobre toda tierra americana, más allá de su frontera, manifestaba en sus textos su percepción del contexto continental, indicando que la precaución debía primar en la relación de la región con los EEUU.

En este sentido, uno de los discursos que mejor evidenciaron su postura se produjo durante la celebración del Congreso Internacional de Washington en 1889, en el cual indicó que la unidad era una acción pertinente a adoptar por parte de los Estados miembros, ante las prácticas de ejercían los diferentes agentes externos:

” ¿Y han de poner sus negocios los pueblos de América en manos de su único enemigo, o de ganarle tiempo y poblarse, y unirse, y merecer definitivamente el crédito y respeto de naciones, antes de que ose demandarles la sumisión el vecino...?” (Martí, 2005, pág. 68)

Era época de cambios, de cambio de liderazgos. Con España en decadencia, la lucha por asentarse en la región pasó a ser un asunto a tener en las listas de diversos gobiernos de las otras potencias. Era el momento de instaurar nuevos roles en el poder. Y el vecino, que se había apropiado hasta del nombre del continente en su denominación: Estados Unidos de América, no quería que ninguna potencia se adquiriese capacidad de acción en tierras al sur de su Estado.

“En América hay dos pueblos y no más de dos, de alma muy diversa por los orígenes, antecedentes y costumbres, y solo semejantes en la identidad fundamental humana” (Martí, 2005, pág. XI).

EEUU y su injerencia la reflejó Martí excelentemente en sus escritos. Pues resultaba ser que los EEUU habían pasado a la acción regional, viendo como los Estados europeos perdían capacidad de maniobra en los Estados al sur de los EEUU. Los cuales también eran América, pero eran otra América. Según Martí, eran la América que se revelaba contra las garras que pretendían dominar sus destinos, sus ideas y sus prácticas.

“Nunca, de tanta oposición y desdicha, nació un pueblo más precoz, más generoso, más firme. De aquella América enconada y turbia, que brotó con las espinas en la frente y las palabras como lava, saliendo, junto con la sangre del pecho, por la mordaza mal rota, hemos venido, a puño de brazo, a nuestra América de hoy, heroica y trabajadora a la vez, y franca y vigilante, con Bolívar de un brazo y Hebert Spencer de otro; una América sin suspicacias pueriles, ni confianzas cándidas, que convida sin miedo a la fortuna de su hogar a las razas todas, porque sabe que es la América de la defensa de Buenos Aires y de la resistencia del Callao, la América del Cerro de las Campanas y de la Nueva Troya” (Martí, 2005, pág. 28).

El tiempo del hombre americano del que él era parte, el proceso independentista debía continuar, ya no de los españoles como anteriormente, sino a principios de siglo de los EEUU, que era el agente que quería dominar las tierras americanas. Martí así lo escribió al señor director del periódico *La Nación* en Nueva York el 2 de Noviembre de 1889, dentro de su comentario acerca del Congreso Internacional de Washington:

“Jamás hubo en América, de la independencia acá, asunto que requiera más sensatez, ni obligue a más vigilancia, ni pida examen más claro y minucioso, que el convite que los Estados Unidos potentes, repletos de productos invendibles, y determinados a extender sus dominios en América, hace a las naciones americanas de menos poder, ligadas por el comercio libre y útil con los pueblos europeos, para ajustar una liga contra Europa, y cerrar tratos con el resto del mundo. **De la tiranía de España supo salvarse la América española; y ahora, después de ver con ojos judiciales los antecedentes, causas y factores del convite, urge decir, porque es la verdad, que ha llegado para la América española la hora de declarar su segunda independencia**” (Martí, 2005, pág. 57) [Negrita propia].

Y es que Martí consideraba que para que la que el denominaba *Nuestra América* comenzase un camino independiente, necesitaría por una parte reconocer su propia identidad; y por otra unirse como medida, más que de reafirmación, de protección ante la acción extranjera.

Veía necesario que se abordase un proceso de integración de las comunidades nativas en la sociedad y decía: “Hasta que no se haga andar al indio no comenzará a andar bien la América” (Martí, 2005, pág. 5). Ya que en su perspectiva, las civilizaciones autóctonas de América eran un suceso imborrable y rico, cuya existencia no podía ser separada del devenir regional. No se les debía apartar de la realidad, contrariamente se debía promover un proceso de inclusión desde ya, y eliminar toda la exclusión que se había fomentado desde los tiempos de colonización.

Los procesos de independencia habían sido resultado de una larga lucha, fraguada desde que algún ciudadano con orígenes externos, con algo de poder, se creyó perteneciente a la región. Decía que habían sido necesarios trescientos años para dar esos pasos y, un siglo después, todavía se detectaba que no se era soberano de acuerdo a los atributos propios del concepto. Sí parcialmente, ya que los Estados habían sido reconocidos como soberanos-soberanía legal internacional-, pero indicaba que las prácticas políticas y militares que se habían producido en la región daban muestras incontestables de cómo los Estados externos intervenían en la soberanía interna, en la soberanía interdependiente, así como determinaban su papel en cuestiones de soberanía externa.

En ese contexto el latinoamericano no mostraba apenas ninguna particularidad en la construcción política de las instituciones. Era evidente que se reflejaba lo otro y se copiaba, eran el reflejo. Un *modus operandi* externo en las prácticas que debían construir algo propio.

Era en el sentido que lo habían criticado otros autores como Bilbao, en el que Martí volvía a hacer referencia a la imposibilidad de establecer sistemas de Estado creados bajo otras condiciones, sin tener en cuenta las singularidades de los territorios latinoamericanos.

“La incapacidad no está en el país naciente, que pide formas que se le acomoden y grandeza útil, sino en los que quieren regir pueblos originales, de composición singular y violenta, con leyes heredadas de cuatro siglos de práctica libre en los Estados Unidos, de diecinueve siglos de monarquía en Francia” (Martí, 2005, pág. 32) **[Negrita propia]**.

Por este motivo se postuló en contra de aquellos que querían establecer copias del modelo de América del Norte en el sur, puesto que para él:

“El problema de la independencia no era el cambio de formas, sino el cambio de espíritu. Con los oprimidos había que hacer causa común, para afianzar el sistema opuesto a los intereses y hábitos de mando de los opresores” (Martí, 2005, pág. 35) **[Negrita propia]**.

Por lo que este autor se preguntaba:

“¿Cómo han de salir de las universidades los gobernantes, si no hay universidad en América donde se enseñe lo rudimentario del arte del gobierno, que es el análisis de los elementos peculiares de los pueblos de América?” (Martí, 2005, pág. 35) **[Negrita propia]**.

Lo indicado en este sentido es relevante, al cuestionar el origen ideacional de los postulados que inspiraban a los diversos actores que analizaban la realidad latinoamericana. Indicando que la creación de una Universidad latinoamericana que produjese conocimiento propio era algo elemental, puesto que la construcción de las ideas determinaría las prácticas y la constitución de institucionalidad en ALC. Por lo que si seguían siendo estos procesos externos a la región, las conclusiones se basarían en premisas de otras realidades y atenderían a estructuras ideacionales ajenas a las particularidades de la región.

“¡Porque ya suena el himno unánime; la generación actual lleva a cuestas, por el camino abonado por los padres sublimes, la América trabajadora; del Bravo a Magallanes, sentado en el lomo del cóndor, regó el Gran Semí, por las naciones románticas del continente y por las islas dolorosas del mar, la semilla de la América nueva!” (Martí, 2005, pág. 39).

Nota: Coetáneo a Martí

Por otra parte y en referencia a otro autor que fue coetáneo de Martí, no se quería acabar este epígrafe referido al autor sin hacer mención al colombiano José María Vargas Vila, poeta, escritor y pensador, que incidía en sus textos sobre la situación imperante en los Estados latinoamericanos y el actor externo que él denominaba *los Yankis*: los EEUU:

“¿Cuál es el peligro de la América Latina? EL PELIGRO YANKI (...) cerca de seis lustros que vengo anunciando a los pueblos de la América Latina EL PELIGRO YANQUI” (Citado en Vitale (2002, pág. 69)).

Aunque su obra se publicó antes de la aparición de Sandino, puesto que el libro *Ante los Bárbaros* (1900) es anterior a la insurgencia, su visión sobre aquello que estaba sucediendo en Nicaragua es relevante:

“¡Nicaragua se negaba a vender su territorio, cediendo la soberanía de la zona; y Nicaragua fue condenada a desaparecer, con esa soberanía que no quería vender!” (Citado en Vitale (2002, pág. 69)).

También los textos de Vargas Vila relatan **la necesidad de la unión**, más que por ser uno, **por necesidad de unir fuerzas ante los actores externos** en ese momento histórico, ante los EEUU.

“...convenciones y Tratados formales en que esas repúblicas se comprometen a defender mutua y colectivamente su Integridad y su Independencia, contra toda tentativa de anexión y de Conquista, intentada por yanquis y europeos” (Citado en Vitale (2002, pág. 71)).

6.3 La Inversión Extranjera Directa en el centro de la crítica de diversos procesos unionistas. Dos actores políticos como ejemplos de esta práctica: Haya de la Torre y Sandino.

Entrado ya el siglo XX, apareció en escena uno de los legados de la Revolución Mexicana, José Vasconcelos (1882-1959), abogado, escritor, político, pero sobre todo sociólogo. Este hizo referencia al poder y a la particularidad presente en el ciudadano latinoamericano debido al proceso integrador de razas, de la quinta raza, la raza cósmica, en una sociedad que, como se diría hoy en día, se tildaría de plurinacional, en su obra *La raza cósmica. Misión de la raza iberoamericana. Notas de viajes a América del Sur* (1925). En donde manifiesta su

alabanza al ciudadano latinoamericano, al que consideró como el encargado de integrar a partir de la diferencia.

“En la América española ya no repetirá la Naturaleza uno de sus ensayos parciales, ya no será la raza de un solo color, de rasgos particulares, la que en esta vez salga de la olvidada Atlántida; no será la futura ni una quinta ni una sexta raza, destinada a prevalecer sobre sus antecesoras; lo que de allí va a salir es la raza definitiva, la raza síntesis o raza integral, hecha con el genio y con la sangre de todos los pueblos y, por lo mismo, más capaz de verdadera fraternidad y de visión realmente universal” (Prólogo Vasconcelos (1925)).

Vasconcelos veía que la identidad latinoamericana había sufrido del mestizaje continuado desde las épocas de conquista y que, como fruto de ello, contaba con una especial capacidad para integrar, acoger y construir a partir de la diferencia. Es decir, indicaba que había una identidad en la región que permitiría hacer otro tipo de práctica política que no respondiese a los modelos importados. Construir uno nuevo, uno peculiar y característico de la región, esta vez sí, uno propio (Vasconcelos, 1925).

Además de por sus propuestas Vasconcelos adquirió relevancia al haber, durante su época como Ministro mexicano de educación, contratado a un joven llamado Víctor Raúl de la Haya. El cual con el tiempo, y seguro que con algo de influencia de Vasconcelos, acabó siendo un claro líder y fundador de un movimiento promotor del empoderamiento de la región ante la acción extranjera: la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA).

Víctor Raúl de la Haya⁴⁶⁸ fue sobre todo un antiimperialista. Esta actitud se constituyó a partir de su primer contacto con el capital externo en la región, a través de su experiencia con las azucareras en el Perú. En éste fue consciente del impacto que habían tenido las gigantescas empresas azucareras de propiedad extranjera en el frenó al empoderamiento regional, ya que desde años atrás sus prácticas impactaban en el mercado, quebrantando los patrones agrarios y de comercio. Resultando desfavorecida de la práctica la ciudadanía peruana (Soler, 1987).

De la Haya estaba convencido de que las capacidades de los agentes externos, debido a la metodología comercial que usaban las potencias extranjeras en ALC por medio de su IED,

⁴⁶⁸ En referencia al APRA y Víctor Raúl de la Haya, muchos autores suelen nombrar la relación con Mariátegui por coetáneo y socialista. Sin embargo, no se considera a partir de su lectura, que este último propusiese un modelo regional independiente. Puesto que, aunque en sus inicios apoyase al APRA, se distanció y abogó más por una lucha de clases global y no por la creación de una particular identidad latinoamericana.

contando con grandes volúmenes de capitales, tecnología avanzada y sistemas de organización con altos grados de eficiencia, eran causantes del empobrecimiento que sufrían las clases medias del país, al verse eliminada o muy sesgada su capacidad competidora de éstos. Señalando además, que este hecho impedía instaurar algún sistema de integración contrario al empobrecimiento de aquellos que se veían expulsados del comercio. Es decir, limitaba sus capacidades ostensiblemente.

Haya de la Torre examinó la historia de lo que él- a partir de la influencia de Vasconcelos- denominó “Indoamérica”, fijando su atención analítica en la relación que había poseído la región con el capital a lo largo de la historia y analizando las medidas que se habían instaurado. Concluyendo que:

“Si examinamos la historia económica indoamericana, descubriremos esta general característica: Con el capital inmigrado se insinúa en nuestros pueblos agrícola-mineros la era capitalista. Y es Inglaterra —donde el capitalismo define más pronto su fisonomía contemporánea— la nación que inicia la exportación de capitales” (Haya de la Torre, 2010, pág. 114).

“Es bien sabido que en el proceso económico moderno de algunos pueblos indoamericanos es difícil distinguir, a primera vista, el capital nacional del capital extranjero y sus líneas de separación originarias. Empero, **si buscamos en todos ellos los comienzos del fenómeno capitalista, encontraremos casi siempre al capital inglés o al yanqui, en oposición o en alianza entre sí —más frecuentemente en oposición—; y en torno de uno y otro, formas embrionarias o pequeños intentos de un verdadero capital nacional**” (Haya de la Torre, 2010, pág. 115) [Negrita propia].

Haya de la Torre, al igual que otros coetáneos de la época, siendo consciente de la influencia de la IED en la capacidad de progreso, para concretamente el Perú y por extensión para la región de ALC, abogaba decididamente, no por cortar de raíz la IED por parte de las potencias externas, sino por establecer un control que regulara claramente su aplicación.

“...todos los indoamericanos lo sabemos bien- que las dos terceras partes de **la fuerza del poder imperialista en nuestros países radican en el dominio que él ejerce, directa o indirectamente, sobre los poderes del Estado como instrumento político de dominación**” (Haya de la Torre, 2010, pág. 116) [Negrita propia].

Y es que Haya de la Torre no se declaraba contrario a la entrada de capital extranjero, simplemente especificaba, que éste no podía circular a sus anchas sin ningún tipo de control, ya que consideraba “...absolutamente necesario que el Estado lo controle para que su función en la economía nacional sea de cooperación y no de absorción” (Citado en Klaren (1976, pág. 241)). Es decir, había que ejercer algún tipo de medida o exigencia a la IED, de modo que produjese beneficios y no dañase la estructura poblacional en el Estado receptor.

Por lo tanto, Haya de la Torre entendía que la problemática de base era más una cuestión política que económica. Indicó que la capacidad para ejercer la decisión sobre qué reglas determina el desarrollo de la práctica. Por lo que ésta era más relevante que la práctica económica en sí.

A partir de esa percepción de la realidad Haya de la Torre, allá por 1924, decidió dar un paso adelante y fundar el APRA. Basta con leer detenidamente los cinco puntos generales del articulado de APRA para entender su lucha:

1. Acción contra el imperialismo yanqui.
2. Por la unidad política de América Latina.
3. Por la nacionalización de tierras e industrias.
4. Por la internacionalización del Canal de Panamá.
5. Por la solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo.

(Haya de la Torre, 2010, pág. 98).

Al analizar levemente el orden de los puntos se observa cuan evidente era el problema que había detectado Haya de la Torre. Este entendió que la unidad de ALC era la acción que articularía la capacidad necesaria para que, conjuntamente, se pudiese articular un mecanismo capaz de regular la práctica de la IED, y asegurar que ésta reportase beneficios a la región.

En este contexto, la capacidad de decisión, más que una potestad de un Estado particular, pareciera que se trataba de una simple atribución de organización a un Estado que no se veía reflejada en las regiones latinoamericanas en sí, ya que la región estaba ligada a ciertas circunstancias “evolutivas” y debía someterse a decisiones externas, continuamente. Y la necesidad de capital para lograr ese ansiado estado “civilizado” así lo requería. A este respecto indicaba Haya de la Torre lo siguiente:

“El Estado, expresión jurídica de su ilusoria soberanía, subsiste bajo la égida de los poderes extranjeros que guardan las llaves de sus arcas. La acción económica del imperialismo se proyecta sobre el campo social como el supremo “determinador” de la vida política de los veinte pueblos en que se divide nuestra gran nación” (Haya de la Torre, 2010, pág. 33) [Negrita propia].

“El progresivo sometimiento económico de nuestros países al imperialismo deviene en sometimiento político, pérdida de la soberanía nacional, invasiones armadas de los soldados y marineros del imperialismo, compra de caudillos criollos, etcétera. Panamá, Nicaragua, Cuba, Santo Domingo y Haití son verdaderas colonias o protectorados yanquis como consecuencia de la “política de penetración” del imperialismo” (Haya de la Torre, 2010, pág. 100). [Negrita propia].

Si bien Haya de la Torre indicaba continuamente la pertinencia de proceder a la unión regional, no dejó clara su propuesta unificadora de “Indoamérica”. No indicó si era adecuada la adopción de una unificación o una confederación. Lo que sí expresó, es que era necesaria la unión como contraposición a la acción exterior. Tampoco pareciere saber el tiempo necesario para llevar a cabo la tarea de unificación interna. Lo que sí manifestó fue el orden de las fases que se debían realizar en dicho proceso, aludiendo primeramente al campo económico.

“La unificación gradual, económica primero, política después, o total de súbito — caso más difícil, pero no por eso menos anhelado— tendrá que realizarse, también, por política de frente único, a través de un partido disciplinado y poderoso” (Haya de la Torre, 2010, pág. 135) [Negrita propia].

Casi paralelamente a la aparición del APRA, en el continente e influenciado por él en cierto sentido, se produjo la aparición en la escena de otro actor relevante en la identificación de la IED como el mecanismo que oprimía la capacidad de la región para mejorar sus niveles de vida, surgía la figura del nicaragüense Augusto Cesar Sandino (1895-1934).

Sandino fue un actor político que luchó por liberar a Nicaragua del dominio de los EEUU a través de la lucha armada, ya que había formado el conocido como Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Ejército que entre sus logros fue capaz de derrotar a los marines y a la Guardia Nacional de Nicaragua- ésta entrenada y subvencionada con dinero estadounidense- en sus primeros años de batalla, hasta que en 1933 se firmó la paz. En 1934 le asesinaron.

Como parte de la estrategia que Sandino creía adecuada para luchar contra la práctica de la IED, legó un escrito en el que manifestaba que entendía necesario promover la unión regional para superar los problemas de Latinoamérica. Indicando que, primeramente, la unidad era requisito para operar en contra del Imperio estadounidense, y no prioritariamente por considerar que el ciudadano latinoamericano compartía identidad, que lo hizo, sino porque preveía que separados eran muy débiles para abordar y requerir la transformación de unas prácticas que repercutiesen positivamente en la región. El escrito de Sandino que pretendía dar respuesta a la situación en su país y que hacía extensa a todo ALC lo denominó: Plan de realización del Supremo Sueño de Bolívar (1929).

Para entender el origen de las ideas que presentó Sandino, hay que contextualizar los hechos que allí se dieron cita. En Nicaragua los EEUU, por medio de la IED que realizaron compañías como la *United Fruit Company*, *Standrad Fruit Company* y *Cuyamel Fruit Company*, se habían apoderado del producto principal de exportación del país: la banana. A consecuencia de ello, los EEUU intervenían - ya fuese políticamente o en casos extremos militarmente- siempre que estas compañías se sintiesen desprotegidas, ante posibles cambios de gobierno. De hecho, en la época se les atribuía a las compañías la capacidad de intervenir en la articulación del poder en los Estados de Centroamérica. Se decía: “...deponen presidentes, compran diputados y derogan y emiten leyes, encienden guerras. Son las *banana republics*” (Ramírez, 1979, pág. 20).

Ante la percepción de este contexto Sandino manifestó:

“Las condiciones en que se ha venido realizando nuestra lucha armada en Nicaragua contra las fuerzas invasoras norteamericanas y las de sus aliados nos dieron el convencimiento de que nuestra persistente resistencia, larga de tres años, podría prolongarse por dos, tres, cuatro, o quién sabe cuántos más, pero que al fin de la jornada, **el enemigo, poseedor de todos los elementos y de todos los recursos, habría de anotarse el triunfo**, supuesto que en nuestra acción nos hallábamos solos, **sin contar con la cooperación** imprescindible, oficial o extraoficial, de ningún Gobierno **de nuestra América Latina** o la de cualquier otro país. Y fue esa visión sombría que nos impelió a idear la forma de evitar que el enemigo pudiera señalarse la victoria. **Nuestro pensamiento trabajaba con la insistencia de un reloj, elaborando el panorama optimista de nuestra América triunfadora en el mañana**” (Sandino, 1929) [Negrita propia].

Las compañías estadounidenses se apoderaban paulatinamente de las producciones internas de los países de Latinoamérica y, a consecuencia de esta percepción de la realidad, fue

elaborado el *Plan* de Sandino. A este contexto trataba de dar respuesta y, por ello, indicó la necesidad de construir una “especie” de unidad regional ante los graves problemas que atravesaba que, en términos de capacidades, se significaban en pobreza y miseria para grandes grupos sociales.

“Empero, unidos a estos graves problemas que afectan la estabilidad autónoma de los Estados Latinoamericanos, lo que nos interesa salvar sin más dilaciones, son la base naval en el Golfo de Fonseca y la ruta del Canal Interoceánico a través de Nicaragua⁴⁶⁹, lugares que en un día no remoto llegarán a constituir tanto el imán como la llave del mundo y, por consiguiente, de hallarse bajo **la soberanía latinoamericana**, serán un baluarte **para la defensa de su independencia sin limitaciones y una válvula maravillosa para el desarrollo de su progreso material y espiritual rotundos**” (Sandino, 1929) [Negrita propia].

Al igual que otros coetáneos, su proyecto trataba de promover un proyecto de integración que aunase capacidades económicas y militares, y aunque no abogó por la constitución de una confederación de firme, por concebirla como un proyecto inalcanzable en la época, indicaba la necesidad de establecer una alianza regional, a través de una conferencia en la que participasen los veintiún Estados de América Latina. En ella debían acordar, primeramente, la abolición de la doctrina Monroe, la cual en su voz “...anula el vigor que dicha doctrina pretende poseer para inmiscuirse en la política interna y externa de los Estados Latinoamericanos” (Sandino, 1929); construir un ejército común; una Corte de justicia Latinoamericana; una Nacionalidad Latinoamericana (frase que más se repite en el Plan); y una Comisión encargada de elaborar la Ley Orgánica y reglamentos de la Corte. Es decir, crear una unidad con órganos y leyes supranacionales en algunos campos.

Asimismo, como parte del discurso Sandinista, señalar la visión claramente antiimperialista que contenía el Plan. Se consideraba a los EEUU como el verdadero enemigo de la armonía regional. Las experiencias de Sandino en Honduras y su contacto con las compañías estadounidenses - ya que trabajó para la *United Fruit* durante su estancia en Guatemala (Geyer, 2002, pág. 4)-, le hicieron conocedor de la potencia del Estado situado en el norte de América, y de quién eran aquellos que luego se verían defendidos por el Estado estadounidense, que de ningún modo poseían los mismos intereses que los ciudadanos nicaragüenses ni latinoamericanos, a su entender.

⁴⁶⁹ En Junio de 2013 el gobierno de Nicaragua ha concretado la aprobación del Canal Interoceánico de Nicaragua. Véase en línea: <http://www.confidencial.com.ni/downloads/262.pdf> (Consulta realizada el día 23 de enero de 2014).

Señalar por último, que no fueron éstos los únicos movimientos y revoluciones que ocurrieron durante los primeros 50 años en ALC. Hubo alguna más que merece ser rescatada y en la que se hicieron alusión directas al papel de la IED en la región, aunque no todas incluyesen un plan unificador de AL como mecanismo para revertir los efectos de esta práctica. Entre ellas destacan:

- a) 1910: la Revolución Mexicana: liderada por Emiliano Zapata y Pancho Villa. De carácter campesino pretendía empoderar a los campesinos de tierras.
- b) 1932: La Revolución Salvadoreña: primera revolución dirigida por un partido Comunista. Bajo el líder Farabundo Martí, instado en la revuelta Sandinista, fue una de las primeras insurrecciones populares armadas en América Latina, promulgando de nuevo la necesidad de realizar la unión latinoamericana.
- c) 1952: La Revolución Boliviana: se trata de la primera revolución obrera del continente. Lucha por el terreno, y por su explotación por parte de los campesinos e indígenas.
- d) 1952: Movimiento antiimperialista y anti-oligárquico: dirigido por las clases medias y un sector de la burguesía en Guatemala. Este movimiento realizó una reforma agraria, que atacó a los grandes latifundios. El hacerlo sobre las propiedades estadounidenses causó la intervención militar.⁴⁷⁰

Estas revoluciones ocurridas durante la primera mitad del siglo XX, incidían en la desigualdad y en la sumisión que presentaban sus territorios, aunque aquello que las hacía coincidir era la común percepción de que la IED, y la consecuente explotación de bienes, perjudicaba los beneficios de la interrelación a los Estados receptores, en favor de la compañías extranjeras, a las cuales acusaban de estar protegidas de protección diplomática, económica y militar. Indicando que ante decisiones soberanas de los Estados, si éstas podrían poner en peligro los bienes o beneficios de los inversores, se amenazaba o actuaba mediante una acción de injerencia en las políticas internas, por las buenas o por la fuerza.

⁴⁷⁰ A este respecto cita Luís Vítele las reflexiones del expresidente Arévalo sobre la derrota por golpe de estado llevado a cabo por Castillo Armas: “Castillo armas recibió dineros de la **United Fruit** para simular una revolución, recibió armas de una potencia extranjera para matar compatriotas, recibió donativos del departamento de Estado, en sumas que llegan a los 60 millones de dólares, recibió regalos en dinero (...) ¿qué no recibió?” (Vítale, 2002, pág. 357).

6.4 Pequeño apunte: impacto del pensamiento socialista en la realidad latinoamericana.

A raíz de las condiciones de desigualdad y problemas para la superación de este mal histórico en ALC, una corriente política en la región se identificó con el discurso Marxista-socialista que recorría Europa en la época, a partir de un análisis de las desigualdades existentes en la región en relación con las fuerzas económicas dominantes. En este sentido, si bien es verdad que la adopción de una corriente comunista como la europea poseía sus particularidades, analistas como el reconocido José Mariátegui se postularon a favor de esta corriente al analizar la realidad latinoamericana desde una perspectiva material-histórica.

Como figura de mayor reconocimiento por su apego al socialismo, Mariátegui indicó que existía claramente una relación entre la pobreza y la raza: indígena/no indígena. El análisis obtuvo reconocimiento, puesto que Mariátegui señaló a los indios como aquel grupo social que históricamente había sido excluido de las altas clases, indicando que si una de las pretensiones de la región era revertir la situación interna de desigualdad, todo proceso de empoderamiento del proletariado pasaba desarrollar una solución social para eliminar la cuestión de raza.

En referencia a la IED, Mariátegui señaló que el evidente proceso acumulativo de capital que se había desarrollado en el mundo, era la verdadera causa por la cual toda inversión de capitales en tierras latinoamericanas poseía un carácter asimétrico. Por ello, construía cierta crítica hacia aquellos grupos burgueses que se tildaban de progresistas y abogaban por movimientos nacionalistas o continentalistas, si en su proyecto no incluían el eliminar las diferencias de clase. Él afirmaba que nunca se había conocido una burguesía progresista y, por lo tanto, el único fin de una revolución burguesa, dentro de la problemática existente en la región latinoamericana, sería la perpetuidad de un sistema de clases. Lo cual no acabaría con la desigualdad.

En este sentido cabe rescatar la Carta de Mariátegui a Mario Nerval (28-6-1929), en donde aludía a que exigiría un programa concreto con medidas claras para eliminar las clases sociales.

“Los que con un programa nacionalista revolucionario quieran organizar a la pequeña burguesía, son muy libres de hacerlo. Si su partido, hipotético por el momento llega a ser

una organización de masas, no tendremos inconveniente en colaborar eventualmente con él con objetivos bien definidos” (Mariátegui, 1984, pág. 597).

El postulado de Mariátegui causó que se alejase de un compañero de viaje que tuvo por momentos, el citado anteriormente Víctor Raúl de la Haya. En un principio colegas y amigos, el hecho de que el primero viese el proceso de liberalización del proletariado como una cuestión de índole global y no particular, fue por lo que De la Haya decía separarse de Mariátegui. Puesto que Víctor Raúl de la Haya, como manifestó en el Congreso de París, no entendía similares las cuestiones históricas que habían provocado la situación existente en ALC y, por ello, los remedios no eran similares. A lo que Mariátegui respondía cuestionando este Antiimperialismo de la burguesía nacional que representaba a sus ojos Haya de La torre, afirmando que:

“El antiimperialismo, admitido que pudiese movilizar, al lado de las masas obreras y campesinas, a la burguesía y a la pequeña burguesía nacional... no anula el antagonismo entre las clases, no suprime su diferencia de intereses” (Mariátegui, 1929).

En cierto sentido había un nexo de unión entre aquellos que adoptaron el postulado socialista y los percusores de la unión latino-americana. Todos apuntaban a que el estado de las cosas en Latinoamérica era a causa de la intervención y dominio extranjero, aunque los primeros señalaban también a aquellos pobladores latinoamericanos que para superar la intervención reproducían las mismas prácticas, las cuales eran, según Mariátegui, reproductoras de clases en el interior.

Uno de los autores que fue reflejo de la cohesión en ciertas cuestiones con ambos postulados fue el socialista cubano Juan Antonio Mella, cuando en el Primer Congreso Nacional de Estudiantes, en el que apoyó la realización de un Congreso Latinoamericano de Estudiantes, manifestó una serie de medidas que coincidían con ambos postulados.

Mella fue figura del movimiento anticapitalista que se desarrolló en la isla de Cuba. Contrario a la Enmienda Platt, a la doctrina Monroe y al Panamericanismo, abogaba por la necesidad de adoptar medidas concretas. Las cuales presentaban coincidencias con muchas de las propuestas de la época, al indicar la pertinencia de la protección ante la apropiación económica e injerencia en las decisiones internas de los EEUU: a) retirada de tropas norteamericanas; b) internacionalización del Canal de Panamá; c) nacionalización de las

industrias básicas; c) (la medida socialista) reparto de tierras entre los campesinos (Vitale, 2002).

Relevante en Mella se detecta que promovió una idea clara sobre la importancia o no del ser soberano. Él entendía que los EEUU tratarían de buscar mecanismos alternativos al dominio ejercido, y no ya para invadir al estilo clásico las tierras latinoamericanas y declararlas como parte de su soberanía, sino que el indicaba que abordarían el cómo elaborar una estrategia sutil, que de algún modo promoviese la maximización de su beneficio en el intercambio comercial, a través de la promoción y la instalación de sistemas políticos y sociales que atendiesen a sus objetivos. Mena fue perspicaz al indicar que:

“Los Estados Unidos... no desean tomar los territorios de la América para exterminar toda la propiedad de las clases dominantes, sino alquilarlas a su servicio y hasta mejorarlas con tal de que les den la explotación de lo que ellos necesitan. Un buen país burgués, con un gobierno estable, es lo que los Estados unidos quieren en cada nación de América, un régimen donde las burguesías nacionales sean accionistas menores de las grandes compañías. En cambio, les conceden el privilegio de gobernar, de tener himnos, banderas y hasta ejércitos. Les resulta más económico esta forma de dominio” (Citado en Vitale (2002, pág. 88)) [Negrita propia].

Es por ello que Mella también era partidario de la unión regional, no la unión del APRA, la unión socialista de Latinoamérica. Porque señaló que la “...unidad sólo puede ser realizada por las fuerzas revolucionarias del capitalismo internacional: obreros, campesinos, indígenas, estudiantes e intelectuales de vanguardia” (Citado en Vitale (2002, pág. 88)).

En definitiva en Mella es relevante destacar, que éste advertía de que las grandes potencias en términos de capital e inversiones, indicando que con el tiempo, tratarían de idear algún mecanismo por el cual, aun dejando de intervenir militarmente en el área, la relación promocionase cierta estabilidad y mantuviese el máximo beneficio del intercambio comercial. Es decir, que los responsables de los Estados receptores creyesen en el nuevo tipo de interacción, aunque la región siguiese siendo perjudicada en la práctica.

6.5 Leve mención a procesos ocurridos tras los años 50. El pensamiento unionista en el Che, Allende y otros, en relación al papel de la Inversión Extranjera Directa.

Si bien los actores políticos que se van a citar pertenecen a tiempos posteriores al 1950, se decidió hacer una leve relevancia final, al haber coincidido la indicación que presentaron en términos de prácticas y agentes. Es decir, indicaron que la acumulación de capital en manos extranjeras se significaba en una quiebra constante en términos de soberanía regional. Escenario en el que las prácticas políticas respondían más a intereses externos que al consenso interno y demanda de los ciudadanos.

De nuevo y como parte del discurso regional, se señalaba a la IED como la práctica determinante en el no empoderamiento de los Estados de la región. Indicándose de nuevo, la necesidad de impulsar una práctica política que atendiese a las demandas reales de la ciudadanía que habitaba el territorio.

Para ello, las diversas Revoluciones indicaron que tanto a nivel nacional como regional, existía la necesidad de abordar una transformación política, capaz de adquirir los órganos de poder, el control sobre su economía, la política y la ley. Es decir, prácticas que permitiesen a la región que sus partes se apoderasen del Estado de derecho, si el objetivo era revertir la situación. Esto sería posible si se lograban determinar reglas que beneficiasen la mejora de la situación regional.

Como máximo exponente del discurso que se encuentra posterior a la década de los 50, se ha creído apropiado rescatar a dos figuras muy relevantes: el mitificado Ernesto Che Guevara y el chileno Salvador Allende. El primero trató de fructificar su sueño de liberar América Latina de la opresión y pobreza, indicando que esta situación lo había causado, en gran medida, el interés económico y la injerencia política de los agentes externos. En concreto los inversores y sus gobiernos, los cuales habían actuado en búsqueda de un maximización del beneficio, sin atender en ningún instante a los efectos de sus práctica. Las cuales habían provocado esclavitud y miseria.

Ernesto Guevara percibía que los mismos males adolecían a toda región de ALC. Por lo que era un deber regional actuar conjuntamente por necesidad, ya no sólo por la visión unionista de Latinoamérica al poseer una identidad, cultura y lengua común, sino que al indicar que la región había sufrido unas condiciones de trato similares desde el exterior en

los diversos territorios, señalaba que se significaban los mismos síntomas de desigualdad y pobreza y, por ello, se debían combinar capacidades para operar en conjunto. En este sentido, como afirmaría Fidel Castro, texto que se recoge en la introducción del libro *El diario del Che en Bolivia* (2005), el Che:

“No concebía la lucha en Bolivia como un hecho aislado sino como parte de un movimiento revolucionario que no tardaría a otros países de América del Sur” (Guevara E., 2005, pág. 15).

Entre las medidas que indicó el Che, destacaban aquellas de corte socialista que indicaban un proceso de empoderamiento necesario, mediante una nacionalización de las tierras; el asegurar la educación de los ciudadanos; una inclusión *de facto* de los indígenas en la sociedad, por entender, al igual que Mariátegui, el vínculo causa-efecto entre la etnia y la clase en la región (Duthel, 2014).

Del mismo modo que otros autores, el Che Guevara se sumaba a aquellas líneas analíticas que habían manifestado que la ciudadanía latinoamericana tenía muchas similitudes históricas, que hacían de la región una gran nación, como quedó evidenciado, con mayor claridad que en otros, en su mensaje a la Revista Tricontinental, el 16 de abril de 1967:

“En este continente se habla prácticamente una lengua, salvo el caso excepcional del Brasil, con cuyo pueblo los de habla hispana pueden entenderse, dada la similitud de ambos idiomas. **Hay una identidad tan grande** entre las clases de estos países que logran una identificación de tipo «internacional americano», mucho más completa que en otros continentes. **Lengua, costumbres, religión, amo común, los unen**” (Guevara, 1967) **[Negrita propia]**.

Si bien la percepción de lucha que el Che indicaba, podría caracterizarse como un proceso de revolución mundial marcado por la categorización presente en su ideario de una sociedad de clases, quedó evidenciado que éste se unía al reclamo histórico de integración o unión de la región como primer paso para la supresión de las clases. Indicando en todo momento que el proceso perseguiría como fin máximo: la aglutinación de fuerzas como respuesta a la situación asimétrica en la que se encontraban tanto en la región respecto a otras regiones, como la existente en el interior de los Estados. Abolir la desigualdad era la máxima del Che. Esto quizás se debió a la experiencia que había adquirido durante su juventud, cuando presenció el impacto de la IED en la región.

“Tuve la oportunidad de pasar por los dominios de la United Fruit, convenciéndome una vez más de lo terribles que son estos pulpos. He jurado ante una estampa del viejo y llorado camarada Stalin no descansar hasta ver aniquilados estos pulpos capitalistas” (Citado en Duthel (2014, pág. 28)).

Un leve tiempo más tarde, otro de los hombres que no se pueden escapar de este repaso, aunque su presencia se diese en los 70, es Salvador Allende. Dado que desde sus principios políticos se declaró un hombre de América latina, que también señalaba la relación entre la IED y el empoderamiento regional.

Allende denunció el papel de los EEUU en la región, así como las acciones anteriores de los colonizadores, indicando que ellos y la teoría argumental que habían construido en torno a conceptos como los de civilización, desarrollo, progreso y libertad, habían sido utilizados como arma invasiva ideacional y, además, impulsado el que se perpetrara la situación de atraso y desigualdad en la que se encontraba la región de ALC. Pues indicaba que las continuas medias que habían propugnado esos discursos promovían y extendían la miseria por la región (Nolff, 1993).

Analizando el contenido de sus escritos y declaraciones⁴⁷¹, se observa que Allende indicaba lo apropiado para la región y los Estados miembros de aunar fuerzas para establecer medidas políticas y económicas, que hiciesen que la región redujera su sumisión a la metodología que se promovía por los agentes externos. Y que, como Estados soberanos, articulasen los mecanismos necesarios para que su independencia fuese un hecho *de facto*.

En el sentido que lo hacía Carl Schmitt (2013), Allende se refería a la capacidad de decisión, al indicar que la soberanía económica definía quién era el agente soberano:

“La lucha de hoy es por la independencia económica y por lo tanto, por la plena soberanía. Sin independencia económica, no se concibe siquiera la independencia política. No hay soberanía” (Citado en Nolff (1993, pág. 45)).

Allende se fijó en una cuestión de gran calado en la época: la capacidad que poseía el discurso y el uso que se le daba para articular la divulgación de ideas que habían realizado aquellos que tenían interés en los bienes de la región. Indicando que, mediante la construcción de un discurso que ofertaba libertad, se promovían prácticas que limitaban la

⁴⁷¹ A este respecto véase Allende (1998).

misma⁴⁷². De hecho se significaba una clara extracción de capacidades de decisión a los Estados a través del argumentario.

Asimismo, indicó que los distintos proyectos que habían presentado por esa época los EEUU a la región- como la Alianza para el Progreso; la ley destinada a promover la seguridad y la política internacional de los EEUU (Adoptada el 26 de agosto de 1964); o la creación de la fuerza interamericana de la paz (1967), y otros... más que ayudar a la región-, pretendían implementar la capacidad operativa del ofertante y, en última instancia, promover la protección de las inversiones extranjeras y limitar la capacidad de los Estados latinoamericanos para, soberanamente, nacionalizar o expropiar en nombre del interés público. Actos que, según la Resolución 1803 de las NNUU⁴⁷³, eran actos legítimos (Nolff, 1993).

Era tanta la importancia que Salvador Allende concedía al papel de la IED en el desarrollo y reducción de la capacidad soberana de los territorios, que el día 11 de Julio de 1971, en el que bajo su Gobierno se nacionalizó el cobre, se designó como el “Día de la Dignidad Nacional y de la Solidaridad”, indicando que se trataba de un proceso de segunda independencia (Caputo & Galarce, 2006).

Allende aspiraba a realizar, más allá de un proceso de lucha contra la IED en Chile, un proceso que abracase a toda la región, ya que promovió la unificación de América Latina basándose en el ideal de Bolívar. Acto que se produjo, al entender que la unidad regional debía obedecer al progreso y se debía operar por medio de una configuración de un sistema de naciones que se funde en la igualdad, la justicia y en la libertad para constituir una sociedad regional más solidaria. Es decir, la unidad debía ser un proyecto que promoviese un desarrollo económico y social particular que se basase en la igualdad (Nolff, 1993, pág. 45).

En su ideario no contemplaba el articular un proceso integrador hacia afuera para proteger a los intereses de las empresas extranjeras como máxima, sino abordar una transformación de las reglas de recepción, para que el mecanismo no reprodujese la desigualdad constantemente. Por lo que, cambiar las reglas que determinaban las relaciones entre los

⁴⁷² En este sentido lo entendía también Milton Friedman, ideólogo de las practicas que se promovieron en Chile tras el golpe de Estado de Pinochet, cuando entre sus ideas señalaba que:

“Sólo una crisis –real o percibida como tal- produce un verdadero cambio”... “...cuando sucede una crisis así, las medidas que se emprendan dependen de las ideas sembradas y cultivadas hasta el momento” (Citado en Scahill (2013, pág. 49)).

⁴⁷³ Véase Capítulo II. Punto 6.2 Pág. 240.

diferentes agentes con la región era la meta primordial, y no veía que la integración latinoamericana fuese capaz por si misma de solventar los problemas, sino eran alteradas las reglas relacionales con los agentes externos.

Es conocido como acabó Allende. Relevante es indicar que tras el golpe de Estado de Pinochet, la primera medida que se abordó por parte de la dictadura fue: el cambio al trato de la IED.

Tras la caída de Allende han sido diversos Estados los que han atribuido el rol de extractor de competencias soberanas al papel ejercido por la IED en la región. Desde el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua y sus políticas de nacionalización del sistema financiero, de recursos naturales, y del comercio exterior; el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en el Salvador; o la constante referencia de Cuba y su situación o diversos agentes(ya fueren políticos o académicos) que se han ido instaurando en diferentes gobiernos regionales⁴⁷⁴.

Ya en las épocas cercanas, tras el periodo en la que la deuda supuso la gran decadencia de ALC y en donde se optó como solución a los problemas por la adopción de la estrategia de regionalismo abierto, las referencias al papel ejercido por la IED se situaron más en el campo académico que en el político, adoptando los Estados discursos favorables a la apertura y ejecutando la mayoría de los Estados prácticas políticas de competencia por atraer IED⁴⁷⁵.

Esta atribución positiva al papel de la IED se ha sucedido hasta que se han manifestado divergencia con hechos como la crisis de Argentina en 2001; la debacle de Ecuador y su migración; el no desarrollo de Bolivia; la negativa de Brasil a firmar TTBBII; la aparición de Hugo Chávez en Venezuela; o las denuncias de Argentina al papel de los inversores. Sin embargo y sin duda alguna, el elemento que hace que se cuestione el papel y la responsabilidad que ejerce la IED en la región es la **no reducción de la desigualdad**.

Por último, indicar que en la época reciente, si bien es verdad que se han reproducido nuevos procesos de nacionalización (Bolivia, Venezuela, Ecuador, Argentina), los discursos de diversos presidentes de Estados miembros de instituciones regionales, más allá de aquellos que han nacionalizado o la alusión a la unidad como necesidad para articular capacidades, no se centran únicamente en el papel que ejerce la IED en el interior de la

⁴⁷⁴ A este respecto se recomienda la lectura de Vitale, 2002 (págs. 123-135).

⁴⁷⁵ Véase Capítulo III. Punto 6.1 Pág. 321.

región y sus efectos en cuanto al reparto equitativo de rentas, sino que el análisis del contexto está indicando la importancia que han adquirido las reglas que se han instituido en torno al trato de la IED. En concreto, las alusiones se refieren a los mecanismos (AII) que se han instaurado en la estructura internacional para resolver los conflictos entre inversores y Estados, centrando su crítica en dos cuestiones concretas: ¿en qué grado la reglamentación en torno al trato que recibe la IED supone un sesgo a las competencias soberanas de los Estados de la región?; o ¿en qué grado esta práctica ha determinado el proceso de integración regional y la armonización de capacidades? Cuestiones relevantes que se tratarán de responder en profundidad en el siguiente capítulo.

7. Conclusiones.

La primera conclusión que se rescata del análisis realizado, es que la construcción del yo latinoamericano ha sido determinada claramente por la acción externa. Construcción que ha estado compuesta por dos ejes principales: el papel en la construcción cultural y el impacto de las prácticas económicas en terreno.

El primer signo que evidencia la articulación de un proceso de unificación territorial de ALC, se significa con la propia denominación del territorio por parte de los Imperios, cuando fue identificado como un solo ente: el Nuevo Mundo. Sin embargo, esta simple denominación, que podría y es insuficiente en términos analíticos, en términos de construcción de comunidad se significó en diversos hechos que otorgaron a la simple denominación cierta transcendencia, más allá de un uso identificativo.

Aquello que indica la importancia de esta denominación, es la detección en la propia articulación de los mecanismos de justificación de injerencia, que fueron utilizados para argumentar la colonización (los títulos de legitimación), del reconocimiento al Nuevo Mundo como un agente de RRII. Ya que se indicó, concretamente por Francisco de Vitoria, que “simplemente” se colonizaba al detectar que este agente no era capaz de gobernarse, como evidenciaba el hecho de que no cumplían con los derechos naturales mínimos en una sociedad civilizada.

El segundo elemento relevante en términos de unificación, fue el trato que otorgaron los acuerdos entre Imperios al territorio. Ya que al acordar su división como unidad en el Tratado de Tordesillas, donde identificaban una unidad territorial y la dividían, se significaba la división en términos de territorialidad en dos espacios y se originaron

distintos efectos reveladores: uno creador de identidad; y otro revelador de la importancia de la práctica política-económica. Por una parte, se creaba una comunidad relativamente homogénea, en términos de identidad, al ser los Imperios de toda la región (a excepción algunos espacios del Caribe) de procedencia ibérica, difundiendo en el Nuevo Mundo una cultura con similares características; y por otra, el acto causó un impacto divergente en términos de configuración geográfica, que se debió a la metodología económica que practicaban los dos Imperios, ya que por parte del Imperio portugués resultó un único Estado y por el hispano veintiún.

En cuanto a las pequeñas Islas del Caribe su singularidad es notoria, al haber heredado la mayoría cultura anglosajona, debido a su pertenencia al Imperio Británico, que siendo muy poco relevantes en términos de territorialidad y capacidad económica, sí lo son al analizar la integración de todo ALC, al ser un ideal de todo proyecto regional que pretendía el integrar todos los espacios del continente americano situado al sur de Texas.

Otra de las conclusiones relevantes es la herencia ideológica con la que se produjeron los procesos de creación de los Estados, en términos de soberanía europea. Ya que es muy llamativo como la tipología de comunidad ideada en Europa: el Estado, ocupó un espacio amplió en los procesos de construcción ideacional de los ideólogos de los diversos procesos de independencia, como se ha evidenciado en los postulados de los diversos autores. Los cuales han aludido en sus reclamos, repetidamente, a la construcción del derecho de los Estados de Francia, Inglaterra y España, principalmente.

En este aspecto, aun siendo comprensible la apropiación de la construcción ideológica, al haber sido institucionalizadas las comunidades por Imperios europeos, es relevante indicar que la herencia ha compuesto parte de la preocupación indicada por varios autores, al señalar que se debía ser prudente en la aplicación de las construcciones ideacionales externas en un contexto particular. Puesto que al no ser una ideología de construcción regional, las construcciones organizativas heredadas atendían a demandas originadas en otros contextos sociales y, consecuentemente, el transvase de mecanismos, como el derecho o la economía, debía ser ejecutado con prudencia y procurando que éste se combinase con mecanismos que respondiesen a construcciones ideacionales particulares y, a su vez, atendiesen a las demandas propias del espectro regional, no al ajeno.

Asimismo, si bien en la configuración territorial tuvo un gran papel el cómo habían operado las relaciones comerciales con el exterior desde épocas imperiales, durante y tras

los procesos de independencia esta relación determinó, en gran medida, la aparición de los diversos proyectos de configuración territorial.

Se ha detectado en este capítulo que en todos los discursos, o en la gran mayoría, promotores de proyectos de unificación territorial analizados, ha operado un argumentario que sostenía que los Estados de la región adquirirían mayor capacidad para lidiar, en condiciones óptimas con el intercambio comercial y con los inversores extranjeros, una vez unificados.

De modo que, así como se aludía a la construcción de una entidad regional, ya fuere de un modelo confederado, federado, unificado totalmente o creando órganos con competencias supranacionales, ya fuere operando supranacionalmente o intergubernamentalmente, se identificaba a este proceso como una medida necesaria para regular el papel de las inversiones que fomentaban los agentes externos en la región.

En este debate, como se ha evidenciado por parte de los autores escogidos como representantes de los procesos de unificación, la identidad común ha jugado un papel decisivo, ya que se ha citado en todos los argumentarios señalados, haciendo referencia al que se habían heredado elementos culturales comunes, aun reconociendo la pluralidad existente.

Respecto a la promoción de los procesos de integración/unificación, se ha evidenciado, claramente, que desde mediados de siglo XIX se incrementó la percepción de que el elemento que motivaba reiteradamente la articulación de mecanismos que promoviesen la unificación regional era la práctica de la IED, ya que se han rescatado posturas comunes que entendían que esta práctica incidía profundamente en la articulación de las capacidades para regular su impacto en la región. De modo que el debate que se produjo sobre las relaciones extra-regionales y las prácticas de los Estados, atendió constantemente al cómo lograr articular mecanismos que lograsen dinamizar la ejecución de la atribución de capacidad soberana a los Estados de la región, de acuerdo al DI una vez independizados, con la práctica económica consecuente de la IED, en aras de fomentar el que éstos alcanzasen la categoría de Estados civilizados.

Este debate impulsó el que el trato a la IED comenzase a ganar importancia en la agenda de los actores con intereses en la región, de los principales Gobiernos receptores y de los organismos de concertación política (como las Conferencias Panamericanas, la SN, las NNUU, u otras...). Los cuales focalizaron su atención en los reclamos ejecutados por parte

de los Estados. En donde unos, los Estados inversores, reclamaban condiciones favorables y protección a sus inversiones; y los receptores, indicaban que se debía respetar su soberanía y su derecho a regular las prácticas que diesen lugar en su territorio, de acuerdo al DI vigente.

Dado este contexto, las quejas formales y las construcciones teóricas fundamentadas en derecho se han repetido habitualmente. Desde las doctrinas Drago y Calvo, las participaciones en las diversas Conferencias Panamericanas u en otras ocasiones mediante la fuerza, a través de procesos revolucionarios, se ha indicado que el papel de la IED impactaba en la capacidad de gobernarse de los Estados receptores y, además, impactaban reproduciendo la desigualdad y la pobreza.

A este respecto, es relevante señalar que estos procesos de reclamo de soberanía sobre sus bienes y territorios, también formaron parte de un proceso de creación de identidad regional, al indicarse, continuamente, que la problemática a la que se enfrentaban los diferentes Estados de ALC no se diferenciaba en los distintos espacios de la región, sino que era común a toda ella. Y tanto desde las formulaciones jurídicas (Drago y Calvo) hasta en los diferentes procesos revolucionarios, la alusión a la región como entidad receptora de estas prácticas fue constante.

En definitiva, el capítulo evidencia como la IED ha sido un factor elemental en la construcción del reclamo de los diversos autores y Estados, que viesan como solución a su debilidad particular la unificación. Ya fuere esto debido a las asimetrías en términos de capacidades de fuerza armamentística, económicas o ideológicas. De hecho, si ya en un primer momento, debido a las prácticas comerciales, se indicó la pertinencia de la unificación/integración, una vez independizados y reconocidos como Estados en términos de soberanía legal internacional, el papel de la IED ha ocupado un espacio muy relevante en la agenda de los diferentes actores, que ha promovido y mantenido, junto con la identidad, la necesidad de articular mecanismos que empoderen la capacidad regional para determinar qué papel ejecuta la IED en el territorio, atendiendo al dicho: la unidad hace la fuerza.

CAPITULO V. Análisis de la fase pragmática del proyecto unificador/integrador de América Latina y el Caribe en torno al papel de la Inversión Extranjera Directa.

1. Objetivos de capítulo.

Antes de indicar los objetivos, se cree pertinente presentar un pequeño párrafo que enuncie el contexto en el que se produjo el inicio a lo que aquí se ha denominado la fase pragmática.

A este respecto, indicar que tras finalizar la IIGM fue cuando el ambicionado proceso de integración/unificación regional, que se había cultivado en diversos idearios, se adentró en lo que podría ser definido como una fase pragmática. En este periodo la región comenzó un proceso en el que se institucionalizaron diversas prácticas, destinadas a encauzar las ambiciones integracionistas y/o unionistas. Adquiriendo éstas, poco a poco, un mayor protagonismo en las agendas de los Estados miembros de ALC.

Dado este contexto, y lo señalado en el capítulo anterior respecto a la importancia de la práctica y lo pertinente de constituir entidades de carácter regional según diversos autores, el principal objetivo de este capítulo es analizar qué vínculos y qué efectos ha tenido la práctica de la IED en la toma de decisiones de los diferentes agentes en los procesos constitutivos de entidades regionales.

Se trata, por tanto, de desvelar si la IED y el discurso constituido en torno a su pertinencia, han actuado como impulso o como freno en la pragmatización del ideal de converger capacidades en el territorio regional y, por ende, analizar qué papel ha jugado la práctica en la construcción de un ente con capacidad de decisión regional. En este sentido, en cuanto al discurso se analizará el rol que ha ejercido en el proceso el discurso desarrollista, así como se tratará de detectar en qué grado éste ha determinado decisiones y prácticas de los diversos agentes.

Para realizar esta labor el ejercicio se centrará en el estudio de los agentes que han significado la convergencia de proyectos y demandas de los diversos Estados. Es decir, se tomará como unidades a estudiar los diversos procesos constitutivos de organizaciones subregionales que hayan sido relevantes en la configuración y el desarrollo de la integración o unificación regional, con especial atención a aquellos que hayan constituido impulso o

disuasión en la implementación de competencias supranacionales o intergubernamentales en relación con la IED.

Por último, se ha creído conveniente en la parte final del capítulo exponer algunos datos relevantes, que indicarían en qué grado se ha producido un proceso de convergencia en la región de ALC como unidad con los agentes relevantes en la SI, dado que estos últimos fueron promotores del ideario desarrollista, así como de las reglas y prácticas instituidas en la estructura económica que regula la IED.

2. Principios subyacentes en la fase pragmática: El papel de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Banco Interamericano de Desarrollo, y su disputa en torno al trato a la Inversión Extranjera Directa.

Tras los pocos logros que habían tenido los Estados latinoamericanos en el desafío que significaba el constituir e impulsar algún mecanismo que institucionalizase la región como ente unitario, desde sus procesos de descolonización, al finalizar la IIGM, y en cierta medida provocado por el estancamiento que habían sufrido sus economías, se impulsó la constitución de nuevas instituciones con la ambición de concentrar capacidad para incidir en las prácticas regionales (Sanahuja, 2012; Estay Reyno, 2000). La adopción de esta postura significó un incremento en la percepción internacional de “región”, cuando se dirigía la mirada a América Latina, y además implicó la convergencia de opinión por parte de la SI, al señalar la presencia de una problemática común a toda la región en términos de desarrollo.

El impulso inicial del proceso institucionalizador regional contó con el amparo de las NNUU, ya que es pertinente indicar que fue a partir de la Resolución 106(VI) el 25 de Febrero de 1948 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), cuando se creó la primera institución de ámbito únicamente regional. Fijando sus objetivos en solventar problemas “estructurales”⁴⁷⁶ de ALC, nació la CEPAL⁴⁷⁷.

En sus primeros años la CEPAL se fue afianzando paulatinamente de la mano del primer presidente de la organización, el mexicano Martínez Cabañas. Pero fue su segundo, el

⁴⁷⁶ De hecho, el conjunto de prácticas y recomendaciones políticas que adoptó la CEPAL durante su primer periodo se denominó: “Estructuralismo Cepalino”.

⁴⁷⁷ Primeramente, la CEPAL respondía a la descripción de Comisión Económica Para América Latina y fue a partir de 1984 que se incluiría “...y Caribe”.

economista Raúl Prebisch, el personaje que impactó profundamente en el funcionamiento de la institución, impulsando un proceso de reforzamiento de la identidad en Latinoamérica en el contexto global.

Prebisch, mediante la divulgación de diversas obras críticas con las practicas económicas internacionales que afectaban a la región⁴⁷⁸, lideró una ola de pensamiento que ayudó a que la CEPAL se situase como un centro intelectual, de donde surgía material de investigación crítica con amplia repercusión regional (Prebisch, 2014). Alcanzó tal protagonismo que, como afirma Edgar J. Dosman (2006), “...no es exagerado decir que **la CEPAL creaba identidad económica y social de dicha región**” (Dosman, 2006, pág. 6) **[Negrita propia]**.

El ejercicio de reflexión teórica que realizó la CEPAL impulsó en el exterior la imagen de ALC como unidad. Pero fue el asesoramiento técnico que proporcionó en el proceso de institucionalización regional, el factor relevante que encumbró su papel de agente regional e internacional, ya que ejerció de eje impulsor y promotor de la constitución de diversos tratados de cobertura regional y subregional. De hecho, la CEPAL ganó tanta relevancia en la región, que una de las señales reflejo del impacto y significancia de la constitución de esta institución de carácter regional en América Latina fue, precisamente, la oposición del agente externo que tenía mayor impacto en el desarrollo de prácticas en la región: los EEUU (Dosman, 2006).

El proceso de institucionalización regional sufrió un verdadero impulso tras la aparición de la CEPAL. Ésta sirvió como referente en términos de cobertura e identidad y su presencia contribuyó a que nuevas instituciones fuesen surgiendo paulatinamente, como refleja el que en 1949 se crease la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL); en el año 1960 la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC)- (en 1980 se transformó en el actual ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración))-; 1964 el Parlamento Latinoamericano (PALA); 1969, la Comisión Económica de Coordinación Latinoamericana (CECLA); en 1975 se forjó el Sistema Económico Latinoamericano (SELA)⁴⁷⁹, etc... todas ellas instituciones que han ejercido como motores reproductores de reconocimiento e

⁴⁷⁸ Véase Capítulo I.

⁴⁷⁹ La SELA formuló como objetivo institucional el “...promover un sistema de consulta y coordinación para concretar posiciones y estrategias comunes de América Latina y el Caribe, en materia económica, ante países, grupos de naciones, foros y organismos internacionales”, e “...impulsar la cooperación entre los países de América Latina y el Caribe”. Esta institución generó un espacio, al menos desde la descripción de su mandato, que proponía un mayor acercamiento regional en un contexto en el que el Caribe y América Latina eran hasta el momento prácticamente vecinos desconocidos (SELA, 2012).

identificación de América Latina como agente internacional, desde los ámbitos jurídicos, económicos, políticos y culturales (ALADI & CEPAL, 2012).

En esta corriente institucionalizadora de prácticas regionales, mención especial merece el papel ejercido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Si bien en origen, al ser una institución resultante del panamericanismo y perteneciente a la OEA, ésta debía contraponerse a la creación de instituciones en el continente sin la presencia de los EEUU, no fue este el papel que ejerció y, de hecho, su batalla con la CEPAL se concentró en mostrar sus divergencias ideacionales en torno al mecanismo que debía conducir a la región al desarrollo. Es decir, la disputa se produjo en el campo de las ideas sobre cómo alcanzar el desarrollo, abogando el BID por un libre mercado sin restricciones a la IED; y la CEPAL por el estructuralismo “cepalino”. Cabe señalar que entre las disputas acontecidas entre las instituciones nunca hubo debate en cuanto a lo conveniente para la región de impulsar el proceso integrador. Esto no era debatible.

Más allá de oponerse a la integración, la lectura de la situación que realizó el BID - reflejada en su propia constitución de 1959 - , se asemejaba en su discurso al presente en la CEPAL, indicando que el objetivo prioritario de la región era solventar aquellas demandas de inequidad social, a través de la articulación de herramientas con capacidad para “...contribuir a acelerar el proceso de desarrollo económico y social, individual y colectivo, de los países miembros regionales en vías de desarrollo” (BID, 1996). Situando este objetivo como prioridad institucional.

La diferencia entre las instituciones se centraba en el marco metodológico, ya que mientras la CEPAL promovía la adopción de la estrategia ISI⁴⁸⁰, con una clara alusión al papel de los agentes receptores en la regulación del papel de la IED; el BID promovía la estimulación de la IED sin practicar el grado de intervención del Estado que indicaba la CEPAL y mostrando mayor predilección por la eliminación de trabas a la inversión.⁴⁸¹

⁴⁸⁰ Descripción profunda en el Capítulo I.

⁴⁸¹ A este respecto véase sección 2: Funciones del Banco Interamericano de Desarrollo en BID (1996). En especial los puntos (a) : “(iii) Estimular las inversiones privadas en proyectos, empresas y actividades que contribuyan al desarrollo económico y complementar las inversiones privadas cuando no hubiere capitales particulares disponibles en términos y condiciones razonables;” y el punto:” (b) En el desempeño de sus funciones el Banco cooperará en la medida que sea posible, con los sectores privados que proveen capital de inversión y con instituciones nacionales o internacionales” (BID, 1996).

2.1 El Banco Interamericano de Desarrollo y la figura de Felipe Herrera.

Unificación política necesaria.

En todo caso, el BID ha contribuido activamente, al igual que la CEPAL, al proceso de fomento de la integración regional⁴⁸². De hecho, la figura de Felipe Herrera- presidente entre los 60 y 70- legó una idea clara de su perspectiva acerca de las transformaciones que debía asumir la región en su libro *América Latina: Integración Económica y reintegración política* (1962). Volumen en el que daba cuenta de la necesidad y propiedad de proceder a un proceso de integración unificadora. Pues no sólo indicó que éste debía darse mediante su posicionamiento intelectual en favor de un proceso de integración económica, sino aludiendo a la necesidad de operar una unión política. Dijo así:

“Nos estamos familiarizando con sucesos internacionales que anuncian la reintegración de naciones a las que a lo largo de los últimos siglos la historia les había impuesto la ruptura de sus lazos de cohesión”

“Si **América Latina** quiere recuperar el tiempo perdido y no quedar definitivamente rezagada en la historia, **tiene que acelerar el ritmo de su integración económica, para lo cual debe mirar de frente la necesidad de su integración política**. Muchas condiciones y circunstancias de su realidad geográfica, histórica y humana favorecen uno y otro intento. **América Latina no es un conjunto de naciones: es una gran nación desecha**. A ella, **como unidad, le toca recobrar el impulso de un proceso de desarrollo económico frustrado**, más que iniciar uno nuevo” (Herrera, 1962, págs. 6-7).

“**No es entidad ficticia la nación latinoamericana**. Subyacente en la raíz de nuestros estados modernos persiste como fuerza vital y realidad profunda. Sobre su secular material indígena, diverso en sus formas y maneras pero idéntico en su esencia, lleva la impronta de cuatro siglos de dominación ibera. **Experiencia, instituciones, cultura e influencia similares la formaron desde México a cabo de Hornos. Así, unitaria en espíritu y en**

⁴⁸² Incuestionablemente el BID ha colaborado con el proceso de difusión de la integración como mecanismo impulsor de acción conjunta. Uno de los ejemplos más notorios se encuentra al observar en el impacto regional del Instituto Para La Integración De América Latina y Caribe (INTAL) creado en 1965 que, a través de sus publicaciones, ha cubierto un gran espacio de pensamiento en la región, indagando sobre el cómo articular el proceso de integración regional. Ya desde el primer número de su publicación, el “Derecho de la Integración” en Octubre de 1967, sus análisis abordan frontalmente asuntos que inciden en las posibles controversias a solventar por la región para acelerar el proceso de integración, cuando indica que: “La revista tenderá a promover la investigación de los problemas jurídicos de la integración y a constituir un instrumento de trabajo para universitarios, profesionales, estadistas y funcionarios gubernamentales y de organismos internacionales” (INTAL, 1967, pág. 5). De ello, que se revele que incluso para instituciones continentalistas como el BID la integración de ALC se instaurase como una cuestión necesaria para potenciar la capacidad de ALC en sus RRII.

su fuerza, se levantó para su independencia” (Herrera, 1962, pág. 11) [Negrita Propia].

El postulado de Herrera podría haber sido realizado por cualquiera de los autores que se hayan mostrado más favorables a la unificación latinoamericana, desde Miranda a Bolívar, Martí, u otros personajes que han sido mencionados. Herrera mostró su convencimiento de que la región posee un deber histórico: asentarse como unidad adoptando un sistema organizativo semejante al de una nación, que actúe como un pueblo y que luche unida por alcanzar logros que aseguren y mejoren las condiciones individuales de la ciudadanía.

Asimismo, Herrera indicaba que el proyecto era necesario para actuar forma unitaria hacia el exterior, ya que juntando las fuerzas, divididas hasta la fecha, se lograría reducir las tensiones que les atemorizaban y colapsaban. En donde el dialogo hacia el exterior debía poseer una sola voz, una voz autónoma y soberana.

A este respecto Felipe Herrera se preguntaba:

“¿Será acaso prematuro y utópico plantearse en este momento la necesidad de trabajar por la integración política de América Latina? “, y se contestaba:” Resueltamente creo que no; estoy convencido de que su **integración política es un imperativo** que no podemos seguir desatendiendo. Podríamos pensar, quizás que la unidad política será la resultante necesaria a que nos llevaran las fuerzas de la integración económica que se están empezando a movilizarse en el continente. Sin embargo, ése será un largo camino, tanto más largo **cuanto más nos demoremos en reconocer que la integración económica no puede lograrse exclusivamente a través de medidas de estricto tipo económico; que la integración económica por sí sola no basta para asegurar el progreso y bienestar de los pueblos; todo proceso de desarrollo implica batallas simultáneas en los frentes tecnológico, jurídico, educativo, institucional y, fundamentalmente, en el frente político”** (Herrera, 1962, pág. 24) [Negrita propia].

Felipe Herrera, como presidente de una institución nacida bajo el paraguas de la OEA, indicaba que el medio para alcanzar el desarrollo era el fomento de la IED en la región, indicando que como medida que asegurase el control sobre la misma se debía articular el proceso de unión, ya que los Estados en solitario se encontrarían en posición de debilidad.

“América Latina depende preponderantemente del exterior en cuanto a los medios de transporte y de comunicaciones. Nuestros países han tratado de desarrollar de forma individual sus flotas mercantes y sus líneas de aviación.... **Todo aconseja que en estas**

actividades, que requieren fuertes inversiones y necesidad de amplios mercados, América Latina pueda actuar conjunta o coordinadamente” (Herrera, 1962, pág. 26) [Negrita propia].

En definitiva, más allá de los postulados que coincidían en la pertinencia de la integración/unificación regional, el BID y la CEPAL centraron su debate y divergencias en las construcciones ideológicas sobre el trato que debía otorgarse a la IED. Puesto que los dos postulados pretendían alcanzar un desarrollo basado en el logro del bienestar a partir del consumo, sólo divergía el modo, no la meta.

3. Integración a escala. Procesos integradores con orígenes anteriores a los años 90.

El proceso integrador que se fue configurando en la región otorgó prioridad al eje económico sobre el político. Teniendo como referencia el modelo europeo, así como por la consciencia de la existencia de divergencias en los mecanismos integradores que presentaban las diversas instituciones, se creyó que la integración económica podría actuar como eje de un proceso que a largo plazo lograra unificar criterios, superar diferencias y lidiar con los diversos problemas regionales. Dejando para un futuro el optar por implementar otros aspectos.

En un principio, aunque se planteó la adopción un único tratado de integración económica de cobertura regional, este propósito tuvo que ser alterado, ya que la debilidad que presentaban algunos Estados en términos de estabilidad política y económica; la no adopción de mecanismos apropiados; y una cierta falta de asunción general y compromiso con el proyecto, eran factores que lastraban la aspiración de instituir una organización de cobertura regional durante los primeros años tras la aparición de la CEPAL. Además, estos hechos incidieron en que en el seno de las instituciones se indicase que la coyuntura histórica no favorecía la adopción del mecanismo regional y, por lo tanto, verse más apropiado el promover otro modelo de integración. Se apostó por implementar una modalidad de integración mediante sub-organizaciones regionales, entendiendo que ésta atendería mejor a la diversidad de demandas particulares que presentaban los diversos Estados (Bethell, 2000).

Asimismo, la adopción de esta modalidad de integración se vio incentivada por otros factores relevantes. Por una parte, en el factor económico influyó el bloqueo que sufrieron

los productos regionales en el exterior, especialmente con la creación del Mercado Común Europeo y la posterior adopción de una práctica política de corte proteccionista en los productos agrícolas; y por otra, en términos de relaciones comerciales, fue determinante la legislación presente en el GATT, ya que ésta incentivaba la adopción de AIR entre los Estados en desarrollo, al permitir el Art. XXIV⁴⁸³ del GATT la excepción dispuesta al Art. I⁴⁸⁴, el que en los AIR que fuesen negociados entre dos o más países que persiguiesen la creación de un área de libre comercio, o un proceso de integración semejante, las condiciones contempladas en el mismo serían únicamente de acceso a los Estados miembros. Por lo que la cláusula de TNMF quedaría excluida y los Estados podrían realizar acuerdos bilaterales en condiciones particulares.

En el aspecto político-teórico, el proceso también contó con la aprobación e impulso de la CEPAL. La cual, a través de la elaboración de estudios sobre el desarrollo en 1956 y a propuesta de los trabajos realizados por el Comité de Comercio en la VI Sesión celebrada en Bogotá, incidía en la pertinencia de instaurar un proceso de integración gradual ante la problemática que presentaba la articulación de una integración que contaba con miembros con diferentes grados de desarrollo⁴⁸⁵ (Parra-Aranguren, 1979).

Una vez decidido el modelo sub-integrador como vía de integración, los debates acontecidos en torno a qué proceso debía llevarse a cabo, finalizaron con la conclusión de que lo ideal para articular la integración total en un futuro era la implantación de dos organizaciones principales que, poco a poco, fuesen capaces de articular mecanismos de concertación y lograr de ese modo subsanar los inconvenientes que se habían vislumbrado: la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (1960) (ALALC), formada Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay- posteriormente se adhirieron Colombia y

⁴⁸³ Dice así el Art. XXIV (4) del GATT:

“Las partes contratantes reconocen la conveniencia de aumentar la libertad del comercio, desarrollando, mediante acuerdos libremente concertados, una integración mayor de las economías de los países que participen en tales acuerdos. Reconocen también que el establecimiento de una unión aduanera o de una zona de libre comercio debe tener por objeto facilitar el comercio entre los territorios constitutivos y no erigir obstáculos al de otras partes contratantes con estos territorios”. http://www.wto.org/spanish/tratop_s/region_s/regatt_s.htm (Consulta realizada el día 03 de julio de 2013).

⁴⁸⁴ Este artículo incide en la prescripción a los Estados miembros de la OMC de que deben “...conceder inmediata e incondicionalmente a todo producto similar originario de los territorios de todos los demás miembros de la OMC o a ellos destinado cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedidos a un producto originario de otro país o a él destinado” (Esposito, 2000). Es decir incide en la aplicación de las cláusulas de TNMF y Trato nacional.

⁴⁸⁵ Esta recomendación fue planteada y estudiada en profundidad en dos reuniones del Comité Comercio (1956-1959), donde se presentaron dos esquemas de integración: el Mercado Común Centro Americano y el ALALC (Estay Reyno, 2000).

Ecuador(1961) y Venezuela (1966)-; y el Tratado General de Integración Económica de Centroamericana (1960) formado por El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua- se adhirió Costa Rica en 1962-.

Aunque nacidas de un ideario común, ya en sus inicios se detectaron diferencias notables entre las dos sub-organizaciones. Mientras el ALACL se fijó alcanzar un Zona de Libre Comercio (ZLC), el Mercado Común Centroamericano: un Mercado Común.

3.1 La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y la Asociación Latinoamericana de Integración: la reconfiguración constante de una entidad sin objetivos claros en torno al proceso económico.

3.1.1 Contextualización de La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio.

En 1960 se constituyó la ALALC mediante la firma del Tratado de Montevideo (1960) (TM60). La constitución de esta institución era uno de los objetivos que había perseguido la delegación argentina⁴⁸⁶ desde hacía tiempo y se enmarcaba dentro de las ambiciones de diversos Estados por promover la cooperación intrarregional desde mediados de la IIGM, en aras encontrar mecanismos de cooperación económica sin la presencia de EEUU⁴⁸⁷ (Sanahuja, 2012).

Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay fueron los países fundadores del TM60 que constituía la ALALC, a los que se sumaron a finales de año Colombia y Ecuador en 1966, Venezuela y Bolivia 1967. Quedando la mayoría de los Estados con relevancia económica en América Latina aunados en un tratado que significaba dar forma a unos de los dos pilares del proceso de integración económica total.

La institución se marcó como objetivo máximo el establecer una Zona de Libre Comercio (ZLC)⁴⁸⁸ a largo plazo. Para alcanzar ese objetivo se acordó, primeramente, un periodo de

⁴⁸⁶ Hecho del que se había dejado constancia durante las Conferencias Panamericanas (Morgenfeld, 2009).

⁴⁸⁷ Durante la celebración de la IIGM e inmediatamente finalizada, dos intentos de integración fueron planteados. El primero en 1941 por parte de Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay, en donde plantearon la adopción de una Unión Aduanera (no se ratificó); el segundo el adoptado por Colombia, Ecuador y Venezuela en 1947 mediante la llamada *Flota Grancolombiana*, obtuvo resultados parciales. (Grunwald, 1972, Pág 48-49. Citado en nota 1 Estay Reyno (2000)).

⁴⁸⁸ En una ZLC se entiende como “...un acuerdo internacional mediante el cual uno o más países eliminan gradualmente los obstáculos mutuos a la libre circulación de bienes y servicios” (Tamames & Huerta, 1999).

doce años que permitiese armonizar las políticas de los diferentes Estados gradualmente⁴⁸⁹, mediante la concertación en diversas políticas que se reflejasen en una posición conjunta de trato al exterior en el aspecto económico - como señala el Art.15 del TM60⁴⁹⁰-. Es decir, el ALALC señaló el objetivo de constituir un mecanismo que permitiese aunar demandas comunes y actuar como agente único en sus relaciones exteriores y, por lo tanto, adquiriría relevancia el trato a la IED en la región, puesto que la práctica era eje de las disputas ideológicas respecto su papel en la región⁴⁹¹.

En este sentido, hay que señalar que en las prácticas que adoptó la ALALC dispusieron de un papel determinante e influyente el asesoramiento técnico de la CEPAL y del Consejo Interamericano Económico y Social de la organización de los Estados Americanos (CIES)-órgano perteneciente a la OEA-. La influencia de la CEPAL fue mayor en principio y se vio reflejada en la adopción de los Estados latinoamericanos de la política de desarrollo basada en la estrategia ISI, que tenía como objetivo reducir la dependencia externa de la región mediante la selección de las inversiones que debía receptar la región⁴⁹².

En el TM60 se indicaba que, en aras de impulsar el desarrollo económico, el proceso integrador sería implementado a través de la creación de una ZLC por etapas⁴⁹³. Se dibujó un plan en el que la integración económica debía ser el eje integrador que posibilitase el desarrollo regional.

En principio, la primera época del ALALC presentó avances significativos y los errores que surgieron trataron de ser solventados⁴⁹⁴. Sin embargo, en un breve espacio de tiempo se vio como la evolución de los acuerdos comerciales entre los Estados cayeron estrepitosamente

⁴⁸⁹ El proceso no pudo establecer uno de los pasos que la CEPAL creyó adecuado: la creación de una zona de preferencias tarifarias. Los acuerdos internacionales sobre comercio lo impedían, en concreto los acordados con la GATT (antecesor de la OMC). El Art.24. del Acuerdo General (1947), se autoriza a la creación zonas de libre comercio e unión aduanera; sin embargo, no aprueba los esquemas parciales con limitaciones a reducciones tarifarias específicas, teniendo que compensar a los otros Estados parte de la unión (punto 6 del Art. 24 Acuerdo General GATT 1947).

⁴⁹⁰ Así lo indica el Art. 15: “Para asegurar condiciones equitativas de competencia entre las Partes Contratantes y **facilitar la creciente integración** y complementación de sus economías, especialmente en el campo de la producción industrial, las **Partes Contratantes procuraran**, en la medida de lo posible **armonizar** - en el sentido de los objetivos de liberación del presente Tratado - **sus regímenes de importación y exportación así como los tratamientos aplicables a los capitales, bienes y servicios procedentes de fuera de la Zona**” (ALALC, 1960)[Negrita propia].

⁴⁹¹ Véase Capítulo I.

⁴⁹² Véase Capítulo I.

⁴⁹³ En el Capítulo II se indica que se alcanzará la ZLC en un periodo de 12 años (Art. 2), y el mediante un periodos trienales, que basarían su integración en un sistema de “listas nacionales” y una “lista común”, que por fases se irían acoplando y se consolidarían por medio de la progresiva eliminación de aranceles de lograrían consolidar la zona en 12 años (ALALC, 1960).

⁴⁹⁴ Un ejemplo de este hecho fue la adopción del Convenio sobre Créditos Recíprocos (1965)

y se apreciaba la presencia de ciertos inconvenientes que frenaban el proceso de integración económica. Actuaron como freno, por una parte, factores propios de la organización como: a) la ausencia de mecanismos efectivos que promoviesen la creación de un arancel externo común⁴⁹⁵; b) la distribución de los beneficios generados por el comercio no lograba la reducción de asimetrías entre los países con mayor desarrollo y menor⁴⁹⁶; y c) la no armonización de las políticas económicas entre los Estados componentes (Bethell, 2000, págs. 122-130); y por otra, los factores propios a la región y a los Estados miembros: d) ausencia de estabilidad política en los Estados miembros (dictaduras y democracias); e) incremento de presencia de financiación externa (aumento de la deuda externa); f) crisis económicas; y g) la elevada protección de los mercados domésticos. En definitiva, la no armonización conjunta de prácticas políticas regionales y la debilidad institucional fueron elementos que frenaron el avance institucional.

A este respecto, una de las líneas críticas indicaba que gran culpa del freno al proceso integrador se originó debido a la no concertación política y la no asimilación de la línea operativa institucional, ya que los dictámenes de la institución no contaban con autonomía de acción, al ser órganos inter-gubernamentales. En donde sólo adquirirían cierta relevancia las resoluciones si eran los Estados, particularmente, los agentes que procedían a la incorporación de los dictámenes a su normativa estatal (Parra-Aranguren, 1979, pág. 13)⁴⁹⁷.

Dado el contexto señalado, la organización estaba abogada a emprender una reformulación de procedimientos y objetivos o proceder a su disolución. Dado que como los Estados, recelosos de su soberanía y sus competencias políticas, mantuvieron su propia política económica y arancelaria con el exterior de la zona, se produjo una competencia entre sí por la atracción de IED. Lo cual fue causa directa del debilitamiento que sufrieron las preferencias arancelarias del ALALC (Estay Reyno, 2000).

Fracaso en el que influyó profundamente el pensamiento desarrollista que promovía las prácticas aperturistas, como evidenció la adopción de éstas por las dictaduras de Argentina

⁴⁹⁵ El sistema de Listas Nacionales, no poseía un mecanismo de control efectivo. Hecho que causó que tras los dos primeros años, debido a las concesiones “fáciles”, el proceso sufriese un parón. Viéndose en ese instante que no se alcanzaban las metas propuestas (Tamames & Huerta, 1999, pág. Capítulo 11)

⁴⁹⁶ En este sentido, Vacchino apuntó que: “La ALALC no fue muy rica en medidas diferenciales, acordes a la magnitud e importancia relativas de sus países miembros. Apenas si estableció un cierto número de medidas en favor de los países menos desarrollados de la zona” (Citado en Estay Reyno (2000, pág. 55)).

⁴⁹⁷ Indica en este sentido Parra- Aranguren que el mecanismo inter-regionalista fue una causa de que no se avanzase en reglamentación legislativa en la región (Parra-Aranguren, 1979)

y Chile, con las consecuentes políticas de atracción de IED, que promovieron la aplicación de políticas estatistas y se alejaron de los procesos regionales (Barbosa, 1993).

Además de este hecho, hay que señalar que el ALALC había emprendido la fase integradora sin haber practicado un contacto previo efectivo con las partes. Y si bien es verdad que la construcción teórica estaba instituida en el ideario regional desde los procesos de independencia, el mecanismo integrador con el que se presentó la ALALC poseía una complejidad tan alta que impedían su operatividad (Tamames & Huerta, 1999, pág. 311).

En todo caso, al no alcanzarse el Programa de Liberación Comercial - con el plazo de doce años y tras su prologa a 1980- se “transformó” el ALALC (Villamizar Pinto, 2000, pág. 77). Fue entonces cuando la organización decidió adoptar medidas en aras de solventar los problemas surgidos mediante la remodelación de la institución y sus metas⁴⁹⁸ y la implementación de la consolidación de las organizaciones sub-regionales⁴⁹⁹. Los resultados fueron mínimos.

Llegando al año 1980 la organización se vio “forzada” a realizar un proceso de reformulación profunda, ante el estacionamiento del proceso en términos de integración. Fue en la XIX Conferencia Extraordinaria de Ministros (Acapulco), en donde se fraguó el comienzo de una nueva institución que sustituiría al ALALC, nació la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

3.1.2 La Asociación Latinoamericana de Integración: Debilidad decisoria institucional, política y económica.

En el nuevo Tratado de Montevideo de 1980 (TM80), que daba origen a la ALADI, la meta de la institución continuó siendo el impulsó del desarrollo económico a través de un proceso de integración económica. Pero en este caso, se hizo una referencia mayor al aspecto social entre los objetivos. En el nuevo tratado se incidió en que la integración debía

⁴⁹⁸ Como ejemplo de estas medidas se observa que aparecen dentro del Protocolo de Caracas (1969); así como en el Plan de Acción 1970-1980. Sin embargo, no obtuvieron resultados pertinentes.

⁴⁹⁹ Por otra parte, la ausencia de simetría en el impacto de las prácticas en los países miembros provocó que aquellos que eran más débiles decidiesen constituir una sub-organización regional dentro de la propia ALACL, buscando adquirir mayor capacidad de compensar los beneficios y las relaciones internas de la región. Nació el *Grupo Andino* en 1969. Este grupo, compuesto por los Estados de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, y 4 años más tarde Venezuela, percibía desventaja a la hora de negociar ante los Estados más poderosos económicamente, y debido a la falta de ajustes en la propia ALACL que compensaran esta situación decidieron unirse para constatar su fuerza como unidad ante los otros Estados (Bethell, 2000).

operar como mecanismo que permitiese alcanzar un desarrollo económico, social, armónico y equilibrado en la región (ALADI, 1980).

Hay que señalar que la finalidad integradora inscrita en el TM80 sí constituyó un cambio sustancial de los mecanismos de la asociación, ya que si la ALALC tenía como objetivo alcanzar una ZLC, la ALADI, en cambio, optó por sustituir este objetivo por la adopción de un Mercado Común Latinoamericano⁵⁰⁰. Aunque la integración siguiese siendo de corte económico.

Este cambio evidenció claramente una apuesta de los Estados por la adopción de unos compromisos menos estrictos, como reflejan los objetivos y principios allí recogidos:

a) Objetivos:

- El establecimiento a largo plazo de un Mercado Común Latinoamericano, y a través de la integración, promover el desarrollo económico y social armónico y equilibrado de la región.
- La promoción y regulación del comercio recíproco y el desarrollo de acciones de complementación y cooperación económica que contribuyan a ampliar los mercados.

b) Principios:

- **Pluralismo:** El cual significa que el proceso de integración se adelantará sin discriminación en cuanto a la diversidad que en materia política y económica pueda existir en la región.
- **Flexibilidad:** caracterizada por la capacidad de permitir que dos o más países celebren acuerdos de alcance parcial, con miras a la convergencia de todos los países miembros.
- **Convergencia:** se refiere a la confluencia de los acuerdos de alcance parcial en un todo formado por los países miembros del Tratado para llegar a constituir un Mercado Común Latinoamericano.
- **Tratamientos diferenciales:** implica que en acuerdos de alcance regional y alcance parcial se tengan en cuenta las categorías de país según su grado de desarrollo económico y social.
- **Multiplicidad:** esto es, empleo de los diversos instrumentos establecidos en el proceso de integración para dinamizar el comercio regional.

Fuente: Reproducción exacta desde Villamizar Pinto (2000, pág. 78) **[Negrita propia]**.

Si bien el objetivo de establecer un Mercado Común poseía un mayor grado de ambición, desde la perspectiva integradora, que los anteriores presentes en ALALC, la ausencia de

⁵⁰⁰ Véanse diferencias relevantes entre las dos modalidades en el Capítulo III, punto 6.3.

fechas precisas y objetivos concretos otorgaban un grado menor de solvencia a la hora de su aplicación⁵⁰¹. Asimismo, la inclusión de acuerdos parciales en el ALADI⁵⁰², indicaban la adopción de un enfoque caracterizado por ser menos sólido y más abierto⁵⁰³. Decisiones que desde un punto de vista multilateral evidenciaban el cambio de enfoque que sufrió la institución al cambiar de ALALC a ALADI. Ya que si bien el ALADI poseía un perfil integrador de carácter económico, primordialmente, con este cambio se dio un paso esencial en el aspecto político.

La evidencia de este cambio se observó, no sólo en el que las metas incluyeron aspectos sociales, sino en el que en la estructura organizativa y en la división de funciones la institución se dotase de tres órganos políticos: el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores; la Conferencia de Evaluación y Convergencia; el Comité de representantes; y uno técnico, la Secretaría General. Cuestión que introdujo un cambio significativo respecto al ALALC, puesto que esta vez la organización poseía un carácter integrador más comercial y aunque los nuevos órganos seguían operando bajo mecanismos intergubernamentales, y la operatividad y capacidad de decisión seguía puesta en duda restando agilidad al proceso⁵⁰⁴, se significaba un leve giro a la importancia de política y la construcción de confianza institucional.

3.1.2.1 El trato a la Inversión extranjera Directa impactó en el devenir de la Asociación Latinoamericana de Integración: de la Ronda de Tokio al regionalismo abierto.

La cuestión del trato regional con el exterior había sido una de las críticas a la ALACL que ALADI quería corregir. Por ello, por parte de la SI y en pleno apogeo del Nuevo Orden Económico Mundial (NOEI), se trató de implementar esta situación y se le concedió mayor respaldo a la posibilidad de establecer acuerdos de carácter bilateral entre Estados en desarrollo.

⁵⁰¹ En este sentido se destaca la sustitución del Programa de liberación comercial multilateral fue suplantado por los Acuerdos Regionales que se apoyaron sustancialmente en dos mecanismos principales para incentivar el proceso de convergencia entre Estados: a) las Preferencias Arancelarias Regionales (PAR); y las Nóminas de Apertura de Mercados (NAM)). Las NAM se refieren a las listas de productos originarios de los países miembros considerados de menor desarrollo económico relativo según el ALADI. Documento disponible en línea: <http://www.aladi.org/nsfaladi/preguntasfrecuentes.nsf/041375533fe033d7032574a3005a4dfd/ab20a4f70caf-f03b032574be0043f186?OpenDocument> (Consulta realizada el 12 de junio de 2013).

⁵⁰² Indicado en el Capítulo II del ALADI (1980).

⁵⁰³ Ante esto Jaime Estay indica: "...pareciera que la consigna fue "para no incumplir compromisos específicos, lo mejor es no precisarlos..." (Estay Reyno, 2000, pág. 56).

⁵⁰⁴ Véanse: Art. 28, 29 y 30 del TM80 (ALADI, 1980).

Este impulso se significó cuando en la Ronda de Tokio (1979) el GATT adoptó el instrumento jurídico: Decisión del 28 de noviembre de 1979, denominado “Trato diferenciado y más favorable, reciprocidad y mayor participación de los países en desarrollo” o también denominada “Cláusula de habilitación”⁵⁰⁵ - aprobada con anterioridad a la constitución de ALADI-. Esta cláusula tendría gran repercusión en la región al instaurar un derecho de relación de los Estados particulares con terceros Estados no pertenecientes a ALADI. No únicamente con cobertura para los Estados miembros como lo hacía en el Art. XXIV. Puesto que ésta “implica el reconocimiento de “licitud” del trato preferencial en favor de los países en desarrollo y acomoda un “dispositivo jurídico para una excepción de pleno derecho”, por la cual, a los Estados parte de un AIR entre países en desarrollo se les otorgaba el privilegio de no aplicar el TNMF tampoco entre sus miembros⁵⁰⁶ (Elkin, 1984).

Esta excepción incentivó, en cierto modo, el carácter informal de la ALADI, ya que la posibilidad de no ejercer conjuntamente los Estados miembros el acto de relación con el exterior, y permitirse dentro del proceso el actuar como agentes independientes, frenaba a todas luces el impulso de cohesión regional. De hecho, con anterioridad a la constitución de ALADI, en los debates previos a su constitución, ya fueron rechazadas cuestiones determinantes para que la institución actuase ejerciendo competencias comunes como un solo agente de cara al exterior y se excluyeron de la agenda asuntos como: a) la inclusión de unos objetivos fijos y una planificación regional para el logro de los mismos; y b) la adopción de la coordinación de las políticas comunes sobre el trato a la IED (Bethell, 2000, pág. 138).

Estos hechos, más allá de evidenciar el interés de los Estados particulares de actuar por libre, pusieron de manifiesto la ausencia, ya fuese por falta de capacidad o voluntad, de determinación para alcanzar la integración de corte político, así como económico, en un corto espacio de tiempo (Estay Reyno, 2000).

⁵⁰⁵ La aprobación de la “cláusula de habilitación” suponía la superación del carácter excepciones de las preferencias comerciales, ya que permitían no operar en las relaciones multilaterales bajo la cláusula de la TNMF, por lo que proporcionaba una base jurídica permanente al establecimiento de preferencias comerciales para los Estados en desarrollo (Salvador, 2008).

⁵⁰⁶ En el párrafo 1 de la Decisión del 28 de noviembre de 1979 se indicaba:

“ 1. No obstante las disposiciones del artículo primero del Acuerdo General, las Partes Contratantes podrán conceder un trato diferenciado y más favorable a los países en desarrollo, sin conceder dicho trato a las otras Partes Contratantes” (GATT, 1979).

Aun con los mecanismos introducidos y la aprobación de nuevos sistemas los efectos del ALADI, los cambios no tuvieron gran repercusión y, debido a la variedad de acontecimientos que se produjeron en la década de los 80 en la región, principalmente el impacto de la deuda, el proceso integrador sufrió un frenazo severo durante ese decenio.

Sin embargo, el discurso integrador por parte de los dirigentes continuó poseyendo la misma relevancia y llenó líneas y líneas. A este respectó Osvaldo Hurtado escribió:

“No existe reunión internacional, o visita de un jefe de Estado o de ministros que se realice en la región, que no concluya con una solemne declaración en favor de la integración, habitualmente acompañada del siguiente brindis. En realidad todo esto no es otra cosa que una manifestación más de algo que parece formar parte de la cultura latinoamericana: la distancia que ordinariamente existe entre lo que se dice y lo que se hace” (Citado en Estay Reyno (2000, pág. 60)).

En definitiva, la institución no avanzó hacia las metas propuestas, debido a que los gobiernos no respondieron a los acuerdos alcanzados y antepusieron sus compromisos particulares con las deudas alcanzadas y sus relaciones particulares al avance en el proceso integrador. Por lo cual, el parón que sufrió el comercio intrarregional situaba a la ALADI en un periodo de inoperancia en la construcción del Mercado Común, lo que era un claro síntoma del poco compromiso por parte de los Estados. Como evidenciaba el que aquel que era su instrumento multilateral por excelencia: la Preferencia Aranceralia Regional (PAR), quedase estancada tras su puesta en práctica en 1984 y obligase a la organización a promover la adopción de acuerdos que diesen un nuevo impulso al proceso.

Ya en las postrimerías de los años 80 y principios de los 90, la organización intentó dar el enésimo empujón al proceso, a través de la implementación de diversos mecanismos, como fueron el Acuerdo Regional y Expansión del Comercio (1988); la Declaración de Caracas (octubre de 1990) y la Sexta Reunión de los Ministros en Cartagena de Indias (diciembre 1991). Sin embargo, al llegar los años 90 la ALADI pareció pasar a un segundo plano como organización regional, debido ,principalmente, a que la institucionalización de los acuerdos de carácter subregional y bilateral pasaron a ocupar un espacio mucho más determinante para los gobiernos que la propia ALADI.

De modo que la MCCA, la CAN, la Comunidad del Caribe (CARICOM) y los nuevos MERCOSUR, G-3 y AEC, se situaron como organismos relevantes para las partes y han

sido aquellos que han liderado la integración de los Estados por medio de un proceso sub-integrador.

Este cambio en los agentes promotores del proceso se debió, en gran parte, al giro que se produjo en el modo estratégico en el que debía abordarse el desarrollo regional a finales de los 80 y en la década de los 90, dejando atrás la estrategia de la *integración para la protección* y dando paso a una *integración para la apertura*. En palabras de Jaime Estay:

“...durante la etapa inicial los esfuerzos se centraron en la identificación tanto de los grados y formas en que la integración regional podía llegar a constituirse en un medio para alcanzar los niveles necesarios de competitividad en el mercado mundial, como de las estrategias particulares que permitieran pasar de la “integración para la protección” de las décadas previas, a la “integración para la apertura” que se postulaba como el objetivo en la nueva situación” (Estay Reyno, 2000, pág. 65).

La adopción de una estrategia de *integración para la apertura* - denominada por la CEPAL regionalismo abierto⁵⁰⁷ -, incentivó un proceso de apertura y liberalización de las economías de los Estados latinoamericanos y una disminución de los aranceles. Actuando como justificación de este cambio, se presentaba el hecho de que el ideal desarrollista indicaba que la alteración en el modo de integración conllevaría el alcanzar la categoría de Estado desarrollado con mayor celeridad. Lo que provocó el que los Estados se adentrasen, como agentes particulares, en una competición directa por receptar IED - como se evidencia en el incremento de firmas de TTBII-, y a su vez se produzca un frenazo en la concertación económica y la acción conjunta regional⁵⁰⁸.

En el decenio de los años 90 y debido a la influencia y el peso de las Organizaciones Sub-Regionales (OOSRR), se detecta la implementación de la práctica comercial en la ALADI, gracias a los méritos y avances dentro del MERCOSUR, el Grupo Andino, etc...⁵⁰⁹. De modo que la multiplicidad y la aceptación de los acuerdos de carácter parcial que se reflejaron en el TM80, en cierta manera, han propiciado el avance de la ALADI.

⁵⁰⁷ La definición que determinó conceptualmente el significado de regionalismo abierto fue incluido en el informe de la CEPAL en 1994 como: “...un proceso de creciente interdependencia económica a nivel regional, impulsado tanto por acuerdos preferenciales de integración como por otras políticas en un contexto de apertura y desreglamentación, con el objetivo de aumentar la competitividad de los países de la región y de continuar en lo posible, un cimiento para una economía nacional más abierta y transparente” (CEPAL, 1994).

⁵⁰⁸ Para 1998 el promedio de los aranceles aplicados entre los países regionales se ubicaba en un rango establecido que va del 9.5 % de Uruguay al 14.6% de Brasil (ALADI, 2010).

⁵⁰⁹ Tener en cuenta que ALADI está compuesta por el 87% del territorio regional, y junto con el MCCA casi la totalidad.

En este periodo también es pertinente rescatar que se produjeron conflictos que, de una u otra forma, indicaban el poco compromiso institucional de los Estados con la ALADI. Por una parte, cuando tras la constitución del TLCAN entre los EEUU, Canadá y México, se produjo la negativa de México a la aplicación de la cláusula de TNMF del Art. 44 del TM80, el ALADI en vez de exigir su aplicación u optar por la expulsión, optase por reformular el articulado y alterar el contenido de la cláusula mediante la adopción de un Protocolo Interpretativo del Art. 44 del TM80, lo cual permitía a México establecer negociaciones de tipo particular con aquellos países que se sintiesen perjudicados por la no aplicación del mismo. Hecho que fue reflejo, una vez más, de la poca rigidez y compromiso de los Estados con el ALADI, evidenciándose la fragilidad en el compromiso y, además, haciendo patente el poco éxito en la aplicación de las PAR, ya que como indica Jaime Estay (2000):

"La preferencia Arancelaria Regional (PAR), uno de los principales mecanismos del TM80, tampoco ha cumplido sus funciones de convergencia multilateral, puesto que las Preferencias bilaterales y subregionales de última generación la están absorbiendo" ((ALADI (1998) Citado en Estay Reyno (2000, pág. 62)).

En definitiva, el principal cambio institucional, con el paso de ALACL a ALADI, fue que si en una primera fase la pretensión institucional era una integración de carácter regional en corto espacio de tiempo, relativamente, dado que esta pretensión no se implementaba, en la segunda fase se optó por la inclusión de acuerdos de carácter parcial. Cuestión que implicó el que estos acuerdos pasasen a ser los ejes de activación del comercio regional⁵¹⁰. A este respecto, en cierto modo habría que señalar que, a la vista del paso de los años, lo que se refleja es que éstos han supuesto un verdadero enredo en la región, que si bien contienen efectos positivos, suponen una superposición de objetivos, estrategias, instrumentos, etc... de diverso carácter. (Estay Reyno, 2000).

Nota informativa: el sin saber funcional de la ALADI en la actualidad.

En cierto modo, la ALADI se ha quedado sin espacio político en el que operar. La aparición de MERCOSUR junto con la revitalización del Pacto Andino (PA), denominándose CAN, supuso un gran desafío para la ALADI, ya que estas organizaciones alcanzaron ZLLCC amplias en cortos espacios de tiempo e implementaron la

⁵¹⁰ En este aspecto recalcar la no inclusión del Grupo Andino en los acuerdos de alcance parcial entre ellos. Ya que las relaciones bilaterales internamente quedaron suscritas al Acuerdo de Cartagena, y que quedaron excluidas de la estructura jurídica de la ALADI.

institucionalidad de sus tratados, añadiendo a la temática central de sus pactos cuestiones integrales en lo económico, lo político, lo social y lo cultural. A lo que sumar la aparición reciente del ALBA, la AP y la UNASUR, como organismos que se han ido apoderando de espacios que la ALADI seguía reclamando para sí.

Además, hay que señalar que algunas de las diversas organizaciones se han situado como procesos facultativos del proceso de integración subregional, con una solvencia estructural que no poseía la ALADI, ya que sumando sólo la CAN y el MERCOSUR, únicamente quedaban fuera de los mismos dos de los once países miembros⁵¹¹ de ALADI: Chile y México (CEPAL, 2012, pág. 58).

A partir de esa percepción institucional se han producido diversos intentos por parte de la organización de incentivar su rol como agente. Por ejemplo, en el año 2002 el Consejo de Ministros trató de incentivar su ejercicio como agente impulsor del proceso de integración regional, mediante la formulación de la iniciativa de crear un Espacio de Libre Comercio (ELC) para el año 2004 (Resolución 59); o en el año 2008, cuando decidió incluir el objetivo social en su agenda como intento de dar un nuevo impulso a la institución⁵¹². En ambos proyectos no ha sido relevante su papel (ALADI & CEPAL, 2012).

El cierto desenfoque estructural de la organización se evidencia al revisar los intentos de abordar cuestiones que impacten en profundidad. Por ejemplo, si se analizan los desafíos de la nueva agenda de trabajo que se presentó en Julio de 2010 en Santiago de Chile, se observa más que una innovación, una clara similitud con todos *los ya presentes en todos los anteriores*: a) profundización de la integración económica; b) un mayor aprovechamiento de los acuerdos vigentes; y c) la facilitación del comercio. Únicamente añadiendo una práctica que podría considerarse transversal a todas las anteriores, incluir una atención especial a d) la reducción de asimetrías y la dimensión social⁵¹³ (ALADI, 2010).

⁵¹¹ En el TM80 la ALADI quedó abierta a nuevas incorporaciones, y Cuba fue declarada miembro en la sesión del 6 de Noviembre de 1998. Los Estados parte pasaron a ser doce, siendo catorce actualmente: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Nicaragua, Paraguay, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.

⁵¹² La ALADI se refirió de este modo al asunto: "...con el objetivo de fortalecer los sentimientos de solidaridad, de pertenencia e identidad y generar condiciones para que los beneficios económicos y comerciales de la integración alcancen a todos los sectores de la sociedad, especialmente los más vulnerables" (ALADI & CEPAL, 2012, pág. 70).

⁵¹³ Para ejecutar este compromiso se incluye en esta agenda: a) el programa de apoyo a los PMDER (Programa de cooperación a favor de Bolivia, Ecuador y Paraguay mediante Instrumentos: programas de capacitación en gestión empresarial, operativa de comercio exterior y promoción de alianzas empresariales a nivel sectorial y; b) la construcción de una dimensión social en el proceso de integración (Lineamientos para el desarrollo de

En definitiva, la ALADI se sitúa en una encrucijada de cara a determinar su rol en la nueva arquitectura presente en la región, dada la aparición de otros organismos como UNASUR, la CELAC, o incluso MERCOSUR al ampliar su cobertura institucional, puesto que éstos organismos pretenden adquirir funciones y protagonismo en cuestiones políticas y económicas, que eran aquellas que la institución pretendía albergar en sus inicios.

3.2 La Organización de Estados Centroamericanos, el Mercado Común Centro Americano y sus procesos de transformación.

3.2.1 Contextualización del Mercado Común Centro Americano.

El proyecto de una Centroamérica unida ha estado presente en la zona desde los procesos de descolonización. Hay que recordar que durante los mismos el área estuvo unificada y de ahí que la declaración de independencia fuese formulada conjuntamente, aludiendo a la existencia un único ente. En este caso se trata de un proceso construido desde que, como parte de las luchas de independencia de México de España, cinco naciones centroamericanas constituyesen la Federación Centroamericana en 1824 (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica). Proyecto unitario que, a pesar de ser desintegrado en 1838- primero con la separación de Nicaragua y más tarde otros territorios-, ha persistido en el imaginario integrador del istmo a lo largo de las diferentes épocas que ha vivido la región, y muestra inequívoca de ello son los diferentes eventos y acuerdos que se han producido a lo largo de estos casi dos siglos⁵¹⁴.

Tras diversos intentos que no alcanzaron a instaurar una política subregional de carácter supraestatal - aunque como en el caso de la Republica Centroamericana (1921) aspirasen a ser integraciones perpetuas con soberanía única⁵¹⁵-, un proyecto alcanzó cierto grado de solidez a mediados de siglo XX, cuando tras la aparición del Comité de Cooperación

la dimensión social mediante: a) Fortalecimiento institucional para la dimensión social; b) Cooperación como herramienta de apoyo a la inclusión social; c) Integración productiva como instrumento de la inclusión social; d) Profundización y facilitación del comercio en apoyo a la inclusión social. Documento completo en línea: <http://www.eclac.org/comercio/tpl/contenidos/ALADI%20Desafios%20nueva%20agenda%20P%20Rabcz.uk.pdf> (Consulta realizada el día 19 de agosto de 2013).

⁵¹⁴ Entre los hechos notables son referentes algunos como: La Convención de Chinandega en la cual se creó la Confederación Centroamericana (17 marzo 1842-1845)(Honduras Guatemala y Nicaragua(Guatemala se adhirió posteriormente); la Representación Nacional de Centroamérica (1849) (Honduras Guatemala y Nicaragua); el Pacto de Unión Provisional de los Estados Centroamericanos (Honduras Guatemala y Nicaragua, El salvador y Costa Rica); los Estados Unidos de Centro América (1895) (El Salvador, Nicaragua y Honduras); y la Republica Centroamericana en 1921 formada por Guatemala, El Salvador y Honduras. (Acosta, 2014) **Indicados aquellos proyectos en los que se incluyen más de dos Estados.*

⁵¹⁵ En la Constitución Política de la República de Centroamérica el Art. 1 dice así: “Los Estados de Guatemala, El Salvador y Honduras, en unión perpetua e indisoluble, constituyen una Federación soberana e independiente que se denomina REPUBLICA DE CENTROAMERICA” (Asamblea Nacional Constituyente de la Republica de Centroamerica, 1921).

Económica del Istmo Centroamericano - con su respectiva secretaria en la CEPAL- junto con el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en las postrimerías de los años 40, y dentro del proceso sub-integrador regional como vía a la integración en ALC, tras analizar los reclamos y necesidades de las partes del Istmo, se adoptó la decisión de apoyar la creación de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA)⁵¹⁶. Organismo que, con base en la Carta de San Salvador el 14 de octubre de 1951⁵¹⁷, se instauró como organización con el objetivo principal de “...promover la cooperación e integración [del Istmo]” (ODECA, 1951).

3.2.1.1 Evolución e impacto de las prácticas económicas y de la IED en la organización del poder en el Istmo.

Al poco tiempo de su fundación y bajo la influencia del sentido económico que la CEPAL implementaba en aquella época, por medio de la difusión y apoyo a la estrategia ISI, el 3 de diciembre de 1960 en la ciudad de Managua se firmó el Tratado General de Integración Económica⁵¹⁸, conocido como ODECA II. El cual estableció un marco de cooperación entre los Estados miembros, que señalaba como primera tarea institucional la creación de un órgano económico centroamericano que actuase como herramienta articuladora del proceso para alcanzar los objetivos pretendidos.

Este Tratado fue el que dio la luz de salida, formalmente, a la constitución del Mercado Común Centroamericano en 1960 (MCCA), formado primeramente por los Estados de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, adhiriéndose Costa Rica dos años más tarde.⁵¹⁹

⁵¹⁶ La ODECA nació bajo el argumento de que los Estados centroamericanos podían crear “...un instrumento más eficaz,... [y] que aseguren su progreso económico y social, eliminen las barreras que los dividen, mejores en forma constante las condiciones de vida de sus pueblos, garanticen la estabilidad y la expansión de la industria y confirmen la solidaridad centroamericana” (ODECA, 1951).

⁵¹⁷ Señalar que, acordes a las pretensiones de superar el estancamiento al que había conducido basar el crecimiento económico en las exportaciones de bienes primarios, las nuevas prácticas fomentadas por la CEPAL incidían en instaurar el proceso de industrialización hacia dentro como mecanismo de desarrollo. Para ello, se partía de la premisa de que los mercados nacionales poseían una mayor limitación que un espacio geográfico amplio como sería Centroamérica. La cual, aparte de la cercanía geográfica, poseía una historia común desde las épocas coloniales que lideraba la Capitanía general de Guatemala.

⁵¹⁸ Este acuerdo se adoptó tras la celebración previa el Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Centroamericana en 1958, denominado finalmente el nombre de Tratado de Integración Centroamericana dos años más tarde.

⁵¹⁹ Los ministros de economía de los distintos Estados de Centroamérica abogaron por estimular la integración centroamericana, estableciendo como pilares del proceso la adopción de un desarrollo conjunto en las áreas de producción agrícola e industrial; así como el realizar una reforma en el sector de los transportes que facilitara una formación de mercados con mayor envergadura y solidez (Bethell, 2000).

El proyecto nacía bajo una premisa que determinaba la evolución del proceso integracionista, al considerar, como organización, que los mercados nacionales poseían un tamaño reducido y no contaban con capacidad suficiente para hacer frente a un proceso de industrialización eficiente. Lo que sumado a la recomendación de la CEPAL, que indicaba la pertinencia de promover la instauración de barreras arancelarias para dar apoyo a las industrias nacionales, mediante la intervención estatal en determinados aspectos bajo un enfoque subregional, devino en que se optase por la adopción de la estrategia ISI como mecanismo de superación de las problemáticas indicadas. Pero en este caso, al contrario de lo que se suele afirmar, hay que señalar que ni la industrialización ni la estrategia ISI eran nuevas prácticas en el área que comprendía el MCCA⁵²⁰ (Acosta, 2014, pág. 63).

En un comienzo, el proyecto vivió un periodo de cierto éxito debido a diversos acontecimientos, como fueron: la implantación de un arancel externo común; los incentivos fiscales acordados por los países miembros; el financiamiento obtenido por un nuevo banco subregional; y el incremento del intercambio comercial interno (Rosenthal, 2006, pág. 23). Sin embargo, una de las principales trabas que habían motivado el no abordar la integración conjunta de la región latinoamericana y optar por la sub-integración fue causada, en gran medida, por el sentimiento nacionalista de los Estados y su poca predisposición a la cesión de competencias. Cuestión que de hecho se reflejaba en el propio mecanismo de toma de decisiones que fue adoptado por el MCCA, al optar por un modelo intergubernamental y no supranacional.

La problemática de las competencias en el ámbito subregional también vino motivada por el Art.24 de la Carta de San Salvador, en el que se indicaba la supeditación de la organización a los acuerdos particulares con la OEA⁵²¹. Indicación que en cierto modo limitaba la capacidad de acción de los Estados en cuestiones ideológicas y económicas, con especial importancia en el trato referido a las IED⁵²². Lo que influyó determinadamente en

⁵²⁰ En este sentido indica Acosta (2014) que ya existían relaciones comerciales entre los países del Norte de la región en gran medida, resultando únicamente novedosa la inclusión de Costa Rica.

⁵²¹ Dice así el Art. 24:

“El funcionamiento de la Organización no interferirá con el régimen interno de los Estados y ninguna de las disposiciones de la presente Carta afectará el respeto y cumplimiento de las normas constitucionales de cada uno de ellos, ni podrá interpretarse en el sentido de menoscabar los derechos y obligaciones de los Estados Centroamericanos como miembros de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, ni las posiciones particulares que cualquiera de ellos hubiere asumido por medio de reservas específicas en Tratados o Convenios vigentes” (ODECA, 1951).

⁵²² En los años en los que se creó el MCCA hay que tener en cuenta que las inversiones estadounidenses en el área sumaban el 80% del total. A esto sumar las de México, Colombia, Japón, Alemania, y otros, etc... lo que dejaba poco espacio para la industria de capital perteneciente al interior de la propia institución.

la cohesión grupal, al no poseer una posición conjunta en aspectos determinados. Ya que ante cambios institucionales que se aconteciesen en el interior de los Estados miembros, la relación con EEUU podría determinar el devenir institucional del grupo, dentro del marco panamericanista.

Asimismo, esta decisión evidenció un sesgo determinante en la capacidad operativa de los Estados parte del tratado, puesto que el hecho de que los EEUU se viesen “legitimados” por la OEA a, por cuestiones de “seguridad”, intervenir en aquellos lugares en los que se detectase una práctica política no acorde a su ideología, causaba que la remodelación de las prácticas políticas subregionales de la ODECA, así como del MCCA, se viesen sometidas, cuando menos, a una ejecución cuidadosa en sus reformas en cuestiones de organización social y desarrollo. De hecho, esta capacidad atribuida a la OEA fue determinante para que el gobierno de Guatemala- país que más tarde fue intervenido por los EEUU- no quisiese formar parte del grupo, ya que su presidente Arbenz, cuyo gobierno había realizado expropiaciones a empresas estadounidenses presentes en el país- antes de la intervención en 1952-, preveía que la ODECA y el MCCA nacían con una limitación: la influencia de los EEUU en las decisiones de la OEA y en su ideología política (Blasier, 1989, pág. 159).

En este sentido, si ya había habido injerencia con anterioridad, en donde el trato a la IED había jugado un rol determinante en la composición de gobiernos y prácticas políticas desde comienzo de siglo en el istmo regional⁵²³, este elemento tuvo gran relevancia, igualmente, una vez creado el MCCA. De hecho, ya desde que comenzó su andadura la práctica de la IED – en donde los EEUU han sido el mayor inversor en el área hasta la actualidad- había influenciado en muchas de las decisiones políticas adoptadas en la región. Ya que el hecho de establecer un Mercado Común causó que la región se estableciese como atractiva para los ojos de las compañías multinacionales (Boderheimer, 1981, págs. 144-145).

Este interés se volvió a evidenciar con claridad a partir de 1979, cuando los EEUU presentaron un plan económico en 1984, denominado Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC)⁵²⁴. El ICC consistía, por un parte, en impulsar el aislamiento interno de Nicaragua, mediante la reducción de capacidades del gobierno sandinista- el cual había derrotado al

⁵²³ En este sentido destacó el papel ejercido por la compañía *United Fruit*. Véase un análisis en Ramírez (1979).

⁵²⁴ La Iniciativa de la Cuenca del Caribe podría ser considerada, ya en su tiempo, como una práctica de impulsora del regionalismo abierto, por ser: 1) compatible con las normas de la OMC; 2) vertical porque vincula a Estados Unidos con sus vecinos más pequeños de Centroamérica y el Caribe; y 3) asimétrico porque aquel país concede preferencias económicas sin exigir reciprocidad a los beneficiarios.

dictador Anastasio Somoza (Acosta, 2014)-. Ya que viendo al territorio del MCCA como un claro objetivo en términos inversionistas y adviniendo que, debido a la interdependencia existente entre los Estados, era difícil la exclusión de Nicaragua del organismo, la estrategia consistió en fomentar las prácticas exportadoras de los diversos Estados parte. Estrategia que provocaría que el MCCA fuese menos dependiente de su propio espacio interior, mediante el incremento de su relación con el exterior. Es decir, la estrategia estadounidense no era destruir el MCCA como grupo, más bien su meta fue la de impulsar un cambio en su modelo y práctica política-económica, en la que el grupo pasase de la estrategia de *integración para la protección* a un proyecto de *integración para terceros mercados*⁵²⁵.

Paralelamente, la crisis de la deuda en los 80 y los conflictos político-militares que se sucedieron en la región supusieron que se diese un proceso de freno *in situ* del MCCA y una cierta quiebra institucional. Hecho que fue efecto y causa de que los Estados comenzasen a incrementar la firma de acuerdos comerciales bilaterales centrados en la inversión, para reemplazar los contenidos dentro del MCCA. Sin embargo, el MCCA sobrevivió, eso sí, con una cobertura e impacto menor al que tenía hasta entonces en el sector interregional (Bethell, 2000, págs. 135-138).

Determinantes en el devenir de la organización fueron los hechos acontecidos a finales de los ochenta, en donde, gracias en parte al proceso democratizador que sufrió el área⁵²⁶ y a la promoción de la Paz a través de los Tratados de Esquipulas I y con mayor relevancia Esquipulas II⁵²⁷, se adoptaron reformas en las que se priorizó la integración económica regional como vía para el desarrollo, mediante prácticas de integración hacia el exterior. Evidenciándose el cambio estratégico y sumándose como grupo al regionalismo abierto que impulsaba la CEPAL en ese periodo. Cambio que se evidenció cuando en la Cumbre Presidencial de Antigua (Guatemala), tras las reuniones en los días 15, 16 y 17 de junio de 1990, los líderes de los diferentes Estados manifestaron:

⁵²⁵ De este modo lo manifestaba Henry Kissinger en 1984: "...estamos convencidos de que el Mercado Común debe cambiar hacia una postura comercial más abierta. Esto requerirá, como muchos expertos centroamericanos han sugerido, una reorientación básica del comercio regional y las políticas industriales" (Comisión Kissinger, 1984).

⁵²⁶ Véase informe de INSCR (2014).

⁵²⁷ Para información sobre el alcance del acuerdo véase: <http://www.parlacen.int/Informaci%C3%B3nGeneral/MarcoPol%C3%ADticoJur%C3%ADdico/EsquipulasII.aspx> (Consulta realizada el 23 de septiembre de 2013).

“Vemos la integración como medio para ese desarrollo y aspiramos a esa Centroamérica vinculada con el mundo sobre la base de una interdependencia fecunda y respetuosa” (Anexo 1 citado en Rodríguez (1991, pág. 233)).

Fruto del convenio fue adoptado el Plan De Acción Económico De Centroamérica (PAECA) (1990), el cual redefinía las metas del grupo. Decantándose éste por la aplicación de una práctica política-económica de *apertura a la IED* como mecanismo que mejoraría la desigualdad y la pobreza existente en la región. De este modo, con el objetivo de acabar con la guerra y fomentar la paz, aludida como causa de la desigualdad y la pobreza, se optó por la adopción de políticas que fomentasen el crecimiento económico.

Este nuevo regionalismo impulsó un nuevo proceso de integración en el istmo, que se significó en la adopción de un nuevo acuerdo: el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), mediante la firma del Protocolo a la Carta de la ODECA o Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la ODECA (entrando en vigor en 1993)⁵²⁸.

La SICA adoptó un rol primordial al instaurarse como la institución central del proceso integrador y coordinar, por medio de su Secretaria, los diferentes aspectos que comprenden la integración: lo político, lo económico, lo social cultural y lo medioambiental.

En sus primeros años la SICA respondió a la tendencia regional de la época, situando la prioridad política-económica institucional en línea con el regionalismo abierto, al abogar por un modelo que daba por finalizadas las prácticas ISI y se orientaba hacia una mayor apertura económica y menor regulación estatal (Rosenthal, 2006); incentivando los procesos de privatización y promoviendo políticas de atracción de IED con el propósito de, como diría Bhagwati (1999), evitar ser excluidos de la nueva “alta política”, al entender que si un territorio era apartado de la economía global su supervivencia se sentiría amenazada y, por lo tanto, la soberanía también. Y ante esa posibilidad se entendió que era mejor optar y acceder a las exigencias de la normativa internacional y, una vez dentro, tratar de incidir en las reglas de la misma con las capacidades adquiridas.

⁵²⁸ La SICA nació bajo los propósitos integradores de “...alcanzar el desarrollo económico y social equitativo y sostenible de los países centroamericanos, que se traduzca en el bienestar de sus pueblos y el crecimiento de todos los países miembros” (SIECA, 2013). Compuesto por los Estados de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, en el año 2000 de adhirió Belice en calidad de Estado miembro y en Diciembre de 2003 lo hizo la República Dominicana en calidad de Estado Asociado.

“...la integración económica es un medio para maximizar las opciones de desarrollo de los países centroamericanos y vincularlos más provechosa y efectivamente a la economía internacional” (SICE, 1993).

En estos años se aceleró el proceso de liberalización comercial desgravando los aranceles⁵²⁹. Lo que fomentó la aparición de los mercados externos en el contexto interno. Los cuales en teoría promoverían la competitividad internacional; generarían empleos de mayor calidad; provocarían que se acelerase la tecnificación de los productos; y como consecuencia se obtendría un mayor valor agregado en el comercio internacional (Rosenthal, 2006).⁵³⁰

En definitiva, el cambio de paradigma desarrollista en el seno de la MCCA se debió, en gran medida, al giro en la visión sobre los costos y los beneficios de la IED. En la primera fase había dominado en el discurso la perspectiva que asumía que la inversión podría contribuir al ahorro interno e implementar el transvase de tecnología, a la vez que tendría efectos diversos desplazando a la inversión interna y posiblemente impactando negativamente sobre la balanza de pagos, por lo que el Estado perdería capacidad para ejercer prácticas políticas públicas- idea apoyada en la premisa que indicaba que ejercer control sobre la IED, otorgaría que la propia IED determinaría las condiciones de los ciudadanos y el Estado-; y en la segunda fase, al llegar los años 90, el discurso en el ideario sostuvo que el mercado era el mecanismo ideal para proceder a la asignación de recursos, por lo que se debía reducir el papel que ejercía el Estado y conceder las mejores condiciones posibles a la IED. El mercado regularía el impacto.

3.2.2 Contexto actual.

En el proceso de integración hay que señalar que se han dado pasos relevantes, como muestra que en el seno del SICA hayan sido creados tres órganos técnico-administrativos con el objetivo de otorgar solidez al proyecto: La Secretaría para la Integración Económica; la Secretaría del Consejo de Agricultura, y la Secretaría del Consejo Monetario; e instituciones de carácter técnico para dar apoyo: el Banco para la Integración Económica; el Instituto para la Administración Pública, y el Instituto para la Tecnología Industrial y la

⁵²⁹ Una muestra inequívoca del método aplicado para adoptar este tipo de práctica es la reducción de aranceles que pasó de ser un 45% de media en 1985, a un 6% en 2002. Fuente: Sistema de Información sobre Comercio Exterior (SICE) disponible en línea http://www.sice.oas.org/sica/bkgrd_s.asp (Consulta realizada el día 25 de noviembre de 2013).

⁵³⁰ Indicar que este hecho no eliminaría las preferencias subregionales.

Investigación. Órganos que han tratado de dar un mayor empuje y control a la operatividad de la organización para lograr alcanzar las metas propuestas.

En el proyecto de integración se han ido incluyendo diferentes cuestiones que han evidenciado la creciente importancia de la política en el proceso, como han sido: en 1995 el Tratado de Integración Social, para organizar y regular el área social mediante el impulso de acciones coordinadas de los Estados miembros; en 1994 la Alianza para el Desarrollo Sostenible, que cubría áreas prioritarias: democracia, desarrollo sociocultural, desarrollo económico y prestar atención y recomendar sobre el uso adecuado y sostenible de los recursos naturales⁵³¹; en 1995 un Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, el cual fomenta la democracia en las instituciones, con el objetivo de promover estabilidad en Centroamérica, dados el pasado histórico de la zona, así como guardar un respeto por los DDHH.

Asimismo, en 1997 se creó un Grupo de alto nivel, al que se le encargaría el redirigir el proceso de unificación Centroamérica y que trabajase en la elaboración de un Plan para constituir la Unión Centroamericana. Marcándose como objetivo el alcanzar la integración plena en aspectos políticos, económicos, sociales y culturales. El trabajo dio su fruto y se vio reflejado en la Declaración de Nicaragua en 1997, en la que los Estados afirmaban que “Centroamérica es una Comunidad política, económica, social y cultural”; y que “Nuestro Istmo Constituye una unidad geográfica” (SICA, 1997). Lo que evidenciaba la constante voluntad gestual en la que los Estados afirmaban su propósito unificador indicando:

“Aspiramos a una Patria grande, democrática y equitativa, prospera y tolerante, competitiva y solidaria, cuyo desarrollo supone la expresión de una voluntad política permanente...”...la integración es el medio más adecuado para alcanzar el desarrollo sostenible”(SICA, 1997) [Negrita propia].

Ya entrado el nuevo siglo, en otro de los objetivos de integración económica y como parte de lo acordado en el Tratado de Managua (1960), se incentivó el instituir una Unión Aduanera en 2002, con la aprobación del denominado Plan de Acción, definiendo plazos y acciones concretas. En la misma línea, en 2004 se aprobó el Marco General para la Negociación de la Unión Aduanera en Centroamérica (UAC), con el objetivo de:

⁵³¹ Indicando que el objetivo era un desarrollo sostenible basado en un crecimiento económico (SICA, 1994).

“...alcanzar de manera gradual y progresiva la Unión Aduanera, a efecto de concretar esta etapa del proceso de integración centroamericana mediante la coordinación, armonización y convergencia de las políticas económicas, entre otras; considerando que la ampliación de los mercados nacionales, a través de este proceso de integración, constituye un requisito necesario para impulsar el desarrollo de la región” (Anexo III en SIECA (2007).

Como parte del proceso de reforzamiento y compromiso por alcanzar la UAC, en 2007 se suscribió el Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana; y en 2009 se firmó el Protocolo de la Unión Aduanera Centroamericana. Ambas significaron implicación política de las partes en aras de agilizar el proceso integrador.

En cuanto a la política-económica actual, ésta se encuentra determinada, en gran parte, por la firma del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos (CAFTA), que fue negociado entre enero de 2003 y enero de 2004, al cual se incorporó la República Dominicana en julio de 2004, adoptando en ese momento la sigla DR-CAFTA (2003-2004). Tratado que, junto con el Acuerdo de Asociación con la UE firmado en 2012, indican la presencia de una estrategia clara de los Estados, en torno a la capacidad e importancia que se atribuye a la IED.

Sobre todo es relevante rescatar la importancia del acuerdo DR-CAFTA, ya que cuestiones como las normas sobre inversiones; los aspectos laborales y ambientales; la protección de propiedad intelectual; el comercio electrónico, las compras del sector público y servicios financieros y de telecomunicaciones, establecen un marco de obligaciones idénticas para todos los Estados pertenecientes al MCCA (Pellandra & Fuentes, 2011, pág. 11). Significándose, con tal hecho, una regulación que excede a las capacidades regulatorias de los Estados parte, ya que el DR-CAFTA es el resultado de un pensamiento político económico en el que Centroamérica y la República Dominicana atribuyen a la IED y al comercio el papel central en la promoción del desarrollo económico⁵³².

A este respecto indican Amparo Pacheco y Federico Valerio (2007), en su estudio sobre el DR-CAFTA que:

“...el DR-CAFTA consolida una estrategia de desarrollo nacional basada en una mayor apertura e inserción en la economía mundial a través de compromisos de liberalización del

⁵³² Los datos de la CEPAL indican que el tratado, por ahora, ofrece un saldo negativo para la parte Centroamericana (CEPAL, 2013).

comercio de bienes y servicios, la confirmación de una política de inversión extranjera abierta, la adopción de estándares internacionales en materia de compras gubernamentales y propiedad intelectual y el reforzamiento de las leyes nacionales laborales y ambientales, que así se convierten en compromisos multilaterales” (Pacheco & Valerio, 2007, pág. 56).

Aun así, un hecho notorio que debe ser señalado es la nueva tendencia del grupo de acercamiento a ALC, en términos de integración regional, ya que se observa que la IED intrarregional va ganando importancia en el contexto del MCCA. Hecho que más allá de ser un suceso del que obtener unas conclusiones definitivas, sí señala un pequeño acercamiento hacia la región, que implica construcción de confianza regional. Y al igual que en el aspecto político, la constitución de nuevas organizaciones con ambición de impacto político regional y la participación de Estados pertenecientes al MCCA, son dos claros signos que evidencian un giro en la tendencia del proceso integrador regional⁵³³.

Sin embargo, en el interior del propio SICA también se evidencian inconvenientes para converger y cohesionar como grupo, como señaló Augusto Vela Mena ex-presidente del Parlamento Centroamericano (PARLACEN):

“...el **Sistema de Integración Centroamericana** adolece de fallas en su estructura, debido a la proliferación de instrumentos que rigen su desarrollo y a **una inadecuada visión política de conjunto** que hace a los gobiernos operar de acuerdo a las situaciones de coyuntura, sin planificar para el mediano y largo plazo”⁵³⁴ (Mena, 2003, pág. 43) **[Negrita propia]**.

Y es que el proceso sub-integrador se caracteriza más por la toma de decisiones de carácter intergubernamental que un orden supranacional, con lo que la funcionalidad y perspectivas futuras de dicho proceso partirán de las decisiones particulares que adopten los Estados. Lo que sesga la acción y función comunitaria regional⁵³⁵ (Mena, 2003).

⁵³³ En este sentido, resaltar que en la actualidad el Arancel Centroamericano de importación ha alcanzado posiciones armonizadas en un porcentaje muy elevado, situándose en el 95,7%, a partir de la entrada en vigor de la Resolución N° 263-2011, aprobado por el Consejo de Ministros de Integración Económica.

⁵³⁴ Si bien el Protocolo de Guatemala tuvo la intención de estimular el proceso de integración centroamericana, también dejó un espacio que para la acción autónoma de las partes como se refleja en su Art. 12:

“Los Estados Parte podrán negociar unilateralmente acuerdos con terceros países, siempre que, informen previamente su intención al Comité Ejecutivo de Integración Económica y acuerden un mecanismo de coordinación e información sobre los avances de las negociaciones, y que el resultado de dichos acuerdos respeten los compromisos contraídos en este Protocolo” (SICA, 1993).

⁵³⁵ Ante la presencia de estas evidencias, una cuestión clara es que los Estados de la SICA poseen libertad para no firmar todos los acuerdos negociados por la SICA, y sólo en aquellos que decidan participar será en

Una vez mencionado lo anterior, no sería justo afirmar que la integración centroamericana no está sufriendo un cierto avance en ambos espacios. Que aunque presentan retos que necesitan ser implementados, si bien es verdad que la toma de decisiones recae sobre los Estados y gobiernos de forma particular, la institucionalización y el pacto son hechos constitutivos de acuerdo, que en cierta medida construyen confianza y sientan bases de cooperación. Ya que los mismo son elementos necesarios ante los desafíos que fueron señalados en la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los países del SICA (20/7/2010). Reunión en la que se incentivó la implementación de la seguridad democrática; la prevención y mitigación de los desastres naturales y de los efectos del cambio climático; la integración social; la integración económica; y el fortalecimiento de la institucionalidad regional. Objetivos que requieren de refuerzo en el compromiso y en el concilio de las metas y posiciones, para que no se altere el proceso integrador más allá de la tendencia o suceso político interno en un Estado (SICA, 2011).

En términos institucionales este propósito de mínimos se debe abordar con celeridad, dados los casos de Honduras o el conflicto entre Nicaragua y Costa Rica en el tema del río San Juan, que han evidenciado la poca capacidad operativa del SICA, así como la irregularidad en la membresía de los Estados en los diversos órganos. Hechos que constatan dos aspectos fundamentales: por una parte que el proceso de integración depende de manera directa de la voluntad política del proceso interno; y por otra, que la decisión última, por el momento, se sigue manteniendo en los Estados particulares, sin que la institución centroamericana posea capacidad de acción (Murillo Zamora, 2014).

En definitiva, la integración de la región Centroamericana adolece de grandes fallas en cuanto a la cooperación intrarregional, como evidencia el que si el Tratado de Esquipulas II estableció un esquema que basaría su potencialidad de integración en tres pilares: paz, democracia y desarrollo (Murillo Zamora, 2014); y el Protocolo de Tegucigalpa sumó un cuarto: la libertad, el progreso y estabilidad, las instituciones democráticas poseen debilidad y las judicaturas y los organismos electorales todavía se inclinan ante el poder político y económico y los ejércitos, aun cuando supuestamente estos deben estar subordinados al poder civil, como evidencia el caso hondureño (Rojas Bolaño, 2010).

“...los países centroamericanos se habían fabricado una historia de progreso social y político que no era real ya que, detrás de la retórica sobre los cambios alcanzados, las

los que estén inscritos reservando su capacidad de decisión. Muestra de ello, es la no participación de Costa Rica en el PARLACEN ni en la Corte Centroamericana de Justicia, o Panamá de la MCCA.

estructuras del poder económico y político se mantenían intactas. El golpe en Honduras no fue una anomalía, sino un síntoma de problemas irresueltos”(Rojas Bolaño, 2010, pág. 100)

A raíz de este contexto señalado, se podría indicar que desde un punto de vista realista, en el que pesan las perspectivas que enfatizan la relevancia de la seguridad y la economía que inciden en la cercanía de un territorio a su contraparte, Centroamérica sería entendida más como un sub-complejo de los EEUU, ya que es el territorio que ha poseído mayor influencia económica y militar (Buzan & Wæver, 2003). Sin embargo, si el examen se aborda desde un punto de vista administrativo-político, con una visión basada en la construcción del poder a través de las posibilidades y los recursos energéticos que posee el área y que le sitúa en un posicionamiento categorizado por su importancia geoestratégica, aunque Centroamérica posee ligaciones – que han sido indicadas en este texto- con Latinoamérica, no sería apropiado indicar que posee una historia común y ligada con su totalidad según las imágenes que se podrían construir (Rojas Bolaño, 2010).

Pero a pesar de esto, desde un punto de vista ontológico, las ideas subyacentes de historia opresora indicando que existe un actor común externo, en el que en el instante que las capacidades (economía y seguridad) puedan ser equiparadas en cuanto a poder, las ideas serán aquellas que se hagan presentes. Y las ideas que subyacen sí indican que ALC coexiste y comparte muchas similitudes, como para proceder a la institucionalización de las relaciones latinoamericanas *in situ*.

“En términos generales los países centroamericanos se pueden considerar como los hermanos menores y pequeños de los Estados latinoamericanos, por lo que no han sido vistos como socios estratégicos en los procesos decisivos claves de América Latina” (Rojas Bolaño, 2010).

3.3 El Pacto Andino. La inversión como causa de transformación.

3.3.1 Contextualización del Pacto Andino.

El Pacto Andino (PA) tuvo su origen en la inequidad que presentaban los resultados de la ALALC en cuestiones de distribución de beneficios y la rigidez que presentaba la organización para abordar transformaciones profundas que solventaran estos hechos. De

ello, que tempranamente, en 1969, se firmase el Acuerdo de Cartagena⁵³⁶ con la presencia de los Estados de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, y 4 años más tarde Venezuela.

Al tener el objetivo de seguir siendo parte y operar dentro del ALALC, los Estados miembros del PA, conscientes de su desventaja económica, optaron por instituir un proceso de sub-sub-integración que, en principio, dotase al grupo y a los Estados miembros de capacidad suficiente para afrontar las negociaciones con otros Estados con un PIB mayor en condiciones de igualdad, entendiendo que este hecho facilitaría el proceso de integración regional.

En principio, debido a la clara adopción de políticas en el seno del PA, su evolución hasta los años 90 podría ser clasificada en cuatro periodos diferenciados:

- 1) **Periodo de auge (1969-1975):** políticas nacionales orientadas directamente a impulsar el crecimiento económico (el comercio intrarregional creció un 25% en los primeros dos años), junto con una demanda externa y gran afluencia de capitales (una significativa mejora de las relaciones de intercambio);
- 2) **Periodo de endeudamiento (1976-1982):** El grupo adquirió deudas que sobrepasaron su capacidad bancaria, con lo que la banca externa adquirió fuerza para ejercer presión sobre las decisiones internas y el PA comenzó a lidiar con la restricción externa, comercial y financiera. Lo que conllevó un claro perjuicio en la relación de los precios de intercambio;
- 3) **Periodo de aplicación de la llamada “Teología de Mercado” (Mediados de los 80-1988):** En este periodo entró en escena el modelo de ajuste impulsado por el FMI.⁵³⁷ La adopción de prácticas institucionales de ajuste en las políticas económicas para cubrir la tasa de endeudamiento externo, provocó una pérdida de

⁵³⁶ En un inicio, con el objetivo de mejorar aquellas cuestiones origen de fricciones detectadas en el ALCL, el Acuerdo de Cartagena incluyó algunas modificaciones respecto a las prestaciones del ALACL. Entre ellas:

- a) la instauración de un órgano ejecutivo (la Junta del Acuerdo de Cartagena(JUNAC));
- b) un programa concreto sobre el establecimiento de aranceles comunes;
- c) se estableció un sistema para el reparto de beneficios (incluyendo programas sectoriales para el desarrollo industrial y preferencias arancelarias para los Estados menos desarrollados dentro del grupo);
- d) **armonizar las políticas económicas con regulación expresa sobre la IED como punto fuerte del Tratado**, apareció la *Decisión 24*.

(A partir de Bethell (2000, pág. 133)).

⁵³⁷ Este ajuste afectó de diversa manera a los Estados. El ajuste del PIB para equilibrar la balanza de pagos mediante la caída de las importaciones se realizó en: Bolivia y Venezuela (1981,1982); Ecuador (1984); Perú (1976-1985); Colombia (1982,1985).

bienestar social para la subregión (aumento de desocupación, tasas de crecimiento negativo en la mayoría de los países, etc...);

- 4) **Periodo de atenuación de restricciones externas (1988-1991):** Debido a la ausencia de remanentes del exterior, la firma del Protocolo de Quito (1987), la adopción del Diseño Estratégico para la Reorientación del Grupo Andino (1989) y el las Actas de la Paz (1990), incidieron en el aumento de la cooperación intra-subregional. Proceso en el que había incidido el que los niveles de superávit económico fuesen utilizados como remanente para afrontar el pago del servicio de la deuda externa.

*El freno en el proceso integracionista se produjo a causa del golpe de Perú (Fujimori.5 de Abril 1991).

En las transformaciones y cambios vividos por el PA tuvieron gran influencia diferentes decisiones que ejerció el grupo como agente, así como las de sus miembros. Particularmente relevante fue la influencia del trato a la IED, puesto que desde la adopción de la *Decisión 24* en 1970, hasta la entrada en vigor de la *Decisión 291* en 1991, el cambio ejercido al trato ha ido acompañando a los diversos periodos de transformaciones institucionales en el PA.

3.3.1.1 El trato a la Inversión extranjera Directa como elemento significativo del cambio de paradigma institucional en el Pacto Andino.

Durante el primer periodo, el elemento que tuvo gran incidencia en la práctica política-económica fue la adopción de la *Decisión 24*. Esta Decisión posee gran relevancia doctrinaria, por el rol que atribuyó este grupo de Estados a la IED como elemento de poder en el devenir social; así como por el papel que entendían debían jugar los Estados receptores en su regulación e impacto, ya desde antes de la constitución del PA, cuando previamente en la Declaración de Bogotá (1966) los presidentes y los representantes manifestaron:

"Consideramos que **el capital privado extranjero puede realizar un aporte considerable al desarrollo económico** de América Latina, **siempre que estimule la capitalización del país** donde se radique; facilite la participación amplia del capital nacional en ese proceso **y no cree obstáculos para la integración regional**" (Citado en Tironi (1977, pág. 13)) **[Negrita propia]**.

Asumiendo esta premisa como válida, el Grupo Andino adoptó una política común de trato a la IED el 31 de diciembre de 1970, que se significó mediante la adopción de la *Decisión 24* por parte de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En donde se reveló, claramente, que el Grupo Andino entendía desde un comienzo que en el proceso de integración era fundamental el papel que ejercía la IED. Por lo que tras la aprobación de los diferentes gobiernos se indicó que la IED debía cumplir con los siguientes criterios para ser receptada:

“a) Estimular la formación de capital en los países receptores de capital foráneo; b) Facilitar la participación amplia de capital nacional en el proceso de integración; c) **Evitar condiciones bajo las cuales la inversión foránea en los países pudiera obstruir la integración;** d) **Coordinar la IED con los planes de desarrollo de los países;** e) Facilitar el uso de tecnología moderna, especialmente evitando las limitaciones respecto de la distribución y venta de productos que la utilizan; f) **Otorgar estabilidad a aquella inversión extranjera que realice una contribución positiva al desarrollo de país respectivo;** g) **Contribuir a una distribución “equitativa” de las ganancias derivadas de la integración,** especialmente en el caso de los países andinos relativamente menos desarrollados” (Tironi, 1977, págs. 13-14) [**Negrita propia**].

La *Decisión 24* se instituyó como una norma que no sólo fijaba el alcance de la cantidad de recursos externos que se adquirirían por territorio, sino que también establecía las condiciones y los términos en los que esta IED actuaría e impactaría en el territorio receptor. Pero la adopción de la *Decisión 24* no implicaba una gran novedad regulatoria, ya que, lejos de esa pretensión, en ella se reflejaban principios económicos y legales que habían existido durante más de 60 años en la mayoría de las legislaciones antimonopólicas y *anti-trust* en los países industrializados (Vaitsos, 1974, pág. 148). Fue ante ese conocimiento por cual se le atribuyeron responsabilidades a la IED en sus impactos⁵³⁸.

Ante la toma de esta *Decisión*, que **sólo excluía las ventajas de los inversores de la creación del nuevo Grupo, no de los Estados particulares**, no tardó en presenciarse la queja por parte de los inversionistas extranjeros, que se declararon contrarios a la misma por encontrar ésta muy restrictiva. Especial mención en este sentido merece la crítica que realizó el Consejo de las Américas para América Latina de EEUU, que aventuró que la

⁵³⁸ Véase al respecto Capítulo III.

Decisión en muchos casos eliminaría por completo toda IED futura, y que haría más lento el proceso de desarrollo económico (Tironi, 1977, pág. 20).⁵³⁹

La *Decisión 24* significaba la presencia de una regulación a la que se le atribuyó la función de guiar los efectos de la inversión en la comunidad. Con esta atribución a la *Decisión*, y aún con el golpe de Estado en Chile en 1973 y su retiro del PA – este Estado adoptó política económicas neoliberales, incluyendo un incremento en la apertura a la IED-, los años 70 fueron positivos para el Grupo Andino. Pero la llegada de la crisis de la deuda de la década de los 80 y la consecuente “necesidad”⁵⁴⁰ de financiación del grupo, causó el que se replanteasen las normas a aplicar a la IED. Lo que conllevó que el enfoque hasta ese instante adoptado sufriese un giro y se adentrase en la fase teológica del mercado, en la que se atribuía a las fuerzas del mercado el papel de agente que asignaba los recursos de una forma más eficiente (Rosenthal, 2006).

Mediante la adopción de este nuevo postulado, y debido a la influencia de las recomendaciones de las IFI, el discurso en favor de la desregulación se apoderó de la centralidad de las prácticas en la SI, y el PA decidió en 1987 flexibilizar la entrada a la IED. Dado que la inestabilidad en la región había desalentado a la inversión- no la *Decisión 24*- y en aras de incentivar la afluencia de capitales se optó por ofertar mejores condiciones a la misma. Se adoptó la *Decisión 220*.

Años más tarde, ya en línea con los postulados del Consenso de Washington y adentrada la región en una carrera competitiva por atraer inversión, el PA implementó la mejora de condiciones a la IED mediante la adopción de la *Decisión 291* en 1991. En esta ocasión el discurso ya sí, claramente, atribuyó la capacidad a esta práctica de solventar las inequidades y problemas de la región latinoamericana, señalando a esta práctica y a la desregularización interna como la solución.

Consecuentemente, la IED se incrementó sustancialmente en esa década. Por una parte este hecho se vio provocado por que, en términos generales, la *Decisión 291* otorgaba a cada país autonomía para fijar su política de IED (Bustillos, 2012), incluso con respecto a los

⁵³⁹ A este respecto, indicar que ha sido señalado que el estudio del Congreso careció de rigurosidad y fue parcialmente pretencioso (Díaz-Alejandro, 1971).

⁵⁴⁰ Hay que entrecomillar esta necesidad, puesto que la misma en muchos casos obedecía más al interés que hubo en la colocación del exceso de capital presente en los países árabes y en los bancos, que a la necesidad real por parte de los Estados receptores. Contexto en el que se produjo una disminución en la rigurosidad para conceder préstamos a los países en desarrollo, provocando su endeudamiento masivo, que superaba en muchos casos su capacidad de carga. Véanse a este respecto: Griffith-Jones & Sunkel (1986); Bustillo & Velloso (2013).

elementos en ella previstos. Pero, paralelamente, hay que señalar que la adopción de esta significaba que la IED repercutía en el proceso de integración y/o unificación futura regional, debido a las estrategias políticas competitivas por atraer la IED dentro del grupo (Gligo S., 2007). Por lo que la aplicación de esta norma alejó a los Estados miembros.

3.3.2 La institucionalización del Grupo Andino en el marco del regionalismo abierto.

Se puede observar como el Grupo Andino dio grandes pasos en su particular proceso integrador en los años setenta. Proceso que se desvirtuó a partir del establecimiento por los Estados de *acuerdos bilaterales*, como resultado del incumplimiento de *Decisiones*, en especial de la *Decisión 24*, en el seno del Grupo. Estas cuestiones dañaron gravemente la construcción de solidaridad y confianza y, consecuentemente, el proceso integracionista durante los 80.

Al llegar los años 90 y mediante la firma del Protocolo de Quito (1987, entró en vigor 1988), el grupo, tratando de reorientar el proceso integrador, optó por la inclusión en su agenda de un marco conceptual, en el que no se vinculase al proceso únicamente los aspectos económicos y comerciales, y se incluyesen transversalmente aspectos sociales, culturales y políticos, en un marco de regionalismo abierto.

Evidenciando este cambio estratégico, los Estados del PA realizaron dos reformas sustanciales. Primero, los Estados de Bolivia, Colombia y Venezuela ejecutaron la apertura de sus mercados para mejorar la atracción de IED y conducir a sus Estados al ansiado desarrollo, en Septiembre de 1992. Ecuador por su parte adoptó esta práctica, el 31 de Enero de 1993, dándose inicio al comienzo de la ZLC⁵⁴¹; y 2 años más tarde el grupo aprobó la constitución de un Arancel Externo Común Andino el 26 de noviembre de 1994, entrando en vigor el 1 de Febrero de 1995.

Con anterioridad y como parte del contexto de cambio, el PA había tratado de impulsar el proceso sub-integrador a través de encuentros entre los líderes de los Estados en el Consejo Presidencial Andino, que se habían significado con la redacción del Acta de Barahona (1988). Sin embargo, a causa del conflicto ocurrido en Perú, la evolución en

⁵⁴¹ Por medio del Acta de la Paz a finales de 1990 y del Acta de Barahona en diciembre de 1991, se había consolidado el camino hacia la integración económica mediante el perfeccionamiento de la ZLC, en la que se incluyeron medidas como: una reducción de las excepciones progresiva; la adopción de un arancel externo común; y la adopción de una armonización progresiva de las políticas económicas.

términos integradores del PA se paralizó entre diciembre de 1991 y septiembre de 1995, mostrando de nuevo que la integración dependía en exceso del devenir de las decisiones políticas internas de los Estados en la región.

Tras la reincorporación de Perú en 1995, se formuló un Nuevo Diseño Estratégico que trató de definir metas y mecanismos que impulsaran el proceso a partir de la elaboración de una agenda prioritaria que ambicionaba: a) profundizar el proceso de integración andino elevando los logros obtenidos en el campo comercial, y ponerlo al servicio de los objetivos de un desarrollo económico y social; b) armonizar políticas económicas, adecuándolas para el desarrollo sostenible y el logro de políticas sociales eficientes; b) definir políticas sociales orientadas a la elevación de la calidad de vida y al mejoramiento del acceso de los diversos grupos sociales de la Subregión a los beneficios del desarrollo; c) articular el Sistema Andino de Integración (SAI) para superar los nuevos desafíos de la integración; y d) avanzar hacia la integración latinoamericana y hemisférica.⁵⁴²

De este modo se retomaba un marco de acción en aras de alcanzar el objetivo de integración latinoamericana, a partir del proceso sub-integrador. Contexto en el que aprovechando la ola de energía integradora por el reencuentro que se produjo entre los Estados, y a pesar de unas relaciones políticas no favorables para el desarrollo de pactos, se optó por abordar un proceso reformador del Acuerdo de Cartagena que se denominó El Protocolo de Trujillo (10- marzo- 1996 entrando en vigor el 3 de Junio de 1997)).

De este acuerdo surgió la puesta en práctica del SAI, que creaba la Secretaría General y el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, significándose la creación de instituciones intergubernamentales y transformando la denominación de PA por la Comunidad Andina de Naciones (CAN), otorgando un mayor peso al ala institucionalista.

El Protocolo de Trujillo trató de ser el impulsó que desafiase las reservas de soberanía nacional versus regional, a través del proceso de instauración de un ordenamiento jurídico, mediante la aprobación de la *Decisión 563* en el que se incluía el propósito promover la implementación de una acción externa conjunta:

⁵⁴² Véase el Acta de Quito (Ecuador). Séptima Reunión del Consejo Presidencial Andino. Documento disponible en: <http://www.comunidadandina.org> (Consulta realizada el día 23 de marzo de 2014).

”...formular la política exterior de los Países Miembros en los asuntos que sean de interés subregional, así como orientar y coordinar la acción externa de los diversos órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración” (CAN, 1997a).

Asimismo y como muestra del intento de articular mecanismos institucionales subregionales, el Art. 55 del tratado indicaba la ambición de adoptar un “...régimen común sobre tratamiento a los capitales extranjeros y, entre otros, sobre marcas, patentes, licencias y regalías” (CAN, 1997a). Lo que significaría dotar a la CAN de capacidad suficiente para operar como unidad de cara al exterior- incluido el área de ALC-. Y además, este avance se significó en la constitución del Tribunal Andino de Justicia, que al igual que la Secretaría General, aunque actuase y decidiese de manera intergubernamental, debido a que, aunque su veredictos sean aplicados en el seno de la CAN y las normas que surgen de los mismos son de aplicación supranacional, están compuestos por funcionarios de los Estados parte⁵⁴³, la señal de impulsó al proceso fue inequívoca.

En la misma línea, el Protocolo de Sucre en 1997- que entró en vigor en 2003- modificaba algunas bases del Acuerdo de Cartagena, pretendiendo dotar a la CAN de un mayor grado de institucionalidad. A este respecto, manifestó el por entonces Secretario General de la CAN, Guillermo Fernández de Soto, que el protocolo: “...consolida la institucionalidad andina y profundiza la integración subregional en materia social, de política externa común y del mercado común” (La Prensa Web, 2003)⁵⁴⁴. Asimismo, la adopción del Protocolo de Sucre significaba una reiteración en la voluntad de alcanzar la integración regional y, por otra parte, revitalizaba a la CAN en la persecución de la meta que impulsó su creación⁵⁴⁵.

Por último, indicar que al igual que en otros grupos regionales, relevante en ese periodo es la inclusión de la CAN del “Compromiso de la Comunidad Andina por la Democracia” (2003) o la “cláusula democrática”, que han significado una apuesta institucional por la democracia y la estabilidad regional.

⁵⁴³ En este sentido, aunque se actúe intergubernamentalmente, las decisiones institucionales de estos órganos contienen elementos supranacionales creando jurisprudencia comunitaria (Manrique, 1998).

⁵⁴⁴ Hecho que viene reflejado si repasamos los algunos artículos. Especialmente el artículo 20 que sustituye al Art. 144 del protocolo de Cartagena:

“Artículo 21: A efectos de lo previsto en el artículo anterior, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión, según sus respectivas competencias, **adoptarán programas para orientar las acciones externas conjuntas de los Países Miembros**, especialmente en lo relativo a las negociaciones con terceros países y grupos de países, en los ámbitos políticos, social y económico-comercial, así como para la participación en foros y organismos especializados en materias vinculadas a la economía internacional” (CAN, 1997b) [**Negrita propia**].

⁵⁴⁵ En este sentido, el Art. 3 del Protocolo dice así: “a) Profundización de la integración con los demás bloques económicos regionales y de relacionamiento con esquemas extra-regionales en los ámbitos político, social y económico-comercial” (CAN, 1997b).

3.3.3 Avances institucionales y pluralismo en la Comunidad Andina: fractura debido al trato con las inversiones.

Si en el plano político a mediados de los 90 pareciese que la CAN actuaba con armonía, por ejemplo como sucedió en la negociación con el proyecto continentalista propuesto por EEUU el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), en donde la CAN mantuvo una posición única mediante un portavoz único y que contuvo un alto componente simbólico de representatividad y unidad, la variación en las visiones Estatales con los cambios de gobiernos produjo que variase la composición de la CAN alterándose los Estados miembros.

Fueron precisamente las diferencias respecto a los compromisos con el trato a los capitales extranjeros, aquello que evidenció la presencia de posturas divergentes y que, en este caso, debido a las políticas particulares los Estados miembros en cuestiones comerciales se originase la salida de Venezuela. Ya que si, por una parte, dentro de la CAN los gobiernos de Colombia y Perú optaron por estrechar relaciones con los EEUU, Venezuela se mostraba contraria a este paso y prefirió abandonar la CAN.⁵⁴⁶

Ante este hecho, ya en el año 2010 la CAN decidió incluir en la Agenda Andina principios que aluden a las líneas de integración, en donde se establece un reconocimiento al pluralismo de los Estados miembros, adoptando un postulado que pretende establecer unas bases de inclusión, en donde la institución no sufra ante los cambios de gobiernos de los Estados particulares⁵⁴⁷.

“...es necesario desarrollar y profundizar el proceso de integración de la Comunidad Andina tomando en cuenta, en forma más efectiva, las visiones y enfoques de los Países Miembros, con el objetivo de lograr una unidad en la diversidad al servicio del vivir bien de nuestros pueblos y de la armonía con la naturaleza. Es necesario forjar una integración integral más equilibrada entre los aspectos sociales, culturales, económicos, ambientales y comerciales”⁵⁴⁸ (CAN, 2007)

⁵⁴⁶ Las divergencias las coparon los asuntos referidos a la firma de TTLLCC y TTBBII, que no eran la línea estratégica adoptada por Venezuela. Este último firmó tres meses después un acuerdo de ingreso como miembro de pleno derecho de MERCOSUR

⁵⁴⁷ Así se indica en la Declaración producida tras la Cumbre Presidencial ocurrida en Tarija, junio 2007.

⁵⁴⁸ La línea gruesa que constituye el avance de la CAN ha variado, como se refleja en los Principios Orientadores del año 2010, radicando el cambio en las metas desarrollistas y percibiéndose una influencia de los nuevos procesos de desarrollo acontecidos a partir de la aparición del Buen vivir o vivir bien en las

Sin embargo, el panorama actual, con las relaciones y pertenencia de los Estados miembros de la CAN o Alianzas como la ALBA (Ecuador, Bolivia) o la AP (Colombia, Chile, Perú (México))- instituciones que poseen criterios contrarios en cuestiones ideológicas- tensan la consistencia de la organización, en términos de integración, y sitúan a la misma en una interrogante respecto al futuro. Debido, principalmente, a la lejanía que presentan las dos organizaciones respecto al modo de integración: ALBA *integración hacia adentro*; AP *integración hacia afuera*.⁵⁴⁹

En definitiva, aún con el desafío estructural que se le presenta a la CAN, al poseer sus miembros una ideología diversa en cuestiones elementales de política-económica en la actualidad, a la hora de adoptar políticas de integración, la superación de estas inciden en la propia naturaleza de la CAN, ya que esta organización ha indicado en todas sus fases que en su ideario prima la meta de implementar progresivamente la integración de ALC.

3.4 El caso de los británicos latinoamericanos: un acercamiento tardío al proceso unitario de América Latina y el Caribe.

3.4.1 Notas contextuales a tener en cuenta.

Cuando se aborda el análisis del proceso de integración de las islas del Caribe, dos cuestiones deben ser señaladas para entender las decisiones que adoptan los Estados. Por una parte, señala Hey (2003) que el tamaño de los Estados que son considerados micro-Estados o Estados pequeños, como es el caso de los Estados que se abordan en este epígrafe, determina su capacidad de acción en política internacional; por otra, se indica que la juventud de los Estados determina su capacidad acción, al tener que combinar en su interior los deseos de expresión de la soberanía adquirida con la necesidad de cubrir demandas de la población como actores independientes, en un contexto en el que su capacidad de cubrir demandas es habitualmente muy limitado (Anghie, 2004).

políticas de algunos Estados. La influencia de esta apreciación e inclusión de la diversidad se revelan en los principios allí presentes:

“Respetar diversidad enfoques y visiones; desarrollar el carácter integral del proceso de integración; generar mecanismos prácticos de articulación y convergencia entre procesos de integración; impulsar desarrollo del mercado y del comercio, desarrollando oportunidades inclusión económica y solidaridad social; Avanzar en reducción asimetrías al interior de los PM mediante iniciativas de desarrollo económico y social; y profundizar integración física y fronteriza”(Reátegui, 2010).

⁵⁴⁹ Por una parte el ALBA se situaría en un postulado que aboga por la intervención Estatal en la regulación de la economía, y por otra la AP atribuye al mercado la mejor asignación de recursos y promueve la firma del TBI como mecanismo de articulación de procesos promotores de bienestar social (Malamud, 2012). Cuestiones que les confrontan ideológicamente como bloques, tanto en cuestiones económicas como en políticas.

La *pequeñez* de los Estados determina el que en las RRII, estos se encuentren en un contexto de “restricciones reales y vulnerabilidades únicas”, dada su poca capacidad para ofrecer a sus ciudadanos diversidad en la oferta. Es por ello que en aras de satisfacer la demanda y cubrir sus agendas, la política exterior se ve determinada por las naciones de mayor tamaño y capacidad en cualquier de los aspectos que requieran demanda (Martínez Alfonso, 2013).

Ambos aspectos se combinan en la Comunidad del Caribe (CARICOM *por sus siglas en inglés Caribbean Community and Common Market*), ya que por una parte sus procesos de independencia se han desarrollado recientemente, entre 1962 y 1983, por lo que se trata de Estados jóvenes; y por otra, su tamaño oscila entre Saint Kitts con un tamaño de 261Km², hasta el territorio más grande Guayana con 214.970 km², siendo el 57% considerados micro-Estados al estar clasificados estos en territorios menores a 1000km². (Martínez Alfonso, 2013).

Dadas estas características de los Estados que componen la actual CARICOM, señala Hey (2003) que los procesos integradores serán relevantes, al representar las RRII un campo de oportunidades así como de restricciones en los diversos agentes que adopten responsabilidad en la decisión política exterior e interior. Y aunque se puedan presentar como Estados cierta heterogeneidad en su interior, disponen de intereses comunes que inciden en sus prácticas políticas.

Por lo tanto, *pequeñez* y “juventud” se deben tener en cuenta, constantemente, al analizar estos Estados y su proceso toma de decisiones, ya que ambos aspectos determinarían la capacidad de trasladar los idearios de los pueblos a las prácticas institucionales.

3.4.2 Contexto del proceso integrador de las islas ex-británicas del Caribe.

Es relevante señalar que el primer hito de unir la zona del Caribe no tuvo un origen económico, sino político. Y es que este impulso se arguyó a través de la propuesta de la Federación Británica del Caribe que, pretendiendo consagrar la unión política del área, constituyó la *West Indies Federation* entre 1958-1962. Fue tan manifiesta la intención de aunar el área en un agente soberano que, en el periodo que duró la Federación (1962), no se

incluyó ningún acuerdo económico entre sus miembros⁵⁵⁰. Aunque bien es verdad, que la *West Indies Federation* sí promovió la implantación de algunos servicios comunes que significaron la construcción de vínculos entre los Estados, como la navegación y la creación de la Universidad de las Indias Occidentales. Servicios a los que más tarde se unieron meteorología y otros servicios (Gill, 1993).

Tras la disolución de la Federación en 1962, se produjeron diversas reuniones, conversaciones y negociaciones entre los líderes de los Estados que, con la pretensión de aunar el mayor número de Estados posibles⁵⁵¹, constituyeron *the Caribbean Free Trade Association* (CARIFTA) en diciembre de 1965, adoptando en éste caso la organización un claro carácter económico.⁵⁵²

En términos de RRII y de cara a entender el papel del área con los agentes externos, es pertinente destacar el que la CARIFTA no excluyese a Cuba de la posibilidad de integrarse en la organización. Pues este hecho fue una decisión notable, dada la relevancia política de la Isla en pleno contexto de Guerra Fría. En donde, debido a los nuevos procesos de independencia el área, esta acción adquiriría una relevancia simbólica en la SI, principalmente, para los EEUU.

Esta decisión fue controvertida, pero relevante en términos de soberanía, pues se manifestaba una posición no alineada. Según H. Brewser (1971), la toma de ésta se debió a tres posibles causas: a) el prestigio político y la significación histórica del impacto del panamericanismo en el Caribe; b) actuar como punto de unión para en un futuro proceder a constituir un bloque caribeño unificado, para posteriormente insertarse en agrupaciones latinoamericanas; o c) indicar su capacidad para aliarse con Cuba, como ejercicio de “aislamiento simbólico” ante el peligro de una posible intervención americana o europea. Tres aspectos relevantes en el devenir del proceso integrador y que revelan el posicionamiento y la determinación para decidir autónomamente de las islas en decisiones de soberanía exterior.

⁵⁵⁰ Hecho que se suele señalar como una de las fallas que provocó el fracaso de aquella institución (Gill, 1993).

⁵⁵¹ Ya en el Art. 32 del tratado se indicaba que: “Cualquier territorio aunque no fuese signatario de este oficio, puede participar en este Convenio... en los términos y condiciones decididos por el Consejo” (Citado en Koll (2000, pág. 3).

⁵⁵² El 15 de Diciembre de 1965 los componentes fueron Antigua Barbuda, Barbados, Guyana, y Trinidad y Tobago. El 1 de Julio de 1968 se unieron Dominica, Grenada, St Kitts-Nevis- Anguila, Saint Lucia y St Vincent y Grenadinas; ese mismo año en Agosto Monserrat y Jamaica; y en 1971 Belize y la zona Británica de Honduras. Documento oficial de la CARIFTA disponible en línea: <http://www.caricom.org/jsp/community/carifta.jsp?menu=community> (Consulta realizada el día 13 de agosto de 2014).

3.4.3 Ideologías estatistas en las prácticas integradoras. Comienzo de la *Caribbean Free Trade Association* (CARIFTA).

En los inicios de la CARIFTA, los Estados y la comunidad se decantaron por la adopción de un modelo político estatista, caracterizado por aplicar un control estatal en los mercados; por ser economías cerradas o semi-cerradas (influenciado por la aplicación de la estrategia ISI); y poseer una inflación “moderada”.

En esta primera fase, el Estado adquirió el rol protagonista en las cuestiones económicas, sociales y políticas, incentivado por los procesos de descolonización. Ya que al adoptar éstos la condición de soberanos, los nuevos Estados impulsaron prácticas en las que la capacidad de decisión se viese como un elemento de reivindicación de poder. De ello, el que la adopción de una estrategia en la que el Estado manifestase su capacidad de agente, al establecer una relación con el exterior, fuese una ambición vista como un acto manifiesto de solidez e independencia.

En este contexto, el dotar de capacidad de decisión, en aspectos relevantes hacía el exterior, a una organización común al área, era una idea que se venía fraguando desde las épocas anteriores, en los años 50 y 60, cuando bajo la influencia de los postulados desarrollistas en los mítines internacionales, los elementos centrales de la práctica política lo constituían procesos como la industrialización, la estrategia ISI y el estímulo de exportaciones, y la pertinencia o no de aplicar proteccionismo estatal para alcanzar el desarrollo (Koll, 2000, pág. 133). Cuestiones que incidieron en que, aun optando la CARIFTA por un fuerte proteccionismo, se entendiese necesaria la promoción de la IED en los Estados.⁵⁵³

A partir de la atribución de un papel relevante a la IED en el desarrollo, el estímulo de la práctica inversionista derivó en un contexto en el que los agentes extranjeros adquirieron grandes propiedades en la zona y que, a su vez, fueron causa de diversos efectos (Brewster, 1969). Por una parte, no se redujo el desempleo ni la desigualdad intra-zonal; pero por otra, sí se incrementó una industria, la industria del turismo, que en este caso controlaban compañías extranjeras, por lo que no tenía un gran impacto en los otros segmentos económicos, ya que los insumos se importaban en su mayoría. (Koll, 2000).

⁵⁵³ Un artículo que define de forma precisa la situación del desarrollo industrial del área en esa época lo escribió Brewster (1969).

La práctica económica ISI se vio incentivada debido a que la CARIFTA había fijado la articulación de sus políticas a partir de una premisa ideológica, que atribuía a la implementación del comercio el alcanzar un desarrollo equilibrado. Teología que funcionó, con mayor o menor brillantez, durante la denominada época fácil. Pero al llegar a 1970, estando su socio principal, Reino Unido, inmerso en el proceso de asociación con la Comunidad Económica Europea (CEE), la zona se alertó por el peligro que representaba el que Reino Unido interrumpiera de manera abrupta el comercio practicado hasta la fecha. Era uno de sus socios preferenciales, y tras varias reuniones entre los líderes durante la Octava Conferencia de Jefes de gobierno de CARIFTA (Abril-1973), se llegó a la conclusión de que una integración regional no podía poseer su pilar elemental en el establecimiento de una ZLC, y se debían ampliar los tipos de compromiso. Nació la Comunidad del Caribe (CARICOM).

3.4.4 La constitución de la Comunidad del Caribe. Un proceso de transformación progresiva en torno al papel de la Inversión Extranjera Directa en el área.

En Abril de 1973, mediante la adopción del Tratado de Chaguaramas, se estableció la CARICOM. En principio, la comunidad fue integrada por los Estados de Barbados, Jamaica, Guyana y Trinidad-Tobago. Aunque ya constó en el acuerdo que para el 1 de Mayo de 1974 se integrarían Antigua y Barbuda, Dominica, Belice, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y Granadinas y Montserrat. Nueve años más tarde, en 1983, se unirían a la comunidad Las Bahamas y la República de Surinam; y en las décadas recientes se integraron, en calidad de miembros asociados, Las Islas Vírgenes Británicas e Islas Turcas y Caicos en 1991, Anguila en 1999, Islas Caimán en 2002 y Bermudas en 2003. Estas últimas, al igual que Montserrat, en dependencia del Reino Unido⁵⁵⁴.

Como máximo órgano de poder en el CARICOM se constituyó la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno, con el mandato de determinar los lineamientos políticos de la comunidad. Este órgano operaría de un modo intergubernamental y sería el mecanismo adoptado para elaborar directivas, bajo el mandato de dinamizar a los demás órganos y cuerpos de la comunidad, en la tarea de promocionar cualquier objetivo que la comunidad

⁵⁵⁴ Son territorios dependientes de Reino Unido denominados Territorios de Ultramar. Estos Estados se encuentran bajo la supervisión del Comité de Descolonización de la NNUU.

se marcasse⁵⁵⁵. Asimismo, la CARICOM dispuso de un Consejo de Relaciones Exteriores y Comunitarias (COFCOR por sus siglas en inglés), que en términos de RRII sería un agente relevante, al habersele atribuido la labor de promocionar e incentivar prácticas que coordinen la acción de la comunidad y de los Estados en el interior; así como de armonizar la concertación con las practicas exteriores de la comunidad en diversas áreas enfocadas al desarrollo.

Al analizar superficialmente el ejercicio del CARICOM, se detecta que esta comunidad ha atravesado por dos periodos diferenciados desde un punto de vista político-económico, siendo la mayoría de las iniciativas integradoras estructuradas sobre la base del tema económico, en las que se han priorizado las relaciones comerciales a partir de una construcción de confianza (Martínez Alfonso, 2013).

En la primera etapa, que data desde su constitución en 1973 hasta el fin de la Guerra Fría en 1989, el modelo estatista o semi-estatista que primó en la articulación de las prácticas fue el heredado de la CARIFTA; en una segunda etapa, la operativización de las prácticas ha estado caracterizada por el aperturismo y la adopción de la estrategia del regionalismo abierto desde los años 90 hasta la actualidad.

En su primera época, ya en el Art.44 del propio Tratado constitutivo de la Comunidad del Caribe (1973), se aludía a una preocupación por asegurar un control de la IED⁵⁵⁶, ya que el haber asociado la IED a las prácticas que habían realizado en la región compañías extranjeras y el poco impacto en términos de desarrollo que había sufrido la región, sirvió como impulso para optar por una estrategia en la que la protección de los recursos del área fuese señalada en el Tratado como un acto primordial. Indicando en el mismo que la “decisión última” sobre la propiedad y el uso de los recursos debía ser del Estado, ya que en última estancia éste era el agente encargado, tanto de potenciar el que el impacto de las inversiones fuese positivo, como al ser el responsable de dar respuesta a las demandas ciudadanas y por tanto, ser el agente que debía ejercer labor de regular la entrada de IED.

⁵⁵⁵ Véase http://www.caricom.org/jsp/community_organs/heads_of_government.jsp?menu=cob (Consulta realizada el día 10 de agosto de 2014).

⁵⁵⁶ El Art. 44 titulado *Ownership and control of Regional Resources* decía así:

1. Member States recognize the need for continuing inflows of extra-regional capital and the urgent necessity to promote development in the Less Developed Countries.
2. **Member States shall keep under review the question of ownership and control of their resources**, with a view to increasing the extent of national participation on their economies and working **towards the adoption as far as possible of a common policy on foreign investment** (CARIFTA, 1973) [Negrita propia].

Durante este periodo la CARICOM promovió una práctica política sub-regional incidente en la protección y la prudencia en la explotación de los RRNN por parte de los Estados miembros, a través de la aplicación de cierto control de la IED. Indicando que la IED receptada debía adoptar la modalidad de *Joint Ventures*. Esta postura limitaba, en principio, el que las inversiones fuesen controladas en su totalidad por multinacionales extranjeras⁵⁵⁷, atribuyendo a los Estados cierta capacidad para dirigir la operativización de las actividades, sin frenar la recepción de inversión.

Sin embargo, como organización intergubernamental la capacidad de decisión no estaba concentrada en el CARICOM y al poseer los Estados las competencias en última instancia, en los años 70 se evidenciaron quiebras ideacionales en las prácticas de los Estados respecto al trato que se le debía otorgar al capital extranjero en el interior de la comunidad. Unos Estados optaron por la promoción de prácticas políticas para alcanzar el desarrollo a partir de una mejora de condiciones en trato a la IED, asociándose al discurso desarrollista, incluso aunque se produjese crecimiento a costa de un incremento en la desigualdad; y otros optaron por continuar con las prácticas reguladoras por parte del Estado.⁵⁵⁸

El impacto que tuvieron las reformas adoptadas por el CARICOM respecto a la CARIFTA fueron leves y, al igual que sucedió en el resto de ALC, el endeudamiento se instauró como mecanismo por el cual los Estados adquirirían capitales para abordar gastos estructurales. La deuda se fue incrementando en las economías del CARICOM durante la década de los 80 y tan sólo los trece países miembros debían más de 9000 millones de dólares a la banca internacional. Por poner un ejemplo, Jamaica acumulaba más deuda que el máximo deudor de ALC en los años 80 (Villafañe & Masi, 2002, pág. 168).

Asimismo, otros sucesos son de gran relevancia en la adopción de políticas económicas en el decenio. Entre el año 80 y 90 se consolidaron progresivamente los procesos de independencia con orígenes en los 70, y al encontrarse estos nuevos Estados con nuevos procesos de reafirmación soberana, lo que despertó el que los EEUU se advinieron del

⁵⁵⁷ Este hecho se ve reflejado en el: Art. 59 del CARIFTA *Financial Assistance From More Developed Countries*:

1.a) facilitating, whether by means of private investment capital or otherwise, joint ventures in those States; b) 2. In furtherance of the objectives stated in paragraph I above, primary consideration should be given to ventures which are substantially owned and effectively controlled by nationals of Member States (CARIFTA, 1973).

⁵⁵⁸ Jamaica optó por un modelo denominado “Socialismo democrático”, compuesto por una economía mixta, con participación del sector público, privado y cooperativo, detentando el Estado y las cooperativas la propiedad (colapso en el año 70); Guyana con un sistema similar, nacionalizó y en 1976 el 80% aproximadamente de la economía pertenecía al Estado; Granada también se adhirió a la búsqueda del socialismo como meta. EEUU invadió en 1983 para acabar con el intento (ALADI & CEPAL, 2012).

peligro que representaba el auge nacionalista. Preocupación muy relevante, dado que se significó en dos acciones: por una parte la intervención en Grenada (1983); y por otra, y con mayor profundidad en términos estructurales de futuro, mediante el pronunciamiento formal de una práctica política destinada al Caribe, que se significó en la implementación de la ya citada ICC.

Esta iniciativa por parte de los EEUU evidenció un movimiento estratégico. Por una parte, al aunar en una misma disposición externa a las regiones de América Central y el Caribe⁵⁵⁹, mediante la aplicación de un marco hegemónico ideológico que incorporaba una filosofía y política de los EEUU en el propio plan; y por otra, al incidir en que las prácticas de los Estados del CARICOM abriesen sus fronteras y receptaran tanto la economía como la ideología externa. Todo ello sin atender a las estructuras subregionales de integración, ni características y particularidades propias de la comunidad. Lo que significaba la aplicación un único trato para toda la comunidad (Erisman, 1984).

Y es que la ICC tuvo como elemento articulador del programa la promoción, por parte de los EEUU, de un proceso institucionalizador de ideología en el área, ante el temor de que se acercasen a los postulados comunistas, principalmente, debido a los lazos fraternales del área con Cuba. Por lo cual, se incidió en que el mejor medio para alcanzar el desarrollo era la promoción de la IED norteamericana. Es decir, se articulaba la promoción de un modelo económico a semejanza de aquel que poseía el Estado norteamericano, pero se exigía la no restricción a la misma. Cuestión que si bien contó con amplia aceptación política, también recibió repulsa de parte de varios Ministros de política exterior de los países del CARICOM, ya que entendían que el ICC tendría un impacto fragmentador en el seno de la comunidad⁵⁶⁰ y, por lo tanto, sería contrario a la integración/unificación.

A este respecto señalar que, aun determinadas las prácticas por esta iniciativa, en el asunto de cohesión política en el interior de la comunidad, así como en la adopción de posturas comunes frente a terceros, la región sufrió avances significativos durante este periodo. Aunque no se debe obviar que en esta fase se evidenció la existencia de carencias en las estructuras económicas, al no estar articuladas para diseñar estrategias comunes en la

⁵⁵⁹ En este sentido indica Alzuragaray (2004) lo siguiente: "...la lógica de acciones de Reagan en la Cuenca del Caribe partía de la idea de que lo que estaba sucediendo en la subregión era parte esencial del conflicto global, y que por ser el traspatio norteamericano, era allí donde Estados Unidos tenía una correlación de fuerzas favorable y por tanto, mayores posibilidades de enfrentar al adversario" (Alzuragaray, 2004).

⁵⁶⁰ A este respecto se puede ver: *CARICOM Secretariat*, 1981. *Report of CARICOM Ministers of Foreign Affairs*, en Belice. Citado en Martínez Alfonso (2013).

promoción del desarrollo (Lorenzo, 1997). Señal de ello, fue la aparición en 1981 de una organización sub-integradora entre países miembros del CARICOM, con la firma del Tratado de Basseterre, constituyendo la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS por sus siglas en inglés), que posee entre sus logros la Unión Monetaria del Caribe Oriental (ECCU, por sus siglas en inglés). De hecho, se indica que ésta presenta mayores logros que la CARICOM, al poseer “...un tamaño y grado de desarrollo similares, una historia de servicios compartidos, una proximidad geográfica y social, y un sentido de comunidad” (Girvan, 2012, pág. 190).

En síntesis, en este periodo el CARICOM no logró implantar una política común respecto al trato referido a la IED como se pretendía en principio, y tampoco logró alcanzar una política común que promoviese los beneficios de adoptar un uso coordinado de los RRNN existentes⁵⁶¹. Señala al respecto Norman Girvan (2012), que esta fase del CARICOM se caracterizó por haber diseñado el proceso con un enfoque de “...integración para el desarrollo y la transformación”, en donde únicamente dos aspectos fueron medianamente alcanzados: la coordinación de políticas externas en las relaciones con otras instituciones⁵⁶²; y ciertas prácticas en el ámbito social.

3.4.5 La teología del Mercado en la Comunidad del Caribe.

Desde el año 1989, con la caída del muro de Berlín, el final de la Guerra Fría y, con ello, que aquel espacio conquistado por la política dejase un lugar más preponderante al económico, la CARICOM adoptó prácticas en donde el aspecto geoeconómico se situaba por encima de lo geopolítico (Villafañe & Masi, 2002, pág. 166).

Este contexto incidió en que se fraguase el rediseño institucional y el papel de la comunidad, a partir de dos acontecimientos que reclamaban un cambio de dirección en su seno: el Informe *Bourne* “El Desarrollo del Caribe para el año 200. Perspectivas y políticas” y la Declaración de *Gran Anse* en 1989.

⁵⁶¹ Señalar que la insolvencia institucional también aludió a uno de los procesos integradores que presentaba mayor recorrido histórico: la *West Indies Shipping Corporation*. Que estuvo en pie desde la existencia de la federación, que también se debilitó por la retirada de Estados al no obtener beneficios de ella. Lo que evidenció la ausencia de metodologías y prácticas redistributivas de la participación en las instituciones por parte de los Estados.

⁵⁶² Entre los acuerdos externos destacan la firma de *Lomé* (1975 presente desde la primera); la participación del CARICOM en la ICC con EEUU (1983); el pacto CARIB-CAN en (1986), en las que ejerció como único agente.

La declaración denominada *Gran Anse Declaration Programme for the Advance of the Integration Movement*, persiguió el transformar la unión de la comunidad profundizando la integración económica. Es decir, adoptando el mecanismo de priorizar la integración económica a la política⁵⁶³.

Para alcanzar dicha meta se formularon cambios en la política económica, en aras de impulsar a las economías y otorgar solvencia al proceso integrador. Entre las medidas que se promovieron destacan: a) el libre cambio de mercancías; b) libre intercambio de servicios; c) libre movilidad de personas; y la d) libre movilidad de capitales. Objetivos que, excepto la libre movilidad de personas, incidían en el cambio de perspectiva respecto a la estrategia ISI, al promover la reducción del papel del Estado en la economía, atribuyendo al mercado el actuar como principal gestor de los recursos.⁵⁶⁴

Esta atribución de gestor al mercado se fraguó mediante la intensificación de medidas de liberalización a finales de los 80, la ICC y la influencia de las IFI en los postulados. A partir de lo cual varios Estados adoptaron programas de ajuste estructural y las prácticas políticas se construyeron en torno al crecimiento y el comercio, y en particular las exportaciones durante el decenio de los años 90 (Martínez Alfonso, 2013).

El giro ideológico reflejado en la atribución al capital de labores implementadoras del desarrollo, se evidenciaron en la creciente adopción de TTBBII por parte de algunos Estados miembros. Ya durante los años 80 se habían firmado algunos AII, llegando a los 12 a principios de los años 90. Sin embargo, al igual que otros Estados de ALC y como parte de la incursión en la estrategia del regionalismo abierto, durante los años 90 se dispararon este tipo de acuerdos y se alcanzaron la osadía de 46 AII durante ese decenio. Y desde la entrada en el nuevo siglo se continuó con esta práctica firmando desde esa fecha otros 44 AII más (UNCTAD, 2014).

⁵⁶³ Decía así la Declaración del *Gran Anse*: “We are determined to work towards the establishment in the shortest possible time of a **single market and economy** for the Caribbean Community” [Negrita propia]. Véase Declaración en línea: http://www.caricom.org/jsp/communications/meetings_statements/grand_anse_declaration.jsp (Consulta realizada el 22 de junio de 2014).

⁵⁶⁴ Con el transcurso del decenio se apuntó a la necesidad de revisar el Tratado de Chaguaramas que estableció el CARICOM en 1973, y se adoptaron dos protocolos entre los años 1993 y 2000 para enmendar el tratado. Proceso que concluyó con la revisión del tratado el 5 de julio de 2001 en Nassau. Ante lo que se debe señalar que e en las reformas internas tuvieron una gran influencia los grupos de expertos del BM y el FMI (Koll, 2000).

La aplicación de políticas de apertura de los años 90, lejos de solucionar los problemas estructurales que poseía el área en cuestiones socioeconómicas, incidió en la desposesión de nuevo de los activos de los Estados miembros o nacionales, pasando de nuevo a las manos de los inversores.⁵⁶⁵

En general, se podría decir que la década de los 90 resultó en un incremento de la vulnerabilidad de las economías intrazona. Y, si por una parte la estrategia adoptada situó el énfasis en el modelo de desarrollo exportador, también dio inicio a que se reformularan nuevas propuestas regionales, dada la erosión y reducción de capacidades de los gobiernos para solventar los problemas domésticos.

El cambio total en el postulado ideológico del CARICOM se evidenció a la entrada del nuevo siglo, cuando al abordar la revisión del Tratado de Chaguaramas, en 2001, la reforma impulsada en el aspecto económico como estrategia para otorgar mayor competitividad al área a nivel global en el proceso integrador, se indicó el papel del mercado y las inversiones como “agente” necesario para alcanzar el desarrollo social.

“Convencidos de que el desarrollo industrial de la producción de bienes y servicios impulsado por el mercado es esencial para el desarrollo social y económico de los pueblos de la Comunidad”; “Deseosos además de establecer y mantener un entorno macroeconómico sólido y estable que favorezca las inversiones, inclusive a través de las fronteras, y la producción competitiva de bienes y servicios en la Comunidad” (CARICOM, 2001).

Es decir, con el objetivo de alcanzar una la convergencia regional, los diferentes tratados han pretendido ubicar a la CARICOM como una comunidad que ejerza una sola voz en las negociaciones con el exterior a través de sus dos órganos principales⁵⁶⁶, que aun operando de un modo intergubernamental, tratan de actuar unitariamente en sus relaciones exteriores. En este sentido, Roderick Rainford, ex secretario general de CARICOM, dijo:

⁵⁶⁵ Entre los Estados que mayor desembolso realizaron destacan las inversiones de los EEUU, siendo el actor dominante en IED en Surinam, Jamaica, Haití, Guayana, Belice, Bahamas (junto con Canadá), y Trinidad y Tobago (junto con Reino Unido); así como Canadá ha sido el Estado dominante en Bahamas (junto con EEUU), Barbados; Francia en St. Lucia, Stt Kitts-Nevis; Reino Unido en Trinidad y Tobago (junto con EEUU); y Holanda en Surinam. Contexto inversionista que indica que la CARICOM se ha visto influida en su economía por las economías de Europa, EEUU y Canadá, con un mínima e insignificante presencia de los Estados latinoamericanos en este periodo. Véase la base de datos sobre IED en UNCTAD: <http://unctadstat.unctad.org/EN/> (Consulta realizada el 22 de junio de 2014).

⁵⁶⁶ El Tratado de Chaguaramas revisado indica en su Art. 12 el funcionamiento de la institución. Se articula el funcionamiento de la Comunidad a través de dos órganos principales: la Conferencia de Jefes de Gobierno y el Consejo de Ministros de la Comunidad. (CARICOM, 2001).

“En el caso de CARICOM, una condición crucial de predisposición ha sido el sentido de afinidad y pertenencia mutua, que es en definitiva el “sentido de comunidad” que ha caracterizado a los pueblos que viven en los Estados miembros del Grupo... Es decir, el proceso de integración de CARICOM está efectivamente arraigado, aunque de manera tenue, en la cultura compartida de sus pueblos” (Citado en Blacket (2007, pág. 36)).

En el nuevo siglo han continuado ejerciendo el papel de vínculos relevantes en la política exterior y en IED en la región, los considerados socios clásicos, EEUU, Canadá y la UE. Sin embargo, se debe señalar que los países de América latina se han situado en un vínculo secundario, y en cuestiones políticas y económicas han ido ganando peso en la región. Con lo que incluso siendo los socios históricos el eje primario, el secundario, en el que se encuentra América Latina, se instaure con un peso muy relevante y en tendencia ascendente desde el comienzo del nuevo siglo⁵⁶⁷.

En definitiva, aunque se debe indicar que si bien el CARICOM está logrando ciertos avances⁵⁶⁸, en el aspecto económico se arrastran dificultades desde el inicio de la del proceso de sub-integración. Entre ellos destacan por encima de otros, la limitada capacidad de exportaciones y el tamaño de sus mercados, así como la alta exposición al impacto de situaciones externas. Es decir, debido a las particularidades señaladas, la región posee un alto grado de vulnerabilidad ante las grandes potencias y, además, a pesar de que el ejercicio unitario de la CARICOM en temas comerciales no ha alcanzado gran notoriedad, la organización está sufriendo un cambio en su ideología desarrollista actualmente. Y al igual que las OOSRR de la zona, se están elevando a primer plano los aspectos sociales. A este respecto, al igual que ha señalado la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, el proceso de integración regional que vienen gestionando los países del CARICOM vive un momento histórico al adaptar su modelo de desarrollo, colocando a la igualdad en el centro y renovando sus esfuerzos para afrontar colectivamente los desafíos medioambientales globales. (ICN Iberoamérica Central de Noticias, 2013). Por lo que de nuevo se desafía en la comunidad, en cierto modo, el papel que se debe ejercer en torno a la atribución de

⁵⁶⁷ En este sentido, por ejemplo destaca el caso de los países miembros de Petro-Caribe, en los que según indica Girvan (2012), ya se ha convertido en el principal proveedor de financiamiento superando al BID; el BM, la UE y USAID, a través de los Fondos Petro-Caribe. (Girvan, 2012).

⁵⁶⁸ En el aspecto económico ya en 2006 la construcción real del Mercado y Economía Común (CSME) del CARICOM comenzó su andadura. Han conseguido objetivos parciales con un funcionamiento del 64%, a 23 de enero de 2012 según la secretaria de CARICOM que presentó los siguientes avances: the Free Movement of Skills -sixty-six percent (66%); the Free Movement of Goods – eighty percent (80%); the Free Movement of Services – thirty seven percent (37%); The Movement of Capital – seventy-two percent (72%); the Right of Establishment – sixty-four percent (64%). Información disponible en línea: <http://www.csmeonline.org/en/about-joomla/item/137-csme-operating-at-about-64-level-of-compliance>. (Consulta realizada 6 de noviembre de 2013).

responsabilidades a la IED en la zona y el papel de agente regulador del Estado o la organización ante ellos.

3.4.6 Proceso de acercamiento a Latinoamérica.

Lo primero a este respecto es señalar que las raíces históricas de los Estados de la CARICOM divergen del proceso de construcción de América Latina, principalmente, por la no pertenencia de los primeros al Imperio ibérico, sino al británico en su mayoría. Sin embargo, en la actualidad el área vive un proceso de acercamiento paulatino e *increcento* a la región, en el que destacan diversos eventos, más allá de la inclusión del Caribe en la CEPAL al incluir en su denominación: Comisión Económica para América Latina, el Caribe en 1984.

Hay que señalar que la política exterior de la CARICOM ha tenido una orientación a los que son considerados sus socios tradicionales: los EEUU, Canadá y Reino Unido en primer lugar, así como las relaciones con el movimiento de los Países No Alineados (PNA); y en segundo lugar, a la región de América Latina. En este sentido, señala Martínez Alonso (2013), que las relaciones más relevantes del área han estado determinadas por razones históricas, como la colonización con Reino Unido; así como por la capacidad económica de agentes relevantes cercanos, al ser los mayores inversores los EEUU y Canadá. No obstante, también se destaca que la zona ha tenido lazos históricos con ALC: de conexión profunda con Cuba, por su cercanía y similitud en contexto geográfico; con Venezuela históricamente, debido a diversos acuerdos comerciales; y más recientemente con Brasil, mediante la implementación de relaciones diplomáticas.

Si bien durante las décadas de descolonización, años 60 y 70, las relaciones con la región latinoamericana estuvieron caracterizadas por una relativa desconexión política y económica, ya en el año 1973 esta relación dio un pequeño giro y se produjeron diversos acontecimientos que han significado la construcción de lazos regionales entre las áreas. El primer distanciamiento fue menguando paulatinamente a través de diversos eventos en los años 70: primeramente, la adhesión de Venezuela al Banco de Desarrollo del Caribe (CDB por sus siglas en inglés), y años más tarde Colombia (1974) y México (1982); la constitución de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), a la que se adhirieron varios Estados del Caribe⁵⁶⁹; y en el 1975 la constitución del Sistema Económico Latinoamericano

⁵⁶⁹ Véase en línea: <http://www.olade.org/> . Acuerdo de la OLADE mediante la firma del Convenio de Lima.
Véase documento completo en:

(SELA), que tenía la meta de promover estrategias comunes de “América Latina y el Caribe en materia económica, ante países, grupos de naciones, foros y organismos internacionales”⁵⁷⁰.

Ya en los 80, con la firma de los Acuerdos de San José se estableció una cooperación entre los gobiernos de México y Venezuela con el área del Caribe, por la que once Estados de la región ligaban su abastecimiento de petróleo a la región de América Latina.

Desde los años 90, y paralelamente al proceso de liberalización del comercio, se ha producido un incremento en las relaciones CARICOM-América Latina, significándose la implementación de espacios de diálogo y concertación política. En este sentido destacan: la firma del acuerdo multilateral con Venezuela en 1991, en el que se establece entre sus principios “la necesidad de acelerar el proceso de integración de América Latina y el Caribe”⁵⁷¹; la firma de un Plan de Acción con el Grupo de los Tres en 1993; el Acuerdo de Cooperación Básico con la Secretaría Permanente del Tratado General de la integración económica de Centroamérica; la expansión del CARICOM en 1994 por medio del CARIFORUM con la República Dominicana; la constitución de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) en 1994- poniendo fin a la idea del Gran Caribe surgida en 1992⁵⁷²; el acuerdo de cooperación con la Comunidad Andina de Fomento (CAF) en 1996; y diversos acuerdos de carácter bilateral con Estados pertenecientes a ALC (1998 Argentina; Cuba 2000-01-02 y otros). Todos hechos que evidencian un progresivo proceso de cercanía el área.

Antes de finalizar este epígrafe es relevante indicar, que la constitución de la AEC ha significado la construcción de un espacio fundamental para dar consistencia al dialogo y a la cooperación entre áreas, ya que actúa como la entidad que permite coordinar actuaciones de Estados del CARICOM y ALC⁵⁷³. En este sentido, con la entrada del nuevo milenio,

<http://www.olade.org/sites/default/files/reglamentos/Convenio%20de%20Lima%20%28Es%29%202006.pdf> (Consulta realizada el 22 de junio de 2014).

⁵⁷⁰ Pertenecen por parte del Caribe a la SELA: Bahamas, Barbados, Belice, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Surinam y Trinidad Tobago. Véase al respecto www.sela.org. (Consulta realizada el 22 de junio de 2014).

⁵⁷¹ Texto completo del Acuerdo disponible en línea: http://www.caricom.org/jsp/secretariat/legal_instruments/agreement_caricom_venezuela_principles.jsp?menu=secretariat. (Consulta realizada el 23 de septiembre de 2013).

⁵⁷² En este sentido es pertinente señalar que la concepción de Caribe manejada por el CARICOM, que está relacionada directamente con la experiencia histórica a partir de la economía de plantación, esclavitud, adhesión de pueblos extra-continetales de origen africano en su mayoría. Esto según Dr. Eric Williams. Primer Ministro de Trinidad.

⁵⁷³ Señala Girvan (2002) que el AEC posee una gran significación simbólica al establecer un marco de interacción de prácticas comunes entre las naciones del CARICOM y América Latina; y en otro sentido indica

desde el año 2000 hasta la actualidad -2015-, los cambios profundos en términos de institucionalidad a nivel regional han tenido sus efectos en las relaciones exteriores practicadas por la CARICOM. Ya que si bien la estrategia hacia el exterior de la Comunidad del Caribe ha mostrado predilección en su relación con la UE y EEUU históricamente, las nuevas agrupaciones surgidas en el espacio regional han contado con su participación; y así lo evidencia la estrategia externa que muestra el COFCOR⁵⁷⁴. Pero también de manera particular los Estados, mostrando la no conjunción institucional en su participación en el exterior, como evidencian las recientes membresías de Antigua y Barbuda, Dominica, San Kitts y Nevis, junto con la reciente solicitud de Santa Lucía para ingresar en el ALBA-TCP; la participación de 12 de los 15 Estados del CARICOM en Petro-Caribe; la anexión de Guyana y Surinam a UNASUR⁵⁷⁵; la pertinencia de la Guayana en el marco de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana⁵⁷⁶ (IIRSA); así como la participación de todos ellos en la gestación de la CELAC, y en numerosos acuerdos y proyectos a nivel regional. Eventos que indican un acercamiento efectivo de los Estados del Caribe a ALC en este último periodo (Martínez Alfonso, 2013, págs. 39-79).

4. Nuevo proceso de institucionalización normativa de la Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe. Posturas ambivalentes en los nuevos procesos de integración desde los años 90.

“La sola inferioridad de hecho en las riquezas materiales ó intelectuales no puede obligar a la nación más débil a depender de la más fuerte; pero podrá por otro

Andrés Serbin (1997) que el AEC actuó como proceso de concertación sub-regional frente al impulso del TLCAN y el ALCA en la época.

⁵⁷⁴ Esta estrategia es indicada en diversas declaraciones del COFCOR. Véanse las referencias a las relaciones externas del CARICOM en línea: http://caricom.org/jsp/pressreleases/press_releases_2014/pres123_14.jsp (Consulta realizada el 28 de junio de 2014).

⁵⁷⁵ Respecto a la adhesión a la UNASUR de Surinam, indicó en la IV Cumbre el Primer Ministro de Guyana Bharrat Jagdeo que: “Somos la única nación angloparlante y hemos sido históricamente percibidos como parte de la periferia de Sudamérica. Sin embargo, el hecho de que tengamos la Presidencia Pro-témpore de UNASUR demuestra algo profundo en la unión de nuestras naciones. **Esto demuestra que es una unión que no está construida sobre alianzas históricas sino en un conjunto de valores progresistas compartidos**” (Citado en Martínez Alfonso (2013, pág. 67)) [Negrita propia].

⁵⁷⁶ El proyecto IIRSA es una de las acciones de integración económica con mayor relevancia, al constituir el asentamiento de infraestructura vial, de energía y telecomunicaciones en la región de ALC, buscando implementar la interconectividad en el área entre los que se enmarcan los espacios de Guyana y Surinam, formando el denominado “escudo guyanés”. Este escudo constituye un área estratégica para la región ya que articula varios puertos y se sitúa en un espacio determinante por la cercanía de la Faja Petrolífera del Orinoco y la amazonia. (Martínez Alfonso, 2013).

título esta dar ocasión de voluntario consentimiento en la dependencia” (Taparelli, 1867, pág. 399).

4.1 Contexto regional. Ideas subyacentes al proceso evolutivo de la integración regional.

Históricamente, los Estados latinoamericanos se habían opuesto a la adopción de mecanismos que extrajesen de su territorio la capacidad de juzgar disputas ocurridas en su suelo nacional en cuestiones de inversiones, como fue evidenciado a lo largo del tiempo mediante la aparición de las doctrinas Drago y Calvo, o las negativas a participar en los diferentes convenios o tratados, como fue el caso del Convenio de Washington en 1965⁵⁷⁷- del que por cierto siguen sin ser miembros del Convenio los Estados de México, República Dominicana, Brasil, algunos Estados miembros del CARICOM (Antigua Barbuda, Belice, Dominica y Surinam)-⁵⁷⁸. Sin embargo, desde finales de los 80 este posicionamiento se vio alterado- como se ha reflejado en el epígrafe anterior-, mediante la adopción, por parte de la región, de la estrategia de desarrollo denominada regionalismo abierto. Estrategia que a la par que promovía la apertura comercial, significaba un ejercicio impulsor de la aceptación de practicar la resolución de disputas sobre inversiones en tribunales externos al suelo nacional.

A este respecto, indica María Herz (2003), que:

“Esa apertura fue acompañada del diseño de instrumentos jurídicos acordes a los objetivos perseguidos y, particularmente en materia de inversiones, se caracterizó por un abandono de la función ordenadora del Estado y sustitución por una política de atracción casi siempre indiscriminada de capitales extranjeros. Siguiendo las recetas institucionales internacionales, el término “inversión extranjera” se transformó en sinónimo de crecimiento económico y desarrollo y para conseguirlo los Estados recurrieron a soluciones unilaterales y bilaterales, ora modificando la legislación nacional, ora suscribiendo Tratados Bilaterales de Promoción y Protección de Inversiones Extranjeras” (Herz, 2003, pág. 3).

En este sentido hay que señalar, que ya con anterioridad a la intensa promoción de la práctica del arbitraje en los años 90, en la región se había producido un pequeño auge de

⁵⁷⁷ Es relevante indicar que dos Estados de ALC habían firmado y ratificado la Convención de Nueva York. (1958), Ecuador (1962) y México (1971), que reconocía la ejecución de laudos arbitrales externos al Estado.

⁵⁷⁸ Véase al respecto: “Lista de Estados contratantes y signatarios del Convenio de Washington” a 11 de Abril de 2014, disponible en línea: <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/QUIENESSOMOS/0,,contentMDK:20193455~menuPK:418789~pagePK:64057863~piPK:242674~theSitePK:263702,00.html> (Consulta realizada el 18 de junio de 2014).

reconocimiento indicando la pertinencia de su ejecución tras el final de la IIGM. De hecho, dos Estados de la región ya habían firmado la Convención de Nueva York a principios de los 70- Ecuador (1962) y México (1971)-; y a mediados de los 70 más Estados latinoamericanos se adhirieron a la Convención de Panamá sobre arbitraje comercial internacional (1975)- impulsada ésta por la OEA- . Resultando llamativas estas acciones, pues no era habitual el reconocimiento del juicio externo en cuestiones comerciales en esa época en la región y sin embargo, antes de llegar a los 80 ya habían firmado ocho Estados: Chile y Panamá en 1976, Uruguay y Paraguay en 1977, México y Costa Rica en 1978 y Honduras en 1979 (Hamilton, 2009).

Señala Hamilton (2009) a este respecto, que el ejercicio promotor del reconocimiento arbitral estuvo amparado en los discursos promovidos por los Estados inversores. Los cuales, bajo el argumento de que los tribunales internos de los Estados receptores de inversión, no eran imparciales en las disputas con las EETNN en los Estados latinoamericanos. Señalaban que el reconocimiento de un tribunal internacional fuera de las fronteras del Estado receptor de inversión, otorgaría seguridad a los inversores de las partes contratantes y causaría que los caudales de inversión se incrementasen y, dado el contexto de deuda en el que se encontraba la región, era recomendable ejecutar esa acción para conseguir financiación.

En este contexto, tras el leve acercamiento de la región a estos postulados inicialmente, el proceso de reconocimiento del arbitrio externo continuó mediante un incremento en la membresía de los Estados latinoamericanos a la Convención de Nueva York. Lo cual significó que en los años 90 catorce Estados habían ratificado la misma, siendo los últimos Honduras en 2001, Brasil y República Dominicana en 2002, y Nicaragua en 2003 (Hamilton, 2009).

El proceso de reconocimiento del arbitrio externo, continuó con la aparición de las nuevas leyes de arbitraje que impulsó la publicación de la Ley Modelo de la UNCITRAL sobre arbitraje internacional, adoptada por varios Estados mediante cambios legislativos (los Estados de México(1993), Colombia(1989/91/93/96/98), Guatemala (1995), Perú (1996), Brasil(1996) , Bolivia (1997), Costa Rica (1997) , Ecuador (1997), Venezuela (1998) y Panamá (1999)), en donde únicamente dos Estados (Guatemala y Venezuela) optaron por la adopción a semejanza Ley Modelo en su legislación, optando el resto de Estados por institucionalizar la Ley modelo mediante la implantación de un modelo híbrido (Galíndez, 2014).

En el contexto ambivalente y de disputa sobre la pertinencia de ceder o no capacidades para la ejecución del arbitrio externo, hay que destacar que, en lo relevante a la cesión de competencias, ninguno de estos reconocimientos al arbitraje incidía en la cuestión soberana profundamente. Puesto que, aunque se hubiesen reconocido las convenciones o se incluyesen en los propios ordenamientos jurídicos de los Estados las disposiciones que aludían al reconocimiento del arbitrio externo, para proceder al ejercicio del laudo se requería del consentimiento del Estado caso por caso. Requisito para que *de facto* actuase la externalización del juicio en la resolución de disputas. Cuestión que revelaba que, en última instancia, el Estado se guardaba la capacidad de decidir el no someterse al arbitrio externo y actuar de acuerdo a los tribunales internos, si así lo desease.

Ejemplo palpable de la importancia de este requisito se observa en el funcionamiento del organismo que en cuestiones de arbitraje sobre disputas de inversiones ha resuelto mayor cantidad de casos: el CIADI. Y es que como ya se indicó en el Capítulo III, haber ratificado la Convención del CIADI no significa el sometimiento automático a la jurisdicción.

Por esta causa, en aras de solventar esta falla en la obligación a someter las disputas a arbitrio, se instituyó la necesidad de promover la adopción de un mecanismo el cual implicase la cesión, por parte de los Estados firmantes, de la competencia de juzgar disputas en temas de IED a un tribunal externo. Dando respuesta a este requerimiento se instituyó como el mecanismo adecuado para ello: la firma de un tratado que especificase en su articulado que en cuestiones de disputas inversores-Estado ésta sería juzgada mediante el procedimiento que se indicase en el mismo⁵⁷⁹.

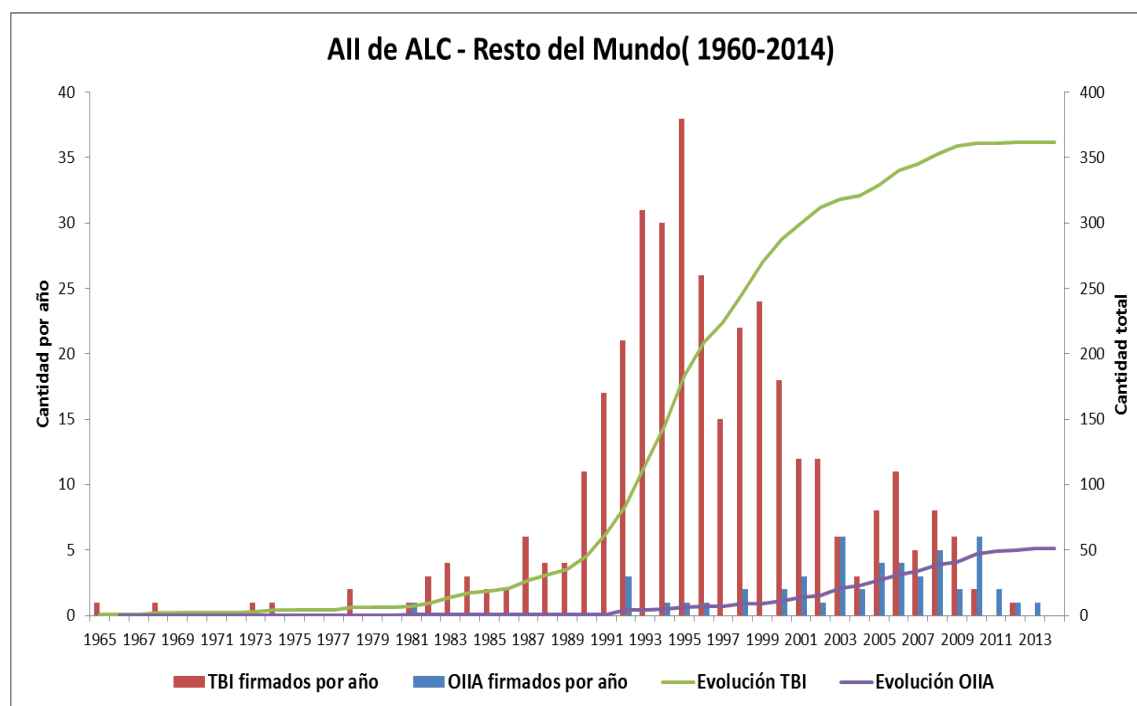
Ante este contexto, se mostró como respuesta idónea la promoción de la firma de AII. Los cuales, poco a poco, se han ido situando como los mecanismos de consentimiento de facto por parte de los Estados de tribunales externos en caso de disputa inversor-Estado.

A este respecto cabe señalar que, si se analiza por ejemplo el Convenio de Washington (1965), se detecta como según los Arts. 53 y 54, **los Estados miembros que brinden su consentimiento mediante un TBI, se obligan a la aplicación y ejecución inmediata del laudo arbitral final que será operativo -sin exequátur- ni revisión o cuestionamiento alguno por parte de los tribunales locales** (CIADI, 2006). De ahí la transcendencia y relevancia en cuestión de competencias de la firma de AII.

⁵⁷⁹ Véase Capítulo III. Punto 6.2.

A partir de la implicación señalada en la firma de los AII, es cuando al revisar la evolución de los mismos en la región de ALC se evidencia que una modalidad, los TTBBII, en el periodo 1990-2000 superaron con creces a cualquier otro tipo de AII firmados por Estados miembros.

Gráfica 4: Evolución de los Acuerdos Internacionales de Inversión suscritos por ALC con el Resto del Mundo.



Fuente: De elaboración propia a partir de datos de UNCTAD. <http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA>. (Consulta realizada el 23 de julio de 2014).

Es un hecho notorio que, con el incremento exponencial en los años 90 de TTBBII y como parte de la estrategia denominada regionalismo abierto, se otorgaba capacidad a las empresas para demandar a los Estados ante prácticas que considerasen dañinas⁵⁸⁰. Puesto que, aunque se tratase en principio de un pacto entre Estados, los denunciantes son las empresas, y teniendo en cuenta que los Estados de ALC pasaban a ser mayoritariamente receptores de IED, más que Estados inversores (CEPAL, 2013), mediante la institucionalización de los tratados se concedía derecho de denuncia y arbitrio externo al territorio donde operaban a las Empresas Transnacionales.

La cesión de arbitrio indicada ha provocado que en la época reciente América Latina se haya visto sacudida por una creciente carga de demandas por parte de inversores extranjeros. Las cuales han actuado de ese modo ante la detección de prácticas políticas

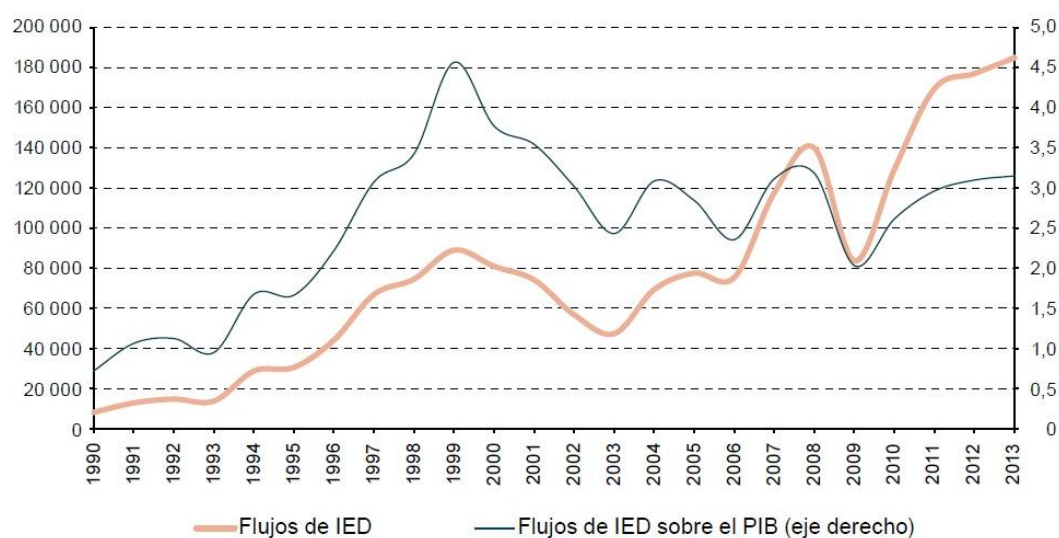
⁵⁸⁰ Véase Capítulo III.

soberanas de los Estados- como la renacionalización de bienes o alteraciones de normativas reguladoras-, que de algún modo han incidido en el desempeño de su actividad comercial.

Ha sido en este escenario, en el que incluso Estados como México, que no forma parte del CIADI, se ha visto entrometido en disputas referidas al cómo se ha ejecutado el arbitrio, señalando los excesos de competencias que se han otorgado a tribunales externos, al firmar un AII- en este caso derivados de la firma del TCLAN-⁵⁸¹.

Y es que la evolución de las denuncias contra los Estados de ALC ha ido en incremento. De hecho, a 1 de junio de 2013, de un total de 262 casos en el mundo, la región de ALC concentraba el 30% de los mismos y, además, de los casos que había pendientes (167) ALC era parte en el 43'7%. De ello que diversos gobiernos de ALC hayan indicado la no conformidad con la normativa establecida y algunos hayan expresado su negativa a firmar más TTBBII con las cláusulas de arbitrio. Pues, los que se sienten perjudicados, aluden a la injerencia en su práctica de gobierno el hecho de ser juzgados por tribunales externos, cuando ejercen su labor de gobierno.⁵⁸²

Gráfica 5: América Latina y el Caribe: entradas de IED y entradas de IED como proporción del PIB (1990-2013) (En millones de dólares corrientes y porcentajes del PIB).



Fuente: (CEPAL, 2013, pág. 9).

⁵⁸¹ Véase estudio de casos ante el CIADI de México en Jiménez (2008, págs. 446-450).

⁵⁸² Hay que señalar que algunos Estados de ALC no son los únicos actores que consideran relevante la no firma de TTBBII, o la inclusión de la cláusula de arbitrio en los tratados, y de hecho hay más Estados que así lo indican y han expresado su renuncia a esta práctica. Véase punto 7.2. de este documento.

Pero aun con la problemática indicada entre inversores y gobiernos, los datos revelan que la IED ha sido notable y creciente, resultado de las interacciones regionales con el exterior. Pues si bien se indicó que los TTBBII eran requisito necesario y solución a la falta de liquidez en los años 90, tras lo vagos resultados que ofreció esta práctica a la región en términos de desigualdad y desarrollo, y aún con el giro dado en términos de apertura por algunos Estados, significándose cierta retracción al aperturismo y a la firma de TTBBII- vislumbrado en ALC desde mediados del 2000-, la región está viviendo una época rica en inversiones y, como indica la CEPAL (2013), aunque la IED se redujese en la región un 2,5% en 2013, se significa un aumento notable desde 1990 y se observa que la economía regional está ganando peso, ya que se ha “estabilizado” su porcentaje sobre el PIB en torno al 3%.

4.1.1 Impacto de la práctica en los procesos de integración.

La cuestión que se plantea ante la presencia del contexto señalado a partir de los 90, es desvelar cómo ha impactado éste en la configuración de los nuevos procesos de integración regional aparecidos (MERCOSUR, ALBA, AP, UNASUR, CELAC); y en qué grado esta práctica ha determinado, tanto la IED receptada, como el modo de integración, la estructura, las prácticas de los entes y, por ende, la evolución del proceso de integración/unificación en su conjunto.

A este respecto cabe señalar, primeramente, que la firma de AII por parte de un Estado miembro no es, únicamente, un asunto particular. Se señala que la firma de un AII y el consecuente impacto en el trato que se otorga a la IED por parte de un Estado miembro de un proceso integrador, incide tanto en los aspectos externos como internos del propio proceso.

En el ámbito externo, el AII influye en la propia regulación que se acuerda con el Estado no miembro del pacto integrador. Por ejemplo, un elemento que tendrá relevancia será el grado de desarrollo del Estado externo, ya que ante una posible disputa entre Estados el grado de desarrollo de las partes influirá, en tanto en cuanto, si se realiza el pacto entre Estados con un mismo nivel de desarrollo, se entiende que la reciprocidad a la hora de aplicar mecanismos de arbitrio sería mayor que si existen asimetrías entre las partes. Y debido a que existe una mayor probabilidad de que se produzcan inversiones con empresas de Estados desarrollados en ALC, existirá un mayor condicionamiento e implicará dificultad para solventar disputas, dadas las circunstancias de poder asimétricas. Causas que

también pueden condicionar el ejercicio del Estado receptor y, por lo tanto, el proceso integrador (Dorbecker, 2002).

En el ámbito interno al grupo, se indica que al contener habitualmente los AII cláusulas como el TNMF, existe la posibilidad de que éstas contradigan las propias cláusulas internas de un tratado de integración, y las disputas en torno a las condiciones internas de un AIR podrían condicionar el propio proceso de integración⁵⁸³.

Dicho lo cual, se presenta pertinente profundizar y analizar en cómo este factor ha incidido en la evolución de los procesos de integración/unificación surgidos tras los años 90, ya que el trato que se le ha otorgado a la IED, en este periodo, se ha instituido como uno de los debates relevantes en los procesos de concertación política. De hecho, se evidencian diversas posturas por parte de las organizaciones subregionales. Pero incluso más, dado que ante estas divergencias ideológicas presentes en los postulados de los Estados, divididos entre gobiernos de izquierda y derecha, algunos autores indican que las diferentes posturas políticas no han influido determinadamente en los flujos de inversión (Candelario, Lissette, Cevallos, & Solorzano, 2013). Lo que otorga una mayor relevancia a la práctica político-económica e impacto de la IED en la región en términos de poder.

4.2 El Mercado Común del Sur: del mercado a la política.

4.2.1 Contextualización del origen del Mercado Común del Sur: el MERCOSUR.

Ante la falta de eficacia de la ALADI en su marco de acción, y debido al espacio que otorgaba la asociación para la adopción de tratados bilaterales o subregionales, que permitía que Estados particulares adoptasen modelos subregionales que se acoplasen mejor a su demanda particular, Argentina y Brasil, siendo Estados contiguos y con capacidades complementarias, se propusieron el establecer una relación estructurada a partir de acuerdos concretos (Rocha, 2004).

Fue en 1985 cuando se constató el inicio de esta relación a través de la Declaración de Iguazú, suscrita por los presidentes Alfonsín y Sarney, mediante la cual se rubricaba el

⁵⁸³ Esto ha ocurrido con México y la firma del TLCAN, así como en la cláusula de TNMF inscrita en el TM80 del ALADI, y se señala que podría ser causa de la no ratificación del Protocolo de Buenos Aires sobre Promoción de Protección de Inversiones Provenientes de Estados No partes en el MERCOSUR, ya que éste incluía en su Art. 1: “Los Estados Partes se comprometen a otorgar a las inversiones realizadas por inversores de Terceros Estados un tratamiento no más favorable que el que se establece en el presente Protocolo” (MERCOSUR, 1994a). Por lo que establece los estándares máximos que podrían realizar los Estados con Estados extrazona, y delimita capacidad de negociación (Herz, 2003).

inicio a una asociación- muestra de ello fue la adopción de 17 protocolos y una declaración conjunta en términos de seguridad sobre política nuclear-. Declaración que constituyó el impulso a una experiencia de cooperación conjunta, que ha ido añadiendo componentes y significándose como un proceso integral, no sólo económico.

Cuatro años más tarde del primer encuentro, en 1989 y significándose la evolución institucional, se implementó la cooperación bilateral mediante la suscripción de nuevos acuerdos por parte de los presidentes de los respectivos Estados- Menen y Sarney-. Se propusieron establecer un espacio económico común, mediante la adopción del Tratado de Integración Cooperación y Desarrollo entre la República Argentina y la República Federativa de Brasil, en un plazo de 10 años. Lo que suponía sellar la ratificación del Programa de Integración y Cooperación Económica (PICE) que los dos países suscribieron en 1986, en donde se habían establecido como principios operativos: la gradualidad, flexibilidad, equilibrio y simetría. Todo ello con el objetivo de instituir un marco de acción conjunta.

Percibiendo el impulso implementador de las prácticas que establecían las relaciones entre Brasil y Argentina, los Estados de Uruguay y Paraguay manifestaron su pretensión de participar de una manera activa en el proyecto, motivados principalmente por el alto volumen de relaciones comerciales de éstos con sus vecinos y visualizando el proyecto como una oportunidad de integración, en una alianza que entendían fundamental para sus economías. El que Argentina y Brasil aceptasen devino en la constitución del MERCOSUR, el 26 de marzo de 1991, mediante la adopción del Tratado de Asunción.

En un comienzo, el objetivo primordial fue acelerar el desarrollo económico con justicia social, meta precursora en la que se debían apoyar las diversas medidas que fuesen adoptadas dentro del marco operativo del MERCOSUR. En el Tratado de Asunción ya se incluyeron fechas concretas para alcanzar diversos objetivos. Por lo que a partir de la asunción de que el camino propicio para alcanzar las metas era la integración económica, el grupo se propuso lograr establecer un Mercado Común antes del 31 de Diciembre de 1994 entre Argentina y Brasil, y un año más tarde se debían incorporar al mismo Paraguay y Uruguay.

En un contexto en el que, a finales de los 80 y principios de los 90, la transformación política y económica de los Estados se caracterizó por el seguimiento a las políticas de

Consenso de Washington, junto con la adopción del regionalismo abierto como estrategia en ALC, el MERCOSUR comenzó su andadura con cuatro líneas esenciales de acción:

- 1ª) La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos;
- 2ª) la adopción de un Arancel Exterior Común y una política comercial común;
- 3ª) una coordinación de la política macroeconómica y sectorial, con el objetivo de promocionar condiciones de igualdad y competencia;
- 4ª) y el propósito de una armonización entre legislaciones de los Estados miembros (Torrent, 2001).

Para alcanzar las metas propuestas, el MERCOSUR ha tratado de otorgar cierta solidez institucional y un grado mayor de cohesión interna y externa al grupo. Para lo cual impulsó la construcción de un sistema orgánico, a través de la promoción de mecanismos y normas capaces de abordar y solventar las diversas controversias que pudiesen surgir entre las partes debido a la práctica.

Estos procesos de transformación se han ido implementando en diversas fases:

Fase 1: (1991-1994): Periodo determinado por el asentamiento de la constitución del grupo y la adopción del Protocolo de Brasilia en 1991. El cual dotaba a la institución de un sistema de solución de controversias interno, sujeto a tres mecanismos: la negociación, la conciliación y el arbitraje (con capacidad de emitir laudos, sin posibilidad de recurso, a través de un Tribunal Arbitral).

Fase 2: (1994-1998): Marcada por la adopción del Protocolo de Ouro Preto en diciembre de 1994. El cual daba comienzo a un periodo en el que el proceso de integración adoptaba una estructura institucional (Art. 18 del Tratado de Asunción), y se dotaba de un atributo fundamental con capacidad decisoria al mismo, a través de su Art. 2, citando que: **“Son órganos con capacidad decisoria, de naturaleza intergubernamental: el Consejo del Mercado Común, el Grupo Mercado Común y la Comisión de Comercio del Mercosur”** (MERCOSUR, 1994a)⁵⁸⁴ **[Negrita propia]**.

⁵⁸⁴ Esta fase vino determinada por la adopción de políticas aperturistas dentro de la estrategia del regionalismo abierto, que determinaron el otorgar la responsabilidad de asignación de recursos al mercado. Según Daniel Chudnovsky y Andrés López (2001) las políticas económicas de *Market friendly* que practicó el MERCOSUR se entendía conllevarían impactos positivos en la región receptora, aunque el débil impacto que sufrió el MERCOSUR durante sus primeros años indicó de manera notable que la Globalización es un fenómeno negativo para los Estados en desarrollo, ya que la integración en el sistema se produce de forma asimétrica (Chudnovsky & Lopez, 2001).

Fase 3: (1998-2001): Determinada ésta por la crisis Argentina, en el periodo tuvo gran influencia el acceso al poder de los presidentes Néstor Kirchner en Argentina y Lula da Silva en Brasil, pues su papel supuso que el MERCOSUR diese un giro en sus postulados y tratase de combinar las ideas neoliberales, que habían determinado sus prácticas, con un cierto encumbramiento del desarrollismo social. Contexto en el que la política se apoderaba del discurso tratando de profundizar en el proceso de integración política y social del grupo.⁵⁸⁵

Fase 4: (2004-2010): El discurso se transforma en acciones concretas. La entrada en vigor del Protocolo de Olivos, que incide en los mecanismos de resolución de conflictos entre los Estado parte, da como resultado la creación del Parlamento del Mercosur en 2006⁵⁸⁶. Órgano que es el reflejo de que la dimensión social pasase a ser referente en el grupo. De hecho, este proceso se constató mediante dos acciones concretas: una, el Plan de Trabajo del MERCOSUR desde 2004 hasta 2006, que prestaba atención especial al Mercosur Social y al Mercosur institucional; y una segunda, la aprobación de primer instrumento financiero del bloque: el FOCEM (Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR), que tiene como objetivo: “...financiar proyectos en beneficio de las economías menores del MERCOSUR”. Operativo desde 2006, constituye el primer instrumento financiero del bloque con el objetivo de contribuir a la reducción de las asimetrías” (MERCOSUR, 2006).

Fase 5: (2010- actualidad): Este reciente periodo ha estado determinado por la exclusión de Paraguay, mediante la aplicación del grupo de la *cláusula democrática* (I Protocolo de Ushuaia)⁵⁸⁷, así como por la incorporación de Venezuela como país

⁵⁸⁵ En cierto modo el giro se evidenció con la adopción del Primer Protocolo de Ushuaia (1998), en el que se promovió el origen de la cláusula democrática en el bloque. Esta cláusula ha sido utilizada en el caso de Paraguay el 29 de Junio de 2012, que fue readmitido el 12 de julio de 2013 tras la celebración de elecciones. Véase al respecto resolución de readmisión en línea: http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/resoluciones/2013/12/mrree_711.pdf (Consulta realizada el 12 de julio de 2014).

⁵⁸⁶ El Parlamento del MERCOSUR fue constituido el 06 de Diciembre 2006 como sustituto de la Comisión Parlamentaria Conjunta, y es el órgano, por excelencia, representativo de los intereses de los ciudadanos de los Estados Partes. Véase en línea: <http://www.parlamentodelmercosur.org> (Consulta realizada el día 18 de noviembre de 2013).

⁵⁸⁷ Del presupuesto total del FOCEM destinado a promover la convergencia estructural, cohesión social, competitividad, la mayor parte es destinada especialmente a las economías menores. Por lo que en Junio de 2013 el 90% del gasto total estaba destinado a proyecto en Paraguay y Uruguay. Para más información Véase al respecto en línea: http://www.mercosur.int/innovaportal/file/5601/1/cmc_2013_acta01_ane10_es_di04_-_informe_semestral_crpm_al_cmc_-_final_completo_con_informe_ca.pdf (Consulta realizada el día 18 de noviembre de 2013). Asimismo, para ampliar información sobre el organismo véase en línea: http://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=385 (Consulta realizada el día 18 de noviembre de 2013).

miembro del Mercosur y el Estado Plurinacional de Bolivia en 2013 (en proceso de ratificación⁵⁸⁹), incrementándose el paso a lo que algunos autores señalan como regionalismo post-liberal en el bloque (Sanahuja, 2008-2009)⁵⁹⁰.

Asimismo, en este periodo destaca en sentido cohesionador respecto a la IED, mediante la ratificación del Protocolo Modificador del Protocolo de Olivos - conocido como Olivos II⁵⁹¹-, que ha supuesto notoriedad en el esquema de integración, al cohesionar el grupo y promover un proceso de articulación de mecanismos de arbitrio para solventar disputas entre los Estados parte.

En términos de transformación, desde la primera fase hasta la actual (2015), es relevante indicar cómo el pilar impulsor que dio sentido a la constitución del mismo: la integración económica, ha ido incluyendo en su agenda elementos que aluden a componentes sociales, políticos e ideológicos⁵⁹². Suponiendo esto el instituir un proceso integral de integración.

A este respecto, se indica que la agenda post-liberal ha incidido en la corriente social impulsada, a partir de la victoria de partidos políticos de izquierda en los diferentes Estados componentes del MERCOSUR. Cuestión que ha tildado el nuevo panorama de un

⁵⁸⁸ Este hecho revela una de las debilidades estructurales del MERCOSUR. En especial, indicar que la no participación en la toma de decisiones de Paraguay durante su periodo de suspensión ha planteado de nuevo el debate en torno a la soberanía interna, en especial por la exigencia a ejercer la revisión de todos los acuerdos que se hayan ejecutado durante su ausencia. Haciendo alusión al Art. 37 del Protocolo Ouro Preto, que indica que "...las decisiones de los órganos del Mercosur serán tomadas por consenso y con la presencia de todos los Estados Partes", de una modalidad intergubernamental (MERCOSUR, 1994a). Paraguay ha centrado su crítica en torno a la ratificación del Protocolo de Montevideo sobre el compromiso con la democracia en el MERCOSUR (Ushuaia II) (Decisión 27/11), al calificar las medidas incluidas en el mismo de excesivas. Cuestión que más allá de evidenciar el quiebre en su compromiso con el régimen democrático, representa un problema relevante en cuanto al compromiso de los Estados con el grupo, evidenciando disputas en un marco de soberanía en el MERCOSUR.

⁵⁸⁹ Al respecto véase información disponible en línea: http://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=3862&site=1&channel=secretaria&seccion=2 (Consulta realizada el 24 de julio de 2014).

⁵⁹⁰ Los cancilleres de los países miembros firmaron el 16 de junio de 2006, en Buenos Aires, el Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR, que fue formalizado el 4 de julio con la aprobación de los presidentes en cumbre extraordinaria del MERCOSUR en Caracas.

⁵⁹¹ Véase a constatación de la entrada en vigor en Uruguay: http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/proyectos/2012/07/mrree_1867.pdf (Consulta realizada el día 18 de junio de 2014); y la ratificación de Paraguay donde se indica que todos los miembros la han ratificado: http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/resoluciones/2013/12/mrree_711.pdf (Consulta realizada el día 18 de junio de 2014); así como la ratificación de Venezuela: http://www.mercosur.int/msweb/portal/%20intermediario/Normas/acordos/%20es/47_ACTA_AdhesionVenezuela_ProModifOlivos_%20ES.pdf (Consulta realizada el 13 de junio de 2014).

⁵⁹² En cuestiones políticas señalar la firma del Tratado de Ushuaia en 1998, iniciativa que fue reforzada en el año 2011 por medio del II Protocolo de Ushuaia en 2011; sumado a la creación del Parlamento Mercosur en 2005, la institucionalización se produjo a través del bloque incorporando el Instituto de Políticas Públicas y Derechos Humanos en 2009. El aspecto social como tema preocupante para la agenda de toda la región, se ha sumado a la agenda del MERCOSUR con fuerza. Como se ha plasmado en los acuerdos más relevantes entre los que destacan las Reuniones Especializadas sobre: Ciencia y Tecnología (1992); el MERCOSUR Social (2000); Cooperativas (2001); Cinematografía y Audiovisuales (2004); Agricultura Familiar (2004); Cultural (2007) y Educativo (2011).

progresismo⁵⁹³ en el sistema - a excepción de Paraguay-, ya que las políticas que se promovieron en los 90 de apertura total están siendo cuestionadas “levemente” desde mediados del decenio del 2000 en la región (Sanahuja J. A., 2008-2009; Sanahuja J. A., 2012; Sanahuja J. A., 2013), y este esquema de integración es buena muestra de ello.

Por ultimo indicar que, analizando los logros y retos pendientes, se observa que el bloque no ha alcanzado sus objetivos de establecer una ZLC, una Unión Aduanera o el Mercado Común. La ZLC posee grietas y se percibe una cierta reserva de corte nacionalista en las aptitudes de protección por parte de los Estados parte; en lo respecta a la Unión Aduanera, ésta no ha sido alcanzada, por lo que en 2010 se planteó retrasar su logro a 2019- si bien es verdad que se ha logrado en un alto porcentaje (desde el año 2000 el 95% del comercio interno del MERCOSUR se realiza sin barreras arancelarias)-; y de igual forma, el objetivo de instaurar el Mercado Común se encuentra en una situación similar a la ZLC, no se instaura y posee excepciones no fijadas.

4.2.2 El Mercado Común del Sur y la Inversión Extranjera **Directa: un propósito normativo en el trato a la práctica.**

Una de las metas en los inicios el bloque MERCOSUR fue potenciar la recepción de IED. De hecho, en términos regionales, la importancia del grupo es muy relevante, ya que promedia cerca de un 40% del total en ALC desde 1990 hasta 2013⁵⁹⁴.

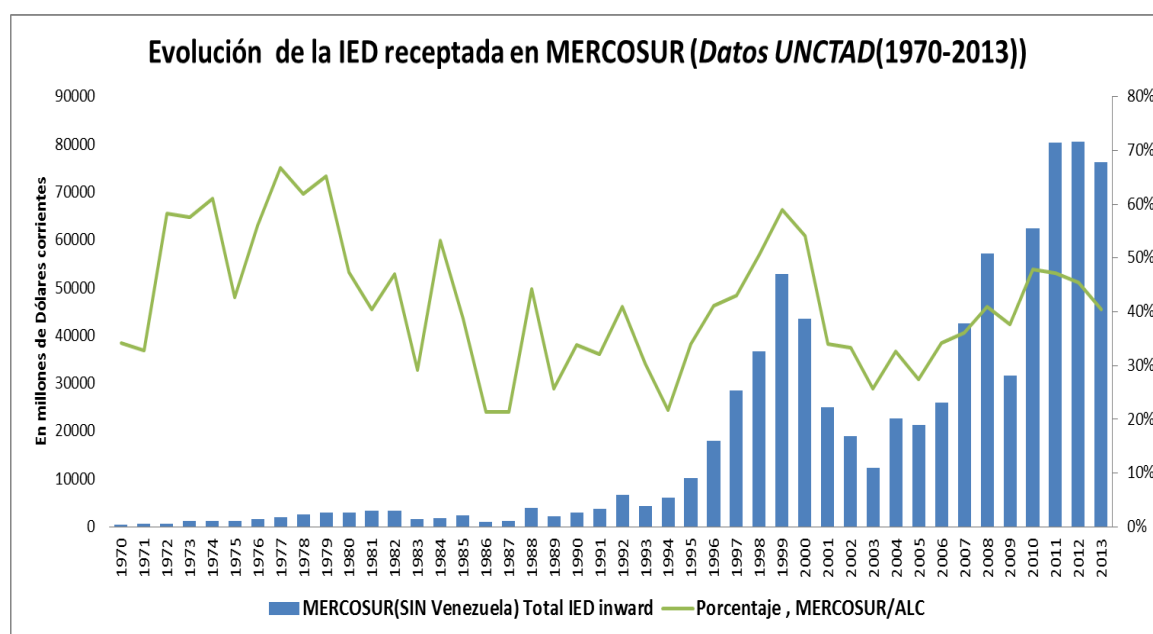
Sin embargo, desde su constitución, y aun a pesar de que las políticas de apertura fueron adoptadas en sus inicios, las tasas de inversión no crecieron significativamente e incluso se redujeron en el caso de Brasil durante el primer decenio (Chudnovsky & Lopez, 2001). Además de este hecho, señalan Chudnovsky y Lopez (2001) que la entrada de IED no proveyó al área de los efectos augurados por el discurso aperturista; así como un estudio realizado por Bittencourt, Domingo y Reig (2006) indica que la IED en el grupo MERCOSUR tras la apertura no ha sido un elemento significativo de crecimiento económico, ni de desarrollo. Es decir, el impacto de la constitución del MERCOSUR como grupo no supuso una alteración en el devenir del grupo en términos de IED, según estos estudios.

⁵⁹³ Se considera progresistas a aquellos gobiernos que se muestran críticos por medio del discurso y acciones persiguiendo el reformular las políticas “neo-liberales” que prevalecieron en la región desde los años 90.

⁵⁹⁴ Según datos de UNCTAD.STATS. Posibilidad de consultar en línea en: <http://unctadstat.unctad.org/EN/> (Consulta realizada el 23 de agosto de 2014).

La constitución del grupo tampoco supuso una homogeneidad en la recepción de IED por los Estados miembros, al concentrarse mayoritariamente en dos de los Estados: Brasil y Argentina. Además, la recepción del grupo fue muy heterogénea en cuanto al origen inversor, siendo los Estados de Paraguay y Uruguay receptores de inversión intra-ALC en su mayoría, y concentrándose en Argentina y Brasil la IED extra-regional. Es en este sentido, en donde al analizar la evolución del bloque como tal, se detecta que ha habido una ausencia de concertación política para adoptar una política común respecto a la IED. Y los actores han actuado unilateralmente.

Gráfica 6: Evolución de la IED receptada por MERCOSUR (1970-2013).



Fuente: De elaboración propia a partir de datos en UNCTAD. <http://unctadstat.unctad.org/EN/> Consulta realizada el 23/08/2014.

A este respecto, indicar que la causa de este comportamiento no ha sido la ausencia de propuestas de armonización normativa en el trato a la IED. De hecho, lejos de ser un tema que hubiese sido propuesto recientemente en la agenda del MERCOSUR, ya en plena ebullición del regionalismo abierto el grupo elaboró dos tratados sobre el trato que se debía otorgar a la IED. Cuestión que ha seguido formando parte de la agenda hasta el día de hoy.

El primero, en 1993 de carácter interno, fue el Protocolo de Colonia para la Promoción y Protección de las Inversiones en el Mercosur (*Decisión N° 11/93* del Consejo del Mercado Común (CMC)). Instituido éste con el objetivo de establecer una política común sobre el trato a la IED entre los Estados miembros.

El segundo, en 1994 de carácter externo, fue el Protocolo sobre Promoción y protección de Inversiones provenientes de Estados no partes del Mercosur (*Decisión N° 11/94*), denominado Protocolo de Buenos Aires. El cual reconocía y atribuía importancia al estímulo de la IED para alcanzar el desarrollo, por lo que se acordó promover la adopción de “...un marco jurídico común para el tratamiento a otorgar a terceros Estados en materia de Promoción y Protección de Inversiones” (MERCOSUR, 1994b).

Ninguna de las dos propuestas ha sido ratificada por todos los Estados miembros.

Llegado el año 2000 y tras la crisis acontecida en Argentina, el MERCOSUR volvió a situar el estudio del papel que ejercía la IED entre sus asuntos primordiales y decidió establecer un subgrupo de trabajo (el número 12⁵⁹⁵). Grupo al que encomendaron la tarea de realizar un análisis de las negociaciones que se iban adoptando en relación con el trato a la IED en el plano internacional y, particularmente, en los procesos de integración regional. A pesar de la voluntad inicial, visto el impacto de la regulación en Argentina, las conclusiones emitidas por el subgrupo tuvieron un mínimo impacto en un primer momento.

Sin embargo, éstas se recuperaron en el año 2004 cuando se sucedieron las firmas de los TTBBII de Uruguay con EEUU, México y Finlandia⁵⁹⁶. Acuerdos que volvieron a elevar la importancia del trato a la IED en el MERCOSUR, y de ello que en el año 2005 se ampliase la discusión acerca del impacto que podría tener la practica en el interior del MERCOSUR, en especial el TBI que URUGUAY alcanzase con EEUU. De nuevo se optó por abordar el tema indicando la necesidad de establecer una política común al grupo. De nuevo no se llegó a ningún acuerdo.

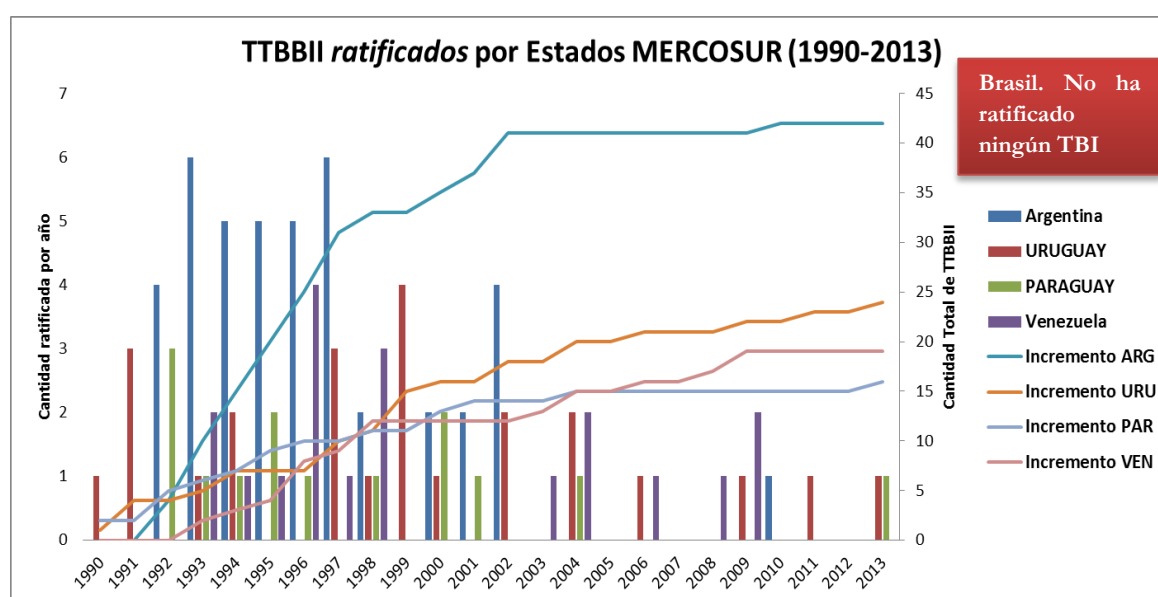
En la revisión de las medidas normativas que el grupo promovía en su seno respecto al trato a la IED, hay que tener en cuenta que los Estados miembros de MERCOSUR han practicado unas políticas caracterizadas por la heterogeneidad. De hecho, si por una parte el gran receptor de IED del grupo: Brasil, no ha ratificado ningún TBI con ningún Estado; el segundo mayor: Argentina, ha sido el que mayor cantidad de acuerdos ha firmado. Esta divergencia en la adopción de mecanismos de trato a la IED ha causado que, tras la crisis ocurrida en Argentina y las denuncias en el decenio 200-2010 ante el CIADI y el temor al

⁵⁹⁵ Véase: Resolución N° .MERCOSUR/GMC/RES. N° 13/00. Documento disponible en línea: http://www.mercosur.int/msweb/Normas/normas_web/Resoluciones/ES/Res_013_000_SGT%20N%C2%BA%2012_Acta%201_00.PDF (Consulta realizada el 12 de marzo de 2014).

⁵⁹⁶ Véase evolución de los tratados en línea: <http://archives.uruguay.usembassy.gov/usaweb/paginas/220-00ES.shtml> (Consulta realizada 11 24 de junio de 2014).

posible impacto de acuerdos particulares como el contraído entre Uruguay y EEUU, así como la entrada de Venezuela (Estado miembro del ALBA-TCP), se haya convertido el trato a la IED en un tema central que debe ser revisado en términos de impacto, en la medida que el objetivo del bloque persiga la implementación de la cohesión grupal. Dado que es admitido por el grupo y las partes, que las acciones particulares tienen consecuencias en el bloque.

Gráfica 7: Tratados Bilaterales de Inversión ratificados por los Estados pertenecientes al MERCOSUR (1990-2013).



Fuente: De elaboración propia a partir de datos de UNCTAD. <http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA>. Consulta realizada el 23/07/2014.

Recientemente en 2010, se incluyó la cuestión en la agenda MERCOSUR y, mediante la adopción de la *Decisión CMC N° 30/10*, se aprobaban las Directrices para la Celebración de un acuerdo de inversiones en el MERCOSUR⁵⁹⁷. Las cuales significaban la derogación de los Protocolos realizados en 1993 y 1994⁵⁹⁸, indicando la pertinencia de adoptar un acuerdo como bloque para regular las inversiones en el MERCOSUR, y a su vez incluían el instruir

⁵⁹⁷ Véase Resolución MERCOSUR/CMC/DEC. N° 30/10. Disponible en línea: http://www.mercosur.int/innovaportal/file/2808/1/DEC_030-2010_ES_AcuerdoInversiones.pdf. (Consulta realizada el 12 de marzo de 2014).

⁵⁹⁸ En las directrices en su punto- 10 dice así: “10. Derogar las Decisiones CMC N° 11/93 y N° 11/94 y sus respectivos Acuerdos” (MERCOSUR/CMC/DEC).

al Subgrupo de trabajo N° 12 para idear un Acuerdo Común sobre Inversiones⁵⁹⁹, con especial atención a los mecanismos de establecimiento de Mercado cohesionado y común.

Las indicaciones relevantes respecto al trato a otorgar en el interior del grupo en temas de IED fueron, primeramente, que en asuntos de disputas entre Estados miembros la solución de controversias sería resuelta Estado-Estado con base en el Protocolo de Olivos, en el que se establece que en la resolución de disputas, si bien éstas podrán ser resueltas por los mecanismos de arbitrio a los que pertenezcan las partes (Art .2), se incluye la posibilidad de acudir a un arbitraje interno de la organización mediante la composición de un Tribunal Permanente de Revisión (TPR). El cual que actuará como el órgano arbitral de la organización regional.

Además de lo señalado, una vez en vigor el Protocolo Modificador del Protocolo de Olivos (conocido como Olivos II (ratificado por todos sus miembros)⁶⁰⁰, se ha significado, no sólo una relevante reestructuración del TPR como se indica en Olivos II sino, la creación de una Secretaría del TPR. Lo cual es un hecho que claramente significa un impulso a la institución de un sistema de arbitraje propio a la comunidad MERCOSUR, que aun operando en un marco intergubernamental de acuerdo al Protocolo Ouro Preto, promueve un sistema en el que en disputas internas en cuestiones de IED se pueden resolver, si los Estados parte lo deciden, dentro de una instancia regional.⁶⁰¹

Respecto a la concertación de posturas en temas de IED con el exterior al bloque, las acciones y resoluciones se enmarcan dentro de los acuerdos firmados por los Estados a título particular. Pero sin embargo, a este respecto se debe señalar que, teniendo en cuenta los avances del MERCOSUR en términos de integración en cuestiones políticas dinamizadoras de la unión por una parte; así como el que a nivel interno la adopción de la

⁵⁹⁹ Hay que señalar que en aras de agilizar el proceso se indicó en la propia Decisión que, en este caso, la aprobación no requería de la incorporación al ordenamiento jurídico de los Estados partes, puesto que el propósito era reglamentar acciones de la propia organización y no de los Estados miembros (Art. 3) del Acuerdo.

⁶⁰⁰ Véase la constatación de la entrada en vigor en Uruguay en línea: http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/proyectos/2012/07/mrree_1867.pdf ; y la ratificación de Paraguay donde se indica que todos los miembros la han ratificado: http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/resoluciones/2013/12/mrree_711.pdf . Así como la ratificación de Venezuela: http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/Normas/acordos%20es/47_ACTA_AdhesionVenezuela_ProModifOlivos_%20ES.pdf (Consultas realizada el 13 de junio de 2014).

⁶⁰¹ Es relevante advertir que hay autores que indican que el TPR podría ser descrito de carácter supranacional sin necesidad de norma alguna. Así lo indican los redactores del Proyecto de Corte de Justicia del MERCOSUR que fue presentado en el Parlamento Mercosur y aprobado por el CMC mediante la Resolución CMC/Dec N° 28/10 (Deluca, 2012). Véase a este respecto también MERCOSUR (2011).

Decisión CMC N° 63/10 establece un Alto Representante General, al que se atribuyen funciones de representación del MERCOSUR en relaciones con terceros países u OOII en cuestiones que sean de importancia para el bloque, sin que sean partícipes todos los presidentes de los Estados, los pasos que ha dado el MERCOSUR en aras de promover la unidad regional en la Cumbre de Mendoza (2012), a través de la aprobación de la *Decisión N° 24/12*, en donde se decidió promover la cohesión a partir de la articulación de políticas, acuerdos y compromisos asumidos en el Foro de Consulta y Concertación Política del MERCOSUR (FCCP) con aquellas iniciativas con rasgos similares presentes en UNASUR, entre ellas el arbitrio en cuestiones de IED, se evidencia que el propósito de concertar y aunar políticas normativas está en la agenda del grupo y de las partes.

En este sentido, dado que la UNASUR está trabajando en la promoción de un Protocolo Constitutivo del Centro de Mediación y Arbitraje en Materia de Inversiones, la concertación política para establecer vínculos y paralelismos en la coordinación de integración y unidad para el futuro regional, se puede ver implementada por la participación de los Estados miembros y el MERCOSUR en cuestiones arbitrio.

Sin embargo y contrariamente a esa voluntad señalada, en la misma Cumbre de Mendoza se destacó la naturaleza política del proceso de integración del MERCOSUR y se indicó que, a pesar de la importancia política que estaba teniendo la UNASUR, ésta no podría ser la encargada de liderar la construcción del bloque económico de América del Sur, puesto que sus miembros poseían “...estrategias de inserción internacional que llevaron a la adopción de ciertas **normas comerciales de inversión de capital extranjero y de propiedad intelectual** que **dificultan y hasta imposibilitan la construcción de directrices regionales de promoción del desarrollo**” (BID, 2013, págs. 71-72) [Negrita propia]. Evidenciándose que el papel que ejerce el trato a la IED impulsa la interiorización de diferencias que limitan, en este caso, la posibilidad de ceder capacidades al UNASUR como entidad subregional para que emita normas, aunque se alcance algún grado de concertación. Aun así, el acercamiento y la construcción de confianza se significan como un síntoma de avance integrador.

En definitiva, el trato a la IED ha estado presente en el bloque desde su creación, aun no encontrando una unificación de criterios que conjunten las prácticas y establezcan de forma definitiva una normativa común respecto al trato que se le otorga; si bien ha significado la disparidad de los agentes respecto al trato y aun siendo reticentes a desprenderse de

competencias celosos de su soberanía, se ha evidenciado que el propósito está presente y está abierta la posibilidad a que la idea se transforme en práctica en un futuro. Y más teniendo en cuenta la capacidad como bloque en términos de atracción de IED.

4.3 Integraciones excluyentes en torno a la atribución de capacidades a la Inversión Extranjera Directa: la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América- Tratado de Comercio de los Pueblos y la Alianza Pacífico.

La aparición de nuevos proyectos unificadores/ integradores en el territorio regional, ha evidenciado y situado de nuevo, en primer plano, una clara disputa ideológica en torno a cuáles son los mecanismos apropiados para alcanzar el desarrollo. Sin embargo, quizás más allá o también, del debate en torno a cuál es el mecanismo que se debe articular como región, la disputa se encuentre en el fin a perseguir. Es decir, el debate podría estar determinado por la propia conceptualización de qué es aquello que significa desarrollo entre los nuevos grupos.

A este respecto, ya en los idearios de las nuevas organizaciones se evidencian, a primera vista, ciertas divergencias. Mientras la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América- Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) ambiciona instaurar un proyecto de integración regional, caracterizado por contener una ideología política en la que se combinan conceptos como el *buen vivir* con una visión de corte socialista, en la que el Estado debe intervenir en la regulación de la práctica económica; la Alianza Pacífico (AP) se postula en favor de una estrategia neo-liberal de desarrollo, a través de la promoción de políticas que incentiven la apertura regional al libre comercio como mecanismo de reducción de pobreza, en donde la desregularización de la economía y la reducción del papel del Estado son las políticas promovidas (Alianza Pacífico, 2014).

La presencia de estos postulados en las dos nuevas OOSRR parece situar, de nuevo, el debate regional en torno a la propiedad de optar por un regionalismo abierto o *integración hacia afuera*; u otro modelo de regionalismo más intervencionista u *integración hacia adentro*.

En este sentido, analizando ciertos datos se revelan las posturas, prácticas, así como las estrategias, de los nuevos bloques:

a) **IED:** En cuestiones de IED se observan unas diferencias manifiestas entre los dos bloques según datos del año 2012:

- a. **Alianza Pacífico:** los cuatro países miembros están entre los 5 primeros receptores de IED, sólo por debajo de Brasil.
- b. **ALBA-TCP:** los países miembros se sitúan en los últimos niveles. En Sudamérica: Ecuador, Bolivia y Venezuela entre los 4 últimos (solo presenta menor IED Paraguay), y en Centroamérica, Nicaragua el segundo con menor IED.

Fuente: (CEPAL, 2013).

b) **La inversión pública:** ésta refleja la búsqueda en el aumento de capacidad autónoma de los Estados y el impulsó en un desarrollo endógeno y autónomo (2012) (% sobre el PIB).

- a. **Alianza Pacífico:** presenta los siguiente datos: Chile un 4,7%, Perú un 3,6%, México un 2,6% y Colombia un 2,3% del PIB.
- b. **ALBA-TCP:** presenta los siguiente datos: Bolivia un 9,9%, Ecuador un 10,2%, Venezuela y Nicaragua el 5,5% del PIB.

Fuente: <http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2012092202> . (Consulta realizada el 21 de julio de 2014).

c) **El comercio estratégico:** como variable indica qué países y, por lo tanto, qué áreas son preferenciales para los dos esquemas. (Datos del 2012). (En *cursiva países miembros de ALC*).

- a. **Alianza Pacífico:** Los principales destinos de las exportaciones para los Estados son (por orden porcentual):
 - i. **Chile:** China 32%; EEUU 11,72%; Japón 11%; Corea del Sur 6,04%, Brasil 5,75%.
 - ii. **Perú:** China 17,59%; EEUU 12,76%; Suiza 11%; Canadá 7,08%; Japón 5,9%.
 - iii. **Colombia:** EEUU 36,4%; China 5,65%; España 4,89%; Venezuela 4,55%; Panamá 4,16%.
 - iv. **México:** EEUU 77,6%; Canadá 2,95%; España 1,93%; China 1,54%; *Colombia* 1,51%.
- b. **ALBA-TCP:** Países seleccionados.
 - i. **Venezuela:** China 21,32%; *Colombia* 13,37%; *Trinidad y Tobago* 10,08%; EEUU 7,85%; *Brasil* 6,03%.

- ii. **Cuba:** *Venezuela* 34,2%; *España* 10,12%; *China* 8,87%; *Rusia* 5,74%; *Brasil* 4,54%.
- iii. **Bolivia:** *Brasil* 30,7%; *Argentina* 17,8%; *EEUU* 15%; *Perú* 5,37%; *Japón* 3,69%.
- iv. **Ecuador:** *EEUU* 44,57%; *Chile* 8,36%; *Perú* 8,35%; *Colombia* 4,44%; *Venezuela* 4,23%.

Fuente:

ALADI

http://consultaweb.aladi.org/sicoex/jsf/totales_comercio_exterior.seam?cid=3451

(Consulta realizada el día 14 de junio de 2014).

- d) **La tasa de crecimiento:** entre los años 2010-2013 los datos no indican diferencias notables:

Tabla 6: Tasa de variación del PIB en ALBA-TCP y AP (2010-2013). (En millones de dólares, a precios constantes de 2005).

ALBA-TCP				
País	2010	2011	2012	2013
Bolivia	4,1	5,2	5	4,5
Cuba	2,4	2,7	3	3
Ecuador	3,6	7,8	4,5	4,5
Nicaragua	4,5	4,7	5	5
Venezuela	-1,5	4,2	5	3
Alianza Pacífico				
País	2010	2011	2012	2013
Chile	6,1	6	5	4,8
Colombia	4	5,9	4,5	4,5
México	5,6	3,9	4	4
Perú	8,8	6,9	5,9	5,5

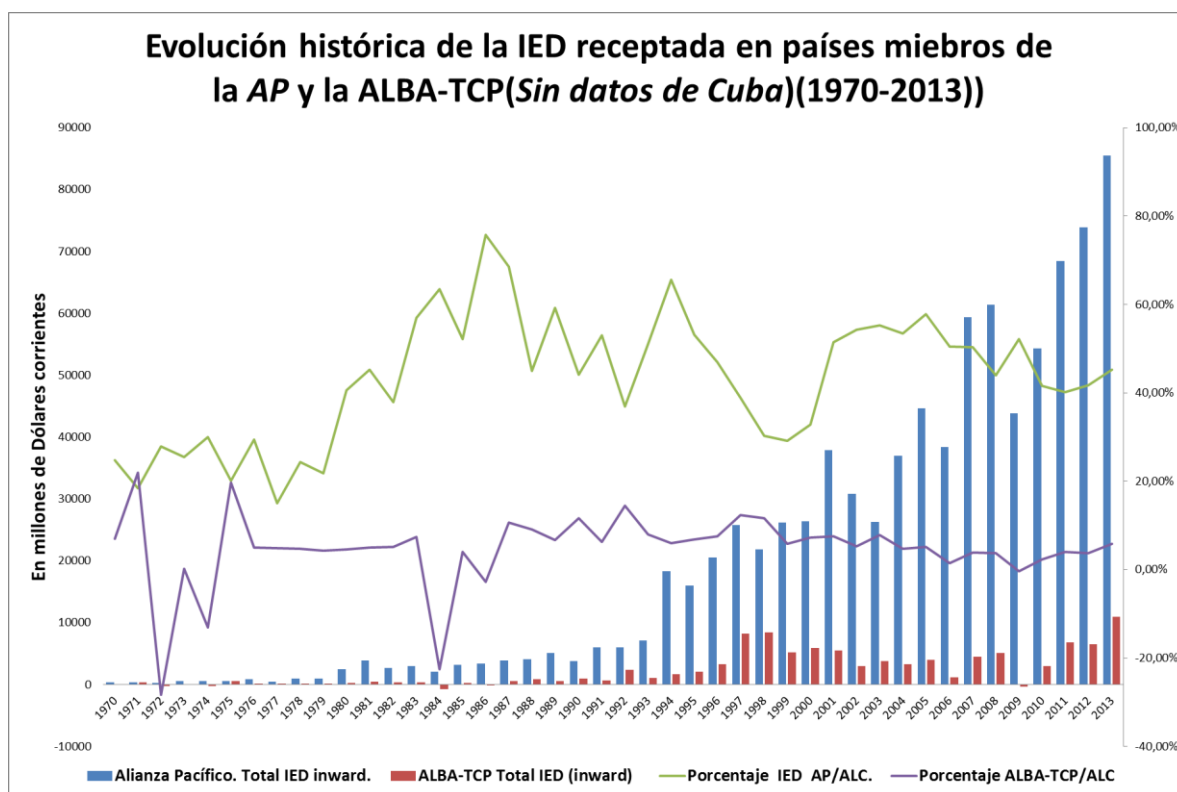
Fuente: De elaboración propia a partir de datos oficiales de CEPALSTAST.

www.cepalstata.com (Consulta realizada el día 18 de agosto de 2014).

Los datos reflejan la distancia entre dos estilos antagónicos de integración. Uno buscando concertación comercial y política en el interior de la región; y otro reinstaurar el regionalismo abierto de los 90. Mientras los Estados miembros de AP establecen sus relaciones principales con el exterior de ALC, buscando una cercanía al mundo; la ALBA-TCP muestra predilección por los Estados de la región, en busca de una cohesión comercial que reduzca la dependencia del exterior. Sin embargo, en tasas de crecimiento las divergencias no son muy notables, a excepción de casos particulares: positivamente Ecuador en el ALBA-TCP, y Perú en la AP.

Gráfica 8: Evolución de la IED receptada por países de la AP y la ALBA-TCP (1970-2013).

** Sin datos de Cuba.*



Fuente: De elaboración propia a partir de datos en UNCTAD. <http://unctadstat.unctad.org/EN/> .(Consulta realizada el 23 agosto de 2014).

En todo caso, la conformación de los grupos no parece haber alterado el comportamiento histórico de la IED profundamente, y aunque sí revela una leve mejoría en los últimos años, ésta no puede ser atribuida de manera absoluta a la conformación de estos esquemas, ya que la variación se ha producido con anterioridad. Como se observa en los datos al establecer una comparativa con el papel que ha jugado la región como área receptora de IED en ALC.

4.3.1 La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América- Tratado de Comercio de los Pueblos. Un modelo de integración desde los pueblos hacia la región.

4.3.1.1 Contextualización del ALBA-TCP. Origen y evolución.

La ALBA-TCP encuentra su origen en una iniciativa promovida por los Estados de Venezuela y Cuba, que fijando su crítica en las fallas que presentaba la región en términos de reducción de desigualdad y pobreza, tras la aplicación de modelos políticos que

priorizaban el crecimiento por encima del reparto del beneficio obtenido del ejercicio, el 14 de Diciembre de 2004, optaron por la constitución de un herramienta de integración en la que concertar prácticas políticas, en aras de abordar la problemática observada. Nació la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

A este proyecto inicial se fueron incorporando otros Estados a través de diversos Acuerdos de Adhesión: Bolivia el 11 de Enero de 2006; Nicaragua el 11 de Enero de 2007; Dominica, el 26 de Enero de 2008; Honduras el 25 de Agosto⁶⁰²(El 27 de enero de 2010 abandonó); Ecuador, San Vicente y Las Granadinas y Antigua y Barbuda el 24 de Junio de 2009; y por último, Santa Lucia el 30 de Julio de 2013. Adhesiones que han ido otorgando mayor cobertura y solidez regional al proyecto. Especial mención merece la adhesión de Bolivia, puesto que impactó en la propia denominación de la organización, al incidir en la significancia e ideario de la política-económica en el bloque, mediante la promoción e indicación en el esquema de la relevancia de la regulación e impacto de la normativa en temas de IED. A partir de la cual, el grupo optó por transformar la denominación e incluir la alusión a los Tratados de Comercio de los Pueblos (TCP), en alusión concreta y directa al mecanismo que se señalaba como causante de perjuicio en los Estados de ALC en términos de plusvalías y capacidad de decisión autónoma: los TLC y los otros modelos de AII, como los TTBBII.

Es en este sentido en el que se debe indicar que el marco político-ideológico del ALBA-TCP, se construye a partir de un ejercicio de revisión de la metodología capitalista aplicada en la región tras la promoción de prácticas políticas neo-liberales, principalmente en los años 90 en el marco del Consenso de Washington, y la consecuente promoción del libre mercado. Ya que a ojos del ALBA-TCP, éstos fueron los mecanismos articuladores de las practicas político-económicas que han determinado la no reducción de la desigualdad ni la pobreza en la región. Por lo que el grupo indica que es obligado denunciarlo y abordar un proceso que altere, tanto en la práctica-política de los Estados como el proceso de integración regional, y se opte por la transformación de las prácticas a través de la implementación de mecanismos alternativos que impliquen, esta vez sí, la consecución de la equidad y la eliminación de la pobreza en ALC.

“El comercio y la inversión no deben ser fines en sí mismos, sino instrumentos para alcanzar un desarrollo justo y sustentable, pues la verdadera integración latinoamericana

⁶⁰² El 15 de Diciembre de 2009, a través del presidente de Facto en Honduras, Roberto Micheletti, mediante decreto ratificado el 27 de enero de 2010 decidió abandonar el ALBA.

y caribeña no puede ser hija ciega del mercado, ni tampoco una simple estrategia para ampliar los mercados externos o estimular el comercio. Para lograrlo, se requiere una efectiva **participación del Estado como regulador y coordinador de la actividad económica**” (ALBA-TCP, 2011) [Negrita propia].

El análisis que realizaron, motivó el que los principios del ALBA-TCP pusiesen el énfasis en la dimensión social; así como el que las prácticas alternativas propuestas aboguen por la adopción de mecanismos que, a partir de un ejercicio de complementación entre capacidades de los miembros, permitan que las asimetrías se reduzcan en función de las diferencias entre los Estados y sus gentes. Es decir, pretenden lograr un espacio caracterizado por la simetría entre los Estados y sus gentes.

Para promover el cumplimiento de los principios, la estrategia del ALBA-TCP otorga prioridad a la integración latinoamericana y caribeña, apoyándose en la premisa de que la operatividad encuentra sus pilares en el ejercicio de la complementariedad, la solidaridad, la cooperación. Siendo estas directrices aquellas que deben ser articuladas en los diferentes mecanismos que se adopten, para terminar con la pobreza y la exclusión social. Es por ello que uno de los pilares del ALBA-TCP es la implementación de mecanismos de coordinación entre los Estados, con el objetivo de construir alianzas estratégicas para lograr convertir a los territorios de ALC, “...**no ya en zonas de libre comercio, sino en zonas libres de hambre, analfabetismo, miseria y marginación**”, privilegiando en la zona “...la complementariedad y la solidaridad como lineamientos de la integración económica...” (ALBA-TCP, 2013) [Negrita propia].

Asimismo, el postulado dispuesto por el ALBA señala que, en la problemática existente en las capacidades soberanas en la región, ha tenido gran impacto el papel ejercido por la IED, y en especial las condiciones concedidas a la misma, que se han ido proliferando, tanto en la relación del área con el exterior como en la práctica interna regional. Indicación que ha incentivado el que el ALBA-TCP abogue por la promoción de mecanismos económicos regionales que aprovechen la capacidad conjunta, mediante la creación de tres herramientas de cooperación interna y empoderamiento ante el exterior: un Fondo Latinoamericano de Inversiones (en contraposición del FMI); un Banco de Desarrollo del Sur (en contraposición al BM); y una Sociedad de Garantías Recíprocas Latinoamericanas⁶⁰³.

⁶⁰³ Si bien la creación de un Fondo Latinoamericano de Inversiones, así como la Sociedad de Garantías Recíprocas Latinoamericanas son proyectos en el aire por ahora en el ALBA-TLC y en ALC, el Banco de

El en plano formal, hay que señalar que esta alianza no cuenta con un tratado constitutivo al uso del DI y, por lo tanto, carece de instrumentos fundacionales formales. Ya que en el marco del ALBA, las diversas modalidades de asociación intergubernamental no son propiamente tratados, ni significan compromisos que impliquen la liberalización del comercio o aceptación de políticas económicas (Girvan, 2008). No obstante, mecanismos e instituciones como el Banco del ALBA o el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) sí han cumplido con la formalidad de adaptarse al DI público (SELA, 2013).

Asimismo, la promoción de la cooperación regional obtiene una justificación en el ALBA-TCP en la afirmación de que es necesaria la “Defensa de la cultura latinoamericana y caribeña y de la identidad de los pueblos de la región” (ALBA-TCP, 2009). Meta para la cual, entiende necesario la promoción de un nuevo concepto de integración creado en el seno de la institución: *la Grannacionalidad*. Concepto que en el ideario del ALBA-TCP incluye la presencia de valores comunitarios, y define la relevancia del papel del Estado para los países miembros en la regulación económica. Ya que, según éstos, la política debe situarse por encima de aspectos económicos, al definir *Grannacional*⁶⁰⁴ como: “...un concepto esencialmente político, pero engloba todos los aspectos de la vida de nuestras naciones” (ALBA-TCP, 2009). Afirmación que se alinea con el propósito del ALBA-TCP de “...unir las capacidades y fortalezas de los países que la integran, en la perspectiva de producir las transformaciones estructurales y el sistema de relaciones necesarias para alcanzar el desarrollo integral” (ALBA-TCP, 2009).

A raíz de entender esa perspectiva, es donde se sitúa el espacio ideacional que indica que el empoderamiento regional debe articularse como un ejercicio conjunto en oposición directa a la repercusión del neoliberalismo en tierras latinoamericanas, incidiendo en la necesidad de que los Estados adopten una postura común en temas como “...la globalización neoliberal, el desarrollo sustentable con justicia social, la soberanía de nuestras naciones y el

desarrollo de Sur por otra parte ha sido creado como el Banco del Sur combinando la participación de países del ALBA-TCP y MERCOSUR (Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador, Brasil, Uruguay y Paraguay), significándose la presencia regional de un entidad de financiamiento alternativa con los objetivos de promover una banca de desarrollo e integración que combatirá las asimetrías y desigualdades regionales. Pero esta vez bajo criterios estrictamente regionales, en los que primara la participación consensuada sin que el aporte económico establezca diferencias en el voto. Véase para profundizar en motivación Asien (2008), y en referencia a avances actuales en declaraciones de UNASUR consultesé en línea: <http://www.unasursg.org/inicio/centro-de-noticias/archivo-de-noticias/banco-del-sur-se-consolida-como-instrumento-financiero-para-integraci%C3%B3n-latinoamericana> (Consulta realizada el 12 de septiembre de 2014).

⁶⁰⁴ Éste concepto es reflejo de la influencia del concepto Gran Nación que ha sido tratado en el apartado dedicado a Simón Bolívar. En este caso ampliado a Brasil y las Islas del Caribe.

derecho a su autodeterminación...” con el propósito de concertar prácticas que consistan en promover procesos sinérgicos, que operen ”... generando un bloque en la perspectiva de estructurar políticas regionales soberanas” (ALBA-TCP, 2009). Es decir, soberanas regionalmente ante un actor externo.

En cuanto a sus logros, el ALBA-TCP destaca por encima de otros su impacto social; por la mejora en tasa de alfabetización; escolaridad; condiciones de vida; acceso a agua; medicinales, etc...⁶⁰⁵. Aunque también se están logrando avances en materia económica, como ha evidenciado el proceso de implementación de la integración en materia comercial, presentando datos entre 2010 y 2012 en los que el comercio intra-ALBA-TCP aumentó de 10.00 MM de SUCRES a 852 MM millones de SUCRES (aprox. 1.065,42 millones de dólares); o mediante la adopción del ECOALBA-TCP (8-Mayo—2013), que persigue potenciar la relaciones económicas de los Estados miembros dentro del marco normativo de la ALADI (SELA, 2013).

Por último, se ha de indicar que el ALBA-TCP también está siendo señalado por su potencialidad en el proceso de implementación de la complementariedad regional, al estar los miembros del ALBA-TCP en la mayoría de los demás esquemas de integración regional⁶⁰⁶.

4.3.1.2 La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos ante las herramientas internacionales relacionadas con la Inversión Extranjera Directa.

El marco político-ideológico del ALBA-TCP se inclina por la implementación de una estrategia que incentive la cooperación conjunta, como elemento articulador de sus prácticas. Para lo que cree necesario y relevante que se incentiven las inversiones entre Estados de ALC. Ya que en su ideario incide en resaltar que la implementación de esta

⁶⁰⁵ Destaca el papel ejercido por los diversos Fondos de la Organización: Fondo Alimentos y Fondo Caribe en favor de los Estados más pobres de la organización. En este sentido destaca la finalidad de los proyectos, como evidencia la declaración ocurrida durante la Primera Cumbre de Petrocaribe en el año 2005 que decía: “PETROCARIBE dispondrá de un Fondo destinado al financiamiento de programas sociales y económicos, con aportes provenientes de instrumentos financieros y no financieros; contribuciones que se puedan acordar de la porción financiada de la factura petrolera y los ahorros producidos por el comercio directo” (Citado en SELA (2013, pág. 23)). Invirtiendo en este caso los recursos del petróleo para fortalecer cohesión social.

⁶⁰⁶ Esquemas de integración regional de los que los Estados del ALBA-TCP son miembros: AEC: Antigua y Barbuda, Cuba, Dominica, San Vicente y las Granadinas, y Venezuela; ALADI: Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela; CA: Bolivia y Ecuador; CAFTA-DR: Nicaragua; CARICOM: Antigua y Barbuda, Dominica, y San Vicente y las Granadinas; Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS): Antigua y Barbuda, Dominica y San Vicente y las Granadinas; UNASUR: Bolivia, Ecuador y Venezuela; MERCOSUR: Bolivia³⁶, Ecuador y Venezuela; CELAC: Todos los miembros del ALBA-TCP.

práctica, por un parte, cohesiona la región y, por otra, incentiva el empoderamiento regional frente al exterior. Significando esta capacitación el no exceso en la dependencia de los recursos externos en la explotación de los recursos regionales.

En este sentido, el postulado del ALBA-TCP ha señalado que, más allá de que la práctica inversionista en sí haya impactado negativamente en la región, aquello en lo que ha incidido ha sido en la quiebra de gobernabilidad de los Estados. Lo que, según la organización, ha provocado la no asignación equitativa de recursos a los diferentes grupos sociales en ALC. Debido, principalmente, a las condiciones en las que se ha desarrollado la relación entre inversores y receptores. Señalando el ALBA-TCP directamente a los mecanismos reguladores y a las condiciones inscritas en los acuerdos de protección de la IED: los AII, como causa de ello.

El ALBA-TCP ha insistido en señalar que, bajo su criterio, los TTLLCC, así como los diferentes TTBBII, son herramientas que por una parte, al operar con una perspectiva del desarrollo neo-liberal, son perjudiciales en su esencia, al basar su funcionamiento en: la explotación de los RRNN y los seres humanos, degradar el medioambiente e incentivar la contaminación y no considerar la calidad de vida de las personas; y por otra, porque estos tratados se elevan por encima de la democracia y gobernabilidad en los Estados receptores de IED, al incluir cláusulas que significan la extracción de la capacidad de arbitrio a tribunales externos. Y por lo tanto, desde una visión regional se significan como mecanismos que sesgan la soberanía en términos horizontales y verticales, al ser el territorio primordialmente receptor de IED (CEPAL, 2013).

Es, a raíz de este análisis funcional, por lo que el ALBA-TCP propone la aplicación de un nuevo modelo de tratado: el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP). Indicando que éste sí es un instrumento necesario en la armonización de prácticas inversoras en ALC, al ejercer como complemento de carencias en los pueblos receptores de inversión y poseer la capacidad de actuar como herramienta en beneficio de los mismos. En contraposición a un TLC que, bajo su perspectiva, persigue un incremento de poder y dominio de las EET*INN (SELA, 2013). A este principio funcional del mecanismo hay que añadir que el TCP promueve una integración comercial de los pueblos y de sus economías, pero que a diferencia de los TLC, al actuar como mecanismo que limita y regula las acciones de los inversores ante el receptor de esa inversión, es un elemento ordenador de la interacción. Lo que asegura el que las inversiones impacten en beneficio de los receptores y no

prioritariamente del inversor. Es decir, es indicada como una herramienta que se basa en la promoción de una responsabilidad conjunta.

Asimismo, es pertinente indicar que, aunque en un principio pudiese parecer que el TCP es contrario a un proceso de industrialización, este hecho no es así. El TCP no prohíbe la industrialización, sino que indica que este proceso debe estar armonizado en sus prácticas para que no actúe como factor impulsor de desigualdad (SELA, 2013), al ser éste el mayor problema que ha tenido la región y el mundo (ALBA-TCP, 2011).

La ALBA-TCP también ha indicado que, en relación con las condiciones que han determinado la pérdida de capacidad soberana en la región, uno de los factores relevantes en términos de IED ha sido el del arbitrio en las disputas inversor-Estado. Ante lo cual el ALBA-TCP ha adoptado una postura firme y ha centrado sus críticas en el organismo que mayor número de litigios ha sancionado: el CIADI. Siendo los Estados miembros aquellos que, en la región de ALC, con mayor celeridad mostraron su negativa al organismo, retirándose del CIADI. Como se pudo constatar con las denuncias realizadas por Bolivia en 2007 y Ecuador en 2009; uniéndose Venezuela el 25 de julio de 2012 (Nicaragua lo anunció en 2007 y reiteró su voluntad en 2010, pero aún no ha procedido a la ejecución).

Asimismo, fue precisamente en una Cumbre del ALBA en 2007 celebrada en Caracas el lugar en donde el presidente de Bolivia Evo Morales manifestó:

“Los Estados parte del ALBA acordaron retirarse y denunciar de manera conjunta la convención del CIADI, garantizando el derecho soberano de los pueblos a regular la inversión extranjera en su territorio”...”. La decisión se tomó porque algunas empresas extranjeras que no cumplen con las leyes bolivianas han decidido recurrir al CIADI para que les sirva de protección frente a los legítimos derechos de Bolivia” (Citado en Constante (2012, pág. 100)).

Esta declaración indicaba que la denuncia sobre el papel del CIADI iba dirigida a defender el derecho de los Estados a legislar y no por ello tener que verse obligados a ser enjuiciados por agentes externos, bajo argumentos y postulados que no necesariamente persiguen el interés general.

En acuerdo con esta primera manifestación relevante en el seno del grupo se manifestó el Presidente de Ecuador Rafael Correa en la Conferencia de las NNUU sobre la Crisis

Mundial celebrada en Nueva York en junio del 2009, tras el anuncio de Ecuador de que se retiraba del CIADI:

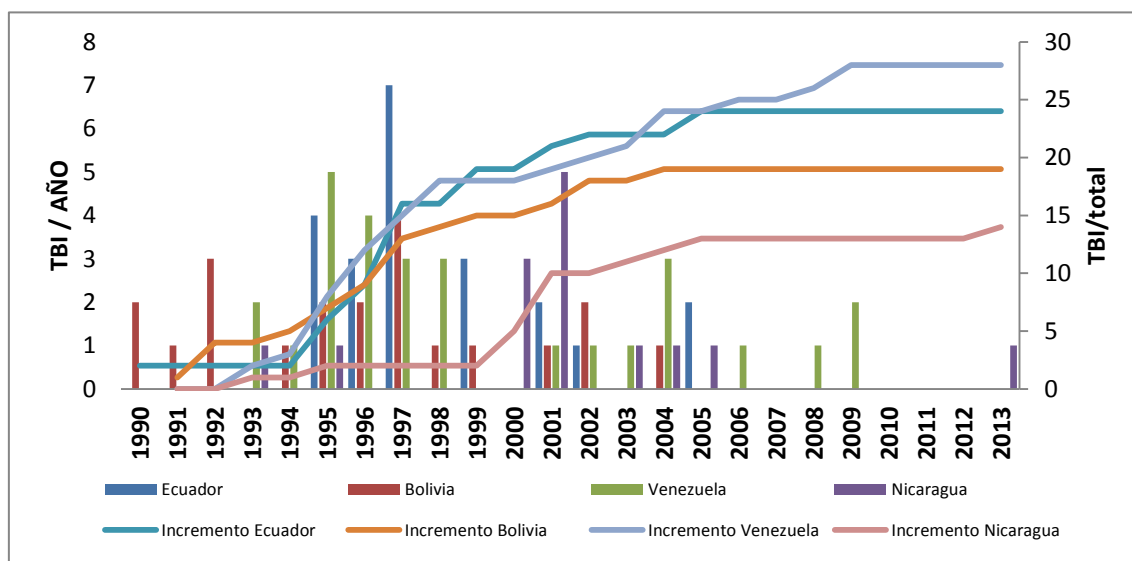
“La actual situación de crisis refleja los malos resultados de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la movilidad irrestricta del capital. Esto refleja el colapso del paradigma individualista y competitivo, camuflado de técnica. La OMC es parte de la mentira de que el libre comercio puede beneficiar a todos. Hay un estudio de la Universidad de Cambridge que señaló que ningún país se desarrolló con libre comercio, sino con medidas de protección de sus capacidades productivas. Esto nos condujo a una dictadura del capital que ahora tiene más derechos que los seres humanos. (...) No estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero es una ley de los Estados Unidos y todos tenemos que someternos a ella. Sin embargo, con los Tratados Bilaterales de Inversión y el CIADI, cualquier transnacional puede llevar a un Estado soberano al arbitraje sin pasar por ningún mecanismo del Estado” (Citado en Constante (2012, pág. 100)).

Ante la reiteración en estas denuncias en la región, es deber señalar que la pretensión de no pertenecer al CIADI es un proyecto a largo plazo aunque se denuncie en la actualidad, puesto que aunque los Estados hayan ejecutado la denuncia del Convenio de Washington o Convenio CIADI, la presencia de la “cláusula de habilitación” inscrita en muchos de los AII acordados⁶⁰⁷, implica que se prologue la posibilidad de ser demandado por el inversor ante este organismo u otro que esté presente en el AII correspondiente.

Este hecho ha causado que no sólo sea puesto en tela de juicio el mecanismo de enjuiciamiento externo practicado por el CIADI, sino el hecho de que se juzguen asuntos de índole interno en el exterior, ya no del Estado, sino de la región, en lo que algunos autores indican como una vuelta a la doctrina Calvo en ALC (Gómez, 2010).

⁶⁰⁷ Para información sobre las “cláusulas de habilitación” y longevidad de aplicación en TTBBII de Bolivia y Ecuador véase Anexos I y II en UNCTAD (2010).

Gráfica 9: Tratados Bilaterales de Inversión ratificados por los Estados miembros del ALBA-TCP (1990-2013).



Fuente: De elaboración propia a partir de datos en UNCTAD. <http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA>. (Consulta realizada el 23 de julio de 2014).

Esta perspectiva incitó a que, ya en 2009, el ALBA-TCP comenzase a analizar la creación de un Tribunal de arbitraje para la resolución de litigios de inversión. No siendo el elemento articulador del proyecto el que los Estados miembros estuviesen en contra de aplicar una normativa y respetar la resolución de Tribunales internacionales, sino que mantienen dudas y se muestran cautos sobre el funcionamiento de una institución que ha nacido al auspicio del BM y, además, indican como eje de la disputa **la no percepción de que en sus postulados prime la defensa de las personas como elemento a tener en cuenta en la emisión de sus sentencias.**⁶⁰⁸

Aun con el impulso a la creación de una nueva institución de carácter regional, lo relevante y aquello que denota las denuncias del ALBA-TCP, es la duda que opera sobre los

⁶⁰⁸ Es a raíz de esta percepción que en los dos TTBBII firmados recientemente por los países de Nicaragua y Venezuela con Rusia se ha excluido al CIADI como mecanismo de arbitrio, aunque sí se haya incluido el arbitrio de tribunales *ad hoc* bajo el reglamento del CNUDMI, o la Cámara de Comercio de Estocolmo en caso de disputas. Indicando que deben realizarse las sentencias de acuerdo a la legislación de los Estados parte. Mientras, por otra parte, Bolivia y Ecuador no han firmado ningún TTBBII desde que los nuevos gobiernos se alzaron con el poder.

En esta línea señalar que lo indicado respecto a las cláusulas y exclusión del CIADI puede observarse en los TTBBII que han sido adoptados entre los Estados de Venezuela y Nicaragua con Rusia: Ley Aprobatoria del Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (ratificado en 2009). Documento disponible en línea: <http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/2238>; y el Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Nicaragua y el Gobierno de la Federación de Rusia (Ratificado en 2013), disponible en línea: <http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/2100> (Consultas realizadas el día 18 de noviembre de 2014).

postulados ideológicos que centran el eje de las sentencias, incluyendo y señalando que los DDHH y, por ende, las personas deben ser un factor fundamental en la resolución de disputas y situarse por encima, en cualquier caso, del beneficio o perjuicio del capital privado, es decir, del inversor.

4.3.2 La Alianza Pacífico: neo-liberalismo subregional, la vuelta al regionalismo abierto.

4.3.2.1 Contextualización de la Alianza Pacífico.

La reciente aparición en la escena regional de la organización intergubernamental Alianza Pacífico (AP), impulsada el 28 de abril del 2011 y constituida jurídicamente el 6 de junio de 2012, indica la presencia de un modelo de integración en ALC que impulsa las prácticas de libre comercio como medio de desarrollo. Significándose con su presencia el “retorno” a la estrategia del regionalismo abierto (SELA, 2013). La AP la componen los Estados de Chile, Colombia, México y Perú.

La AP nació con la ambición de instituir un área de integración económica que aliente el proceso de integración regional. Como principal valor estratégico⁶⁰⁹ la AP señala que la organización se constituye a partir de un ideal común de los Estados miembros, al compartir “visiones afines de desarrollo” y coincidir en atribuir al libre comercio la capacidad de impulsar el crecimiento económico, considerando a éste como el estado necesario para alcanzar el desarrollo (Alianza Pacífico, 2011).

Tal y como se ha articulado el proceso de integración que presenta el bloque, las políticas de apertura son entendidas como el medio adecuado para profundizar, por una parte el proceso de integración regional; y por otra las relaciones con el mundo. Esto debido a que la AP pretende instituirse como el vínculo regional con el exterior, que permita y facilite el maximizar los beneficios de la globalización. Especialmente en la profundización de la relación con la región de Asia, entendiendo este área como el que posee una mayor potencialidad (Malamud, 2012).

En principio, la AP se presenta como una organización integradora regional abierta e incluyente, con vistas territoriales más allá del contexto regional. Su voluntad es servir como herramienta impulsora en la conformación de un área de integración profunda, que

⁶⁰⁹ Véase: “Valor Estratégico” en página oficial de la ALP: http://alianzapacifico.net/que_es_la_alianza/valor-estrategico/ . (Consulta realizada el día 07 de noviembre de 2014).

permita avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas en la región⁶¹⁰ y, además, constituirse como la plataforma de articulación política, económica y comercial con el resto del mundo⁶¹¹.

Como evidencia el mensaje de los líderes, al indicar lo siguiente:

“Los países miembros queremos hacer realidad el ideal de integrar más a América Latina y hacerla más competitiva, productiva y próspera, para mejorar la calidad de vida de nuestras poblaciones.

Al respecto, **la Alianza del Pacífico** ha mostrado, en todo momento, ser **un mecanismo abierto e incluyente que busca incorporar a países con visiones afines al desarrollo y promotores del libre comercio como motor de crecimiento**. Aquellos que estén interesados en adherirse a los instrumentos de la Alianza del Pacífico, y compartan los principios y valores de esta iniciativa, tienen posibilidad de integrarse a ella”.

Presidente de México: Enrique Peña Nieto. Entrevista disponible en (El Economista, 2014) **[Negrita propia]**.

La ideología en términos de política económica de la AP se percibe claramente en el “Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico”, suscrito el 6 de junio de 2012, cuando en el preámbulo del mismo se indica que “...la integración económica regional constituye uno de los instrumentos para que los estados de América Latina avancen en su desarrollo económico y social sostenible”, obedeciendo a un proceso que debe “...fortalecer los diferentes esquemas de integración en América Latina, como espacios de integración y convergencia, orientados a fortalecer el regionalismo abierto”. Así mismo se indica que la organización adopta el compromiso de cooperar en la conformación de “...un marco jurídico previsible para el comercio de bienes y servicios, y de la inversión” (Citado en SELA (2013, pág. 4)). Con el propósito de facilitar el ejercicio del libre comercio.

En el breve espacio de tiempo transcurrido desde su creación, la AP ha realizado diversos logros, entre los que se destacan: 1) en el objetivo de crear un Mercado Común: 92% de líneas arancelarias; armonización en reglas de origen de trato a productos; cooperación aduanera; operador económico, certificado electrónico; y coherencia regulatoria en sectores

⁶¹⁰ La herramienta que evidencia esta pretensión articuladora de la integración regional es el Mercado Integrador (bursátil) Latinoamericano (MILA), que no siendo parte formal de la AP, sí es una prioridad que está entre sus objetivos para instituir una integración bursátil en toda ALC.

⁶¹¹ En este sentido, hay que señalar que diversos autores se muestran prudentes ante esta afirmación e indicando lo contrario, al visualizar que la AP no tiene como objetivo prioritario la integración de los Estados miembros, ya que garantiza la autonomía de las prácticas comerciales individuales, en donde cada país actúa libremente en su política exterior (Sánchez Muñoz, 2012).

farmacéuticos y de cosméticos; 2) en aspectos transversales: eliminación de requerimiento de visados intra-AP; establecimiento de una plataforma de movilidad académica y estudiantil; acuerdo de cooperación en materia de turismo, dirigido a incrementar el movimiento de turistas; creación de un Consejo Empresarial para promover la AP y formular recomendaciones para mejorar la integración; promoción comercial conjunta y embajadas compartidas (Tres, 2013).

En cuanto a los mecanismos de organización, la AP se asemeja a los otros procesos regionales, ya que opera mediante órganos inter-gubernamentales que poseen cierta capacidad de decisión que dictaminan por consenso (Consejo de ministros⁶¹², El Grupo de Alto Nivel, etc...) ⁶¹³. En este sentido, la AP se ha propuesto avanzar en el proceso político, y a parte de las reuniones que realizan los Presidentes y Ministros, el 7 de Mayo de 2013 en los respectivos congresos de los Estados miembros se dieron los pasos iniciales para promover la constitución de un Parlamento de la AP. De modo que los Parlamentos acompañaran el proceso que permita lograr una integración profunda, en la que esperan la participación de otros Estados de ALC (SELA, 2013).

Sin embargo, como sucede en otros esquemas, se debe indicar que al no haber un compromiso supranacional de ningún órgano, en cierto modo, recae en la voluntad y buena sintonía de los presidentes el futuro de la institución, por lo que la debilidad y fragilidad de cara al futuro se hace presente en la AP (Malamud, 2012).

Por último, se debe señalar una última cuestión, y es que al igual que otras organizaciones de ALC, es relevante la inclusión en la AP de la cláusula democrática (Art.3), incidiendo en el compromiso institucional en la región con la democracia y aislamiento por parte de los procesos integradores a un Estado en el instante que rompa su compromiso con un modelo de Estado democrático.

⁶¹² El Art. 6 del Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico: “Las decisiones del Consejo de Ministros y otro acuerdos adoptados en el ámbito de la Alianza Pacífico, en desarrollo del presente Acuerdo Marco, serán parte integrante del ordenamiento jurídico de la Alianza del Pacífico” (Alianza Pacífico, 2011).

⁶¹³ Para más información véase en línea: http://alianzapacifico.net/documents/2014/ABC_ALIANZA_PACIFICO_2014.pdf. (Consulta realizada el día 24 de noviembre de 2014).

4.3.2.2 La Inversión Extranjera Directa y la reciente normativa en la Alianza Pacífico.

Aunque es pronto para indicar y analizar, con ciertas garantías, cómo va a proceder la nueva organización ante los conflictos en torno a la IED, sí existen indicios suficientes que indican el diseño normativo que implementa el esquema.

Al ser clara la adopción por parte de la AP de una estrategia de regionalismo abierto, en la que la promoción de la IED desde el exterior en el esquema, ejerce como eje sobre el que se adoptan las decisiones (de hecho en el 2012 la IED extra-regional en el área supuso cerca del 44% del total (SELA, 2013)), la adopción de TTLLCC y TTBBII es vista como la maniobra idónea para impulsar el acercamiento al mundo, presentando la adopción de éstos como signos de confianza a los mercados.

La adopción de estos instrumentos en los Estados que ahora conforman la AP, comenzó cuando durante los años 90 los Estados de México y Chile incentivaron su firma; hecho que se retrasó hasta los años 2000 en el caso de los Estados de Perú y Colombia. Las adopciones de estos mecanismos se realizó tanto con Estados miembros de ALC como con el resto del mundo, especialmente con los Estados de Norteamérica (EEUU y Canadá), Europa y Asia.⁶¹⁴

En cuanto a la normativa y el trato a otorgar a la IED, aunque sus integrantes ofrecen posturas divergentes ante instituciones como el CIADI, ya que por ejemplo México no pertenece al CIADI- aunque sí reconoce la labor del CIADI⁶¹⁵ como se ha evidenciado en disputas con EEUU -; Chile y Perú son miembros desde 1993; y Colombia desde 1997, recientemente la AP ha reconocido en su Protocolo Adicional del Acuerdo Marco (10 de Febrero de 2014) someter sus disputas al CIADI⁶¹⁶- si las partes así lo acuerdan y son miembros-. Asimismo, también han aceptado la resolución de disputas mediante las reglas del Convenio CIADI y el reglamento del CNUDMI. Además de lo cual, han introducido

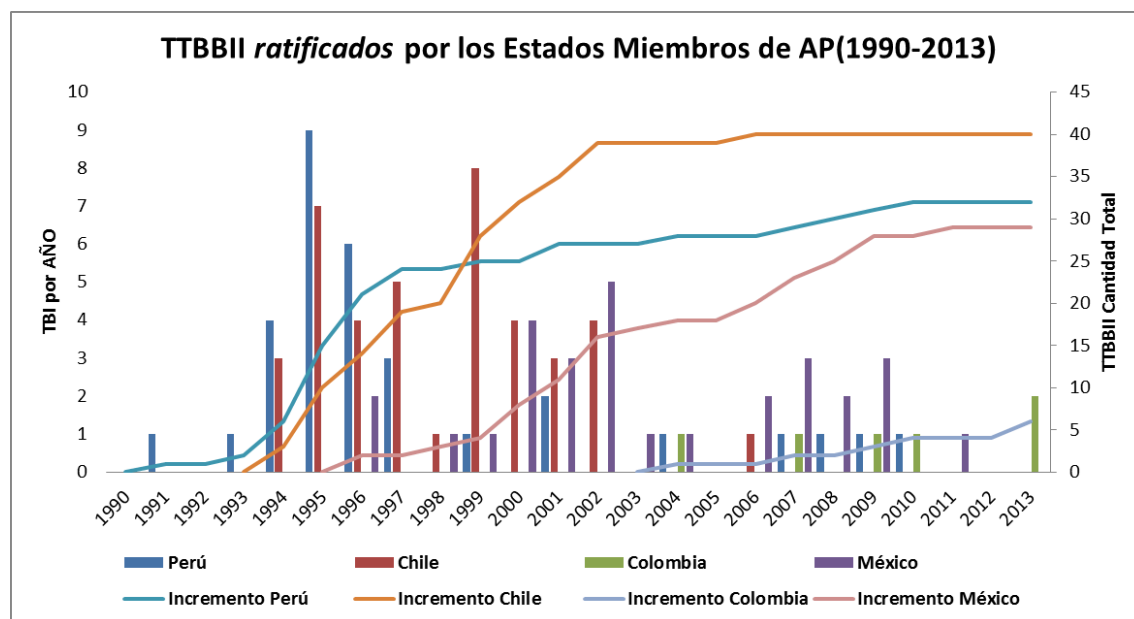
⁶¹⁴ En la actualidad estos pasos dados por la AP responden a un proceso de acercamiento a Asia por parte de la región, que viene produciéndose desde hace dos décadas. Por ejemplo: la participación en foros del Pacífico y de la OCDE, como el Foro de Cooperación Asia- Pacífico (Chile, México y Perú); el Acuerdo Transpacífico (Chile, México, Perú); el Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico (Ecuador, Chile, Colombia, México y Perú), evidencian el acercamiento de la región al área.

⁶¹⁵ Este reconocimiento lo constata el hecho de que en el Modelo de APPI (*Mexican Model of Investment Promotion and Protection Agreement*) que elaboró el Estado de México en 2008, se señala como órgano y reglas reconocidas a las contenidas en el CIADI, así como el reglamento UNCITRAL. Documento disponible en línea en: <http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/2860> (Consulta realizada el 12 de 09 de 2014).

⁶¹⁶ Véase Art. 10.16 del Protocolo Adicional del Acuerdo Marco (Alianza Pacífico, 2014, pág. 14).

en el articulado la posibilidad de recurrir a cualquier otro tipo de arbitraje si las partes así lo acuerdan. En este sentido, destaca que la AP ha mostrado su respeto por la legitimidad de los órganos instituidos para la resolución de disputas, dejando un espacio a otros acuerdos o instituciones en el futuro si así apareciesen.

Gráfica 10: Tratados Bilaterales de Inversión ratificados por los Estados miembros de AP (1990-2013).



Fuente: De elaboración propia a partir de datos en UNCTAD. <http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA> . (Consulta realizada el 23 de julio de 2014).

Al contrario que lo sucedido en el ALBA-TCP, en los AII que se han ido ratificando durante estos últimos años por parte de los miembros de la AP, se ha continuado incluyendo al CIADI como órgano de arbitrio.

En este sentido, hay que ser prudente e indicar que tres de los Estados miembros del AP forman parte de la UNASUR, y participan activamente en la promoción de un nuevo cuerpo de arbitrio regional. Y si a este hecho se añade que México ha sido otro de los Estados con un número mayor de denuncias por temas de IED dentro de ALC, se abre un espacio que posibilita la concertación en torno al impulso de un nuevo organismo.

En definitiva, la aparición de la AP indica claramente que, pese a que la región ha sufrido un giro hacia la concertación política durante los últimos años, la constitución de una nueva institución que aboga por políticas de libre comercio, evidencia de nuevo la fragmentación en cuanto a las decisiones de los Estados en sus prácticas político-económicas, tanto en la

relación interior como exterior. Y en este sentido, el abogar por el regionalismo abierto sitúa al área en cercanía con los postulados que promocionaron el apoyo a las prácticas de regulación externa de las disputas en torno a la IED, si así lo exigieran los inversores.

4.4 Instituciones de concertación política en América Latina y el Caribe: la Unión de Naciones Suramericanas y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

Más allá de las posturas particulares y visiones que hayan presentado y presenten los diferentes modelos de integración regional revisados, han aparecido nuevos organismos regionales que se caracterizan por ser inclusivos y promover la concertación política, sobre aquellos ejes que incidan en las prácticas políticas comunes de interés regional de los Estados miembros, sin importar el color del gobierno que se encuentre en cada Estado en un periodo concreto.

En la zona sudamericana la aparición de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) representa la adopción de esta práctica, que podría considerarse de integración “suave”, al incluir entre sus miembros a Estados pertenecientes a los diversos bloques (Estados miembros del ALBA-TCP, la CAN, el MERCOSUR o algunos miembros de la AP y el CARICOM).

Este organismo se presenta como el agente que pretende adquirir cierta capacidad de incidencia, mediante la promoción de concertación política, utilizando como mecanismo la implementación de directrices que impacten en las prácticas de los Estados miembros en Sudamérica. Pudiendo ser un organismo que impacte en prácticas de carácter regional al, consecuentemente, poseer la capacidad de influir en los otros esquemas regionales a través de los Estados.

A nivel regional, como se destacó en la introducción, destaca la aparición de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), agente que posee una relevancia suprema al ser el primer organismo político regional que cuenta con la participación de todos los Estados de la región, sin la presencia de agentes externos. Por lo que obviamente, adhiere todos los postulados ideológicos presentes en ALC.

4.4.1 La Unión de Naciones Suramericanas: De una apuesta económica a una integral. Un giro previsto.

“La Unasur no es un proceso de integración regional sino de cooperación,... que desde una perspectiva constructivista, complementada con aspectos neofuncionalistas, la institucionalización de un proceso de construcción regional contribuye a generar confianza entre los estados...” (Prieto, 2012, pág. 3).

4.4.1.1 Contextualización de la UNASUR

La UNASUR encuentra sus raíces en la celebración de la III Cumbre Sudamericana (Cusco), donde a partir de la constitución de la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN)- organismo antecesor a UNASUR-, en diciembre de 2004, se dio comienzo al propósito del Estado de Brasil de establecer un acuerdo comercial regional que hiciese frente al TLCAN en el continente, mediante un tratado que ligase los intereses de los dos bloques comerciales más grandes de Suramérica: la CAN y el MERCOSUR⁶¹⁷.

Es debido comenzar señalando que, si bien en un principio la ambición inicial fue constituir un agente económico, este proceso fue sufriendo transformaciones paulatinamente, hasta que se vio transversalizado por una incipiente preocupación regional sobre el poco avance y diversidad de objetivos presentes en los agentes regionales. Lo cual resultaba en una inoperancia práctica para concretar acuerdos de mínimos. Fue por ello que se incidió en la pertinencia de armonizar prioritariamente las prácticas políticas entre los diversos agentes.

A raíz de los pasos dados en ese sentido, el peculiar modelo integrador que adoptó este organismo ha sido denominado como un proceso de “regionalismo divergente” a los practicados anteriormente, ya que no atiende a la integración comercial como objetivo inicial y final, sino que se instaura como un instrumento de integración política (Sanchez Muñoz, 2012).

Desde sus inicios, ya en diciembre de 2003, la adopción de la Declaración de Cusco⁶¹⁸ trató de promover el comercio y las inversiones interregionales; la coordinación institucional

⁶¹⁷ Aunque no sea objeto de este estudio, es obligado hacer mención a la motivación de Brasil para potenciar esta institución. Al ser una potencia emergente como miembro de los BRIC, del G- 20 y como país aspirante a integra el Consejo de Seguridad de NNUU, en sus ambiciones era relevante asentarse como miembro de poder dentro del contexto sud-americano (Sanahuja J. A., 2012; Sánchez Muñoz, 2012).

⁶¹⁸ En la constitución de la CSN en diciembre de 2003, se firmaron acuerdos que perseguían la meta indicada por Brasil mediante la adopción del ACE 59, entre MERCOSUR y Colombia, Ecuador y Venezuela, que

entre los grupos; incentivar la integración de la infraestructura regional; y promocionar una mayor participación de la sociedad civil en la integración. Por lo que la agenda política ya fue indicada como prioridad institucional en sus inicios⁶¹⁹. De hecho, tres años más tarde, primeramente mediante la adopción de una “agenda prioritaria” en la Primera Cumbre en Brasilia (2005), y después con el proceso de definición de metas abordada en la II Cumbre en Cochabamba (2006), se instauraron las líneas de acción de la organización, dando “...preferencia a las agendas política, social, de defensa y seguridad” (Sanahuja, 2012, pág. 38).

El propósito de instaurar una organización en América de Sur que fuese capaz de articular mecanismos promotores unitarios y que impulsasen la estabilidad política en la región, condujo a un desenlace que dio origen a que en 2008 se constituyese la UNASUR como “...una organización dotada de personalidad jurídica internacional” (Art. 1, UNASUR, 2008)- entrando en vigor el 11 de marzo de 2011⁶²⁰-.

complementaba el ACE 36 (MERCOSUR- Bolivia) y el ACE 58(MERCOSUR-Perú). Acuerdos que trazaron una línea elemental para que un año más tarde, sin haber alcanzado un TLC, ambos bloques – más Chile, Guyana y Surinam- sellarán el nacimiento de la CSN por medio de la Declaración de Cusco 2003.

⁶¹⁹ Este hecho se evidenció cuando se marcó como meta el establecer un espacio regional con autonomía latinoamericana, haciendo alusión a las primeras ideas integracionistas presentes en los procesos de descolonización, como reflejan las declaraciones del ex-presidente de Perú, Alejandro Toledo, en la Cumbre:

“Estamos aquí para volver realidad el sueño de Simón Bolívar... Pronto tendremos una sola moneda, un solo pasaporte... Pronto tendremos un parlamento con representantes directamente elegidos por esta nueva nación que estamos creando hoy” (Comunidad Sudamericana de Naciones, 2006).

Así como la declaración del asesor de política externa del presidente Lula da Silva de Brasil:

“O Brasil compreendeu que **somente por intermédio do comércio não se resolvem os problemas da construção de uma América do Sul integrada, justa e democrática. Ao contrário, a integração comercial pode, nas circunstâncias atuais, agravar as assimetrias** entre países mais desenvolvidos e de economia mais complexa e diversificada, como o Brasil e a Argentina, de um lado, e os demais, de outro” (García, 2012) [**Negrita propia**]

La primera declaración promoviendo la creación de una institución con características de supranacionalidad al ser elegida por los ciudadanos, y la segunda aludiendo a la necesidad de proceder a una integración política, lo que Claudio Katz (2008) denomina unidad.

⁶²⁰ En su Tratado Constitutivo se señala:

“APOYADAS en la **historia compartida** y solidaria de nuestras naciones, multiétnicas, plurilingües y multiculturales, que **han luchado por la emancipación y la unidad suramericana**, honrando el pensamiento de quienes forjaron nuestra independencia y libertad a favor de esa unión y la construcción de un futuro común;

RATIFICAN que tanto la **integración como la unión suramericanas se fundan en los principios rectores de: irrestricto respeto a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial de los Estados**; autodeterminación de los pueblos; solidaridad; cooperación; paz; **democracia**; **participación ciudadana y pluralismo**; derechos humanos universales, indivisibles e interdependientes; **reducción de las asimetrías** y armonía con la naturaleza para un **desarrollo sostenible**” (UNASUR, 2008) [**Negrita propia**].

Es por ello que la constitución de la UNASUR ha significado la institucionalización de la relaciones de los países de América del Sur⁶²¹, a partir de un proyecto que abarca no solo cuestiones económicas- como evidencia el observar la presencia de países con visiones diversas acerca de asuntos primordiales en la práctica institucional y las RRII como son la economía y la política-, sino que se trata de un proceso en donde se significa una concertación de voluntades con el propósito de articular mecanismos que ligen a la región en diversos temas de interés común. Puesto que la UNASUR posee la ambición de ejercer como mecanismo de integración multidimensional. Pues si bien su naturaleza es considerada política en la actualidad, la creación de Consejos Sectoriales en su estructura, deja ver con claridad el trabajo multinivel que pretende abarcar en la comunidad. Doce Consejos con diferentes funciones que se asemejan a los ministerios de los que disponen cada uno de los Estado particularmente⁶²².

En este sentido, si bien la I y II Cumbres de UNASUR dieron cuenta de las diferencias existentes entre los Estados miembros - debido primeramente a la no asistencia del Presidente de Colombia Álvaro Uribe a la primera Cumbre y por las divergencias en la segunda en torno a las propuestas que realizaron los Estados de Bolivia y Venezuela-; las siguientes Cumbres volvieron a operar con normalidad y fueron aprobadas conjuntamente las agendas que incidían en la articulación de mecanismos en asuntos comunes.

Ya en la IV Cumbre George Town (2010) se abordaron los temas de DDHH y la seguridad regional; en la V Cumbre en Paraguay(2011) la consolidación de los tareas de los Grupos de Trabajo; y en la VI Cumbre en Perú(2012) las dieciséis *Decisiones*, que incidían en la creación de instituciones integradoras que compartan competencias en cuestiones como el apoyo e institucionalización de la salud (Nº 2/2012); la infraestructura (Nº 5/2012); la alineación en la relaciones con terceros (Nº 6/2012); la seguridad (Nº 10/2012; Nº 14/2012); la democracia(Nº 15/2012); y la gestión de la ciudadanía Suramericana (Nº

⁶²¹ Estados miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

⁶²² Entre los consejos se encuentran los siguientes: 1- Consejo Energético Suramericano; 2- Consejo de Defensa Suramericano; 3- Consejo de Salud Suramericano; 4- Consejo Suramericano de Desarrollo Social; 5- Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento; 6- Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas; 7- Consejo Suramericano de Economía y Finanzas; 8- Consejo Electoral de UNASUR; 9- Consejo Suramericano de Educación; 10- Consejo Suramericano de Cultura; 11- Consejo Suramericano de Ciencia, Tecnología e Innovación; 12- Consejo Suramericano en materia de Seguridad Ciudadana, Justicia y Coordinación de Acciones contra la Delincuencia. Véanse funciones de los Consejos en línea: <http://www.unasursg.org/inicio/organizacion/consejos-sectoriales> (Consulta realizada el 12 de marzo de 2013).

8/2012), junto con la atención a la elaboración de una estrategia regional que oriente el grupo hacia un aprovechamiento de los RRNN por parte de la región.

En cierta medida se podría indicar que la UNASUR está tratando de dar respuesta a aquello que fue señalado como primera meta institucional en la Declaración de Cochabamba, cuando se incidía en la necesidad de articular un nuevo modelo de integración para el siglo XXI, que fuese capaz de responder a los sucesos externos que habían impactado en la región tras el fin de la bipolaridad y el impacto de la globalización mundial. A raíz de lo cual la UNASUR, preocupada por las asimetrías existentes, tanto a nivel Global como regional, indicaba en la propia “Declaración de Cochabamba. Colocando la Piedra Fundamental para la Unión Sudamericana” (2006) que:

“La construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones busca el desarrollo de un espacio integrado en lo político, social, cultural, económico, financiero, ambiental y en la infraestructura. Esta integración sudamericana no es sólo necesaria para resolver los grandes flagelos que afectan a la región, como son la pobreza, la exclusión y la desigualdad social persistentes, que se han transformado en los últimos años en una preocupación central de todos los gobiernos nacionales, sino que es un paso decisivo para lograr un mundo multipolar, equilibrado, justo y basado en una cultura de paz” (UNASUR, 2006) [Negrita propia].

En términos de articulación del poder en la comunidad, la UNASUR ha mostrado un respeto contundente hacia la soberanía de los Estados- como se señala en el preámbulo del Tratado-, que, más allá de responder a una actitud particular, responde a la línea actitudinal que opera en la región. En la que los Estados evidencian sus reticencias a la cesión de competencias, ya que persiguen mantener intactos los principios de soberanía nacional⁶²³. Y de ahí que los modelos de integración operen con sistemas de toma de decisiones intergubernamentales.

La UNASUR también se suma a esta línea de acción en términos de prácticas articuladoras de los procesos integradores, y ejerce su toma de decisiones de un modo intergubernamental. En donde la normativa dictaminada a través de los procesos decisorios no será aplicable hasta que los Estados hayan procedido a su integración en sus respectivos

⁶²³ En este sentido indica el profesor Sanahuja que este asunto: “...forma parte del gran “trilema” que existe en ALC: La integración efectiva; la búsqueda de autonomía como actor internacional y la presencia del Estado-Nación y la reserva soberana” (Sanahuja, 2012, pág. 62) [Negrita propia].

ordenamientos jurídicos. No siendo las directrices de obligado cumplimiento. Evidenciándose, por tanto, un respeto por la soberanía interna de cada Estado.

Sin embargo, en el corto periodo de vigencia, la UNASUR ha mostrado ciertas actitudes que indican la cobertura de acción que pretende alcanzar. Ésta la revelan diversos sucesos en los que ha jugado un rol de agente regional como: la manifestación de apoyo al presidente de Bolivia Evo Morales ante la amenaza del conflicto interno sucedido en 2008, que lejos de intentar influir en la soberanía interna boliviana significaba el apoyo institucional a los procesos democráticos en la región⁶²⁴ (Regueiro & Barzaga, 2012); el papel ejercido en relación con la instalación de bases militares norteamericanas en Colombia durante 2009, que si bien fue un claro conflicto entre Colombia y otros Estados, en el que se respetó la decisión de Colombia, la UNASUR actuó y se manifestó en una cuestión de seguridad, al señalar que las instalaciones militares en la región eran un tema de *soberanía regional*, ya que la seguridad militar constituía la presencia de intereses extranjeros en la región (Kan, 2010, págs. 95-96); la declaración ocurrida en 2010 por parte de la UNASUR en apoyo al proceso constitucional de Ecuador, cuando sucedió la retención de Rafael Correa, evidenciando su rechazo a estas prácticas características del pasado.

Asimismo, la organización se ha manifestado en cuestiones como la Declaración ocurrida el 17 de marzo de 2012 rechazando la presencia militar de Reino Unido en las Islas Malvinas por parte del Consejo (Regueiro & Barzaga, 2012); o el apoyo a el 19 de agosto por medio de otra declaración al gobierno de Ecuador respecto al caso de Julian Assange⁶²⁵ (SELA, 2012, pág. 22). Actitudes y acciones que muestran y son indicativas de que como organización la UNASUR pretende implementar la concertación de políticas en todas aquellas prácticas que incidan en cuestiones de estabilidad regional.

De igual modo, otros asuntos como el impulso al Plan de Acción del Consejo de Defensa Suramericano, que pretende estudiar la posibilidad de establecer una Agencia Espacial

⁶²⁴ En este caso se creó la “Comisión de la UNASUR para el esclarecimiento de los hechos de Pando” que, resultado del debate, creó un informe considerado como contribución de UNASUR al Estado de Derecho y la Justicia. Así mismo, esta declaración evidencia que ante la comparativa con los hechos ocurridos en Venezuela en 2002 con el intento de golpe de Estado, la diferencia respecto al comportamiento de la OEA es notable, que en aquel caso no emitió comunicación alguna.

⁶²⁵ El caso *Wikileaks* y el asilo político concedido a la figura de Julian Assange por el Estado ecuatoriano ha sido uno de los hechos que han evidenciado el ascenso tácito del poder internacional por parte de Ecuador, y consecuentemente de ALC en el contexto de las RRII. Puesto que a pesar de las presiones internacionales (más concretamente de los EEUU), el país ha mantenido su compromiso con el periodista (Washington Post, 2012).

Suramericana, indican un paso adelante en la construcción de solidez institucional y unitaria a la UNASUR, y a la región suramericana⁶²⁶.

En conclusión, la UNASUR representa un modelo de integración que pretende, más allá de postulados ideológicos en el cómo se debe operar económicamente, aunar y concertar ideas que impulsen estabilidad regional, mediante la construcción de confianza. Asimismo, que sirva como trampolín a la implementación de concertación en otras áreas y que permita a la subregión suramericana instituirse como espacio de decisión autónoma en las RRII.

4.4.1.2 Más allá de políticas ideológicas: La emergencia de un cuerpo regional en la Unión de Naciones Suramericanas para abordar la normativa en temas de Inversión Extranjera Directa.

La meta institucional de la UNASUR no ha sido, en parte debido al devenir de los hechos, ni la integración económica, ni el aunamiento de capacidades decisorias en cuestiones de inversiones ocurridas en el interior de espacio territorial que comprende la comunidad. Sin embargo, en relación con la afirmación de *soberanía regional* en el caso de la seguridad, sí se detectan acciones recientes en el seno de la UNASUR que han aludido a la pertinencia de analizar la posible creación de un órgano judicial regional con atribuciones para dictaminar en disputas de IED, que se produzcan tanto en el interior de la región, como aquellas en las participen Estados miembros con el exterior.

En este sentido cabe señalar, que si se considera que la UNASUR en su conjunto recepta la mayor parte de la IED de ALC, al suponer un 70,54% en 2013 (siendo un 80,22% en 2012)⁶²⁷; así como el que la UNASUR integra a Estados pertenecientes a todos los demás esquemas de integración regional, la acción de impulsar una normativa que regule las relaciones intra-regionales y de la región con el exterior en temas de IED, posee un gran impacto y significa una acción de empoderamiento soberano, en el sentido que lo indicaba Suárez (1965[1613]), al enjuiciar las disputas sucedidas en un territorio que se considera propio.

⁶²⁶ En este sentido, son contundentes y aclaratorias las manifestaciones que ofreció el presidente de Ecuador sobre la ambición de la UNASUR: “Buscamos construir una nación de naciones”. Manifestaciones disponibles en línea: <http://www.youtube.com/watch?v=cSky1utKP80#t=269> (Consulta realizada el día 12/08/2013).

⁶²⁷ Cálculos propios a partir de datos de la base de datos de UNCTAD. En línea en: <http://unctadstat.unctad.org/EN/> (Consulta realizada el 22 de septiembre de 2014).

Pues bien, en el seno de la UNASUR este proceso de construcción de capacidad de decisoria regional se está significando, con el reciente análisis acerca de la pertinencia de crear un Centro de Solución de Controversias en Materia de Inversiones, acontecido en la VII Reunión del Grupo de Trabajo de Expertos de Alto Nivel de Solución en materia de inversiones UNASUR.

Esta iniciativa se articula como respuesta suramericana al hecho de que ALC ha sido la región que, habiendo sido la mayor suministradora de insumos y materias primas a las EETNN globales, es la que acumula mayor número de litigios⁶²⁸. Es por ello, que la articulación de este mecanismo persigue otorgar a “Sudamérica” la capacidad regional de emitir resolución en disputas e instaurar un mecanismo de resoluciones de acontecimientos en suelo regional en tribunales regionales, tanto en temas de inversiones como comerciales. Lo que significaría, según el Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, un acto claro de recuperación de *soberanía regional*; así como actuaría como respuesta a las demandas que señalaban en la región la parcialidad de los órganos creados al auspicio de los mercados, tratando de instituirse como un centro que actúe con “...imparcialidad, reglas claras y soberanía compartida”, tratando de fomentar el desarrollo sostenible, e indicando que la única salida al conflicto entre la IED y los Estados de ALC, es una salida regional (Cancillería de Gobierno de Ecuador, 2014)⁶²⁹.

4.4.2 La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños: El organismo colector del anhelo unitario latinoamericano: origen y finalidad.

La conjunción de voluntades expresada en la constitución de la CELAC por parte de los mandatarios de los 33 Estados que componen la región de ALC, sin la presencia de actores externos, es un hecho sin precedentes. Pero más allá de ese hecho fundamental, el elemento que otorga mayor entidad a la constitución de esta comunidad, es el acuerdo mostrado por todos los presidentes- o altos representantes en caso de no poder asistir los primeros ministros de los Estados miembros- que, sin importar la línea política del gobierno de turno, incidieron en la necesidad de armonizar las capacidades regionales en

⁶²⁸ Según la UNCTAD (2013), entre Argentina, 52 casos; Bolivia, 9 casos; Ecuador, 23 casos; México, 21 casos; y Venezuela, 34 casos, acumulan el 33% de los casos conocidos. (UNCTAD, 2013).

⁶²⁹ Véase video: “UNASUR analiza la creación de un Centro de Solución de Controversias en Quito” en línea: <http://www.youtube.com/watch?v=4KZHgPf4y7Y> (Consulta realizada el 20 de julio de 2014).

aras de empoderar a la región y situar a ALC como un ente competente en el contexto internacional.

Algunos ejemplos representativos de la convicción acaecida en la reunión por parte de los Estados miembros, es fácilmente detectable en las diversas manifestaciones que fueron realizadas durante la celebración de la I Cumbre de la CELAC ocurrida en Caracas el 3 de diciembre de 2011. Por ejemplo:

- **Sebastián Piñera**, (Presidente de Chile) perteneciente a partido *Renovación Nacional de Centroderecha* de Chile dijo: “las soluciones a los problemas en Latinoamérica están en la unión”; “...la unidad de la CELAC es un factor fundamental... [en el pasado] nos quedamos atrapados en diferencias ideológicas...juntos encontraremos soluciones útiles concretas y factibles...trazar esos caminos que nos van a conducir a lo que durante 200 años no hemos logrado”.
- **Rafael Correa**, (Presidente de Ecuador) fundador y miembro del partido político *Alianza País*, dijo: “la patria grande no es solución, es un proyecto vital, de supervivencia”.
- **José Mujica**, (Presidente de Uruguay) perteneciente al *Frente Amplio* (partido considerado de izquierda) manifestó: “...la situación que se está viviendo hoy en ALC no tiene comparación en la historia... gente que piensa muy distinto que está de acuerdo que debemos vivir juntos nunca se dio... el mundo se está organizando en grandes organizaciones... nos empuja la necesidad de defendernos y todos instintivamente tenemos conciencia de que para ser fuertes nos tenemos que juntar”.
- **Daniel Ortega** (Presidente de Nicaragua) perteneciente al *Frente Sandinista de Liberación Nacional* (Izquierda), manifestó: “Esta comunidad de Estados latinoamericanos se está haciendo realidad...” “Es una gran victoria de nuestros pueblos y es una derrota para las fuerzas que apostaban en contra de la unidad y apostaban por la división de América Latina”.
- **Cristina Fernández Kirchner**: (Presidenta de Argentina). *Frente para la Victoria*, manifestó: “...deberíamos abordar una integración , pero no contra nadie [una integración por nosotros]”
- **Juna Manuel Santos Calderón** (Presidente de Colombia). Miembro del *Partido Liberal Colombiano* (Centro-derecha), dijo: “Esta comunidad pues, será el eje de la unión a la que aspiramos todos los habitantes, estoy seguro, de la América y el Caribe nuestro. Unión ¿para qué? Unión para defender la democracia...Unión para impulsar el progreso, de nuestros pueblos y en particular la prosperidad y la competitividad de América Latina y el Caribe... Debemos apresurar el paso para la

integración, no sólo en el ánimo y en la alegría sino en la integración...económica. Mientras más integrados estemos entre nosotros, tendremos y compartiremos más nuestro crecimiento...”.

- **Álvaro Colom**, Presidente de Guatemala (2008-2012) dijo en la II Cumbre de la CELAC: “...lo que hace falta es pasar de lo subregional a regional...”;
- **Fernando Lugo**: Presidente de Paraguay (2008-2012), manifestó: "Esta integración en un plano de soberanía cuenta con importantes avances en nuestra región y se está constituyendo a partir de la superación de nuestras diferencias"; "Hemos comprendido que nuestras realidades son una sola, complejas y diversas en su totalidad y unimos nuestras voluntades en una voz colectiva para lograr soluciones conjuntas a nuestras problemáticas comunes”.
- **Felipe Calderón**: Presidente de México, manifestó:” Dos siglos después el ideal de Bolívar nos es común a todos los latinoamericanos y caribeños...” “...la integración, la unidad política, económica, social y cultural de la región es una aspiración viva y fundamental de nuestros pueblos”.

Fuente: Segunda Plenaria Presidencial de la Cumbre de la CELAC.: 1) Parte I: <http://www.youtube.com/watch?v=th1TqCvWNqI>; Parte II: <http://www.youtube.com/watch?v=UqtHtSu352c> . (Consultas realizadas el 23 de junio de 2013).

Las ideas señaladas en la Cumbre incidían en los anhelos unionistas históricos, señalados reiteradamente como se ha señalado en el capítulo IV, indicando la pertinencia y necesidad de promover la concertación política en la región. Éstas son muy significativas por dos cuestiones: por una parte porque evidencian la presencia regional del anhelo de asociación histórico entre las partes; y por otra, porque señalan la existencia de una problemática operativa en la articulación del proceso integrador. Indicando que las diferencias ideológicas han actuado como freno del proceso unionista y que esta comunidad debe instar a las partes a superar las diferencias que puedan existir puntualmente, debido a la natural alternancia política en los gobiernos, una vez asentada la democracia en la región. Además, una tercera cuestión que es rescatable de las declaraciones, es la existencia de una meta común a los Estados miembros: el empoderamiento regional frente al exterior.

4.4.2.1 Contextualización de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

Para encontrar el origen institucional de la CELAC hay que remontarse, primeramente, a 1983 cuando el Grupo Contadora comenzó su andadura. Si se establece una linealidad

desde ese instante hasta la actualidad, hay que señalar que el proceso ha ido sufriendo diversas mutaciones transformándose primeramente en el Grupo de Río; dando origen tras éste a la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CLAC); y ampliando su cobertura en los inicios del segundo decenio del nuevo siglo en el citado proyecto la CELAC.

En sus inicios en 1983, el Proceso Contadora se articuló como un mecanismo que buscaba dar respuesta a la ausencia de representatividad de los Estados latinoamericanos en la OEA. No se percibía que la organización, que se suponía encargada de ejecutar una práctica política para la resolución de conflictos entre los Estados del continente, estuviese ejecutando ese rol a la vista de los hechos ocurridos. Principalmente por dos acontecimientos. El primero, los sucesos ocurridos en torno a las Malvinas con la guerra con Reino Unido, en donde los EEUU no habían respondido en defensa de los Estados miembros, no atendiendo en este caso al compromiso adquirido dentro del TIAR; y segundo, ante la no intervención en los conflictos que se habían despertado en Centroamérica (Durán, 1984).

A raíz de esta percepción negativa sobre el rol que ejercía en los conflictos la OEA, los gobiernos de Colombia, México, Panamá y Venezuela, decidieron establecer un sistema de acción conjunta que promoviese la paz en los conflictos que se estaban produciendo en Centroamérica, por lo que resolvieron la adopción del Acta Contadora⁶³⁰.

Si bien en principio el Acta de Contadora pretendía recoger el apoyo de todos los Estados del continente, únicamente logró el de los países democráticos de América Latina, como se evidenció en la creación del Grupo de Apoyo Contadora, formado por los Estados de Argentina, Brasil, Perú y Uruguay en 1985, en donde los EEUU fueron excluidos por dos motivos. Por una parte debido a su negativa a reconocer el gobierno de Nicaragua, al que tildaban de comunista; y por otra y más significativa, por su negativa a manifestar su renuncia “total” a las intervenciones militares en la región (Durán, 1984).

Los esfuerzos de Contadora fructificaron en la firma de la Paz de Esquipulas en 1986 (Zamora, 1997). En principio el acuerdo asentó las bases sobre las que articular mecanismos de concertación, en aras de lograr estabilidad en términos de paz en Centroamérica. Pero a medida que se iba asentando el pacto como mecanismo, se

⁶³⁰ Las guerras entre el Salvador, Nicaragua y Guatemala.

despertaban diversos contextos de interés regional que reclamaban una mayor concertación. Esto provocó que se produjese, el 18 de diciembre de ese mismo año (1986), una reunión de los cancilleres de los países miembros del Grupo de los Ocho - Grupo Contadora y Grupo de apoyo Contadora⁶³¹-, que fructificó en la conjunción de voluntades en torno a la necesidad de articular un proceso de concertación regional en temas de seguridad. Significándose el acuerdo en la Declaración de Río de Janeiro⁶³². Lo que dio comienzo a un nuevo proceso regional, que tuvo como primer objetivo el crear un mecanismo permanente de consulta y concertación política de ámbito regional (SELA, 2012).

A la par que se iban asentando los sistemas democráticos como forma de gobierno en el territorio regional y en aras de ampliar las coberturas del Grupo de los Ocho, en 1990 se volvió a cambiar la denominación del acuerdo, adoptando esta vez el nombre de Grupo Río. El nuevo acuerdo significó principalmente una ampliación en la cobertura temática del Grupo, como se revela en la agenda de objetivos:

“ a) ampliar y sistematizar la cooperación política entre nuestros gobiernos; b) examinar las cuestiones internacionales que sean de especial interés para nuestros gobiernos, y concertar posiciones comunes en relación con las mismas, particularmente en los foros internacionales; c) promover el mejor funcionamiento y la coordinación de los organismos latinoamericanos de cooperación e integración; d) propiciar soluciones propias a los problemas y conflictos que afectan la región; e) impulsar iniciativas y acciones destinadas a mejorar, mediante el diálogo y la cooperación, las relaciones interamericanas; f) impulsar los procesos de cooperación e integración en América Latina; g) explorar conjuntamente nuevos campos de cooperación que favorezcan el desarrollo económico, social, científico y tecnológico de nuestros países; y h) examinar la conveniencia de la oportunidad de proponer reuniones de Jefes de Estado de nuestros países” (Citado en Altmann (2008, págs. 10-11)).

⁶³¹ El Grupo Contadora lo formaron tras el Pacto Contadora los Estados de Colombia, México Panamá y Venezuela en 1983. Tras dos años de operatividad, en 1985, se estableció un Grupo de Apoyo a Contadora formado por Argentina, Brasil, Perú y Uruguay, con lo que se extendía la capacidad de acción así como la aceptación de criterios para la región de ALC (SELA, 2012).

⁶³² La Declaración señaló como evento indicativo respecto al cambio que vivía la región que:

“...el surgimiento de la democracia en América Latina permite un intenso diálogo político en el que se reafirma la necesidad de conjuntar esfuerzos y capacidades para encontrar soluciones propias a nuestras dificultades e impulsar el desarrollo independiente y sostenido en la región, nos une el propósito de fortalecer la democracia a partir de un vigoroso desarrollo económico y social de nuestra región, basado en un creciente proceso de cooperación e integración en América Latina” (Grupo Río, 1986).

Los objetivos impulsaron un proceso que se significó en propuestas concretas por parte de los Estados con mayor peso económico en la región, los cuales adoptaron el rol de líderes: México y Brasil.

La iniciativa mexicana se fructificó en propuesta cuando, en la Cumbre de Turkeyen del Grupo de Río celebrada en 2007, el presidente de México manifestó lo apropiado de constituir una Comunidad de Naciones Latinoamericanas y Caribeñas, que ejerciese de foro de consulta regional. Antes de que pasase un año, éste realizó una petición oficial en las reuniones de los coordinadores de trabajo del Grupo de Río en 2008, ratificándose en su iniciativa en 2009, mediante el lanzamiento de la propuesta de México para conformar una nueva organización regional (SELA, 2012).⁶³³

La denominación que se propuso para la organización en la propuesta mexicana fue la Unión Latinoamericana y del Caribe (ULC). Los principios que debían actuar de pilares de la concertación en dicha unión serían: la solidaridad, la flexibilidad, la pluralidad, la diversidad, la complementación de acciones. En donde toda la participación activa en los acuerdos estaría sujeta a una participación voluntaria en las acciones- meta que lega en la CELAC- (Rojas Aravena, 2012).

En un principio, pareciere que se pretendía atribuir a la comunidad la función de promover, como entidad regional, un orden internacional más justo, equitativo y armonioso, centrando su crítica en el respeto a elementos que habían constituido un ejercicio de reclamo por parte de los Estados en ALC históricamente: el respeto por la igualdad soberana -asegurando igualdad de los Estados en su práctica-; el respeto por la integridad; y la no intervención en asuntos de índole interno. En definitiva, las bases de la propuesta mexicana significaban un impulso a la creación de un nuevo foro a partir de las funciones que desarrollaba el Grupo de Río (Rojas Aravena, 2012).⁶³⁴

La propuesta brasileña se rubricó en el año 2008, en la primera Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC). En donde por encima de otras cuestiones fue señalada la importancia de situar a la región como un ente de referencia en

⁶³³ La propuesta fue presentada durante la Tercera Reunión de Coordinadores Nacionales dentro de las labores del Grupo de Río el 27 de marzo de 2009.

⁶³⁴ Las funciones del Grupo de Río eran: diálogo y concertación; interlocución con otros actores; concertación de posiciones comunes en foros internacionales; impulso a la agenda latinoamericana y caribeña en foros globales; posicionamiento de ALC ante acontecimientos relevantes; y convergencia de mecanismos subregionales de integración (Rojas Aravena, 2012, pág. 4)

las RRII. Por lo que pareciere que el objetivo institucional era adquirir capacidad de acción autónoma frente a otros Estados y agentes en la CI⁶³⁵.

El devenir de los acontecimientos significó la construcción de los pilares necesarios para la instauración de una organización de cobertura regional. Pilares que verían su fructificación en el año 2010, cuando en la XXI Cumbre de Río (también denominada Cumbre de la Unidad), celebrada en la Riviera Maya (Cancún-México) los días 22 y 23 de febrero de ese mismo año, se acordó dar un paso en la evolución institucional mediante la constitución de la CLAC. Indicando al respecto que, en este nuevo espacio de concertación, ningún país externo tomaría parte. Signo que incentivaba la percepción de que la CLAC se significaría como una causa y un efecto de la presencia de una identidad latinoamericana y caribeña. De hecho, la identidad se instauraría como el elemento articulador de la unión e integración institucional, como evidencian los objetivos allí enunciados⁶³⁶ (Rojas Aravena, 2012).

Al consensuarse entre los Estados de ALC, la constitución de una comunidad regional tras la XXI Cumbre de Río, se optó por abordar otra transformación denominadora, en donde el Grupo de Río y la CALC resultasen en un solo ente. Se constituyó la CELAC durante la celebración los días 2 y 3 de diciembre de 2011 en la I Cumbre de Caracas.

Una de las notas relevantes y significativas de la declaración allí resultante, fue el título reivindicativo de la Cumbre. En él se expuso institucionalmente una postura reivindicativa de potestad, al hacer referencia al anhelo histórico de independencia: “En el Bicentenario

⁶³⁵ Señalan diversos autores que el rol que Brasil ha jugado en la región ha estado impulsado por el objetivo de potenciar su papel como actor internacional (Sanahuja, 2008-2009; Serbin, 2010; Rojas Aravena, 2012). Meta para la que ha adoptado una estrategia de implementación de sus relaciones con la región, no sólo como un actor influyente en las relaciones económicas y políticas a través de MERCOSUR y la UNASUR, sino mediante la implementación de esos vínculos a nivel regional promoviendo que la región sea un territorio estable. Idea que impulsó la convocatoria de la CALC. De hecho, la CLAC fue la primera cumbre en la que se sentaban todos los jefes de Estado y de Gobierno de ALC sin la presencia de un Estado externo, hecho que situaba a Brasil como el actor impulsor en la nueva fase de integración regional.

⁶³⁶ En términos generales las ambiciones presentes en la Declaración de Salvador, Bahía. I Cumbre América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (2008) se resumen en los siguientes temas prioritarios: **Profundizar la integración regional** y establecer compromisos efectivos de acción conjunta para la promoción del desarrollo sostenible de sus pueblos; Fortalecer la cooperación en áreas de interés común; Construir un espacio común con el propósito de profundizar la **integración política, económica, social y cultural de nuestra región** y establecer compromisos efectivos de acción conjunta para la promoción del desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe; Convencidos de que la región de **América Latina** y el Caribe debe seguir reafirmando su presencia en los foros de los que **forma parte y pronunciarse sobre los grandes temas y acontecimientos de la agenda global**; **Intensificar** el diálogo, la interacción y la sinergia entre los mecanismos regionales y subregionales de **integración en América Latina y el Caribe** para profundizar la integración y acelerar el desarrollo mediante la articulación de proyectos comunes y complementarios; Identificar e implementar estrategias de cooperación Sur-Sur y Triangular que potencien los esfuerzos en el ámbito de la cooperación técnica entre los países de la región.; Profundizar la coordinación de posiciones para proyectar una visión **común de América Latina y el Caribe en diálogos externos** (CALC, 2008)[**Negrita propia**].

de la lucha por la independencia hacia el camino de nuestros libertadores”. Es relevante rescatar la importancia del mismo, puesto que revelaba una cuestión con claridad. Y es que como indicó el Presidente de Uruguay Mujica, se pretendía iniciar una especie de nuevo proceso de independencia⁶³⁷.

Máxima notabilidad obtuvo el hecho de que los líderes firmasen un documento que sostiene que los gobiernos están:

“Convencidos de que la Unidad e integración política, económica, social y cultural de América Latina y el Caribe constituye, además de una aspiración fundamental de los pueblos aquí representados, una necesidad para enfrentar con éxito los desafíos que se nos presentan como región” (CELAC, 2011).

Siendo ante la aspiración de esta meta, una necesidad regional concertar capacidades para afrontar los diferentes desafíos compartidos.

Por otro lado, al hacer referencia a los inicios de independencia y a los proyectos unificadores, se manifiesta la intención de promover la concertación de voces en una sola hacia el exterior; se refleja la consciencia de la potencialidad regional en el contexto actual de las RRII; se admite la plurinacionalidad latinoamericana y caribeña; se declara el respeto a la soberanía interna y la no injerencia; y se alude a la determinación regional en la promoción de mecanismos para instaurar un desarrollo sostenible (CELAC, 2011). Lo que significa en definitiva que la CELAC declara que ambiciona establecerse como un “...mecanismo representativo de concertación política, cooperación e integración de los Estados latinoamericanos y caribeños y como un espacio común que garantice la unidad y la integración de la región” (CELAC, 2011).

En cuanto al modo por el cual se pretende alcanzar las metas señaladas, en sus primeros días la CELAC decidió instaurar mecanismos que otorguen cierta solvencia al proceso, mediante la constitución de seis órganos intergubernamentales capacitados de decisión en seis niveles: 1) La Cumbre de Jefes y Jefas de Estado; 2) la Reunión de Ministros de relaciones Exteriores; 3) la Presidencia Pro Témpore; 4) la Reunión de coordinadores Nacionales; 5) las reuniones especializadas; y 6) la troika.

⁶³⁷ Declaración realizada durante la I Cumbre de la CELAC en Caracas (Dic-2011).

De la Cumbre de Caracas se recogen dos asuntos que apuntan a ser aquellos que poseen mayor relevancia para la institución: uno, se reafirmó un cierto sentido de *soberanía regional* (Rojas Aravena, 2012); y dos, se declaró la necesidad de profundizar en mecanismos de cooperación intrarregional que primen sobre acciones externas en suelo interno⁶³⁸.

Los ambiciones indicadas en la constitución de la comunidad se constatan al observar la nueva dimensión que toman las relaciones regionales, en las que se señalan qué factores son elementales para la articulación del proceso: 1º) la democracia pasa a ser determinante para formar parte de la CELAC; 2º) la CELAC dota de un mayor grado de institucionalidad a la región que los procesos subregionales existentes; 3º) la integración regional es objetivo primario de la institución; y 4º) la CELAC presenta un multinivel agudo debido a la presencia de acuerdos subregionales y bilaterales en la región, en el que pretende establecerse como el agente que logre articular esas relaciones mediante la promoción de concertación de prácticas.

En todo caso, la constitución de la CELAC representa- en palabras de Andrés Serbin - una nueva forma de regionalismo e integración (Serbin, 2010), que prioriza la agenda política por encima de la económica, en donde, al igual que la UNASUR, posee una clara tendencia a instituirse como foro que trate más las cuestiones políticas que las comerciales.

Sin embargo y por último, señalar que aunque se indique que la CELAC no infiere en cuestiones económicas, en el seno de la comunidad se están estudiando la manera de desarrollar y mejorar mecanismos monetarios y financieros que compongan una arquitectura financiera regional, para que actúen como alternativa a las IFI en la región. A este respecto la SELA valoró como positivo los acuerdos adoptados que encaminan los trabajos hacia una estrategia colectiva que permita, a partir de la implantación de

⁶³⁸ En este sentido, es reflejo de la unidad que la CELAC pretende asumir la representación de ALC en la política exterior. Como acto inicial de este proceso, la primera acción que salió de la Cumbre dirigida hacia los EEUU, abordando un tema que ha sido considerado como injerencia en la soberanía de una parte de ALC en el país de Cuba, fue el Comunicado Especial sobre la necesidad de poner fin al Bloqueo Económico, Comercial y Financiero de los Estados Unidos contra Cuba que se produjo en Caracas y que, en cierta modo, da luz a una acción en una cuestión delicada. Manifestaron que:

“Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe, reunidos en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el 3 de diciembre de 2011, en el marco de la Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) expresan su más enérgico rechazo a las medidas económicas coercitivas y unilaterales aplicadas por motivos políticos contra países soberanos, que afectan el bienestar de sus pueblos y están concebidas para impedirles que ejerzan su derecho a decidir, por su propia voluntad, sus propios sistemas políticos, económicos y sociales”. Documento completo disponible en línea en: <http://segib.org/sites/default/files/6.1COM-ESP-BLOQUEO-E.pdf> (Consulta realizada el 21 de noviembre de 2014).

instituciones y mecanismos, instrumentar la nueva arquitectura financiera regional (SELA, 2012).

En definitiva, el establecer mecanismos que sean apropiados para que las instituciones no actúen beneficiando a unos Estados sobre otros, será una labor ardua en una región con tanta diversidad de postulados. Por lo que en todo caso, el hecho de que la adopción de decisiones posea un sistema de consenso que otorga la obligatoria aportación a la decisión de todos los partícipes, no pudiendo verse obligado un Estado a cumplir un acto no acordado, y más allá de que el mecanismo intergubernamental reste agilidad y dinamismo al proceso de construcción institucional, se significa la no cesión de competencias de los Estados a la Comunidad y el predominio del inter-gubernamentalismo en la región. Lo que en cierto modo asegura, que si el objetivo perseguido es la inclusión de todos los Estados en el proceso, la Comunidad deba asegurar una operativización de las practicas equitativamente en la construcción regional para satisfacer las demandas de los diversos territorios con capacidad de decisión.

4.4.2.2 El papel de la CELAC en cuestiones de Inversión Extranjera Directa.

La reciente aparición de este organismo no permite realizar un análisis en profundidad, debido a su corto recorrido en el fomento de prácticas de carácter regional con cierta relevancia. Asimismo, como foro de concertación no es competencia el abordar, por ahora, un proceso regulador de la incidencia de la IED. Sin embargo, sí ha habido manifestaciones y hechos que han reclamado acción y manifiestan la importancia de la misma en el seno de la CELAC.

Quedó constancia de la relevancia de los asuntos en torno a la regulación de la IED en la reunión EU-CELAC, celebrada en 2013 en la Cumbre de Santiago, cuando ante la adopción de una postura común entre los agentes respecto al papel de la IED, fue requerida la reformulación del contenido en la declaración final por parte de los Estados del ALBA-TCP. En este caso, los Estados de Venezuela, Bolivia y Ecuador, indicaron que la redacción del acuerdo debía ser reformulada, puesto que hacía alusión a los contratos regulatorios de la IED (AII). De este modo se significó las divergencia de posiciones, cuando los Estados europeos querían que se incidiese en la protección de las cláusulas aparecidas en los TTBBII, y ante esta postura Venezuela indicó que las competencias atribuidas a la protección de la IED eran cuestiones soberanas y que no estaban dispuestos a aceptar el trato definido por los Estados europeos, que era el que venía imponiéndose

desde la promoción de estos mecanismos. La queja incidió en que finalmente se variase la redacción de la declaración aceptándose la propuesta venezolana (El Universal, 2013).

Más allá de ser un hecho puntual, este reclamo y la transformación del articulado en el acuerdo, indica una expansión institucional sobre asuntos de arbitraje y cláusulas de protección de IED. Ya que se observa que, primeramente, esta postura encontró expresión en los planteamientos del ALBA-TCP, más tarde fue en la UNASUR, y ahora en la CELAC- con la relevante intervención de Argentina reclamando la consideración de este hecho⁶³⁹-. De hecho, esta problemática ha sido parte de la II Cumbre CELAC 2014 celebrada en La Habana, Cuba, cuando en referencia a los arbitrajes sobre inversiones se ha encargado al Grupo de Trabajo de Finanzas de la CELAC que “...analice la viabilidad y conveniencia de contar con mecanismos de prevención y solución de controversias en materia de inversiones intra y extra comunitarias” (CELAC, 2014, pág. 12). Significando este hecho el posible comienzo a una propuesta que articule la creación de un mecanismo de arbitraje en asuntos de inversión regional en ALC.

5. Pragmatismo: cuestiones relevantes sobre soberanía e integración en América Latina y el Caribe.

Antes de realizar las conclusiones de este capítulo, se entiende pertinente hacer un leve análisis sobre dos cuestiones que se consideran influyentes en el proceso institucionalizador del ideal integrador o unificador regional que aborda la comunidad de ALC.

Por una parte, asumiendo que en un proceso cohesionador de voluntades el detectar la predisposición de las partes a ese proceso determinará, en cierto grado, la velocidad y el modo del mismo, se ha entendido apropiado hacer un análisis que aborde dicha predisposición instituida en ALC como conjunto a realizar transformaciones que se signifique en un proceso integrador. Por otra, al operar bajo una visión constructivista de las RRII, si en términos de asimetría un agente parte de una estructura pretende alterar su rol en la misma, el proceso de convergencia en términos de capacidades será indicador del rol que jueguen los agentes en la alteración de la normativa, así como del peso de su “voz” en el resultado final. Por ello, se cree beneficioso e informativamente relevante de cara a este estudio, el realizar un análisis sobre el grado en el que se hayan podido reducir las asimetrías entre ALC, como agente, y los agentes relevantes en la agenda desarrollista:

⁶³⁹ Este hecho ocurrió en la Primera Cumbre UE-CELAC, en donde la delegación Argentina hizo pública su intención de denunciar el Convenio de Washington (Hendel & Sánchez, 2013).

países de ingreso alto (miembros y no miembros de la OCDE⁶⁴⁰), la UE y América del Norte. Dado que estos últimos han determinado los discursos y las prácticas.

Para medir la voluntad presente de avanzar en el proceso integrador/unificador de ALC, se ha decidido realizar un análisis de los textos constitucionales, indagando la predisposición presente de los Estados miembros de ALC a los procesos de integración. Entendiendo que la revisión de los articulados constitucionales revelará, en cierto grado, la disposición de los diferentes Estados que componen la región a instituir organismos con capacidad decisoria superior al Estado y, asimismo, la revisión del articulado permitirá detectar en qué grado y si existe, en los diversos articulados constitucionales, alguna indicación que signifique o pueda significar una predisposición por parte de los Estados a la integración o unificación de ALC.

En cuanto al segundo asunto que despierta el interés, la reducción de asimetrías entre ALC y los agentes relevantes, al asumir en términos constructivistas que aquello que está contenido en las ideas será realizado una vez dispuestas las capacidades, analizar si la región ha convergido en relación con los áreas, que hasta la fecha han sido acreedores del impulso normativo en términos desarrollistas, mediante un leve análisis de aquellos factores y variables que puedan haber alterado las capacidades de la región, permitirá observar si la acción que significa una manifestación y requerimiento de alteración de su rol en la SI se corresponde con la adquisición de diversas capacidades.

Nota: Ambos ejercicios de revisión señalados darían pie a realizar otra u otras tesis doctorales. Es por ello, que se entiende propicio indicar que la selección de variables ha sido realizada bajo criterio “particular” del autor, y su análisis y los hallazgos estarán lejos de poder ser categorizados como profundos y relevantes, ya que no es ese el fin. Sin embargo, sí se entiende necesario atenderlos e incluirlos puesto que, en cierto modo, pueden ser orientadores del rol que desempeña la región, tanto a nivel interno,

⁶⁴⁰ Los Países de ingreso alto de la OMC según datos del BM son: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Corea, República de Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza; *Países de ingreso alto no Miembros de la OCDE:* Andorra, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Aruba, Bahamas, Bahrein, Barbados, Bermudas, Brunei, Darussalam, Chipre, Croacia, Curacao, Emiratos Árabes Unidos, Federación de Rusia, Groenlandia, Guam, Guinea Ecuatorial, Hong Kong, Región Administrativa Especial, Isla de Man, Isla de San Martín (parte francesa), Islas Caimán, Islas Feroe, Islas Turcas y Caicos Islas Vírgenes (EE.UU.), Islas del Canal, Kuwait, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Mariana, Mónaco, Nueva Caledonia, Omán, Polinesia Francesa, Puerto Rico, Qatar, Región Administrativa Especial de Macao, China, Saint Kitts y Nevis, San Marino, Singapur, Sint Maarten (Dutch part), Trinidad y Tobago y Uruguay; *América del Norte:* Bermudas; Canadá y EE.UU. Selección de Agregados disponible en la página web del Banco Mundial en línea: <http://databank.bancomundial.org/data/databases.aspx> (Consulta realizada el día 24 de octubre de 2014).

por el ejercicio de los actores y el tiempo y modo del proceso; así como de cara al exterior, por el rol de agente en términos de convergencia global.

5.1 El ideario intergubernamental predomina en la región. Pistas encontradas en textos constitucionales.

“Culturalmente, la integración regional debe ser entendida, por añadidura como una transferencia gradual, amplia, compleja, profunda y polifacética de atribuciones soberanas a un nivel supranacional de gobernabilidad con la participación de actores gubernamentales y no gubernamentales con el objetivo de maximizar los beneficios y minimizar los costos de la interdependencia y la globalización” (Treto, 2001, pág. 161).

En un contexto en el que proceso de integración vive su pragmática “revolución”, desde que los ideales post-colonización se fuesen cristalizando mediante la institucionalización de prácticas comunes, la región ha atravesado diversas fases- como se ha visto en este capítulo-. Si se observa la actualidad, la nueva ola regionalista que vive ALC, como indica el profesor Sanahuja (2012), podría considerarse de algún modo como la activación de un mecanismo que, ante el devenir del sistema mundial causado por la Globalización, busca “...aunar las capacidades de los Estados-Nación para gobernar la región, en aquellos campos en los cuales existían interdependencias regionales y globales crecientes...”, en donde “...algunos intereses nacionales eran percibidos y redefinidos como intereses comunes” (Sanahuja, 2012, pág. 25). En este sentido, se percibe que estos intereses comunes a los que alude el profesor, actúan de eje relacional sobre el que opera una articulación de mecanismos determinada por la cesión, o no, de competencias por parte de los Estados miembros a un ente regional.

Es este contexto, el debate acontecido en torno a la cesión de competencias a los diferentes organismos regionales se ha decantado, habitualmente, por la pertinencia de promover la adopción de mecanismos de dictamen de un modo intergubernamental - excepto en algunos aspectos la CAN que ha optado por la supranacionalidad⁶⁴¹ -.

En este sentido y antes de abordar el análisis de los textos constitucionales, es deber señalar ciertas cuestiones sobre la institucionalización supranacional e intergubernamental en ALC.

⁶⁴¹ Véase un buen análisis de la integración y la supranacionalidad en la CAN en la tesis doctoral realizada por Jorge Luis Suárez Mejías, en la Parte III titulada: “Relación entre el derecho comunitario andino y los derechos nacionales” (Mejías, 2001, págs. 273-451).

Primero, indicar que la supranacionalidad no es un requisito primordial para que una institución opere con mayor prestigio, tenga mayor agilidad o sea una mejor solución a inconvenientes operativos. Una institución intergubernamental bien articulada también puede operar con eficiencia. Asimismo, señalar que el dotar a una institución de capacidad de decisión supranacional esconde peligros profundos, como por ejemplo. en el caso de territorios extensos o caracterizados por la pluri-identidad, emitir dictámenes de obligado cumplimiento sin requerimiento de aceptación podría implicar la no atención a demandas de ciertos espacios o grupos de agentes. Lo que en ciertos contextos podría incidir en el incremento de la desafección y que se produjese una quiebra de legitimidad con peligro de dislocación o ruptura.

En la misma línea y respecto a los mecanismos intergubernamentales, hay que señalar que si por ejemplo, se toma como referente en ALC la Corte Interamericana de DDHH, se ha de señalar que aun siendo un Tribunal que opera de un modo intergubernamental, es muy reconocido y de gran prestigio internacional (Deluca, 2012).

Es por lo indicado, que al ser conscientes de que la finalidad de las reglas o normas que articulan la vida en sociedad y la convivencia entre los diversos espacios, territorios y Estados, es propiciar cierta armonía y estabilidad en la interacción, el ser un ente encargado de representar y armonizar las diversas demandas de las partes conlleva el que la posible no aceptación de alguna de los dictámenes emitidos por un órgano supranacional cause, en última instancia, su pronta fractura. Entonces es cuando es relevante indicar que, si las ideas subyacentes en las constituciones presentan elementos comunes que muestren interiorizada la construcción de un ente superior y posibiliten la articulación de los mecanismos que otorguen capacidad decisoria a un ente supranacional, al sentir su identidad representada, contendrá el proceso de normativización, de forma lógica, menor riesgo de fractura que si por el contrario se procede a realizar transformaciones integradoras sin incluir esta posibilidad.

En todo caso, señalar que abogar por un tipo de organización supranacional o intergubernamental es una decisión particular de cada comunidad. Como de hecho evidencia el que, al analizar la propia formación de agentes de conjunción de ciudadanos en comunidad como son los Estados, se observe como unos optan por la adopción de un sistema que enfatiza la centralidad en la articulación del poder y otros por un sistema federal, que lega competencias relevantes a las partes. Ambos en aras de promover

estabilidad. Sin embargo, sea cual fuere la modalidad de Estado, hay que señalar que en los Estados siempre existe un mecanismo central que articula la cesión de capacidades de decisión, con el objetivo de agilizar los mecanismos de convivencia e instaurar un órgano con “supra-poder” para regular cuestiones de orden común.

En estos términos, el optar por aunar capacidades decisorias ha sido el mecanismo adoptado en la constitución de un proceso integrador como la UE, al significar el hecho la construcción de confianza en el organismo, mediante la cesión de ciertas competencias de los Estados miembros a la comunidad y con ello, asimilando que los organismos deben contar con un mínimo de capacidad aunque las partes posean la capacidad de secesión. Es en este sentido en el que también se entiende relevante analizar la predisposición al proceso en los Estados de ALC. Puesto que aunque es deber señalar que, debido a la historia de ALC, la cesión de competencias es un proceso que requiere la construcción de confianza y puede que el mecanismo adoptado, la institucionalización intergubernamental sea el mejor modo de construir confianza (Prieto, 2012). En donde la predisposición a un aunamiento mayor y cesión de competencias en asuntos de interés común, es relevante en aras, no sólo ya de lograr estabilidad regional, sino en el propósito de articular la pertenencia y la construcción de confianza e identidad.

5.1.1 Elementos supranacionales e intergubernamentales en textos constitutivos de los Estados de América Latina y el Caribe.

En el análisis a las diversas constituciones se revela que hay un grupo de Estados que sí incluyen en su articulado la posibilidad y/o meta de atribuir con poderes supranacionales a organismos de los que el Estado sea parte. Países como Argentina (Art.22 y 24); Bolivia (Art. 257 I y II. 4); Costa Rica (Art. 7) Colombia (Art. 227); Ecuador (Art. 423. 6,7 y Art. 425); El Salvador (Art. 89 y 144); Guatemala (Art. 46); Honduras (Art. 16); República Dominicana (Art. 10); Paraguay (Art.141 y 145); Perú (Art. 55); y Venezuela (Art.153), reflejan en sus textos constitucionales la posibilidad de atribuir competencias a organizaciones supranacionales, en las que los dictámenes sean aplicables de facto en el orden interno de los Estados⁶⁴². Esta predisposición a la integración no consta en los Estados miembros no citados, sin encontrar alusión alguna a la posibilidad de atribuir competencias a un ente supranacional en sus textos constitutivos en los Estados de:

⁶⁴² El estudio se ha basado en Constituciones vigentes a 03 de Septiembre de 2014.

Uruguay, Brasil, Chile, México, Panamá, República Dominicana, Cuba, así como los Estados miembros del CARICOM.

En el caso de los Estados que no hacen referencia concreta a la cesión de competencias a un ente supranacional -salvo cuestiones de DDHH-, se ha de tener en cuenta que, en caso de adoptar mecanismos que articulen el proceso de integración, estos operarían de acuerdo a órganos intergubernamentales, a no ser que se produzcan reformas constitucionales.

En cuanto a lo apropiado de incentivar la integración o unificación de ALC, la mayoría de las constituciones de los Estados de ALC si hacen alusión “expresa” al propósito de promover la integración latinoamericana: Argentina (Art.24); Brasil (Art. 4); Bolivia (Art. 265); Colombia (Art. 9 y 227); Cuba (Art. 12); El Salvador (Art. 89) República Dominicana (Art. 3); Ecuador (Art. 11; Art 422 y 423); Nicaragua (Art. 9);Panamá (Preámbulo⁶⁴³) Perú (Art. 144); Uruguay(Art. 6); Venezuela (Art. 153). No encontrando alusiones a este hecho en las constituciones de los Estados miembros del CARICOM, y los de Honduras, México, Paraguay.

Es un hecho constatable que el propósito de la construcción de una entidad regional en ALC, está siendo instituido mediante la atribución de competencias a órganos que operan intergubernamentalmente. Lo que revela que la región ha optado, en principio, por la construcción de instituciones en donde la toma de decisiones operé por consenso, en la cual los Estados participen a través de sus representantes gubernamentales (Presidente u Ministros de Exteriores).

Es decir, la región ha operado mediante esquemas en los que, aunque hayan existido o existan ambiciones por constituir un Parlamento Latinoamericano regional, este lo formarían Jefes de Estado y operaría intergubernamentalmente. En este sentido, las acciones de los Estados evidencian que, aunque en algún instante se haya planteado la posibilidad de celebrar elecciones regionales al estilo europeo- como por ejemplo indica el Art. 277 de la Constitución de Colombia o las declaraciones en las Cumbres de la UNASUR (Comunidad Sudamericana de Naciones, 2006)-, el devenir del proyecto implicaría un cambio en los postulados y una cesión de competencias de los Estados miembros, que requeriría una transformación en muchos textos constitucionales.

⁶⁴³ En este caso hace referencia a la “integración regional”. Constitución Política de la República de Panamá 1972 con actos reformativos a los Actos Reformativos de 1978, al Acto Constitucional de 1983, a los Actos Legislativos No. 1 de 1993 y No. 2 de 1994, y al Acto Legislativo No. 1 de 2004, tomando como referencia el Texto Único publicado en la Gaceta Oficial No. 25176 del 15 de noviembre de 2004.

En definitiva, la articulación de mecanismos que operen conjuntamente depende, por ahora, de las decisiones de los Estados particulares que obedecen a actitudes concretas de los gobiernos de turno.

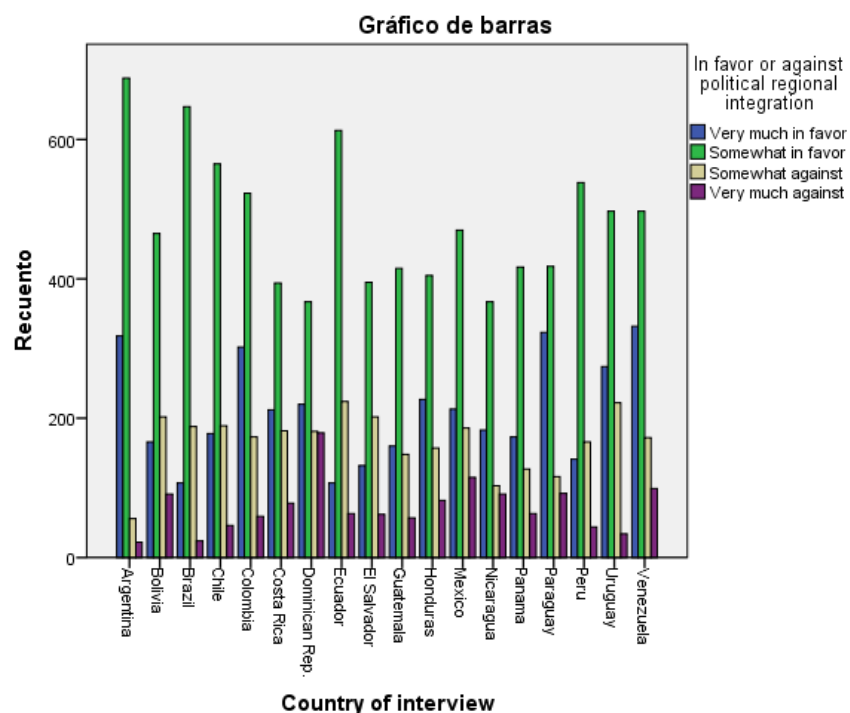
5.1.1.1 Nota: Predisposición ciudadana a la integración.

Una reflexión acerca del proceso de integración que es manifiestamente relevante en la actualidad, es que las decisiones de los Estados en ALC obedecen actualmente a sistemas democráticos, una vez que la democracia se ha instaurado en la región. Por lo que, al servir los Gobiernos de los Estados como mecanismos de articulación de voluntades en términos de soberanía popular, el sentimiento de pertenencia por parte de la ciudadanía a la región de ALC será relevante en el grado que sea capaz de constituir espacios para proceder a la construcción de una órgano regional, que a su vez adquiera capacidad para articular voluntades estatales en un ente superior al Estado de carácter regional, si así lo decidiesen los ciudadanos.

A este respecto, investigando sobre las opiniones que ofrecen los ciudadanos del proceso integrador, se ha detectado que esta cuestión ha sido atendida por las encuestas que ha realizado el *Latinobarómetro*⁶⁴⁴. Y aunque los datos y las conclusiones deben ser tomadas con mucha precaución, rescatar las posturas de los ciudadanos de los Estados miembros de ALC hacia la integración se entiende un indicador relevante.

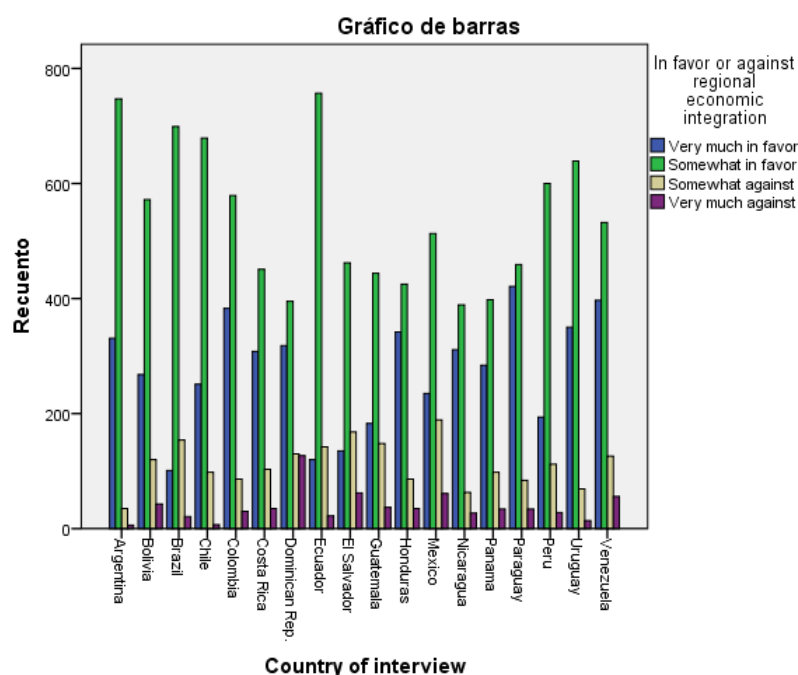
⁶⁴⁴ El Latinobarómetro se define como: "...una corporación de derecho privado sin fines de lucro, con sede en Santiago de Chile y tiene la responsabilidad de llevar a cabo el estudio Latinobarómetro tanto en la ejecución del proyecto como en la distribución de los datos" (Latinobarómetro, 2014).

Gráfica 11: Encuesta de 2010 *Latinobarómetro*: ¿En favor o en contra de la integración política en AL?



Fuente: De elaboración propia en SPSS a partir de datos del Latinobarómetro (2010). Sobre un total de 22687 entrevistas, con un 76,5% de válidos.

Gráfica 12: Encuesta de 2010 *Latinobarómetro*: ¿En favor o en contra de la integración económica en AL?



Fuente: De elaboración propia en SPSS a partir de datos del Latinobarómetro 2010. Sobre un total de 22053 entrevistas, con un 78% de válidos.

Los datos obtenidos de las encuestas realizadas por el *Latinobarómetro* (2010), reflejan que los ciudadanos de los diversos Estados (sin incluir ninguno del CARICOM), se postulan en favor tanto de la integración económica como de la integración política. Este dato es relevante, puesto que evidencia que el proyecto de integración y/o unificación está, en cierto modo, inscrito en gran parte del ideario de los ciudadanos latinoamericanos. Y además, si la democracia logra articular mecanismos que eleven el ideario a la práctica política, el proceso dado tiende a plasmar las ideas contenidas en los ciudadanos institucionalmente. Por lo que el ejercicio integrador, aún con las reservas particulares, camina con pie firme.

En definitiva, aun con la prudencia que debe ser contenida al analizar estos datos por ser la muestra tan pequeña (sobre 22000 encuestas aprox.), el hecho de que tanto en la voluntad ciudadana como en los textos constitucionales evidencien una clara voluntad de integración de ALC- a excepción de los nuevos países del CARICOM que son caso excepcional al haber construido otra historia bajo otro Imperio- invita a indicar que el devenir del proceso dependerá tanto de las capacidades presentes en los diferentes agentes, como en el modo por el cual se articule el proceso. Factores que serán determinantes en la velocidad que adquiera el proceso de integración/unificación.

5.2 Transformación regional en términos de capacidades operativas en el contexto global.

Es una cuestión innegable que la región de ALC ha sufrido transformaciones en diversos aspectos durante los últimos años, que le acercan a realidades del mundo occidental. No se puede obviar que en ciertos áreas, ya fueren económicos, sociales, políticos, culturales, etc..., las transformaciones regionales han alterado sus capacidades en términos globales.

Ante esta cuestión, si el postulado constructivista indica que un agente requiere poseer capacidades si pretende alterar las reglas determinadas por la estructura, el hecho de examinar algunos aspectos que sean relevantes en la comparativa de la región con los agentes que fueron impulsores de dichas reglas, de las metas inscritas en ideario internacional y, por lo tanto, de los determinantes de las estructuras ideacionales señaladas en los postulados desarrollistas que han promovido la adopción de prácticas y mecanismos normativos en las RRII, permitirá observar si la alteración de éstas guarda relación con el impulso integracionista o unionista desatado en la región, expresado en las declaraciones y

proyectos que indican una reafirmación en posturas que pretenden alterar las relaciones de la región con el exterior.

Con el propósito de revelar lo indicado, se ha optado por enumerar brevemente algunos aspectos que se han entendido como relevantes.

Primeramente, aunque la teoría constructivista indica que lo material no guía la acción que se realiza, sí señala que otorga capacidad a los agentes para ejercer las acciones contenidas en las ideas, si estas son capacidades constringentes en la estructura internacional. Por ello, por un parte se atenderá al estudio de las capacidades económicas. Porque dada una estructura internacional, de la que la región forma parte, en donde la economía se ha mostrado como un elemento fundamental para adquirir capacidad de acción, las transformaciones en temas económicos podrían permitir operativizar e incidir en la transformación de las reglas desde el interior de la estructura y, por tanto, proceder a la instauración de normativa basada en ideas particulares.

Por otra parte, también los aspectos sociales son elementos capacitadores en el proceso de alteración de las relaciones, al representar y otorgar legitimidad en términos de pronunciamiento y manifestación de postulados; así como en un sentido de convergencia estructural, como por ejemplo en términos educativos o en implementación de servicios sociales, su equiparación permite, además de una identificación y manejo de códigos, emitir formulaciones y negociaciones con mayor simetría y, por lo tanto, éstos implican un mayor grado de aceptación por parte de la contraparte.

Otro factor influyente, en términos relacionales entre agentes, es la adopción de una forma de gobierno similar a la contenida en los países promotores de las normativas. Es notorio y conocido que la no presencia de un sistema democrático en los Estados de la CI, ha provocado históricamente lejanía manifestada en términos de rechazo, de exclusión, de ausencia de relaciones, de bloqueos y en última estancia incluso de intervenciones militares por parte de los Estados considerados “desarrollados, civilizados, evolucionados, etc...”. Por lo que se entiende que los avances en la adopción de sistemas de gobierno democráticos otorga a la región cierta protección y legitimidad ante la CI. Es decir, la similitud implica menor capacidad del promotor para justificar su repulsa ante la formulación normativa; implica conocimiento del código de otro agente; e identificación con el actor, creándose cierta simetría ideacional en la articulación de procesos. Por lo que este acercamiento actuará como capacidad.

Como tercer punto, se ha elegido analizar el alcance y proceso de la cohesión en términos de seguridad regional. Es evidente que las guerras en la región se han venido produciendo desde los procesos de independencia hasta finales del siglo XX. Creando un ambiente de inestabilidad que, ya tras el final de la IIGM (a excepción del conflicto yugoslavo), pareciera haber terminado en los territorios de los países desarrollados.

Asimismo, al entender que el clima de estabilidad actúa como elemento incentivador de la participación de la región en la creación y fomento de institucionalidad internacional, los pasos dados en la región en temas seguridad y compromiso con la paz son relevantes en términos de reputación; así como capacitan al territorio para participar en la constitución y afianzamiento de mecanismos de concertación política regional e internacional (PNUD, 2013).

5.2.1 ¿Convergencia en términos de capacidades económicas?

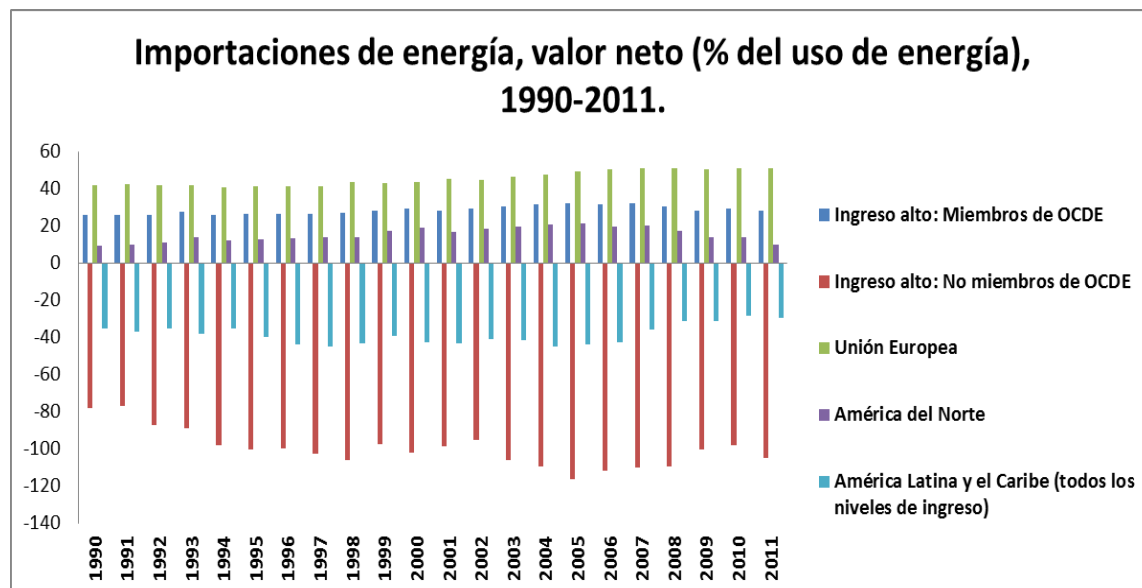
Cuando se habla en términos de participación de ALC en el contexto económico mundial, es común aludir a sus RRNN. No se puede obviar que éstos han sido y son actualmente, un importante pilar sobre el cual se apoya la participación presente e histórica de la región en la economía internacional. De hecho, cuando se indica la potencialidad de ALC para alterar las condiciones de negociación con los otros Estados, el argumento se instituye habitualmente alrededor de estos recursos. Como de hecho indicaba la CEPAL a través de su Secretaria Ejecutiva Alicia Bárcena a finales de 2012, cuando señalaba que ALC posee los siguientes activos en términos globales:

- “Un tercio de las reservas de agua dulce y el 12% de la superficie cultivable;
 - Un tercio de la producción mundial de bioetanol, cerca del 25% de biocombustibles y el 13% de petróleo;
 - Reservas: 65% de litio, 49% de plata, el 44% de cobre, el 33% de estaño, 32% de molibdeno, 26% de bauxita, 23% de níquel, 22% de hierro y 22% de zinc;
 - El 48% de la producción mundial de soja;
 - El 21% de la superficie de bosques naturales y abundante biodiversidad”
- (CEPAL, 2012).

La potencialidad de los activos se confirma en el papel que ha ejercido la región en las relaciones comerciales globales históricamente. En unos aspectos siendo positiva la relación, como en términos de autonomía energética, donde los datos muestran una

evolución histórica que sitúa a la región como fuente de la misma al exterior; y en otros negativa, dada su histórica distancia con otros territorios en el grado de intensidad tecnológica que han tenido sus productos.

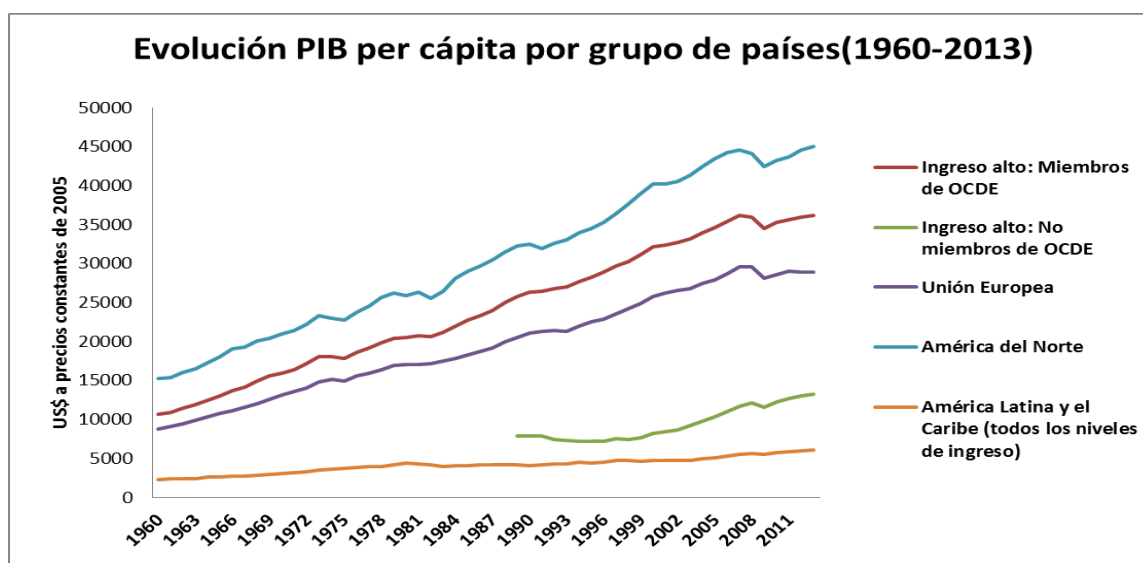
Gráfica 13: Importaciones de Energía por grupo regional (1990-2011).



Fuente: De elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial. <http://data.worldbank.org/> . (Consulta realizada el 21 de agosto de 2014).

En este sentido, si bien es verdad que la energía y los RRNN han sido siempre un baluarte de la potencialidad negociadora de ALC, esta no se ha expresado en empoderamiento de capacidad económica en términos de PIB o PIB per cápita. Situándose la región lejos de los Estados líderes de la estructura global; y no habiendo sufrido una reducción relevante desde los años 50.

Gráfica 13: Evolución del PIB per cápita por grupos de Países seleccionados (1960-2013).



Fuente: De elaboración propia a partir de datos disponibles del Banco Mundial. <http://data.worldbank.org/>. (Consulta realizada el 21 de agosto de 2014).

La distancia con las regiones líderes del mundo, es tan grande que revela que no ha convergido relevantemente en términos de PIB. Es más, ha tendido a la perpetuación en el tiempo. Estos datos indican y parecen evidenciar que, en términos de convergencia, las diversas prácticas no han impactado en esta variable tan relevante en términos de capacidades en las RRII.

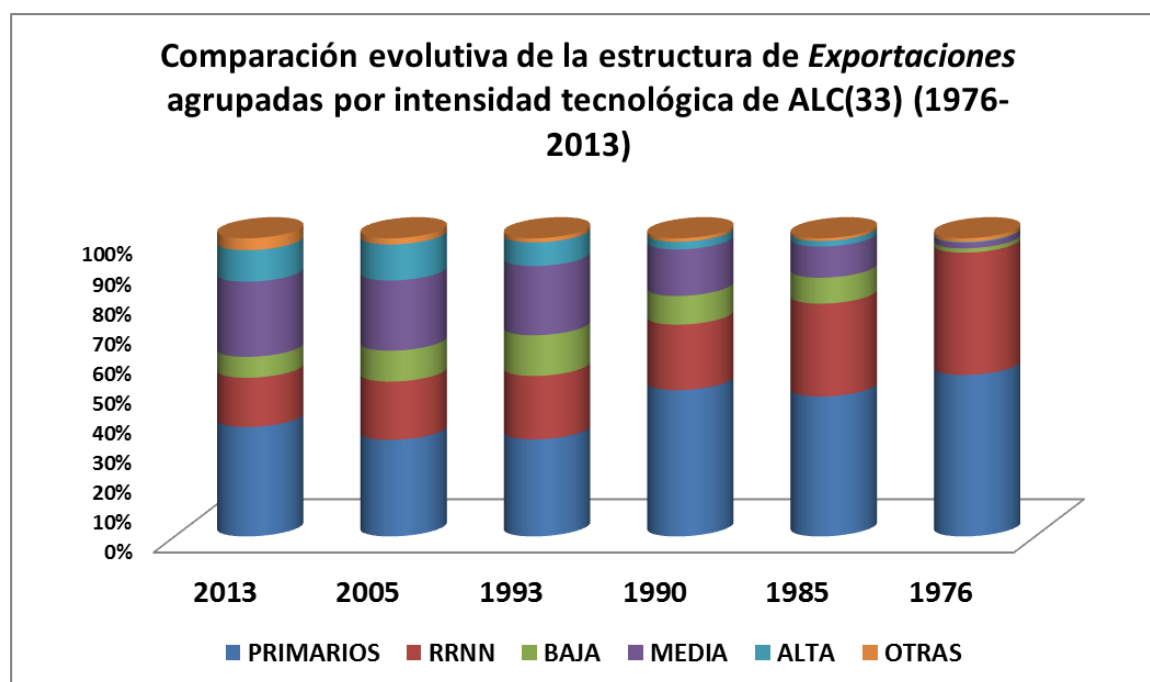
Asimismo, en la no convergencia total, se suele indicar que ha tenido gran relevancia el papel ejercido por la estructura productiva de la región. Debido a que no se ha logrado incrementar, ya fuere la plusvalía de los productos exportados o la estructura productiva en términos de tecnología, lo suficiente o lo mínimo para converger relevantemente (CEPAL, 2012).

Por ello, es relevante atender a la evolución que presenta la región en uno de los determinantes en los que incidió la teoría desarrollista: el trasvase tecnológico, ya que se incidió en que su implementación se lograría mediante las prácticas de apertura en general, y concretamente las realizadas a principios de los 90.

En este aspecto, los datos revelan no una convergencia total aunque sí leve. Ya que si en 1986 la estructura productiva presentaba unos datos en los que los productos que incluían alta tecnología de manufactura oscilaban en torno al 50% de las exportaciones, los datos

del 2013 indicaban que oscilan en torno al 40%, reflejando que la estructura ha variado y se ha producido un acercamiento leve a las regiones del mundo.⁶⁴⁵

Gráfica 14: Evolución de la estructura de exportaciones agrupadas por intensidad tecnológica en ALC (33) 1976-2013.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos recogidos por la Comisión de América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre base de datos del COMTRADE de las NNUU. <http://www.cepal.org/comercio/ecdata2/index.html> . (Serie de datos 888). (Consulta realizada el 21 de agosto de 2014).

Si bien como muestra el cuadro superior, la transformación ha sido constante en su evolución hacia la no dependencia absoluta de los RRNN y del sector primario, la significación en términos de exportaciones de productos en alta intensidad tecnológica ha sido muy leve. Aun así, es reseñable que desde los años 90 hasta la actualidad, en términos porcentuales, se han incrementado considerablemente las exportaciones con intensidad tecnológica media y alta, alcanzando en su totalidad alrededor del 35% del total.

El avance en el interior de la región es evidente. No obstante, este proceso se está frenando y hay que señalar que en esta última época la región presenta una re-primarización de la

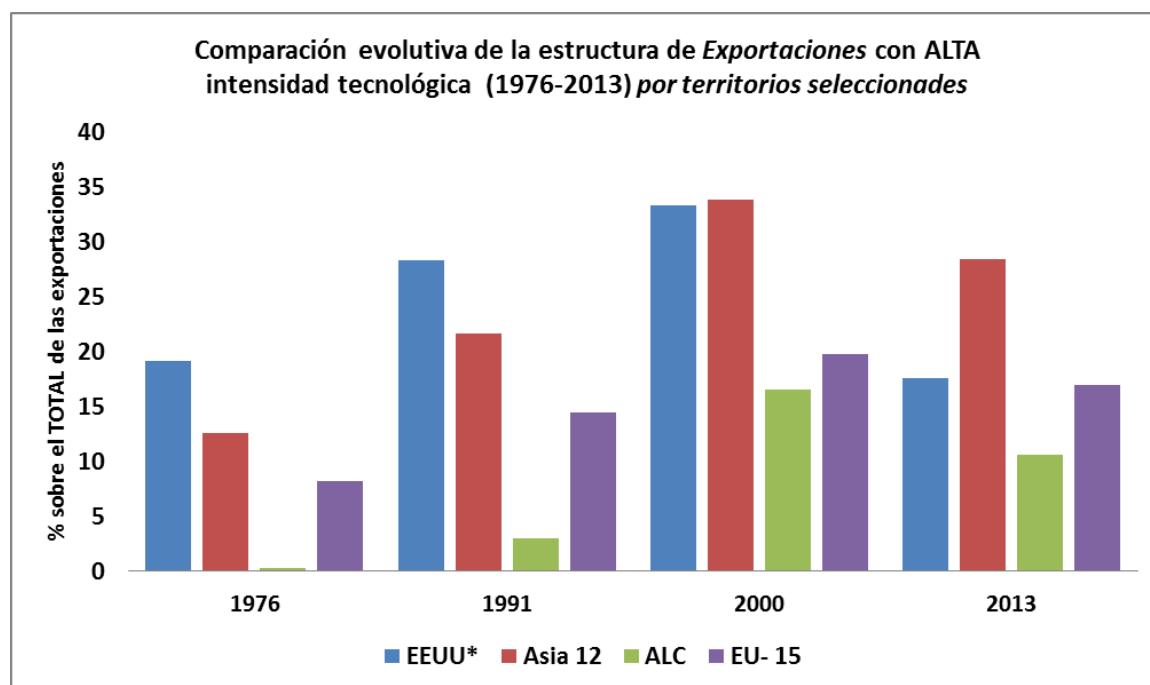
⁶⁴⁵ A este respecto véanse: Tabla 2 y 3 en Pág. 292-93.

misma. A causa, principalmente de las HIEDD que requieren de productos primarios, especialmente por la entrada de China⁶⁴⁶ en la región (CEPAL, 2012).

A este respecto es importante señalar, que es innegable que la transformación de la estructura productiva regional en términos de intensidad tecnológica posee gran relevancia en las relaciones comerciales, ya que se significa un empoderamiento en el lenguaje económico y, por lo tanto, relevante en términos de capacidades. Puesto que la intensidad tecnológica influye determinantemente en las plusvalías que se producen al comercializar y, consecuentemente, en la capacidad de económica que adquiere el productor con el exterior (Hummels & Klenow, 2005).

En este aspecto, la adquisición tecnológica por la región en su interior será indicadora del aumento de su capacidad. Pero será un dato relevante en términos de convergencia si, al comparar con otras áreas, el proceso ha sido convergente, y no únicamente por una implementación paralela.

Gráfica 15: Evolución de la estructura de exportaciones de alta intensidad tecnológica en ALC (33) 1976-2013.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos recogidos por la Comisión de América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre base de datos del COMTRADE de las NNUU.

⁶⁴⁶ Respecto al papel de China en la región se recomienda consultar: Dussel Peters (2014); Albrieu, Lopez, & Rozenwurcel (2012).

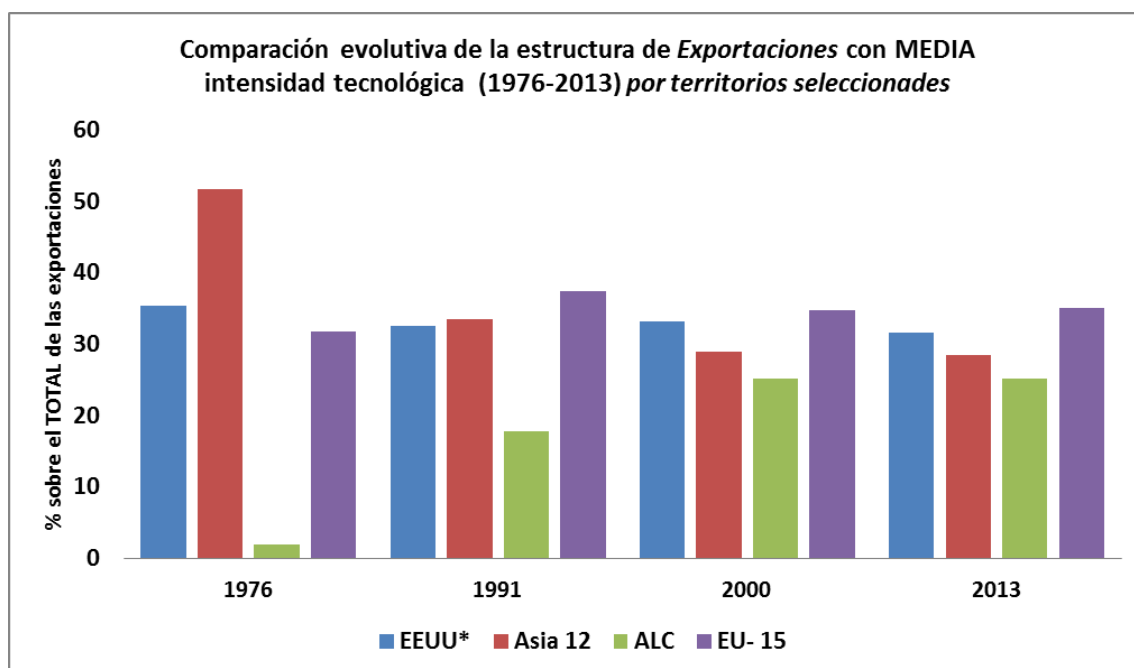
<http://www.cepal.org/comercio/ecdata2/index.html> . (Serie de datos 888). *Datos de EEUU correspondientes a 1978. (Consulta realizada el 21 de agosto de 2014).

Los datos son significativos. Pero también es cierto que la región de ALC continúa estando rezagada en términos de exportaciones con alta intensidad tecnológica. Ya que, aunque alcanzase niveles cercanos al 16% en 2002, desde esa fecha se ha revertido el proceso, hasta significar el 10% en 2013, cubriendo ese espacio por productos del sector primario. Asimismo, es un hecho notable que al menos en exportaciones intensas en carga de tecnología media los porcentajes se hayan mantenido desde la entrada del nuevo siglo.

En todo caso, haciendo uso de la línea histórica que presenta la región, si con anterioridad a los años 90 se significó un gran incremento desde los años 70, ya que la exportaciones de intensidad tecnológica alta y media en conjunto rozaban el 2% del total y en los años 90 significaron un 20% del total, desde el año 1991 hasta el año 2000 el incremento fue muy significativo situándose en el 40% del total.

En la misma línea indicar que, desde principios de siglo hasta la actualidad, aun con la reducción porcentual en productos con alta intensidad tecnológica, la línea histórica es relativamente positiva ya que se sitúa en el 35% del total. Es decir, si bien es verdad que se ha establecido la tendencia, ésta ha sido tenue, aunque sí se ha significado una reducción en la distancia con otros territorios del mundo. Estos datos, sí permiten afirmar que se camina hacia la convergencia, en cierta medida, con los agentes relevantes.

Gráfica 16: Evolución de la estructura de exportaciones de media intensidad tecnológica en ALC (33) 1976-2013.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos recogidos por la Comisión de América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre base de datos del COMTRADE de las NNUU. <http://www.cepal.org/comercio/ecdata2/index.html>. (Serie de datos 888). *Datos de EEUU correspondientes a 1978. (Consulta realizada el 21 de agosto de 2014).

En definitiva, la región tiene una potencialidad evidente debido a la presencia de sus RRNN y su autonomía energética y además, aunque la región no ha logrado converger profundamente en términos de intercambio (valor agregado)⁶⁴⁷; posea el peligro de frenar su inserción internacional debido a la re-primarización; se enfrente al desafío de frenar su avance en términos de productividad, sino suprime la brecha tecnológica; y deba asumir una estrategia que impacte profundamente en la equiparación de la región en términos de PIB e ingresos (CEPAL, 2012), los datos revelan un proceso de acercamiento en la última época. Lo que en términos de capacidad sí permiten indicar que su evolución es reseñable.

Pero bien es verdad que en este aspecto, si bien las exportaciones fueron implementando su carga tecnológica, la estrategia del regionalismo abierto también supuso la internación de la empresa extranjera en la región; y que la explotación de los recursos fuese en beneficio de inversores extranjeros. Es evidente que se implementó el rol de la región como agente receptor de IED durante esta época y que en este aspecto también haya sufrido

⁶⁴⁷ Para profundizar sobre esta información se recomienda visitar datos presentes en <http://comtrade.un.org/> (Consulta realizada el 21 de agosto de 2014).

alteraciones, que evidencian un cambio de escenario que requiere la atención del estudio. Puesto que esta cuestión, en cierto modo, ha adquirido una relevancia en términos de convergencia de roles y, además, determina que se altere el papel de agente influyente en la regularización de la propia práctica.

5.2.2 La Inversión Extranjera Directa de América Latina y el Caribe: las multi-latinas han ido ganando peso en el contexto internacional.

Es un hecho notorio y notable que el papel ejercido por las empresas de los Estados en desarrollo ha aumentado considerablemente en los últimos 20 años. Si anteriormente su participación en la IED global era muy reducida, en la actualidad supone aproximadamente un tercio del total (UNCTAD, 2013).

A este proceso de alteración en términos de capacidad económica se han sumado las empresas de América Latina. Dos circunstancias han sido determinantes en este hecho. Por una parte, ha sido relevante el que en el contexto regional las empresas locales hayan crecido en mayor grado, llegando a superar en volumen, que las empresas externas⁶⁴⁸. Lo que señala un dato relevante: que los grandes grupos nacionales han aprovechado con mayor vigorosidad las oportunidades que ha ofrecido la expansión de los mercados regionales (CEPAL, 2013). Por otra, cabe señalar que, en el contexto global, destaca el hecho de que las empresas transnacionales de la región hayan aumentado su participación. De hecho, uno de los indicios que revelan que ALC posee una macroeconomía estable como nunca antes había tenido, se refleja al observar que las empresas multilatinas poseen gran cobertura geográfica a nivel mundial⁶⁴⁹.

En un inicio, el proceso de internacionalización de la empresa latina vino en parte determinado por el acceso que dispuso la región a los mercados financieros de capital, cuando, a principios de los años 80 y a raíz de que los Estados emergentes empezasen a disponer de capital para invertir en el exterior, las condiciones de endeudamiento se equipararon a las de los Estados de la OCDE (CEPAL, 2013); y consecuentemente se

⁶⁴⁸ Si en 1999 entre las 100 primeras empresas que operaban en ALC 40 eran locales privadas, en 2012 son 57; de igual modo, si en 1999 la presencia de empresas de capital extranjero eran de 47, en 2012 han disminuido hasta 29 (CEPAL, 2013, pág. 105). Además, esto podría significar aquella ambición lejana de Raúl Prebisch de poseer empresas fuertes en la región (Béjar, 2014).

⁶⁴⁹ Para profundizar en la información véase la página web de la revista *América Economía* “Multilatinas 2013” disponible en línea: http://rankings.americaeconomia.com/2013/ranking_multilatinas_2013/ranking.php (Consulta realizada el 13 de septiembre de 2014).

produjo un proceso de multilateralización de las reglas de juego, las cuales incentivaron el que, poco a poco, algunas empresas latinas se transformasen en importantes actores a nivel global (Santiso, 2008). Asimismo, fue influyente, en el proceso de internacionalización, el que se incrementase la presencia de las empresas extranjeras en la región, tras la adopción de la estrategia del regionalismo abierto⁶⁵⁰. Puesto que al verse incrementada la competitividad interna se incentivó el que las empresas nacionales orientasen sus operaciones hacia el exterior de sus Estados, emprendiendo ya fuesen inversiones en la región (MERCOSUR o CAN principalmente); en los EEUU y Canadá actuando continentalmente, conocidas como multilatinas; o diesen un salto geográfico y comenzasen a operar extra-continentalmente, adoptando la denominación de “translatinas” y adquiriendo en ese instante la categoría propia de multinacionales (CEPAL, 2013).

En términos de cobertura geográfica, hay que indicar que las empresas translatinas han optado, principalmente, por expandirse e invertir sus capitales en el territorio regional. Salvo las excepciones puntuales, en donde destacan unas pocas empresas brasileñas y mexicanas que poseen gran presencia en Canadá y EEUU, presentando datos prudentes en el exterior del continente. Prudentes pero crecientes. (CEPAL, 2013).

La gran mayoría de las empresas procedentes de las economías más pequeñas se han centrado en la formación de redes regionales mediante procesos de fusión. Y es que, si con anterioridad la compra de las empresas era una acción reservada para grupos extra-regionales, esto ha variado, dándose en los últimos tiempos grandes fusiones entre grupos latinoamericanos⁶⁵¹.

En la actualidad las empresas multilatinas invierten grandes cantidades en el extranjero. Brasil, México y Chile lideran esta clasificación; pero también Venezuela y Argentina están realizando grandes inversiones; así como Colombia posee tendencia positiva⁶⁵². Hay más Estados realizando esta tipo de operaciones, aunque al no presentar datos oficiales, a no ser aquellos que ofrecen las empresas, la conclusión ha de ser prudente.

⁶⁵⁰ Si en 1991 la presencia de empresas extranjeras sobre un número de 500 era del 27%, en 2001 alcanzó el 39% de las 500 más relevantes. Véase información en línea: http://rankings.americaeconomia.com/2013/ranking_multilatinas_2013/ranking.php (Consulta realizada el 13 de septiembre de 2014).

⁶⁵¹ Han realizado este tipo de operaciones: la Empresa mexicana CEMEX; la minera brasileña VALE; el fabricante de aviones brasileño EMBRAEX; el grupo argentino de acero TECHINT; el banco brasileño ITAÚ con CORPOBANCA en Chile; el Grupo AVAL de Colombia, DAVIVIENDA de Colombia, como hechos más relevantes (Béjar, 2014).

⁶⁵² Los montos son muy relevantes. De hecho, en Estados como Chile, Colombia o México la IED en el exterior supone la mitad de la IED receptada (CEPAL, 2013).

Sin embargo, hay que señalar que, aunque exista una disparidad al analizar la acción de los diferentes Estados de la región, se puede afirmar que hay una tendencia positiva regional hacia una mayor práctica de IED en el exterior- sumándose a la tendencia general global-. Ya que si en 2002 la IED de los Estados en desarrollo o en transición no superaba el 10%, actualmente presentan una IED que oscila en torno al 30%.del total (UNCTAD, 2013).

En este sentido, la tendencia que presenta la IED indica que la región está ganando peso internacional a través de su ejercicio, y este hecho es relevante e importante dentro del proceso de integración regional. Ya que como agente económico la voz de ALC a través de su IED, permite adquirir capacidad de negociación y como indica Béjar (2014):

“...las multilatinas, como es manifiesto, desde la diversificación de sus inversiones y proyectos, contribuyen de manera creciente a profundizar, cohesionar e integrar los mercados latinoamericanos, relacionando productores y consumidores como nunca antes se había logrado y a una velocidad no conocida en los diferentes tratados y acuerdos establecidos durante todos estos años” (Béjar, 2014, pág. 28).

Incentivar las inversiones permite el que las capacidades para competir con el mundo “desarrollado” se hayan incrementado en la región. Éstas se están incrementando, pero no homogéneamente. Los datos revelan que en 2005 ya se observaba como la empresas mexicanas y brasileñas se apoderaban del mercado regional -85 de las 100 primeras eran de estos Estados-. Asimismo, en cuanto al papel de la región en el exterior, éste viene representado en gran parte por estos dos Estados, ya que sus empresas realizaban grandes inversiones en el exterior. Desde esa fecha, indicar en sentido positivo que, poco a poco, se han ido convirtiendo en fuentes de capital y han dado paso a un proceso de capitalización del mercado, mediante el incremento de su capacidad para acceder a mercados de capitales locales e internacionales a través de operaciones de IED⁶⁵³.

A este respecto, es pertinente indicar que a la práctica de la IED en el exterior se le atribuyen ventajas, más allá de la adquisición de bienes, como es la adquisición de conocimiento técnico. Y por lo tanto, al operar éstas en otros entornos se produce un aprendizaje que la compañía recepta y puede transpolar su práctica. En este sentido, la adquisición de activos estratégicos en el exterior de la región permite transformar su operativización y mejorar prácticas. Y aunque esto ha sido realizado relativamente por

⁶⁵³ En la actualidad empresas de ALC pueden competir en los mercados financieros con empresas de los Estados de la OCDE.

pocos Estados - a excepción de Brasil y México-, el contexto actual permite iniciar proyectos que conlleven la realización de actividades con un valor agregado mayor e implementar el contenido tecnológico en los productos.

Sin embargo, siendo positiva la práctica de IED hacia el exterior por la región, existen debilidades en algunos aspectos. Señala la CEPAL (2013) que la práctica de las translatinas ha estado concentrada en tres sectores: servicios (telecomunicaciones y comercio minorista), manufacturas intensivas en capital (siderurgia e industria del cemento), y explotación de RRNN (hidrocarburos y minería), existiendo “...relativamente pocas translatinas que desempeñen actividades intensivas en conocimiento” (CEPAL, 2013, pág. 106). Es decir, los sectores en los que no se ha promulgado la práctica empresarial por la región son aquellos que poseen mayor plusvalía en su internacionalización; y aquellos que permitirían un mayor nivel de convergencia⁶⁵⁴.

Asimismo, el hecho de que las translatinas se hayan centrado para realizar sus expansiones en el territorio regional, aunque significa cohesión intrarregional en algunos aspectos, en términos de convergencia estructural internacional implica el que se sea más vulnerable a un cambio en el ciclo económico regional, que si se expandiesen en un grado mayor de cobertura geográfica.

En definitiva, hay que señalar que la región ha sufrido un proceso de incremento de capacidad en dos espacios: en el regional, como evidencia un creciente proceso de empoderamiento de los actores regionales en los bienes regionales; y en el espacio internacional, incrementando su participación en la economía externa, manifestándose un creciente, pero lejano, empoderamiento en el contexto global.

5.2.3 Algunos datos relevantes en términos de convergencia en aspectos sociales.

Es indudable que la región de ALC presenta en la actualidad datos esperanzadores en términos de convergencia social con los Estados más desarrollados, como muestra que en su indicador de IDH el PNUD (2014), cuando clasifica a ALC como el territorio mejor situado detrás de los Estados que presentan un IDH muy alto⁶⁵⁵. Es destacable como en

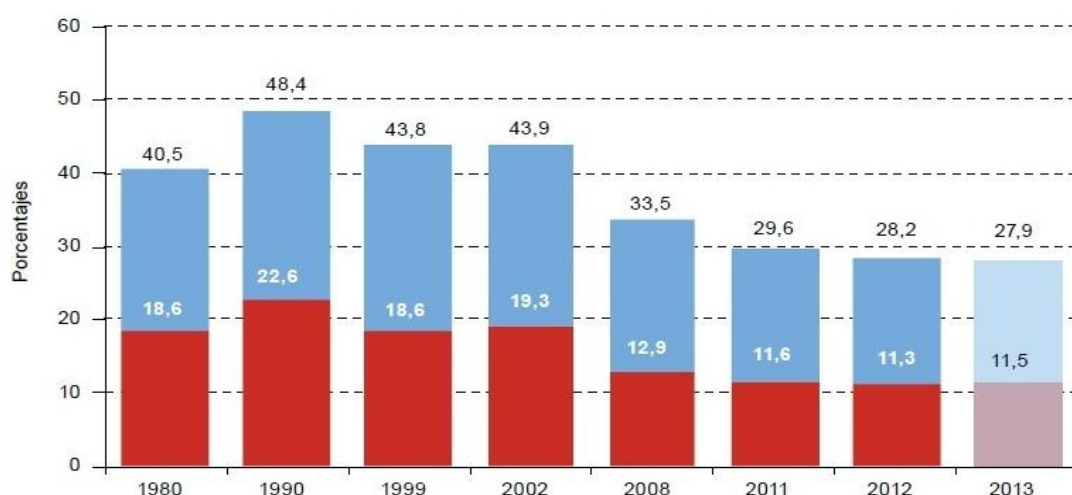
⁶⁵⁴ Véase la relevancia de las plusvalías de los productos en el comercio internacional en Hummels & Klenow (2005).

⁶⁵⁵ El informe del PNUD 2014 señala que los Estados con un IDH muy alto poseen una media de 0,890 y ALC 0,740 (PNUD, 2014, pág. 52).

algunos campos como la educación, la salud y la reducción de la pobreza extrema en términos porcentuales, los logros son positivos. Aunque también señala el PNUD (2014), que ALC presenta muchos indicadores en los que el avance ha sido muy pobre, señalando claramente a la desigualdad como el elemento que mayor incidencia tiene en el no avance de las otras variables en ALC (PNUD, 2014, pág. 42).

La pobreza sigue siendo un grave problema en ALC. A este respecto, aunque hay que señalar que la evolución ha sido positiva en los últimos decenios en términos porcentuales, la cantidad de personas que siguen estando en condiciones vergonzantes es muy grande y todavía se sitúa muy lejos de las regiones más avanzadas del mundo (BM, 2014).

Gráfica 17: Evolución de la pobreza y de la indigencia en América Latina (1980-2013).



Fuente: (CEPAL, 2013, pág. 52). * En este gráfico no se incluyen datos de la zona del Caribe.

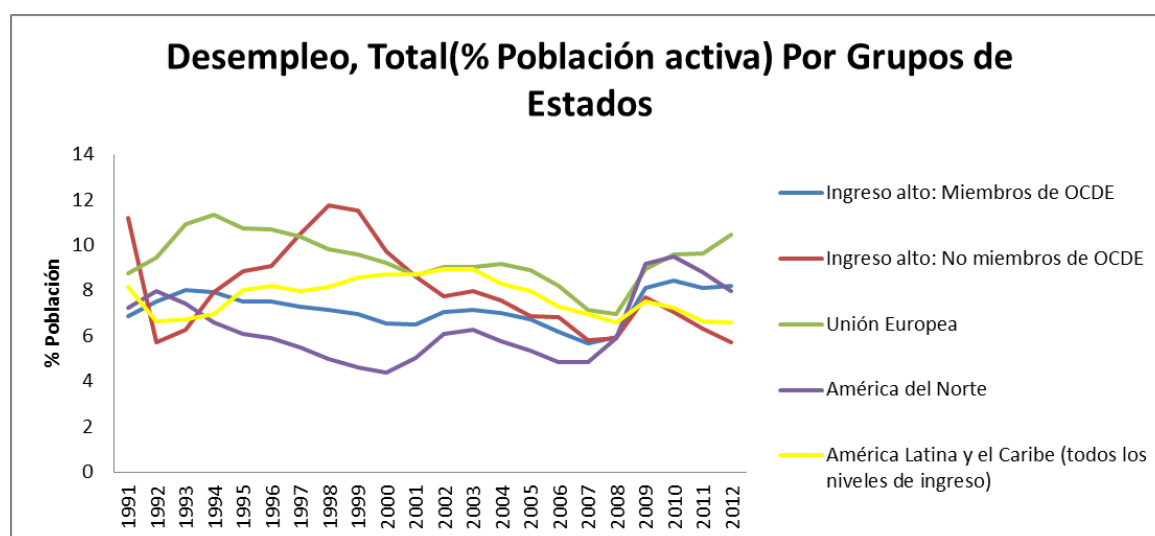
Entre las variables analizadas en comparación con grupos de ingreso alto de la OCDE, la región presenta datos positivos y cierta estabilidad en términos de desempleo, ya que dentro de las divergencias existentes entre Estados miembros⁶⁵⁶, la región posee niveles que se sitúan por debajo de la media de los otros grupos de Estados. Aunque bien es verdad que este empleo presenta unos niveles de vulnerabilidad muy lejos de las economías desarrolladas (PNUD, 2014, pág. 48).

El porcentaje de población empleada no se ha significado en términos de PIB per cápita, ya que ALC presenta una diferencia salarial “abismal” con los otros grupos de países aquí

⁶⁵⁶ El desempleo en 2013 oscila entre el 11,2% que presenta Colombia hasta el 4% y 4,2 % que presentan Guatemala y Uruguay (CEPAL, 2013).

analizados. Asimismo, la región presenta una desigualdad en términos de renta muy relevante, y según indica el PNUD (2014), este hecho determina el no avance en otros factores como la salud, la educación, la seguridad y la pobreza (PNUD, 2013). Por lo que, tanto situando el análisis en términos de comparación con el exterior como con en el interior, en términos de desigualdad la región no converge con los agentes relevantes (CEPAL, 2013).

Gráfica 18: Comparativa de la evolución del desempleo por grupos de Estados (1980-2013).

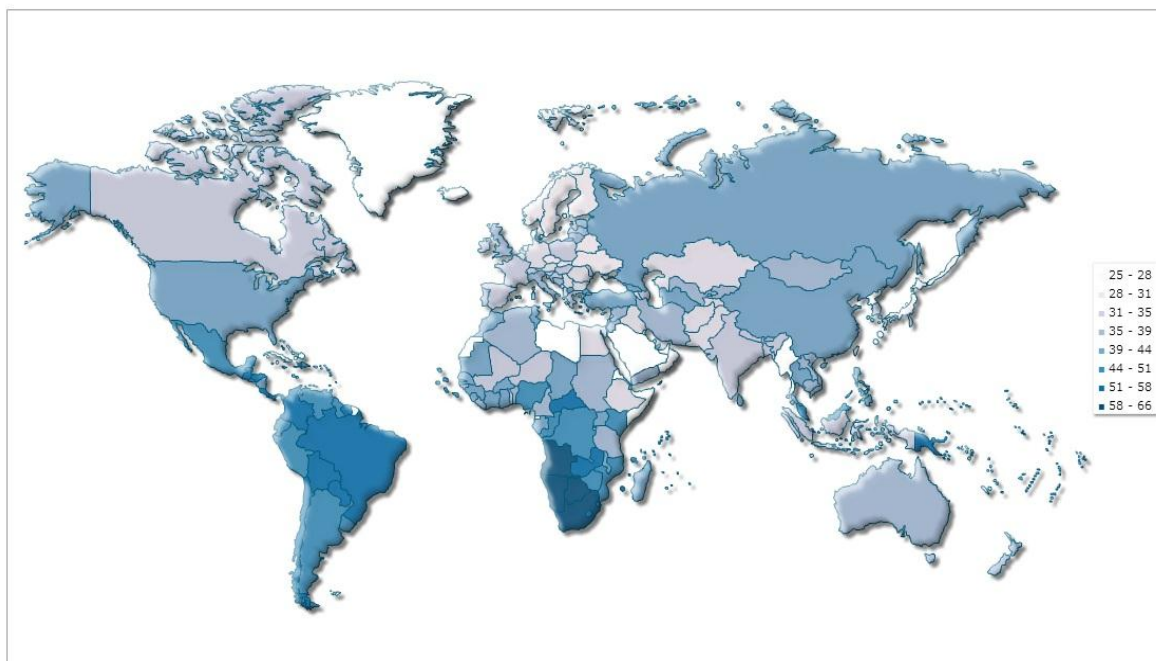


Fuente: De elaboración propia a partir de datos disponibles del Banco Mundial. <http://data.worldbank.org/>. (Consulta realizada el 21 de agosto de 2014).

En este sentido, aunque es notorio que desde la entrada el nuevo milenio los Estados miembros de ALC están sufriendo una reducción un poco más pronunciada en términos de desigualdad⁶⁵⁷, lo cual no era muy complicado dados sus altos niveles, aún sigue situándose a una distancia relevante de otros grupos de Estados como revela el siguiente mapa seleccionado.

⁶⁵⁷ Para profundizar en los avances de la región véase CEPAL (2013).

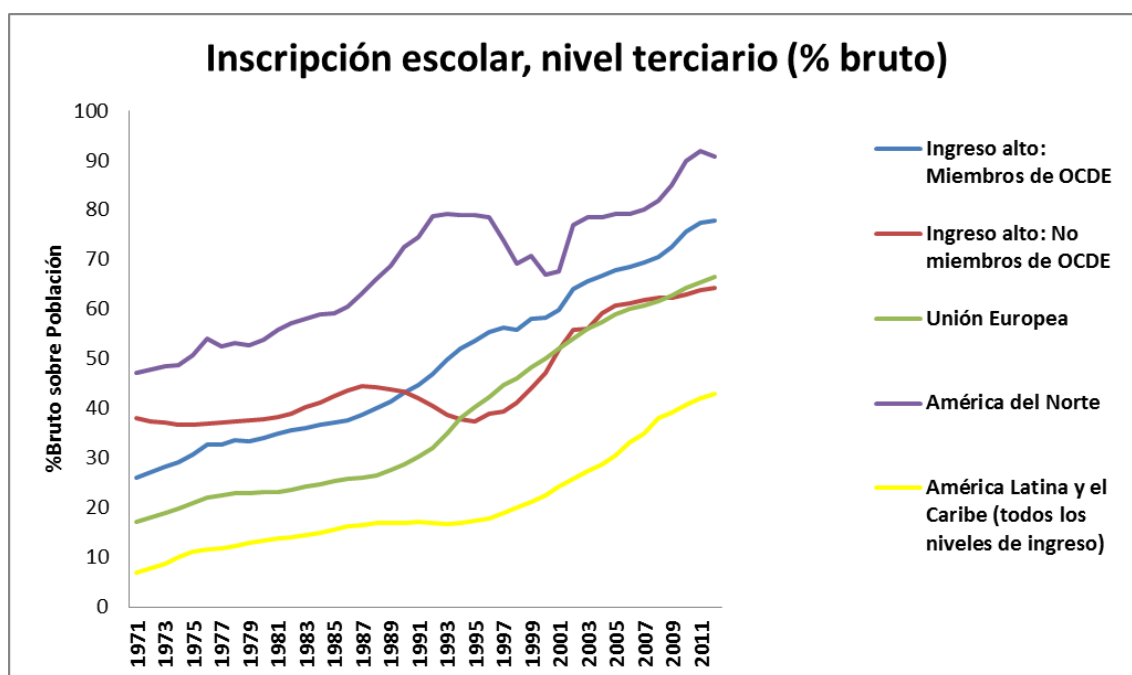
Ilustración 11: Mapa mundial coloreado por índices de *Gini* 2013.



Fuente: Elaborado en <http://www.indexmundi.com/facts/indicators/si.pov.gini> a partir de datos del Banco Mundial de 2013. (Consulta realizada el 13 de septiembre de 2014).

En cuanto a los datos que presenta la región en educación, éstos son positivos y en la actualidad prácticamente el 100% de los latinoamericanos acceden a la educación primaria (PNUD, 2012, pág. 20). Sin embargo, al realizar un análisis en términos de capacidad con los otros grupos, los niveles superiores son aquellos que significan una mayor potencialidad en conocimiento y repercusión en el PIB de los territorios en la estructura global (PNUD, 2013), y en este sentido, aun presentando datos positivos, el avance de los otros grupos regionales también indica que las distancias no se han reducido y los agentes relevantes siguen a una distancia considerable.

Gráfica 19: Evolución de la inscripción escolar en nivel terciario por grupos (1980-2013).



Fuente: De elaboración propia a partir de datos disponibles del Banco Mundial. <http://data.worldbank.org/> . (Consulta realizada el 21 de agosto de 2014).

Otro de los aspectos en los que la región presenta datos negativos, es en cuanto a la dedicación presupuestaria en I+D. Ésta, lejos de converger, presenta unos datos que se alejan en términos poblacionales con respecto a otros grupos de países. Uno de los datos relevantes lo ofrece la media en número de investigadores, en donde si en los países de alto ingreso la media oscila alrededor de los 3500 investigadores dedicados a I+D por cada millón de habitantes, ALC presenta cerca de 530. Muy lejos de converger en la actualidad.⁶⁵⁸

Para paliar este agujero estructural, la región está implementando el gasto público en educación. Y aun encontrándose a centésimas del gasto de los países pertenecientes a la OCDE de ingreso alto, los pasos dados han reducido la brecha, que en 1990 oscilaba cercana a los dos puntos porcentuales y en 2011 es menor a 9 centésimas.⁶⁵⁹

Los datos aquí recogidos, no son una totalidad y deben ser tomados con precaución, pero sí son significativos e indicativos de los procesos de convergencia y no convergencia que

⁶⁵⁸ Según datos del Banco Mundial en línea: <http://data.worldbank.org/> (Consulta realizada el 21 de agosto de 2014).

⁶⁵⁹ Según datos del Banco Mundial en línea: <http://data.worldbank.org/> (Consulta realizada el 21 de agosto de 2014).

presenta la región de ALC con los agentes relevantes y se puede sostener que: en el aspecto social se está aún lejos de converger.

5.2.3.1 El avance democrático en América Latina y el Caribe: la capacidad para ser escuchado.

La adopción del sistema democrático como forma de gobierno significa, por encima de otras cuestiones, un proceso que conecta a la ciudadanía con la toma de decisiones de la comunidad (Sartori, 2007).

ALC trata de lograr articular procesos de convivencia que integren a la sociedad por una parte, y por otra la capaciten para superar los desafíos presentes en la región desde sus inicios históricos: la construcción de alternativas al predominio oligárquico y la reducción de la desigualdad.

Además de en su lado interno, el asentamiento de sistemas democráticos de gobierno en ALC, que ya oscilan en torno a los 30 años de estabilidad, en términos de RRII significa que la realidad institucional presente en la región se asemeja, cada vez más, a la de los Estados denominados “desarrollados”.

Indicaba a este respecto Isaiah Berlin en una Conferencia que ofreció en la Universidad de Oxford el 31 de Octubre de 1958, Dos conceptos de libertad (1958) que:

“...cuando las ideas son descuidadas por los que debieran preocuparse de ellas- es decir, por los que han sido educados para pensar críticamente sobre ideas-, estas adquieren a veces un carácter incontrolado y un poder irresistible sobre multitudes de seres humanos que pueden hacerse demasiado violentos para ser afectados por la crítica de la razón” (Berlin, 1958).

Se entiende de la cita de Berlin que si se descuidan las ideas y/o los respectivos mecanismos de articulación de las mismas, las prácticas pueden desembocar en procesos que no se habían prevenido con anterioridad, y ya fuere dándole mayor importancia a los mecanismos o únicamente a las ideas, el desequilibrio significaría la cesión por uno de los dos lados y la falta de equilibrio. Este podría haber sido en cierto modo el proceso que ha incidido en que la democracia no se hubiese “asentado” en ALC desde su independencia.

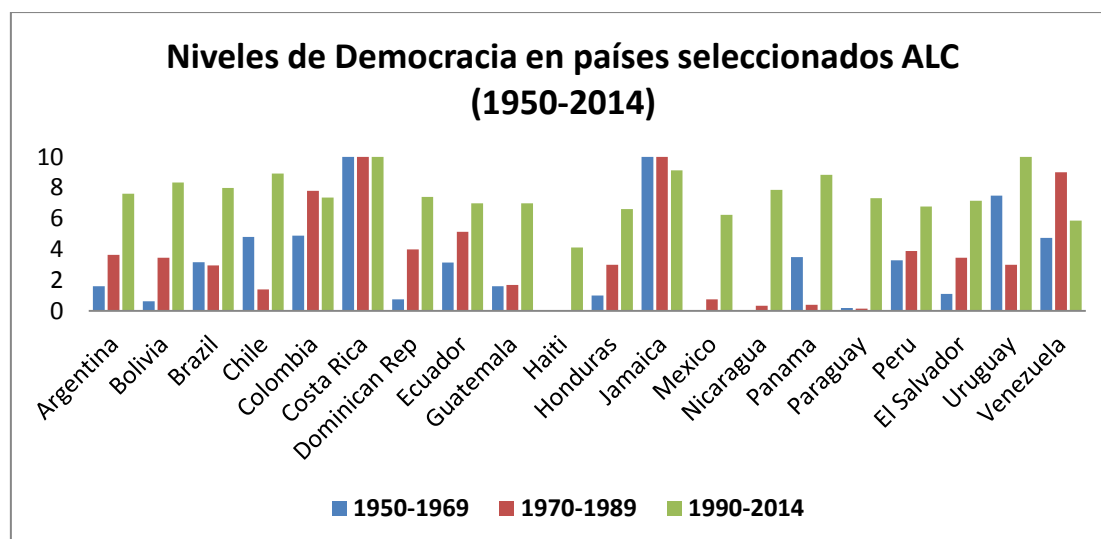
En este sentido, los últimos datos indican que el desequilibrio está remitiendo en ALC y las democracias se están asentando, por fin, como forma de gobierno en esta fase la historia.

Debido esto, principalmente, a que las presiones conjuntas en forma de acuerdos democráticos -señalados a lo largo de éste capítulo-, así como demás operativizaciones en favor de sistemas democráticos, han logrado crear, sin lugar a dudas, cierta estabilidad regional interna. Así como este cambio ha fortalecido la imagen regional en el exterior en los últimos tiempos- a excepción de diversos sucesos como los lamentables golpes de Estado ocurridos en Paraguay⁶⁶⁰ y en Honduras-.

Hay que apuntar que la idea democrática no es novedosa en la región y ya desde los primeros procesos independizadores los postulados libertadores incidían en que las relaciones gobernantes-gobernados debían operar a través de sociedades democráticas. Y aunque ese objetivo se haya visto corrompido intermitentemente, ya fueren por causas económicas, sociales, militares, etc..., la idea ha seguido subyaciendo en la región. Lo que ha permitido que se hayan ido fraguando, poco a poco, democracias que, a día de hoy, permiten que al observar la región se hable de procesos electorales con naturalidad.

Los datos que presenta la región revelan claramente que los procesos democratizadores han logrado asentar, paulatinamente, la democracia como forma de gobierno en la región. En este sentido, cabe señalar la evolución sufrida desde los años 50 hasta la actualidad, en la que se evidencian unos niveles de democracia que nunca antes había poseído la región.

Gráfica 20: Democratización en la zona de ALC por periodos.



Fuente: De elaboración propia a partir de Informe *Integrated Network for Societal Conflict Research Serie Polity IV*, 1880-2014. (INSCR, 2014).

⁶⁶⁰ El secretario general de la UNASUR en la época del suceso, Alí Rodríguez, lo calificó como “...un golpe de Estado parlamentario”. Véase declaración en línea: http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/06/120622_paraguay_lugo_reacciones_en.shtml (Consulta realizada el 21 de septiembre de 2013).

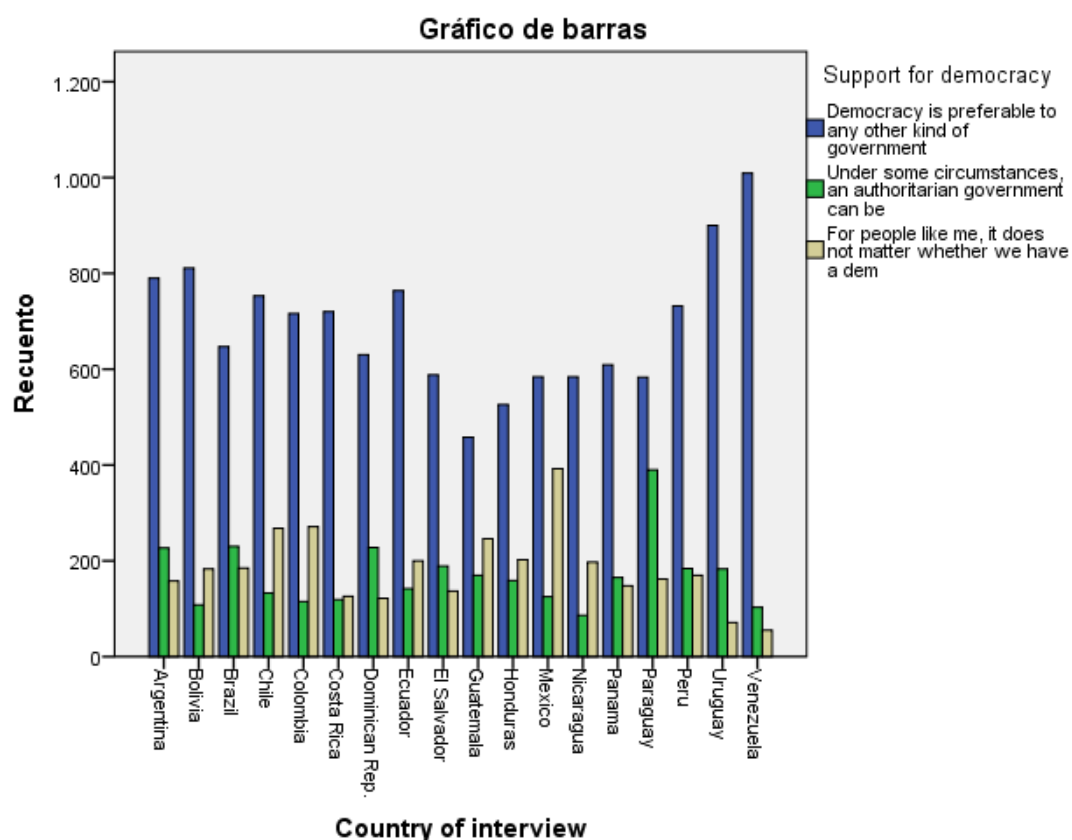
La evolución democrática regional, desde el final de la IIGM, ha estado caracterizada por un clima conflictivo en torno a diversos dilemas: en los años 60 y principios de los 70, entre la “reforma o revolución”; desde finales de los 70 hasta los años 90, entre “dictadura y democracia”; y en la actualidad divergiendo entre la “democracia o populismo”. Procesos en los que todos los agentes han contado con un problema transversal que se presenta como el verdadero dilema ciudadano a solventar, en términos de “exclusión o inclusión”, un índice de desigualdad tan vergonzante que ha situado la zona en los niveles más altos del mundo (CEPAL, 2013).⁶⁶¹

Aun así, el sistema ha sido apropiado como ideal por la masa poblacional, y los datos de las encuestas que ofrece el *Latinobarómetro*⁶⁶² indican que, aunque existe desconfianza y acritud por parte de los ciudadanos con las democracias instauradas en la región, éstos manifiestan holgadamente que la democracia es el sistema de gobierno preferible.

⁶⁶¹ En este sentido, merece ser rescatado un fragmento del discurso de clausura de la III Cumbre de la CELAC 2015 que realizó el Presidente de Ecuador Rafael Correa, cuando indicó: “Nuestra felicitación también a Evo Morales y Dilma Rousseff, por el inicio de sus nuevos mandatos presidenciales. Repletos de legitimidad democrática, que afianzan aún más nuestros vínculos continentales. El triunfo de nuestros compañeros es el testimonio que los poderes fácticos ya no son más fuertes que la voluntad de los pueblos” (Minuto [3.30- 3.47] Video disponible en línea: <https://www.youtube.com/watch?v=OCKshUNO6IU> . (Consulta realizada el 22 de agosto de 2014)).

⁶⁶² Véase Latinobarómetro en línea: <http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp> (Consulta realizada el 21 de junio de 2014).

Gráfica 21: Encuesta *latinobarómetro*. Aceptación de la democracia como sistema de gobierno en ALC.

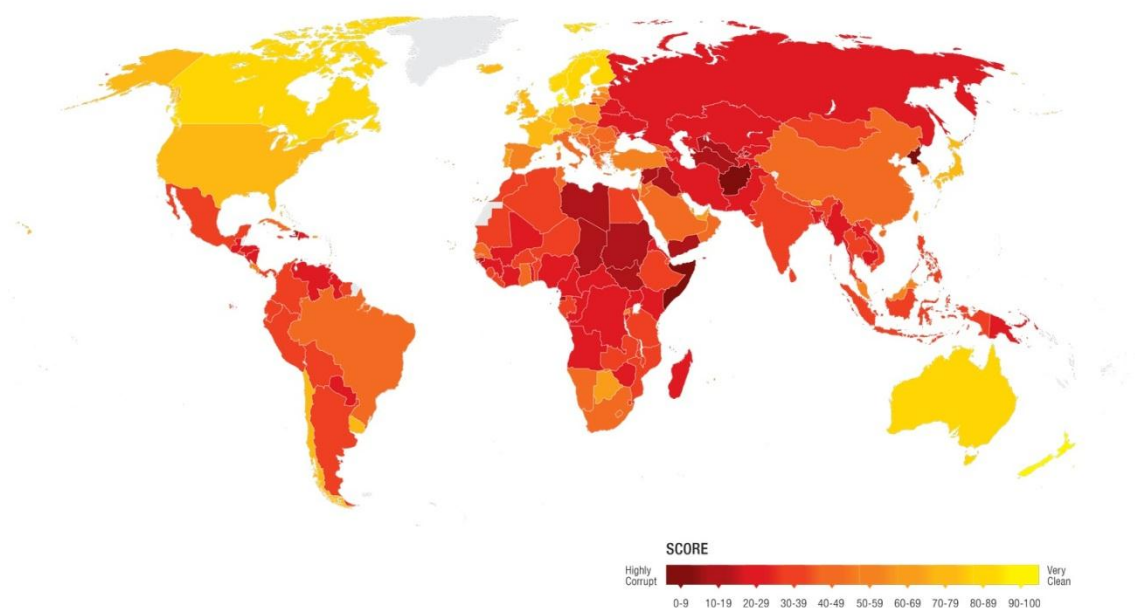


Fuente: De elaboración propia en SPSS a partir de Datos del Latino-barómetro 2010. Sobre un total de 20204 entrevistas, con un 92.8% de válidos.

En este sentido, aunque la democracia como idea de gobierno es insatisfactoria para un porcentaje de la población por definición (Sartori, 2007), la región está abordando transformaciones continuas que tratan de perfeccionar mecanismos en aras de integrar a las diferentes capas sociales en el sistema. Se ha evidenciado esto en los diversos programas de inclusión social que se han desarrollado y que, en cierto modo, están significando la mejora en diversos índices como la reducción de la pobreza indígena, la desigualdad, los niveles educativos, la renta, la mejora del gasto social, etc..., principalmente desde mediados del decenio 2000. Sin embargo, como ya se indicó, la distancia con los Estados desarrollados en este espacio todavía está lejos de converger (CEPAL, 2013; BM, 2014; PNUD, 2014).

Asimismo, la región presenta datos negativos en el aspecto institucional, encontrándose distanciada de los Estados promotores del desarrollo, ya que la percepción de corrupción institucional presenta niveles que implementan la construcción de desconfianza y, además, frenan los avances en términos de estabilidad, tanto a nivel interno de los Estados, como regional, y en las RRII.

Ilustración 12: Índice de Percepciones de Corrupción en instituciones públicas 2013.



Fuente: International Transparency (the global coalition against corruption). www.transparency.org .(Consulta realizada el 23 de junio de 2014).

En definitiva, el sentido que indicaba Sartori (2007) cuando hacía alusión a que la democracia es antes que nada un ideal, es como se debe observar el avance que presenta la región de ALC. En donde se están alcanzando cuotas de democracia progresivamente y, aunque presente retos de gran calado todavía, como pueden ser los procesos de inclusión⁶⁶³; la corrupción institucional; la mejora de rendición de cuentas; etc..., si debe resaltarse que se evidencia que el apoyo a la democracia y la implementación de mecanismos participativos viven en un continuo estado de fortalecimiento. Hecho que indica la preeminencia por un sistema de participación en la toma de decisiones, que otorga cierta estabilidad institucional en la región y, consecuentemente, le infiere una gran legitimidad en su rol de agente internacional. En este factor la convergencia es muy reseñable.

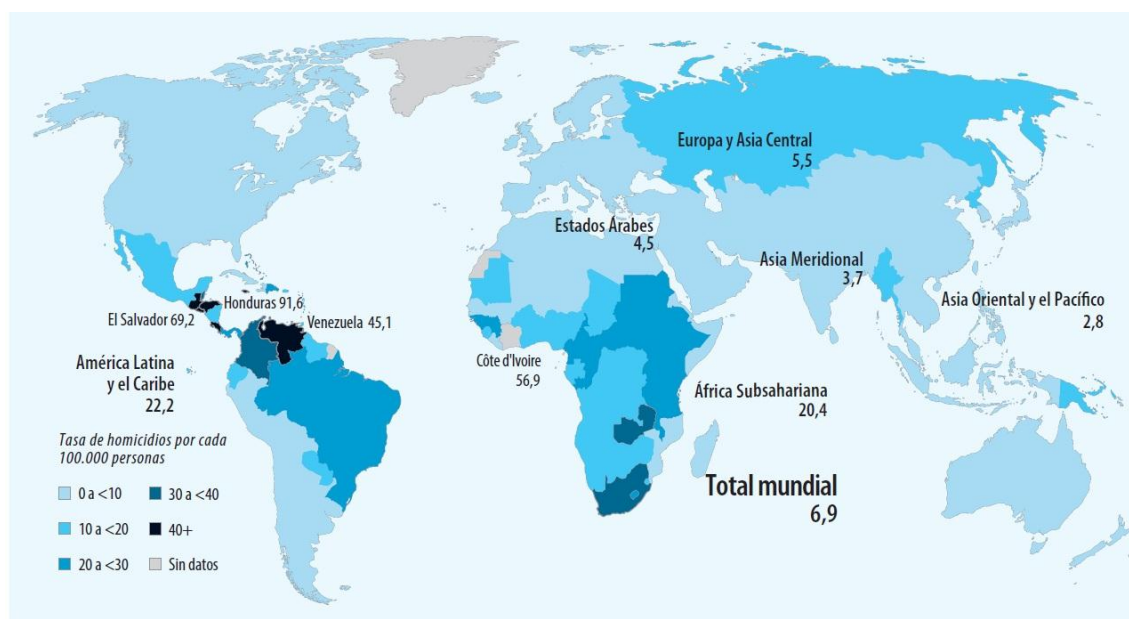
⁶⁶³ La región presenta según la CEPAL grandes retos en inclusión en la participación institucional de grandes grupos sociales como los indígenas, los afro-descendientes, o segmentos poblacionales como las mujeres y los jóvenes (CEPAL, 2013).

5.2.4 Convergencia en términos de seguridad.

Para analizar la convergencia en términos de seguridad de la región con los agentes relevantes, se cree apropiado realizar el abordaje desde dos categorías principales: 1ª) en términos de seguridad civil; y 2ª) en términos de paz y estabilidad entre Estados.

En términos de seguridad civil la región de ALC presenta datos altamente preocupantes, con áreas que son líderes en el planeta en este factor. ALC se distancia muy ampliamente de los centros desarrollados y es líder mundial, presentando datos preocupantes como la tasa de homicidios a nivel mundial, que indican una tasa de 22,2 por cada 100.000 habitantes en 2013. Dato que implica un alto costo a la región, ya no sólo en términos de PIB, que el PNUD (2013) sitúa en torno al 7,7% del PIB en ALC, sino en la construcción de confianza entre los diversos agentes, incentivando que la región sufra para instaurar la estabilidad intrarregional y de sus gobiernos.

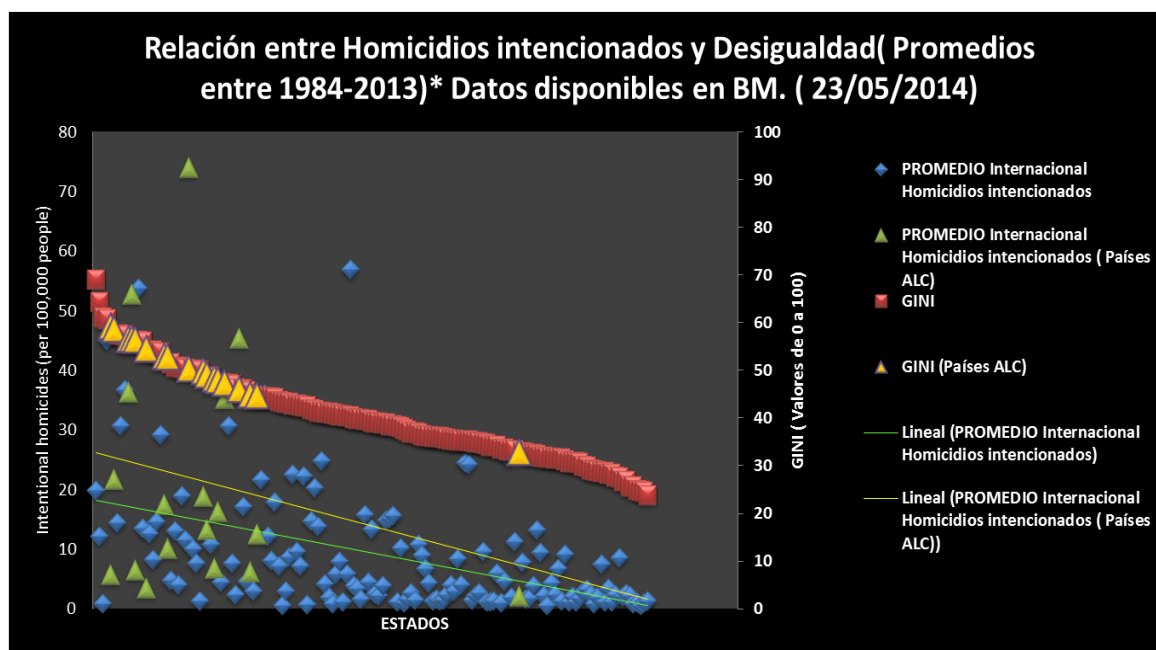
Ilustración 13: Mapa mundial coloreado de acuerdo a la Tasa de homicidios por cada 100000 hab.



Fuente: (PNUD, 2013, pág. 39).

A este respecto, una de las indicaciones en las que insiste el PNUD, es en que la seguridad viene incentivada por la desigualdad en ingresos. Lo que denomina seguridad económica (PNUD, 2013). Sentido en el que los datos globales son relevantes, como se puede observar en el siguiente gráfico.

Gráfica 22: Relación entre homicidios intencionados y desigualdad (1984-2013).



Fuente: De elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial. <http://www.worldbank.org/>. (Consulta realizada el 21 de agosto de 2014).

Por lo que se podría señalar que el aspecto de la seguridad civil es uno de los grandes desafíos de la región, y aquel que la aleja como agente, de una manera rotunda, de otros espacios territoriales. A este respecto sólo cabe indicar que este debe ser atendido con urgencia y, como se ha señalado, la relación entre desigualdad y este factor parece mostrarse como, al más, que una relación relevante.

En términos de paz y estabilidad entre regiones globales, hay que señalar que la región de ALC ha sido la que menos muertos por conflicto armado ha tenido en el último siglo (Dadyvov, 2013). Señalado este hecho, también se debe indicar que la estabilidad en términos de paz no ha operado de acuerdo a sistemas regionales particulares de ALC, sino que ha venido determinada, en gran medida, por el papel ejercido por la OEA. No existiendo un organismo que únicamente este compuesto por actores de ALC, sin la presencia de actores externos, para abordar los conflictos que pudiesen acontecer.

Sin embargo, aunque los grandes agentes relevantes tampoco destacan por no operar en temas de seguridad regionalmente, sí presentan una institución a la que pertenecen la mayoría de los agentes relevantes en términos de desarrollo: la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Por un parte, aunque la UE ha dado pasos en la última época para actuar conjuntamente, mediante la creación de la Política Común de Seguridad y Defensa con el objetivo de promover la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, la defensa en política de seguridad sigue operando de acuerdo a los acuerdos con la OTAN, al pertenecer a la misma 21 de los 27 Estados miembros. Ante este hecho, aunque se han implementado algunos mecanismos y distintas voces han promovido la pertinencia de promover la creación de una defensa común de la UE - entre ellos destacaron Angela Merkel y Nikolas Sarkozy-, otros señalan que la disparidad de intereses económicos y políticos hace que esta causa sea de difícil logro (Areilza Carvajal, 2007).

Asimismo, los EEUU, aun practicando el rol de líder internacional en temas de seguridad y operando con cierta independencia, también es miembro de la OTAN y suele actuar en su órbita. Hecho que sitúa a los agentes relevantes en torno a una organización de defensa y seguridad.

A este respecto indicar que Colombia es el único país de ALC que suscribió un acuerdo de cooperación con la OTAN en 2013, dando pasos en la dirección de adquirir la membresía en el futuro y, en cierto modo, quebrantando el proceso de cohesión e independencia que se está constituyendo en la región de ALC.

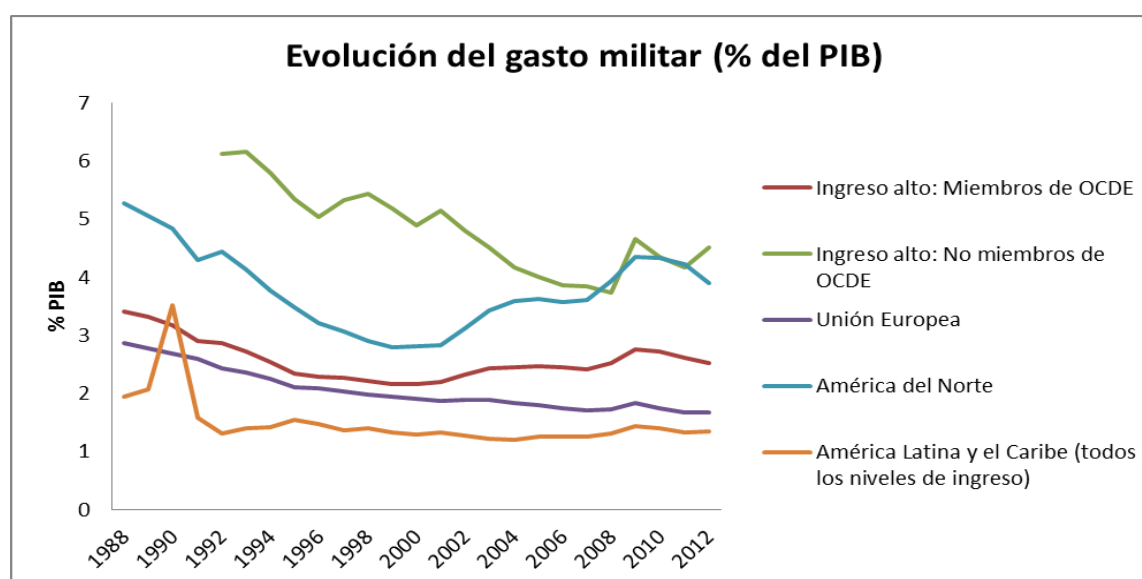
A pesar de este caso, los proyectos regionales que contienen la pretensión de institucionalizar mecanismos que aseguren la estabilidad y la paz están sufriendo un cierto impulso en la época reciente, a través de organizaciones regionales como el SICA, la UNASUR o la CELAC. A este respecto, no es eludible el señalar que, dado el largo historial de propuestas de cobertura continental, desde Don Juan Egaña en 1801 y su proyecto de defensa continental hasta la aparición de la OEA y el TIAR, la diversidad de los acontecimientos en búsqueda de mecanismos de seguridad, no ha impedido el que existiese cierto anhelo en la región de ALC por instaurar organismos únicamente compuestos por Estados de la región, sin Estados externos. Especialmente sin la presencia de los EEUU.⁶⁶⁴

Históricamente, el mayor avance en la promoción de mecanismos regionales impulsores de la convivencia pacífica se produjo tras los años 80. Cuando a través de la celebración de diversos actos, acuerdos y declaraciones, entre los que han destacado la firma del Acta

⁶⁶⁴ Para ampliar información acerca de los diversos procesos de paz en ALC véase Griffiths-Spielman (2009).

Contadora y la formación del Grupo Contadora y grupo de apoyo Contadora; los Tratados de Esquipulas I y II; las actas de Paz de la CAN, las recientes Cumbres de UNASUR, (especialmente la IV Cumbre de George Town) y demás eventos que han actuado como promotores de seguridad, se ha significado la implementación y fortificación de lazos regionales en términos de seguridad nunca antes alcanzados, aunque el gasto militar sigue estando lejos de los grupos de agentes relevantes.

Gráfica 23: Evolución del gasto militar por grupos de países.



Fuente: De elaboración propia a partir de datos disponibles del Banco Mundial. <http://data.worldbank.org/> . (Consulta realizada el 21 de agosto de 2014).

En la actualidad en la región se han implementado acuerdos que tratan de solventar los diversos problemas regionales, tanto de seguridad civil como en términos de paz, así como el impulsar su voz a nivel global, como el caso de istmo Suramericano. En el cual se ha tratado de institucionalizar la práctica de seguridad mediante acuerdos en el seno de la UNASUR. Institución que ha agilizado un proceso de cohesión cuando, mediante la creación de un Consejo de Defensa Suramericano (CDS) en 2008, se institucionalizaban prácticas de un órgano regional que tiene como misión principal el consolidar a Suramérica como una zona de paz que colabore en la construcción de la paz mundial, mediante el impulso a la concertación de la acción de los Estados miembros en cuestiones de terrorismo, lucha contra las drogas, tráfico de armas, crimen organizado, etc....

Es relevante este hecho en términos de cohesión regional, ya que entre las misiones que presenta el CDS se ha acordado por las partes que las acciones ejecutadas por el órgano

deben promocionar consensos regionales en materia de defensa, que permitan incentivar un proceso paulatino a acercamiento que conduzca a un escenario en el que la organización se sitúe como el organismo competente en cuestiones seguridad en el territorio del istmo. Lo que en cierto modo puede significar el abrir una brecha de sus lazos con el TIAR (Kan, 2010). Determinación que adquirió protagonismo al haber provocado una situación de posible quiebra institucional, cuando presentaron reticencias a su creación los Estados de Perú, Colombia y Chile, por estar aliados con Washington en términos de seguridad. No obstante, la organización logró superar esas diferencias y estos Estados accedieron a la constitución del órgano.

En este sentido, quizás actuó pertinentemente y como factor constitutivo de confianza el que la UNASUR operase de un modo intergubernamental. Puesto que el compromiso en la ejecución de las medidas compromete en un menor grado que un acuerdo supranacional, y la flexibilidad de la condición pudo ser causa de la no ruptura de organismo.

La construcción de confianza por parte del CDS, a pesar del poco periodo de tiempo vigente, ha evidenciado las ambiciones institucionales y la cobertura de acción que pretende alcanzar dicho organismo. Acciones como la manifestación de apoyo al presidente de Bolivia Evo Morales ante la amenaza del conflicto interno sucedido en 2008 (Regueiro & Barzaga, 2012)⁶⁶⁵, en la que lejos de intentar influir en la soberanía interna boliviana, se significaba el apoyo institucional a los procesos democráticos en la región; la actuación del CDS en relación con las bases militares norteamericanas en Colombia durante 2009, que si bien fue un claro conflicto entre Colombia y otros Estados de la región, en el que se respetó la decisión de Colombia, la UNASUR actuó en la cuestión de instalaciones militares en la región por considerarlo un tema de *soberanía regional*, por entender que la seguridad militar constituía un interés extranjero en la región, aunque igualmente se respetase la decisión soberana de Colombia (Kan, 2010, págs. 95-96)⁶⁶⁶; la declaración en 2010 ante la retención del Presidente de Ecuador Rafael Correa, cuando la UNASUR manifestó su apoyo al proceso constitucional evidenciando su rechazo a prácticas características del pasado; la declaración ocurrida el 17 de marzo de 2012, rechazando la presencia militar de

⁶⁶⁵ En este caso se creó la Comisión de la UNASUR para el esclarecimiento de los hechos de Pando que, resultado del debate, elaboró un informe considerado como contribución de UNASUR al Estado de Derecho y Justicia. Así mismo, esta declaración evidencia que ante la comparativa con los hechos ocurridos en Venezuela en 2002 con el intento de golpe de Estado, la diferencia respecto al comportamiento de la OEA es notable, que en aquel caso no emitió comunicación alguna.

⁶⁶⁶ Contrarios a la instalación en la región de bases norteamericanas se manifestaron diversos presidentes como Tabaré Vázquez de Uruguay; Rafael Correa de Ecuador; Hugo Chávez de Venezuela; Fernando Lugo de Paraguay; y Evo Morales de Bolivia.

Reino Unido en las Islas Malvinas por parte del Consejo (Regueiro & Barzaga, 2012); o el apoyo a el 19 de agosto por medio de otra declaración al gobierno de Ecuador respecto al caso de Julian Assange⁶⁶⁷ (SELA, 2012, pág. 22), son actos que han mostrado cierta concertación subregional a la hora de encarar conflictos, internos y externos.

El avance institucional de la UNASUR está manifestándose a través de la implementación de mecanismos que permitan alcanzar los objetivos marcados por el CDS. La creación del Consejo de Seguridad Ciudadana, Justicia y Coordinación de Acciones Contra la Delincuencia Organizada Transnacional en 2012, responde a los objetivos institucionales que pretenden dar cobertura a los asuntos de seguridad ciudadana, estabilidad democrática, desarrollo integral, construcción de identidad suramericana. Los que dieron origen al Tratado de la UNASUR.

Asimismo, acciones impulsadas por el CDS, como el acuerdo en publicar el Registro Suramericano de gastos de defensa de los Estados miembros⁶⁶⁸ - en donde se pueden observar los gastos ejecutados por los Estados miembros con periodicidad-, constituyen un claro acto en la construcción de confianza regional. Significando un avance en la cooperación de la organización en materia de defensa, que implica un incremento sustancial en los grados de confianza entre los Estados miembros (Prieto, 2012).

Aun habiendo señalado el evidente progreso cohesionador en la institución en términos de seguridad, como indica Germán Camilo Prieto (2012) “...es muy prematuro aún apuntar a un proceso de integración suramericana que implique que los estados miembros cedan poder soberano de decisión a organismos comunes” (Prieto, 2012, pág. 16). Ya que, aunque en el caso de la UNASUR ha sido señalado el incremento en la articulación de mecanismos que implementan la cooperación suramericana en problemáticas consideradas de seguridad regional, e incluso aludiendo en diversas ocasiones al término *soberanía regional*, el respeto por la soberanía interna de los Estados; la no intervención en asuntos internos; y el respeto a la toma de decisiones particulares, como elementos operativos inscritos en la bases constitutivas de la UNASUR (UNASUR, 2008), establecen límites de acción y restan agilidad institucional, al no contar la organización con ningún tratado que signifique

⁶⁶⁷ El caso *Wikileaks* y el asilo político concedido a la figura de Julian Assange por el Estado ecuatoriano, ha sido uno de los hechos que han evidenciado el ascenso tácito del poder internacional por parte de Ecuador, y consecuentemente de ALC en el contexto de las RRII. Puesto que a pesar de las presiones internacionales (más concretamente de los EEUU), el país ha mantenido su compromiso con el periodista (Washington Post, 2012).

⁶⁶⁸ El Registro suramericano de gastos de Defensa fue parte del Plan de Acción 2009-2010 del CDS.

compromiso y cesión de competencias a un órgano que tenga capacidad decisoria supranacional, en donde se refleje un compromiso con la decisión conjunta (Kan, 2010). Por lo que, aun presenciando una evidente creación de confianza entre las partes, de nuevo se pone de manifiesto que la estabilidad regional en términos de acuerdos regionales depende, en gran medida, de la voluntad del líder de cada Estado. Por lo que sería necesario replantearse este esquema de acción en asuntos determinantes para la estabilidad regional como la seguridad⁶⁶⁹ (Prieto, 2012).

En cuanto al avance institucional en el istmo centroamericano, hay que señalar primeramente que el área está caracterizado por los altos índices de violencia del planeta, superando el indicador mundial en esta materia en una relación de uno a cinco (Batres, 2012). Es por ello, que el reto de institucionalizar mecanismos, mediante la concertación entre las partes, se ha presentado históricamente como una necesidad estructural que ha requerido y requiere concertación entre las partes del istmo.

Con esta ambición y para tratar de atajar los conflictos que no pudieron resolver la firma de la Paz de Esquipulas I, II y el Acta de Contadora, se suscribió en 1995 el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, en donde se definió un modelo en el que se promovía la conciencia y respeto por los DDHH, sobre la necesidad de asegurar respeto a los derechos civiles y el fortalecimiento institucional, como requisitos previos al logro de avances en términos de democracia.

Una vez acordado este primer Tratado en el seno de la SICA, recientemente en 2007 fue suscrito, por los diversos Jefes de Estado del istmo, la Estrategia de Seguridad Centroamericana. Esto debido a que, ante el creciente aumento de la criminalidad organizada que evidenciaba la debilidad institucional en la región, se promovió este acuerdo como mecanismo de fortalecimiento para tratar de reforzar el cumplimiento de la Ley⁶⁷⁰.

⁶⁶⁹ En este sentido indica Germán Camilo Prieto que “...es muy prematuro aún apuntar a un proceso de integración suramericana que implique que los estados miembros cedan poder soberano de decisión a organismos comunes” (Prieto, 2012, pág. 16).

⁶⁷⁰ Los gobernantes allí reunidos declararon que la adopción de la Estrategia permitiría: “...contar con un instrumento regional idóneo, a fin de crear un ambiente de mayor seguridad para las personas y sus bienes, propiciar el desarrollo humano sostenible a través de las inversiones y actividades relacionadas con sus componentes, relativos al combate al delito, prevención de la violencia, rehabilitación reinserción y fortalecimiento institucional”. Declaración en Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica. Disponible en línea en: http://wgce.sica.int/csc/conf_seg/conf_seg_breve.aspx?IdEnt=330 (Consulta realizada el 23 de septiembre de 2014).

En 2011 esta Estrategia se ha visto implementada mediante la Celebración de Conferencia Internacional de Apoyo, en donde la estrategia cobró cierta fuerza y se instauró como objetivo transversal dentro del proceso de integración regional. A partir de esa fecha la Estrategia adoptó el acrónimo de ESCA.

El punto central de esta estrategia no ha sido instaurarse como mecanismo de empoderamiento regional que solventa cuestiones particulares por sus propios medios excluyendo actores externos, sino que, ante el grave problema que supone en la región la delincuencia regional, el objetivo ha sido el concertar, coordinar políticas y articular mecanismos de seguridad que permitan alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de los Estados miembros.

Pero como en otros organismos regionales, la puesta en práctica de la ESCA convive con dificultades a las que se debe enfrentar. Entre ellas destaca la ausencia de un ente legislativo que posea capacidad para dictaminar con carácter vinculante. Destacando que en el seno de la SICA el Parlamento Centroamericano carece de competencias legislativas que permitan ejercer decisiones regionales. Por lo que cualquier decisión o modificación legal en cuestiones de procedimientos o normas, ralentiza el proceso de ejecución, cuando no lo invalidan las posturas de los diferentes Estados. En la misma línea, decisiones de los Estados miembros que afectan a la estrategia son, en ocasiones, adoptadas o planteadas ante sus parlamentos sin la consulta al organismo regional. Lo que implica un freno al objetivo institucional de crear reformas y frena el fomento de la confianza⁶⁷¹.

En todo caso, la cooperación centroamericana en términos de seguridad busca articular mecanismos transnacionales a problemas trans y nacionales, y es por ello se requiere de concertación y de coordinación.

Paralelamente e incluyendo a los Estados del sur de México (desde Puebla), Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia (2006) y R. Dominicana (2009), se produjo la creación del Proyecto Mesoamérica (2008)- sustituto del Plan Puebla Panamá (2001)- que posee relevancia en términos de seguridad tras la adopción del documento surgido de la 13ª cumbre del Mecanismo de concertación de Tuxtla Gutierrez (Chiapas). En donde se incluyó la concertación en cuestiones referidas a la

⁶⁷¹ Entre las acciones que denotan esta actitud se señala la decisión que adoptó el presidente Otto Pérez Molina en febrero de 2010, cuando propuso en su Estado (Guatemala) el avanzar hacia la despenalización de la drogas, e informó posteriormente a los Estados miembros de la SICA, siendo estos contrarios, especialmente los líderes de Costa Rica y Panamá (Batres, 2012).

seguridad regional y a la lucha contra el narcotráfico como objetivos a tratar por el proyecto.

Respecto a este proyecto, algunos autores han indicado que posee la característica de ser un mecanismo en el que se coopera con los EEUU en la seguridad regional. Por lo que este actor podría estar asentando sus bases militares en la región. Lo que le otorgaría capacidad militar en el área y pudiese significar que, a través de la Iniciativa Mérida suscrita con México y Estados de Centroamérica (Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá), se adquieran las herencias de aquel mítico Plan Colombia contra el narcotráfico (Zunino, 2010).

El sentido por el que es relevante el papel de los EEUU es que, al haberse incluido en la Declaración de Guanacaste⁶⁷² (2009) la solicitud a los EEUU de cooperación en asuntos de seguridad, junto con la Iniciativa Mérida, en donde México adopta los esquemas de seguridad de los EEUU en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la migración indocumentada, al encontrarse estos mecanismos en una posición de subordinación al Congreso de los EEUU, este último sería el agente que determinaría estrategias en la región (Zunino, 2010).

El contexto señalado podría causar que se produjese bajo el liderazgo de los EEUU la acción de interés regional, y en línea con lo que indicó Gert Rosenthal en 2007 al respecto, este hecho contiene peligros, ya que:

“Puede surgir algo tremendamente significativo como un corredor de seguridad desde Colombia hasta Estados Unidos” (Citado en Zunino (2010)).

En todo caso, lo relevante de estos pactos es indicar las diferencias estratégicas existentes entre la política de UNASUR y aquella que han practicado la SICA y el Proyecto Mesoamérica, ya que uno busca empoderarse como instrumento de concertación política y seguridad sin actores externos; y otro empodera la participación de un actor externo en sus estrategias, evidenciando nuevamente prácticas alejadas entre los grupos y Estados miembros de ALC.

Por otro lado, en términos de convergencia regional y con atención al papel de la CELAC, se observa que ésta no dispone todavía de una solidez institucional “tan consolidada” como

⁶⁷² Documento disponible en línea: http://www.sela.org/attach/258/default/Declaracion_de_Guanacaste_-_XI_Cumbre_Tuxtla_27-29julio_2009.pdf (Consulta realizada el 21 de julio de 2014).

la UNASUR o la SICA, y aunque es cierto que se han realizado declaraciones que promocionan la estabilidad, su alcance sólo repercute a un acto de exclusión de la organización de aquellos Estados que no respeten el Estado de derecho y la democracia. Los actos constitutivos de defensa de la seguridad regional en la CELAC lo componen declaraciones de intenciones, más que acuerdos concretos o reafirmaciones, en cuestiones como la no proliferación de la fabricación de armas nucleares en la región, como fue expresado en la Declaración de la II Cumbre de la CELAC (2014).

En definitiva, dada la proliferación de acuerdos, así como la no cesión de competencias de los Estados a una institución con capacidad supranacional, indica Andrés Serbin (2010) que:

“...a través de diferentes organizaciones multilaterales, declaraciones, en su recorrido histórico, ALC ha promovido... un respeto hacia los principios de soberanía nacional, no intervención, y promoción de la resolución pacífica de conflictos” (Serbin, 2010).

Tanto la CELAC como la UNASUR, la SICA, o el CARICOM, se enfrentan a la tarea de solventar los diversos desafíos presentes, y que ello permita superar las diferentes connotaciones en los ámbitos de seguridad regional y seguridad nacional. Tarea en la que deben trabajar en aras de implementar, primeramente, la confianza. En este sentido, aunque las organizaciones en principio pretendan establecerse como instituciones de defensa y afianzamiento de seguridad regional, los espacios en los que convergen las esferas son de difícil acoplamiento. Por lo que se recomienda: a) articular procesos que superen la desconfianza de los otros Estados parte; b) identificar el papel de otras organizaciones como la OEA en la región; c) definir cuáles son las amenazas a enfrentar; y d) definir cuáles serán los espacios de acción autónoma que pretenden albergar la región.

En definitiva, en este punto se puede concluir que la región está lejos de converger con los agentes relevantes en términos de seguridad civil. Aunque, por otra parte, la convergencia regional para abordar esta problemática es evidente e incluso está dando pasos más acelerados que otros áreas. Por ello, se está constituyendo cierta esperanza en la articulación de mecanismos propios de la región, a pesar de que en cuanto al gasto y la capacidad, está muy lejos de alcanzar los niveles de organización de los agentes relevantes.

6. Conclusiones.

Las conclusiones de este capítulo podrían ser resumidas, en cierto modo, por una frase concreta: “una idea choca con otras ideas, y serán requeridas capacidades para llevar algunas a cabo”. Sin embargo, esta frase no abarca ni define la gran variedad de acontecimientos ocurridos en un área que, tratando de articular diversos mecanismos para llevar a cabo un ideal convergente entre los diversos agentes regionales, el ideal unionista presente en la región desde los procesos de independencia, se ha topado con un proceso de continuas quiebras debido a la práctica de ideas que incidían en la divergencia, propias y ajenas, las cuales han actuado como palos introducidos en ruedas que intentan avanzar.

El estudio ha evidenciado que la mayor divergencia en la región ha oscilado en torno a uno de los debates acontecidos, y que ha determinado el comportamiento de los diferentes agentes, como ha sido el papel que debe ejercer una comunidad en la regulación de la economía externa en la región. Al ser ALC un agente receptor de inversión, la disputa ideológica aquí abordada ha desvelado que la disputa se ha centrado en el cómo se debía receptar en el territorio a la IED.

Esta cuestión ha jugado un gran papel en el proceso integrador/unificador, ya que ha actuado como el espacio de disputa y conflicto en el que las divergencias o convergencias entre diversos territorios, en torno a que prácticas adoptar, han determinado la construcción o deconstrucción de pactos, tanto intrarregionales como extra-regionales.

Desde el comienzo de la fase pragmática, el debate se instauró en las sedes de los dos agentes (CEPAL y BID) que promocionaban las diversas prácticas a aplicar para alcanzar el estado de desarrollo (ISI, apertura). Esta misma disputa ideológica se ha visto replicada, tanto en un nivel Estatal como en un nivel regional, en los diferentes procesos de integración/unificación que han intentado promover prácticas de concertación regional.

En términos de construcción de entidad regional, se ha evidenciado claramente esta disputa en todas las instituciones. Aunque bien es verdad, que esta disputa ha presentado heterogeneidad en sus formas: desde la creación del propio ALACL y la ALADI; en los debates ocurridos en torno al trato de la IED en la CAN y las señaladas *Decisiones* (24, 198,563); en el seno de la CARIFTA y su evolución hasta la actualidad en la CARICOM; en el seno del MCCA o la SICA; en la actualidad en los postulados divergentes que se detectan en el seno del ALBA-TCP y la AP; así como de manera transversal y un poco menos visible, pero interiorizada, en el seno de MERCOSUR.

El análisis también ha revelado, como a lo largo de todo el proceso, ha jugado un rol muy influyente en papel ejercido por los agentes relevantes en la teorización del desarrollo. Si bien, ya desde un principio se determinó cual era la meta a perseguir en el desarrollo, es decir, qué era ser desarrollado, también se promovió paralelamente la adopción de prácticas concretas y, por lo tanto, qué tipo de políticas debían ser adoptadas para acelerar el proceso de convergencia con los Estados desarrollados y alcanzar dicha categoría. En donde hay que señalar que, en la significación de la categoría, ha habido pocas divergencias en el proceso; y las contrarias aparecen recientemente. No obstante, ha quedado evidenciado en este capítulo que la región se apropió “mayoritariamente” de la meta promovida. El debate recogido divergía, en términos de prácticas, primordialmente en la metodología aplicar no en la meta.

A este respecto hay que indicar que la acción externa ha ocupado siempre un foco promotor de los procesos de asociación, determinando éste hasta tal punto, que las denominaciones de las prácticas a adoptar se definían en torno al papel que ejercían éstos, los agentes relevantes, en el proceso: *regionalismo hacia dentro VS regionalismo abierto o hacia afuera*.

Como ha evidenciado el análisis, además de haber determinado la adopción de estrategias de los Estados, así como de los procesos de integración, la regulación referida al trato a la IED se instauró en la región a través de los acuerdos particulares con los Estados. Los cuales, en un proceso de competencia por atraer inversión- a excepción de Brasil-, accedieron a la firma de TTBBII que significaban la cesión de competencias, en términos jurídicos, de dictaminar disputas inversor-Estados ocurridas en suelo nacional a instituciones extra-regionales.

Paralelamente a este proceso, los agentes regionales han ido aproximando posturas y promoviendo mecanismos de concertación, atendiendo a otros áreas de interés común, si bien las divergencias en torno al rol de la IED y la acción externa han determinado, en gran medida sino totalmente, el proceso de concertación económica y política.

En este sentido, la seguridad ha ocupado un espacio determinante en el acercamiento de posturas regionales, ocupando actualmente un lugar primordial en las organizaciones con mayor cobertura regional: la UNASUR y la CELAC.

A este respecto señalar que, si bien la UNASUR nació como un agente que pretendía competir con el TLCAN en el mercado económico continental, esta organización ha ido

mutando en sus objetivos hasta situar como su prioridad: la concertación de prácticas políticas en temas de seguridad- mediante la creación del CDS-. Y aun presentando los Estados miembros divergencias en cuanto las prácticas económicas, el tema de la seguridad y la estabilidad es aquel eje sobre el que se sitúa en gran medida el sentido institucional.

En la misma línea y aunque con origen divergente, el análisis de la CELAC ha revelado que este organismo- que ambiciona constituirse como organización- encuentra su origen en los acuerdos de Paz de Contadora, que a partir de diversos procesos de “mutación” devino en la formación de la actual CELAC. Es decir, en un mecanismo de promoción de estabilidad, seguridad y paz en la región, que encontró espacio al verse desprotegida por los pactos con el exterior - en este caso la OEA-.

Es pertinente recatar y entender el papel ejercido por estas dos instituciones, puesto que el análisis ha evidenciado que ambas pretenden actuar en el aseguramiento de la estabilidad y la promoción de la paz, tanto en el interior como en el exterior; y paralelamente promover un orden internacional más justo, en donde los territorios miembros posean capacidad de decisión y respeto institucional de los agentes externos. Este último objetivo es relevante en términos de regulación de la IED, puesto que en ese sentido es en el que estos organismos han incluido en sus agendas la necesidad de analizar la normativización de la IED; y la pertinencia de instalar en el seno de la región una institución de arbitraje para disputas de IED. Señalándolo ambas como un tema de importancia suprema para la región, y que implica una cuestión de *soberanía regional*. Es decir, en el sentido de juzgar asuntos acontecidos en el territorio regional por organismos regionales. Pues si bien se puede ceder esa capacidad, recuperarla por parte de las naciones o instituir uno organismo de regulación de esos asuntos significa recuperar y constituir uno de carácter regional, al ser la práctica interestatal.

Por otra parte, el análisis también ha evidenciado que, si bien el ideal integrador/unificador se encuentra a lo largo y ancho de AL, el área del Caribe que se organiza en torno al CARICOM está dando pasos de acercamiento, más por una cuestión de interés económico e identificación como área determinada por su *pequeñez*, que por una cuestión de identidad y construcción histórica común. En todo caso, es evidente que los lazos se están constituyendo y reforzando a medida que los procesos de organización regional adquieren cierta institucionalidad y se asientan como ejes de articulación de prácticas.

Asimismo, indicar que el capítulo ha evidenciado que el ideal unificador se ha consolidado en el imaginario regional. Pero a su vez, que el concepto de soberanía también ha sido apropiado por los Estados un sentido estatal más que regional. Cuestión que ha dibujado un contexto en el que los diferentes territorios poseen ideas encontradas y que en ocasiones chocan. Ya que si por una parte la herencia europea indica que la soberanía se ejerce y no se delega la capacidad decisión última, el ideal integrador exige, en cierto modo, esa cesión de competencias para articular mecanismos comunes. Lucha de ideas que está tratando de solventar la región mediante la adopción de mecanismos de toma de decisiones intergubernamentales, viendo esta modalidad como aquella en la cual el sometimiento a decisiones no participadas es menor que una cesión supranacional, al estilo Europeo. Entendiendo que sus demandas tenderán a ser atendidas en mayor grado y el proceso será más solvente con esta modalidad, en la medida que el precio de este hecho sea el tiempo de armonización de ideas y prácticas.

Pero además del tiempo, según la teoría constructivista, el realizar los propósitos contenidos en las ideas cuando se forma parte de una estructura requiere de capacidades, al requerir dicha estructura de una transformación. A este respecto, el “breve” abordaje realizado en este capítulo - tema que requeriría de otra tesis doctoral para poder expresar las conclusiones con cierta contundencia-, ha evidenciado como algunos de los factores analizados han variado en paralelo a la constitución de instituciones regionales.

Por una parte, si se ha evidenciado que existe una clara predisposición de la mayoría de los agentes (Estados y ciudadanos) a los procesos de integración, es notorio que, si bien las ideas en cuanto al modo divergen, los ideales mínimos que puedan constituir acuerdos regionales requieren de, al menos, ciertas capacidades para llevar a cabo dicha idea.

En términos de capacidades económicas y de sustento, dado que la región ha poseído y posee potencialidades que le capacitan económicamente y sustentablemente- como energía y RRNN-, la evolución de otros factores como, el desarrollo de la estructura exportadora; así como el incremento en la participación de las empresas latinoamericanas en la SI- en este aspecto de un modo muy heterogéneo-, han potenciado el leve aumento de capacidad para determinar las prácticas en la región y con el exterior. Ya que de ser únicamente agentes receptores han pasado a ser emisores de IED, tanto a nivel regional como internacional. Aunque este ha sido muy leve en comparación con los agentes relevantes en términos globales, pero teniendo una importancia relevante en cobertura regional.

Asimismo, entre otros de los aspectos que acerca la región a las realidades presentes en los agentes relevantes, y por lo tanto en términos de capacidades, destaca la instauración de sistemas de gobierno democráticos. Este hecho otorga una legitimidad a su voz, al compatibilizar con aquellos sistemas instituidos y defendidos por los agentes relevantes. Capacidad que se muestra como muy importante a la hora de requerir transformar reglas o prácticas, y más, cuando ésta cuenta con una aceptación profunda en la ciudadanía de todos los agentes.

Sin embargo, aun habiendo convergido en términos de sistema de gobierno, existen desafíos que alejan a la región de los agentes relevantes: la corrupción, la seguridad civil, la desigualdad, la pobreza, el ingreso, la educación terciaria, o la desventaja en el intercambio. Factores que serán necesario atajar, ya que lo relevante no es la distancia con estos, lo relevante es el que son elementos que contienen la capacidad de alcanzar niveles que deslegitimen las ideas formuladas. Y de ello que se corra el peligro de que se construya un discurso que no otorgue legitimidad a las prácticas que partan del ideario regional y se oferten otras nacidas en otras realidades.

En definitiva, la lucha en las ideas sobre cómo opera el trato a la IED sí ha determinado la construcción de organismos integradores/unificadores. Indudablemente, evidenciando que las capacidades, ya fueren ideológicas- como por ejemplo el impacto de la Resolución 1803 de las NNUU, o la idea de democracia-, económicas- los RNN, el intercambio, la capacidad de las Empresas Multilatinas-, o culturales y sociales- educación, formulación de ideas, sistemas de seguridad civil, etc...- han jugado y jugarán un papel relevante en el devenir del proceso integrador y su relación con el exterior.

PARTE IV. Conclusiones.

La elaboración de estas conclusiones ha sido esquematizada de un modo que se entiende apropiado y en línea con la estructura de esta tesis.

En este sentido, dado que **cada capítulo posee sus propias conclusiones**, en estas últimas se indicarán las conclusiones generales y las aportaciones que se entienden relevantes. Éstas serán expuestas tanto en términos de resultados como en relación con el marco teórico constructivista como primer punto; como segundo punto, se expondrá la obligada verificación de los objetivos con los que se daba comienzo a la investigación, así como se refutarán las hipótesis y objetivos de partida; y como último, se indicarán las principales aportaciones encontradas en el uso del marco teórico escogido.

1. Balance general de las principales aportaciones y resultados de la tesis.

Es un hecho notorio, y que ha quedado de manifiesto en esta investigación, que la constitución de un agente regional que conjunte voluntades y capacidades de los diferentes territorios de ALC - variando en cuanto a su cobertura geográfica (algunos incluyendo o no en los inicios a unos u otros territorios (casos de Brasil o/y a los Estados del Caribe); y cobertura en términos de atribuciones - , ha estado presente con mayor o menor auge en todos y cada uno de los momentos, fases, épocas o periodos, por los que ha atravesado la región desde que se alcanzasen las respectivas independencias.

Se concluye en este estudio que: las voluntades que han indicado la pertinencia de realizar acción, así como la construcción del discurso y de las prácticas a realizar, promotoras e impulsoras de la construcción de un ente regional, han estado determinadas por el rol desempeñado en el territorio por agentes externos en un sentido negativo. Es decir, se expone como primera conclusión que se ha tratado de un proceso en el cual ha predominado una actitud regional de: “Ser para que tú (el agente externo) no seas en mí”.

Se puede afirmar asimismo, como resultado de esta investigación, que en este propósito regional han intervenido de manera crucial y particular dos de las categorías analizadas: 1ª) el estado evolutivo de la sociedad como categoría: ser o no desarrollado, civilizado, evolucionado, etc...; y 2ª) la capacidad de decidir sobre asuntos ocurridos en el territorio

del Estado y sobre las relaciones del mismo con el exterior. Es decir, la categoría de ser o no ser soberano.

En este sentido, señalar que se ha evidenciado tras el ejercicio analítico como desde los primeros procesos de independencia las ideas externas sobre el cómo se debía organizar una sociedad han determinado el devenir de la región. Ello, al quedarse éstas instituidas como propias en aquellos ciudadanos que articularon los levantamientos. De hecho, éstas fueron un “legado” de los Imperios. En grado tal que las divergentes prácticas imperiales determinaron la configuración territorial resultante de los procesos de independencia. En especial las prácticas económicas ejercidas por cada Imperio.

Otra cuestión relevante a rescatar, es el hallazgo de la evidencia de que en todo proceso de independencia, especialmente en los primeros reconocimientos, la acción externa era la única capaz de otorgar la categoría de soberano, determinando si se era o no soberano y en qué grado. Este hecho se debió a dos cuestiones principalmente: 1ª) porque se adquiría una herencia de construcción de sociedad con reglas relacionales no emanada de la propia sociedad a la que debían atender; y 2ª) puesto que la soberanía era un reconocimiento de otros, lo que implicaba la participación de un agente externo en la adquisición. Por lo que se observa, implícitamente, en la adquisición de la categoría de agente soberano la presencia de un estatus de autoridad externa y superior al propio Estado constituido. Haciéndose presente una heteronomía.

El heredar estructuras ideacionales del cómo ser y de qué capacidades se tenían como agente, causó que, en la propia evolución de los territorios de ALC, el choque entre el cómo ser y ser el que decide haya constituido un debate en el que, en las grietas existentes en el mismo, se ha situado la práctica que ha injerido en ambos y que era interés de esta investigación: la IED.

A este respecto, se ha evidenciado que las grietas indicadas tienen dos elementos determinantes en el proceso. Una grieta es la identidad de la región, que se ha desarrollado en un proceso de construcción continua por desvelar quién se es, qué se quiere y cómo lograr aquello que se quiere. Grieta que se ha visto perturbada al percibir los agentes regionales como la categoría de ser agente soberano no se significaba en la práctica, una vez reconocidos Estados soberanos, como en la teoría había sido definida por los clásicos y aprendida de los agentes colonizadores. Percepción que ha motivado que la soberanía se haya convertido en el centro de una lucha de la región con los agentes relevantes, a la vez

que ha frenado los posibles procesos de unificación/integración regional. Pues si bien, en el proceso de adquisición de la categoría de soberano, se concedió el reconocimiento legal internacional de los agentes relevantes soberanos progresivamente, la soberanía no fue respetada “en todos sus atributos”, en caso de chocar la ejecución de la práctica soberana de los nuevos agentes de ALC con intereses de los agentes relevantes en suelo regional. Concretamente en cuestiones de inversiones de capital- ya fuere IEI o IED-.

Es por lo indicado que, al saberse los territorios soberanos y haber interiorizado la teoría y el cómo se ejercía la soberanía, a raíz de las disputas se hayan producido, en diversas épocas, eventos que reclamaban la atribución de las competencias que entendían no respetadas, construyendo pensamiento crítico emancipador - en el sentido que indicó Habermas⁶⁷³ - una vez interiorizadas la ideas y las prácticas soberanas (Ej. Doctrinas Drago y Calvo)-. Causando que, incluso en ocasiones, se haya aludido por diversos agentes en distintos periodos a la obligación y necesidad de perseguir una II Independencia. Curiosa alusión: agentes soberanos persiguiendo la independencia.

El hecho de que los diferentes Estados hayan tratado de adquirir la categoría de soberano en el modo que fue aprendida de los colonizadores, ha sido el elemento impulsor de que, en caso de percibir que los diferentes atributos asociados a la condición no eran respetados, se cultivase en la región la articulación de un discurso que indicaba que era apropiado el acto de unificar capacidades. Motivando tal acción, además de unificarse por la cercanía territorial, una construcción de identidad común como agentes que habían recibido un mismo trato y heredado una cultura semejante.

Y es que en la región se ha evidenciado que: en circunstancias en las que se limita la capacidad de ejercer de soberano, más allá del reconocimiento legal internacional en plenitud, **los agentes débiles o que perciben injusticia promueven la unificación** con aquellos que perciben que poseen unas condiciones similares, así como éste se verá incentivado si se percibe una identidad común. Y como en el caso de ALC, ésta se ha constituido a partir de procesos similares en su relación con el exterior, las dos cuestiones indicadas poseen amplias posibilidades de constituir un pacto. Siendo éste proceso el medio ofertado para adquirir capacidad y poder revertir esos límites.

A este respecto se debe indicar, que el análisis muestra que en la región se ha convivido con la noción de saberse en una disputa continua por adquirir la categoría de soberano en

⁶⁷³ Véase Habermas (1990, pág. 324) para profundizar sobre la emancipación.

plenitud. Es decir, de acceder a la capacidad de decidir y poder exponer y realizar prácticas de acuerdo a los ideales constituidos en el interior. Debido a que se ha constatado que, principalmente, uno de los atributos fundamentales de la soberanía: la autonomía, estaba puesta en cuestión constantemente. Esto a causa de que la categoría ha vivido en un espacio en el que, debido a que son las que otorgan un funcionamiento soberano y operan como *regla-instrucción*, en el momento que se transforman la categoría en *regla-directriz*, como el caso del DI y la firma de tratados, la ley hará que sea “irrevocable” la sentencia al atribuir la legalidad y el orden a los mecanismos de control. Y se entendería como legítima. De ahí la disputa acontecida en torno al DI en el proceso de apropiación de los diferentes atributos de la soberanía y el debate en torno a lo propicio de ejercer la práctica.

Una vez constatada la existencia de esta percepción, se ha detectado como todos los proyectos regionales indicados y recogidos en esta investigación señalan que la región, al sentir la injusticia en diversas prácticas relacionales con los agentes relevantes, debe proceder a la unificación/integración. Entendiendo y justificando que separados eran más débiles, frágiles y poco autónomos para ejercer la capacidad de decisión.

Con esa meta inscrita en los idearios regionales, se ha señalado como han sido propuestas alianzas en el tiempo, con el objetivo de adquirir mayor capacidad para poder defender la articulación de las diferentes prácticas que se crean apropiadas y respondan a la identidad regional. Discurso que ha operado desde los procesos de descolonización hasta la reciente constitución de la CELAC.

Pero respecto a ¿qué prácticas eran adecuadas?, ¿cuál era la identidad regional?, ó ¿qué metas eran las que determinaban las prácticas?, han sido en torno a las cuestiones en donde se sitúa la otra categoría que ha determinado la evolución de la región. O los nuevos territorios promovían transformaciones para “ser” a imagen y semejanza de los territorios autodenominados civilizados, desarrollados, evolucionados, etc...; o por el contrario construir un modo de articular la convivencia interna y con el exterior de un modo particular. El debate ha oscilado en esas aristas.

A este respecto, es relevante enunciar que ha quedado constatado que, al haber heredado la construcción social de los Imperios y mantener las estructuras de los mismos una vez independizados, la idea y proyecto de alcanzar las categorías de ser civilizados y luego desarrollados, se instauró como la meta social en los gobernantes y en aquellos agentes que

tenían relevancia en la toma de decisiones. Siendo excluidos diversos grupos sociales de los procesos.

Se ha evidenciado como todo proceso de acceso a alcanzar la categoría de civilizado o desarrollado requería de transformaciones profundas en las prácticas e identidades. Una de las claves respecto a este proceso, ha oscilado en la tarea de detectar en qué grado la idea de alcanzar la categoría se hace común en el territorio receptor; es aceptada por la sociedad transformándose en demanda social y, por lo tanto, una realidad. Hecho que de producirse supondría una transposición de voluntades, de un ideario exógeno a un ideario endógeno. Ante lo que, teniendo en cuenta que la construcción del ideario inicial tras los procesos de independencia, y tras estos, han respondido en mayoría a demandas constituidas en otra sociedad, no a la constituida en la región, se puede indicar que se ha producido una transposición de voluntades en el proceso.

En este sentido, los dos conceptos señalados han determinado la disputa entre la institucionalización de prácticas de construcción ideacional endógena y exógena. Es decir, se ha evidenciado que desde las propias colonizaciones se justificaban las prácticas inherentes en nombre de la civilización; más tarde, una vez independizados los territorios y adquirida la categoría de soberano, la injerencia entró en escena en forma de IEI- aunque también grandes sumas de IED-, práctica que era justificada para civilizarse; y tras la institucionalización del concepto de desarrollo, la IED se situó como la práctica relevante para alcanzar la categoría. La clave a señalar de éstas, es que con su ejercicio, en principio, se dieron sucesos en los cuales los agentes relevantes no respetaron la soberanía de los Estados de la región en caso de disputa inversor-Estado. Es decir, tendía a producirse un choque entre intereses externos y capacidades soberanas internas. Lo que devenía en un debate ideológico que cuestionaba la pertinencia de las acciones de los agentes no relevantes, cuestionando su finalidad como sociedad. Y en muchos casos, categorizando a los mismos de barbaros, no civilizados o subdesarrollados. A partir de ello cuestionando y, aún más grave, deslegitimando su capacidad para ejercer de agente soberano. Tratando de justificar el no respeto a dicha categoría, en base a un DI entendido como una *regla-directriz* emanada de una de las partes en disputa: los inversores.

En esta disputa señalar que, acontecida en el tiempo entre los diferentes Estados de la región y los agentes relevantes, en torno al trato que debía otorgarse a la IED es en donde se ha “centrado” la lucha por definir los límites del agente soberano en RRII. Entre los

Estados inversores y los de ALC, receptores. Estableciéndose otra categoría determinante: el inversor y el receptor.

A este respecto indicar que, si bien durante la tesis se ha revelado que desde que se produjeron las primeras disputas los discursos de los agentes inversores indicaban que la protección del inversor se debía otorgar de acuerdo al hecho de actuar como nación civilizada (como muestra de la actitud se encuentra pertinente el discurso de Elihu Root en 1910, por ejemplo), aludiendo al se han producido diversos reclamos particulares de la región de acuerdo a la condición de los Estados de agentes soberanos (doctrinas Drago y Calvo(desde 1901 su mayor impacto). Estas, junto con los cambios en las reglas relacionales de la estructura - que aludían a la doctrina de la soberanía en la SI (Convención Drago – Porter; la Resolución 1803 de 1962 de las NNUU o la Carta de Derechos y Obligaciones Económicas de los Estados (1974) entre otros)-, fueron hechos que incidieron en que los discursos que emitían un mensaje de trato protector a la IED, basado en el derecho a defender los capitales de los inversores en territorios externos al del propio, se viesan deslegitimados ideacionalmente. Dentro del debate producido entre agentes por una variación de las *reglas-directriz* e indicar su significación. Hecho que promovió el que se variase la motivación justificadora para dar un trato preferencial al inversor en el tiempo por parte de los inversores, fijándose tras éste como eje articulador del discurso justificador de la protección el alcanzar la categoría de desarrollado.

Se instituyó la idea de que un territorio que quisiese adquirir la categoría de desarrollado debía inexorablemente ceder capacidad soberana. Concretamente, el juzgar asuntos ocurridos en suelo nacional relacionados con los capitales inversores- IIEEDD-, a tribunales externos a su territorio, en nombre del “bien común internacional”. A este respecto, como se señaló en el Capítulo II que abordaba la categoría de la soberanía, señalar que este hecho, como indicó Suárez (1965[1613]), supone la cesión de competencias y no ejercer como soberano, al menos, en esa práctica y durante el periodo acordado. Y a la vez supone el que la regulación de la IED pase de estar tratada en base a la construcción ideacional de un territorio, a operar como *regla-directriz*. De nuevo, imposibilitando la renuncia a la sentencia al atribuir legalidad al juicio externo.

Ha sido constatado que una vez dilucidado, y en cierto modo resuelto por la SI, que los Estados eran soberanos para dictaminar y decidir sobre aquellas disputas ocurridas en territorio nacional en disputas referidas a la IED – como la Conferencia sobre el Trato a los Extranjeros en 1929; la Carta de las NNUU(Art. 2); la Carta constitutiva de la OEA(Art.

21, 21); la Resolución 1803 de la Asamblea General de las NNUU en 1962; o la Carta sobre Derechos Económicos y Deberes de los Estados (1974) - , la doctrina de la protección del inversor promovió como mecanismo para solventar estas disputas la adopción de mecanismos entre las partes, que fuesen beneficiosos para aquellos que querían desarrollarse y para los inversores: los AII. En ellos ha sido en donde se significaba la cesión de competencias.

Diversos autores rescatados en esta investigación (desde Richard Zouche (1650); Jellinek (2000[1910]) o Heller (1950), por poner algunos ejemplos) han indicado, que tanto el acto de cesión como la negación a la cesión de competencias son actos constitutivos de soberanía. A este respecto señalar, que se es consciente y se da como premisa necesaria que en todo acuerdo siempre hay cesiones. Sin embargo, en este caso destaca el hecho de que cuando surgieron estos acuerdos “las inversiones se producían en una única dirección”: de los agentes relevantes a ALC. Es decir, se observa un interés en reglar una práctica asimétrica. Cuestión que parece mantenerse en el tiempo y además, como ha sido evidenciado a través de los estudios de Zampetti & Fredrikson (2003), existe una cuestión muy relevante a este respecto: no hay disposiciones en los TTBBII que aseguren crecimiento o desarrollo. Es decir, las reglas de protección de inversiones únicamente aseguran la protección de uno de los agentes parte de la práctica. Esto es un hecho notorio e importante para la finalidad de esta tesis, puesto que la citada cesión, dados los flujos de inversión, tenían efecto únicamente en una dirección: de ALC, receptores, a agentes relevantes, inversores.

Importante señalar que estos acuerdos han tenido diversos efectos. Su adopción se promovió como un acto necesario para receptar inversión, indicando que el acto mostraría una voluntad por parte del Estado subdesarrollado de “ascender” de categoría. Teniendo en cuenta que los agentes usan los recursos disponibles para alcanzar metas contenidas en sus estructuras ideacionales, y dado que la firma de éstos se ofertó como un medio necesario y garantía para receptar IED y con ello encaminarse al desarrollo, en la medida que el discurso del desarrollo fuese apropiado por los Estados receptores, éstos usarían los recursos disponibles para obtener esta inversión. Y más allá de la posibilidad de usar los RRNN o recursos de mano de obra - factores muy relevantes en temas de inversiones-, la capacidad de decisión soberana para intervenir en asuntos relacionados con la IED y constituir la *regla-directriz*, fue el “único” ejercicio que se indicó como elemento que podría facilitar condiciones para que los inversores viesen el Estado receptor como un lugar

seguro. Adquiriendo una importancia suprema, en términos de soberanía y desarrollo, la cesión de competencias soberanas de juicio, en caso de que los inversores se viesen perjudicados por la práctica de gobierno. De hecho, ha sido señalado en este estudio el incremento de la firma de AII en los años 90 y como, debido a las disputas acontecidas- recordar que ALC es la región con mayor número de denuncias en el CIADI-, de nuevo, el dilema que fue planteado por Drago y Calvo a principios del siglo XX, se sitúa en primera línea de debate. Cuestión que refleja el que se esté estudiando cómo regular la competencia cedida en nuevos organismos con relevancia regional como la UNASUR o la CELAC.

A este respecto y en atención a la relación de la práctica con los procesos de integración/unificación, se ha desvelado como la competición por atraer inversión ha impactado profundamente en el proceso. Por una parte, al incidir en el que los diferentes agentes regionales competiesen por atraer la inversión, lo que significaría actuar en solitario; y por otra, porque las diferentes estrategias a adoptar para, una vez apropiado el concepto y sus metas, alcanzar el desarrollo, han variado continuamente entre unos agentes y otros, y por tanto las prácticas ligadas a dicha categoría. Cuestión ésta que se ha manifestado y evidenciado entre los Estados miembros, pero más notoriamente entre los diferentes esquemas de integración/unificación presentes en la región. Reflejándose esta diversidad en dos estrategias para lograr dicha meta, en cierto modo, antagónicas: *integración hacia afuera* o *integración hacia adentro*.

En atención a los tratados, hay que rescatar uno de los datos más relevantes recogidos en esta tesis respecto a la soberanía. Éste se vislumbra al observar como en la actualidad existen cláusulas en los AII que regulan las disputas entre Estado-inversor (los AII (TTBBII, AIR)), que suponen una cesión de competencias que limitan en gran medida el ejercicio soberano. Análisis en el cual se ha evidenciado que, cláusulas como TNMF; el Trato justo y equitativo; o la capacidad de ejecutar expropiación directa e indirecta, limitan en un amplio grado la acción de gobierno. Pero si éstas son relevantes, no tanto por su práctica, al suponer un límite al ejercicio del gobierno, es pertinente indicar que muchos de los acuerdos (en especial los TTBBII, aunque también los AIR y TLC) implican la cesión la capacidad de juzgar disputas en torno a esa práctica a tribunales externos al propio territorio sobre el que ocurren las mismas. Resultando que las sentencias en “nombre del bien común” pueden llegar a proteger a los inversores por encima de la defensa de derechos tan fundamentales como los DDHH.

En este sentido indicar que, si bien podría concluirse que si el Estado ha actuado por voluntad propia esa cesión podría considerarse un acto soberano, uno de los datos más relevantes de esta tesis es que en algunos tratados existe una cláusula, la cláusula de supervivencia (o *survival clause* en inglés), que implica que las condiciones dispuestas en los mismos, en caso de que un agente soberano decida la denuncia del mismo, deben ser respetadas durante un periodo que oscila entre los 5 años y 20 (de media 15 según UNCTAD (2013). Lo que significa que pudieran existir casos en los que la denuncia del tratado por parte de un gobierno, no operaría durante 5 legislaturas- suponiendo sistemas de 4 años por legislatura-. A este respecto, puesto que la capacidad de decisión - que indicaba Schmitt (2013[1936]) como acto soberano - estaría lejos de ser ejecutada en la práctica con esta cláusula durante un periodo que excede el ejercicio de gobierno, surgen dos preguntas relevantes que merecerían ser analizadas en profundidad: ¿se es soberano esos 20 años en esta práctica?; ¿responderá a democracia interna, el respeto a esa cláusula durante diferentes gobiernos que estén obligados a respetar dicha cláusula, por el hecho de que uno lo firmó?

Nota de autor: Al entender del investigador este tipo de cláusulas operan contrariamente a la capacidad de que posee un gobierno elegido en un sistema democrático y, por ende, son cláusulas contrarias a la democracia y a la autonomía soberana.

1.1 Evidencias sobre el impacto de las ideas sobre desarrollo e Inversión Extranjera Directa en la construcción de un agente regional con capacidad de decisión soberana.

Respecto al análisis del modo en el que el alcanzar el estado de desarrollo se ha incrustado en los deseos y metas de la región, el punto de partida inicial señalaba las cuestiones de: ¿qué ha querido y quiere la región en términos de desarrollo?; ¿cuál es su identidad?; ¿qué desarrollo se pretende? Preguntas que a la vez que eran formuladas, limitaban la posible homogeneidad en la respuesta. Se señala esto debido a que la investigación revela que ALC es una región que se ha ido construyendo combinando las diferentes culturas originarias allí cultivadas junto con las colonizadoras (ibéricas primordialmente). Es por ello, que decir qué quiere la región, qué tipo de desarrollo pretende alcanzar, o cómo se ha visto constituido el propio concepto de desarrollo en el suelo latinoamericano, hayan sido cuestiones que han compuesto parte del debate en los diferentes agentes relevantes - con capacidad de influenciar las decisiones - que se han dado cita en el área de estudio durante las diferentes épocas.

A raíz de lo indicado, en este espacio es donde es relevante atender a si se ha producido una heteronomía de la voluntad. Es decir, la situación que ocurre cuando al seguir las supuestas leyes morales, en busca de instituir un orden propio, se revela que éstas no tienen origen en la propia razón de los agentes allí acogidos, sino que han sido construidas en el exterior.

Respondiendo a este dilema el análisis ha puesto de manifiesto que la región en su totalidad, al ser un área descolonizada, ha vivido y vive en un continuo debate en torno a qué cuestiones son aquellas que son propias a la región y cuales son construidas desde el exterior. Proceso en el que se ha evidenciado el constante intento de tener que lidiar con ambas y, al mismo tiempo, instituir un modelo que atienda a las particularidades propias del área. Siendo una cuestión señalada que la identidad es un proceso vivo no estático. Cuestión que ha sido determinante en el propio devenir de la región, puesto que la propia heteronomía se significa cuando las reglas implican un posicionamiento de unos por encima de otros en nombre del “bien común” (Onuf, 2014, págs. 9-10). Y a esto podría responder, dados los eventos señalados en esta tesis, la propia constitución del DI; de la soberanía; del propio concepto de desarrollo; así como, consecuentemente, la regulación de la IED.

Del debate indicado ha resultado el que se hayan adoptado, mayoritariamente, dos posturas en términos de integración/unificación. Como se indicó en el punto anterior: *integración hacia afuera*, modelo más propenso a aceptar las reglas promovidas por los agentes relevantes y a partir de ello adquirir capacidad; e *integración hacia adentro*, práctica promotora de no ejercer la cesión ante ciertas reglas y buscar el incremento de capacidad de acción regional, mediante procesos que incentivan la convergencia interna. No obstante, hay que señalar y se ha evidenciado, que esas posturas han coincidido o coinciden en dos cuestiones fundamentales y relevantes, generalmente: 1ª) en lo apropiado para el área de promover la integración/unificación (poseyendo mayor predilección por la integración económica que política el modelo de *integración hacia afuera*); y 2ª) en el significado del desarrollo (a excepción del ALBA-TCP en la actualidad). Es decir, han coincidido en la meta social. Con lo que, primordialmente, la divergencia ha estado situada en el modo, no en el fin.

En este sentido, el análisis ha desvelado que desde que se comenzará el proceso de institucionalización de los ideales integradores en organismos, alianzas, comunidades u organizaciones, en todos los procesos el trato a la IED ha jugado un papel muy relevante. A este respecto, cabe rescatar las divergencias mostradas en diversos sucesos a lo largo del

tiempo. Por ejemplo, los eventos ocurridos desde que se posicionasen contrariamente respecto a que trato debía otorgarse a la IED la CEPAL y el BID; la transformación interna del ALACL al ALADI; pasando por posiciones como la que adoptó la CAN (la *Decisión 24*), o la salida de Argentina y Chile por el cambio de políticas respecto a la IED; el cambio de políticas en el interior del área del Caribe, con el cambio de CARIFTA a CARICOM; la influencia del trato a la IED en el MCCA; el surgimiento del MERCOSUR en pleno auge del regionalismo abierto; o las divergentes posiciones que se encuentran en la ALBA-TCP y la AP. Todos ellos, procesos en los que el papel de la IED ha determinado su ejercicio y sus directrices con rotundidad, influyendo decisivamente en el devenir de los procesos de integración/unificación.

Por lo que se puede concluir que, a razón de la investigación realizada, en el proyecto de construir un agente con capacidades soberanas en la región ha influido determinadamente el concepto de desarrollo, pero más, si cabe, la implicación de este concepto en la práctica de la IED.

1.2 La cuestión de construir un agente soberano para regular la Inversión Extranjera Directa.

Si ya ha sido mencionado en estas conclusiones que en la percepción de injusticia en la región, respecto a su relación con los agentes relevantes, ha jugado un papel muy relevante la IED - con anterioridad al proceso pragmático y en las instituciones tras darse comienzo a éste, en términos de plusvalía, impacto en derechos, ambiental y otros-, también el análisis ha detectado como en la actualidad reciente se dan casos en la región, en los que la percepción de injusticia ha constituido el que regionalmente se dé inicio a un replanteamiento grupal sobre el papel que juega en su autonomía las competencias cedidas para dictaminar en disputas de IED.

Se han rescatado manifestaciones de diversos líderes de los Estados miembros que han enunciado la necesidad de recuperar las competencias cedidas en este campo e instituir una institución regional - en cierta medida continuando con la manifestación continuada en el tiempo en este campo desde la descolonización-. Sin embargo, en términos de competencias, el hecho de promover la constitución de un agente regional no puede considerarse un acto de recuperación de competencias, sino más bien un proceso de construcción regional. Esto debido a que estas competencias nunca, con anterioridad, han operado regionalmente - construcción que está siendo promovida por organizaciones

como el ALBA-TCP; la UNASUR que lo está analizando; y la CELAC, que lo ha incluido en su agenda-. Por lo que de este modo, sí podría indicarse como un gesto de significación de construcción de un agente con competencias supranacionales en un espacio regional. En donde los Estados no reclaman esas competencias para sí, sino que estudian el constituir un agente regional.

Es decir, el proceso se significa como una construcción de una nueva organización con capacidad soberana de ámbito regional en temas de disputas de IED. Entendiendo la construcción de soberanía regional como la constitución de un órgano en el que residiría la capacidad de decisión última. Puesto que si se concluye que supone una cesión de competencias, el ceder éstas significa construir en otro sitio, en otro espacio. No en el amplio sentido de la soberanía, sino entendiendo la soberanía actual como una práctica compartida o relativa como indicó Vedross (1976). Soberanía en esta área específica. Y además, si se decide la inclusión de cláusulas como la presente en muchos TTBBII: la *survival clause* (por 20 años); o como indicó Schemers (1980) respecto al poder supranacional, se cede para siempre esta capacidad sin contener en el acuerdo un cláusula de renuncia a la cesión, esto constituiría la construcción de un órgano con capacidad soberana regional (en este campo). En donde, el único modo de disolver dicho organismo sería a través de la soberanía popular, que sería aquel mecanismo, en sistemas democráticos, capaz de presentarse como la decisión última en un contexto de deconstrucción o construcción de nuevas realidades soberanas, según han indicado la mayoría de autores consultados.

En todo caso, respecto la posibilidad de constituir un agente soberano con todos los atributos característicos del término en la región - indivisibilidad, independencia absoluta, responsabilidad última -, es apropiado indicar como en el capítulo referido al análisis de la soberanía se ha concluido que, aun con el debate en torno al concepto y su pertinencia en la actualidad, este concepto está caracterizado por presentar cuatro condiciones elementales: 1ª) la soberanía ha estado y está asociada conceptualmente a un espacio delimitado: un **territorio**; 2ª) en éste se da la presencia de **un órgano cohesionador y representativo**, que es la figura o agente que posee la capacidad de ser soberano; 3ª) que este espacio se constituye o **ha sido constituido mediante un proceso de asociación o anexión**- ya sea éste forzado o pactado-, en el que, habitualmente; 4ª) **se concentra una identidad común**, que es el factor que origina o justifica que se legue el poder en un agente común.

Teniendo en cuenta estas condiciones, indicar que en ALC el territorio existe y está consolidado; la identidad sí parece poseer un proceso de construcción común que, con la prudencia que debe poseerse al realizar tal afirmación, constituye un vínculo histórico y manifiesto en la actualidad; y en cuanto al órgano cohesionador y representativo que podría actuar como la condición indica, la implantación de éste vive un proceso de construcción o asociación constante desde que se abriese paso la denominada en esta tesis “fase pragmática”, en la que ha aparecido como última manifestación de la misma la creación de la CELAC. Que, aunque se debe considerar un inicio, el constituir un organismo que pretende alcanzar el ser una organización; no tener atribuidas las competencias; ni tener las características requeridas en términos de soberanía; y que hasta la fecha presenta particularidades que parece que hagan difícil instituir una soberanía que fuere, al menos, indivisible, en un futuro, sí representa un nuevo paso en la construcción de la ambición histórica. Lo cual, en términos constructivistas, representa la manifestación y construcción de una idea que transgrede los diferentes condicionantes que puede haber o estar determinando las posibilidades de llevarlo a cabo.

A este respecto, al concluir el estudio de la soberanía que no hay soberanía indivisible eternamente, únicamente temporal, el ideal actuará manifestándose en el momento que las capacidades lo permitan. De hecho, señalar que ha habido muchas divisiones de territorios supuestamente soberanos, que han sido descompuestos por diferentes causas; así como unificados por otras. Lo que constata que la soberanía opera en presente, a futuro puede que sí, pero puede que no. Por ello, al operar en una SI compuesta por diferentes agentes a los que se ceden competencias temporalmente, aun pudiendo ser revocadas- llegando incluso a tener que esperar 20 años como en los TTBBII-, *de facto* las decisiones últimas las ejecutan los agentes en los que recae la voluntad última en la decisión. Y en caso de negarse a respetar el pacto, se estará quebrantando éste. Al igual que sucede cuando una parte de un pueblo se niega a continuar formando parte de un Estado, haciéndose manifiesto el aspecto de la soberanía en la que todos los autores han coincidido: la soberanía popular. Cuestión en la que la mayoría de, por no decir todos, los autores coinciden al señalar que: sin el apoyo del pueblo no se constituye un soberano. Es por ello que en la actualidad este hecho se da con mayor notoriedad, puesto que la soberanía popular en sistemas democráticos, como los presentes en la actualidad en la región de ALC, tiene una relevancia suprema.

Quizás al respecto de lo señalado tendría razón Carl Schmitt (2013[1927]), al indicar que en tiempo de excepcionalidad se hace presente el soberano real, en este caso el pueblo. Pero *de*

facto, en tiempo presente y como práctica cotidiana, opera como soberano aquel órgano que ejecute la competencia asignada, como por ejemplo sucede en Europa al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que posee la competencia cedida de emitir la decisión última sobre cuestiones referidas a los DDHH.

En el caso de ALC, las partes de la región han interiorizado profundamente su capacidad de decisión y autonomía, al haber, según indicó Anghie (2004), tenido que “luchar” por adquirir dicha categoría. No obstante, respecto al tema analizado, la gran mayoría de los Estados sí cedieron su capacidad para juzgar disputas de IED al exterior. Por ello, aunque el ceder competencias no haya sido característico de los procesos enunciados, ya que la mayoría de los organismos regionales operan con órganos que adoptan un modelo intergubernamental para ejecutar la toma de decisiones, en el caso de encontrar injusta y no beneficiosa la práctica de la cesión a las metas del desarrollo interiorizadas, y una vez se posea la capacidad de decidir, el cambio de ideas puede determinar el que la región pueda optar por constituir un órgano con competencias soberanas, con capacidad de dictaminar regionalmente.

En todo caso, la posibilidad está contenida en las ideas y asunciones sobre las prácticas. Es decir, una de las claves de la disputa en torno a las divergentes posturas es la afirmación de que la IED promueve desarrollo. Pues bien, a este respecto y como ha sido puesto de manifiesto, ésta afirmación posee un alto grado de subjetividad, al haberse revelado que no existe una tendencia única - como se indica en el Capítulo III de esta tesis-. Por ello, es debido recordar que la práctica produce la realidad ofertada en el grado en el que los agentes le otorguen esa categoría; ya que de creer en aquello que sucederá, tratarán de acondicionar los elementos que se requieran para que la práctica produzca los resultados que oferta; y aun no alcanzando el fruto ofertado, se cuestionarán otros elementos si la creencia es sólida. En todo caso, las creencias sí pueden cambiar, de hecho cambian. Cuando éstas cambian, cambian las normas y las prácticas.

Por último, a este respecto hay que indicar que el análisis realizado revela que esta área determinada es la que mayor distancia ofrece, en términos ideológicos, entre las partes que operan en la región. Los ideales de desarrollo son divergentes y los discursos sobre el trato a la IED, aún sin distanciarse profundamente, sí difieren respecto a la protección que se debe otorgar a ésta por cuestiones de soberanía. El papel de la IED ha sido y es determinante, tanto en la soberanía como categoría adquirida por los diferentes Estados de

la región, como en los procesos que han, en pasado, y hoy pretenden integrar/unificar la región de ALC y constituir un agente soberano. Y dado que, como indicó Hegel (1999), el todo soberano se hace manifiesto cuando actúa como unidad ante otros, el establecimiento de una relación negativa con los otros agentes de la SI no es verdadera, sino más bien con el Estado propio, al existir la posibilidad de ser desposeído de su estado ideal y abogar por la unidad ante el otro. Indicación ésta, que revela la importancia de la pertenencia al todo, en este caso el todo regional; así como la participación de todos los átomos particulares en defensa del todo, en defensa de la decisión autónoma. Como en el caso de defender el juzgar y determinar las reglas que operan en esta práctica. Adquiriendo la constitución de una comunidad política cierta relevancia, al lograr que los conflictos sean juzgadas por algún órgano perteneciente al todo regional. En este caso, y utilizando palabras de nuevo de Carl Schmitt, sí se podría hablar de cierta unidad política.

1.3 Evidencias respecto a la relación entre la conceptualización del desarrollo, la soberanía y la Inversión Extranjera Directa.

El realizar una tesis doctoral de tipo enciclopédica, tratando “...de integrar de las diversas disciplinas que – según el doctorando - están relacionadas al tema estudiado”, (Rivera-Camino, 2014, pág. 29), constituye un proceso ambicioso, al ser necesario construir un marco teórico sólido que pueda dar respuesta a cualquier pregunta, de cualquier disciplina, a la que la tesis propuesta esté relacionada.

Ante esta evidencia, la investigación ha tratado de, primeramente, estudiar en profundidad las variables que se entendió en un comienzo guardaban una relación consistente. Y si bien se han detectado conexiones concretas que han sido señaladas en cada uno de los primeros tres capítulos, en estas conclusiones se entiende necesario exponer brevemente el modo en el que se ha detectado la conexión entre las variables.

En este caso, al operar el desarrollo como un concepto dispersor de ideas de construcción particular en sociedades ajenas, automáticamente, se concluía e indicaba la posibilidad de que existiese un contexto en el que se diesen tres posibles desenlaces: a) que su práctica conllevara un beneficio para el agente o los agentes de los que procede la práctica y la técnica que requiere la operativización; b) que, al contrario o en consecuencia, se perciba injusticia en la práctica por parte de los agentes receptores; o c) que ambos agentes, receptores y dispersores, lo perciban como contexto ideal para la práctica de ambos grupos. Situaciones que dependerán del que en el ideario de ambos agentes esté la meta promovida

inscrita, teniendo como medida de impacto el grado en el que este concepto permee en el territorio o sociedad que lo recepte. Planteamiento en base al cual se estableció la premisa de que el concepto de desarrollo poseía la capacidad de articular las relaciones en los espacios receptores, tanto internamente como en su relación con el exterior. Lo que determinaría el cómo se den las mismas y cuáles sean las diferentes demandas del agente dispersor; así como las capacidades de estos últimos para determinar la práctica. Dado que el agente relevante emisor del concepto es aquel que conoce cómo operaba la sociedad origen de las ideas y, por lo tanto, las reglas y las prácticas. Configurando las posibilidades y los límites institucionalizados en el proceso de apropiación. Por ello de lo necesario de la revisión.

A este respecto y antes de continuar, es pertinente hacer una leve referencia al concepto de la soberanía. Ya que el haber analizado éste desde una perspectiva constructivista, ha permitido visualizar como la soberanía ha sufrido un proceso similar en la SI al indicado con la idea del desarrollo, al haber sido construido como concepto por los agentes relevantes y presentar un proceso de transformación en relación a la perspectiva de éstos. Es decir, configuraron su significado y sus atributos como respuesta a la cuestión de cómo organizar una comunidad en sus territorios, defendiendo su pertinencia y la consistencia de su argumentación como configuración política de una comunidad en la SI, así como la necesidad de respetarlos en todos los territorios, constituyendo una categoría: soberanos y no soberanos. Una difusión continua en el tiempo de los atributos y la categoría, hasta que ésta fue apropiada por otros agentes menos relevantes y no origen del concepto. Los cuales, consecuentemente, se apropiaron de la categoría y de cómo se practicaba, y reclamaron que se respetasen sus atributos en el modo que ésta había sido dispersada. Momento en el cual el discurso emitido por los agentes relevantes se moldeó, entendiendo que las reglas que originariamente habían difundido en relación con la categoría de la soberanía y que determinaban su práctica (el ejercer de soberano), debían de ser respetadas, sí, pero de acuerdo a otros criterios particulares expuestos por los agentes relevantes- al menos en el caso de ALC-. Anulando, o mejor dicho, relativizando con ello, en cierto grado, las capacidades promovidas y ofertadas como atributos de soberanía. Hecho que por ejemplo, se ha observado al analizar la justificación que se manifestó para no respetar diferentes aspectos de la soberanía, cuando se constituyó un discurso que fomentaba del respeto total de la soberanía - interna o interdependiente por ejemplo -, únicamente, de aquellos Estados soberanos que fuesen considerados dentro de “otra categoría concedida”

por los agentes relevantes: el ser civilizado y/o desarrollado. En especial se ha visualizado este hecho en el objeto de estudio de esta tesis: disputas sobre la IED.

En relación con lo indicado en los dos párrafos anteriores, se ha observado como en repetidas ocasiones, y por diversas causas, la región ha percibido que la injusticia ha sido característica principal y determinante en la práctica de las relaciones de la región de ALC con el exterior. Especialmente en el hecho señalado, el no respeto a la soberanía. En la mayoría de percepciones por cuestiones relacionadas con la práctica de IED, que ha sido uno de los componentes principales.

En este caso, el que la percepción de injusticia haya actuado como el factor impulsor de demanda de alteración de reglas, por parte de la región con los agentes relevantes, se alinea con el postulado expresado en el inicio del marco teórico por Philpott (2001), cuando señaló que “Las revoluciones en soberanía han sido el resultado de ideas previas sobre justicia y autoridad política” (Philpott, 2001, pág. 4). Ya que en este caso, la apropiación de la categoría de soberano por los diferentes territorios de ALC, causó el que se demandase la autoridad política atribuida al término, y se reclamase aquello que estaba contenido en las ideas divulgadas y atribuidas en términos de justicia. Es decir, al percibir la injusticia de trato y no respeto por las atribuciones indicadas por la categoría de soberano, se activaron mecanismos para que se alterasen las prácticas que se consideraban injustas. En este estudio, concretamente, debido al no respeto por las prácticas soberanas de trato a la IED.

La relación analizada ha sido puesta de manifiesto. En el recorrido de la tesis, se ha evidenciado una disputa entre los agentes relevantes y ALC en las categorías analizadas. Es decir, si bien los agentes relevantes promovían la institucionalización- modo de conducta- de ciertas reglas que creía apropiadas desde su perspectiva, los agentes no relevantes y receptores de ALC cuestionaban la finalidad y paridad de resultados una vez ejecutada la práctica, así como la coherencia en su ejecución, percibiendo cierta injusticia en la práctica de lo divulgado. Ante esta perspectiva, estos últimos reaccionaban cuestionando la justicia y coherencia de la actuación de los agentes relevantes y, una vez que se alteraban las reglas- gracias al reclamo y puesta en práctica de cierta coherencia en la SI-, los agentes relevantes promovían otro concepto que establecía una nueva categoría en la SI que, en cierto modo, deslegitimaba la posición y categoría adquirida por los agentes no relevantes. Tratando de institucionalizar e crear reglas-directriz aplicables en la práctica de la IED.

Se puede concluir, en base al estudio aquí presentado, que el esquema operativo indicado ha operado y opera en las RRII que se han producido desde la región de ALC con el exterior. En el que la categoría, dígame, de calidad: el ser desarrollado (o civilizado), ha determinado el que se respetase o no la capacidad de ejercer autonomía y decisión: el ser soberano en todos sus atributos. Y, concretamente en el estudio, se ha puesto de manifiesto como la práctica de la IED ha sido el eje principal sobre el que ha oscilado la disputa. En la cual, una vez adquirida la categoría de soberano, el acceder a la categoría de desarrollado se ha implantado como la meta que determinaba las cesiones de competencia soberana de un Estado independiente al exterior de su territorio. En este caso, bajo un discurso que defendía su práctica como medio necesario para ser concedidas las dos categorías: soberano y desarrollado. Por ello, se confirma que en el grado que los agentes receptores se apropien de la meta inscrita en el desarrollo, se determinará que incluso leguen sus capacidades soberanas.

Por lo que, el esquema en el cual las demandas de un Estado independizado se centran en alcanzar la categoría de desarrollado; en donde el alcanzar dicha categoría requiere el demandar IED; y que la práctica de ésta depende de la cesión de competencias soberanas, señala que en la medida en la que los Estados receptores se apropien de la validez del esquema que divulga la práctica de ese desarrollo, será el grado en el que opere el mismo.

Dicho lo cual, la divulgación de esta práctica en un territorio con las particularidades que presenta ALC, en donde los países han tenido que adquirir la categoría de soberano, el grado en el que éstos se han apropiado de la meta ha determinado la conjunción de éstos en un agente, dado que sí existe el ideal integrador. Por lo cual, la presencia de posturas homogéneas o heterogéneas ante la significancia y puesta en práctica del desarrollo promovido por los agentes relevantes, ha permitido o no el avance del ideal integrador. En este caso presentando la región divergencias en algunos aspectos, que se han manifestado en el papel que debía jugar el agente receptor en la relación con la IED. En donde en contextos históricos se ha coincidido, casi en la totalidad regional, como mostraron las doctrinas Drago y Calvo; que tras la firma de AII y la inmersión en el regionalismo abierto se descompuso la opinión regional conjunta; y en la actualidad, en donde aun presentando divergencias, existen organismos con impacto regional que están indicando la pertinencia de analizar las consecuencias del ceder las capacidades de juzgar en asuntos referidos a la IED en términos regionales.

2. Verificación del cumplimiento de los objetivos y las hipótesis de partida.

Esta investigación trata, desde sus inicios, de dar respuesta a la significación de la constitución de la CELAC como organismo regional que ambiciona constituirse como organización regional. A ese respecto, siendo conscientes inicialmente de las reservas a ceder soberanía por parte de los Estados miembros- inscritas en la propia DC-, tras diversas observaciones se concluyó en la introducción que el papel de la IED en los procesos de unificación/integración y, concretamente, en la categoría de soberanía debía ser revisado. Esto debido a que, tras realizar un breve análisis de los elementos motivadores presentes en el texto constitutivo de la organización, junto con el devenir presente de las RRII, la práctica se presentaba como un elemento que podría actuar como factor motivante de que se produjese la constitución de dicha comunidad.

A partir de ello, se enunció aquello que ha guiado el estudio durante toda su elaboración: una **pregunta de investigación** que trataba de desvelar el porqué de los anhelos presentes en la DC; y el que se evidenciase la presencia de una reivindicación constante de la necesidad de unir capacidades de los Estados miembros pertenecientes a ALC. Esta reflexión concluyó que era debido preguntarse:

¿Qué papel ha ejercido la IED en la construcción de soberanía regional en ALC?

Con la cuestión indicada pendiente de dilucidar y tras el análisis de diversas teorías que pudiesen actuar de herramientas para abordar dicha incertidumbre, se pronunció la consecuente **hipótesis de investigación**, que asumía el impacto de la teoría del desarrollo en la propia pregunta de investigación - cuestión ésta influenciada por el análisis de la DC-:

La articulación político-económica de la IED como práctica de desarrollo en la región de ALC, ha determinado el que los Estados miembros hayan optado por promover un reclamo de soberanía regional frente a agentes relevantes (significado en la constitución de la CELAC), al percibir que la articulación ha devenido en una regulación en la que la práctica extrae la capacidad de decidir autónomamente, así como establece y reproduce condiciones asimétricas en el funcionamiento de las relaciones de la región con el exterior.

Hipótesis principal que se materializaba en las siguientes **sub-hipótesis**:

- 1) Sub-hipótesis:** *Las ideas subyacentes en la conceptualización del desarrollo han determinado el papel que ejerce la IED en los procesos de unificación e/ o integración en ALC.*
- 2) Sub-hipótesis:** *La regulación internacional que atiende a disputas de IED ha sido institucionalizada bajo construcciones ideacionales externas a la región de ALC. En donde los agentes relevantes han utilizado sus capacidades para ejercer la transformación de las reglas que determinan la práctica en su favor, aun siendo conscientes de la asimetría implícita. Cuestión que ha determinado una quiebra en la condición de soberano de los Estados miembros, reaccionando éstos mediante la adopción de prácticas que promuevan la articulación de mecanismos que les permitan alterar esta normativa.*
- 3) Sub-hipótesis:** *Constituir una entidad con capacidad soberana en el territorio regional de ALC, es una ambición histórica construida a partir de la percepción de que la puesta en práctica de su voluntad ha sido reprimida/ dirigida desde la colonización hasta la actualidad.*
- 4) Sub-hipótesis:** *El reclamo de autonomía política-económica regional responde a que la región de ALC ha sufrido una alteración en sus capacidades (materiales, ideacionales, institucionales, etc...) que le permite alterar su rol de agente en la SI.*

El análisis ha evidenciado que, en aras de comprender y dar una respuesta apropiada, la refutación de la hipótesis principal debe ser dividida en dos partes. Por una parte, en su vertiente histórica- como recoge la primera sub-hipótesis-, hay que indicar que se ha evidenciado que en la ambición de constituir una entidad regional para lidiar con los agentes relevantes con intereses en la región, ha jugado un papel determinante el rol asignado a la IED por parte de los discursos que operaban en la promoción del ideal desarrollista o civilizador. Al determinar éstos tanto la construcción del discurso como la apropiación y su puesta en práctica por parte de los diferentes Estados y/o agentes regionales. Cuestión que ha supuesto un distanciamiento determinante en los diversos intentos y prácticas unionistas/integradoras, influyendo decisivamente en la confrontación entre partes y el no avance del proceso.

Sin embargo, por otra parte hay que concluir que, en el tiempo presente e histórico, en principio y de acuerdo con el análisis del proceso constitutivo del organismo que daba inicio a esta investigación: la CELAC, se constata que éste no responde a un proceso de reclamo ligado al papel de la IED. Por una parte, al encontrarse en los idearios de agentes parte del mismo la promoción de divergentes metas desarrollo, sin entender algunos que la práctica o las reglas requeridas por los agentes relevantes sean hechos perjudiciales para la región. Contexto en donde unos han actuado y actúan promoviendo las prácticas que los

discursos de los agentes relevantes han difundido como necesarios durante el periodo analizado; y por otra, dado que la constitución *per se* de la CELAC responde, como muestra el análisis sobre su origen, más a asuntos de estabilidad y paz regional que a la percepción de injusticia en la práctica. Al menos en principio.

Pero aun así, el que “el principio escrito” no responda a esta percepción no significa que su constitución no atienda a este hecho. Ya que sí, claramente, la constitución de esta comunidad establece un marco de acción, que la sitúa como una herramienta que posibilita la puesta en práctica de las demandas históricamente acontecidas. Y, como se ha evidenciado, una fundamental es la articulación de las reglas que determinan la relación con los agentes relevantes en términos de IED.

Otra de las conclusiones relevantes que se ha hallado en esta investigación, se ha evidenciado en el proceso de refutación de la segunda sub-hipótesis. El análisis de las reglas instituidas en la estructura internacional referidas a asuntos de IED, ha evidenciado que éstas han estado promovidas y determinadas, claramente, por los agentes relevantes y poseedores de inversión. No siendo únicamente los Estados inversores los promotores que han actuado con una actitud etnocentrista, sino que la construcción de teoría jurídica y política ha sido promovida y articulada, en gran medida, por los tenedores de inversión. Es decir, por agentes parte en el proceso de relación inversora, más que por los territorios que los receptaban o emitían. Aunque en términos de RRII sean estos últimos, los Estados, aun en la actualidad, aquellos que se supone tienen atribuidas las capacidades para determinar el cómo se configuran las reglas en este campo.

En este sentido, señalar que desde los inicios, en los que la práctica y su regulación pasaron a ser elementos relevantes de la estructura, los agentes relevantes han operado promoviendo la construcción de discursos en los que se defendía la pertinencia de, únicamente, fomentar el respeto por aquellas decisiones que obedecieran a una conceptualización de la justicia y civilización particular. Más tarde, y una vez transformado el discurso tras la aparición del concepto de desarrollo, logrando éstos que en todo el proceso la capacidad soberana- que tanto se había defendido para proteger la inversión-, fuese cedida a agentes externos para juzgar disputas de IED, por parte de una gran mayoría de los Estados de la región a órganos externos. Es decir, una cesión de la competencia soberana en este campo.

Esta cesión ha significado tal percepción de quiebra histórica en la capacidad soberana de los miembros de la región que, si bien en cierto sentido la región había llegado a participar en la construcción y ser relevante en la doctrina jurídica internacional en cuestiones de IED- a través de las doctrinas Drago y Calvo a principios de siglo XX-, en estos inicios de siglo XXI su queja está, de nuevo, causando impacto internacional. Concretamente, al verse manifestada la percepción de haberse perdido la capacidad de ejercer de agente soberano, dado el gran impacto de esta práctica la IED; el gran número de denuncias que a receptado la región; junto con la percepción de no justicia en las decisiones de los órganos que han sido atribuidos con tal capacidad (percepción que comparten con más agentes internacionales, ni únicamente regionales).

A este respecto, se ha de indicar que la región sí está dando pasos en aras de alterar este esquema en la estructura, mediante el acto de instituir un órgano regional con dichas competencias para lidiar con estas disputas. Acción que supondría el que se construyese una institución que, en temas de IED, tenga atribuidas competencias soberanas. Por lo que en este campo sí se construye, aun cuando igual no se ponga el tejado. Dado que el ir construyendo el armazón constituye una acción: el construir. En este sentido enunciar que la CELAC lo está analizando.

Respecto a la refutación de la tercera sub-hipótesis, se ha de indicar que es manifiesto que el ideal de unificar/integrar la región para actuar como un agente ha existido desde los inicios de los procesos descolonizadores. El ideal de unir capacidades para actuar como un agente en la SI, ha estado presente incluso divergiendo en algunas prácticas atribuidas al modelo de desarrollo que se debía practicar. A este respecto indicar que, aun con la meta común- que ha impactado con gran hendidura en los agentes receptores-, como ya se ha indicado la práctica de la IED y el trato a la misma ha actuado como eje impulsor de unificación/integración a la vez que ha limitado el avance del proceso.

En referencia a la cuarta sub-hipótesis, indicar que la región sí ha sufrido una transformación en aspectos determinantes que, en cierto modo, la capacitan para alterar su rol en la SI. Pero aun confirmándose parcialmente la cuarta sub-hipótesis, hay que manifestar que, si bien es destacable como la participación de agentes regionales en el mercado internacional, así como la presencia de RRNN relevantes en esta época industrializadora, han sido elementos que han potenciado la voz y las prácticas de diversos agentes regionales en la SI- viéndose alteradas sus capacidades sin duda alguna-, aquellos

elementos que sitúan a ALC a la altura de los agentes relevantes y, por lo tanto, convergiendo con éstos, son tanto su avance institucional como el ideacional, al dar importancia a cuestiones como la democracia, la paz, la educación y otros. Puesto que se entiende que, tras analizar algunos datos en la tesis, éstos han sido los factores determinantes en que sus voces sean respetadas por aquellos agentes relevantes que, en ciertos momentos de la historia, han exigido o articulado como elemento deslegitimador la presencia de esas condiciones para escuchar la voz de otros y, por lo tanto, sus demandas ideacionales. En especial la democracia. Por ello se ha hallado muy relevante el indicar que los avances en este campo son muy notorios, siendo muestra de ello la profusión de incluir una cláusula democrática en los diversos acuerdos de integración/unificación regional. Siendo esta práctica en la que se ha evidenciado el mayor logro en términos de convergencia.

En referencia a los objetivos que sirvieron como guía de esta investigación, se concluye lo siguiente. El objetivo general, "... analizar qué papel han ejercido los agentes relevantes en la articulación de la IED como práctica de desarrollo, para que la región de ALC haya percibido que su capacidad soberana ha estado sesgada, provocando e incitando la puesta en marcha de mecanismos de integración y/o unificación regional" , ha sido cubierto en profundidad en los Capítulos I, III, IV y V. Recogiendo en ellos, desde la evolución de la práctica como mecanismo ligado y necesario para adquirir la categoría de desarrollado en el Capítulo I; junto con el análisis de la práctica de la IED y su evolución en la SI, el origen normativo en la SI en el Capítulo III; hasta el cómo se ha producido el impacto y reacción ante la práctica en la región de ALC en los Capítulos IV y V.

En cuanto a los objetivos específicos, se han logrado analizar éstos en "profundidad". El primer objetivo específico en los Capítulo I, principalmente, vinculando lo evidenciado en los Capítulos IV y V; el segundo objetivo específico en los Capítulos III (el análisis de la IED), y Capítulos IV y V el impacto en ALC; el tercer objetivo específico en el Capítulo II; el cuarto y el quinto objetivo específico en los Capítulos IV y V; y el séptimo en el capítulo IV- concretamente en el epígrafe 5-.

En conclusión, una vez refutadas las hipótesis y habiendo alcanzado los objetivos que daban inicio a esta tesis doctoral, indicar que el proceso de apropiación de ideal desarrollista impulsado por los agentes relevantes en la región de ALC, ha significado la presencia, en la perspectiva histórica, de dos cuestiones elementales: 1) la región ha

presentado heterogeneidad en la postura de sus miembros hacia la práctica; y 2) esto ha significado el que el proceso de integración/unificación se fomentase y a su vez se viese frenado en su avance. Mencionar que el impacto del trato a la IED ha actuado como elemento impulsor de la construcción de identidad a partir de la percepción de injusticia, siendo indicada en diferentes periodos históricos la necesidad y pertinencia de aunar capacidades para potenciar la transformación de las reglas que percibían como injustas y perjudiciales en la estructura. Por lo que esta práctica sí ha actuado como elemento articulador del proceso de convergencia, aunque la perspectiva que se adopte sobre el desarrollo límite en un grado muy alto los avances.

3. Principales aportes del marco teórico en esta investigación.

Recordando la cita que daba inicio a la parte de metodología de esta tesis, que decía:

“...el constructivismo puede ser ambas cosas: crítico (critical) y orientado a la solución de problemas (problem-solving): Es crítico en el sentido que se mantiene al margen del orden dominante del mundo y pregunta cómo ese orden se estableció, pero también es orientado a la solución de problemas en el sentido que, una vez que las instituciones y prácticas están establecidas, toma el mundo como lo encuentra, como el marco dado para la acción” (Shünemann, 2010, pág. 45),

se entiende que el haber utilizado la meta-teoría constructivista para analizar el papel que ha jugado la práctica de la IED en la ambición de instituir una organización que aunase capacidades en ALC, ha permitido observar en profundidad la construcción de los hechos. Detectando el papel desempeñado por los agentes en la estructura internacional constituida en torno a la práctica, así cómo las metas contenidas en los idearios de los procesos se van constituyendo en la medida que las capacidades lo permitan- tanto materiales como ideacionales-.

Asimismo, el marco-teórico escogido ha facilitado el evidenciar la presencia de una estructura jurídico-política estructural, en la que las ideas de los agentes relevantes han determinado la institución o modo de conducta de los agentes participantes. Se ha observado como el proceso de constitución de la estructura ha estado determinado por la asimetría en cuanto a capacidades. Evidenciándose como la región de ALC, así como los agentes miembros, han optado (obligadamente o voluntariamente) por participar en la estructura, adquirir capacidades y una vez adquiridas, aquellas que permitan emitir las ideas particulares, demandar su puesta en práctica y tratar de transformar o adecuar las reglas de la estructura en cuestiones relevantes a la IED, a la construcción ideacional particular que

no haya sufrido transformaciones y/o variado sustancialmente, mediante la adquisición de las necesarias para manifestarse en la estructura.

En este proceso, hay que indicar la importancia suprema que han jugado las capacidades- tanto materiales como no materiales-, perfilando el cómo ha sido establecido el orden. Es decir, la composición de las reglas que determinan las prácticas. Relevante además es la evidencia hallada en cuanto a la transformación posicional y estratégica adoptada por los agentes relevantes en la estructura, en términos de mecanismos que manifestaban sus capacidades, para mantener su posición dominante. Todo ello mediante la constitución de un entramado en el que se inter-mezclan los discursos y las prácticas en torno a un debate en el que, poco a poco, la regulación de las prácticas oscila en torno al cómo éstas varían en la estructura. Proceso en el que, tanto el desarrollo, como la soberanía y la IED, han ido instituyéndose como conceptos ligados a las *reglas-compromiso*, *reglas-instrucción* y *reglas-directriz*. Constituyendo un debate determinante en torno a, y determinado por, las capacidades ideacionales y materiales de los agentes.

En donde, en este caso y coincidiendo con lo indicado por Nicholas Onuf (1998) en el marco teórico, un agente relevante tratará de usar sus capacidades para mantener su condición. Puesto que se ha observado como en el tiempo que, si bien el uso de las capacidades ideacionales se vio articulado hacia la región predominantemente por medio del uso de las capacidades de fuerza en el primer siglo de independencia, este se ha ido alterando pasándose a un modo de conducta en el que, una vez adquirida ideacionalmente la capacidad de actuar con autonomía de acuerdo a la estructuras ideacionales heredadas de los agentes relevantes por parte de los agentes de ALC y, por lo tanto, convergiendo en ese aspecto la región de ALC con los agentes relevantes, el peso de la acción ha operado sobre la capacidad de determinar las prácticas por parte de los agentes relevantes en el aspecto ideacional. Proceso en el que los agentes relevantes constituyeron un discurso sobre cómo articular la SI, instituyendo una idea de aquello que significaba el funcionamiento de la estructura hacia un ideal “bien común”: el desarrollo.

Ante este ejercicio, el marco teórico escogido ha permitido el que se haya mostrado como la región de ALC ha alterado su posicionamiento. Si en primera instancia se apropió, en términos generales, de algunas de las ideas determinantes en la estructura que motivaban la asimetría - el DI y primordialmente el concepto de soberanía-, con el tiempo, adquiriendo la capacidad de manifestar su posición como agente y ambicionando alterar las reglas, ha posibilitado un contexto en la época reciente, en el que esta manifestación está tomando

cuerpo para ejercer su voz mediante la apropiación y puesta en práctica de los sistemas democráticos. Esquema que permite emitir la voz de las ideas contenidas, contraponiéndose como agente ante los agentes relevantes, tratando de evidenciar que posee capacidad “suficiente” para requerir una alteración de las reglas que determinen las prácticas en la estructura. Hecho que se hará evidente en el grado en el que se obtenga aquella alteración contenida en el ideario- como se observó con el impacto de las Doctrinas Drago y Calvo-.

Por lo que es relevante enunciar que, además de haber adquirido capacidades en otros aspectos que son determinantes (economía, institucionalidad, etc...), un hecho sin duda revela el cómo esta capacidad está alterando la estructura, es la aparición-recuperación de un concepto que se contrapone a la articulación de la capacidad ideacional de los agentes relevantes mediante el desarrollo: el “Buen Vivir”, en algunos Estado de la región. Ya que este concepto está actuando como propuesta alternativa a las ideas sobre cómo debe operar el funcionamiento de la estructura en la región. Es decir, actuando como alternativa a la idea que determinaba las prácticas en temas de IED: el desarrollo. Adquiriendo éste una importancia suprema, ya que hay que señalar que en este postulado la práctica de la IED ocuparía otro espacio en la construcción de la sociedad; así como la soberanía.

Sin embargo, el observar las alteraciones en el orden dominante no es una manifestación con cobertura regional. Y aunque bien es verdad que la constitución de la CELAC sí constata la aparición de una capacidad institucional en el ámbito regional, ésta no opera con códigos que alteren la idea de desarrollo promovida por los agentes relevantes. Aunque se debe indicar que esta institución sí posee la particularidad de, en términos constructivistas, operar como capacidad aprendida de los agentes relevantes- en los aspectos de soberanía e institucional-, que permite la construcción de pensamiento crítico y, por ende, la alteración del orden establecido ideacional. Principalmente, al no haber agentes externos en el seno de una organización regional.

Por lo que se podría concluir que: el análisis realizado revela como la alteración de las capacidades ideacionales de los agentes determinan las prácticas en la estructura, en este caso en la SI. Y el analizar el proceso de constitución de estructuras desde la meta-teoría escogida, permite el que se evidencie, de un modo notable, como, en este caso, las ideas que operan en la construcción de las metas sociales, que articulan la relación entre agentes, se manifiestan como capacidades necesarias para alterar las estructuras y, con ello, las reglas que determinan sus prácticas y rol como agente.

Asimismo y por último indicar, como ha sido evidenciado, que una vez adquiridas las capacidades necesarias para emitir e impactar en el funcionamiento de la estructura, si se da la existencia de ideas que no han sido alteradas por aquellas que hayan sido instituidas como determinantes en la estructura, se evidenciará como éstas perduraran en los propósitos de los agentes si están inscritas en la construcción de identidades, y se manifestarán en el instante que se adquieran las capacidades necesarias para alterar la estructura. Y en el caso de estudio analizado, en el grado que se adquieran capacidades, perdure y no se transforme ostensiblemente la idea, se hará presente el propósito inscrito de acometer un proceso de integración/unificación.

Summary of Phd Thesis

Summary of Phd Thesis

Complutense University of Madrid

Faculty of Political Science

Title:

The role of Foreign Direct Investment on the construction of regional sovereignty in Latin America and the Caribbean: a constructivist research based on the conceptualization of development.

Leader of doctoral project:

José Ángel Sotillo Lorenzo

Written by:

Tomás Pérez Rosa

Madrid, año académico 2014-2015.

1. Summary of PhD thesis.

Title: The role of Foreign Direct Investment on the construction of regional sovereignty in Latin America and Caribbean: a constructivist research based on the conceptualization of development.

1.1 Abstract.

This study considers how the Foreign Direct Investment (FDI) had been articulated as a needed practice to achieve development status by relevant agents⁶⁷⁴ in International Relations, using to analyze this issue a constructivist framework. Pointing out how this exercise, and its spreading to regulate the practice, have affected to unification/integration aim present in the Latin American and Caribbean region (LAC); focusing the research on the study of the regional perception of not being sovereign states in all its attributes; analyzing how if it has been the main cause, and how it has impacted, of the presence of the integration/unification aim in the region of LAC. The question which has surged, and has been the origin of this research, after checking out the recent creation of: “The Community of Latin American and Caribbean States (*Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños in Spanish* (CELAC from now on)), and the content included in the declaration, where the member States it have referred to the fact that the constitution of the Community is a starting point to achieve a second independence process.

The results obtained have revealed that the idea of development, and his linked practice: the FDI, have played an essential role in the making of decisions by the different States about the integration/unification aim; which shows that the use of the practice that and the treatment to it has been the main cause in the appearing of two divergent integration/unification models to reach the development target in LAC. Whereas, given that the role of FDI and its treatment have been “the key issue”, consequently the practice and its role have had a relevant impact in the perception of not being sovereign agents. Mainly this is because relevant agents in International Society have determined how the practice has to be performed, by defining the concept; determining its theoretical evolution; by the way it has to be ruled in the International Relations; and by linking the practice to the ambition of achieving development category.

⁶⁷⁴ By relevant agents this study considers those actors - mainly States, but also those with capacity to interfere as Multinational in recent times- which have had the capacity to define the concept of development, sovereignty and FDI; to influence the articulation of the International Law around those concepts; and the capacities to influences the practice of the mentioned concepts.

This affects the capacity of decision making by States given that it requires an extraction of the capacity to judge FDI disputes that occur inside the State geographical limits, to place them outside the states own territory. The question that has been manifested by the institutionalization of the practice, by its introduction in the International Law first, and recently by the profusion of Bilateral International Agreements (BIT), Free Trade Agreements, etc..., concerns the clauses included into the treaties, and the creation of juridical institutions to rule this field.

Also, it is been shown that the appropriation process of the idea of development, driven by relevant agents in the International Society and having a profound influence within the LAC region, has meant the presence, in the historical perspective, of two basic questions: 1) in the region the presence of heterogeneity in the position taken by its members to the practice has been detected; and 2) because this fact has meant that the integration/unification process had been slowed down in its advance by the decision taken by regional agents, both State and regional organizations. Nevertheless, it has been detected that the impact of FDI treatment has also acted as a driving element in the construction of identity, mainly because it has been perceived, historically, as an unfair practice. Being identified in different historical periods, the need, and also the pertinence, of combining regional capabilities enhances the transformation of those rules linked to the practice. They (the linked rules to the practice) have been perceived as unfair, they damage to regional participation in the international structure.

So, it could be concluded that the practice has itself acted as a focal point of convergence, although the perspective election over the development has limited, in a very high degree, the progress in reaching the aim. Thus, the antagonistic context shown look as if it depends on the extent to which that the idea of development, and its associated practices, permeate societal targets.

2. Synthesis.

This study considers how Foreign Direct Investment (FDI) has been articulated as a needed practice to achieve development status by relevant agents in International Relations, pointing out how this exercise, and its spreading to regulate the practice, has affected the unification/integration aim present in the Latin American and Caribbean region (LAC). The question which has arisen after checking out the recent creation of: “The Community of Latin American and Caribbean States (*Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños in*

Spanish (CELAC hereafter) and the content of the declaration, where the State members refer to the fact that it is a starting point to achieve a second independence process.

To research the chosen issue I have applied a “constructivism framework” developed by Nicholas Onuf (1989; 1991; 1995; 1997a; 1997b; 2014), and I focused the main debate on the idea of development; pointing out how the aim of achieving the category of developed State, and the mechanism tied to the theory- where the FDI is a main tool-, had determined the behavior and decision taken by different regional agents in the integration/unification process.

The process is focused, owing to the fact that it had been verified that the idea of sovereignty has played an important role, on two areas:: 1) because it was acquired by the region as a result of exogenous social structure, with all its attributes, including those related to internal and external practices - specially the autonomy idea-; and 2) because the lack of respect for sovereignty, in all its attributes, by relevant agents has motivated, since the independence processes had place, promoted a regional idea which suggested a need for gathering together all regional capacities into an unique agency to deal with external actions in the region, whether or not it was adopted and integration or unification method.

It is in this sense that the need for this study arises. By looking at CELAC, the new group that has been recently created, and the declarations at the first summit: “Caracas Declaration. “In the Bicentenary of the Struggle for Independence towards the Path of our Liberators””⁶⁷⁵, a declaration which shows, manifestly, regional aims based on suggesting ideas of not being total independence, so not sovereign, at least as that term is defined in all aspects. This study also answers the question that has guided this study: *What is the role that the FDI has exercised, as a practice, in the construction of regional sovereignty?*

3. Hypothesis and objectives.

With the announced question on the table, and after an approach study, the hypothesis which drove the study where formulated:

⁶⁷⁵ See it in: <http://www.pnuma.org/forodeministros/19-reunion%20intersesional/documentos/CARACAS%20DECLARATION.pdf> (Consulted the 28th of December 2014).

3.1 Main hypothesis:

The political-economic articulation of FDI as a developmental practice in the LAC region determined that the member States had chosen to promote their regional sovereignty claim against relevant agents (manifested in the creation of CELAC), perceiving that the practice of its articulation has become a regulation where the exercise itself severely limits the capacity to decide autonomously, as well as establishes and reproduces asymmetric conditions set in the functioning of regional relations with external agents.

1) Sub-hypothesis: *The ideas underlying the conceptualization of development have determined the role played by FDI in the unification/integration process in LAC.*

2) Sub-hypothesis: *The international regulation to solve FDI disputes has been institutionalized by external ideational constructs to the LAC region. Relevant agents have used their capacities to perform the transformation of the rules that determined the practice in their own favor, even being aware of the implicit asymmetry. What has determine a break in the sovereign status of the member States, is the reaction of these to the adoption of practices which promote a mechanism of articulation that allow them to alter this policy.*

3) Sub-hypothesis: *To constitute an agent with sovereign capacity in the regional territory of LAC is an historic ambition constructed from the perception that their will has been suppressed from colonization to the present.*

4) Sub-hypothesis: *The regional claim, for political-economic autonomy responds to the alteration in the capabilities that LAC has suffered (material, ideational, institutional, etc...) that allows it to alter its role in the International Society.*

Once the hypotheses were defined the research objectives were presented:

The **general objective** of this research is to analyze *what role relevant agents have exercised in the articulation of FDI as a developmental practice. The LAC region has perceived that its sovereign capacity has been biased, causing and encouraging the implementation of mechanisms of regional integration and/or unification*

1st Specific objective: *To analyze the origin and the impact of the concept of development, as a political practice, in the regulation of International Relations, paying attention to the linkage with the FDI's practice of justification and promotion; and to reveal the institutional process of the research unit selected: LAC and International Society.*

2nd Specific objective: *To analyze the idealizational origin of institutionalization process of FDI in the International Society, also the origin of its regulation; as well as its impact in the decision making process made by receiving agents and issuers of this practice.*

3rd Specific objective: *To analyze meaningful alteration of sovereignty since its emergence in the International Society up until present time, by detecting the essential attributes and the transformations it has undergone.*

4th Specific objective: *To analyze to what grade ideas concerning the justification of the FDI practice has affected the unification or/and integration process of LAC.*

5th Specific objective: *To analyze and to present those periods that LAC region has experienced that had meant the existence of an idea of unity in the area, which allows expressing a joint second independence at the regional level.*

6th Specific objective: *To analyze the impact of the FDI mechanisms of regulation on region with abroad, that mean a bias in the sovereignty of the States.*

7th Specific objective: *To identify and determine what capacities are those which could allow the region to aspire to an alteration of its role as an agent in the International Society.*

4. Thesis chapters.

This investigation has been distributed in three main parts, following the introduction and the study outline:

Part I) This part includes a unique chapter, in which ideas taken up in the concept of development are considered; and their evolution in two units of analysis: International Structure (guided by relevant agents) and the Latin-American and Caribbean region. The main change at the institutional level is mentioned, analyzing the evolution since its apparition in the middle 40's, passing through concept as eco-development; Basic Human Needs; or Sustainable Development, until the theorization of development as a Human Right or the new appearance of the concept of Good Living or *Buen Vivir* in LAC. These processes focus the emphasis on the role that FDI practice had played.

Part II) This part is composed by two chapters: 1st) The first one is dedicated to an analysis of the concept of sovereignty as it appears in the European region, revising its evolution in the International Society, and examining how its attributes has been allowed to suffer profoundly in order to maintain their initial coverage. In this chapter, the changes in International Relations are analyzed in order to show

the difficulties in claiming a state to be truly sovereign, and how new supranational agents has appear, showing how they been created, their role and attributions, in terms of capacity; 2nd) the second chapter of this part analyzes the Foreign Direct Investment as a political practice. Its evolution and its regulation as a practice are analyzed, showing what roles different agents have played in the process; and what are the arguments used behind the practice, in terms of development and sovereignty.

Part III) In this section the historical evolution of the process by which as sovereign claim as a region by the LAC is analyzed. It is composed by two chapters. Chapter IV is centered around the evolution of the unification/integration idea in the region, from the first independence movement until mid-twentieth century. After that time the process entered into a pragmatic phase. In this period, attention has been paid to how surged the regional identity come into being; the territorial division; and how foreign actions, especially FDI, affected this aim.

Chapter V is the product of research on, the named, pragmatic process. In this chapter, the institutional process the has undergone is analyzed, along with the creation of different institutions which aim to integrate/unify the area, paying attention to the role that the idea of development and the manner of its achievement has played in it; the role assigned to FDI by the concept; and also how sovereignty has been affected, highlighting the different facts that could have led to a repulsion act.

5. The essential results obtained in the research: Evidence found about the link between Foreign Direct Investment, sovereignty and development in the Latin American and Caribbean region.

It has been shown in this study that the constitution of a regional agent which restricts the will and capabilities of the member States in LAC- varying in terms of geographical coverage (including or not some territories as Brazil and Caribbean Islands); and also its coverage in terms of attributes-, has been present, with greater or lesser weight, in each epoch, phase or period in which the region has passed through since the respective independences were achieved.

As a first conclusion it has been concluded in this research that: the shown wills which have indicated the pertinence to promote the integration or/and unify action, as well as the construction of the speech and practices that have to be applied promoting and boosting to construct a regional agent, have been determined by the relevant agents actions. Who have played a relevant role in regional decision making in a negative way. As first conclusion, the integration/unification process was an active way to react, based on a concrete regional attitude: “To be for not allowing you- relevant agents- being into me”.

Also, it can be confirmed that in the regional integration/unification aim has played a crucial role in two of the analyzed categories: 1st) the evolved state of the society as category to be developed, civilized, evolved, etc...; and 2nd) the capability to decide over issues occurring in a State territory and about the way the relations with external agents have to be ruled. It is the category of being or not sovereign according to the classical scholars.

In these ways, it has been shown how, since the first independences process, the external ideas about how a society should be organized have determined the regional structuration of social behaviors. It, because the enounced ideas stayed instituted as belonged on those citizens who were leading the articulation of independence movements. In fact, the structural ideas were an Empire “legacy”. To such an extent that Empire practices, especially in the social-economic field, determined how would result the geographical configuration of the territories in LAC- for example, Brazil is a result of Portuguese Empire practices; and Spanish Empire practices result in more than one unique State-.

It has been found that the relationship between external action and the acquisition of the category of sovereign state determined how the taken decision has been executed by the regional members. Mainly, it was due to two issues: 1st) because it was acquired as inheritance of society, with its own mechanisms and rules, which wasn’t built to attend to the demands of its own society; and 2nd), given that sovereignty was an external recognition, it implied the external agent’s participation in the acquisition of its own statehood. So, it has been observed that the acquisition process of the sovereign category implies the presence of an external authority superior to the manifestation of a state’s capability in International Relations, being itself present a heteronomy.

The fact of inheriting ideational structures of how to be and what capabilities have to be possessed as agent caused that the collision between how to be and being the one who

makes the decisions had constituted a crucial debate where, into the existing cracks, it had created the practice that has impacted on both and that is a principal issue in this research: the FDI.

It has been also seen that in the mentioned cracks, exist two relevant elements in the process that occupied us. One crack, obviously, is the regional identity. It has been developed in a continuous process of construction, searching for answers to these questions: who it is? ; what are the requirements?; and how to achieve what is desirable for them? The crack that had been disturbed after the regional agents witnessed how the category wasn't respected in the way it had been taught and appropriated. It means that not only allowing executing as an agent, but all the attributes in the way that classics scholars and the International Law said. The context that motivated that sovereignty has been made into an issue for the region in opposition to the actions of the relevant agents. And at the same time the acquisition of this category had influenced by causing antagonisms to appear. In one way, the acquisition of the category made the new States so jealous of their new capability; and in the same way, the total lack of respect for it showed by relevant agents boosted the integration/unification aim to unify capabilities against external actions in the region.

And also, it has been shown how relevant agents (States) have changed their behavior with respect to the initially recognized category of being sovereign agents when they considered that some of their ideal ways of being were not tied to the execution. Especially, it happened that when the new sovereign states put into place the attributes implicit in the category, and this behavior affects to any foreign investment in their territory. The context in which the relevant agents did not respect the implicit attributes in the conceded category, by alleging that other categories, such as being civilized, or being developing nations, were not successfully achieved, and under such conditions, the question of sovereignty was not applicable.

Owing to what has been advanced, once new sovereign territories experienced concerns about their capabilities and had internalized the theoretical demands stemming from the term, it was shown how, in different time periods, claims to respect the competences they had been denied were made, according to the category achieved (Ex. Drago and Calvo doctrines in the past). This caused that, sometimes, even region members allude to the need of starting a second Independence process.

In these ways, it has been detected that all the integration/unification projects analyzed in this research have pointed out that the region, once having experienced injustice from different practices made by relevant agents - according to the lessons learned of what is implied by sovereignty-, that region must proceed to face a unification and/or integration action. Understanding that acting by themselves they were in a weaker position to face external actions. Thus, they could not act sovereignly with all its attributes and could not exercise its decision making capability.

At this juncture, having pointed out the region analyzed, our research detected that the lack of respect for the attributes of sovereignty in disputes related to FDI cases, based its argument in the achievement of another category: civilized/ not civilized; developed/ not developed. This is what has been noted the how and the when LAC territories acquired the category of sovereign States and acted as such in cases affecting to FDI. And by pointing out the not achievement of the other mentioned categories, the relevant agents justify the not respect for some of the attributes that sovereignty has acquire.

After having pointed out this evidence and the continuous claims executed by the region members about this fact; and once the respect for sovereignty had been adopted and demanded by International resolutions from different International Organizations – for example: the Conference on the Treatment of Foreigners in 1929; the UN Charter (Art. 2); the Charter of the OAS (Art 21, 24); Resolution 1803 of the UN General Assembly in 1962; or the Charter of Economic Rights and Duties of States (1974)-, was the place where the concept of development intervened and played an essential role- referring to the questions that are being treated here: FDI and sovereignty-. At this point in time, it was discovered that the foreign Investors doctrine, led by relevant agents, promoted an instrument to solve the disputes occurred: the International Investment Agreement (IIA). This instrument which, evidently, required a reduction in sovereign capacity to judge from State on disputes occurred in their geographical territory, based on the argument that if States wanted to achieve a developed category, they would need to offer judicial security to investors. Arguing that if this AII was not adopted, the investor would not invest and it would not be possible to get into the developmental stream.

In line with these results, it has to be said that, given that agents used available resources to achieve the goals contained in its ideational structures and also, knowing that since the adopting of any agreement was offered as a necessity which guarantees the achievement of the appropriate goals (development) or the means to get them (FDI), to the extent that

development talks indicates that it would be appropriate to investment host states, constructivist theory said that they would act using available resources to obtain the needed means, even if the results are not achieved. It is in this way that States were advised that, beyond the possibility of using its Natural Resources or labor rights to get investment at first, the sovereign capacity to decide or judge over FDI disputes was the “unique” act that was indicated as an element of giving conditions to assure that investors see a State as an assured territory for investing. In fact, it has been verified in this study how after the 90’s the signature of IIA increased from regional States member with territories abroad, and because the denunciations has increased - it has to be noted that the LAC region is leading the list of the greatest number of denunciations into the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) -, the debate returns to the first political line again. Somehow, we are returning to the dilemma that Drago and Calvo pointed out at the beginning of the XX century: how to act sovereignly in investment actions. In fact, as it has been shown, new organisms with regional impact, such as the Union of South American Nations (UNASUR) and CELAC, are analyzing how to regulate the capacity to judge and to rule this FDI issue that puts into question sovereign attributes.

Talking in terms of integration/unification, and having taken into account the relationship between the FDI with the processes of integration/unification, it has been revealed how the competition to attract investment have had a deep impact on the regional aim. First, because it influences the decision making of the regional States competing with them for the attention of the FDI; and second, because the different strategies to achieve the developmental state had changed in the regional agents and, thus, the practices linked to such category also changed. This diversity was reflected in two different strategies to achieve the category: *outward integration* or *inward integration*. Strategies that were and still in the region decision making.

6. Conclusions.

First, it can be concluded that the CELAC constitution does not obey “directly” the impact of FDI. It could be said because it has been seen that the previous institutions where this Community was in its embryo state had its motivation in the building of a mechanism to assure its principal aim: regional peace. But on the other hand, it has been pointed out how it has been shown that since the middle of the XIX century different scholars and some leaders were claiming for an integration/unification process where put capabilities together.

Mainly it was to deal with disputes and their effects, in terms of autonomy, that occurred around issues related to FDI. And so, given that it is the first time that a project which included all Latin-American and the Caribbean has taken place in the region, with no presence of any foreign country, and that different regional leaders have made a claim for the necessity of, somehow, articulating a mechanism to deal with the FDI practice, the CELAC could be a proper response or mechanism to deal with it. And, it has to be noted, that this regional organism that wishes to become an organization, has an underlying historical wish that goes much more deeply, into the regional aims, than the mentioned of achieve peace - anyway, there are not incompatible as targets-.

In this sense, and talking about the question of whether it is possible to build a regional sovereignty in the region to deal with FDI issues, it has to be concluded that the fact of promoting a constitution process of a regional agency to deal with the practice, has to be seen as a constructive process because it had not previously existed. And in terms of sovereignty, given that the competences which were led by mostly all the States, but not all the territories as sin the seen the case of Brazil (it has not signed any BIT), by the signature of IIA which incorporates such judicial cession, the competences belonged to the States, not to any regional institution. So, any move which means the institutionalization of a supranational agency with capacity to judge over disputes occurred in the regional territory will mean the creation of a sovereign agency to deal in this field.

Bibliografía.

1. Obras: libros y artículos citados y consultados.

- Abbot, K. W., & Peinhardt, C. (2010). "Delegating Differences: Bilateral Investment Treaties and Bargaining Over Dispute Resolution Provisions". *International Studies Quarterly*, 54, 1-26.
- Acosta, A. (2009). "El Buen Vivir, una oportunidad por Construir". *Ecuador debate* (75), 33-48.
- _____. (2011). "Sólo imaginando otros mundos, se cambiará éste. Reflexiones sobre el Buen Vivir". En C. I. Vasapollo, *Vivir bien: ¿Paradigma no capitalista?* (págs. 189-208). La Paz, Bolivia: CIDES-UMSA.
- Acosta, W. S. (2014). "Génesis y evolución del Mercado Común Centroamericano". En W. S. Acosta, & M. S. (Editores), *Centroamérica: casa común e integración regional* (págs. 59-72). San José, Costa Rica: Lara Segura & Asociados.
- Agnew, J. (2005). *The new global shape*. Philadelphia: Temple University Press.
- Agosin, M., & Mayer, R. (1999). *Foreign Investment in Developing Countries. Does it Crowd in Domestic Investment*. Ginebra: UNCATAD, UNCTAD/OSG/DP/146.
- Aharonian, A. (28 de 11 de 2011). "Orgullosos de ser latinoamericanos: CELAC: Estamos construyendo el nuevo mundo"...*América Latina en Movimiento*. En línea: <http://alainet.org/active/51156> . (Consultado el 22 de julio de 2012).
- Aitken, B., & Harrison, A. (June de 1999). "Do Domestic Firms Benefit from Foreign Direct Investment? Evidence from Venezuela".. *American Economic Review*, 89(3), 605-618.
- Albelo, F., & otros, y. (2006). *La Economía Política de la Construcción del Socialismo*. Edición Electrónica.
- Alberdi, J. B. (1838). "Reacción contra el españolismo". En *Obras Completas T 1* . Buenos Aires: La Tribuna Nacional Bolívar.
- Albreu, R., Lopez, A., & Rozenwurcel, G. (2012). *Los recursos naturales como palanca del desarrollo en América del Sur: ¿ficción o realidad?* Montevideo. En línea: <http://www.redmercosur.org/los-recursos-naturales-como-palanca-del-desarrollo-en-america-del-sur-ficcion-o-realidad/publicacion/247/es/> . (Consulta realizada el 09 de junio de 2014).
- Alcoreza, R. P. (2012). "El vivir bien como modelo de Estado y modelo económico". En M. Lang, & D. Mokrani, *Más allá del Desarrollo* (págs. 227-256). Quito: Fundación Rosa Luxemburg/Abya Yala.

- Alkire, S., & Santos, M. E. (2010). "Enfoque de NBI y Enfoque de Derechos. Conceptos y Aplicaciones". En *Curso Técnico de Medición Multidimensional de la Pobreza y sus Aplicaciones*. México D-F.: CEPAL, NNUU. En línea: http://interwp.cepal.org/mmp/pres/1_Enfoque_NBI_y_Enfoque_de_Derechos.pdf . (Consulta realizada el 22 de julio de 2013).
- Allende, S. (1998). *La vía chilena hacia el socialismo: Los discursos de Salvador Allende*. Madrid: Editorial Fundamentos.
- Aloísi, R. (2009). "Legitimidad, Sociedad civil y el apoyo a la democracia". En L. H. Gómez, & J. A. Booth, *Perspectivas para la democracia en América Latina* (págs. 49-84). Toluca: Universidad Autónoma del Estado de México.
- Altmann, J. (2008). *Dossier: Grupo Río*. San José: FLACSO.
- Alvaredo, F., Atkinson, A., & Piketty, T. (2013). "The top 1% in international and historical perspective". *Journal of economic perspectives*, 61(1), 1-21.
- Alzugaray, C. (2004). *De Bush a Bush: balance y perspectivas de la política externa de los Estados Unidos hacia Cuba y el Gran Caribe*. Buenos Aires: CLACSO.
- Anand, S., & Sen, A. (1994). *Sustainable Human Development: Concepts and priorities*. Cambridge: Harvard University.
- Anghie, A. (2004). *Imperialism, Sovereignty, and the Making of International Law*. Cambridge: Cambridge University.
- Ardao, A. (1977). *José Enrique Rodó. La América Nuestra*. Madrid: Casa de las Américas.
- _____ (1986). "Panamericanismo y Latinoamericanismo". En L. Zea, *América Latina en sus ideas* (págs. 157-171). México D.F.: Siglo Veintiuno.
- _____ (1993). *América Latina y la latinidad*. México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.
- _____ (febrero de 1998). "Unión y denominación en el marco de la Independencia". *Cuadernos de Marcha*(136), 3-8.
- Areilza Carvajal, J. M. (2007). "Las debilidades de la Unión Europea". En I. E. Cano, *Panorama Estratégico 2006/2007* (págs. 99-149). Imprenta del Ministerio de Defensa.
- Argañarás, L. F. (2011). "¿MERCOSUR e inversiones extranjeras. Una aproximación desde el derecho comparado y de la integración?" *Revista Ámbito Jurídico*(84), En línea: http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8899&revista_cade_rno=19 . (Consulta realizada el 13 de junio de 2014).
- Aristóteles. (1932). *La Política*. París: Casa Editorial Garnier Hermanos.

- Armengol, V. F. (1994). *El desafío de Naciones Unidas ante el mundo en la crisis*. Barcelona: Icaria.
- Arndt, H. W. (1987). *Economic Development: The History of an Idea*. London: The University of Chicago.
- Arriola, J. (2013). "El constructivismo: su evolución " onto-epistemológica"". *Revista Opinião Filosófica*, 4(1), 377-396.
- Arrizabalo Montoro, Xavier (2014). *Capitalismo y economía mundial*. Madrid. Instituto Marxista de Economía (UCM).
- Ashworth, W. (1958). *Breve historia de la economía internacional 1850-1950*. Méxcio: Fondo de Cultura Económica.
- Asien, E. R. (2008). "El Banco de Sur y El Banco del ALBA". *Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo*. En línea: <http://cadtm.org/El-Banco-del-Sur-y-el-Banco-del> . (Consulta el 12 de noviembre de 2012).
- Azcona, J. A. (2002). *La deuda externa del mundo en desarrollo*. Madrid: Materoffset S.L.
- Baisoch, P., & Kozul-Wright, R. (1996). *Globalization Myths: Some Historical Reflections on Integration, Industrialization and Growth in the World Economy*. Ginebra: UNCTAD.
- Baldwin. (2006). "Multilateralising Regionalism: Spaguetti Bowls as Building Blocs on the Path to Global Free Trade". *The World Economy*, 1451-1518.
- Bambirra, V. (1978). *Teoría de la dependencia: una autocrítica*. México: Ediciones Era S.A.
- Baran, P. A., & Hobsbawm, E. J. (1978). "Las etapas del crecimiento económico de W.W. Rostow". En A. Aguilar, P. A. Baran, & A. G. otros, *Crítica a la teoría económica Burguesa* (págs. 196-213). Mexico: Editorial Nuestro Tiempo.
- Barbosa, R. (Abril-Junio de 1993). "Intentos de integración en el Cono Sur hasta el Tratado de Asunción". *Contribuciones*, 38(2).
- Bardi, H. (2014). *Los límites del crecimeinto retomados*. Madrid: Los libros de la Catarata.
- Barker, A. (2012). "Taking on the "inner mafia"". *Global Arbitration Review*.
- Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X. (1991). "Convergence across States and Regions". *Brooking Papers on Economic Activity*, 107-182.
- Basu, P., & Guariglia, A. (2007). "Foreign Direct Investment, Inequality, and Growth". *Journal of Macroeconomics*, 824-839.
- Batres, I. H. (2012). "Centroamérica: alcances y límites de la Estrategía de seguridad". En H. Mathieu, & C. N. Guarnizo, *Seguridad Regional en América Latina y el Caribe. Anuario 2012* (págs. 84-93). Bogotá: Friedrich Ebert Stifung. FES Seguridad.

- Been, V., & Beauvais, J. C. (April de 2003). "The Global Fifth Amendment? Nafta's Investment Protections and the Misguided Quest for an International 'Regulatory Takings' Doctrine". *New York University Law Review*.
- Béjar, R. C. (2002). *La década dorada: Economía e inversiones españolas en América Latina: 1990-2000*. Madrid: Ediciones Universidad de Alcalá.
- _____. (1986). "Panamericanismo y Latinoamericanismo". En L. Zea, *América Latina en sus ideas* (págs. 157-171). México D.F.: Siglo Veintiuno. América Latina y las empresas multilatinas. (64). En línea: <http://www.ielat.es/inicio/index.php/actividades/noticias-blog/1395-el-ielat-publica-el-dt-64-america-latina-y-las-empresas-multilatinas> . (Consulta el 12 de julio de 2014).
- Bella, I. S. (1993). "Las bulas de 1493 en el derecho indiano". En *Anuario Mexicano de Historia del Derecho* (págs. 371-388). Mexico D.F.: en línea: <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/hisder/cont/5/est/est14.pdf> . (Consulta el 26 de junio de 2011).
- Bennouna, M. (1998). *Preliminary Report on Diplomatic Protection*. NNUU, International Law Commission. Ginebra; New York: National Nations.
- Bergalli, R. (1996). "Latinoamérica: ¿ Soberanía... u otra cosa?" En R. Bergalli, & E. Resta, *Soberanía: un principio que se derrumba* (págs. 191-206). Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A.
- Berlin, I. (1958). "Dos conceptos de libertad". *Inagural Lecture. Oxford University 31st of October*. En línea: <https://bibliolibertaria.org/files/168-isaiah-berlin-dos-conceptos-de-libertad.pdf> (Consulta el 28 de abril de 2014).
- Berrios, R. (1981). "La experiencia del Pacto Andino en regular la inversión extranjera y los flujos de tecnología: un paso adelante, dos atrás". *Estudios Latinoamericanos*, 117-128.
- Bethell, L. (2000). *Historia de América Latina Vol. 11*. Barcelona: Barcelona Crítica.
- Bhagwati, J. (1999). "Regionalism and Multilateralism: An Overview". En T. Blocs, *Alternativa approaches to analyzing preferential trade agreements*. Londres: The Mit Press.
- Bianchi, E., & Szpak, C. (2013). *Cadenas Globales de Producción: Implicaciones para el comercio internacional y su gobernanza*. Buenos Aires: Cátedra OMC FLACSO Argentina.
- Bielschowsky, R. (1998). "Cincuenta años del pensamiento de la CEPAL: Una reseña". En CEPAL, *Cincuenta años de pensamiento en la CEPAL* (págs. 2-13). Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica.
- Biocca, S. M. (2006). *Jurisdicción Internacional en la relaciones jurídicas y económicas en que el Estado es parte*. Buenos Aires: Editorial de la Universidad Nacional del Sur Bahía Blanca.

- Bittencourt, G., Domingo, R., & Reig, N. (Marzo de 2006). "IED y crecimiento económico de largo plazo en el MERCOSUR". *DECON/UDELAR*. En línea: <https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.redmercosur.org%2Fdownload.php%3Flen%3Des%26id%3D173%26nbre%3D40.pdf%26ti%3Dapplication%2Fpdf%26tc%3DEventos&ei=owwsVLi3ONaSSQSN14LI>. (Consulta el 12 de junio de 2014).
- Blacket, A. (2007). "Hacia el Regionalismo Social : El caso de CARICOM". *Revista Latinoamericana de Derecho Social*, 15-46.
- Blasier, C. (1989). *The Hovering Giant: U.S. Responses to Revolutionary Changes in Latin America*. Pittsburg: University Pittsburg Press.
- Blomstöm, M., & Kokko, A. (1997). "Regional Integration and Foreign Direct Investment". *NBER Working Paper series*, 1-35.
- Blomström, M., Lipsey, R. E., & Zejan, M. (1992). "What explains Developing Country Growth?". *National Bureau of Economic Research* (Working Paper No. 4132).
- Bobbio, N., Matteucci, N., & Pasquino, G. (2011). *Diccionario de política*. México: Siglo XXI.
- Bodenheimer, E. (1994). *Teoría del Derecho*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Boderheimer, S. J. (1981). "El Mercomún y la ayuda norteamericana". En R. Mejivar, *La inversión extranjera en Centroamérica* (Tercera ed., págs. 23-166). Costa Rica: EDUCA.
- Bodin, J. (1985[1576]). *Los seis libros de la República*. Barcelona: Orbis.
- Bolívar, S. (1815). "Carta de Jamaica". *Juventud Partido Socialista Unido de Venezuela*. En línea: <http://juventud.psuve.org.ve/wp-content/uploads/2009/05/cartajamaica.pdf>. (Consulta el 25 de junio de 2013).
- _____ (1819). *Discurso de Angostura*.
- _____ (1994). *Doctrina del Libertador*. Caracas: Fundación Biblioteca Ayacucho.
- Borchard, E. (1940). "The "minimum standard" of the Treatment of Aliens". *Michigan Law Review*, 38(4), 445-461.
- Borezestein, E., De Gregorio, J., & Lee, J.-W. (1998). "How Does Foreign Direct Investment Affects Growth?" *Journal of International Economics*, 115-135.
- Bourguignon, F., & Morrisson, C. (2002). "Inequity among World Citizens: 1820-1992". *The American Economic Review*, 92(4), 727-744.
- Boutros-Ghali, B. (2003). "La interacción entre democracia y desarrollo" *Informe de síntesis. Unesco*. En línea: <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001323/132343s.pdf>. (Consulta el 26 de septiembre de 2013).

- Bravo, M. B. (1990). "La propiedad privada como elaboración del liberalismo burgués. Su proceso de positivación". *Anales de estudios económicos y empresariales*(5), 263-286.
- Brenton, P., Mauro, F. D., & Luecke, M. (1999). "Economic Integration and FDI: an Empirical Analysis of Foreign Investment in the EU and in Central and Eastern Europe". *Empirica*, 95-121.
- Brewster, H. (Febrero de 1969). "Recursos y prioridades para el desarrollo industrial del Caribe". *Comercio Exterior*, 141-154.
- Brewster, H. (1971). "Integración económica del Caribe. Problemas y perspectivas". *Estudios del Mercado Común*, IX(4).
- Broches, A. (1995). *Selected Essays. World Bank, ICSID, and Other Subjects of Public and Private International Law*. Dordrecht (Holanda): Kluwer Academics Publishers Group.
- Brower, C. N., & Schill, S. W. (2005). "Is Arbitration a Threat or a Boon to the Legitimacy of International Investment Law?". *Chicago Journal of International Law*, 9(2).
- Brownie, L. (1998). *Principles of Public International Law* (5ª ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Brunetti, M. (2003). "Indirect Expropriation in International Law". *International Law FORUM du droit international*, 150-155.
- Buchruker, C., Aróstegui, J., Saborido, J., & Ferraris, C. (2001). "Un siglo de Guerras y Revoluciones". En C. Buchruker, J. Aróstegui, & J. Saborido, *El Mundo contemporáneo: Historia y problemas* (págs. 475-546). Barcelona: Crítica.
- Buitrago, F. L. (2003). "La Doctrina de Seguridad Nacional: Materialización de la Guerra Fría en América del Sur". *Revista de Estudios Sociales*, 74-87.
- Bull, H. (2005). *La sociedad anárquica*. Madrid: Los libros de la catarata.
- Burlamaqui, J.-J. (1751). *Principes de Droit politique*. Amsterdam.
- Bustillo, I., & Velloso, H. (2013). *La montaña rusa del financiamiento externo : el acceso de América Latina y el Caribe a los mercados internacionales de bonos desde la crisis de la deuda, 1982-2012*. Santiago de Chile: CEPAL.
- Bustillos, A. S. (2012). *Régimen normativo de la inversión extranjera en la Organización Mundial del Comercio y en el Perú*. Tesis Doctoral. Lima, Perú.
- Buzan, B., & Wæver, O. (2003). *Regions and Power. The structure of International Security*. New York: Cambridge University Press.
- Cajina, Roberto. (2012). "Centroamérica bajo asedio: Narcotráfico y debilidades institucionales". *Instituto Español de Estudios Estratégicos*. En línea: http://www.icee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2012/DIEEO82-

- [2012_CentroamericaBajoAsedio_RCajina.pdf](#) . (Consulta realizada el 27 de noviembre de 2014).
- Calagno, A. E., & Calagno, A. F. (1995). *El universo neoliberal. Recuento de sus lugares comunes*. Buenos Aires: Alianza Editorial.
- Calderón Vazquez, F. J. (2008). *Enfoques teóricos y Paradigmas del Desarrollo*. Edición electrónica gratuita: En línea: www.eumed.net/libros/2008b/409/ (Consulta el 24 de abril de 2011).
- Calvo, C. (1868). *Derecho Internacional Teórico y Práctico de Europa y América*. París: D´Amyot Librarie Diplomatique.
- Candelario, O., Lissette, C., Cevallos, Z., & Solorzano, M. d. (3 de enero de 2013). “Análisis de la Inversión Extranjera Directa de los Países de América Latina ¿Cuáles son sus Determinantes? Un Estudio en Datos de Panel (1999-2010)”. *Investigación* Guayaquil, Ecuador: Facultad de Economía y negocios. Escuela Superior Politécnica del Litoral. En línea:<http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/21493/1/Analisis%20de%20la%20inversion%20extranjera%20directa%20de%20los%20pa%C3%ADses%20de%20Am%C3%A9rica%20Latina.pdf>. (Consulta el 28 de abril de 2014).
- Caputo, O., & Galarce, G. (2006). “La Nacionalización del Cobre Realizada por Salvador Allende y la Desnacionalización del Cobre en Dictadura y en los gobiernos de concertación”. *Semanario el Siglo*, En línea: http://generacion80.cl/documentos/docs/La_desnacionalizacion_del_cobre.pdf Consulta realizada el 23/05/2014 . (Consulta el 30 de mayo de 2013).
- Carcovic, M., & Levine, R. (2005). “Does Foreign Direct Investment Accelerate Economic Growth?”. En T. H. Moran, E. M. Graham, & M. Blomström, *Does Foreign Direct Investment promote Development?*” (págs. 195-220). Massachusetts: Institute For International Economics.
- Cardoso, F. E., & Faletto, E. (1969). *Dependencia y desarrollo en América Latina*. México: Siglo XXI.
- Carr, E. H. (1961). *What is History?* Londres: Penguin Books.
- _____ (1989). *The Twenty Years Crisis 1919:1939 An Introduction of International Relations*. Londres: Macmillan.
- Carrau, N. (2011). “Regulación de inversiones en el Mercosur: informe de situación” . En S. Valdomir, *Uruguay ante el CLADI y los Tratados de Protección de Inversiones* (págs. 12-22). URUGUAY: REDES-AT Programa Uruguay Sustentable.
- Casas, A. (2007). *Pensamiento sobre integración y latinoamericanismo . Orígenes y tendencias hasta 1930*. Bogotá: Ediciones Ántropos.

- Charles Kegley, E. W. (2004). *Theories of World Politics*. Belmont: Thomson Wadsworth Learning.
- Chase-Dunn, C., & Podobnik, B. (2002). "La próxima guerra mundial: ciclos y tendencias del sistema mundial". En J. saxe-Fernández, *Globalización: Crítica a un paradigma*. México: Plaza y Janés.
- Checkel, J. T. (1998). "The constructivist Turn in International Relations". En *World Politics* (Copyright © 1998 Trustees of Princeton University ed., Vol. 50, págs. 324-348). Cambridge.
- _____ (2008). "Constructivism and Foreign Policy". En S. S. Dunne, *Foreign Policy: Theories. Actors. Cases*, (págs. 71-82). Oxford: Oxford University Press.
- Choi, C. (Febrero de 2006). "Does Foreign Direct Investment Affect Domestic Income Inequality?" *Applied Economics Letter*, 13, 811-814.
- Chomsky, N. (2014). "Lectura de Noam Chomsky: Seguridad y política de Estado". *Security and State Policy*. En línea: <http://www.jornada.unam.mx/2014/04/06/index.php?section=opinion&article=022a1mun> .Santa Barbara, Californi: Fundación para la Paz en la Era Nuclear. (Consulta el 02 de mayo de 2013).
- Chudnovsky, D., & Lopez, A. (2001). "La inversión Extranjero Directa en el MERCOSUR: un análisis comparativo". En D. Chudnovsky, D. Lopez, A. Lopez, M. Laplane, G. Bittencourt, R. Domingo, y otros, *El Boom de Inversion Extranjera Directa en el Mercosur* (págs. 1-50). En línea: <http://www.redmercosur.org/el-boom-de-inversion-extranjera-directa-en-el-mercosur/publicacion/88/es> . (Consulta el 12 de abril de 2012).
- Chung, O. (2007). "The Lopsided International Investment Law Regime and Its Effect on the Future of Investor-State Arbitration". *Virginia Journal of International Law*, 47(953).
- Clifton, J. (2010). "Organización económica internacional". Clase doctrinal. *Universidad de Cantabria*. En línea: <http://ocw.unican.es/ciencias-sociales-y-juridicas/organizacion-economica-internacional/material-de-clase-2/OEI%20Tema9.pdf> . (Consulta realizada el 23 de mayo de 2014).
- CNN. (30 de Junio de 2012). "Paraguay queda fuera del Mercosur". En línea: <http://cnnespanol.cnn.com/2012/06/30/paraguay-queda-fuera-del-mercosur/> . (Consulta realizada el 24 de junio de 2013).
- Connel-Smith, G. (1971). *El Sistema Interamericano*. Zaragoza: Hesperia Libros.
- Constante, L. B. (septiembre de 2012). "Soberanía nacional vs CIADI: ¿ Estados o mercados?" *Revista de Derecho Público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos*(2), 59-105.

- Costilla, M. H. (1810). *Biblioteca Gargy*. En línea:
http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1810_115/Proclama_a_la_naci_n_ame_ricana_emitida_por_Miguel_129.shtml . (Consulta realizada el 30 de junio de 2013).
- _____ (1810). *Los pobres de la Tierra*. En línea:
<http://www.lospobresdelatierra.org/textos/manifiestohidalgo.html> (Consulta realizada el 22 de junio de 2013).
- Courdet, A., & Lans, A. (1946). "Direct Foreign Investment in Undeveloped Countries. Some Practical Problems". *Law and Contemporary*, 741-759.
- Cutler, J. W. (abril de 1933). "The Treatment of Foreigners: In Relation to the Draft Convention and Conference of 1929". *The American Journal of International Law*, 27(2), 225-246.
- Dadyvov, V. (14 de junio de 2013). "Las tendencias de reestructurización del sistema mundial y las consecuencias para Latinoamérica". *Ponencia*. Oporto, Portugal: Congreso CEISAL 2013.
- Dallanegra Pedraza, L. (1994). *Relaciones Políticas entre EUA y América Latina: ¿Predominio "monroista" o Unidad Americana?* Buenos Aires: Luis Dallanera Pedraza.
- Dávalos, P. (Septiembre de 2003). "FMI y Banco Mundial: La Estrategia Perfecta". En línea: <http://alainet.org/active/4613&lang=es> . (Consulta realizada el 12 de marzo de 2014).
- De Vries, P. (2007). "Don't Compromise Your Desire for Development: A Lacanian/Deleuzian Rethinking of the Anti-Politics Machine". *Third World Quarterly*, 28(1), 25-43.
- Deluca, S. (Diciembre de 2012). "El dilema de esperar el cambio o usar las herramientas existentes". *Revista Aportes para la Integración Latinoamericana*(27), 1-21.
- Dezalay, Y., & Garth, B. G. (1996). *Dealing in Virtue*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Díaz-Alejandro, C. F. (1971). "The Future of Direct Foreign Investment in Latin America". *Centro de Crecimiento Económico. Universidad de Yale*(131). En línea:
http://www.econ.yale.edu/growth_pdf/cdp131.pdf
- Díaz, L. M. (1990). "La intervención económica como norma jurídica: las cartas de intención". *Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas*, 57-66.
- Díez de Velasco, M. (1994). *Las Organizaciones Internacionales*. Madrid: Tecnos.
- Dollar, D. a. (2002). "Growth is good for the poor". *Journal of Economic Growth*, 195-225.
- Dolzer, R., & Bloch, F. (August de 2003). "Indirect Expropriation: Conceptual Realignments?" *International Law FORUM du droit international*, 5(3), 155-165.

- Dorbecker, M. R. (2002). “Los tratados bilaterales para la promoción y protección recíproca de inversiones celebrados en México: ¿opción para la liberalización selectiva de la IE?” *ELLALA*, 38-53.
- Dos Santos, T. (1970). *Dependencia y Cambio Social*. Santiago de Chile: Universidad de Chile.
- _____. (28 de Septiembre de 2004) “Neodesarrollismo: ¿Hacia dónde vamos?”. *ALAI, América Latina en Movimiento*. En línea: <http://alainet.org/active/6829&lang=es>. (Consulta realizada el 07 de abril de 2013).
- Dosman, E. J. (2006). *Raúl Prebisch. El poder, los principios y la Ética del Desarrollo*. Buenos Aires: Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe.
- Drago, L. M. (1903). *La República Argentina y el caso de Venezuela*. Buenos Aires: Imprenta y Casa Editora de Coni Hermanos.
- Drèze, J., & Sen, A. (1989). *The Political Economy of Hunger: Selected Essays*. Oxford: Clarendon Press.
- Drummon, I., & Marsden, T. (1999). “Sustainable Development: The Impasse and Beyond”. En I. Drummon, & T. Marsden, *The Condition of Sustainability* (págs. 7-23). Londres: Routledge.
- Dueck, C. (2004). “Hegemony on the cheap Liberal Internationalism from Wilson to Bush”. *World Policy Journal*, 1-11.
- Dugard, J. (2000). “Document A/CN.4/506 and Add.1 First Report on diplomatic protection”. En U. Nations, *YearBook of the International Law Commission* (págs. 205-246). New York, Geneve: United Nation Publication.
- _____. (2000). *First report on Diplomatic Protection*. Ginebra: United Nations .
- Duguit, L. (1926). *Manual de Derecho Constitucional*. Madrid: 2º Edición. Sucesores de Rivadeneyra.
- Durán, E. (Octubre-Diciembre de 1984). “La solución de Contadora para el logro de la paz en Centroamérica”. *Estudios Internacionales. Universidad de Chile.*, 17(68), 537-547.
- Dussel Peters, E. (. (2014). *La inversión extranjera directa de China en América Latina: 10 casos de estudio*. México D.F.: Unión de Universidades de América Latina y el Caribe.
- Duthel, H. (2014). *Ernesto Che Guevara. Guerra de guerrillas*. eBook, ePUB.
- E.J, & Arnoletto. (2007). *Curso de Teoría Política*. Edición electrónica gratuita: www.eumed.net/libros/2007b/300/
- Eberhardt, P., & Olivet, C. (2012). *Cuando la injusticia es negocio. Cómo las firmas de abogados , árbitros y financiadores alimentan el auge del arbitraje de inversiones*. Bruselas/Amsterdam: Corporate Europe Observatory y Transnational Institute.

- Echaide, A. J. (Agosto de 2012). “Organismos internacionales y sistema mundial: el CIADI como mecanismo de seguridad jurídica para el capital transnacional”. Buenos Aires: ATTAC-Argentina.
- Echeverría, J. M. (1976). *Sociología latinoamericana*. San José (Costa Rica): Aula.
- Eduardo, G. (2009). *El Mandato Ecológico: Derechos de la Naturaleza y Políticas Ambientales en la*. Quito: Abya-Yala.
- Egger, P., & Pfaffermayr, M. (2004). “The impact of bilateral investment treaties on foreign direct investment”. *Journal of Comparative Economics*, 788-804.
- El Economista. (17 de Julio de 2014). “Alianza del Pacífico, abierta al libre comercio: Peña Nieto”. págs. En línea: <http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/07/17/alianza-pacifico-abierta-libre-comercio-pena-nieto> . (Consulta realizada el 24 de abril de 2014).
- El Universal. (26 de Enero de 2013). “Venezuela impone declaración sobre inversiones extranjeras en Celac”. *El Universal*, págs. En línea: <http://www.eluniversal.com/internacional/130126/venezuela-impone-declaracion-sobre-inversiones-extranjeras-en-celac> . (Consulta realizada el 18 de abril de 2014).
- Elkin, N. (1984). *Los países latinoamericanos frente al GATT*. Buenos Aires: INTAL.
- Elliott, P. (2003). “Erasmus Darwin Herbert Spencer and the origins of the evolutionary worldview in British provincial scientific culture. 1770-1850”. *ISIS*, 1-29.
- Erisman, H. M. (1984). *The Caribbean challenge : U.S. policy in a volatile region*. Boulder, Colorado: Westview Press.
- Errejón, I. (2012). *La lucha por la hegemonía durante el primer gobierno del MAS en Bolivia (2006-2009): un análisis discursivo*. Tesis Doctoral. Madrid, España: Iñigo Errejón Galván.
- Escobar, A. (2012). “Más allá del desarrollo: Postdesarrollo y transiciones hacia el pluriverso”. *Revista de Antropología Social*(21), 23-62.
- Escobar, C. P., & Carrasquilla, L. V. (2009). “Regulación e inversión extranjera: los tratados de promoción recíproca de inversiones y el estándar de trato justo y equitativo”. *Revista Colombiana de Derecho Internacional*(15), 155-180.
- Escudero, E. V. (1969). *Bases institucionales y jurídicas del Mercado Común Centroamericano*. Santiago de Chile: Jurídica de Chile.
- Esposito, C. (2000). “El Mercosur entre el Regionalismo y el Multilateralismo”. *Revista Electronica de Estudios Internacionales*, En línea: <http://www.reei.org/index.php/revista/num1/agora/mercosur-entre-regionalismo-multilateralismo>

- Estay Reyno, J. (2000). "La ALADI en la integración latinoamericana". En J. Stay, *La nueva integración económica de América Latina y el Caribe: balance y perspectivas en el cambio de siglo* (págs. 51-86). México D.F.: Asociación para la Unidad de Nuestra América.
- _____ (2003). "El tema del desarrollo en la agenda internacional: ¿Reaparición...en los discursos?" *Problemas del Desarrollo. Revista latinoamericana de Economía*, 34(135), 65-86.
- Ezcurra, A. T. (1989). "La nación de repúblicas: proyecto latinoamericano de Bolívar". *Integración latinoamericana*, 52-67.
- Fabela, I. (1957). *Las Doctrinas Monroe y Drago*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- _____ (1958). *Intervención*. México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Fajardo, M. E. (agosto-diciembre de 2007). "Un repaso a la regionalización y el regionalismo: Los primeros procesos de integración regional en América Latina". *CONfinés*, 65-80.
- Fajnzylber, F. (Marzo-Abril de 1992). "Industrialización en América Latina. De la «caja negra» al «casillero vacío»". *Nueva Sociedad*(118), 21-28.
- Ferrajoli, L. (2004). *Derechos y garantías. La ley del más débil*. Madrid: Trotta.
- Findlay, R. (1978). "Relative backwardness, direct foreign investment, and the transfer of technology: a dynamic model". *Quarterly Journal of Economics*, 92, 1-16.
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). "International Norm Dynamics and Political Change". *International Organization*, 887-917.
- Flores, M. (2008). "La identidad cultural del territorio como base de una estrategia de desarrollo sostenible". *Revista Opera*(7), 35-54.
- Fontoura Costa, J. A. (2011). "Comparing WTO Panelist and IDSID Arbitrators: The creation of International Legal Fields". *Oñati Socio-Legal Series*, 1(4).
- Fosley, A., & Meller, P. (2014). *Alianza del Pacífico: en el proceso de integración latinoamericana*. Santiago-Chile: Ciplan.
- Fouret, J. (2008). "Denunciation of the Washington Convention and Non-Contractual Investment Arbitration: "Manufacturing Consent" to ICSID Arbitration?". *Journal of International Arbitration*(25), 1-71.
- Frank, S. (5 de June de 2009). "Development and Outcomes of Investment Treaty Arbitration". *Harvard International Law Journal*, 50(2), 435-489.
- Freitas, R. C. (2012). "Un modelo de Constitución para América latina". *Revista Jurídica UCES*(16), 45-52.

- Fukuyama, F. (1994). *Fin de la historia y el último hombre*. Barcelona. Planeta-Agostini.
- Furtado, C. (1971). *Desarrollo y subdesarrollo*. Buenos Aires: Eudeba.
- _____ (1987). *Un enfoque interdisciplinario*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Gaillard, E. (2007). “The Denunciation of the ICSID Convention”. *New York Law*, 237(122). En línea:
http://www.shearman.com/~media/Files/NewsInsights/Publications/2007/06/The-Denunciation-of-the-ICSID-Convention/Files/IA_NYLJ-Denunciation-ICSID-Convention_040308_17/FileAttachment/IA_NYLJ-Denunciation-ICSID-Convention_040308_17.pdf . (Consulta realizada el 12 de noviembre de 2013).
- Galbraith, J. K. (1974). “El poder y el economista útil”. *El Trimestre Económico*, 231-247.
- Galíndez, V. (2014). “Arbitraje en América Latina: ¿Hacia dónde va?” *Actualidad Jurídica*(36), 34-41.
- Gann, P. B. (1985). “The US Bilateral Investment Treaty Program”. *Stanford Journal of International Law*, 21, 379-90.
- García, A. G., & Casanova, M. P. (2012). *Construyendo el Buen Vivir*. Cuenca-Ecuador: PYDLOS.
- _____ (2012). “Construyendo el Buen Vivir”. En A. G. García, & M. P. Casanova, *Construyendo en Buen Vivir* (págs. 9-13). Cuenca(Ecuador): PYDOS.
- García, J. Á. (Marzo de 2011). “Integración en América Latina y el Caribe: un escenario en disputa. Lecciones y desafíos para los pueblos”. *Temas de Economía Mundial*, 130-139.
- García, M. A. (2012). “El lugar de Brasil en el mundo: La política exterior en un momento de transición”. En E. S. García, *Brasil: entre el pasado y el presente* (págs. 169-196). Buenos Aires: Capital Intelectual.
- Gathii, J. T. (1998). “International Law and Eurocentrity”. *European Journal of International Law*(9), 184-211.
- German, C. (Mayo de 2003). “Open Regionalism in the Andean Community: A trade flows analysis”. *World Trade Review*, 2(1), 101 .
- Germani, G. (1965). *Política y sociedad en una época de transición. De la sociedad tradicional a la sociedad de masas*. Buenos Aires: Paidós.
- _____ (1969). *Sociología de la modernización*. Buenos Aires: Paidós.
- Gerolmo, C. (Dirección). (1994). *Ciudadano X* [Película].
- Geyer, A. B. (2002). *Sandino*. Masaya, Nicaragua: Enrique Bolaños.

- Gill, H. S. (Julio de 1993). "CARICOM: origen, objetivos y perspectivas de integración en el Caribe". *Integración Latinoamericana*, 37-44.
- Gill, S. (1998). "New constitutionalism, democratisation and global political economy". *Pacifica Review: Peace, Security and Global Change*, 23-38.
- Girado, G. A. (Noviembre de 1999). *Evolución y perspectivas de la inversión extranjera directa asiática en el Mercosur y Chile*. En línea: <http://www.asiayargentina.com/pdf/04-ceiinversiones.PDF> . (Consulta realizada el 21 de agosto de 2011).
- Girvan, N. (2008). "ALBA, Petrocaribe and CARICOM: issues in a new dynamic". En línea: <http://www.normangirvan.info/wp-content/uploads/2008/05/alba-petrocaribe-and-caricom1.pdf> . (Consulta realizada el 24 de febrero de 2013).
- _____ (2012). *El Caribe. Dependencia, integración y soberanía*. Santiago de Cuba: Casa del Caribe- Editorial Oriente.
- Glifo S., N. (2007). "Políticas activas para atraer inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe". *CEPAL- SERIE Desarrollo productivo*(175).
- Gómez, K. F. (12 de Noviembre de 2010). "Latin America and ICSID: David versus Goliath?" *Working Paper SSRN*, En línea en SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1708325>. (Consulta realizada el 24 de abril de 2014).
- Gómez, M. R. (2011). *Identidad cultural e integración. Desde la Ilustración hasta el Romanticismo latinoamericanos*. Bogotá: Editorial Bonaventuriana.
- González, A. R., Rumazo, L., & Becco, H. J. (2005). *Simón Rodríguez, maestro de América*. Ayacucho (Venezuela): Fundación Biblioteca Ayacucho.
- Gonzalez, M. S. (2001-2002). "La teoría de las Relaciones Internacionales en los albores del siglo XXI: diálogo, disidencia, aproximaciones". *Cidob D'Afers Internacionals*(56).
- Gottiniaux, P., Daniel Munevar, A. S., & Toussaint, É. (2015). *Las cifras de la deuda 2015*. Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM). En línea: http://cadtm.org/IMG/pdf/las_cifras_de_la_deuda_2015.pdf.
- Graham, E. M. (1992). "Los determinantes de la inversión extranjera directa: teorías alternativas y evidencia internacional". *Moneda y Crédito*, 13-50.
- Granato, L., & Oddone, C. N. (2do Semestre de 2007). "La protección Internacional del inversor extranjero a través de los acuerdos bilaterales de inversión". *Tendencias*, VIII(2), 43-66.
- Grases, P. (1989). *Escritos selectos*. Caracas: Biblioteca Ayacucho.
- Grau, L. (2011). *El Constitucionalismo americano*. Madrid: Dykinson.
- Griffith-Jones, S., & Sunkel, O. (1986). *Debt and development crises in Latin America: the end of an illusion*. Oxford: Clarendon Press.

- Griffiths-Spielman, J. E. (2009). "Procesos de integración regional en Defensa: ¿Consejo Sudamericano de Defensa-UNASUR- Un nuevo intento?" *Globalization. Competitiveness and Governability*, 3(1), 104-119.
- Gudynas, E. (16 de Diciembre de 2010). "Alba tv: Comunicación desde los pueblos". En línea: <http://www.albatv.org/Buen-Vivir-un-necesario.html> . (Consulta realizada el 24 de febrero de 2014).
- _____ (2011). "Buen Vivir: Germinando alternativas al desarrollo". En *América Latina en Movimiento*, 1-19.
- _____ (2012). "Debates sobre desarrollo y sus alternativas en América Latina: Una breve guía heterodoxa". En M. Lang, & D. Mokrani, *Más allá del desarrollo* (págs. 21-55). Ciudad de México: Fundación Rosa Luxemburg/Abya Yala.
- Guerra, S., & Maldonado, A. (2000). "Raíces históricas de la integración latinoamericana". En S. Guerra, A. Maldonado, & C. Oliva, *Historia y perspectiva de la integración latinoamericana* (págs. 31-84). Morelia: Asociación de Nuestra América - Coordinación de la Investigación Científica y Escuela de Historia de la Universidad de Michoacán de San Nicolás Hidalgo.
- Guerrero, A. d., & Blas, R. G. (1988). *Teoría y evolución del Estado*. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.
- Guevara, E. (2005). *El diario del Che en Bolivia* (Trigesimoquinta ed.). México D.F.: Siglo XXI.
- _____ (abril-mayo de 1967). "Crear dos, tres...muchos Vietnam". *Cuadernos de Ruedo obérico*, 94-101.
- Guillén Romo, H. (Abril de 2007). "De la orden cepalina del desarrollo al neoestructuralismo en América Latina". *Comercio Exterior*, 57(4), 295-313.
- Gunder Frank, A. (1974). *El desarrollo del Subdesarrollo; Colección : Lé y Discute*". Madrid: ZERO, S.A. Máximo Aguirre.
- Habermas, J. (1990). *Conocimiento e Interés*. Buenos Aires: Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S. A. de Ediciones.
- _____ (Enero/Febrero de 2001)". "El valle de lágrimas de la globalización". *Claves de razón práctica*(109), 4-11.
- Hallward-Driemeier, M. (2003). "Do Bilateral Investment Treaties Attract Foreign Direct Investment? Only a Bit ... and They Could Bite". *World Bank Policy Research Working Paper*. En línea: <http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-3121> . (Consulta realizada el 24 de noviembre de 2011).
- Hamilton, J. C. (2009). Three Decades of Latin American Commercial Arbitration. *University of Pennsylvania of Internacional Law*, 1098-1119.

- Hardt, M., & Negri, T. (2000). *Imperio*. Cambridge: Harvard University Press.
- Harten, G. V. (2013). Pro-Investor or Pro-State Bias in Investment-Treaty Arbitration? Forthcoming Study Gives Cause for Concern. *Investment Treaty News*.
- Hasenclever, A., Mayer, P., & Rittberger, V. (Oct.- Dic de 1999). “Las teorías de los regímenes internacionales: situación actual y propuestas para una síntesis”. *Foro Internacional*, 39(4), 499-526.
- Haya de la Torre, V. R. (2010). *Antimperialismo y el APRA*. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.
- Hegel, G. F. (1999). *Principios de la Filosofía del Derecho*. Barcelona: Edhasa.
- Heidegger, M. (1996). *Being and time*. Albany New York: State University of New York.
- Heiskanen, V. (2003). “The Contribution of the Iran-United States Claims Tribunal to the Development of the Doctrine of Indirect Expropriation”. *International Law Forum*, 176-188.
- Heller, H. (1995). *La soberanía. Contribución a la teoría del derecho estatal y del derecho internacional*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Hendel, C. J., & Sánchez, A. (2013). “Latinoamerica y CIADI: ¿Hacia la creación de un nuevo tribunal arbitral regional en materia de inversiones?” *Foro Jurídico Iberoamericano. La Revista Internacional de Derecho Práctico*. En línea: <http://www.forjib.org/Latinoamerica-CIADI> .(Consulta realizada el 21 de junio de 2014).
- Hernandez, M. (23 de 8 de 2012). Entrevista al periodista Venezolano Modesto Emilio Guerrero. En *Rebelión*. En línea: <http://rebelion.org/noticia.php?id=154933> . (Consulta realizada el 12 de enero de 2013).
- Hernandez, V. (5 de Mayo de 2006). *Inversión Extranjera, deuda externa y dolarización en América Latina*. CLACSO. En línea: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/cuba/if/marx/documentos/22/Inversi%F3n%20extrajera,%20deuda%20externa%20y%20dolar.pdf> . (Consulta realizada el 12 de noviembre de 2012).
- Herrera, F. (1962). “América latina: integración económica y reintegración política”. *Conferencia de Tensiones del Desarrollo en el Hemisferio Occidental*. Salvador (Brasil): Banco Interamericano de Desarrollo.
- Herz, M. (2003). “Régimen Argentino de Promoción y Protección de Inversiones en los albores del nuevo milenio: de los tratados bilaterales, Mercosur mediante, al ALCA y la OMC”. *Revista electrónica de estudios internacionales*(7).
- Herzer, D., Hühne, P., & Nunnenkamp, P. (August de 2012). “FDI and Income Inequality-Evidence from Latin American Economies”. *Kiel Working Papers*(1791).

- Hey, J. (2003). *Small States in the World Politics: Explaining Foreign Policy Behavior*. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- _____ (1986). *Sovereignty* (2º ed.). Cambridge: University Press Cambridge.
- Hobbes, T. ([1651]1993). *Del ciudadano y Leviatán*. Madrid: Tecnos.
- Hobsbawn, E. (1994). *Historia del Siglo XX*. Barcelona: Grijalvo Mondadori.
- Hogan, M. J. (1987). *The Marshall Plan: America, Britain, and the Reconstructiton of Western Europe, 1947-1952*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hoselitz, B. (1962). *Aspectos Sociológicos del Desarrollo Económico*. Barcelona: Hispano Europea.
- Howe, B. M. (2005). *International Studies Premier*. Seoul: Ewha Womans University Press, 2005.
- Hoyo, J. J. (Octubre de 2001). “Globalización Económica y bienestar social: Algunas cuestiones”. *ICE. Sector Exterior*(794), 9-22.
- Hummels, D., & Klenow, P. (2005). “The Variety and Quality of a Nation’s Exports”. *American Economic Review*(95), 704-723.
- ICN Iberoamérica Central de Noticias. (9 de Septiembre de 2013). “La CEPAL aboga por medidas para fortalecer desarrollo de la Comunidad del Caribe”. Puerto de España. En línea: <http://www.fao.org/agronoticias/agro-noticias/detalle/es/c/179958/>. (Consulta realizada el 14 de marzo de 2014).
- Illich, I. (1975). *La sociedad desescolarizada*. México D.F.: Barral Editores.
- Jandhyala, S., W. J., & Mansfield, E. D. (2011). “Three Waves of BITs: The Global Diffusion of Foreign Investment Policy”. *Journal of Conflict Resolution*, 55, 1047-1073.
- Jellinek, G. (2000[1910]). *Teoría general del Estado*. Granada: Comares.
- Jenks, W. (1971). “Concepto actual de soberanía”. *Revista Peruana de Derecho Internacional*, Tomo 29; 29-42.
- Jiménez, S. R. (2008). “Tres casos latinoamericanos ante el CIADI: Argentina, México y Ecuador”. En M. B. Ramírez, O. C. Barney, N. G. Martín, & L. O. Ahif, *Obra en Homenaje a Rodolfo Cruz Miramontes* (págs. 423-454). México D.F.: Instituto de Investigaciones Jurídicas.
- Jouvenel, B. d. (1957). *Sovereignty: An Inquiry into the Political Good*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Kan, J. (2010). “De la apertura comercial a la soberanía y autonomía regional. Un análisis de las tendencias de la integración latinoamericana en la últimas décadas. El caso Unasur”. *Revista Do Centro de Educacao e Letras da Unioeste*, 79-100.
- Kant, I. (1946[1795]). *La paz perpetua*. Madrid: Espasa-Calpe.

- _____ (2003). *Fundamentación de la metafísica de las costumbres*. Madrid: Ediciones Encuentro, S.A.
- Kaplan, M. (1969). *El Estado en la integración y el desarrollo de América Latina*. Caracas: Monte Ávila.
- _____ (1976). *Problemas del desarrollo y de la integración en América Latina*. Caracas: Monte Ávila Editores.
- _____ (1989). *Aspectos del Estado en América Latina*. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM.
- Katz, C. (13 de Marzo de 2008). "Integración o unidad latinoamericana". *La haine*. En línea: http://www.lahaine.org/katz/b2-img/katz_integ.pdf (Consulta realizada el 14 de marzo de 2013).
- _____ (Mayo-Junio de 1991). "Teorías latinoamericanas del desarrollo". *Nueva Sociedad*(113), 101-113.
- Kegley, C. W., & Wittkopf, E. R. (2004). *World Politics: trend and transformation*. Thomson/Wadsworth.
- Keohane, R. (1984). *After Hegemony: "Cooperation and discord in the World Political Economy"*. New jersey: Princeton University Press.
- Keohane, R., & Nye, J. (1988). *Poder e interdependencia: La política mundial en transición*. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano.
- Kerner, A., & Lawrence, J. (2012). "What's the Risk? Bilateral Investment Treaties, Political Risk and Fixed Capital Accumulation". *British Journal of Political Science*, 44, 107-121.
- Kirchoff, P. (2009). *Mesoamérica. Sus límites geográficos, composición étnica y caracteres culturales*. Xapala: Al Fin Liebre Ediciones Digitales.
- Klare, M. (2003). *Guerra por los recursos. El Futuro escenario del conflicto global*. Barcelona: Urano Tendencias.
- Klaren, P. F. (1976). *Formación de las haciendas azucareras y orígenes del APRA*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Koll, A. L. (2000). "La Comunidad del caribe(CARICOM) en la encrucijada". En A. L. Jaime Estay Reyno, *LA nueva integración económica de América Latina y el Caribe: balance y perspectivas en el cambio de siglo* (págs. 127-160). Michoacán: Universidad Michoacana de San nicolás de Hidalgo.
- Krasner, S. (1983). *International Regimes*. New York: Cornell University Press.
- _____ (1983). *Structural Causes and Regime Consequences. Regimes as International Variables*. Nueva York: Ithaca.

- _____ (2001). *Soberanía, hipocresía organizada*. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.
- Kregel, J. A. (2000). "Como desapareció el tema del desarrollo de la agenda de las Naciones Unidas". *II Seminario Internacional Globalización y Problemas del Desarrollo*. La Habana.
- Krugman, P. R. (1994). *Vendiendo Prosperidad*. Barcelona: Ediciones Ariel.
- Krugman, P., & Obstfeld, M. (1999). *Economía Internacional: teoría política*. Madrid: McGraw-hill.
- Kubáľková, V., Onuf, N., & Kowert, P. (1998). *International Relations in a constructed World*. New York: M.E. Sharpe Armonk.
- Kunz, J. L. (1940). *The Mexican Expropriation*. New York: University School of Law.
- Kuznets, S. (1959). *Six lectures on Economic Growth*. Glencoe: Free Press.
- L.Bohórquez, C. (Julio de 2006). "Miranda y Bolívar: dos concepciones de la unidad de la América hispana". *Procesos Históricos. Revista Semestral de Historia, Arte y Ciencias Sociales*(10), 1-20.
- La Prensa (15 de Abril de 2003). "Entra en vigencia el Protocolo de Sucre". En línea: http://impresa.prensa.com/economia/Entra-vigencia-Protocolo-Sucre_0_899910064.html (Consulta realizada el 24 de marzo de 2013).
- Larraín, J. (1994). "La identidad Latinoamericana: Teoría e historia". *Estudios Públicos* N-55, 31-64.
- Lastarria, J. V., Covarrubias, A., María, D. S., & Machenna, B. V. (1862). *Unión i confederación de los pueblos Hispano-Americanos*. Santiago de Chile: Imprenta Chilena.
- Lazo, R. P. (2013). "¿Cuáles son los verdaderos efectos de los acuerdos internacionales de inversión?" *PUENTES*, 14(9), 14-17.
- Delegación de Colombia. (1926). *En honor del procer Don Manuel Torres*. Washington: En línea: <http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/90260/brblaa355320.pdf> . (Consulta realizada el 24 de diciembre de 2011).
- Lensik, R., & Morrissey, O. (2001). *Foreign direct investment: flows, volatility and growth in developing countries*. Nottingham: University of Nottingham.
- Lewis, A. (1971). *Teoría del Desarrollo* . México: Fondo de Cultura Económica.
- Linage, R. R. (1999). *Constituciones Históricas*. Madrid: Universidad de Sevilla. Secretariado de publicaciones .
- Lipsey, R. E., & Sjöholm, F. (2005). "The Impact of Inward FDI on Host Countries: Why Such Different Answers?". En T. H. Moran, E. M. Graham, & M. Blomström, *Does Foreign Direct Investment promote Development?* (págs. 23-43). Massachusetts: Institute For International Economics.

- Llistar Bosch, D. (2009) *Anticooperación. Los problemas del Sur Global no se resuelven con más ayuda internacional*. Barcelona: Icaria.
- Locke, J. (1821). *Tratado del Gobierno Civil*. Madrid: Imprenta Minerva Española.
- Lopez, C. F. (1955). *Juan Bautista Picornell y la conspiración de Gual y España*. Caracas/Madrid: Nueva Cadiz.
- López, L. A., & Castilla, H. S. (2013). *Volver al desarrollo o salir de él. Límites y potencialidades del cambio desde América Latina*. Puebla: EyC; Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
- Lorenzo, T. G. (1997). "La integración en la Cuenca del Caribe. Institucionalidad y realidad". En Saxe-Fernández, & John, *Geoeconomía y geopolítica del Caribe. Cuba, Estados Unidos y México*. Ciudad de México: Insituto de Investigaciones Económicas. UNAM.
- Losada, A., Sepulveda, J. G., & Casas, B. d. (1975). *Apología*. Madrid: Editora Nacional.
- M.Reichberg, G., Syse, H., & Bedgy, E. (2006). *Ethics of War*. Malden: Blackwell Publishing
- Magariños, S. G. (2007). *Estudio sobre el espacio de libre comercio en la ALADI*. Lima: ALADI/SEC/Estudio 185.
- Mahutga, M. C., & Bandelj, N. (2013). "Structures of Globalization: Evidence from the Worldwide Network of Bilateral Investment Treaties, 1959-2009". *International Journal of Comparative Sociology*, 95-123.
- Malamud, C. (2012). "La Alianza del Pacífico: un revulsivo para la integración regional en América Latina". *ARI. Real Instituto el El Cano*. En línea: <http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2012/10980.pdf> Consulta realizada el 12/08/2012 . (Consulta realizada el 24 de julio de 2014).
- Malberg, C. d. (1948). *Teoría General del Estado*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Mann, M. (1997). "Has Globalization Endede the Rise and Risa of the Nation-State?" *Review of international Political Economy*, 4(3), 472-496.
- Manrique, R. S. (1998). "El derecho y la globalización de la economía: supranacionalidad y tribunales comunitarios". *Revista Planeación y Desarrollo*, 13-30.
- Maquiavelo, N. (2004[1513]). *El Principe*. Florencia: Edición Electrónica 2004 http://www.laeditorialvirtual.com.ar/pages/maquiavelo/maquiavelo_elprincipe.htm#PageTop . (Consulta realizada el 24 de mayo de 2011).
- Mariátegui, J. C. (1929). "Punto de Vista Antiimperialista". *Primera Conferencia Comunista Latinoamericana*. Buenos Aires. En línea: <https://creandopueblo.files.wordpress.com/2011/09/mariategui-puntodevistaantiimperialista.pdf> . (Consulta realizada el 24 de noviembre de 2011).

- _____ (1984). *Correspondencia (1915-1930) TII*. Lima: Amauta .
- Marini, R. M. (1973). *Dialéctica de la dependencia*. Mexico D.F.: Ediciones Era S.A.
- Mariño, J. (1999). *La supranacionalidad en los procesos de integración regional*. España: Mave Editor.
- Martí, J. (2005). *Nuestra América*. Caracas: Fundaciór Biblioteca Ayacucho.
- Martín, C. D. (1980). *Revisión Histórico-Política de la Doctrina de la Soberanía*. Salamanca: Publicaciones del Departamento de DerechoPolítico de la Universidad de Salamanca.
- Martín, H.-P., & Schuman, H. (1996). *The Global Trap. Globalization & the Assault on Democracy 6 Prosperity*. New York: Zed Books Ltd.
- Martínez Alfonso, L. (2013). *La Comunidad del Caribe (CARICOM) en el contexto de un nuevo regionalismo latinoamericano (2001-2012): cambios, desafíos y oportunidades*. Buenos Aires: Clacso.
- Martinez, H. T. (1992). *Curso de Historia del Derecho Constitucional. Derecho Indiano*. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile.
- Martínez, J. M., & Cordero, M. (2009). *La Integración Económica centroamericana y sus perspectivas frente a la crisis internacional*. México: ECLACL United Nations.
- Mattoo, A., & Sauvé, P. (2003). *Domestic Regulation and Service Trade Liberation*. Washington: The International Bank for Reconstruction And Development / The World Bank.
- McAdam, D. (1999). “Orígenes terminológicos, problemas actuales, futuras”. En J. M. Doug McAdam, *Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Oportunidades* (págs. 49-70). Madrid: Istmo.
- Meadows, D., Meadows, D., & Randers, J. ; traducción de Sergio Pawlowsky (2006). *Los límites del Crecimiento: 30 años después*. Barcelona: Galaxia Gutenberg. Circulo de lectores.
- Meadows, D., Meadows, D., Randers, J., & Behrens, W. (1972). *Los límites del crecimiento : informe al Club de Roma sobre el predicamento de la humanidad* . México: Fondo de Cultura.
- Mearsheimer, J. (Septiembre de 2005). “E.H. Carr vs. Idealism: the Battle Rages On”. *International Relations*, 139-152.
- Mejías, J. L. (2001). *Integración y supranacionalidad en la Comunidad Andina: proceso decisorio, sistema jurisdiccional y relación con los derechos nacionales*. Tesis Doctoral. Madrid.
- Mena, A. V. (2003). “European Unión External Action”.*European Unión External Action*. En línea: http://eeas.europa.eu/ca/docs/integ_1203_es.pdf . (Consulta realizada el 13 de julio de 2014).

- Miguel, M. H. (2005). "Caso Cartellone: ¿es también una cálida manta para Calvo?" *Revista Jurídica de la Federación Interamericana de Abogados*, 3.
- Milanovic, B. (2005). *Worlds Apart: Measuring Global and International Inequity*. Princeton: Princeton University Press.
- _____. (2009). "Global Inequality and the Global Inequality Extraction Ratio". *Policy Research Working Paper (The World Bank)*(WPS5044). En línea: <http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-5044> . (Consulta realizada el 13 de octubre de 2014).
- _____. (2010). "Global Income Inequity". *Inagural Conference at King's College. April 8-11*. http://ineteconomics.org/sites/inet.civicaactions.net/files/INETSession7-BrankoMilanovic_0.pdf . (Consulta realizada el 13 de noviembre de 2014).
- Milanovic, B., & Lakner, C. (2013). "Global Income Distribution. From the Fall of the Berlin Wall to the Great Recession". *Policy Research Working Paper*. En línea: http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/12/11/000158349_20131211100152/Rendered/PDF/WPS6719.pdf . (Consulta realizada el 13 de noviembre de 2014).
- Mill, J. S. (1970). *Sobre la libertad*. Madrid: Alianza Editorial.
- Miranda, F. (1929-1933 (tomos I- XIV)). *Archivo del General Miranda*. Caracas: Editorial Sudamérica.
- Mitre, B. (1887). *Historia de San Martín y de la emancipación Sud-americana*. Buenos Aires: Imprenta de la "Nación".
- Modelska, G. (1972). *Principles of World Politics*. New York: Free Press.
- Molina, E. (2008). "Polarización Económica, Instituciones y Conflictos". *Estrategias de Desarrollo y Economía, Fortalecimiento de la Democracia, Cohesión Social en América Latina, Políticas Públicas*. En línea: <http://www.cieplan.org/biblioteca/detalle.tpl?id=206> . (Consulta realizada el 22 de agosto de 2011).
- Monteagudo, B. (2003). *Ensayo sobre la necesidad de una Federación General entre los Estados Hispano-americanos y plan de su organización*. Biblioteca virtual Universal. En línea: <http://www.biblioteca.org.ar/libros/8794.pdf> . (Consulta realizada el 18 de junio de 2013).
- Montesquieu. (1906[1747]). *El espíritu de las leyes*. (a. C. Mazo, Ed.) Madrid: Librería General De Victoriano Suárez.
- Moran, T. H., Graham, E. M., & Blomström, M. (2005). "Conclusions and implications for FDI Policy in Developing Countries, New Methods of Research, and a Future Research Agenda". En E. M. Theodore H. Moran, *Does Foreign Direct Investment Promote Development?* (págs. 375-395). Massachusets.

- Moravcsik, A. (1995). "Explaining International Human Rights Regimes: Liberal Theory and Western Europe". *European Journal of International Relations*(1), 157-189.
- Moreau, F. (1909). *Manuel de Droit administratif*. París: Imp. Albert Lanier.
- Morgenfeld, L. A. (2009). "La oposición Argentina a la organización panamericana impulsada por los Estados Unidos (Segunda Conferencia, México, 1901-1902)". *Temas de historia argentina y americana*(15), [En línea].
- Murillo Zamora, C. (2014). "Centroamérica en su hábitat latinoamericano y caribeño". En W. S. Acosta, & M. S. Ulloa, *Centroamérica: casa común e integración regional* (págs. 223-238). San José , Costa Rica: Lara Segura & Asociados.
- Naredo, J. M., & Gómez-Baggethun, E. (2012). "Río +20 en perspectiva. Economía verde: nueva reconciliación virtual entre ecología y economía". En T. W. Institute, *La situación del mundo 2012. Hacia una prosperidad sostenible* (págs. Apéndice. 347-421). Barcelona: Icaria-editorial.
- Nel, P. (2-3 de Diciembre de 2013)". "The Rise and Fall of BITs". *Paper delivered at the NZPSA 2013 Annual Conference*. Christchurch, New Zealand.
- Neumayer, E., & Spess, L. (2005). "Do Bilateral Investment Treaties Increase Foreign Direct Investment to Developing Countries?" *World Development*, 1567-1585.
- Newcombe, A., & Paradell, L. (2009). *Law and Practice of investment Treaties: Standards of Treatment*. Befordshire: Kluwer Law International BV, The Netherlands.
- Nieto, P. R., & García, P. R. (2009). "Bipolaridad y Guerra Fría en Iberoamérica. La Doctrina de Seguridad Nacional en el mundo de bloques". *Espacios Públicos*, 12(24), 161-175.
- Nolff, M. (1993). *Salvador Allende : el politico, el estadista*. Santiago de Chile: Documentas.
- Nouvel, Y. (2002). "Les mesures équivalent à une expropriation dans la pratique récente des tribunaux arbitraux". *Revue Générale du Droit International Public*, 102(1), 79-102.
- Nye, J. (1990). "Soft Power". *Foreign Policy*(80), 153-157.
- _____ (2004). *Soft Power: The means to Succes un Word Politics*. New York: Public Affairs.
- O'Ballance, M. E. (1965). "The Macarthur Plan". *Royal United Services Institution*, 110(10.1080/03071846509419771), 248-253.
- Odumosu, I. T. (2007). "The Antinomies of the (Continued) Relevance of ICSID to the Third World". *San Diego International Law Journal*, 345.
- Oman, C. (2000). *Policy Competition for Foreign Direct Investment: A Study of Competition among Governments to Attract FDI*. Paris: OCD Development Centre.

- Onuf, N. (1989). *World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory*. Columbia: University of South Carolina Press.
- _____ (1991). "Sovereignty: Outline of a Conceptual History". *Alternatives*, 4, 425-446.
- _____ (1995). "Intervention for the Common Good". En G. M. Lyons, & M. Mastanduno, *Beyond Westphalia? State Sovereignty and International Intervention* (págs. 34-58). Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- _____ (1997a). "A constructivist Manifesto". En K. Bush, & R. A. Denemark, *Constituting International Political Economy* (págs. 7-20). London: Lynne Rienner Publisher.
- _____ (1997b). "Hegemony's Hegemony in International Political Economy". En K. Burh, & R. A. Denemark, *Constituting International Political Economy* (págs. 91-110). London: Lynne Rienner Publishers.
- _____ (1998). "Constructivism: A User's Manual". En V. Kubálkova, N. Onuf, & P. Kowert, *International Relations in a constructed World* (págs. 58-78). New York: M.E. Sharpe Armonk.
- _____ (24 de April de 2014). "Rule and Rules in International Relations". *Ponencia*. Helsinki, Finlandia: University of Helsinki.
- Ornelas, J. (2009). "Desarrollo y Crecimiento". *Teorías sobre el Desarrollo Económico y social en América Latina"* (págs. 5-6). Murcia: Universidad de Murcia.
- _____ (2012). "El desarrollo, una categoría colonial". *Revista de la Facultad de Economía BUAP*, 41-60.
- Ortiz, F., & García, M. d. (2005). *Metodología de la Investigación*. México: Limusa.
- Ortiz, I. (2012). *Desigualdad Global: La distribución del ingreso en 141 países*. Nueva York: UNICEF políticas y práctica.
- Osés, P. J., López, R. M.-G., Aperador, F., & Parra, V. H. (2006). *AOD hoy: Discruso y Realidad*. Madrid: Coordinadora de ONG para el Desarrollo - España.
- Özden, Ç., & Parodi, F. J. (Diciembre de 2004). "Customs Unions And Foreign Investment: Theory And Evidence From Mercosur's Auto Industry". *Working Paper Central Bank of Chile*(282).
- Pacheco, A., & Valerio, F. (2007). *DR-CAFTA: Aspectos relevantes seleccionados del Tratado y reformas legales que deben realizar a su entrada en vigor los países de Centroamerica y la República Dominicana*. México D.F.: Naciones Unidas.
- Páez, M. (2006). "La expropiación indirecta frente al CIADI: consideraciones para la autorregulación de los actos administrativos de los Estados". (153), 5-36.

- Paparrinskis, M. (2010). "The Limits of Depoliticisation in Contemporary Investor-State Arbitration". *Select Proceedings of the European Society of International Law*, 1-18.
- Parra-Aranguren, G. (1979). "El impacto del proceso de integración económica latinoamericana sobre las normas convencionales de Derecho Internacional privado". *Revista de la Facultad de Derecho- Universidad Andrés Bello*(20), 9-62.
- Parson, E. A. (1993). "Protecting the Ozone Layer". En R. O. Keohane, M. A. Levy, & P. M. Haas, *Institutions for Earth. Sources of Effective Environmental Protection*, 27-73. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology.
- Parsons, T. (1966). *Estructura y procesos en las sociedades modernas*. Madrid: Instituto de Estudios Políticos.
- Paterson, R. K. (1991). "Canadian Investment Promotion and Protection Treaties". *Canadian Yearbook of International Law/ Annuaire canadien de Droit international*, 29, 372-390.
- Paulsson, J. (2005). *Denial of Justice in International Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pea, J. A., & Migallón, F. S. (2000). *Con certera visión: Isidro Fabela y su tiempo*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica .
- Pearson, L. B., Boyle, E., Campos, R. d., Dillon, C. D., Guth, W., Lewis, A., y otros. (1970). Informe Pearson. *El Correo*, 3-35.
- Peemans, J.-P. (1992). "Revoluciones industriales, modernización y desarrollo". *Historia Crítica*, 15-33.
- Pellandra, A., & Fuentes, A. (2011). *El estado actual de la integración en Centroamerica*. México D.F.: Publicaciones de Naciones Unidas.
- Philpott, D. (2001). *Revolutions in Sovereignty*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press .
- Piketty, T. (2014). *Capital in the 21st century*. Harvard: Harvard University Press.
- Pinto, A., & Kñakal, J. (1973). *América Latina y el cambio en la economía mundial*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Pividal, F. (2006). *Bolívar. Pensamiento precursor del antiimperialismo*. Caracas: Ediciones de la Presidencia de la República.
- Platón. (1872). *Obras completas*. Madrid: Patricio de Azcárate.
- Polanyi, K. (1957). *The Great Transformation*. Boston: Beacon Press.
- Pouliot, V. (2004). "The essence of constructivism". *Journal of International Relations and Development*, 7, 319-336.

- Poulsen, L. N. (2010). "The Importance of BITs for Foreign Direct Investment and Political Risk Insurance: Revisiting the Evidence". En K. Sauvent, *Yearbook on International Investment Law and Policy*. Oxford: Oxford University Press.
- _____ (2014). "Bounded Rationality and the Diffusion of Modern Investment Treaties". *International Studies Quarterly*, 58, 1-14.
- Prebisch, R. (1963). *Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano*. Mexico: Fondo de Cultura Económica.
- _____ (1964). *Nueva política comercial para el desarrollo*. México: Fondo de Cultura Económica.
- _____ (1976). *Transformación y desarrollo. La gran tarea de América Latina*. México: Fondo de Cultura Económica.
- _____ (2014). *Los caminos del desarrollo*. (C. J. Sotillo, Ed.) Madrid: Catarata.
- Prieto, G. C. (2012). "La Institucionalización de la UNASUR y los avances en seguridad y defensa". En H. Mathieu, & C. N. Guarnizo, *Seguridad Regional en América Latina y el Caribe. Anuario 2012* (págs. 3-21). Bogotá: Friedrich Ebert Stiftung; FES Seguridad.
- Puente, R. (2011). "'Vivir bien' y descolonización". En C. I. H., & L. Vasapollo, *Vivir bien: ¿Paradigma no capitalista?* (págs. 367-382). La Paz, Bolivia: CIDES-UMSA.
- Quijano, A. (1991). "Colonialidad y Modernidad/Racionalidad". *Perú Indígena*, 13(29), 11-20.
- _____ (2007). "Des/colonidad del poder: El horizonte alternativo". *Observatorio latinoamericano de geopolítica*. En línea: <http://www.geopolitica.ws/media/uploads/DESCOLONIALIDADDELPODERELHORIZONTEALTERNATIVO.pdf> (Consulta realizada el 22 de enero de 2011).
- _____ (Mayo de 2012). "Bien vivir": entre el "desarrollo" y la des/colonialidad del poder. *Viento Sur*(122), 46-56.
- Quintillán, M. A. (1997). *La unión económica y monetaria*. España: Ediciones Pirámide.
- Ramírez, P. M. (2008). *Recursos para el desarrollo: ¿Quién financia a quién?. Análisis de 46 países en desarrollo durante el periodo 1996-2005*. Investigación de Universidad Autónoma de Barcelona. En línea: <http://www.ecap.uab.es/secretaria/docrecerca/ppuentes.pdf> (Consulta realizada el 14 de agosto de 2011).
- Ramírez, S. (1979). *Biografía de Sandino*. Nicaragua: Ministerio de Educación.
- Rawls, J. (2004). *El liberalismo político*. Barcelona: Crítica.
- Ray, D. (1998). *Development Economics*. Georgetown: Princeton University Press.

- Reátegui, A. M. (2010). *Comunidad Andina: Situación actual y principales desafíos*. Lima: Comunidad Andina.
- Regueiro, L., & Barzaga, M. (2012). *UNASUR: proceso y propuesta*. Quito, Ecuador: FEDAEPS.
- Remolinos, E., & Coria, M. M. (2000). *Multinacionales en Santa Fe*. Rosario: Universidad Austral.
- Reus-Smit, C. (Junio de 2012). "Leyendo la Historia con una mirada constructivista". *Relaciones Internacionales UAM-GERI*(20), 63-83.
- Ricardo, D. (1940). *Principios de economía política y de tributación*. Madrid: Bolaños y Aguilar.
- Rist, G. (2002). *El desarrollo: historia de una creencia occidental*. Madrid: Los libros de la Catarata.
- Rivas, E. M. (2010). *La Soberanía: La evolución del concepto hacia una perspectiva internacional*. Madrid: Dykinson, S.L.
- Rivera-Camino, J. (2014). *Cómo escribir y publicar una tesis doctoral*. Madrid: ESCI.
- Rocha, A. (2004). "Un dilema político en la encrucijada histórica del proceso de integración regional en América LATina y el Caribe". *Sociológicas*(11), 64-87.
- Rodó, J. É. (2008). *Ariel*. Quito: LIBRESA.
- Rodriguez, A. F. (2013). "¿Cómo se determina una expropiación indirecta bajo Tratados Internacionales en materia de inversión?. Un análisis contemporáneo". En S. R. Jimenez, & H. Wöss, *Foro de arbitraje en materia de inversión. Tendencias y novedades* (págs. 219-246). México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Rodriguez, E. (1991). *El desafío del desarrollo centroamericano*. San José, Costa Rica: EUNED/FEDEPRICAP.
- Rodriguez, E. C. (2012). "Comparando movimientos indígenas: Bolivia y Ecuador". *ÍCONOS N: 44*, 35-48.
- Rodriguez, O. (2001). "Prebisch: Actualidad". *Revista de la CEPAL*, 41-52.
- Rojas Aravena, F. (Julio- Agosto de 2012). La Celac y la integración latinoamericana y caribeña. Principales claves y desafíos. *Nueva Sociedad*(240), 16-27.
- Rojas Bolaño, M. (2010). "Centroamérica: ¿anomalías o realidades?". *Nueva Sociedad*(226), 100-114.
- Romer, P. (1993). "Idea Gaps and Objectcs Gaps in Economic Development". *Journal of Monetary Economics*, 32(3), 543-573.
- Rosenthal, G. (2006). "La Integracion Centroamericana y el TLC". *ASIES*(3).

- _____ (2006). “La Inversión Extranjera Directa en Centroamérica 1990-2004: Un bosquejo”. En G. L. C., & C. E. A., *Inversión Extranjera en Centroamérica* (págs. 73-156). San José, Costa Rica: Academia en Centroamérica.
- Rostow, W. W. (1960). *The Stages of Economic Growth : A non-Communist Manifesto*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rousseau, J.-J. (1992[1762]). *El contrato social*. Madrid: EDAF, S.A.
- Rowthorn, R., & Kozul-Wright, R. (1998). *Globalization and Economic Convergence: An assessment*. Ginebra: UNCTAD.
- Rubio Fabian, R. (1991). “Comentarios críticos a las teorías del desarrollo predominantes : hacia otro concepto del desarrollo de las sociedades”. *Realidad económico-social : publicación de los Departamentos de Economía, Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"*, 4(24), 713-761.
- Ruggie, J. G. (1998). “What makes the world hang together? Neo-utilitarianism and the Social Constructivist Challenge”. *International Organization*, 52(2), 855-885.
- Sachs, W. (1999). *Planet Dialectics - Explorations in Environment and Development*. Londres: Zed Books.
- Sader, E. (2000). *Uma biografia nao-autorizada*. Fundación Perseu Abramo: Brasil.
- Saint-Pierre, C. I. (1713). *Projet pour rendre la paix perpetuelle en Europe*. Utrecht: Antoine Schouten, Marchand Libraire.
- Salidjian, A. (Mayo de 2006). “La inserción mundial de América Latina en la teorías de la Cepal: Una confrontación entre estructuralismo y neoestructuralismo”. *Ensaïos FEE*, 27(1), 5-30.
- Salvador, A. M. (Julio-Agosto de 2008). “Los países en desarrollo y el GATT”. *Revistas ICE "60 años del Sistema GATT-OMC"*(843), 107-122.
- Sambanis, N., & Milanovic, B. (2011). “Explaining the Demand for Sovereignty”. *Policy Research Working Paper*(588).
- Samir, A. (1996). “El futuro de la polarización global”. En P. G. Saxe-Fernández, *El mundo actual: situación y alternativas*. México: Siglo XXI.
- Sanahuja, J. A. (2003). “Entre Doha, Monterrey y Bagdad”. *Anuario CIP 2003*, 237-260.
- _____ (2007). “¿Más y mejor ayuda? La Declaración de París y las tendencias en la cooperación al desarrollo”. En M. M. Mesa, *Guerra y conflictos en el Siglo XXI: Tendencias globales. Anuario 2007-2008* (págs. 71-101). Madrid: CEIPAZ.
- _____ (2008-2009). “Del " regionalismo abierto" al "regionalismo post-liberal". Crisis y cambio en la integración regional en America Latina”. En L. P. Laneydi Martínez Alfonso, *Anuario de la Integración Regional de América Latina y el Gran Caribe*

- (págs. 11-54). Buenos Aires: Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales(CIES).
- _____ (2012). “Regionalismo post-liberal y multilateralismo en Sudamérica: El caso UNASUR”. En B. A. Coordinadores: Andrés Serbin (CRIES, *El regionalismo “post-liberal” en América latina y el caribe: Nuevos actores, nuevos temas, nuevos desafíos* (págs. 19-72). Buenos Aires, Argentina: Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales,.
- _____ (2013). “La Unión Europea y el Regionalismo Latinoamericano: Un balance”. *Investigación y Desarrollo*, 21(1), 156-184.
- Sánchez Muñoz, A. (2012). “El nuevo mapa político y económico de América Latina: Alianza Pacífico versus UNASUR”. *Estudios Geográficos*, 73(273), 703-719.
- Sánchez, N. A. (2005). *El Derecho Humano al Desarrollo frente a la mundialización del Mercado*. Madrid: IEPALA.
- Sandino, A. C. (20 de Marzo de 1929). “Plan de realización del supremos sueño de Bolívar”. *Web- Telesur*. En línea: exwebserv.telesurtv.net/secciones/archivos/ARCH352_539.pdf (Consulta realizada el 08 de agosto de 2013).
- Sanna-Randaccio, F. (2004). *Is dropping FDI from the Doha Agenda a success for developing countries?* Harvard: Harvard Press.
- Santiso, J. (Agosto de 2008). “La emergencia de las multilaterales”. *Revista CEPAL*, 7-29.
- Santos, T. D. (1974). *Dependencia y cambio social*. Caracas: Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, División de Publicaciones.
- _____ (2011[1978]). *Imperialismo y dependencia*. Caracas. Fundación Biblioteca Ayacucho.
- Sartori, G. (2007[1987]). *¿Qué es la democracia?* Madrid: Taurus.
- Sauvé, P. (2006). “Normas sobre el comercio y las inversiones: perspectivas de América Latina”. *Revista de la Cepal*(94), 29-42.
- Scahill, J. (2013). *Guerras Sucias*. Barcelona: Paídos.
- Schermers, H. G. (1980). *Intemational Institutional Law*. Alphen aan den Rijn (Holanda): Sijthoff & Noordhoff Intemational Publishers B. V.
- Schill, S. (2009). *The Multilateralization of International Investment Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Schmitt, C. (1936[2013]). *El concepto de lo político*. Madrid: La editorial virtual. En línea: http://www.laeditorialvirtual.com.ar/pages/CarlSchmitt/CarlSchmitt_ElConceptoDeLoPolitico.htm (Consulta realizada el 22 de septiembre de 2014).

- _____ (1949). “La justificación de la ocupación de un nuevo mundo: Francisco de Vitoria”. *Revista de Española de Derecho Internacional*, II(1), 13-46.
- _____ (2009). *Teología política*. Madrid: Trotta. (Esta edición incluye Cuatro capítulos sobre la doctrina de la soberanía (1922) y Teología política II. La leyenda de la liquidación de toda teología política (1969)).
- Schnabl, M. E., & Bedard, J. (2007). “The Wrong Kind of Interesting”. *The National Law Journal*, En línea: https://www.skadden.com/sites/default/files/publications/Publications1298_0.pdf (Consulta realizada el 12/07/2014).
- Schneiderman, D. (2008). *Constitutionalizing Economic Globalization: Investment Rules and Democracy's Promise*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Schreuer, M. C. (2003). “Course on Dispute Settlement. International Centre for Settlement of Investment Disputes”. *Course on Dispute Settlement. International Centre for Settlement of Investment Disputes*. New York and Geneva: United Nations.
- Schumpeter, J. A. (1958). “Problemas teóricos del desarrollo económico”. *El Trimestre económico*, 25(97), 63-71.
- Schwebel, S. M. (1994). “The Story of the United Nations Declaration on Permanent Sovereignty over Natural Resources”. En S. M. Schwebel, *Justice in International Law. Selected Writings* (págs. 401-415). Cambridge: Cambridge University Press.
- Searle, J. R. (1995). *The Construction of Social Reality*. New York: Free Press.
- Seers, D. (1969). “The Meaning of Development”. *International Development*, 3-4.
- _____ (1983). *The political Economy of Nationalism*. New York: Oxford University Press.
- Selser, G. (2001). *Cronología de las intervenciones extranjeras en América Latina: 1899-1945 (Tomo III)*. México D.F.: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Univesodad Nacional Autónoma de México.
- Sen, A. (1990). “Development as capacidad Expansion”. En K. G. Knight, *Human Development and the International Development Strategy for the 1990s*. Londres: MacMIkllan.
- _____ (1999). *Development as freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- _____ (2009). *The idea of justice*. Penguís Books Ltd.
- Sepúlveda, C. (1941). *Tratado sobre las justas causas de la guerra contra los indios*. México: Fondo de Cultura Económica.
- _____ (1960). *Derechi Internacional Público*. México: Editorial Porrúa.

- Serbin, A. (1997). *América Latina y el Caribe Anglófono: ¿hacia una nueva relación?* Buenos Aires: Instituto de Servicio Exterior de la Nación y Grupo Editores Latinoamericano.
- _____. (2010) *Regionalismo y soberanía nacional en América Latina: Los nuevos desafíos*. Coordinadores Regional de Investigaciones Económicas y Sociales. En línea: <http://www.cries.org/wp-content/uploads/2010/09/Documentos-15-web.pdf> (Consulta realizada el 13 de septiembre de 2013).
- Serbin, A., Martinez, L., & Ramanzini Júnior, H. (2012). *El regionalismo “post-liberal” en América Latina y el Caribe: Nuevos actores, nuevos temas, nuevos desafíos*. Buenos Aires: CRIES.
- Shapiro, E. (1975). *Análisis macroeconómico*. Madrid: Ediciones ICE.
- Shinata, I. (1992). *Towards a Greater Despoliticization of Investment Disputes: The roles of IDSID and MIGA*. Washington: World Bank.
- Shünemann, J. (2010). *Una aproximación socialconstructivista a la cooperación interregional y el interregionalismo: las relaciones entre la Unión Europea y el Mercosur*. (ISBN: 978-84-693-3194-1). Tesis Doctoral. Madrid, España.
- Simbaña, F. (2012). “El sumak Kawayas como proyecto político”. En M. Lang, & D. Mokrania, *Mas allá del desarrollo* (págs. 185-219). Quito: Fundación Rosa Luxemburg/Abya Yala.
- Sinclair, A. C. (2004). “The origins of the Umbrella Clause in the International Law of Investment”. *Arbitration International*, 411-434.
- Singh, S., & Sharma, S. (2013). “Investor-State Dispute Settlement Mechanism: The Quest for a Wrookable Roadmap”. *Merkourios*, 88-101.
- Sinha, S. P. (January de 1965). “Perspective of the Newly Independent States on the Binding”. *International and COMparative Law Quartely*, 14, 121-131.
- Slaughter, A.-M., & Alvarez, J. E. (2000). “A liberal Theory of Interntional Law”. *American Society of International Law*, 240-254.
- Smith, P. H. (1996). “Ascenso y caída del Estado desarrollista en América Latina”. En M. Vellinga, *El cambio del papel del Estado en América Latina* (págs. 74-102). Madrid: Siglo XXI.
- Smith, R. K. (1987). “Explaining the Non-Proliferation Regime. Anomalies for Contemporary International Relations Theory”. *International Organization*(41), 253-282.
- Sogge, D. (2002). *¿ Qué ocurre con la ayuda internacional?* Barcelona: Romanyá/Valls, s.a.
- Sohn, L. B. (1973). “The Stockholm Declaration on the Human Environment”. *The Harvard International Law Journal*, 14(3), 423-516.

- Soler, R. (1987). *Idea y cuestión nacional latinoamericanas : de la independencia a la emergencia del imperialismo*. México D.F.: Siglo Veintiuno.
- Solow, R. (1974). "The Economics of Resources or the Resources of Economics". *American Economic Review*, 1-14.
- Sotillo, J. A., & Sanahuja, J. A. (1998). *Integración y desarrollo en Centroamérica : más allá del libre comercio*. Madrid: Los libros de la Catarata D.L.
- Spengler, J. J. (1954). *Economie et population*. Paris: Presses universitaires de France.
- Staley, E. (1939). *World Economy in Transition. Technology vs. Politics, Laissez Faire vs. Planning, Power vs. Welfare*. Kennikat Press.
- _____. (1954). *The Future of Underdeveloped Countries: Political Implications of Economic Development*. New York: Council on Foreign Relations by Harper.
- Starke, J. G. (1963. 5th Edition). *An Introduction to International Law*. London: Butterwood and Co. Ltd.
- Stiglitz, J. (2002). *IV Encuentro de Economista sobre Globalización y Problemas del Desarrollo*. La Habana.
- Streeten, P. (1986). *Necesidades básicas. Lo primero es lo primero. Satisfacer las necesidades*. Madrid: Tecnos.
- Suanes, M. (2012). "Inversión extranjera directa, desigualdad y crecimiento económico en América Latina". Barcelona: Universidad Autònoma de Barcelona.
- Suárez, F. (1965[1613]). *Principatus Politicus*. Madrid: C.S.I.C.
- Sunkel, O. (1973). *El subdesarrollo Latinoamericano y la teoría del desarrollo*. Madrid: Siglo Veintiuno de España.
- Sutcliffe, B. (2011). *La desigualdad global actualizada*. Bilbao: Instituto Hegoa UPV/EHU.
- Swift, J. (2003). *Atlas Histórico de la Guerra Fría*. Madrid: Ediciones Akal S.A.
- Tamames, R., & Huerta, B. G. (1999). *Estructura Económica Mundial* (Decimonovena ed.). Arganda del Rey (Madrid): Alianza Editorial S.A.
- Tamburini, F. (2002). "Historia y Destino de la Doctrina Calvo: ¿ Actualidad u obsolescencia del Pensamiento de Carlos Calvo?" *Revista de Estudios Históricos Jurídicos*(24), 81-101.
- Taparelli, R. L. (1867). *Ensayo teórico de Derecho Natural apoyado en los hechos*. Madrid: Imp. de Tejado.
- Taylor, C. (1996). "Identidad y Reconocimiento". *Revista Internacional de Filosofía Política*(7), 10-19.

- Terrado, J. F. (24 de Diciembre de 1816). *Wikisource*. En línea:
[http://es.wikisource.org/wiki/Instrucciones reservadas para la reconquista de Chile](http://es.wikisource.org/wiki/Instrucciones_reservadas_para_la_reconquista_de_Chile) (Consulta realizada el 12 de junio de 2014).
- Thangavelu, S. M., & Findlay, C. (2010). "The Impact of Free Trade Agreements on Foreign Direct Investment in the Asia-Pacific Region". En C. Findlay, *ASEAN +1 FTA's and Global Value in East Asia* (págs. 112-131). Jakarta: ERIA Research Project Report.
- Tietje, C., Nowrot, K., & Wachernagel, C. (2008). "Once and Forever? The Legal Effects of a Denunciation of ICSID". *Martin Luther Universität Halle-Wittenberg*, En línea:
<http://www.wirtschaftsrecht.uni-halle.de/sites/default/files/altbestand/Heft74.pdf> (Consulta realizada el 23/07/2014).
- Tironi, E. (Abril-Junio de 1977). "La Decisión 24 sobre capitales extranjeros en el Grupo Andino". *Estudios Internacionales de la Universidad de Chile*, 10(38), 12-26.
- Tocqueville, A. d. (2007). *La democracia en América*. Madrid: Ediciones Akal S.A.
- Todd, E. (1999). *La ilusión económica. Sobre el estancamiento de las sociedades desarrolladas*. Madrid: Taurus.
- Tomás, A. F. (1996). "Derecho Internaciona Público". En L. Prieto, *Introducción al Derecho* (págs. 47-86). Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
- Torrent, R. (2001). *Una aproximación a la anatomía del MERCOSUR real*. Red Mercosur. En línea: <http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2008/02161a01.pdf> (Consulta realizada el 22 de julio de 2012).
- Torres Caicedo, J. M. (1857). "Las dos Américas". *El Correo de Ultramar*, 16.
- Tortosa, J. M. (Agosto de 2009). *Fundación Carolina*. En línea:
<http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/nombrespropios/Documents/NPTortosa0908.pdf> (Consulta realizada el 16 de febrero de 2014).
- Trellez, C. B. (1931). *Doctrina de Monroe y Cooperación Internacional*. Madrid: Mundo Latino.
- Tres, J. (2013). "La Alianza Pacífico: Un modelo Emergente de Integración". *Ponencia*. En línea: http://www.integracionycooperacion.org/wp-content/themes/enfold/documentos/ponencias/ponencia_joaquim_tass_alianza_pacifico.pdf (Consulta realizada el 18 de enero de 2014).
- Treto, C. A. (2001). "Regionalismo, integración y relaciones interamericanas". En (. J. Preciado, *La integración política latinoamericana y caribeña: un proyecto comunitario para el Siglo XXI* (págs. 143-162). México D.F.: AUNA/UdeG/UMSNH.

- Tribunal Constitucional Español. (13 de 12 de 2004). *Tribunal Constitucional de España*. En línea:
<http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=15919> (Consulta realizada el 12 de diciembre de 2013).
- Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (2010). *Convenio para la Protección de los Derechos Humanos*. Estrasburgo: Council of Europe.
- Tru, N. H. (1988). "Le réseau suisse d'accords bilatéraux d'encouragement et de protection des investissements". *Revue générale de droit international public*, 92(3), 577-671.
- Truman, H. S. (1961). *Harry S. Truman: Containin the public messages , speeches and statement VOL.V 1949*. Washington: United States Government Printing Office.
- Truyol y Serra, A. (1958-1959). "Soberanía del Estado y Derecho Internacional". En *Anuario de filosofía del derecho* (págs. 49-70). Madrid: Ministerio de Justicia.
- Truyol y Serra, A. (1998). *Historia del derecho internacional público*. Madrid: Tecnos.
- Tunkin, G., & Butler, W. (1974). *Theory of Interntional Law*. Cambridge: Harvard University Press.
- Unceta Satrústegui, K. (2009). "Desarrollo, Subdesarrollo, Maldesarrollo y Postdesarrollo. Una mirada transdisciplinar sobre el debate y sus implicaciones". *Carta Latinoamericana. Contribuciones en desarrollo y sociedad en América Latina*, 1-34.
- _____. (2012). "Crecimiento, Decrecimiento, y Buen Vivir". En A. Guillén, & M. Phélan, *Construyendo el Buen Vivir* (págs. 85-88). Cuenca-Ecuador: PYDLOS ediciones.
- Vaitsos, C. V. (Enero-Marzo de 1974). "El cambido de políticas de los gobiernos latinoamericanos con relación al desarrollo económico y la inversión extranjera directa". *Trimestre Económico*, 41(161), 137-171.
- Valcárcel, D. M. (Agosto de 2011). *Pontifica Universidad Católica de Perú*. En línea:
http://departamento.pucp.edu.pe/ciencias-sociales/images/documentos/marcel_valcarcel.pdf (Consulta realizada el 29 de agosto de 2011).
- Valle, J. C. (2006). "Soñaba el abad de San Pedro; y yo también sé soñar". En I. Guerrerri, B. Teillir, A. Castillo, & Z. P. Sánchez, *Colección Antecedentes Históricos de ALBA: Volumen II. La retoma*. Copyright © por ALBA: Alternativa Bolivariana para la América Derechos Reservados.
- Vallejo, H., & Aguilar, C. (Marzo de 2004). "Integración regional y atracción de inversión extranjera directa: el caso de América Latina". *Desarrollo y Sociedad*, 139-164.
- Van Agtmael, A. (2007). *The Emerging Markets Century: How a New Breed of World-Class Companies Is Overtaking the World*. New York: Free Press.

- Van Harten, G. (2012). "Pro-Investor or Pro-State Bias in Investment-Treaty Arbitration?" *Forthcoming Study Gives Cause*.
- Vasconcelos, J. (1925). *La Raza Cósmica*. Madrid: Agencia Mundial de Librería.
- Vattel, E. d. (1863). *Le Droit des Gens ou Principes de la Loi Naturelle appliqués a la Conduite et Aux Affaires des Nations et des Souverains*. París: Guillaumin et Cie. Libraires.
- Vázquez, M. S. (1965). "La Responsabilidad Internacional". En R. Leiva, *Panorama del Derecho Mexicano* (págs. 576-587). México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México. Dirección General de Publicaciones.
- Vedross, A. (1976). *Derecho Internacional Público*. Madrid: Aguilar.
- Velde, D. W., & Bezemer, D. (Agosto de 2006). "Regional Integration and foreign direct investment in developing countries". *Transnational Corporations*, 15(2), 42-70.
- Vellinga, M. (1997). *El cambio del papel del Estado en América Latina*. México D.F.: Siglo XXI.
- Viadel, A. C. (2006). *Constitución, estado y democracia en el Siglo XXI*. Valencia: Editorial UPV.
- Vicuña, F. O. (1966). *La integración política: Su realidad; su necesidad*. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile.
- Vicuña, F. O.(II) (2003). "Regulatory Authority and Legitimate Expectations: Balancing the Rights of the State and the Individual under International Law in a Global Society". *International Law FORUM du droit international*, 188-197.
- Viejo-Ximénez, J. M. (2004). "'Totus orbis, qui aliquo modo est una republica". Francisco de Vitoria, el Derecho de Gentes y la expansión atlántica castellana". *Revista de estudios histórico-jurídicos*, 359-391.
- Vignali, H. A. (1991). "El concepto de soberanía y el ingreso al MERCOSUR". *Revista de Relaciones Internacionales*(5), 61-68.
- Villafañe, V. L., & Masi, J. R. (2002). *Del TLC al MERCOSUR: integración y diversidades en América Latina*. Madrid: Siglo XXI.
- Villamizar Pinto, H. (2000). *Introducción a la integración económica*. Santafé de Bogotá: Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.
- Vitale, L. (1984). *La contribución de Simón Bolívar a la economía política latinoamericana*. Caracas: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.
- _____ (2002). *La larga marcha por la unidad y la identidad Latinoamericana*. Lima: Autor-Editor Genérico.
- _____ (2009). *Los principales períodos de la historia de América Latina*. Sanitago de Chile: LOM Ediciones.

- Vitoria, F. d. (1960). *Relecciones teológicas. Edición crítica del texto latino, versión española, introducción general e introducciones de su doctrina teológico-jurídica por Teófilo Urdanoz*. Madrid: B.A.C.
- Waibel, M., & Wu, Y. (2011). "Are Arbitrators Political?". *Research*. Universidad de Bonn. En línea: <http://www.wipol.uni-bonn.de/lehrveranstaltungen-1/lawecon-workshop/archive/dateien/waibelwinter11-12> (Consulta realizada el 22 de febrero de 2014).
- Walck, R., & Ahee, L. (2009). "Investment Arbitration Update" (As of December 31, 2008). *Transnational Dispute Management*. En línea: www.transnational-dispute-management.com/article.asp?key=1369 (Consulta realizada el 22 de mayo de 2014).
- Wallerstein, I. (1998). *Desarrollo: ¿Sinocura o Ilusión?* México D.F: Siglo XXI.
- Waltz, K. (1979). *Theory of International Politics*. New York: Random House.
- Washington Post. (20 de Agosto de 2012). "Ecuador gambles on Wikileaks founder". *Washington Post*. En línea: http://www.washingtonpost.com/opinions/ecuador-gambles-on-wikileaks-founder-julian-assange/2012/08/20/1a6b4ca2-e8b0-11e1-936a-b801f1abab19_story.html (Consulta realizada el 12 de marzo de 2014).
- Weiner, A. S. (2003). "Indirect Expropriation: The Need for a Taxonomy of "Legitimate" Regulatory Purposes". *International Law Forum*, 5(3), 166-175.
- Weiss, L. (1998). *The myth of the Powerless State*. Ithaca: Cornell University Press.
- Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University.
- Wendt, A. (Marzo de 2005). "La anarquía es lo que los estados hacen de ella. La construcción social de la política del poder". *Revista Académica de Relaciones Internacionales*(1). En línea: www.relacionesinternacionales.info/ojs/article/download/6/5.pdf (Consulta realizada el 12 de enero de 2012).
- Wertheim, S. (2012). "The League of Nations: a retreat from international law?" *Journal of Global History*(7), 210-232.
- Whittaker Briggs, H. (2013). *The doctrine of continuous voyage*. South Carolina: BiblioBazaar.
- Wiarda, H. J. (1997). "Determinantes históricas del Estado latinoamericano: La tradición Burocrático-patrimonialista, el corporativismo, el centralismo y el autoritarismo". En *El cambio de papel del Estado en América Latina* (págs. 45-73). México D.F.: Siglo XXI.
- Wilcox, C. (1949). *A Charter for World Trade*. New York: Macmillan Company.
- Willen, D., Velde, T., & Page, S. (2003). *Foreign Direct Investment and Income Inequality in Latin America*. London: Overseas Development Institute.

- Worth, T. (1998). "Regional Trade Agreements and Foreign Direct Investment". En M. E. Burfisher, & E. A. Jones, *Regional Trade Agreements and U.S. Agriculture* (págs. 77-86). Washington DC: U.S. Department of Agriculture.
- Yannaca-Small, C. (2004). *Fair and Equitable Treatment Standard in International Investment Law*. OCDE .
- Yeyati, E. L., Stein, E., & Daude, C. (Julio de 2003). "Regional Integration and the Location of FDI". *Banco Interamericano de Investigación. Working Paper*(492).
- Zamora, A. (Octubre de 1997). "Centroamérica: contadora y Esquipulas 10 años después". *Envío*(187), En línea: <http://www.envio.org.ni/articulo/328> (Consulta realizada el 13/09/2013).
- Zampetti, A. B., & Fredriksson, T. (2003). "The development dimension of investment negotiations in the WTO-challenges and opportunities". (W. P. Company, Ed.) *Journal of World Investment and Trade*, 4(3).
- Zehfuss, M. (2002). *Constructivism in International Relations: The Politics of Reality*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Zelicovich, J. (2013). "De la creación del GATT a la Conferencia de Bali: las transformaciones de las instituciones internacionales reguladoras del comercio internacional, y su impacto para los países en desarrollo". En ProyectoLATIN., *Economía Internacional. Claves teórico-prácticas sobre la inserción de Latinoamérica en el mundo* (Capítulo 3). Copyright LATIN.
- Zhang, K. (Abril de 2001). "Does Foreign Direct Investment Promote Economic Growth?; Evidence from East Asia and Latin". *Contemporary economic Growth*, 19(2), 175-185.
- Zimmern, A. (1939). *The league of Nations and rule of law, 1918-1935*. London: Macmillan(2nd Edition).
- Zunino, M. (28 de mayo de 2010). "Integración para el despojo: el proyecto Mesoamérica, o la nueva escalada de apropiación del territorio" *ADITAL*. En línea: http://www.adital.com.br/site/noticia_imp.asp?cod=48203&lang=ES (Consulta realizada el 12 de marzo de 2013).

2. Documentos relevantes consultados y citados.

- Actionaid (2003). "Unlimited companies. The developmental impacts of an investment agreement at the WTO". *Actionaid*. London. En línea: https://www.actionaid.org.uk/sites/default/files/doc_lib/9_1_unlimited_companies.pdf (Consulta realizada el 23 de febrero de 2013).

- ALADI. (1980). “Tratado de Montevideo”. En línea:
<http://www.aladi.org/nsfaladi/juridica.nsf/vtratadoweb/tm80> (Consulta realizada el 13 de septiembre de 2013).
- _____. (2010). “Desafíos de la Nueva Agenda de Trabajo de la ALADI”. Santiago de Chile: ALADI.
- ALADI & CEPAL. (2012). “30 años de integración comercial en la ALADI”. Montevideo (Uruguay): ALADI/CEPAL.
- ALALC. (1960). “Tratado de Montevideo”. En línea:
<http://www.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/tratados/trat12859.htm> (Consulta realizada el 14 de septiembre de 2013).
- ALBA-TCP. (2009). “Conceptualización de Proyecto y Empresa Grannacional en el marco del ALBA”. El concepto de Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Maracay, Venezuela: En línea: <http://alba-tcp.org/contenido/conceptualizacion-de-los-grannacional> (Consulta realizada el 13 de julio de 2013).
- _____. (2011). “Principios del ALBA-TCP”. En línea: <http://www.alba-tcp.org/content/principios-fundamentales-del-alba> (Consulta realizada el 12 de febrero de 2013).
- _____. (2013). “Declaración del Alba desde el Pacífico”. Guayaquil.
- AP. (28 de Abril de 2011). Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico. Lima, Perú: En línea: http://alianzapacifico.net/documents/2014/Acuerdo_Comercial.pdf (Consulta realizada el 12 de febrero de 2014).
- _____. (2014). “La Alianza del Pacífico, integración profunda con miras a la prosperidad”. En línea:
http://alianzapacifico.net/documents/2014/ABC_ALIANZA_PACIFICO_2014.pdf (Consulta realizada el 21 de noviembre de 2014).
- _____. (14 de Febrero de 2014). “Protocolo Adicional del Acuerdo Marco”. Paranal, Antofagasta, Chile: En línea:
<http://alianzapacifico.net/documents/2014/inversion.pdf> (Consulta realizada el 12 de junio de 2014).
- Asamblea Americana del Congreso de Panamá. (1828). *Periódico Granma*. En línea:
<http://www.granma.cubaweb.cu/secciones/alba/ant/2antec-01.html> (Consulta realizada el 28 de junio de 2013).
- Asamblea General NNUU. (1974). “Carta de derechos y deberes económicos de los Estados”. New york: NNUU.
- Asamblea Nacional Constituyente de la Republica de Centroamerica. (9 de septiembre de 1921). “Constitución Política de la República de Centroamérica”.

- Autores Varios (2004) “Constituciones Nacionales de los países de América Latina”. Universidad de Buenos Aires. En línea: <http://www.catedras.fsoc.uba.ar/udishal/constituciones.htm> (Consulta realizada el 23 de septiembre de 2014).
- B.O.E. (29 de 12 de 1978). *Agencia Estatal. Boletín Oficial del Estado*. En línea: <http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229> (Consulta realizada el 05 diciembre de 2013).
- BID (1996). “Convenio constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo” (Reimpreso en 1996 ed.).
- _____ (2013). “Informe MERCOSUR N° 17”. Buenos Aires: *Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe - BID-INTAL*.
- BM (1992). “World Bank Guidelines on the Treatment of Foreign Direct Investment”. Nueva York and Geneve: En línea: <http://italaw.com/documents/WorldBank.pdf> (Consulta realizada el 12 de mayo de 2013).
- _____ (2014). “World Development Indicators”. Washington: International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank.
- Cancillería de Gobierno de Ecuador. (18 de Marzo de 2014). “Ecuador ama la vida”. En línea: <http://cancilleria.gob.ec/unasur-analiza-la-creacion-del-centro-de-solucion-de-controversias-en-materia-de-inversiones> (Consulta realizada el 19 de julio de 2014).
- CARICOM. (2 de Julio de 2001). “Tratado de Chaguaramas Revisado por el que se establece la Comunidad Del Caribe con inclusión del Mercado Único y la economía de la CARICOM”. Chaguaramas: En línea: http://www.caricom.org/jsp/community/revised_treaty-text.pdf (Consulta realizada el 12 de febrero de 2014).
- CARIFTA. (4 de Julio de 1973). “Treaty Establishing the Caribbean Community”. Chaguaramas: En línea: http://www.caricom.org/jsp/community/original_treaty-text.pdf (Consulta realizada el 24 de septiembre de 2013).
- Carta de la Organización Estados Centroamericanos. (1951). San Salvador (El Salvador). En línea: <http://www.rijia.org/assets/1carta-de-la-organizacion-de-la-odeca.pdf> (Consulta realizada el 9 de abril de 2013).
- CELAC. (2011). “Declaración de Caracas. En el Bicentenario de la Lucha por la Independencia Hacia el Camino de Nuestros Libertadores”. Caracas. En línea: <http://celacppt.altavoz.net/declaracion-de-caracas-en-el-bicentenario-de-la-lucha-por-la-independencia-hacia-el-camino-de-nuestros-libertadores/celac/2013-04-26/184322.html> (Consulta realizada el 12 de julio de 2011).
- _____ (28 y 29 de enero de 2014). Plan de Acción de la CELAC 2014. II Cumbre CELAC. La Habana, Cuba: En línea:

http://celac.cubaminrex.cu/sites/default/files/ficheros/doc_3_2_plan_accion_celac_espanol.pdf (Consulta realizada el 7 de mayo de 2014).

CEPAL (1990). *Transformación productiva con Equidad*. Santiago de Chile: Libros de la CEPAL.

_____ (1992). *Equidad y Transformación Productiva: un enfoque integrado*. Santiago de Chile: Libros de la CEPAL.

_____ (1994). *El regionalismo abierto en América Latina y el Caribe: la integración económica al servicio de la Transformación Productiva con Equidad*. Santiago de Chile: CEPAL.

_____ (14 de Agosto de 2010). “Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe”. En línea: <http://www.eclac.org> (Consulta realizada el 19 de agosto de 2011).

_____ (2011). *Inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile: Naciones Unidas.

_____ (6 de Junio de 2012). Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Obtenido de http://www.eclac.cl/noticias/paginas/8/33638/Cancilleria_de_Chile_7dejunio.pdf (Consulta realizada el 12 de junio de 2013).

_____ (2012). “Estudio económico de América Latina y el Caribe: Las políticas ante las adversidades de la economía nacional”. En línea: <http://www.cepal.org/publicaciones/xml/2/48062/EEECompleto.pdf> (Consulta realizada el 12 de marzo de 2014).

_____ (2013a). “La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe”. Santiago de Chile: Publicación de las Naciones Unidas.

_____ (2013b). “Panorama social de América Latina”. Naciones Unidas, CEPAL. En línea: http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/publicaciones/xml/9/51769/P51769.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl (Consulta realizada el 12 de diciembre de 2013).

CEPAL y ALADI (2012). *30 años de integración comercial en la ALADI*. Montevideo (Uruguay): ALADI/CEPAL.

CIADI. (2006). “Convenio CIADI, reglamento y reglas”. Washington: CIADI.

CNUDMI. (25 de marzo de 1958). “Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional”. En línea: http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html (Consulta realizada el 18 de julio de 2014).

- Comision Brundtland NNUU. (1987). *Brundtland Report Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development*. OSLO : NNUU.
- Comisión Kissinger. (1984). “Informe de la Comisión Kissinger para Centroamérica”. *La Nación Internacional*, 12.
- CAN(1997a). “Decisión 563”. VIII Reunión del Consejo Presidencial Andino.
- _____ (1997b). “Protocolo de Sucre”. Quito. En línea:
http://www.sice.oas.org/trade/junac/Carta_Ag/SUCRE.asp (Consulta realizada el 23 de abril de 2013).
- _____ (7 de Mayo de 2001). “Integración y supranacionalidad en la comunidad andina”. En línea:
intranet.comunidadandina.org/Documentos/DInformativos/SGdi303.doc
 (Consulta realizada el 12 de julio de 2013).
- _____ (2007). “Declaración de Tarija”. Tarija, Bolivia. En línea:
http://www.sice.oas.org/TPD/AND_EU/negotiations/Tarija_s.pdf (Consulta realizada el 12 de mayo de 2013).
- _____ (26 de Enero de 2013). “UNASUR, CAN, MERCOSUR y ALADI reflexionan sobre convergencias”. Santiago de Chile, Chile. En línea:
<http://www.comunidadandina.org/Prensa.aspx?id=3331&accion=detalle&cat=NP>
 (Consulta realizada el 23 de junio de 2014).
- Comunidad Sudamericana de Naciones. (8 y 9 de diciembre de 2006). Cochabamba-Bolivia. Correo Sindical Latinoamericano(12). En línea:
<http://www.unesco.org.uy/shs/fileadmin/templates/shs/correosindical/CSLAtematico12.pdf> (Consulta realizada el 17 de abril de 2014).
- Constitucion de Ecuador. (28 de Septiembre de 2008). “Organization of American States”. En línea: http://www.oas.org/juridico/MLA/sp/ecu/sp_ecu-int-text-const.pdf
 (Consulta realizada el 23 de abril de 2011).
- Constitución Federal de Venezuela . (21 de diciembre de 1811). “Constitución Federal de 1811”. En línea:
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/02461621981246052976613/p00000001.htm#I_23 (Consulta realizada el 12 de julio de 2012).
- Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (16 y 17 de diciembre de 2008). “Declaración de Salvador”, Bahía. Salvador, Brasil: En línea:
http://www.sela.org/attach/258/EDOCs/SRed/2009/01/T023600003287-0-Primera_Cumbre_CALC_-_Declaraci%C3%B3n_de_Salvador,_Bah%C3%ADa,_Brasil_-_17_de_diciembre_de_2008.pdf (Consulta realizada el 23 de Agosto de 2013).
- Estado plurinacional de Bolivia. (25 de enero de 2009). “Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009”. Oruro, Bolivia: En línea:

- <http://www.harmonywithnatureun.org/content/documents/159Bolivia%20Constitucion.pdf>. (Consulta realizada el 23 de julio de 2014).
- EURODAD. (2006). “La condicionalidad del Banco Mundial y el FMI: una injusticia para el desarrollo”. Eurodad. En línea: http://www.choike.org/documentos/ifis_eurodad_wb_imf_conditionality.pdf (Consulta realizada el 23 de marzo de 2013).
- FAM- Bolivia PADEP/Componente Qamaña. (2008). “Ñande Reko. La comprensión guaraní de la Vida Buena”. La Paz: Qatro Hnos.
- Fedaeps. (2010). “Buen Vivir y derechos de la Madre Tierra: avances y propuestas hacia el mundo” FEDAEPS. En línea: <http://www.fedaeps.org/actualidad/buen-vivir-y-derechos-de-la-madre> (Consulta realizada el 13 de febrero de 2014).
- FMI. (1997). “World Economic survey “(Vol. Octubre). *International Monetary Fund*.
- Fundación Dag Hammarskjöld y PNUMA. (1980). *Informe Dag Hammarskjöld "Qué hacer"*. Motala (2 Edición): Borgström Tryckeri AB.
- GATT. (28 de noviembre de 1979). “Trato deiferenciado y más facvorable, reciprocidad y mayor participación de los países en desarrollo”. Organización Mundial de Comercio. En línea: http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/enabling_s.pdf (Consulta realizada el 23 de marzo de 2014).
- Gobierno de EEUU y de CUBA. (1901). “Enmienda Platt. La Habana”. En línea: <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2525/15.pdf> (Consulta realizada el 30 de abril de 2011).
- Grupo Rio. (1986). “Declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Consulta y Concertación Política de América Latina y el Caribe. Declaración Conjunta de Rio de Janeiro”. Rio de Janeiro. En línea: http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2010/10/T023600002300-0-Declaracion_de_Rio_de_Janeiro_-_1986.pdf (Consulta realizada el 12 de septiembre de 2013).
- ICN Iberoamérica Central de Noticias. (9 de Septiembre de 2013). “La CEPAL aboga por medidas para fortalecer desarrollo de la Comunidad del Caribe”. Puerto de España.
- INSCR. (2014). *Center for Systemic Peace*. En línea: <http://www.systemicpeace.org/inscrdata.html> (Consulta realizada el 12 de junio de 2014).
- INTAL. (1967). “Derecho a La Integración. Derecho a la Integración”. Publicaciones INTAL. Obra digitalizada en la página de BID: <http://www.iadb.org/es/intal/obras-digitalizadas-del-intal,7196.html> (Consulta realizada el 12 de febrero de 2013).
- Las Sociedad de Naciones. (28 de junio de 1919). Pacto de la Sociedad de Naciones.

- Latinobarómetro. (2014). Latinobarómetro. En línea:
<http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp> (Consulta realizada el 7 de junio de 2014).
- MERCOSUR. (1994a). “Protocolo Adicional al Tratado de Asunción sobre la Estructura Institucional del Mercosur”. Ouro Preto: En línea:
http://www.mercosur.int/innovaportal/file/721/1/cmc_1994_protocolo_ouro_preto_es.pdf (Consulta realizada el 17 de mayo de 2014).
- _____ (1994b). Protocolo sobre promoción y protección de inversiones provenientes de Estados no partes del Mercosur. En línea:
http://www.mercosur.int/msweb/Normas/normas_web/Decisiones/ES/CMC_DEC_1994-011_ES_Protocolo%20Proteccion%20Inversiones.PDF.
(Consulta realizada el 17 de mayo de 2014).
- _____ (2006). “El FOCER (Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR)”. En línea: http://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=385 .
(Consulta realizada el 13 de abril de 2014).
- _____ (2011). “Aspectos Institucionales del MERCOSUR”. Montevideo: Secretaría Mercosur.
- NNUU. (26 de junio de 1945). “Carta de las Naciones Unidas y Estatuto de la Corte Internacional de Justicia”. En línea:
<http://www.un.org/es/documents/charter/index.shtml> (Consulta realizada el 13 de junio de 2011).
- _____ (octubre de 1947). “United Nations. Documents on the Development and Codification of International Law”. *American Journal of International Law*, 41(4), 60-61.
- _____ (1948). “Declaración de los Derechos Humanos”. New York: United Nations.
- _____ (1962). “Resolución 1803 (XVII)” de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1962. Soberanía permanente sobre los recursos naturales. Ginebra: En línea:
<http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/NaturalResources.aspx>.
(Consulta realizada el 13 de julio de 2012).
- _____ (1972). “Declaración de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano”. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Estocolmo: En línea:
<http://www.ambiente.gov.ar/infoteca/descargas/estocolmo01.pdf>. (Consulta realizada el 23 de septiembre de 2011).

- _____ (1972). “Orden Jurídico Mexicano”. En línea: <http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2005.pdf> (Consulta realizada el 30 de mayo de 2012).
- _____ (1992). “Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (CNUMAD), Declaración de Río sobre el medio Ambiente y Desarrollo”. Declaración de Río sobre el medio Ambiente y Desarrollo. Río de Janeiro: NNUU.
- _____ (2010a). “Controversias entre los inversores y Estados: Prevención y alternativas al arbitraje”. Nueva York; Ginebra: Naciones Unidas.
- _____ (2010b). “Informe sobre las inversiones en el mundo 2010”. New York: Naciones Unidas.
- _____ (2011). “Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI” (Revisado 2010). New York: Naciones Unidas.
- _____ (2013). “La Corte Permanente de Justicia Internacional” United Nations. En línea: <http://www.un.org/es/ici/permanent.shtml> (Consulta realizada el día 26 de marzo de 2013)
- NNUU & CEPAL. (1949). “Estudio Económico de América Latina”. New York: Naciones Unidas.
- OCDE. (1967). “Draft Convention on Protection of Foreign Property. Convention on the Protection of Foreign Property”. Paris: OCDE Publications. En línea: <http://www.oecd.org/investment/internationalinvestmentagreements/39286571.pdf> (Consulta realizada el 15 de mayo de 2014).
- _____ (1984). “Draft Convention on the Protection of Foreign Property and Resolution of the Council of the OECD on the Draft Convention”. París: OCDE Publications.
- _____ (1985). “Intergovernmental Agreements Relating to Investment in Developing Countries”. París: OCDE Publications.
- _____ (2002). “Inversiones extranjeras directas en desarrollo: un máximo de beneficios por un costo mínimo”. París: OCDE.
- _____ (2003). “Policies and International Integration: Influences on Trade and Foreign”. Paris: OCDE.
- _____ (2012). “Investor-State Dispute Settlement”. Paris: OCDE.
- ODECA. (1951). “Carta de la Organización Estados Centroamericanos”. San Salvador: En línea: <http://www.sice.oas.org/Trade/sica/PDF/CartaODECA62.pdf> (Consulta realizada el 12 de agosto de 2013).

- OEA. (1933). “Séptima Conferencia Panamericana”. Santo Domingo: En línea: [http://biblioteca.funlode.net.do/TratadosRD/DInternacional/Tratados_\(PDF\)/19.pdf](http://biblioteca.funlode.net.do/TratadosRD/DInternacional/Tratados_(PDF)/19.pdf) (Consulta realizada el 27 de abril de 2012).
- _____ (2 de septiembre de 1947). “Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca”. Tratado Multilateral. Rio de Janeiro. En línea: <http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-29.html> (Consulta realizada el 13 de abril de 2012).
- _____ (1948a). “Carta de la Organización de los Estados Americanos”. IX Conferencia Panamericana (págs. 5-37). Bogotá: Ediciones OEA.
- _____ (1948b). “Convenio Económico de Bogotá”. Novena Conferencia Internacional Americana. Bogotá: En línea: <http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-43.html> (Consulta realizada el 26 de agosto de 2014).
- _____ (1948c). “Departamento de Derecho Internacional de la OEA”. En línea: <http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-43.html> (Consulta realizada el 21 de febrero de 2013).
- OIT. (2005). “Informe sobre el empleo en el Mundo”. Ginebra: OIT.
- OMC. (2001a). *Con el comercio hacia el futuro*. Ginebra: OMC.
- _____ (2001b). “Declaración Ministerial de la OMC”. Declaración Ministerial. Doha.
- Parlamento Centroamericano. (1983). Página Web. En línea: <http://www.parlacen.int> (Consulta realizada el 20 de diciembre de 2013).
- PND. (21 de Febrero de 2006). Instituto Nacional de Estadística del Estado Plurinacional Boliviano. En línea: www.ine.gob.bo/pdf/PND/00.pdf (Consulta realizada el 24 de julio de 2012).
- PNUD. (2000). “Informe sobre el Desarrollo Humano. Derechos Humanos y Desarrollo”. Madrid: Ediciones Multi-prensa.
- _____ (2010/2011). “Desarrollo centrado en personas”. Informe Anual . New York: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
- _____ (2012). “Objetivos de Desarrollo del Milenio: Informe de 2012”. Nueva York: Naciones Unidas.
- _____ (2013). “Informe sobre Desarrollo Humano. El ascenso del Sur: Progreso humano en un mundo diverso”. Nueva York: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
- _____ (2014). “Informe sobre Desarrollo Humano”. Nueva York: PNUD.

- Reality of Aid. (2010). “Cooperación Sur-Sur: Un desafío al sistema de la ayuda”. Filipinas: IBON Center.
- SELA. (2012). “Informe sobre el proceso de Integración Regional 2011-2012”. Caracas: Copyright@SELA.
- _____ (2013). “El ALBA-TCP como mecanismo de cooperación de alcance regional”. Caracas: Copyright@SELA.
- _____ (2013). “La Alianza del Pacífico en la Integración Latinoamericana y Caribeña”. Caracas: Copyright@SELA.
- SENPLADES. (2013). “Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017”. Quito: SENPLADES.
- SICA. (1993). “Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana”. Guatemala: SICA. En línea:
<http://www.sice.oas.org/Trade/sica/PDF/Prot.Guatemala93.pdf> (Consulta realizada el 06 de junio de 2013).
- _____ (1994). “Alianzas para el desarrollo sostenible”. Managua: En línea:
http://www.minex.gob.gt/Consulta_Doc.aspx?IdDoc=1094 (Consulta realizada el 06 de julio de 2013).
- _____ (1997). “Declaración de Nicaragua”. Managua: En Línea:
<http://www.sieca.int/Documentos/DocumentosMostrar.aspx?SegmentoId=2&DocumentoId=1685> (Consulta realizada el 12 de septiembre de 2013).
- _____ (2011). “Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los países del Sistema de la Integración Centroamericana. XXXVII Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de los países de la integración centroamericana” (SICA). San Salvador: En línea:
<http://www.uncsd2012.org/content/documents/DECLARACION%20Y%20PLAN%20DE%20ACCION%20-%20Cumbre%20de%20Presidentes%20Julio%202011.pdf> (Consulta realizada el 17 de junio de 2013).
- SICE. (1993). “Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana”. En línea: <http://www.sice.oas.org/Trade/sica/PDF/ProtTraGral62.pdf> (Consulta realizada el 12 de noviembre de 2012).
- SIECA. (2007). “Informe Centroamericano 2004-2006”. Buenos Aires: BID-INTAL.
- _____ (2013). “Estado de situación de la integración económica Centroamericana”. En línea:
<http://www.sieca.int/Documentos/DocumentosMostrar.aspx?SegmentoId=2&DocumentoId=3000> (Consulta realizada el 19 de marzo de 2014).

- Sociedad de Naciones. (1919). “Pacto de la Sociedad de Naciones”. Versalles. En línea: <http://dudh.es/pacto-de-la-sociedad-de-naciones-1919/> (Consulta realizada el 04 de septiembre de 2012).
- _____ (1920). “Estatuto de la Corte de Justicia Internacional y la Cláusula Facultativa Anexa al Protocolo de Estatutos”. Ginebra, Suiza. En línea: <http://www.bibliotecajb.org/Portals/0/docs/dinternacional/12.pdf> (Consulta realizada el 12 de marzo de 2012).
- TLCAN. (1994). “Tratado de Libre Comercio de América del Norte”. Secretariado del TLCAN. En línea: <https://www.nafta-sec-alena.org/Default.aspx?tabid=184&ctl=FullView&mid=1591&language=es-MX> (Consulta realizada el 23 de noviembre de 2013).
- Tribunal Constitucional Español (2004). “Declaración del Pleno del Tribunal Constitucional 1/2004, de 13 de diciembre de 2004”. (BOE núm. 3, de 4 de enero de 2005). En línea: <http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=15919> (Consulta realizada el 12 de diciembre de 2013).
- Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (2010). “Convenio para la Protección de los Derechos Humanos”. Estrasburgo: Council of Europe.
- UE. (1994). “El Tratado sobre la Carta de Energía. Acta Final de la Conferencia sobre la Carta Europea de la Energía”. UE, Lisboa.
- UNASUR. (2006). “Declaración de Cochabamba”. Cochabamba: En línea: <http://www.unasur.org/uploads/f6/45/f64548f8fa8dd13ab5b474fb60c416bf/dclaracion-de-cochabamba.pdf> (Consulta realizada el 12 de junio de 2013).
- _____ (2008). “Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas”. En línea: <http://www.unasur.org/uploads/f8/74/f874c8c194f76a8bbd9b2ca6f23a5af7/Tratado-constitutivo-UNASUR.pdf> (Consulta realizada el 28/05/2013).
- _____ (12 de diciembre de 2013). Mapa del sitio UNASUR. En línea: <http://www.unasur.org/sitemap> (Consulta realizada el 21 de marzo de 2014).
- UNCTAD. (1996). “International Investment Instruments: A Compendium”. NNUU, United Nations Conference on Trade and Development. New York; Ginebra: United Nations.
- _____ (1997). *Los Países Menos Adelantados*. Ginebra: UNCTAD.
- _____ (1998). *Bilateral Investment Treaties in the Mid 1990s*. Ginebra: United Nations.
- _____ (2008). “Regulación Internacional de la inversión: Balance, retos y camino a seguir”. Ginebra: Naciones Unidas.

_____ (Diciembre de 2010). “Denunciation of The ICSID convention and BIT’s: Impact on investor-State Claims”. IIA Issues Note(2). En línea: http://unctad.org/en/Docs/webdiacia20106_en.pdf (Consulta realizada el 22 de julio de 2014).

_____ (Julio de 2011). “Sovereign Debt Restructuring and International”. Issues Note(2).

_____ (2013). “World Investment Report 2013: Global Value Chains”. Investment and Trade for Development. New York: United Nations Publication.

_____ (2014). Investment Policy HUB. Herramienta en línea: <http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA> (Consulta realizada el 21 de junio de 2014)